

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA



TESIS DOCTORAL

**Percepciones populares de los conflictos socio-territoriales
en Colombia: Putumayo y Montes de María. La paz que
nunca ha sido**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA

PRESENTADA POR

Paula Jimena Náñez Ortiz

DIRECTOR

Heriberto Cairo Carou

Madrid

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Departamento Historia, Teorías y Geografía Políticas



TESIS DOCTORAL

**Percepciones populares de los conflictos socio-territoriales en Colombia:
Putumayo y Montes de María.
La paz que nunca ha sido**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR
Paula Jimena Nández Ortiz

Director
Heriberto Cairo Carou

Madrid, 2020

TESIS DOCTORAL

Percepciones populares de los conflictos socio-territoriales en Colombia: Putumayo y Montes de María. La paz que nunca ha sido

Paula Jimena Nández Ortiz



Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Programa de Doctorado en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales

Trabajo realizado bajo la dirección de:
Dr. Heriberto Cairo Carou

Madrid, 2020

A Mariesther y Otto

Agradecimientos

La elaboración de esta tesis ha sido un proceso largo debido a un conjunto complejo de circunstancias personales y laborales que se han extendido a lo largo de más tiempo del previsto en principio. Por consiguiente, hay una extensa lista de personas a las que les debo mi gratitud por su apoyo constante en los momentos más difíciles. Muchos de estos agradecimientos han sido expresados en persona, por lo que en estas líneas trataré de ser breve.

Me gustaría agradecer de manera muy especial a mi director de tesis, Heriberto Cairo Carou, que siempre depositó un voto de confianza en mí y representa un gran apoyo no solo en el ámbito académico, sino profesional y personal. Por ello, quiero expresarle mi admiración. También me gustaría agradecer a Rosa de la Fuente, por su amistad, confianza y por todas las oportunidades que me ha brindado. A María Lois por las conversaciones de pasillo, por las risas y la complicidad.

Además, quiero expresar mi gratitud y reconocimiento a la labor que realiza el Proyecto Planeta Paz en Colombia, en favor de la construcción de la paz con justicia social. Las personas que forman parte de esta organización me acogieron cariñosamente y después me enseñaron con sencillez muchos de los valores que hoy en día le dan sentido a mi trabajo y, por qué no, a mi vida. Por supuesto, las innumerables enseñanzas se reflejan en esta investigación. Son muchas las personas en las que estoy pensando ahora, pero quisiera destacar a Carlos Salgado, quien ha compartido de manera generosa sus conocimientos sobre la realidad del país y me ha transmitido su compromiso con las comunidades campesinas.

Me gustaría agradecer a los líderes y lideresas de las organizaciones populares de Montes de María y del Putumayo, que depositaron su confianza en mí para contarme sus historias de vida y sus memorias en un contexto en el que pensar y sentir diferente implica la eliminación física o simbólica del “otro”. Sus luchas cotidianas y muchas veces invisibles son dignas de admiración.

Más allá de lo académico, están las personas que con su apoyo y cariño hicieron que esta tesis vea la luz por fin. A Mariesther y a Otto, quienes ya no están, pero que me transmitieron el amor a la vida y los valores de la solidaridad y el compromiso social por la construcción de un país mejor. A ellos les debo todo lo que soy. A Patricia, mi hermana, a la que he sentido cerca en todo este proceso y con la que hacemos un tándem sin igual. A Salvatore, mi sobrino, que simboliza la esperanza de una Colombia más humana. Ojalá su energía e inteligencia se apliquen a este fin.

Le agradezco a Fernando, mi compañero de vida y de muchas batallas, por su solidaridad y paciencia constante durante todo el proceso de elaboración de la tesis. Él la ha sufrido y leído con estoicismo. Su forma de ser sosegada y tranquila, sus cuidados gastronómicos y lúdicos, me ayudaron a sobrellevar momentos muy difíciles. A él todo mi amor.

Este agradecimiento es extensivo a toda mi familia, la que elegimos y la que no elegimos. A la primera por ser mi soporte vital y por enseñarme a amar la vida. La segunda, mis amigos, el mejor descubrimiento en este periplo migratorio.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	16
INTRODUCCIÓN	20
1. <i>Justificación de la investigación</i>	25
2. <i>Estado de la cuestión. Violencia, conflicto social armado y movimientos sociales en Colombia</i>	30
2.1. Conflicto armado en Colombia: primer periodo. 1962-1987	30
2.1.1. <i>Los antecedentes: La Investigadora.</i>	30
2.2. La Violencia en Colombia.....	33
2.3. El estudio transdisciplinar de la(s) violencia(s) y el conflicto(s)	38
2.4. La Comisión de Estudios sobre la Violencia.....	41
2.5. La violentología. Periodo 1990-2000	43
2.6. Estudios de la memoria y el horizonte cercano de la paz	46
2.7. La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CMHV): discusiones recientes sobre la implementación del Acuerdo	50
2.8. Una breve referencia al análisis del conflicto armado desde la Geografía Política.	52
2.9. Algunas referencias sobre la producción académica en torno a los movimientos sociales y la protesta social en Colombia.....	55
2.10. Producción académica sobre Montes de María	61
2.11. Producción académica sobre Putumayo	63
3. <i>Objetivos, preguntas de investigación e hipótesis</i>	67
4. <i>Metodología</i>	68
5. <i>Estructura de la Tesis</i>	75
PARTE I. TERRITORIO Y MOVIMIENTOS SOCIALES	83
CAPÍTULO 1. Espacio, territorio y territorialidad	85

1.1. La producción (social) del espacio (social): Henri Lefebvre	90
1.1.1. ¿Qué significa que el espacio (social) es un producto (social)?	93
1.1.2. La dialéctica de la producción del espacio	98
1.2. La geografía del poder: Claude Raffestin.....	105
1.2.1. Raffestin: el poder como relación social	107
1.2.2. La perspectiva simbólica del territorio.....	109
1.2.3. Territorio como apropiación del espacio	112
1.2.4. Elementos del sistema territorial	117
1.2.5. Territorialidad	118
CAPÍTULO 2. Las teorías de los movimientos sociales: los enfoques estructurales y las aproximaciones culturales de la acción	125
2.1. Una breve introducción: las teorías contemporáneas de los movimientos sociales	127
2.2. La acción racional en el centro de la movilización	129
2.3. La relación entre sistema político institucional y los movimientos sociales	133
2.3.1. Repertorios de confrontación	138
2.3.2. Una propuesta de renovación del estudio de la acción colectiva: la dinámica de la contienda política.....	141
2.4. El actor en el centro del estudio de la movilización	146
2.4.1. La producción simbólica de los movimientos sociales	147
2.4.2. Las redes sumergidas.....	150
2.5. El paradigma de la identidad y los nuevos movimientos sociales.....	153
2.5.1. La identidad en el centro de la acción.....	156
2.6. La definición del actor: los movimientos populares.....	164
CAPÍTULO 3. Rupturas y continuidades en América Latina en el estudio de los movimientos sociales	171
3.1. La conflictividad social en América Latina.....	171

3.2. Elementos de análisis desde la perspectiva de la Modernidad/Colonialidad	176
3.2.1. <i>Elementos de una matriz colonial del poder</i>	179
3.3. La crítica al desarrollo	186
3.3.1. <i>La desvalorización de los sectores populares bajo el discurso desarrollista</i>	190
3.4. La política cultural de los movimientos sociales populares latinoamericanos	195
3.4.1. <i>Ontología moderna versus ontología relacional</i>	202
3.5. Lo común para la reapropiación de la vida.....	207
3.5.1. <i>Lo común como lo inapropiable</i>	214
3.5.2. <i>Lo común como relación</i>	215
3.5.3. <i>Lo común: lo heterogéneo y poliforme</i>	216
3.6. ¿Qué entendemos por comunidad?.....	218
PARTE II. CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y ARMADA EN COLOMBIA 1982-2012	225
CAPÍTULO 4. Aproximación a la conflictividad social y armada en el periodo de 1986-2002	227
4.1. La expansión del movimiento guerrillero.....	227
4.1.1. <i>Las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP)</i>	232
4.1.2. <i>El Ejército de Liberación Nacional (ELN)</i>	236
4.2. La consolidación de los grupos paramilitares y el narcotráfico	241
CAPÍTULO 5. A medio camino entre la guerra y la paz	247
5.1. Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)	247
5.2. Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990)	250
5.3. Gobierno de César Gaviria (1990-1994)	252
5.4. Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998).....	254
5.5. Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002)	257
5.6. El Plan Colombia como estrategia de lucha contrainsurgente	266

CAPÍTULO 6. Reconfiguración del conflicto armado (2002-2014) y la consolidación del modelo de desarrollo extractivo exportador	273
6.1. Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).....	273
6.1.1. <i>Política de Defensa y Seguridad Democrática</i>	276
6.1.2. <i>La militarización de la población civil</i>	284
6.1.3. <i>La estrategia de paz con los grupos paramilitares</i>	289
6.1.4. <i>La relación entre seguridad y desarrollo</i>	299
6.1.5. <i>Modelo extractivo-exportador y reprimarización de la economía</i>	302
6.1.6. <i>Estrategias de reconfiguración espacial</i>	307
6.2. Primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014)	311
6.2.1. <i>Elementos espacio-temporales para la negociación del conflicto social y armado</i>	314
6.2.2. <i>Las locomotoras del desarrollo</i>	325
PARTE III. PERCEPCIONES POPULARES DE LOS CONFLICTOS SOCIO-TERRITORIALES EN EL PUTUMAYO	341
CAPÍTULO 7. Caracterización del territorio y narrativas del conflicto social y armado	343
7.1. Breve caracterización del departamento del Putumayo.....	343
7.2. Caracterización de las organizaciones sociales populares.....	349
7.3. Narrativas subalternas del conflicto social y armado	359
CAPÍTULO 8. Control social y militar del territorio.....	371
8.1. Seguridad, militarización y políticas sociales.....	375
8.2. El control paramilitar en el Putumayo	389
8.3. El control guerrillero en el Putumayo.....	404
CAPÍTULO 9. Economía de la droga, política minero-energética e infraestructura.....	415
9.1. Economía de la droga: narcotráfico y cultivos de uso ilícito	415
9.2. Políticas minero-energéticas	427

9.2.1. <i>La estrategia de seguridad acompaña los proyectos extractivos</i>	437
9.3. Proyectos de infraestructura	449
CAPÍTULO 10. Propuestas de construcción de paz. Plan Integral de Desarrollo Campesino...	455
10.1. Memoria corta de las luchas de resistencia	456
10.2. Nuevas articulaciones, nuevas alianzas y el fortalecimiento del movimiento social .	459
10.3. Plan Integral de Desarrollo Rural Alternativo	463
10.4. Una breve referencia al escenario “Post-acuerdo”	469
PARTE IV. PERCEPCIONES POPULARES DE LOS CONFLICTOS SOCIO-TERRITORIALES EN MONTES DE MARÍA	475
CAPÍTULO 11. Caracterización del territorio y narrativas del conflicto social y armado	477
11.1. Breve caracterización de la subregión de Montes de María	477
11.2. Caracterización de las organizaciones sociales populares.....	488
11.3. Percepciones subalternas del conflicto social y armado.....	498
CAPÍTULO 12. Control social y militar del territorio: Estado, guerrilla, paramilitares	503
12.1. Las políticas de consolidación del territorio.....	504
12.2. La presencia histórica del movimiento insurgente	515
12.3. La presencia territorial de los paramilitares: el terror llega a Montes de María.....	524
12.3.1. <i>El inicio del paramilitarismo en Montes de María</i>	524
12.3.2. <i>El régimen del terror paramilitar en Montes de María: una estrategia de expansión territorial.</i>	527
12.3.3 <i>Un relato de la desintegración de las comunidades de base: el caso del Corregimiento de Pueblo Nuevo</i>	533
12.3.4. <i>“Nunca se han ido”: la desmovilización de los paramilitares</i>	537
CAPÍTULO 13. Conflictos socio-territoriales: tierras, monocultivos y explotación minero-energética	545
13.1. La reconfiguración del espacio. Una contrarreforma agraria armada	547

13.2. El despojo como reconfiguración violenta del espacio en Montes de María	553
13.1.1. Las dinámicas del despojo, desplazamiento forzado y concentración de tierras en el periodo 2000-2014.....	558
13.3. Los agronegocios: como factor de reconfiguración espacial.....	568
13.4. Los proyectos minero-energéticos en Montes de María.....	576
13.5. Impactos en la reconfiguración del espacio.....	578
CAPÍTULO 14. Una política pública para la defensa del territorio. Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María	585
14.1. Una historia de resistencia y lucha social	588
14.2. En busca de una permanencia digna en el territorio	593
<i>14.2.1. Territorios interculturales, modelos de desarrollo rural y políticas de acceso a la tierra</i>	<i>597</i>
14.2.2. Medio ambiente y recursos naturales.	602
14.2.3. Educación, investigación e innovación tecnológica, comunicación y cultura.	606
14.3. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la Mesa de Articulación y Concertación de Montes de María.....	608
CONCLUSIONES	611
GLOSARIO	625
ANEXO 1. RELACIÓN DE ENTREVISTAS.....	629
ANEXO 2. GUION ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD	631
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	635

Índice de Figuras

Figura 1. Intensidad del conflicto armado en Colombia en el año 1998	231
Figura 2. Intensidad del conflicto armado en Colombia en el año 2002	232
Figura 3. Cambios en la territorialidad de las autodefensas (1997-2002)	245

Figura 4. Intensidad del conflicto armado en Colombia en el año 2009	284
Figura 5. Estructura de las AUC (2002)	292
Figura 6. Títulos mineros acumulados al gobierno de Uribe.....	330
Figura 7. Solicitud de títulos mineros (2006-2009).....	331
Figura 8. Títulos mineros (2002-2010).....	332
Figura 9. Títulos mineros (2014)	333
Figura 10. Ejes de integración y desarrollo, clúster y centros logísticos.....	335
Figura 11. Departamento del Putumayo	344
Figura 12. Cartografía participativa, conflictos socio-territoriales Putumayo.....	363
Figura 13. Distribución regional según la permanencia del cultivo de coca (2005-2014)	376
Figura 14. Fuerza Pública Putumayo	377
Figura 15. Mapa de Tierras – Putumayo “Ronda Colombia” 2014.....	432
Figura 16. Colombia petrolera y territorios indígenas	447
Figura 17. Grupo de proyectos del Eje Amazónico IIRSA	451
Figura 18. Subregiones Montes de María.....	478
Figura 19. Presencia de cabildos indígenas en Montes de María	481
Figura 20. Presencia consejos comunitarios en Montes de María.....	482
Figura 21. Cobertura de servicios públicos en Montes de María.	486
Figura 22. Cartografía participativa, conflictos socio-territoriales Montes de María	500
Figura 23. Presencia de frentes del Bloque Caribe de las Farc hasta 1988	518
Figura 24. Localización frentes del Bloque Héroes de Montes de María.....	538
Figura 25. Ubicación Bacrim Montes de María	541
Figura 26. Víctimas de desplazamiento forzado en Montes de María (1984-2016).....	561
Figura 27. Territorios interculturales, modelos de desarrollo rural y políticas de acceso a la tierra	600
Figura 28. Plan de ordenamiento ambiental	605

Índice de Tablas

Tabla 1. Políticas de seguridad y estrategias de control militar y social del territorio gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel (2010-2014).....	372
---	-----

Tabla 2. Presencia de las FARC en el departamento del Putumayo	406
Tabla 3. Batallones Especiales Energéticos y Viales (BAEEV) y Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado (COPEI) en el Putumayo	441
Tabla 4. Algunos impactos frecuentes de la actividad petrolera en territorios indígenas.....	448
Tabla 5. Proyectos estratégicos Putumayo. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014	452
Tabla 6. Visiones de desarrollo MIC.	468
Tabla 7. Pobreza multidimensional, necesidades básicas insatisfechas, miseria Montes de María	484
Tabla 8. Distribución de la tierra rural y coeficiente de Gini en los municipios de Montes de María 2011	485
Tabla 9. Conflictos socio-territoriales por municipio. Montes de María.....	501
Tabla 10. Masacres cometidas por los grupos paramilitares, 1997-2000	528
Tabla 11. Los neoparamilitares Bacrim en los Montes de María	540
Tabla 12. Tipología y modalidades de despojo.....	558
Tabla 13. Cultivos de palma de aceite en Montes de María (2013).....	574
Tabla 14. Títulos mineros en los Montes de María 2007-2010	577
Tabla 15. Conflictos por la utilización de los cuerpos de agua.....	581
Tabla 16. Programa de Fortalecimiento de la Economía Campesina y la Agricultura Familiar en Montes de María	602
Tabla 17. Desterritorialización- reterritorialización Montes de María y Putumayo	622

RESUMEN

La presente tesis doctoral, *Percepciones populares de los conflictos socio-territoriales en Colombia: Putumayo y Montes de María. La paz que nunca ha sido*, tiene como propósito fundamental analizar las percepciones que las organizaciones populares, localizadas en el departamento del Putumayo y en la subregión del caribe colombiano Montes de María, construyen acerca de los conflictos socio-territoriales. La investigación se desarrolla en el periodo comprendido entre 2002-2014.

Para ello, se recurre a diferentes perspectivas teóricas provenientes principalmente de la ciencia política, la sociología, la antropología y la geografía política. Por lo tanto, es una apuesta interdisciplinar. Este enfoque adquiere mayor importancia teniendo en cuenta que es una reflexión sobre la conflictividad social desde una perspectiva espacial.

La investigación se elabora teniendo como base fundamental el trabajo de campo llevado a cabo en las zonas de estudio, que consistió principalmente en la realización de entrevistas en profundidad a líderes y lideresas de las organizaciones populares.

La hipótesis central de la investigación, consiste en que las organizaciones populares interpretan de manera distinta las dinámicas de la conflictividad social dependiendo del lugar en que se encuentren. Estas percepciones se encuentran estrechamente relacionadas con la forma en que se apropian material y simbólicamente del territorio y que configuran el horizonte de sentido de sus luchas. No obstante, hemos podido comprobar que existen elementos comunes que vertebran los conflictos en esos territorios. Entre esos elementos se destacan: el control social y militar de los mismos, los proyectos extractivistas y el conflicto armado. Estos factores evidencian la diferencia existente entre el espacio concebido y el espacio vivido.

Los resultados de la investigación nos llevan a afirmar que, tanto en el Putumayo como en Montes de María, la conflictividad se deriva de una relación de dominación en la que las élites políticas y económicas justifican sus privilegios en la subordinación y/o en la presión sobre los sectores sociales populares. Así, consiguen mantener intacto el *statu quo* que les permita seguir disfrutando de sus prerrogativas. En las lecturas que realizan las organizaciones consultadas, esas relaciones de dominación se sustentan en un mayor acceso a diferentes tipos de recursos sociales, políticos, económicos e incluso culturales. Esta situación privilegiada permite que los intereses y

motivaciones de las clases dominantes sean prioritarias en las decisiones y políticas gubernamentales.

Palabras clave: Movimientos populares, conflicto, desarrollo, paz, territorio.

ABSTRACT

The main purpose of this doctoral thesis, *Popular perceptions of socio-territorial conflicts in Colombia: Putumayo y Montes de María. The peace that never was*, is to analyze the perceptions that popular organizations, located in the department of Putumayo and in Montes de María—a sub-region of the Colombian Caribbean—, build about socio-territorial conflicts. The research is developed in the period between 2002-2014.

To do this, different theoretical perspectives are used, mainly from political science, sociology, anthropology and political geography. Therefore, it is an interdisciplinary bet. This approach acquires greater importance considering that it is a reflection on social conflict from a spatial perspective.

The research is carried out on the basis of the field work carried out in the study areas, which consisted mainly of conducting in-depth interviews with leaders of popular organizations.

The central hypothesis of the research is that popular organizations interpret the dynamics of social conflict in a different way according to the place where they are. These perceptions are closely related to the way they materially and symbolically appropriate the territory and that configure the horizon of meaning of their struggles. However, we have been able to verify that there are common elements that structure the conflicts in those territories. Among these elements, the following stand out: the social and military control of the conflicts, the extractive projects and the war. These factors show the difference between the conceived space and the lived space.

The results of the research lead us to affirm that, both in Putumayo and Montes de María, conflict is derived from a relationship of domination in which the political and economic elites justify their privileges in subordination and / or pressure on the popular social sectors. Thus, they manage to keep intact the status quo that allows them to continue enjoying their prerogatives. In the readings carried out by the organizations consulted, these relations of domination are based on greater access to different types of social, political, economic and even cultural resources. This

privileged situation allows the interests and motivations of the ruling classes to take priority in government decisions and policies.

INTRODUCCIÓN

La paz no puede ser construida por las élites. Si vivimos en un mundo en donde abunda la diversidad y las autonomías de cada pueblo, de cada territorio, de cada país, considero que no se debe construir una sola paz, sería una paz que homogeniza las distintas autonomías, las distintas expresiones. Habría que seguir apostando por construir la diversidad de la paz, muchas paz que se articulen, porque la paz para el indígena es una, la paz para el campesino es otra, para el afro es otra, para quienes vivimos en la ciudad concebimos la paz de otra forma distinta. De ahí consideraría que la paz sería un limitante si se construye desde la ciudad para todos, sería complicado, porque ahí es donde surgen los problemas, cuando el Estado colombiano trata de formular sus políticas direccionadas desde quienes no viven la realidad del país.
(Líder social del Cauca, como se citó en Observatorio Nacional de Paz, 2010)

La presente tesis doctoral *Percepciones populares de los conflictos socio-territoriales en Colombia: Putumayo y Montes de María. La paz que nunca ha sido* es una investigación que busca analizar la posición de los movimientos sociales populares respecto a los conflictos socioterritoriales desde una perspectiva espacial. Para la reflexión, se recurren a diferentes conceptos y perspectivas teóricas provenientes principalmente de la ciencia política, la sociología, la antropología y la geografía política. Por lo tanto, es una apuesta interdisciplinar entendiendo que la reflexión sobre la conflictividad social desde una perspectiva espacial requiere la utilización de diferentes enfoques teóricos complementarios, que permitan abordar su complejidad.

La incorporación del espacio al pensamiento crítico de las ciencias sociales se ha realizado de manera paulatina, pasando de una posición marginal y muchas veces acrítica, generalmente dependiente del análisis histórico o en una suerte de dualidad entre el espacio y la estructura social, a una comprensión geográfica de los fenómenos sociales y de la conflictividad social (Miller y Martin, 2000), es decir, el espacio como parte de la totalidad social. Desde esta última perspectiva, la investigación que se presenta tiene como objetivo principal analizar las percepciones que las organizaciones populares, localizadas en el departamento del Putumayo y en la subregión del caribe colombiano Montes de María, construyen acerca de los conflictos socio-territoriales.

En este sentido, se intenta comprender las lecturas elaboradas por las organizaciones populares de sus contextos territoriales, en relación principalmente con las dinámicas del conflicto social armado y la implementación de un modelo de desarrollo hegemónico que adquiere

características diferenciales en los lugares sobre los cuales se realiza la disertación. Tanto el conflicto como los vectores de desarrollo se articularon de manera diferenciada en los territorios dependiendo de su importancia geoestratégica, la disposición de recursos naturales como motor para la acumulación de capital, las políticas de control militar y social del espacio desplegadas por los actores armados regulares e irregulares, la geometría del poder presente en las las regiones de estudio y la violencia estructural manifiesta en las configuraciones espaciales.

La delimitación temporal de la investigación, 2002-2014, se corresponde con los dos mandatos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y con el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014). La selección de este periodo de estudio se relaciona con las particularidades del contexto político, social y económico del país. En la primera década del presente siglo, se configuró una narrativa dominante que redujo la conflictividad social al enfrentamiento militar entre el Estado y los movimientos guerrilleros, desconociendo los diferentes conflictos que alimentaron la guerra en los territorios y que se refieren a las condiciones materiales, a las garantías políticas, sociales, culturales, ambientales y económicas necesarias para la reproducción social de las comunidades¹.

La negación tanto de las causas estructurales que dieron lugar al conflicto armado interno como de las diferentes conflictividades asociadas a la implantación de un concepto de progreso, parecieron configurar unas relaciones de poder asimétricas, que se tradujeron en un no reconocimiento de las diferentes percepciones, lecturas, vivencias y prácticas que se construyeron en los márgenes de la sociedad. De esta manera, la llegada a la presidencia de la República de Álvaro Uribe Vélez retrotrajo a Colombia al oscurantismo político del Estatuto de Seguridad implementado por Julio César Turbay Ayala (1978-1982)².

¹ En el año 2002, llegó a la presidencia de Colombia Álvaro Uribe Vélez con la promesa de acabar con la guerrilla y con la inseguridad en el país, después del fracaso de las negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). El discurso de Uribe Vélez se plegó a los principios de la doctrina de seguridad de Estados Unidos que le permitió construir un relato de negación del conflicto social y armado para centrarse en la amenaza terrorista. El principal eje de los dos mandatos fue la Política de Seguridad Democrática que contemplaba una fuerte inversión en defensa, seguridad y control territorial, articulada con un componente económico de inversión extranjera para la lucha contrainsurgente y antinarcoóticos. En los gobiernos de Uribe Vélez se produjo un reforzamiento de los principios y políticas del Plan Colombia. De esta manera, el discurso institucional cerró las puertas para una política de paz centrada en el diálogo y el reconocimiento político entre las partes.

² El Estatuto de Seguridad implementado durante el gobierno de Turbay Ayala fue duramente criticado debido a que propició las violaciones a los derechos humanos y a los derechos procesales. Esta política de seguridad se estructuró a partir de la creación de un enemigo interno que amenazaba los valores nacionales. De esta manera, cualquier voz opositora a la retórica de la moral nacional se consideró como una amenaza a la democracia y a la convivencia. La lucha contra el comunismo se constituyó en el bastión del ejército, que durante este periodo ostentó facultades

Durante el periodo de análisis también se consolidaron las bases de un modelo de desarrollo extractivo-exportador sustentado en la explotación de recursos naturales no renovables, lo que se ha denominado la reprimarización de la economía. Esto significó ampliar la frontera agrícola, petrolera, minera, energética y forestal hacia zonas que desde el discurso dominante eran considerados como espacios vacíos e improductivos, políticas que generalmente fueron de la mano de los procesos de privatización de los bienes naturales comunes. Esta reorganización a través de formas transnacionalizadas de control de los recursos naturales y territorios que reorganizan el lugar de lo nacional y de lo local ha generado nuevos elementos de conflictividad social presentes en las regiones, así como nuevas territorialidades que se disputan el control de los territorios y de la naturaleza presentes en los mismos³.

En el gobierno de Juan Manuel Santos se produjo un giro en la retórica hegemónica relacionado con el reconocimiento del conflicto social y armado que dio paso a una solución política negociada con la guerrilla más longeva de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP)⁴. Este giro discursivo reconoció parte de la problemática, pero obvió al mismo tiempo una serie de conflictos presentes en los territorios que configuraron las relaciones sociales y de poder. Desde nuestra perspectiva, se estructuró un discurso dominante con tintes pacificadores, pero se profundizó el modelo social-económico sustentado en lo que este gobierno denominó la “locomotora minero-energética”,

judiciales. La criminalización de la oposición y de las organizaciones sociales populares se constituyó en una práctica habitual para el mantenimiento del statu quo.

³ Luis Jorge Garay señala que estos elementos constituyen la base de la actual etapa del proceso de globalización capitalista consecuente con la competencia entre capitales internacionales y nacionales por el acaparamiento de tierras, suelo y subsuelo, a través de diversas modalidades como la extranjerización, la titularización y el derecho real de superficie, para la producción de *commodities* que se tranzan en el mercado mundial, ya sean biocombustibles, agroalimentos, maderas o recursos naturales no renovables como los minerales y el petróleo (Garay, 2014).

⁴ En el discurso de posesión de Juan Manuel Santos ya se vislumbraba un cambio en la política de paz en relación con el anterior mandatario:

Al mismo tiempo quiero reiterar: La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos. [...] A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. Eso sí –insisto– sobre premisas inalterables: la renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación” (Presidencia de la República, 2010).

Dos años después, el presidente anunciaba públicamente que el gobierno y las FARC-EP llevaban seis meses manteniendo conversaciones y producto de las mismas se había llegado a una hoja de ruta para el inicio formal de un proceso de negociación. En octubre del 2012, las partes firmaron una agenda de negociación. Finalmente, el 24 de noviembre de 2016 se suscribió el Acuerdo de Paz definitivo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

afectando las posibilidades de acceder a unos mínimos vitales por parte de los sectores populares y a la implementación de sus proyectos territoriales⁵.

Por otra parte, para delimitar del objeto de estudio es importante señalar que las organizaciones populares se constituyen en el agente central de la investigación. En este sentido, se toma como referencia la categoría analítica de lo popular realizada por el profesor Leopoldo Múnera en la que se incluye:

Al conjunto de agentes sociales sometidos al nivel de lo estructural a una dominación económica, política, de género y cultural (en la que están implícitas la racial y la étnica), que no está limitada, aunque incluye, a la relación de poder entre las clases. Por consiguiente, los posibles campos sociales en conflicto son ampliados a los ámbitos de la vida social donde el poder forma grupos que fundamentan sus privilegios en la subordinación de individuos y colectividades. (Múnera Ruiz, 1998, p. 76)

El autor entiende al movimiento popular como un tipo particular de movimiento social, caracterizado por la articulación tanto de acciones como de agentes, individuales o colectivos, que hacen parte de las clases populares o que se organizan en función de las mismas, y que se disputan la orientación de uno o varios campos sociales con las clases dominantes. En este sentido, la clase no sería comprendida como un factor estructural determinante sino como una relación transversal.

Los campos sociales en conflicto se constituyen a partir de una relación de dominación en donde los grupos fundamentan sus privilegios en la subordinación y/o en la opresión de otros grupos, individuos u otro tipo de colectividades. Esa subordinación se puede dar en los diferentes campos de lo social, lo político, lo económico y lo cultural y no se fundamenta solamente en la relación que se encuentra derivada de los medios de producción. En el ámbito de cada uno de estos sistemas se presenta una tensión producida por el ánimo de los agentes por controlar y modificar las relaciones con la naturaleza y las relaciones sociales (Múnera, 1998).

En este proceso los actores también se transforman, cambian y alteran sus patrones de conducta, así como las formas de interpretar la realidad. Por ejemplo, los movimientos populares en Colombia entendidos como agentes que disputan la territorialidad en sus espacios, transforman sus identidades, repertorios de acción y/o marcos interpretativos en la lucha por la conservación

⁵ La locomotora minero-energética se estructuró como el principal eje del modelo de desarrollo económico durante los dos mandatos presidenciales de Juan Manuel Santos. De esta manera, el extractivismo se consolidó como el motor de la prosperidad económica y social. Las políticas se enfocaron al tránsito de las ventajas comparativas que posee el país en términos de bienes naturales hacia la consolidación como ventajas competitivas en el marco de los procesos de acumulación de capital en el mercado global.

de su entorno, frente a la acción de las empresas agro-extractivas, a los actores armados regulares o irregulares o al Estado en sí mismo. De esta manera, las tensiones se manifiestan en conflictos socio-territoriales producto de unas relaciones de poder asimétricas.

Ahora bien, el análisis espacial se introduce en la investigación a partir de la construcción teórica de Henri Lefebvre (2013 [1974]) como base para la reflexión teórica de las percepciones populares sobre los conflictos socio-territoriales, entendiendo que los significados construidos por estos actores muchas veces constituyen espacios de representación que proyectan nuevos significados o posibilidades de las prácticas espaciales. En este sentido, el espacio no se entiende como un contenedor, es decir, como un espacio geográfico que agrupa o sostiene la naturaleza y la población o como un mero reflejo de las relaciones sociales que se desarrollan en el mismo.

A partir de esta reflexión teórica, el concepto de territorio que se maneja en la tesis no es análogo al concepto de espacio. Por lo tanto, el territorio se comprende como un espacio social, construido históricamente, sobre el cual se ejerce una apropiación efectiva. Este enfoque plantea la importancia de comprender las diferentes interacciones que se dan en ese espacio en concreto y cómo los actores sintagmáticos (Raffestin, 2011 [1980]) buscan ejercer una apropiación del mismo (concreta o simbólica) desplegando diferentes dispositivos que generan ordenamientos territoriales particulares⁶.

Los proyectos sociales implícitos en la construcción del territorio serán objeto de conflicto entre los diferentes actores que tienen un afán de dominio o control sobre el mismo. De esta manera, las dinámicas de los conflictos se inscriben en las relaciones de poder asimétricas (dominación-subordinación) en tanto los diferentes agentes disponen de diferentes grados de acceso a los recursos (simbólicos, políticos, económicos, culturales entre otros).

En la investigación se entiende que el territorio también expresa un sentido identitario que le otorgan y construyen los agentes sociales que desarrollan sus proyectos vitales. El proceso de apropiación, de ocupación material y simbólica del territorio hace referencia a la territorialización. El ejercicio de territorialización, al soportarse en sentidos identitarios y referentes culturales define

⁶ Claude Raffestin se refiere a los actores sintagmáticos como aquellos que tienen un programa, una intencionalidad clara sobre el territorio:

El actor sintagmático combina todo tipo de elementos para “producir”, sensu lato, una o varias cosas [...] Es decir, el actor sintagmático articula diferentes momentos de la realización de su programa integrando capacidades múltiples y variadas. Estos actores sintagmáticos están constituidos por actores individuos que se integran o son integrados en un proceso amplio. (p. 33)

unas territorialidades. Estos dos procesos son dinámicos, cambiantes y mutables, en tanto se encuentran insertos en unas relaciones de poder asimétricas.

En este ejercicio de análisis, tomamos como referencia las aportaciones teóricas de Claude Raffestin (2011 [1980]) sobre el concepto de territorio ya que nos permite comprender el mismo como una proyección espacial del poder, sustentado en las relaciones sociales que se encuentran determinadas tanto por acciones y estructuras materiales como por prácticas y estructuras simbólicas, que despliegan los agentes en determinados contextos sociales, políticos, económicos y culturales.

Por consiguiente, en la presente tesis nos interesa comprender también las correlaciones entre la narrativa dominante articulada a unas representaciones hegemónicas del espacio y las percepciones, prácticas y espacios de representación que construyeron los agentes populares en contextos territoriales concretos. Teniendo en cuenta que el no reconocimiento de estos conocimientos y prácticas populares por parte de las élites políticas y económicas tuvo unos efectos simbólicos y materiales en los espacios cotidianos que habitan comunidades.

Tanto las dinámicas de la guerra como la imposición de un modelo de desarrollo alteraron los órdenes políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales e incluso de género en los que se expresaron múltiples conflictividades que pusieron en evidencia contradicciones, disputas y luchas, entre el Estado, las élites políticas, los actores económicos (nacionales y transnacionales) y los sectores populares. De esta manera, se generaron nuevas formas de apropiación material y simbólica del espacio que entraron en conflicto con las territorialidades de las comunidades.

1. Justificación de la investigación

El interés personal por investigar las dinámicas de la conflictividad social en Colombia desde el lugar de enunciación de los sectores sociales populares está relacionado con la vinculación laboral al Proyecto Planeta Paz en el año dos mil⁷. La inquietud académica estuvo precedida por un compromiso de militancia social a favor de la construcción de la paz y de la convicción firme de

⁷ El Proyecto Planeta Paz fue creado en junio del año 2000 como una iniciativa de la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), y personas interesadas en el tema de la negociación política del conflicto y el logro de la paz. En este año, se adelantaron los diálogos entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC-EP, en la zona de El Caguán, por lo que se consideró que era un momento oportuno para articular las propuestas de los sectores populares y trasladarlas a la mesa de negociación.

la necesidad de una salida negociada al conflicto armado, que abriera una ventana de oportunidad política para la superación de una situación sistémica de injusticia en el país. Tal situación ha llevado a que las víctimas se cuenten por miles, sin tener aún un dato exacto de las mismas.

Las organizaciones populares han sufrido el impacto de los múltiples conflictos que vive Colombia, sus estructuras organizativas y territoriales han sido severamente golpeadas. El horror de la guerra, de la pobreza, de la desigualdad ha pesado sobre los hombres y mujeres de las clases populares, quienes han sufrido el despojo, el desplazamiento forzado, la desaparición, la tortura, la violencia sexual, entre otras muchas vulneraciones a los derechos humanos. Ante esta crisis humanitaria, continua en el tiempo, sus voces han tratado de ser silenciadas desde los discursos de las élites políticas y económicas al ser incómodas para el mantenimiento de sus privilegios.

La tendencia desde las clases dominantes y de la opinión pública, ha sido la desvalorización de los planteamientos populares al no ser considerados sujetos de progreso. El repertorio de acción de estos agentes se ha calificado como dependiente de las organizaciones armadas y, por ende, se ha producido una fuerte criminalización de la movilización social. Sin embargo, los sectores populares no han sido sujetos pasivos, han tejido estrategias de resistencia para la permanencia en sus territorios y la defensa de los bienes comunes, han elaborado agendas societales con propuestas alternativas de/al desarrollo y para la construcción de la paz.

Precisamente, el trabajo desarrollado por el Proyecto Planeta Paz, que a partir del año 2003 pasó a ser administrado por la Corporación Derechos para la Paz (CDPAZ), se enfoca a contribuir a la cualificación de las propuestas de país de las organizaciones sociales populares, y a la constitución de sujetos políticos democráticos capaces de construir sociedad y nación con justicia social, hacia la búsqueda de soluciones y alternativas viables al conflicto social, político y armado colombiano⁸. La organización se ha ocupado de realizar, promover y divulgar toda clase de estudios relacionados con la problemática nacional, el movimiento social y los sectores sociales populares, así como del reconocimiento, sistematización y divulgación de las propuestas de política pública construidas por los sectores.

En la labor desplegada por esta organización, he tenido la oportunidad de participar en varios momentos del trabajo como investigadora y asesora de movimientos sociales. En particular,

⁸ Planeta Paz- CDPAZ trabaja con los siguientes sectores sociales populares: afrocolombianos, ambientalistas, campesinado, cívico-comunales, culturales, indígenas, jóvenes, LGBT, mujeres, población desplazada y víctimas, sindicalistas, y redes sociales de desplazamiento, educación, mujeres, juventud, paz, seguridad alimentaria en las que participan cerca de 1.100 organizaciones, con 3.500 líderes y lideresas, de veinte departamentos del país.

en una primera fase orientada al trabajo con sectores sociales populares, tendientes a generar dinámicas de confianza e involucramiento para la construcción de una Estrategia Social de Paz desde las regiones. Así como en la puesta en marcha del Observatorio Nacional de Paz, financiado por la Unión Europea, en la que se realizó un trabajo de análisis de la conflictividad social a través de una metodología cartográfica de identificación de los conflictos. En el marco de este trabajo se realizó el trabajo de campo de la presente investigación, que no hubiera sido posible sin el apoyo de la organización, debido fundamentalmente a dos cuestiones: la situación de orden público en las regiones y el establecimiento de relaciones de confianza con las organizaciones populares.

Por otra parte, la investigación que se presenta tiene pertinencia en el marco de los análisis de los conflictos y de la violencia elaborados en Colombia⁹. En los estudios realizados en la década de los sesenta y los ochenta del siglo pasado, las investigaciones giraron alrededor de la violencia en el marco del conflicto bélico. Los trabajos se centraron especialmente en el Estado, el papel de los partidos políticos, las tensiones entre las clases sociales y el problema de la tierra. El análisis meso y microestructural de la violencia estuvo más bien ausente en los trabajos académicos¹⁰ (Palacio, Hoyos, y Jiménez, 2002).

A partir de la década de los ochenta, se presentó una apertura en los campos de análisis de la violencia y el conflicto. Los investigadores plantearon nuevos objetos de estudio y preguntas de investigación. Se publicaron estudios sobre violencia urbana, se analizaron las nuevas dinámicas del conflicto ligadas a la aparición de nuevos actores como el paramilitarismo y el narcotráfico. De esta manera, los estudios académicos complejizaron sus análisis en correspondencia con las transformaciones en el contexto social, político, económico y cultural del país (Sánchez, 1987). Por otra parte, los movimientos sociales emergieron como objeto de estudio, empero, no fue hasta

⁹ En este apartado no vamos a entrar en profundidad en los trabajos realizados ya que se aborda en el estado de la cuestión. Nos interesa señalar la pertinencia de la investigación en el marco de los enfoques globales sobre conflicto, violencia y movimientos sociales.

¹⁰ Gonzalo Sánchez señala que los estudios sobre la violencia en el periodo de 1945 a 1965 utilizaron este término como indicativo de la turbulencia política y social del momento, y planteaba que,

en efecto, con el término violencia se pretende simplemente describir o sugerir la inusitada dosis de barbarie que asumió la contienda; otras veces se apunta al conjunto no coherente de procesos que la caracterizan: esa mezcla de anarquía, insurgencia campesina y terror oficial [...] y, finalmente, en la mayoría de los casos, el vocablo cumple una función ideológica particular, la de ocultar el contenido social o los efectos de clase de la crisis política. Esto para no hablar de los usos del término por parte de los habitantes comunes y corrientes que padecieron sus efectos. (Sánchez, 1987, p. 19)

Por otra parte, el trabajo más representativo en este primer periodo fue el libro “La Violencia en Colombia” (1963) de Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y Germán Guzmán, como se señala en el estado del arte, esta investigación representó un punto de inflexión en la producción académica sobre conflicto y violencia.

tiempo después cuando adquirieron relevancia dentro las investigaciones académicas¹¹ (Archila, 1994, p. 252).

En la década de los noventa, continuó la tendencia del anterior periodo, en cuanto a la apertura a nuevos campos de trabajo y de preguntas de investigación, que se abordaron desde diferentes disciplinas (ciencia política, sociología, antropología, economía, etc.). Los procesos de paz llevados a cabo en la década de los ochenta incidieron en esa apertura de la producción académica; en este sentido, se publicaron trabajos sobre la paz, los procesos de negociación, el desplazamiento forzado, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, entre otros.

En este periodo también se puede observar cómo los análisis ya no solo se centraron en las dinámicas estatales sino en los actores, en las diferentes manifestaciones de la violencia y del conflicto, en la cotidianidad de las comunidades. Se presta mayor atención a los factores explicativos del conflicto y, por ende, a las investigaciones provenientes de las perspectivas que trabajan la resolución de los mismos.

De tal manera, en las últimas tres décadas se presenta una proliferación de estudios que abordan las dinámicas, los actores, las representaciones e imaginarios, las representaciones espaciales, las manifestaciones de la(s) violencia(s) y el conflicto(s), que apuntan hacia el conflicto armado como una expresión de múltiples conflictividades que se manifiestan de manera diferenciada en el espacio y en el tiempo.

Desde esta perspectiva, se aborda no solo las manifestaciones de la guerra, la violencia o los procesos de paz. El foco de análisis se sitúa en la acción colectiva, la movilización social, las diferentes expresiones de resistencia de los sectores sociales y populares. De esta manera, se entiende el conflicto de una manera mucha más amplia, asociado a una multiplicidad de conflictos con diferentes expresiones territoriales, que vertebran los órdenes político, social, económico, cultural y ambiental. En este tipo de miradas el conflicto puede ser entendido como motor del cambio social y/o como dinamizador de una transformación sistémica.

Por consiguiente, se abre paso a entender los conflictos desde el lugar de enunciación de aquellos que se encuentran en los márgenes de la sociedad, que dan cuenta de unas relaciones de

¹¹ Mauricio Archila destaca la siguiente producción académica anterior a este periodo, que de alguna manera abrió el campo de los estudios sobre los movimientos sociales: *Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia* de Indalecio Liévano Aguirre (1964), *Partidos políticos y clases sociales* de Germán Colmenares (1968), *Los inconformes* de Ignacio Torres Giraldo (1973) e *Historia del sindicalismo en Colombia* de Miguel Urrutia (1969).

poder asimétricas, del ejercicio del poder en una amplia gama de interacciones que van desde la dominación y la subordinación. Por lo tanto, superan las visiones más reduccionistas que trabajan solo desde la óptica institucional y develan la complejidad de los conflictos en sus diferentes expresiones espacio-temporales.

En esta producción teórica, se destaca el impulso dado por algunos centros de investigación y organizaciones no gubernamentales. En el primer caso, se encuentra el trabajo realizado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), las revistas como Foro (de Foro por Colombia) y Análisis Político (del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional) (Archila, 1996, pág. 268). En cuanto a las ONGs se destaca la producción de la Corporación Nuevo Arco Iris, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), CENSAT Agua Viva, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Justapaz, la Comisión Colombiana de Juristas, Semillas, Planeta Paz- CDPAZ y otro tipo de organizaciones sectoriales como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) o la Escuela Nacional Sindical. Esta producción desde la sociedad civil ha sido fundamental ya que ha puesto en el debate académico y público las voces de los sectores subalternizados.

En este sentido, nos parece importante señalar el trabajo realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), bajo la dirección del profesor Gonzalo Sánchez. El centro elaboró diversas investigaciones sobre los impactos del conflicto armado, con una perspectiva regional. La fuente fundamental de los trabajos fueron los testimonios de las víctimas, pertenecientes en su mayoría a las clases populares, lo que permitió visibilizar las diferentes configuraciones del conflicto en los territorios, poniendo sobre la mesa la complejidad no solo de la guerra sino de los conflictos asociados al mismo, lo que ha permitido un proceso de recuperación de las diferentes memorias.

De esta manera, la presente investigación se sitúa en la reflexión académica sobre los movimientos populares, conflicto armado y las múltiples dimensiones de los conflictos (socioeconómicas, socioculturales y socioambientales), desde las subjetividades de los agentes populares. Estas diferentes expresiones permiten adentrarse en las diferentes formas de control y los dispositivos bajo los cuales se ejerce el poder, que varían según los contextos territoriales.

2. Estado de la cuestión. Violencia, conflicto social armado y movimientos sociales en Colombia

En este apartado se presenta el estado de la cuestión de la producción académica sobre violencia, conflicto armado y movimientos sociales en Colombia. Por la naturaleza del trabajo, no abordaremos todos los estudios publicados en relación con estas categorías, por lo tanto, nos referiremos a los más aportes que consideramos de mayor relevancia para comprender como se han ido transformando los enfoques, objetos de estudio y preguntas de investigación.

2.1. Conflicto armado en Colombia: primer periodo. 1962-1987

2.1.1. Los antecedentes: La Investigadora.

Los antecedentes de las investigaciones realizadas sobre la problemática de la violencia en el país se pueden rastrear a finales de la década de los cincuenta cuando se crea la primera instancia gubernamental para abordar este fenómeno social. En mayo de 1958, la Junta Militar que presidía el gobierno de manera temporal después de la renuncia forzada del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), conformó la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional (conocida como La Investigadora). La Comisión hacía parte de una serie de políticas e instrumentos que pretendían, desde la óptica de las élites del Partido Liberal y del Partido Conservador, contribuir al proceso de transición democrática, a la pacificación y al desarrollo del país, en el marco de la instauración del pacto político bipartidista conocido como el Frente Nacional¹².

¹² Las élites políticas del Partido Liberal y del Partido Conservador acordaron en el Pacto de Benidorm (24 de julio de 1956) la alternancia del poder gubernamental por un periodo de 16 años. En virtud de este acuerdo, un representante de uno de los dos partidos ejerció el cargo de presidente de la República de Colombia por un periodo de cuatro años, en los cuales también se repartió de manera equitativa los demás cargos de la rama ejecutiva, excluyendo cualquier posibilidad de participación de otras fuerzas políticas. De esta manera, el Frente Nacional fue el mecanismo utilizado por las élites políticas tradicionales para retornar el poder del bipartidismo, fracturado por la violencia generada por el enfrentamiento entre estos dos partidos durante la década del cuarenta y del cincuenta y la amenaza de continuidad en el poder del General Gustavo Rojas Pinilla. Es importante señalar, que el pacto fue acordado por las dos corrientes dominantes en cada uno de los partidos, en el Partido Liberal la que lideraba Alberto Lleras Camargo, y en el Partido Conservador la que abanderaba Laureano Gómez. Por tanto, la pugna de poder con otras corrientes dentro de cada una de los partidos fue evidente en los años posteriores a la instauración del Frente Nacional.

Jefferson Jaramillo (2011, 2014) en su análisis sobre el papel de cada una de las comisiones de investigación gubernamentales que abordaron el fenómeno de la violencia y el conflicto, señala para el caso de *La Investigadora* que no solo realizó un diagnóstico de la situación del país a finales de la década del cincuenta, sino que cumplió una función específica en el proceso de transición de la dictadura militar a un pacto aparentemente democrático entre los partidos tradicionales, pero en el fondo profundamente excluyente.

Según este autor, *La Investigadora* fue pensada y diseñada por las élites políticas y económicas como parte de una serie de dispositivos de trámite institucional y de representación social que permitieran la construcción de unas narrativas hegemónicas sobre el fenómeno de La Violencia. Desde el proyecto bipartidista, estas narrativas constituirían la base de una memoria colectiva conformada a partir de una visión restringida de lo acontecido en la década del cuarenta y del cincuenta, de la aparente voluntad democrática de las élites por reconstruir el país a través de un pacto político en que se incluyó solo a algunos sectores de la sociedad, y de unos supuestos comunes sobre los cuales edificar la historia futura¹³.

La elección de los miembros que conformaron la Comisión es un elemento esclarecedor acerca de la intención que se tenía cuando se propuso este mecanismo y “demuestra también de qué forma fue interpretada en su momento *La Investigadora* como parte del sistema civilizador del Frente Nacional” (Jaramillo, 2011, p. 43)¹⁴.

Las fuerzas políticas minoritarias cercanas a ideologías de izquierda como el Partido Comunista, los actores sociales del ámbito local o municipal, los representantes del ámbito universitario, los sectores sociales populares como los campesinos e indígenas que fueron principales víctimas del enfrentamiento armado entre liberales y conservadores, se encontraron abiertamente excluidos de este ejercicio de reconstrucción y reflexión histórica¹⁵.

¹³ A este respecto, es llamativa la acotación que realiza uno de los representantes más progresistas de la Comisión, el sociólogo y sacerdote Germán Guzmán Campos. Este investigador señala que en el Decreto por el cual se establece la creación de la Comisión se evidencia una “connotación inmediateista que podía sesgar el cometido de la Comisión: identificar causas ‘presentes’ de la violencia: es decir, no escudriñar en su etiología anterior, ni su precedente en los años treinta [...]” (Guzmán Campos, 1986, p. 350).

¹⁴ La Comisión estaría conformada por cuatro representantes de los partidos tradicionales firmantes del Pacto de Benidorm (dos del Partido Liberal y dos del Partido Conservador), dos representantes de la Iglesia Católica y dos representantes de las Fuerzas Armadas. El perfil de representación de los integrantes evidenciaba un claro sesgo social a favor de los sectores dominantes de la época, así como el carácter “inclusivo” del nuevo pacto político.

¹⁵ Para Jaramillo (2011) en la selección de los integrantes de la Comisión también estuvieron presentes otros criterios que reforzaron su carácter excluyente. Por ejemplo, el pasado político de los posibles integrantes, las relaciones con las élites políticas del momento y su beneplácito con el modelo del Frente Nacional.

En este punto, es interesante el relato que realiza Guzmán (1986) acerca del debate que se produjo al interior de la Comisión sobre el proceso de investigación que se debía seguir para diagnosticar el fenómeno de la violencia en las regiones más afectadas y, a partir del mismo, diseñar las estrategias que el gobierno tendría que implementar para colocar punto y final a la situación. Este autor apunta hacia la parcialidad de la mayoría de los miembros de la Comisión, que adoptaron una postura de corte institucionalista y centralista, en tanto consideraban que el análisis y las recomendaciones debían ser el resultado de los informes que aportaran las organizaciones que tenían presencia en las diferentes regiones; como las instituciones bancarias y los testimonios de las autoridades locales.

La postura de la mayoría de los miembros de la Comisión revela la manera en la que se ha construido a lo largo de la historia del país un relato hegemónico acerca del fenómeno de la(s) violencia(s) y de los conflictos, que en el fondo no reconoce a los actores populares como sujetos políticos. Asimismo, esta narrativa ha permitido construir un sistema internalizado de valores, el cual ha permitido mantener el statu quo de ciertos sectores de la sociedad y poner en marcha los diferentes modelos de desarrollo. Es decir, la historia oficial ha permitido mantener una matriz de poder sobre la base de un colonialismo interno¹⁶.

En este último sentido, la construcción de la narrativa sobre la(s) violencia(s) en el marco del proceso de transición de la dictadura militar a un pacto entre élites se realiza en dos niveles: en la escala nacional, los actores políticos que sustentan el proyecto bipartidista se dieron a la tarea de “imaginar la concertación desde el centro”; mientras que la Comisión que actuó en la escala regional, “piensa y enfrenta el problema de la pacificación y la rehabilitación localmente, desde abajo” (Jaramillo, 2011, p. 45).

Para acometer esta tarea, el trabajo de *La Investigadora* se centró precisamente en la recopilación de testimonios de actores que se vieron afectados de una u otra manera por el fenómeno de la violencia (autoridades locales, miembros de la iglesia católica, miembros de las fuerzas militares, líderes políticos, guerrilleros, entre otros) asentados en las regiones que se consideraban más conflictivas y sobre las que los miembros de la Comisión tenían mayor

¹⁶ Para Guzmán, la respuesta a la implementación de La Comisión se sitúa en dos planos interpretativos:

Una medularmente clasista y oligárquica: la Comisión se creó para buscar el retorno al estado de derecho, impidiendo la toma del poder por el pueblo. Es lo que se ha llamado la legitimación del Frente Nacional. La otra respuesta es marxista: ven en la Comisión un instrumento más, utilizado por la clase en el poder para reproducirse y perpetuar su dominación a través del Estado. (Guzmán, 1986, p. 353)

conocimiento (en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Huila y Tolima, fundamentalmente el centro del país)¹⁷. El trabajo de campo que realizó la Comisión no fue producto de una reflexión académica anterior que incluyera un análisis de las condiciones sociales, económicas y políticas del país en una perspectiva histórica.

Desde nuestra perspectiva, el valor fundamental del trabajo realizado por La Investigadora no solo radica en los informes orales que se rendían al primer gobierno del Frente Nacional, presidido por el liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), o en su labor de facilitador para la firma de pactos de paz regionales entre las diferentes facciones enfrentadas. El valor de la Comisión residía en la recopilación de los ingentes testimonios individuales y colectivos de los actores involucrados en el conflicto (cerca de 20.000), en el mapeo de las distintas expresiones territoriales de la violencia, así como el registro de las diferentes problemáticas sociales de las regiones.

2.2. *La Violencia en Colombia*

El acervo documental y testimonial de *La Investigadora* se constituyó en la base fundamental del libro *la Violencia en Colombia* publicado en 1962 y escrito por Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. El libro marcó un punto de inflexión en la historia de las ciencias sociales en Colombia y representó una apuesta académica por realizar un estudio crítico e independiente sobre el periodo denominado La Violencia.

Existe un amplio consenso acerca de que la publicación marca el inicio de lo que autores como Ortiz (1992), Pécaut (1998), Palacio, Hoyos, & Jiménez (2002), Sánchez (1986) y Cubides (2003) consideran el primer momento de la producción de las investigaciones sociales acerca de los diferentes fenómenos asociados a la(s) violencia(s) y al conflicto. En tanto que el libro logró estructurar un objeto de estudio que le permitió, por un lado, tomar distancia de la parcialidad académica que caracterizaron a anteriores publicaciones y del enfrentamiento bipartidista que logró penetrar en las instituciones universitarias; y, por otra parte, allanó el camino para el análisis

¹⁷ La mayoría de las técnicas utilizadas por la Comisión fueron de tipo cualitativo enfocadas a hacer un reconocimiento de los territorios, así como una descripción de los acontecimientos acaecidos en los mismos durante las dos décadas anteriores. La principal técnica de recolección de información fueron las entrevistas abiertas o semi-estructuradas a diversos actores. Además, se realizó una revisión de fuentes secundarias documentales como ensayos, novelas, entre otros. Y una revisión de datos estadísticos.

de los relatos de los actores de la violencia que en los años cincuenta se registró solo de manera testimonial.

Gonzalo Sánchez (1986) de manera acertada clasificó la producción académica de los años cincuenta en dos tipos de literatura: apologética y testimonial. En la literatura apologética, los autores argumentaron en defensa de los intereses de alguno de los actores que participaban en el conflicto y obviaban la reflexión acerca de las causas, los intereses que movían a los actores, las dinámicas regionales o las relaciones de poder que sustentaban el enfrentamiento en las diferentes escalas espaciales.¹⁸

De tal manera, el libro *La Violencia en Colombia* se alejaba de los dos tipos de literatura que hasta el momento se había producido. Como se señala anteriormente, el documento tenía el mérito de recoger y sistematizar el trabajo empírico que desarrolló *La Investigadora*, plantear nuevas reflexiones y posibles líneas de investigación. A este respecto, nos parece importante señalar algunos de los aportes principales del libro:

- a) Los autores dieron relevancia en el análisis sociológico a la lectura que los actores populares hacían de La Violencia a través de la puesta en común de significativos relatos y testimonios recogidos en el trabajo de campo de La Comisión. En la mayoría de los relatos de la década de los cincuenta, los sectores populares eran despojados de su naturaleza política en tanto eran vistos como “muchedumbre”, como “populacho” que actuaba sin ningún tipo de razonamiento y al vaivén de los intereses de las élites políticas regionales. Ortiz (1992) señala que el enfoque dado por los autores del libro permitió evidenciar que “detrás de ese espectro de La Violencia” se asomaban complejas realidades que tenían dinámicas sociales diferenciadas en el ámbito territorial ¹⁹.
- b) El libro abrió la discusión acerca de los orígenes de La Violencia a partir de una extensa descripción de los antecedentes históricos consignada en la primera parte de la

¹⁸ Algunas de las publicaciones que se enmarcaron dentro de la literatura apologética eran: Azula Barrera, R. (1956). *De la revolución al orden nuevo*. Bogotá: Editorial Kelly. Antonio, G. (1955). *Gaitán y el problema de la revolución colombiana*. Nieto Rojas, J. M. (1956). *La batalla contra el comunismo en Colombia*. Urdaneta Arbeláez, R. (1962). El materialismo contra la dignidad del hombre. En relación a la lectura testimonial solo señalar que hacía referencia principalmente a los relatos de las experiencias de actores de la violencia, ejecutores de alguno de los dos bandos o víctimas, durante un espacio de tiempo y en una región determinada. Estos escritos por lo general no constituyen un documento de investigación académica.

¹⁹ Al respecto, Pécaut (1998) señala que:

El inmenso mérito de esta obra está en asociar la descripción con la reflexión teórica. La descripción es la que permite finalmente acceder al mundo social de la violencia haciendo entender la voz de los participantes, protagonistas y víctimas, revelando las justificaciones de las prácticas, desvelando la violencia. (pág. 1998)

publicación²⁰. El debate de la génesis de la violencia se estructuró en las décadas siguientes en dos vertientes de análisis: primero, los investigadores que consideran que la clave se encuentra en los elementos político-partidistas y, segundo, los que privilegian los factores económicos como detonantes de la violencia haciendo énfasis en las amplias desigualdades sociales y en la lucha de clases (Sánchez, 1986).

- c) En cuanto a la relación entre violencia y conflicto estamos de acuerdo con Orlando Fals Borda, cuando señala que “la violencia” puede ser interpretada como una manifestación de un conflicto, como “un síntoma de una revolución social y política” (Fals Borda, 1963, p.407), que para el caso colombiano ha tenido derivas no previstas por la clase social dominante. Lo que en un principio se diseñó como un enfrentamiento calculado dentro de las instituciones por el “goce hegemónico del poder” (Fals Borda, 1963, p. 407) se convirtió en una conmoción social, en un conflicto pleno.

Asimismo, este autor abordó una caracterización del conflicto que desde nuestro punto de vista explica muchas de las dinámicas derivadas del mismo, las relaciones de poder asimétricas sobre las que se asienta y las tensiones existentes entre los grupos hegemónicos y los sectores populares, que buscan disputar el dominio de un campo determinado o en algunos casos subvertir el orden social²¹.

En las producciones de los años sesenta y hasta finales de los años setenta “la referencia a la violencia constituía en sí misma un lugar común” (Pécaut, 1998). La mayoría de las publicaciones fueron una reinterpretación de los aportes presentados en el libro (Sánchez, 1986). Sin embargo, nos parece relevante detenernos en las obras de tres autores que marcan líneas de investigación que serán profundizadas en décadas posteriores²².

²⁰ La necesidad de esta reflexión fue manifestada por los autores al inicio del Capítulo I cuando señalan:

La nación carece de la noción exacta de lo que fue la violencia; ni la ha sopesado en toda su brutalidad aberrante, ni tiene indicios de su efecto disolvente sobre las estructuras, ni de su etiología, ni de su incidencia en la dinámica social, ni de su significado como fenómeno ni mucho menos de su trascendencia en el conglomerado campesino [...]. (Guzmán, Fals Borda, & Umaña, 1963, p. 23)

²¹ Entonces, Fals Borda entiende el conflicto como:

Como un proceso social que se desarrolla cuando dos o más partes tratan de imponer sus valores excluyentes dentro de escasez de posiciones y recursos, con el fin de influir en la conducta de los grupos y determinar así la dirección del cambio social en esos grupos. (Fals Borda, 1963, p. 409)

²² Para Carlos Miguel Ortiz (1992) el vacío de la producción nacional en los años sesenta es cubierta por investigaciones realizadas por científicos norteamericanos de la “Modernización” que estructuran sus preguntas de investigación entre la conformación del Estado-nación y La Violencia o el Estado y La Violencia. Ortiz destaca siete obras por la resonancia que tuvieron en las universidades del país, a saber: *Military rule and the Social Revolution in Colombia* (1959) de Vernon Lee Fluharty, *Colombia, the political dimensions of change* (1967) de Robert Dix, *Toward a Theory of political violence: The case of rural Colombia* (1965) de Robert C. Williamson, *Violence in pre-modern*

Gonzalo Sánchez (1986) destaca de manera particular la relevancia del ensayo *La violencia y los cambios socio-culturales en las áreas rurales colombianas*, escrito por el sociólogo Camilo Torres, en el marco del Primer Congreso Nacional de Sociología realizado en Bogotá en el año 1963. Para el historiador el principal aporte se refiere a que “La Violencia” no solo debía ser comprendida como una forma de dominación de las élites sobre las clases populares, sino que era necesario profundizar en cómo esa dominación generaba una respuesta manifiesta en la resistencia y en la rebelión de los actores subordinados, en particular, en el campesinado. De esta manera, Camilo Torres se adentraba en un análisis sistémico de cambio social a partir de la incidencia que tuvo la violencia política en el quiebre de las dinámicas de la población campesina y en la generación de nuevas formas de articulación sustentadas en la colectividad y en la solidaridad.²³

A mediados de los años setenta, se publicaron otras investigaciones que son importantes reseñar en el estudio del fenómeno de la violencia política en Colombia. En relación a las luchas agrarias y campesinas se destacaron los trabajos de Pierre Gilhodés, *Las luchas agrarias en Colombia* (1972) y *Politique et violence: la question agraire en Colombia 1958-1971* (1974). Entre los aportes relevantes de estos dos trabajos se destaca el análisis que realizó el autor acerca de los tipos de conflictos agrarios en Colombia identificando una tipología de ocupación y uso de la tierra a partir de los nodos centrales de disputa en una perspectiva histórica²⁴.

En una perspectiva diferente, Paul Oquist (1978) en su libro *Violencia Conflicto y Política en Colombia*, publicado a finales de la década de los setenta, estudia el fenómeno de la violencia a partir del análisis de las fases del Estado colombiano desde la época de la colonia y las diferentes problemáticas sociales entendidas en el marco de una relación conflictual entre las diferentes clases sociales. Para Ortiz (1992) la relevancia en la investigación de Oquist radicó en el siguiente planteamiento del autor:

societies: Rural Colombia (1966) de Richard S. Weinert, *Evaluation regime perfomence in a crisis: Violence, political demands and elite accountability in Colombia* (1969) de John Pollock, *Social structure and anomie en Colombia* (1969) de William Monahan y la obra que quizá tuvo más influencia sobre la que volveremos, es el texto *Violencia, conflicto y política en Colombia* (1978) escrita por Paul Oquist.

²³ El autor también introdujo en algunos apartados de su ensayo el tema del espacio en términos de las relaciones de poder que el campesinado construía en la escala local (pueblo, vereda y municipio). Este análisis implicó en su momento una forma revolucionaria de entender los cambios en la sociedad rural colombiana y, a nuestro parecer, abrió nuevos caminos para la investigación de los actores sociales populares, los procesos de resistencia y movilización.

²⁴ Es importante señalar que Gilhodés en el análisis de las políticas del Frente Nacional, se detuvo en las dinámicas de los actores sociales al abordar la reflexión sobre la conformación de las clases, la relación con los partidos políticos, el surgimiento de movimientos políticos alternativos a las ideologías liberal y conservadora, así como las manifestaciones orgánicas de las clases sociales a través de su participación en gremios y sindicatos.

La existencia de los conflictos de clase no está supuesta a priori, con carácter necesario, ni ellos constituyen el único tipo de conflicto que se expresa en la forma de enfrentamiento violento armado a partir de la condición histórica de derrumbe parcial del Estado; pelean conflictos con otros géneros de conflictos, como rivalidades tradicionales entre poblaciones o violencia por el control de las estructuras de poder local, entre otros, y hasta deja abierta la posibilidad de áreas estables de coherencia estatal. (p.7)

Para Oquist (1978) el objeto central que explicaba los fenómenos de violencia en el periodo histórico acotado en su libro se refiere principalmente al derrumbe parcial del Estado debido a la desintegración de las diferentes instituciones que hacen parte del mismo. Aunque la tesis planteada por el autor allanó el camino para plantear nuevos objetos de estudio centrados en el Estado, dejaba de lado un elemento a nuestro juicio de gran relevancia: el referido al estudio de los actores sociales populares y su interacción con las clases dominantes con todos los matices, variaciones y contradicciones que existen en las relaciones de poder.

En el trabajo *Los conflictos y las violencias en Colombia* (2002) elaborado por las académicas María Cristina Palacio, Ana Judith Valencia y María Hilda Sánchez, identifican algunos rasgos comunes en la producción académica de la década de los sesenta y setenta, a saber:

- a) La violencia política se configuró como un objeto de estudio central en las ciencias sociales y, en particular, en la disciplina sociológica. Las investigaciones producidas en este periodo se enfocaron en la búsqueda de variables macroestructurales que permitieran explicar el fenómeno a partir de teorías funcionalistas y marxistas.
- b) Los avances en la caracterización de la violencia política realizados por los investigadores en este primer momento permitirán en estudios posteriores ahondar en la(s) violencia(s) como un fenómeno multivariable tomando distancia de los enfoques unicausales que la asociaban con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y las revueltas populares acaecidas después el 9 de abril de 1948.
- c) En estas investigaciones empiezan a surgir las primeras conexiones entre los factores socio-económicos y socio-políticos haciendo especial énfasis en las relaciones existentes entre la violencia política, la lucha por la tierra, los movimientos campesinos y la actuación del Estado²⁵.

²⁵ Al respecto, Sánchez (1986) identifica dos posturas teóricas: por una parte, los que entendían la violencia como un intento de “refeudalización” del país y, por otra parte, los investigadores que lo interpretaban como un fenómeno asociado a la expansión del sistema capitalista sustentado fundamentalmente en un proceso paulatino de acumulación de tierras a través de la utilización de la violencia como mecanismo para la concentración de riqueza, donde el despojo y la expropiación del campesinado se convierten en prácticas habituales.

Finalmente, apuntar que el libro de *La Violencia en Colombia* evidenció un esfuerzo por dar cuenta de las articulaciones entre lo microsocial y lo macroestructural, en tanto describió las diferentes expresiones regionales de la violencia política. Pero es en los estudios posteriores en donde se profundizaron las relaciones escalares: en particular, las referidas a las luchas agrarias, los movimientos campesinos, los diferentes usos de la tierra, los niveles en los procesos de modernización e industrialización, entre otros elementos.

2.3. El estudio transdisciplinar de la(s) violencia(s) y el conflicto(s)

En la década de los años ochenta la producción académica sobre la temática señalada experimentó un renovado interés entre investigadores provenientes no solo de disciplinas como la sociología sino desde la ciencia política, la economía o la antropología. El despertar de la violencia como objeto de investigación se manifestó no solo en el aumento de la cantidad de publicaciones sino en la calidad de las mismas, en donde se observa una profundización en las preguntas de investigación formuladas en la década anterior, en la diversificación de las miradas y en las técnicas de investigación utilizadas²⁶.

La cambiante realidad social y política del país fue un factor decisivo en el trabajo de las ciencias sociales. Era necesario encontrar explicaciones a los nuevos fenómenos y problemáticas surgidas en las décadas anteriores que permitieran entender las nuevas dinámicas de la(s) violencia(s) y el conflicto(s) así como la consolidación y surgimiento de nuevos actores involucrados en la disputa por el control político y territorial.

En la década de los ochenta, el país se encontraba en una coyuntura política marcada por los siguientes hechos. Primero, los movimientos guerrilleros que se constituyeron en los años sesenta y setenta se encontraban en un momento de expansión militar y política, implementaron estrategias para ampliar el radio de influencia y actuación de las zonas rurales al ámbito urbano. En los espacios urbanos los movimientos insurgentes reforzaron su presencia en los barrios

²⁶ No obstante, una parte importante de los trabajos elaborados en este periodo estudian el fenómeno de La Violencia, pero con una mirada renovada y con nuevas preguntas de investigación que permiten comprender la complejidad del fenómeno.

populares, pero también en espacios en donde confluían las clases medias, en particular, en las instituciones de educación superior²⁷.

Segundo, el país experimentó una generalización de la violencia relacionada no solo con el enfrentamiento armado entre los diferentes grupos guerrilleros y el Estado, lo que se ha denominado la violencia política, sino con la consolidación de nuevas dinámicas violentas derivadas de la expansión de la economía de la droga. Tercero, se gestan los primeros grupos paramilitares, se extiende el fenómeno del sicariato y aparecen nuevos actores en los escenarios de violencia (Ortiz 1992, p. 9). Cuarto, la política gubernamental sobre el manejo de la violencia política cambió con la elección del candidato del Partido Conservador, Belisario Betancur (1982-1986), quien reconoció la existencia de un conflicto armado interno y la necesidad de tramitar su resolución a través de un “proceso de paz”²⁸.

De esta manera, la transformación en las dinámicas de la(s) violencia(s) y el conflicto(s) se reflejó en los estudios de las ciencias sociales, que se vieron interpelados en la necesidad de dar respuesta a la conflictividad social y a la nueva coyuntura política.

Gonzalo Sánchez (1986) señaló de manera precisa las diferentes tendencias de las investigaciones que se venían desarrollando desde los años setenta y que se centraron principalmente en abordar las continuidades y discontinuidades con respecto a la época de La Violencia. Por una parte, se encuentra una línea de investigaciones que pasaron de entender el periodo de La Violencia como un momento en el contexto político colombiano a “una perspectiva de larga duración en la cual el fenómeno se proyecta como un elemento estructural de la evolución social y política del país” (Sánchez, 1986, p. 21). En este sentido, se comenzó a indagar por las diferentes relaciones entre la violencia y la estructura de la propiedad agraria, los diferentes actores implicados en el conflicto y la continuidad de la guerra a pesar de la finalización del enfrentamiento armado entre liberales y conservadores.

²⁷ Las universidades públicas eran de los pocos espacios de reflexión crítica en donde los movimientos guerrilleros de corte más urbano establecieron puentes con una clase media intelectual. Además de la guerrilla de las FARC-EP, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Ejército Popular de Liberación (EPL), es importante señalar otros movimientos con una carga simbólica importante como fue el Movimiento Armado Quintín Lame, única guerrilla indígena en América Latina, que realizó su primera acción militar a mediados de los años ochenta. El Movimiento de Integración Revolucionario – Patria Libre (MIR), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Autodefensa Obrera (ADO),

²⁸ Una de las obras de referencia para el análisis de este periodo es *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y consolidación, el caso Puerto Boyacá* de Carlos Medina Gallego (1990).

Una segunda tendencia que identificó este autor es el tránsito de estudios totalizantes a investigaciones de corte regional y territorial en los que se podían identificar dos líneas de análisis: primero, los trabajos que se centraban en las relaciones existentes entre la estructura de clase, la estructura agraria y los conflictos sociales en una región o subregión determinada con una perspectiva histórica y los que relacionaban las diferentes escalas espaciales: local, regional y nacional. Este tipo de trabajos permitieron entender los cambios espaciales de la conflictividad social alejándose de los enfoques globalizantes sobre la violencia.²⁹ Un segundo grupo de investigaciones “combina unidad temática y perspectivas regionales” (Sánchez, 1986, p. 23) que evidenciaron los diferentes tipos de violencias presentes en el periodo de La Violencia (Pécaut, 1998).

Es así como se abre camino al análisis de otros tipos de procesos presentes en ese periodo que no se podían explicar de manera unicausal bajo el paraguas de la violencia política en el marco del enfrentamiento armado partidista. La investigación que tuvo mayor relevancia fue *Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de la violencia en Colombia* (1984) de Gonzalo Sánchez y Donny Meertens. En este trabajo, los autores se dieron a la tarea de entender el fenómeno socio-político del bandolerismo rural desde sus inicios, apartándose de las explicaciones que lo consideraban como una patología social o como una consecuencia más de la violencia partidista³⁰.

A mediados de los años ochenta, Daniel Pécaut (1986) al igual que Gonzalo Sánchez señalaron la enorme complejidad de los fenómenos sociales relacionados con la(s) violencia(s) y el conflicto(s). En los estudios realizados hasta ese momento los autores llamaron la atención acerca de las diferentes dinámicas dependiendo del territorio o de la escala espacial en la que se sitúe el estudio. En este sentido, los fenómenos de la violencia (utilizando la terminología de Pécaut) se transformaban no solo de la nación a la región sino incluso en escalas mucho más micro, como puede ser de vereda a vereda, o de municipio a municipio. Estas variaciones se relacionaban con múltiples variables: los actores que tenían presencia en el territorio, los intereses partidistas,

²⁹ En este primer grupo de investigaciones Sánchez (1986) destaca el trabajo de Darío Fajardo sobre las dinámicas de la violencia y la transformación de la propiedad agraria, *Violencia y Desarrollo* (1979). La investigación de Jaime Arocha, *La Violencia en el Quindío* (1979).

³⁰ Otros trabajos relevantes en la correlación entre unidad académica y los estudios regionales son *Estado y subversión en Colombia* de Carlos Miguel Ortiz (1985) y *Orden y violencia: Colombia 1930-1953* Daniel Pécaut (1987). Los dos estudios abordan una perspectiva pluridimensional para el estudio de la violencia. El trabajo de Pécaut representa una de las obras más completas sobre la conformación del Estado en Colombia.

las dinámicas de producción económica, que afectaban de diferente manera la distribución de la propiedad o el excedente económico que se genera en esas configuraciones locales.

Los análisis con perspectiva espacial que emergen en esos años introducen nuevas variables y cambian las preguntas de investigación en la medida que toman distancia de las interpretaciones totalizantes y verticales de las problemáticas asociadas a los diferentes tipos de violencia, en las que se presentaba una tendencia a desconocer/obviar las particularidades territoriales y las visiones de otros actores sociales diferentes a los ligados a la institucionalidad estatal a escala nacional³¹.

2.4. La Comisión de Estudios sobre la Violencia

Al finalizar la década de los ochenta, el gobierno nacional bajo el mandato del presidente Virgilio Barco, creó la Comisión de Estudios sobre la Violencia (1987). Esta Comisión al igual que el libro de *La Violencia en Colombia*, representó un punto de inflexión en los estudios sobre la problemática señalada.

Por una parte, el libro de Guzmán y Fals Borda se elaboró como iniciativa de algunos investigadores asociados a la universidad pública, en el contexto del Frente Nacional, mientras que el trabajo de la Comisión fue promovido por el gobierno con el objetivo de hacer un análisis del fenómeno desde la experticia de los académicos y encontrar posibles salidas a la compleja realidad social. Esta iniciativa gubernamental representó “un reconocimiento de la existencia de un problema estructural por parte de la élite política y de la existencia de un problema complejo por parte de los académicos, pero, como es conocido, ninguna de sus recomendaciones fue puesta en práctica” (Sandoval, 2014, p. 106).

³¹ Al respecto, nos parece importante señalar los trabajos realizados entre el género periodístico y literario del sociólogo Alfredo Molano, en los que a partir de los relatos de las comunidades señala las especificidades regionales de las dinámicas del conflicto armado y expone las configuraciones de la(s) violencia(s) en los territorios, en los diferentes momentos históricos. Entre las obras del autor se destacan: *Los años del tropel: relatos de la violencia* (1985), en el que se adentra en la guerra y el despojo posterior al 9 de abril de 1948; *Siguiendo el corte: relatos de guerras y de tierras* (1989), obra en la que aborda la conformación de las primeras guerrillas en contra del gobierno conservador; *Aguas Arriba. Entre la coca y el oro* (1990) sobre la colonización en la Orinoquía; *Trochas y fusiles* (1994), en este libro se adentra en las razones políticas y sociales que han perpetuado el conflicto armado, desde la narración de algunos de sus protagonistas; *Ahí les dejo esos fierros* (2009), obra en la que rescata los relatos de aquellos que han participado en el conflicto, en uno u otro bando; *A lomo de mula* (2016), en el que el autor reconstruye los orígenes de las FARC. La obra de Alfredo Molano es mucho más extensa y prolífica, pero las obras señaladas son representativas del trabajo realizado por el autor, en donde el centro son las narraciones de las víctimas y victimarios del conflicto. De esta manera, contribuye a la construcción de la memoria “desde abajo”, a diferencia de otras perspectivas más institucionalistas.

Producto del trabajo de la Comisión liderada por el historiador Gonzalo Sánchez se publicó el libro *Colombia, violencia y democracia* (1987). Aunque las recomendaciones consignadas en el informe no fueron adoptadas por el gobierno, la investigación en sí misma realizó un aporte fundamental para entender la forma en que la violencia política había mutado hacia diferentes violencias y con distintas expresiones territoriales.

Palacio, Hoyos & Jiménez (2002) apuntan a los siguientes avances en términos de la caracterización y de la constitución de la(s) violencia(s) como objeto de estudio:

- a) El cambio acelerado de las dinámicas asociadas a la violencia en las dos décadas anteriores implicó una nueva caracterización del fenómeno. Para la Comisión la violencia política, referida a la violencia partidista y al enfrentamiento entre el Estado y los actores armados ilegales, debía ser diferenciada de otros tipos de violencias como la socioeconómica, la sociocultural, la socioambiental, la sicosocial con diferentes expresiones territoriales. La propuesta analítica de la Comisión era abordar el fenómeno desde la multidimensionalidad y multicausalidad incorporando nuevas variables e indicadores a los estudios. A partir del trabajo de la Comisión “se empieza a hablar de violencias, en plural” (Ortiz, 1992, p. 12).
- b) El Estado centró sus políticas en atender los fenómenos asociados con la violencia política y el combate con el narcotráfico. La focalización solo en esta arista del fenómeno impidió la actuación estatal en otras dimensiones de la violencia coadyuvando al crecimiento de otras problemáticas que alimentaban la profunda crisis social. El informe de la Comisión develó las nuevas dinámicas de la violencia que se gestaron en los territorios, la mutación de los actores “tradicionales” que participaban en el conflicto armado, la aparición de nuevos actores de la violencia y las distintas articulaciones, organizaciones y redes que sustentaban su accionar (paramilitares, autodefensas, sicarios, crimen organizado, movimientos guerrilleros)³².
- c) La emergencia del fenómeno de la urbanización de la violencia. La Comisión evidenció los cambios espaciales en las dinámicas de los actores armados ilegales, así como nuevos patrones de actuación del crimen organizado y de la delincuencia común. Las ciudades se convirtieron en espacios de enfrentamiento y de disputa, no solo referida a la violencia política sino a otras expresiones.

³² Ortiz (1992) señala que La Comisión “rompe el discurso dominante hasta entonces, tanto el discurso oficial como el discurso alternativo, que sobredimensionaban la violencia política” (p.12).

- d) La Comisión abrió un espacio de reflexión para entender las nuevas formas de articulación entre la violencia política organizada y la violencia desorganizada, guiada por intereses particulares. Estas relaciones implicaban “la configuración de un nuevo orden en el cual se estructura una red de poder que, al expandirse, pone en evidencia la debilidad del Estado y la vulneración del orden social, invisibilizando las fronteras entre lo político, lo económico y lo social” (Palacio et al., 2002, p. 43). En relación con este último elemento y debido a la complejidad de las relaciones que sustentaban los diferentes tipos de violencia, la Comisión introdujo el concepto de conflicto interno armado, que permitió el tránsito académico de la violencia política a un nuevo marco teórico que diera cuenta de las diferentes dinámicas que se estructuraron en el país a partir de la década de los setenta.

El trabajo realizado por la Comisión permitió organizar el debate académico sobre la violencia con una perspectiva histórica. El análisis de la violencia organizada no se circunscribía solamente a las posibles correlaciones con las tensiones sociales preexistentes, al periodo denominado La Violencia³³. Asimismo, allanó el terreno para investigar el efecto de las distintas violencias y del conflicto armado interno sobre el tejido social a partir de los costes socio-económicos, el deterioro de la calidad de vida de las comunidades con grandes diferencias entre los territorios y el surgimiento de nuevos polos de poder en el campo social, político y económico.

2.5. La violentología. Periodo 1990-2000

En la década de los noventa, a las categorías de análisis de la(s) violencia(s) y del conflicto armado interno se sumó una nueva línea de investigación referida al concepto de guerra civil interna, una de las disertaciones que defendían esta categoría se encuentra en Ramírez (2000)³⁴. La introducción de esta nueva categoría a los estudios académicos sobre “violentología” en el país se debió fundamentalmente a que la realidad nacional y territorial requería otros caminos para comprender su complejidad. Ahora bien, una característica importante de este periodo en la producción académica se relaciona con la forma de abordar el objeto de estudio de la violencia y

³³ La aparición y consolidación de dinámicas y actores llevó a plantear nuevas preguntas de investigación relacionadas con el control de los polos de producción de diversas riquezas y con estudios geográficos que permitieran entender las relaciones de poder que se estructuraban en esos espacios (Pécaut, 1997).

³⁴ En un artículo posterior, Eduardo Pizarro (2002) profundiza en las diferentes caracterizaciones del conflicto en Colombia a la luz de los enfrentamientos armados en otras latitudes.

el conflicto armado, los académicos buscaban encontrar las causas objetivas de estos dos fenómenos sociales.

El concepto de conflicto armado interno acompañado de los primeros intentos de procesos de paz con los grupos insurgentes colocó sobre la mesa categorías subsidiarias como negociación, derechos humanos, amnistía, desplazamiento forzado, paz y por supuesto la idea de guerra³⁵, que fue acuñada solamente para los conflictos ocurridos a principios del S. XX³⁶.

Sandoval (2014) señala que para este periodo “las temáticas se centran en las expresiones de la violencia en las regiones, las dinámicas de los conflictos, las migraciones, las relaciones interétnicas, los procesos urbanos y políticos locales”. (pág. 107). En la apertura a los estudios regionales acerca del conflicto es de destacar los aportes que desde la antropología se realizaron consolidando las metodologías propias de esta disciplina como el análisis de los discursos, las historias de vida, la construcción de narrativas y las diferentes percepciones desde las comunidades sobre el impacto de la guerra en sus territorios. Estos estudios permitieron establecer la cronología de las dinámicas del conflicto en términos de las continuidades y las discontinuidades del mismo tanto en las zonas rurales como en el ámbito de las ciudades³⁷.

En este sentido, se renovaron las preguntas de investigación sobre los efectos del conflicto armado interno en la escala local y en la vida cotidiana de la población civil colocando especial énfasis en los procesos relacionados con el desplazamiento forzado interno; la reconfiguración de los territorios debido a las dinámicas de desalojo de la tierra, del uso y apropiación de los recursos a través de la utilización por parte de los grupos armados de mecanismos coercitivos como el pago de vacunas, secuestros, retenciones, paros, amenazas a la población, controles de movilidad al interior de las regiones; el reclutamiento de menores y la sistemática persecución a líderes y lideresas de organizaciones comunales, cívicas y sociales que generaban algún tipo de resistencia

³⁵ En este periodo se destacan los aportes realizados a la reflexión acerca de la dimensión jurídica y ética del conflicto armado y sus implicaciones en las dinámicas del mismo y en un eventual proceso de negociación con los grupos insurgentes. Se colocó en la agenda política los análisis relacionados con el Derecho Internacional Humanitario y los Protocolos de Ginebra. Los aportes más significativos fueron realizados por Hernando Valencia Villa (1987, 1991, 1993), Iván Orozco (1992) Álvaro Villarraga (1998).

³⁶ En este periodo se profundizaron los estudios regionales, se conformaron nuevas facultades de sociología y ciencia política y centros de investigación en diferentes regiones lo que permitió profundizar sobre las dinámicas de la violencia en otras escalas espaciales distintas a la nacional y del Estado.

³⁷ En el análisis de la violencia urbana se destacan los libros *Colombia, Ciudad y Violencia* de Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán (1990) sobre el fenómeno del sicariato en Medellín y *No nacimos pa' semilla* de Alonso Salazar (Salazar, 2018). Estas dos investigaciones fueron elaboradas a partir de las narrativas de los actores sociales.

a los proyectos territoriales de los actores armados; a la violencia endémica del conflicto se sumó la acción de la delincuencia común y del narcotráfico. Por otra parte, la consolidación del proyecto paramilitar llevó a los académicos a perfilar los objetos de estudio para abordar este fenómeno desde diferentes perspectivas³⁸.

En este sentido, es importante recordar que la década de los noventa comenzó con dos hechos significativos para el país. Por una parte, la promulgación de una nueva carta constitucional que amplió los mecanismos de participación política y reconoció una serie de derechos especialmente a poblaciones que habían sido tradicionalmente excluidas de la construcción del Estado-nación. Por otro lado, el fracaso de la negociación política entre el gobierno de César Gaviria (1990-1994) y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).

En este contexto, la Revista Análisis Político del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, cobra especial relevancia debido a que la publicación incluye un amplio espectro de reflexiones que van desde la periodización y los estudios clásicos de la violencia en Colombia, hasta las reflexiones sobre otras incidencias en este fenómeno. Ortiz destaca los aportes de Eduardo Pizarro en relación con el análisis histórico de las Fuerzas Armadas, en tanto, era la primera vez que se realizaba un estudio sobre esta institución que incluyera reflexiones sobre la capacidad militar, los costos de la confrontación y la estrategia de acción (Ortíz, 1992)³⁹

Pécaut (1998) señala los extensos aportes de la revista en temas de reformas políticas (ancladas principalmente a la constitución de 1991): “las limitaciones y perversiones del funcionamiento democrático como factores de la violencia”, las distribuciones regionales de la violencia que caracterizan también el conflicto armado, el papel de los actores en el fenómeno de la violencia y, las “estrategias gubernamentales frente a la violencia” (pp. 75-76). No obstante, advierte los vacíos teóricos que existen cuando se habla de integración política, y también pone en

³⁸ El libro de Mauricio Romero *Paramilitares y Autodefensas 1982-2003* (2003) es una de las investigaciones que ha permitido entender la complejidad de este fenómeno. El autor aborda el surgimiento y consolidación del paramilitarismo desde una perspectiva multicausal en la que establece las diferentes interacciones entre estos grupos y el Estado, tanto en el ámbito nacional como regional. Para el análisis tiene en cuenta el contexto marcado por la modernización del Estado, los procesos de paz entre las guerrillas y los diferentes gobiernos, la descentralización y la elección de alcaldes y gobernadores. En la investigación, el autor señala el carácter reactivo de los paramilitares y autodefensas frente a las reformas de profundización de la democracia.

³⁹ En la misma línea de estudio, se encuentra el trabajo Elsa Blair *Las fuerzas armadas. Una mirada civil* (1993) y el de Francisco Leal *El oficio de la guerra. La seguridad nacional en Colombia* (1994).

duda la natural aseveración que por entonces se hacía sobre la democracia como la “salvación” o la cura definitiva al fenómeno de la violencia⁴⁰.

Por otra parte, en este periodo también se publicaron estudios en los que se abordaban las implicaciones del conflicto armado en la estructura económica del país, en particular, los costes económicos de la guerra. Entre las investigaciones se destaca *El conflicto armado: la estrategia económica de los principales actores y su incidencia en los costos de la violencia 1990-1998* de Castro, Arabia, y Celis (2000).

En este periodo, también es importante reseñar el libro *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia* de Deas y Gaitán (1995). En esta investigación los autores abordan las causas de la violencia en Colombia, los componentes regionales, las diferentes expresiones de la violencia en el ámbito privado, y un acercamiento analítico a las relaciones entre guerrilla y narcotráfico.

Por último, cabe resaltar los intereses que se empiezan a abrir en la producción académica de tesis de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional con sede en Bogotá a finales de la década de 1980. Ortiz (1994) señala a este respecto que aunque es un tímido intento (de acuerdo a las once tesis consultadas en el periodo de 1971 a 1991) da cuenta, sin embargo, de un interés creciente desde la Universidad por el estudio de la violencia política.

2.6. Estudios de la memoria y el horizonte cercano de la paz

La primera década del 2000, estuvo signada por el proceso de negociación fallido entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC-EP. El fracaso de los diálogos, facilitó la llegada de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) a la Presidencia de la República. Este gobierno se caracterizó por una fuerte ofensiva contra el movimiento insurgente enarbolando el discurso de la seguridad democrática (Buitrago, 2004, p. 88).

En este contexto, las investigaciones académicas abordaron desde una perspectiva histórica y política el desarrollo de los actores armados con el objetivo de comprender las viejas y nuevas dinámicas de la guerra.

⁴⁰ Al respecto, Pécaut apunta a que “la idea de la democratización no puede ser considerada como un remedio milagroso para la violencia y ésta no se debe resumir como una demanda de democratización” (Pécaut, 1998, p. 82).

Al respecto, nos parece relevante señalar la obra colectiva *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia* editado por el IEPRI (2006)⁴¹. Este compendio de investigaciones, se centró en analizar la evolución del conflicto en correlación con los cambios políticos, sociales y económicos, con el objetivo de establecer cómo estas transformaciones del Estado y de la sociedad, interactuaron con las dinámicas y actores del conflicto. Para ello, se establecieron diferentes ejes de análisis: primero, la internacionalización de la guerra, en particular, la relación con la geopolítica de Estados Unidos y de la Unión Europea, y la regionalización del conflicto; segundo, la articulación entre el Estado, el régimen político y la guerra, en donde se prestó especial atención al narcotráfico, los procesos de descentralización, y las políticas de desarrollo sustentadas en la explotación de recursos naturales; tercero, los análisis cuantitativos de los ciclos de la guerra; y, cuarto, los actores armados, las dinámicas y estrategias de la guerra⁴².

En este último eje analítico, se destacan el análisis de Eduardo Pizarro (2006) sobre las FARC-EP. En el texto, el autor abordó la situación de la guerrilla después de la ruptura del proceso de negociación con el gobierno de Andrés Pastrana y la ofensiva militar en el marco del Plan Colombia y de la Política de Seguridad Democrática, del presidente Uribe Vélez. Por su parte, Mario Aguilera se adentró en la historia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El autor abordó las particularidades de este movimiento insurgente con respecto a otras expresiones guerrilleras, para explicar su supervivencia, en oposición de los pronósticos del declive del ELN que hacían por entonces los analistas del conflicto: “su cohesión interna, forjada en buena parte a partir de unas nociones marxistas-cristianas, y el capital político que pudo haber acumulado en casi dos décadas de ejercicio de su denominada estrategia de poder popular o poder de doble cara” (Aguilera M., 2006, p. 119)⁴³.

⁴¹ Algunos de los investigadores que participaron en esta publicación fueron: Mario Aguilera, Francisco Gutiérrez, Ricardo Peñaranda, Eduardo Pizarro, Socorro Ramírez, Luis Alberto Restrepo, Diana María Rojas, Gonzalo Sánchez, María Emma Wills, entre otros.

⁴² Entre los trabajos a resaltar en este periodo se destaca el informe realizado para el PNUD *El conflicto, callejón con salida*, elaborado por Hernando Gómez Buendía, Carlos Vicente de Roux y Marc-André Franche. (2003) y el libro *Violencia política en Colombia: de la nación fragmentada a la construcción del Estado* Fernán, González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vázquez (2003).

⁴³ El uso de entrevistas a militantes del ELN, enriquece el recuento histórico que hace el autor sobre este grupo guerrillero. Tanto así que se llega a un profundo planteamiento de la ideología del ELN, que bebe de las fuentes del marxismo-cristiano y de la influencia emblemática de Camilo Torres, principalmente bajo los derroteros de la llamada Teología de la Liberación. (Aguilera M., 2006).

Este tándem es completado por el análisis realizado por Francisco Gutiérrez y Mauricio Barón (2006) sobre el control territorial de los grupos paramilitares y el orden político colombiano. El artículo tenía como objetivo reflexionar sobre los factores que intervinieron en la conformación del paramilitarismo y la manera en que estas estructuras transformaron el Estado colombiano “nos interesa comprender cómo y por qué tales estructuras y el orden político coevolucionaron, y la forma en que esa evolución se relaciona con un tipo de provisión de seguridad ofrecida por el Estado y otros actores” (p. 152).

Por otra parte, el análisis sobre las FARC es completado por Mario Aguilera en un trabajo posterior (2013) en el que indagó sobre los cambios en los repertorios de confrontación de esta organización. En este libro, Aguilera planteaba el análisis de la estrategia de guerra e insurreccional de las FARC, en particular, en la Guerra Popular Prolongada (GPP) y en la Guerra Insurreccional (Aguilera, 2013, p. 87).

En año 2013, el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó el informe general del grupo de Memoria Histórica *¡Basta Ya!* Colombia: *Memorias de Guerra y Dignidad*. En este trabajo se condensó una amplia cantidad de reflexiones que buscaban abordar el tema del conflicto armado desde las construcciones teóricas y las reflexiones sobre la memoria. Este enfoque es característico en las dos primeras décadas del nuevo siglo, sobre todo en estos intentos como el del CNMH, en busca de un horizonte de paz, y en respuesta al cuestionamiento de cómo construirlo.

Al respecto, el director del CNMH sentenciaba en el informe: “La memoria se afincó en Colombia no como una experiencia del posconflicto, sino como un factor explícito de denuncia y afirmación de diferencias” (GMH , 2013, p. 13); las víctimas vienen a ser el centro de atención ahora en lo que compete al estudio de la violencia en Colombia. La memoria es importante como un factor dinámico que busca reparar y reconciliar las experiencias traumáticas que ha dejado la guerra. En este marco, el Informe desarrolló toda una construcción de memorias que no es vista como un lienzo en el que se fijan los hechos del pasado, sino como algo que se construye por los sujetos que viven esas experiencias (enmarcadas, definidas por la violencia) y que, por lo tanto, son potenciales agentes en la historia.

El Informe abarca un periodo amplio de análisis, de 1985 al 2012. Los autores de la investigación recurren a diferentes fuentes bibliográficas (prensa, archivos legales, fuentes secundarias), análisis de estadísticas y testimonios de los actores del conflicto. Pero hay algo

llamativo en este documento, que no deja de ser espeluznante, y es el denominador común que tienen los capítulos que lo conforman: el terror.

Diremos entonces que estamos ante un estudio descarnado en testimonios, relatos en primera persona de las víctimas que padecieron el terror de la guerra. No obstante, además del recorrido histórico que se hace en este documento, también se resalta la evolución del sistema jurídico y los cuestionamientos latentes a la construcción de una justicia transicional en Colombia.

En esta misma línea de estudios sobre la memoria, se abrieron paso trabajos como el de Cepeda y Girón (2004) que introdujeron desde entonces los temas de la verdad y la justicia en el marco de las negociaciones sobre el conflicto armado. Los autores argumentaron que “todo camino de superación real de la violencia y la guerra debe tener un carácter público (transparencia) y procesal (esclarecimiento)” (Cepeda & Girón, 2004, p. 53). Aquí estamos frente a una línea de producción académica que se apoya en el corpus teórico del derecho internacional humanitario. Son uno de esos textos que nos van a introducir a los conceptos de “crímenes de guerra” y “crímenes de lesa humanidad”, conceptos tales que caracterizarán el discurso en estas dos primeras décadas del siglo de las organizaciones políticas y sociales, así como de las defensoras de una salida negociada del conflicto⁴⁴.

En estos análisis la memoria es entendida como un deber del Estado: “al Estado le corresponde, como parte del derecho a saber, el “deber de recordar”, es decir, la obligación de garantizar las condiciones para el debate social acerca de los crímenes del pasado que evite en el futuro su revisión o su negación parcial o total” (Cepeda & Girón, 2004, p. 64). En esta medida, hay un claro reclamo para que la verdad sea construida entre todas las víctimas, evitando de esta manera los relatos parciales.

Para finalizar este apartado es de relevancia destacar toda la producción del CNMH, a la que recurrimos a lo largo de esta investigación, no solo por la calidad de sus aportaciones sino porque abre un espacio importante de reflexión en donde la voz de los agentes subalternos, sus vivencias, temores y luchas, son expresados y divulgados a toda la sociedad, desafiando la retórica dominante del conflicto. Por otra parte, los trabajos de investigación realizados por esta institución, contribuyen a la comprensión espacial de los conflictos, a entender las especificidades de las

⁴⁴ En este campo de estudio rescatamos también el trabajo de Angelika Rettberg *Buscar la paz en medio del conflicto, un propósito que no da tregua: un estudio de las iniciativas de paz en Colombia* (2006), enfocado en la construcción de paz y sus relaciones con la sociedad civil, en el contexto de las nuevas negociaciones entre las FARC y el Gobierno colombiano.

dinámicas armadas en los territorios y a la realización de análisis multiescalares en donde la escala del cuerpo y de la experiencia cobran especial relevancia, así como los impactos diferenciales de la guerra en términos de género, étnicos y de clase.

2.7. La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CMHV): discusiones recientes sobre la implementación del Acuerdo

“La comisión de expertos”, como se conoce informalmente a la CMHV, resulta en un compilado extenso de académicos renombrados que durante su trayectoria han trabajado profundamente el conflicto armado en Colombia⁴⁵. Quisiéramos terminar este recorrido con este trabajo, ya que a nuestro parecer condensa las discusiones heterogéneas en las que desencadenan los actuales estudios sobre la violencia en Colombia. A puertas de la esperada firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno Nacional, surgió en el 2015 este proyecto colectivo que pretendía dilucidar el origen, las causas y las condiciones del conflicto en el país, desde las diferentes perspectivas académicas.

La génesis del conflicto y sus causalidades son el eje que mueve los capítulos que conforman este trabajo. En este sentido, se perciben dos posturas: la primera articula los acontecimientos históricos relacionados con el conflicto armado al sistema capitalista que genera las condiciones para la reproducción de la violencia; la segunda, se aleja de la anterior postura estructuralista y le daba mayor preponderancia a los “comportamientos voluntarios y deliberados de sujetos individuales o grupales” (De Zubiría & Estrada, 2015, p. 15). Vemos así la más general dicotomía (estructura-agencia) que emana de los ensayos allí compilados, y que el relator del documento identifica bien con las nociones sociológicas de Touraine (en donde predomina la característica de la agencia en los sujetos, más allá de estar “sometidos” por los sistemas sociales) (De Zubiría & Estrada, 2015, p. 14). Por esto mismo este trabajo fue un intento por reunir la gran variedad de perspectivas históricas, económicas y sociológicas sobre el conflicto armado.

⁴⁵ En estas aproximaciones encontramos características particulares del conflicto armado, de las que parten los autores para exponer, el devenir de la violencia en el país. Es el caso de Renán Vega, quien destaca de manera directa la injerencia de los Estados Unidos; o el problema de la tierra, principalmente desarrollado por Alfredo Molano; o las falencias del Estado colombiano al momento de velar por los derechos de la gente, trabajado por Javier Giraldo; o la incipiente acumulación capitalista que plantea unos condicionamientos específicos para la reproducción de la guerra, argumentado por Javier Estrada.

El investigador Víctor Manuel Moncayo, relator del compilado, sostiene que los orígenes del conflicto y de las violencias en Colombia están directamente relacionadas con la conformación del Estado y el sistema capitalista. Al respecto, afirma:

Esas guerras y conflictos del siglo XIX están directamente asociadas al proceso histórico de conformación de un Estado nacional, como dirección esencial del orden capitalista, que dejaron su huella específica en nuestras estructuras sociales y políticas, y que explican en buena medida los acontecimientos que han de desplegarse a lo largo del siglo XX y que, inclusive, aún perduran. (De Zubiría y Estrada, 2015, p. 38)

En esta línea, Jairo Estrada es enfático desde el comienzo: “contrainsurgencia y subversión son inherentes al orden social capitalista imperante en nuestro país” (De Zubiría y Estrada, 2015, p. 253). Este orden social, para el autor, se intensificó a partir de la década de 1920, y fue un factor determinante para la reproducción de la violencia a partir de entonces. Este autor se adhiere a las tesis estructuralistas al plantear que las causas del conflicto se encuentran en las dinámicas perversas del capitalismo. Por otra parte, cabe señalar que Estrada, es muy crítico con aquellas posturas que, a finales de los noventa, proponían una suerte de despolitización de la lucha guerrillera, argumentando que la insurgencia por entonces ya no tenía una causa social o “altruista”, sino que limitaba su accionar a la consecución de la codiciada economía del narcotráfico. (De Zubiría y Estrada, 2015, p. 303). Estrada plantea que este tipo de posturas pretenden despolitizar el conflicto e ignorar “la importancia de la lucha por la tierra [...] ignorar los condicionantes histórico-sociales del caso colombiano” (De Zubiría y Estrada, 2015, p. 305).

La literatura reciente sobre el conflicto social y la rebelión armada da cuenta de una diversidad de enfoques metodológicos y teóricos que se están gestando en la academia alrededor de las causas y continuidades del conflicto⁴⁶. Pero los debates que se abren en este sentido tienden a orientar las discusiones hacia un esclarecimiento de la verdad que, así como la memoria o la justicia, o la reparación se considera uno de los pilares para la superación del conflicto en Colombia.

⁴⁶ Característicos de esta época son también los estudios de caso alrededor de la violencia en Colombia. Ejemplo de ello es el libro de Restrepo y Aponte *Guerra y Violencias en Colombia: herramientas e interpretaciones* (2009). Se destaca aquí el uso de fuentes de información públicas como la CERAC (Centro de Recursos de Análisis para el Conflicto) que desde el 2002 reúne información importante sobre la violencia en el país. Así como también, los estudios de caso que conforman la segunda parte del libro, en los que más que un análisis global de las causas y continuidades del conflicto, se tratan temas concernientes a la economía del conflicto, la violencia de género y la violencia sexual, la pobreza, el desplazamiento forzado y el paramilitarismo.

2.8. Una breve referencia al análisis del conflicto armado desde la Geografía Política.

En los anteriores apartados señalamos algunos de los principales estudios sobre la violencia(s) y el conflicto(s) en Colombia, algunos de los cuales adoptaron una visión más territorial, estableciendo las diferencias espaciales en las dinámicas de la guerra. En los años noventa, surgieron diferentes estudios que centraron sus análisis en la escala regional y local, desplazando la mirada del Estado-nación, y recuperando otros objetos de estudio. En este marco, se puede situar el trabajo de Alejandro Reyes “*Geografía de la Guerra*” (Reyes A. , 1999), en el que hacía un análisis cartográfico de las expresiones del conflicto armado, con el objetivo de encontrar las correlaciones entre los diferentes actores ilegales, el narcotráfico y los procesos de concentración de la tierra⁴⁷. A partir del trabajo de Reyes se publicaron diferentes estudios analizando la relación entre sociedad, territorio y conformación del Estado-nación.

Es importante señalar el aporte a la perspectiva espacial desde los centros de investigación de las universidades regionales, en particular, nos referimos al Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, que ha trabajado desde diferentes enfoques y metodologías el análisis geográfico del conflicto.

Por otro lado, el CINEP ha proporcionado una importante base de datos donde se encuentran publicaciones en las que se analizan las dinámicas del conflicto armado. Algunos de los grupos de investigación vinculados a este centro, han desarrollado en los últimos años un trabajo de análisis desde enfoques cercanos a la geografía política.

A este respecto, es de destacar la producción del Observatorio Colombiano para el Desarrollo, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional (ODECOFI), en particular, los aportes de Fernán González (2009, 2014). Para este autor, las dinámicas de configuración del poder territorial y su relación con la violencia, se entienden a partir de lo que ha denominado la “presencia diferenciada del Estado en el espacio y el tiempo”. Este concepto aborda la construcción de las instituciones estatales a partir de la organización interna, de las formas y momentos de poblamiento, y de la articulación de las regiones a la centralidad. Por consiguiente, la construcción diferenciada del Estado en los territorios se ha visto confrontada con la evolución

⁴⁷ El trabajo de Reyes tenía imprecisiones en relación con la representación cartográfica y la utilización del municipio como referencia, sin tener en cuenta las diferencias contextuales entre los mismos, pero representó un nuevo enfoque en el análisis del conflicto.

de los actores armados ilegales (guerrilla y paramilitares) y las alianzas y articulaciones con las élites regionales para el control de los territorios.

En esta perspectiva de análisis espacial del conflicto se inscriben autores como Camilo Echandía (2006, 2013, 2017) y Luis Gabriel Salsas (2010, 2016) que analizan los procesos de expansión territorial de los actores armados ilegales, guerrilla y paramilitares, y el Estado identificando las diferencias e intensidad del conflicto en los diferentes territorios. Al respecto, se destacan los aportes sobre control de posiciones estratégicas geográficas que garantizan la supervivencia de los actores y la continuidad de la guerra. En sus investigaciones establecen las posibles correlaciones entre la expansión de las guerrillas, los grupos paramilitares y de la violencia con las dinámicas de la economía de la droga.

Al respecto, Camilo Echandía señala cómo la geografía de la guerra se relaciona con el control de determinados recursos estratégicos, que permiten mantener del pulso al Estado por parte de los actores armados irregulares, para el caso del movimiento insurgente el autor señala:

La guerrilla logró extenderse a los centros político-administrativos más importantes del país y desarrollar actividades armadas en zonas petroleras, mineras, de cultivos ilícitos, fronterizos y con importante actividad agropecuaria. La geografía de la presencia guerrillera refleja cómo avanzó de manera cada vez más evidente hacia las zonas que le proporcionan claras ventajas estratégicas en la confrontación. (Echandía C. , 2006, p. 26)

En esta línea, Echandía y Bechara (2006) apuntan a que la supervivencia de estos grupos depende en gran medida de las fuentes de financiación; éstas, muchas veces se derivan de los territorios estratégicos aptos para cultivo de coca o amapola y su posterior comercialización, lo cual genera recursos que permiten la adquisición de bienes para la confrontación con el Estado. Sin embargo, son enfáticos al señalar que “la economía de guerra no se limita a la territorialización de los frentes guerrilleros en zonas rurales donde los cultivos ilícitos se constituyen en el principal medio de obtención de recursos” (Echandía & Bechara, 2006, p. 48).

El enfoque de estos autores se centra en la importancia de mantener el control por parte de las guerrillas de ciertos puntos estratégicos y la adaptación de estas lógicas de control territorial en cada uno de los contextos espacio-temporales. Así pues, la demanda de control del territorio en términos geográficos se convierte poco a poco en la búsqueda de posiciones estratégicas; en este sentido, se evidencia una preocupación por aplicar estrategias que garanticen su supervivencia y la continuidad del conflicto.

Por otro parte, encontramos el trabajo de Daniel Pécaut (2002) en el que desarrolla, a partir de un análisis histórico de la violencia en Colombia, la tesis sobre el tránsito del control territorial de los grupos armados ilegales hacia la desterritorialización del conflicto. De esta manera, indaga en los cambios en la estrategia de confrontación armada a partir de mediados de la década del noventa, de la siguiente manera es planteado por el autor:

En la configuración histórica de los territorios en medio del conflicto colombiano, es clara la importancia de las relaciones de poder de los actores armados según las posiciones geoestratégicas. La elección de territorios no obedece a un mero control geográfico sino a lógicas de poder local, disputando la hegemonía de territorios estratégicos, por tanto el conflicto se manifiesta principalmente en la creación de estructuras de micro-poderes necesarias para los distintos actores del conflicto en función de consolidar sus operaciones ilegales, aumentar el poder económico y coaccionar la voluntad política de las comunidades; consolidando así una estrategia de territorialidad que incluye el ejercicio de la violencia para mantener esta hegemonía. (Pécaut, 2002, p. 56)

Finalmente, con respecto a la geografía política del conflicto, resaltamos la tesis doctoral de Jerónimo Ríos (2016), donde alude al concepto de “periferialización” del conflicto armado como una suma de factores. Así pues, el conflicto se extiende hacia zonas geográficamente distantes de los centros políticos y administrativos de Colombia, lo cual permite, además, una separación sociocultural y económica de los poderes centralizados nacionales. La distancia de la ciudad admite la disponibilidad de corredores estratégicos, la convergencia de poderes locales en departamentos predominantemente fronterizos y periféricos, posibilitando un espacio para la guerra.

Este distanciamiento geográfico fortalece los refugios de las guerrillas, las zonas donde se presentan menores niveles de desarrollo económico y social en donde se dificulta el control estatal, se convierten en escenarios propicios para la actividad armada, la afectación de la población rural, el control del poder regional y el fortalecimiento de cultivos ilícitos y zonas estratégicas para la continuidad de la guerra⁴⁸.

⁴⁸ De tal manera, el autor afirma que el Estado ejerce una presencia difusa, una autoridad “parcial” en estos territorios, lo cual permite “La fractura regional, la ausencia de infraestructura en términos de conectividad, la afectación de fronteras inestables, así como la presencia de imaginarios distanciados (...) una ventana de oportunidad para la emergencia de conflictos armados internos” (Ríos, 2016, p. 79).

2.9. Algunas referencias sobre la producción académica en torno a los movimientos sociales y la protesta social en Colombia

Los movimientos sociales en Colombia como campo de estudio para las ciencias sociales, surgen a finales de los años 1970 e inicios de 1980. Los trabajos académicos giraban entonces, en torno al sindicalismo y a las huelgas como principal repertorio de confrontación social⁴⁹ (Archila M. , 1994, p. 269). Por consiguiente, los primeros estudios se centraron en los movimientos sociales de clase y en el movimiento campesino. Posteriormente, la influencia de autores europeos como Touraine (1999) (la sociología de acción) y Alberto Melucci (1999) (perspectiva identitaria) ampliaron las perspectivas de análisis. Esta apertura a nuevos enfoques estuvo precedida de una renovación de las luchas sociales planteada por los movimientos étnicos, estudiantiles y/o pedagógicos, ambientalistas y feministas (Archila M. , 1994, p. 267)⁵⁰.

Es importante señalar que, en la década de los setenta, desde una academia comprometida con el cambio social y de la mano de Orlando Fals Borda se impulsaron centros de reflexión como la Fundación Rosca de Investigación y Acción Social (en Bogotá de 1970-1976), la Fundación Caribe (en Montería de 1972-1975), y los centros de estudio y acción Nieto Arteta (en Barranquilla) y Felicia Campos (en Sincelejo) (Fals Borda, 2002 [1986], p. 188). Estos centros de pensamiento estaban vinculados con la lucha campesina y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Además, se constituyeron en pioneros de lo que después se conocería como la Investigación Acción Participativa (Fals Borda, 2002 [1986], p. 188).

En cuanto al movimiento campesino, es de gran relevancia la obra de Catherine LeGrand *Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950)*” (1988). En esta investigación la autora aborda los conflictos entre terratenientes y campesinos derivados de la lucha por el acceso

⁴⁹ En estos primeros estudios encontramos análisis desde el funcionalismo como el elaborado por Miguel Urrutia “Historia del sindicalismo en Colombia” (1969).

⁵⁰ En la producción académica sobre acción colectiva y protesta social en Colombia se destaca la labor investigativa del CINEP. Institución que ha construido una base de datos sobre la protesta social en Colombia y realiza publicaciones periódicas sobre el devenir de la acción colectiva. Asimismo, son de relevancia las investigaciones regionales que abordan las dinámicas sociales en relación con la configuración del Estado, el conflicto armado, los conflictos socio-territoriales y la(s) violencia(s). Por otra parte, se destaca la producción del historiador Mauricio Archila. Entre las obras publicadas por este autor se encuentran *Historiografía sobre los movimientos sociales en Colombia* (1994) *Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia* (2003), *25 años de luchas sociales en Colombia* (2002), obra colectiva de Mauricio Archila, Álvaro Delgado, Martha Cecilia García y Esmeralda Prada; *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio* (2006); *Bananeras Huelga y Masacre, 80 Años* (2009), entre otras.

a la tierra, en el marco de la expansión de la frontera agrícola a terrenos baldíos de la nación. La apertura de la frontera estaba asociada con las diferentes oleadas de colonización que se produjeron en el siglo XIX y a principios del siglo XX en territorios en donde se instalaron economías de enclave. En la investigación, se profundiza en los conflictos generados por la concentración de la tierra, la tenencia, el uso y el despojo de la misma.

En consonancia con ello, la autora distingue los diferentes repertorios de confrontación utilizados por los colonos en su lucha por la tierra, que adquieren matices dependiendo del contexto regional en el que se daba la disputa. Estos repertorios transitaban desde la vía legal hasta los enfrentamientos violentos entre los campesinos y los “dueños” de la tierra, quienes recurrían a las autoridades locales para desalojar a los colonos.

Se puede afirmar que el trabajo de LeGrand marca un precedente en la historiografía sobre los movimientos sociales en Colombia, al situar tan tempranamente los inicios de la lucha campesina y obrera. Esta perspectiva centrada en los sujetos como agentes de los procesos sociales se instalará en las investigaciones académicas.

En los análisis del movimiento campesino, se destaca la investigación de Carlos Salgado y Esmeralda Prada *Campesinado y protesta social en Colombia 1980-1995* (2000), la cual se elabora a partir de la base de datos de protesta popular del CINEP y del Proyecto Rural llevado a cabo por la misma institución⁵¹. Esta investigación desarrolla la hipótesis de que las economías campesinas son sistemas abiertos en procesos de continuo cambio y transformación, que han avanzado hacia una universalización e intenso relacionamiento en sus diversas actividades. Desde este supuesto, el estudio se enfoca hacia la necesidad del reconocimiento y valorización del campesinado como sujeto de desarrollo, que ha sido capaz de mantenerse como sector productivo a pesar que encontrarse inserto en una suerte de conflictos que se desarrollan en el mundo rural. Esta idea es desarrollada por Salgado en trabajos posteriores (2004, 2014)⁵².

⁵¹ La primera etapa del Proyecto Rural del CINEP fue coordinada por León Zamosc y participaron investigadoras como Silvia Rivera Cusicanqui, Diana Medrano y Cristina Escobar. Los trabajos desarrollados por este grupo de investigación realizaron importantes aportes al estudio del movimiento campesino en la década de los setenta, prestando apoyo a las luchas desarrolladas por la ANUC, Línea Sincelajo. Entre los trabajos de Zamosc se destacan la *Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años setenta* (1982), *Lucha por la tierra, recampesinización y capitalismo agrario en la Costa Atlántica Colombiana* (1986). También se destaca el trabajo de Cristina Escobar (1982) *La trayectoria de la Anuc*; y de Silvia Rivera Cusicanqui *Política e ideología en el movimiento campesino colombiano. El caso de la ANUC* (1982).

⁵² En las investigaciones sobre el movimiento campesino se destacan el libro *Los bolcheviques del Líbano* de Gonzalo Sánchez (1986). De manera más reciente, *Para sembrar la paz, hay que aflojar la tierra* de Darío Fajardo (2002), *Nuevos campesinos. Campesinos e imperios alimentarios* de Jan Douwe van der Ploeg (2010 [2008]), la obra colectiva

En esta línea planteada por Carlos Salgado, se destacan los trabajos producidos por la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, coordinados por Jaime Forero y Elcy Corrales. En el marco de este grupo de investigación, se elaboró el libro *El campesino colombiano. Entre el protagonismo económico y el desconocimiento de la sociedad* (2010), el cual es un compendio de diferentes análisis sobre el campesinado en el marco de los conflictos rurales producidos por la apertura económica, los tratados de libre comercio y los proyectos minero energéticos.

No podemos dejar de nombrar, el trabajo de Alejandro Reyes Posada *Guerreros y Campesinos* (2009). La investigación adelantada por este autor se ha convertido en referencia para el análisis del despojo de la tierra en Colombia ocasionada en razón del conflicto armado. Alejandro Reyes profundiza en los conflictos por la tierra presentados desde la segunda mitad del siglo XX y establece una serie de correlaciones con el proceso de expansión del movimiento insurgente, los grupos paramilitares y el narcotráfico. En la génesis de los conflictos se detiene en las fallidas reformas agrarias y en el fracaso de los distintos mecanismos institucionales para tramitar los conflictos en las zonas rurales del país, en donde la violencia se instaló como instrumento para regular los intereses entre diferentes actores.

Por otra parte, en las disertaciones sobre el concepto de movimiento social y movimientos populares nos parece relevante señalar el trabajo realizado por Leopoldo Múnera *Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988* (1998). En esta investigación, el autor realiza un análisis sobre el concepto de movimiento popular y clases populares en Colombia, a partir de un análisis crítico de las teorías de acción colectiva de las escuelas norteamericana y europea. El autor introdujo la teoría de la sociología de la acción de Touraine, corriente que va a influenciar notoriamente a los investigadores del movimiento social en Colombia⁵³.

Es relevante señalar la producción académica alrededor de las luchas cívicas en Colombia, como expresiones centrales del movimiento social popular, que representan un largo ciclo de

en donde se hace un análisis sobre las transformaciones en la ruralidad y en el campesinado a partir de la la consolidación de un modelo de reprimarización de la economía.

⁵³ Archila se adhiere a la corriente de la sociología de la acción, expresando algunos límites de esta teoría y proponiendo una mirada más amplia de la acción y las temporalidades en la protesta social: “no significa que se limiten a la participación en la gestión de recursos o que no encierren gérmenes transformadores de la sociedad actual. A su vez, esta amplia definición considera la existencia de los movimientos sociales en momentos previos al capitalismo” (Archila, 1994, p. 256).

acciones colectivas. Este tipo de luchas se emprenden en la escala local y regional como mecanismo para la solución de diferentes problemáticas relacionadas con la satisfacción de unos mínimos vitales como son el derecho a la vivienda, el acceso a servicios públicos de calidad, educación, salud, entre otros. La producción académica en esta área es prolífica, por lo tanto, solo señalar los trabajos de Javier Giraldo (1987), Martha Cecilia García (2001) y de manera más reciente el libro de Edgar Novoa (2009). Esta última publicación aporta una mirada desde la geografía política a las luchas cívicas.

En cuanto a la producción académica sobre el movimiento indígena, Archila (1996) señala que hasta principios de la década de los noventa las publicaciones sobre la acción colectiva propiamente dicha, eran escasas y se circunscribían al movimiento indígena del Cauca. Esta circunstancia contrasta con la creciente participación indígena en los espacios sociales y políticos en el periodo señalado⁵⁴. No obstante, en las últimas décadas las investigaciones sobre este movimiento han aumentado y se abordan principalmente desde la antropología, la sociología y la ciencia política. Se destaca la labor investigativa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia⁵⁵. Al respecto, señalar que el movimiento indígena ha recobrado especial relevancia en las luchas sociales en Colombia a través de las Mingas indígenas y del reclamo de su autonomía frente al Estado y los actores armados legales a ilegales.

La producción académica sobre el movimiento de mujeres, tiene un recorrido investigativo similar al referido en el anterior párrafo. Las publicaciones sobre el movimiento de mujeres anteriores a la década del noventa del siglo pasado, son escasas en todas las áreas de estudio. A partir de este momento, la producción académica es mucho más prolífica y viene de la mano de las elaboraciones realizadas por académicas y líderes que participan en las organizaciones de mujeres como la Casa de la Mujer, Sisma Mujer, la Organización Femenina Popular o la Ruta Pacífica de las Mujeres, entre otras. En la producción académica sobre género se debe destacar la labor del programa de Estudios de Género, Mujer y Desarrollo (PGDM), de la Universidad Nacional de Colombia, creado en 1994.

Entre las publicaciones destacadas se encuentra *Movimientos de mujeres y participación política en Colombia. 1930-1991* elaborada por Lola Luna y Norma Villarreal (1994); *De la*

⁵⁴ En los años ochenta se destacan trabajos como el de Ana Beatriz Tamayo *Jambaló: Autonomía o muerte* (1986) y el artículo de Luis Guillermo Vasco *La lucha guambiana por la tierra ¿Indígena o campesina?* (1980).

⁵⁵ Se destaca el libro de Virgine Laurent *Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia, 1990-1998: motivaciones, campos de acción e impactos* (Laurent, 2005[2016])

subversión a la inclusión: movimientos de mujeres de la segunda ola en Colombia, 1975-2005 de Doris Lamus (2010); *Poder y empoderamiento de las mujeres* de Magdalena León (1997); *El movimiento social de mujeres: la construcción de nuevos sujetos sociales* de Olga Amparo Sánchez; *La larga marcha: movimiento de mujeres en Colombia* de Maruja Barrig; *Nuevos espacios y otros retos: propuesta a las mujeres* Casa de la Mujer, (1986), entre otros textos.

Por parte, en el texto *El claroscuro de la protesta social en Colombia, 1975-2002* de Archila y García (2003), se apunta a los desafíos de la protesta social en el marco de un endurecimiento de las políticas represivas del Estado “los sectores subalternos en Colombia no están sometidos ni callados; resisten y se expresan de otra forma” (Archila y García, 2003, p. 101), a pesar de las constantes amenazas, persecuciones y muertes que inundan el camino de la acción colectiva en Colombia.

Ahora bien, en los últimos quince años, se produce una reflexión continua sobre la movilización social y política, teniendo como rasgo distintivo la fuerza que cobra la pregunta por la expresión desde lo regional, lo territorial y lo espacial y se abren paso las miradas postcoloniales y otras vertientes del pensamiento crítico que renuevan las preguntas de investigación, los enfoques y análisis, que desbordan las reflexiones clásicas en clave económica:

Ya la lucha social no se explica meramente por las contradicciones en la esfera productiva o, cuando más, en la distribución y consumo. Dimensiones culturales y simbólicas entran en la agenda de los actores sociales y en la mente de los investigadores. La construcción de identidades en los actores colectivos cobra importancia y hay más sensibilidad intelectual en las diferencias de género y étnicas. (Archila y Pardo, 2001, p. 31)

En esta última corriente investigativa podría situarse a Arturo Escobar, quien aborda el tema de la identidad, y la pregunta por el territorio, la naturaleza y las dimensiones culturales de las movilizaciones sociales. “el lugar continúa siendo no solo una dimensión crucial de la configuración de mundos locales y regionales, sino también de la articulación de hegemonías y de resistencia a ellas” (Escobar A. , 2010, p. 47). Aquí la pregunta es por la producción social del espacio⁵⁶, concebida desde las prácticas sociales y ecológicas. En este sentido, la obra de Escobar es relevante, porque trae a este campo investigativo de los movimientos sociales una crítica cultural y postestructuralista del desarrollo, que adopta una postura crítica frente a las tesis de los primeros

⁵⁶ A este respecto, señalamos el trabajo de Oslender (1999) que estudia el papel del “espacio” y el “lugar” en los procesos de movilización social. Oslender ofrece un análisis geográfico de los movimientos sociales, tomando como referentes teóricos del espacio a Lefebvre, Harvey, Massey, y la corriente de Touraine sobre la identidad y la agencia en este campo.

estudios funcionalistas. De esta manera, contribuye al desarrollo de “otros lugares” desde los cuales pensar sobre los movimientos étnico-territoriales (Escobar, 2014).

Esta perspectiva del posdesarrollo de Escobar es en los años recientes uno de los enfoques más frecuentes en investigación, sobre todo en lo que concierne a los estudios con comunidades indígenas o afrodescendientes que luchan ante el exterminio o el despojo de sus territorios y reivindican el cumplimiento de sus derechos por parte del Estado. Para Escobar, no basta con una descolonización “económica” para el bienestar de los pueblos que se manifiestan, “la descolonización epistémica debe acompañar la transformación de estructuras” (Escobar, 2011, p. 310) Esto se logra, reconociendo y validando las “cosmovisiones relacionales” de los pueblos indígenas, en contra de las “cosmovisiones dualistas” del desarrollo, el capitalismo y las políticas (neo)liberales (Escobar, 2011, p. 310).

En esta misma línea de los estudios críticos del desarrollo encontramos también iniciativas por parte de organizaciones populares y apoyadas por el Observatorio Nacional de Paz del proyecto Planeta Paz. Con un enfoque regional y centrado en los actores de las organizaciones populares, el trabajo del Observatorio revela la manera en la que las dinámicas del capital y la apertura de un estado neoliberal y sus economías extractivas⁵⁷ han contribuido a la perpetuación y recrudecimiento del conflicto en cuatro regiones de Colombia: Caribe, Nororiental, Suroccidental y Central (Observatorio Nacional de Paz, 2012a).

Del mismo modo, las iniciativas como Agenda Mínima de Paz (2007) abren el escenario del trabajo con las organizaciones populares en el que se presenta un trabajo colectivo, realizado con metodologías propias de la educación popular y de la investigación acción participativa. Con esta mirada mucho más propositiva desde los actores populares, el proyecto busca crear análisis, diálogos, negociaciones y soluciones al conflicto. Este tipo de metodologías son útiles como referentes y antecedentes del Acuerdo de Paz, mediante “*la realización de Mesas Territoriales de Conflicto de Paz*, asambleas o cabildos municipales, asambleas departamentales o regionales, y

⁵⁷ Sobre el lugar de las economías extractivas y la resistencia de las gentes afectadas por ellas en sus territorios, Salgado y Nández (2014) recuerdan la minería desde los tiempos de la conquista, cuestionando el papel del Estado colombiano en la reproducción de estas dinámicas y la resistencia de campesinos, afros e indígenas; resultado de lo cual plantea una urgente reflexión alrededor de la memoria:

campesinos, indígenas y afros encuentran una causa común frente a la acción de la minería puesto que ella desestructura de maneras muy agresivas sus lugares de vida y que al hacerlo despoja también de recursos públicos valiosos como el agua y el paisaje a comunidades urbanas, que se ven compelidas a sumarse a las acciones colectivas de aquellos configurando diversos mundos de sentido a las luchas sociales. (Salgado & Nández, 2014, p. 29)

nacionales” (Planeta Paz, 2007, p. 21), buscan crear escenarios de negociación y participación de los actores que hacen parte de las dinámicas del conflicto⁵⁸.

2.10. Producción académica sobre Montes de María

Un primer conjunto de publicaciones sobre la subregión de Montes de María se elabora desde las instituciones gubernamentales. Desde esta perspectiva, se destaca el documento *Panorama Actual de la Región de Montes de María y su entorno* elaborado por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de Colombia (2003). En este documento, se aborda principalmente las dinámicas del conflicto armado, en particular, el movimiento insurgente, paramilitares y narcotráfico. En el análisis de la conflictividad queda desdibujado el papel de las Fuerzas Armadas y la debilidad de las instituciones regionales y locales.

Desde la perspectiva de la recuperación de la memoria del conflicto, el Centro Nacional de la Memoria Histórica (CNMH) y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), han desarrollado diferentes investigaciones sobre Montes de María, dándole voz a las víctimas de la guerra, teniendo en cuenta que esta fue una de las zonas del país en donde el conflicto armado fue mucho más profundo, en un contexto regional signado por la lucha histórica a favor de la democratización de la propiedad de la tierra.

Entre las publicaciones de la CNRR se destaca *La tierra en disputa* (CNRR, 2010), investigación coordinada por Gonzalo Sánchez, Absalón Machado y Donny Meertens. Este estudio representa un documento clave para entender las dinámicas históricas del conflicto social y armado en la Serranía de San Jacinto y en buena parte de la Región Caribe (Sucre, Córdoba, Bolívar y Montes de María). Las memorias que se recogen en el documento dan cuenta de los conflictos por la tierra y el territorio, las fallidas políticas de reforma agraria, la inequitativa distribución de la tierra, la contradicción entre la vocación y el uso del suelo, y las luchas históricas del movimiento campesino para cambiar un estado de cosas que considera injustas.

⁵⁸ Quisiéramos añadir que estas propuestas plantean discusiones en torno a una pedagogía de la paz, ámbito que se empieza a pensar en la academia en el contexto del “post-acuerdo”. En el momento actual, se abren nuevos cuestionamientos en torno a la investigación de (y con) los movimientos populares. Estos cuestionamientos aportan a los debates metodológicos donde “investigadores/actores reflexionan sobre el carácter interpretativo y constructivo de su labor, a partir del diálogo permanente sobre los alcances y límites de su posición de observadores, sobre sus propias observaciones y sobre el conocimiento que construyen” (Aguilera A. G., 2015, p. 11).

Por su parte, el CNMH elaboró un informe bastante amplio sobre uno de los episodios más trágicos del conflicto no solo de Montes de María sino a nivel nacional *La masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra* (CNMH, 2009). Este documento tiene como objetivo reconstruir y analizar las memorias que tienen de lo ocurrido las víctimas, para establecer las causas, los repertorios de violencia, el papel de los actores armados, en particular, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la guerrilla y el Estado. En esta línea de recuperación de la memoria, encontramos otros trabajos realizados por esta institución como *Juglares de la memoria de los Montes de María* (2019) y los recorridos por los paisajes de la memoria publicados en la página web del Centro. Estas elaboraciones representan un insumo fundamental para la reconciliación y la construcción de la paz.

Desde la academia, se destacan los trabajos de investigación realizados por el Instituto Internacional de Estudios del Caribe y el Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de los Montes de María de la Universidad de Cartagena. Las investigaciones se elaboran desde una mirada interdisciplinar, en la que confluyen enfoques históricos, económicos, sociológicos y desde la ciencia política. En los últimos años la producción de estas instituciones ha contribuido a la comprensión de la complejidad del contexto montemariano.

Al respecto, es relevante señalar que las investigaciones se elaboran desde el conocimiento del territorio y en colaboración estrecha con las organizaciones sociales populares de la subregión, como son la Mesa de Concertación y Articulación de Montes de María y la Organización de Población Desplazada (OPD) de la subregión. Por otra parte, la Universidad de Cartagena viene realizando trabajos de asesoramiento político y de proyectos productivos a las diferentes asociaciones de la zona. Por consiguiente, se puede señalar que el trabajo académico es acompañado de un compromiso social y político con las comunidades montemarianas. Nos gustaría resaltar los trabajos realizados por el profesor Amaranto Daniels (2016, 2017, 2011), Alfonso Múnera (Daniels y Múnera, 2011) y Daniel Menco (2007, 2011), entre otros.

La problemática social de Montes de María, los conflictos alrededor de la concentración de la tierra y las luchas campesinas han sido abordadas por estudios de carácter más general elaborados por Fals Borda (Fals Borda, 2002 [1986]), Pérez (2010), o Zamosc (1987). Estas investigaciones profundizan en la génesis y el desarrollo del movimiento campesino en Colombia. La subregión montemariana fue uno de las zonas del país en donde tuvo mayor impacto la lucha campesina a través de la recuperación de tierras y la exigencia de una reforma agraria integral.

En otro orden de ideas, son de poner en valor las investigaciones realizadas por centros de pensamiento, organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales que operan en Colombia. En particular, destacamos las siguientes: el informe *Los Montes de María: análisis de la conflictividad* elaborado por el PNUD (2010); el documento *Análisis del plan de consolidación de Montes de María. Una mirada desde el desarrollo, la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional* financiado por la Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia (PODEC) y elaborado por el investigador Davide Bocchi (2011); el informe *Análisis regional de los Montes de María* elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (2011).

Nos gustaría resaltar especialmente el documento *En camino largo no hay ventaja. Prácticas para la construcción de la paz en Montes de María* realizado de manera conjunta por la Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, la Corporación Desarrollo Solidario, la Universidad de Cartagena y Planeta Paz. (2018) y el informe reciente coordinado por CODHES *Los Montes de María Bajo Fuego*, elaborado como insumo para la Comisión de la Verdad (2020). En este apartado, no podemos dejar de señalar la labor realizada por la Corporación de Desarrollo Solidario (CDS) de Cartagena, que lleva trabajando codo con codo con las comunidades montemarianas más de veinte años. La CDS con el apoyo de la cooperación internacional ha financiado no solo el trabajo del campesinado sobre el terreno sino la elaboración de documentos que contribuyen a la cualificación de la agenda política de las organizaciones. A este respecto, señalar el documento *En busca de la permanencia digna en el territorio* (2014, 2017).

2.11. Producción académica sobre Putumayo

Los estudios sobre la violencia y el conflicto armado en Putumayo han estado marcados por las mismas dinámicas inherentes a esta región; las distintas oleadas de colonización campesina, las misiones capuchinas y jesuitas, la incursión de las economías extractivas (quina, caucho, petróleo) y de las economías cocaleras, y el avance de los grupos armados por el control territorial (intensificado desde finales de 1970). Señalamos también algunos estudios que se enfocan en las relaciones de frontera: entre los andes, el piedemonte y la selva, por considerar que el problema actual no se reduce al “problema de la coca” en el Putumayo, sino a las representaciones coloniales que se hicieron de esta región al ser considerada por las clases dirigentes del país como “tierra de nadie” o terrenos “baldíos” que el Estado debe “incorporar”.

En este sentido, cuando se estudia la región del Putumayo es importante mencionar el carácter de frontera que desde tiempos prehispánicos ha tenido. Al respecto, sobre los estudios de frontera entre los andes, el piedemonte y el valle de Sibundoy, conviene resaltar los trabajos de Ramírez (1996) y Gómez (2005) en los que se denuncian, por ejemplo, las técnicas de tortura y exterminio indígena que tuvieron las misiones capuchinas en Putumayo. Además, es de resaltar el carácter de estas formas de represión, que estuvieron cimentadas en constructos ideológicos (del progreso económico) y científicos (del positivismo y el utilitarismo) propios del siglo XIX. Al respecto, Gómez anota que

varios de los dispositivos para el control y la dominación de los indios, fomentados por los capuchinos en el Valle del Sibundoy y, parcialmente, en Mocoa, coinciden en lo fundamental con los que la empresa cauchera de Julio César Arana, la Casa Arana, impuso también entre los indios del Putumayo, entre los ríos Cará-Paraná e Igará-Paraná, por esos mismos años. (Gómez A. , 2005)

Los estudios en este sentido que se hacen sobre la represión y resistencia de los indios del Putumayo, fueron el principal interés de la antropología colombiana desde los años 1980 y finales de ese siglo, donde interesaba no solamente documentar los hechos atroces cometidos por las empresas de economías extractivas, como el petróleo, la quina o el caucho, sino también, el componente ideológico y político que movía dichas empresas al genocidio indígena. Encontramos en los trabajos de Gómez (Gómez A., 2005), Ramírez (1996) y Bonilla (1968), un claro cuestionamiento hacia el Estado, que unas veces promovía la incursión de dichas misiones religiosas para la “reducción de los indios”, y otras, se hacía el de la vista gorda ante la presencia de las caucherías.

En cuanto a la economía de la coca en la región, Ramírez (2001) estudia lo que para ella es el “movimiento *cocalero*” de los campesinos del Putumayo, Caquetá y Guaviare, y de la baja bota caucana (la Amazonia occidental colombiana de finales de la década de 1990): las tensiones entre un estado ineficiente y las economías ilegales que se abren paso de la mano de los grupos armados. En medio se encuentra el campesinado, un movimiento que comienza a tener otras lógicas en su accionar, estudiadas por Ramírez desde una mirada postestructuralista. Desde allí, las luchas campesinas se inscriben en el trabajo por el reconocimiento de su identidad (para el caso vendría a ser la resignificación del *cocalero*). El enfoque metodológico en el trabajo de Ramírez le permite dialogar entre la etnografía y la historia de la región, desde el pasado que se registra en los textos y el pasado de las voces del presente.

La investigación de Ramírez es un análisis histórico del auge de la coca que desde mediados de 1970 se encuentra inserta en las dinámicas internacionales del narcotráfico. Las políticas gubernamentales de intervención del territorio para abordar esta problemática se realizan desde la idea de un territorio marginal, peligroso, donde habitan los insurgentes, delincuentes y narcotraficantes, por lo tanto, las políticas de desarrollo son pensadas en función de la seguridad y de la lucha contrainsurgente⁵⁹.

Pero no solo la coca ha marcado los procesos de colonización del Putumayo. Ramírez muestra cómo la colonización en esta región ha estado marcada por una diversidad de tipos de colonización y poblamiento, siempre movidos por economías extractivas o políticas de “tierra arrasada”, como ha sido la explotación de hidrocarburos. De esta manera, una gran parte de las investigaciones que se han hecho alrededor del conflicto armado y los movimientos populares en el Putumayo gira en torno a las dinámicas (tempranas y recientes) de colonización de aquellos “territorios de frontera” o “baldíos”.

En esta línea de investigaciones que relacionan el conflicto social y armado con los procesos históricos de colonización en el Putumayo, resaltamos el trabajo de Salamanca (1995) centrado especialmente en la explotación del caucho desde finales del siglo XIX. La implantación de las economías de enclave marca un precedente en la historia de la esclavitud indígena en el Putumayo, quisiéramos señalar los trabajos de Pineda (1987), García (1998), y los informes de Roger Casement (1995), José Eustacio Rivera y Melitón Escobar (1990), cuyas denuncias sobre las atrocidades de la empresa cauchera fueron relevantes para la investigación social en esta región.

Pero no solo es la colonización petrolera o cauchera la que agudiza el conflicto en el Putumayo, Ramírez también advierte una colonización militar, que tiene sus orígenes en 1975 cuando el gobierno impulsa la llegada de militares hacia las inmediaciones del La Tagua-Puerto Leguízamo. El objetivo de esta colonia militar estaba claro: controlar la región del Caguán que en aquellos años contaba con presencia de la guerrilla (Ramírez R. , 2010, p. 332). A todo esto, le podemos adicionar el impacto de la colonización campesina, población que desciende de los andes y se encuentra con territorio que no está deshabitado, como siempre se quiso ver al Putumayo y en

⁵⁹ “La caracterización hecha por los militares de los grupos guerrilleros como narcotraficantes -narco-guerrillas-, en lugar de grupos armados con motivaciones políticas, no solo legitima la violencia y el terrorismo estatales sino que, además, promueve la intensificación del paramilitarismo cuyos blancos son los grupos guerrilleros y aquellos que han llamado auxiliares de la guerrilla o auxiliares civiles de las actividades guerrilleras. Los militares han permitido y promovido las actividades paramilitares (...)” (Ramírez, 2001, pp. 64-65).

general a la Amazonía colombiana. Aquí encontramos un enfrentamiento entre colonos e indígenas, con tradiciones agrícolas y filosofías contrapuestas. Indígenas como los Kofán o los Siona en el Putumayo se vieron relegados de sus territorios, principalmente por la explotación petrolera⁶⁰.

Los trabajos recientes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2015) y (CNMH, 2014), abordan el conflicto en el Putumayo desde la economía del petróleo y la coca, principales factores del conflicto armado en esta región. Visto así, el despojo de los campesinos e indígenas también tiene que ver, no solo con la incursión de los grupos armados, sino también, con las políticas de sustitución de cultivos ilícitos en la región. En este informe vemos cómo se entretejen las dinámicas de colonización en el Putumayo con las economías petroleras y “cocaleras”, el control territorial de las guerrillas y grupos paramilitares, y las políticas de Estado para contrarrestar estas problemáticas. Ahora bien, los informes del CNMH son valiosos en el sentido de que logran dilucidar las problemáticas en torno al conflicto armado con cierta particularidad regional y con un valor metodológico que dialoga entre el trabajo histórico de archivo y los testimonios de los pobladores.

En último lugar, pero no por ello menos importante, nos gustaría señalar el documento elaborado por las organizaciones populares del Putumayo, en particular, el texto *Putumayo: sembrando vida construyendo identidad Historia de la Mesa Regional 2006–2014* (2015) elaborado a partir de las voces de líderes y lideresas que hacen parte de esta confluencia social popular, asesorado por la investigadora Astrid Flórez del proyecto Planeta Paz. El texto refleja la complejidad para construir movimiento en una región con un contexto tan adverso como el del Putumayo, pero también evidencia la capacidad contestaria y de resistencia de los actores populares, que en medio de las adversidades elaboraron una propuesta alternativa de desarrollo para la región.

⁶⁰ “los indígenas perdieron sus costumbres, quebrantándose la unidad del grupo y la vida tranquila que llevaban; aparte de eso, la tala, quema y cultivos que hacen los colonos, acaban con la vegetación nativa, en gran parte de uso tradicional, y además “espantan” los animales por lo que se disminuyen las posibilidades de cacería para los Kofanes” (Ramírez R. , 2010, p. 343).

3. Objetivos, preguntas de investigación e hipótesis

El objetivo principal de la presente investigación es analizar las percepciones que las organizaciones populares, localizadas en el departamento del Putumayo y en la subregión del caribe colombiano Montes de María, construyen acerca de los conflictos socio-territoriales.

De este objetivo se desprenden otros tres propósitos secundarios:

- primero, profundizar en las lecturas que realizaron las organizaciones populares de sus contextos territoriales, en relación principalmente con las dinámicas del conflicto social armado y la implementación de un modelo de desarrollo hegemónico, que tiene unas características particulares para la fase actual de acumulación de capital;
- segundo, comprender las correlaciones entre la narrativa dominante articulada a unas representaciones hegemónicas del espacio y las percepciones, prácticas y espacios de representación que construyeron los agentes populares en contextos territoriales concretos;
- tercero, identificar las dinámicas de territorialización, desterritorialización y reterritorialización que se configuran en el marco de la conflictividad social en el Putumayo y en la subregión de Montes de María.

Estos elementos nos llevan a plantear las siguientes preguntas de investigación que dan sentido a la presente tesis y que trataremos de responder a lo largo del estudio:

- ¿Cómo interpretan, perciben y caracterizan las organizaciones populares del Putumayo y de Montes de María los conflictos en los territorios en los que desarrollan sus proyectos vitales?;
- ¿Qué correlaciones se pueden identificar entre los conflictos identificados por las organizaciones populares, las dinámicas del conflicto social y armado y la configuración espacial del modelo de desarrollo dominante?; y,
- ¿Cómo se configuran los procesos de espacialización y territorialización de las relaciones sociales y de poder en el Putumayo y en la subregión de Montes de María?

Los objetivos y las preguntas de investigación planteadas nos llevan a la construcción de una hipótesis central que se tratará de comprobar a lo largo de la investigación: las organizaciones populares interpretan de manera distinta en el espacio las dinámicas de la conflictividad social presentes en los lugares en donde desarrollan su acción. Estas percepciones se encuentran

estrechamente relacionadas con la forma en que se apropian material y simbólicamente del territorio y que configuran el horizonte de sentido de sus luchas.

4. Metodología

En los anteriores epígrafes, se señalan algunas de las determinaciones tomadas para la delimitación del objeto de estudio de la presente investigación, en términos de la delimitación temporal, el lugar de enunciación de los agentes y las perspectivas teóricas más relevantes para el análisis.

Ahora bien, en el proceso de construcción metodológico para cumplir los objetivos, responder a las preguntas de investigación y comprobar la hipótesis planteada nos lleva a estructurar la tesis en tres grandes partes: la primera, la construcción de un marco teórico; la segunda, la elaboración de una sección más descriptiva y contextual que nos permite establecer las correlaciones entre las diferentes escalas de análisis; la tercera, los estudios de caso de Putumayo y la subregión de Montes de María, en donde se aterriza los planteamientos de los otros dos grandes apartados de la tesis.

La Segunda Parte de la investigación se centró de manera particular en los mandatos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014), haciendo especial referencia a las dinámicas del conflicto armado y a las políticas de desarrollo. Esta disertación sirvió de base para la realización de un trabajo más reflexivo y de interpretación a partir de la lectura de fuentes bibliográfica primarias y secundarias, que se concretan en los estudios de caso.

Durante la investigación realicé una revisión bibliográfica exhaustiva de la producción académica que se consideraba de relevancia para la elaboración de la tesis. De esta manera, el campo de trabajo no se circunscribió a la disciplina de la ciencia política, procedí a una lectura de los estudios que se consideraban pertinentes para el objetivo de la investigación, producidos desde la Antropología, la Sociología y la Geografía Política. Este enfoque interdisciplinar se relaciona con las diferentes miradas desde las que se ha analizado la conflictividad social en Colombia en correspondencia con la complejidad del fenómeno.

La información fue consultada en diferentes bases de datos pertenecientes a las siguientes instituciones: la Universidad Complutense de Madrid, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Biblioteca Hispánica), la Pontificia Universidad Javeriana de

Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, el CINEP, la Universidad de Cartagena y la biblioteca Luis Ángel Arango⁶¹. Asimismo, se analizaron los trabajos publicados por las organizaciones no gubernamentales entre las que se encuentran el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Corporación Opción Legal, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas, ENDA Colombia y Planeta Paz-CDPAZ, entre otras.

Por otra parte, se consultaron documentos oficiales del gobierno nacional y en algunos casos de los entes departamentales (Putumayo, Bolívar y Sucre). En particular, se realizó una búsqueda de los principales pronunciamientos de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos, los documentos emitidos por la Presidencia de la República, el Departamento de Planeación Nacional (DNP (los planes nacionales de desarrollo, las principales políticas económicas y sociales, y las estrategias de seguridad), las declaraciones y textos de otras carteras del Ejecutivo como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Minas y Energía. Además, otras instituciones como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Comisión Nacional de Memoria Histórica y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

En el caso de la revisión de otras fuentes primarias, pude acceder directamente a la documentación de las organizaciones populares. En este caso, es importante señalar que muchas de ellas al ser organizaciones de base no contaban con un repositorio, una página web o un archivo de documentos producidos a lo largo de su acción. En este sentido, fue de gran relevancia que el trabajo de campo de la tesis se haya realizado en el marco del trabajo del proyecto Planeta Paz. De esta manera, pude seguir de cerca y participar como investigadora en el proceso de construcción de propuestas de paz y de política pública desde lo popular, en el que participaron organizaciones de todo el país. En un primero momento, realizamos un ejercicio sectorial, en el que las líderes y lideresas caracterizaron su sector y consolidaron sus agendas políticas y sociales⁶². En una segunda

⁶¹ La biblioteca Luis Ángel Arango es el archivo público más grande de Colombia localizado en Bogotá.

⁶² En este proceso, los investigadores vinculados a la institución junto con los líderes y lideresas populares, elaboramos diez documentos de caracterización sectorial (afrocolombianos, ambientalistas, campesinados, cívicos, comunicación, cultura, indígenas, LGBT, mujeres, solidarios). En este caso, trabajamos con la percepción que tenía cada uno de los sectores sobre sus organizaciones, movimientos y su relación con la sociedad, la incidencia del sector en procesos de paz y constituyentes, las implicaciones de la violencia y del conflicto armado, la incidencia de la consolidación de los procesos de globalización, entre otros temas. Se puede acceder a los documentos de caracterización en la página web

fase, trabajamos sobre el impacto de los conflictos en las regiones de acción de las organizaciones, para lo cual se realizaron actividades que incluyeron 20 de los 32 departamentos que tiene el país.

Ahora bien, la participación en todo este proceso me permitió tener un contacto directo con las organizaciones, conocer el territorio en el habitan, sus necesidades, sus temores, las dificultades a las que se enfrentan en medio de una guerra que ha durado más de cuarenta años. La labor sectorial, en el cual trabajé muy de cerca con los líderes del sector LGBTI, me permitió comprender la forma en la que se perciben los agentes populares y los conflictos al interior de las organizaciones, las tensiones que se producen entre los diferentes horizontes de sentido de sus luchas, las diversas posiciones políticas, las articulaciones y alianzas con otros sectores en aras de fortalecer sus demandas y su capacidad de contestataria. Empero, la mayor riqueza vital y académica, fue conocer la capacidad de resistencia de los líderes y lideresas, frente a un sistema de dominación que las y los relega a los márgenes de la sociedad.

Por otra parte, es importante señalar que el trabajo con las organizaciones se realizó desde la perspectiva de la educación popular, entendida no solo como una metodología, sino como una práctica liberadora y decolonizadora, frente a diferentes dispositivos de disciplinamiento y control de la sociedad (Mejía, 2016). De esta manera, se planteó una pedagogía que contribuyera a la generación de la conciencia de los sujetos subalternos y las condiciones de opresión a la que han estado sometidos en los diferentes momentos de la historia⁶³ (Acevedo, Gómez y Zúñiga, 2016).

Esta labor estuvo acompañada por la sistematización de todos los momentos del proceso. Entendida como un momento investigativo que se hace desde las acciones, los saberes y las sabidurías presentes en las dinámicas de los grupos populares, que se convierten en experiencia y a la vez encuentran sus especificidades para enriquecerse a sí mismas y los otros.

La sistematización se convierte en producción de saber, en umbral de lo nuevo que contrasta con lo producido anteriormente, genera un nuevo tipo de relación academia – agentes populares y construye un espacio de encuentro en donde la valoración de esos saberes marginalizados o emergentes permite la convergencia de lo diverso para construir lo común, esencial en un proceso de paz (Mejía, 2007) (Planeta Paz, 2017). En este sentido, la educación

de Planeta Paz en el siguiente link <https://www.planetapaz.org/biblioteca/nuestras-publicaciones/sectores-sociales?start=10>

⁶³ La pedagogía(s) popular(es) debe ser elaborada por el sujeto y no para él, en tanto señala Paulo Freire, los pueblos se encuentran en una lucha permanente de recuperación de su humanidad y, por consiguiente, de amor a la vida. (Freire, (1985 [1968]))

popular y la sistematización deben dar cuenta de las diferentes formas en que las comunidades y los sectores populares entienden, sienten y viven los procesos de apropiación del espacio. Para que los proyectos sean realmente liberadores es necesario que evidencien la diversidad y la complejidad de esos contextos (Ñañez O., 2019).

Por consiguiente, cuando decidí llevar a cabo esta investigación conté con el acumulado del trabajo realizado por Planeta Paz y tuve la ocasión de debatir el enfoque no solo con los demás investigadores del proyecto, sino con algunos de los líderes y lideresas del proyecto. En este devenir reflexivo, opté por un enfoque cualitativo que evidenciara las percepciones, experiencias y significados de líderes y lideresas de las organizaciones sociales populares, teniendo como base el acumulado la experiencia y el trabajo realizado. Por consiguiente, me planteé como mejor opción metodológica la investigación cualitativa a partir de la realización de entrevistas en profundidad y semi-estructuradas. Es importante señalar que las entrevistas se realizaron en el marco de la realización de talleres regionales para la identificación de conflictos a través de la metodología de la cartografía participativa. Estos mapas se incluyen en los estudios de caso.

De esta manera, en el diseño del formato de la entrevista se establecieron las principales categorías conceptuales relevantes para la investigación, que permitieran dar cuenta de las percepciones que se construyen en los márgenes de la sociedad y representan un desafío simbólico a las interpretaciones dominantes que tienden a simplificar la conflictividad social del país y a ocultar la multiplicidad de espacios sociales de significación bajo discursos homogeneizadores. Por ello, me parecía importante colocar en el centro de la reflexión los agentes y el sentido social de la acción política que desarrollan, como espacios de construcción de significados subalternos siempre en relación con el contexto social y político y territorial. Las categorías sobre las cuales diseñé el guion de las entrevistas en profundidad fueron las siguientes:

- Territorios de acción de las organizaciones.
- Procesos sociales en marcha, procesos de resistencia de los actores sociales.
- Repertorios de confrontación y agendas de las organizaciones sociales.
- Nuevas dimensiones del conflicto armado/conflictos.
- Transformaciones del territorio a causa de los conflictos.
- Actores implicados.
- Territorialidades (sistemas de poder), relaciones de poder.

- Políticas públicas de desarrollo, de seguridad y en general que impliquen una intervención de los territorios.
- Agendas populares en relación con los conflictos y los territorios.

El primer bloque de preguntas estaba referido a la lectura que hacían los líderes y lideresas de sus procesos organizativos, a las dinámicas al interior de los mismos, la relación con otros sectores, los repertorios de confrontación, la lectura sobre los procesos territoriales y el contexto nacional.

El segundo bloque, estaba dirigido a la caracterización de los conflictos y de los territorios. El objetivo era establecer los elementos que me permitieran comprender cuáles han sido las transformaciones del espacio que habitan las organizaciones, cuáles son las dinámicas del conflicto armado y de otros conflictos, las políticas públicas que han incidido en una reconfiguración de los territorios, entre otros elementos.

Un tercer bloque, estaba enfocado a establecer las relaciones de poder presentes en los territorios, con el propósito de comprender las asimetrías entre los diferentes actores y el lugar de los sectores populares.

Es importante señalar que esta batería de preguntas era una guía para la realización de las entrevistas. En el proceso de realización de las mismas, las preguntas cambiaron según se desarrollaba la conversación, algunas se suprimieron o se incluyeron nuevas. Otro elemento a considerar era el momento coyuntural de realización de la entrevista y el grado de confianza que se lograba construir con los entrevistados. En el momento de realización de los encuentros, la situación de orden público en las regiones era compleja, por lo tanto, tocar ciertos temas era delicado para los líderes y lideresas, ya que muchos de ellos estaban expuestos a la violencia política. Inclusive algunas de las personas entrevistadas solicitaron detener la grabación para abordar ciertos temas que consideraban delicados por estar en riesgo su integridad física.

Por consiguiente, en la interpretación y análisis de los testimonios se debe tener en cuenta no sólo el discurso en términos del lenguaje verbal sino los marcos contextuales en los que se expresa. La forma de narrar, las expresiones corporales, gestos, tonos, acentos, entre otras características. Para ello, las notas tomadas durante las entrevistas fueron de gran valor, además,

en la transcripción utilicé algunos de los signos que se utilizan en este sistema para reconocer ese lenguaje no verbal⁶⁴

Por otra parte, con las preguntas se buscaba que emergiera los siguientes elementos tomados de la teoría de los marcos interpretativos de los movimientos sociales⁶⁵, ya que estos aspectos contribuyen a comprender tanto el lugar de enunciación de los sectores populares como la forma en la que se interpretan los contextos territoriales. Primero, el componente de injusticia referido a la indignación moral sobre una situación particular. Esta es una valoración cognitiva en donde se presenta una valoración cognitiva de lo que es equitativo, pero también es una cognición cargada de emoción. Un marco de injusticia requiere una consciencia de los actores acerca de la responsabilidad sobre daño y sufrimiento causado. Segundo, el componente de la agencia, se refiere a la conciencia de que es posible cambiar las condiciones de la vida social o determinadas políticas a través de la acción colectiva, faculta a las personas como agentes potenciales de su propia historia, con capacidad para generar transformaciones. Tercero, el componente de identidad, se refiere al proceso de definir el “nosotros” en relación al “ellos”, los elementos diferenciadores se refieren a los intereses y valores que guían la acción de los agentes. Sin el componente contradictorio expresado en el “otro” la acción colectiva sería una abstracción⁶⁶.

Ahora bien, para un tener análisis cercano a la realidad de los sectores populares y de sus contextos territoriales, establecí algunos criterios básicos para la seleccionar a las organizaciones con las cuales se realizaron las entrevistas. En este caso se tuvo en cuenta el trabajo que realizaban en las zonas de estudio, la articulación con otras organizaciones, y un cierto grado de representatividad/reconocimiento dentro del movimiento social popular de la región o a nivel nacional. De esta manera, entrevisté fundamentalmente a líderes y lideresas que eran parte activa

⁶⁴ Algunos de los signos utilizados en las transcripciones fueron: () Dificultades varias, como fragmentos inaudibles, (()) Fenómenos extraverbales, hh Respiración audible o aspiración, suspiros, (...) frases que comienzan y no se cierran y empiezan otras, divagación, / Pausa, // Pausa Larga, ¡! Énfasis, entre otros.

⁶⁵ Esta perspectiva se desarrolla especialmente en la escuela sociológica norteamericana, entre los trabajos más representativos se encuentran los desarrollados por David Snow y Robert Benford en *Frame Alignment Processes, Micro-Mobilization and Movement Participation* (Snow, 1986); *Ideology, Frame Resonance and Participant Mobilization* (Snow y Benford, 1988); *Master Frames and Cycles of Protest* (Snow y Benford, 1992); *Talking politics* (Gamson William A. 1992). Estos autores reincorporaron los supuestos interaccionistas y constructivistas a la comprensión de los movimientos sociales a partir de la premisa que el mundo social no se encuentra impuesto de manera objetiva al sujeto, sino que se encuentra dispuesto a partir de las interpretaciones de los actores que hacen parte del mismo. Este enfoque lleva a los autores a abordar los elementos simbólicos y cognitivos de la movilización desde el concepto de marcos interpretativos para la acción colectiva (Delgado, 2007, p. 58).

⁶⁶ Estos elementos los desarrolla William Gamson en su libro *Talking politics* (1992)

de esas organizaciones populares, que tuvieran conocimiento de las dinámicas regionales, del territorio y de las tensiones y conflictos presentes en el mismo⁶⁷.

En referencia a los criterios de selección de las zonas de estudio, debo señalar que cuando decidí llevar a cabo el presente trabajo de investigación, el objetivo era analizar las percepciones populares de la conflictividad en todas las regiones del país. Bajo este supuesto, se realizaron un total de 50 entrevistas a líderes y lideresas de las regiones señaladas y a un grupo de dirigentes de organizaciones nacionales. No obstante, la tarea de investigación se volvió inabarcable y, con la asesoría del director de la tesis, se decidió seleccionar dos estudios de caso: Putumayo y Montes de María.

Las razones por las cuales se escogieron estas dos zonas se relacionan con los aspectos que describo a continuación. Primero, tanto el departamento del Putumayo como la subregión de Montes de María, son zonas priorizadas en las políticas de seguridad y en los planes de desarrollo de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos. Segundo, son regiones caracterizadas por una alta conflictividad social y por la profundización del conflicto armado en el periodo de estudio. Y, tercero, son zonas de disputa por el control del territorio y de la población por parte no solo de los actores armados legales e ilegales sino de otro tipo de actores.

Sin embargo, pese a que comparten estas características, las dinámicas tanto del conflicto armado como de otros conflictos sociales se han expresado de manera diferenciada. Las intervenciones gubernamentales para la implementación de los ejes centrales de desarrollo se ajustan a las características territoriales en términos de posición geo-estratégica, presencia de recursos naturales centrales para la acumulación de capital, configuraciones de poder entre los diferentes actores locales/regionales, estrategias de apropiación material y simbólica del territorio, entre otras cuestiones. En este sentido, las lecturas que realizan las organizaciones populares tienen similitudes, pero expresan diferencias importantes en términos de las dinámicas de los conflictos socio-territoriales.

⁶⁷ En el caso del Putumayo no fue posible realizar las entrevistas a líderes de organizaciones indígenas debido a una cierta desconfianza y prevención sobre el uso de la información. Sin embargo, participaron en los talleres que se realizaron.

5. Estructura de la Tesis

La presente tesis doctoral se compone de cuatro partes divididas en 14 capítulos. En la parte introductoria del estudio se realiza una delimitación del objeto de estudio, los objetivos a abordar, las preguntas de investigación, la justificación, la metodología y el estado del arte. En este apartado, se hace una revisión temporal de los estudios más relevantes sobre violencia, conflicto y movimientos sociales realizados en el país, estableciendo los principales enfoques y preguntas de investigación, así como los cambios en los enfoques y abordajes teóricos.

La Primera Parte de la investigación, que lleva como título *“Territorio y movimientos sociales”*, comprende tres capítulos. En el Capítulo 1. *“Espacio, territorio y territorialidad”*, se realiza una delimitación de estos tres conceptos, con el objetivo de establecer las bases teóricas para un análisis de los movimientos sociales populares desde una perspectiva espacio-temporal, que brinde las herramientas necesarias para comprender la complejidad de este fenómeno social. El análisis parte de dos premisas teóricas que consideramos centrales: el espacio hace parte de una construcción social e histórica y la sociedad es espacialmente construida (Soja, 1989; Harvey (2017 [2009])). Estos planteamientos subyacen muchos de los abordajes elaborados desde el pensamiento crítico de las ciencias sociales, que tienden cada vez más a incorporar la perspectiva geográfica en sus análisis.

En este capítulo profundizamos en los planteamientos teóricos de dos autores fundamentales en la geografía política, tal y como se señala en la introducción: Henri Lefebvre y Claude Raffestin. Al retomar a Lefebvre nos centramos en su teoría de producción del espacio que representa una visión transformadora en la medida que ha permitido profundizar en la correlación entre espacialidad, sociedad e historia en el marco de los procesos de producción material y de reproducción social de las organizaciones humanas. Este marco teórico permite introducir el análisis espacial en el comportamiento de los agentes sociales (Oslender, 2008) en relación con las dinámicas de acumulación del capital.

Además, prestamos especial atención a la propuesta de la naturaleza dialéctica en la producción del espacio, a saber: las prácticas espaciales, las representaciones del espacio y los espacios de representación (Lefebvre, 2013 [1974]). Este trípode conceptual nos permite entender

las tensiones existentes en la configuración de los espacios a partir de la intervención de las clases dominantes y los saberes técnicos frente a los espacios cotidianos y vividos de las comunidades.

En el caso de Claude Raffestin, se puede apreciar la influencia de Lefebvre y de Foucault en su apuesta por una geografía del poder, la cual consideramos relevante para el análisis práctico de los procesos de apropiación material y simbólica del espacio para la conformación del territorio. En este sentido, el autor se centra en analizar las relaciones de poder que son constitutivas del mismo, ampliando la mirada de la geografía política tradicional centrada en el Estado, a otros agentes sociales productores de saberes, conocimientos, prácticas y, en definitiva, también de contrapoderes.

En esta lógica, Raffestin señala que en el territorio se manifiestan diversas relaciones de poder que se materializan en tejidos, redes y centralizaciones que son cambiantes y dinámicas. Por consiguiente, el autor considera al territorio como un producto “consumido” o más bien “vivido” en la línea planteada por Lefebvre. En esta dirección, Raffestin aborda los procesos de territorialización y de creación de territorialidades desde una perspectiva de cambio social que nos brinda herramientas esclarecedoras para el objeto de estudio de la presente tesis.

En el Capítulo 2, *“Las teorías de los movimientos sociales: los enfoques estructurales y las aproximaciones culturales de la acción”*, referenciamos desde una mirada crítica los principales elementos de la agenda clásica de los estudios de la acción colectiva desarrollados por las escuelas europeas y norteamericanas, que son pertinentes para el desarrollo de la presente investigación. Para ello, se tienen en cuenta los aportes de Charles Tilly, Doug McAdam, Sidney Tarrow, Alberto Melucci, Enrique Laraña y Joseph Gusfield, entre otros autores.

Por otra parte, se hace especial hincapié en los análisis espaciales que han sido introducidos desde una perspectiva geográfica. Una referencia importante es el número de la Revista *Mobilization* editado por Byron Miller y Deborah Martin (2002), en donde los autores plantean la existencia de diferentes caminos para pensar el espacio en los estudios de la política contenciosa.

La incorporación de estos abordajes se debe a que en los estudios de los movimientos sociales en América Latina la agenda clásica ha tenido una importante incidencia para el desarrollo de análisis posteriores. Inclusive la revisión y crítica de las teorías a la luz de las particularidades históricas, económicas, sociales y culturales del Sur Global. En esta sección, retomamos las reflexiones de Leopoldo Múnera (1998, 2005) sobre los movimientos populares en Colombia, que

nos permiten perfilar desde una mirada académica el lugar de enunciación de las organizaciones con las que se trabaja en la tesis.

En esta línea de argumentación, en el Capítulo 3, “*Rupturas y continuidades en América Latina en el estudio de los movimientos sociales*”, nos aproximamos a las transformaciones en la acción social popular que se han presentado en las últimas décadas en el continente y algunas de las principales corrientes del pensamiento crítico que las estudian. Estas perspectivas nos permiten analizar las percepciones y prácticas que construyen las organizaciones populares sobre los conflictos socio-territoriales. Las aportaciones de autores del pensamiento crítico latinoamericano como Raúl Zibechi, José Seoane, Emilio Taddei, Clara Algranati, Maristella Svampa, Arturo Escobar, Evelina Dagnino y Sonia Álvarez, Edgar Lander, entre otros, son centrales para comprender las transformaciones en la acción colectiva en la región y en Colombia.

Se puede afirmar que en el continente se ha presentado una renovada irrupción de los sujetos colectivos indígena, campesino, negro o los movimientos socio-ambientales y feministas, que ha generado la emergencia o la activación de análisis y/o resignificación de categorías sociales que estaban en el ostracismo político y teórico como: lo popular, lo común, la resistencia, la emancipación, entre otros. Estos elementos se han trabajado desde perspectiva como la modernidad-colonialidad de la cual extraemos algunos elementos para entender como los discursos dominantes sobre el desarrollo y el progreso se han impuesto sobre otros conocimientos y saberes, obviando su capacidad de agencia y de generar propuestas alternativas de desarrollo o alternativas al desarrollo. Para este análisis, nos centramos de manera particular en los trabajos del antropólogo colombiano Arturo Escobar.

En el apartado final de este capítulo, y no por ello menos importante, nos interesa reflexionar sobre la relevancia de lo común, de lo comunitario y la cuestión de la autonomía en la acción social popular. En este punto destacamos en los aportes de Raquel Gutiérrez Aguilar (2017) Lucía Linsalata (2015) y Alfonso Torres (2013).

Es importante señalar, que el entramado comunitario constituido a partir de redes sumergidas posibilita la acción organizativa y alimenta los horizontes de justicia, en el marco de la profundización del modelo extractivista, que reconfigura los territorios y genera un debilitamiento del tejido social. Ahora bien, en estos análisis sobre la movilización social el territorio aparece como una categoría central y transversal en sus luchas que, para el caso de Colombia, cobra vital importancia frente a las correlaciones existentes entre conflicto armado y

modelo de desarrollo, generando procesos de desterritorialización. Frente a los cuales los movimientos populares construyen estrategias de resistencia ligadas a los espacios a que habitan, viven, sueñan y añoran, como base fundamental de sus vivencias territoriales.

La Segunda Parte de la tesis, titulada *“La conflictividad social y armada en Colombia 1982-2014”*, se estructura en los capítulos que se señalan a continuación y que conforman la base contextual para entender las correlaciones existentes entre el conflicto armado interno y la implementación del actual del modelo de desarrollo. En aras de comprender la configuración de los conflictos socio-territoriales identificados por las organizaciones populares en el Putumayo y Montes de María.

En el Capítulo 4, *“Aproximación a la conflictividad social y armada en el periodo de 1986-2002”*, nos adentramos en las dinámicas del conflicto armado a partir la década de los ochenta hasta el inicio del presente siglo, en particular, la expansión del movimiento insurgente, centrándonos en las dos principales guerrillas (FARC-EP y el ELN), y en la consolidación de los grupos paramilitares. Estos hechos generaron una profunda reconfiguración de los territorios y de las relaciones de poder, en el marco de la disputa por establecer o alterar los órdenes políticos, sociales, económicos y culturales, en la escala local y regional.

Para el análisis tomamos como referencia los trabajos del Grupo de Memoria Histórica (GMH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en donde realizan minucioso análisis del conflicto social armado, en el cual identifica diferentes períodos según las dinámicas de la confrontación y el comportamiento de los actores involucrados. Asimismo, recurrimos a autores que han abordado el estudio del conflicto armado desde una perspectiva espacial como Fernán González (2009, 2014), Daniel Pécaut (2004, 2014), Luis Gabriel Salas (2010, 2016), Camilo Echandía (2006, 2017) y Jerónimo Ríos (2016), entre otros.

En el Capítulo 5, *“A medio camino entre la guerra y la paz”*, nos referimos a las diferentes narrativas y estrategias gubernamentales en el tratamiento del conflicto armado y las políticas de paz, entendiendo que tienen un efecto no solo sobre las dinámicas del conflicto en los territorios sino sobre el tratamiento que se le da a los actores políticos y sociales que expresan posiciones divergentes al establishment, en particular, nos referimos a los actores sociales populares. De esta manera, observamos que los gobiernos han adoptado estrategias que transitan desde posiciones más negacionistas de la naturaleza de la confrontación armada a enfoques que reconocen el carácter político de la guerra y, en este sentido, la necesidad de una solución política negociada.

En el Capítulo 6, “*Reconfiguración del conflicto armado 2002-2014 y la consolidación del modelo extractivo-exportador*”, abordamos las principales estrategias y programas de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y del primer mandato de Juan Manuel Santos (2002-2014) en relación con el conflicto social y armado y las políticas de desarrollo. Es importante señalar, que este periodo se corresponde con los estudios de caso que se abordan en la Tercera Parte de la investigación. Por lo tanto, tiene una extensión más amplia que los anteriores capítulos. Para el análisis, recurrimos a diferentes fuentes bibliográficas primarias y secundarias.

La finalidad de este capítulo es establecer unas características espacio-temporales que nos permitan hacer una reflexión amplia sobre las percepciones que construyen las organizaciones populares de los conflictos en sus territorios, y las tensiones que se generan entre las representaciones hegemónicas del espacio y los espacios de representación construidos por las organizaciones. Por otra parte, hacemos especial hincapié en las políticas de control social y militar del territorio desplegadas durante el gobierno de Álvaro Uribe, en particular, la política de Seguridad Democrática. Piedra de toque de sus planes de gobierno que da continuidad al Plan Colombia implementado el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Asimismo, se aborda el fallido proceso de paz con los grupos paramilitares y las implicaciones de la negociación con actores armados pro-sistémicos. Y, la relación entre la estrategia de seguridad y las políticas de desarrollo.

En el apartado referido al primer mandato de Juan Manuel Santos, nos detenemos en las implicaciones del cambio de estrategia en relación con el conflicto social armado, que propicia un alejamiento de las huestes uribistas y abre el camino para la negociación política con las FARC. La decisión de emprender los diálogos de paz implicó una reconfiguración de las relaciones poder tanto en la escala nacional como en la escala regional, que incidió en el comportamiento de los actores armados regulares e irregulares, en un juego de posicionamiento político de cara al conjunto de la sociedad. Por otra parte, nos detenemos en las llamadas *locomotoras del desarrollo* debido al impacto que tuvieron en el conflicto social y que se ven reflejadas en la agenda de la movilización de las organizaciones populares.

En la tercera y cuarta parte de la tesis, abordamos respectivamente las *percepciones populares de los conflictos socio-territoriales en el Putumayo y en Montes de María*. Para ello, nos centramos en la información recabada durante el trabajo de campo, en particular en las entrevistas en profundidad realizadas a líderes y lideresas de las organizaciones. Nos interesa

evidenciar las voces populares, que han sido invisibilizadas y subalternizadas por los discursos dominantes. La narrativa hegemónica de negación del conflicto armado durante los gobiernos de Álvaro Uribe y la criminalización de las voces divergentes profundizaron en estas dos zonas del país los conflictos sociales, aunque con diferencias significativas debido a los contextos territoriales y a la geometría de poder presente en cada uno de los lugares. Estas lecturas son puestas en contexto con las dinámicas del conflicto armado y con las diferentes políticas de desarrollo que se desplegaron en los territorios.

La sección referida al departamento del Putumayo se estructura en cuatro capítulos. En el Capítulo 7, se hace una breve caracterización del departamento, de las organizaciones sociales populares con las que se realizó el trabajo de campo y las percepciones de populares sobre el conflicto social y armado. El Capítulo 8, se estructura en función de un primer eje de conflictividad identificado por las organizaciones, el control social y militar del territorio. Este dominio y control es ejercido por el Estado a través de las políticas de seguridad acompañadas de una estrategia de intervención social, los grupos paramilitares y la guerrilla de las FARC. Al respecto, en las entrevistas a líderes y lideresas se hace especial hincapié en las acciones de la Fuerza Pública y de los grupos paramilitares, como los principales actores que ejercen una fuerte presión sobre las comunidades y los territorios.

En el Capítulo 9, se analizan tres ejes de conflictividad identificados por las organizaciones: narcotráfico y cultivos de uso ilícito, las políticas minero-energéticas y los proyectos de infraestructura. Tanto la economía de la droga como la las políticas de desarrollo implementadas por los gobiernos de los presidentes Uribe Vélez y Santos Calderón reconfiguraron los territorios y generaron procesos de desterritorialización, frente a los cuales las comunidades articularon procesos de resistencia, a través de redes comunitarias y organizativas. Sin embargo, la violencia generada en el departamento desarticuló buena parte del tejido social.

En el Capítulo 10, *“Propuestas de construcción de paz. Plan integral de desarrollo campesino”*, hacemos referencia a la agenda territorial de las organizaciones sociales populares del Putumayo. A partir de las valoraciones que realizaron los diferentes sectores populares y de sus necesidades inmediatas, las organizaciones tejieron una serie de propuestas enfocadas hacia el desarrollo de sus proyectos vitales y societales. De esta manera, nos enfocamos de manera particular, en la propuesta construida en el marco del proceso intersectorial de la *Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Bota Baja Caucana y Cofanía- Jardines de Sucumbíos*.

Es importante señalar, que el origen de la Mesa se encuentra en las organizaciones del Putumayo, sin embargo, en un ejercicio de articulación con otras experiencias se extendió a otros territorios en donde se presentaban conflictos similares.

En la Cuarta Parte de la tesis se analizan las percepciones populares de los conflictos de la subregión de Montes de María, localizada en la región Caribe. En el Capítulo 11, se realiza una breve caracterización del territorio, de las organizaciones sociales consultadas y de las narrativas que elaboran sobre el conflicto. Es importante señalar, que al igual que en el Putumayo, en el apartado de caracterización de las organizaciones incluimos los relatos en donde describen los procesos organizativos. Los Capítulos 12 y 13 se dedican a hacer un análisis de los principales ejes sobre los cuales se estructuran los conflictos socio-territoriales en la Serranía de San Jacinto: control militar y social del territorio, inequitativa distribución de la tierra asociada a los agronegocios y a los proyectos extractivos. Finalmente, el Capítulo 14, se reflexiona sobre la construcción de una política pública para la defensa del territorio elaborada por la *Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María*.

PARTE I. TERRITORIO Y MOVIMIENTOS SOCIALES

El marco teórico de la investigación, se estructura en dos pilares centrales. En el primero, se definen los conceptos de espacio, territorio y territorialidad a partir de los aportes de Henri Lefebvre y de Claude Raffestin. En el segundo, se abordan los elementos que consideramos centrales para el análisis propuesto desde las teorías clásicas de movimientos sociales y del pensamiento crítico latinoamericano.

CAPÍTULO 1. Espacio, territorio y territorialidad

Este apartado teórico está enfocado a la delimitación de los conceptos de espacio, territorio y territorialidad, entendiendo que la acción colectiva de los movimientos sociales populares debe comprender una perspectiva espacio-temporal si se quiere interpretar toda su complejidad y diversidad.

Anthony Giddens en sus estudios sobre la modernidad, señalaba que las categorías tiempo y espacio son centrales para la comprensión de las dinámicas institucionales que configuran la conformación de la modernidad tardía. De esta manera, plantea que desde la geografía se han hecho contribuciones valiosas relacionadas con la teoría social (Giddens, 1984, 1999).

No obstante, Soja señala que el análisis geográfico también se ha visto en una suerte de “subordinación” epistémica con respecto a la historia⁶⁸. Esta circunstancia ha ensombrecido la valoración de los supuestos geográficos en la estructuración de la praxis social y en la formación del pensamiento. En efecto, Soja (1989) plantea que el historicismo no ha permitido ver la objetividad material del espacio como un factor que incide en la estructura de la sociedad y en la creación de subjetividades, haciendo parte activa de la conciencia colectiva. En este sentido, el autor señala que la espacialidad debe ser entendida como la praxis de la Geografía Humana (p. 130).

De tal manera, los planteamientos realizados por Soja nos llevan a interpretar el análisis geográfico principalmente desde dos premisas: primero, el espacio hace parte de una construcción social e histórica; segundo, la sociedad es espacialmente construida. Estas dos ideas articulan los estudios geográficos actuales y se encuentran cada vez más presentes en las teorías críticas de las ciencias sociales, ampliando los objetos de estudio y contribuyendo a la comprensión de la

⁶⁸ Foucault también llama la atención sobre la subordinación de la geografía a la historia y de la miopía de los análisis que obvian las relaciones espaciales por no entender la relevancia que tiene para comprender el ejercicio del poder. De esta manera, el autor plantea:

El espacio es lo que estaba muerto, fijado, no dialéctico, inmóvil. Por el contrario, el tiempo era rico, fecundo, vivo, dialéctico. La utilización de términos espaciales tiene un cierto aire de antihistoria para todos aquellos que confunden la historia con las viejas formas de la evolución, de la continuidad viviente, del desarrollo orgánico, del progreso de la conciencia o del proyecto de la existencia. Desde el momento en que se hablaba en términos de espacio se estaba contra el tiempo. Se «negaba la historia», como decían los tontos, se era un «tecnócrata». No comprendían que, en la percepción de las implantaciones, de las delimitaciones, del perfilamiento de los objetos, de los gráficos, de las organizaciones de los dominios, lo que se hacía aflorar eran los procesos por supuesto históricos- del poder. La descripción espacializante de los hechos del discurso desemboca en el análisis de los efectos de poder que están ligados a ellos. (Foucault, 1979 [1976], pp. 117-118)

complejidad social. El análisis espacial ya no se incorpora a los trabajos solo de manera referencial o para hacer alusión a los fenómenos derivados de la globalización como simples metáforas territoriales⁶⁹.

En la presente investigación asumiremos las dos premisas señaladas. Dejaremos de lado las teorías de espacio como receptáculo o continente, las cuales lo consideran simplemente como un escenario en donde se localizan sistemas de objetos y sistemas de acciones⁷⁰. Perspectiva que implica interacciones de tipo unidireccional, en donde el espacio no ejerce ninguna influencia sobre los procesos económicos y sociales, negándole de esta manera su contenido político (Hiernaux y Lindon, 1993, p. 90). La visión de espacio como contenedor se encuentra sustentada en la geometría euclidiana. La comprensión del espacio es medida en función de la longitud y de la latitud; por tanto, el espacio es entendido como una unidad, de manera homogénea. Se puede afirmar que esta perspectiva se encuentra arraigada en un fuerte racionalismo cartesiano⁷¹.

La segunda teoría que se descartará para la investigación por carecer de fuerza explicativa es la del espacio como reflejo, entendido como:

[...] aquellos enfoques para los cuales el espacio es casi un espejo de la sociedad y las relaciones sociales, es decir, que todo cambio social es reflejado inmediatamente en forma directa en el espacio. En consecuencia, en esta perspectiva el espacio también es visto pasivamente como algo capaz de reflejar cambios en otras esferas de la vida social. (Hiernaux y Lindon, 1993, p. 91)

Desde esta óptica, la relación entre espacio y los procesos de reproducción social y material de la sociedad también se plantean como una relación de causalidad directa.

La presente investigación se decanta por la perspectiva del espacio desarrollada desde la geografía crítica en la que confluyen otras ciencias sociales, como la sociología y la ciencia

⁶⁹ Como señala Raffestin “la Geografía Humana consiste en hacer explícito el conocimiento del conocimiento y de la práctica que los hombres tienen de esta realidad que se denomina ‘espacio’” (Raffestin, 2011 [1980], p. 9). Por tanto, el análisis espacial y geográfico no puede prescindir de la agencia como productor del mismo, de la misma manera que el espacio es productor de las relaciones sociales.

⁷⁰ Utilizamos la idea de sistemas de objetos y sistemas de acciones en referencia a la conceptualización del espacio utilizada por Milton Santos en la última etapa de su obra, en donde entiende el espacio como la interacción entre esos dos sistemas con el objetivo de descentrar la realidad social de la estructura y enfatizar la acción de los sujetos como “agencia” (Santos, 1996).

⁷¹ Al respecto, Raffestin (2011 [1980]) señala que:

La identificación del espacio se ha hecho con frecuencia en términos de superficie, de distancias, de propiedades, etc. Y en todo caso, una cosa es común en la mayoría de esos análisis: su carácter geométrico, en el sentido que se entiende al espacio como un conjunto de elementos simples, combinables, manipulables. Esta práctica, heredada del pensamiento griego, obliga a construir representaciones que suponen otorgar atención a las escalas. (p. 37).

política, desde la cual se cuestionan tanto los enfoques espaciales señalados anteriormente como las premisas contenidas en los grandes paradigmas geográficos.

Nogué y Rufí (2001) señalan que los estudios inscritos en esta corriente se centran en una comprensión crítica de los preceptos epistemológicos que aparentemente se consideran sólidos e incontestables, con el objetivo de ampliar los objetos y perspectivas de investigación, para revelar de esta manera los mecanismos de poder inscritos en las formas de interpretación dominantes del espacio (p. 25).

El geógrafo Yves Lacoste en su libro *La geografía un arma para la guerra* se refiere precisamente a la instrumentalización de la geografía por parte del pensamiento dominante, así como a la importancia de comprender las relaciones de poder subyacentes en la utilización de la ciencia, a saber:

Ante toda ciencia, ante todo saber es obligatorio plantearse una cuestión epistemológica previa: el proceso científico va unido a una historia y debe ser visto por una parte en sus relaciones con las ideologías y por otra como práctica o como poder. Plantear de entrada que la geografía sirve, en primer lugar, para hacer la guerra no supone que sólo sirva para dirigir operaciones militares; sirve también para organizar los territorios no sólo en la previsión de las batallas contra tal o cual adversario, sino también para controlar mejor a los hombres sobre los cuales ejerce su autoridad el Estado. (Lacoste, 1977 [1976])

Por tanto, el enfoque en el que se centra la presente investigación pone de manifiesto precisamente las posibles relaciones existentes entre poder y espacio, así como el cuestionamiento de conceptos que han dominado los análisis geográficos clásicos.

Se parte de la idea de espacio como un elemento integrante de la totalidad social, puesto al mismo nivel que los demás elementos que la componen. Milton Santos se refiere a esta relación cuando plantea que:

Consideramos el espacio como una instancia de la sociedad, al mismo nivel que la instancia económica y la instancia cultural-ideológica. Esto significa que, en tanto que instancia, el espacio contiene y está contenido por las demás instancias, del mismo modo que cada una de ellas lo contiene y es por ellas contenida. (Santos M., 1986, p. 7)

Entendiendo que la idea de totalidad encierra contradicciones, conflictos y tensiones, es, por tanto, dinámica y cambiante. No debemos olvidar que el conflicto es un elemento constitutivo en la producción del espacio y en las configuraciones territoriales. En este sentido, el espacio se estructura como una dimensión que es producida socialmente e interviene en la configuración de la diferencia. Sin embargo, el espacio no solo es producido, sino que a su vez también es

condicionante de la producción y la reproducción social, procesos que se encuentran íntimamente relacionados y que se definen mutuamente. Por tanto, el espacio es entendido como una estructura subordinante-subordinado. Soja, destaca el carácter espacial intrínseco de los seres humanos y señala esa relación compleja con el entorno de la siguiente manera:

Por un lado, nuestras acciones y pensamientos modelan los espacios que nos rodean, pero al mismo tiempo los espacios y lugares producidos colectiva o socialmente en los cuales vivimos, moldean nuestras acciones y pensamientos de un modo que sólo ahora estamos empezando a comprender. Si utilizamos términos familiares a la teoría social, podemos decir que la espacialidad humana es el producto del agenciamiento humano y de la estructuración ambiental o contextual. (Soja, 2018 [2000], p. 36)

Estimamos el espacio como esencialmente social, el cual contiene no solo un sistema de objetos naturales y/o artificiales que conforman el conjunto de la naturaleza, sino que engloba a la sociedad en sus diferentes sistemas de relaciones. Este enfoque nos impulsa a pensar cómo se estructuran los procesos de la espacialización en función de la fijación y acumulación en el espacio, a través de las decisiones y representaciones sociales que se llevan a cabo en diferentes momentos temporales. De esta manera, el espacio construido se conecta con las relaciones sociales que a su vez son producidas y reproducidas⁷² en un proceso constante de tensión/conflicto/contradicción propia de las dinámicas que conforman la totalidad social⁷³.

En este punto, retomamos a la geógrafa Doreen Massey cuando señala que el espacio es una construcción social y que las relaciones sociales de poder se inscriben en el mismo, por consiguiente:

[...] comprender la organización espacial de la sociedad, por tanto, es crucial. Es central para la comprensión de las maneras cómo funcionan los procesos sociales; para nuestra conceptualización de alguno de aquellos procesos, probablemente, y para nuestra capacidad para actuar sobre ellos políticamente, con certeza⁷⁴. (Massey, 1985, p. 12)

⁷² Milton Santos describe el proceso de espacialización de la siguiente manera:

Tenemos así, por una parte, un conjunto de objetos geográficos distribuidos sobre un territorio, su configuración geográfica o su configuración espacial, y el modo como esos objetos se muestran ante nuestros ojos, en su continuidad visible, esto es, el paisaje; por otra parte, lo que da vida a esos objetos, su principio activo, es decir, todos los procesos sociales representativos de una sociedad en un momento dado. Esos procesos, resueltos en funciones, se realizan a través de formas. Estas formas pueden no ser originariamente geográficas, pero terminan por adquirir una expresión territorial. (Santos M. , 1986, p. 8)

⁷³ Oslender (1999) señala que “el concepto de espacio es y siempre ha sido político y saturado de una red compleja de relaciones de poder/saber que se expresan en paisajes materiales y discursivos de dominación y resistencia”. (p. 18)

⁷⁴ Traducción propia.

En este sentido, la autora nos invita a pensar los procesos de espacialización y territorialización de las relaciones sociales y de poder; en el marco de una reflexión compleja en la que interactúan espacio y tiempo, manifestada en la diversidad de formas sociales.

Para seguir avanzando en la comprensión en este marco complejo a continuación nos centraremos, de manera particular, en las aportaciones desarrolladas por Henri Lefebvre⁷⁵ y por Claude Raffestin⁷⁶.

El primero dedicó gran parte de su obra a analizar los problemas del mundo contemporáneo desde el marxismo. La propuesta teórica de Lefebvre sobre la producción del espacio proporciona un marco adecuado para introducir la sensibilidad espacial al análisis de la acción de los actores sociales (Oslender, 2008). Lefebvre incorpora la espacialidad al pensamiento marxista, centrado en la variable temporal, para abordar las dinámicas del capitalismo y las relaciones de producción⁷⁷. Siempre desde una posición crítica y cuestionando los propios principios del pensamiento marxiano.

La contribución de su pensamiento a la comprensión de la producción del espacio ha sido clave para los estudios de la geografía crítica que cuestionan los conceptos hegemónicos de la Geografía Política caracterizados principalmente por su carácter reduccionista y simplificador de la sociedad, en donde el Estado se convierte en la piedra angular del análisis. Lefebvre aborda la problemática del espacio desde una perspectiva transformadora que ha permitido desentrañar la interacción entre espacialidad, sociedad e historia manifiesta en los procesos de producción y reproducción social.

Por su parte, Claude Raffestin es considerado uno de los principales representantes de la geografía del poder junto con Paul Claval (1978). En su obra se puede observar la influencia del

⁷⁵La teoría espacial del Henri Lefebvre se desarrolla en primera instancia en su libro *Espacio y Política: el derecho a la ciudad* (Lefebvre, 1976 [1972]) y, posteriormente en su libro *La Producción del Espacio* (primera edición 1974). (Lefebvre, 2013 [1974]).

⁷⁶La teorización sobre el territorio y la territorialidad de Claude Raffestin se concentra en su obra *Por una geografía del Poder*, cuya primera edición se publica en 1980. La divulgación de sus ideas en el ámbito de la geografía fue limitada debido a que la obra no se tradujo sino hasta tiempo después al inglés y mucho más tarde al castellano.

⁷⁷La preeminencia de la historia sobre el espacio es explicada por Paul Claval de la siguiente manera:

Los marxistas nunca habían tenido demasiado en cuenta el espacio. Marx se había interesado, en las primeras fases de su reflexión, por espacios geográficos de la realidad social y económica, la explotación de los espacios periféricos por regiones centrales del planeta en la época de la acumulación primitiva, y la oposición ciudades/campos, por ejemplo. En *El Capital*, los había dejado en un segundo plano, puesto que era el precio que tenía que pagar por enfocar la historia de forma dineraria hacia una ruptura y darle a su mensaje un contenido revolucionario. Más adelante, lo único que retuvo la atención de los investigadores marxistas fue el tema de la oposición centro/periferia”. (Claval, 2003, págs. 30-31)

pensamiento de Lefebvre y de Foucault. Aborda la relación existente entre el poder, entendido desde la perspectiva de este último autor, y la apropiación del espacio en lo que considera la conformación del territorio. Desde esta perspectiva, las relaciones espaciales son en definitiva relaciones de poder. Por tanto, deben constituir el problema central de la Geografía Política, tomando distancia de las visiones ortodoxas que consideran la equivalencia entre Estado y poder, derivada de la influencia del pensamiento ratzeliano⁷⁸.

Tanto la teoría de producción (social) del espacio (social) de Lefebvre como la conceptualización del territorio y la territorialidad de Raffestin, nos serán útiles para poner de manifiesto los procesos de dominación y las tensiones existentes en los diferentes momentos de construcción del espacio y en la apropiación del mismo desde las percepciones populares de los conflictos socio-territoriales en Colombia.

1.1. La producción (social) del espacio (social): Henri Lefebvre

Como se señala en el apartado anterior, los aportes de Lefebvre han contribuido de manera importante a la espacialización de la teoría social. La influencia ejercida por el sociólogo francés es palpable en los trabajos de Claude Raffestin, David Harvey, Doreen Massey, Edward Soja, Milton Santos, entre otros autores, quienes han abordado las dinámicas espaciales desde diferentes líneas de investigación, contextos geográficos y enfoques de pensamiento que van desde el estructuralismo marxista hasta las perspectivas posmodernas.

El pensamiento provocador de Lefebvre se sustenta en el desarrollo de una teoría unitaria del espacio (físico, social y mental) en donde el mismo es considerado como un producto social (político) (Lefebvre, 2013 [1974]), 1976 [1972]). Este concepto se opone, por tanto, a la percepción de un espacio aséptico, neutral, objetivo, inmutable, y racional, que, en definitiva, oculta las relaciones de poder asimétricas que se inscriben en el mismo. A este respecto, Lefebvre

⁷⁸Sin embargo, Raffestin (2011 [1980]) reconoce los aportes de Ratzel a la disciplina y lo novedoso de algunos de sus planteamientos:

Lo que parece novedoso es aquello que Ratzel. voluntaria o involuntariamente. dejó en la sombra. En efecto, si se consideran sólo los marcos conceptuales, dejando de lado las transformaciones que sucedieron en el mundo desde el principio del siglo XX, así como los avances metodológicos de la Geografía Política debidos al uso del lenguaje lógico-matemático, se puede concluir que el pensamiento actual de la Geografía Política se produce, *grosso modo*, en los mismos moldes que los utilizados por Ratzel". (pág. 15)

La afirmación del autor se debe entender en el marco de la evolución de la disciplina en los años en que publica su obra *Pour une géographie du pouvoir* (1980).

plantea la necesidad de tomar distancia de las ciencias espaciales que se mueven entre la descripción y la fragmentación no solo por razones epistemológicas sino por las cuestiones ideológicas intrínsecas a estas perspectivas. Así lo señala:

[...] se describen cosas en el espacio o los fragmentos del espacio. Se recortan los espacios parciales en el espacio social. Se presenta así un espacio geográfico o etnológico, un espacio demográfico, un espacio informático, etcétera [...] Olvidamos que ese es el camino por el que nos adentramos en una fragmentación deseada no sólo por el lenguaje y por los especialistas, sino por la sociedad existente que se divide a sí misma en espacios heteróclitos en el seno de una totalidad severamente controlada y en ese mismo sentido homogénea [...]. Estas representaciones parciales y segmentadas terminan por extraviar el conocimiento, integrado inintencionalmente en la sociedad existente, operando en sus marcos. (Lefebvre, 2013 [1974], p. 146)

Lefebvre, a través del desarrollo de su teoría, pone de manifiesto las contradicciones existentes entre la percepción, la concepción y la vivencia del espacio a través del desarrollo de una dialéctica espacial, la cual explicaremos más adelante. Ahora nos interesa resaltar que la teoría unitaria del espacio propuesta por el autor no evita los conflictos y las contradicciones inherentes a la producción del mismo. Por el contrario, le interesa comprender las polémicas y las controversias en el seno del conocimiento que constituyen los dispositivos de la producción del espacio.

De tal manera, el autor plantea que el objetivo de su proyecto no se centra en “producir un (el) discurso sobre el espacio, sino mostrar la producción del espacio mediante la reunión en una teoría de los diferentes tipos de espacios y las modalidades de su génesis” (Lefebvre, 2013 [1974], p. 77).

Por lo tanto, para comprender la producción del espacio es necesario adentrarse tanto en su materialidad asociada a los procesos económicos como a la reproducción social. Es decir, la idea de espacialidad incluye tanto el “espacio mental” sustentado en percepciones, ideologías e imaginación como el “espacio material” de actividad económica, la regulación estatal y la infraestructura física (Miller & Martin, 2000). En este mismo sentido, Soja señala que la espacialidad es un producto social sustanciado y reconocible; es parte de una “segunda naturaleza”, que es incorporado a medida que el espacio físico como el psicológico son socializados y transformados (Soja, 1989).

La propuesta analítica de Lefebvre (Lefebvre 2013 [1974]) es producto de un profundo análisis de las relaciones de poder que subyacen a la modernidad. En este sentido, señala tres

elementos del contexto de mitad del S.XX que intervienen en esa producción del espacio y que marcan su pensamiento: primero, la consolidación del Estado a escala mundial, a través de la planificación y la regulación de la vida social, imponiendo medidas análogas que reducen la heterogeneidad y los conflictos, sustentada en los conocimientos y técnicas racionales. Segundo, la existencia de fuerzas que disputan la racionalidad estatal y se manifiestan en la acción contestataria, la resistencia y la afirmación en la adversidad. Finalmente, el tercer elemento, es la multiplicidad de formas que adopta la lucha de la clase obrera, manifiesta en periodos de latencia y visibilidad⁷⁹. Estos últimos abordados para el estudio de los movimientos sociales por Alberto Melucci, al que hacemos referencia en el siguiente capítulo de la presente investigación.⁸⁰ Por tanto, este Lefebvre plantea que el objetivo de su obra radica precisamente en:

Promover la confrontación entre las ideas y las proposiciones que esclarecen el mundo moderno, incluso aunque no gobiernen su orientación; tomar esas proposiciones no como tesis o hipótesis aisladas, como pensamientos que después son escudriñados, sino como prefiguraciones situadas en el umbral de la modernidad. (Lefebvre, 2013 [1974], p. 84)

De esta manera, a lo largo de su trabajo controvierte las teorías espaciales sustentadas en la modernidad, evidencia los conflictos y las relaciones de poder que subyacen, permitiendo que vayamos más allá del espacio aséptico/racional/aceptado/concebido para estructurar instrumentos teóricos útiles para comprender la multiplicidad de relaciones que se articulan/superponen/colisionan en la construcción de la espacialidad del capitalismo. Todo ello, teniendo en cuenta que en la economía-mundo capitalista el dominio simultáneo del tiempo y el espacio constituye un elemento sustancial del poder social sobre la vida cotidiana.

⁷⁹ Como señala Harvey (Harvey, 2013 [2012]), Lefebvre en su libro *El derecho a la ciudad* invoca a la clase obrera como un agente de cambio revolucionario, incluyendo en esta categoría a trabajadores urbanos situados fuera de las fábricas, posición que produjo fuertes críticas desde pensadores marxistas más ortodoxos. La constitución de una clase obrera diversa implica, por tanto, una formación fragmentada, dividida, con diferentes intereses, necesidades y discursos, una clase fluida y desorganizada más que una formación social monolítica. Harvey apunta precisamente que el análisis realizado por el filósofo francés efectivamente se confirma en el contexto actual bajo las dinámicas actuales de la acumulación de capital, en donde los trabajadores precarios han sustituido al trabajador fabril.

⁸⁰ Para Lefebvre la transformación de la lucha obrera pone sobre la mesa que el pensamiento marxista no se encuentra en el ostracismo y señala su evidente necesidad teórica para comprender los cambios de la modernidad. Al respecto de estas tres consideraciones es importante anotar que sirven tanto para leer la teoría de Lefebvre en un contexto espacio-temporal concreto como para comprender las bases sobre las cuales se estructura su propuesta teórica.

1.1.1. ¿Qué significa que el espacio (social) es un producto (social)?

El concepto de espacio (social) como producto (social) se encuentra en el centro de la teoría de Lefebvre como hemos venido señalando a lo largo de este apartado. La idea de “producto social” se relaciona con el argumento referido según el cual el conjunto de las relaciones sociales (de clase, familiares, comunitarias, económicas o institucionales) permanecen en la abstracción hasta el momento de ser espacializadas, por lo tanto, sustentadas en relaciones espaciales materiales y simbólicas. El transcurso hacia la materialización y contextualización real e imaginaria se encuentra inserto en dinámicas cambiantes, conflictivas, tensas que evidencian las pasiones y los deseos, los diferentes proyectos políticos e ideológicos de los agentes sociales e institucionales. Las tensiones y contradicciones derivadas de la construcción de la espacialidad tanto material como simbólica son abordadas por Lefebvre en el proceso que denominó como la producción (social) del espacio (social) (Soja, 2018 [2000], pp. 38-39).

Para el autor el espacio (social) no debe ser entendido como un elemento más, como un producto indistinto de otros, dentro de la totalidad. De esta manera, a lo largo de su obra manifiesta la importancia de no considerar al espacio como un objeto, sino que rescata su carácter relacional y conflictivo:

El espacio (social) [...] más bien envuelve a las cosas producidas y comprende sus relaciones en su coexistencia y simultaneidad, en su orden y/o desorden (relativos). En tanto que resultado de una secuencia y de un conjunto de operaciones, no puede reducirse a la condición de simple objeto. (Lefebvre, 2013 [1974], p. 129)

El espacio social implica diversas representaciones, imaginarios, conocimientos; limita y excluye determinadas acciones y conductas asociadas a la producción y al disfrute. Asimismo, contiene diferentes objetos (naturales y sociales) que estructuran una suerte de flujos (flujos semióticos, flujos materiales y flujos sociales). (Deleuze & Guattari, 2004 [1980]) y formas reticulares. De tal manera, una teoría crítica del espacio cobra sentido cuando pone de manifiesto las diferentes significaciones, las insignificaciones y/o los sobresentidos sobre los cuales se constituye.

Lefebvre (2013 [1974]) señala que comprender la construcción del espacio (social) como producto (social) tiene cuatro implicaciones teóricas.

En primer lugar, el espacio-naturaleza se erige en escena, en el decorado en el que confluye cada objeto natural, que se valora convirtiéndose en símbolo. La naturaleza es considerada la materia prima sobre la que operan las diferentes fuerzas productivas de las sociedades para construir su espacio. Al respecto, la visión espacio - naturaleza del autor se relaciona con la apropiación humana de la misma que se puede hacer en un plano material, conceptual y/o simbólico. Por tanto, los recursos naturales también serán “producidos” socialmente en el marco de ese proceso de apropiación. Finalmente, los recursos naturales serán aquellos que obtengan un valor de utilidad según las necesidades productivas de los ciclos económicos y de los procesos sociales y culturales (Leff, 1995).

Lefebvre en su análisis de la relación espacio-naturaleza en el proceso de la acumulación primitiva de capital, señala precisamente cómo la historicidad quebró definitivamente la naturalidad, implantando el espacio de acumulación (de todas las riquezas y recursos: conocimientos, técnicas, objetos preciosos, arte y símbolos). Por ello, argumenta que su valor de uso se ha convertido en valor de cambio. Se destruye y se transforma la naturaleza según las necesidades de la sociedad neocapitalista. El espacio-naturaleza es sustituido por el espacio-producto. En esta misma línea, Raffestin (2011 [1980]) señala que la naturaleza vista como recurso es o puede ser un instrumento de poder, por tanto, en la actualidad no hay bienes libres. Lo que existen son bienes a los que el autor califica como políticos, debido a que responden a unas “necesidades” colectivas, en tanto que las mismas no son exógenas sino endógenas a los sistemas técnico-económicos.

En este sentido, nos parece relevante retomar la idea de Donna Haraway acerca de la construcción social de la naturaleza. No profundizaremos sobre este concepto, pero nos interesa señalar cómo esta autora plantea, además de esa relación socio-económica acotada por Lefebvre y por Raffestin, la idea de que la naturaleza se encuentra completamente atravesada por la cultura y por las prácticas discursivas en una relación dialéctica con esas dinámicas del capitalismo. Tanto la cultura como la retórica, se encuentran asociadas a unos discursos dominantes sustentados en la idea de raza, en las prácticas del colonialismo, en la clase, en el género y en la sexualidad (Haraway, 1995 [1991])⁸¹. En donde los grupos cumplen determinadas funciones derivadas entre

⁸¹ El trabajo de Donna Haraway se realiza desde una perspectiva posmoderna y ecofeminista, pero aborda también el problema estructural del capitalismo sobre las relaciones de dominación sustentadas en la raza, el género y la sexualidad. Aunque la perspectiva de Lefebvre y de Haraway son diferentes, parten de una idea relacional del poder.

otros elementos de una división del trabajo en las diferentes escalas: cuerpo, hogar, local, nacional, global.

Segunda implicación. Cada sociedad es un conjunto que engloba los modos de producción con sus características/diversidades/particularidades y, por tanto, produce un espacio diferenciado.

En este punto el autor señala que el espacio social contiene y asigna lugares apropiados a:

(1) las relaciones sociales de producción, a saber, las relaciones biofisiológicas entre los sexos, las edades, con la específica organización familiar; (2) las relaciones de producción, i.e. la división del trabajo y su organización, y por tanto a las funciones sociales jerarquizadas. Estos dos conjuntos de relaciones no pueden separarse: la división del trabajo repercute en la familia y la sostiene; inversamente, la organización familiar interfiere en la división del trabajo. No obstante, el espacio social ha de diferenciar estas actividades -no sin dificultades- con objeto de proceder a su localización. (Lefebvre, 2013 [1974], p. 91)

Lefebvre señala que con el neocapitalismo moderno las interacciones entre los diferentes niveles se complejizan; por consiguiente, asistimos a una relación en la que intervienen no solo los dos niveles señalados, sino que se introduce un nuevo elemento. Así, tenemos: la reproducción biológica (la familia), la reproducción de la fuerza de trabajo (la clase obrera entendida en un sentido amplio), y la reproducción de las relaciones sociales de producción, referidas a las relaciones constitutivas de la sociedad capitalista que se imponen y se reclaman como tales. Por tanto, estima el autor que el papel del espacio en este triple ordenamiento se debe comprender en estos ámbitos, de acuerdo a su especificidad.

Estos tres niveles de relaciones sociales (producción y reproducción social) están permeados por las representaciones simbólicas del espacio social que permiten a su vez que ese triple ordenamiento se mantenga en estado de coexistencia⁸². Por tanto, el espacio aglutina tanto

En este sentido, nos parece interesante retomar el concepto de naturaleza construida discursivamente y la necesidad de deconstruir las lógicas técnicas y racionales que sustentan el discurso científico. Al respecto, Haraway señala:

Parte de nuestra reconstrucción como seres humanos socialistas y feministas consiste en rehacer las ciencias que construyen la categoría «naturaleza» e inscribir sus definiciones en la tecnología. La ciencia se ocupa del conocimiento y del poder. En estos tiempos, la ciencia natural define el lugar del ser humano en la naturaleza y en la historia y provee los instrumentos de dominación del cuerpo y de la comunidad. Al construir la categoría naturaleza, las ciencias naturales imponen límites a la historia y a la formación personal. Por lo tanto, la ciencia forma parte de la lucha por la naturaleza de nuestras vidas. (Haraway, 1995 [1991], p. 72)

Esta propuesta de Haraway se articula con la noción de conocimiento situado como conocimientos marcados. Con esta expresión se refiere a que los conocimientos no se pueden desligar del contexto y de la subjetividad en que se producen. Es decir, es un concepto profundamente espacial que se puede relacionar con la idea de espacio (social) como producto (social) desarrollada por Lefebvre.

⁸² El autor plantea que:

Las representaciones de las relaciones de reproducción consisten en símbolos sexuales, de lo femenino y de lo masculino, acompañados o no de símbolos de la edad, la juventud y la senectud. Se trata de una

las manifestaciones de estas interacciones en lugares asignados, como las diferentes representaciones de las relaciones de poder a través del significado y disposición de los objetos, los cuales no son constituidos de manera aleatoria.

Tercera implicación. Si se concibe el espacio como un producto (social) entonces el conocimiento de los diferentes agentes sobre el mismo reproducirá e interpretará tal proceso de producción. Esto significa que la comprensión e interés se desplaza de los objetos en sí mismos hacia la producción de los mismos, postura que tiene un fuerte componente constructivista; por consiguiente, el análisis no se reduce a los “objetos” sino que el espacio es visto en su totalidad a través de los diferentes procesos que lo producen (en el ámbito material, simbólico, de la imaginación), lo que no significa que el autor plantee una disociación entre los dos elementos, objeto y espacio, sino que deben ser vistos como parte de una misma integridad. Estos elementos se verán de manera más clara cuando abordemos la propuesta de dialéctica del espacio desarrollada por el autor.

Cuarta implicación. Se refiere a la relación existente entre la producción del espacio y la historia. Lefebvre señala que la consecuencia de considerar el eje central de la hipótesis inicial como un proceso productivo es que habrá historia. En este sentido, el autor plantea una interacción entre el espacio y el tiempo en la que las dos variables se encuentran en un nivel de “igualdad”. Lefebvre no concibe la historia como la concatenación simple de diferentes hechos a través de un proceso lineal.

Por otra parte, Lefebvre estima que las transiciones de un modo de producción a otro inciden en la producción del espacio, entendiendo que una determinada fase de producción implica necesariamente una transformación en el espacio, adecuándolo a las nuevas necesidades del modelo económico y a las relaciones sociales que se instauran, así como a las contradicciones que se gestan en la interacción entre las mismas.

Ahora bien, la producción del espacio asociada a los cambios de un modo de producción tampoco se puede considerar como un proceso lineal en un espacio absoluto. En este sentido, nos parece relevante la metáfora de “rugosidad” utilizada en el cuerpo teórico de Milton Santos (1996). Para este pensador latinoamericano, las “rugosidades” ejemplifican las diferentes formas

simbolización que disimula más que muestra, más desde el momento en que las relaciones de reproducción se dividen, de un lado, en relaciones frontales, públicas, declaradas – y así pues en codificadas- y, del otro lado en relaciones ocultas, clandestinas, reprimidas [...]. (Lefebvre, 2013 [1974], p. 92)

espaciales que perduran en el tiempo, que condicionan las representaciones, las acciones, los imaginarios y la producción de formas presentes y futuras. Por tanto, en el espacio se presenta una superposición temporal, que resiste o se adapta a las nuevas funciones derivadas entre otros elementos de las transformaciones de la acumulación del capital y, por tanto, de la producción y reproducción social.

Las consideraciones de Lefebvre y Santos se relacionan con los medios de producción y con los recursos naturales que son de utilidad para esa nueva fase de acumulación de capital. Tales transformaciones generan una fuerte tensión sobre el entorno para extraer las materias primas y gestionar los residuos de la fabricación de las tecnologías, de los bienes y servicios que se producen⁸³.

Los dos autores apuntan a esas transformaciones del espacio (social) que se produce tanto en lo material como en lo simbólico, pero no de una manera uniforme ni unidireccional más bien se presentan superposiciones, contradicciones y tensiones que se estructuran en el ámbito de la representación⁸⁴. En este juego, los espacios dominantes caracterizados por una concentración de la riqueza y del poder intentan adaptar los espacios dominados a las nuevas necesidades, utilizando diferentes métodos de dominación y obstaculizando las diferentes formas de resistencia (Lefebvre, 2013 [1974]).

Para el pensador francés, el espacio del capitalismo se caracteriza por la coexistencia de una profunda contradicción. Por una parte, se asiste a una fragmentación del espacio que coloniza formas parceladas, medibles y cuantificables y, por otro lado, a la existencia de una fuerza totalizadora, homogeneizadora y jerárquica, operada por el Estado, el poder político, el mercado

⁸³ Al respecto, Harvey señala que: “se amplía así la extensión geográfica sobre la que el capitalista puede buscar nuevas ofertas de mano de obra, materias primas, etc. Si en determinado mercado no existe una capacidad de compra suficiente, hay que encontrar nuevos mercados ampliando el comercio exterior, promoviendo nuevos productos y estilos de vida [...]”. (Harvey, 2013 [2012], p. 23)

⁸⁴ Lefebvre afirma:

El modo de producción organiza –produce– su espacio y su tiempo (a la vez que algunas relaciones sociales). Es así como se realiza [...]. El modo de producción proyecta sobre el terreno esas relaciones, lo que actúa sobre ella. Sin que haya una correspondencia exacta, asignada de antemano, entre las relaciones sociales y las relaciones espaciales (o espacio-temporales). No se puede decir que el modo de producción capitalista haya “ordenado” desde el principio, por “inspiración” o inteligencia, su despliegue espacial, que en nuestro tiempo alcanza al planeta entero. Inicialmente lo que hubo fue una utilización del espacio existente [...]. Sin embargo, es un espacio nuevo en el que constituye el SXX a escala mundial, cuya producción sigue su marcha. El nuevo modo de producción (la nueva sociedad) se apropia del espacio existente, modelado anteriormente; esto es, lo dispone según sus fines. Son lentas modificaciones que van penetrando en una espacialidad ya consolidada y que en ocasiones la alteran con violencia. (Lefebvre, 2013 [1974], pp. 59-60)

mundial y el mundo de la mercancía, homogeneización que se traduce por y en el espacio abstracto (Lefebvre, 2013 [1974], p. 121).

Lefebvre considera el espacio abstracto como un instrumento político manipulado intencionalmente por el poder, el cual sostiene las dinámicas de acumulación del capital y las relaciones sociales derivadas de estos procesos. Es el espacio como realidad ontológica en sí misma. Es el espacio comercializado, construido a través de las relaciones sociales capitalistas, y territorializado por medio del poder estatal, militar y de policía⁸⁵ (Miller & Martin, 2000, p. 12).

Por tanto, bajo el manto de aparente homogeneidad del espacio abstracto, se ocultan las relaciones reales y los conflictos, con la intencionalidad de eliminar las diferencias y contradicciones. Este esfuerzo de consenso a través de un espacio instrumental lleva a lo que el autor ha denominado un “espacio diferencial”, que se engendra en el interior del primero y que lucha por tratar de desplegarse, aprovechando las fisuras que deja el espacio abstracto. Por ello, plantea que este espacio diferencial se mueve entre lo concebido y lo vivido, entre la representación y la práctica. Este espacio estaría arraigado en la no burocratización de la espacialidad.

A continuación, profundizaremos en estos aspectos relacionando esa tríada conceptual señalada por el autor lo que nos permitirá cerrar su propuesta teórica de producción del espacio desde sus materialidades y sus representaciones.

1.1.2. La triáléctica de la producción del espacio

Para Lefebvre, cada sociedad produce su propio espacio en relación con un momento histórico concreto. Este es un proceso dinámico y cambiante, entendido no desde una relación de naturaleza dialéctica sino triáléctica. El autor entiende que una relación de tipo dialéctico reduce los procesos a un dualismo: “una relación de dos términos se reduce a una oposición, a un contraste, a una contrariedad. Se define por efectos significativos: efecto de eco, de repercusión y de reflejo” (Lefebvre, 2013 [1974], p. 98). Por tanto, la tríada remite a unos procesos sociales más complejos que se configuran no solo desde la oposición.

Este trípode conceptual estaría constituido por lo que ha denominado: las prácticas espaciales, las representaciones del espacio y los espacios de representación. Cada una de estas

⁸⁵ Traducción propia.

dimensiones se encuentra asociada con un tipo de espacio: el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido, respectivamente. De esta manera, Lefebvre articula un modelo que pretende trascender la abstracción para captar las interacciones espaciales concretas, la cotidianidad de los sujetos. El espacio percibido se encuentra asociado con la experiencia material, que articula la realidad cotidiana y la realidad de la producción; por tanto, engloba la reproducción social y la producción económica de la sociedad.

El espacio concebido se refiere al ámbito de los expertos, los científicos, y los técnicos; en el que se producen los códigos de planificación, fragmentación y restricción del espacio capitalista. Finalmente, el tercero se corresponde con la experiencia de los habitantes y de los usuarios, en donde se aprecia un alto grado de subjetividad dado por su experiencia espacial, en donde se crean esos “espacios de la diferencia”.

Como se señala anteriormente, cada uno de estos espacios se articula a las representaciones de las relaciones de producción, que a su vez manifiestan las relaciones de poder presentes en el espacio. De esta manera, el autor pretende aterrizar a la cotidianidad un modelo abstracto a través de la identificación de tres “momentos” interconectados en la producción del espacio (Oslender, 2008, p. 72), los cuales pasamos a describir a continuación:

1. Las **prácticas espaciales** comprenden la producción y la reproducción social en los lugares específicos y conjuntos espaciales característicos de cada formación social, lo que permite una cierta cohesión y continuidad. Por lo tanto, se refiere a las maneras en que los habitantes generan, usan, y perciben el espacio en sus relaciones cotidianas que están impregnadas de “rugosidades”, elementos que unen los diferentes momentos temporales. De manera particular, las prácticas espaciales “asumen sus significados en las relaciones sociales específicas de clase, género, comunidad, etnicidad o raza y ‘son usadas’ u ‘operadas’ en el curso de la acción social”. (Harvey, 1989, p. 223 tomado de Oslender, 2008, p. 73) En este sentido, las prácticas espaciales estarían insertas en la burocratización y mercantilización de las relaciones sociales en el capitalismo y, por otra parte, ligadas a las experiencias espaciales cotidianas a través de las memorias, los apegos, las tradiciones de las comunidades que moldean una forma particular de percibir el espacio, de construir territorio. Elementos e interacciones de la propuesta de Lefebvre que son rescatados por Oslender (2008) en su estudio sobre las comunidades negras y el espacio en el Pacífico Colombiano.

Asimismo, las prácticas sociales se interpenetran y/o se yuxtaponen. Las fronteras entre las prácticas sociales no pueden ser entendidas como límites fijos, aunque las metáforas, códigos y símbolos utilizados para clasificar transmitan esa idea, característica del espacio abstracto del capitalismo, en donde el espacio (social) se reduce al objeto y/o a la mercancía.

2. Las **representaciones del espacio** se corresponden, como se señala anteriormente, al espacio concebido. Lefebvre señala que este sería el espacio dominante en cualquier sociedad vinculado a las relaciones de producción. El espacio de los tecnócratas, planificadores, científicos, urbanistas, ingenieros sociales, etc. que equiparan/reducen lo vivido y lo percibido a lo concebido. En este sentido, las representaciones del espacio engloban los diferentes signos, significados y códigos derivados del lenguaje racional utilizado por estos agentes tanto para elaborar una concepción dominante del espacio como para ordenar/clasificar las prácticas espaciales en el marco de un sentido común hegemónico⁸⁶. Por tanto, la regulación de la vida cotidiana se realiza según parámetros y métodos científicos que se recubren de una “aura” de incontestabilidad, como lo señala Arturo Escobar en su reflexión sobre el desarrollo, que recogemos en apartados posteriores.

Foucault (1979 [1976]) (2002 [1969]) aborda en sus trabajos la conexión entre saber y poder, en particular, aquellos saberes de expertos que emanan del método científico, los cuales están atravesados por relaciones de fuerza. Estos saberes racionales generalmente representan intereses particulares de grupos dominantes que califican, ordenan y/o legitiman otros tipos de conocimientos. Foucault se refiere a estos últimos como “saberes sometidos” que son calificados como incompetentes, ingenuos, inferiores a los derivados de una cierta cientificidad permitida. Precisamente, sería “esa instancia teórica unitaria que pretende filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en nombre del conocimiento verdadero y de los derechos de una ciencia que está detentada por unos pocos [...]” (Foucault, 1979 [1976], p. 129). Foucault señala precisamente la necesidad de

⁸⁶ Respecto al concepto de hegemonía, Lefebvre (2013 [1974]) señala:

El concepto de hegemonía, introducido por Gramsci con el fin de anticipar el papel de la clase obrera en la construcción de una nueva sociedad, permite analizar la acción de la burguesía, en particular en todo lo relativo al espacio [...]. Designa mucho más que una influencia e incluso mucho más que el uso perpetuo de la violencia represiva. La hegemonía se ejerce sobre toda la sociedad, cultura y conocimiento incluidos, generalmente por sujetos interpuestos: los políticos, las personalidades, los partidos, pero a menudo también por los intelectuales y los expertos. Por consiguiente, se ejerce también sobre las instituciones y las representaciones. Hoy en día la clase dominante mantiene su hegemonía por todos los medios, incluido el conocimiento. El vínculo entre saber y poder se vuelve manifiesto, lo que no impide en absoluto un conocimiento crítico y subversivo; al contrario: define la diferencia conflictiva entre el saber que está al servicio del poder y el conocimiento que rechaza reconocerse en éste. (p. 71)

emancipar esos “otros” saberes frente al efecto del saber que centraliza y que es gestionado por las instituciones en concordancia con un discurso científico organizado⁸⁷.

Por otra parte, Lefebvre señala que las representaciones del espacio se encuentran atravesadas de un saber producto de una combinación entre conocimiento e ideología, de carácter relativo y en continua transformación. De esta manera serían objetivas, pero susceptibles de ser revisadas. En este sentido, se pregunta si son verdaderas o falsas a lo que contesta que no tienen un sentido definido, son de carácter abstracto, e integran la práctica social y política: “las relaciones establecidas entre los objetos y los individuos en el espacio representado están subordinadas a una lógica que tarde o temprano les hace estallar debido a su incoherencia” (Lefebvre, 2013 [1974], pág. 100). De esta manera, las representaciones espaciales no pueden contener las contradicciones presentes en ese pretendido espacio abstracto, de carácter neutral y aséptico, en la medida que el saber también es un campo de relaciones de fuerza, en donde los conocimientos críticos encuentran mecanismos contestatarios a las lógicas dominantes⁸⁸.

Precisamente, las contradicciones denotan las relaciones asimétricas de poder y los conflictos inherentes a las mismas. Es en el marco de dichas tensiones donde nacen los “espacios de diferencia”. Al respecto, Oslender (2008) señala que:

Esto es precisamente lo que estamos viendo hoy en día: una proliferación de espacios diferenciales como resultado de las contradicciones inherentes a un espacio abstracto que busca homogeneizar y crear conformidades. Las políticas identitarias que se movilizan alrededor de aspectos como la etnicidad, el género, la sexualidad, el ecologismo y otros han conducido a una acentuación de las diferencias y peculiaridades que se articulan en una miríada de resistencias. (p. 75)

Oslender relaciona precisamente estas expresiones y marcos de acción con la búsqueda de contraespacios.

⁸⁷ Es importante señalar que Lefebvre marca una diferenciación en cuanto a la relación que establece Foucault entre saber y poder, en su libro *la Arqueología del Saber* (1969). Para Lefebvre, la relación entre el conocimiento hegemónico y el conocimiento crítico y subversivo se entiende en términos de “una distinción diferenciadora entre saber y conocer que disimula Foucault en su *Archéologie du Savoir* al no discernirlas sino en el contexto de un espacio en juego (p.241) y sobre la base de una cronología o ‘distribución del tiempo’” (Lefebvre, 2013 [1974], p. 71)

⁸⁸ Al respecto Raffestin (2011 [1980]) señala que cualquier punto de ejercicio de poder es al mismo tiempo un lugar de formación de saber. La interacción entre saber y poder se relaciona con los flujos de información y comunicación que se encuentran insertos en unas relaciones asimétricas de poder. Por su parte Múnera (1998) señala que:

Sería ilusorio pretender escapar a este movimiento dialéctico entre el poder y el saber que intenta aprehenderlo intelectualmente. No existe un lugar reservado para el conocimiento puro que nos permita escudriñar las relaciones sociales desde fuera de ellas y captar el poder sin participar en él de forma activa o pasiva. El saber mismo es la fuerza social que ejercemos en la vida cotidiana. (p. 87)

Desde nuestro punto de vista, las representaciones del espacio hacen parte de ese saber técnico y los espacios de representación serán aquéllos “saberes sometidos” que buscan los “quiebres” del sistema para emerger. Estos elementos serán claves para entender la manera en que los actores sociales populares interpretan y perciben los conflictos socio-territoriales; percepciones y saberes que han sido invisibilizados, jerarquizados, minimizados e inclusive infantilizados por las retóricas de las instituciones, al ser contruidos por agentes que se encuentran en los márgenes de la sociedad.

Estas organizaciones construyen procesos de resistencia anclados en espacios concretos que son imaginados, percibidos y contruidos por las propias comunidades frente a la imposición avasalladora de los espacios abstractos homogéneos. En los márgenes construyen sus proyectos de alteridad, en donde la hegemonía se ejerce no solamente a través del ámbito discursivo, del conocimiento, sino por medio de métodos violentos que implican muchas veces la eliminación simbólica y/o física del “otro”.

3. Los **espacios de representación** se corresponden con los espacios vividos que se expresan a través de imágenes y símbolos (códigos, signos, espacios simbólicos, espacios de utopías, etc.) que proyectan nuevos significados o posibilidades de las prácticas espaciales. Para Lefebvre (2013 [1974]), estos simbolismos complejos se encuentran generalmente articulados a formas clandestinas y subterráneas de la vida social:

[...] se trata del espacio dominado, esto es, pasivamente experimentado, que la imaginación desea modificar y tomar. Recubre el espacio físico utilizando simbólicamente sus objetos. Por consiguiente, esos espacios de representación mostrarían una tendencia hacia sistemas más o menos coherentes de signos y símbolos no verbales. (p. 98)

Por tanto, los espacios de representación escapan a las reglas y a las normas que se quieren imponer en el “espacio abstracto” del capitalismo, no responden a los elementos de coherencia y cohesión. Se construyen en los márgenes de la sociedad y pueden representar un desafío a las representaciones del espacio debido a que plantean la búsqueda y la puesta en común de contraespacios, los cuales se sustentan en la historia misma de las comunidades. Sin embargo, no son autónomos, se encuentran en constante tensión, redefinición y resistencia frente a la representación del espacio que intentan “colonizar el mundo de la vida del espacio representacional. Este es, por consiguiente, también el espacio dominado que la imaginación busca cambiar. Es a la vez sujeto de dominación y fuente de resistencia” (Oslender, 2008, p. 83).

Las prácticas tradicionales, los usos comunes y colectivos del suelo, el paisaje, la relación con la naturaleza, las prácticas económicas sustentadas en lógicas de intercambio suelen ser el sustento de los espacios de representación. En este sentido, estamos hablando de las acciones cotidianas que se construyen de manera individual y colectiva en el marco de unas relaciones particulares con el espacio que no necesariamente parten de la racionalidad científica dominante. Al respecto, Lefebvre señala ese carácter vivido del espacio:

El espacio de representación se vive, se habla; tiene un núcleo, tiene un centro afectivo; el Ego, el lecho, el dormitorio, la vivienda o la casa; o la plaza, la iglesia o el cementerio. Contiene los lugares de la pasión y de la acción, los de las situaciones vividas y, por consiguiente, implica inmediatamente el tiempo. De ese modo es posible asignarle diferentes calificaciones: puede ser direccional, situacional o relacional en la medida en que es esencialmente cualitativo, fluido y dinámico. (Lefebvre, 2013 [1974], p. 100)

Podemos afirmar que estamos hablando de esos saberes locales insurrectos que se sitúan en contraposición a la jerarquización científica del conocimiento y su correlación con las fuerzas que ejercen los grupos dominantes. La idea de la búsqueda de contraespacios, como bien señala Oslender (2008), se deriva de un concepto relacional del poder, desarrollado por Foucault en diferentes obras, pero de manera particular en su libro la *Microfísica del Poder* (1979 [1976]). Foucault se refiere a la complejidad de los mecanismos de poder y, en razón a la misma, su estudio no se puede delimitar al aparato del Estado.

De tal manera, el poder no reside en el Estado solamente, el ejercicio del mismo abarca una multiplicidad de agentes y ámbitos. El autor señala cómo el poder circula entre los diferentes actores sociales y, en esta medida, se construye un entramado de relaciones que se encuentra presente en la constitución misma de los sujetos, pero, desde nuestro punto vista, también en la producción del espacio, ya que, como explica Foucault, el poder está constituido por un fino entramado de interacciones:

De hecho, el poder en su ejercicio va mucho más lejos, pasa por canales mucho más finos, es mucho más ambiguo, porque cada uno es, en el fondo, titular de un cierto poder y, en esta medida, vehicula el poder. El poder no tiene como única función reproducir las relaciones de producción [...] El individuo, con sus características, su identidad, en su hilvanado consigo mismo, es el producto de una relación de poder que se ejerce sobre los cuerpos, las multiplicidades, los movimientos, los deseos, las fuerzas. (Foucault, 1979 [1976], pp. 119-120)

Así pues, la perspectiva relacional del poder nos permite entender las diferentes formas en las que se presenta la dominación, así como la existencia de lo que podemos denominar

contrapoderes y contraespacios contruidos en interacción con los marcos espacio-temporales. En este sentido, tanto las representaciones del espacio como los espacios de representación se encuentran insertos en estos campos de fuerza. En este punto, nos gustaría retomar a Múnera (1998) cuando, en su análisis sobre el movimiento popular colombiano, manifiesta que el núcleo analítico del mismo se debe centrar en las relaciones sociales. En este ámbito, es importante:

Ubicarlo en una doble perspectiva que caracteriza a estas últimas (relaciones sociales), la cual comprende la interacción entre los actores copresentes en un espacio determinado, y la interacción entre éstos y los actores ausentes. En otras palabras, como relación social el poder pertenece a la esfera de las prácticas sociales y a la esfera de la estructura; al terreno de la acción y al de las reglas y los recursos que lo limitan y habilitan, y que ella forma y transforma. (Múnera Ruiz, 1998, p. 85)

Aunque Múnera en su análisis no se adentra en la perspectiva espacial de los movimientos populares, introduce el concepto de poder relacional y la interacción entre los actores en un espacio determinado. Elementos que sirven de base para reflexionar acerca de la construcción de los espacios de representación por parte de actores que se encuentran en el margen de la sociedad. En esos espacios vividos se puede ver cómo las personas conceptualizan y representan la geografía de sus vidas, cargadas de profundos significados que son los que van a alimentar los procesos identitarios, los marcos de representación y las redes sumergidas sobre las cuales se articulan los actores colectivos⁸⁹.

En esta línea, Lefebvre con su teoría de la producción del espacio hace una invitación a los científicos sociales “a pensar en los hombres, explorar sus aspiraciones y reivindicaciones y a hacer hincapié en la realización de sus proyectos” (Claval, 2003, p. 32). Por tanto, el autor pone en el centro de la investigación a los agentes sociales y a sus relaciones al igual que Claude Raffestin, a quien recurriremos a continuación para explicar esa apropiación social del espacio transformado en territorio.

⁸⁹ Oslender (2008) advierte que:

Debe tenerse cuidado de no crear una visión romántica de las prácticas y movimientos de resistencia [...] algunas resistencias pueden ser profundamente reaccionarias. Más aún, no sólo existe la resistencia en la dominación, sino también la dominación en la resistencia, por cuanto ciertas prácticas de dominación pueden replicarse en las resistencias, tales como actos de marginación o la imposición en el exilio. Existen implicaciones importantes para la investigación sobre los movimientos sociales asociadas con tal entendimiento del poder, pues debemos examinar las formas como el poder se difunde dentro de un movimiento de resistencia, y qué patrones de dominación surgen dentro de sus estructuras, actividades y relaciones sociales internas. (pp. 84-85)

1.2. La geografía del poder: Claude Raffestin

Nos parece relevante empezar este apartado señalando una de las principales aportaciones de Claude Raffestin en su libro *Una geografía del poder*, publicado en 1980, entendido en el contexto del desarrollo de la disciplina de ese momento. El autor realiza lo que se puede considerar una “declaración de intenciones” respecto al giro epistemológico que debe tener la geografía. Raffestin señala que debe entenderse como una Geografía Humana en la medida en que el objeto de estudio no se circunscribe a parcelas de conocimiento sin ningún tipo de articulación. El espacio no sería un conjunto de cosas y objetos desligado de la población, sino que debe ser entendido en función de las relaciones que se inscriben en el mismo, relaciones que el autor considera, se mueven en el campo del poder.

Tanto Lefebvre como Raffestin consideran que el centro de la disciplina deben ser los agentes sociales. Este razonamiento lleva a Raffestin a señalar que la Geografía Humana debe ser entendida necesariamente como Geografía Política. Precisamente, uno de los objetivos de la obra es mostrar esta transición. El autor señala que la dimensión política es constitutiva de cualquier acción humana y el geógrafo debe comprometerse con este hecho⁹⁰.

La influencia de autores como Foucault⁹¹ y Lefebvre es evidente a lo largo de la obra de Raffestin. La apuesta teórica de considerar la Geografía Política como la geografía de las relaciones de poder, sustentada en los principios de simetría y asimetría, en expresiones manifiestas en el espacio; es sin duda, influencia de los dos autores. El geógrafo suizo señala que la ausencia de teoría en la interacción entre espacio y poder se debe al “hecho de que una problemática relacional es difícil de elaborar, por un lado y, por el otro, porque el poder es aún más difícil de identificar” (Raffestin, 2011 [1980], p. 11). Así, Raffestin se propone adentrarse en la relación como concepto desde la geografía y establecer el rol del poder manifiesto en todas las

⁹⁰Raffestin señala que “[...] También hace falta admitir, y esto puede ser lo más difícil de hacer, que toda tentativa geográfica contiene una finalidad política” (p. 89) En este mismo sentido, plantea que:

La Geografía Humana es política, pero esta dimensión rara vez es asumida por el geógrafo, quien quiere mantenerse como testigo, pero generalmente se niega a desempeñar el papel de una instancia a quien recurrir por parte de aquellos cuya territorialidad está siendo amenazada, modificada o destruida en nombre de fines cuya necesidad no es pertinente”. (Raffestin, 2011 [1980], p. 189)

⁹¹ Raffestin (2007) señala en su artículo *Could Foucault have Revolutionized Geography?* que el trabajo de Foucault, contenido en su libro *La Voluntad del Saber* (1976), le permitió replantearse la pregunta sobre el poder, alimentó su teorización sobre la relación entre este y el espacio y le permitió centrar su análisis en las prácticas de los actores. Estos elementos se recogen de manera particular en su obra *Por una Geografía del Poder*.

acciones humanas, estableciendo una mirada opuesta a la “geografía unidimensional” de la escuela ratzeliana⁹². En esta línea argumentativa, Raffestin (2011[1980]) señala que:

Conocer y practicar una realidad material supone y postula un sistema de relaciones en el interior del cual circula el poder, ya que éste es consustancial a toda relación. El conocimiento y la práctica puestos en marcha por el trabajo implican una forma de poder a la cual no es posible escapar. (p. 9)

El autor coincide con Lefebvre cuando señala que no hay más poder que el político, entendiendo que ni la política ni el poder en sí mismo se circunscriben al Estado. De esta manera, el autor al inicio de su obra deja claro que su argumentación no se refiere al poder con mayúscula (referido al Estado) sino al poder en minúscula, es decir, el que caracteriza a todas las relaciones sociales. Al respecto señala:

Existe una ambigüedad entre el “Poder” y el “poder”, aunque el primero es más fácil de ubicar ya que se manifiesta a través de aparatos complejos que marcan el territorio, controlan a la población y dominan los recursos. Es el poder visible, masivo, identificable. Debido a ello, es peligroso e inquietante e inspira desconfianza debido a la amenaza misma que representa. Pero lo más peligroso es lo que no se ve o lo que no vemos, porque creemos que nos hemos deshecho de ello ubicándolo en un espacio vigilado. (Raffestin, 2007, p. 40)

Así, Raffestin estima que considerar el Estado como la única fuente de poder es un error cometido por muchos geógrafos de la escuela clásica.

Es precisamente esta postura teórica la que consideramos se adapta a las problemáticas sociales que pretendemos abordar en la tesis. Por tanto, nos valemos de Raffestin y Lefebvre para comprender la interacción entre poder (popular) y espacio, apropiado a través del territorio.

⁹² En las primeras investigaciones de Raffestin sobre las relaciones entre espacio y poder se destacan los aportes de geógrafos franceses como Paul Claval en su artículo *La géographie et les phénomènes de domination* (1976) y el libro *Espace et séparado* (1978). Asimismo, las aportaciones de Jean-Marie Miossec en el artículo *Espace et pouvoir. La localisation des forces de décision dans le monde: esquisse de géographie politique théorique* (1976). En España, a inicios de los años 80, Joan-Eugeni Sánchez publica su libro *La geografía y el espacio social del poder* (1981). Por otra parte, es importante señalar que Claude Raffestin antes de publicar el libro que referenciamos, publicó un artículo con Mercedes Bresso Travail titulado *Espace, pouvoir* (1979), en el que ambos autores analizan cómo la ruptura del antiguo proceso integral del trabajo ha afectado a la organización espacial.

1.2.1. Raffestin: el poder como relación social

A continuación, puntualizaremos algunos elementos planteados por Raffestin sobre el poder que, como hemos señalado, se sustentan principalmente en la obra de Foucault pero que también se encuentran presente en la teoría de Lefebvre.

Primero, el poder no se refiere a una categoría suscrita al espacio o al tiempo, sino que se encuentra presente en cualquier producción que se sustenta en el espacio y en el tiempo, por tanto, es consustancial a toda relación. De esta manera, el autor estima que “en cualquier relación circula el poder, no es poseído ni adquirido, sino pura y simplemente ejercido” (Raffestin, 2011 [1980], p. 10). Este ejercicio del poder es llevado a cabo por los actores que componen un conjunto poblacional y que representan la fuente del poder. Para el autor, la población debe ser el centro de la investigación geográfica a diferencia de las orientaciones clásicas de la disciplina.

Es aquí donde Raffestin retoma a Lefebvre para señalar esa multiplicidad del carácter relacional del poder, a saber: “me parece que por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización”. (Lefebvre tomado de Raffestin, 2011 [1980], p. 40) Así la multidimensionalidad y la inmanencia del poder se derivan no de la omnipresencia del mismo sino de la procedencia, es decir, que puede provenir de diferentes lugares. Raffestin estima que el poder se ha de manifestar en el proceso de intercambio o comunicación entre los diferentes puntos, redes o centralidades, creando así campos de poder.

Segundo, Raffestin retoma una serie de enunciados sobre el poder consignados en la obra de Foucault para sustentar su argumento teórico en la medida que reconoce que el ejercicio del poder procede de otros actores fuera de las instituciones, tales como, la capacidad de contestación y la creación de “contrapoderes” y el carácter intrínseco del poder en la multiplicidad de relaciones que se dan en el interior de una sociedad⁹³.

Asimismo, plantea que “cualquier relación es el lugar del surgimiento del poder y eso crea la multidimensionalidad del poder. La intencionalidad indica la importancia de sus fines y la

⁹³ En la línea de Foucault (1986), el poder es visto como parte de esa reproducción social en donde da lugar a nuevos espacios de creación, contestación y resistencia. Así señala: “Hay que cesar de describir siempre los efectos del poder en términos negativos: ‘excluye’, ‘reprime’, ‘rechaza’, ‘censura’, ‘abstrae’, ‘disimula’, ‘oculta’. De hecho, el poder produce; produce realidad, produce ámbitos de objetos y rituales de verdad. El individuo y el conocimiento que de él puede obtener corresponde a esta reproducción” (p. 198).

resistencia expresa el carácter asimétrico que caracteriza siempre a las relaciones” (Raffestin, 2011 [1980], p. 42). En este punto, nos parece relevante destacar la importancia que adquiere tanto la intencionalidad como la resistencia presente en los flujos, las redes y las tramas por los cuales se mueve el poder y que son constitutivos de lo que el autor denomina el territorio (Vergara Figueroa, 2018). De esta manera, se sitúa en la existencia de múltiples poderes que se manifiestan en las estrategias regionales y locales (Altschuler, 2013) que se encuentran en tensión/disputa/conflicto y que pueden superponerse o coexistir dependiendo del juego de fuerza entre los actores, los cuales tienen una intencionalidad sobre ese espacio.

Tercero. La perspectiva del poder como relación social llevan a Raffestin a abordar el campo del poder desde la simetría y la asimetría de las relaciones de fuerza, en la línea de los elementos planteados por Foucault. Múnera (1998), siguiendo a este último autor, señala que “el poder se nos revela como el ejercicio social de la fuerza desde innumerables puntos y dentro de situaciones estratégicas complejas, caracterizadas por la existencia de una pluralidad de actores y de prácticas sociales que se relacionan de forma asimétrica” (p. 93).

Raffestin coincide con esta postura y aborda la asimetría desde una perspectiva política en donde la dominación se encuentra condicionada por fines asociados a este ámbito más que por fines económicos. De este modo, hay un desplazamiento de la mirada hacia la superestructura. Esta ampliación de la mirada no significa que el autor desconozca que existe una relación dialéctica entre la esfera política y el ámbito económico, pues, como él mismo señala, “el valor de uso y el valor de cambio tiende a ser real” y así se ha comprobado a lo largo de la historia.

Por otra parte, Raffestin asocia la simetría con la existencia de una equivalencia real, que obstaculiza el crecimiento de un actor o de una estructura por la acción de otra. Esta circunstancia asegura la diferencia y el pluralismo e implica el reconocimiento de las necesidades del “otro”, y el valor de uso y utilidad para disponer de bienes y/o servicios para su reproducción social. Por oposición, la asimetría permite la anulación o el debilitamiento de un actor en favor de la otra parte. En este caso, “sólo reconoce la existencia de dichas necesidades en la medida que acepta el juego de equivalencias forzadas que se expresa en el valor de cambio [...] el valor de cambio establece su predominio en el transcurso de una lucha encarnizada contra el valor de uso, después de haberlo constituido como tal y sin jamás separarse de él”. (Raffestin, 2011 [1980], p. 30)

La simetría y asimetría se enmarcan en la activación de las energías o las potencias que se encuentran a disposición de los actores en un determinado conjunto societal; deja de ser posibilidad

para convertirse en acción y, en cuanto tal, en relación social. Según esto, deja su naturaleza de atributo individual de las personas para ganar la dimensión de una práctica que sólo puede ser entendida en la interacción y en los efectos recíprocos que ésta tiene con lo estructural (Múnera Ruiz, 1998, p. 93)

Cuarto. Para Raffestin el territorio es un producto de la interacción de los actores, los cuales producen diferentes realidades en el marco de un primer hecho, que es el espacio. En esta lógica, Raffestin señala que en el territorio se manifiestan diversas relaciones de poder que se materializan en tejidos, redes y centralizaciones que son cambiantes y dinámicas. Por consiguiente, considera al territorio como un producto “consumido” o más bien “vivido” en la línea planteada por Lefebvre.

Es en este punto cuando el autor introduce el concepto de territorialidad, el cual considera una categoría que permite analizar el carácter simétrico y asimétrico de las relaciones de poder: “la territorialidad refleja seguramente el poder que se aboca a consumir mediante sus productos” (Raffestin, 2011 [1980], p. 11). De esta manera, el concepto de territorialidad permite entender la disputa por la imposición de proyectos políticos territoriales que ordenan el espacio, según los intereses de los actores. Estos actores varían en función de su posición frente a las diferentes formas que adquiere la dominación y la resistencia.

1.2.2. La perspectiva simbólica del territorio

Hasta el momento nos hemos referido a la centralidad que tienen los agentes en la apuesta geográfica de Raffestin. En esta línea de argumentación, el autor introduce la perspectiva simbólica en la conceptualización del territorio. Dicho así, el concepto se entiende aquí como una proyección espacial del poder, sustentado en las relaciones sociales que se encuentran determinadas tanto por acciones y estructuras materiales como por prácticas y estructuras simbólicas, estructuras que se encuentran en concordancia con lo que Raffestin denomina energía e información.

La propuesta semiológica se centra en la diferenciación de dos tipos de códigos que operan en el territorio desde el lenguaje del Estado: los códigos sintácticos y los códigos semánticos. Los códigos sintácticos se corresponden con una serie de articulaciones referidas a la dimensión, la forma y la posición. Más próximas a lo que sería el espacio euclidiano. En este sentido, obedecen a la lógica estructural de factores que permiten describir la morfología del territorio.

Los códigos semánticos se refieren al lenguaje utilizado para caracterizar ese territorio en relación con unas cualidades, que implican una funcionalidad. Tales atributos se encuentran dados generalmente desde una retórica racional estatal⁹⁴. En este sentido, el autor señala:

El uso de códigos semánticos del tipo: territorio grande, marítimo y fragmentado es frecuente. Esos códigos semánticos tienen un carácter estático que no carece, ciertamente, de interés pero que disimula la o las estrategias que provocaron ese resultado. La combinación de una estrategia no se da de golpe, sino que obedece a una secuencia. (Raffestin, 2011 [1980], p. 21)

Raffestin se detiene en la secuencia necesaria para la conformación de esas estrategias de apropiación del territorio a través de la concatenación de los diferentes códigos. El autor considera que los códigos sintácticos conforman la génesis de una estrategia territorial sustentada en un saber “geométrico” y señala que “una estrategia puede, por ejemplo, realizar primero una secuencia cuyo objetivo sea alcanzar una posición determinada y enseguida, en la segunda o tercera secuencia, buscar la dimensión”. (Raffestin, 2011 [1980], p. 22) Esta conceptualización estaría asociada a la cuantificación de variables poblacionales, demográficas o a los recursos que se configuran en un territorio, a prácticas como los sistemas de georreferenciación. Estos sistemas en muchos casos obvian las relaciones de poder transmitiendo una imagen de territorios vacíos, neutrales, asépticos, pero que sirven para sustentar o justificar determinada acción o práctica territorial.

Las representaciones espaciales sustentadas en poderes técnicos se pueden asociar a esos códigos sintácticos que plantea Raffestin, dando apariencia de objetividad, pero que en el fondo obvian las relaciones de poder asimétricas entre los actores, siendo el Estado el actor principal que produce el espacio, al negar el poder de agencia de otros actores.

En el caso de la población, el autor plantea que el lenguaje utilizado también se encuentra impregnado de signos referidos a cantidad, distribución, estructura y composición, entre otros, debido a que la población al igual que el territorio se estima como recurso. Por tanto, los signos utilizados “sirven para identificar y caracterizar a la población como factor potencial de poder”. (Raffestin, 2011 [1980], p. 23) En este sentido, la composición de la población en términos étnicos, lingüísticos o religiosos, se afronta desde categorías dicotómicas como homogeneidad versus heterogeneidad. La homogeneidad es vista como un elemento favorable para la integración

⁹⁴ Raffestin (2011 [1980]) siguiendo a Umberto Eco señala que “los códigos semánticos son tipos de mensajes que no establecen posibilidades generadoras, sino esquemas ya hechos; no formas abiertas que suscitan la palabra, sino formas esclerotizadas” (p.20).

territorial del Estado y la heterogeneidad como un elemento de inestabilidad. Esta posición viene derivada de una concepción funcionalista del Estado, propia de autores como Hartshorne (Taylor & Flint, 2002 [1985]).

La búsqueda de la homogeneidad también se puede hacer a través de métodos que no están exentos de prácticas violentas. En este sentido, la eliminación simbólica del “otro” es un ejercicio violento⁹⁵, así como también lo son las políticas que controlan la heterogeneidad, obviando las prácticas materiales y culturales de los grupos con identidades distintas a la mayoritaria. Este tipo de prácticas son frecuentes por parte del Estado, de empresas o, en el caso de Colombia, de grupos armados legales e ilegales que emplean dispositivos de poder para controlar a la población en determinados territorios, generalmente ricos en biodiversidad.

Sin embargo, Raffestin retoma esa fuente de poder que proviene de los actores y señala la resistencia y la reacción frente a esas prácticas totalizadoras, en donde se pueden presentar formas de reapropiación del poder. En esta línea, García y Aramburu plantean que tales prácticas pueden ser:

Contestadas por los grupos que se proponen visibilizar otras maneras de ser, de relacionarse y de interactuar con el entorno: no hay resistencia, movilización social o poder alternativo que no comprometa nuevas maneras de representar el espacio, de actuar y de hacer emerger nuevas espacialidades que posibiliten formas alternativas de relación social. (García y Aramburu, 2009, p. 11)

La inclusión del ámbito simbólico en el análisis del territorio se sustenta también en la caracterización que realiza el autor sobre los elementos constitutivos de las relaciones sociales: los actores, en plural.

Para Raffestin, la práctica de los actores viene dada por su intencionalidad, por las estrategias adoptadas, por los códigos y símbolos utilizados y por los componentes espaciales y temporales de la relación. El poder sería constitutivo de todos estos elementos. De esta manera, el autor estima que la población es la fuente del poder, por su capacidad de innovación vinculada a su potencial de trabajo.

⁹⁵ En cuanto al lenguaje como método de opresión y de control, el autor señala:

El lenguaje es un instrumento de poder, al igual que cualquier otro, no porque pueda ser el objeto de una apropiación privada, sino porque puede ser manipulado con eficacia. ¿Pero qué significado puede tener esta eficiencia? La lengua es un modo de actuar, es un modo de acción sobre el Otro- (Raffestin, 2011 [1980], p. 80)

En este análisis el autor identifica dos tipos de actores colectivos que se relacionan precisamente con los elementos señalados en el párrafo anterior (la intencionalidad de sus acciones y de sus prácticas simbólicas). Los actores sintagmáticos referidos a aquellos que tienen un programa, una intencionalidad clara sobre el territorio:

El actor sintagmático combina todo tipo de elementos para “producir”, *sensu lato*, una o varias cosas [...] Es decir, el actor sintagmático articula diferentes momentos de la realización de su programa integrando capacidades múltiples y variadas. Estos actores sintagmáticos están constituidos por actores individuos que se integran o son integrados en un proceso amplio. (Raffestin, 2011 [1980], p. 33)

Este conjunto de actores “viven” en función de ese juego complejo que se da en el interior de cualquier sociedad. Participan de las relaciones de poder y en muchos casos “compiten” por el control de determinados campos sociales o de una parte de los mismos, que se desarrollan en el espacio-tiempo.

En el caso de los movimientos sociales, el concepto de actor sintagmático, se puede asociar con las dimensiones de la acción colectiva: repertorios de confrontación, marcos de interpretación, construcción de identidades, política cultural, entre otros elementos. Entendiendo que son dimensiones que forman parte de ese “programa” al que se refiere Raffestin, que permite la integración y el distanciamiento de los actores dependiendo de las dinámicas asociadas al poder. Es importante enfatizar que todos estos elementos no solo tienen una dimensión temporal, sino que se estructuran en función de una relación dialéctica con el espacio. Es a través de las distintas prácticas materiales y simbólicas como se conforman los proyectos territoriales.

1.2.3. Territorio como apropiación del espacio

El concepto de territorio en los estudios geográficos ha estado ligado tradicionalmente al Estado, siendo visto como un recurso, además del de la población, que permite el ejercicio del poder, ejercicio éste necesario para el cumplimiento de la funcionalidad interna y externa del Estado, a saber:

El territorio es el elemento o implicación geográfica del Estado, su soporte físico y material, al lado de los elementos políticos y poblacionales. En realidad, es el espacio político en el que se desenvuelve, actúa y organiza la institución estatal y administrativa a la hora de ejercer dominio e intervenir, siempre en un territorio delimitado y confinado [...]. (López Trigal y Benito del Pozo, 1999, p. 21)

El territorio asociado al Estado se deriva de la perspectiva clásica de la Geografía Política heredada del pensamiento de Ratzel. En este enfoque, el territorio se asocia con lo que el autor denominó el “espacio vital”, referido al espacio necesario que deben ocupar los Estados para su supervivencia. Dicho espacio debe tener unas características particulares en términos de dimensión, posición y límites que permitan la extensión del Estado y el asentamiento de la población (Ratzel, 2011 [1896])⁹⁶.

Sin embargo, a partir de la década de los setenta, hemos asistido a una ampliación del concepto del territorio⁹⁷. En los últimos años, se pueden encontrar cuestionamientos desde el pensamiento crítico a una concepción del territorio estatalizada. Por otra parte, con la consolidación de la globalización neoliberal, los términos geográficos se han puesto de moda en las ciencias sociales, lo que ha generado la utilización de los mismos de manera muy variada; a veces, incluso, sin un rigor científico. Conceptos como espacio, lugar, región, paisaje, territorio, entre otros, los podemos ver muy a menudo en diferentes artículos, informes periodísticos, textos de política pública, etc.

Dependiendo del lugar desde el que se enuncie, el territorio adquiere un significado diferente. En Colombia, el término lo podemos encontrar en la retórica de contestación de movimientos como el indígena, el afrodescendiente y el campesino. De manera más reciente, movimientos como el ambientalista o el de mujeres, han realizado una recuperación y reapropiación del término. Por otra parte, el concepto aparece de manera recurrente en las políticas y programas estatales, asociado más a una visión jurídico-política; pero también en las estrategias de acción de las empresas, en particular, asociadas a la gestión social de las regiones en las que actúan. En el contexto del conflicto, el territorio aparece como elemento de disputa entre los

⁹⁶ El territorio asociado al Estado cobró vigencia en la Edad Moderna, concretamente con la firma de la Paz de Westfalia (1648). A partir de este momento, el binomio soberanía-territorio cobra una importancia central en el desarrollo del Estado moderno, importancia que se mantiene hasta nuestros días. El reconocimiento formal de la soberanía territorial de los Estados marca el inicio de la base territorial del sistema interestatal moderno: el primer mapa político mundial (Taylor & Flint, 2002 [1985], p. 173).

⁹⁷ La “ampliación” del concepto de territorio viene de la mano de la geografía crítica. Autores como John Agnew (2005 [1998]) han llamado la atención sobre la necesidad de interpelar la centralidad de los Estados territoriales y señala la “trampa territorial” sobre la cual se ha construido la Geografía Política y la geopolítica, sustentada en preceptos realistas de las relaciones internacionales y en concepciones liberales. Desde la geopolítica feminista también se han hecho importantes contribuciones a la “deconstrucción” del concepto de territorio. Por ejemplo, Joanne Sharp (2005) controvierte el mismo y se pregunta si es posible pensar el territorio y las identidades asociadas al mismo desde una posición que no implique una geografía binaria de la construcción de fronteras y la exclusión de lo diferente.

diferentes agentes, asociado indudablemente al ejercicio del poder. En este sentido, nos parece clave para la presente investigación retomar la definición de territorio desarrollada por Raffestin.

Como se ha señalado a lo largo del capítulo, Raffestin se aleja de la visión clásica del territorio asociado a un recurso estatal. El autor realiza una caracterización a partir del concepto relacional del poder en donde el componente político adquiere una relevancia significativa. Parte de la premisa de que el espacio y el territorio no son términos equivalentes⁹⁸. El segundo se genera a partir del primero y es el resultado de la acción o de la apropiación que realiza un actor sintagmático. La apropiación del espacio puede ser material o simbólica. Esta última a través de códigos y símbolos que conforman una representación⁹⁹. Por tanto, el espacio se manifiesta como una representación que desvela la imagen deseada del territorio como lugar de relaciones.

De esta manera, el actor “territorializa” el espacio. Raffestin se vale de Lefebvre para ejemplificar el tránsito de espacio a territorio, el cual se puede simplificar en el ejercicio o transformación que los actores llevan a cabo en el espacio guiados por determinados fines u objetivos, pero no necesariamente desde una lógica racional de costo-beneficio. A este respecto, el autor señala:

El territorio es un espacio en el que se ha proyectado trabajo, energía e información y que, en consecuencia, revela relaciones marcadas por el poder [...]. El espacio está “dado” como una materia prima y antecede a cualquier acción. “Lugar” de posibilidad, es la realidad material previa a cualquier conocimiento y a cualquier práctica, de las cuales será objeto a partir del momento en que un actor manifieste una intencionalidad respecto a ese lugar. (Raffestin, 2011 [1980], p. 102)

La apropiación del espacio se realiza en el marco de alianzas, tensiones y conflictos propios de las relaciones de poder que, como hemos visto, se caracterizan generalmente por ser jerárquicas y asimétricas. No olvidemos que estamos trabajando sobre la idea de que el espacio es político y, por consiguiente, la construcción del territorio también tiene esa impronta.

⁹⁸ Raffestin señala que “El espacio es la ‘prisión original’ y el territorio es la prisión que las personas construyen” (Tomado de Schmidt di Friedberg, 2018, p. 27).

⁹⁹ Paul Claval (2003) señala el papel central de la representación como elemento estructurante del espacio: “El espacio, la naturaleza, la cultura o la sociedad son tanto realidades sociales, como individuales. Están construidas a partir de representaciones adquiridas de otros, a través de procesos de comunicación. Las categorías transmitidas tienen un sentido compartido, porque se apoyan en el empleo de los mismos términos y están ligadas al reparto de las mismas experiencias. La sociedad no es una entidad superior que existiese antes que los individuos y se impusiese a ellos como viniendo del exterior: nace al mismo tiempo que la cultura, que los procesos de comunicación y transmisión que aseguran las prácticas, las competencias y los conocimientos” (p. 35).

Esta aseveración no significa una reducción al ámbito político de todos los elementos que intervienen en la producción espacial. Las prácticas espaciales se conectan con lo cultural y con el mundo de las emociones: el apego, el miedo, la esperanza, la familiaridad y el exotismo intervienen en el espacio vivido. Implica la creación de significados, subjetividades y valores, que pueden trascender del ámbito individual al colectivo, situándose en lo que Escobar y Dagnino (2001) han definido como la política cultural de los movimientos. De esta manera, la espacialidad se convierte en escenario de la producción y reproducción de prácticas sociales que pueden reforzar la espacialidad existente, o que impliquen una reestructuración y/o transformación radical (Soja, 1989). Ahora bien, la apropiación del territorio se puede definir como:

El acto de hacerse suyo algo por parte de un agente social, lo que comporta adquirir, a través de algún mecanismo social, el derecho de su uso [...] La apropiación será una condición necesaria para poder localizar, asentar y funcionalizar el espacio-territorio, al tiempo que implicará la necesidad de división del espacio. (Sánchez, 2011, p. 66)

Sánchez (2011) señala que en un primer momento la apropiación implica un acto de reconocimiento que se sustenta en determinadas formas culturales y/o legales, las cuales otorgan ese derecho de uso. La apropiación del territorio puede implicar un reconocimiento por parte de otros actores o se puede hacer a través de mecanismos violentos, en donde se da una imposición de un proyecto territorial de un agente sobre el de otros grupos, utilizando la coerción, el miedo, el confinamiento, la restricción de movilidad, etc. Estos dispositivos de poder tienen como objetivo el control de la población, de las relaciones sociales y de la naturaleza.

En este punto, nos parece interesante retomar la diferenciación entre dominación y apropiación que realiza el geógrafo brasileño Rogério Haesbaert (2013), siguiendo a Lefebvre. Haesbaert señala que los agentes hegemónicos territorializan más a través de la dominación que a través de la apropiación. Por su parte, los agentes subalternos realizan una apropiación más de tipo simbólico y vivencial del espacio. Para el caso de estudio que nos ocupa, podemos observar que se evidencia esta diferencia y se relaciona con la asimetría en el acceso a los diferentes recursos (culturales, sociales, económicos, jurídicos) por parte de los actores que ocupan el territorio.

Como señala Raffestin, el acto de apropiación se inscribe en un campo de poder. Los proyectos que se quieran desarrollar sobre el espacio implican un conocimiento y una práctica, los cuales requieren un sistema sémico para llevar a cabo la objetivación del espacio. Estos sistemas estarán marcados por toda una infraestructura, fuerzas de trabajo, técnicas, saber, relaciones de

producción; en conclusión, por los modos de producción. En este sentido, el autor no se refiere a un “espacio geográfico”, sino a un espacio construido a través de la representación, que lleva también a una intervención material, a una territorialización de los objetivos de los actores. Por tanto: “el espacio representado ya no es más el espacio, sino la imagen del espacio o, mejor aún, del territorio visto y/o vivido” (Raffestin, 2011 [1980], p. 104). Podemos señalar que lo que se conforma es una interacción entre la retórica y la praxis.

Los elementos que hemos planteado hasta el momento nos llevan a perfilar una definición de territorio que, como hemos visto, se aleja del concepto jurídico-político ligado al Estado moderno. De esta manera, Raffestin nos remite al territorio como una construcción social-histórica, una manifestación espacial del poder, producto de una apropiación material y/o simbólica de un determinado espacio, en donde se manifiestan las relaciones de poder, las tensiones derivadas de la clase y de la diversidad e igualdad social. En el territorio se establecen procesos identitarios y de representación colectiva. En definitiva, se desarrollan los proyectos de los actores. (Raffestin, 2011 [1980])

Los aportes de Raffestin nos sitúan en una concepción multiescalar del territorio. En este sentido, “transita, entonces, por varias escalas diferentes, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba; por lo tanto, hay macro y microterritorios. Esto nos ofrece también la posibilidad de concebir la resistencia, no ya como el “otro” o lo opuesto del poder, sino como un constituyente de las relaciones de poder” (Haesbaert, 2013, p. 26). El concepto de territorio se desplaza de un recurso del Estado a una concepción mucho más dinámica en la que coexisten, se saturan o superponen diferentes manifestaciones espaciales, las cuales están interconectadas con una determinada producción material de la sociedad, con la reproducción social y con unas relaciones particulares entre sociedad-naturaleza¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Bernardo Mançano Fernandes (2005) considera que el territorio –material e inmaterial- se construye a partir de la determinación de una lógica de poder. Esta determinación viene dada por las intencionalidades y representaciones del espacio que realizan los diferentes actores, las cuales generalmente se encuentran en tensión y/o conflicto. Por tanto, estos autores “proponen diferentes lecturas para una realidad, generando conflictualidades materializadas por las disputas en la interpretación de los hechos. La intencionalidad como opción histórica es también una posición política, una preferencia por las lecturas de una determinada clase o segmento social”. (p. 7)

1.2.4. Elementos del sistema territorial

En su análisis sobre el territorio, Raffestin señala que existen elementos que son constituyentes e inherentes al mismo, los cuales se construyen a partir de las representaciones espaciales que realizan los agentes. Estos elementos forman parte de lo que denomina el “sistema territorial”¹⁰¹. Las representaciones se traducen en prácticas que organizan el espacio a partir de distribución de las superficies creando tramas, implantando nodos y construyendo redes. En este sentido, plantea:

Cualquier práctica espacial inducida por un sistema de acciones o de comportamientos, incluso embrionaria, se traduce en una “producción territorial” que hace intervenir a la trama, nodo o red. Es importante demostrar, a este respecto, que ninguna sociedad, por elemental que sea, escapa a la necesidad de organizar el campo operatorio de su acción. (Raffestin, 2011 [1980], p. 106)

De esta manera, el autor nos remite a una imagen de territorio fluido, en movimiento, donde se concatenan diferentes prácticas territoriales que intervienen el espacio (estamos hablando no solo en el ámbito material sino simbólico). La dominación y la apropiación se desarrollan en el marco de interacciones de tipo político, económico, social y cultural. La interacción en los diferentes ámbitos conlleva la creación de un sistema de tramas, nudos y redes que constituyen el territorio. Este sistema se encuentra organizado jerárquicamente (sistema territorial) y diferenciado en términos funcionales. El sistema permite asegurar el control sobre lo que puede ser distribuido, asignado y/o poseído. Así como imponer y mantener uno o varios órdenes. Finalmente, también habilitan realizar la integración y la cohesión territorial.

Para el autor, las tramas implican una noción de límite (lineal o zonal), que expresa una manifestación de poder sobre un área determinada. Es la forma más elemental de producción del territorio. Por tanto, son resultado de la división y subdivisión del espacio intervenido en diferentes escalas o niveles. Las tramas cumplen dos objetivos principales: asegurar el funcionamiento óptimo de un conjunto de actividades para la población y obtener un mejor control de la población. Raffestin advierte que es necesario diferenciar la división deseada de la división en que el grupo vive. ‘La división “deseada” es la que trata de optimizar el campo operatorio del grupo, mientras

¹⁰¹ Los sistemas territoriales tienen un papel de mediador por el cual toda sociedad regula sus relaciones con el espacio para conseguir autonomía. La autonomía a su vez implica el control de las redes de información y comunicación.

que la división ‘que se vive’ es la que trata de maximizar el control sobre el grupo” (Raffestin, 2011 [1980], p. 108).

Los nodos territoriales se refieren a localizaciones, lugares de poder o de poblamiento que se estructuran a partir de una relación jerárquica (ciudades, pueblos, capitales o grandes metrópolis). Los nodos simbolizan la posición relativa de los actores en la medida que permiten establecer categorías de diferenciación según la función del “otro”, del acceso a recursos, de la interacción social. “Pero esos actores no están cara a cara; actúan y en consecuencia buscan mantener relaciones, asegurar sus funciones, influenciarse, controlarse, impedirse, permitirse alejarse o separarse y desde ahí crear redes entre ellos” (Raffestin, 2011 [1980], p. 110).

Raffestin define la red a partir de esas relaciones que se dan entre los actores que ocupan un espacio. En este sentido, la red sería un sistema de líneas que dibuja tramas y que une por lo menos tres puntos o nudos. La red puede ser abstracta o concreta, visible o invisible. Asimismo, las redes pueden permitir la comunicación entre diferentes puntos, pero las redes que trazan límites o fronteras también pueden impedir la fluidez entre los nodos.

1.2.5. Territorialidad

El fenómeno de la territorialidad se ha estudiado desde dos enfoques. El primero, aborda la territorialidad humana como un fenómeno similar o igual que la territorialidad animal. El segundo, considera que son esencialmente dos fenómenos distintos, ya que la territorialidad humana es entendida como una construcción social e histórica. Aunque no vamos a profundizar en estas dos corrientes nos parece importante señalar los argumentos principales para ubicar el concepto desarrollado por Raffestin. Sin embargo, debemos aclarar que entre los dos “extremos” teóricos existe un amplio espectro en la forma de abordar el fenómeno de la territorialidad.

La primera corriente se enmarca en las teorías biológicas y genéticas, las cuales argumentan que la territorialidad es un componente innato de todas las especies. Dada la base biológica del análisis, los teóricos inscritos en esta corriente tienden a defender la premisa del comportamiento territorial como algo natural más que como algo aprendido. En el marco de este último enfoque, se pueden identificar dos perspectivas de análisis: una perspectiva determinista que contempla la adquisición del territorio como un fenómeno natural; y la segunda perspectiva, más matizada, ve el comportamiento territorial en sentido conductista pero no determinista.

El argumento determinista más extremo mantiene que la necesidad del espacio es una característica innata a todas las especies, incluidos los humanos. Si se articula esta suposición con las teorías que sugieren que la agresión es un fenómeno natural, este deseo de espacio lleva naturalmente a la adquisición del territorio, utilizando un comportamiento agresivo si fuera necesario. Hay, por tanto, un impulso de defender este territorio contra otros que pretenden "invadirlo". La etología ha sido utilizada para complementar un conjunto de argumentos que aseguran que el comportamiento humano es un reflejo del de los animales. (Cairo, 2001) (Storey, 2001)¹⁰²

La segunda corriente se desarrolla ampliamente en las ciencias sociales y se considera que la territorialidad humana se encuentra condicionada por el entorno social, político y cultural de las diferentes sociedades. Se sugiere, pues, que la mayoría del comportamiento territorial humano es aprendido y no natural. Es un producto de las condiciones más que una urgencia biológica. Una línea importante de esta perspectiva se centra en las relaciones de poder. Autores como Raffestin (2011 [1980]), Soja (1971) y Sack (1986) se inscriben en esta perspectiva de investigación.

El concepto de territorialidad desarrollado por el geógrafo Robert Sack ha sido uno de los más utilizados para comprender este fenómeno. Sack define la territorialidad como "los intentos de un individuo o grupo para afectar, influir o controlar a gente, fenómenos y relaciones por medio de la delimitación y afirmación del control sobre un área geográfica". (Sack, 1986, p. 19) El poder es ejercido sobre los individuos de dos maneras: el control del comportamiento en un territorio específico y la exclusión de "otros" individuos de ese territorio. La creación de Estados y el contingente trazado de fronteras entre estados vecinos representan la más obvia expresión política de territorialidad. El poder es ejercido sobre ese espacio limitado por medio de sistemas de reglas que gobiernan la entrada y el comportamiento (Storey, 2001)¹⁰³.

Ahora bien, el concepto de territorialidad desarrollado por Raffestin se puede ubicar en el segundo grupo de teorías. Para el autor, la territorialidad es "la estructura latente de la vida cotidiana, la estructura relacional, poco o nada percibida, de la cotidianidad" (Raffestin y Bresso

¹⁰² Storey (2001) señala que el "punto de vista bio- etológico ha sido ampliamente extendido por los escritos de autores como el antropólogo Robert Ardrey que argumenta que los animales y los humanos se comportan de una manera intrínsecamente territorial. Los humanos tienen lo que Ardrey (1967) describe como un 'imperativo territorial' que les impulsa a defender el espacio. Esta es una posición biológicamente determinista en la que el comportamiento territorial en los humanos es visto como un fenómeno natural y no cambiante" (Traducción propia) (p.11).

¹⁰³ Para Sack, la territorialidad cumpliría "cuatro funciones básicas: fortalecer el control sobre el acceso al territorio, reificar el poder a través de su vinculación directa al territorio, desplazar la atención de la relación social de dominación y actuar como contenedor espacial de hechos y actitudes" (Cairo, 2001, p. 31).

tomado de Schmidt di Friedberg, 2018, p. 26). De esta manera, la territorialidad evidencia el carácter multidimensional de la vivencia territorial por parte de los diferentes agentes que tienen presencia en el territorio o que interactúan con el mismo. La vivencia territorial se refiere a un complejo sistema de relaciones simbólico-afectivas referidas a la producción material de la sociedad.

En el ámbito de cada uno de estos sistemas se presenta una tensión producida por el ánimo de los agentes por controlar y modificar las relaciones con la naturaleza y las relaciones sociales. En este proceso los actores también se transforman, cambian y alteran sus patrones de conducta, así como las formas de interpretar la realidad. Por ejemplo, los movimientos populares en Colombia entendidos como actores que disputan la territorialidad en sus espacios. Transforman sus identidades, repertorios de acción y/o marcos interpretativos en la lucha por la conservación de su entorno, frente a la acción de las empresas agro-extractivas o frente a determinadas políticas de desarrollo implementadas por el Estado. De esta manera, las tensiones se manifiestan en conflictos socio-territoriales producto de unas relaciones de poder asimétricas.

En este punto, consideramos adecuado retomar a Giménez (2000) para articular las ideas de construcción del territorio con el concepto de territorialidad. Este autor, siguiendo a Raffestin, se refiere a que la apropiación del espacio puede ser de carácter instrumental-funcional o simbólico-expresivo (como lo hemos apuntado anteriormente) y señala:

En el primer caso se enfatiza la relación utilitaria con el espacio (por ejemplo, en términos de explotación económica o de ventajas geopolíticas); mientras que en el segundo se destaca el papel del territorio como espacio de sedimentación simbólico-cultural, como objeto de inversiones estético-afectivas o como soporte de identidades individuales y colectivas. Por eso, el territorio puede ser considerado como zona de refugio, como medio de subsistencia, como fuente de recursos, como área geopolíticamente estratégica, como circunscripción político-administrativa, etcétera; pero también como paisaje, como belleza natural, como entorno ecológico privilegiado, como objeto de apego afectivo, como tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva y, en fin, como 'geosímbolo'. (pp. 24-23)

La apropiación material y simbólica del espacio, que constituye el territorio, se complementa con el ejercicio estratégico de división de superficies, implantación de nodos y construcción de redes. Por tanto, los procesos de organización del territorio y el ejercicio de la territorialidad deben comprenderse en función de estos elementos. En consecuencia, la

territorialidad solamente se puede entender desde su carácter relacional con el espacio y con otros actores sociales, interacción que está mediada por unas relaciones asimétricas de poder.

De esta manera, Raffestin señala que la territorialidad se define por una “relación triangulada en el sentido que la relación con el territorio es una relación que mediatiza rápidamente las relaciones con los hombres, con los otros [...] Creemos que es posible definir una territorialidad *sensu lato* que procede de una problemática relacional” (Raffestin, 2011 [1980], p. 113). Por consiguiente, la territorialidad se define por la interacción con el espacio y en el marco de las relaciones sociales. Raffestin continúa su argumentación señalando que “la territorialidad puede definirse como un conjunto de relaciones que nacen en un sistema tridimensional sociedad-espacio-tiempo, con miras a alcanzar la mayor autonomía posible que sea compatible con los recursos del sistema” (Raffestin, 2011 [1980], p. 113).

El enfoque relacional de la territorialidad pone el énfasis en el carácter cambiante y dinámico de la misma, entendiendo que es un proceso inacabado por lo que los elementos que la constituyen varían a lo largo del tiempo. Por consiguiente:

Esta territorialidad resume la manera en la que las sociedades satisfacen, en un momento dado, para un lugar dado, para una carga demográfica dada y para un conjunto de herramientas dadas, sus necesidades de energía y de información. Las relaciones que la constituyen pueden ser simétricas o asimétricas, es decir, estar caracterizadas por beneficios y costos, equivalentes o no. (Raffestin, 2011 [1980], p. 114)

En el marco de esta conceptualización, el autor señala que se pueden dar dos tipos de territorialidades en función de las variaciones entre beneficios y costos: la territorialidad estable y la territorialidad inestable, entendiendo que existe una amplia gama de variaciones entre los dos polos. La primera tipología se presenta cuando ninguno de los elementos sufre cambios sensibles en el largo plazo. En el segundo caso, todos los factores se transforman en un proceso continuo en el tiempo. Por tanto, la territorialidad aparece conformada por relaciones mediatizadas, simétricas o asimétricas respecto a un “topos” exterior.

Es importante señalar, dado que estamos hablando de relaciones de poder, que éstas son ejercidas por diferentes agentes que compiten por el control del campo político, social, económico y cultural, o por una parte del mismo. Por ello, mantener la hegemonía (en el sentido expuesto por Gramsci) durante un largo periodo de tiempo de manera estable y total, será una práctica bastante difícil de conseguir. Las diferentes territorialidades se superponen, conviven, compiten y se

transforman. El establecimiento de una territorialidad supondrá en parte o totalmente la desestructuración de un orden espacial anterior (desterritorialización).

Raffestin entiende la territorialidad como un proceso dinámico de territorialización, desterritorialización y reterritorialización (TDR) que se “modela a través de la vinculación de factores políticos, económicos, ecológicos y sociales”. (Schmidt di Friedberg, 2018, p. 27)¹⁰⁴ La primera parte del proceso, la territorialización, implica una serie de relaciones codificadas en el territorio que se caracterizan por su baja estabilidad. La desterritorialización se produce cuando hay un abandono del territorio o una supresión de los límites, de los ritmos, por tanto, supone una crisis de la forma en la que se percibe, se significa, se codifica y se controla el territorio. En definitiva, una crisis de la territorialidad anterior. La reterritorialización es entendida por el autor como el momento en el que se puede realizar una nueva recodificación o una decodificación del territorio (Raffestin, 2018 [1984]) Por tanto, la TDR supone obtener, perder y reencontrar espacios, autonomías, e identidades.

Estamos de acuerdo con Haesbaert (2013) cuando señala que, la desterritorialización (desposesión territorial) no puede ser entendida sin su proceso contrario, la reterritorialización. Desde esta perspectiva, los dos procesos pueden tener un sentido tanto negativo como positivo. En el primer caso, asistimos a una pérdida de control del territorio, por tanto, a una precarización social. En ella, los agentes subalternos, los cuales tienen menos acceso a recursos, pierden su capacidad de decidir sobre su territorio. Este hecho puede implicar una pérdida material pero también de apropiación cultural y simbólica. Inclusive el desplazamiento de las comunidades hacia otras zonas, especialmente si la reterritorialización ha implicado un proceso violento. Ahora bien, se puede entender desde una perspectiva positiva al implicar una línea de fuga, un proceso de construcción de un proyecto territorial diferente.

Haesbaert plantea la necesidad de recordar que el territorio está compuesto por una dimensión de movilidad. Este componente lleva a hablar más de dinámicas de desterritorialización que de territorios estables. Por tanto, estamos de acuerdo cuando señala que el territorio debe ser

¹⁰⁴ Raffestin señala que en el proceso de TDR el acceso a la información cumple un papel fundamental. La autonomía de las sociedades se sustenta en el control de las redes de comunicación y de información. En este sentido, la territorialidad se encuentra planteada en términos informacionales y de espacialidad. No debemos olvidar que para Raffestin la diferencia entre la territorialidad animal y espacial radica de manera particular en el lenguaje, los sistemas de signos y los códigos que producen las sociedades.

comprendido como producto de tales dinámicas que interactúan en un campo de poder. Este autor retoma un cuestionamiento que nos parece relevante:

En medio de esos nuevos procesos de desterritorialización —donde los grupos subalternos se quedan siempre, en alguna medida, “en tránsito”, entre territorios—, y para no parecer pesimistas, tenemos que preguntarnos sobre la posibilidad de construir multiterritorializaciones alternativas, lo que yo llamo territorios alternativos en la globalización, es decir, una efectiva apropiación de los espacios por esos grupos subalternizados. (Haesbaert, 2013, pág. 40)

Para que se produzcan esos territorios alternativos es necesario que exista un proceso colectivo de creación de subjetividades compartidas, horizontes de justicia, entramados comunitarios. A este respecto nos vamos a referir en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO 2. Las teorías de los movimientos sociales: los enfoques estructurales y las aproximaciones culturales de la acción

La interacción estratégica plantea un modelo de análisis dinámico de los movimientos sociales a partir de una revisión de la agenda clásica del estudio de la acción colectiva desarrollada en Europa y en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo pasado. El marco de referencia utilizado en estos estudios analiza principalmente los procesos sociales, políticos y económicos en la etapa de la postindustrialización en estas dos regiones. Esta agenda se construye a partir de tres teorías que abordan la acción colectiva desde enfoques distintos a los que entendían el comportamiento colectivo como una desviación social. Las teorías a las que hacemos referencia son la movilización de recursos, el proceso político y/o estructura de oportunidad política y la dimensión cultural de los movimientos sociales.

El análisis de la acción colectiva en América Latina se nutre en un primer momento de estas diferentes corrientes teóricas que investigan los elementos que confluyen en la génesis de los movimientos y en los factores que inciden en el mantenimiento y perdurabilidad de los mismos¹⁰⁵. En particular, hay que señalar la influencia del paradigma de la identidad desarrollado por autores como Alain Touraine y Alberto Melucci, con especial énfasis en el concepto de nuevos movimientos sociales¹⁰⁶ (Svampa, 2009).

En esta línea, las investigaciones en la región han utilizado conceptos provenientes de estas teorías para comprender la complejidad de la construcción de subjetividades políticas, así como la resignificación y construcción de referentes propios.

¹⁰⁵ Juan David Delgado (2007) señala que la movilización de recursos, el proceso político/estructura de oportunidad política y los marcos culturales constituyen un trípede interpretativo que explica los cambios en los patrones de la conducta política colectiva en las sociedades postindustriales desde “una apuesta racional-individualista proveniente de la movilización de recursos, una postura racional-colectivista derivada de los supuestos del proceso político, y un compromiso no racional-individualista situado en la concepción de los procesos enmarcadores” (p. 52). En este sentido, el autor señala que los estudios desarrollados responden a dos cuestionamientos centrales de la acción colectiva: las motivaciones de los actores sociales a la movilización y el “grado de libertad” que socialmente está permitido para cambiar la realidad en la que se sitúan.

¹⁰⁶ Algranati et al. (2008) señalan como la difusión y reproducción del concepto de nuevos movimientos sociales es un ejemplo del amplio impacto que esta escuela tuvo sobre los estudios en América Latina: “en relación a la protesta y la acción colectiva en América Latina en las últimas décadas y que se refleja en el lugar preeminente que le cabe en la academia latinoamericana, hegemonía compartida con la referida corriente de las ‘oportunidades políticas’” (p. 178).

Por otra parte, en el caso colombiano, autores como Mauricio Archila consideran que la diferenciación entre “viejos” y “nuevos” movimientos sociales resulta artificial, en tanto, estima que la variable cronológica no es suficiente para diferenciar a estas expresiones de acción colectiva (Archila, 1996, p. 258).

Al respecto, Ulrich Oslender (2008) señala la pertinencia de abordar diferentes elementos para la comprensión de la acción colectiva, perspectiva que es aplicada a su estudio sobre las comunidades negras del Pacífico colombiano.

En lugar de analizar los movimientos sociales mediante un marco conceptual cerrado, sugiero que consideremos qué interpretaciones particulares de diferentes teorías de los movimientos sociales son relevantes para un estudio de caso específico y cómo pueden combinarse de manera útil para iluminar las especificidades de los movimientos sociales en el terreno. En lugar de procurar una integración o síntesis muy delimitada de teorías en el plano conceptual, es más pertinente buscar una yuxtaposición de éstas en el plano empírico. (Oslender, 2008, p. 35)

La posición de Oslender se enmarca en la necesidad que existe desde los diferentes teóricos y activistas de encontrar nuevos caminos que permitan entender la compleja realidad latinoamericana y la activación de actores sociales en la región en las últimas décadas. No debemos olvidar que las teorías contemporáneas desarrolladas en Europa y en Estados Unidos han sido pensadas en realidades estructuralmente distintas, con trayectorias históricas disímiles a la latinoamericana.

El planteamiento de este autor es compartido por la autora de la tesis debido la complejidad de los factores que inciden en la lucha social popular en Colombia, la cual se ha movido más allá de los límites del conflicto socio-económico, marcada indudablemente por el conflicto armado, la exclusión política (nacional, regional y local) de los sectores sociales populares, una fuerte criminalización de la protesta social y un componente espacial en la medida que el conflicto se suscribe a la disputa por el control del territorio, de la población que lo habita, de la naturaleza, de los bienes comunes pero también una disputa situada en el ámbito de la representación y de la apropiación simbólica.

De tal manera, esta primera parte del Capítulo 2, tiene como objetivo realizar una revisión crítica de aquellos elementos de las teorías contemporáneas de los movimientos sociales que consideramos pueden contribuir a esclarecer las preguntas de investigación de la presente tesis; con el ánimo de construir un marco teórico de carácter interdisciplinario que nos ayude a comprender las percepciones populares acerca de la conflictividad social en Colombia.

Es importante señalar que el carácter interdisciplinario que proponemos incluye una dimensión geográfica, entendiendo que el espacio es fundamental para comprender la complejidad

de los procesos que subyacen a la política contenciosa, así como el contexto político, cultural y social y los procesos económicos de la globalización contemporánea (Marston, 2002).

2.1. Una breve introducción: las teorías contemporáneas de los movimientos sociales

Las investigaciones acerca de los movimientos sociales, las revoluciones, la protesta social y la acción colectiva tuvieron un especial auge y consolidación en la segunda mitad del siglo pasado y fueron desarrolladas de manera particular por autores procedentes de escuelas académicas de Europa y Estados Unidos. Los estudios se desarrollaron en el marco de sociedades con características estructurales y de reproducción social particulares derivadas del lugar que ocupan en la reproducción capitalista, de los procesos de industrialización y de consolidación de regímenes democráticos, disimiles a los contextos latinoamericanos.

En el mapa de las principales teorías que explicaban el surgimiento y desarrollo de la acción colectiva se encuentran enfoques en los que predominaba una visión macrosociológica. Estas teorías son: la teoría de los nuevos movimientos sociales en el marco de sociedades postindustriales liderada especialmente por teóricos europeos y la teoría de la movilización de recursos y del modelo del proceso político – con fundamentos comunes- desarrolladas de manera particular en Estados Unidos. De manera paralela y en relación con estas corrientes, se desarrollaron teorías que centraban su análisis en los componentes culturales y microsociales de la acción; ejemplo de ello es la metodología de análisis de los marcos interpretativos o *frame analysis*, y de manera más reciente en los enfoques cultural-estratégicos y emocionales¹⁰⁷.

Las relaciones planteadas por estas teorías constituyeron la base del estudio de la acción colectiva y de los movimientos sociales. Actualmente, muchas de sus herramientas se siguen utilizando para comprender las dinámicas del cambio social. No obstante, a lo largo de los últimos años se han reexaminado los soportes teóricos de la agenda y se han expuesto críticas en relación al carácter estático, al excesivo énfasis en el racionalismo o el predominio de la estructura sobre los agentes. Se ha señalado la ausencia de atención a la estructuración geográfica de la acción

¹⁰⁷ Para autores como D. McAdam, S. Tarrow y C. Tilly (2005 [2001]) la agenda clásica de los movimientos sociales estaba constituida sobre la base analítica de tres de las teorías nombradas anteriormente: la movilización de recursos, el proceso político y los marcos interpretativos. La diferencia entre estas teorías radicaba principalmente en el énfasis relativo que colocaban en los componentes de la agenda, en el lugar que ocupa el actor y en el carácter metodológico del frame análisis.

colectiva, entendiendo que el espacio forma parte de la totalidad social, y, por tanto, es necesario un enfoque analítico que integre esta perspectiva si se quiere comprender toda su complejidad y diversidad. Es de señalar que en los estudios tradicionales de los movimientos sociales se ha dado más peso al elemento temporal que a la dimensión geográfica (Miller, 2000).

Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la reflexión espacial de la acción colectiva. Tal incremento del análisis se puede relacionar con los procesos asociados a la radicalización de la modernidad: la desterritorialización, la heterogeneidad y la homogeneización (Hernández, 2005). En este contexto es de destacar, la acción de los movimientos altermundialistas y, para el caso concreto de América Latina, la centralidad de la defensa del territorio y de la naturaleza en las agendas de los movimientos sociales¹⁰⁸.

Este último hecho relacionado con las dinámicas actuales de la acumulación de capital se manifiesta en la reprimarización de la economía latinoamericana, así como en la emergencia de nuevos y renovados actores sociales que cobran protagonismo de manera particular en el continente latinoamericano. A estos factores se suma el dinamismo de escuelas de pensamiento crítico que construyen nuevos enfoques de y desde realidades distintas a las europeas y norteamericanas, en donde el locus epistémico de enunciación ya no se sitúa en el centro del sistema-mundo.

Perspectivas que explican las motivaciones, las elecciones y los fines que mueven a los individuos a actuar en colectivo para la defensa de unas demandas que, consideran como justas y que se insertan en espacios geográficos y temporales concretos (espacios entendidos no como contexto sino como parte del sentido social y político de la acción). En estas nuevas perspectivas se exploran las percepciones, las narrativas, las emociones, las representaciones y significados contruidos en el interior de los movimientos sociales en un sentido político y contingente, sobre los que se producen discursos y modelos alternativos de emancipación social que, evidencian la existencia de un campo de conflicto y la necesidad de la deconstrucción de los modelos dominantes de “ser”, “pensar”, “sentir” y “hacer”¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Entendemos el concepto de naturaleza como lo plantea Eduardo Gudynas referido a “un ambiente, como conjunto o sistema, donde prevalecen los paisajes, fauna y flora original (desde silvestre a grados intermedios de intervención humana) Se busca con esto rescatar el concepto de otros usos actuales, como capital natural”. (Gudynas 2016, p. 8)

¹⁰⁹ Para localizar el concepto de emancipación, recurrimos a los aportes realizados por el enfoque decolonial. En particular, los realizados por Walter Mignolo a partir de las elaboraciones de Enrique Dussel, en donde la emancipación se sitúa en los procesos de liberación de las diferentes formas que adquiere la dominación y desde la descolonización epistémica. Mignolo señala:

Con el fin de enmarcar la perspectiva teórica desde la cual se construye la presente tesis, creemos que es importante abordar, en este primer apartado, algunos de los conceptos de la agenda clásica que consideramos pueden contribuir al análisis que pretendemos realizar, y que han dado paso a nuevas construcciones conceptuales.

2.2. La acción racional en el centro de la movilización

En los años ochenta, el análisis de los movimientos sociales en América Latina estuvo influido por la teoría de la movilización de recursos (TMR), según la cual la protesta social es producto de la reflexión racional que realiza el sujeto para alcanzar sus intereses individuales.

La TMR surge a finales de los años sesenta a partir de las construcciones teóricas realizadas por el enfoque de la elección racional, según el cual los individuos se movilizan en virtud de una racionalidad instrumental, es decir, desde el cálculo costo-beneficio que conlleva una acción determinada. Para Mancur Olson, uno de los principales exponentes de la *rational choice*, el comportamiento de los individuos que participan en grupos o asociaciones es racional en el sentido que sus objetivos son perseguidos por medios que son eficientes y eficaces para lograr la consecución de los mismos¹¹⁰ (Olson, 1992 [1965], p. 75).

En esta lógica, los movimientos sociales son grupos racionalmente organizados en estructuras formales e informales que persiguen determinados fines colectivos. Las estructuras de movilización son definidas como “los canales colectivos tanto formales como informales, a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva”. (McAdam et al., 1999 [1996], p.24) Estos canales incluyen los repertorios tácticos y modulares de los movimientos sociales, a saber: estructuras de movilización, experiencia de los líderes del movimiento, recursos

En el esquema total del pensamiento de Dussel, la emancipación necesita ser subsumida bajo la liberación; en mi argumento, también bajo la descolonización epistémica. Si no es así, el concepto de emancipación se convierte en un universal abstracto, administrado por quienes habitan su propia historia y la proyectan sobre historias que no les pertenecen, historias locales que no son las suyas, historias locales en las cuales son extranjeros sin pasaporte. La mayoría de las personas del mundo aún tendría que esperar hasta que les fuese dada la emancipación. (Mignolo, 2015, p. 165)

¹¹⁰ Mancur Olson desarrolla esta teoría desde una visión empresarial centrada en el *homo economicus* para explicar la lógica organizativa y el comportamiento de ciertos grupos. La explicación del comportamiento colectivo desarrollado por este autor se puede aplicar a los grupos de interés, pero no a los movimientos sociales cuyas lógicas de relacionamiento son distintas, así como el sentido de la acción que desarrollan.

financieros, acciones colectivas previas, redes de solidaridad en la comunidad, estrategias de movilización, entre otros elementos.

La continuidad, la perdurabilidad y el mantenimiento depende de los recursos organizativos de los que dispongan (McCarthy, 1999 [1996]; Tilly, 1978) y la acción se considera como un objeto único, dado y verificable. Por tanto, los movimientos son instrumentos mediante los cuales los sujetos satisfacen sus intereses al incidir en los sistemas políticos para producir ciertos cambios y beneficiarse como grupo de tales transformaciones. (Múnera Ruiz, 1998, p. 31) El movimiento emerge a partir de cambios a largo plazo en los recursos del grupo, en su organización y en las oportunidades para desplegar o implementar formas de acción colectiva (Jenkins, 1994).

No obstante, existen múltiples motivaciones que subyacen a la decisión de los sujetos de unirse para llevar a cabo una acción determinada en pro de unos objetivos comunes y que, desde nuestro punto de vista, se relaciona más con los dispositivos cognitivos y la creación de significados compartidos que con un cálculo costo-beneficio.¹¹¹ En esta línea, la TMR no explica los procesos mediante los cuales los movimientos sociales se convierten en productores de códigos culturales alternativos, a través de la construcción de estructuras cognoscitivas propias que suponen interpretaciones de la realidad social y a partir de las cuales desafían el orden social dominante¹¹². Esta perspectiva termina supeditando el horizonte de sentido de la movilización a los marcos de un sistema social dado, razón por la cual no permite reflexionar sobre el alcance de los movimientos como sujetos de transformación social.

La TMR parte del hecho que los grupos y movimientos quieren ser integrados en el sistema político a partir del reconocimiento de sus demandas, de la apertura del sistema político y de una mayor influencia en las decisiones que afectan la vida social. Este supuesto excluye a

¹¹¹ En su momento la TMR representó un avance ante los planteamientos de las teorías funcionalistas que consideraban el comportamiento colectivo como una patología que expresa una disrupción en la interiorización y aceptación del sistema normativo social o como producto de las tensiones del proceso de modernización. En este sentido, autores como Parsons no realizan una diferenciación entre la protesta política de un movimiento revolucionario y los comportamientos desviados como la criminalidad. Las conductas desviadas son desde el funcionalismo todas aquellas que infringen las normas institucionalizadas y evidencian un desequilibrio en los procesos de integración (Melucci, 1999). Al respecto, Laraña señala que desde el funcionalismo “el significado real de los movimientos no radica en su contenido político o en su propuesta de cambio institucional, sino en que representan una especie de terapia contra la ansiedad por la ambigüedad normativa que caracteriza las situaciones de cambio social”. (Laraña, 1999, p. 52)

¹¹² Aunque autores como Karl Dieter Opp (2009) retoman la teoría de la elección racional para abordar el análisis microsocial de las metas de los individuos para actuar, sin embargo, se sigue sin explicar cómo se construyen esas motivaciones que no parten de una elección objetiva del sujeto, sino que se relacionan con la construcción de la subjetividad en donde interviene también el factor emocional.

grupos y movimientos que no buscan ser incluidos en el sistema, sino que su horizonte de sentido se enmarca en la subversión del orden social o aquellos que se estructuran a partir de categorías sociales y políticas que desbordan las hegemónicas. Estos elementos son constituyentes de muchas de las luchas sociales que se dan en América Latina, a partir de formas de relacionamiento propias y divergentes al orden dominante.

Al respecto, Melucci (1999) realiza una distinción entre este tipo de fenómenos colectivos: los que realizan una transgresión de los *límites de compatibilidad del sistema de relaciones sociales* (intervalo de variación que un sistema puede tolerar sin modificar su propia estructura), y las *formas de adaptación del orden*, que se sitúan en los límites de variabilidad estructural de un sistema de relaciones sociales. Esta diferenciación contribuye a la comprensión de los repertorios de confrontación, los marcos de sentido y la construcción de alternativas políticas contingentes en contextos de una alta conflictividad social como el caso colombiano.

Pierre Bourdieu también realiza una fuerte crítica al determinismo de la teoría de la acción racional. El autor señala que, desde esta corriente, se concibe la acción del sujeto sin tener en cuenta cuestiones históricas y antropológicas “la teoría de la acción racional sólo reconoce las ‘respuestas racionales’ de un agente carente de historia, indeterminado e intercambiable” (Bourdieu & Wacquant, 1995, p. 85).

Myra Marx (2001) señala, en el mismo sentido planteado por Bourdieu, que detrás de la movilización de recursos, se encuentra el individualismo radical de la teoría de la elección racional en la que no se tiene en cuenta el valor de la comunidad, de lo colectivo:

Su restringida concepción de lo que es racional excluye los principios, metas y medios de expresión que han caracterizado históricamente a los grupos subordinados. Al ignorar la incidencia de los significados procedentes de la historia personal y social en la percepción individual, en aras de una única concepción de la realidad «objetiva», la teoría de la elección racional confiere a la movilización de recursos una imagen androcéntrica, occidental y capitalista de las personas y sus preferencias. (p. 176)

Tanto los argumentos de Bourdieu como los de Marx son compartidos en esta tesis, pues evidencian los vacíos desde los cuales se construye la teoría de movilización de recursos, en tanto se homogeniza el sujeto de la acción y se lo abstrae de su propia historia, es decir, se le quita su

carácter de agente como productor de códigos culturales y de modelos societales alternativos al hegemónico¹¹³.

No obstante, en cuanto a los mecanismos que ponen en marcha las estructuras de movilización, son de relevancia los estudios realizados por McCarthy y Zald (1977; McCarthy, 1999 [1996]) sobre núcleos socio-estructurales que, aunque no tienen como función primaria la movilización pueden incidir en la emergencia de acciones colectivas. Ejemplo de ello son: los núcleos familiares, las redes de amigos, las asociaciones voluntarias, y los centros de trabajo, entre otros. El objetivo del estudio realizado por estos autores es encontrar las localizaciones y dinámicas que generan el cambio social en la línea de contribuir a un análisis interrelacional con el enfoque del proceso político y de los procesos enmarcadores.

En esta perspectiva, McCarthy (1999 [1996]) desarrolla el concepto de contextos de micromovilización de Doug McAdam, que se refiere a un conjunto de “alvéolos sociales en los que la gente se mueve cotidianamente y en el seno de los cuales los vínculos, tanto formales como informales, pueden funcionar como estructuras que facilitan la solidaridad y la comunicación” (p. 206) y pueden intervenir en el proceso que activa la protesta social.

Laraña (2001) destaca la función que desempeñan estas articulaciones informales en el surgimiento, mantenimiento y perdurabilidad de los movimientos sociales: “esas redes funcionan como laboratorios para el desarrollo de nuevos códigos de comportamiento y significación, en ellas se gestan nuevas formas de relación interpersonal y estructuras de sentido que tienen carácter alternativo y confieren carácter antagonista al movimiento”. (p. 164)

Esta aproximación permite ampliar la reflexión sobre el funcionamiento de la micromovilización y el papel que juega en la activación de los movimientos sociales, no sólo desde el punto de vista de la movilización de recursos, sino de la construcción de marcos de sentido e identidad colectiva. En los periodos de latencia de los movimientos sociales esas redes sumergidas permiten la producción de significados alternativos de la realidad, la continuidad en las articulaciones del actor y emprender acciones de movilización política en la que colocan en juego

¹¹³ La teoría de movilización de recursos se centra más en el cómo de los movimientos sociales y no en el porqué de los mismos, referida a las motivaciones que subyacen la decisión de sujetos individuales de unirse para llevar a cabo una acción determinada alrededor de unos objetivos comunes. En este sentido, la TMR deja en un plano secundario las motivaciones situadas en el plano cultural e ideológico del actor relacionadas con las “emociones, subjetivas ideas, valores, normas y deseos que condicionan intrínsecamente la acción” (Delgado, 2007, p. 49).

sus marcos de referencia en la opinión pública¹¹⁴. Precisamente, son estos alvéolos sociales los que contribuyen a esa vertebración de lo común, como un elemento presente en los movimientos latinoamericanos, asociado a las prácticas sociales que estructuran el espacio y que a su vez son producidas por el mismo.

Miller (2000) nos recuerda cómo el contexto geográfico desempeña un papel fundamental en la acción racional debido en parte a que las comunidades sustentadas en el lugar pueden incidir en la conducta de los individuos y, a su vez, en el cálculo estratégico que realizan para emprender una acción determinada. Estos elementos son más evidentes en las formas geográficas particulares en las que se forman las identidades sustentadas en el lugar. Además, el autor advierte que la estructuración espacial de la interacción social resulta en una variedad de concepciones geográficamente específicas de clase, género, etnia y raza. Estas concepciones se construyen en la subjetividad política y no desde un análisis racional de costo-beneficio de los actores.

Asimismo, las organizaciones de movimientos sociales se esfuerzan por crear sus propios lugares y espacios como parte del proceso de movilización. Sin embargo, un análisis que se centre en las acciones de la organización no sería suficiente para develar la complejidad de la acción colectiva. Por tanto, se puede inferir que el enfoque de la movilización de recursos no brinda las herramientas analíticas para la comprensión de las razones por las cuales se despliega y mantiene la movilización.

2.3. La relación entre sistema político institucional y los movimientos sociales

A partir de la teoría de movilización de recursos, se desarrolla en la escuela sociológica norteamericana una perspectiva que se centra en el estudio de la influencia de los procesos políticos en las oportunidades para la acción colectiva. Los principales teóricos en avanzar sobre esta corriente son: Doug McAdam (1982), Sydney Tarrow (1994,1983) y Charles Tilly (1978). Posteriormente, las corrientes europeas aportan una perspectiva comparada de la estructura de oportunidades políticas. Se destacan los desarrollos realizados por teóricos europeos como Kriesi (1988), Kitschelt (1986) y Koopmans (1992).

¹¹⁴ Teóricos situados en una perspectiva más constructivista de la acción colectiva como Alberto Melucci (1999) señalan que el movimiento social no debe entenderse como producto de una estructura social externa que unifica al grupo, sino que las razones del fenómeno social se encuentran en el interior de la misma acción colectiva y del movimiento, de la interacción con el contexto en el que se desarrolla.

Desde los dos enfoques se comparte la premisa de que la emergencia de los movimientos sociales, el comportamiento de los ciclos de protesta y las revoluciones se ven mediados por los cambios dados en un sistema político-institucional¹¹⁵. En este sentido, las variaciones ideológicas en las élites políticas y el cierre o apertura del sistema político a la participación o a la incorporación de las demandas sociales, inciden en las posibilidades de éxito o fracaso de los movimientos sociales y de los ciclos de protesta¹¹⁶.

Para explicar las dinámicas de estos procesos, se realiza un esfuerzo por tratar de delimitar el concepto de oportunidad política y acotar sus categorías analíticas ante la variada producción académica surgida en los años ochenta y noventa. Al respecto, teóricos inscritos en la corriente de estudios culturales han llamado la atención sobre el sesgo excesivamente estructuralista y el peligro de la utilización del concepto de estructura de oportunidad política (EOP) de manera indiscriminada¹¹⁷.

Como respuesta a las críticas del modelo, los teóricos inscritos en esta teoría, han tratado de delimitar el concepto y llaman la atención sobre cambios estructurales o ideológicos del poder que pueden incidir en la emergencia y trayectoria de los movimientos sociales. McAdam (1999 [1996]) distingue cuatro dimensiones que constituyen la estructura de oportunidades políticas, a saber:

- El grado de apertura relativa del sistema político institucionalizado.

¹¹⁵ Sidney Tarrow (1997) analiza las dinámicas de los ciclos de protesta en relación con los cambios en las oportunidades políticas, que provocan fases de auge o declive de la movilización social. En los momentos en los que el gobierno es más proclive al cambio social y en el que se relajan las restricciones, se produce una movilización de recursos que desemboca en una acción colectiva continua: periodos de movilización general en sistemas sociales enteros, dando lugar a "ciclos de protesta". Para el autor en los ciclos de protesta se caracterizan por: producir nuevas oportunidades políticas que son aprovechadas por otros actores, lo que genera una rápida difusión de la acción colectiva y la movilización; se originan innovaciones en las formas de contención; creación de nuevos marcos interpretativos o transformación de los existentes; intensificación de la coexistencia entre los actores organizados y no-organizados; y aumento de la interacción entre los desafiantes y las autoridades.

¹¹⁶ Nos parece importante señalar que para la teoría del colonialismo interno, desarrollada en América Latina, el concepto de ciclo de protesta no sería útil para comprender la complejidad histórica de las subjetividades políticas que intervienen en la movilización social. En este sentido, "la teoría del colonialismo interno como marco teórico-metodológico posibilita plantear una sociología histórica que abarque grandes periodos de tiempo, identificando momentos constitutivos que se presentan como diferentes horizontes históricos de profundidades diversas que se interceptan y se reactualizan en la contemporaneidad". (Accossatto, 2017, p. 176) Por tanto, el colonialismo interno plantea ampliar el marco de reflexión de las movilizaciones populares que desde la propuesta de Tarrow se limita a comprender los factores que marca el ciclo.

¹¹⁷ Autores como Gamson y Meyer han sido de los más críticos en este punto. En su momento señalaron, que la EOP: "amenaza con convertirse en un cajón de sastre, en el que situar todas aquellas condiciones y circunstancias que configuran el contexto en el que se desarrolla la acción colectiva. Si se le quiere utilizar para explicar tanto, en último término puede llegar a no explicar nada" (Gamson y Meyer, 1999, p. 389).

- La estabilidad o inestabilidad de las alineaciones entre las élites, alineaciones que ejercen una gran influencia en el ámbito de lo político.
- La presencia o ausencia de aliados entre las élites.
- Capacidad del Estado y su propensión a la represión¹¹⁸ (p. 54).

Por tanto, el concepto de oportunidad política, hace referencia a las características y/o dimensiones del contexto político que incentivan o no la aparición de movimientos sociales y el mantenimiento y perdurabilidad de sus acciones. Sidney Tarrow las define como dimensiones congruentes (formales e informales, permanentes o no) del contexto político, que generan estímulos para que los individuos participen en acciones colectivas al incidir en sus expectativas de éxito o fracaso. En su definición, tiene en cuenta las estructuras formales institucionales y las derivadas de las relaciones de poder en los sistemas (subnacionales o transnacionales), es decir, “las estructuras de alianzas generadas por los conflictos, que contribuyen a la obtención de recursos y crean una red de oposición frente a constricciones o limitaciones externas al grupo” (Tarrow, 1994, p. 89).

El modelo del proceso político hace una apuesta por el análisis racional-colectivista de la movilización social. (Delgado, 2007) Al cuestionamiento de por qué los sujetos deciden movilizarse y actuar, se centra en los cambios del sistema político institucional y en los recursos que tengan los actores para aprovechar tales ventanas de oportunidad. Desde este enfoque, los movimientos sociales surgen cuando los actores responden a la EOP que a su vez incide en los costos de la acción y en los beneficios de la misma.

Ahora bien, los autores inscritos en este modelo reconocen que en el proceso de la movilización los factores culturales juegan un papel que no se puede obviar. A continuación, mencionaremos algunos aportes que consideremos importante incluir en este apartado con el objetivo de reflexionar sobre cómo se abordan las variables microsociales en una visión más estructuralista de la acción colectiva, lo cual contribuye a entender las dinámicas de los procesos culturales en la creación de significados por parte de los actores sociales.

En los aportes realizados por Sidney Tarrow nos parece importante señalar dos aspectos, a saber: el análisis de las dimensiones menos estables de las oportunidades políticas y la

¹¹⁸ Las primeras cuatro variables cuentan con un cierto consenso entre los diferentes teóricos del proceso político. La quinta dimensión referida a la represión ejercida por el Estado ha estado sujeta a debate. Autores como Donatella della Porta, señalan que esta es más una expresión derivada de la receptividad o vulnerabilidad general de la EOP que una variable independiente de la misma. (Mc Adam, 1999).

importancia de los marcos interpretativos en el mantenimiento de la movilización. En relación al primer aspecto, Tarrow (1997) señala que “las estructuras del Estado crean oportunidades estables, pero son las oportunidades cambiantes en el seno de los Estados las que ofrecen las oportunidades que los interlocutores pobres en recursos pueden emplear para crear nuevos movimientos” (p. 50).

El autor reflexiona acerca de las características más volátiles del sistema político: los cambios en los alineamientos de los gobiernos, la disponibilidad de aliados influyentes y las divisiones entre las élites y en el interior de las mismas. Según esta perspectiva, las variaciones de las relaciones de fuerza de los grupos dominantes son interpretadas por los grupos desafiantes del sistema, en función de los límites y oportunidades para la acción. A este respecto, consideramos que la valoración de las dinámicas del contexto político realizada por los movimientos sociales, forma parte de la construcción colectiva del sentido de la acción política, pero debe ser vista no como un proceso racional costo-beneficio sino como un modelo en el que intervienen procesos culturales más complejos¹¹⁹.

En este proceso, los movimientos sociales pueden crear a su vez oportunidades políticas por medio de la utilización de diferentes herramientas que les permiten expandir su radio de acción a través de redes sociales sumergidas, alianzas y coaliciones con otros actores sociales, introduciendo un espacio político para otros actores, y estímulos que producen una reacomodación de las élites políticas y se genera una apertura del sistema político¹²⁰.

En este punto, surge la cuestión de si las dinámicas en el interior del proceso político son suficientes para el despliegue de las acciones de los movimientos sociales o si, por el contrario, los factores decisivos se encuentran en los procesos de interpretación de la realidad, en las emociones y en la construcción de una identidad colectiva. A nuestro parecer, el problema radica en el enfoque

¹¹⁹ Tarrow (1994) define a los movimientos sociales como desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades. Esta definición tiene cuatro propiedades empíricas: desafío colectivo, objetivos comunes, solidaridad e interacción mantenida. (p. 21)

¹²⁰ En este punto es importante señalar el enfoque de estudio desde el que parte Tarrow (1994). Primero, la esencia de los movimientos sociales la constituye la acción colectiva contenciosa. Este término se refiere a que el sujeto de la acción tiene un bajo nivel de acceso a las instituciones, sus reivindicaciones son nuevas o no aceptadas y representa una amenaza para otros actores. Dicho autor considera que un movimiento social emerge cuando se organizan las acciones en torno a objetivos comunes en secuencias mantenidas de interacción con sus oponentes o las autoridades. Segundo, Tarrow se interesa por investigar las características del momento histórico en el que se producen los movimientos sociales, es decir, el “cuándo” de los mismos y para ello se centra en las dimensiones del sistema político que pueden incentivar ese tipo de acción colectiva contenciosa. Sin embargo, creemos que el “cuándo” del surgimiento de los movimientos sociales no debe confundirse con el “porqué” de los mismos ya que no se puede situar las causas en factores externos al actor. Así mismo es importante tener en cuenta no solo la dimensión temporal sino la dimensión geográfica de la movilización social.

macrosociológico del análisis y en el sesgo estructuralista que no permite detenerse en las dimensiones culturales del proceso.

Los líderes de los movimientos sociales recurren a símbolos culturales que pueden tener resonancia entre sus seguidores y otros posibles grupos afines a sus reivindicaciones. Estos símbolos son creados a partir de un repertorio cultural utilizado anteriormente por otros movimientos o, inclusive, por el Estado y las élites políticas. Los organizadores del movimiento deben encontrar estrategias políticas que les permitan posicionar estos símbolos tanto en las redes sumergidas como en el debate público.

El horizonte de la lucha de los movimientos se construye a partir de la identificación de “agravios”, de su conexión con otros “agravios” y de la elaboración de marcos de significado más amplios que puedan llegar a segmentos de la población receptivos a sus demandas. En estos marcos globales se identifica un sentido de la injusticia, se establecen responsabilidades y se propone una agenda para modificar la situación que se considera injusta. Este sería el proceso de “enmarcado” desarrollado por Snow y Benford y retomado por Tarrow¹²¹ (1994).

Aunque Tarrow no se inscribe en la corriente culturalista de los movimientos sociales, sí recurre a variables de análisis de la teoría de los marcos de significado para explicar la conformación y el mantenimiento de la acción colectiva, al igual que McAdam y Tilly. Este giro relacional del modelo se explica con mayor profundidad en el libro *Dinámica de la contienda política* (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2005 [2001]).

Por otra parte, es relevante señalar el carácter geográfico de la EOP y de las dimensiones que la conforman. Miller y Martin (2000) apuntan hacia el lugar como un elemento diferenciador en el despliegue de las oportunidades políticas y al análisis espacial como un elemento transversal del proceso político y de la movilización. En este sentido, los autores señalan cómo la apertura de los sistemas políticos varía en función de los lugares y de las escalas; la estabilidad o inestabilidad de las alineaciones entre las élites cambia de un lugar a otro, así como la presencia de potenciales

¹²¹ Nos parece importante señalar tres cuestiones resaltadas por Tarrow (1997) en la dinámica del enmarcamiento desplegada por los movimientos sociales y que se refieren a la complejidad de la misma: primero, los movimientos compiten con otros actores sociales e incluso con el Estado por el control de un aspecto del campo cultural o por el control del campo en sí mismo. Estos grupos suelen disponer de mayores recursos culturales; segundo, los movimientos que se alinean demasiado a las culturas en las que se inscriben suelen perder fuerza de oposición; tercero, los militantes del movimiento pueden hacer una lectura que disienta de la de sus líderes por lo que se pueden presentar fracturas al interior de la organización.

aliados; la capacidad del Estado y su propensión a la represión se modifica no solo entre Estados sino dentro de las regiones que componen un mismo Estado (p. 25).

Asimismo, estos autores se refieren a un cierto sesgo historicista de los teóricos del proceso político, en donde la variable geográfica queda en un segundo plano, siendo un elemento fundamental para la comprensión de las estrategias de los movimientos sociales. No olvidemos que la escala es inherente a la estructura de oportunidad política, en tanto, se refiere no solo a los diferentes niveles de los procesos políticos, sino a las formas en las que se representa espacialmente a los actores y las estrategias de movilización que pueden producir “saltos de escala” para la ampliación del conflicto y el involucramiento de otros actores¹²².

2.3.1. Repertorios de confrontación

Charles Tilly aborda los determinantes culturales de la movilización política a través del concepto de repertorios de confrontación¹²³. El autor entiende que las estrategias de los actores que se

¹²² No obstante, es importante señalar los trabajos de Sidney Tarrow en los que se analizan los ciclos de protesta transfronterizos o transestatales. En particular, la reflexión que realiza en el libro “*El nuevo activismo transnacional*”. En donde estudia diferentes casos de movimientos, acciones de protesta y organizaciones que establecen un vínculo entre la escala local y la escala global. El autor plantea que, si bien no estamos asistiendo al establecimiento de una ciudadanía global, con un sistema de gobernanza global, si se puede afirmar que existe una tendencia hacia nuevas formas de la contienda transnacional, al surgimiento de renovados actores que actúan en este plano, que tienen incidencia tanto en la política nacional e internacional y que han creado formas de articulación y relacionamiento que superan las fronteras nacionales. Tarrow también analiza los procesos de “salto de escala” que realizan los actores a través de estrategias de externalización de sus reivindicaciones, en la búsqueda de aliados que no se circunscriben necesariamente al ámbito regional y nacional, con el objetivo de abrir nuevas ventanas de oportunidad que permitan extender la movilización en relación a determinados ejes temáticos. (Tarrow, 2010)

¹²³ El concepto de repertorios de confrontación acuñado por Charles Tilly forma parte del importante legado teórico y metodológico dejado por este autor. Desde un enfoque en que se combina la sociología y la historia, Tilly dedica gran parte de su producción teórica a analizar la relación que existe entre las grandes transformaciones estructurales insertas en el capitalismo y la construcción del Estado y las dinámicas que adquiere la acción colectiva en líneas temporales de larga duración. En los primeros trabajos realizados por el autor, el enfoque estaba centrado principalmente en cómo tales transformaciones inciden en la estructura de oportunidad política del movimiento y en los ciclos de protesta. En trabajos posteriores, introduce en su teoría un elemento relacional que se refiere a la interacción entre los diferentes actores que intervienen en la acción colectiva y el impacto en los repertorios de confrontación. La interacción social para Tilly “implica errores constantes seguidos de intentos por corregirlos. Buena parte del orden en la estructura social y en los procesos sociales es, entonces, el producto no de la acción racional, sino de los intentos por (y los límites al) corregir errores” (Auyero, 2011, p. 240).

Por tanto, su estudio de la acción colectiva sobrepasa las teorías economicistas de la movilización y el “individualismo metodológico”, para introducir los problemas de la distribución asimétrica del poder y de la autoridad, los intereses de los grupos y la introducción del elemento cultural en la forma que adquiere las movilizaciones (Aguilar, 2009). El autor busca desde esta perspectiva superar las dicotomías entre orden-desorden, acción-estructura, acción-contexto, creatividad-determinación planteadas por otras corrientes sociológicas de carácter determinista. Aborda por una parte la capacidad de agenciamiento y creatividad de los individuos y, por otro lado, enfatiza las restricciones estructurales que limitan la posibilidad de la acción colectiva (Traducción propia) (Da Gohn, 2008, p. 31).

implican en la movilización no son infinitas y, por lo tanto, recurren a aquellas prácticas culturales que se forjan en la historia del conflicto. Este concepto es uno de los tantos aportes al estudio de la acción colectiva, ha sido utilizado por diferentes autores para analizar la conflictividad social en América Latina y, en el caso que nos interesa, Colombia. Ahora bien, por repertorio de confrontación se entiende:

Un conjunto limitado de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas a través de un proceso de elección relativamente deliberado. Los repertorios son creaciones culturales aprendidas, pero no descienden de la filosofía abstracta ni toman forma como resultado de la propaganda política, sino que surgen en la lucha. (Tilly, 2002, pág. 18)

Este concepto pone de relevancia la continuidad histórica y espacial de las estrategias empleadas en la acción colectiva (Oslender, 2008) y, a su vez, resalta la forma en que se le da visibilidad al proyecto de emancipación y resistencia del movimiento en el espacio público, en el marco de una relación conflictual con los marcos culturales desarrollados por otros actores sociales y por los gobiernos.

La idea de repertorios de confrontación reconoce el conjunto de prácticas simbólicas y de construcción de significado que dan sustento a la acción colectiva. Asimismo, permite la reflexión sobre aquellas acciones de tipo contencioso que tuvieron éxito, siempre en interacción con las dinámicas políticas y sociales en las que se inscriben. Ese carácter simbólico incide no solamente en las elecciones de los líderes y militantes del movimiento, sino que repercute en el imaginario de los *otros* grupos sociales que disputan el control de los diferentes campos de lo social. Las acciones colectivas previas se pueden alterar cuando alguna estrategia resulta tener un mayor impacto en la sociedad, en comparación con las utilizadas de manera tradicional por el movimiento.

De tal manera, “un repertorio de acción es, pues, un concepto a la vez estructural, cultural e histórico”¹²⁴ (Calleja González, 2011, p. 38). Así como espacial debido a que los diferentes repertorios se construyen, alteran y transforman en interacción con el lugar. Por tanto, la reflexión

¹²⁴ A manera de ejemplo, a finales de la década de los noventa, los sindicatos argentinos privilegiaron los cortes de ruta -en alianza con otros sectores- a estrategias de protesta ligadas al trabajo asalariado como las huelgas. Los cortes de ruta ejercían mayor presión en el gobierno en el momento de la negociación y tenían una carga simbólica más significativa en el contexto de la crisis económica. La adopción de los cortes de ruta como forma de confrontación privilegiada, en el contexto de la Argentina de fin de siglo, responde a una serie de factores endógenos y exógenos que incidieron en la adopción de este tipo de acciones por parte del movimiento de desocupados. En el campo de la identidad colectiva, la movilización se estructuró alrededor de la ampliación del concepto de ciudadanía industrial, en un contexto en que la principal forma de asociación estaba ligada a las dinámicas movimiento obrero.

sobre los mismos debe tener en cuenta que el espacio es multidimensional, que forma parte de la totalidad social y, es producto de unas relaciones de poder y de saber inscritas y producidas en/por los diferentes territorios.

Ahora bien, en los repertorios de confrontación se encuentra implícita una apropiación material y simbólica del espacio, que se relaciona con los procesos de construcción de significados en el interior de los movimientos y con su puesta en el escenario público. Las estrategias contenciosas confrontan significados y percepciones de la realidad construidas por los actores, en donde el “espacio forma parte del discurso y de la acción transformadora” (Tamayo Flores, 2016, p. 38). Por lo tanto:

La espacialidad de los movimientos es una dimensión fundamental que explica su dinámica: la apropiación metafórica y política del espacio público, como campo de contestación y lucha política, como lugar físico de expresión de agravios y resistencias, como enunciado performativo, corporal, de la lucha simbólica, y como lugar de emociones entremezcladas. (Tamayo Flores, 2006, p. 59)

En esta línea, nos parece relevante señalar el análisis que realiza Oslender (1999, 2008) sobre la espacialización de las resistencias, aplicado al estudio de caso de las comunidades negras del Pacífico colombiano.

Este autor reflexiona sobre la política contenciosa a través de los tres momentos de producción del espacio de Henri Lefebvre (2013): prácticas espaciales, espacios de representación y representaciones del espacio y el concepto de lugar del geógrafo John Agnew¹²⁵. A través de la reflexión, Oslender busca superar las visiones deterministas del espacio, para evidenciar como el “espacio” y el “lugar” son “terrenos específicos en que se manifiestan las múltiples relaciones de poder en formas específicas de dominación y resistencia” (Oslender, 1999, p. 17). En esta tesis, se trabaja en la misma línea, pero abordando la construcción social del territorio desde la conflictividad social.

Por otra parte, consideramos que los repertorios de confrontación son una extensión de esa manifestación de las relaciones de poder que se evidencia en las herramientas simbólicas,

¹²⁵ Desde la geografía crítica, John Agnew desarrolla el concepto de lugar como categoría espacio-temporal para el análisis del comportamiento político y del cambio social, entendiendo que el “lugar” comprende tres elementos fundamentales: localidad, ubicación, y sentido del lugar. La localidad se refiere a los marcos –informales o institucionales- en los que se llevan a cabo las relaciones sociales cotidianas, rutinarias. La ubicación es entendida como el espacio geográfico o el área local que contiene a la localidad y que se caracteriza por el impacto que ejercen los procesos socio-económicos que se desarrollan en otras escalas (regional, nacional y global). Finalmente, el sentido del lugar hace referencia al sentimiento local, a la dimensión subjetiva de pertenencia y/o arraigo que desarrollan las personas en relación con un espacio en particular (Traducción propia) (Agnew J. , 1987).

discursivas, performativas, materiales y organizativas que despliegan los actores sociales para desafiar y subvertir el orden hegemónico, que no pueden ser comprendidas en toda su complejidad si se obvia el análisis espacio-temporal.

Asimismo, el análisis de los repertorios de confrontación de un movimiento social no puede ser aislado, tiene que ser puesto en relación con los procesos de creación de significados y de construcción de la identidad colectiva del movimiento. Desde nuestra perspectiva, estos factores son los que determinan el horizonte de sentido de la lucha social y, por consiguiente, las estrategias a utilizar para construir en el espacio el proyecto de emancipación y resistencia.

2.3.2. Una propuesta de renovación del estudio de la acción colectiva: la dinámica de la contienda política

El libro “Dynamics of Contention” (en español titulado *Dinámicas de la contienda política*), elaborado por D. McAdam, S. Tarrow y C. Tilly, representa un punto de inflexión en los estudios de los movimientos sociales pues refleja buena parte de los debates y avances realizados por los autores a partir de sus primeras obras sobre acción colectiva en los años ochenta y noventa, así como una reflexión acerca de las críticas realizadas desde perspectivas situadas en ángulos distintos del modelo del proceso político. La propuesta metodológica, presentada por estos autores, parte de la necesidad de construir un enfoque sociológico innovador que abarque la conciencia y la cultura como elementos claves de los procesos de creación y cambio de la contienda política (McAdam et al., 2005 [2001], p. 24).

Los autores desmenuzan lo que denominan la “agenda clásica de los movimientos sociales”- teoría de la movilización de recursos, estructura de oportunidades políticas y marcos cognitivos -, con la pretensión de romper las fronteras epistemológicas existentes entre estas perspectivas y el establecimiento de un diálogo conceptual, a partir de la investigación empírica de la política contestataria desarrollada en diferentes realidades políticas y momentos históricos¹²⁶.

¹²⁶ En la propuesta la historia no aparece simplemente como el encuadre en el que se realiza la acción, sino que permite explicar las características que adoptan los movimientos sociales y lo distinguen de otras formas de hacer política, el desarrollo posterior al surgimiento de los movimientos, así como las condiciones políticas que incentivan la entrada en escena de los mismos. La obra da cuenta de esa imbricación entre la sociología y la historia presente en la producción teórica de Tilly y que se hace aún más evidente en el su libro *Social Movements, 1768-2008* (2010).

El modelo que proponen para superar la rigidez del análisis de los movimientos sociales de la agenda clásica, consiste en aplicar el concepto de mecanismos sociales de la sociología de Robert Merton a los procesos colectivos presentes en la contienda política. Los autores pretenden dar un paso hacia delante en la investigación, al trasladar el núcleo del análisis de las condiciones necesarias que permiten la movilización a la identificación de los mecanismos recurrentes presentes en la contienda política, que se concatenan en procesos causales.¹²⁷

La identificación de mecanismos y procesos es complementada, por los investigadores, con un desplazamiento en la interpretación de elementos presentes en la agenda clásica: primero, las oportunidades y amenazas no son categorías objetivas, sino que dependen del tipo de atribución colectiva de los protagonistas de la movilización y de otros actores (de la estructura de oportunidad a la atribución); segundo, las estructuras de movilización pueden ser preexistentes o creadas en el curso de la movilización pero, es necesario un proceso de apropiación de las mismas para que sean funcionales (de las estructuras de movilización a la apropiación social); tercero, los actores, acciones y episodios son transformados interactivamente por sus oponentes, los medios de comunicación y otros actores relevantes (del enmarcamiento estratégico a la construcción social); cuarto, las acciones innovadoras presentes en los repertorios de confrontación que se transforman en la interacción con el interior de la movilización y con otros actores (de los repertorios transgresivos a la acción colectiva innovadora).

Este programa de análisis de la contienda política, en particular la transgresiva¹²⁸, ha suscitado en los últimos años varios cuestionamientos en relación a su verdadero carácter relacional, sin desconocer, los esfuerzos realizados por los investigadores para plantear nuevas interpretaciones analíticas de la movilización social. Aunque el objetivo de la presente tesis no es

¹²⁷ En el modelo presentado se distingue entre mecanismos sociales, procesos y episodios: “los mecanismos son una clase delimitada de acontecimientos que alteran las relaciones entre conjuntos especificados de elementos de maneras idénticas o muy similares en toda una variedad de situaciones; los procesos son secuencias regulares de tales mecanismos que producen transformaciones similares (generalmente más complejas y contingentes) de esos elementos; los episodios son corrientes continuadas de contienda que incluyen reivindicaciones colectivas relativas a los intereses de otras partes” (McAdam, et al., 2005 [2001], p. 26).

¹²⁸ Los principales elementos sustantivos de esta contienda transgresiva son: el sujeto que emprende la acción es un actor político recientemente autoidentificado y la utilización de formas de acción colectiva innovadoras. La “contienda transgresiva” interactúa de manera constante con la “contienda contenida”, en donde la acción es realizada por actores políticos constituidos. La profunda interrelación, entre estas dos formas de contienda, constituye uno de los principales aportes realizados por estos autores a la construcción de renovados enfoques para pensar la acción colectiva en encuadres más amplios (McAdam et al., 2005 [2001]).

profundizar en este modelo de análisis de la movilización, nos parece relevante destacar los siguientes debates puntuales acerca del componente cultural y espacial en el modelo propuesto.

En primer lugar, el programa de la contienda política representa un intento por parte de los autores de contrarrestar las críticas a su excesivo estructuralismo y resaltar los factores cognitivos que intervienen en la acción. Para ello introducen los procesos de atribución amenaza y los mecanismos mediante los cuales los actores producen un conjunto amplio de interpretaciones a través del enmarcamiento y la interacción. Sin embargo, es en este apartado donde se evidencian las limitaciones de este marco interpretativo. El enfoque continúa confundiendo la:

Comprensión de la cultura como un elemento inherente y ubicuo a todas las dinámicas de un movimiento social, con la conceptualización de lo cultural como un ámbito al que se dirige la acción colectiva con el objetivo de desafiar y/o modificar los códigos dominantes que establecen las formas legítimas de ser, pensar o actuar. (Delgado, 2007, p. 27)

Como lo señala Delgado, este es el ámbito de la política de la cultura de los movimientos sociales, concepto desarrollado por Evelina Dagnino, Sonia Álvarez y Arturo Escobar para el análisis de movimientos latinoamericanos, en el que las prácticas culturales consideradas como marginales pueden llegar a producir procesos que deben ser considerados como políticos. Los autores definen política cultural como el proceso que se establece cuando los actores sociales configurados por diferentes significados y prácticas culturales entran en conflicto. Los significados y prácticas culturales, en particular, los teorizados como marginales, de oposición, minoritarios, residuales, emergentes, alternativos, disidentes, etc. todos concebidos en relación con determinado orden cultural dominante, pueden originar procesos cuyo carácter político debe necesariamente ser aceptados (Escobar, Álvarez, & Dagnino, 2001, p. 56)¹²⁹.

El segundo elemento, se refiere a los vacíos del planteamiento en cuanto a la dificultad de establecer secuencias lógicas en la concatenación causal, entre los mecanismos y procesos y la forma en que los autores operacionalizan dicha causalidad en los episodios de la política contestataria (Ibarra & Martí, 2005 [2001]). Para Francesca Polletta (2002), la dificultad se encuentra en que los autores identifican una serie de mecanismos (ej. intermediación y “espiral de

¹²⁹ Segundo, James Jasper (2012a) señala que el modelo planteado no logra pasar de un enfoque estructural dominado por el modelo del proceso político a una interpretación estratégica de la movilización social, debido a que se sigue operando bajo la lógica del análisis macro sociológico, sin profundizar en las interacciones desarrolladas por los individuos y que influyen en las relaciones que se dan en la movilización. Para Jasper la vinculación de los elementos culturales en la propuesta de los tres autores pasa por alto el análisis de los elementos psicosociológicos de los individuos que constituyen la interacción estratégica, tales como las emociones, los compromisos morales, la formación de la identidad, las memorias, etc (Jasper J. , 2012b, pág. 15).

oportunidades políticas”) que estiman tienen la función de causalidad en el estudio de la contienda política; sin embargo, la amplitud en su definición y falta de desarrollo de dichos mecanismos se queda corta para explicar las dimensiones culturales de la movilización. La cultura aparece asociada, solamente, con la capacidad creativa que tienen los actores para interpretar las condiciones políticas en las que se encuentran insertos, pero es necesario tener en cuenta que los actores pueden trastocar las reglas del juego institucional ya que las oportunidades políticas externas son también culturales (Polletta, 2004).

En tercer lugar, es importante señalar que, la propuesta de estudio de la contienda política representó una oportunidad para repensar el espacio en la producción de la acción colectiva, dimensión que tradicionalmente ha estado subordinada al análisis temporal. Una referencia importante es el número de la *Revista Mobilization* editado por Byron Miller y Deborah Martin (2002), en donde los autores plantean la existencia de diferentes caminos para pensar el espacio en los estudios de la política contenciosa. No obstante, realizan una advertencia epistemológica en cuanto al error de entender lo “espacial” y lo “social” como hechos separados o el “espacio” simplemente como un contenedor de la acción colectiva. Desde la geografía, estas dos dimensiones se constituyen mutuamente, por tanto, no es posible pensar en procesos “no espaciales”.

Los autores señalan cómo el “espacio” constituye y estructura las relaciones y las redes y hace parte del proceso de atribución de las amenazas y las oportunidades. Es fundamental para la implementación de estrategias de “salto de escala”, que buscan ampliar el conflicto, hallar nuevos aliados y crear estructuras de oportunidad política, entre otros elementos. De tal manera, Miller y Martin plantean la dimensión espacial junto a la histórica, como categorías fundamentales en los estudios de caso comparados para el análisis de la contienda política. Así como la utilización de diferentes conceptos geográficos como “escala”, “lugar”, “espacio” que darían luz a las teorías de los movimientos sociales. A este respecto, plantean la importancia de las aportaciones de Lefebvre como instrumento de análisis de la política contenciosa, en tanto, la tríada conceptual (espacio concebido, percibido y vivido) nos acerca a las dimensiones espaciales de la vida social, los significados simbólicos del espacio y la imposición de una organización socio-espacial y la resistencia a la misma (p. 146).

Por otra parte, Martin y Miller señalan cómo el espacio juega un papel clave en la configuración de mecanismos y procesos de la contienda política, ya que, el proceso de relacionamiento/afectación de los diferentes actores e instituciones se realiza a través del espacio.

Así, la espacialidad es tanto un contexto como un proceso dinámico de contención. En este sentido, el espacio impacta en los recursos, en los actores, en las estrategias, pero a su vez el espacio también se ve transformado y resignificado por estos procesos.

Por su parte, Tilly (2003) propone los siguientes elementos para el análisis de las interacciones entre la dimensión espacial y la política contenciosa: primero, los costos de la relación entre tiempo-distancia se manifiestan en oportunidades y límites, reclamaciones públicas realizadas por los actores; segundo, las configuraciones espaciales, proximidades y rutinas de los actores potenciales en la contienda inciden en la extensión y en el carácter de la movilización; tercero, la acción política influye en las jurisdicciones espacialmente organizadas de los gobiernos e impulsa la intervención gubernamental; cuarto, las configuraciones espaciales de la rutina de la vida política impactan en la forma que adquiere una contienda no rutinaria; quinto, la contienda política transforma el significado político de los sitios y las rutinas espaciales¹³⁰ (p. 221).

Finalmente, señalar que en este apartado nos interesaba recoger algunos de los principales debates y aportes surgidos en el interior de una de las corrientes predominantes en el estudio de la política contestataria y, desde la cual, se han planteado diferentes herramientas conceptuales para la construcción de un programa de análisis relacional de la movilización social. Los teóricos inscritos en esta perspectiva han realizado un esfuerzo por integrar el componente microsocial y no racional en un modelo de corte estructural que, si bien deja vacíos ha incitado a crear nuevos planteamientos que atiendan al quién, cómo, dónde, cuándo y porqué emerge la movilización social.

Precisamente, la intención de retomar para la presente tesis algunos conceptos y debates desde teorías situadas en una posición más racional y estructural, es encontrar elementos que nos permitan establecer un horizonte epistemológico para el análisis de la configuración de significados de actores sociales populares que entran en conflicto con la producción material y la reproducción social dominante. Y cómo esas interpretaciones y formas de reproducción de la vida, consideradas marginales, se constituyen en partes fundamentales para el análisis de las relaciones de dominación y resistencia, relaciones asimétricas de poder que no se producen en el vacío sino en espacios particulares, espacios que son significados y que a la vez significan las acciones

¹³⁰ Las diferentes relaciones se manifiestan en lo que Charles Tilly (2003) denomina los “sitios sociales”. Este concepto se refiere al lugar específico en el que la acción humana organizada se desarrolla. Agrupa a personas, organizaciones, lugares y redes. Se encuentra limitado por las configuraciones del espacio, el lugar y la escala. Se compone de significados compartidos, representaciones que se construyen a partir del espacio que habitan (p. 222).

contenciosas de los movimientos. Espacios que son apropiados material y simbólicamente en el tránsito a la construcción de territorios y territorialidades, en la línea planteada por Raffestin (2011 [1980]).

2.4. El actor en el centro del estudio de la movilización

En este apartado del capítulo, nos centraremos en algunos de los aportes teóricos que centran el análisis de la movilización en los procesos de producción de significados, realizados por los actores que participan en la acción contenciosa.

En relación a los temas que abordaremos, nos parece importante recordar que el objeto de estudio de la presente tesis se centra en las percepciones populares de la conflictividad socio-territorial. Estas percepciones se construyen en los márgenes de la sociedad y representan un desafío simbólico a las interpretaciones dominantes que tienden a simplificar -de manera intencional- la conflictividad social del país y a ocultar la multiplicidad de espacios sociales de significación bajo discursos homogeneizadores. Por ello, nos parece importante colocar en el centro de la reflexión, a los actores de la movilización y al sentido social de la acción política que se desarrollan como espacios de construcción de significados subalternos.

Es evidente que los recursos, la organización y las dimensiones formales y no formales del sistema político inciden en la trayectoria y en el éxito de los movimientos sociales y, por tanto, son factores necesarios a tener en cuenta para la comprensión de este tipo de acción política. Pero, constreñir la reflexión solo a estos elementos es una posición del todo reduccionista, en tanto obviaría una función central de la acción contenciosa: el desafío de los discursos dominantes, en la medida que las interpretaciones y percepciones que realizan son formas alternativas de entender la realidad (Fernández, Grossi, & Sabucedo, 1998), de organizar la producción material y la reproducción de la vida a través de la gestión de las relaciones y de los territorios.

De tal modo, consideramos que debe existir un nivel intermedio de investigación que tenga en cuenta las interacciones entre el actor, el tiempo y el espacio, como dimensiones que se yuxtaponen, se alimentan y se afectan. En el apartado anterior, ya abordamos algunos elementos que incorporan los autores del proceso político.

2.4.1. La producción simbólica de los movimientos sociales

Benjamín Tejerina (1998, 2005) señala que, el reconocimiento de la producción simbólica de los movimientos sociales y su impacto en la transformación de valores del orden social, tiene una larga tradición en la producción teórica, que en los años setenta y ochenta, se vio “opacada” por la predominancia de los estudios derivados de la movilización de recursos. Las corrientes que estudian la producción simbólica llaman la atención acerca de elementos fundamentales de los movimientos, relacionados con el despliegue de acciones continuadas en las que se promueven cambios en el interior de las sociedades en las que se inscriben.

En esta línea, Lewis Killian (Killian citado en Tejerina, 1998) resalta cuatro características de los movimientos que en los estudios actuales se siguen desarrollando, a saber:

- a. La presencia de valores compartidos y objetivos comunes (ideología).
- b. El sentido de pertenencia a un grupo que establece los límites entre “ellos” y “nosotros” (identidad).
- c. Las normas compartidas acerca de la acción de los participantes y la caracterización de los “adversarios”.
- d. La estructura organizativa que establece los roles que desempeñan cada uno de los miembros de los movimientos.

Entre los componentes sustanciales que destaca este autor, se encuentra la producción simbólica de valores desarrollada en el interior de los movimientos sociales, creada a partir de la interacción en dos niveles: el de los actores que forman parte del movimiento (seguidores, líderes, etc.) y el del movimiento mismo con actores externos (gobiernos, grupos adversarios, contramovimientos, etc.). En este proceso de conflictividad por la producción cultural se proyecta un sistema de valores, objetivos y estrategias que han de seguir la movilización.

Los fundamentos sobre los cuales se construyen estos elementos de la acción colectiva, constituyen la ideología del movimiento que comprende cuatro elementos:

Primero, una visión de la historia que pretende mostrar que los objetivos del movimiento están en armonía con las tradiciones de la sociedad; segundo, también incorpora dos visiones de futuro, una visión de paraíso y una visión del infierno; tercero, la necesidad del éxito del movimiento es dramatizada con un retrato de las condiciones miserables que resultarían si el movimiento fracasa; y cuarto, muy cercano a los mitos, encontramos un conjunto de concepciones estereotipadas de los “héroes” y los “villanos” del conflicto en el que se encuentra envuelto el movimiento. (Tejerina, 1998, p. 118)

Los elementos principales que constituyen la ideología planteados por Lewis M. Killian, tienen ciertas similitudes con la metodología propuesta por Snow y Benford (Benford, Snow, Burke, & Steven, 1986) para analizar los significados compartidos y la agenda de los movimientos sociales. Para estos autores, los movimientos construyen esquemas interpretativos por medio de los cuales analizan la realidad y cuestionan elementos del funcionamiento de la sociedad que consideran injustos. En este sentido, la movilización se hace efectiva cuando se logra alinear esos marcos con las creencias de sus militantes y de la sociedad, a través de la valoración de una situación social como un problema, de la necesidad de intervenir en determinada dirección para la solución del mismo y de identificar los responsables de esa realidad que se considera como inequitativa.

Turner y Killian señalan que los movimientos sociales cumplen una función principal en la puesta en escena de construcciones alternativas de significados, normas y creencias a través de la definición de situaciones que consideran justas e injustas, morales o inmorales (Turner y Killian citado en Gusfield, 2001).

Por su parte, Joseph Gusfield (2001) señala que precisamente la elaboración y difusión de renovadas ideas, conceptos, apreciaciones sociales e identidades constituyen uno de los principales elementos de los movimientos sociales contemporáneos, como puede ser el caso de los movimientos feministas o ecologistas. Los significados creados por estos movimientos implican una acción reflexiva acerca del orden social y económico, así como su manifestación en una determinada configuración del espacio.

A partir de tal reflexión, los movimientos pueden plantear la necesidad de transformar o subvertir esos órdenes que consideran injustos, a través de nuevas formas de relacionamiento entre los sujetos, pero también con la naturaleza, partiendo de la comprensión que no existe una división entre lo social y el mundo que nos rodea. Tal separación sustenta los discursos neoliberales de mercantilización de la vida. Ahora bien, esos significados se disputan no solo en el ámbito simbólico, sino que se manifiestan en el ámbito material a través de procesos de apropiación del espacio y la construcción de territorialidades, entendiendo la territorialidad como una expresión espacial del poder (Raffestin 2011 [1980]; Storey, 2001).

Por lo tanto, se ha pasado de una forma rígida de entender la organización social como un “hecho social” a una conceptualización del orden social como producto y objeto de la acción

reflexiva de los sujetos. Gusfield retoma a Alain Touraine para explicar este hecho a través de lo que este último denomina la “autoproducción de la sociedad”:

La sociología de los movimientos sociales no puede separarse de una representación de la sociedad que la concibe como un sistema de fuerzas sociales que compiten por el control de un campo cultural (...) esta sociología de la acción deja de creer que la conducta debe ser una respuesta a una situación, y afirma que la situación es simplemente el resultado cambiante e inestable de relaciones entre actores que producen la sociedad a través de conflictos sociales y sus orientaciones culturales. (Touraine citado en Gusfield, 2001, p. 105)

Por consiguiente, la emergencia de los movimientos sociales no responde solo a unas condiciones estructurales dadas sino que también son producto de relaciones asimétricas de poder entre diferentes actores, que buscan por una parte, el mantenimiento de un statu quo que responde a un sistema de valores y creencias y, por otro lado, actores que a través de una acción reflexiva (en la que intervienen recursos culturales, motivaciones, emociones, memorias, etc.) producen nuevos significados sociales que implican la transformación de ciertos ámbitos del orden social o que plantean un orden distinto bajo lógicas que pueden llegar a ser emancipatorias.

Para el caso de América Latina, podemos señalar que los movimientos sociales populares han desarrollado formas de relacionamiento social y de reproducción de la vida que en muchos casos difieren de las lógicas neoliberales. Y, en los casos que desafían los límites de compatibilidad del sistema, optan por formas asamblearias, de autogestión, centradas en la reciprocidad, la construcción de lo común y la convivencia comunitaria. En el marco de formas alternativas de relación con la naturaleza y de apropiación del espacio, en contraposición a las relaciones de tipo capitalista.

En este sentido, la creación de nuevas significaciones que plantean rupturas y transformaciones en las relaciones que sustenta el orden social dominante (entre otros elementos), reafirma la idea sobre los movimientos sociales populares como agentes productores de conocimiento, que se construyen en los márgenes de la sociedad. Ahora bien, estas formas de relación y de percibir el mundo se desarrollan en interacción con el espacio, por una parte, lo resignifican, lo transforman, pero también se ven interpeladas por el mismo.

En esta perspectiva, la realidad social debe ser vista como resultado del conflicto, la negociación y el intercambio entre los diferentes actores, que tienen distintos intereses e interpretaciones y, por tanto, pueden tener capacidad de influencia sobre el sistema social entendiendo que éste no es inmutable y ajeno a las relaciones que lo componen.

El conflicto, la negociación y el intercambio se “despliega en el espacio, y la acción del movimiento social, como confrontación con estructuras de dominación o explotación, debe por consiguiente pensarse como una política del espacio” (Oslender, 2008, p. 71). Para entender cómo se despliega la política del espacio, en relación a la construcción de significados, seguimos a Oslender (1999, 2008) y retomamos la teoría de Lefebvre y su dialéctica de producción del espacio.

Lefebvre (2013) construye una teoría unitaria del espacio (físico, social y mental), que implica entender el mismo como esencialmente político, inmerso en el conflicto y la tensión entre los diferentes actores que intervienen o pretenden intervenir a través de la puesta en marcha de proyectos políticos e ideológicos. Esta disputa se manifiesta también en el lugar de las representaciones las cuales tienen implicaciones en el ámbito de la vida cotidiana, manifiestas en la territorialización de tales proyectos (recordemos a Raffestin cuando señala que, es en la territorialidad donde se puede analizar el carácter simétrico y asimétrico de las relaciones de poder).

Tanto la disputa entre los diferentes actores como la producción de significados de los movimientos se debe entender en el marco de la interacción de lo que Lefebvre (2013) denomina la dialéctica del espacio (prácticas espaciales, las representaciones del espacio y los espacios de representación); es decir, la relación contenida y contenciosa entre el espacio concebido, percibido y vivido, respectivamente. Estos tres procesos de construcción del espacio se inscriben en procesos sociales complejos que se configuran no solo desde la oposición. Bajo la ilusión de aparente homogeneidad del espacio abstracto, se ocultan relaciones de poder asimétricas que se mueven entre la dominación y la resistencia.

2.4.2. Las redes sumergidas

Estamos de acuerdo con Melucci (1998) cuando señala que, la irrupción pública de los movimientos depende en gran medida de la existencia previa de las interpretaciones de la realidad y de códigos culturales. Estas interpretaciones, junto con la creación de significados y la identidad colectiva, se construyen en las redes sumergidas y en las subculturas que interactúan en los movimientos sociales.

Por otra parte, Raffestin (2011 [1980]) nos recuerda que es en el territorio, a partir de un ejercicio de apropiación del espacio, en donde se manifiestan diversas relaciones de poder que se materializan en tejidos, redes y centralizaciones que son cambiantes, dinámicas y que alimentan los proyectos de los actores que el autor los denomina como sintagmáticos, en tanto son actores que manifiestan una intencionalidad sobre el espacio que habitan.

Nos parece importante el énfasis en este aspecto de la movilización, en tanto, el proceso de construcción de significados subalternos permite entender el valor que tienen los movimientos como productores de conocimiento, de espacio y como actores de cambio social. Los códigos culturales que se construyen en las redes sumergidas constituyen el fundamento de las reivindicaciones de los movimientos, que se manifiestan en el “enfrentamiento” con el Estado. Melucci (2001 [1994]) señala que esas redes sumergidas permiten los periodos de latencia y acción de los movimientos sociales contemporáneos, desempeñan un factor esencial en la experimentación cultural y en la circulación de información entre los diferentes sujetos que participan en el movimiento, elementos que permiten la cimentación de identidades colectivas.

Para este autor, las fases de latencia y de movilización cumplen una doble función en la elaboración de los recursos simbólicos de los movimientos. Esta es esencial para comprender las dinámicas que configuran a los movimientos como un actor político que plantea sentidos alternativos de la realidad y de la reproducción de la vida que resisten a las formas de dominación impuestas por los actores que disponen de mayores recursos.

La distinción entre estos dos momentos de la acción de los movimientos permite enfocar el análisis en las interacciones cotidianas que los actores mantienen en el proceso de construir el sentido de su acción, y en donde se definen las oportunidades y constricciones de la misma, frente a otras visiones que localizan las dinámicas de interpretación de la realidad solo en las “estructuras” en las que se encuentran insertos¹³¹.

¹³¹ Para Melucci (2001 [1994]) este modelo cimentado en redes de acción y experimentación social y cultural cumple diferentes funciones entre las que se encuentran: la afiliación a distintos grupos, la implicación personal y la solidaridad entre los diferentes miembros de la red. Asimismo, destaca las diferentes funciones de las fases de latencia y movilización, las cuales se alimentan de manera recíproca y permiten a los movimientos sociales ser agentes productores de conocimiento y de cambio social, a saber:

1. La fase de latencia permite experimentar directamente nuevos modelos culturales, favorece el cambio social mediante la construcción de significados y producción de códigos diferentes a los que prevalecen en la sociedad. Esta clase de producción cultural con frecuencia implica un desafío a las presiones sociales dominantes. La latencia representa un laboratorio clandestino para el antagonismo y de la innovación.
2. Cuando los pequeños grupos emergen, lo hacen para enfrentarse a una autoridad política sobre determinados asuntos. La movilización tiene una función simbólica que se plantea en diversos planos: por una parte,

Por tanto, las redes juegan un papel clave en la construcción de articulaciones personales y organizativas con otros actores que pueden llegar a compartir los marcos interpretativos del movimiento. Estas conexiones permiten expandir los significados, las interpretaciones, los discursos, en definitiva, su acervo cultural y político más allá de las comunidades locales. Se puede generar procesos de “salto de escala” de la acción contenciosa a través de nuevos aliados y de una ampliación de los marcos de sentido. La interacción generada en las redes contribuye a equilibrar la tendencia hacía lo parroquial y lo fragmentario; al diseminar los discursos en escenarios institucionales y culturales más amplios que pueden ser apropiados, reconstruidos o adoptados por otros grupos.

La idea de la red permite también pensar las diferentes formas de relacionamiento de los movimientos en el terreno discursivo asociado con lo natural/ambiental, lo político/institucional y lo cultural¹³² (Escobar, et al., 2001).

Por otra parte, Leopoldo Múnera (1998) apunta un elemento que consideramos clave, el cual compartimos en esta tesis y asumimos como central para entender las dinámicas de los actores populares. Múnera se refiere a que las formas de acción contenciosa no pueden ser comprendidas a partir de los momentos de mayor visibilidad pública. De esta manera, Múnera mantiene que:

La articulación de acciones y actores, colectivos e individuales, constituye el elemento que caracteriza a los movimientos sociales y los diferencia de otras formas de acción colectiva. En virtud de ella, los componentes de un movimiento pueden integrarse o separarse temporal y parcialmente, o reintegrarse en una dinámica que coloca las acciones colectivas en un devenir y una transformación constante, debido a las relaciones internas entre los diferentes actores (pág., 61).

A nuestro parecer, esas interacciones entre los diferentes sujetos y grupos se forjan en las relaciones cotidianas de los actores, en los espacios vividos, en esas redes sumergidas descritas por Melucci. Y, se caracterizan por la confluencia de diversos agentes individuales y colectivos

proclaman su oposición a la lógica que guía la toma de decisiones respecto a una política pública específica: al mismo tiempo, la movilización opera como un médium, es decir, indica al resto de la sociedad la relación existente entre un problema específico y la lógica dominante en el sistema; finalmente, muestra que son posibles modelos culturales alternativos, que la acción colectiva practica y difunde. (p. 146-147)

¹³² El modelo planteado por el sociólogo italiano implicó un avance en la forma de entender la continuidad y la unidad de los movimientos sociales. En autores provenientes del comportamiento colectivo y la movilización de recursos estaba más asociada a los aspectos más formales de la estructura organizativa del movimiento y a la importancia del mantenimiento de las acciones y de las organizaciones durante un periodo temporal continuo. Desde estas perspectivas, la reflexión estaba enfocada hacia los momentos de mayor visibilidad, y desconocía las dinámicas internas o poco visibles que se producen para que una movilización colectiva sea posible y en donde se construyen esos significados alternativos (Laraña, 1999).

entre los que se produce una constante interacción por la predominancia de un tipo de interpretación de la realidad, debido a la existencia heterogénea de intereses y orientaciones de sentido.

En esas redes se dan procesos de negociación y recomposición. Por ello, les permite plantear desafíos simbólicos, reivindicaciones y agendas alternativas de sociedad desde sus propios marcos territoriales, así como redefinir sus planteamientos frente a un contexto en continuo cambio. Esta visión toma distancia de aquellas concepciones que consideran a los movimientos sociales como estructuras formales de organización más bien estables en su composición. Por tanto, consideramos que un rasgo fundamental de los movimientos es su capacidad de transformación y de producción de conocimiento, así como su acción política y espacial.

2.5. El paradigma de la identidad y los nuevos movimientos sociales

El paradigma de la identidad impulsó el debate acerca de las cuestiones simbólicas, culturales y cognitivas de los movimientos sociales. Al interior de esta corriente se desarrollaron conceptos como el de nuevos movimientos sociales –NMS–.

Entre los principales exponentes de esta perspectiva se encuentran Alberto Melucci, Alain Touraine, Claus Offe y Alejandro Pizzorno. La producción teórica de los autores inscritos en esta corriente, se enmarcó dentro de las críticas realizadas al interior del marxismo, que interpretaba el conflicto social a partir de la posición que el sujeto ocupa en los medios de producción -categoría de clase-. Para los teóricos más cercanos a los enfoques culturales, la explicación del conflicto social expresada por el modelo marxista era insuficiente para abordar la reflexión acerca de la innovación y los contenidos de los movimientos sociales que irrumpieron en las décadas del sesenta y setenta del siglo XX, en particular, en sociedades industriales avanzadas. Estas expresiones sociales fueron protagonizadas por una diversidad de sujetos y grupos a los que no era posible ubicar en posiciones estructurales homogéneas (Johnston, Laraña y Gusfield, citado en Laraña, 1999).

Desde esta perspectiva, el campo del conflicto se desplazó del ámbito de la reproducción material y el reparto de recompensas al campo de la reproducción cultural, la integración social y la socialización. Los contenidos de las protestas en las sociedades con un alto grado de industrialización se centraron en la reivindicación de valores post materialistas, en la defensa y

restauración de formas avanzadas de vida y el intento por la implantación de nuevas formas de vida social (Tejerina, 1998).

Al respecto, Melucci (2001 [1994]) señala que los conflictos surgidos en este periodo “se desplazan del sistema económico industrial hacia el ámbito cultural: se centran en la identidad personal, el tiempo y el espacio de vida, la motivación y los códigos del actuar cotidiano” (p. 128). Asimismo, en Europa y en Estados Unidos el escenario de la movilización dejó de estar copado por el movimiento obrero para dar paso a una heterogeneidad de actores sociales¹³³.

En este sentido, autoras tan relevantes como Nancy Fraser sitúan la irrupción de movimientos centrados en la identidad como un hito en la denominada era postsocialista, así lo plantea Fraser:

La ‘lucha por el reconocimiento’ se está convirtiendo rápidamente en la forma paradigmática de conflicto político en los últimos años del siglo veinte. Las exigencias de ‘reconocimiento de la diferencia’ alimentan las luchas de grupos que se movilizan bajo las banderas de la nacionalidad, la etnia, la “raza”, el género y la sexualidad. En estos conflictos ‘postsocialistas’, la identidad de grupo sustituye a los intereses de clase como mecanismo principal de movilización política. La dominación cultural reemplaza a la explotación como injusticia fundamental. Y el reconocimiento cultural desplaza a la redistribución económica como remedio a la injusticia y el objetivo de la lucha política. (Fraser, 1997, p. 17)

Para Fraser se da un desplazamiento del eje central de las luchas sociales, desde los elementos relacionados con la reproducción material de la sociedad asociados a la desigualdad social a las agendas centradas en aspectos subjetivos, ligados al reconocimiento de la diferencia y de los derechos socio-culturales de los grupos que hasta el momento habían sido invisibilizados y marginalizados¹³⁴.

¹³³ Martin y Miller (2000) se refieren a los debates que el concepto de nuevos movimientos sociales ha generado al interior de los teóricos que abordan la acción colectiva. Los autores señalan la diferencia de opiniones frente a este concepto. Se encuentran aquellos que consideran que tales movimientos no se ven interpelados por una cuestión de clase y más por temáticas relacionadas con la paz, el medio ambiente, la religión, la sexualidad, el género, etc. De esta manera, los NMS se asocian a la defensa de ciertas formas de vida e identidades colectivas, frente a la intromisión del Estado o la economía. No obstante, la idea de que estas formas de acción no son movimientos de clase ha sido cuestionada. Desde esta postura se plantea que, aunque las reivindicaciones centrales de los NMS no se relacionan directamente con la redistribución económica y, por lo tanto, no están explícitamente orientados a la clase, se debe reconocer que la base social es a menudo específica de la clase.

¹³⁴ Para profundizar en la reflexión entre reconocimiento y redistribución ver el debate entre dos teóricas feministas contemporáneas: Nancy Fraser y Judith Butler. Ver: Fraser, N., & Butler, J. (2016). También es interesante el debate entre Nancy Fraser y Axel Honneth, ver Honneth, A., & Fraser, N. (2006).

Por otra parte, como lo señala Mario Diani y Donatella Della Porta (2011 [1998]) entre los principales exponentes del enfoque de los nuevos movimientos sociales –NMS- se presentaron diferencias en cuanto a la posibilidad de identificar un nuevo conflicto central que caracterizará el modelo de la sociedad emergente, definida en ocasiones como “postindustrial”, “postfordista”, “postsocialista”, “programada” o “tecnocrática”. En definitiva, los autores de los NMS, pretendían entender las transformaciones de la acción colectiva en el marco de una nueva forma de acumulación del capital. Por ejemplo, para Touraine se estaba ante un “nuevo sistema de acción histórica, con orientaciones culturales y formas de poder económico propias” (Touraine & Khosrokhavar, 2002, p. 32).

El concepto de NMS colocó en el debate europeo diferentes elementos relacionados con la transformación de los conflictos sociales y la movilización social, entre los que se encuentran: la emergencia de sujetos sociales con agendas distantes de las reivindicaciones del movimiento obrero; las características de los recursos y estructuras organizativas; la utilización de repertorios de confrontación innovadores; la defensa de la autodeterminación personal y la definición de identidades, así como la necesidad de pensar modelos de sociedad que vayan más allá de la democracia representativa y de los patrones de desarrollo y progreso dominantes.

La caracterización de los NMS ha sido objeto de debate, no solo desde corrientes marxistas ortodoxas sino en el propio seno de los teóricos inscritos en este paradigma. Tal debate, se debe a los obstáculos epistemológicos para establecer que era considerado como “nuevo” en las movilizaciones y en los actores protagonistas de las mismas.

Sin embargo, los aportes realizados por esta corriente siguen siendo claves en tanto llamaron la atención acerca de la necesidad de explorar nuevos caminos teóricos y metodológicos, para entender las razones de la movilización social en las diferentes fases de acumulación del capital.

Al respecto, Diani y Della Porta (2011 [1998]) señalan que el debate generado por la corriente de los NMS permitió colocar en el centro de la discusión los “determinantes estructurales de la protesta” ya que llamó la atención sobre aquellos conflictos que no necesariamente estaban derivados del conflicto de clases, situó a los actores en el centro de la reflexión y resaltó las innovaciones de aquellos movimientos que no se definían en relación al sistema de producción (p. 30-31).

En este sentido, autores como Alain Touraine (1990, 2002), Melucci (2001, 1999, 1994), Laraña y Gusfield (2001) desarrollaron líneas de investigación que aportan luces sobre las múltiples relaciones que se dan entre procesos culturales, históricos y de construcción de identidades, que contribuyeron a explicar los comportamientos de los movimientos que subvierten el orden establecido desde otras lógicas, bien desde procesos de recuperación de subjetividades o desde el surgimiento de nuevas identidades. Por tanto, este paradigma “se ocupa de la forma en la que surgen los significados y las creencias colectivas, que adquieren una importancia central para la formación del movimiento y contribuyen a explicar la naturaleza de las nuevas reivindicaciones, así como su procedencia” (Laraña y Gusfield 2001, p. 10).

2.5.1. La identidad en el centro de la acción

Melucci (1999) señala que los movimientos sociales deben ser valorados como sistemas de acción en la medida que son capaces de definirse a sí mismos y su ambiente (identidad colectiva). Para este autor, el proceso de construcción de un “nosotros” se desarrolla en la interacción de tres orientaciones interdependientes, que se encuentran en tensión debido a la continua negociación y recomposición entre los diferentes actores del movimiento: las referidas a los objetivos de la acción (el sentido que tiene para el actor), las relaciones con los medios (posibilidades y límites de la acción) y las conexiones con el ambiente (el campo en el que tiene lugar la acción).

Para el autor, la posibilidad de perdurabilidad de los movimientos en el tiempo y la movilización de recursos se asegura a través del despliegue de valores, creencias y objetivos comunes que, a su vez, se encuentran limitados por la estructura de las relaciones sociales, que se desarrollan en un campo sistémico determinado. Este conjunto de variables constituiría la identidad colectiva, entendida como un proceso de construcción en el que los actores elaboran expectativas y evalúan los límites y posibilidades de su acción, en la definición de sí mismos y de su ambiente. Este proceso refleja la complejidad interna del actor y las relaciones de éste con el contexto en una relación dialéctica. La identidad proporciona la base mediante la cual los sujetos valoran los efectos de la acción y establecen las perspectivas de la misma.

Del proceso de construcción de la identidad de un sujeto y la posterior decisión de participar en determinada acción, media un proceso de identificación colectiva y puesta en común de un horizonte de sentido frente a las posiciones dominantes de sociedad, elementos que para

algunos autores como Marisa Revilla son centrales en la concepción de un movimiento social (Revilla, 1994). Esta perspectiva permite entender las preguntas claves que se estructuran alrededor de la acción colectiva: el cómo y porqué se construyen los proyectos de emancipación y resistencia y bajo qué relaciones de poder.

Para Touraine, la dominación y la subordinación trae aparejado el principio de resistencia y de la posibilidad de afirmación positiva del sujeto, cuando logra luchar contra la desubjetivación impuesta por las lógicas actuales del sistema capitalista (Touraine y Khosrokhavar, 2002).

Desde nuestra perspectiva, tanto el proceso individual como el proceso colectivo de construcción y afianzamiento de identidades, permiten luchar contra esos procesos de desubjetivación y marcar las diferencias de percepción entre los distintos actores que actúan en un campo determinado en función de su relación con el poder.

Por otra parte, estamos de acuerdo con los teóricos constructivistas cuando señalan que toda identidad es construida históricamente. En tal sentido, los sujetos poseen múltiples identidades que se encuentran en constante transformación según las relaciones sociales en que se inscribe, es lo que Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (1987 [1985]) han llamado la pluralidad de las posiciones de sujeto. En la misma perspectiva, Heriberto Cairo (2000) rebate la idea de la identidad como una condición intrínseca y natural de los seres humanos, señala que la búsqueda teórica de esta identidad primaria es un esfuerzo infructuoso, en tanto: “la identidad no existe ahí fuera, de forma independiente; la estrategia intelectual de buscar la identidad esencial es estéril, sólo nos podemos acercar a entender los procesos, nunca finitos, de su construcción”. (p. 108). De tal manera, la identidad se debe comprender como un proceso de identificación permanente que se construyen en el marco de la producción de discursos y de relaciones de poder. Al respecto, Cairo retoma la idea de Stuart Hall, que señala:

Precisamente porque las identidades se construyen dentro, y no fuera, del discurso, tenemos que entender que están producidas a partir de estrategias enunciativas específicas, en ámbitos históricos institucionales específicos, en el seno de prácticas y formaciones discursivas específicas. Más aún, surgen dentro del juego de modalidades concretas de poder, de forma que son más el producto del señalamiento de la diferencia y la exclusión, que signos de una unidad idéntica naturalmente constituida. (Hall citado en Cairo Carou, 2000, p. 109)

Esta visión de los procesos de identificación del individuo que se contrapone a las visiones esencialistas que consideran a las identidades como originales, naturales y cerradas, generalmente derivadas de la posición que se ocupa en la estructura productiva.

Estos autores llaman la atención sobre el carácter contingente, inacabado y parcial de las identidades que están en un proceso continuo de transformación debido a las tensiones en las que se encuentra inserto el sujeto. Este es uno de los puntos que nos interesa resaltar debido a que implica ir un paso más allá de los elementos planteados por Melucci, la identidad construye la diferencia frente al “otro”¹³⁵, pero también puede generar antagonismo en la medida que ese “otro” puede negar u obstaculizar el desarrollo de esa identidad, es en ese momento que la relación entre amigo/enemigo se convierte en política (Mouffe, 1996).

El reconocimiento de que esa relación existe y que se puede transformar en nosotros/ellos posibilita la creación de instituciones que transformen el antagonismo en agonismo. Es decir, pasar de considerar el enemigo a adversario, este cambio en la concepción admite la existencia del conflicto entre las diferentes construcciones discursivas de los actores (Mouffe citado en Di Marco, 2009).

La cuestión en este punto es cómo pueden cohabitar distintos actores que tiene posiciones divergentes sobre el horizonte de sentido de los diferentes campos sociales sin que la confluencia de los mismos anule la diferencia, o como en el caso de Colombia en donde se da la eliminación física o simbólica del “otro”, del que piensa diferente, que generalmente se encuentra en los márgenes de la sociedad. Entender de este modo la interacción entre las diferentes identidades, posibilita el debate de las asimetrías del poder y las posibles formas que adquiere las relaciones de dominación-subordinación¹³⁶.

Ahora bien, los procesos de construcción de la identidad no se pueden desligar de la dimensión espacial. La identidad es el resultado de múltiples interacciones con un contexto geográfico determinado como parece apuntar Melucci (1999) y como es estudiado por otros autores provenientes de la geografía crítica como Soja (1971), Sack (1986) y Massey (1994).

¹³⁵ Entendemos esa categoría del “otro” a partir de las reflexiones dadas en los estudios de la alteridad, en donde ese “otro” se construye a partir de la enunciación, de una invención discursiva en la que un sujeto realiza su propia identificación a partir de la construcción “de lo que no es” y, para ello necesita elaborar ese sujeto de contraposición. Al respecto, Mignolo (2015) señala:

El enunciado necesita un (agente) enunciador y una institución (no cualquiera puede inventar el *anthropos*); pero para imponer el *anthropos* como «el otro» en el imaginario colectivo se necesita estar en posición de gestionar el discurso (verbal o visual) por el cual se nombra y se describe una entidad (el *anthropos* o «el otro») y lograr hacer creer que esta existe. Hoy, la categoría de *anthropos* («el otro») vulnera las vidas de hombres y mujeres de color, gays y lesbianas, gentes y lenguas del mundo no europeo y no estadounidense desde China hasta Oriente Medio y desde Bolivia hasta Ghana” (p. 178).

¹³⁶ Cuando un actor pretende cambiar esas relaciones de exclusión y poner en el debate público un discurso alternativo de interpretación de la realidad se constituye una acción política que podría disputar la hegemonía de los grupos dominantes.

En este sentido, Cairo (2005) señala que “las identidades políticas hoy en día están poderosamente ligadas al territorio, están profundamente territorializadas. Cobra entonces aún más importancia la representación del espacio y sus resistencias” (pág. 316). Este autor, retomando la dialéctica del espacio desarrollada por Lefebvre, nos recuerda que: “una representación del espacio sólo será dominante a largo plazo si se imbrica adecuadamente con las prácticas espaciales dominantes, pero en su mismo desarrollo se van generando las resistencias, los (contra) espacios de representación, que pueden transformar dichas prácticas” (pág. 316).

No olvidemos a Raffestin (2011 [1980]) cuando señala que el territorio es producto de una apropiación simbólica pero también material, que se desarrolla en el marco de unas relaciones de poder asimétricas. En este sentido, las formas de intervenir los espacios van a estar determinadas por un conjunto de creencias colectivas que se relacionan con la reproducción social de un determinado grupo, con una intencionalidad que se constituye en identidad. De esta manera, “la relación social en su intencionalidad crea una determinada lectura del espacio, que conforme al campo de fuerzas en disputa puede ser dominante o no” (Mançano Fernández, 2005, s.p.). En esta línea, cuando la identidad se encuentra fuertemente ligada al espacio y la acción política de los movimientos transforma esos espacios en territorios, nos encontramos con identidades territoriales. En este caso “el territorio es espacio de vida y muerte, de libertad y de resistencia. Por esta razón carga en sí, su identidad, que expresa su territorialidad” (Mançano Fernández, 2005, s.p.).

Por otra parte, Oslender (1999, 2008) plantea que entender las identidades como resultado de procesos dinámicos, implica también comprender que las identidades se desarrollan en lugares determinados y responden a dimensiones muy concretas de los mismos. Para el análisis, el autor recurre al concepto de lugar de John Agnew (1987), al que nos referimos anteriormente, y a los tres elementos que lo conforman: localidad, ubicación y sentido de lugar.

Oslender (1999) retomando a Paul Routledge señala que la perspectiva del lugar contribuye a esclarecer las razones por las cuales los movimientos sociales surgen en determinados espacios, teniendo en cuenta que las características del lugar inciden en las dinámicas y el alcance de los movimientos. En esta línea, Oslender recurre al concepto “terreno de resistencia” desarrollado por Routledge, que lo define de la siguiente manera:

Un terreno de resistencia se refiere a estos lugares donde la lucha está activamente articulada por los oprimidos, y no una metáfora que define para los oprimidos donde y cómo las luchas deberían llevarse a cabo, un sitio de contestación dentro de creencias

diferentes, valores y objetivos que están específicos de un lugar. (Routledge citado en Oslender, 1999, p. 17)

De esta manera, los procesos de resistencia se encuentran arraigados en el lugar, nosotros agregaríamos a la construcción del territorio como ese espacio intermedio entre el espacio social y el lugar, a través de las prácticas cotidianas y rutinarias de los actores, que a su vez alimentan las acciones de contestación, incidiendo en su capacidad de agencia.

En esta línea, se sitúa el trabajo de Arturo Escobar, al señalar que la agencia se encuentra inscrita e interpelada por las redes que se desarrollan en los lugares pero también por relaciones más amplias y complejas. Por tanto, los conflictos se sitúan al interior y entre las prácticas de la vida cotidiana, los procesos socio-políticos del Estado y las instituciones nacionales o regionales. Este entramado de redes e instituciones plantea que los conflictos se encuentren en un devenir constante, caracterizado por la negociación, las alianzas, las cooptaciones e infiltraciones, dependiendo de la particularidad espacio-temporal. En consecuencia, los movimientos sociales se ubican en un entramado de relaciones de poder y de conocimiento, de poderes dominantes y resistentes que se encuentran espacializados¹³⁷ (Philo, Paddison, Sharp, & Routledge, 2002 [2000], p. 10-11)¹³⁸.

Para Oslender y Escobar, el lugar va a jugar un papel preponderante en la construcción del mundo de “el mundo de la vida” (siguiendo los aportes de Habermans). Sin embargo, señalan que la desestabilización de este último puede venir por la acción, la intervención o las transformaciones del capital que operan en otras escalas distintas a la local pero que impactan en esta última. Martin y Miller (2002) señalan como la multiplicidad de identidades de los agentes están constituidas en una variedad de contextos específicos de lugar y como las acciones rutinarias de las personas configuran las diferentes maneras en que esas identidades emergen, se articulan y se transforman.

Arturo Escobar (2018 [2008]) puntualiza cuatro ideas sobre las identidades en su estudio sobre las comunidades negras del Pacífico colombiano, que recogen y complementan los

¹³⁷ Traducción propia.

¹³⁸ Autores como Massey (1994), Martin y Miller (2002) señalan cómo las diferentes escalas geográficas juegan un papel fundamental en la construcción de las identidades. No solo en términos de los dispositivos materiales de interacción social, sino en relación con las diferentes maneras en que las personas conceptualizan y representan la geografía de sus vidas. Los sentidos de pertenencia, los procesos de identificación, los valores, las relaciones cotidianas que se desarrollan en la escala de local a través de esas redes sumergidas. No obstante, los sentimientos de pertenencia también se pueden desarrollar en la escala nacional, regional o en la internacional a través de otro tipo de dispositivos culturales y socio-políticos.

planteamientos hasta el momento señalados, y que se encuentran presentes en las diferentes acciones populares que se estudian en la presente tesis.

Primero, la identidad es una foma particular de articulación de la diferencia. Las identidades son producto de discursos y prácticas con una connotación histórica y, por tanto, residen en una economía del poder. No es posible señalar si la identidad puede abstraerse o no de esta situación. Segundo, las identidades son cambiantes y se construyen en diferentes escalas, desde las actividades rutinarias hasta niveles mucho más amplios. El carácter dinámico de las identidades se relaciona con las prácticas locales contenciosas y con las luchas históricas de los actores que a su vez se manifiesta en las estrategias políticas de los activistas. Tercero, las identidades son dialógicas y relacionales, son producto de la articulación de la diferencia, pero no se pueden reducir a la misma. Implican límites, inscriben elementos y se marginan otros. Cuarto, la identidad implica una dimensión política manifiesta en los compromisos éticos de los activistas. Los actores producen espacios en los que se inscriben nuevas formas de saber, ser y hacer, a partir de los cuales pueden surgir posibilidades históricas frente a las situaciones de dominio¹³⁹. Este proceso no es producto de una decisión racional (costo-beneficio) de los activistas sino de su profundo compromiso con proyectos alternativos que subviertan una situación que consideran como injusta.

En América Latina, el estudio de la construcción de las identidades colectivas ha permitido indagar acerca de los procesos de irrupción de los códigos construidos en esas redes sumergidas y el paso de la exclusión al campo de la acción política de sectores sociales populares, que han sido tradicionalmente relegados a los márgenes de la sociedad. De tal manera, las herramientas de análisis elaboradas desde esta perspectiva permitieron abordar la activación de esas micromovilizaciones y la posterior irrupción de las luchas sociales, a finales de la década de los ochenta y de los noventa, en el marco de un contexto de crisis económica producida entre otros factores por: el fracaso de las políticas del Consenso de Washington, la pérdida de legitimidad de

¹³⁹ En relación a las apreciaciones de Escobar nos parece relevante recordar los importantes aportes que realizó Orlando Fals Borda (1979, 1981, 1984, 1986) en su estudio sobre las comunidades de la Costa Caribe colombiana en donde el autor utiliza la IAP (Investigación Acción-Participativa) y analiza desde una perspectiva historiográfica pero también espacial las particularidades culturales de las comunidades ribereñas, la articulación de esas diferencias a través de esas actividades cotidianas/rutinarias, que a su vez han sido la base de los procesos de resistencia frente a las diferentes formas de dominio y expolio que han sufrido las comunidades. El autor en una obra brillante nos sumerge en esos “saberes”, “sentires” y “haceres” populares que se construyen en los márgenes de la sociedad.

los partidos políticos como canales formales de canalización de las demandas sociales y la implantación de una nueva fase del modelo neoliberal.

En Colombia, los aportes realizados por los teóricos europeos también tuvieron calado en los estudios de la acción colectiva. Especialmente las reflexiones de Alain Touraine y la sociología de la acción. En los años ochenta, el análisis de la conflictividad social no solo se realizó desde el concepto de clase y de pueblo, se empezaron a tener en cuenta otras variables presentes en la lucha social referidas a factores culturales y simbólicos, principalmente referidos a las diferencias de género y étnicas, pero centradas en una perspectiva histórica más que espacial¹⁴⁰ (Archila, 2001, p. 31).

Ahora bien, nos parece relevante la “advertencia” realizada desde el pensamiento crítico latinoamericano que apunta que, si bien el énfasis en los elementos identitarios y simbólicos de los movimientos sociales aportaron valiosas reflexiones, también se corre el riesgo de presentar una lectura fragmentada de la realidad social, enfatizando sólo en los aspectos subjetivos, por lo cual se debe establecer un diálogo con la totalidad socio-histórica en los que estos se inscriben (Algranati, Seoane, & Taddei, 2008).

En este sentido, creemos que es necesario fortalecer un enfoque intermedio, en donde el análisis de los aspectos simbólicos y discursivos dialogue con elementos estructurales, ligados a la organización material de la sociedad. Asimismo, este enfoque debe estar atravesado por la dimensión espacio-temporal, es más, consideramos que en la presente tesis es fundamental en tanto las interpretaciones populares de la conflictividad en Colombia son construidas a partir de la posición que ocupa el actor en esa totalidad socio-histórica, que se manifiesta y a su vez es apropiada y transformada en contextos territoriales específicos.

Por otra parte, la observación realizada por el pensamiento crítico latinoamericano también se relaciona con la objeción al marxismo que sustenta el análisis del paradigma de la identidad y

¹⁴⁰ Mauricio Archila señala que, en los estudios de movimientos sociales en Colombia están más cerca de las corrientes europeas, en particular, de la corriente de la sociología de la acción que de las perspectivas funcionalistas como la movilización de recursos. Estima que los aportes de Touraine en relación con los tres "principios" constitutivos de los movimientos sociales: identidad, totalidad y oposición, son de gran relevancia para los análisis. Pero, toma distancia de dos aspectos de la teoría del autor europeo:

a) la limitación que coloca a los movimientos sociales al considerarlos resultado de sociedades que se dan por dadas, recortando su capacidad de acción, pues sus posibilidades de transformación se limitan a la gestión de recursos existentes (materiales o culturales); y b) la "satanización" de la política en todas sus formas — desde los partidos tradicionales, soportes del Estado, hasta los de oposición—, a la que contraponen siempre como límite de la supuesta autonomía de los movimientos sociales. (Archila 1994, p. 256)

Esta posición es compartida por otros académicos colombianos como Leopoldo Múnica (1998).

en particular el concepto de NMS. Estas dos perspectivas se construyeron en el marco de los cambios sociales y del sistema productivo de países situados en el centro de la economía-mundo. Sin embargo, para América Latina tiene una connotación distinta en tanto el proceso de industrialización ha sido tardío, incipiente en muchos casos, desigual entre los diferentes países y territorios, con un carácter periférico¹⁴¹. De ahí que el trasladar la conceptualización de teorías como la de los NMS al análisis de conflictividad social en América Latina sin hacer una reflexión mucho más profunda “no sólo propendía al ocultamiento de la cuestión social sino también al enmascaramiento de la dominación colonial” (Algranati et.al., 2008, p. 180).

Por tanto, consideramos que en los movimientos sociales latinoamericanos no ha habido un desplazamiento de las reivindicaciones materiales y redistributivas a las simbólicas y culturales, desde nuestro punto de vista, más bien se presenta una coexistencia de estas agendas. La realidad social latinoamericana, en particular la de Colombia, pone de manifiesto que el conflicto alrededor de la cuestión distributiva sigue vigente y se articula con otros conflictos generados por un modelo de desarrollo que acentúa las asimetrías sociales y de poder en la región.

Asimismo, la renovada irrupción de los sujetos colectivos indígena, campesino, negro o los movimientos socio-ambientales y feministas, provocaron la emergencia o la activación de análisis y/o resignificación de categorías sociales que estaban en el ostracismo político y teórico como: lo popular, lo común, la resistencia, la emancipación, entre otros.

Edgar Lander (2000) señala que en el pensamiento latinoamericano se ha producido “una amplia gama de búsquedas de formas alternativas del conocer, cuestionándose el carácter colonial/eurocéntrico de los saberes sociales sobre el continente, el régimen de separaciones que les sirven de fundamento y la idea misma de la modernidad como modelo civilizatorio universal” (p. 27). Ejemplo de ello es el trabajo que se ha venido desarrollando en lo que se conoce como la perspectiva teórica de la modernidad/colonialidad, que ha intervenido “decisivamente en la

¹⁴¹ Los diferentes modelos económicos aplicados en Latinoamérica (modelo primario exportador, la etapa de modernización, diversificación e industrialización y el modelo neoliberal en sus diferentes fases) no han logrado incorporar a las grandes masas de población al mercado de trabajo generando profundas desigualdades sociales, acceso diferenciado a los bienes sociales públicos, profundización en la asimetría de las relaciones de poder, entre otros elementos. Para Claudio Katz (2016), el actual

Modelo extractivo genera empleos de baja calidad, la precarización laboral supera en América Latina los promedios de los países centrales. Esa informalidad ya no se recrea en los circuitos agrarios precapitalistas, ni en la reproducción familiar de la fuerza de trabajo. Se extiende junto con la presencia del capitalismo en todas las esferas de la vida social (p. 78).

discursividad propia de las ciencias modernas para configurar otro espacio para la producción de conocimiento una forma distinta de pensamiento” (Escobar, 2003, p. 53).

En esta línea, Walter Mignolo (2013) señala que las epistemes (moderno, posmoderno, altermoderno, ciencia newtoniana, entre otras) que han sido consideradas como hegemónicas dejan de tener esa superioridad académica o esa legitimidad epistémica, para abrir camino hacia otras formas de conocer, de pensar, de hacer.

Al respecto, señalar que en los estudios recientes en la región el análisis del espacio se encuentra presente como un factor que hace parte de esa totalidad social, entendiendo que “los procesos geográficos son también procesos sociales. Las relaciones sociales a partir de sus intencionalidades producen espacios, lugares, territorios, regiones y paisajes. Al producir sus espacios y realizarse en ellos, las relaciones sociales también son producidas por los espacios” (Manzano Fernández, 2005).

2.6. La definición del actor: los movimientos populares

A lo largo del documento nos hemos referido a los movimientos sociales populares como los actores centrales de nuestra investigación. Sin embargo, no hemos definido de manera clara los elementos de esta categoría analítica. Para ello, vamos a centrarnos en la argumentación teórica del profesor Leopoldo Múnera (1998, 2005), autor que estudia la relación entre el poder y las dinámicas de los movimientos sociales populares en Colombia¹⁴².

Para Múnera, un elemento clave para la comprensión de los movimientos sociales es la capacidad de articulación de diferentes acciones y actores (individuales y colectivos), siendo un elemento diferenciador de otro tipo de acciones colectivas. El continuo devenir en el interior de los movimientos se debe entender como una característica propia de los procesos sociales y no como un hecho dado institucionalmente. En este sentido, el autor se sitúa en una perspectiva

¹⁴² Mauricio Archila señala que la categoría de movimiento popular permite afinar el análisis y mostrar las contradicciones que existen al interior de los movimientos sociales. En este sentido, afirma que:

En algunos movimientos sociales puede haber presencia de sectores dominantes, mientras en el popular solamente se expresarían los sectores explotados y excluidos. Pero, más que verlos enfrentados, encontramos complementariedad o al menos convergencia en momentos específicos de la historia entre movimientos sociales y populares. En términos generales, es difícil pensar que los movimientos populares aislados van a conseguir las transformaciones que se proponen sin lograr alianzas con otros sectores sociales afines. (Archila 1996, p. 259).

relacional en donde la interacción entre los diferentes actores es la variable que va a determinar la naturaleza del movimiento.

Esta premisa de partida permite comprender las prácticas de negociación e integración, pero también de tensión y conflicto entre las diferentes interpretaciones, repertorios y marcos. Elementos que también están atravesados por el espacio-tiempo. Como hemos señalado, la acción se construye en espacios geográficos y en espacios sociales que son construidos social e históricamente. Estos elementos son compartidos por los movimientos populares. Por tanto, para Múnera el movimiento popular es un tipo particular de movimiento social, el cual es caracterizado de la siguiente manera:

[El movimiento popular] Generado por el proceso de articulación de acciones y actores, colectivos e individuales, pertenecientes a las clases populares o reunidos en función de ellas, dirigido a controlar u orientar uno o varios campos sociales en conflicto con las clases y los sectores dominantes, o con una parte de ellos. El papel nuclear de las clases en esta concepción del movimiento popular define al movimiento en relación con otros actores. En consecuencia, la posición que estos ocupan como agentes en el sistema de relaciones sociales condiciona el tipo de articulación y de acción que le da forma al movimiento, y limita la gama de posibilidades estratégicas y culturales de sus prácticas sociales. (Múnera Ruiz, 1998, p. 65)

De esta manera, para el autor el movimiento popular se encuentra inserto en un conflicto relacionado con la organización material de la sociedad, el cual es manifiesto en los límites impuestos por la existencia de las clases sociales. Es importante señalar que para Múnera no se debe identificar la clase con los actores de clase. En este sentido, el autor apunta a que cuando un actor entra en conflicto por el control de determinado campo de la sociedad no significa que ese actor represente a toda una clase social, a menos que consiga construir un consenso en torno a sus prácticas y repertorios de confrontación¹⁴³.

En esta misma línea de análisis, coincidimos con Múnera cuando señala que las clases se encuentran sujetas a las relaciones de subordinación-dominación dadas por las condiciones del sistema. Sin embargo, estas relaciones no siempre se caracterizan por ser conflictivas, teniendo en cuenta que existe una amplia gama de interacciones posibles (sometimientos pasivos,

¹⁴³Múnera (1998) construye toda una argumentación sobre la relación entre la categoría de la clase y los actores populares a partir de los aportes y la crítica a los trabajos de Nicos Poulantzas y de Alain Touraine, en donde considera que, en la reflexión del primer autor, el actor es subsumido en la clase. Mientras que en la posición de Touraine, la clase es subsumida por el actor. Para Múnera estas dos posiciones pueden conducir a reducir el análisis de clases, en particular de las clases populares, a aquellos actores que conforman una relación conflictual. Sin embargo, no se puede inferir, desde la acción y la posición, que un solo actor represente los intereses de toda una clase social.

colaboraciones activas, resistencias, entre otros). Ahora bien, desde nuestra perspectiva esta multiplicidad de dimensiones debe ser comprendida desde los mecanismos a través de los cuales se conforma la hegemonía, entendida desde una perspectiva gramsciana, como:

Un conjunto de estrategias a través de las cuales una clase ejerce el liderazgo moral e intelectual sobre otras, logrando que éstas acepten *voluntariamente* la “visión del mundo” que coloca a unos y otros en lugares diferentes de la jerarquía social. Es a través de la hegemonía que las jerarquías sociales se *naturalizan*, se convierten en parte fundamental del sentido común de las personas. Es la hegemonía, por tanto, la que construye una voluntad común a partir del consenso ideológico. (Castro-Gómez, 2015, p. 97)

En este sentido, la construcción de la hegemonía se vale necesariamente de una serie de dispositivos culturales que le permitan crear esos consensos entre los diferentes actores presentes en una sociedad. Se crea de esta manera un sentido común aceptado por una parte importante de los sujetos individuales y colectivos que conforman el sistema social, en donde los grupos dominantes logran que sus intereses particulares sean considerados por los otros grupos como propios.

La acción hegemónica¹⁴⁴ en un sistema capitalista está ligada a la posición privilegiada que ocupan esas clases dominantes en su relación con la naturaleza, es decir, con todo lo que implica el proceso productivo. La complejidad de las relaciones de subordinación derivadas del sistema capitalista se expresa no solamente en términos de la relación existente entre el proletario y el dueño del capital, sino que incluye a los actores que participan en todo el proceso (administración, control y administración del capital) y a aquellos trabajadores que se encuentran fuera del circuito del trabajo regulado. En este sentido, el poder que ejercen las clases dominantes desborda las relaciones entre sujetos individuales, para centrarse en el plano colectivo dado que el poder va más allá del hecho de tener o poseer los medios de producción social. Las transformaciones en las dinámicas de acumulación del capital así lo evidencian. La desregularización, la precarización, la deslocalización, entre otros elementos, plantean nuevas formas de relación del trabajo que evidentemente ya no pasan por la fábrica. En este sentido, Múnica señala “la posición de clase está

¹⁴⁴ “La acción hegemónica sería aquella constelación de prácticas políticas y culturales desplegada por una clase fundamental, a través de la cual se logra articular bajo su dirección a otros grupos sociales mediante la construcción de una voluntad colectiva que, sacrificándolos parcialmente, traduce sus intereses corporativos en universales. Eso implica un proceso de constitución política de las clases que no puede ser visto fuera de un análisis de las relaciones de fuerza, de la historia de prácticas sociales expresadas en un nivel organizacional”. (Portantiero, 1981, p. 151)

determinada de forma prioritaria por la relación de poder y no por el hecho de la propiedad privada de los medios de producción” (Múnera Ruiz, 1998, pág. 78).

Portantiero (1981) apunta otros dos elementos claves para entender las relaciones entre las clases dominantes y las clases subordinadas. En el caso de las primeras, la posición privilegiada dentro del proceso productivo generalmente es acompañada por una influencia o presencia en el Estado. Por su parte, las clases populares que se encuentran fuera de la unidad creada en el Estado están en una posición que evidentemente es subordinada pero que no debe ser entendida como una posición pasiva e invisible.

Precisamente, lo que estamos planteando es que el hecho de ser agentes populares implica que existe capacidad organizativa y de producción de sentido colectivo que les permite orientar su lucha en determinados sentidos. Detrás de su acción existen redes sumergidas en las que se construyen subjetividades políticas. La actividad de los actores populares puede desembocar en una (re)constitución política que les permita crear proyectos contrahegemónicos, espacios diferenciales con lógicas de la reproducción de la vida alternativas a la dominante, o puede tomar otras formas de resistencia que evidencia las contradicciones presentes en la sociedad¹⁴⁵.

En este sentido, en la categoría analítica de lo popular, Múnera incluye:

Al conjunto de agentes sociales sometidos al nivel de lo estructural a una dominación económica, política, de género y cultural (en la que están implícitas la racial y la étnica), que no está limitada, aunque incluye, a la relación de poder entre las clases. Por consiguiente, los posibles campos sociales en conflicto son ampliados a los ámbitos de la vida social donde el poder forma grupos que fundamentan sus privilegios en la subordinación de individuos y colectividades. (Múnera, 1998, p. 76)

Mauricio Archila (2001) señala que la categoría de clase social no debe ser reducida a la esfera productiva, ya que supondría un concepto incompleto para entender la complejidad del conflicto social, las clases sociales siguen presentes y seguirán siendo fuente de identidades, pero no articula la complejidad de las diferencias que subyacen a los sujetos.

¹⁴⁵ Al respecto y, siguiendo a Gramsci, Castro-Gómez (2015) señala que:

Las clases dominantes han tenido que “ceder” un poco de terreno a las clases subalternas, a fin de poder construir su hegemonía. Por ello, en tanto que asentada en un terreno compartido por unos y otros, la ideología no es sólo una cuestión de la clase dominante, sino que también pertenece a las clases subalternas, a fin de poder construir su hegemonía, si bien no se refleja clara y diferencialmente sus intereses. Esto significa que el consenso ideológico es un escenario de lucha en el que los subalternos pueden tomar conciencia de su situación y disputar políticamente a la clase dominante la hegemonía de la sociedad civil. (p. 98)

Por tanto, nos parece acertado el análisis que considera a las clases sociales como relaciones (dinámicas) inscritas en una comunidad específica, que desarrollan un sentimiento de pertenencia y que se constituyen como sujeto colectivo en donde el conflicto se encuentra presente como uno de sus elementos constitutivos. El análisis de los grupos subalternos que se articulan en un movimiento social y que experimentan la explotación, la desposesión y la dominación debe tener cuenta la dimensión de clase como una de sus determinaciones, aunque no la única (Algranati et.al., 2011). Esta concepción nos lleva nuevamente a la idea de entender al movimiento social como un actor que se transforma y se recompone a partir de la articulación y distanciamiento de los grupos que confluyen, en donde se producen diferentes articulaciones de las diferencias.

Múniera presenta una propuesta amplia influenciada por el pensamiento anarquista, en donde el actor se caracteriza por la lucha contra la estructura del sistema capitalista pero no es reducido a una parte que representa a toda la clase en su conjunto, es decir, el proletariado. Esta postura extiende lo popular a otros actores cuyas relaciones con el sistema no necesariamente se encuentran mediadas por su vínculo fabril, sino que plantea otras formas de subordinación-dominación y otras identidades populares. En este sentido, la conceptualización nos invita a pensar en otros conflictos y otras resistencias, así como las diferentes formas que adquieren las relaciones de poder en otras escalas geográficas, en otros contextos, en donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas.

El autor señala que los conflictos en los que se inscriben los movimientos populares hacen referencia a dos elementos de manera simultánea: a la relación social con la naturaleza (en donde se constituyen las clases) y a las relaciones de poder que configuran las hegemonías políticas y sociales. El sentido de los conflictos en los que participan los movimientos populares en Colombia no se circunscribe de manera general a un cambio total del sentido societal, algunas de las demandas apuntan a mejorar sus condiciones de vida. Es decir, sus demandas pueden estar orientadas a lograr unos mínimos vitales debido a las condiciones de explotación y dominación en las que se encuentran insertos, y otras acciones pueden estar más orientadas en un sentido emancipatorio.

Esta apreciación señalada por Múniera es compartida en esta tesis en tanto los movimientos con los que trabajamos señalan demandas en estas dos direcciones. Con esta valoración, lo que queremos decir es que las agendas populares no son homogéneas en sus demandas, como no lo son los actores que las construyen, aunque se pueden apreciar líneas comunes. Ahora bien,

precisamente esta heterogeneidad hace que los movimientos populares se articulen en tres niveles principalmente: el de la relación entre las clases dominantes y las clases populares (entendiendo que el conflicto con las mismas es dinámico, contingente y parcial), el de la relación entre los actores de la misma clase (interacciones en las que se da tensión, jerarquías y acuerdos), y el de la relación entre actores de un mismo movimiento (Múnera, 1998, pp. 82-83).

A nuestro parecer, el planteamiento presentado en este apartado contribuye a comprender las dinámicas de las actuales luchas sociales populares en América Latina en donde se evidencia que los actores protagonistas han desarrollado nuevas formas de “saber”, “sentir” y “hacer” frente a las distintas caras que adquiere la dominación en la región, así como la capacidad de construir lecturas propias y alternativas del contexto en el que se desarrollan. Es un hecho que la renovación de la lucha social ha derivado de los grupos subalternos que se encuentran en los márgenes de la sociedad, y que en los últimos años se han caracterizado por la afirmación de la diferencia frente al impulso homogeneizador del pensamiento único.

CAPÍTULO 3. Rupturas y continuidades en América Latina en el estudio de los movimientos sociales

Este apartado tiene como objetivo abordar aquellos marcos conceptuales que, consideramos, complementan esa mirada interdisciplinaria, la cual nos permitirá comprender las percepciones populares sobre los conflictos socio-territoriales en Colombia.

Para ello, esta tercera parte se encuentra estructurada de la siguiente manera: primero, una breve referencia a algunos elementos del estudio de la conflictividad social en América Latina; segundo, los aportes del pensamiento crítico latinoamericano; tercero, el significado de lo común como elemento que atraviesa las percepciones que construyen los actores sociales a los que hacemos referencia en la tesis.

3.1. La conflictividad social en América Latina

A comienzos de la década del dos mil, académicos y activistas señalaron las importantes transformaciones que se estaban gestando en la acción social popular en la región y llamaron la atención sobre la emergencia de “nuevas semánticas de la resistencia” (Hoetmer, 2009, p. 86).

Estas transformaciones eran manifiestas ya en la década de los noventa con la irrupción del Movimiento Zapatista, el Movimiento Sin Tierra, los movimientos urbanos y de desocupados, el movimiento cocalero y el movimiento indígena, entre otros. En una significativa lista de iniciativas de movilización. Estas prácticas contestatarias de distinto tipo representaron un influjo importante para el desarrollo del pensamiento crítico latinoamericano, en donde en los últimos años ha habido una proliferación de estudios relacionados con la conflictividad social y la movilización popular¹⁴⁶.

¹⁴⁶ Al respecto, Boaventura de Souza Santos se refiere al aumento de la conflictividad social en las últimas tres décadas donde los protagonistas han sido actores sociales de diferente tipo:

En los últimos treinta años las luchas más avanzadas fueron protagonizadas por grupos sociales (indígenas, campesinos, mujeres, afro-descendientes, piqueteros, desempleados) cuya presencia en la historia no fue prevista por la teoría crítica eurocéntrica. Se organizaron muchas veces según formas (movimientos sociales, comunidades eclesiales de base, piquetes, autogobierno, organizaciones económicas populares) muy distintas de las privilegiadas por la teoría: el partido y el sindicato. No habitan los centros urbanos industriales sino lugares remotos en las alturas de los Andes o en llanuras de la selva amazónica. Expresan sus luchas muchas veces en sus lenguas nacionales y no en ninguna de las lenguas coloniales en que fue redactada la teoría crítica. Y cuando sus demandas y aspiraciones son traducidas en las lenguas coloniales, no emergen los términos familiares de socialismo, derechos humanos, democracia o desarrollo, sino dignidad, respeto, territorio, autogobierno, el buen vivir, la Madre tierra. (Santos B. d., 2011, p. 26)

Los estudios actuales en América Latina se fundan en la idea de entender a los movimientos sociales populares desde una visión dinámica, que dé cuenta de los asuntos sociales y políticos, con preguntas que permiten establecer los puentes entre la acción contenciosa, la reconfiguración espacial y las dinámicas de la acumulación del capital, entre otras cuestiones. Las diferentes perspectivas de investigación también ponen en evidencia la emergencia de nuevos repertorios, marcos culturales, cambios en las formas de acción colectiva y el uso de nuevas categorías de análisis que dejan ver que el debate y la acción están considerados de otra manera. Ejemplo de ello es que, en el mundo rural, las viejas unidades de análisis centradas en la parcela y la hacienda dan lugar hoy día al territorio como unidad básica de análisis y de disputa (Ñáñez O. & Salgado, C. 2014).

Raúl Zibechi (2003) señalaba a principios del presente siglo que los movimientos sociales en la región:

Están transitando por nuevos caminos, que los separan tanto del viejo movimiento sindical como de los nuevos movimientos de los países centrales. A la vez, comienzan a construir un mundo nuevo en las brechas que han abierto en el modelo de dominación. Son las respuestas al terremoto social que provocó la oleada neoliberal de los ochenta, que trastocó las formas de vida de los sectores populares al disolver y descomponer las formas de producción y reproducción, territoriales y simbólicas, que configuraban su entorno y su vida cotidiana. (p. 183)

De esta manera, la acción política contestataria logró resquebrajar el discurso dominante neoliberal y cuestionar los principales fundamentos del mismo. Para Algranati et.al. (2008) el ciclo de protestas que comenzó a mediados de la década del noventa, y que ha tenido diferentes momentos, implicó una reformulación de la política en tres aspectos: primero, la construcción colectiva de la gestión comunitaria, del territorio por fuera y en tensión con la intervención estatal; segundo, la exploración del cambio de las políticas públicas a través de la demanda, la confrontación y la negociación con el Estado y los gobiernos; y, tercero, el cuestionamiento de la matriz estatal y la búsqueda de una transformación en donde la gestión de los asuntos públicos supere los límites del Estado (p. 189).

Desde este análisis, el cual compartimos, “la política se conjugará indisolublemente como un método de democratización de las relaciones sociales y de las formas de gestión de los asuntos colectivos tendiendo a expandir el “poder hacer” colectivamente en detrimento del “poder sobre” los otros” (Holloway citado en Algranati et.al., 2008, p. 189). De esta manera, se puso en juego

una concepción de la política sustentada en una visión amplia de lo común, que va más allá de “lo compartido por todos”, frente a los preceptos liberales que encumbran lo individual por encima de lo colectivo y que aíslan lo político de lo social. Es así como se construyó una suerte de imaginario de resistencia popular centrado en la defensa de la vida versus la práctica de mercantilización de la misma, instaurada por el discurso neoliberal.

Ahora bien, es importante señalar que los movimientos sociales protagonistas de ese ciclo de protestas han sufrido profundas transformaciones. Los actores colectivos que irrumpieron en ese periodo no se han mantenido al margen de los cambios políticos y sociales que se han dado en la región. La relación con la institucionalidad, en particular, con los gobiernos llamados progresistas que llegaron al poder en ese periodo, implicó profundas mutaciones en sus propias institucionalidades. Las disputas y las propias dinámicas organizativas también han incidido en tales transformaciones¹⁴⁷.

Sin embargo, el ciclo de movilizaciones de finales de los noventa y principios del dos mil, consiguió abrir la agenda política y colocar nuevas problemáticas en el debate público. Este hecho representó un punto de inflexión manifiesta en la desnaturalización de la relación entre globalización y neoliberalismo. Para Maristella Svampa (2009) ha significado un cambio en el escenario político de la región y habilitado el concepto de movimiento social frente a la fuerza adquirida por la categoría de protesta social. Esta última definida en función del carácter contencioso de la acción y de la visibilidad pública, elementos característicos de la conflictividad social presentes en la región en la última década¹⁴⁸.

Esta autora manifiesta la importancia de la (re)valorización del concepto, ya que permite establecer un diálogo con las teorías contemporáneas de la acción colectiva y los alcances teóricos propios del pensamiento latinoamericano. Los análisis relacionados con los marcos interpretativos, las dimensiones culturales y la construcción de subjetividades políticas son elementos fundamentales para comprender la multiplicidad de acciones de resistencia, los procesos de

¹⁴⁷ Al respecto, Zibechi (2017) señala que los movimientos sociales de finales de los noventa y principios del dos mil “han llegado a la meseta de la madurez, se han estabilizado para los sistemas políticos que han aprendido a relacionarse con ellos. Sin embargo, unos poco han sabido reinventarse, encontrado nuevas fuentes para rejuvenecer su militancia, mantenerse vivos y reforzar sus perfiles antisistémicos” (p. 10).

¹⁴⁸ Autores como Raúl Zibechi o Raquel Gutiérrez Aguilar consideran que englobar la multiplicidad de actores colectivos presentes en América Latina en el concepto de movimientos sociales es una equivocación en términos teóricos. La razón de esta crítica se debe a que dicho concepto surge en realidades distintas a la latinoamericana y al abordarlos bajo este foco de análisis, puede anular las diversas expresiones organizativas, culturales y de horizonte político bajo las que se manifiestan. Sin embargo, consideramos que una visión amplia de movimiento social nos brinda herramientas de análisis para comprender esas “muchos mundos” parafraseando a Zibechi.

articulación entre diferentes actores colectivos y la agenda multitemática de los sectores sociales populares en el marco la aparición de múltiples conflictos (Ñáñez y Carlos, 2014).

Por otra parte, es importante señalar que de la acción social y popular no se desprende la generación de una política o una ética pura ya que, los movimientos se encuentran insertos en contextos sociales complejos caracterizados por luchas de poder, desigualdad, prácticas políticas hegemónicas, entre otros. Sin embargo, existen una serie de condiciones que pueden posibilitar procesos de innovación social y cognitiva, entre las que se encuentran: la existencia de una posición proclive a la libertad de pensamiento, al reconocimiento de la diferencia, a una mayor sensibilidad frente a la opresión y a una necesidad de cambio en y desde los márgenes del sistema social (Hoetmer, 2009, p. 97).

En la última década, parece cobrar aún más significado términos que habían sido desechados por muchos teóricos al considerarlos caducos o relegados al ostracismo por los discursos políticos dominantes. Por ejemplo, categorías como lo popular que alude un sujeto colectivo que articula a diferentes actores sociales con diversas agendas e identidades, irrumpe en el escenario de lo público al utilizar repertorios de confrontación novedosos con una fuerte carga simbólica en relación a los efectos del modelo de desarrollo vigente (Ñáñez y Salgado, 2014).

Términos como el antiimperialismo, descolonización y emancipación se han instaurado nuevamente en el lenguaje político, “ninguno de estos conceptos límites ha retornado intacto o simplemente como fantasma del pasado; antes bien, sobre ellos se van operando trastocamientos y resignificaciones mayores, ligadas tanto a la nueva dinámica del poder como a la acción contestaría de los movimientos sociales contemporáneos” (Svampa, 2008, p. 4).

Ahora bien, el pensamiento crítico latinoamericano ha abordado estas reconfiguraciones desde diferentes perspectivas. Podemos encontrar corrientes que han centrado el análisis en el surgimiento de nuevas matrices socio-políticas relacionadas con la radicalización del proceso democrático y el surgimiento de movimientos étnicos (especialmente indígenas) en Bolivia y Ecuador. Desde estas visiones, los movimientos renovaron los repertorios de confrontación, las agendas y sus luchas a favor del control público de recursos como la tierra y el agua dando una nueva fuerza a proyectos de independencia nacional y desarrollo. No obstante, en los últimos años se refieren a la institucionalización de los movimientos y la tensión surgida con los gobiernos

llamados “progresistas”, en particular, debido a la continuidad de políticas de corte extractivista¹⁴⁹. En esta línea, se plantean corrientes que trabajan sobre las transiciones hacia el postextractivismo¹⁵⁰.

Desde la perspectiva modernidad, colonialidad y decolonialidad, los cambios y transformaciones en la región se han constituido sobre elaboraciones de subjetividades políticas resignificadas, que han producido nuevas articulaciones sociopolíticas y formas de concebir el Estado y la sociedad. Las renovadas formas epistémicas han sido resultado de las estrategias de acción y lucha de los movimientos ancestrales, de la insurgencia política que ha abierto nuevos caminos a la posibilidad de un horizonte de carácter decolonial (Walsh, 2008). Esta descolonización epistémica ha venido acompañada por un imaginario teórico político, manifiesto en las alternativas al desarrollo propuestas por los movimientos populares, como el Buen Vivir/ el Vivir Bien (Escobar, 2014).

En este marco, encontramos apuestas tan sugerentes como la de Escobar, Dagnino y Álvarez que plantean un análisis de la conflictividad social a partir de la producción simbólica y cultural de los movimientos sociales. Para los autores, esta producción se refiere a los significados construidos por los mismos actores en el marco de sus prácticas cotidianas y de sus comunidades de base. Estos significados, interpretaciones y percepciones de la realidad, se han considerado como marginales y residuales por el pensamiento hegemónico occidental, sustentado en el desarrollismo. Ahora bien, estos procesos de construcción de conocimiento hacen parte de procesos que deben ser considerados como políticos (Escobar, 1997, p. 203). La apuesta de esos

¹⁴⁹ En la presente investigación tomamos como referencia el concepto de extractivismo desarrollado por Gudynas (2105):

El extractivismo es aquí definido como un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo. Se considera que la orientación exportadora prevalece cuando al menos el 50% del recurso extraído es destinado al comercio exterior. Las etapas incluidas en el extractivismo comprenden las acciones de exploración, descubrimiento, etc., las actividades propias de la extracción, pero también las fases posteriores (como cierre y abandono de los sitios de apropiación). (p. 13)

¹⁵⁰ Escobar (2014b) señala que los discursos de la transición (DsT) “surgen de muchas partes del mundo y dominios del saber y de la práctica social, hay una clara diferenciación entre los discursos de transición que emanan del Norte y aquellos que surgen del Sur global”. En el caso del Norte, encontramos propuestas como el “Decrecimiento” (p. 45). Y, en el Sur global, los DsT que han adquirido mayor fuerza son los que se enmarcan en “transiciones al postextractivismo” (TsP). El autor llama la atención sobre la necesidad de crear puentes y diálogos entre las diferentes corrientes y activismos para profundizar en las perspectivas, así como “para difundir los DsT con un sentido radical de la política”. (p. 45) Estos procesos se dan en el marco de un pensamiento hegemónico unificador que niega esos “otros” saberes.

tres autores se alinea con las prácticas teórico/políticas de los movimientos populares articuladas con la resignificación de lo común y de la autonomía.

3.2. Elementos de análisis desde la perspectiva de la Modernidad/Colonialidad

Como lo hemos señalado, la renovada irrupción de los sujetos colectivos indígena, campesino, negro o los movimientos socio-ambientales y feministas, provocan la emergencia o la activación de análisis y/o resignificación de categorías sociales que estaban en el ostracismo político y teórico como: lo popular, lo común, la resistencia, la emancipación, entre otros.

Edgar Lander (2000) señala que en el pensamiento latinoamericano se ha producido “una amplia gama de búsquedas de formas alternativas del conocer, cuestionándose el carácter colonial/eurocéntrico de los saberes sociales sobre el continente, el régimen de separaciones que les sirven de fundamento, y la idea misma de la modernidad como modelo civilizatorio universal”. (p. 27) Ejemplo de ello es el trabajo que se ha desarrollado en el marco de la perspectiva teórica de la modernidad/colonialidad, que ha intervenido “decisivamente en la discursividad propia de las ciencias modernas para configurar otro espacio para la producción de conocimiento, una forma distinta de pensamiento” (Escobar, 2003, p. 53).

En esta línea, Walter Mignolo (2013) señala que las epistemes (moderno, posmoderno, altermoderno, ciencia newtoniana, entre otras) que han sido consideradas como hegemónicas dejan de tener esa superioridad académica o esa legitimidad epistémica, para abrir camino hacia otras formas de conocer, de pensar, de hacer, de sentir.

El desplazamiento del “locus del conocimiento” se relaciona con el giro que se da al interior del pensamiento crítico, a partir de comprender que el neoliberalismo no solo es un modelo económico, sino que se constituye como un modelo dominante civilizatorio.

Este modelo no solo organiza la reproducción material, es un proyecto político y cultural, en el que se establecen una serie de “valores básicos de la sociedad liberal moderna en torno al ser humano, la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y la buena vida” (Lander, 2000, p.11). De esta manera, se instala en el imaginario común la superioridad del

conocimiento científico y la naturalización de los comportamientos e instituciones de la sociedad moderna.¹⁵¹

La naturalización de este modelo no se inicia en la actual fase de acumulación de capital, tiene profundas raíces geográficas e históricas, que se relacionan con la construcción del imaginario geopolítico moderno y con la capacidad de los europeos para imponer el pensamiento racional occidental y sus cartografías de la diferencia (Agnew, 2005 [1998]). Ejemplo de ello, son las teorías y modelos geopolíticos que aparecen después de la discontinuidad geopolítica representada por la caída del muro de Berlín. Planteamientos como el “Choque de civilizaciones” de Samuel Huntington (1996) o el “Fin de las civilizaciones” de Francis Fukuyama (1992).

Teorías que proclaman la superioridad de Occidente y del modelo capitalista, anulando cualquier conocimiento y modelo societal que no se funde sobre sus preceptos, imaginarios y formas de relacionamiento. Consecuencia de ello es la negación de posibilidad de “otro” orden social que implique formas de relacionamiento y subjetividades que no estén mediadas por relaciones mercantiles.

La búsqueda de formas de conocimiento no eurocéntrico no puede ser entendido sin la obra de dos autores que son fundamentales para el desarrollo del pensamiento decolonial. Frantz Fanon¹⁵² con su libro “Condenados de la Tierra” (1961) y Edward Said con su libro “Orientalismo” (1978). En cuanto a los estudios en la región, debemos señalar que los trabajos de José Carlos Mariategu, José Martí y desarrollos más actuales y fundamentales como los del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, o los de Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos, Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Catherine Walsh, Walter Mignolo, Silvia Rivera Cusicanqui, Raquel

¹⁵¹ Al respecto Edgar Lander (2000) señala que:

El proceso que culminó con la consolidación de las relaciones de producción capitalistas y modo de vida liberal, hasta que éstas adquirieron el carácter de las formas naturales de la vida social, tuvo simultáneamente una dimensión colonial/imperial de conquista y/o sometimiento de otros continentes y territorios por parte de las potencias europeas, y una encarnizada lucha civilizatoria interna al territorio europeo en la cual finalmente terminó por imponerse la hegemonía del proyecto liberal. (p. 20)

¹⁵² Al respecto Walter Mignolo (2015) señala de la siguiente manera la importancia de la obra de Franz Fanon en el desarrollo del pensamiento no eurocéntrico:

El cambio en la geografía y biografía de la razón que se introdujo en la década de los cincuenta del siglo pasado, desde Fanon y la revista cultural parisina *Présence Africaine*, hasta el surgimiento de los estudios subalternos y el poscolonialismo a principios de los años ochenta, paralelo a las luchas y discursos liberadores en África y Asia, amplió la preocupación por el proletariado y la extendió hasta la cuestión de la dignidad de millones de seres humanos considerados menos humanos en el discurso eurocéntrico. (p. 149)

Gutiérrez Aguilar, entre otras. Por otra parte, recordar la importancia de los aportes de los Subaltern Studies de la India¹⁵³ para el desarrollo del pensamiento decolonial en América Latina.

Ahora bien, la naturalización de la idea de modernidad se representa en la creencia, aparentemente universal, de la existencia de unas etapas de progreso y desarrollo que han seguido las zonas del centro de la economía-mundo y que, por tanto, deben continuar las economías periféricas si quieren lograr un mayor desarrollo. La cumbre de esta pirámide de progreso es la sociedad industrial liberal, la sociedad moderna, en definitiva.

Los conocimientos que se produzcan al interior de estas sociedades son aquéllos que son considerados como válidos y extrapolables a otros contextos, por tanto, universales. Son los que dan la pauta del “deber ser” de la sociedad a nivel global. Estas ideas se sustentan en las siguientes dimensiones señaladas por Lander:

1) la visión universal de la historia asociada a la idea del progreso (a partir de la cual se construye la clasificación y jerarquización de todos los pueblos y continentes, y experiencias históricas); 2) la “naturalización” tanto de las relaciones sociales como de la “naturaleza humana” de la sociedad liberal capitalista; 3) la naturalización u ontologización de las múltiples separaciones propias de esa sociedad; y 4) la necesaria superioridad de los saberes que produce esa sociedad (‘ciencia’) sobre todo otro saber. (p. 22)

Siguiendo a Lander, la naturalización de la modernidad ha implicado, por tanto, una jerarquización de espacios, saberes y gentes que se manifiesta en un “dispositivo de conocimiento colonial e imperial”. En donde otros “epistemes” se consideran ontológicamente inferiores, primitivos, arcaicos, históricos, premodernos.

Boaventura de Souza Santos entiende esta división entre las epistemes “válidas” y las epistemes “no válidas” como producto de ese pensamiento occidental moderno, que el autor lo categoriza como pensamiento abismal, el cual se encuentra constituido por:

Un sistema de distinciones visibles e invisibles, las invisibles constituyen el fundamento de las visibles. Las distinciones invisibles son establecidas a través de líneas radicales que dividen la realidad social en dos universos, el universo de “este lado de la línea” y el universo del “otro lado de la línea”. La división es tal que “el otro lado de la línea” desaparece como realidad, se convierte en no existente, y de hecho es producido como no-existente. No-existente significa no existir en ninguna forma relevante o comprensible de ser. Lo que es producido como no-existente es radicalmente excluido porque se encuentra más allá del universo de lo que la concepción aceptada de inclusión considera es su otro. (Santos, 2014, p. 21)

¹⁵³ Ver Ranajit Guha (editor), *A Subaltern Studies Reader 1986-1995*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1998

En este sentido, el pensamiento occidental no admite la coexistencia de otros conocimientos y de otras formas de organizar la vida que no se encuentren bajo la lógica de la modernidad. “Más allá de esto, sólo está la no existencia, la invisibilidad, la ausencia no-dialéctica” (Santos, 2014, p. 22). Esta visión eurocéntrica del mundo continúa vigente en el imaginario de Latinoamérica y es la base sobre la cual las élites dominantes han construido unas relaciones de poder asimétricas que les ha permitido mantener sus privilegios, en el marco de una compleja red de planos materiales y subjetivos que se reproducen en las relaciones cotidianas.

3.2.1. Elementos de una matriz colonial del poder

Autores como John Agnew (2005 [1998]), Immanuel Wallerstein (1974) y Aníbal Quijano (2000) señalan que, la universalización del pensamiento occidental fue posible gracias a la llegada de los europeos a lo que denominaron finalmente América Latina. A partir de este momento, el espacio global fue jerarquizado y ordenado en lugares con mayor o menor significado según su grado de funcionalidad a una naciente economía-mundo capitalista y al desarrollo de los Estados territoriales (2005 [1988]).

En este proceso, Quijano (2000) señala dos hechos históricos que confluyeron y se establecieron como dos ejes centrales en la estructuración de un nuevo patrón de poder:

De una parte, la codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura biológica que ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros. Esa idea fue asumida por los conquistadores como el principal elemento constitutivo, fundante, de las relaciones de dominación que la conquista imponía. Sobre esa base, en consecuencia, fue clasificada la población de América, y del mundo después, en dicho nuevo patrón de poder. De otra parte, la articulación de todas las formas históricas de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, en torno del capital y del mercado mundial. (p. 202)

De esta manera, la construcción de la raza¹⁵⁴ y de las identidades raciales se establecieron como elementos centrales en la clasificación de las poblaciones, bajo supuestas “estructuras

¹⁵⁴ Sobre la categoría de raza, Quijano (2000) señala lo siguiente:

La raza apareció mucho antes que color en la historia de la clasificación social de la población mundial. La idea de raza es, literalmente, un invento. No tiene nada que ver con la estructura biológica de la especie humana. En cuanto a los rasgos fenotípicos, éstos se hallan obviamente en el código genético de los individuos y grupos y en ese sentido específico son biológicos. Sin embargo, no tienen ninguna relación con

biológicas diferenciales” en correlación con espacios y lugares concretos y con el desarrollo de una “perspectiva epistemológica desde la que se articula el significado y perfil de la nueva matriz de poder y desde la cual se puede canalizar la nueva producción de conocimientos”¹⁵⁵ (Mignolo, 2000, p. 17).

Por lo tanto, se “establece una diferencia radical entre las sociedades modernas occidentales y el resto del mundo. Se da, como señala Bruno Latour, una diferenciación básica entre una sociedad que posee la verdad -el control de la naturaleza- y otras que no lo tienen” (Lander, 2000, p. 24).

La naturalización de la modernidad y la supremacía epistémica y ontológica se mantiene hoy en día a través de las diferentes formas que adquiere la colonialidad¹⁵⁶, en este caso referido al contexto latinoamericano. Heriberto Cairo (2005) especifica que la:

“Descolonización” (con mayúsculas), es decir, el proceso, dirigido fundamentalmente por criollos y que incorporó a mestizos en diversos momentos, que llevó a principios del siglo XIX (con la excepción de Cuba y Puerto Rico) a la constitución de los actuales Estados que se pretenden Nación en América, a partir de los territorios coloniales de las coronas de Castilla y Aragón y de Portugal, no implicó la “descolonización” (con minúsculas), que es el proceso, en muchos aspectos pendiente en América y el Pacífico, de liquidación de los efectos diversos de la colonización, tales como la negación de derechos a los pueblos indígenas y la perpetuación de la dominación de los descendientes de los colonizadores. Si la Descolonización es una respuesta al colonialismo, la descolonización trataría de enfrentarse a la colonialidad del poder. (p. 328)

Aníbal Quijano desarrolla una idea de poder que va de la mano de la colonialidad, entendida como el elemento particular y específico sobre el que se construye el patrón mundial del poder capitalista, sustentado en una diferenciación y jerarquización racial, a la que se le debe incluir el género y la sexualidad. Estos dos últimos muchas veces subsumidos en los análisis de las clasificaciones raciales. El poder que se ejerce sobre una mujer blanca no tiene las mismas

ninguno de los subsistemas y procesos biológicos del organismo humano, incluyendo por cierto aquellos implicados en los subsistemas neurológicos y mentales y sus funciones (p. 203).

¹⁵⁵ Traducción propia.

¹⁵⁶ Aníbal Quijano (2014) establece la diferenciación entre los conceptos de colonialidad y colonialismo, aunque advirtiendo su vinculación. En este sentido señala:

[Colonialismo] Este último se refiere estrictamente a una estructura de dominación y explotación, donde el control de la autoridad política, de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente identidad, y cuyas sedes centrales están, además, en otra jurisdicción territorial. Pero no siempre, ni necesariamente, implica relaciones racistas de poder. El colonialismo es, obviamente, más antiguo, en tanto que la colonialidad ha probado ser, en los últimos quinientos años, más profunda y duradera que el colonialismo. Pero sin duda fue engendrada dentro de éste y, más aún, sin él no habría podido ser impuesta en la intersubjetividad del mundo, de modo tan enraizado y prolongado (p. 285).

dimensiones y características que el que se puede ejercer sobre una mujer india o una mujer negra. No olvidemos, que el determinismo ambiental alimentó no solo la construcción de raza sino la de género y por ende las relaciones de dominación.

Además, señalar que la mercantilización del cuerpo de las mujeres, así como su fuerza de trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de la economía-mundo capitalista. Sin embargo, el discurso de la modernidad, ligado a lógica desarrollista ha invisibilizado los aportes de la mujer a la economía y ha agravado sus condiciones de exclusión y marginalización, situándola solamente en su rol de reproductora de la fuerza de trabajo¹⁵⁷.

Siguiendo la argumentación de Quijano (2014), la matriz colonial del poder se constituye en relación con los cinco ejes que se señalan a continuación:

Un espacio y una malla de relaciones sociales de explotación/dominación/conflicto articuladas en torno de la disputa por el control de los siguientes ámbitos de existencia social: 1) el trabajo y sus productos; 2) en dependencia del anterior, la naturaleza y sus recursos de producción; 3) el sexo, sus productos y la reproducción de la especie; 4) la subjetividad y sus productos materiales e ínter subjetivos, incluido el conocimiento; 5) la autoridad y sus instrumentos, de coerción en particular, para asegurar la reproducción de ese patrón de relaciones sociales y regular sus cambios.

El autor señala que solo hasta la irrupción de los debates sobre la subjetividad y género, el pensamiento eurocéntrico percibió la complejidad de esta matriz de poder, en tanto se encontraba inmerso en la confrontación de las grandes metanarrativas: el liberalismo y el materialismo histórico.

Ahora bien, en la interacción de estos cinco ejes de disputa se construye tanto la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. La primera, apunta hacia la interrelación entre formas modernas de explotación y dominación sustentada principalmente en la idea de raza, como lo hemos apuntado; la colonialidad del saber, se refiere al rol de la epistemología y las tareas generales de la producción del conocimiento en la reproducción de regímenes de pensamiento coloniales; por su parte, la colonialidad del ser se relaciona con la experiencia vivida de la colonización y su incidencia en el lenguaje.

Es importante enfatizar, que en América Latina la perspectiva colonial/eurocéntrica fue asumida por las clases dominantes como propia, el patrón cultural occidental como universal y, en

¹⁵⁷ Para profundizar en la relación entre feminismo y la resistencia a la modernidad ver el trabajo de Vandana Shiva (1989) *Staying Alive, Women, Ecology and Development*, Londres, Zed Books.

consecuencia, la visión de progreso presentada por el desarrollismo como el modelo a seguir, lo que ha generado que las relaciones de poder se configuren sobre los ejes de la colonialidad expuestos anteriormente.

Por otra parte, el análisis y el develamiento de las diferentes configuraciones que adquiere el poder en el continente ha generado procesos de resignificación y de irrupción de diferentes saberes y epistemes. Al respecto, Lander (2000) siguiendo el análisis de Maritza Montero señala cinco elementos que se encuentran en esos saberes y que aparecen en diferente medida en las agendas de los movimientos sociales populares, a saber:

- Una concepción de comunidad y de participación, así como del saber popular, como formas de constitución y a la vez como producto de una episteme de relación.
- La idea de liberación a través de la praxis, que supone la movilización de la conciencia, y un sentido crítico que lleva a la desnaturalización de las formas canónicas de aprehender-construir-ser en el mundo.
- La redefinición del rol de investigador social, el reconocimiento del Otro como Sí Mismo y por lo tanto la del sujeto-objeto de la investigación como actor social y constructor de conocimiento.
- El carácter histórico, indeterminado, indefinido, no acabado y relativo del conocimiento. La multiplicidad de voces, de mundos de vida, la pluralidad epistémica.
- La perspectiva de la dependencia y luego, la de la resistencia. La tensión entre minorías y mayorías y los modos alternativos de hacer-conocer.
- La revisión de métodos, los aportes y las transformaciones provocados por ellos. (p. 28)

Ahora bien, los saberes subalternos y las resistencias populares se deben entender en relación con las configuraciones de poder que subyacen a la conformación de los Estados-Nación en la región. Tales configuraciones son producto de un complejo entramado de las diferentes formas que adquiere la colonialidad, que no se inscriben solamente en el campo económico y político, sino que se sustentan en prácticas sociales, simbólicas y culturales, que se han desarrollado a lo largo de diferentes momentos históricos.

Este proceso termina disponiendo una realidad estructural de dominación en la que interactúan las dinámicas internacionales, la escala nacional pero también intraregional¹⁵⁸. Asimismo, se produce también una reconstrucción de identidades, formas de organización y saberes populares que en muchos casos se reactivan a partir de las memorias colectivas de procesos que tienen profundas raíces históricas. Es importante señalar, que las estructuras de dominación no solo producen una jerarquización en las sociedades sino en los procesos de internalización de esas jerarquías en los actores subalternos.

A este respecto, la tesis del colonialismo interno resulta bastante sugerente en términos políticos, analíticos y de práctica social. Pablo González Casanova (1963, 1965 2006), uno de los principales teóricos que ha trabajado esta tesis¹⁵⁹, señala precisamente la necesidad de abordar el colonialismo interno a partir de las diferentes expresiones de dominación, resistencia y relaciones de jerarquía que se producen en los territorios. En este sentido, señala que la reflexión del colonialismo interno debe llevarse a cabo tanto en la “intensificación de la dominación del capital nacional e internacional como en la ocupación de los espacios territoriales y sociales de un país a otro o en el interior de un mismo país” (González Casanova, 2006, p. 444). De esta manera, el autor incorpora el elemento espacial en el análisis, llamando la atención sobre las diferentes formas que adquiere el colonialismo en las diferentes escalas¹⁶⁰. Para el autor, el colonialismo interno es precedente a las diferentes formas que adquiere la colonialidad.

¹⁵⁸ Pablo González Casanova (2006) señala una serie de elementos presentes en esa configuración del poder que se mantiene vigente de manera posterior, a los procesos de independencia de los países que han estado bajo las estructuras de imperialismos formales. De esta manera señala:

Los pueblos, minorías o naciones colonizadas por el Estado-Nación sufren condiciones semejantes a las que los caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional: 1. Habitan en un territorio sin gobierno propio. 2. Se encuentran en situación de desigualdad frente a las élites de las etnias dominantes y de las clases que las integran. 3. Su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes, a las burguesías y oligarquías del gobierno central o a los aliados y subordinados del mismo. 4. Sus habitantes no participan en los más altos cargos políticos y militares del gobierno central, salvo en condición de “asimilados”. 5. Los derechos de sus habitantes, su situación económica, política social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central. 6. En general los colonizados en el interior de un Estado-Nación pertenecen a una “raza” distinta a la que domina en el gobierno nacional y que es considerada “inferior”, o a lo sumo convertida en un símbolo “liberador” que forma parte de la demagogia estatal. 7. La mayoría de los colonizados pertenece a una cultura distinta y habla una lengua distinta de la “nacional”. (p. 432)

¹⁵⁹ Cabe señalar los importantes aportes que ha realizado Silvia Rivera Cusicanqui al colonialismo interno como marco teórico y metodológico para el estudio de las subjetividades políticas en América Latina, especialmente las referidas al movimiento katarista, los estudios de la mujer en la Región Andina o en su teoría de la sociología de la imagen (Rivera Cusicanqui, 1984, 2005, 2010).

¹⁶⁰ Al respecto, es interesante como González Casanova (2006) retoma aportes de geógrafos políticos como Edward Soja para el análisis que adquiere la dominación en las diferentes configuraciones regionales o a Henri Lefebvre para profundizar el análisis espacial en el colonialismo interno.

En este ejercicio de redefinición del concepto, González Casanova (2006) se ocupa de lo que Raffestin enuncia como desterritorialización/territorialización/reterritorialización, producida por las dinámicas actuales de la acumulación del capital:

La colonización internacional y colonización interior tienden a realizar expropiaciones y despojos de territorios y propiedades agrarias existentes, y contribuyen a la proletarianización o empobrecimiento por depredación, desempleo, bajos salarios, de la población y de los trabajadores de las zonas subyugadas. Al despojo de territorios se añade la creación de territorios colonizados o de enclaves coloniales; al despojo de circuitos de distribución se añade la articulación de los recursos con que cuentan las megaempresas y los complejos; a la asfixia y abandono de la producción y los productos locales se agrega el impulso de los “trusts” extranjeros unidos al gran capital privado y público nativo. (p. 445)

De tal manera, González Casanova llama la atención sobre las formas de articulación entre la colonización internacional y la colonización interna, para la puesta en marcha de un modelo económico que a su vez implica una fuerte reorganización de todos los espacios de la vida social: se crean límites, fronteras, remarcación de territorios, desplazamientos de población, confinamiento de comunidades, transformaciones en las formas de reproducción de la vida, se imponen nuevas formas de organización material de la sociedad, entre otras cuestiones¹⁶¹.

Los movimientos y los flujos no se manifiestan de manera homogénea en todas las regiones, dependerá de las relaciones de producción y de dominación, así como de su imbricación en unas jerarquías sociales. Por tanto, nos recuerda el autor que en los métodos de dominación y explotación interactúan elementos económicos y de otro tipo. Precisamente, el juego entre estos

¹⁶¹ Martins en la reflexión sobre la actualización de la teoría del colonialismo interno para el análisis de la conflictividad social en América Latina y en particular en Brasil señala la vigencia de sus postulados en relación con tres pistas para el análisis:

La primera de ellas, que el colonialismo interno es un marco interpretativo interesante para explicar el movimiento del capitalismo colonial desde el plano internacional hacia el plano interno, reproduciendo las tensiones sistémicas y antisistémicas entre capitalismo y colonialidad [...] La segunda pista se refiere al hecho de que además de su importancia desde su punto de vista epistémico y epistemológico, el colonialismo interno ha contribuido para el avance de los estudios postcoloniales respecto a las estructuras de poder, considerando las articulaciones simultáneas de conflictos de clase y conflictos inter-étnicos en el contexto de la colonialidad [...] La tercera pista revelada por el colonialismo interno es de orden moral. Nos parece que la jerarquía de valores coloniales fundada en distancias pre-reflexivas, legitimadas por prejuicios relacionados con la presunta superioridad de los europeos sobre los otros, influye directamente en la organización del poder colonial, del estado y del mercado. En esta dirección, entendemos que la jerarquía moral colonial nacida de las tensiones inter-étnicas entre colonizadores “blancos” y colonizados “negros” e “indios” ha contaminado los sistemas de valores de la economía de mercado y de las oligarquías, pero también de las familias de obreros y campesinos, y de sectores de las clases medias (pp. 315-316).

dos factores es el que constituye relaciones de poder asimétricas entre grupos heterogéneos y diferentes.

Al respecto, Martins (2018) señala como el “colonialismo interno implica la consideración de múltiples dimensiones organizadoras del poder y de la dominación tales como las culturales, las afectivas, las étnicas, las de género, las sexuales, las nacionales, las ambientales y también las económicas” (p. 324). En este sentido, el autor llama a comprender la complejidad del modelo capitalista como un modelo ontológico que se sustenta a partir de diferentes elementos materiales y simbólicos, los cuales a su vez reproducen diferentes patrones de colonialidad. Tal complejidad se manifiesta en las tensiones existentes entre aquellos grupos que defienden y alimentan el modelo neoliberal y aquellas fuerzas que plantean modelos societales alternativos.

En esta línea, Preciado (2018) plantea la importancia de la articulación y acompañamiento entre los diferentes saberes y prácticas. Entre el pensamiento crítico y esas formas organizativas y ontológicas divergentes que plantean un imaginario que subvierten el orden establecido. De esta manera señala:

Un pensamiento surgido desde la crítica de la (neo)colonialidad del poder que aporta o acompaña la creación de alternativas incipientes al capitalismo en sus más diferentes ámbitos, como el respeto e impulso de la interculturalidad y la diversidad de pueblos originarios (la autonomía en tanto expresión del respeto y del reconocimiento de la comunalidad) y, en diferentes escalas socioespaciales que van de la sociología del cuerpo y las relaciones de género, a propuestas locales, nacionales, supranacionales y globales, que reúnen otras narrativas, en torno de las diversas políticas de reconocimiento. (p. 96)

De esta manera, el autor plantea la necesidad de tejer esos diferentes saberes para la construcción social del pensamiento que permita hacer frente a la imposición de las lógicas epistémicas y ontológicas del capitalismo, en donde subyace la superioridad del pensamiento tecno-científico, el progreso y el desarrollo. Elementos que ha estructurado la colonialidad y a su vez alimentan el juego entre las variadas formas que se constituyen entre el dominio y la resistencia popular en largos procesos históricos y espaciales ¹⁶².

¹⁶² Nos parece importante, la apreciación realizada por Preciado (2018) al identificar las tres direcciones en las que se ha desarrollado el pensamiento latinoamericano frente a la modernidad, el progreso y el desarrollo:

en la revalorización de la filosofía de la praxis, que se propone una visión abarcadora, que parte de la reflexión crítica de y desde las prácticas sociales, donde se produce sentido: la teoría del desarrollo y cambio social, así como los paradigmas y referencias universales: la autosustentabilidad, como relación sociedad naturaleza historizada, o la (re)creación de derechos económicos, políticos y culturales; en la dirección de la teoría de la acción social colectiva, que está centrada en el actor, en su multidimensionalidad espacial-temporal-existencial (intersubjetiva) lo cual ha implicado un diálogo entre saberes más allá de ciencia-

3.3. La crítica al desarrollo

En el marco de este pensamiento crítico, queremos destacar los aportes realizados por el antropólogo colombiano Arturo Escobar, por considerar que nos brindan elementos para el análisis de la presente tesis.

El autor realiza una fuerte crítica a las teorías del desarrollo que se instauran como un patrón universal, a partir de la Segunda Guerra Mundial y que son adoptadas por los gobiernos de América Latina e impuestas por los organismos económicos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

La teoría económica liberal es adoptada casi como un dogma de fe. En su libro *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo* (Escobar, 1996b [1995]), Escobar señala como el desarrollo es una construcción discursiva que ha sido aceptada como un sentido común general. En este sentido, plantea la necesidad de desentrañar el concepto mismo para develar los diferentes planos a través de los que se ejerce un dominio sobre las estructuras productivas periféricas¹⁶³.

La “invención” del desarrollo se encuentra relacionada con la construcción del imaginario geopolítico durante la Guerra Fría y con los procesos de descolonización que se dieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, es importante señalar que el discurso del desarrollo, desde el surgimiento hasta la actualidad, se ha transformado en el devenir de los cambios históricos, políticos y económicos y su imposición como dogma de fe ha incidido en la conflictividad social del continente¹⁶⁴.

tecnología-humanidades, al incluir saberes populares y de pueblos originarios y en la dirección de la construcción de alternativas, que permite pasar —en un ir y venir— del pensamiento a la acción (auto-reflexividad) en diversas intervenciones sociales razonadas, deliberadas. (p. 104)

¹⁶³ Arturo Escobar (1996b [1995]) en el prefacio del libro deja claro el enfoque desde el que se sitúa el análisis y la relevancia del discurso en la conformación de la realidad social. En este sentido, manifiesta que la reflexión parte “del reconocimiento de la importancia de las dinámicas de discurso y del poder en la creación de la realidad social y en todo estudio de la cultura”. De esta manera, “el desarrollo, arguye el estudio, debe ser visto como un régimen de representación, como una “invención” que resultó de la historia de la posguerra y que, desde sus inicios, moldeó ineluctablemente toda posible concepción de la realidad y la acción social de los países que desde entonces se conocen como subdesarrollados” (p. 12).

¹⁶⁴ Arturo Escobar (2014) señala cinco factores que inciden en los cambios en la perspectiva del desarrollo: primero, el protagonismo de China, en particular, pero de las economías que hacen parte de los BRICS en la economía global; segundo, los cambios en la geopolítica mundial a partir de la invasión de Estados Unidos y la Guerra de Irak (2003) y los ataques contra el World Trade Center en Nueva York (2001); tercero, la transición del Consenso de Washington al llamado “Consenso de los commodities”; cuarto, el desmantelamiento del socialismo; quinto, la crisis ambiental y el cambio climático, que desestabiliza los marcos de desarrollo existentes. (p. 34)

La imaginación geopolítica posterior a la Segunda Guerra Mundial se estructura a partir de la idea de los tres mundos: un Occidente natural y normal (Primer Mundo), un oriente antinatural en manos de regímenes autoritarios (Segundo Mundo) y, finalmente, un grupo “discursivamente” homogéneo en el que estarían los países considerados no desarrollados (Tercer Mundo) (Agnew, 2005 [1988]).

En esta lógica, el Tercer Mundo no tendría un valor en sí mismo, su importancia deriva de la funcionalidad para los intereses del Primer y Segundo Mundo.

El Tercer Mundo se encuentra situado en medio de la disputa de poder entre los dos ejes hegemónicos, bajo unas condiciones de desigualdad en donde los dos polos trataron de ejercer el control en el ámbito político, cultural, social, comercial y económico. En esta disputa el objetivo fundamental apuntó hacia el establecimiento de mecanismos que permitieran la transformación de los países “subdesarrollados” bajo el patrón de desarrollo occidental centrado en la prosperidad material y progreso económico. En este sentido, Escobar (1996b [1995]) señala:

La realidad, en resumen, había sido colonizada por el discurso del desarrollo, y quienes estaban insatisfechos con este estado de cosas tenían que luchar dentro del mismo espacio discursivo por porciones de libertad, con la esperanza de que en el camino pudiera construirse una realidad diferente. (p. 22)

El autor propone una visión rupturista para entender las configuraciones del poder en América Latina y, en general, de la periferia de la economía-mundo capitalista. El análisis de la “invención” del desarrollo habilita determinados discursos y representaciones como dominantes mientras que se estigmatizan, se demonizan y se subvaloran aquéllos que no responden a los patrones de progreso.

Escobar (1994) señala que el discurso del desarrollo se ha regido por los mismos patrones que el discurso colonial “ha producido un aparato muy eficiente para producir conocimiento acerca de ejercer el poder sobre el Tercer Mundo”. (p. 29). Para el autor, entender el desarrollo como una construcción que produce un dominio del pensamiento y de la acción implica analizar los tres ejes que lo definen:

Las formas de conocimiento que a él se refieren, a través de las cuales llega a existir y es elaborado en objetos, conceptos y teorías; el sistema de poder que regula su práctica y las formas de subjetividad fomentadas por este discurso, aquellas por cuyo intermedio las personas llegan a reconocerse a sí mismas como “desarrolladas” o “subdesarrolladas”. El conjunto de formas que se hallan a lo largo de estos ejes constituye el desarrollo como

formación discursiva, dando origen a un aparato eficiente que relaciona sistemáticamente las formas de conocimiento con las técnicas de poder. (Escobar, 1996b, p. 30)

El conocimiento que habilita el discurso del desarrollo es el proveniente de la ciencia y la tecnología, que se considera objetivo, racional, sustentado en una base empírica y en el método científico¹⁶⁵. De esta manera, el conocimiento y los saberes que no se produzcan dentro de la razón tecno-científica son invalidados para la generación de cualquier tipo de progreso. “El conocimiento de los “otros”, el conocimiento “tradicional” de los pobres, de los campesinos, no sólo era considerado no pertinente, sino incluso como uno de los obstáculos a la tarea transformadora del desarrollo” (Lander, 2000, p. 30).

En este punto, debemos hacer referencia a los aportes realizados por Lefebvre sobre la producción social del espacio, ya que se encuentran relacionados con la producción de las diferencias, subjetividades y órdenes sociales, como lo hemos señalado en apartados anteriores. Es así como las representaciones del espacio se validan y se imponen a través de la utilización de la razón tecno-científica, mientras que en los espacios de representación se configuran esos saberes subterráneos, contruidos en los márgenes de la sociedad, en los espacios locales, en la vida cotidiana de las comunidades.

En las representaciones del espacio, los expertos se convierten en los intermediarios entre el Estado, las comunidades y los actores subalternos. De esta manera, las reivindicaciones se abstraen del ámbito político para enmarcarlas como un problema meramente técnico, lo que implica entre otras cuestiones el no reconocimiento político de los sectores populares.

En relación a los mecanismos utilizados para construir las representaciones del espacio, nos parece importante recoger las ideas de profesionalización e institucionalización del desarrollo planteadas por Escobar (1996b [1995]). Las cuales aluden a todo un entramado de acciones, instituciones, organizaciones e intervenciones técnicas llevadas a cabo en el Tercer Mundo para la

¹⁶⁵ Escobar (1996 [1995]) señala que el discurso del desarrollo fue el resultado de la interacción entre las instituciones, las prácticas y la sistematización de sus relaciones, a saber:

El proceso de formación de capital, y sus diversos factores: tecnología, población y recursos, política fiscal y monetaria, industrialización y desarrollo agrícola, intercambio y comercio. Existía también una serie de factores ligados a consideraciones culturales, como la educación y la necesidad de fomentar los valores culturales modernos. Finalmente, estaba la necesidad de crear instituciones adecuadas para llevar adelante la compleja labor: organizaciones internacionales (como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, creados en 1944, y la mayoría de las agencias técnicas de las Naciones Unidas, también producto de mediados de los años cuarenta); oficinas de planificación nacional (que se multiplicaron en América Latina especialmente después de la iniciación de la Alianza para el Progreso a comienzos de los años sesenta); y agencias técnicas de otros tipos. (Traducción propia) (p. 79)

incorporación del conocimiento especializado y de la ciencia occidental y de organización de formas de poder, interrelacionándolos. Este conjunto de intervenciones permitió la normalización y el disciplinamiento de las comunidades a través de la generación, validación y difusión del conocimiento sobre el desarrollo, lo que ha implicado no sólo el ordenamiento de las poblaciones sino la reconfiguración de los espacios. La implantación territorial del Estado-nación moderno bajo la matriz de poder de la colonialidad.

Al respecto, nos parece importante retomar la reflexión que se ha dado en Colombia sobre los procesos de discriminación y subalternización de las comunidades socio-racialmente diferenciadas, como pueden ser la población originaria o la población afrodescendiente, a través de la reconfiguración de los territorios. Este proceso alude a la racialización de la geografía nacional que confina o expulsa a los márgenes a estas comunidades a través de mecanismos coercitivos y violentos, generalmente asociados a la imposición de las políticas de desarrollo. Es el caso de los monocultivos como el de caña de azúcar o de palma africana que ocupan los territorios desplazando a las comunidades de sus territorios ancestrales a las zonas de laderas.

La conformación de estas geografías racializadas se relaciona con la jerarquización biológica del pensamiento occidental, y con los discursos y representaciones del desarrollo que sitúa a estas comunidades y los lugares que ocupan con el atraso y el subdesarrollo (García A. , 2009).

Este argumento sustenta la intervención en sus territorios desde la idea de espacios vacíos, contenedores de “recursos”, dispuestos a ser explotados y mercantilizados obviando cualquier forma de organización, gestión del territorio y de reproducción de la vida de las comunidades. En el caso de Colombia, es aún más complejo en la medida en que el conflicto armado ha sido funcional para la implementación de los diferentes modelos de desarrollo, no solo por la utilización de la violencia para el control de los territorios y poblaciones, sino porque los sectores dominantes han utilizado la criminalización de los sectores populares para desvalorizar sus propuestas societales, así como para justificar la intervención a través de políticas y planes de desarrollo territorial que no se corresponden con las demandas de las comunidades¹⁶⁶.

¹⁶⁶ Arturo Escobar (2014a) señala que los procesos de ocupación de los territorios llevados a cabo por organizaciones estatales o por actores económicos se justifican con el discurso del “progreso”, del “orden” y de la “seguridad”. Este discurso generalmente conlleva a la utilización de medios coercitivos, que producen una desterritorialización de las comunidades rurales que habitan espacios ricos en biodiversidad y en “recursos” naturales, necesarios para alimentar el modelo extractivo. Las acciones de ocupación producen la aniquilación de esos “otros” mundos, en la medida que las comunidades son expulsadas de sus territorios. El desplazamiento de las poblaciones significa no solo la

3.3.1. La desvalorización de los sectores populares bajo el discurso desarrollista

Escobar (1996b [1995]) señala como “el “subdesarrollo” se convirtió en sujeto de tecnologías políticas que buscaban su erradicación de la faz de la tierra pero que terminaron multiplicándolo hasta el infinito” (p. 97). De esta manera, la condición de “subdesarrollo” se convirtió en el argumento perfecto para introducir políticas que resultaron invasivas para las poblaciones, en la medida que desconocieron sus propias dinámicas, sociales y culturales. Los programas asistencialistas son un claro ejemplo, en la medida que “dar” a los que no “poseen” bajo una lógica paternalista terminó infantilizando a los sectores populares y generando una suerte de tecnologías que normalizaron las intervenciones desarrollistas¹⁶⁷.

En la búsqueda de alternativas a la hegemonía de la razón tecno-científica y a los discursos del desarrollo, Arturo Escobar plantea la necesidad de abordar los procesos populares desde la visión propia de los actores subalternos y no desde las lógicas del capital y de la modernidad. En este sentido, señala la relevancia de comprender cómo se han construido los modelos locales de subsistencia.

El autor a partir de los aportes de Renajit Guha, se remite a la importancia de comprender estos procesos en el marco de las tensiones y las relaciones conflictivas con el modelo dominante, entendiendo que no existen en estado puro, sino que son producto de complejas hibridaciones y

eliminación de las formas de sustento material sino la desarticulación de las relaciones sociales y culturales, por consiguiente, de la reproducción de la vida.

¹⁶⁷ Para el caso de Colombia, encontramos como ejemplo de políticas asistencialistas focalizadas en los sectores con mayores niveles de pobreza, el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) creado durante el gobierno de Belisario Betancur (1982 – 1986) y que tuvo continuidad en el mandato de Virgilio Barco (1986 – 1990). El PNR se implementó en el marco de las negociaciones de paz con movimientos insurgentes y como parte de una estrategia de paz para la intervención en las regiones con mayores niveles de violencia. Sin embargo, en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se produjo una mayor profundización de este tipo de políticas, así como una instrumentalización radical de las mismas. A través de la creación de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Rehabilitación se recogió la herencia de gobiernos anteriores en relación con la focalización de políticas y se amplió el programa Familias en Acción. Es importante destacar que una pieza fundamental de esta estrategia la constituyeron los “Consejos Comunitarios”, espacios semanales en donde el gobierno con el presidente a la cabeza, se trasladaba a las regiones para presidir reuniones abiertas con diferentes actores locales, en donde se asignaban recursos principalmente asociados con este tipo de programas. Una de las cuestiones más controvertidas era que esa asignación del gasto no pasaba por un proceso de planificación previa y realmente participativo. Así, terminó reforzando a ciertas las élites locales afines al gobierno a la vez que incrementó el carácter centralista y presidencialista del sistema político colombiano. El tono utilizado en los “Consejos Comunitarios” era de carácter paternalista, a la vez que estigmatizaba a los sectores que planteaban posiciones opuestas al gobierno creando un discurso único acerca de las diferentes problemáticas del país, así como las causas de la violencia y el conflicto armado y, por supuesto, las políticas adecuadas para generar desarrollo territorial. Programas como Familias en Acción no resolvieron los problemas estructurales causantes de la pobreza y la desigualdad y si reforzaron redes clientelares regionales.

superposiciones con el mismo. De esta manera, se aleja de aquellas concepciones que tienden a idealizar las prácticas de los actores populares. Posición que compartimos en esta tesis debido a que los actores populares, en particular, el campesinado, los indígenas y los afrodescendientes, se constituyen como sujetos políticos y sociales en las tensiones existentes con las élites dominantes. En este “juego” de centros y periferias, los sectores populares no son sujetos pasivos, aislados, puros. Y, en este sentido, los modelos societales que construyen se alimentan también de la modernidad para la construcción de modelos propios. Al respecto Escobar (1996 [1995]) señala:

“el centro y la periferia emergen entonces no como puntos fijos en el espacio, externos uno al otro, sino como zona en continuo movimiento en la cual las prácticas de hacer conversaciones y economías se entremezclan, cambiando siempre sus posiciones relativas”. (p. 168)

En este sentido, el antropólogo colombiano realiza una apuesta por entender las formas de resistencia locales desde las comunidades de base, frente a las formas dominantes de intervención en los territorios. A partir de los recursos materiales y culturales con los que cuentan. La presencia de modelos económicos híbridos implementados en la escala local es una respuesta y a la vez un producto de los mecanismos que adopta el desarrollo y la modernidad, que alteran la reproducción de la vida de las comunidades. A nuestro juicio, estos elementos deben estar presentes en el análisis de las agendas populares y de las diferentes formas en las que estructuran sus luchas en los territorios, así como en las percepciones de la realidad en donde se establece el sentido de justicia.

De esta manera, cuando se analizan los movimientos sociales populares debe existir un enfoque intermedio, en el que se tengan en cuenta las luchas materiales para la reproducción de la vida, pero también los elementos subjetivos, entendiendo que son ámbitos que se encuentran en constante retroalimentación.

En la lucha del campesinado, Escobar (1994) evidencia estos dos elementos:

Los estudios de la lucha campesina en el contexto de estrategias como el desarrollo rural se han centrado generalmente en la política de tenencia de la tierra y en las rebeliones abiertas para tomar o recobrar tierras. A pesar de la importancia decisiva de este aspecto, debe tenerse en cuenta que la resistencia campesina refleja algo más que la lucha por la tierra y las condiciones de vida; se trata, sobre todo, de una lucha por los símbolos y los significados, de una lucha cultural. (p. 284)

En este punto, es interesante señalar el trabajo realizado por Carlos Salgado (2010), quien afirma que los diferentes modelos de desarrollo rural se han sustentado en la desvalorización relativa del campesinado y de los trabajadores rurales, al no ser considerados como un sujeto apto

para el desarrollo, otorgándoles roles subordinados (aparceros, jornaleros, productores de alimentos baratos). Este reconocimiento no ha sido posible a pesar de los procesos de lucha social con agendas que plantean el derecho a la tierra, al territorio y a la naturaleza.

El autor señala que los pueblos afro e indígena han logrado legislaciones que reconocen su derecho a vivir de acuerdo a sus construcciones culturales y ejercer un control sobre sus territorios, por lo tanto, materializar su territorialidad, al menos en lo que se refiere al aspecto jurídico¹⁶⁸. Reconocimiento que no ha sido alcanzado por el campesinado¹⁶⁹. La reflexión realizada por este autor nos coloca otra vez en un espacio bisagra entre las luchas materiales y culturales de los sectores populares, en una disputa por los imaginarios y por las significaciones, pero también por el control de los territorios, de la naturaleza y de las poblaciones.

En este sentido, la propuesta realizada por Escobar (1996a, 1996b, 2001, 2014a, 2014b) nos sitúa en un contexto específico en donde la conflictividad social también se produce en torno a la disputa por la significación y el control de la naturaleza, de los territorios y de la población, en una fase del modelo neoliberal caracterizado por el “capital ecológico” y las luchas por la biodiversidad mundial. Por tanto, el autor advierte que las tensiones y las luchas entre el capital global con expresiones nacionales, por una parte, y las comunidades locales, en el otro lado, se constituye en el centro de la negociación de los significados del desarrollo y el posdesarrollo¹⁷⁰.

¹⁶⁸ El proceso político constituyente que se inició en 1990 en Colombia y que culminó con la promulgación de la Constitución de 1991 implicó un avance en el reconocimiento de los derechos de las comunidades negras e indígenas del país. En primer lugar, se establece el carácter multiétnico y pluricultural del país, se consignan las circunscripciones especiales para minorías étnicas en el órgano legislativo que serán reglamentadas en la Ley 649 de 2001 y se reconoce que los pueblos indígenas y afro-colombianos son sujetos colectivos de derechos.

¹⁶⁹ Al respecto, uno de los líderes entrevistados en el Putumayo, departamento de frontera con el Ecuador en el que a lo largo de la historia se han producido diferentes oleadas de colonización, señala el imaginario complejo que existe sobre la figura y la identidad del colono. Para este líder el colono generalmente es un campesino que tenía esta identidad desde su territorio de origen o que la ha construido en el devenir de su práctica cotidiana en el nuevo contexto. Ahora bien, el entrevistado señala que la figura del colono ha sido menospreciada tanto por la institución gubernamental como por otros sectores sociales, este imaginario ha llevado a su desvalorización como agente social, y al no reconocimiento de sus derechos. Así lo relata en la entrevista:

Entonces, hay una circunstancia bien tremenda y es que cuando vemos las reivindicaciones de derechos el indígena sale con todo su fuero, respaldado, el afrodescendiente sale con todo su fuero y lo comparan de manera equivocada con el colono y el colono no tiene nada, es que ni existe ese concepto, no existe jurídicamente, en la literatura no he encontrado una definición de colono. Ellos son los más enteramente afectados y con eso que te acabo de decir lo describo en el tema del conflicto, porque sin lugar a dudas una de las raíces del conflicto es el desplazamiento y los colonos van a ser más fáciles de desplazar. (E10. Fundación Ecotono Putumayo, 2010)

¹⁷⁰ Para Escobar el posdesarrollo se relaciona con:

- la posibilidad de crear diferentes discursos y representaciones no tan mediados por el lenguaje del desarrollo;
- por lo tanto, la necesidad de cambiar las prácticas de saber y hacer que definen al régimen del desarrollo;
- visibilizar las formas de conocimiento producidas por aquellos vistos como los “objetos” del desarrollo para que puedan transformarse en sujetos;

Ahora bien, las diferentes formas que adquieren las resistencias populares al capitalismo, así como la diversidad en las luchas por la defensa del territorio, de la tierra, del agua, las semillas, del paisaje, de lo común; ponen evidencia “la crisis del Mundo-Uno: moderno/capitalista, secular, racional y liberal con su insistencia en la ilusión del “progreso” y el “desarrollo”, en el que el consumo individual y la competitividad del mercado se convierten en la norma y medida del actuar humano” (Escobar, 2014a, p. 21).

Siguiendo con el argumento de Escobar (1996a), la capitalización de la naturaleza se produce a través de dispositivos tanto materiales como simbólicos utilizados en función de las necesidades del mercado, las cuales se plantean en términos fundamentales para la reproducción de la vida y del progreso, “mediante un nuevo proceso de privatización, resultado en primer lugar de un cambio en la representación, aspectos antes no capitalizados de la naturaleza y la sociedad se vuelven, en sí mismos, inherentes al capital. Se convierten en stocks de capital”¹⁷¹ (p. 334). De tal manera, el autor señala la existencia de dos lógicas de capital ecológico, a saber:

Primero, las formas modernas de explotación de la naturaleza relacionadas con la extracción continuada y generalmente insostenible de los recursos naturales; segundo, las formas posmodernas de capitalización de la naturaleza que conducen a una fase ecológica de conservación y desarrollo sostenible. (Escobar, 1996a, p. 48)

Las formas posmodernas de capitalización sustentan sus discursos en la articulación entre la gobernanza de los recursos, el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad lo que les ha permitido legitimar los procesos de intervención territorial, el control de la tierra y la apropiación de la naturaleza. Tales discursos se estructuran en los espacios de representación, se normalizan a través de las prácticas espaciales y se encuentran en tensión con las representaciones del espacio. Estas últimas construidas a partir de las relaciones cotidianas, de los códigos y símbolos de las comunidades locales y que se expresan en las diferentes formas de percibir y relacionarse con el lugar y el territorio, que se concretan a su vez en distintas territorialidades, en el sentido expuesto por Raffestin.

Estamos de acuerdo con Escobar (1996 [1995]) cuando plantea que los movimientos sociales populares y las comunidades locales se encuentran ante un nuevo desafío que se manifiesta

-
- dos maneras especialmente útiles de lograr esto son: primero, enfocarse en las adaptaciones, subversiones y resistencias que las gentes locales efectúan en relación a las intervenciones del desarrollo; y segundo, destacar las estrategias producidas por movimientos sociales al encontrarse con proyectos de desarrollo (Escobar, 2014b, p. 193).

¹⁷¹ Traducción propia.

en un doble sentido: por una parte, “construir racionalidades y alternativas estratégicas de producción” y por otra “la de resistirse semióticamente a las incursiones de las nuevas formas de capital en el tejido de la naturaleza y la cultura” (p. 335).

Este desafío se relaciona también con las diferentes posiciones que adoptan los movimientos sociales. Al analizar sus agendas vemos que algunos se mueven en la línea de plantear estrategias alternativas de desarrollo, pero otros plantean una nueva episteme, es decir, alternativas al desarrollo. Estas diferencias se relacionan entre otros factores con un elemento que hemos repetido en varias ocasiones, los movimientos sociales y populares no son actores homogéneos, al interior también se presentan disputas por el horizonte de sentido de sus luchas. Por otra parte, las acciones contenciosas que están marcadas por el lugar y el contexto temporal desde el cual las construyen.

Ahora bien, desde las alternativas al desarrollo, irrumpe en América Latina las ideas del Buen Vivir/ Vivir Bien¹⁷², como horizonte de sentido del movimiento indígena pero que ha sido resignificado por otros actores populares.

El Buen Vivir/Vivir Bien implica sin duda un fuerte cuestionamiento al pensamiento occidental del desarrollo (Acosta & Gudynas, 2011). “El Buen Vivir cuestiona el concepto eurocéntrico de bienestar y, en tanto propuesta de lucha, enfrenta la colonialidad del poder”, y plantea una perspectiva contrahegemónica “que subvierta el discurso y sus correspondientes prácticas de dominación, a la vez que genere nuevas reglas y prácticas, cuyo éxito dependerá de la capacidad de pensar, de proponer, de actuar, en fin de indignarnos incluso globalmente” (Acosta, 2012, p. 28). Por tanto, el Buen Vivir/Vivir Bien debe comprenderse en el marco de un abanico amplio de: “innovaciones pioneras, incluyendo el replanteamiento del Estado en términos de plurinacionalidad, de la sociedad en términos de interculturalidad, una noción amplia e integral de los derechos y un modelo de desarrollo reformado, cuyo objetivo es precisamente la realización del BV” (Escobar, 2014, p. 44).

Ahora bien, el nuevo ciclo de acumulación centrado en la apropiación de la naturaleza y del control de los territorios ha generado la irrupción de discursos como el pluralismo cultural, la

¹⁷²El movimiento indígena boliviano lo nombra como Buen Vivir o sumak kawsay (en kichwa). En el Ecuador lo entienden como Vivir Bien o suma qamaña (en aymara). Los dos principios fueron incorporados a los textos constitucionales promulgados en el año 2009 y en el 2008, respectivamente. Los procesos constituyentes que dieron lugar a nuevos marcos constitucionales son producto de profundas crisis institucionales, de legitimidad de los gobiernos y de amplias movilizaciones sociales en donde los indígenas fueron protagonistas.

biodiversidad y la etnicidad, los cuales pueden representar ventanas de oportunidad para la construcción de alternativas de organización social desde las visiones populares. En este sentido, Escobar (1996a, 1996b, 2001, 2014a, 2014b) señala que los repertorios organizativos de los movimientos parecen moverse sobre dos principios: la diferencia cultural y la valoración de oportunidades económicas sustentadas en lógicas alejadas de la mercantilización.

3.4. La política cultural de los movimientos sociales populares latinoamericanos

En este apartado del documento, retomamos las tesis planteadas principalmente por Arturo Escobar, Evelina Dagnino y Sonia Álvarez, en el estudio de la relación entre las dimensiones culturales y políticas dadas en la acción desarrollada por los movimientos sociales populares en América Latina. Los aportes realizados por estos autores contribuyen a la comprensión de las dinámicas de los movimientos de la región. Y, desde nuestro punto de vista, se enmarcan en los procesos teórico/prácticos que producen una renovación epistémica manifiesta en las alternativas al desarrollo y a la modernidad, así como a las lógicas de resignificación de lo común y de lo que se ha denominado como el pluriverso. Es decir, las epistemes que se encuentran “al otro lado de la línea” del pensamiento abismal. Las epistemologías del Sur, en palabras de Boaventura de Souza Santos.

Por otra parte, nos parece que la reflexión de la política cultural se articula con los planteamientos de Lefebvre y de Raffestin, en la medida que se construye a partir de las prácticas rutinarias de los agentes en relación en/con el espacio.

Lefebvre controvierte las teorías espaciales sustentadas en la modernidad, evidencia los conflictos y las relaciones de poder que subyacen, a partir de su aporte de la dialéctica del espacio. La modernidad, el desarrollo y el capitalismo a través del discurso y la práctica crean/producen/modifican y se apropian del espacio que se transforma en territorio.

Precisamente, para Raffestin el territorio es producto de la interacción de los actores, los cuales crean diferentes realidades en el marco de un primer hecho, que es el espacio. Por tanto, en el territorio se manifiestan diversas relaciones de poder que se materializan en tejidos, redes y centralizaciones que son cambiantes y dinámicas. Estas interacciones son las que intervienen en la producción cultural de los movimientos sociales. En los aportes de Escobar, la política cultural deviene de su relación con el espacio a través del lugar, entendiendo que este se constituye en una

fuerza de cultura e identidad, que es relocalizada por las prácticas simbólicas y materiales de los movimientos, en contraposición de la dominante “des-localización de la vida social” (Escobar, 2018, p. 25).

Las premisas planteadas por Escobar, Dagnino y Álvarez, provenientes de la antropología y de la ciencia política tienen como objetivo superar la fragmentación existente entre la cultura y la política, y revalorizar los aspectos culturales presentes en la acción colectiva. Durante la década de los ochenta y los noventa, la dimensión cultural fue en cierto sentido marginal en la mayoría de los análisis, debido a la proliferación de estudios referidos a los aspectos más formales de la política, en particular, relacionados principalmente con sistemas electorales y de representación. Estos enfoques se deben en gran medida a los procesos de redemocratización acaecidos en un número importante de países del continente latinoamericano.

Las dimensiones políticas de lo cultural, planteadas por estos tres académicos, sirven de sustento analítico para el desarrollo de los objetivos e hipótesis de la presente tesis. En tanto sus elaboraciones conceptuales abordan la forma en que las luchas “culturales”, de los movimientos populares, se articulan y son sustento del reconocimiento de las diferencias y de los derechos asociados al territorio y a la naturaleza.

La reflexión se enmarca en la necesidad de repensar y ampliar categorías conceptuales desarrolladas en las teorías culturales predominantes en Europa y Estados Unidos y construir un enfoque desde la realidad latinoamericana, a partir de la acción política de los actores sociales populares. Perspectivas que nos ayudan a la comprensión de las dinámicas de los movimientos en su confrontación con las representaciones hegemónicas, en el marco de la lógica neoliberal, entendida como un sistema cultural y político con implicaciones económicas y no solo como un modelo económico con efectos sobre lo político.

Los autores parten de la premisa, la cual compartimos, que el modelo neoliberal implementado a través de los programas de ajuste social y económico en la región han provocado, de manera intencional, una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad que implica una redefinición de lo político. El Estado se transforma en un regulador de las relaciones con el objetivo de permitir el funcionamiento del mercado sin contratiempos, bajo una transnacionalización de políticas y procesos sociales.

Frente a este modelo hegemónico, los movimientos sociales populares en la región han planteado a través de su acción política subvertir el orden dominante y/o una parte del mismo. Así

como generar estrategias políticas para colocar en el debate social sus marcos de sentido a partir de significados renovados de ejercicio de la ciudadanía.

En muchos casos, las luchas democráticas emprendidas por los movimientos populares desbordan los límites de la institucionalidad política e implican formas alternativas de organización social a partir de modelos de acción local. Estos modelos buscan disminuir las desigualdades sociales estructuradas a partir de la clase, la raza o el género, profundamente determinadas por prácticas culturales y sociales. Esta concepción ampliada permite entrever el potencial democratizante de los movimientos, así como comprender que el proceso de construcción de la democracia no es homogéneo en todos los campos y ámbitos sociales (Escobar et.al., 2001, p. 18). Las sociedades latinoamericanas se caracterizan por una profunda brecha entre diferentes grupos que se agudiza en función del territorio en el que habitan y de los recursos de los que disponen.

Al respecto Evelina Dagnino (2002) desarrolla una hipótesis que nos parece llamativa para entender el significado y el alcance de las agendas de los movimientos. El planteamiento va mucho más allá de interpretaciones que consideran las agendas como una simple articulación de demandas. La autora aborda el concepto de proyectos políticos, en un sentido cercano a Gramsci, para designar los conjuntos de propuestas, intereses, creencias y representaciones acerca de la realidad y del deber ser de una sociedad que orienta la acción política de los actores.

Dagnino señala que la virtud de este concepto se refiere a que pone de relieve la relación intrínseca que se establece entre cultura y política, al no reducir los proyectos a estrategias de actuación política en un sentido estricto, sino que manifiestan, extienden y construyen significados que integran matrices culturales más amplias. Esta noción permite configurar la disputa política entre diferentes modelos societales y develar los diferentes significados que se encuentran detrás de los mismos, así como los que se ocultan. De esta manera, las agendas de los movimientos, la transición de la reivindicación a las políticas públicas con un enfoque popular y la reconceptualización de categorías como ciudadanía, participación, desarrollo o territorio, entre otras muchas, permite descubrir que su acción trasciende el campo político (entendido de manera tradicional) y pone de manifiesto las fuertes raíces culturales.

Estamos de acuerdo cuando Dagnino señala que, los movimientos sociales y la acción de los sujetos populares han desempeñado un papel trascendental en la renovación teórica y política que se presenta como una respuesta a los procesos sociales, tanto en América Latina como a nivel

global, y a los desafíos y las dificultades que ha tenido la práctica política de izquierda en el continente.

Los actores sociales populares han suscitado nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos y nuevas formas de interpretar, percibir y reaccionar frente a las transformaciones de las dinámicas de acumulación de capital, así como a los diferentes dispositivos utilizados para la normalización de las políticas de desarrollo implementadas en los territorios. En definitiva, los actores populares construyen renovadas lecturas de la realidad sobre las cuales estructuran sus luchas. Estas luchas “no aspiran a tomar el poder; sino a reorganizar la sociedad sobre la base de las autonomías locales y regionales, y que se caracterizan por la activación de relaciones sociales y formas de organización no capitalistas y no liberales” (Escobar, 2014, p. 53).

De esta manera, la propuesta analítica de la política cultural de los movimientos, elaborada por Álvarez, Dagnino y Escobar, rompe las visiones tradicionales de entender la categoría cultural. En este sentido, toma distancia de aquellas reflexiones estáticas, apegadas al análisis de formas textuales, industrias culturales, cánones, etc. Y, transitan hacia una visión mucho más compleja de la cultura entendida no como un compartimento estanco de la acción de los sujetos y grupos sociales, sino una dimensión de las instituciones sociales, políticas y económicas. De esta manera, los autores abordan la cultura como una dimensión que comprende los procesos colectivos mediante los cuales se construyen los significados, subjetividades y valores que se relacionan, interactúan, cuestionan el orden social y que configuran las relaciones sociales.

En la apuesta de los autores, la cultura se relaciona con el poder, que es entendido “como una relación social difundida en todos los espacios”, y no como “bloques de estructuras institucionales con tareas preestablecidas y fijas (dominar, manipular)” (Escobar et ál., 2001, p. 31). Esta perspectiva es complementaria a la visión de Raffestin y Lefebvre presentada en este documento.

Por tanto, existe una imbricación entre la cultura, la política y la economía en el marco de la comprensión de la sociedad como un todo en donde existe una equivalencia entre fuerzas materiales y elementos culturales. Este enfoque gramsciano de la relación entre política y cultura como intersticio entre una visión renovada del marxismo y de la construcción y fortalecimiento de la democracia, ha permitido avanzar hacia un análisis más complejo de las dinámicas sociales presentes en Latinoamérica (Dagnino 2001 [1998], p. 60). En este sentido, Escobar, Dagnino y Álvarez interpretan la política cultural como:

El proceso que se desata cuando entran en conflicto conjuntos de actores sociales que a la vez que encarnan diferentes significados y prácticas culturales, han sido moldeados por ellos. En esta definición se presupone que significados y prácticas – especialmente aquellos que, en virtud de la teoría, se han considerado marginales, de oposición, minoritarios, residuales, emergentes, alternativos, disidentes y similares, todos en relación con un orden cultural predominante determinado- pueden originar procesos cuyo carácter político debe necesariamente ser aceptado. El hecho de que raramente se acepten como políticos es más un reflejo de definiciones arraigadas y ancladas en culturas políticas dominantes, que un indicador de la fuerza social, la eficacia política o la relevancia epistemológica de la política cultural. La cultura es política porque los significados son elementos constitutivos de procesos que, implícita o explícitamente, buscan dar nuevas definiciones de poder social. Es decir, cuando los movimientos despliegan conceptos alternativos de mujer, naturaleza, raza, economía, democracia o ciudadanía, las cuales desestabilizan significados culturales dominantes, ponen en marcha una política cultural. (Escobar et al., 2001, p. 26)

David Slater (2001) señala que, precisamente, la puesta en juego de nuevos significados e interpretaciones por parte de los movimientos sociales contemporáneos, representa un desafío y una ampliación de las fronteras de lo que es considerado como político. Para este autor, los movimientos pueden tener la posibilidad de subvertir, tanto los parámetros habituales del sistema político a través del cuestionamiento de la legitimidad y del impacto natural sobre la sociedad, como poner de manifiesto los significados ocultos presentes en lo social. De esta manera, Slater manifiesta que las luchas sociales pueden ser percibidas como “guerras de interpretación”, en donde la orientación y significación de las demandas y reivindicaciones se desarrollan a través de su práctica política (Slater, 2001, p. 418).

Precisamente, la visión de política cultural se refiere a su potencialidad para retar o desestabilizar culturas políticas dominantes, en particular, aquello que se cuenta como “político” en una sociedad determinada. El espacio de la cultura política es el de las prácticas, las instituciones, constituidas a partir de la totalidad de la realidad social y que, históricamente, llegan a ser consideradas como apropiadamente políticas (Escobar et al., pp. 26-27).

Los movimientos logran desafiar la cultura política dominante, en el momento en el que logran que sus marcos de justicia se sitúen en un horizonte más lejano que el reconocimiento institucional o material de sus reivindicaciones. Es decir, cuando sus interpretaciones encuentran resonancia en otros sectores o grupos de la sociedad y logran poner en el debate público, cuestionamientos que evidencian las diferencias culturales hasta el momento consideradas como marginales. Esta acción de los movimientos debe ser considerada como política, en tanto se manifiesta una disputa de poder en el campo de lo social y de lo político. Por tanto, “si los

movimientos sociales tienen el objetivo de modificar el poder social, y si la cultura también involucra campos institucionalizados para la negociación del poder, entonces los movimientos sociales están necesariamente en pugna con el asunto de la cultura política” (Escobar et al., 2001, p. 27).

Por otra parte, el concepto de política cultural remite a una relación clara entre la política de representación, el ejercicio del poder y las formas de resistencia que se generan como reacción al mismo. La imbricación de estos tres elementos se evidencia en la política cultural de actores populares que no tienen específicamente demandas culturales. Los movimientos caracterizados por luchas relacionadas con reivindicaciones materiales como pueden ser los movimientos campesinos, urbanos, obreros, cívicos, solidarios, etc. también despliegan un fuerte componente cultural. En sus luchas en contra del modelo hegemónico neoliberal y de las desigualdades sociales despliegan un conjunto variado de significados y representaciones, de esta manera, las identidades y estrategias colectivas están intrínsecamente unidas a la cultura y es evidente cuando los movimientos “intervienen en los debates sobre políticas, cuando intentan otorgar nuevos significados a las interpretaciones culturales dominantes de la política, o cuando desafían políticas predominantes” (Escobar, 2001, pp. 24-25).

Esta observación nos lleva a otro debate que perfilamos en apartados anteriores. Para el caso latinoamericano, la división entre nuevos y viejos movimientos sociales no es tan clara como en los contextos europeos o estadounidense. Desde nuestro punto de vista, es necesario reflexionar acerca de las percepciones y significaciones construidas por los movimientos en términos de quiebres y continuidades que respondan a cuestionamientos acerca del origen de sus reivindicaciones. Existe una continuidad de las políticas de clase, los conceptos de desarrollo, ciudadanía y democracia representan una novedad frente a las posturas tradicionales de los actores populares, su acción política se encuentra en muchos casos estructurada en clave de emancipación social.

La reflexión acerca de estos elementos nos lleva a señalar, tal y como lo señala Escobar (2001 [1998]) que los movimientos no necesariamente plantean la inclusión en la cultura política dominante ni la conquista del poder. Sus objetivos y/o la acción política que desarrollan se enfocan hacia la transformación y el cuestionamiento de las formas de ejercicio del poder. Asimismo, plantean formas alternativas a la modernidad al construir lecturas renovadas acerca de categorías

que se consideran dadas por la cultura política dominante como el desarrollo, el género, la ciudadanía, la igualdad, la diferencia, etc.

Los movimientos pueden llegar a construir otras maneras de nombrar, de concebir lo “político” y la “política” que superan los lineamientos de la cultura occidental dominante, que se ha esforzado por ocultar esos “otros” saberes contruidos en los márgenes de la sociedad y que, durante muchas décadas, han sido “silenciados” por modelos políticos y económicos sustentados en relaciones jerárquicas y desiguales. En donde lo público y lo político era considerado un asunto concerniente a determinados grupos sociales, políticos y/o económicos.

Por otra parte, nos parece importante retomar algunos elementos destacados por Mary Louise Pratt (2001) acerca de la relevancia de la apuesta cultural en la reflexión de los movimientos sociales latinoamericanos. En primer lugar, el análisis acerca de la política cultural permite ampliar el debate acerca de la democracia y la desigualdad en el continente que ha sido vaciada de contenido por el discurso neoliberal, tratando de restringir su desarrollo a las prácticas vinculadas a la política de representación con algunos atisbos de incorporación de democracia directa tutelados institucionalmente.

Segundo, la categoría cultural permite acercarnos al espacio cotidiano como punto de partida para el análisis de los movimientos sociales, ya que es en la cotidianidad en donde se manifiesta claramente las circunstancias que son consideradas injustas y que dan origen a las reivindicaciones de los movimientos. La cultura también nos permite abordar la escala de la experiencia que opera sobre la constitución del deseo y la acción humana.

En tercer lugar, la categoría cultural nos permite hablar acerca de los patrones de conciencia como parte de la cultura política. Las situaciones violentas o desiguales adquieren un significado para los sujetos en la medida que aseguran su docilidad o construyen resistencia. Finalmente, la categoría de lo cultural nos habilita para analizar el neoliberalismo, no solo como un modelo económico, sino como un modelo político y cultural que crea categorías de pertenencia, formas de acción, estructuras de posibilidad, reorganiza los espacios cotidianos y formas de relacionamiento entre las comunidades, construye agendas políticas y legitima desigualdades (pp. 443-444).

3.4.1. Ontología moderna versus ontología relacional

El análisis realizado en esta tesis pretende, precisamente, evidenciar esas interpretaciones y significados contruidos por los agentes populares acerca de los conflictos presentes en sus territorios, que en muchos casos divergen del discurso oficial, plantean nuevos caminos para repensar y entender los conflictos desde otras miradas que generalmente han sido estigmatizadas por las élites políticas y económicas. Y, opacadas por los discursos provenientes del centro sin tener en cuenta las características particulares de las regiones.

Al respecto, nos parece interesante señalar que la interacción entre esas miradas hegemónicas y contrahegemónicas, tiene raíces mucho más profundas y se enmarca en las tensiones entre esa ontología moderna “llamada dualista pues se basa en la separación tajante entre naturaleza y cultura, mente y cuerpo, occidente y el resto, etc.” (Escobar, 2014a, p. 57), que a través de las prácticas estructura realidades y espacios¹⁷³. La separación entre lo social y lo político, el hombre y la naturaleza organiza la reproducción material a partir de las premisas de espacios vacíos y homogéneos, negando el carácter diverso de la vida. Y, en el otro lado, las ontologías relacionales consideradas como “aquellas en las cuales los mundos biofísicos, humanos y supernaturales no se consideran como entidades separadas, sino que se establecen vínculos de continuidad entre estos” (Escobar, 2014a, p. 58).

Las ontologías relacionales se sustentan en un principio básico y “nada (ninguna entidad) pre-existe a las relaciones que la constituyen” (Escobar, 2014a, p. 101). Por tanto, esta forma de concebir el mundo, subyace a esa política cultural de los movimientos populares y se encuentra

¹⁷³ Asumimos el concepto de ontología desarrollado por Escobar a partir del trabajo de Blaser. La ontología consta de tres niveles. El primer nivel tiene que ver con las premisas que diferentes grupos sociales construyen sobre las entidades que realmente existen en el mundo. En el caso de la ontología moderna, se presentan las entidades como dicotómicas y separadas: “individuo” y comunidad”, “cuerpo” y “mente”, entre otras. Desde esta lógica, existen “individuos” que utilizan “objetos” con mayor o menor eficacia. Para la ontología relacional, estas premisas diferenciadas no existen. El segundo nivel, se remite a que las ontologías no existen solamente en el campo de la representación y/o de los imaginarios, sino que generan prácticas que son concretas. Al igual que la idea de apropiación simbólica del espacio, que construye territorios. El tercer nivel, se remite a las narrativas que constituyen las ontologías y a través de las cuales se recrean las premisas que las sustentan. Estas ontologías tendrán una connotación política en la medida que se desarrollan en campos de poder, caracterizados por relaciones asimétricas. Las diversas visiones del mundo entraran en conflicto por la existencia y el desarrollo de sus proyectos. En este sentido, Escobar señala la ontología política y la práctica política ontológica, esta última se encuentra estrechamente relacionada con el concepto de política cultural que señalamos anteriormente (Escobar, 2014a, pp. 95-97).

presente en esos entramados comunitarios que desarrollan otras maneras de reproducción de la vida¹⁷⁴.

En las ontologías relacionales, los territorios son “espacios-tiempos vitales de interrelación con el mundo natural” (Escobar, 2014a, p. 59). Precisamente, estas epistemes son las que estructuran ese pluriverso, en el que cohabitan diferentes conocimientos, saberes y prácticas manifiestas en las agendas de los movimientos que terminan explicando y dando una forma más configurada a las alternativas que, desde el territorio, buscan revertir las condiciones que operan subalternidad. Es importante señalar que las ontologías dualistas han puesto la razón tecnológica por encima de las formas de la reproducción de la vida. Los criterios de eficiencia y productividad señalados por la economía-mundo capitalista se imponen a las prácticas de las comunidades de base que intentan mantener bajo el control comunitario la naturaleza (Gudynas, 2013).

Precisamente, son estas formas organizativas las que les han permitido asegurar su supervivencia en los territorios que habitan. En este sentido, las formas comunales de organización implican tres elementos sobre los que volveremos más adelante:

- 1) la permanente relativización de la economía capitalista y la expansión de las empresas comunales y de formas no capitalistas de economía; 2) la relativización de la democracia representativa y su sustitución por formas comunales y formas más directas y horizontales de democracia; y 3) el establecimiento de mecanismos de pluralismo cultural como base para una genuina interculturalidad entre los diversos sistemas culturales. (Escobar, 2014b, p. 198)

Para los movimientos que tienen una base étnico-territorial, las formas comunales de organización representan formas de resistencia frente al extractivismo. La presión que es ejercida sobre sus territorios tiene como finalidad cercar/acabar con esas ontologías relacionales que evidencian diferentes formas en entender el “mundo” y cohabitar, frente a la lógica moderna que

¹⁷⁴ Escobar (2014a) señala que la ontología dualista propia de la episteme occidental y de la lógica del desarrollo es la que subyace, por ejemplo, las separaciones entre “economía” y “alimentación” que sustenta la forma de agricultura del monocultivo frente a las ontologías relacionales que representan formas integrales de concebir la producción, en este caso, plantean formas de cultivo diversificadas propias de la agroecología. Por otra parte, desde nuestra perspectiva, esas ontologías relacionales se pueden observar en los avances de los derechos de la naturaleza que han sido defendidos no solo por las comunidades indígenas sino por las comunidades negras, campesinas y asumidas por los movimientos socio-ambientales. En el caso de los pueblos originarios se plantea el derecho natural al sustento que tienen todos los seres y especies de la tierra, el cual hace parte de su tradición jurídica. Esta idea tiene un fuerte componente cultural en la medida que se relaciona con el significado de lo que es sagrado para estas comunidades. En esta medida lo cultural tiene un fuerte componente social y jurídico. Estas diferentes visiones hacen parte de lo que se ha denominado el pluriverso. Para ver un estudio detallado de cómo se ha incorporado los derechos de la naturaleza al orden constitucional consultar el libro de Eduardo Gudynas (2016) *Derechos de la naturaleza: ética biocéntrica y políticas ambientales*.

marca una sola forma válida de vivir, la liberal/individual. De esta manera, se convierten en luchas por la defensa de muchas formas de entender la vida y la organización material de la misma.

Esta diversidad de proyectos societales son manifiestos en esos espacios vividos, que se expresan a través de imágenes y símbolos (códigos, signos, espacios simbólicos, espacios de utopías, etc.) que proyectan nuevos significados o posibilidades de las prácticas espaciales. Estos espacios vividos se suelen encontrar en tensión con los espacios concebidos. Tensión manifiesta entre los proyectos extractivos y las formas de organización de las comunidades, la cual puede ser entendida como una relación conflictiva por la imposición de proyectos territoriales que ordenan el espacio.

Al respecto, recordar a Raffestin (2018 [1984]), cuando señala que el acto de apropiación se inscribe en un campo de poder. Los proyectos que se quieran desarrollar sobre el espacio implican un conocimiento y una práctica. Los cuales requieren un sistema sémico para llevar a cabo la objetivación del espacio. En este sentido, el autor se refiere a un espacio construido a través de la representación, que lleva también a una intervención material, a una territorialización de sus objetivos.

No obstante, nos parece importante señalar la visión planteada por Arturo Escobar (2014a, 2014b) o de Humberto Maturana (2005), cuando plantean que la relación con la naturaleza o con el mundo no-humano se sustenta en un flujo constante de relaciones en donde se aleja de las construcciones binarias sustentadas en las separaciones entre “cuerpo” y “mente” o “sujeto” y “naturaleza”, entre otras. En este sentido, el espacio no es ajeno al sujeto, precisamente hace parte de la totalidad social. Por otra parte, la deconstrucción de estas formas dicotómicas de entender el mundo se evidencia en muchos de los discursos de los sujetos subalternos. En este sentido, la recuperación de una ontología relacional pasa por una descolonización epistémica como apunta Catherine Walsh (2008) cuando señala:

[los movimientos políticos socio-ancestrales] Son reflejo y manifestación de su insurgencia política que es, a la vez, una insurgencia epistémica; epistémica no solo por cuestionar, desafiar y enfrentar las estructuras dominantes del Estado –las que sostienen el capitalismo y los intereses de la oligarquía y del mercado– sino también por poner en escena lógicas, racionalidades y conocimientos distintos que hacen pensar el Estado y la sociedad de manera radicalmente distinta. (p. 134)

De tal manera, podemos inferir que algunos de los conflictos sociales, ambientales y la disputa por el control del territorio y de la naturaleza en América Latina, en particular en Colombia,

se pueden enmarcar en las tensiones existentes entre estas dos ontologías (dualista y relacional). Es importante señalar, que no pretendemos ubicar todos los procesos de movilización social popular en los límites de transgresión del sistema o en el cambio del paradigma del desarrollo.

Ahora bien, los procesos populares pueden abarcar desde una forma organizativa territorial propia que responda a las creencias, costumbres y necesidades de la comunidad, planes para el autoabastecimiento alimentario y los mercados populares, las iniciativas de soberanía y seguridad alimentaria hasta las formas asociativas urbanas (barriales y cívicas) para proveerse de los recursos necesarios para tener una vida digna.

Al respecto, es interesante el trabajo realizado en Colombia por el Proyecto Planeta Paz, que acompaña a los sectores sociales populares y con el cual he tenido la fortuna de colaborar. Una de sus líneas de trabajo ha sido precisamente identificar y sistematizar las experiencias de construcción de paz e iniciativas de política pública, realizadas por diferentes actores populares en diferentes regiones del país. Este trabajo se desarrolla bajo la premisa que:

dichas iniciativas, en tanto colectivas, notorias, consistentes y sostenidas, se constituyen en verdaderas políticas públicas que le disputan el sentido a un modelo de desarrollo que leen como poco equitativo e intentan transformar los conflictos que se reproducen a partir de sus dimensiones excluyentes y favorecedoras de la acumulación por despojo. (Planeta Paz, 2012, pág. 7)

En el documento *Propuestas populares de política pública para la construcción de la paz* se evidencia la forma en que los sectores populares desbordan los márgenes de lo que es considerado como político y público, a través de la descripción y análisis de cinco experiencias en las que confluyen diferentes actores y sujetos populares. A continuación, describiremos algunas de ellas, ya que nos parece relevante para comprender las dinámicas del movimiento popular.

En las propuestas por la diversidad étnica y cultural se destaca el Sistema Normativo elaborado por la comunidad indígena Wayúu, que busca fortalecer el derecho Wayúu representado por el Palabrero¹⁷⁵ mediante un proceso comunitario propio que consolide la autonomía y revitalice los contenidos del universo mítico-histórico de la etnia. Este Plan es un aporte desde la reflexión colectiva en torno a la diversidad cultural y la construcción de tejidos sociales para la paz a través de la Palabra.

¹⁷⁵ El palabrero dentro de la comunidad indígena Wayúu es reconocido como una autoridad moral, social y cultural, su principal misión es preservar la vida, “llevando la palabra” utiliza su cultivado poder de persuasión para mediar en las disputas entre clanes y grupos familiares.

El Plan especial de salvaguarda de Zonas de reserva campesina y territorios interculturales en Montes de María, el cual es de especial relevancia ya que es producto de experiencias de resistencia popular ante el continuo asedio de los actores armados legales e ilegales y actores económicos que buscan el control de los recursos y del territorio. Las propuestas territoriales que se incluyen en el Plan, se realizan en el marco del debate de los modelos de desarrollo rural y agrario. Particularmente, estas propuestas son el resultado de un trabajo articulado con organizaciones de mujeres, jóvenes, organizaciones campesinas, consejos comunitarios y cabildos indígenas de Montes de María, en una clara apuesta por la inclusión y la interculturalidad, y en la perspectiva de garantizar los derechos humanos y la permanencia digna en el territorio.” (Planeta Paz, 2012, p. 65).

En las propuestas de política pública popular desarrolladas en la ciudad de Bogotá, se destaca la propuesta de enfoque de ordenamiento territorial del Proceso Popular Asamblea Sur denominada “Agrópolis constelar campesina”. La Agrópolis es entendida como un pacto territorial entre diferentes procesos populares de la zona sur de Bogotá, para trabajar de manera colectiva en un enfoque de desarrollo que tuviera en cuenta la “campesinidad” como eje fundamental para aplicar en los territorios conectores campo-ciudad y de vida campesina.

Finalmente, en las iniciativas populares en torno a la soberanía y seguridad alimentaria se aborda la experiencia de política pública “Salsa” del departamento de Boyacá. En este espacio confluyen el Ecofondo Regional Boyacá y los miembros de las diferentes comunidades, organizaciones campesinas, académicos e indígenas de los municipios de dicho departamento. Esta iniciativa se construye con base en ocho principios para dialogar con la política pública estatal en torno a la soberanía y a la seguridad alimentaria, teniendo como eje principal la defensa del derecho a la alimentación digna que abarca aspectos como la cantidad, calidad, identidad cultural, gestión y participación comunitaria productiva y autonomía comunitaria, la defensa y recuperación de territorios con vocación agroalimentaria biodiversa y el reconocimiento y la valoración de las culturas campesina e indígena, como sujetos de derechos sociales y políticos.

Estos espacios e iniciativas plantean horizontes de sentido y de justicia que en su mayoría son contrapuestos a la idea de desarrollo y de territorio dominantes. En muchos casos amplían las fronteras de los marcos normativos en vigencia y apuestan por una transformación positiva de los conflictos desde abajo, desde los territorios y desde las comunidades, a través de la construcción de políticas contestatarias que reclaman mayor justicia social, ampliación y reconocimiento pleno

de sus derechos. Estos espacios también se constituyen en “contrapúblicos subalternos” en el sentido planteado por Nancy Fraser: “espacios discursivos paralelos donde los miembros de los grupos sociales subordinados inventan y hacen circular contra-discursos, lo que a su vez les permite formular interpretaciones opuestas de sus identidades, intereses y necesidades” (Fraser, 1992, p. 123).

Como lo apunta Fraser estos espacios surgen en sociedades estratificadas cuyo marco institucional fundamental es proclive al desarrollo de grupos sociales desiguales debido a la existencia de relaciones estructurales de dominación y subordinación. En este contexto los contrapúblicos subalternos tienen una doble dimensión: por una parte, funcionan como espacios de agrupamiento y retiro; y por el otro funcionan como bases y campos de entrenamiento para el desarrollo de políticas contestatarias dirigidas a públicos más amplios. La autora señala que es en la dialéctica de estas dos dimensiones que se desarrolla el carácter emancipatorio. A su vez que permite a los contrapúblicos subalternos eliminar en parte los privilegios injustos de participación disfrutados por los miembros de los grupos sociales dominantes en las sociedades estratificadas (Fraser, 1992).

3.5. Lo común para la reapropiación de la vida

En las últimas décadas en América Latina y en el ámbito internacional se asiste a la recuperación de las nociones de la comunidad, lo comunitario y lo común por parte de movimientos sociales y sectores de la izquierda¹⁷⁶.

La resignificación de estos conceptos y de su práctica social se deriva de la lucha social de agentes colectivos, así como de su reflexión teórica, la cual busca comprender los marcos sobre los cuales se articulan esas subjetividades colectivas que “impugnan los recurrentes y múltiples despojos de los que son objeto” (Gutiérrez, 2017, p. 19). En esta línea, Christian Laval y Pierre Dardot señalan que, la reivindicación de lo común se presenta como el eje de las luchas sociales y

¹⁷⁶ Los trabajos empíricos de la estadounidense Elinor Ostrom (1990) en la década de los noventa fueron claves para el debate sobre los instrumentos jurídicos, las prácticas institucionales y las formas de gestión comunitarias de los recursos compartidos y de los bienes comunes (commons, en inglés) frente a las posturas que consideraban que la gestión de tales bienes debía ser estatal y/o gestionada por agentes privados. Los aportes de Ostrom plantearon otras formas de producción posibles, a partir de las instituciones de la acción colectiva y de la gestión común. Además, es importante resaltar los trabajos posteriores realizados por Michael Hardt y Antonio Negri (2004, 2011), que desde el pensamiento crítico desarrollaron teóricamente el concepto de lo común, en singular.

culturales contra el modelo capitalista y el Estado empresarial¹⁷⁷. Por lo tanto, el valor de lo común radica en que es “la fórmula de los movimientos y las corrientes de pensamiento que quieren oponerse a la tendencia principal de nuestra época: la extensión de la apropiación de la propiedad privada a todas las esferas de la sociedad, de la cultura, de la vida”. (Laval y Dardot, 2015 [2014], p. 31) Por su parte, Arturo Escobar (2014a) plantea que:

La propuesta del sistema comunal propende por el desplazamiento progresivo de la economía capitalista y de la democracia liberal representativa, para dar paso a formas comunales de economía y autogobierno, así como el establecimiento de mecanismos de pluralismo cultural como base para una genuina interculturalidad entre los diversos sistemas culturales. (p. 51)

Precisamente, las formas comunales de economía y de autogobierno son las que han permitido a los movimientos indígenas y campesinos latinoamericanos su pervivencia a través de complejas redes comunitarias, lo que les ha permitido conservar de alguna manera sus tradiciones, costumbres y cierto control de sus territorios; es decir, sobre los procesos de reproducción de la vida¹⁷⁸. La comunidad, lo comunitario y lo común atraviesan las luchas indígenas y campesinas del continente desde la época colonial¹⁷⁹. Por consiguiente, para los pueblos originarios la comunidad no es una añoranza de un pasado remoto, el cual pretenden reconstituir, sino la defensa de un proyecto societal y el horizonte utópico que emplaza sus acciones (Torres C., 2013). Tanto los ejidos en México, como el reconocimiento de los derechos colectivos de la población indígena

¹⁷⁷ Silvia Federici (2013) señala que la recuperación y resignificación de estos conceptos por parte de la izquierda radical se relaciona con los siguientes elementos

Por un lado, se ha producido la desaparición del modelo revolucionario estatalista que durante décadas había conformado los esfuerzos de los movimientos sociales radicales para construir una alternativa al capitalismo. Por otro, el intento neoliberal de subordinar todas y cada una de las formas de vida y de conocimiento a la lógica del mercado ha incrementado nuestra conciencia del peligro que supone vivir en un mundo en el que ya no tenemos acceso a los mares, los árboles, los animales ni a nuestros congéneres excepto a través del nexo económico. Los «nuevos cercamientos» también han visibilizado un mundo de propiedades y relaciones comunales que muchos consideraban extinto o al que no habían concedido importancia hasta que se ha cernido la amenaza de la privatización. (p. 244)

¹⁷⁸ Al respecto Lucía Linsalata (2015) señala como “el abajo de nuestras sociedades han tenido la habilidad de conservar, cultivar y, en muchos casos, recrear por completo entramados asociativos y lógicas de cooperación social de carácter comunitario centrados en la conservación y reproducción de la vida; es decir, en la reproducción digna del sustento material, espiritual y afectivo de comunidades humanas concretas, cuyas historias, geografías, calendarios y sentidos del mundo se resisten a ser totalmente colonizados por el sentido capitalista del mismo”. (p. 72)

¹⁷⁹ Porto-Gonçalves (2016) alude a la relación entre las luchas campesinas e indígenas desde la época de la colonia y el horizonte de sentido de lo común como marco interpretativo de las acciones colectivas actuales cuando señala que son “los faxinais, los fondos de pasto, las tierras de uso común, [las] que se van configurando como derechos que vienen de la gente (derecho consuetudinario) y que exigen pluralismo jurídico y plurinacionalidad con interculturalidad (Catherine Walsh) y transmodernidad (Enrique Dussell)” (p. 5).

y negra, la colectivización de las tierras o los planes de vida y de etnodesarrollo representan las luchas de resistencia comunitarias territorializadas de larga data.

En el proceso de reproducción de lo común ha sido fundamental el rol de las mujeres. Las mujeres han mantenido estas redes de reciprocidad y cooperación fundamentales para el sostenimiento de la vida, llevando a sus espaldas la carga del cuidado en la esfera individual y colectiva, que se relaciona con la precaria situación en la que se han encontrado en el mundo del trabajo. Ejemplo de estas articulaciones son las redes de madres comunitarias, los comedores populares o las mujeres custodias y guardianas de semillas. Al respecto, Silvia Federici y George Caffentzis (2015) señalan que:

Las mujeres siempre han tenido mayor interés en la defensa de la naturaleza común y en muchas regiones han sido las primeras en salir en contra de la destrucción del entorno: han luchado contra la explotación forestal, contra la venta de árboles con fines comerciales y la privatización del agua [...] Estas iniciativas se han multiplicado desde los años setenta cuando, como respuesta a los efectos de los planes de austeridad y la represión política en varios países como Chile o Argentina, las mujeres se unieron para crear formas comunales de reproducción social, pudiendo así aumentar sus presupuestos y al mismo tiempo romper la sensación de parálisis que el aislamiento y la derrota producían. (p. 59)

Son sugestivas las propuestas construidas desde los movimientos de mujeres indígenas, que plantean un feminismo comunitario centrado en una fuerte crítica al capitalismo neoliberal y a la idea de desarrollo. A la vez que marcan distancia con los feminismos occidentales. Se plantea el género desde la necesidad de descolonizar su significado. Al respecto, Paredes (2010) señala:

Nosotras partimos de la comunidad como principio incluyente que cuida la vida. Para construir el feminismo comunitario es necesario desmitificar el chacho-warmi (hombre-mujer) que nos impide analizar la realidad de la vida de las mujeres en nuestro país [Bolivia]. En occidente el Feminismo les significó a las mujeres posicionarse como individuos ante los hombres. Nos estamos refiriendo a las dos grandes vertientes del feminismo, el de la igualdad y el de la diferencia, es decir mujer igual que el hombre o mujer diferente al hombre, como lo dijimos arriba, pero esto no se puede entender dentro nuestras formas de vida aquí en Bolivia con fuertes concepciones comunitarias, por eso nos hemos planteado como feministas bolivianas hacer nuestro propio feminismo, pensarnos a partir de la realidad en la que vivimos. lo queremos pensarnos frente a los hombres, sino pensarnos mujeres y hombres en relación a la comunidad. (p.78)

De esta manera, lo común como un eje de la acción colectiva en América Latina ha sido resignificada desde diferentes lugares, por otros “modos de hacer”, parafraseando a Zibechi. En el continente tanto la comunidad como el territorio hacen parte de la “columna vertebral de la

experiencia de vida en las más diversas realidades, desde las indígenas, las eclesiales de base, las ancestrales hasta las nuevas comunidades urbanas” (Zibechi y Hardt, 2013, p. 81).

Con respecto a estas últimas, Torres (2013) se refiere a como en el marco de la urbanización acelerada diferentes procesos sociales y populares reivindican lo comunitario como un referente identitario y político central en sus luchas¹⁸⁰. Estrechamente relacionado las formas en las que las comunidades se apropian del espacio a través de símbolos, códigos, prácticas de producción y de reproducción de la vida; que se manifiestan en contrapoderes y contraespacios a través de procesos de autovaloración y autodeterminación.

Raquel Gutiérrez se refiere a esas diferentes formas que ha adquirido la lucha social en la región como un *entramado comunitario* que incluye, una “heterogénea multiplicidad de mundos de la vida que pueblan y generan el mundo bajo pautas diversas de respeto, colaboración, dignidad y reciprocidad no exentas de tensión, y acotadas, sistemáticamente, por el capital” (Gutiérrez, 2017, p. 33).

La idea de *entramado comunitario* pone de manifiesto el carácter colectivo de las luchas, la diversidad de los actores que participan, los modos de articulación a través de redes y los saberes cooperativos que desafían el orden social establecido, pero también construyen otras formas de relacionamiento y de gestión de lo común. Este conjunto de elementos se puede materializar en regímenes complejos de la reproducción de la vida que se estructuran en medio de las tensiones entre los actores sociales, en la medida que lo común se encuentra implícito una apropiación material y simbólica del espacio, que se enmarca en unas relaciones asimétricas de poder (Raffestin, 2011 [1980]).

No debemos olvidar que la vida social comunitaria tiene una connotación espacial en la medida en que las personas necesitan de la naturaleza para su supervivencia. Por ello, la territorialidad se puede entender teóricamente como la interacción entre los actores y su medioambiente espacio-temporal. Esta interacción se desarrolla en la cotidianidad; por tanto, es dinámica, cambiante, vivida, en este proceso los actores despliegan instrumentos y códigos que modifican el espacio para construir territorio (Merlinsky, 2017).

¹⁸⁰ Porto-Gonçalves (2016) advierte sobre las implicaciones ecológicas y para la reproducción de la vida de los procesos acelerados de urbanización en las últimas dos décadas. El autor toma como marco referencia global el año 2007 porque, por primera vez, la población urbana mundial era mayor que la población rural. En el año 2010, había un 64% más de habitantes rurales que en 1960; en ese mismo año la población urbana aumentó en un 352%, pasando de 995 millones de personas para 3.510 millones de habitantes (p. 2).

En esta línea, la comunidad y lo común también adquiere un significado diferente al que generalmente es dado en los estudios más tradicionales y de carácter institucional, en donde se relaciona con una realidad abstracta y homogénea referida a las diferentes formas de relacionamiento de las personas bajo el paraguas de un denominador compartido. Al respecto, Torres (2013) señala que:

El sentido irreflexivo más corriente de la palabra “comunidad”, la identifica con formas unitarias y homogéneas de vida social en las que prevalecen rasgos, intereses y fines comunes. Por lo general se le asocia a un territorio pequeño (barrio, localidad) o una población homogénea (pobladores, beneficiarios de un programa, usuarios de un servicio), generalmente pobre o marginal, que comparte alguna propiedad (necesidades, intereses, ideales). (p. 11)

Esta conceptualización obvia la heterogeneidad de los actores que construyen la comunidad. La falsa imagen de homogeneidad ha sido utilizada para justificar políticas e intervenciones gubernamentales sobre diferentes grupos, obviando las diferentes subjetividades políticas y transmitiendo una falsa proyección de hermanamiento e igualdad¹⁸¹. Este tipo de políticas se articulan con intervenciones en los territorios generalmente sustentadas en la idea de espacios vacíos y abstractos, aptos para la puesta en marcha de políticas neoliberales. Argumentos que se sustentan en una razón técnico-científica que se reproduce a través de las diferentes formas en las que se manifiesta la colonialidad¹⁸².

Ahora bien, la resignificación del referente comunitario y de lo común en las luchas sociales y populares latinoamericanas se debe comprender en el marco de las dinámicas políticas y económicas devenidas en la región. En las últimas dos décadas, hemos asistido a un cambio en

¹⁸¹ Un ejemplo de este tipo de políticas que vacían de contenido el concepto de comunidad lo podemos encontrar en el *Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 'Hacia un Estado Comunitario'*, presentado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Aunque lo comunitario aparece como un eje central, los principales ejes articuladores fueron la seguridad democrática y el crecimiento económico. De esta manera, el adjetivo comunitario fue utilizado de manera accesoria para crear una falsa imagen de fraternidad y de participación de las comunidades en las decisiones gubernamentales, en particular, las referidas a las intervenciones del espacio para la implementación de un modelo de desarrollo de carácter extractivista. A su vez, la planificación económica estaba acompañada por una retórica de “pacificación” de los territorios, que en la práctica se traducía en la intervención y control militar del espacio y de las comunidades.

¹⁸² Aníbal Quijano establece la diferencia entre colonialismo y colonialidad. Por colonialismo se entiende la dominación directa/formal política, social y cultural de los europeos sobre los diferentes territorios conquistados. Mientras que el concepto de colonialidad hace referencia al patrón estructural de poder específico de la modernidad, el cual se desarrolla a partir de la llegada de los europeos al territorio que denominaron América, que se mantiene aún después de finalizado el colonialismo como orden político explícito. La colonialidad se sustenta en la interacción entre un sistema de dominación construido a partir de un entramado de relaciones sociales intersubjetivas, manifiesta en una clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza; y un sistema de explotación, que consiste en la articulación de todas las formas conocidas de expropiación del trabajo conocidas en una única estructura hegemonizada por el capitalismo. (Quijano A. 1992 y 2000)

las formas de acumulación del capital expresado en un proceso de reprimarización de la economía en el marco de lo que se ha denominado el *Consenso de los Commodities*¹⁸³.

Autores como Svampa (2016), Gudynas (2015) y Acosta (2016) entienden que esta forma de acumulación se caracteriza por la explotación y exportación de grandes volúmenes de bienes primarios, sostenida por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, demandados por las economías de centro y por las potencias emergentes. Por tanto, se consolida para la región un modelo de desarrollo de orden extractivista y que utiliza diferentes modalidades de desposesión y de cercamiento de lo común para su consolidación¹⁸⁴.

Sin embargo, el crecimiento que en una primera etapa puede traer este modelo de desarrollo debido a los altos precios de las materias primas en un momento dado de su ciclo económico¹⁸⁵, lleva aparejado nuevas asimetrías sociales y políticas que generan una mayor desigualdad, una pauperización de las clases subalternas así como una reestructuración territorial (en el marco de un proceso de territorialización-desterritorialización-reterritorialización). Tales asimetrías, se han manifestado en una profundización de la conflictividad social en donde las luchas sociales y populares se han centrado en tres ejes principalmente, a saber: la defensa del territorio, de lo común y de la naturaleza; confrontando el modelo de desarrollo vigente e interpelando los conceptos de democracia y de justicia a partir de nuevos marcos interpretativos que están atravesados por las diferentes formas de gestión del espacio y de la naturaleza; como puede ser la justicia ambiental, los feminismos territoriales o la defensa del lugar.

El carácter de estas luchas se corresponde con el modo particular de apropiación de la naturaleza del modelo extractivista sustentado en el despojo de los territorios y de los bienes

¹⁸³ Para Gudynas (2013) el término *commodities* se refiere a:

Bienes que son considerados homogéneos independientemente de su origen, que no revisten una fuerte diferenciación entre sus variedades, que incluso pueden estar estandarizados, y que son comercializados en grandes volúmenes. Una materia prima es abordada por el mercado como un commodity cuando se entiende que tiene atributos similares más allá de que provenga desde distintos sitios de obtención. (p.6)

¹⁸⁴ Sevilla-Buitrago (2015) llama la atención para que los estudios sobre los procesos de cercamiento y de despojo profundicen en los mecanismos espaciales de desposesión a partir del análisis de las técnicas utilizadas, los mecanismos sobre los que operan y las transformaciones temporales, los regímenes políticos-económicos bajo los que se producen y los marcos regulatorios, entre otros elementos. La observación realizada por este autor se corresponde a la necesidad de diferenciar diferentes fenómenos en los que el espacio se convierte en un instrumento clave para el despojo o en donde es un contenedor de dicho proceso.

¹⁸⁵ Alberto Acosta (2016) señala que “en todos los países latinoamericanos, con gobiernos “progresistas” y neoliberales, los segmentos tradicionalmente marginados de la población han experimentado una relativa mejoría en sus condiciones de vida gracias al incremento de las exportaciones de materias primas en el último período debido a los elevados precios de las mismas. Eso sí, en los países con presidentes “progresistas” este resultado se explica no solo por el crecimiento económico, sino también por una mejor distribución de los crecientes ingresos del extractivismo”. (p. 27)

naturales del Sur global¹⁸⁶. Para autores como Porto-Gonçalves (2016) o Silvia Federici (Linsalata y Navarro, 2014) la fase actual de acumulación del capital se manifiesta también en una crisis epistémica y política dada por la separación entre sociedad-naturaleza, en donde se presentan desagregadas las condiciones materiales/naturales de la vida.

Por otra parte, aunque la materialidad de la explotación se da en la escala local las condiciones de dicha explotación no se circunscriben a este ámbito, sino que intervienen dinámicas del mercado mundial (las inversiones, los bienes de consumo, las demandas internacionales, los avances tecnológicos, etc.). Por tanto, las capacidades de las comunidades locales para mitigar los efectos del extractivismo se ven limitadas por los intereses de los actores que intervienen en la escala global (Gudynas, 2015). Intereses que generalmente no se corresponden con los de las comunidades en los territorios ni con sus proyectos sociales.

Es así como algunos movimientos sociales y populares han resignificado la comunidad, lo comunitario y lo común como un referente que les permite articular procesos de resistencia y construir un “horizonte ético y político de su proyecto alternativo al capitalismo” (Torres C., 2013, p. 15). Los movimientos que asumen lo comunitario en sus marcos de acción e interpretación se alejan de las formas organizativas tradicionales que se caracterizan por estructuras jerárquicas y burocráticas en donde se mantiene una amplia distancia entre los dirigentes de la organización y las bases (Zibechi & Hardt, 2013). De esta manera, Zibechi destaca procesos a través de los cuales se vislumbra un “triunfo de la comunidad frente a la asociación” (p. 44). El autor señala que esta resignificación de la comunidad se encuentra ligada a los procesos de movilización indígena y a la emergencia de epistemes que desafían las lógicas de la modernidad, en particular, el *sumak kawsay* (buen vivir). También manifiesto en los planes de vida de las comunidades indígenas y/o en los planes de etnodesarrollo de las comunidades negras en Colombia. Los cuales plantean nuevas “formas de hacer” y de vivir alejadas de las instauradas por la mercantilización de la vida en el marco del modelo capitalista.

¹⁸⁶ En la lógica de la argumentación que estamos planteando, utilizamos los términos naturaleza y/o bienes comunes en lugar de “recursos naturales”, en tanto, esta forma de denominación remite a una concepción funcionalista en donde prima el valor de cambio. En este sentido, los bienes comunes son vistos solo como recursos a ser privatizados y transados en el mercado.

3.5.1. Lo común como lo inapropiable

Raquel Gutiérrez (2017) señala que lo común se produce bajo una lógica de producción determinada que antagoniza con los mecanismos de producción capitalista de la sociedad¹⁸⁷. La autora define este proceso de contestación de la siguiente manera:

Una dinámica asociativa particular y concreta, esto es, situada temporal, geográfica e históricamente que, por lo general, se propone alcanzar objetivos específicos casi siempre relacionados con asegurar o proteger condiciones para la reproducción de la vida en medio de amenazas drásticas de despojo o agravio (p. 73).

En esta definición nos parece pertinente destacar los siguientes elementos: primero, las lógicas de producción de lo común no se inscriben solamente a las prácticas desarrolladas por las comunidades indígenas o las comunidades negras en la región. Sin desconocer que son los pueblos indígenas de países como Colombia, Bolivia, México, Perú y Ecuador los que han logrado mantener en condiciones adversas su reproducción social y material. Segundo, el carácter diverso de las formas que participan en esa reproducción y que se inscriben en un entramado comunitario, en el que también se producen tensiones derivadas de los diferentes proyectos y subjetividades políticas. Tercero, la lógica de producción de lo común se encuentra atravesada por la historia y por el espacio teniendo en cuenta que la producción material y la reproducción de la vida no se realiza en la abstracción. Cuarto, lo común como categoría y como práctica representa el antagonismo social frente a un modelo económico que se percibe como injusto.

Por tanto, se puede considerar como la “emergencia de una forma nueva de oponerse al capitalismo, incluso de considerar su superación” (Laval & Dardot, 2015 [2014], p. 21). En esta línea, lo común es una forma de reapropiación de la vida social a través de la constante puesta en escena de la autodeterminación colectiva (Linsalata L. , 2015, p. 75).

Merlinsky (2017) en el estudio de los movimientos por la justicia ambiental señala que la comunidad termina siendo una expresión, en sí misma, del descontento con el modo industrial de producción a través de acciones que defienden y recrean lo común, para resistir a los procesos de

¹⁸⁷ Lucía Linsalata (2014), en el estudio sobre los sistemas comunitarios de la gestión del agua en Cochabamba, señala que lo común tiene sus propias lógicas de funcionamiento que permiten la producción, reproducción y cuidado, que no responden a las formas modernas de lo público y lo privado. Tales lógicas se sustentan en ciertos principios de autoregulación social, que para el caso de Cochabamba se manifiestan en: el establecimiento de una asamblea; el ejercicio directo de la capacidad de decidir sobre lo común, mediante la práctica de la deliberación; y la institución de códigos de relacionamiento recíproco (p. 264).

cercamiento que se dan actualmente y que tienen su origen en las prácticas de los Estados europeos cinco siglos atrás¹⁸⁸. De esta manera, lo común es lo que se protege, pero también es lo que se recrea mediante la inscripción en las prácticas espaciales de las comunidades y en los espacios de representación.

Estos elementos nos llevan a la definición conceptual de lo común. Raquel Gutiérrez señala que lo común debe entenderse como aquello que es compartido o poseído de manera colectiva. Por tanto, la naturaleza de lo común se opone a la idea de la propiedad, entendida como dominio y apropiación por uno en detrimento de lo que es poseído por varios. Sin embargo, advierte que el hecho de que sea compartido/poseído de manera colectiva no significa que es “de ninguno y de todos”, conceptualización más cercana a lo que se entiende actualmente por “público”.

La autora realiza un ejercicio conceptual en el que resignifica esa idea de propiedad desde el ejercicio de la práctica de lo común y advierte:

Lo común bajo esta perspectiva deja de ser objeto o cosa bajo dominio de algunos, para entenderse como acción colectiva de producción, apropiación y reapropiación de lo que hay y de lo que es hecho, de lo que existe y de lo que es creado, de lo que es ofrecido y generado por la propia Pachamama y, también, de lo que a partir de ello ha sido producido, construido y logrado por articulación y el esfuerzo común de los hombres y mujeres situados histórica y geográficamente. (Gutiérrez, 2017, p. 75)

3.5.2. *Lo común como relación*

Las lógicas de producción de lo común entendidas como un esfuerzo colectivo de hombres y mujeres nos lleva a entender lo común como una relación social que se caracteriza por las redes de cooperación, de trabajo compartido y de reciprocidad entre los diferentes miembros de una comunidad. Ahora bien, estas relaciones se construyen en la cotidianidad y se encuentran en un proceso continuo de transformación y resignificación. Por lo tanto, estamos hablando de procesos dinámicos, abiertos y contingentes. Al respecto Linsalata (2014) señala que “lo común nunca está

¹⁸⁸ La palabra cercamiento viene del término inglés *enclosure* que hace referencia al proceso desarrollado en Europa entre el siglo XV y el siglo XIX, por el cual se cercaron las tierras de uso colectivo y pasaron a ser propiedad privada. Tomás Moro en su libro *Utopía* describe y reflexiona sobre este proceso llevado a cabo por los Estados europeos. En el Siglo XIX, Marx en *El Capital* aborda de manera detallada el proceso histórico que despojó a los pequeños propietarios del uso colectivo de los bienes comunes. Autores contemporáneos como Karl Polanyi y E. P. Thompson realizan un análisis crítico acerca de las consecuencias de los cercamientos. Por otra parte, desde la geografía crítica se ha reflexionado acerca del papel que tienen los cercamientos en la reestructuración de las formaciones socio-espaciales y proporcionan un marco de análisis diferente para las organizaciones sociales y territoriales que se presentan como alternativa al capitalismo (Sevilla-Buitrago, 2015).

dado de antemano o para siempre, sino todo el contrario: se produce continua e históricamente, a través de la generación y constante reproducción de un articulado sistema de relaciones sociales de colaboración, ayuda mutua y responsabilidad recíproca” (p. 73).

Linsalata y Gutiérrez desarrollan la idea de lo común como un conjunto de relaciones a partir de las investigaciones realizadas por autoras como Silvia Federici, que nos recuerda que los bienes comunes no son necesariamente objetos materiales, sino relaciones sociales, prácticas sociales constitutivas, en donde se tiene en cuenta la naturaleza colectiva del trabajo reproductivo y los medios de reproducción implicados. Por ello, “algunos prefieren hablar de “comunalizar” o de “lo común”, justamente para remarcar el carácter relacional de este proyecto político” (Caffentzis y Federici, 2015, p. 67).

Desde esta perspectiva, el mantenimiento, la continuidad o la destrucción de lo común, dependerá en gran parte de las capacidades que tengan los actores que participan en esos entramados para reafirmar el compromiso con un proyecto societal compartido, a partir de unos valores y de unos principios contruidos de manera colectiva. Como se señala anteriormente, este es un proceso dinámico, abierto, heterogéneo, en el que es importante reafirmar los vínculos de cooperación y de responsabilidad, no solo entre las personas sino con respecto a la naturaleza (Federici, 2013).

Como señala Linsalata, parafraseando a Federici: no hay común si no hay una comunidad real de personas, un entramado vivo de relaciones sociales de cooperación que lo produce y actualiza continua y constantemente (Linsalata, 2015).

De esta manera, se llama la atención sobre la importancia de estudiar las diferentes lógicas de reproducción de lo común, las redes, las articulaciones y las diferentes orientaciones de los actores que confluyen en esos procesos comunitarios y los mecanismos a través de los cuales se construye un horizonte de sentido colectivo. En este sentido, los repertorios de confrontación y los marcos interpretativos varían según la localización, la historia, la relación con el lugar y el territorio.

3.5.3. Lo común: lo heterogéneo y poliforme

Raquel Gutiérrez como Lucia Linsalata (2015) enfatizan en la idea del carácter heterogéneo y multiforme de los actores que confluyen en los agrupamientos que recrean lo común. Sin embargo,

establecen un hilo articulador entre los diferentes actores, la coparticipación en la gestión de lo común, que se sitúa en el tiempo y en el espacio. Así es señalado por Gutiérrez:

[...] Y esos “varios” que conforman el agrupamiento específico que posee, puede ser multiforme y enormemente heterogéneo, aunque en todo caso tienen en común, en tanto coparticipación en una calidad o en una circunstancia, el hecho de estar situados espacial y temporalmente. Es decir, los hombres y mujeres que comparten lo común conforman colectividades particulares y específicas para estructurar y transmitir los derechos a las generaciones siguientes. (Gutiérrez Aguilar, 2017, p. 74)

Precisamente, esa coparticipación de la gestión común producto de un entramado social poliforme, es lo que ha permitido que hombres y mujeres encuentren “una fuente cotidiana de sustento: un instrumento de sobrevivencia que les permite hacer frente colectivamente a toda una serie de carencias y necesidades compartidas al tiempo de generar condiciones de vida más dignas y relaciones sociales más satisfactorias” (Linsalata, 2015, p. 73). Por tanto, las relaciones de cooperación y reciprocidad que se tejen son las que permiten resolver los mínimos comunes vitales de las comunidades que, por lo general, han sido relegadas a los márgenes de la sociedad.

Al respecto, es importante señalar el rol fundamental que han jugado las mujeres en estos procesos; debido a que han tenido a su cargo una mayor responsabilidad sobre la reproducción social, así como el menor acceso al ingreso en comparación con los hombres. Por ello, la lucha por los bienes naturales y por los servicios básicos de sobrevivencia es particularmente importante y estratégica para ellas (Linsalata y Navarro, 2014)¹⁸⁹.

Ahora bien, el reconocimiento de la heterogeneidad en el entramado comunitario es un elemento fundamental para entender la dinámica de lo social como contingente y conflictiva. Planteamiento que también es señalado por Leopoldo Múnera en su concepción de los movimientos sociales y que recogemos en el primer apartado de esta tesis. Tanto Múnera como Linsalata enfatizan no sólo en el carácter poliforme de los actores sociales sino en las características cambiantes de las relaciones, la cuales pueden ser discontinuas en términos temporales; por tanto, con momentos de acercamiento y alejamiento.

Los “varios” como señala Gutiérrez, elaboran un proyecto político y societal, que incluye normas de conducta, formas de relacionamiento, códigos y símbolos, inscritos en el espacio y bajo

¹⁸⁹ En América Latina en las últimas décadas se registran numerosas iniciativas populares lideradas por mujeres que abordan la gestión de los comunes como el agua, la tierra, la comida, la cultura, entre otros. Tales espacios sientan las bases para la organización de sistemas cooperativos autogestionados al margen de la acción del Estado y del mercado. De esta manera, evidencian líneas de fuga del sistema económico dominante (Caffentzis y Federici, 2015).

unas condiciones históricas concretas. De esta manera, existe un ánimo de controlar, afectar y controlar el espacio, es decir, construir territorio a través del establecimiento de una territorialidad. La construcción de la misma no estará exenta de tensiones por ese carácter heterogéneo planteado por las autoras.

Es importante señalar que las dinámicas del capital se deben entender como parte de la naturaleza recurrente de la “acumulación primitiva” y en relación con una cuestión política central a la que se enfrenta cualquier alternativa al capitalismo: el acceso directo a los medios de existencia¹⁹⁰(De Angelis, 2012). En este sentido, no debemos olvidar que asistimos a un intento de re-apropiación de la vida ante un orden dominante que es considerado injusto. Un orden que ha tratado de homogeneizar la vida, supeditando los procesos de reproducción de la misma a la lógica de “valorización del valor”. Por tanto, todos los procesos que no estén en esta lógica de producción son desechados, marginados, destruidos o cooptados en un proceso de totalización de la vida social. “Este mismo proceso lleva en sí una dinámica permanente de enajenación de la capacidad política del sujeto social de autorregular o autodeterminar su vida en sociedad” (Linsalata, 2015, pp. 74-75). Los procesos de resignificación de lo común lo que representan es una recuperación de la autonomía política para su producción y reproducción social a partir de la gestión colectiva de los medios para su existencia, bajo principios contrarios a de acumulación incesante de capital. Lógicas de solidaridad colectiva versus lógicas de competencia (Caffentzis y Federici, 2015).

3.6. ¿Qué entendemos por comunidad?

¿Cuáles serían esas características de la comunidad en la acción colectiva de la región? El debate sobre el concepto de comunidad se ha reactivado a partir de la década de los setenta. Podemos

¹⁹⁰ Federici (2010 [2004]) y De Angelis (2012) señalan el carácter continuo de la acumulación primitiva, interpretación que compartimos en la presente tesis. Este último autor señala:

Las modernas formas de acumulación primitiva ocurren en contextos bastante diferentes de aquellos en los que tuvieron lugar el movimiento de cercamientos ingleses o el comercio de esclavos. Aun así, enfatizar sus características comunes nos permite interpretar lo nuevo sin olvidarnos de las duras lecciones de lo viejo {...} Así, la comprensión del carácter continuo de los cercamientos ilumina dos cuestiones cruciales. Primero, el hecho de que existe un sustrato común entre las diferentes formas fenoménicas que adoptan las políticas neoliberales y que, por lo tanto, las poblaciones del Norte, Este y Sur están enfrentando estrategias de separación de sus medios de existencia, posiblemente diferentes en apariencia, pero sustancialmente similares en sus lógicas profundas. Segundo, esto nos permite identificar la cuestión esencial que cualquier debate sobre las alternativas en el marco del creciente movimiento global anti-capitalista debe plantearse: el problema del acceso directo a los medios de existencia, producción y comunicación; el problema de los bienes comunes. (pág., 58)

encontrar numerosos trabajos sobre este tema en las escuelas anglosajonas y europeas. Autores como Touraine (1997), Sennet (2001) o Bauman (2003) se han referido a esta forma de organización desde diferentes posicionamientos, pero a partir de una mirada eurocéntrica del fenómeno. En donde la mayoría de las experiencias analizadas se refieren de manera particular a fenómenos desarrollados en países del Norte global. En el contexto latinoamericano, las reflexiones sobre la comunidad también han proliferado y se puede observar un interés sobre la resignificación de la misma. Estos análisis se enmarcan en el pensamiento crítico y en la producción de conocimiento al interior de los movimientos sociales y populares, a saber:

La reivindican como modo de vida que se resiste, opone y se propone frente a la hegemonía del capital [...] en algunos estudios sobre procesos asociativos, luchas y movimientos sociales de la región –en particular de base indígena y campesina–, como en las reflexiones generadas por sus protagonistas, la comunidad aparece como una categoría recurrente, sea como modo de vida ancestral que se resiste a los embates del capitalismo y el Estado, sea como la cosmovisión desde la cual se vive y lucha, sea como horizonte de futuro de su acción. (Torres, 2013, p. 147)

A partir de un análisis de los movimientos sociales en El Alto (Bolivia), Zibechi (2015) plantea que la comunidad no es una institución dada sino que es producto de las relaciones territoriales que se establecen a partir de los vínculos entre las personas; un *entramado comunitario*, como lo define Gutiérrez (2017).

Desde nuestra perspectiva, la propuesta analítica de Zibechi se puede articular con la idea que hemos venido planteando en esta tesis, desde la cual se entiende a los movimientos sociales a partir de la articulación entre los diferentes actores que lo componen, alejada de una perspectiva estática e institucional. Zibechi (2015), Gutiérrez (2017) y Torres (2013) colocan el énfasis en esas relaciones que se configuran en lo local a partir de las cuales se crean sentidos de pertenencia, solidaridad, vecindad, de resistencia y reconstrucción de formas alternativas de vida, que desafían las formas mercantilistas del modelo capitalista. Las relaciones que crean la comunidad pueden llegar a ser los cimientos sobre los cuales se estructura la acción colectiva de las clases subalternas.

Torres (2013) establece algunas características de lo comunitario a partir del estudio de tres procesos sociales en los que se ha dado la emergencia de la comunidad en América Latina, a saber: primero, la resistencia de las comunidades indígenas, en particular, los pueblos originarios mesoamericanos y andinos; segundo, la reactivación de prácticas comunitarias en el desarrollo de territorios populares y urbanos; tercero, la construcción de un pensamiento comunal desde las

reflexiones de intelectuales orgánicos de movimientos sociales en México y en Bolivia¹⁹¹. Las experiencias de acción colectiva que utiliza el autor se sitúan en Perú, Bolivia, México y Colombia.

El análisis de Torres (2013) (2015) lo lleva plantear tres elementos que nos parece relevante reproducir. Primero, la comunidad debe entenderse a partir de las relaciones de poder que se estructuran en América Latina y de la complejidad de las mismas. En donde se produce una tensión entre las formas de relacionamiento propias del capitalismo y otras formas de organización social y económica.

Estas tensiones se manifiestan en espacios concretos en los que se construyen dinámicas territoriales específicas. Por tanto, el significado de la solidaridad, la reciprocidad y el compromiso colectivo debe ser leído desde una perspectiva espacio-temporal. Segundo, en el caso de los movimientos indígenas y campesinos, la comunidad como organización económica y social, sistema de valores y proyecto societal, se encuentra en el centro de sus luchas. El sentido no es restablecer una “comunidad” perdida sino conservar, defender, extender y resignificar un modo de vida que les ha permitido resistir a la dominación colonial y al republicanismo. Tercero, los procesos organizativos emergentes en los contextos urbanos y rurales constituyen vínculos, valores prácticos comunitarios desde las cuales configuran modelos alternativos que tienen un sentido de oposición al modelo de desarrollo vigente.

Ahora bien, a partir de estos elementos el autor construye las siguientes premisas sobre la comunidad:

1. La comunidad como interpelación y alternativa al capitalismo. Sobre este punto no nos detendremos ya que ha sido explicado a lo largo de este apartado. Los movimientos que configuran la comunidad como un modo de vida y modo de hacer que se opone a la racionalidad económica del capitalismo. Se desarrollan políticas comunitarias que se sustentan en lógicas relacionadas con: la solidaridad, la reciprocidad, la propiedad colectiva de la naturaleza, el trabajo comunitario y la justicia comunitaria. Estos elementos se refuerzan a través de la construcción de simbología, prácticas culturales comunales y espaciales que estructuran a su vez una potencia crítica y emancipadora (Torres, 2013, pp. 199-203)¹⁹².

¹⁹¹ Torres (2013) retoma a pensadores como Felix Patzi Paco, Pablo Mamami, Álvaro García Linera, Silvera Rivera Cusicanqui, Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna.

¹⁹² Torres (2013) distingue para el caso latinoamericano seis procesos en los que se puede apreciar una potencia crítica y emancipadora:

1. Comunidades de vida de los pueblos originarios, supervivientes y en resistencia a la modernización capitalista. 2. Comunidades territoriales urbanas y campesinas emergentes que se activan en coyunturas y

No obstante, no podemos caer en la idealización de los espacios comunitarios ya que estaríamos haciendo una lectura homogénea de lo social, criticada a lo largo de esta tesis. Por tanto, en las comunidades existen tensiones, contradicciones y desigualdades¹⁹³. Sin embargo, la fortaleza radica en que estos espacios comunitarios representan una fisura en el sistema de dominación. En palabras de Linsalata (2015) representan:

Un espacio de cuestionamiento práctico del orden existente: un ámbito de organización de la vida que escapa a la lógica del valor, reafirmando y relanzando a partir del trabajo vivo y cooperativo de hombres y mujeres libremente asociados para la resolución de sus problemas cotidianos, el valor de uso de la vida, la centralidad de su digna reproducción, y la posibilidad de que ésta se dé a partir de múltiples formas de organización social centradas en lo común, es decir, común y autónomamente producidas por una comunidad concreta y para el disfrute de la misma. (p. 73)

2. La comunidad como vínculo y sentido inmanente. La comunidad no debe comprenderse como un agregado de individualidades que comparten un territorio y que poseen rasgos comunes. “Lo que hace que podamos llamar a un colectivo humano comunidad es la presencia de un sentido inmanente, de un vínculo “espiritual”, de una “atmosfera sicológica” que lleva a que el sentimiento compartido de un nosotros que preexiste, subsiste y predomina sobre sus integrantes” (Torres C., 2013, pág. 203). De esta manera, el autor toma distancia de visiones que consideran esta forma de organización como una suma de personas e intereses para hacer hincapié en las relaciones más profundas que configuran una subjetividad compartida a través de marcos interpretativos y sobre el significado de un “nosotros”. La comunidad aparece como red de apoyo mutuo en la que existe un sentimiento de cuidado hacia el “otro”.

Por otra parte, Torres destaca un elemento que consideramos es fundamental y al cual hicimos referencia al inicio de este apartado: la comunidad no es sinónimo de homogeneidad. Al interior de la misma se presentan tensiones y desacuerdos. Ahora bien, si la comunidad no se caracteriza solo por unos rasgos comunes: cuál sería el carácter de la interacción que se construye al interior de la misma. Torres lo define como una:

situaciones de adversidad compartida 3. Comunidades intencionales en torno a ideales y visiones compartidas de futuro, constituidas por asociaciones, redes y movimientos sociales. 4. Comunidades emocionales, más o menos transitorias especialmente entre personas pertenecientes a contextos ciudadanos. 5. Comunidades reflexivas en torno a experiencias y prácticas compartidas. (2003)

¹⁹³ Caffentzis & Federici (2015) se refieren a la necesidad de fortalecer la igualdad de acceso a los medios de (re)producción así como en la toma de decisiones en los comunes. Los autores hacen un llamado de atención al señalar que en la historia se pueden encontrar ejemplos de comunes que se han construido bajo relaciones de desigualdad, patriarcales, sostenidos por una discriminación en función de género.

[...] Convivencia plural de sujetos singulares o peculiares que se está permanentemente produciendo a partir de la creación y recreación de la intersubjetividad que mantiene vivo el sentimiento que los une. Más que sustentada o proyectada en una identidad cultural (étnica o no), la comunidad requiere estar generando permanentemente identificaciones entre sus partícipes; podemos afirmar que toda comunidad no está dada como un hecho, sino que es inaugural: debe garantizar su permanente nacimiento. (Torres, 2013, p. 206)

A la argumentación de Torres, se debe incluir que las relaciones de identificación y las redes de apoyo mutuo en las que se sustenta la comunidad no se estructuran en el vacío, son construidas en interacción con un espacio social y geográfico concreto, el cual es apropiado material y simbólicamente por las comunidades. Estos procesos de apropiación son los que vertebran la intersubjetividad que alimenta el sentido de pertenencia a la comunidad.

3. La comunidad como potencia instituyente. En consonancia, con el planteamiento inmediatamente anterior, Torres entiende la comunidad como parte de un complejo proceso social e histórico. A través del cual la comunidad se recrea a sí misma navegando en los sentidos y experiencias que la constituyen. La construcción de la misma se debe comprender desde el imaginario social en sus dos dimensiones: el del imaginario instituyente y el de imaginario instituido. El primero es producto de la “creación incesante e indeterminada de figuras/formas/imágenes que genera nuevos lenguajes, relaciones, instituciones” que de alguna manera subvierte las formas de relacionamiento existentes. Por su parte, el imaginario instituido se refiere al conjunto de instituciones, marcos y símbolos que se crean a partir del primero y que permiten la continuidad del proyecto. De esta manera, nos remite a la intersubjetividad y a la presencia histórica y social de las comunidades.

4. La comunidad como política. La redefinición de la política a causa de la crisis de legitimidad de los Estados modernos, entre otros factores, plantea la necesidad de resignificar el espacio de lo público. Espacio que se ha diluido en los intereses estatales y en los intereses privados de los actores hegemónicos produciendo una captura de lo común. Este proceso ha derivado en una profunda reflexión sobre el significado y los límites entre lo público y lo privado, entre lo colectivo y lo individual. Se plantea la construcción de un “nosotros” a partir de distintas intersubjetividades que va más allá de una simple articulación de intereses, de la homogeneización de las diversidades, en un esfuerzo por resistir a la totalización de la vida por parte del mercado y el Estado. Este sería el sentido que las luchas sociales le imprimen al concepto de comunidad, la reapropiación de la capacidad política para la gestión de la vida.

Se plantea una redefinición de la democracia en donde el ámbito de público se construya a través del reconocimiento recíproco y de lo común permitiendo el desarrollo de lo individual y lo diferente. Estos elementos plantean ir un paso delante de la idea liberal de Estado moderno en tanto:

Hoy sabemos que la idea de comunidad no puede pensarse como espacio opresivo y autoritario, sino como elección libre buscada en la conciencia de que sólo en la reciprocidad de las relaciones no dinerarias se produce el verdadero reconocimiento de la diferencia y la particularidad. (Barcelona tomado de Torres, 2013, p. 212)

La diferencia entre público y común, se refiere al sujeto de dominio, en el primer caso es el Estado el que ejerce el control. En el caso de la comunidad es el colectivo, un “nosotros”. Sin embargo, la defensa de lo público sigue siendo un elemento fundamental para la reproducción social. Por ello, uno de los retos que plantea esta posición es cómo conectar la defensa de lo público con la construcción de lo común, de manera que ambos procesos se fortalezcan (Caffentzis y Federici, 2015).

PARTE II. CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y ARMADA EN COLOMBIA 1982-2012

El propósito de esta segunda parte es establecer los antecedentes que nos permitan entender la conflictividad social y armada durante el periodo de estudio 2002-2014, el cual se corresponde con los dos mandatos presidenciales de Álvaro Uribe y el primero de Juan Manuel Santos. Para ello, se estudian las dinámicas del conflicto social y armado desde 1986 a 2002 (asociado a las dos principales guerrillas), así como las principales características de las políticas de paz de los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002).

El Grupo de Memoria Histórica (GMH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación realizó, en el año 2013, un minucioso análisis del conflicto social armado en el cual identificaba diferentes períodos según las dinámicas de la confrontación y el comportamiento de los actores involucrados. Para este apartado de la tesis, vamos a tomar como referencia dicho estudio, puesto que constituye una de las aproximaciones académicas recientes que de manera más rigurosa se han adelantado en el país.

Aunque los estudios sobre el origen del conflicto armado se sitúan en el periodo histórico comprendido entre 1945 y 1965, denominado como La Violencia (en mayúscula), que se caracterizó por el enfrentamiento entre los dos partidos tradicionales (el Partido Liberal y el Partido Conservador), en su lucha por la hegemonía política y en la conformación de las autodefensas campesinas que posteriormente se transformaron en un movimiento insurgente; en este capítulo,

nos vamos a centrar en una contextualización solo a partir de la década de los ochenta del siglo pasado¹⁹⁴.

En el periodo comprendido entre 1982 y 1995, el GMH identifica algunas características particulares de la confrontación armada y el conflicto social en el país, caracterizado por “una tendencia creciente marcada por la expansión de las guerrillas, la irrupción de los grupos paramilitares, la propagación del narcotráfico, las reformas democráticas y la crisis del Estado” (CNMH, 2013, p. 33). Posteriormente, entre 1996 y 2002, se presentó un escalamiento en la confrontación armada debido al “fortalecimiento militar de las guerrillas, la expansión nacional de los grupos paramilitares, la crisis del Estado, la crisis económica, la reconfiguración del narcotráfico y su reacomodamiento dentro de las coordenadas del conflicto armado” (GMH, 2013, p. 33).

La periodización que plantea el Grupo de Memoria Histórica nos va a permitir contextualizar la forma en que los sectores sociales populares han entendido e interpretado el(los) conflicto(s) en sus territorios. Es de señalar que el GMH recoge los aportes de trabajos anteriores como los de Pécaut (2004), Salas (2010), Echandia(2006), Pizarro (2006), González (2014), entre otros; para la identificación de los elementos de cada uno de los periodos señalados anteriormente. Por tanto, a continuación, señalaremos algunos elementos relacionados con estas características que nos parecen relevantes para la comprensión del(los) conflicto(s).

¹⁹⁴ El conflicto entre los dos partidos tradicionales desencadenó una fuerte crisis social, política y económica manifiesta en el número elevado de víctimas: se calcula, entre 100.000 y 300.000. Es importante señalar que, pese a la degradación del enfrentamiento, no fue catalogado como una guerra civil. Para Gonzalo Sánchez (1986) el término de La Violencia ha sido interpretado en tres sentidos:

Describir o sugerir la inusitada dosis de barbarie que asumió la contienda; otras veces se apunta al conjunto no coherente de procesos que la caracterizan: esa mezcla de anarquía, de insurgencia campesina y de terror oficial en la cual sería inútil tratar de establecer cuál de sus componentes juega el papel dominante; y, finalmente en la mayoría de los casos, en el lenguaje oficial, el vocablo cumple una función ideológica particular: ocultar el contenido social o los efectos de clase de la crisis política. (p. 14)

Por otra parte, señalar que el libro de referencia para el estudio de este periodo es *Violencia en Colombia* publicado en 1962, escrito por Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. Existe un amplio consenso sobre la publicación como el inicio de lo que autores como Ortiz (1992), Pécaut (1998), Palacio, Hoyos, & Jiménez (2002), Sánchez (1986) y Cubides (2003) consideran el primer momento de la producción de las investigaciones sociales acerca de los diferentes fenómenos asociados a la(s) violencia(s) y al conflicto(s). El libro logró estructurar un objeto de estudio que le permitió, por un lado, tomar distancia de la parcialidad académica que caracterizaron a anteriores publicaciones y del enfrentamiento bipartidista que logró penetrar en las instituciones universitarias, obstaculizando una labor de investigación que diera cuenta de la complejidad de la problemática social; por otra parte, allanó el camino para el análisis de los relatos de los actores de la violencia que, en los años cincuenta, se registró solo de manera testimonial.

CAPÍTULO 4. Aproximación a la conflictividad social y armada en el periodo de 1986-2002

4.1. La expansión del movimiento guerrillero

La expansión del movimiento guerrillero y de los grupos paramilitares en la década de los ochenta y de los noventa generó una nueva reconfiguración de los territorios y de las relaciones de poder. La disputa por el control social, político, económico y cultural en la escala local, se caracterizó por la presencia de nuevos actores legales e ilegales, que buscaban controlar, afectar o administrar los territorios para hacer viables sus propios proyectos políticos y económicos.

Tanto González (2014) como Salas (2010, 2016) coinciden en que los cambios políticos derivados de los procesos de descentralización, la reforma del Estado y la apertura económica, que se iniciaron en la década de los ochenta con la elección popular de alcaldes y gobernadores, abrieron la puerta a la competencia por el control de los recursos. De esta manera, los actores armados utilizaron diferentes métodos coercitivos (extorsión, secuestro, compra de votos, manejo de los sectores de la población, entre otros) y de presión, para ejercer un dominio territorial y acceder al poder local. Tanto el movimiento insurgente, los grupos paramilitares y el mismo Estado, entraron en una disputa por mantener hegemonías en los territorios.

La consolidación de dichas hegemonías ha representado para los actores armados el establecimiento de micro poderes permitiendo la consolidación de operaciones ilegales, el aumento del poder económico y la coacción de la voluntad política de las comunidades, consolidando así una estrategia de poder territorial soportada en el ejercicio de la violencia. (Salas, 2016, p. 47)

El impacto de las políticas nacionales en las dinámicas territoriales y en el desarrollo del conflicto social y armado no ha sido homogéneo, ha variado según las características espacio-temporales de las regiones y de las localidades, así como de las relaciones entre centro-periferia y la articulación con un escenario global de acumulación de capital.

Durante el gobierno de César Gaviria, bajo el leitmotiv “*Bienvenidos al Futuro*”, se consolidó el tránsito de un modelo de desarrollo centrado en el mercado interno y en la industrialización, hacia la promoción de importaciones mercantiles, bajo un modelo de apertura económica y desregulación comercial¹⁹⁵. En este periodo se gestó un paquete de reformas de gran

¹⁹⁵ En el Plan de Desarrollo del gobierno de César Gaviria (1990-1994), titulado la *Revolución Pacífica*, se recoge el cambio de un modelo económico con tintes proteccionistas a un modelo centrado en la apertura económica, en la

calado que incidieron no solo en la estructura económica, sino también, en las relaciones políticas y sociales que tuvieron manifestaciones diversas en los territorios, y por supuesto, en la configuración de los diferentes conflictos (no solo el armado). El cambio de modelo económico y la reforma del Estado implicaron un cambio de la institucionalidad en las zonas rurales, ampliando los espacios de disputa de los actores armados que pugnaban por implementar sus propios modelos políticos y económicos (GMH, 2013). Esta disputa implicaba la desarticulación violenta en los proyectos sociales de las comunidades y de las economías campesinas.

Fernán González (2014) en su estudio sobre *Poder y violencia en Colombia*, que recoge parte de los resultados del trabajo del Observatorio Colombiano para el Desarrollo Sostenible, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional (ODECOFI), señala precisamente las variaciones que se presentan de una región a otra:

Los estudios de caso regionales hacen evidentes las diferencias de las interacciones entre el Estado central, las regiones y las localidades, mostrando los diversos efectos descargados sobre las políticas nacionales en los ámbitos regionales y locales. El contraste entre el Bajo Putumayo, donde la bonanza cocalera lleva a los pobladores a insertarse formalmente en las instituciones estatales para acceder a ciertos beneficios y a ser reconocidos e integrados a las lógicas del Estado central, y el oriente antioqueño, donde la mayor estatalización de las políticas de infraestructura y electrificación, por el hecho de afectar diferenciadamente a la región, es observada como amenaza para la identidad cultural, muestra de qué manera las diferentes situaciones previamente existentes inciden en las interacciones suscitadas entre los diferentes espacios de poder. (p. 21)

Para este autor, las dinámicas de configuración del poder territorial y su relación con la violencia, se entienden a partir de lo que ha denominado la “presencia diferenciada del Estado en el espacio y el tiempo”. Este concepto aborda la construcción de las instituciones estatales a partir de la organización interna, de las formas y momentos de poblamiento, y de la articulación de las regiones a la centralidad. Por consiguiente, la construcción diferenciada del Estado en los

liberalización comercial y en la desregulación estatal. Para ello, se estima que el Estado debe recortar sus funciones en la economía y ser un facilitador de los procesos económicos y del funcionamiento del mercado. Según se señala en el texto, el país se debe alinear con la nueva teoría del desarrollo, según la cual:

El propósito de la acción del Estado no es, pues, sustituir los mercados y las condiciones de competencia, sino promocionarlos, porque las economías más competitivas han sido más eficientes y porque las economías más eficientes han generado mayor crecimiento y equidad. Las bondades de la promoción de la competencia entre las empresas y los sectores se han hecho evidentes: ella obliga a una asignación eficiente de los recursos, lo cual se manifiesta en una producción más competitiva y en unos productores más competentes. (Departamento de Planeación Nacional, 1991)

territorios se ha visto confrontada con la evolución de los actores armados ilegales (guerrilla y paramilitares) y las alianzas y articulaciones con las élites regionales para el control de los territorios (González 2009, 2014).

Los actores armados ilegales han sabido leer las diferentes transformaciones políticas, han desarrollado estrategias y alianzas con las élites regionales para la puesta en marcha de sus propios proyectos políticos y económicos. Los grupos paramilitares captaron recursos financiados por hacendados, políticos, empresas, narcotraficantes, con apoyo logístico de sectores de las fuerzas armadas, y desvío directo de recursos públicos por estas alianzas. El movimiento insurgente se adaptó a los cambios derivados de los procesos de descentralización y del modelo neoliberal. Las fuentes de financiación de la guerrilla transitaban de las vacunas, los bonos revolucionarios, los apoyos de la población campesina a las derivadas de la economía extractiva (oro, minería, hidrocarburos), el secuestro y, por supuesto, los cultivos de uso ilícito.

Por tanto, las acciones de los actores armados ilegales se desplazan a regiones en las que se desarrolla este tipo de economías de enclave y a cabeceras municipales importantes geoestratégicamente (Figura 1 y Figura 2) (Salas, 2016). Este es un proceso paulatino que comenzó a partir de la década de los ochenta¹⁹⁶. A finales de los noventa y en la primera década del presente siglo, se produce un fenómeno que autores como Jerónimo Ríos han denominado la “periferialización” del conflicto armado (Ríos, 2016).

Como se ha señalado, la década de los ochenta y de los noventa se caracterizó por un repunte en los niveles de violencia y un recrudecimiento del conflicto armado debido, a que lo local ganó alguna fuerza con la descentralización. Hechos que se encuentran relacionados con los cambios de estrategia de los movimientos insurgentes, en particular de las FARC y del ELN, que transitaban desde regiones de influencia histórica hacia zonas urbanas y de economías de enclave (Figura 1, Figura 2).

Los indicadores de violencia se dispararon por la acción de los grupos de autodefensas y por la consolidación del fenómeno del narcotráfico. El dinero proveniente de la economía de la droga vinculó los círculos financieros en ese mundo rural apartado con los circuitos de mercados que incluyeron: bienes de uso normal, químicos, artículos de lujo, casas de recreo, inversiones en

¹⁹⁶ Los cambios en las fuentes de financiación también se relacionan con un contexto internacional que se mostraba adverso a las huestes políticas de la guerrilla: la crisis del socialismo real y la caída de la URSS, el cercamiento estadounidense a Cuba, la deslegitimación de la lucha armada, entre otros elementos que se juegan en el ámbito de la geopolítica.

tierra, y los circuitos de lavado de dinero en empresas con asiento urbano como la construcción, la banca y los autos, electrodomésticos, y pequeños negocios que eran útiles para el lavado de dinero que circuló por los bancos y casas de cambio. El narcotráfico ha hecho una labor de redistribución perversa de dinero y de riqueza que no hacen las políticas de desarrollo. La lucha entre los principales carteles de la droga para captar las rentas producidas por el circuito de la economía legal e ilegal se intensificó y se dejó sentir de manera especial en capitales como Medellín y Cali, en los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y en algunas zonas del Eje Cafetero.

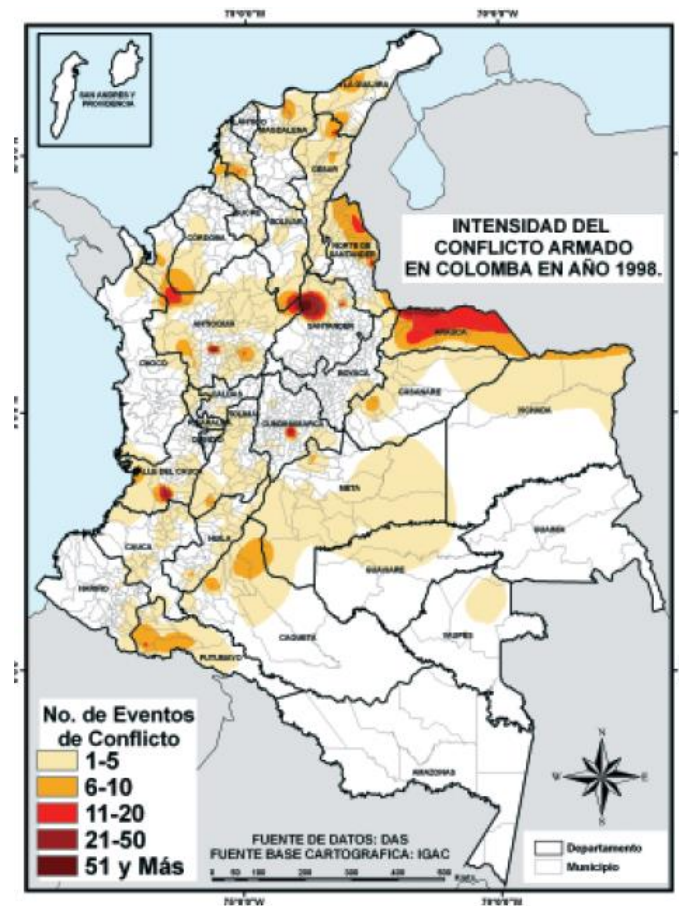
A mediados de la década de los noventa, los niveles de violencia ejercida por estos grupos descenden, en parte, por la muerte o captura de los principales líderes de los carteles de la droga. En el caso de las FARC y el ELN, se puede observar una consolidación de la estructura armada y un desdoblamiento de los frentes. A finales de esta década y principios del 2000, las correlaciones de fuerza entre el Estado y los actores armados ilegales se alteraron debido a la puesta en marcha del Plan Colombia¹⁹⁷, en donde las Fuerzas Militares sufrieron una profunda transformación y modernización.

El Plan Colombia implicó la modernización y la profesionalización de las Fuerzas Militares, que comprendía cinco líneas de acción: primera, la mejora de la inteligencia militar a través de un sistema unificado de información; segunda, el aumento del pie de fuerza; tercera, la creación de nuevas estructuras militares y especializadas como los batallones de Alta Montaña¹⁹⁸, las brigadas móviles y los Batallones Contraguerrilla, cuyo objetivo era cortar los corredores de movilidad de la guerrilla, en particular en la Cordillera Oriental; cuarta, modernizar la Fuerza Aérea, fundamental para obtener una ventaja estratégica; quinta, la puesta en marcha de una red de apoyo civil en la lucha contrainsurgente (Ávila, 2008).

¹⁹⁷ En 1999, el gobierno de Andrés Pastrana presentó el *Plan Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado*. Según se recoge en el documento y las declaraciones del gobierno, el Plan tenía como objetivo la reactivación de la economía, la reestructuración de las Fuerzas Armadas, la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos humanos, estimular la inversión privada, erradicar los cultivos de uso ilícito y contribuir a la consolidación de la paz. El presidente Pastrana consideraba que el problema del narcotráfico no se circunscribía a las fronteras nacionales, sino que por sus características era de ámbito transnacional. En este sentido, la lucha contra las drogas debía ser producto de la articulación de esfuerzos entre diferentes gobiernos. Para ello, se debía implementar una especie de Plan Marshall para Colombia bajo el principio de una responsabilidad compartida. La participación de los países que hacían parte del otro eslabón de la cadena, los países consumidores, era fundamental; no solo en términos financieros sino de fortalecimiento político y militar (Pastrana, 2005).

¹⁹⁸ Los Batallones de Alta Montaña se encuentra ubicados en la Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra Nevada del Cocuy, el Páramo de Sumapaz, Macizo caucano, Quindío y Valle del Cauca.

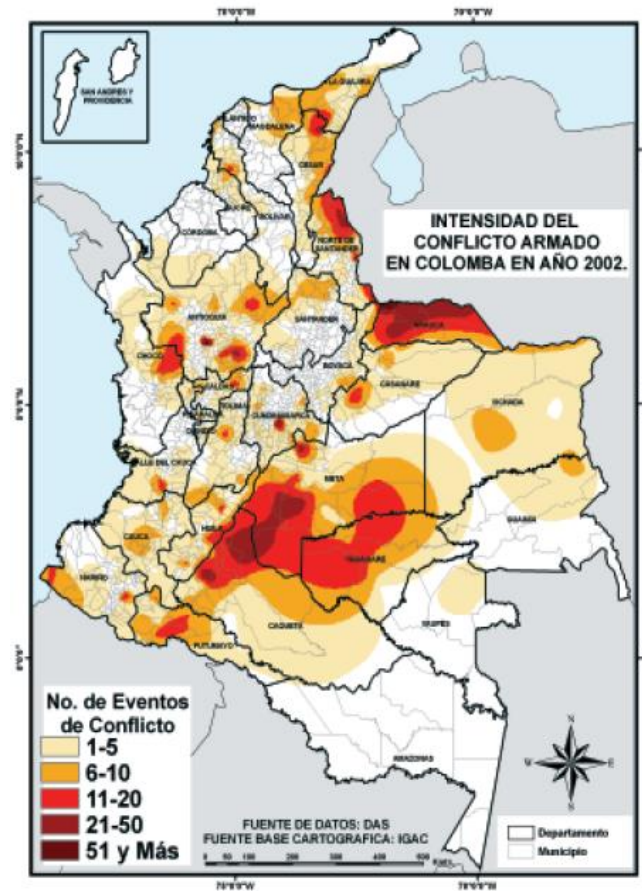
Figura 1. Intensidad del conflicto armado en Colombia en el año 1998



Fuente: Adaptado de *Corredores y territorios estratégicos del conflicto armado colombiano: una prioridad por territorializar en la geopolítica de los actores armados* (p. 16), por Salas, 2010.

Los focos de conflicto se localizaron en este periodo en la zona norte del país, en los departamentos del Norte de Santander (Catatumbo) y de Arauca y en la región del Urabá antioqueño. Asimismo, se produjo una extensión y una escalada del conflicto armado, extensible a prácticamente todo el país. Además, en las Figuras 1 y 2, se observa que la intensidad del enfrentamiento se concentra en las estribaciones de la Cordillera Oriental, hacia el sur del país, convirtiéndose en una de las zonas estratégicas de disputa de los actores armados. Salas identifica este corredor en la zona suroccidente como un territorio estratégico “en tanto permite la comunicación hacia el interior del país, la Amazonia colombiana, Ecuador y Perú y hacia el océano Pacífico” (Salas, 2010, p. 27). Asimismo, se reconoce un aumento en la intensidad del conflicto armado en las regiones al norte de Colombia, en la frontera con Venezuela.

Figura 2. Intensidad del conflicto armado en Colombia en el año 2002



Fuente: Adaptado de *Corredores y territorios estratégicos del conflicto armado colombiano: una prioridad por territorializar en la geopolítica de los actores armados* (p. 17), por Salas, 2010.

4.1.1. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP)

A comienzos de los años ochenta, las FARC-EP inició un proceso de expansión territorial, saliendo de sus zonas tradicionales de actuación de carácter periférico, semiintegradas a la vida nacional y de colonización campesina¹⁹⁹, para avanzar hacia espacios de mayor crecimiento económico e integración en el mercado nacional, pero a su vez con fuertes contradicciones sociales y una débil presencia de las instituciones del Estado.

¹⁹⁹ Catherine Legrand señala que la violencia bipartidista de la década de los cincuenta del siglo pasado conllevó nuevas oleadas de colonización campesina en territorios periféricos e importantes flujos migratorios hacia las ciudades. Estas dinámicas están asociadas a la irrupción de un nuevo tipo de movimientos guerrilleros, influenciados por el pensamiento marxista y leninista, y con una filosofía de corte más radical que los movimientos de autodefensa campesina surgidos en años anteriores (Legrand, 1989).

En la VII Conferencia de las FARC, que se llevó a cabo del 4 al 14 de mayo de 1982 en la Uribe – Meta, el movimiento insurgente añadió a sus siglas EP, para hacer referencia al Ejército del Pueblo. Esta decisión fue significativa ya que evidenció un proceso de transición militar de la vieja guerrilla (autodefensas campesinas móviles) a una estructura más amplia que le pudiera disputar el poder al Estado. Este cambio nominativo hace parte de la estrategia de expansión territorial que el grupo adoptó durante los siguientes años y que ya se vislumbraba en conferencias anteriores²⁰⁰.

Es de señalar que en la VII Conferencia se recogió también un plan estratégico denominado *Campaña Bolivariana por una Nueva Colombia*, en donde se consignaban los principales lineamientos para una nueva acción política y militar en concordancia con la idea de un ejército irregular y revolucionario que les permitiera acceder al poder a través de las armas. La estrategia se fundamentaba en la concepción de una confrontación armada con el Estado a largo plazo y, para ello, la necesidad de controlar o de tener presencia en buena parte del territorio nacional. Este salto se da a partir del control estratégico de sus zonas de retaguardia²⁰¹, espacios en los que ha tenido presencia de manera continua desde su fundación y caracterizados por importantes conflictos agrarios, lo que le permitió extenderse a otras zonas con relativa importancia económica debido a la presencia de recursos que alimentan los procesos de acumulación de capital.

Además, la guerrilla reconoció tres finalidades en la estrategia de ampliación de su poder de influencia: primero, conseguir una alta dispersión de los frentes; segundo, diversificar los orígenes de financiación y de recursos; tercero, extender y elevar su capacidad de influencia en la escala local (Echandia, 2006, p. 23).

²⁰⁰ En relación a la VI Conferencia del movimiento guerrillero realizada 1978, Jacobo Arenas, uno de los principales dirigentes e ideólogos de la organización, señalaba la importancia pasar a un segundo momento de su accionar:

En la Sexta Conferencia se dijo que para crear un Ejército era indispensable capacitar un mando, crecer en hombres, armas, en finanzas, crear escuelas regionales a nivel de frentes, inclusive una escuela a nivel de estado mayor, a nivel de Secretariado. Un mando de hombres que comprendiera la tarea de que significaba crear un pequeño ejército (...) Se discutieron cuestiones estratégicas sobre la necesidad de desdoblamiento de los frentes y la ocupación de nuevas áreas de influencia, como una parte de la estrategia de lo que debía ser ese pequeño ejército. (Alape, 1994, p. 76)

²⁰¹ La variable territorial juega un papel fundamental en el despliegue operativo y táctico del conflicto armado. Los actores irregulares seleccionan los territorios de sus actuaciones, así como las formas de dominio e influencia sobre las comunidades (desplazamiento, confinamiento, etc.) Las zonas de retaguardia también se seleccionan en función de las ventajas comparativas frente a otros lugares. Se consideran zonas seguras en las que pueden disponer de recursos políticos y militares, con unas condiciones geográficas particulares y generalmente con vínculos históricos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016a).

De acuerdo a estos lineamientos, las FARC iniciaron un proceso de expansión hacia zonas de cultivos de uso ilícito, localizadas en zonas marginales, con poca presencia estatal, que les aseguraba un flujo de recursos económicos; algo importante para lograr la consolidación de sus frentes, así como recabar apoyos sociales entre el campesinado, ofreciendo servicios de seguridad y protección, al margen de las acciones de bandas criminales dedicadas al negocio del narcotráfico. La economía de la guerra llevó a la organización a situar sus frentes en departamentos con un número importante de hectáreas cultivadas con coca. A finales de la década de los ochenta, de los 33 frentes que conformaban la organización, 15 estaban localizados en zonas con tales características: “siete Frentes en Caquetá, de los cuales tres también operaban en Putumayo, Meta y Cauca; cuatro en Meta; dos Frentes en Casanare, uno de ellos con movilidad hacia Arauca; uno en Guaviare, y otro más en Vichada” (Aguilera Peña, 2014 [2011], p. 145).

Por consiguiente, la ampliación de los frentes de la guerrilla de las FARC no fue un movimiento aleatorio, sino que respondió a una estrategia planificada, no solo en términos espaciales, sino también temporales; y a una lectura territorial de las condiciones políticas, económicas y militares. De manera que dicha estrategia se constituyó en:

Una concreción en el terreno del principio del manejo del espacio que ilumina la guerra de guerrillas: la libertad de movimiento, que es contenido esencial de toda estrategia militar, se logra extendiendo la confrontación a todo el territorio del país, donde se desarrolla la guerra irregular. (Rangel, 1999 citado por Pizarro, 2006, p. 175)

Fernán E. González señala esta reconfiguración territorial de las FARC de la siguiente manera:

Desde 1982 habían comenzado a desdoblar sus frentes para extenderse a zonas que habían experimentado transformaciones en materia de estructura ganadera (Meta, Caquetá, Magdalena Medio y Córdoba), agricultura comercial (zona bananera de Urabá, áreas del Santander y el sur del César), así como la explotación de petróleo (Magdalena Medio, Sarare y Catatumbo), carbón (César y Guajira), oro (Sur de Bolívar, Bajo Cauca Antioqueño) y coca (Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Sierra Nevada de Santa Marta). (González F., Vásquez, Quiroga, Barrera y Aponte, 2011, citado por González, 2014, p. 384)²⁰²

²⁰² Fernán E. González coordinó el grupo de investigación ODECOFI que, junto con otros académicos como Teófilo Vásquez e Ingrid Bolívar, han analizado las dinámicas espacio-temporales del conflicto armado en relación con la presencia diferenciada del Estado en los territorios, las tensiones económicas y sociales no resueltas (en particular las del sector rural), la captación de las rentas y las economías ilegales, y el comportamiento de las élites regionales.

Este proceso de expansión de las FARC se completó con la presencia en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y los departamentos de Sucre y Bolívar. Además, el grupo insurgente consolidó su presencia en regiones como el Magdalena Medio santandereano y reforzó su accionar en Puerto Boyacá. (González F. E., 2014, págs. 384-385)

La expansión de las FARC implicó un cambio en las dinámicas del conflicto armado que tradicionalmente se había circunscrito a sus territorios históricos de dominio, situados en zonas alejadas de los principales centros urbanos del país. Es importante aclarar que en este proceso la guerrilla mantuvo su presencia y control en esas zonas de retaguardia, al mismo tiempo que se extendía a regiones y municipios que se encontraban más integrados en la economía nacional, incluso con presencia en zonas urbanas (Echandía, 2006).

La descripción que realiza González de los nuevos territorios con presencia de las FARC, se puede relacionar con el control de determinados recursos asociados con la minería, los hidrocarburos, agrocultivos, zonas de ganadería y de cultivos de uso ilícito; en donde se disputa con otros actores armados la captación de las rentas legales e ilegales. Este análisis es compartido por otros autores que han trabajado la expansión de los movimientos insurgentes (Echandía, 2006; Ríos Sierra, 2016). El control de estos territorios le permitió ampliar las fuentes de financiación, así como obtener nuevos recursos en la línea de mantener y consolidar un ejército revolucionario²⁰³.

Al respecto, Eduardo Pizarro señala que:

Este flujo sin antecedentes de recursos financieros va a permitir el fortalecimiento de los tres grupos guerrilleros de la primera generación: las FARC, el ELN y el Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL). En el caso de los primeros, su despegue económico provendrá fundamentalmente del impuesto de drogas ilícitas, lo cual le va a permitir a este movimiento gestar nuevos frentes armados, ahora con criterios ante todo estratégico-militares; por ejemplo, el control de la Cordillera Oriental para intentar cercar y estrangular a Bogotá. (Pizarro, 2006, p. 185)

Este autor señala que en la expansión tanto de las FARC como del ELN hacia zonas de interés económico y militar se produjo un proceso paulatino de erosión institucional debido al

²⁰³ Los recursos provenientes de los cultivos de uso ilícito generaron una diferenciación entre los Frentes. De esta manera, estaban los Frentes “ricos” situados en las zonas de hoja de coca y los Frentes “pobres” localizados en departamentos con otro tipo de economías. En los primeros, el dinero provenía fundamentalmente del impuesto de “gramaje” pero también de cobros a narcotraficantes por el cuidado de los laboratorios y de las facilidades para sacar los cargamentos de droga de los territorios. (Aguilera Peña, 2014 [2011])

control local que ejercía el movimiento insurgente: manifiesto en la expulsión de las Fuerzas Militares, en los atentados contra políticos locales o en la cooptación de estos y su incidencia en los presupuestos municipales, erosionando aún más la presencia del gobierno central (Pizarro, 2006, p. 186).

4.1.2. El Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Para entender el proceso de crecimiento del ELN, es importante recordar que la organización surgió a principios de la década del sesenta en la región del Magdalena Medio santandereano. Esta zona se caracterizó por las luchas del movimiento obrero asociado a la industria petrolera y por un importante influjo del movimiento estudiantil. En este contexto, la organización se conformó con simpatizantes provenientes de los sectores medios, así como de campesinos de la zona que venían de la lucha partidista. En esta primera etapa, el ELN contó con pocos recursos financieros, por lo que el material bélico con el que contaban era restringido. Asimismo, las zonas de actuación eran pobres, marginales y de reciente colonización campesina por lo que tuvo que acudir a los bonos de esperanza revolucionarios²⁰⁴ y a la eficacia de las acciones militares para hacerse con material militar para la confrontación armada (Aguilera, 2006, p. 214-216).

Posteriormente, desde mediados de los años ochenta se asistió a un proceso de fortalecimiento de la organización. Es importante recordar que en 1973 las Fuerzas Militares (FFMM) desplegaron la *Operación Anorí*²⁰⁵, que implicó la pérdida de una parte importante de los combatientes y representó una serie de derrotas militares y de conflictos internos que minaron la estructura del ELN (entre otros hechos, la muerte en combate de Camilo Torres en febrero de 1966,

²⁰⁴ Los *bonos de esperanza revolucionaria* eran aportes más o menos voluntarios que realizaban pequeños campesinos y comerciantes para la causa insurgente, y que serían retribuidos una vez triunfara la revolución.

²⁰⁵ La *Operación Anorí* se desarrolló entre los meses de agosto y octubre, cuando el movimiento insurgente desplegaba operaciones para ampliar su radio de acción al departamento de Antioquía y de Bolívar. La ofensiva militar dejó como resultado la muerte de aproximadamente ochenta guerrilleros y la detención de unos cincuenta, representando un golpe casi mortal para la guerrilla. Es importante señalar que, desde el surgimiento del ELN en 1964, su crecimiento y acción militar no fue tan exponencial como el de las FARC. En este sentido, en el momento de su fundación contaba con 18 hombres, una década más tarde llegaba a 270 guerrilleros y, a finales de los años setenta, solo contaba con 36 personas. La debilidad del ELN se atribuye a su concepción foquista de la lucha armada que lo llevó a un aislamiento del movimiento social:

El foquismo insurreccional se basaba en la negación del partido de vanguardia y en la subordinación de lo político a lo militar. Se consideraba también que las condiciones objetivas para hacer la revolución ya estaban dadas y que se trataba de acelerar el proceso mediante el desarrollo y consolidación de la actividad guerrillera. (Aguilera, 2006, p. 215)

un error de estrategia política, sin duda alguna, ya que la organización perdió a uno de sus referentes ideológicos)²⁰⁶.

A finales de los setenta y principios de los ochenta, la organización comenzó un proceso de reestructuración que incluyó algunas acciones en el ámbito urbano y un mayor contacto con sectores populares, así como una reorientación política que buscaba la unidad del movimiento a través de una dirección colegiada. La estrategia del movimiento para los años posteriores, se construyó en la Reunión Nacional de Héroes y Mártires de Anorí celebrada en 1983 y en el I Congreso Nacional “Camilo Torres” que se llevó a cabo en 1986. En estos dos encuentros se planteó la necesidad de fortalecer la organización en el ámbito nacional, pero con un funcionamiento federado. Es así como en el Congreso Nacional se conformó un comando central compuesto por miembros de la organización nacional.

En este último encuentro, la organización marcó derroteros políticos y militares que iban a ser fundamentales para entender sus acciones en años posteriores. En primer lugar, asumió una orientación ideológica marxista-leninista dejando atrás su ideología nacional-popular y mantuvo la relación entre marxismo y cristianismo, siendo una de las principales características de la organización desde su nacimiento. En segundo lugar, planteó la necesidad de una política de alianzas con otras organizaciones revolucionarias e insurgentes. Finalmente, tomaron la decisión de desdoblar los frentes²⁰⁷ y la puesta en marcha de una estrategia militar denominada “guerra popular prolongada” que planteó la necesidad de articular el enfrentamiento militar en el campo con las acciones en zonas urbanas, ya que estimaban que la revolución no sería posible solo con el despliegue en las zonas rurales; asimismo, la estrategia militar debía combinarse con acciones

²⁰⁶ El ELN se caracterizó por la participación de un número importante de sacerdotes católicos simpatizantes de los preceptos de la Teología de la Liberación. Entre los que se destacan: Domingo Laín, José Antonio Jiménez, Manuel Pérez, Carmelo Gracia, Diego Uribe Escobar, Bernardo López Arroyave, Laurentino Rueda, entre otros. Algunos de ellos llegaron a ser parte de la dirección de la organización como es el caso del cura español Manuel Pérez.

²⁰⁷ Aguilera retoma a Harnecker para aclarar el significado de “frente” en la estrategia insurgente del ELN, a saber:

Un “frente” guerrillero es “una instancia político-militar y de masas”. Varios “frentes” guerrilleros y regionales (estructuras urbanas) “conforman un frente de guerra, cuyas características están dadas por la actividad socio-económica de la región (...) Un frente de guerra es el conjunto de estructuras urbanas y rurales que desarrollan la política de la organización en una gran región del país y que por sus características exigen un diseño estratégico específico. (Harnecker, 1998 citado por Echandía 2006, p. 25)

En esta línea es importante señalar que a inicios de los ochenta el ELN contaba con dos frentes de guerra denominados actualmente como nororiental y noroccidental. El primero contaba con los “frentes” Domingo Laín en la región y Camilo Torres en la parte del Magdalena Medio de los departamentos del Santander y César. El segundo correspondía al “frente” José Antonio Galán en Antioquia (Echandía, 2006, p. 25-26).

políticas enfocadas a la construcción de poder popular, concepto que sería perfilado en los posteriores congresos del movimiento.

Este proceso se tradujo en un fortalecimiento de la organización, en la ampliación de sus frentes y en el despliegue de acciones en zonas de extracción de hidrocarburos, petróleo, en particular. Diferentes autores (Echandía, 2006; González, 2014; Aguilera, 2006; Cubides, 2005; GMH, 2013) coinciden en que la expansión del ELN a mediados de los años ochenta estuvo relacionada con la explotación del pozo Caño Limón (Arauca) y con la posterior construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas (Sarare, Magdalena Medio, Catatumbo, Serranía del Perijá, Oriente Antioqueño, Nordeste Antioqueño, Sur de Bolívar, Sucre, Valle del Cauca y Sur del César).

El GMH (2013) señala que la presencia del movimiento se consolidó en estas zonas del país y en el Valle del Cauca y el sur del César, donde tendieron puentes con sectores del campesinado y del sindicalismo agroindustrial ligado a los cultivos de palma aceitera y de caña de azúcar. Es de señalar que las acciones militares emprendidas por el ELN en el marco de la confrontación armada, como el secuestro, la extorsión y los atentados al oleoducto, generaron un fuerte enfrentamiento con las élites económicas regionales (ganaderos y terratenientes). Estas acciones y las consecuencias no esperadas —o no calculadas— de los atentados a las infraestructuras de extracción de hidrocarburos y de comunicaciones, tuvieron como consecuencia la deslegitimación frente a amplios sectores de la opinión pública.

La estrategia política y militar de la organización se centró en atacar algunos de los pilares de la economía del país: las acciones emprendidas contra la infraestructura eléctrica, transporte o de explotación de hidrocarburos pretendía, además, enviar un mensaje antimperialista de defensa de la soberanía nacional. Precisamente, una parte importante de los recursos económicos de la organización procedía del sabotaje de las compañías petroleras, vacunas, secuestros, etc. En la década de los ochenta y principios de los noventa, el ELN también incursionó en algunas regiones del suroccidente del país, al occidente de Nariño (Samaniego) y el Macizo Colombiano. En la región Caribe, Sierra Nevada de Santa Marta y en los Montes de María (González, 2014, p. 386).

Como se ha señalado, el ELN tuvo un importante crecimiento entre 1986 y 1993, periodo en el cual se proyectó una significativa reorganización político militar. Sin embargo, a partir de este último año se presentó un estancamiento en la expansión del movimiento debido a las

tensiones internas entre los diferentes frentes y a su estructura centralizada. En este sentido, Aguilera señala algunos factores que permiten entender este proceso:

Esa guerrilla sufre a continuación un estancamiento por la persistencia de la rivalidad entre lo político y lo militar, por sus dificultades para tramitar el crecimiento de la organización, por el conservadurismo de la expansión, por su resistencia a derivar provecho de los cultivos ilícitos, por el desarrollo de condiciones adversas para ampliar su base social (reflujo de los movimientos sociales, crisis del socialismo, declive de la izquierda e impacto de la Constitución de 1991) y por el cambio de las condiciones para la guerra (avance del paramilitarismo y aumento de la capacidad ofensiva de la fuerza pública). (Aguilera, 2006, p. 262)

En el III Congreso Nacional celebrado en 1996, la organización perfila el concepto de poder popular, señalando las siguientes características: Primero, se debe inscribir en la guerra popular prolongada, pues para el ELN su acción se centra en las condiciones objetivas derivadas de la “lucha de clases”, así como en la construcción de organización popular según las fases del enfrentamiento armado. Segundo, el movimiento tiene dos ejes diferenciados: el eje militar, que implica destrucción; y el eje de la construcción popular, donde resaltan el aspecto creativo de su lucha; este último permitiría la construcción de una nueva sociedad, así como avanzar en cada etapa de la guerra para conseguir ese fin último. Tercero, la construcción popular se debía hacer tanto desde lo institucional aprovechando las grietas del sistema como extrainstitucionalmente, es decir, la creación de poder “desde abajo” a través de formas de organización y participación. Cuarto, estas formas alternativas de poder popular debían constituir proyectos societales sustentados en los valores comunitarios frente al individualismo del sistema, lo que sería la base de una sociedad regida bajo el modelo socialista (Aguilera, 2006).

La adopción de esta estrategia correspondía también a una lectura de las transformaciones políticas y del Estado, acaecidas en estos años: los procesos de descentralización política y administrativa, la elección popular de alcaldes, las reformas contenidas en la Constitución de 1991²⁰⁸, la apertura económica y la profundización del modelo neoliberal durante el gobierno de

²⁰⁸ La Corriente de Renovación Socialista (CRS) planteó el debate al interior de la organización sobre las nuevas condiciones de participación política y de apertura democrática que el proceso constituyente y la misma Constitución de 1991 representaban. Por lo tanto, estimaban que se abría una estructura de oportunidad política para generar una serie de reformas en el sistema político que el movimiento insurgente debía aprovechar; estimaban que se debía estimular la protesta social y la lucha democrática. La finalidad era presionar a la oligarquía y a los partidos tradicionales para que implementaran una fase reformista que abriera los cauces para una nueva vía revolucionaria (Medina Gallego, 2008). Esta posición generó tensiones entre un ala más militarista y una facción más política al interior de la guerrilla. La primera consideraba que se debía privilegiar la lucha extrainstitucional, tanto en las zonas rurales, como las urbanas. Por su parte, el ala más política planteaba una renovación de los planteamientos de la lucha

César Gaviria, entre otros elementos. Por tanto, el movimiento debía enfrentar esta nueva ola reformista desde la inserción en las dinámicas políticas locales para asegurar los recursos necesarios, organizar la base social para el desarrollo de sus acciones y la construcción de un poder alternativo que les permitiera sentar las bases de una nueva sociedad en los territorios de influencia.

En este sentido, el movimiento adoptó una estrategia de doble vía: una institucional, incidiendo en la elección popular de alcaldes y en la política local; y una vía alternativa través de la construcción de poder popular en las comunidades, tanto rurales como urbanas. De esta manera, la organización planteaba la creación de formas organizativas comunitarias a pequeña escala, que establecieran sus propias territorialidades, disputando el control hegemónico del Estado. En el fondo, consistía en producir una desterritorialización para reterritorializar a partir de la acción en los espacios cotidianos (la vereda, el barrio, etc.). En definitiva, una nueva institucionalidad social y política. Carlos Medina lo explica de la siguiente manera:

En general la construcción de poder popular consistiría en generar nuevas formas de organización que permitiesen transformar las existentes y dar origen a las formas de un nuevo Estado y una nueva sociedad, incluyendo el problema de la defensa armada de esa nueva institucionalidad política y social. Ese proceso debía gestarse a nivel regional, local y sectorial, allí el pueblo se comprometería a conquistar espacios de poder, a tomar decisiones autónomas. (Medina Gallego, 2008, p. 432)

Sin embargo, la estrategia de construcción de poder popular se enfrentó a partir de mediados de la década de los noventa a lo que el movimiento denominó una ofensiva contrarrevolucionaria. Representada en el accionar de los grupos paramilitares y su expansión territorial, que les disputaba el control de los territorios, tradicionalmente controlados por el movimiento insurgente. La guerrilla consideraba que esta expansión no pudo ser posible sin el beneplácito de las Fuerzas Militares, que ya sea por omisión o acción directa, permitieron el despliegue paramilitar.

La estrategia contrarrevolucionaria implicaba no solo un enfrentamiento directo entre las tropas, sino acciones en contra de la población civil, en particular, sectores populares, con la finalidad de minar la base social del movimiento insurgente. Asimismo, esta etapa se caracterizó, a juicio del ELN, por una consolidación del modelo neoliberal que trajo consigo un empeoramiento

armada que estuviera acorde con el nuevo contexto nacional e internacional y con el proceso acelerado de urbanización que había vivido el país en los últimos años. La CRS fue una escisión dentro del ELN, que tuvo lugar a principios de la década de los noventa y, en el marco de las conversaciones con el gobierno de César Gaviria, se reincorporó a la vida civil y política. Esta decisión fue producto de los debates explicados anteriormente.

de las condiciones de la población. Esta arremetida estuvo acompañada por un escenario internacional que no era favorable a los procesos revolucionarios.

A finales de la década del 2000, el ELN se encontraba muy debilitado por los enfrentamientos con los grupos paramilitares y en algunas regiones con las FARC, así como por la modernización de las Fuerzas Militares que desplegaron un conjunto de estrategias para el control territorial y la lucha contrainsurgente. La capacidad militar de esta organización se debilitó de manera constante. Por consiguiente, desarrolló una estrategia de resistencia pasiva que tuvo una implementación desigual en los territorios, debido a las características propias de la organización (alta descentralización y autonomía de los frentes)²⁰⁹. La base rural y comunitaria en las zonas urbana y rurales, elemento fundamental en su estrategia política y militar, se resintió por las acciones del paramilitarismo en contra de la población civil (Ávila & Celis, 2008).

4.2. La consolidación de los grupos paramilitares y el narcotráfico

El origen de los grupos de autodefensa contemporáneos se localiza a finales de la década de 1960, con la promulgación del Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968. En esta normativa se autorizó su conformación para llevar a cabo acciones relacionadas con el establecimiento del orden público. Las Fuerzas Armadas fueron autorizadas para impartir formación y dotación a la población civil. Estos grupos terminaron al servicio de los grandes terratenientes y de los carteles de la droga. No obstante, el desarrollo de las autodefensas no se puede explicar solamente por la demanda de seguridad de ciertos sectores sociales y económicos frente a la acción de la guerrilla (Echandía, 2013).

A principios de la década de los ochenta, el Cartel de Medellín conformó el grupo Muerte a Secuestradores (MAS), como respuesta a la utilización del secuestro por parte de las guerrillas. Aunque el grupo fue disuelto posteriormente, después de la liberación de Martha Nieves Ochoa²¹⁰, su conformación dio paso a la creación de los grupos paramilitares. Su filosofía y acción

²⁰⁹ La resistencia pasiva consistió en la disminución de actividades bélicas y la concentración en acciones de sabotaje. El debilitamiento de la organización se relaciona con los siguientes factores: la disminución de sus finanzas relacionada en un primer momento con su negativa a aliarse con el narcotráfico; las diferencias y tensiones entre sus frentes por el carácter descentralizado de la organización; el trabajo con las bases sociales que limitó la ocupación de territorios a través de acciones violentas, a diferencia de los paramilitares y las FARC; finalmente, una posición ambigua frente a la participación en procesos de paz (Ávila & Celis, 2008, p. 37).

²¹⁰ Miembro del clan de los Ochoa, una de las familias con más peso al interior del Cartel de Medellín.

contrainsurgente fue adoptada por otros grupos irregulares. En 1982 la Procuraduría de la Nación, en cabeza de Carlos Jiménez, realizó un informe en el que por primera vez se denunciaba la existencia del paramilitarismo y la relación con sectores de las Fuerzas Armadas y del narcotráfico (GMH, 2013).

La creación de estos grupos bajo la tutela de los carteles de la droga no se circunscribió solamente a la lucha contrainsurgente, sino que su acción produjo una “contrarreforma agraria en los territorios”. La expansión del negocio de la droga dependía de la apropiación de las tierras, que se hacía a través de métodos violentos (desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, torturas, etc.), ejercidos contra las comunidades rurales²¹¹ (Echandía, 2013; GMH, 2013; Reyes, 2009; Romero, 2003). “Los grupos más afectados fueron quienes tenían vinculaciones más precarias con la propiedad territorial en regiones poco consolidadas, sin títulos de propiedad ni catastros constituidos, con organizaciones sociales débiles o situaciones ilegales como los cultivos ilícitos” (Reyes, Duica, & Wilmer, 2008, p. 1).

Es relevante señalar que en Colombia se presenta una situación de ambigüedad frente a la propiedad rural. Este hecho ha facilitado el despojo, la concentración y el acaparamiento de la tierra a través de métodos violentos, generando una situación de indefensión y de precariedad para el campesinado que posee y ocupa pequeñas y medianas extensiones de tierra. Por otra parte, los narcotraficantes encontraron en los campesinos despojados y en la colonización de zonas de frontera “los insumos estratégicos para su desarrollo, a saber, tierras de muy bajo costo y mano de obra barata y empobrecida, lejos del control del Estado” (Fajardo M., 2015, p. 126).

A principios de la década de los noventa, la acción de los grupos paramilitares creados por los carteles de la droga en los años ochenta, experimentó cambios significativos. En primer lugar, algunos grupos que actuaban en las zonas de Pacho (Cundinamarca), Puerto Boyacá y en algunas regiones de los departamentos de Córdoba y Urabá se desmovilizaron bajo las políticas de reducción de penas implementadas por el gobierno de César Gaviria. Segundo, las divisiones al interior de los carteles de Cali y de Medellín, y la muerte de Pablo Escobar generaron una reestructuración de los paramilitares. Lejos de propiciar un desmantelamiento de estos grupos, se

²¹¹ Alejandro Reyes, en su libro “Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia” (2009), aborda el proceso de apropiación y de compra de tierras por parte del narcotráfico. Estas prácticas tenían como objetivo lavar el dinero procedente de la economía ilegal de la droga, acumular tierras valorizables, y disponer de territorios para el desarrollo de sus estrategias militares. Este autor estima que, para inicios de la década de los noventa, las tierras adquiridas por estos grupos oscilaban en los cuatro millones de hectáreas, correspondientes a 400 municipios.

produjo la fragmentación de sus estructuras, la expansión territorial y la apertura a nuevos actores ligados al narcotráfico que introdujeron importantes recursos económicos para el mantenimiento del negocio. Las estructuras paramilitares fortalecidas lograron consolidar su autonomía al dejar de depender de los principales carteles de la droga y diversificar sus fuentes de financiación (Echandía, 2006).

Mauricio Romero (2003) señala que el movimiento paramilitar reorganizó su estructura con la finalidad de expandir su dominio territorial y “ejercer control sobre los diferentes dispositivos de poder en las regiones”. De esta manera, en 1995 se crearon las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Posteriormente, en 1997 las ACCU, las autodefensas del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La creación de las AUC respondió a una estrategia para lograr un mayor peso específico frente al gobierno nacional, y así conseguir el reconocimiento como actores del conflicto social y armado. De esta manera, se plantearon una estructura más centralizada a nivel nacional, un mando unificado que permitiera una coordinación de las acciones regionales y una agenda política²¹².

El modelo operativo de la expansión de las AUC fue la celebración de acuerdos con grupos de propietarios regionales, para que éstos financiaran la creación de nuevas autodefensas, con el entrenamiento y la dirección inicial de combatientes experimentados de las AUC y el reclutamiento de militantes locales, para conformar los bloques en las nuevas regiones. (Reyes et al., 2008, p.5)

Por consiguiente, la estrategia militar de estos grupos se focalizó en la desestructuración de las comunidades populares y en los ataques que, (ellos estimaban) eran la base social del movimiento insurgente, a través del asesinato selectivo y las masacres de dirigentes y militantes de la Unión Patriótica (UP), así como de líderes de organizaciones sociales²¹³.

²¹² Este proceso de reorganización fue producto de una serie de acuerdos, alianzas y reuniones que comenzaron a principios de la década del noventa. En el año 1994, se llevó a cabo la *Primera cumbre de las Autodefensas de Colombia*. En este encuentro, los diferentes grupos acordaron unas líneas estratégicas para lograr el reconocimiento político del Estado, como actores del conflicto armado, y lograr en un futuro próximo beneficios en un eventual proceso de negociación (Cubides, 1999). De esta manera, trataron de tomar distancia retóricamente con el narcotráfico y subrayar el carácter contrainsurgente de sus acciones.

²¹³ El Grupo de Memoria Histórica señala que entre los años 1980 y 2012 se cometieron 1.982 masacres. De cada diez masacres los grupos paramilitares fueron responsables de seis, dos efectuadas por las guerrillas y una por la Fuerza Pública. En cuanto a los asesinatos selectivos, el informe señala que no hay datos unificados en relación con los responsables ya que muchos han sido invisibilizados, no denunciados o no investigados. La función de los mismos en el marco del conflicto ha sido atemorizar a la población, desestructurar a las comunidades, desestabilizar política y socialmente. No obstante, en las proyecciones realizadas por el GMH, con base en el Registro Único de Víctimas, se calcula que un 38,4% fueron cometidos presuntamente por grupos paramilitares, el 27,7% por grupos armados no

De esta manera, las AUC garantizaban la expansión y consolidación de su poder en las zonas estratégicas de producción y comercialización de coca, de proyectos agroindustriales y de ganadería extensiva, evitando que otros actores pudieran competir por la captación de las rentas legales e ilegales.

Al respecto, una de las investigadoras de la Asociación Tierra y Esperanza, cuyo radio de acción es el departamento del Magdalena, los cambios en la estructura de la propiedad de la tierra como uno de los principales impactos de la acción de los grupos paramilitares: “El mapa que hay hoy del uso de la tierra es radicalmente señalaba distinto al mapa de hace 18 años. Si antes uno tenía un mapa de parches de economía campesina, hoy tú ves los grandísimos manchones de palma africana” (E1, Miriam Awad, comunicación personal, 19 de diciembre de 2010). Este proceso de despojo vino acompañado de acciones violentas en contra de las comunidades, y señalaba:

La primera masacre en el Magdalena fue en enero del año 2.000, la masacre del Playón de Orozco, que despertó a ese departamento. Se sabía que Chepe Barrera²¹⁴, los Boteros, los Magníficos, asesinaban a la gente y mataban personas y corrían las cercas y todo eso, pero entrar a una población y cercarla y matar mujeres y niños y cuanta cosa, eso no era una manera de operar, no así. Primera masacre del Magdalena, enero del 2.000 y a partir de ahí arrancan toda la serie de masacres en cabeza... hechas por la gente de Mancuso²¹⁵, por la gente de Castaño. (E1, Miriam Awad, comunicación personal, 19 de diciembre de 2010)

El GMH señala que en el periodo de 1996 al 2002, momento en que la disputa por el control territorial entre los grupos paramilitares y las guerrillas se volvió central en las dinámicas del conflicto armado, los asesinatos selectivos fueron utilizados en mayor medida por los paramilitares para la implantación de órdenes autoritarios. En el caso de las grandes masacres el informe señala que, en los periodos de la ocupación territorial paramilitar, este tipo de actos fueron cometidos en dos momentos. El primero se producía cuando los grupos entraban en el territorio. El segundo cuando los paramilitares tenían consolidada su presencia territorial. En este último caso, se

identificados, el 16,8% por las guerrillas, el 10,1% por la Fuerza Pública, el 6,5% por desconocidos, el 0,4% por acciones conjuntas entre paramilitares y Fuerza Pública (GMH, 2013, pp. 46-51).

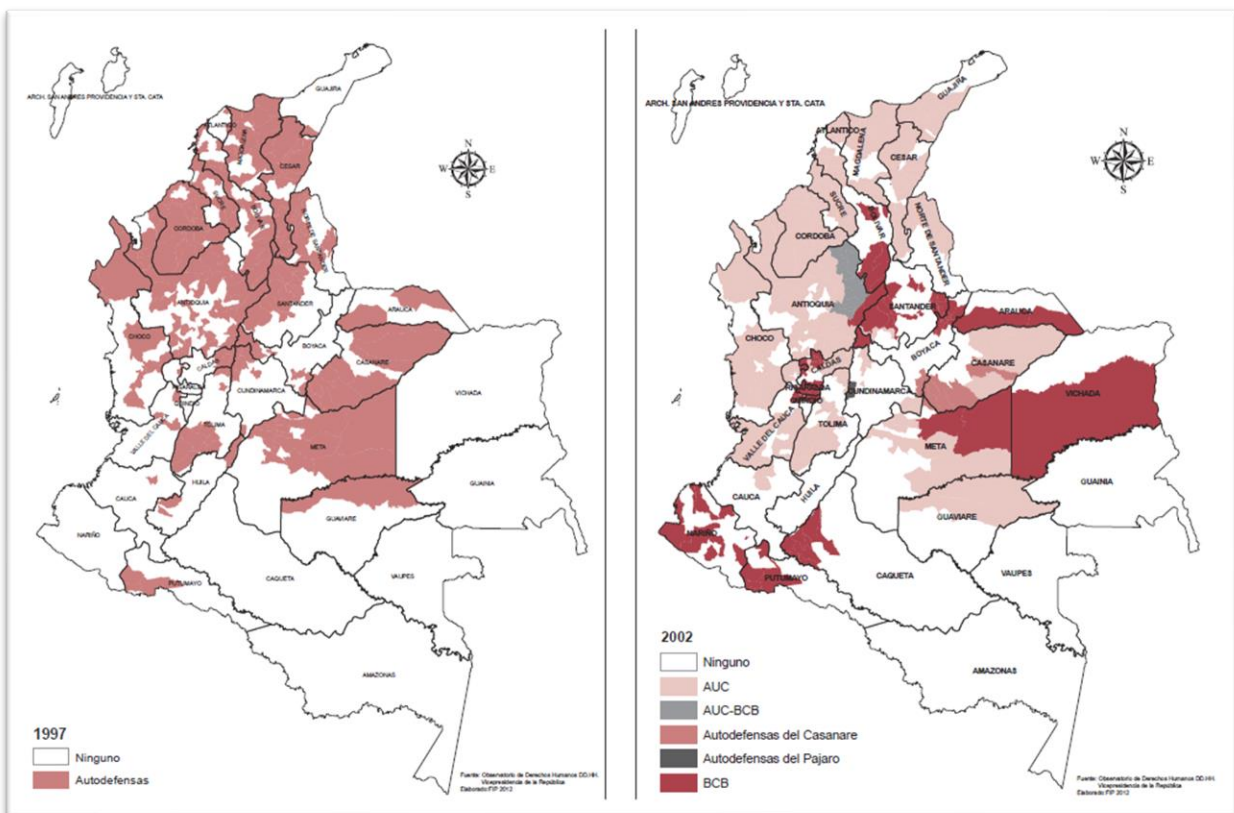
²¹⁴ Chepe Barrera fundó en los años 80 el grupo armado ilegal “Los Cheperos” cuyo radio de acción fue el Sur del Magdalena y Bolívar. Este grupo se financió con dinero de ganaderos y terratenientes de la región y, posteriormente, se unió a la lucha contra insurgente. “Los Cheperos” se integraron al Bloque Norte de las AUC, bajo el mando de “Jorge 40”.

²¹⁵ Salvatore Mancuso (1964) fue comandante del Bloque Catatumbo y uno de los principales jefes de las AUC. Se desmovilizó con la Ley de Justicia y Paz en 2005, fue extraditado a Estados Unidos en 2008. Se le atribuye las masacres de Mapiripán, El Aro, Gabarra y El Salado. Las víctimas de estas acciones fueron principalmente campesinos.

denominaba masacre de *tierra arrasada*, debido a que se actuaba contra aquellas personas que se consideraba la base social y/o colaboradores de las guerrillas. De esta manera provocaban los éxodos de población que les permitían instaurar un nuevo dominio, sin ningún tipo de resistencia.

En definitiva, implantaban su territorialidad a sangre y fuego, utilizando diferentes mecanismos como los controles de movilidad (retenes) y de población (confinamiento, desplazamiento forzado), para asegurar el territorio. Este tipo de acciones fueron recurrentes durante el periodo del proceso de negociación de Pastrana como estrategia para frenar la expansión de las guerrillas (GMH, 2013, p. 46-52).

Figura 3. Cambios en la territorialidad de las autodefensas (1997-2002)



Fuente. Adaptado de *Narcotráfico: génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales* (p. 12), por Salas, 2013.

En su estudio sobre el paramilitarismo, Echandía (2013, p. 11-12) señala, que para el periodo referido, los grupos paramilitares incrementaron su presencia territorial. En 1997, se ubicaban en 279 municipios, mientras en el 2002 en 455. Este avance se puede explicar por la pérdida de control de las guerrillas por la acción del Plan Colombia. Por otra parte, el autor plantea que, aunque hay cambios en la territorialidad de estos actores, sí se puede identificar continuidad en ciertas prácticas; su relación con el narcotráfico en regiones como el Magdalena Medio, Córdoba y Urabá y en el sur oriente en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, se observa en la Figura 3.

La expansión del movimiento paramilitar en este periodo incidió de manera significativa en la profundización de la conflictividad social en diferentes regiones del país. Este periodo fue especialmente complejo para la acción de las organizaciones populares que se vieron en el fuego cruzado entre los actores armados legales e ilegales o fueron objetivo militar de los grupos por su activismo social y por la defensa del territorio. La violencia ejercida contra los actores sociales populares tuvo un impacto negativo en las formas cotidianas de relacionamiento, en la autonomía de los procesos organizativos y en los procesos de participación política.

En este periodo hubo una fuerte criminalización de la protesta social manifiesta en huelgas y paros cívicos, que se enmarcó en un contexto internacional adverso a las fuerzas de izquierda (Archila, 2001). Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Ronald Reagan (1981-1989), apoyó las fuerzas contrainsurgentes de Centroamérica, declarando la guerra a todo aquello que desde los códigos geopolíticos estadounidenses representara una amenaza a sus intereses. Como se sabe, las políticas anticomunistas irradiaron a los países de la región y la Fuerza Pública las asumió como parte de una estrategia de mantenimiento del statu quo.

CAPÍTULO 5. A medio camino entre la guerra y la paz

En este capítulo se señalan algunos elementos que nos parecen relevantes para contextualizar las dinámicas del conflicto social y armado desde las diferentes estrategias que han adoptado los gobiernos, las cuales transitan desde posiciones más negacionistas de la naturaleza de la confrontación armada a enfoques que reconocen el carácter político de la guerra y, en este sentido, la necesidad de una solución política negociada. Como veremos, las posiciones van cambiando según los factores que se sitúan en la escala del Estado-nación, pero también aquéllos que tienen lugar en la escala global. Las diferentes posiciones políticas asumidas por los gobiernos tienen un impacto diferenciado en las dinámicas de los conflictos socio-territoriales.

5.1. Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)

En 1982 terminó el periodo presidencial de Julio César Turbay Ayala y Belisario Betancur fue elegido presidente de la República de Colombia. En su discurso de posesión planteó una serie de lineamientos en términos de política nacional e internacional avanzados para las posturas del Partido Conservador al que representaba. Por ejemplo, en política internacional abogó por el diálogo latinoamericano, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Así como la intención de incluir al país en el Movimiento de los No Alineados. En cuanto a política interna, enarboló la bandera de la paz y de la reconciliación a través de la puesta en marcha de un proceso de negociación con los grupos alzados en armas. Es así como en su discurso señaló:

Levanto una blanca bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en el amplio marco de la decisión que tomen las Cámaras. Les declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: ¡a esa tarea prioritaria me consagro porque necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida el árbol que convocará bajo sus gajos abiertos a toda la familia nacional! (Betancur, 1986, p.20)

La política de paz de Betancur se debe entender en un contexto más amplio. Durante la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981) se da un fuerte impulso a la política de protección de los Derechos Humanos, la diplomacia estadounidense recibió en su momento instrucciones para incidir en la implementación de esta política en los países de influencia estadounidense. Amparado en este contexto, el presidente Betancur se comprometió con la puesta en marcha de un proceso de

paz que involucrara a las guerrillas del país. Para ello, se elaboró una estrategia política que brindara ciertas condiciones para la viabilidad de la negociación como las amnistías para los delitos políticos de sedición y asonada, previstas como beneficios en la Ley 35 de 1982.

La iniciativa del gobierno representó un punto de inflexión dentro de los procesos de búsqueda de la paz en el país ya que se reconoció el carácter político y las causas “objetivas” del conflicto; y, por consiguiente, se produjo un giro en la forma de abordar el orden público. Este cambio en el enfoque tradicional de leer la confrontación armada, le valió a Betancur un fuerte enfrentamiento con las fuerzas militares, la élite política conservadora y los grupos económicos.

La lectura que las élites políticas y económicas hicieron sobre la violencia se debe entender en un marco geopolítico más amplio, en el que se construye un enemigo interno con los parámetros de las relaciones de poder a nivel global. Estaba vigente la Guerra Fría y para Estados Unidos era importante mantener resguardada América Latina, su “patio trasero”. Para contener cualquier amenaza de revolución o de inestabilidad del sistema capitalista se utilizó la doctrina de la seguridad nacional en toda la región, que ha tenido diferentes fases según los equilibrios de poder en el sistema internacional.

En la construcción geopolítica del mundo, los lugares adquirieron valor por la función que cumplían para los intereses del Primer y Segundo mundo, como lo señalamos en la primera parte de esta tesis. De esta manera, el “enemigo interno” era representado por aquellos sectores que ejercieran cualquier tipo de amenaza u oposición al *statu quo* y a las políticas dictadas desde suelo estadounidense. Los movimientos guerrilleros representaban fielmente esa “construcción del enemigo”, así como el peligro de contagio de la Revolución Cubana. Este discurso se convirtió en hegemónico y las élites políticas se encargaron de incorporarlo a la retórica oficial de los sucesivos gobiernos que permearon eficazmente los medios de comunicación de masas. Aunque la guerrilla encarnó ese enemigo común, el discurso también fue utilizado para criminalizar la protesta social, deslegitimar las propuestas de los actores sociales populares y afianzar un modelo de desarrollo que se aceptó como el único posible.

En el nivel local, las élites regionales también se opusieron al proceso, temerosas de la posible incursión de la izquierda en los comicios y por el incremento de las acciones guerrilleras como el secuestro y la extorsión (GMH, 2013, p. 135). La oposición de los diferentes actores políticos y económicos, con un importante poder fáctico en el país, incidió en el fracaso del proceso y en las decisiones que tomó el presidente frente a la toma del Palacio de Justicia por parte del M-

19²¹⁶. Las acciones en este último episodio fueron guiadas por los mandos castrenses que marcaron la estrategia a seguir con el consentimiento último del Ejecutivo.

En 1984 se firmaron pactos de tregua bilateral y paz entre este gobierno y las guerrillas de las FARC, el M-19 y el EPL. Este hecho se consideró como un acontecimiento inédito en la política de orden público hasta ese momento implementada. Era la primera vez que se definían unas agendas conjuntas, así como la creación de comisiones para la negociación con participación de diferentes sectores sociales y políticos. Las treguas y el cese bilateral al fuego fueron incumplidos en diferentes ocasiones por la fuerza pública, lo que llevó al “retorno a las hostilidades entre 1985 y 1987” (Villarraga, 2016, p. 116).

Es importante señalar que, producto de las negociaciones de paz, en 1985 se crea el grupo político la Unión Patriótica (UP), como parte de una estrategia política de las FARC para entrar en la vida política del país por cauces democráticos. La creación de la UP estuvo también relacionada con un distanciamiento de las FARC con el Partido Comunista Colombiano (PCC).

La irrupción exitosa de la UP en los comicios de 1988 puso en alerta a las élites políticas y económicas locales. El nuevo partido “obtuvo 14 congresistas, 14 diputados y 350 concejales en todo el país, hecho que fue reconocido con la autorización presidencial para nombrar 23 alcaldes pertenecientes a este nuevo grupo en diferentes zonas del país” (Romero, 2003, p.122). Las amenazas y la muerte de líderes de la UP por parte de los grupos paramilitares, en muchos casos bajo la acción u omisión de las fuerzas militares, ha sido calificado como un genocidio, logrando el exterminio casi por completo de la organización²¹⁷. Este hecho marcó sin duda las posteriores

²¹⁶ La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 se realizó el 06 de noviembre de 1985. La reacción del gobierno ha sido calificada de desmedida por la fuerza utilizada y por las violaciones a los DDHH que se presentaron por parte de las Fuerzas Militares, entre ellos las torturas y desapariciones forzadas a personas que se encontraban en la toma y que salieron con vida del Palacio. En el año 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por estos hechos y dos destacados mandos de las fuerzas militares fueron a la cárcel. La Comisión de la Verdad creada para la investigación de los hechos no pudo responder a todas las incógnitas de esta historia. La Justicia Especial para la Paz, creada en el marco de las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, representa para algunos sectores una posibilidad para conocer la verdad de los hechos.

²¹⁷ Mauricio Romero (2003) relata cómo los grupos paramilitares, comandados por Carlos Castaño perpetraron una de las masacres más sonadas en contra de miembros de la Unión Patriótica. La masacre se llevó a cabo en el municipio de Segovia en donde ese partido ganó las elecciones municipales de alcalde en 1986. Ante la total pasividad del Ejército y de la Policía, los hechos dejaron 43 muertos y 50 heridos. Romero recoge un informe de la Procuraduría de la Nación en el cual señala que la operación tuvo dos fases, con el objetivo de generar miedo entre la población para evitar un avance político de la UP:

Una orientada específicamente contra algunos destacados militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica a quienes buscaron en sus casas para matarlos. La otra, aparentemente indiscriminada apuntala a los partidos tradicionales socavando con el terror colectivo las amplias mayorías de la Unión Patriótica y esbozándose como una forma ejemplar de castigo, por las inclinaciones políticas hacia las que tiende decididamente la región. (El Mundo, como se citó en Romero, 2003, p. 122)

negociaciones de paz, creando particularmente, un clima de desconfianza ante el Estado desde la oposición.

Los grupos paramilitares demostraron su fuerza para evitar que movimientos políticos alternativos accedieran a espacios democráticos. El exterminio de la UP se mantiene en el imaginario de los sectores populares y de las fuerzas políticas de izquierda. En varias de las entrevistas realizadas en el marco de la presente tesis, se hace referencia a estos hechos y al impacto que tuvo en la desarticulación de las dinámicas sociales en los territorios.

5.2. Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990)

Ante el fracaso de las negociaciones de paz, la expansión y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) modificó la estrategia de su antecesor e implementó una serie de políticas de corte asistencialista con el objetivo de consolidar la presencia del Estado en las regiones más afectadas por el conflicto y la violencia. De esta manera, la paz se pretendía construir a través de planes de rehabilitación y normalización, implementados por lo que se denominó la Conserjería para la Rehabilitación y la Normalización y la Secretaría de Integración y de la Presidencia. Las políticas se enfocaron en territorios periféricos y con procesos acelerados de explotación de hidrocarburos o de cultivos extensivos. Estas políticas no abordaron los problemas estructurales del país y se limitaron a acciones puntuales dirigidas a determinados grupos sociales.

Es pertinente señalar que el cambio de rumbo de la política de Barco, de corte mucho más técnico que el anterior gobierno, se puede leer como un intento por fortalecer el gobierno central frente a las élites políticas locales, aunado a la integración regional de zonas marginadas a través de programas de mejoramiento vial o de dotación de algunos servicios públicos. Por lo tanto, el objetivo era actuar en zonas de influencia guerrillera, romper el aislamiento geográfico y afectar la base social de los movimientos insurgentes. De manera paralela, se aumentó el pie de fuerza de la policía y el ejército en las regiones.

Sin embargo, la política del gobierno no obtuvo los objetivos deseados. Por una parte, se enfrentó a las élites regionales que no vieron con buenos ojos la intención de centralizar la política y, por otra parte, el gobierno fue incapaz de controlar a las Fuerzas Armadas y el crecimiento exponencial de los grupos privados contrainsurgentes. El genocidio de la UP continuó en este

gobierno y fue especialmente sangriento en regiones como el Urabá, el Bajo Cauca Antioqueño, Magdalena Medio, Arauca y Meta (González, 2014, p. 293). En muchas de las masacres y las acciones violentas se comprobó la acción u omisión de las Fuerzas Armadas (GMH, 2013).

El reconocimiento de la UP como interlocutor político válido y el aumento de la movilización social en este periodo fue interpretado por los sectores más radicales de las Fuerzas Armadas, de las élites regionales y de los grupos de autodefensa, como un desafío revolucionario. Estas posiciones provocaron enfrentamientos entre el gobierno de Barco y las Fuerzas Armadas. Se intensificaron los ataques a la población civil, en particular, hacia sectores sociales populares. Las estrategias utilizadas para controlar la población y los territorios fueron en su mayoría masacres y asesinatos colectivos.

Los grupos de autodefensa transitaron hacia grupos paramilitares. En este periodo se consolidaron en algunas regiones como en el Magdalena Medio y avanzaron hacia otros territorios como en los departamentos de Córdoba, César, Casanare, Putumayo, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en los Llanos Orientales. En el informe “Basta Ya” se señala que el apoyo financiero proveniente del narcotráfico “le permitió a los paramilitares extenderse a otras zonas del país, bien fuera para proteger laboratorios (Putumayo y Caquetá) y rutas de exportación (Córdoba, Magdalena), o para combatir a la guerrilla (llanos orientales)” (GMH, 2013, p. 140).

El gobierno mantuvo los contactos con las guerrillas y se valió de la política “Iniciativas de paz” para abrir un proceso de diálogo con los movimientos insurgentes. El diálogo se canalizó a través de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) que surgió en el año 1987. En su momento este espacio articuló diferentes movimientos guerrilleros entre los que se encontraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento indígena “Quintín Lame”, el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Movimiento de Integración Revolucionario – Patria Libre (MIR) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)²¹⁸.

²¹⁸ Álvaro Villarraga (2016) señala que el gobierno de Virgilio Barco mantuvo esa doble estrategia de acción de la política pública y del proceso de negociación pensando en una posible desmovilización de las guerrillas y su reincorporación a la vida civil. De esta manera, planteó una reforma constitucional que garantizara un marco político proclive a ese proceso y planteó la negociación en cuatro fases:

Primero, acciones de distensión; segundo, una transición en la que cesen las acciones subversivas, se acuerden procedimientos y garantías a través de los consejos nacional y regionales de normalización; tercero, la incorporación legal de los combatientes con base en el indulto, el derecho al ejercicio político y la asistencia temporal y, en cuarto lugar, unos diálogos regionales para consolidar la convivencia. (p. 117)

5.3. Gobierno de César Gaviria (1990-1994)

La década de los noventa comenzó con dos hechos significativos para el país. El primero, la promulgación de una nueva carta constitucional, durante el gobierno del liberal César Gaviria (1990-1994), en la que se ampliaron los mecanismos de participación política y se reconocieron una serie de derechos especialmente a poblaciones que habían sido tradicionalmente excluidas de la construcción del Estado-nación²¹⁹. La Constitución de 1991 fue el resultado de un proceso complejo de negociación entre los actores que representaban el *statu quo*, las facciones de los partidos tradicionales que creían en la necesidad de modernización del Estado y los nuevos actores políticos que entraban a la institucionalidad producto de los acuerdos de paz²²⁰. En el informe “Basta Ya”, se señala la importancia de este proceso constituyente:

La nueva Constitución Política de Colombia, proclamada el 4 de julio de 1991, fue acogida por el país desarmado en forma esperanzadora. Se trataba de un pacto de paz y de una carta de navegación para transitar hacia la construcción de una sociedad fundada en la convivencia pacífica, el Estado Social de Derecho, el fortalecimiento de la democracia participativa, las garantías políticas y la vigencia de los Derechos Humanos, en una sociedad reconocida como diversa, pluriétnica y pluricultural. (GMH, 2013, p. 149)

Los avances en términos de reconocimiento de derechos fueron producto de la apertura de una estructura de oportunidad política, así como de los procesos de las organizaciones sociales populares, que supieron interpretar el momento, creando alianzas con sectores políticos y colocando sus demandas en los diferentes espacios de trabajo. El reconocimiento de los derechos

²¹⁹ La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente fue resultado de una serie de factores que confluyeron en ese momento histórico: las negociaciones de paz entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19, el movimiento ciudadano Séptima Papeleta que clamaba por cambios profundos en el marco constitucional, las medidas de sometimiento del narcotráfico a la justicia que frenaron en parte las acciones terroristas y los fallos progresistas de la Corte Suprema de Justicia (Villarraga, 2008). En el tránsito del movimiento guerrillero a la vida política se conformó la Alianza Democrática M-19, articulación política que congregó a diferentes corrientes de izquierda del país, y que contribuyó de manera significativa a la materialización de la reforma constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente también contó con la presencia de otros grupos guerrilleros que habían firmado de manera reciente un acuerdo de paz con el gobierno, un sector del EPL, el PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame. Estos grupos participaron en la Asamblea con voz, pero sin voto.

²²⁰ Las reformas políticas contenidas en la Constitución de 1991 son producto también del diagnóstico compartido por algunos sectores del partido Conservador, del ala reformista del partido Liberal y de nuevas fuerzas políticas como la AD M-19, en donde los conflictos presentes en el país eran en gran parte consecuencia de un sistema político excluyente marcado por el Frente Nacional y, por tanto, un cambio en las reglas de juego político podría modernizar el país (Gutiérrez-Sanín, 2007, como se citó en González, 2014). Sin embargo, esta visión chocó con la práctica política tradicional que se adaptó a las reformas políticas y mantuvo el poder en las regiones (González, 2014). Además, artículos contenidos en la Constitución que aseguraban una ampliación de derechos políticos se desarrollaron legislativamente años después como la Ley de Participación Ciudadana o el Estatuto de la Oposición. Este último solo se logró tramitar en el marco del Acuerdo de Paz firmado por las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos.

de pueblos originarios también se debe leer en el contexto del peso porcentual sobre el total de la población del país, que contrasta claramente con otras realidades latinoamericanas como la de Bolivia, Perú o Ecuador.

El segundo hecho significativo fue la ruptura definitiva de los diálogos que se produjo tras el bombardeo de las Fuerzas Armadas sobre un conjunto de campamentos del movimiento guerrillero denominado “Casa Verde”²²¹. La ofensiva militar fue ordenada por el presidente Gaviria y ejecutada el mismo día en que se realizaron las elecciones para escoger los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (1991)²²².

Sin embargo, los acercamientos entre el gobierno de Gaviria y la CGSB se reanudaron en medio de la confrontación armada. En una reunión celebrada entre las partes, en el municipio de Cravo Norte (Arauca), se acordó instalar una mesa de negociación permanente fuera del territorio nacional con el objetivo de asegurar un espacio neutral que permitiera cierto blindaje de las dinámicas de la guerra. El sitio acordado para desarrollar los diálogos fue Caracas (Venezuela). No obstante, por la dinámica política interna del país vecino la mesa de negociación se trasladó Tlaxcala (México). Las conversaciones se rompieron en mayo de 1992 después del secuestro y posterior muerte del exministro Argelino Durán Quintero.

A partir de ese momento se presentó un escalonamiento del conflicto armado. Se puede decir que el país experimentó una nueva etapa marcada por la desmovilización de algunos grupos insurgentes, la reforma constitucional, la crisis económica derivada de la consolidación del modelo neoliberal y el reacomodo de los actores armados legales e ilegales que continuaban inmersos en la guerra.

²²¹ En este asentamiento se firmaron en el año de 1984 los Acuerdos de la Uribe entre las FARC-EP y el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). El bombardeo a “Casa Verde” se realizó en el marco de la llamada “Operación Colombia” que tenía como objetivo minar la fuerza de las FARC atacando el sitio en donde se encontraban concentrados los principales comandantes que hacían parte del Secretariado de la organización. El lugar se encontraba situado en la Cordillera Oriental a orillas del río Duda. El ataque frustró cualquier posibilidad de participación de las FARC, una facción del EPL y el ELN en el proceso constituyente.

²²² El gobierno pretendía con esta acción demostrar al movimiento insurgente que el Estado tenía la capacidad suficiente para derrotar a la guerrilla en el campo militar y que los grupos guerrilleros aún activos no iban a representar ningún obstáculo para el desarrollo del proceso político que se iniciaba. Por su parte, las FARC-EP declinaron participar en la Asamblea Constituyente al considerar que no existían las suficientes garantías para la reincorporación a la vida civil y que las condiciones ofrecidas por el gobierno para su participación implicaban la rendición del grupo guerrillero.

En el ámbito político, la guerrilla intentó legitimar la lucha armada ante la opinión pública. En el aspecto militar, reorganizó su aparato en las regiones e intensificaron las acciones de fuerza. Para Juan Gabriel Gómez (1996):

La guerrilla consideró que podía encontrar en los efectos sociales excluyentes de la política económica del gobierno de César Gaviria el caldo de cultivo adecuado para promover un colapso del gobierno. Sin embargo, subestimó otros factores tales como la pérdida de legitimidad de la lucha revolucionaria (después del derrumbe del Bloque Socialista y la profunda reforma a las instituciones políticas colombianas operada con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de la nueva Constitución); y, la respuesta militar del gobierno. (p. 20)

Por su parte, el gobierno de Gaviria declaró la guerra integral al movimiento insurgente, lo que implicó una reestructuración de su estrategia militar adaptándola a la guerra de guerrillas empleada por las FARC. Esta estrategia ofensiva consistió en el desarrollo de unidades tácticas móviles que le permitiera al Ejército una presencia más dinámica en los territorios (Gómez, 1996, p. 21).

De esta manera, la disputa por el control del territorio y de la naturaleza se agudizó aún más en las zonas rurales que se vieron afectadas, no solo por los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el gobierno, sino también, por el repunte de la acción paramilitar (ligada al narcotráfico, que contaba con un enorme poder defensivo) y las relaciones con los carteles de la droga. En este sentido, diversos actores se desplegaron en el territorio con unos objetivos claros de control del espacio y de regulación de la población, que reconfiguraron las relaciones de poder.

5.4. Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998)

Los avances institucionales para la puesta en marcha de lo acordado en la nueva Constitución, se vieron torpedeados por una fuerte crisis política, debido al escándalo de la filtración de dinero del narcotráfico en su campaña política presidencial, que derivó en uno de los procesos judiciales más sonados de la historia económica de Colombia: el proceso 8.000. La Fiscalía General de la Nación y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llevaron a cabo la investigación que concluyó con la condena de importantes representantes políticos y funcionarios públicos. El presidente Samper fue juzgado y absuelto por el Congreso de la República. Sin embargo, la presión nacional e

internacional por parte de diferentes sectores de la sociedad y del gobierno de Estados Unidos, para que presentara su dimisión, generó una crisis de gobernabilidad en el país.

La preocupación de Estados Unidos por la infiltración de los carteles de la droga en las altas esferas políticas, se manifestó en la descertificación en materia de lucha contra el narcotráfico²²³, en la cancelación de la visa americana del presidente Samper, en el deterioro de las relaciones bilaterales y en la presión constante para la implementación de una estrategia antinarcóticos que frenara la expansión de los cultivos de uso ilícito. Para el gobierno norteamericano, Colombia era un Estado a punto de colapsar por la infiltración de los carteles de la droga en las altas esferas políticas.

En los años noventa, Colombia pasó de ser un país procesador y comercializador, a ser uno de los mayores productores de base de coca: “En 1997, el Departamento de Estado reportó que los cultivos de coca en Colombia se habían incrementado de 44.700 hectáreas a 67.200, esto es, cerca del 50%, entre 1994 y 1996” (Rojas, 2006, p. 44). La producción y los cultivos de hoja de coca se concentraron en la zona sur del país, en particular, en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare. Para el año 2000, la región occidental de la Amazonía llegó a concentrar el 68% de los cultivos de coca del país (Ramírez, 2017). Este contexto explica el viraje de la política de Estados Unidos hacia Colombia que se va a traducir en la intervención a través del Plan Colombia.

El gobierno de Samper intentó dar un viraje al manejo del conflicto armado con respecto a los últimos años de su antecesor. En el periodo final de su mandato, César Gaviria pareció desconocer el carácter político del conflicto armado, evidente en los diálogos mantenidos con la insurgencia, y recuperó el discurso antiterrorista. En este contexto, el gobierno realizó acercamientos con los grupos guerrilleros activos pero debido a la débil legitimidad del Ejecutivo, al escaso margen de maniobra para manejar la estrategia contra las drogas y a las tensiones existentes con las Fuerzas Militares por la disposición gubernamental al diálogo, no se dieron las circunstancias para llegar a un acuerdo de paz.

²²³ La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado elabora una lista de países que son grandes productores y países de tránsito de drogas ilegales. Esta lista pasa al Presidente que la somete a la consideración de los Comités de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Representantes. Posteriormente a la investigación del Departamento de Estado sobre los países que deben ser certificados y los que no, el Presidente puede certificar, negar la certificación o dar una certificación de interés nacional. La primera tiene como consecuencia que la ayuda que ha sido retenida es entregada. Por otra parte, si se niega la certificación, las ayudas financieras se paralizan y Estados Unidos debe votar negativamente a las ayudas a las que opte el país en las instituciones financieras internacionales. Finalmente, si se otorga una certificación de interés nacional, las ayudas no son bloqueadas como una medida de excepción.

La inestabilidad en las relaciones entre Gobierno y las Fuerzas Militares durante los años de mandato fueron evidentes en los cuatro ministros de defensa y en los cinco cambios en la cúpula militar. Existía una importante división al interior de las FFMM: entre los que apoyaban al gobierno y aquellos sectores críticos que fomentaron “el ruido de sables” en el interior de la institución. Esta división logró ser contenida por el presidente Samper, vía aumento del gasto militar, que se justificó en razón a los siguientes argumentos: el cambio en las dinámicas del conflicto, el poder militar como amenaza a la seguridad, una estrategia de contención y apoyo a la comunidad, y la estabilidad del régimen político (Dávila et al., 2000).

La política de fumigación aérea con glifosato también acarrió fuertes contradicciones con sectores sociales por las consecuencias ambientales y de salud para las poblaciones situadas en las regiones de siembra. Por su parte, el movimiento insurgente dilató los espacios de diálogo utilizando la crisis de legitimidad como argumento. En este periodo, las guerrillas crecieron militarmente y afianzaron su poder en las regiones. Las tomas guerrilleras a las Delicias (1996), Patascoy (1997) o el Billar (1998), son ejemplo de la estrategia militar de las FARC adoptada en la VIII Conferencia (1993), en la que se decide consolidar un ejército que permitiera infligir derrotas militares al ejército en zonas claves, así como descentralizar la organización a través de bloques regionales que permitieran la consolidación del poder territorial²²⁴.

Esta crisis de gobernabilidad desajustó los arreglos institucionales entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares logrados durante la administración Gaviria, haciendo retroceder la injerencia de los civiles en las políticas de defensa y seguridad nacional, generando con ello las condiciones para que las tensiones volvieran aflorar en las nuevas etapas del conflicto armado. (GMH, 2013, p. 156)

Sin embargo, la estrategia de las FARC avanzó de un modelo de guerra de guerrillas, a partir de pequeñas unidades móviles que atacan objetivos militares y después desaparecen, hacia una estrategia de unidades militares regulares. La consolidación de un ejército revolucionario no fue sostenible en el tiempo debido a los cambios en las dinámicas de la guerra, en particular, a los derivados del fortalecimiento de las Fuerzas Militares por la financiación del Plan Colombia en el gobierno de Andrés Pastrana (Pizarro, 2002).

²²⁴ La consolidación de un ejército guerrillero se centraba en la conformación de bloques regionales y comandos conjuntos, la implementación de compañías móviles de combate y el comando general enfocado a dirigir una estrategia ofensiva en contra del Estado (Pizarro, 2006, p. 189).

No obstante, en el gobierno de Ernesto Samper se lograron avances fundamentales para la tramitación del conflicto armado, en el ámbito de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; por ejemplo, se ratificó por parte del gobierno el Protocolo II adicional de la Convención de Ginebra²²⁵. En esta línea, se brindaron las condiciones para que el Comité Internacional de la Cruz Roja actuara en el país. Asimismo, se habilitó la mediación internacional en los acercamientos con el ELN. El gobierno alemán y la Iglesia católica facilitaron el espacio para el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil (Vargas, 2003).

5.5. Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002)

El triunfo del candidato conservador Andrés Pastrana fue resultado del rechazo al gobierno de Ernesto Samper y a su candidato Horacio Serpa. Este último desempeñó el cargo de Ministro del Interior durante el mandato del liberal y asumió la defensa del presidente Samper en el juicio realizado en el Congreso de la República. Estos acontecimientos implicaron un importante desgaste político que se tradujo en la pérdida de las elecciones de 1998. Por otra parte, el candidato Andrés Pastrana se mostró ante la opinión pública como un defensor de la moralidad política del país y como un interlocutor válido para las FARC en el inicio de una posible negociación con el Estado.

En términos geopolíticos, la presidencia de Andrés Pastrana resultaba mucho más confiable para Estados Unidos. Las relaciones bilaterales, que no pasaban por su mejor momento, se restablecieron y se puede afirmar que este país recuperó a su mejor aliado en la región. En particular, un aliado para la expansión de una política antidrogas de carácter militarista con fuerte componente contrainsurgente, centrada en la judicialización de los campesinos cocaleros y en la erradicación aérea de los cultivos. No debemos olvidar que la política de la “guerra contra las drogas” para el vecino del Norte, representa un eje fundamental para la seguridad nacional del país, “en detrimento de otros objetivos de más largo plazo, incluyendo el fortalecimiento de la

²²⁵ La ratificación de estos acuerdos internacionales fue recibida negativamente por parte de las Fuerzas Militares y de los sectores más reaccionarios al considerarla como una afrenta del gobierno y una concesión a las fuerzas políticas de izquierda. La adhesión al Protocolo II implicaba el desmonte del fuero militar para los delitos de lesa humanidad y los delitos comunes. La limitación de la justicia castrense se reconoció en un fallo de la Corte Constitucional (López Gutiérrez, 1999).

democracia, la defensa de los derechos humanos, la reducción de la pobreza y la preservación del medio ambiente” (Tickner, 2001, p. 220).

En este sentido, en el discurso de posesión el presidente Pastrana hizo alusión a la necesidad de normalizar las relaciones:

Estados Unidos, en su condición de potencia hemisférica y por ser la economía más grande y avanzada del mundo, es un país fundamental para las relaciones internacionales de Colombia. Comenzamos también con ellos una nueva era de entendimiento y de confianza que nos ha de permitir la diversificación de la agenda de nuestras relaciones, para avanzar por la senda de una verdadera cooperación, más de hermanos que de buenos vecinos. (Pastrana Arango, 1998)

Por otra parte, este gobierno presentó una propuesta de negociación con los grupos insurgentes después de casi ocho años de contactos esporádicos, y sin avances sustanciales a nivel de acuerdos políticos²²⁶. Este periodo se caracterizó por ser prolijo en los espacios de encuentro entre las partes y en los documentos producidos en el marco del diálogo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC²²⁷. Sin embargo, el proceso estuvo truncado desde el inicio, generando profundas divisiones al interior de la sociedad colombiana y entre las élites políticas, económicas y militares del país. La política de paz del gobierno de Pastrana no logró avances sustanciales en términos de una agenda común para la paz y, paradójicamente, se convirtió en un espacio aprovechado por las partes para el *continuum* de la guerra.

La propuesta de paz del gobierno de Pastrana fue producto de una coyuntura política en la que una parte importante de la opinión pública abogaba por los cauces dialogados del conflicto ante la escalada de la guerra. En las elecciones locales y regionales de 1997 se sometió a votación el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Esta iniciativa fue producto de un trabajo articulado entre diferentes organizaciones de la sociedad civil; tenía como finalidad movilizar a la

²²⁶ En julio de 1998, Andrés Pastrana, publicó en el periódico *El Tiempo* un artículo que se titulaba “Le estoy cumpliendo al país”. En el escrito señalaba que estaba adelantando contactos con la guerrilla de las FARC para iniciar un proceso de paz. En esta línea, desvelaba que Víctor G. Ricardo (quien ocuparía el cargo de Consejero de Paz en su gobierno) tuvo un encuentro con dos de los principales comandantes de la organización: Manuel Marulanda Vélez y Jorge Briceño, con la finalidad de estudiar las posibilidades para implementar una mesa de diálogo que llevara al país a la reconciliación nacional. Antes de la toma de posesión, el 07 de agosto, el propio Pastrana se reuniría con Manuel Marulanda Vélez. Así lo señalaba: “en la reunión expuse a los representantes del Secretariado la propuesta integral de paz que anuncié y la voluntad del gobierno que presidiré desde el próximo 7 de agosto de encontrar caminos ciertos para construir una paz estable y duradera” (Pastrana, Le estoy cumpliendo al país, 1998).

²²⁷ El proceso de paz llevado a cabo en este periodo ha servido de aprendizaje para las iniciativas de paz que han iniciado gobiernos posteriores, en particular, el de Juan Manuel Santos. Los aprendizajes han puesto en evidencia los errores cometidos en términos políticos y militares, así como las lecturas realizadas sobre la dinámica del conflicto y la capacidad de reconfiguración de los actores armados.

población en favor de una salida negociada del conflicto y lograr el compromiso de los líderes políticos. El equipo del gobierno de Pastrana leyó este hecho como una oportunidad política para catapultar su candidatura a la presidencia²²⁸.

De esta manera, la política de paz fue el resultado de una lectura del contexto del momento y no de una política pensada y planificada. En este sentido, estamos de acuerdo con Villarraga cuando señala que las consecuencias de esta improvisación, como las condiciones en las que se produjo la “zona de despeje”, van a ser evidentes a lo largo del proceso de paz (Villarraga, 2016).

El gobierno en cabeza del Comisionado de Paz, Víctor G. Ricardo coordinó los detalles de la puesta en marcha de una política de paz. El gobierno de Pastrana trazó una “estrategia integral” en donde la paz sería el eje articulador, compuesta por seis líneas de actuación:

Una redefinición de la política exterior bajo la denominación de “diplomacia para la paz”; las negociaciones con la guerrilla; el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas; la lucha contra el narcotráfico; el aumento en la inversión social y la recuperación económica del país, que sufría en estos años la primera y única recesión en medio siglo. (Pizarro, 2017, pág. 278)

En el Plan Nacional de Desarrollo se previó mayor inversión social y la construcción de infraestructura en aquellas zonas afectadas por el conflicto armado, así como el “fortalecimiento del Fondo de Paz y apoyo interno a través de un “bono de paz” y de la cooperación internacional” (Villarraga, 2015, p. 140). En este sentido, el gobierno pareció reconocer unas causas estructurales del conflicto y lo abordó desde una dimensión técnica y política. No obstante, al analizar la trayectoria de su periodo presidencial se puede observar cómo terminó primando la solución militar en los territorios más afectados por el conflicto a través de la implementación del Plan Colombia.

Por otra parte, en el diseño de la política de paz de Pastrana, jugó un papel relevante la comunidad internacional. Se produjo la internacionalización tanto del conflicto como de la paz. Se crearon diferentes figuras de participación de la comunidad internacional como el

²²⁸ En la primera vuelta de las elecciones presidenciales el candidato conservador perdió los comicios por un estrecho margen de votos, frente al candidato oficialista. En las elecciones para la Presidencia de la República de 1998, el candidato del Partido Liberal obtuvo 3'634.823 votos. La segunda votación fue para el candidato conservador en representación de la coalición Alianza por el Cambio con un total de 3'607.945 votos. El tercer lugar lo ocupó la candidata Noemí Sanín de Opción Vida con un total de 191.981 votos (1.5%) (Gómez Lobo, 1999). La Gran Alianza por el Cambio fue producto de un pacto entre Andrés Pastrana y una facción del Partido Liberal liderada por Alfonso Valdivieso. Este último perdió la consulta interna de su partido ante Horacio Serpa.

acompañamiento directo al proceso de negociación de San Vicente del Caguán²²⁹. La “diplomacia para la paz” prevista por el gobierno estaba pensada para dos escenarios: terminar el conflicto armado a través de una salida negociada; o preparar al Estado para una escalada del conflicto en caso de que las partes no llegaran a un acuerdo. En el primer escenario, se desplegó una internacionalización política clave en el desarrollo de la negociación; en el segundo, operó la internacionalización militar como un instrumento fundamental para la reorganización y modernización de las Fuerzas Militares (Borda, 2012).

El gobierno logró con esta estrategia conectar, espacial y temporalmente, la lucha contra las drogas, el conflicto armado y las dinámicas económicas globales. Parafraseando a Tarrow (2010 [2005]), el gobierno dio un salto de escala en la política de manejo del conflicto que sería rentabilizada por los gobiernos posteriores ya sea para un escenario de confrontación abierta o para la negociación definitiva con las FARC.

El Ejecutivo obtuvo el apoyo de Estados Unidos para la lucha contra las drogas y la sustitución de los cultivos de uso ilícito, con un componente más militar de contrainsurgencia y de control territorial. Por su parte, la Unión Europea apoyó programas dirigidos a las comunidades campesinas, como parte de una estrategia de *peacebuilding*, tomando distancia de las iniciativas de corte más bélico²³⁰. En la adopción de esta estrategia, jugó un papel relevante el lobby realizado por las organizaciones sociales y las ONGs, que entendían que la paz solo se podría lograr a través de la construcción de alternativas económicas para las comunidades en zonas de conflicto, y estimaban que la criminalización de la población solo conduciría a una mayor vulneración de sus derechos y a nuevas espirales de violencia contra los sectores sociales populares.

²²⁹ En los procesos de paz anteriores, la presencia de la comunidad internacional había sido restringida a hechos particulares como fue la participación de la Internacional Socialista como testigo en el proceso con el Movimiento 19 de Abril o el rol de veedores externos de México y Venezuela en los diálogos de Tlaxcala. En el gobierno de Pastrana, se activó una “diplomacia para la paz” en las que actores del sistema internacional participaron desde diferentes áreas: en una labor más académica para contribuir al entendimiento de las dinámicas del conflicto, como garantes del proceso de negociación, como “veedores” frente a las violaciones de derechos humanos y como facilitadores del proceso en momentos de crisis entre las partes. En esta línea, se creó el grupo de “Países Amigos”, conformado por Canadá, Cuba, España, Francia, México, Noruega, Suecia, Venezuela, Italia y Suiza. El gobierno también solicitó los “buenos oficios” del Secretario General de Naciones Unidas.

²³⁰ Los Laboratorios de Paz fueron un instrumento de cooperación técnica y financiera de la Unión Europea para contribuir a la construcción de la paz en el país. Este programa se desarrolló en su mayoría durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es importante señalar, que la adopción de esta estrategia de cooperación más centrada en los aspectos sociales, fue posible gracias a la incidencia política realizada por organizaciones de la sociedad civil e iniciativas de paz. En particular, se destacó la labor del director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio liderada por el Padre Francisco de Roux. Es así como el Laboratorio de Paz del Magdalena Medio se convirtió en el proyecto piloto de construcción de paz de la Unión Europea (Castañeda, 2009).

Las protestas sociales de comunidades y organizaciones vinculadas al campo denunciaron la estigmatización derivada de la política antidrogas. De esta manera, demandaban la sustitución voluntaria y manual de los cultivos de uso ilícito debido a que la aspersión aérea afectaba de manera indiscriminada a otros cultivos de subsistencia, así como las nefastas consecuencias medioambientales y para la salud de las poblaciones²³¹ (Archila y García, 2003; I Foro *El Sur le responde al plan Colombia*, 2000).

Así lo manifestaba uno de los líderes de la Asociación de Desplazados de Puerto Caicedo (ASODESCA):

Le tiran a lo que caiga a dañar todo, destruyendo el medio ambiente, los cultivos lícitos de las personas, acaban con el plátano, la yuca, han afectado a los animales, los pastos, los potreros han sido arruinados; el medio ambiente se ha visto afectado en gran manera, los peces. Entran cinco avionetas donde ya no hay cultivo entonces, deben descargar donde sea y decir que cumplieron su trabajo. Un racimo de plátano que valía 2 mil pesos hoy vale 15 mil o 20 mil, porque ya no lo estamos produciendo. Antes se sacaban camiones cargados de aquí para Cali y ahora vienen de Cali para acá. (E8, Líder ASODESCA, comunicación personal, 7 y 8 de noviembre de 2010)

El grueso de la política de paz se llevó a cabo entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. En el caso del ELN, la relación se mostró mucho más distante. Esta guerrilla tenía mayores posibilidades de iniciar un diálogo con el candidato del Partido Liberal, por los acercamientos realizados durante el mandato de Ernesto Samper, y los avances en una posible realización de la Convención Nacional²³². Por su parte, el ELN realizó una lectura del contexto y

²³¹ En el I Foro Regional “El Sur responde al Plan Colombia” (2000), que se llevó a cabo en Puerto Asís en el año 2000, y que reunió a 325 participantes de diferentes organizaciones sociales populares (campesinos, indígenas, ambientalistas, mujeres, organizaciones de derechos humanos, etc.) y otros actores de las zonas afectadas por el Plan Colombia, señalaron su rechazo a la estrategia de sustitución forzada de cultivos de uso ilícito y propusieron modelos alternativos para la erradicación escalonada de los mismos. Asimismo, denunciaron la militarización de sus territorios y la criminalización de los pequeños cultivadores de coca, así como de los raspachines de la hoja de coca. En el II Foro Regional, en el que se realizó una evaluación del Plan Colombia, las organizaciones estimaron que la estrategia del gobierno no erradicaría los cultivos de coca ni contribuiría a un desarrollo de las regiones.

²³² El gobierno de Ernesto Samper y el ELN acordaron en 1998 avanzar hacia una Convención Nacional. Este espacio de debate político para la búsqueda de una salida negociada al conflicto era definido en el documento de la primera reunión preparatoria como:

La Convención Nacional en su concepción política, su estructuración programática y en su dinámica de desarrollo tiene como objetivos centrales analizar las causas profundas del conflicto y la crisis, la búsqueda de salidas y la participación activa de todos los sectores de la sociedad; por tanto el esfuerzo principal en la preparación debemos colocarlo en la definición de la agenda, la preparación de los temas y la presentación de propuestas. (Documento Borrador del acta de la reunión del Comité Operativo Preparatorio de la Convención Nacional correspondiente a la sesión del 14 de septiembre de 1998 en Itagüí, 1998)

El objetivo final de la Convención Nacional era estructurar las bases para una nueva Asamblea Constituyente con una amplia participación social.

optó por intensificar las acciones militares en sus zonas de influencia, dirigidas en su mayoría al sabotaje económico. Su objetivo era obligar al gobierno a ofrecer las mismas condiciones de negociación que les ofrecieron a las FARC (Romero, 2003). Las acciones militares llevadas a cabo por la guerrilla generaron un profundo rechazo de la opinión pública y de las comunidades en la zona de influencia del ELN, limitando sus posibilidades políticas. En particular, se destaca el ataque al Oleoducto Central en el municipio de Machuca (Antioquia), en donde se vio afectada toda la comunidad por las consecuencias no previstas del atentado. De esta manera, el ELN continuó manteniendo su estrategia de sabotaje económico, centrado en los hidrocarburos y en las infraestructuras de comunicaciones²³³.

No obstante, el Presidente Pastrana aceptó crear una “zona de convivencia” en el Magdalena Medio para iniciar diálogos con el ELN. La dilatación de las conversaciones generó un clima propicio para la movilización de las Autodefensas Campesinas que operaban en la región en contra de esta decisión. Así, las autoridades municipales y las élites económicas regionales (ganaderos, comerciantes, terratenientes, entre otros) presionaron para que el gobierno declinara la iniciativa. A juicio de Mauricio Romero (2003), la puesta en marcha de este proceso podría haber propiciado:

Una dinámica favorable a los productores campesinos medios y pequeños —la población rural es la mayoría y la más pobre en esta zona— y, además, mostró la posibilidad de procesos regionales de incorporación política con programas reformistas de inversión social y de infraestructura, apoyados por la comunidad internacional. Ésta habría sido una excelente oportunidad para apoyar una reforma agraria regional en sus diferentes componentes —titulación, redistribución, comercialización, financiación, encadenamientos, etc.—, y si bien no pudo realizarse, sí mostró la posibilidad de reformas redistributivas regionales, en oposición a los programas nacionales más complejos y que despiertan mayor oposición. (p. 58)

Estamos de acuerdo con la lectura que hace Romero. Los obstáculos en la negociación con el ELN mostraron la complejidad del conflicto armado por la diversidad de actores e intereses que operan en el mismo, así como el estrecho margen de maniobra que tiene el gobierno central para

²³³ Los acercamientos entre el gobierno nacional y el ELN se vieron interrumpidos por el atentado al Oleoducto Central. Este atentado causó la muerte de 84 personas ya que el derrame de combustible alcanzó a la población. Este hecho unido a otras acciones de este grupo guerrillero, como el secuestro de un avión comercial en el sur de Bolívar y las tomas masivas de rehenes en el Valle y el Atlántico generaron profundos desacuerdos. Por su parte, el ELN denunció las acciones de los grupos paramilitares en sus zonas de influencia, las masacres contra campesinos, asesinatos selectivos y otros hechos violentos. La guerrilla acusó al gobierno nacional de no tomar las medidas necesarias para combatir a estos grupos y evitar la expansión territorial de los mismos en alianza con miembros de las Fuerzas Armadas.

la implementación de políticas que alteren las configuraciones de poder en los territorios. En este sentido, las particularidades de cada región van a jugar un papel fundamental en las propuestas de este tipo²³⁴.

En el proceso con las FARC, los contactos directos entre Andrés Pastrana y Manuel Marulanda Vélez se tradujeron en unos primeros compromisos para desarrollar un proceso de negociación en el territorio nacional. Para ello, se acordó una “zona de despeje” o “zona de distensión” a través de la resolución 85 del 14 de octubre de 1998, en la que el gobierno se comprometía a retirar autoridades militares y policiales en los departamentos de Meta y Caquetá. La zona de distensión comprendía los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. En total, 42.000 kilómetros cuadrados. La mayor superficie de despeje que había concedido un gobierno para las negociaciones con los movimientos guerrilleros²³⁵. La zona de distensión se prolongó hasta el 20 de febrero de 2002, momento en el que las FF.MM ingresan nuevamente a la región²³⁶.

El proceso de negociación y la “zona de despeje” trajeron consigo una profunda división en el bloque de poder. Un sector de las élites políticas, económicas y de las Fuerzas Militares se opusieron fuertemente a una solución negociada bajo las condiciones planteadas. Se consideraba que el despeje de un territorio tan amplio y con una fuerte influencia de las FARC era una cesión de soberanía inaceptable. Estos sectores estimaban que el movimiento insurgente se fortalecería aún más, dificultando su derrota militar²³⁷. Los desencuentros fueron aún más evidentes con la

²³⁴ Las negociaciones regionales con los actores irregulares también pueden contribuir a procesos que adelantan las comunidades en el marco de acciones de resistencia frente a la guerra y de protección de sus hábitats, con la intención de poder desplegar sus propias territorialidades, y proyectos societales alternativos. Es el caso de las comunidades de paz como San José de Apartadó o de las comunidades indígenas, que se ven en la necesidad de llegar a acuerdos con los actores armados para poder sobrevivir a la guerra.

²³⁵ En gobiernos anteriores, como el de Belisario Betancur se desmilitarizó la localización en la que se encontraba Casa Verde, que posteriormente fue bombardeada por el gobierno de César Gaviria. Durante el gobierno de Samper las FARC solicitaron despejar la zona de La Uribe. Sin embargo, el comandante del Ejército Bedoya remitió un memorando a las Fuerzas Militares señalando la inconveniencia de tal decisión (Dávila, Escobedo, Rodolfo, Gavina, & Vargas, 2000).

²³⁶ La zona de distensión se prorrogó hasta 11 veces a través de las siguientes resoluciones: La número 07 del 5 de febrero de 1999, 32 del 7 de mayo de 1999, 39 del 4 de junio de 1999, 92 del 1° de diciembre de 1999, 19 del 6 de junio de 2000, 101 del 6 de diciembre de 2000, 04 del 31 de enero de 2001, 05 del 4 de febrero de 2001, 19 del 9 de febrero de 2001, 118 del 7 de octubre de 2001 y 14 del 20 de enero de 2002. (Resolución ejecutiva número 32, 2002)

²³⁷ Ejemplo de la tensión surgida al interior de las Fuerzas Armadas por el proceso de negociación es la crisis del gobierno por la renuncia del Ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, en mayo de 1999. La renuncia se produjo por la decisión de Andrés Pastrana de prorrogar la “zona de distensión”. Como muestra de fuerza del ala crítica al proceso, 17 de los 30 generales en activo y 14 coroneles pidieron su paso a retiro. El ministro señaló en su carta de dimisión

decisión del Ejecutivo de retirar el Batallón Cazadores, así como el inicio de algunas investigaciones sobre la relación de mandos militares con grupos paramilitares. Estos dos elementos hicieron parte de las exigencias de las FARC para la continuidad del proceso.

Los análisis posteriores señalan que la zona de distensión permitió a las FARC fortalecer el movimiento desde su estructura interna; mejorar la coordinación entre las cadenas de mando, en tanto se pudo reunir el Pleno del Estado Mayor; renovar la capacidad operativa a través de la de la Escuela Nacional de Mandos de Bloque en los Llanos del Yarí (Meta); y reforzar el Bloque Sur, una de las estructuras que más dinero recaudaba debido a los nexos con el narcotráfico. De esta manera, las FARC se preparaban para una ofensiva militar sobre Bogotá, así como para resistir a la ofensiva de las Fuerzas Militares²³⁸. Por otra parte, en el ámbito político durante este periodo se constituyó el Movimiento Bolivariano para una Nueva Colombia. La estrategia seguida por el grupo insurgente, se recoge en un documento de su jefe máximo, Manuel Marulanda Vélez, titulado *De los 40 planteamientos*, en el que se hace un balance de los años que duró el proceso de negociación (Contreras, 2018).

Es importante señalar que el proceso de negociación se realizó en medio de la confrontación armada. Hecho que sería fundamental en el fracaso de los diálogos y un aprendizaje para posteriores procesos. Es evidente que el gobierno necesitaba tiempo para fortalecer las Fuerzas Armadas, reconfigurar su presencia en el territorio nacional y articular la guerra contrainsurgente a la lucha contra las drogas. Por su parte, las FARC necesitaba apuntalar sus zonas de retaguardia, afianzar los territorios en los que tenía una presencia más reciente y mejorar sus tácticas militares²³⁹. Por tanto, la negociación comenzó con las cartas marcadas y con fecha de

“Si hay una prórroga indefinida se corre el riesgo de que las FARC se puedan fortalecer”. Para Lloreda, el no tener fecha límite podía “dilatar o diluir el proceso”. “No se pueden negociar los principios” (Lozano, 1999).

²³⁸ Eduardo Pizarro en su libro *“Cambiar el futuro: Historia de los procesos de paz en Colombia 1981-2016”* recoge un memorando enviado por el vocero internacional de las FARC, Marcos Calarcá, a Fidel Castro en julio de 1998. En la misiva se realiza una lectura más que acertada de los cambios en el conflicto armado y de los posibles movimientos del gobierno nacional, así como de Estados Unidos, señala:

El comandante Marulanda tiene la convicción de que Estados Unidos intervendrá en el conflicto colombiano y que, por tanto, la guerra de guerrillas en condiciones de intervención cambia las condiciones, y es por ello que requieren ganar tiempo, debiendo disponer de por lo menos dos años para tener recursos y disposición táctica que les permita resistir el impacto de la invasión. Que en las conversaciones con Pastrana se observó que éste hizo lo inevitable para que las FARC entren en la mesa negociadora y no puedan salir de ella, explicando que ellos no pueden dar la espalda a las propuestas de paz de Pastrana y de otros sectores. El objetivo de las FARC es realizar 3 o 4 rondas [...] y salir de las negociaciones con buena imagen y ganando el tiempo necesario para prepararse frente a una eventual invasión. (Pizarro, *Cambiar el futuro: la historia de los procesos de paz en Colombia: 1981-2016*, 2017, pág. 277)

²³⁹ Al finalizar el periodo del gobierno de Andrés Pastrana, las FARC llegaron a 70 frentes de combate, con aproximadamente 17.000 combatientes (Ministerio de Defensa, 2005, como se citó en Ríos, 2015).

caducidad. Las partes abordaron el proceso de negociación desde una lógica instrumental para el fortalecimiento de sus proyectos político-militares²⁴⁰.

Otro de los elementos de análisis se refiere al contenido de los diálogos. El 24 de octubre de 1999, se instaló la Mesa de Negociación en la Uribe (Meta) y, posteriormente, se conformó un Comité Temático Nacional compuesto por representantes del Estado y de las FARC, así como de la sociedad civil. Las partes acordaron que la participación ciudadana se haría mediante audiencias públicas en la zona de despeje a través de las cuales se recogerían las demandas a ser incorporadas en el acuerdo final. Este instrumento de participación desbordó cualquier expectativa debido a la cantidad de ponencias y propuestas, que eran de imposible incorporación en un acuerdo de paz. El proceso generó un optimismo sobredimensionado por parte de las iniciativas de paz, organizaciones sociales y de derechos humanos que apostaban por una salida negociada del conflicto, las cuales veían en este proceso una oportunidad de ser escuchadas y de poner sobre la mesa sus proyectos alternativos de sociedad²⁴¹.

Ahora bien, el diseño maximalista de las audiencias públicas parece ser correlativo a la “Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia en Paz”, acordada entre el gobierno nacional y las FARC. La Agenda Común contenía 12 ejes temáticos, subdivididos a su vez en ejes de discusión²⁴². Incluía una diversidad de temas que se antojaban imposibles de abordar en una

²⁴⁰ Al respecto, uno de los líderes entrevistados para la presente investigación realiza una lectura del proceso de paz y de la falta de voluntad política de las partes para llegar a una solución política:

El proceso de negociación de Pastrana lo viví muy de cerca ya que en esa época era Coordinador de Cifisan en San Vicente del Caguán y en Puerto Leguízamo. Entonces, tuve la oportunidad de ver las prenegociaciones, el durante y las posnegociaciones o el rompimiento de las mismas y el fin de la zona de distensión. Lo más paradójico es que el llamado proceso de paz no estaba basado realmente en una intención de conseguir la paz por ninguna de las partes involucradas. Pastrana por un lado brindaba por la paz, pero por el otro lado firmaba el Plan Colombia con Estados Unidos. La guerrilla utilizó la zona de distensión y el proceso de paz para reacomodarse militarmente y fortalecer su aparato militar. Este proceso recrudeció la guerra y la zona de distensión fue contraproducente para la región, no redundó en el desarrollo local de la misma, en la mejora de las condiciones de la calidad de vida de la población. Las obras que se hicieron en el Caguán y en los otros municipios las construyó la guerrilla, se vieron como obras de guerra y no como obras para el desarrollo. (E20, líder Magisterio UniAmazonia, comunicación personas, 7 y 8 de noviembre de 2010)

²⁴¹ Alrededor de 25.000 personas asistieron a las audiencias públicas con un sin número de propuestas de diferente tipo. Ante la dimensión de la participación, se acordó un cambio de la metodología para que los asistentes pudieran mantener un diálogo con los negociadores. De esta manera, se recogieron propuestas en 10 ejes temáticos contenidas en los “Encuentros Nacionales de Paz” Asimismo, se entregaron propuestas alternativas de desarrollo frente a la sustitución forzada de cultivos de uso ilícito. Sin embargo, ninguna de estas propuestas se llegó a incorporar en la agenda (González Posso, 2009).

²⁴² Los 12 temas que incluía la Agenda eran: 1) Solución política al conflicto, 2) Derechos humanos, 3) Política agraria integral; 4) Explotación y conservación de recursos naturales, 5) Estructura económica y social, 6) Reformas a la justicia, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, 7) Reformas políticas para la ampliación de la democracia, 8) Reformas al Estado, 9) Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario, 10) Fuerzas Militares, 11) Relaciones Internacionales, 12) Formalización de los Acuerdos.

negociación que tenía una fecha de duración determinada. Como señala Pizarro (2017), el análisis de los procesos de paz en Colombia demuestra que cada gobierno ha traído bajo el brazo su propio modelo y no ha sido posible una continuidad en las estrategias.

Al verlo en perspectiva, la Agenda parece una trampa del proceso utilizada como un recurso para ser aprovechado por las partes para el fortalecimiento de sus programas políticos-militares²⁴³. Finalmente, por los impasses del proceso y las características del mismo no se llegaron a acuerdos en ninguno de los puntos, lo que provocó sin duda un revés para los sectores democráticos que abogaban por una solución política del conflicto. En particular, para los sectores sociales populares, directamente afectados por las dinámicas de la guerra²⁴⁴.

5.6. El Plan Colombia como estrategia de lucha contrainsurgente

Los puntos que más tensión generaron en la negociación y que centraron la atención real por parte del gobierno y de las FARC fueron la expansión de los grupos paramilitares, el canje humanitario y el Plan Colombia. Este último representó el punto de tensión más fuerte en la mesa de negociación. El componente militar de la iniciativa evidenciaba la estrategia del gobierno nacional ante la expansión del movimiento guerrillero y la consolidación de la presencia insurgente en los territorios de cultivos de uso ilícito (Pizarro, 2017).

²⁴³ Los representantes de las FARC encargados de la negociación de la Agenda Común representaban el ala militar dentro de la organización: Raúl Reyes, Fabián Ramírez y Joaquín Gómez. La selección de estos perfiles frente a otros con un carácter más político, como Alfonso Cano y Pablo Catatumbo, pone en cuestión la voluntad para llegar a acuerdos, así como la hegemonía de la tesis militar frente a una lectura mucho más política (Sierra, 2015; Pizarro, 2017).

²⁴⁴ Al terminar la zona de despeje se produjo una fuerte estigmatización y criminalización de las comunidades asentadas en esta región. La disputa por el control del territorio y la agudización del conflicto armado fueron algunas de las consecuencias del proceso de paz fallido. Uno de los líderes sociales que vivía en San Vicente Caguán lo analiza de la siguiente manera:

Una vez se rompen los diálogos entre el gobierno de Pastrana y las FARC y se levanta la zona de distensión comienzan los bombardeos en toda la región y en los municipios que se despejaron y en donde se encontraba la guerrilla durante los acercamientos. Las comunidades asentadas en la región sintieron una desilusión muy grande, se sintieron abandonados, intimidados y estigmatizados. La zona de despeje no representó ningún beneficio para las comunidades. Las organizaciones sociales populares, comunitarias y de base fueron estigmatizadas, sospechosas de ayudar a la guerrilla o de pertenecer a este grupo armado, señaladas como terroristas, lo que las colocó en la mira de los grupos armados, de los paramilitares y del mismo ejército. Los grupos paramilitares entran de forma fuerte en el Caquetá después del rompimiento de las negociaciones de paz y el levantamiento del despeje. Las organizaciones sociales y populares se convierten en el blanco de las acciones de estos grupos, intimidación, muertes selectivas, masacres, amenazas, etc. (E20, líder Magisterio UniAmazonia, comunicación personas, 7 y 8 de noviembre de 2010)

El razonamiento implícito del Plan se fundamentaba en el análisis de las dinámicas del movimiento insurgente, que en los últimos años se había implicado de manera preocupante en la economía de la droga. El fortalecimiento derivado de este hecho hacía que las Fuerzas Militares, en las circunstancias del periodo, no pudieran derrotar militarmente a la guerrilla. En este sentido, el gobierno estimaba la urgencia de una estrategia que permitiera doblegar a las FARC y al ELN para lograr un proceso de negociación con posibilidades reales. En esta lógica, la guerra contra las drogas estaba ligada necesariamente a la lucha contrainsurgente. Por lo tanto, se precisaba una intervención que permitiera contener el conflicto y evitar una expansión del mismo a los países vecinos²⁴⁵.

La articulación entre la lucha contrainsurgente y la guerra contra las drogas fue aún más evidente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La consolidación de la doctrina de la seguridad y de la guerra contra el terror, promovida por el Gobierno de George Bush (2001-2009), se tradujo en Colombia en la lucha contra los grupos guerrilleros que se pasaron a denominar “narcoterroristas” y subsumió el conflicto armado en los códigos geopolíticos de Estados Unidos²⁴⁶ (González, 2009; Rojas, 2006). Se instauró nuevamente una retórica fundamentada en una concepción binaria del mundo, dividida entre el bien y el mal, y en una territorialización del peligro (Sharp, 2005). Esta concepción binaria y simplista se tradujo en la retórica hegemónica del conflicto, que se consolidó en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, y se materializó en su Política de Seguridad Democrática. Este planteamiento binario impactó también en la forma en que la institucionalidad abordó la conflictividad social. Los sectores políticos críticos al establecimiento y la protesta social fueron duramente estigmatizados y objetivo de las acciones violentas tanto de los actores armados legales como ilegales.

²⁴⁵ En la práctica, esta visión se tradujo en la aprobación por parte del Senado estadounidense de la Iniciativa Regional Andina (IRA) en el año 2001. La presión militar producida por la aplicación del Plan Colombia generó un desplazamiento de los grupos armados a las fronteras del país. De esta manera, se buscaba la implementación de una estrategia regional para la lucha contra las drogas articulada con la acción contrainsurgente. Desde nuestro punto de vista, la “pacificación” de la región pretendía asegurar objetivos que van más allá de una política antinarcóticos, el control militar de un vasto territorio que permitiera la inversión extranjera y la consolidación del libre mercado asegurando los intereses de Estados Unidos.

²⁴⁶ Rojas plantea que la percepción del conflicto armado cambia sustancialmente a partir de mediados de la década de los noventa. Este giro se debe en parte al papel central que ha jugado Estados Unidos en el cambio de la dinámica del conflicto,

a través de la confusión de la guerra antinarcóticos y la lucha contrainsurgente en una sola estrategia, ahora identificada con la lucha antiterrorista. Esto implica, a su vez, un cambio en la naturaleza misma de la guerra en Colombia, en la que Estados Unidos se convierte en un actor directo por medio tanto de los resultados esperados como de los efectos derivados. (Rojas, 2006, p. 41)

De esta manera, el componente militar del Plan Colombia primó sobre la estrategia de intervención social en los territorios en donde se concentraban los cultivos de uso ilícito²⁴⁷. Es de señalar que en el *Plan de Desarrollo Cambio para construir la paz (1998-2002)*, el Plan Colombia se planteaba como una estrategia territorial con un cierto contenido social:

En primera instancia y como eje central de la política de paz, el gobierno ha estructurado el Plan Colombia el cual, a través de combinar adecuadamente las acciones de atención humanitaria con las de desarrollo, dejando atrás el tradicional esquema asistencialista, adelantará su acción en tres frentes: sustitución de cultivos ilícitos por medio de programas de desarrollo alternativo, atención a la población desplazada y acciones priorizadas y focalizadas hacia regiones donde la violencia ha asumido un carácter crítico. (Departamento Nacional de Planeación, 1999, p. 306)

En esta versión del Plan Colombia, se buscaba intervenir los territorios más afectados por la violencia a través de una serie de programas de desarrollo social, sustentados en herramientas de participación ciudadana en la escala local, para generar unos consensos que viabilizarán la construcción de la paz en los territorios. Desde la visión del gobierno, la consolidación de la gobernanza local y la vinculación de las regiones periféricas a las dinámicas del mercado global eran elementos fundamentales en la política de paz²⁴⁸.

La perspectiva del gobierno fue siempre, entonces, la de la apertura de los espacios para asegurar la inversión extranjera y sobre la base de las alianzas públicas privadas para la gestión de los territorios. En este sentido, estamos ante una intervención que se diseñaba desde la perspectiva de los técnicos a partir de unos códigos de planificación para la profundización de un modelo de desarrollo²⁴⁹. Es la representación del espacio de los que nos hablaba Lefebvre (2013 [1974]) y su

²⁴⁷ El 74% del presupuesto del Plan Colombia se destinó al fortalecimiento militar (60%) y policial (14%). El componente para inversión social solo alcanzó el 26%, dentro del cual se destinó un 8% para desarrollo alternativo (Ramírez, 2006).

²⁴⁸ Las organizaciones sociales populares realizaron una valoración más amplia del problema de los cultivos de uso ilícito en el país. Lo situaron en una crisis del sector rural colombiano, en la falta de condiciones para ser competitivos en el contexto de las reformas neoliberales y de la apertura comercial. Estimaron que las condiciones del campo colombiano, se veían agravadas por una contrarreforma agraria adelantada con los dividendos de la economía de la droga, lo que se tradujo en “la concentración en pocas manos de más de cuatro millones de hectáreas de tierras aptas para actividades agropecuarias, dedicadas casi en su totalidad a la ganadería extensiva en detrimento de actividades productivas generadoras de excedentes para el campo” (I Foro “El Sur responde al Plan Colombia”, 2000). El diagnóstico realizado por estos actores difería del planteamiento del gobierno nacional. En este sentido, entendían que la estrategia del gobierno se tornaba insuficiente.

²⁴⁹ En el capítulo que aborda el Plan Colombia se señalaba:

El papel del gobierno estará orientado a promover y facilitar la participación de la sociedad civil y del sector privado, así como la integración de las alianzas estratégicas; a definir alternativas viables que garanticen el ingreso de los campesinos en los períodos de maduración de los proyectos; e invertir en el desarrollo del capital humano orientado hacia la producción. En las zonas de cultivos ilícitos este tipo de proyectos servirá

correspondiente práctica espacial. Los mecanismos de participación permitirían legitimar la intervención a partir de unas prácticas espaciales concretas. Sin embargo, los territorios objeto del Plan Colombia estaban inmersos en una suerte de territorialidades superpuestas que se disputaban el control del territorio.

Desde nuestro punto de vista, no era la ausencia de Estado en esos “espacios vacíos”. Algunas de las funciones del Estado eran ejercidas por los grupos armados ilegales que desplegaban un ejercicio biopolítico sobre las comunidades, manejaban los volúmenes de población de acuerdo a sus proyectos económicos (cultivos de uso ilícito, plantaciones agroindustriales, ganadería extensiva etc.) establecían una fiscalidad y una tributación (por ejemplo, impuesto al gramaje), entre otras funciones.

En el documento final *Plan Colombia: plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado* presentado en el año 2000, los planteamientos parecían estar enfocados, fundamentalmente, a la recuperación militar del territorio para cortar las fuentes de financiación del movimiento insurgente y cambiar la correlación de fuerzas a favor del Estado colombiano²⁵⁰. En el texto se señalaba que la lucha contra la producción y el tráfico de drogas era una de sus mayores prioridades y, aunque hay un apartado para el desarrollo social y la democratización, el énfasis de la intervención social en lo local parece estar supeditado al combate del narcotráfico, haciendo hincapié en la dimensión global y en la corresponsabilidad entre países productores y consumidores. De esta manera, se simplificaban los conflictos presentes en los territorios al problema del narcotráfico. Asimismo, las estrategias de desarrollo económico estaban ligadas a la incorporación de la actividad campesina a los circuitos globales de la economía.

Las organizaciones sociales populares valoraban de la siguiente manera la intervención del Plan Colombia en sus territorios:

El diseño y las estrategias de erradicación de cultivos ilícitos que contiene el Plan Colombia adelantado por el Gobierno Nacional desconoció las realidades locales y las iniciativas de las comunidades afectadas, las autoridades locales y regionales. El Plan Colombia es una

para sustituir los cultivos ilegales por cultivos que den alternativas para mantener niveles adecuados de desarrollo económico y social permanentes. (Departamento Nacional de Planeación, 1999, p. 311)

²⁵⁰ Al parecer, se dieron algunas interpretaciones diferentes en los sectores estadounidenses que conocían el Plan Colombia. Estos sectores consideraban que la eliminación u obstrucción de las fuentes financieras de la guerrilla no necesariamente desembocaría en una derrota militar, ya que el movimiento insurgente había demostrado una capacidad camaleónica para adaptarse a nuevas circunstancias. Por otra parte, la existencia de la guerrilla retroalimentaba a los grupos paramilitares. En este contexto se veía la necesidad de combatir directamente a los grupos guerrilleros, entrar en una confrontación directa, y no actuar solo con una perspectiva de lucha contra las drogas (Peco & Peral, 2005, p. 65).

estrategia encaminada a desestabilizar y revertir los procesos de transición democrática en la región andina y aplicar medidas represivas contra las protestas sociales, económicas y políticas, generadas por los procesos de globalización y la aplicación del modelo neoliberal. El Plan Colombia se constituye en un instrumento de lucha contrainsurgente el cual contribuirá de manera negativa al escalamiento y expansión de la guerra que se libra en Colombia desde hace 30 años. (I Foro "El Sur responde al Plan Colombia", 2000, p.)

La lucha contrainsurgente se realizó bajo la coordinación del Comando Sur del Pentágono, “dentro del cual hay un Grupo Militar para Colombia que va a ser quien se encargue de acompañar, formar, asesorar y fortalecer a las Fuerzas Armadas colombianas” (Government Accountability Office, 2008, como se citó en Ríos, 2015, p. 68-69). La reestructuración de las Fuerzas Armadas se realizó a través de diferentes frentes: dotación de equipos, entrenamiento, incorporación de alta tecnología, profesionalización de sus componentes, etc. Los recursos para la modernización vinieron principalmente de los aportes de Estados Unidos, que destinó una parte importante al componente militar y policial del Plan. En particular, se destacan las inversiones en helicópteros para la lucha contra las drogas y la creación de batallones especializados en la lucha antinarcóticos, localizados en el sur del país²⁵¹ (Peco & Peral, 2005, p. 63). Asimismo, se lanzó una ofensiva para recuperar los territorios de cultivos de uso ilícito y de influencia de los grupos armados ilegales. En una primera fase, los departamentos de Caquetá y Putumayo; posteriormente, el suroccidente y centro del país hasta abarcar gran parte del territorio nacional.

La estrategia conjunta entre Colombia y Estados Unidos, en la que la lucha contra la droga y el combate contrainsurgente iban de la mano, se tradujo en una militarización de la mayoría de los territorios. Se presentó una escalada del conflicto armado, así como la agudización de otros conflictos presentes en las regiones. Las FARC elevaron a 70 sus frentes de combate. El ELN también multiplicó sus Frentes llegando a 40. Los grupos paramilitares reforzaron sus estructuras y ampliaron el número de combatientes a 12.000 (Ríos Sierra, 2015). Ante la presión de las Fuerzas Militares y de los grupos paramilitares, la guerrilla comenzó un proceso de desplazamiento a regiones periféricas y de frontera, alterando su forma de actuación (Ríos Sierra, 2016). En esta línea, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) señala que en los años 2002 y 2003 “se presentó una reestructuración de la dinámica del conflicto armado

²⁵¹ Durante este periodo se crearon tres batallones antinarcóticos en los que recibieron entrenamiento 2.398 personas por parte de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, en los municipios de Tolomai (Cundinamarca), Tres Esquinas (Caquetá) y Laramia (Caquetá). En total se calcula que el costo del entrenamiento fueron 16 millones de dólares (Rojas & Aterhortúa, 2001, p. 121).

interno, situación que se hizo visible por el reacomodamiento de los actores armados en el país y el concomitante cambio de sus formas de control territorial, poblacional y de recursos” (CODHES, 2004, p. 7).

Según el informe de CODHES para el año 2002, este periodo fue el de mayor desplazamiento forzado desde 1985. La organización señala que hubo 412.553 personas desplazadas (20 por ciento más que en el 2001). De los 1.115 municipios que hay en el país, 955 expulsaron población. No solo se produjo este fenómeno en las regiones en donde de manera tradicional se había concentrado el conflicto armado, sino que hubo una expansión a otros territorios. Para esta organización, las zonas de mayor expulsión no fueron solo las de cultivos de uso ilícito sino también aquellas localizaciones en donde se implementaron determinados tipos de proyectos económicos, en su mayor parte relacionados con el uso intensivo de recursos naturales agrícolas y mineros, de ganadería extensiva, entre otros²⁵². Por la presión militar el conflicto se fue trasladando a las fronteras. Esta presión generó que 21.800 nacionales migraran huyendo de la confrontación armada (CODHES, 2003).

Asimismo, en el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año 2002, se alertaba sobre el recrudecimiento del conflicto y la intensificación de la violencia debido a la expansión territorial de la confrontación, incluso en zonas urbanas. Además, calificaba como crítica la situación de los derechos civiles, políticos y sociales, así como las acciones en contra del Derecho Internacional Humanitario (masacres, asesinatos colectivos, homicidios, tortura, desapariciones forzadas, etc.) (Naciones Unidas, 2003).

De esta manera, se estima que el Plan Colombia produjo una escalada del conflicto armado y una reconfiguración de los poderes locales desde una lógica civil-militar, en lugares periféricos en donde la institucionalidad estatal era muy frágil. La estrategia de protección de las comunidades y de salvaguarda de los derechos humanos, se mostró del todo insuficiente; y el temor a una profundización de la crisis humanitaria expresado por diferentes organizaciones de la sociedad civil, se hizo evidente, como se aprecia en el siguiente comunicado:

El Plan Colombia tiene un componente militar determinante e implica una estrategia de guerra cuyos primeros afectados son los campesinos cocaleros y que, además, hace peligrar los esfuerzos de paz, incrementa el conflicto armado interno, atenta contra el medio ambiente y la biodiversidad amazónica y agrava la crisis humanitaria con más desplazados

²⁵² En el informe de CODHES se señalaba que este periodo fue especialmente violento para las comunidades afrodescendientes e indígenas que fueron objeto de diferentes tipos de violencia y se vieron obligadas a desplazarse de sus territorios afectando de manera significativa a su capital social y cultural. Ejemplo de ello, es la tasa de expulsión de las comunidades afrodescendientes, un 20% mayor que la del resto del país. Los indígenas desplazados para ese año fueron el 1,75% del total de su población (CODHES, 2003).

y refugiados. (Comunicado "Una Voz por la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Social", 2000).

CAPÍTULO 6. Reconfiguración del conflicto armado (2002-2014) y la consolidación del modelo de desarrollo extractivo exportador

El objetivo de este capítulo es abordar las principales políticas de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y del primer mandato de Juan Manuel Santos (2002-2014), en relación con el conflicto social y armado y las políticas de desarrollo. El periodo 2002-2014 se corresponde con los estudios de caso que se abordaran en la Parte III de la presente tesis. Por consiguiente, el propósito es establecer unas características espacio-temporales que nos permitan hacer una reflexión amplia sobre las percepciones que construyen los sectores sociales populares de los conflictos en sus territorios.

6.1. Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)

El triunfo electoral del liberal disidente Álvaro Uribe Vélez en las elecciones presidenciales del año 2002, se relacionó con una serie de factores de diversa índole que lo catapultaron a la primera línea política²⁵³.

En el ámbito nacional, el fracaso del proceso de negociación durante el gobierno de Andrés Pastrana con la guerrilla de las FARC, se tradujo en una reconfiguración de los actores armados regulares e irregulares y en una expansión del conflicto a (prácticamente) todo el territorio colombiano. El radio de acción de las guerrillas, en particular las FARC, se amplió de las zonas tradicionales de influencia de carácter rural a las zonas urbanas, lo que generó una mayor percepción de inseguridad en la población. Los grupos paramilitares crecieron en número, consolidaron su presencia en territorios como la Costa Caribe y el Magdalena Medio y entraron a disputar el control territorial a los movimientos guerrilleros. Se presentó una escalada de la confrontación armada que también se atribuye a la aplicación del Plan Colombia.

La candidatura de Álvaro Uribe capitalizó la grave situación de orden público, el desencanto producido por un proceso de paz fallido y la deslegitimación de una salida política

²⁵³ En las elecciones del año 2002, se presentaron los siguientes candidatos: Luis Eduardo Garzón por el Frente Social y Político, que agrupó a diferentes corrientes de izquierda; la exministra Noemí Sanín por el movimiento Sí Colombia; el candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa; y, Álvaro Uribe Vélez por el movimiento Primero Colombia. El Partido Conservador retiró a su candidato, Juan Camilo Restrepo, y se adhirió a la candidatura de Uribe Vélez.

negociada. La campaña se centró en un ataque frontal al movimiento insurgente, con la promesa de aplicar la mano dura si llegaba a la presidencia. La seguridad, en el sentido tradicional del concepto, fue uno de los ejes centrales de su discurso. Durante la posesión en el año 2002, el presidente Uribe declaró: “Queremos la paz, no el apaciguamiento que se origina en el diálogo insincero, en el acuerdo claudicante o en la tiranía oficial. El apaciguamiento no reconcilia, suspende por momentos la violencia y la reaparece con superior intensidad” (Tabares, 2006, p. 34).

Álvaro Uribe Vélez se reveló ante el país como un político independiente. Al no obtener el respaldo oficial del Partido Liberal, se presentó por el movimiento Primero Colombia²⁵⁴, que aglutinó a disidentes de los partidos tradicionales y a figuras reconocidas del ámbito empresarial, muy críticos con el proceso de paz del Caguán. En consonancia con su pretendida independencia política, otro de los ejes de su discurso fue la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. El candidato se erigió como el adalid moral de la política colombiana, en un contexto signado por los escándalos derivados de los nexos entre la clase política tradicional y los carteles de la droga. De esta manera, el discurso de Uribe recuperó los valores tradicionales asociados a la patria, a la honradez, el trabajo arduo y la defensa de la familia y la propiedad privada²⁵⁵.

En el ámbito internacional, el discurso de Uribe se alineó con la Doctrina de Seguridad implementada por George W. Bush, a partir de los atentados del 11S en Estados Unidos. La coincidencia de planteamientos le permitió unas condiciones geopolíticas favorables a la implementación de sus programas de gobierno. En este sentido, Álvaro Uribe siguió la senda marcada por Estados Unidos, desplegó una serie de dispositivos jurídicos, económicos, culturales

²⁵⁴ El movimiento Primero Colombia fue fundado como una asociación sin ánimo de lucro en 1996 en el departamento de Antioquia. En su página web se reconocen como custodia del pensamiento democrático del Dr. Álvaro Uribe Vélez, que se conoce como Estado Comunitario y que se soporta en tres pilares: Seguridad Democrática, Confianza Inversionista e Inversión Social, Equidad. Esta visión ha sido la motivación e impulso de esta Asociación. (Primero Colombia, s.f.)

Actualmente, la asociación se encuentra enfocada a la promoción del pensamiento político de lo que se ha denominado el “uribismo” y a la formación de cuadros.

²⁵⁵ En el discurso de posesión en el año 2002, el presidente Uribe, señaló

Empecemos un gobierno honrado, eficaz, austero, no milagro, con el trabajo como emblema [...] Que el amor a nuestra patria sea la llamada a través de la cual Nuestro Señor y la Santísima Virgen me iluminen para acertar; también para superar la humana vanidad y rectificar cuando incurra en el error. Aspiro, dentro de cuatro años, poder mirar a los ojos de ustedes, mis compatriotas. (Tabares, 2006, p. 35)

y militares de manera conjunta, que le permitió construir una interpretación de la realidad hegemónica base de las acciones emprendidas²⁵⁶ (Ceceña, 2004).

Como consecuencia, se produjo una estigmatización y criminalización de las posiciones disidentes de su modelo que pudieran generar cualquier tipo de resistencia al considerarlas subversivas del orden establecido. Recordemos que se instauró un pensamiento binario, sustentado en la idea de “si no estás conmigo, estás contra mí”, que favoreció un clima de polarización política y de retroalimentación de las dinámicas del conflicto, en contravía de un ambiente de reconciliación que propiciara espacios para la construcción de la paz (Villarraga, 2005).

Colombia consolidó sus relaciones con Estados Unidos, lo que le permitió a este último desplegar su influencia en zonas estratégicas para su política de seguridad nacional, articuladas con los intereses económicos sobre el sur del continente. El despliegue de las bases militares antinarcóticos y la presencia de asesores militares en el territorio nacional le permitió extenderse hacia la región amazónica, proteger la zona norte de Sur América, los territorios ricos en hidrocarburos y los corredores que comunican el océano Pacífico y el Atlántico (Ceceña, 2004, p. 41).

Es así como la política del gobierno de Uribe durante sus dos mandatos se construyó sobre la base de un discurso que negaba la existencia de un conflicto social y armado, reconocido por gobiernos anteriores y legitimado en los diferentes procesos de negociación con las guerrillas, para articular la retórica de la “amenaza terrorista”. De esta manera, el conflicto transitó de tener connotaciones políticas relacionadas con elementos estructurales de la construcción del Estado-nación, a un enfrentamiento entre un Estado legítimo y unos grupos narcoterroristas, manteniendo la intencionalidad del lenguaje implementado durante el gobierno anterior²⁵⁷.

El discurso del entrante mandatario se sustentaba en tres pilares presentes en los dos planes de gobierno del presidente Uribe Vélez, *Hacia un Estado Comunitario* (2002-2006) y *Estado Comunitario: desarrollo para todos* (2006-2010): seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. El planteamiento de fondo del gobierno consistió en la pacificación de los

²⁵⁶ El clima adverso para la lucha insurgente a partir de los atentados del 11S y la implementación de la Doctrina de Seguridad, se materializó en la inclusión de las FARC y el ELN en las listas de grupos considerados terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Unión Europea. Además, Estados Unidos solicitó la extradición de comandantes de las guerrillas y de los grupos paramilitares por sus vínculos con el narcotráfico.

²⁵⁷ En la intervención en el Foro ¿Se está ganando la guerra? Realizada en el 2004, el presidente Uribe señaló “¿Cuál es el factor de legitimidad en Colombia para llamar a esta violencia guerra? Me parece que el gran daño es llamar a esta violencia, guerra” Y más adelante, planteó “Aquí los que hay es un desafío del terrorismo contra una comunidad que todos los días ha venido fortaleciendo su democracia” (Tabares, 2006, p. 63).

territorios, a través de la militarización y la implementación de políticas focalizadas para la creación de una serie de condiciones que habilitaron la apertura de los espacios para la entrada de la inversión económica, nacional e internacional (Ñánez et al., 2009). En esta línea, las políticas gubernamentales permitieron la consolidación del modelo de desarrollo que se venía implementando desde la década de los noventa.

A continuación, profundizaremos en la política de este gobierno, sustentada en los tres pilares nombrados anteriormente, que explica un aumento de la conflictividad social que se produjo en los diferentes territorios.

6.1.1. Política de Defensa y Seguridad Democrática

Como señalamos anteriormente, la Política de Defensa y de Seguridad Democrática (PDSD) desplegada durante los dos mandatos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, fue la columna vertebral sobre la cual pivotó su programa de gobierno. En su discurso de posesión, el entrante presidente señaló algunos de los principales ejes sobre los cuales iba a descansar su política: el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la colaboración ciudadana y la ofensiva contra los movimientos guerrilleros; todo ello envuelto en una retórica de patriotismo, que le permitió generar un consenso social alrededor de la defensa y la seguridad:

Nuestro concepto de seguridad democrática demanda aplicarnos a buscar la protección eficaz de los ciudadanos con independencia de su credo político o nivel de riqueza. La Nación entera clama por reposo y seguridad. Ningún crimen puede tener directa o ladina justificación. Que ningún secuestro halle doctrina política que lo explique. Comprendo el dolor de las madres, de los huérfanos y desplazados de la Patria, en su nombre revisaré mi alma cada madrugada para que las acciones de autoridad que emprenda tengan la más pura intención y el más noble desarrollo. Apoyaré con afecto a las Fuerzas Armadas de la Nación y estimularemos que millones de ciudadanos concurren a asistirlos [...] Cuando un Estado democrático es eficaz en sus garantías, así los logros sean progresivos, la violencia en su contra es terrorismo. No aceptamos la violencia para combatir el Gobierno ni para defenderlo. Ambas son terrorismo. La fuerza legítima del Estado cumple la exclusiva misión de defender a la comunidad y no puede utilizarse para acallar a los críticos. (El Tiempo, 2002)

De esta manera, la política de seguridad democrática articuló una serie de medidas en el ámbito político, jurídico y social, que le habilitaron para desplegar una ofensiva integral contra lo que se denominó los factores de violencia que impedían el desarrollo económico y social de la nación. La política que se implementó contó con el apoyo amplio de las élites económicas y

políticas del país, que veían en la “mano dura” de Uribe una oportunidad para reorganizar los territorios y poner orden “en la casa”, después del fallido proceso de paz del Caguán.

La apuesta del gobierno se fundamentó en un planteamiento que resultaba razonable para las élites y encontró un amplio respaldo de la opinión pública. La seguridad y la defensa eran requisitos indispensables para lograr el desarrollo económico, lo cual pasaba por una derrota militar del movimiento insurgente. Por tanto, el gobierno estimó que el dilema entre paz o desarrollo estaba superado, al abordar la seguridad desde este enfoque (GMH, 2013; González, 2014).

En el Plan de Desarrollo *Hacia un Estado Comunitario* (2002-2006) se dedicó el primer capítulo a la seguridad democrática, en donde se perfilaron los primeros lineamientos de la política: control del territorio y soberanía nacional, el combate al problema de las drogas ilícitas y al crimen organizado, el fortalecimiento del servicio a la justicia, el desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto, protección y promoción de los DDHH y del DIH, el fortalecimiento de la convivencia y de los valores, y la dimensión internacional (Departamento Nacional de Planeación, 2003).

Un elemento fundamental para la puesta en marcha de la iniciativa del gobierno era contar con el apoyo irrestricto de Estados Unidos. De esta manera, Uribe continuó con la estrategia de internacionalización del conflicto, apelando al sentido de corresponsabilidad de la comunidad internacional en el combate contra el narcotráfico. Se reforzó aún más la relación entre la lucha contrainsurgente y la lucha contra las drogas, despojando al conflicto de su dimensión política, reduciendo el problema a la violencia armada²⁵⁸ (Buitrago, 2006). Por tanto, la posición del gobierno cerraba cualquier posibilidad de entablar un proceso de negociación con las guerrillas, en contravía con las políticas de paz de mandatos anteriores. La posibilidad de diálogo se circunscribió a una derrota militar de la insurgencia y al sometimiento a la justicia de los combatientes, que tendrían algunos beneficios judiciales en caso de no tener delitos de lesa humanidad (Villarraga, 2008).

El apoyo del gobierno estadounidense se materializó con la puesta en marcha del Plan Patriota (2004-2006). Una iniciativa abiertamente militar que representó la continuidad del Plan Colombia. La implementación de esta nueva estrategia evidenció el involucramiento directo de

²⁵⁸ Francisco Leal Buitrago (2006), señala que la estrategia de incluir al conflicto armado en la guerra internacional contra las drogas llevó al gobierno a apoyar la invasión de EE. UU a Irak, alterando la tradición nacional de seguir la postura de las Naciones Unidas en cuanto a los conflictos internacionales.

Estados Unidos en la lucha contrainsurgente. De esta manera, se prestó apoyo operativo, logístico y estratégico. En este proceso, el Comando Sur jugó un papel fundamental. Expertos militares y contratistas desarrollaron tareas de planeación y soporte logístico a las operaciones, que tenían como objetivo fundamental capturar a miembros del Secretariado de las FARC, debilitar su estructura y provocar una derrota militar²⁵⁹ (Rojas, 2006). La continuidad del Plan Patriota en el segundo mandato de Uribe Vélez se desarrolló a través de lo que se denominó el Plan de Consolidación Territorial²⁶⁰.

De esta manera, la lógica de la PDSO consistió en una primera fase de recuperación del control de los territorios a través de la acción de las Fuerzas Armadas. El dominio de los corredores estratégicos de las guerrillas y de los narcotraficantes, así como el impacto en sus espacios de influencia, redes y mallas desplegadas en los territorios que los pudieran abastecer de recursos para la guerra y la economía de la droga.

En la segunda fase, se preveía el mantenimiento de los territorios recuperados a través de unas condiciones mínimas de seguridad. La Política de Consolidación respondió a este segundo momento de mantenimiento territorial. Se esperaba un mayor énfasis en inversión social tratando de corregir los errores de la PDSO del primer mandato de Uribe, reconociendo que, si bien se debilitó al movimiento guerrillero no se logró su derrota militar como era lo esperado (Palou & Arias, 2016).

El Plan Patriota se focalizó en el sur del país, en los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo (Figura 2, Figura 5). Una región periférica, marginal, selvática y de difícil acceso, de enorme importancia para los grupos irregulares al ser una zona de retaguardia, clave para su estrategia militar y financiera, debido a la concentración de cultivos de uso ilícito y al constituirse en un corredor (de armas, tropas, droga, insumos, etc.) que comunica el centro con el sur del país hacia los estados fronterizos²⁶¹.

²⁵⁹ Se calcula que en el Plan Patriota se desplegaron alrededor de 18.000 efectivos. Los recursos norteamericanos superaron los 100 millones de dólares que fueron destinados a entrenamiento, armas, repuestos, inteligencia, transporte, equipos de comunicación, entre otros. El número de contratistas presentes en territorio nacional fueron aproximadamente 600 (Rojas, 2006).

²⁶⁰ El Plan de Consolidación Territorial tenía como objetivo fundamental estabilizar los territorios una vez las Fuerzas Militares recuperaran el control de estos. Las líneas de actuación eran coincidentes con el Plan Colombia y con el Plan Patriota: componente contrainsurgente, luchas contra el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito, y acciones de intervención social. Estas últimas en un grado menor y supeditadas a las dos primeras (Palou & Arias, 2016).

²⁶¹ Es importante recordar, que el auge de la economía de la droga, implicó una mayor participación de los actores irregulares en la cadena de producción de la coca y de la heroína, que provocó una nueva etapa de enfrentamiento por

Por su parte, el Plan de Consolidación se focalizó geográficamente en áreas de disputa con los actores armados irregulares y narcotraficantes; bien por ser zonas de retaguardia, corredores estratégicos o nuevos espacios de cultivos de uso ilícito (para ver el tránsito de los focos de enfrentamiento ver Figura 2 y Figura 4), a saber:

Áreas principales para iniciar la consolidación: Zona Macarena y Río Caguán, Zona Pacífico (Nariño, Cauca, Buenaventura, Sur de Chocó), Zona Bajo Cauca Antioqueño y Sur de Córdoba, Zona Sur de Tolima y Sur de Valle del Cauca. Áreas de transición hacia la consolidación: Zona Montes de María, Zona Sierra Nevada de Santa Marta y Zona Oriente Antioqueño. Áreas Complementarias: Zona Arauca, Zona Putumayo, Zona Catatumbo y Zona Bajo Atrato. (Palou & Arias, 2016, p. 19)

El control de estos territorios ha sido clave, en términos geopolíticos y geoeconómicos, y representan todavía una ventaja en la dinámica de la guerra (Pécaut, 2004 como se citó en Salas, 2010). El dominio de las redes de comunicación que se extienden en este territorio asegura la expansión de la territorialidad de los actores armados. Recordemos cuando Raffestin nos señala que la multidimensionalidad y la inmanencia del poder se derivan no de la omnipresencia del mismo, sino de la procedencia. Raffestin (2011 [1980]) estima que el poder se ha de manifestar en el proceso de intercambio o comunicación entre los diferentes puntos, redes o centralidades, creando así campos de poder. De esta manera, el dominio sobre las redes fluviales, de montaña o de comunicaciones les permite a los actores armados crear esos campos de poder que no necesariamente están derivados del control de todo el territorio, sino de nodos que permiten la movilidad de recursos, materiales y tropas.

Autores como Salas (2010, 2016), Echandía (2006a, 2006b) y Ríos (2016) señalan cómo, a partir de la década del noventa, la reconfiguración del conflicto armado se encuentra estrechamente relacionada con las dinámicas de expansión espacial de los cultivos de uso ilícito en el país. De esta manera, se incorporan nuevos territorios a la disputa entre los diferentes actores irregulares y cambian las estrategias de acción sobre los mismos, por ejemplo:

Entre 1998 y 2001, 134 municipios fueron atacados por la guerrilla. Al observar la distribución geográfica de los ataques, se evidencia un patrón de localización que refleja el interés por crear un corredor entre los departamentos del suroriente colombiano y la costa pacífica, atravesando municipios de Huila, Tolima, Cauca y Nariño. La forma sistemática en que fueron atacados estos municipios revela el propósito de las FARC de compensar la pérdida de acceso al mar por el golfo de Urabá, donde la fuerte presencia paramilitar ha

la consolidación de su presencia en territorios con cultivos de uso ilícito y de las rutas para la comercialización y el transporte de insumos (Salas, 2010).

logrado contener los múltiples intentos por parte de la organización insurgente por recuperar esta posición estratégica en el noroccidente del país²⁶². (Echandia & Bechara, 2006b)

La aplicación del Plan Colombia, y la continuidad del mismo a través de intervenciones como el Plan Patriota o el Plan de Consolidación Territorial, produjo una reconfiguración de las dinámicas del conflicto armado, como hemos señalado a lo largo de estos capítulos²⁶³. La modernización de las Fuerzas Armadas, la utilización de tecnología para la guerra, el aumento en el pie de fuerza y de los recursos inclinó la balanza a favor del Estado, recuperando la iniciativa en la confrontación armada (Echandia & Cabrera, 2017). No obstante, las guerrillas interpretaron las transformaciones del conflicto, y cambiaron sus estrategias de acción, la logística de sus operaciones militares, e inclusive, sus formas de dominio en los diferentes territorios²⁶⁴.

Las FARC desplegaron acciones violentas en las principales ciudades sin abandonar sus zonas de retaguardia con el objetivo de desafiar al Estado, mostrar su capacidad operativa y transmitir una sensación de inseguridad a la población, así como de fortaleza militar²⁶⁵. La acción del Estado obligó a un repliegue hacia sus zonas tradicionales de influencia (la zona del Caguán) y hacia nuevas regiones de retaguardia situadas en las fronteras y de nueva colonización del cultivo de coca como la Amazonia oriental (Vaupés, Guainía y Vichada) y el Pacífico nariñense y caucano (GMH, 2013, p. 181).

²⁶² En este caso, la acción armada sobre las cabeceras municipales se puede situar en la intención de “delimitar y controlar corredores de movilidad que permitieran la comunicación entre frentes de diferentes regiones y el transporte de combatientes, drogas ilícitas y armas” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016a, p. 63).

²⁶³ Es importante señalar, que al inicio del gobierno de Álvaro Uribe la expansión del conflicto social y armado se extendió a casi todo el país. Las acciones de los grupos irregulares llegaron a afectar a 561 municipios de 1.103 del total de la geografía nacional. La influencia de los actores armados se realizó desde sus zonas tradicionales de dominio hacia otros territorios, consolidando “corredores estratégicos, nuevas regiones y localidades que no habían aparecido hasta el momento en el mapa del conflicto armado del país” (GMH, 2013, p. 176).

²⁶⁴ Bajo las órdenes de Alfonso Cano, en 2008 las FARC despliegan el “Plan Renacer”, con el objetivo de recuperar el espacio político y militar perdido ante la arremetida del Estado. Las principales directrices de la estrategia fueron: primero, recomponer la estructura de la organización (bloques guerrilleros, creación de nuevos Frentes, ampliar el número de combatientes); segundo, se retoma la guerra de guerrillas, pero manteniendo la guerra de movimientos, a través de la movilización de un número importante de hombres para ofensivas en puntos estratégicos; tercero, aumentar la financiación y las fuentes de percepción de recursos (narcotráfico, secuestro, extorsión, inversiones legales); cuarto, recuperar el trabajo político y con las bases sociales, por medio del partido comunista clandestino PC3 y del Movimiento Bolivariano (Aguilera, 2013).

²⁶⁵ Daniel Pécaut señala que las acciones en las ciudades y sus alrededores, no solo han sido desplegadas por las guerrillas, sino que los grupos paramilitares también han implementado este tipo de estrategias, en particular en las tres grandes ciudades. En muchos casos se ha realizado a través de milicias urbanas ubicadas en los barrios periféricos y marginales, el caso de Medellín y de Bogotá (Pécaut, 2004, p. 29).

Para enfrentar la arremetida militar del Estado, las FARC retomaron la estrategia de guerra de guerrillas, que les permitía realizar acciones ofensivas en lugares estratégicos para después replegarse y preparar nuevamente otra acción, generando un desgaste del enemigo (González, 2014). Hasta el año 2003, el objetivo de la guerrilla fue el de preparar de manera lenta el asedio a las ciudades para propiciar las condiciones de una victoria militar y el acceso al poder central.²⁶⁶ Sin embargo, ante las nuevas dinámicas del conflicto, las guerrillas (tanto las FARC como el ELN) pasaron a una fase de “contención y de disminución de las incursiones y predominancia de los ataques”²⁶⁷ (CNMH, 2016a, p. 80).

Este comportamiento implicó que las guerrillas dejaran de buscar el control de los territorios para enfocarse en el control de posiciones estratégicas que les permitieran el dominio de determinados nodos; para garantizar la movilidad de las tropas, el acceso a armas y a recursos financieros y materiales. Acciones todas dirigidas al mantenimiento y la continuidad de la guerra. Echandía y Bechara (2006b) señalan la diferencia entre estas dos estrategias:

Mientras que el control territorial apunta a mantener por la fuerza y/o por medios indirectos un dominio sobre una zona y su población, cuando el fin es el control estratégico lo prioritario no es tanto la influencia sobre la población, sino las ventajas asociadas a las lógicas de guerra. Es así como la geografía del conflicto armado corresponde cada vez menos con la presencia estable de los grupos irregulares, y se relaciona más con objetivos de carácter estratégico que son, en el momento actual, mucho más importantes que la consolidación de dominios territoriales. (p. 32)

En esta misma línea, Daniel Pécaut (2004) plantea que la reconfiguración del conflicto armado desde finales de la década de los noventa, se caracterizó por lo que el autor ha denominado la “desterritorialización” del conflicto. Esta hipótesis se sustenta en el viraje de los objetivos de los actores armados, en donde la expansión del enfrentamiento produjo que los grupos irregulares

²⁶⁶ En el libro *Tomas guerrilleras: 1965-2013* analizan las incursiones, asedios y tomas a cascos municipales y ciudades, no solamente desde el impacto inmediato que puede generar la acción en sí misma sino desde la preparación que se requiere, el hecho, y las actuaciones posteriores. Para ello, utilizan el concepto de repertorios de Tilly, en su acepción general, para analizar

procedimientos o modalidades de acción que fueron frecuentes [...] como patrones de acción evidenciados en la planeación y el desarrollo de las incursiones guerrilleras que son más o menos reiterativos a través del tiempo y que se vuelven comunes en las diferentes regiones en las que dichas acciones tuvieron lugar. (CNMH, 2016a, pp. 48-49)

Por otra parte, la estrategia de asedio a las zonas urbanas se fija en la VIII Conferencia de la organización realizada en 1993, en donde se estableció la necesidad de ocupar espacios en la Cordillera Oriental hacia Bogotá, para cercar de manera paulatina la capital del país.

²⁶⁷ Para el caso de las FARC, Pizarro señala los efectos de la aplicación de la PDSD, en la disgregación extrema de los frentes que “no sólo están generando un grave dislocamiento de las líneas de mando y la disciplina interna, sino produciendo enormes dificultades para el suministro de armas y municiones” (Pizarro, 2006, p. 114).

se centraran en metas políticas (ante la imposibilidad de asegurar completamente los territorios bajo un dominio efectivo y completo). El autor señala que con esta afirmación no se obvia el hecho de que se ejerce un control parcial en determinadas regiones.

De tal manera, Pécaut estima que los actores armados se enfrentaron por el poder político y militar a través del potencial para:

asegurar posiciones clave [...] cambiar los equilibrios de fuerza y obligar al adversario a ceder terreno político, dentro de una visión de la autonomía creciente de los actores armados en relación con la población y todo ello en función de metas estratégicas. (Pécaut, 2004, p. 25)

Estas transformaciones se manifiestan en el enfrentamiento por determinados corredores estratégicos, como señalamos anteriormente. El autor plantea que al ser el control estratégico parte de las lógicas de guerra “lo que cuenta no es prioritariamente la influencia que permite ejercer este control sobre la población sino las ventajas que asegura para la conducción de la guerra” (Pécaut, 2004, p. 29).

En este sentido, se puede hablar de territorios en continua disputa en los que se somete a las comunidades a un dominio generalmente a través de la coacción, pero también a través de acuerdos tácitos de cohabitación. El sociólogo francés, plantea otro elemento relevante: en esta reconfiguración de las dinámicas del conflicto, las fronteras entre esos territorios en disputa se caracterizan por ser dinámicas y en continua evolución. Las realidades pueden variar de localidad a localidad en tanto la disputa se sitúa muchas veces, no en lo macrorregional, sino en una escala más micro. Se evidencia también en la disputa por la captación de las rentas provenientes del extractivismo (hidrocarburos, minería, agrocultivos) y de la economía de la droga (ejemplo de ello es el enfrentamiento por el corredor entre los departamentos del suroriente colombiano y la costa pacífica).

A finales de la primera década del siglo XXI, se puede apreciar un cambio sustancial en las dinámicas del conflicto armado. Tanto el Plan Colombia como la Política de Seguridad Democrática no lograron la disminución de la violencia política, pero el Estado consiguió recuperar el control de alrededor del 70% del territorio nacional, relegando a las guerrillas (particularmente a las FARC) a las periferias, donde mantuvieron cierta fortaleza²⁶⁸.

²⁶⁸ Dávila en un análisis sobre las FARC durante el gobierno de Uribe, señala que la intensidad del conflicto en comparación con el año 2002, ha disminuido “en un 14%, los territorios afectados se han reducido en 45% y el personal

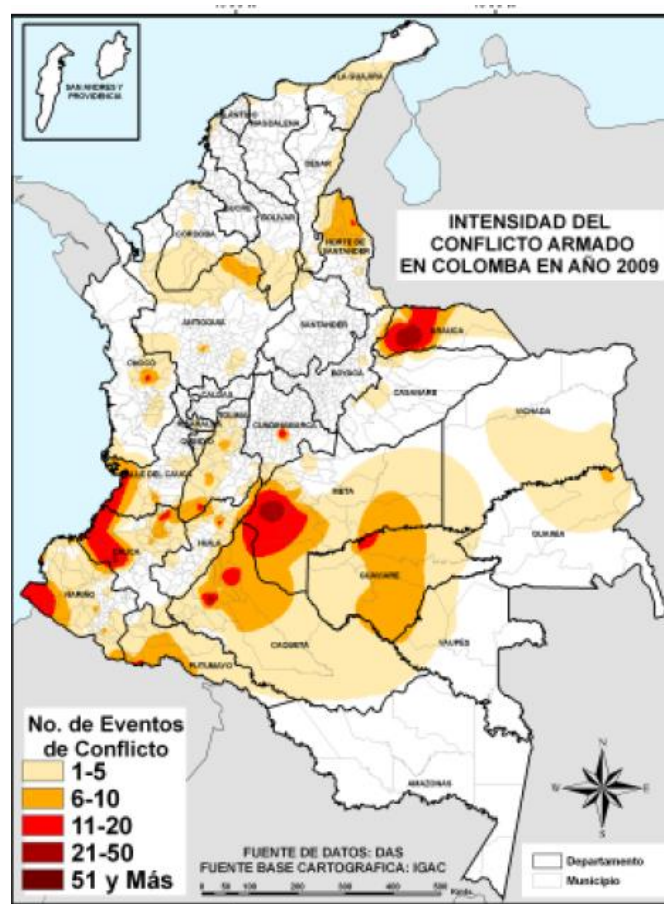
Se puede observar de manera clara la variación en los focos del conflicto (Figura 2 y Figura 5). Las principales zonas de disputa se corresponden con los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Putumayo y el Pacífico nariñense, que se corresponden con zonas de nueva colonización. Además de la presencia de economías extractivas y la conformación de un corredor estratégico hacia el océano Pacífico y países fronterizos. Encontramos en el nororiente a Arauca y Norte de Santander, zonas históricas de enfrentamiento, ricas en hidrocarburos. Además, los departamentos de Meta y Caquetá, región coincidente con la zona de distensión y de influencia de las FARC (Salas, 2010, p. 19).

Por otra parte, durante el gobierno de Uribe se presentó una proliferación de grupos armados ilegales generalmente vinculados al narcotráfico, producto del falso desmantelamiento de los grupos paramilitares, que actuaron de manera descentralizada, sin un mando único y con vínculos transnacionales. A este respecto, volveremos más adelante.

de las FARC se ha reducido en 40%” Por otra parte, el fracaso de la negociación con las AUC, daba como resultado que

300 municipios están afectados por la presencia de los grupos emergentes, rearmados y disidentes del paramilitarismo. El ELN presenta un fortalecimiento en Cauca, Nariño y Arauca. La inseguridad urbana se ha incrementado en el último año. Cerca de 600 de los 1.101 municipios presentan actividad de los grupos armados ilegales”. (Ávila, 2009, p. 4)

Figura 4. Intensidad del conflicto armado en Colombia en el año 2009



Fuente: Adaptado de *Corredores y territorios estratégicos del conflicto armado colombiano: una prioridad por territorializar en la geopolítica de los actores armados* (p. 19), por Salas, 2010.

6.1.2. La militarización de la población civil

La Política de Seguridad Democrática preveía un conjunto de programas y políticas que involucraron a la población civil en el conflicto armado. Para el gobierno, el éxito del combate a la insurgencia radicaba en buena medida en impactar en sus redes de apoyo, así como en dominar las zonas estratégicas que posibilitaran la continuidad de la guerra.

De esta manera, el gobierno combinó el componente militar con la acción integral para la recuperación militar y social del territorio. El discurso patriótico y de exaltación de los valores tradicionales permitió generar un consenso social alrededor de la figura presidencial. La

popularidad de Uribe Vélez, no bajó del 63% durante sus dos mandatos, y llegó al 85% después de la Operación Jaque²⁶⁹ (Londoño, 2010). Esta aprobación fue extensiva a sus políticas: en el año 2009 más del 50% de la población consideraba que era posible derrotar militarmente a las FARC, opinión creada después de la muerte de tres miembros del Secretariado de las Farc: Raúl Reyes, Iván Ríos y Manuel Marulanda Vélez²⁷⁰ (Ávila, 2009).

En el Plan de Desarrollo del 2006-2010 se plantearon una serie de programas dirigidos a la población civil con el objetivo de ampliar las redes de informantes y apoyar el despliegue de las Fuerzas Militares, apelando a la identidad nacional y al deber de la ciudadanía con el Estado, a saber:

El Gobierno Nacional promoverá e incentivará la cooperación voluntaria y patriótica de la ciudadanía a la Fuerza Pública para que proporcione información relacionada con las organizaciones armadas al margen de la ley y la delincuencia. El ciudadano es quien mejor conoce su entorno inmediato y, por ende, las situaciones de inseguridad que permean su vida cotidiana. Por ello se convierte en un actor indispensable y estratégico en la definición de la seguridad y en el apoyo, respaldo y colaboración de las autoridades. Se busca entonces, que los ciudadanos cumplan con su deber de apoyar el esfuerzo estatal de brindar seguridad, y de este modo acompañen al Estado y se sientan respaldados por este. (Departamento Nacional de Planeación, 2003, p. 45)

El centro de la política consistió en la implementación de redes de cooperación ciudadana en todo el territorio nacional, en particular, en las zonas de mayor conflictividad. Para ello, se desplegaron una serie de incentivos como los sistemas de recompensas y el apoyo de los medios de comunicación²⁷¹. El gobierno en su planteamiento inicial estimó que las redes estuvieran conformadas por un millón de habitantes distribuidos en las zonas rurales y urbanas.

²⁶⁹ La Operación Jaque fue ejecutada por el Ejército de Colombia, en el departamento del Guaviare, bajo el mandato de Álvaro Uribe y el Ministro de Defensa de entonces, Juan Manuel Santos. Esta operación de inteligencia tenía como finalidad el rescate humanitario de un grupo de secuestrados, retenidos por las FARC. La liberación se realizó el 02 de julio de 2008. Entre los secuestrados liberados se destaca la figura de excandidata presidencial Ingrid Betancur, tres contratistas estadounidenses y miembros del Ejército y la Policía.

²⁷⁰ Raúl Reyes falleció en un operativo del Ejército colombiano desplegado en territorio ecuatoriano, en las inmediaciones de la frontera con Colombia. El operativo se llevó a cabo el 01 de marzo de 2008 y supuso una crisis diplomática con el país vecino. La muerte de Reyes fue un duro golpe para la organización en tanto ocupaba un papel destacado dentro del Secretariado y ejercía como vocero internacional. Iván Ríos fue asesinado el 3 de marzo de 2008, a manos de su Jefe de Seguridad. En el momento de su ejecución era el comandante del frente José María Córdova. Manuel Marulanda Vélez, máximo comandante y miembro fundador de las FARC, falleció el 26 de marzo de 2008, al parecer por causas naturales.

²⁷¹ Los medios de comunicación en Colombia han estado ligados a los centros de poder hegemónico. En el marco del conflicto han cumplido una función de propaganda contrainsurgente, a través de la “legitimación del orden dominante y la deslegitimación de cualquier expresión disidente que implique crítica al mismo hasta la sutil justificación y el encubrimiento de formas ilegales en apoyo a ese orden como es el caso de las organizaciones paramilitares” (Fajardo M., 2015, p. 125).

En el campo se reclutaron soldados campesinos para colaborar con la Fuerza Pública. Los programas de recompensas dirigidos a informantes debían aportar datos veraces sobre personas, bienes o actividades conectadas con los grupos irregulares y con la delincuencia común. En el caso de los medios de comunicación, el gobierno planteó un abordaje común a las noticias relacionadas con el conflicto armado, dirigido a “atenuar el impacto de las acciones terroristas en la opinión pública” (Departamento Nacional de Planeación, 2003, p. 46).

Estas medidas eran acordes con posiciones anteriores de Álvaro Uribe Vélez, que cuando ostentaba el cargo de Gobernador de Antioquia (1995-1997), apoyó y fomentó de manera contundente las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, denominadas CONVIVIR²⁷², las cuales fueron el germen de los grupos paramilitares (Cepeda & Rojas, 2008). El componente de apoyo ciudadano a las Fuerzas Militares en la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico, previsto en la PDSD, daba continuidad al espíritu de las CONVIVIR, en la medida que extendía el conflicto a la población civil. Esto produjo un estado de militarización generalizado, una mayor polarización y la estigmatización de todas aquellas personas y organizaciones que manifestaran posiciones divergentes a las del gobierno, al ser calificadas como sospechosas de terrorismo.

La política de cooperación y recompensas fue presentada por el gobierno nacional como un acto de solidaridad y de lealtad al Estado, pero realmente pivotó en una estrategia clara de control de la ciudadanía, en particular, en las zonas de conflicto. De esta manera, se creaba una especie de “Gran Hermano” que vigilaba el comportamiento de personas consideradas sospechosas, en un ejercicio biopolítico. El buen ciudadano era aquél que se comprometía con el mantenimiento del orden público y se alineaba con la posición del gobierno, cerrando de esta manera los espacios de participación y de protesta social, para la consolidación de un bloque único y hegemónico. Por tanto, se negaba la posibilidad de modelos alternativos de abordaje del conflicto armado, pero también de formas de producción y de reproducción social alternativas, propias de sectores sociales populares.

La adopción de estas políticas tuvo un fuerte impacto en las relaciones sociales y comunitarias, destruyendo los vínculos existentes en donde se desplegaron, en razón a que “las prácticas delatoras inevitablemente ponen en circulación un sentimiento colectivo de desconfianza

²⁷² Las Convivir se crearon durante el gobierno de César Gaviria Trujillo mediante el Decreto 356 de 1994, pero fueron reglamentadas en el mandato de Ernesto Samper. En 1997, se calcula que existían 414 Convivir en Colombia. (GMH, 2013)

social entre los ciudadanos, el cual termina siendo la raíz psicosocial del miedo, hipervigilancia del otro y la polarización social de nuestras comunidades” (Morales et al., 2009, p. 183). Por consiguiente, las relaciones de cooperación y de reciprocidad de las poblaciones se terminan resquebrajando ante la sospecha del “otro”, que puede ser cualquiera. En un contexto signado por altos niveles de violencia y de impunidad, en donde diferentes actores se disputan el control de los territorios, profundizando las condiciones de vulnerabilidad de los sectores populares.

En este sentido, uno de los líderes de la organización Acción Campesina Colombiana señalaba los efectos de las políticas del gobierno sobre las relaciones sociales y las organizaciones populares:

Las organizaciones quedaron casi destruidas, por lo menos desvertebradas a nivel organizativo. La situación de violencia también generó mucha desconfianza con respecto al “otro”. Esa desconfianza fue hacia abajo, hacia la misma gente que estaba alrededor, más hacia los políticos de los pueblos, hacia los alcaldes y los funcionarios. La presión de los paramilitares con la vaina de la cooptación a través de una política pública terrorista y asistencialista. (E2, Carlos Ancizar Rica Acción Campesina Colombiana, comunicación personal, 17 de diciembre de 2010)

El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en su informe *La protesta social 2002-2008*, iniciaba con una serie de recomendaciones al gobierno en el que se señalaba: Entender que la manifestación pública y colectiva hace parte del conjunto de derechos establecidos por la Constitución Nacional de 1991 (Art. 37) y que el disenso y la protesta son constitutivas de toda democracia. Por tanto, dejar de estigmatizar la protesta social por parte de altos funcionarios del gobierno con expresiones donde se consideran a sus participantes cercanos a “terroristas”, “guerrilleros sin armas”, “intelectuales de las guerrillas”, etc.

Este enfoque también se implementó en los programas de reinserción y reintegración del gobierno en los cuales se introdujo la obligatoriedad de colaborar con información y acciones para el desmantelamiento de los grupos irregulares. Para ello, se establecieron incentivos como recompensas que variaban según el tipo de información. Diferentes organizaciones de derechos humanos, sociales y populares e iniciativas de paz, denunciaron la militarización de las políticas, así como la desnaturalización de este tipo de programas, advirtiendo que conllevaría a violaciones de derechos humanos (Villarraga, 2015).

El gobierno acompañó estas medidas con un paquete de estímulos a la Fuerza Pública (ascensos, bonificaciones, permisos, beneficios navideños y viajes al exterior) para la mejora de

resultados en el combate contra la insurgencia²⁷³. Tales medidas “tuvieron consecuencias perversas, pues desencadenaron comportamientos criminales, como los “falsos positivos” (GMH, 2013, p. 178). Los resultados de estas acciones pretendían inflar las cifras de lucha contra las guerrillas y de esta manera mantener una opinión pública favorable al gobierno.

Las cifras de las víctimas de falsos positivos oscilan entre 3.000 y 5.000, ya que aún se encuentra en proceso de esclarecimiento muchos de los hechos ocurridos. El informe de la Fiscalía General de la Nación entregado a la Justicia Especial para la Paz en el año 2019 señala que las víctimas podrían ascender a 2.488 en el periodo de 1988 a 2014. Los años en los que se acentuó esta práctica criminal coinciden con los mandatos de Uribe Vélez. En particular, bajo el comando del General Mario Montoya, quien hoy está siendo investigado. Los falsos positivos se llevaron a cabo en 27 departamentos del país, pero con mayor incidencia en 9, a saber: Antioquia, Casanare, Cesar, Meta, Norte de Santander, Huila, Córdoba, Tolima y La Guajira (Laverde, 2019). Estas regiones se caracterizan por una alta conflictividad social derivada de la disputa territorial entre diferentes actores regulares e irregulares.

En las investigaciones adelantadas por diferentes instituciones y organizaciones de derechos humanos se apunta a la sistematicidad de los hechos cometidos en las diferentes regiones, por el perfil de las víctimas y el *modus operandi* común. En cuanto a las características de las víctimas, se señala que su gran mayoría eran personas de clases populares, habitantes de zonas periféricas o marginales (Human Rights Watch, 2015).

Por otra parte, durante el gobierno de Uribe se produjo un alto grado de “hostigamiento y persecución judicial contra las organizaciones políticas y sociales opuestas al gobierno, hecho que desató el escándalo de las interceptaciones telefónicas y los seguimientos ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a dirigentes políticos, periodistas, magistrados

²⁷³ Al interior de la Fuerza Pública se desarrollaron manuales de operaciones e inteligencia en los cuales se señalaba que,

la producción de muertes en combate era un resultado esperado y deseable, que el liderazgo de una unidad militar se demostraba a través de resultados contundentes y que el ejercicio de la iniciativa de combate debía llevar a diezmar el número de integrantes de las organizaciones armadas al margen de la ley. (Laverde, 2019) Este tipo de directrices degradaron aún más la guerra, en donde el grado de profesionalización de las FF. AA aún es bajo, el entrenamiento y la capacitación de los altos mandos sigue las directrices de Estados Unidos bajo la doctrina del enemigo, en donde es cuestionable el respeto de los derechos humanos y el DIH, la finalidad de las acciones tiene más peso que los medios para conseguirlo. A esto se suma el alto grado de impunidad del sistema judicial colombiano y la cuestionable imparcialidad y transparencia de la Justicia Penal Militar. En este sentido, la investigación realizada por Human Rights Watch (2015) sobre la responsabilidad de los altos mandos militares evidencia los obstáculos a los que se enfrentan los fiscales que investigan casos de falsos positivos (desde falta de cooperación con las investigaciones por parte de autoridades militares hasta amenazas y ataques a testigos clave).

y congresistas” (GMH, 2013, p. 179). Entre otros escándalos, se destaca la persecución del gobierno a los entes investigadores del fenómeno que se denominó como “parapolítica”. En particular, la campaña de desprestigio contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, coordinador de la investigación.

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (red que agrupaba a 80 organizaciones sociales y no gubernamentales) en el Informe *Embrujo Autoritario*, señaló de manera enfática las consecuencias de la aplicación de la PDSD sobre la población civil. La red denunció la “estigmatización y criminalización de líderes sociales, comunidades populares, sociedad civil organizada, opositores políticos, entre otros, evidenciada en que estos sectores sociales han sido los más vulnerados en sus libertades fundamentales”. (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2003, p. 14) Estos hechos no eran consecuencia de una política aislada, sino que eran parte de la lógica de lucha gubernamental contrainsurgente.

En esta línea, Mauricio Romero (2003) señala en su libro sobre paramilitarismo, que bajo diferentes etiquetas que asocian la actividad social popular con la insurgencia, se ha presentado en el país un exterminio generalizado en contra de líderes y activistas sociales, políticos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, mujeres, miembros de Juntas de Acción Local, entre otros sectores. En este sentido, las políticas implementadas durante el gobierno de Uribe atizaron esta situación, polarizando aún más la opinión pública y, generando que los conflictos se resolvieran a través de la eliminación física y simbólica del “otro”.

6.1.3. La estrategia de paz con los grupos paramilitares

El gobierno de Álvaro Uribe cerró cualquier posibilidad de negociación real con las guerrillas, pero desplegó una serie de medidas que permitieron allanar el camino para un proceso con los grupos paramilitares. El cambio geopolítico a partir del atentado del 11S en Estados Unidos y el endurecimiento de las políticas dictadas por Washington en contra de los grupos calificados como terroristas y de los carteles de la droga, afectó también al paramilitarismo. Es de recordar que estos últimos también fueron incluidos en la lista de organizaciones terroristas del país del norte y de la Unión Europea.

Este señalamiento impactó en la laxitud del Estado frente a la acción de estos grupos armados ilegales. La bandera de la lucha contrainsurgente y el apoyo de ciertos sectores políticos

y económicos, así como de la Fuerza Pública, permitieron que los grupos paramilitares se expandieran a lo largo y ancho del territorio nacional. De esta manera, el advenimiento de la Doctrina de Seguridad y los nexos con el narcotráfico pusieron a prueba a las AUC y al frágil proceso de unidad que iniciaron a finales de la década de los noventa²⁷⁴. En el último año del mandato de Andrés Pastrana, Carlos Castaño (uno de los principales comandantes paramilitares²⁷⁵), anunció el proceso de reunificación y el alejamiento con el narcotráfico, en la búsqueda de la apertura de un proceso de negociación con el gobierno y del reconocimiento como actores políticos (Leal Buitrago, 2006).

No obstante, las diferencias entre los grupos no se hicieron esperar. Tales diferencias no solo se referían a los vínculos con el narcotráfico sino a la captación de rentas legales e ilegales (extorsiones, secuestros, minería, agrocultivos, acaparamiento de tierras etc.). Las desavenencias entre los grupos fueron aún más evidentes desde principios de la década del 2000. Un claro ejemplo fue la disputa en el departamento del Magdalena, entre Carlos Castaño y Hernán Giraldo. En una de las entrevistas concedidas para esta tesis, la investigadora de una organización local de Santa Marta se refiere a que la disputa comienza cuando el ejército de Carlos Castaño entra al Magdalena, territorio que ya era controlado por Hernán Giraldo desde tiempo atrás:

Se instalaron entonces en la zona bananera [Carlos Castaño], y empezaron a disputarse el territorio. El poder lo tenía Hernán Giraldo sobre la franja del Caribe. Tenía el control territorial y el control de las rutas de las salidas de la droga, una franja de no sé cuántos kilómetros de playa, totalmente cercanos a la sierra y con toda la facilidad de transportar [...]. (E1, Miriam Awad, comunicación personal, 19 de diciembre de 2010)

Por otra parte, el enfrentamiento no solo se circunscribió al negocio de la droga, sino a la disputa por el control de los poderes y recursos a nivel local, como se ha señalado a lo largo de la tesis. La firma del “Acuerdo del Nudo de Paramillo” en 1998, entre los principales comandantes paramilitares y miembros del Consejo Nacional de Paz y la sociedad civil, tenía como finalidad iniciar un proceso con las AUC y establecer una ética del enfrentamiento armado desde los derechos humanos y el DIH. Estos lineamientos no fueron acogidos por todos los grupos

²⁷⁴ El proceso de unidad y centralización de las AUC se caracterizó por su enorme debilidad debido a las tensiones existentes entre los diferentes grupos derivadas de la disputa por el negocio del narcotráfico y las acciones militares en contra de la población civil.

²⁷⁵ Carlos Castaño (1965 - 2004) fue el principal jefe paramilitar de las AUC y de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) después de la muerte de su hermano Fidel Castaño.

paramilitares y generaron fuertes tensiones, que para el caso de la Costa Caribe se describen de la siguiente manera:

En el Acuerdo de Paramillo se definen unas líneas de comportamiento generalizado [para los grupos paramilitares]. Se plantea tener una base social e incursionar en el poder político. Hernán [Giraldo] dijo: “yo no voy para esa, es que eso yo lo hice hace tiempo”. Efectivamente, tenía desde los 90 su base social, una alianza clarísima con los políticos representantes propios en el Concejo de Santa Marta. Y señalaba “esto que están diciendo es pan comido, yo no voy para el Acuerdo”. Entonces, hicieron un acuerdo con Castaño, de la Ciénaga para arriba era de Hernán Giraldo. Eso se respetó un tiempo, pero la disputa por la ruta del narcotráfico es una disputa por unos recursos inmensos. Entonces empiezan a hacer incursiones sobre Santa Marta, en algunos puntos estratégicos, más como escaramuzas buscando que Hernán reaccionara. Giraldo mantuvo su control y la gente de Castaño incursionó y fue creando lazos mucho más claros con la gente de Chepe Barrera, con los paramilitares, con las familias del sur que eran básicamente ganaderos, incluso con alguna gente de Ciénaga con el tema agroindustrial. Mancuso instaló una base de operaciones en San Ángel, que era un corregimiento en el centro del departamento. Se dio un proceso impresionante de municipalización, se crearon nuevos municipios, Magdalena dejó de tener 20 municipios a tener 29 en un plazo muy corto, a la sombra de todo ese proceso de consolidación paramilitar en el departamento. (E1, Miriam Awad, comunicación personal, 19 de diciembre de 2010)

El ejemplo del departamento del Magdalena nos sirve para comprender el poder armado que acumularon los grupos paramilitares. Este potencial les permitió seguir sus propios intereses sin depender de actores externos. Ahora bien, el recorrido no ha sido igual en todas las regiones, por lo que nos encontramos diferencias espacio-temporales.

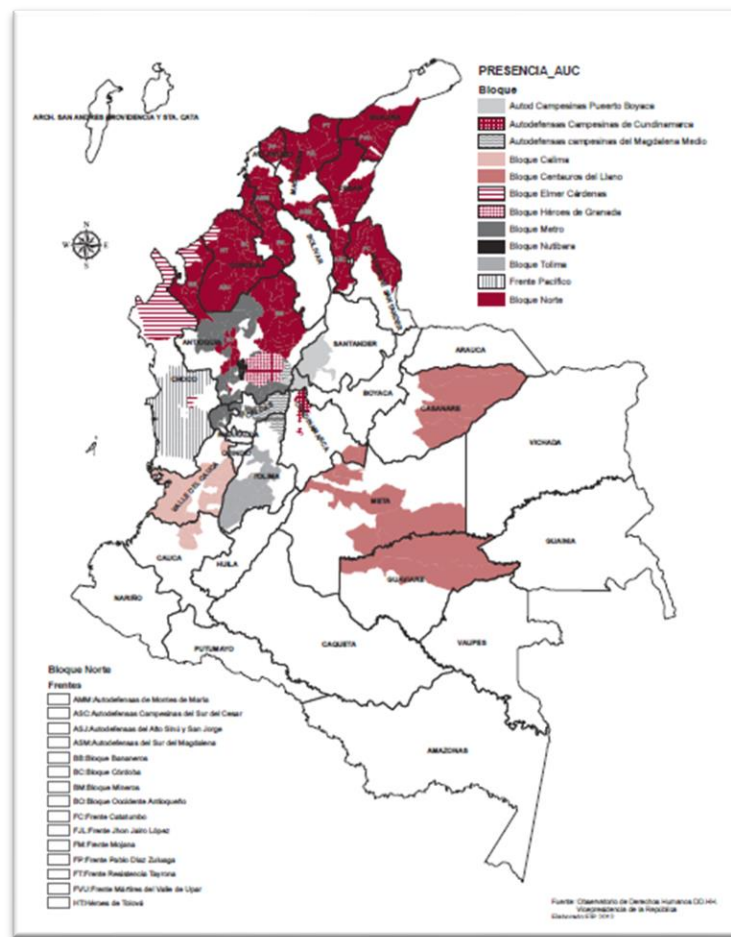
Por otra parte, “el enriquecimiento abierto y desmesurado de algunos de los dirigentes de las AUC y el uso de esta sigla para tal fin, parece ser una de las razones que han creado diferencias dentro del liderazgo de esta agrupación” (Aranguren, 2001, como se citó en Romero, 2003, p. 164). Aquellas diferencias se evidenciaron en la renuncia de Carlos Castaño a la comandancia general en julio de 2001, y su posterior asesinato en 2004, por órdenes de su hermano Vicente Castaño ²⁷⁶.

²⁷⁶ Cabe destacar los enfrentamientos entre el Bloque Metro y el Bloque Nutibara del Bloque Central Bolívar (BCB) por el control de Medellín y del Valle de Aburrá. En este enfrentamiento salió vencedor el BCB comandado por alias “Don Berna”, Diego Fernando Murillo. También, la pugna entre las Autodefensas del Casanare y el Bloque Centauros en los Llanos Orientales, una de las más cruentas. La división fue aún más evidente en la comparecencia de los principales comandantes paramilitares en el Congreso de la República en el 2004. A la que asistieron Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza, cada uno de los cuales representaba una facción del paramilitarismo. El primero, una línea más política a favor de la negociación y perteneciente a la segunda etapa de mediados de los noventa, que actuaban en Córdoba y Urabá. Báez comandó la expansión nacional del BCB, a finales de los noventa y principios del dos mil, hacía parte de nuevos grupos de narcotraficantes que aspiraban al reconocimiento como actores políticos. Finalmente, Ramón Isaza representaba a los grupos históricos que heredaron el poder de las autodefensas de Puerto Boyacá (GMH, 2013, p. 184).

En el siguiente mapa (Figura 5) se evidencia la distribución territorial de las AUC, y también se aprecia el crecimiento de estas organizaciones, a finales de la década de los noventa y principios del dos mil. La heterogeneidad de los grupos, los diferentes intereses y las disputas por el control de zonas estratégicas fueron un obstáculo para la unificación y centralización bajo un mando único.

La estructura de oportunidad política vista por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso para iniciar un proceso de negociación con un gobierno más cercano a sus posturas no fue compartida por todos los comandantes. Estas diferencias llevaron a un proceso de desmovilización fallido y a su reconfiguración, lo que condujo al país a un nuevo ciclo de violencia, caracterizado por algunos autores como una “tercera generación” del paramilitarismo.

Figura 5. Estructura de las AUC (2002)



Fuente: Adaptado de *Narcotráfico: génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales*, (p. 13), por Salas, 2013.

El gobierno, por su parte, abonó el terreno para la negociación logrando que se aprobara en el Congreso la eliminación del requisito de estatus político para la negociación con los grupos armados ilegales. Lo que llevó a amplias críticas desde diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos²⁷⁷.

Posteriormente, en julio de 2005, se aprobó la Ley de Justicia y Paz, que tenía por objeto “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” (Ley 975, 2005). La Ley podría aplicarse a cualquier grupo armado ilegal, ya fuera guerrilla o autodefensa²⁷⁸.

Leopoldo Múnera en un análisis de la negociación con grupos prosistémicos señala que el proceso de paz con los paramilitares se sustentó en tres elementos, que consideramos clave señalar: “la neutralidad política de las normas, como elemento esencial de legitimación; la justicia restaurativa, como el principio ético rector de la iniciativa legislativa; y el pragmatismo, como horizonte político” (Múnera, 2006, p. 68). A continuación, vamos a desarrollar brevemente estos elementos.

La neutralidad política de las normas, tanto en la Ley de “Alternatividad Penal” como en la Ley de “Justicia y Paz”, era uno de los argumentos utilizados por el gobierno para la puesta en marcha del proceso con los paramilitares. Aunque en el cuerpo de las leyes se señalaba que se podrían aplicar tanto a actores insurgentes como a autodefensas, los hechos ponían en evidencia que eran normas confeccionadas a medida de estos últimos. Múnera arguye la complejidad de una negociación con estructuras armadas que han trabajado de manera paralela y transversal al Estado, causantes de un número importante de violaciones a los derechos humanos.

²⁷⁷ La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) realizó un estudio pormenorizado de las implicaciones jurídicas de la Ley 975 y del alcance real de la norma para los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los hechos violentos. En el libro se señala que la Ley fue hecha a medida de los victimarios desprotegiendo y vulnerando los derechos de las víctimas, plantea que se previó un “procedimiento penal especial que busca establecer un nivel de verdad procesal en relación con algunos hechos delictivos y otorga beneficios judiciales a los responsables de delitos de lesa humanidad. El procedimiento está cimentado en incentivos para el victimario” (Comisión Colombiana de Juristas, 2007, p. 14). El informe publicado en el 2018 por el Centro de Memoria Histórica señala que, hasta ese momento, solo se produjeron 50 sentencias a 205 exparamilitares, 6.004 hechos y 28.055 víctimas. La impunidad era del 91,4 por ciento. Por tanto, se concluía que la impunidad y la violencia contra las víctimas era escandalosa. Teniendo en cuenta la falta de protocolos para la atención de las víctimas, en todas las fases del proceso, en donde se produjeron hechos revictimizantes (CNMH, 2018b).

²⁷⁸ El gobierno utilizó el término “autodefensas” para los grupos paramilitares en alusión a su lucha contrainsurgente.

En cuanto a la justicia restaurativa, el autor llama la atención sobre la posición del gobierno al equipararla con la justicia transicional. Esta última opera en contextos de construcción de paz de conflictos bélicos o de violencia generalizada. No vamos a entrar en un debate a fondo sobre los dos tipos de justicia. Solo hemos de señalar, que aunque existen complementariedades entre los dos enfoques, también se presentan fuertes tensiones:

lo cual muestra que hay grandes límites para que el enfoque restaurativo sea el paradigma de justicia dominante en contextos transicionales [...] los procesos de justicia transicional, en especial aquéllos que hayan de tener lugar en Colombia, deben contener dosis inevitables de castigo para los responsables de graves violaciones de derechos humanos y, por ende, sólo deben contemplar la posibilidad de perdones cuando éstos sean proporcionados y “responsabilizantes”. (Uprimny & Saffon, 2006, p. 180)

Múnera plantea que la justicia restaurativa se utilizó para posibilitar la reintegración de los paramilitares a la vida civil, sin mayores costes para ellos, y con pocas garantías de acceso a la justicia, la verdad y la reparación por parte de las víctimas.

Por otra parte, este autor argumenta que el horizonte de la política de paz con los paramilitares se sustentó en el pragmatismo político del gobierno. Se produjo un recrudecimiento del enfrentamiento con las guerrillas, obviando el carácter político del conflicto. Mientras que el proceso con los grupos prosistémicos avanzó rápidamente. Este pragmatismo llevó a que la celeridad de la negociación y la posterior desmovilización primara sobre las consideraciones éticas.

En esta línea, el cese de la acción armada se priorizó frente a los planteamientos de la justicia transicional para el caso de conflictos armados. Los resultados del proceso de paz evidenciaron que no hubo un desmonte integral de las estructuras paramilitares en lo social, lo político y lo económico. No hubo responsabilidades de terceros en la acción de estos grupos. Un elemento fundamental, teniendo en cuenta los contextos en el que surgió el paramilitarismo y las relaciones estrechas con determinados sectores de la sociedad y del Estado, que les permitieron expandirse a lo largo del territorio nacional.

En el “Foro Nacional: a cinco años de la vigencia de la Ley 795 de 2005, ni paz ni justicia para las víctimas”, organizado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) apuntaron a las deficiencias del proceso y al fracaso de este.

Es una Ley que adolece de las demandas de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral [...] ni verdad por que las confesiones de los paramilitares son parciales y hay una participación nula de las víctimas, ni justicia, pues no hay a la luz de hoy castigo

a los responsables, tanto beneficiarios como autores intelectuales; ni reparación integral, pues se trata de un marco normativo que repara a las víctimas de forma subsidiaria; ni garantías de no repetición, pues el Estado no ha tenido voluntad alguna de desmontar de manera definitiva las estructuras paramilitares. (MOVICE, 2010)

De esta manera, el gobierno estableció una negociación con un actor prosistémico que buscaba a través de acciones militares subsanar las deficiencias que percibían del orden social. Para ello, encontraron apoyo, muchas veces institucional, ya sea por la acción u omisión del Estado, o de determinados sectores que estaban interesados en mantener el *statu quo*²⁷⁹. Por lo que en una negociación de este tipo no se debe incluir una agenda política y es imperativo exigir el desmonte total de sus estructuras. Asimismo, cabe señalar que la acción del paramilitarismo provocó reconfiguraciones de poder en los territorios, relacionadas con el poder político y social, derivado de la concentración de la tierra (Múnera, 2006). Estas transformaciones profundizaron las relaciones asimétricas de poder y los sectores sociales populares se vieron en condiciones de mayor vulnerabilidad.

En el periodo del 2003 al 2006, se produjo una desmovilización parcial de los grupos paramilitares, en particular, de sus estructuras más fuertes²⁸⁰. Este proceso generó una significativa fragmentación del narcotráfico que provocó la disputa entre pequeños grupos, atomizados en el territorio nacional, por el control del negocio (GMH, 2013; Echandía, 2013). “Los jefes de las autodefensas vendieron o cedieron su participación en el negocio del narcotráfico a facciones, pero al carecer de una instancia de regulación, que en el pasado desempeñaban las AUC, se ven

²⁷⁹ En Colombia se dio un fenómeno de clientelismo armado referido principalmente a la injerencia de los grupos paramilitares en la política. Este proceso comenzó en la década de los ochenta con la descentralización política y administrativa. Sin embargo, en la década del dos mil, como consecuencia del proceso con los grupos paramilitares, salieron a la luz pública diversas acusaciones a políticos por sus nexos con estos grupos que comprendían desde el apoyo a la creación y mantenimiento de sus estructuras, el desvío de dineros públicos, el apoyo de los grupos paramilitares a las campañas políticas, la contribución de terceros privados al proyecto paramilitar, entre otras acciones. Es importante destacar, la reunión de Santa Fe de Ralito (Córdoba) en 2001, en la que participaron los principales comandantes paramilitares y representantes políticos (congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales) en los que se los últimos se comprometían a apoyar el proyecto de las AUC. Otros encuentros entre autoridades políticas y paramilitares fueron: el Pacto de Chivolo (2000), el Pacto de Pivijay (2001), el Pacto de Urabá (2001), los Pactos del Magdalena Medio (2001), Los Pactos del Eje Cafetero y Caldas (2001). La mayoría de los grupos políticos beneficiados con estos acuerdos eran cercanos al uribismo. Según la Misión de Observación Electoral (MOE) para el año 2013, 199 congresistas habían sido procesados por nexos con los paramilitares (Verdad Abierta, 2013).

²⁸⁰ Entre 2003 y 2006 se desmovilizaron los siguientes bloques: Bloque Cacique Nutibara, Bloque Elmer Cárdenas, Bloque Central Bolívar, Bloque Norte, Bloque Mineros, Bloque Héroes de Granada, Vencedores de Arauca, Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. En 38 actos se desmovilizaron 31.671 de los integrantes de los grupos irregulares.

abocadas a la confrontación” (Echandía, 2013, p. 19). Estas circunstancias dieron paso a lo que el gobierno denominó las Bacrim (bandas criminales).

La denominación utilizada por el gobierno trataba de ocultar la conexión con las organizaciones paramilitares. En algunos casos se trataba de grupos liderados por mandos medios²⁸¹. En otras ocasiones, el liderazgo era ejercido por comandantes que participaron en el proceso de desmovilización pero que siguieron operando bajo otras denominaciones, o que se desmarcaron del proceso al considerar que el gobierno no estaba cumpliendo lo pactado²⁸². También se conformaron nuevas estructuras creadas para ocupar el vacío dejado por los paramilitares²⁸³.

La lucha por el control del mercado ilegal de la droga siguió siendo una de sus principales actividades. Por consiguiente, entraron en la disputa por el control de territorios estratégicos, que implicaba también acciones de dominio sobre la población, al ejercer “control social y político con diferentes grados de intensidad en una cuarta parte de los municipios del país” (Romero & Arias, 2008, p. 40). Estos grupos trataron de reconstruir relaciones con la fuerza pública y con las élites políticas y económicas, para asegurar el acceso a recursos financieros y materiales. Por otra parte, las transformaciones del paramilitarismo “no significan necesariamente el abandono del combate contra la guerrilla, aunque en algunas ocasiones puedan llevar, por cálculos estratégicos, a rentables alianzas con la insurgencia” (GMH, 2013, p. 187).

Los elementos señalados apuntan a que las denominadas Bacrim fueron una continuidad con las organizaciones paramilitares y son producto de los vacíos en el proceso de negociación y

²⁸¹ El gobierno consideraba que las Bacrim no eran una continuidad del paramilitarismo ya que no tenían una finalidad contrainsurgente. Sin embargo, esta apreciación ocultó una realidad mucho más profunda que se refiere a la corrupción en todos los niveles de gobierno, en particular, en lo local y en lo regional, así como las alianzas con miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía (Romero & Arias, 2008). Estas relaciones han salido a la luz de manera paulatina con las investigaciones por parapolítica y de manera más reciente con la actuación de diferentes instituciones creadas en el marco de la Justicia Especial para la Paz.

²⁸² Durante la aprobación de la Ley de Justicia y Paz en el Congreso de la República, el gobierno buscó el reconocimiento político de los grupos de autodefensa, como los denominaron en la Ley, a través de la relación con el delito de sedición. Sin embargo, la Corte Constitucional impuso su criterio y desmontó el argumento del Gobierno, incluso endureciendo las penas para los desmovilizados. Este hecho junto a la amenaza de la extradición produjo fuertes tensiones entre las partes. Es así como la extradición de 14 comandantes en el periodo de Uribe desencadenó un cruce de acusaciones. Los paramilitares señalaron al gobierno de no cumplir lo pactado y destaparon algunos nexos con los partidos políticos. El gobierno también fue acusado por diferentes sectores sociales de utilizar este mecanismo de cooperación judicial para entorpecer los procesos de verdad y justicia.

²⁸³ Entre los grupos ilegales de coerción que surgieron en la primera década del dos mil se encuentran: las Águilas Negras, Los Nevados, Los Mellizos, Los Rastrojos, Los Paisas, Nueva Generación Colombia, Los Machos, Los Traquetos, Los Vencedores de San Jorge, Organización Libertadores del Llano, Organización al Servicio del Narcotráfico, Organización Don Mario, Los de Urabá, Héroes de Castaño (Romero & Arias, 2008, p. 47).

en la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados (Echandía, 2013; Echandía y Cabrera, 2017; González, 2014; CNMH, 2018a). En el año 2006, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) señaló su preocupación por el rearme del paramilitarismo en relación con:

(1) el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; (2) reductos que no se han desmovilizado; (3) la aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados. (MAPP/OEA, 2006)

González (2014) señala que las disputas por el control territorial se presentaron en las zonas donde las AUC tuvieron una mayor presencia y control en el ámbito político, social y económico. En este sentido, se destaca la región Atlántica, en particular, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Alto Sinú y el Alto San Jorge, los departamentos de Córdoba, la Guajira, Magdalena, el norte y el sur del Cesar, el sur de Bolívar y Norte de Santander. Del mismo modo, en otras regiones del país como el Magdalena Medio, el Atrato medio en el Chocó, el Urabá antioqueño, Caldas, Caquetá; en la región del Suroccidente, los departamentos de Nariño y Putumayo; los Llanos Orientales, Casanare, Vichada, Meta (International Crisis Group, 2007, p. 7).

En los diferentes informes de la MAPP/OEA se advierte de las repercusiones sobre la presencia de estos grupos irregulares señalando las consecuencias directas sobre las comunidades “restringiendo su movilidad, ejerciendo control social e implementando una economía ilegal basada en la extorsión. Generalmente en estos contextos, los habitantes que se resisten al dominio de la facción armada, son amenazados y en algunos casos, son víctimas de homicidios” (MAPP/OEA, 2008, p. 6). Llama la atención el grupo denominado “Águilas Negras”, que hasta la actualidad actúa en diferentes regiones, y no se conoce si tienen un mando centralizado o son facciones que actúan por su cuenta. Los objetivos militares de esta agrupación suelen ser líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y miembros de partidos de izquierda.

Para el año 2008, se intensifican las acciones en la Región Caribe, por la disputa de los laboratorios de pasta de coca que se trasladaron a esta zona buscando otras rutas de producción y comercialización. Sin embargo, en el siguiente año se acentúa la fragmentación de los grupos y se intensifica el conflicto en otros lugares del país. La disputa no se da solo por el negocio del narcotráfico sino por el control de otros mercados como el de la minería (González, 2014). El auge

en este sector se convierte durante el periodo de Uribe en una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales; lo que ha intensificado la violencia en las zonas mineras. Al respecto, Echandía (2013) señala:

Las exigencias económicas de las bandas a grandes multinacionales van desde una cuota fija mensual, pasando por un porcentaje de lo extraído, hasta la entrega de contratos con sobrecostos. Las bandas han infiltrado empresas y alcaldías para tener el control de la explotación de todo tipo de metales preciosos. Así mismo, están manejando sus propias excavadoras y maquinaria para la exploración minera. (p. 21)

Finalmente, la Política de Seguridad Democrática no tuvo los efectos deseados por el gobierno. El no-desmantelamiento de los grupos paramilitares y la incapacidad del Estado para recomponer los “órdenes, sociales, políticos y económicos” (González, 2014, p. 459), en sus regiones de influencia, estos grupos desencadenaron una nueva etapa de violencia en el país. Al igual que en el pasado, las acciones de lo que se ha denominado “la tercera generación del paramilitarismo”, se centraron en la población civil “por lo que fueron responsables del 42% de las infracciones al DIH entre el 2002 y 2009, en comparación con el 34% de la Fuerza Pública, el 19% de las FARC y tan sólo el 2% del ELN” (Vásquez, 2010, p.10).

En el periodo comprendido entre 2007 y 2009 fueron asesinados en el país 59 líderes de organizaciones sociales entre los que se encontraban campesinos, indígenas, sindicalistas, afrocolombianos, desplazados y víctimas, entre otros sectores. En el año 2008 se presentó un repunte en el número de secuestros. El desplazamiento forzado aumentó a los niveles de 2001 (año en que se presentó una de las cifras más altas) hasta alcanzar los 250.000 desplazados al año (Romero & Arias, 2010).

Por lo tanto, el discurso del gobierno sobre la consolidación de la paz era desmentido por las cifras. Medir el impacto de la violencia armada –tasa de homicidios, secuestros extorsivos o hectáreas de cultivos ilícitos– resulta insuficiente para establecer la consolidación de la paz. Las cifras ocultan la complejidad del conflicto; manifiesta en el drama del desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, las formas de control social del territorio, el confinamiento, la estigmatización de la lucha social, las amenazas a líderes de organizaciones sociales populares y a miembros de la oposición, la violación a la libertad de expresión, entre otros (Ñánez O., Millán G., Naranjo A., Sánchez D., & Múnera R., 2009).

6.1.4. La relación entre seguridad y desarrollo

La recuperación militar y social del territorio implicó la implementación de políticas sociales y económicas a través de la guerra. El gobierno pretendía consolidar su presencia en las regiones más afectadas por el conflicto a través de una acción integral en donde el componente militar era la punta de lanza. De esta manera, se llegaba a zonas periféricas que han sido tradicionalmente excluidas del proyecto de construcción del Estado-nación para desarrollar por la fuerza un aparente proyecto de unidad nacional. La pretendida reconstrucción de los órdenes sociales, políticos y económicos se llevó bajo la dirección militar, por lo tanto, desde lógicas autoritarias que no contribuyeron al cumplimiento del Estado de Derecho y a la consolidación de la paz ²⁸⁴.

Es importante señalar que la simplificación del conflicto a una guerra contraterrorista trajo consigo el cierre de espacios para la discusión de una agenda social y económica. En las audiencias públicas llevadas a cabo en el Caguán se evidenciaron las múltiples propuestas de los sectores populares para la construcción de la paz. Estas agendas planteaban estrategias alternativas de desarrollo o en otros casos alternativas al desarrollo. Aunque las audiencias no tuvieron el impacto deseado, fue un ejercicio relevante para poner sobre la mesa las diferentes propuestas de país de sujetos subalternos²⁸⁵, las cuales han sido sistemáticamente ignoradas, infantilizadas e incluso criminalizadas por las élites nacionales.

En este sentido, la salida negociada con los movimientos insurgentes representaba una oportunidad para los sectores sociales populares de cambiar un estado de cosas injustas al reconocer que el conflicto era una manifestación de problemas estructurales relacionados con las bases del sistema político; con la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra; con el desarrollo económico desigual de las regiones; con la inequitativa distribución de los recursos y con los

²⁸⁴ La reconfiguración de los órdenes en los territorios desde los mandos militares estuvo apoyada en muchas regiones por los grupos paramilitares, que pretendían imponer sus propias territorialidades. Durante la implementación tanto del Plan Colombia como de la PDSD, la Fuerza Pública desplazaba a las FARC de las cabeceras municipales, obligándoles a trasladarse a la profundidad de las periferias, mientras consolidaban el control en la región. Es el caso del Caquetá y del Guaviare. En estas zonas los militares ejercieron de facto el poder político y el poder judicial. De esta manera, se reconstruyó frágilmente la presencia institucional en un marco civil-militar en donde la población no tenía las garantías de un Estado de derecho (Aristizabal, 2008). Los paramilitares generalmente hacían una primera limpieza social de la zona para que después entrara el Ejército a las labores de consolidación y mantenimiento del territorio.

²⁸⁵ Para profundizar en las propuestas de agenda de los sectores sociales populares para la construcción de la paz consultar los trabajos realizados por el Proyecto Planeta Paz (<https://www.planetapaz.org/>). Esta iniciativa ha acompañado a los sectores sociales populares en la construcción y sistematización de propuestas de paz desde lo público popular. En el marco de esta tarea se realizó el trabajo de campo que da lugar a la presente tesis doctoral.

círculos viciosos de desigualdad-pobreza; y, de las formas de apropiación de la riqueza social, entre otros elementos.

Por consiguiente, el discurso hegemónico del gobierno obviaba intencionalmente la existencia de múltiples conflictos con diversas manifestaciones espacio-temporales²⁸⁶. El gobierno argumentaba que la violencia armada era la causa principal de los problemas estructurales del país. Desde esta lógica, el fin de la violencia traería consigo crecimiento económico, progreso y cohesión social²⁸⁷. Esta argumentación cerraba la posibilidad de acometer reformas de gran calado que desactivarán las causas del conflicto social y armado y de los múltiples conflictos territoriales que se dan en el ámbito político, económico, ambiental y cultural.

En esta línea, las organizaciones sociales populares que confluyeron en el Proyecto Planeta Paz llegaron a una interpretación consensuada del conflicto²⁸⁸, entendiendo que:

es de carácter social, político, económico, cultural y ambiental, y una de sus expresiones es la lucha armada, caso en el cual el campo de resolución no se agota en el desarme de los grupos insurgentes, sino que requiere también de transformaciones de las condiciones que dan lugar a la concentración de la riqueza y la apropiación violenta de los recursos a partir de la generación de exclusión y discriminación y, en consecuencia, a nuevas oleadas de conflictos cada vez más dramáticos y bárbaros. El desarme debe entenderse entonces como un mecanismo para desactivar los conflictos, pero no el único ni el fundamental. (Planeta Paz, 2007, p. 9)

La falta de voluntad política de abordar reformas profundas que den respuesta a la complejidad del conflicto en Colombia, expresada en la voz de estas organizaciones sociales

²⁸⁶ En el discurso gubernamental y en los análisis institucionales sobre la violencia armada se aludía con frecuencia a los siguientes indicadores: tasa de homicidios, secuestros extorsivos o hectáreas de cultivos ilícitos. Sin embargo, los datos arrojados solo atendían a una parte del problema dejando de lado el desplazamiento forzado, las violaciones de derechos humanos, las amenazas a líderes sociales populares y a miembros de la oposición, los delitos relacionados con la libertad de expresión, entre otros. De esta manera, se daba a la opinión pública una foto sesgada de la compleja realidad del conflicto social y armado.

²⁸⁷ El presidente Álvaro Uribe ante la 57 Asamblea de la ONU hizo referencia a la relación unicausal entre desarrollo y seguridad de la siguiente manera:

El triunfo frente a la violencia ayuda a crecer la economía y a financiar el desarrollo social que, a su vez, consolida la paz [...] la Nación tiene la más sólida tradición democrática, un reconocido buen desempeño económico de largo plazo, una base industrial con alta diversificación, una estructura productiva con creciente orientación al mercado internacional y enorme potencial de la pequeña empresa democrática [...] Con el compromiso y apoyo de ustedes, que representan las Naciones del Mundo, y con nuestra determinación, Colombia se liberará de la esclavitud de la violencia y podrá ser más próspera y justa. (Presidencia de la República, 2002)

²⁸⁸ La caracterización de los conflictos se realizó con aproximadamente 350 organizaciones populares de todo el país para la cualificación de las propuestas de paz. Planeta Paz acompañó este trabajo que comenzó en el marco del proceso de negociación durante el mandato de Andrés Pastrana ante la necesidad de construir espacios de diálogo para la salida política al conflicto y la construcción de un modelo de desarrollo acorde con la paz.

populares, se relaciona con los intereses de las élites políticas y económicas de mantener el *statu quo*, así como con las lógicas de acumulación de capital, en donde lo público es apropiado por un sector de la sociedad para su propio beneficio.

En el caso de la problemática de la tierra en Colombia, una de las causas centrales del conflicto armado, es posible analizarla desde:

la acción del Estado a favor de intereses excluyentes, expresada en decisiones políticas en torno a la ocupación del territorio y la asignación de derechos sobre el mismo. Estas decisiones han respondido a la necesidad de ampliar ingresos fiscales para asegurar pagos de deuda, a propósito de la ocupación del territorio y fundamentalmente a la acción de terratenientes y agroexportadores, en particular, interesados en el control de la tierra y de los trabajadores. (Fajardo M., 2015, p. 96-97)

Ahora bien, el control de la tierra y de la población también se ha garantizado a través de la fuerza y del encubrimiento de la corrupción. Por ejemplo, es dicente la negativa del gobierno de Uribe de aprobar una reforma política con fuertes sanciones a los partidos que avalaran personas relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado. Las medidas sancionatorias pondrían en riesgo las relaciones del gobierno con las élites políticas regionales y con los sectores económicos (legales e ilegales) que auparon su proyecto político. Por consiguiente, el presidente Uribe perdería las mayorías necesarias en el Congreso para tramitar las leyes y las reformas presentadas por el Ejecutivo, teniendo en cuenta que la mayoría de los congresistas investigados o acusados por parapolítica eran de las huestes uribistas. En este sentido, es necesario cuestionar si en los dos mandatos de Uribe se legisló realmente en favor del interés común o en beneficio del narcotráfico, el paramilitarismo (López & Sevillano, 2008) y de los sectores que permitieron la expansión y consolidación del proyecto paramilitar, entre los que se encuentran los grandes poseedores de la tierra²⁸⁹.

Estos elementos nos llevan a pensar que la lógica de pacificación de los territorios, sustentada en la negación del conflicto armado interno, fue funcional para la implementación del modelo de desarrollo previsto durante los mandatos de Álvaro Uribe Vélez. Para avanzar sobre esta idea vamos a señalar algunos elementos relevantes de su programa de desarrollo que nos van a servir de referencia para los estudios de caso que abordaremos más adelante.

²⁸⁹ Alejandro Reyes (2009) señala que en el periodo comprendido entre 1997 y 2007, que se corresponde con la consolidación del proyecto paramilitar, se despojaron aproximadamente 744.580 hectáreas en los departamentos de la Costa Caribe, Antioquia, Chocó y Meta. El despojo trajo consigo el desplazamiento de cerca de 985.566 campesinos.

6.1.5. Modelo extractivo-exportador y reprimarización de la economía

Las directrices económicas del gobierno de Uribe representan la continuidad y la profundización del modelo neoliberal que se comenzó a implementar en la década de los noventa con la *Revolución Pacífica* de César Gaviria. En este periodo, se llevaron a cabo una serie de reformas que eran coincidentes con la agenda del Consenso de Washington²⁹⁰. Se buscaba de esta manera sincronizar la economía nacional con las dinámicas de acumulación a nivel global. Por lo tanto, se transitaba de un modelo de desarrollo orientado a la industrialización a un modelo de apertura e internacionalización de la economía (Estrada A., 2015; Orjuela, 2000).

Se puede decir que en este periodo se produjo un proceso de reconfiguración de las relaciones entre las clases sociales en el país. Por una parte, las élites económicas se dividieron entre las que lograron conectarse a los circuitos productivos y financieros internacionales; y las que dependían principalmente del mercado interno y abogaban por la implementación de políticas proteccionistas. En el otro lado, estaban los sectores sociales populares que vieron deteriorada aún más su calidad de vida debido a las reformas neoliberales (Orjuela, 2000). Las tensiones sociales generadas durante este periodo se mantienen en la actualidad y se han agravado debido a los efectos producidos por los tratados de libre comercio, la implementación de un modelo extractivo exportador, el deterioro del Estado de derecho y las dinámicas del conflicto armado que se encuentran estrechamente relacionadas con las formas de acumulación de capital²⁹¹.

Durante el mandato de Andrés Pastrana, se implementó una segunda ola de reformas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI)²⁹². El gobierno de Álvaro Uribe continuó con el guion marcado por este organismo e implementó un:

²⁹⁰ Entre las políticas que se implementaron se destacan: primero, la flexibilización del mercado de trabajo que representó una erosión de los derechos de los trabajadores, la desaparición paulatina de los contratos a término indefinido y la gradual privatización del sistema de seguridad social; segundo, la disminución de los impuestos a las importaciones, la adopción de una tributación regresiva, en donde el impuesto al consumo reemplaza al impuesto a la renta como fuente principal de la financiación estatal; tercero, la privatización de las empresas públicas (transporte, seguridad social, telecomunicaciones); cuarto, descentralización política, fiscal y administrativa; quinto, la política de reducción fiscal con la finalidad de reducir el tamaño del Estado (Orjuela, 2000, pp. 110-111).

²⁹¹ Entre los sectores más afectados por la entrada en vigor de los TLC se encuentra el sector agrario. Un primer análisis que advertía sobre los impactos negativos del TLC con Estados Unidos fue elaborado por los economistas Luis Jorge Garay, Fernando Barbieri y Eduardo Cardona en el marco de los análisis de política pública elaborados por la organización Planeta Paz. El documento se tituló *La negociación agropecuaria en el TLC: alcances y consecuencias* (2006).

²⁹² En el gobierno de Andrés Pastrana se implementan una serie de reformas denominadas de “segunda generación”, como condición para acceder a la financiación del FMI. Entre las medidas adoptadas se encontraban: los límites a la expansión del gasto público de los entes locales; la reducción de las transferencias del gobierno central a los

régimen de incentivos extremos a la inversión transnacional y al poder latifundista y terrateniente y promovió los tratados de libre comercio y los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones, lo cual aceleró el proceso de neoliberalización y de mercantilización de la vida social. (Estrada, 2015, p. 268)

Estas medidas fueron acompañadas por un conjunto de políticas asistenciales a la población más vulnerable, en particular, en los territorios más afectados por el conflicto armado. De esta manera, el gobierno pretendía crear un apoyo social popular suficiente para llevar adelante la gestión institucional²⁹³. La cuestión es que este tipo de políticas no generan una redistribución de la riqueza que permita a la población vulnerable salir del círculo de pobreza-desigualdad.

En el plan de desarrollo “Hacia un Estado comunitario 2002-2006” se apuntaba a la profundización de las reformas en el ámbito neoliberal, centrándose en un crecimiento económico sostenido para generar mayor cohesión social. Para ello, se planteaba la flexibilización normativa y regulatoria, que permitiera una mayor participación del capital privado en los sectores que consideraba estratégicos: infraestructura, minería y servicios públicos. En esta lógica, la ampliación de la inversión privada (nacional y extranjera) en estas áreas, permitiría “superar los rezagos en infraestructura energética que, hoy en día, constituyen un obstáculo para el crecimiento económico” (Departamento Nacional de Planeación, 2003, p. 103). Por tanto, “la política de crecimiento descansa en estimular la participación privada en sectores estratégicos, aumentar el impacto de las inversiones públicas y eliminar las trabas burocráticas y otros impedimentos de la iniciativa privada” (Departamento Nacional de Planeación, 2003, p. 104).

Entre las medidas que se adoptaron para atraer a los capitales privados y generar “confianza inversionista”, como mecanismo para generar crecimiento económico, se encontraban las zonas francas, la exención de impuestos a los capitales privados, contratos de estabilidad jurídica, aligeramiento de los trámites para las concesiones de explotación de recursos naturales y minerales, y flexibilización laboral y ambiental (Pérez-Rincón, 2014), así como un régimen de regalías que resultaba leonino para el país (Rudas & Espitia, 2013)²⁹⁴. Estos incentivos propiciaron

municipios; el impulso a la participación de capitales privados en los servicios públicos y de seguridad social al mismo tiempo que se descentralizaba la prestación de los mismos; la adopción de medidas para la reducción del gasto público, entre otros elementos.

²⁹³ En el plan de desarrollo Hacia un Estado Comunitario 2002-2006 se señalaba la focalización de políticas como uno de los tres pilares de la política social del gobierno, en total alineación con las directrices neoliberales. La cuestión es que las políticas focalizadas reemplazan a las políticas universales que garantizan los derechos a toda la población.

²⁹⁴ Las regalías son los recursos que recibe el Estado por la explotación de los recursos naturales y materias primas. Estos recursos son parcialmente trasladados a los entes territoriales en donde se realiza la explotación.

un aumento en la inversión extranjera directa (IED) en Colombia, que para el periodo de 2002 al 2009 fue del 18,95% anual (en dólares corrientes). Esta cifra es coincidente con la IED bruta en América Latina, que aumentó en 140,37% de 2002 a 2008²⁹⁵ (Otero P. & Salazar, 2011). La inversión extranjera se situó principalmente en los sectores minero-energético y de hidrocarburos, siendo los sectores menos dinámicos en cuanto al mercado de trabajo.

Para los inversores resultaba atractiva Colombia, en la medida que aseguraba mayores ganancias y menores obstáculos para el desarrollo de su actividad, debido las medidas laxas para la explotación de los recursos naturales y, además, a la poca capacidad del Estado para la gestión y ordenación del territorio. Sin embargo, para atraer la inversión de capitales extranjeros y apuntalar un modelo extractivo-exportador, era necesario garantizar unas condiciones mínimas de seguridad en los territorios. Por ello, la lucha contrainsurgente se volvió un elemento central en las políticas del gobierno de Pastrana y de Uribe, “con lo cual se justificaría en algunos casos incluso el aumento en gastos militares para obtener una agenda de intervención económica internacional que supone la pacificación mediante la derrota militar del que es tildado de enemigo del Estado” (Vargas, 2014, p. 414).

Ahora bien, la apertura comercial se llevó a cabo en un contexto de fortalecimiento progresivo del sector financiero, impulsado por gobiernos anteriores, siendo uno de los sectores que más se ha beneficiado por las reformas neoliberales debido al desarrollo de mercados capitales, las actividades especulativas de diferente tipo, la privatización de empresas públicas y el endeudamiento de los hogares. La liberalización financiera permitió la consolidación de un modelo económico agroexportador y minero-energético, posibilitando las actividades relacionadas con la especulación de la tierra, así como el lavado de activos provenientes de la economía de la droga (Estrada, 2015).

En este periodo se consolidaron las bases para la reprimarización de la economía en el marco de lo que se ha denominado el *Consenso de los Commodities*. De esta manera, se insertaba la economía del país en los procesos recientes de mundialización del capital. Las políticas de estímulo económico se centraron en la explotación de la naturaleza y de materias primas (minería,

²⁹⁵ Un dato interesante en el proceso de reprimarización de la economía en América Latina se refiere a los productos exportados. En el periodo comprendido entre 1990 y 2011, las exportaciones totales en la región aumentaron en 897 mil millones de dólares. El 40% de esta cifra se correspondía al sector primario. Si se toman en cuenta las exportaciones manufactureras basadas en recursos naturales, el peso porcentual se incrementó al 60%. En el caso de Colombia, entre el año 1990 y el 2013, la participación de las exportaciones totales asociadas a materias primas del pasaron de 77% al 84% (Pérez-Rincón, 2014, p. 257).

agua, hidrocarburos, bosques, materias primas para la producción de agrocombustibles, etc.) para ser comercializados en grandes volúmenes en el mercado internacional. Los productos exportados no tenían ningún tipo de procesamiento realizado en la industria nacional ni implicaban el desarrollo de tecnología o de investigación I+D. Por lo tanto, el modelo reforzaba la posición periférica del sistema productivo colombiano en la economía-mundo capitalista.

El modelo económico implementado no generó transformaciones que implicaran beneficios para los sectores productivos del país. En el periodo entre 2000 y el 2009 las participaciones en el PIB disminuyeron para estos sectores (Otero P. & Salazar, 2011). La industria manufacturera y el comercio se redujeron del 6.3% al 2.9%, respectivamente, teniendo un efecto negativo sobre el empleo, ya que son sectores que generan un mayor número de puestos de trabajo. Este hecho contrasta con el aumento de la minería que llegó hasta el 11.3%, pero con una participación en el mercado del trabajo del 1% (Escuela Nacional Sindical, 2010). El gobierno hipotecó la economía a la explotación de *commodities* que se caracterizan por una alta volatilidad de sus precios en el mercado internacional. Asimismo, se produjo una dependencia de la renta que producen las multinacionales por la explotación de estos recursos, “y a la fortuna incierta que comporta su explotación, debido a la existencia o no de los mismos” (Mora, 2010, p. 20).

Por consiguiente, las políticas adoptadas generaron una desindustrialización del país y se apuntaló un modelo rentístico sustentado en la explotación de la naturaleza, “altamente intensivo en capital, dominados por la inversión extranjera y con pocos eslabonamientos (linkages) hacia adelante y atrás, que lo que hacen es favorecer a las transnacionales y a sus países de origen” (Otero P. & Salazar, 2011, p. 12). De esta manera, se incentivaron las actividades de tipo rentístico, pero no productivo.

El impulso a este tipo de actividades alimentó la disputa por el control de las rentas generadas por la apropiación de la naturaleza entre diferentes actores políticos, económicos y armados. Las comunidades que habitan los territorios ricos en ese tipo de recursos se encontraron en medio de las disputas defendiendo sus propias territorialidades, ligadas al hábitat y a las condiciones de vida, frente a un modelo de desarrollo hegemónico en el cual no estaban incluidos o eran pensados como mano de obra barata para alimentar el sistema económico. En este sentido, los sectores populares planteaban (y plantean) el reconocimiento de la pluralidad de valores,

sentires y racionalidades, en relación con el manejo de la naturaleza y los recursos²⁹⁶. Precisamente, la desvalorización de sus propuestas se presenta como uno de los elementos fundamentales de los conflictos y las desigualdades presentes en sus territorios (Salgado & Nández, 2014).

Ahora bien, el impacto profundo que ha tenido la implantación de un modelo extractivista en Colombia es correlacional con el hecho de que el Estado colombiano:

nunca ha tenido una política integral de manejo del territorio —es decir, de su reconocimiento físico como de la extensión de derechos a la población que vive en ellos—, caso en el cual siempre han estado en permanente disputa por parte de actores legales e ilegales o de alianzas entre ellos. Estas disputas son una de las bases de los múltiples conflictos que se dan en el país y de las tensiones al interior del Estado, en un contexto en el cual los gobiernos suelen sesgar sus enfoques y acciones hacia los intereses de élites poderosas y en contra de las comunidades y movimientos sociales que las representan. (Salgado & Nández, 2014, p. 329)

Por otra parte, el gobierno estimaba que estos recursos solo pueden ser explotados con eficiencia por parte de los empresarios y las multinacionales. Tal supuesto despojaba a la población de su papel como actores fundamentales del desarrollo. La estrategia de control y de pacificación de los territorios, desplegada por la PDSD, implicó una reconfiguración de los territorios (territorialización – desterritorialización – reterritorialización), que presenta una correlación entre las dinámicas de la guerra, como lo hemos visto a lo largo de estos apartados, y los intereses económicos estratégicos de las élites nacionales y regionales; pero también, con las empresas multinacionales, que se sitúan según los cambios en las formas de acumulación capitalista.

La reconfiguración territorial implicó el control de la población a través de métodos coercitivos generando una relación de funcionalidad entre el conflicto social armado y las políticas de desarrollo, como abordaremos en los estudios de caso. Es así como una exacerbación de los conflictos, se “originan por las luchas asociadas a la apropiación de los recursos naturales y los

²⁹⁶ Los conflictos producidos por el extractivismo se manifiestan en los medios de vida. En este sentido, Bebbington aborda los conflictos como confrontaciones entre distintos modelos de sustentabilidad. Este autor estima que las empresas y el Estado:

Manejan un concepto de sostenibilidad de recursos que permite una sustitución sustantiva entre diversas formas de capital, así como cambios significativos en las combinaciones de activos sobre los cuales se construyen los medios de vida rurales (cambios que en esencia forzarían a muchas familias a orientarse a nuevos tipos de vida). Por otra parte, estarían los movimientos sociales y populares que serían aquellos que se oponen a este desarrollo minero —tanto movimientos locales como redes más amplias de activistas— trabajan con conceptos más fuertes de sostenibilidad, permiten menos sustitución entre capitales y son, de lejos, más conservadores y tienen mayor aversión al riesgo en los tipos de reducción de capital que ellos considerarían aceptables. (Bebbington, 2001, p. 21)

servicios ambientales por diferentes actores; por el uso de la naturaleza como medios de vida y de sustento para muchas comunidades” (Pérez-Rincón, 2014, p. 264).

En estas condiciones, se promueve una idea de desarrollo que privilegia su incorporación acelerada a la economía mundial mediante la explotación de recursos naturales, el territorio y su ordenamiento (como lugar de producción de capital, y no como base fundamental de la reproducción social), y el crecimiento urbano a costa de desequilibrios urbano-rurales económicos, sociales y ambientales (Ñánez et al., 2009, p. 3).

De esta manera, la relación entre seguridad, control territorial y desarrollo permitió ampliar la explotación de los recursos disponibles en los territorios para consolidar la inserción en los mercados internacionales. Por lo tanto, se imponen a través de las políticas económicas y de seguridad, los espacios de representación contruidos a partir de los saberes técnicos y racionales que se corresponden con los intereses políticos y económicos de las élites nacionales y transnacionales. Los “espacios de la diferencia” contruidos y vividos por los sectores sociales populares se marginan, desestructuran o se terminan integrando a las lógicas territoriales hegemónicas.

Para cerrar este apartado, hay que señalar que la situación de vulnerabilidad de los sectores populares ha sido reconocida por la propia legislación colombiana (Ley 1448 de 2011) en el siguiente sentido:

(1) que el riesgo de exposición a los procesos de victimización en el marco del conflicto armado, en sentido amplio instituido por la Corte Constitucional, en Colombia es mayor para aquellos sujetos sociales que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y exclusión histórica, tales como las mujeres, las comunidades étnicas o los campesinos, y (2) que las causas de los hechos victimizantes se encuentran asociados a esquemas de discriminación y marginación. De allí que la ausencia de oportunidades (violencia estructural) asociada a un modelo de desarrollo que admite sujetos excluidos y marginados se encuentre igualmente vinculada a la violencia personal infligida por los actores armados. (Vargas, 2014, p. 414)

6.1.6. Estrategias de reconfiguración espacial

La implantación y consolidación de un modelo de desarrollo económico extractivo exportador se sustentó en la transformación de las “ventajas comparativas” del país (abundancia en biodiversidad, tierra, agua y clima) en “ventajas competitivas”. Según estimaba el gobierno, la explotación de la naturaleza se debía hacer bajo criterios de eficiencia, productividad y

competitividad, para lograr la inserción de la economía nacional en los circuitos económicos internacionales.

En el documento *Visión Colombia II Centenario: 2019*, que marcaba las líneas a seguir en materia económica, se señalaba la posición privilegiada del país en el nuevo ciclo económico:

Es importante tener claro que Colombia solo se beneficiara de las oportunidades de esta expansión de la economía mundial si aprovecha plenamente las condiciones, variedad y situación geográfica de su territorio, a la vez que asimila los costos que éste le genera para proveer ciertos bienes públicos como gobernabilidad y seguridad [...] La integración a una economía mundial en expansión requiere utilizar recursos que históricamente jamás se aprovecharon y emplear de forma eficiente otros, inadecuadamente utilizados, a causa de la tendencia de la economía nacional a volcarse sobre el pequeñísimo mercado interno [...]. (Departamento Nacional del Planeación, 2005, p. 12)

La explotación de las “ventajas comparativas” fueron planteadas desde el gobierno como el único camino a recorrer para lograr el progreso y el desarrollo del país, pero realmente han sido “construidas políticamente y después ‘naturalizadas’ como si fueran inevitables. En síntesis, son resultado de decisiones políticas, forzadas mediante estrategias económicas, tributarias, subsidios, relaciones de poder, inversiones en infraestructura, etc.” (Pérez-Rincón, 2014, p. 254). De esta manera, el gobierno implementó una serie de políticas e instrumentos que permitieron consolidar un modelo extractivo-exportador y generar las condiciones para la “confianza inversionista”.

La economía extractiva implicó un incremento en la utilización del espacio para la explotación de los recursos demandados por el capital internacional, por lo tanto, se produjo una ampliación de las fronteras agrícola, energética, minera, forestal, entre otras, en concordancia con la lógica de acumulación capitalista (en la que es necesario incorporar nuevos espacios para la explotación, en razón a los patrones de producción). Este proceso estuvo acompañado por la puesta en marcha de proyectos de infraestructura, siendo este sector uno de los principales ejes de los planes de desarrollo del 2002 y del 2006, así como de las agendas de competitividad y de la Agenda 2019. La inversión en la mejora de la conectividad se estimaba como fundamental para la competitividad del país, y un eje central en la agenda de desarrollo.

La lógica de inversión estuvo marcada por las necesidades de explotación y comercialización de los proyectos económicos priorizados por el gobierno en la consolidación del modelo extractivo. Por consiguiente, se estructuró una agenda de inversiones e infraestructuras para conectar el interior del país, en particular, las zonas de explotación de recursos con los puertos y fronteras. Para ello, se diseñó un sistema de transporte multimodal que integrara el sistema

terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, con los centros de transferencia en zonas estratégicas. De esta manera, se priorizaron los siguientes nodos de conexión con el comercio internacional: los Ejes del Plan Panamá-Puebla, Bahía Málaga en el Pacífico chocoano y el departamento del Putumayo para la conexión hacia el sur del continente²⁹⁷.

El sistema de mejoras en infraestructura estaba pensado para facilitar la integración de Colombia con Centroamérica, a través del Plan Panamá-Puebla y la integración con Suramérica, por medio de la Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)²⁹⁸. Aunque estos dos planes no estaban conectados, Colombia aparece como un país bisagra en el proyecto de conexión continental. En el caso del IIRSA, Colombia se proyectaba en dos de los ejes centrales: el Eje andino (Venezuela-Colombia-Ecuador-Perú-Bolivia) y el Eje del Amazonas (Colombia-Ecuador-Perú-Brasil). Los Ejes estaban pensados para interconectar los océanos Pacífico y Atlántico y mejorar la conectividad de la región del Amazonas para la explotación de los recursos bióticos, mineros e hidrográficos para la producción de energía.

Para el gobierno era fundamental mejorar la conectividad del sur del país, debido al aumento del comercio internacional en el océano Pacífico, que incluso llegó a doblar el tráfico portuario del Atlántico. En este sentido, en el documento *Visión Colombia II Centenario: 2019* se señalaba que el país debía “aprovechar su situación estratégica sobre el principal corredor de tráfico mundial de comercio marítimo, [...] se deberán consolidar las nueve regiones portuarias, modernizar la infraestructura portuaria de Buenaventura y emprender un desarrollo portuario alternativo en el Pacífico” (Departamento Nacional de Planeación, 2005, p. 38).

De esta manera, la nueva arquitectura territorial que se dispuso en este periodo comprendía la construcción de corredores de alta velocidad. En sentido norte-sur, las nuevas troncales de

²⁹⁷ El Plan El Plan Puebla Panamá (PPP) fue un proyecto propuesto por el presidente mexicano Vicente Fox. Incluía a los estados del sur de México, a los países centroamericanos y a Colombia. El Plan tenía como finalidad la gestión de proyectos orientados a la explotación de recursos naturales a través de la puesta en marcha de infraestructuras regionales que permitieran la conexión con los mercados internacionales. Para ello, se pretendía interconectar el Mar Caribe y el océano Atlántico con el océano Pacífico

²⁹⁸ El Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura de Sudamérica fue presentado en el año 2000 en el marco del encuentro de presidentes de la región realizado en Brasil. Esta iniciativa tiene como finalidad mejorar el comercio regional y la inserción en el mercado internacional. Para ello, era necesario que los países iniciaran una serie de reformas en las legislaciones y normativas nacionales. El proyecto IIRSA pretende la integración de las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones. Para ello, es fundamental prescindir de las

«barreras» físicas, normativas y sociales, lo que supone realizar grandes obras, armonizar las legislaciones nacionales de los doce países implicados en la IIRSA y ocupar los espacios físicos claves que suelen tener baja densidad de población, pero guardan las principales reservas de materias primas y biodiversidad. (Zibechi, 2006, p. 19)

Occidente, Magdalena, Central del Norte y Marginal de la Selva. En la conexión de oriente-occidente, el corredor Tumaco-Río Putumayo, que incluía la transversal Tumaco- Puerto Asís, la Transversal del Pacífico, el corredor de Buenaventura – Bogotá – Puerto Gaitán, la Transversal Media Luna de los Valles Fértiles y la Marginal del Caribe (Departamento de Planeación Nacional, 2003).

Estos corredores estaban pensados en el marco de la iniciativa IIRSA en Colombia. En el Eje Amazónico se destacaba el corredor Tumaco – Pasto – Mocoa – Puerto Asís – Manaos – Belém do Pará, uno de los más importantes en la apuesta geoestratégica para la comercialización de los recursos mineros, energéticos, agroindustriales y los relacionados con la biotecnología (COSIPLAN, 2020). El Eje Andino estaba dispuesto para conectar las principales capitales de los países priorizados en esta intervención. En este Eje se encuentra la carretera Panamericana y la carretera Marginal de la Selva. “Estos corredores longitudinales son intersectados en sus recorridos por diversos corredores transversales (viales y fluviales) que los vinculan con los EIDs del Escudo Guayanés, del Amazonas, Perú-Brasil-Bolivia e Interoceánico Central” (COSIPLAN, 2020).

La expansión de la producción capitalista a regiones como el Pacífico, la Amazonia y la Orinoquia implicó la integración de espacios que tradicionalmente han estado incorporados de manera parcial a las dinámicas de desarrollo pero que cobran valor por su posición estratégica y por su riqueza en recursos naturales, que son demandados en la nueva fase de acumulación. En este contexto, se ha dado una apropiación acelerada y violenta de la naturaleza que vulnera a las comunidades que habitan estos territorios.

Los proyectos de infraestructura planteados en el marco del Plan Panamá Puebla y el IIRSA se corresponden con el modelo hegemónico de desarrollo. Estas concepciones se construyen a partir de discursos económicos en los que prima la razón tecno-científica, que se presenta como neutral, objetiva, y como la única vía posible de progreso. De esta manera, se estima que los resultados de su aplicación deben ser considerados como los mejores posibles anulando cualquier posibilidad de disenso o la puesta en marcha de otras formas de producción y reproducción social. Este discurso tiene implicaciones socio-espaciales en la configuración de los territorios y de las poblaciones que los habitan.

De esta manera, las localidades estratégicas para la economía extractiva (incluidos los cultivos de uso ilícito desde una acumulación especulativa) pasan a ser “una contingencia en las lógicas geopolíticas (y económicas) regionales y globales” (Calderón, 2008, p. 17). Es así como

los órdenes sociales presentes en los territorios son integrados en las lógicas de valor del capital. Por lo tanto, se genera una fuerte tensión entre los espacios concebidos y los espacios vividos que evidencia las relaciones asimétricas de poder y la lucha de clases como lo señala Lefebvre (2013 [1974]) y Raffestin (2011 [1980]). Los territorios no son espacios neutrales y asépticos que se deban intervenir solo desde lógicas económicas, se construyen a partir de interacciones espaciales concretas referidas a la cotidianidad de las poblaciones.

6.2. Primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014)

En febrero del año 2010, la Corte Constitucional declaró inexecutable la Ley 1354, por medio de la cual se pretendía convocar un referendo para someter a la consideración popular un proyecto que permitiera la reelección presidencial después de dos períodos de gobierno. La iniciativa presentada tenía como objetivo allanar el camino para un tercer mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez.

La sentencia de la Corte desencalló la contienda presidencial abriendo la posibilidad a otros candidatos del uribismo. Es así como Juan Manuel Santos del Partido de la U ganó la segunda vuelta en junio del año 2010, con un 69,5% de los votos. Seguido de Antanas Mockus del Partido Verde, con un 27,52%²⁹⁹. En esta segunda vuelta, Santos propuso un gran acuerdo de Unidad Nacional en el que participaron los dos partidos políticos tradicionales, el Liberal y el Conservador, y el Partido Cambio Radical. La alianza incluía un acuerdo de cogobernabilidad bajo unos objetivos comunes. Por consiguiente, el liberal Juan Manuel Santos reconvertido al uribismo se presentó como un candidato del oficialismo que le valió el triunfo de las elecciones.

Juan Manuel Santos fue ministro de Comercio Exterior de César Gaviria, en el periodo de Andrés Pastrana Arango ocupó la cartera de Hacienda y entre 2006 y 2009 fue ministro de Defensa de Uribe Vélez. Desde nuestra perspectiva, Santos más que un representante del uribismo, lo era de las élites políticas tradicionales, y en particular, de las provenientes del centro del país. La familia Santos pertenece a una larga estirpe de políticos del Partido Liberal y fue propietaria de uno de los principales medios de comunicación escritos (*El Tiempo*). Por lo tanto, el triunfo de Santos en las elecciones de 2010 significaba el regreso de las élites capitalinas al órgano Ejecutivo.

²⁹⁹ Juan Manuel Santos ganó la segunda vuelta con la votación más alta de la historia (9,004,221 de votos) pero con una elevada abstención, del 55%.

El presidente electo, para asombro “de quienes consideraban que su gestión constituiría una línea de continuidad con las dos administraciones de Álvaro Uribe Vélez” (López de la Roche, 2015, p. 10), marcó distancia con el trazo discursivo de su antecesor desde el momento de su elección, lo que le valió una dura oposición liderada por el expresidente, y por los sectores afines al mismo, durante los dos mandatos en los que Santos ocupó la Casa de Nariño.

En su primera alocución el electo presidente reconoció la importancia del legado de Uribe y de los avances en “seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social”, consciente de que su triunfo se lo debía en gran parte al caudal electoral del uribismo. Sin embargo, señaló que desarrollaría su gestión con autonomía e independencia de las clientelas políticas.

Asimismo, hizo un llamado a la reconciliación nacional, a evitar la crispación política y a la armonización de las relaciones con los poderes públicos, en una clara referencia a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia, con las que Uribe mantuvo un fuerte enfrentamiento. En esa dirección, en su discurso de posesión, el 07 de agosto de 2010, señaló: “por eso hoy reitero mi invitación a las Altas Cortes para que trabajemos en completa armonía, buscando una justicia pronta y eficaz para todos los colombianos y combatiendo la impunidad, que es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo” (Presidencia de la República, 2010). Por consiguiente, el presidente mostraba voluntad política para restablecer las bases fundamentales del Estado de derecho y el respeto al poder judicial que en años anteriores había sido vilipendiado por el gobierno, hiriendo gravemente el frágil sistema democrático del país.

Tanto en el discurso del día de las elecciones como en el de posesión, Juan Manuel Santos, se distanció del tono bélico y de confrontación característico del gobierno anterior, allanando el camino para un nuevo momento político tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En las dos intervenciones hizo referencia a las relaciones diplomáticas con los países vecinos, en particular con Venezuela y Ecuador, con los que hasta el momento se mantenía una relación beligerante. En el discurso de posesión, señaló que uno de sus objetivos en política exterior era la reconstrucción y el restablecimiento de las relaciones de confianza, desde la prudencia y la diplomacia.

Sin embargo, la diferencia fundamental con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que marcó el distanciamiento entre los dos mandatarios, fue el reconocimiento, por parte de Santos, de la existencia de un conflicto armado interno en el país. De esta manera, se alejó de la tesis hegemónica del expresidente, que lo había negado sistemáticamente, utilizando la Doctrina de Seguridad de

Estados Unidos para construir un discurso antiterrorista. El reconocimiento del conflicto fue de la mano de la apertura de un proceso de negociación con el movimiento insurgente.

En las primeras alocuciones presidenciales, Santos no se refirió al conflicto como tal, pero abrió la posibilidad de una negociación con las guerrillas y subrayó el tránsito hacia una nueva etapa de la Política de Seguridad Democrática, algo que denominó Prosperidad Democrática. Es importante señalar, que el presidente electo fue cauteloso y reconoció los avances realizados por las Fuerzas Militares, consciente de que su apoyo sería fundamental para el éxito de cualquier política de reconciliación que se llevara a cabo.

De esta manera, en sus primeros meses de gobierno, Santos trató de mantener un equilibrio entre los avances realizados en la legislación anterior en materia de seguridad y la apertura hacia una salida negociada del conflicto armado, haciendo las veces de un funambulista³⁰⁰.

En materia económica, el gobierno siguió la senda marcada por las anteriores administraciones, profundizando el modelo extractivo-exportador y la reprimarización de la economía. En el anterior mandato la pacificación de los territorios, a través de la militarización y la lucha contrainsurgente, fue funcional a la consolidación del modelo de desarrollo. En el gobierno de Juan Manuel Santos, la finalización del conflicto armado respondía, entre otras razones, a la necesidad de estabilizar los territorios para asegurar la inversión extranjera y la implementación del modelo económico.

A continuación, vamos a profundizar en los puntos señalados anteriormente para dar un contexto más amplio de los estudios de caso que se presentarán en los siguientes capítulos y comprender cómo interpretan los sectores populares los diferentes conflictos que se desarrollan en sus territorios.

³⁰⁰ En el discurso de posesión, el presidente Santos trató de mantener una posición equidistante que le permitiera mantener el apoyo de las huestes uribistas y abrir el camino hacia la implementación de una política de paz:

Al mismo tiempo quiero reiterar lo que he dicho en el pasado: La puerta del diálogo no está cerrada con llave. No retrocederemos ni un paso en el sendero recorrido y, tal como lo prometí en mi campaña, avanzaremos desde la seguridad democrática hacia la Prosperidad Democrática. Porque si este país, en estos dos siglos, ha alcanzado tantos logros de desarrollo en medio del asedio de los violentos, ¡ya verá el mundo de lo que somos capaces los colombianos cuando consolidemos la paz! (Presidencia de la República, 2010)

6.2.1. Elementos espacio-temporales para la negociación del conflicto social y armado

El presidente Juan Manuel Santos pasó a los anales de la historia por la firma en el año 2016 del *Acuerdo de Paz definitivo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo- (FARC –EP)*, la guerrilla más longeva de América Latina³⁰¹.

El Acuerdo fue producto de una larga y compleja negociación entre las partes, que duró aproximadamente cuatro años desde que se instaló formalmente la mesa de diálogo en La Habana (Cuba), el 26 de agosto de 2012. La apertura del gobierno a un proceso de negociación con las FARC, así como el convencimiento de que la única salida al conflicto armado era la vía del diálogo, se relaciona con un conjunto de circunstancias que confluyeron en ese espacio-tiempo. Por lo tanto, nos alejamos de aquellas posturas reduccionistas que atribuyen el proceso a la debilidad o supuesta derrota militar de las guerrillas.

En primer lugar, el proceso de negociación se da en el marco de la correlación estratégica de fuerzas entre el Estado colombiano y las FARC. En el momento en que Juan Manuel Santos asumió el gobierno, la Política de Seguridad Democrática se encontraba en una fase de agotamiento. Tanto la aplicación del Plan Colombia como de la PDSD alteraron la correlación de fuerzas del conflicto armado, como se ha señalado en los capítulos anteriores³⁰². Sin embargo, los ingentes esfuerzos políticos y la inversión militar que realizaron los gobiernos precedentes no fueron suficientes para derrotar militarmente al movimiento insurgente, en particular, a las FARC, así como tampoco a los grupos paramilitares y al narcotráfico.

³⁰¹ El Acuerdo Final fue firmado en el Teatro Colón de Bogotá, el 24 de noviembre del 2016. Sin embargo, hubo una primera ratificación el 26 de septiembre del mismo año en la ciudad de Cartagena. Esto se debe a que el 12 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos, somete a refrendación popular vía plebiscito el Acuerdo pactado en La Habana con las FARC. El resultado de la consulta arrojó como vencedores por un estrecho margen a los detractores del Acuerdo, encabezados por el expresidente Uribe y los partidos de oposición. A partir de este momento, en una situación inédita, el gobierno realizó una ronda de conversaciones con los opositores que se tradujeron en modificaciones del Acuerdo firmado en La Habana. En particular, referidas a las competencias y alcances del sistema de justicia transicional. Además, se acordó que el Congreso de la República pudiera introducir modificaciones durante el proceso de implementación del Acuerdo.

³⁰² En el periodo 2011-2012 se observa un repunte de las acciones de las FARC en las regiones del país que fueron priorizadas por el plan de reestructuración de Alfonso Cano (Bajo Cauca, Cauca, Norte de Santander, Arauca, norte de Antioquia y Caquetá). No se trataba de grandes ofensivas militares sino de acciones puntuales que golpeaban estructuras de la Fuerza Pública. En el sur del Meta, la costa nariñense y el centro del sur del Chocó, los enfrentamientos son alternos (Ávila, 2102 citado por González, 2014, p. 484).

La aplicación de las políticas contrainsurgentes diezmó la capacidad militar de las guerrillas, pero estas lograron reacomodarse en el nuevo escenario. Se produjo un repliegue en las zonas tradicionales de influencia y en las zonas de frontera que les permitió el abastecimiento y la financiación. Al respecto, Cabrera y Echandía señalan que:

Un análisis de la evolución del conflicto armado entre 1998 y 2005 permite notar que en las fronteras se estaría concentrado casi el 50 y el 90% del total de las acciones armadas de las FARC y el ELN respectivamente. Tal comportamiento no solo refleja el retroceso territorial y estratégico de ambas guerrillas respecto a los objetivos propuestos en los años ochenta sino, además, la imposibilidad de alcanzar, en las condiciones de debilidad y repliegue una victoria militar. (Echandía y Cabrera, 2017, p. 217)

Los ataques a los miembros del Secretariado de las FARC, la Operación Jaque, la muerte de Raúl Reyes, la presión ejercida en contra de Tirofijo (que murió por causas naturales), así como la muerte de Víctor Briceño en el 2010 y de Alfonso Cano en el 2011 tuvieron un impacto negativo importante en términos estratégicos, políticos, pero también morales, sobre las FARC ³⁰³. Estos hechos develan la fuerte presión militar a la que la organización fue sometida durante estos años lo que les obligó a replantearse su estrategia militar y política.

Por otra parte, en los primeros meses del gobierno de Santos, la política de Prosperidad Democrática tenía como objetivo no derrotar al movimiento insurgente sino conducirlo a una negociación cerrando todos los espacios. Así lo señala Rodrigo Rivera³⁰⁴, ministro de Defensa en el periodo comprendido entre 2010-2011:

Los espacios estratégicos, territoriales, los espacios económicos, con los temas de extinción de dominio y de incautaciones, los espacios de diplomáticos con una política muy intensa que nos permitió fortalecer lazos con todos los vecinos, los espacios sociales y los espacios con las políticas de reintegración, etc. (Rivera, 2019, p. 24)

³⁰³ Víctor Julio Suárez alias Jorge Briceño o “Mono Jojoy” fue comandante del Bloque Oriental y jefe militar de la organización. Su muerte se dio en el marco de la Operación Sodomía en un bombardeo sobre la región de la Macarena. Alfonso Cano (Guillermo León Sáenz) fue un destacado miembro del Secretariado de las FARC desde los años ochenta, en el 2008 ocupó la comandancia después de la muerte de Tirofijo (Manuel Marulanda Vélez). Se considera que fue uno de los estrategas políticos de la organización. Murió durante el bombardeo a un campamento de las FARC ubicado en el departamento del Cauca, la operación se realizó en el marco de la Operación Odiseo.

³⁰⁴ En el corto tiempo en el que Rodrigo Rivera ocupó la cartera de Defensa, se diseñó la “Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad”. Esta política recogió los avances en términos de seguridad y lucha contrainsurgente del anterior gobierno, pero planteando nuevos objetivos estratégicos adecuados a la lectura que hacía del gobierno de las dinámicas del conflicto y del escenario económico. En este sentido, en el texto se señala que la fase de confrontación

se ha basado en una guerra de desgaste, el involucramiento sistemático en la cadena productiva y comercializadora de narcóticos y la evasión de combates, alargando los plazos para la derrota definitiva de su capacidad criminal y violenta, y exigiendo el diseño de una nueva estrategia que responda a los desafíos del presente. (Ministerio de Defensa, 2011)

Segundo, un contexto internacional que era proclive a la solución negociada de los conflictos armados. Diferentes organizaciones internacionales y multilaterales, así como países vecinos, expresaron su preocupación por la escalada e internacionalización del conflicto, en relación con el movimiento de grupos armados en las fronteras. El aumento de los asilados políticos y de los migrantes económicos, las operaciones militares del Estado en territorios de los países vecinos, el alcance de las economías ilegales producidas por la venta de droga y de armas, la exportación del modelo de seguridad y de lucha contra las drogas a los países con cultivos de uso ilícito, entre otros elementos. Estos hechos sumados a que, en otros lugares como Irlanda, se llegaron a acuerdos con organizaciones armadas ilegales que se incorporaron a la vida política, o los diálogos entre el gobierno español y ETA: produjeron una fuerte presión internacional para la búsqueda de una salida negociada del conflicto. Asimismo, la consolidación de fuerzas progresistas latinoamericanas que llegaron a diferentes gobiernos a través de procesos democráticos (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil) desvirtuaron la lucha armada insurgente. En este nuevo contexto, las FARC manifestó el interés de participar, de otra manera, en la política que define los rumbos de lo local.

Es de destacar el papel relevante que jugaron países como Venezuela y Cuba en todo el proceso de negociación, pero de manera particular, en las fases exploratorias. El presidente Hugo Chávez fue una pieza fundamental para convencer a la guerrilla del momento oportuno y de la necesidad de iniciar acercamientos con el gobierno de Santos³⁰⁵. En esta dirección también trabajó Cuba, que además facilitó el acercamiento de las partes en su territorio y fue la sede de las negociaciones³⁰⁶. Tanto fuentes institucionales, como de las FARC, coinciden en la importancia que jugaron estos dos actores para el inicio de los acercamientos y el avance hacia la negociación.

³⁰⁵ Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno durante los diálogos de La Habana, en su libro *Revelaciones al final de una guerra* señala que la estrategia de acercamiento de Santos a Venezuela al inicio de su mandato fue clave para el proceso de paz. El giro de las relaciones bilaterales permitió el apoyo de este gobierno en la apertura de las negociaciones “Este fue un hecho determinante porque brindaba a las FARC dos elementos centrales para dar paso al diálogo. Primero, acompañamiento político en el entorno regional. Y segundo, algo esencial como garantía en caso de ruptura” (De la Calle, 2019, p. 51).

³⁰⁶ En un primer momento, las FARC solicitaron que los acercamientos y las negociaciones se realizaran en territorio colombiano. Pidieron al gobierno una zona de distensión que abarcara los departamentos de Caquetá y Putumayo. Las FARC consideraban que el proceso de diálogo se debía hacer de cara a la opinión pública. La primera reunión se llevó a cabo en una zona selvática del Catatumbo a la que asistieron por parte de las FARC Rodrigo Granda y Andrés París, y en representación del gobierno Jaime Avendaño y Alejandro Eder. La segunda reunión se llevó a cabo en La Habana (Cuba). La guerrilla desistió en su empeño debido al asedio constante de la Fuerza Pública y a la insistencia del gobierno para que estas primeras reuniones se hicieran con total discreción y privacidad, así como la necesidad de entablar los diálogos en un territorio neutral evitando cometer los errores de pasadas negociaciones infructuosas, como

En este sentido, la comunidad internacional, en particular, los países garantes y acompañantes del proceso (Cuba, Venezuela, Chile y Noruega) fueron claves para sortear los diferentes obstáculos que se presentaron a lo largo de las conversaciones³⁰⁷. La negociación de La Habana se caracterizó por la participación en diferentes niveles y momentos de este tipo de actores. No solamente fueron los países garantes del proceso, sino organizaciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, hubo enviados especiales de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Alemania y expertos internacionales que en algún momento acompañaron y/o asesoraron el proceso.

El papel de Estados Unidos en un primer momento fue muy discreto para evitar tensiones con las FARC, que no veía con buenos ojos una intervención más activa debido a los antecedentes históricos de influencia de este país en la política interna de América Latina. Sin embargo, con el devenir de los hechos, el presidente Barack Obama apoyó públicamente y en diversas ocasiones las negociaciones de paz. El carácter pragmático de Obama y de Santos facilitó el ambiente internacional para el inicio de las negociaciones (González, 2014). Los puntos del Acuerdo donde hubo mayor influencia de este país, fueron los relacionados con los cultivos de uso ilícito (fumigación con glifosato y extradición) y justicia (Borda & Gómez, 2017), temas sensibles para su política de seguridad nacional.

El gobierno fue muy cuidadoso en acotar el papel que desempeñaron estos actores en cada una de las etapas, para no repetir los errores de pasadas negociaciones, en donde se generaron distorsiones y competencia entre los actores (Massé, 2019). Tanto el gobierno de Santos como las FARC, optaron por internacionalizar el proceso de paz, propiciar un salto de escala, para conseguir legitimidad internacional y facilitar el logro de los objetivos de la mesa de negociaciones. De esta manera, las partes acordaron una estrategia conjunta que sirvió para aminorar las tensiones, reducir el margen de acción de los saboteadores y lograr cierto control sobre los actores y el papel a

las del Caguán. El gobierno era consciente de lo que se estaba jugando y de la fuerte presión política a la que iba a estar sometido.

³⁰⁷ Se destaca el papel de Cuba y Noruega para desencallar las negociaciones en momentos críticos como fue el secuestro del general Rubén Darío Álzate en noviembre de 2014 en el departamento del Chocó y el asesinato de 11 militares en el municipio de Buenos Aires (Cauca) en abril del año 2015. El papel de Venezuela se vio alterado por la muerte de Hugo Chávez en el año 2013. Nicolás Maduro, quien sucedió en la presidencia a Chávez, manifestó su apoyo al proceso. Sin embargo, su papel se vio cuestionado debido a las tensiones y crisis diplomáticas generadas en la frontera de los dos países.

desempeñado en cada momento (Borda & Gómez, 2017). Se podría decir que las condiciones geopolíticas fueron favorables para que el proceso de paz se desarrollara y se lograra acordar una agenda para la paz.

En tercer lugar, el gobierno de Santos representaba a una élite política tradicional con cierta sensibilidad a viejos principios liberales, que habla de incorporar a segmentos de la población y restaurar ciertos derechos (Salgado & Macias, 2018) para el buen el desempeño económico, siempre asegurando que los intereses económicos del capital no quedaran desprotegidos. En este sentido, se puede explicar el respaldo del gobierno a la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas el conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. La posición del gobierno marcó un distanciamiento con el partido de Uribe Vélez, que se opuso rotundamente a este tipo de medidas de reparación, impulsadas en el Congreso por un sector progresista del Partido Liberal y demandadas por los movimientos sociales populares.

La Ley tiene como finalidad disponer un conjunto de medidas (judiciales, administrativas, sociales, económicas) individuales y colectivas, a favor de las víctimas de violaciones de DD.HH y del DIH, ocasionadas en el marco del conflicto armado interno. Estas medidas hacen parte de un proceso de justicia transicional que asegura los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los hechos violentos³⁰⁸. Aunque la Ley tiene profundos vacíos relacionados con la temporalidad, con la concepción de víctima, con las formas de reparación sin esclarecimiento histórico y con el alcance de las medidas, implicó un avance sustancial en el reconocimiento de un conflicto social y armado, así como de los millones de víctimas que se ha cobrado en los más de cincuenta años de conflicto³⁰⁹ (Uprimny y Yepes, 2011) (Uprimny, Sánchez, y Sánchez, 2013) (Giraldo, 2015).

³⁰⁸ La inclusión del término conflicto armado en la Ley suscitó una fuerte oposición de los partidos uribistas en la medida que consideraban que su alusión les daba un estatus político a los grupos armados irregulares. Por lo tanto, se acordó que del término no podrá inferirse tal reconocimiento político. Otro de los temas que generó un amplio debate se relaciona con el alcance temporal de la reparación. Finalmente, en la Ley quedó consignado que la reparación aquellas personas que hayan sufrido la violación de un derecho a partir del 1º de enero de 1985. Para el caso de la restitución de tierras, solo se llevará a cabo este procedimiento a las propiedades que hayan sido despojadas desde el 1º de enero de 1991.

³⁰⁹ Según datos de la Unidad de Víctimas, se calcula que la crisis humanitaria a causa del conflicto social y armado ha dejado 7.2 millones de víctimas aprox., 6.2 millones de víctimas de desplazamiento forzado. Al menos 220.000 víctimas de homicidios. 30.000 víctimas de secuestros. 13.000 víctimas de violencia sexual. 11.000 víctimas de minas antipersona. 10.000 víctimas de tortura. 2.500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. 2.000 masacres.

La oposición a esta Ley por sectores de las élites nacionales y regionales se relacionó no solo con la identificación de responsabilidades en la acción de los grupos armados ilegales, de terceros y de miembros de la Fuerza Pública en los hechos violentos cometidos³¹⁰, sino también, con la restitución de propiedades rurales que fueron despojadas por actores armados ilegales, en particular, por los grupos paramilitares que se sitúan como los principales responsables. Estas dinámicas de despojo se concentraron en los años noventa y dos mil con el auge y expansión del movimiento paramilitar, temporalidad que abarca la Ley. No es casualidad que la “tercera generación” de paramilitares, denominadas por el gobierno Bacrim, anunciaran la creación de “ejércitos antirestitución”, lo que ha generado la revictimización de los reclamantes de tierras, en su gran mayoría pertenecientes a sectores sociales populares (Verdad Abierta, 2012b) (MAPP/OEA, 2013).

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en el año 2009 señalaba en su informe que:

[...] el problema de las tierras se encuentra en el corazón del desplazamiento forzado en Colombia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Verificación (ENV) el 91.3% de los grupos familiares de la población desplazada inscritos en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) manifiesta haber dejado abandonado algún tipo de bien (tierra, bienes raíces no rurales, animales, muebles de hogar, etc.) El cálculo de las tierras despojadas incluye no sólo las que los desplazados abandonaron sino también aquellas que tuvieron que dejar a terceros, bajo presión, por medio de ventas forzosas. Según la II ENV-2008 el total de hectáreas despojadas o forzadas a dejar en el abandono sería del orden de 5.5 millones (10.8%) de la superficie agropecuaria del país en los últimos 11 años [...]. (Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, 2009, p. 10)

La aplicación de la Ley 1448 y los procesos de restitución de tierra que se han llevado a cabo desde su promulgación, con numerosos obstáculos, han puesto en evidencia las múltiples estrategias utilizadas por los actores para el despojo de las tierras a los campesinos, así como la inseguridad jurídica a la que están sometidos debido a la falta de titulación y al alto grado de informalidad de la propiedad rural, que se relaciona con:

[...] una larga tradición de manipulación a través de la coerción, los contactos y las argucias jurídicas de los derechos de propiedad. En la medida en que las instituciones que regulan los derechos de propiedad sobre la tierra en Colombia están marcadas por una serie de

³¹⁰ En la Ley se señala que se podrá investigar la responsabilidad de terceros nacionales, extranjeros o de la función pública en la financiación de estructuras ilegales armadas. De esta manera, el juez podrá remitir el expediente y las pruebas recogidas a un fiscal para que inicie la correspondiente investigación. Asimismo, se prevé la participación de la sociedad civil y la empresa privada en la reconciliación nacional y la materialización de los derechos de las víctimas (Ley 1448, 2011).

características persistentes (acceso político a los derechos, provisión privada y local de seguridad, barreras a la entrada a los actores sociales más vulnerables, etc.), ellas gobiernan no solo las oportunidades y restricciones sino también las capacidades a partir de las cuales los actores toman las decisiones. (Gutiérrez & Vargas, 2016, p. 22)

Desde nuestra perspectiva, el apoyo a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras por parte del gobierno pretendía, de alguna manera, corregir un estado de cosas injustas y modernizar el campo colombiano para una profundización del modelo extractivo. La crisis humanitaria, producto de más de cincuenta años de conflicto armado, era insostenible y representaba un obstáculo para el progreso del país, en la medida que ha limitado el acceso de millones de personas a la seguridad, a los servicios públicos básicos y al goce efectivo de sus derechos. Por tanto, la grave situación social era un elemento más para que el gobierno y las FARC buscaran una salida negociada.

Cuarto. Los elementos que vamos a explicar a continuación se encuentran estrechamente relacionados con el anterior punto. Las dinámicas de acumulación de capital han incidido en las formas de organización del ámbito rural, así como en el modelo de producción agraria. La consolidación de un modelo extractivo-exportador sustentado en la reprimarización de la economía implicó una transformación en la comprensión de lo rural. En este nuevo modelo todos los territorios y todos los recursos son susceptibles de ser explotados. Por lo tanto, el conflicto armado representaba un obstáculo para la consolidación de esa nueva fase capitalista (Salgado & Macias, 2018).

La agricultura ocupaba pocas hectáreas con respecto a la tierra utilizable (5 millones de hectáreas de 22 disponibles). El Estado no intervino el mundo de lo rural con una política integral de ordenación del territorio, por lo cual los terratenientes incrementaron su poder sobre la tierra³¹¹. La consolidación de este poder se hizo a través de prácticas legales e ilegales, las cuales tenían como objetivo el despojo de las tierras de campesinos, comunidades indígenas y afros. Estas prácticas estuvieron acompañadas por un discurso de reconocimiento parcial del campesinado. La informalidad de la tierra fue uno de los factores que permitió a los grandes terratenientes consolidar

³¹¹ Carlos Salgado señala que la cuestión de la tierra es un debate vigente en el país debido a que los gobiernos no han adoptado las políticas pertinentes que den cuenta de dos problemáticas. Primero, la función que debe tener la tierra para el beneficio del conjunto de la sociedad y, en particular, los actores rurales populares. Segundo, la limitación del poder acumulado por los terratenientes y los actores que han controlado la tierra utilizando mecanismos legales, pero también del ámbito de la ilegalidad (Salgado, 2014).

y mantener el dominio en las regiones. Muchas de esas tierras eran pastos utilizados para la ganadería extensiva y como tal eran improductivos (Salgado, 2014).

Los cambios en el discurso del desarrollo allanaron el camino para que desde la academia y el saber tecno-científico se construyera un nuevo modelo rural que justificara y permitiera la explotación de la naturaleza en un sentido amplio. Este nuevo modelo se denominó la Nueva Ruralidad (Machado, Salgado, & Vásquez, 2004). En el marco del discurso del progreso, sustentado en la eficiencia y en la competitividad, se priorizaron los saberes técnicos que permitieran convertir las “ventajas comparativas” en “ventajas competitivas” para generar valores agregados a partir del uso de la tierra.

En este sentido, el campesinado pasó a ser un actor irrelevante y se desvalorizó aún más su papel como sujeto de desarrollo rural. En los planes de desarrollo y de política pública para el campo, tanto del gobierno de Uribe como en el de Santos, el campesinado fue sustituido por el concepto de pequeños productores o de trabajadores rurales. En esta línea, los conceptos “parcela” y “finca”, como unidad de análisis, desaparecieron para ser sustituidos por el de “territorio”. En el marco de este modelo para el campo, aparecieron nuevos actores en la disputa por el territorio y se conformaron nuevas articulaciones, promovidas en mayor medida por el capital transnacional, aunque con participación del capital nacional, que llegaron a los territorios bajo la mediación normativa del Estado, generando nuevos conflictos o profundizando los ya existentes por la apropiación de la naturaleza (Salgado, 2014).

De esta manera, la pacificación de los territorios a través de la negociación del conflicto con la principal guerrilla del país, se presentaba como el camino más razonable para la consolidación de los intereses económicos y políticos, de sectores nacionales y transnacionales. La derrota militar del movimiento guerrillero no se consiguió en los años anteriores, a pesar de los ingentes recursos que se emplearon en la lucha contrainsurgente. Por otra parte, la aplicación de las políticas de seguridad, tanto de Pastrana como de Uribe, así como la injerencia material de Estados Unidos, debilitaron al movimiento, dificultando cada vez más la lucha armada. Además, las nuevas formas de apropiación de la naturaleza y de explotación de los territorios, ampliando las zonas geográficas intervenidas, produjo cambios en las dinámicas de los conflictos (armado, ambiental, cultural, social, económico) y los actores que intervenían en los mismos, haciendo más la viabilidad de la lucha guerrillera.

Quinto. Un nuevo ciclo de movilización social en el país que coloca la solución política negociada del conflicto social armado en el horizonte de sus luchas. Aunque esta reivindicación ha estado muy presente en las agendas de los sectores sociales populares, como fue evidente en el proceso de las Audiencias Públicas del Caguán, en el gobierno de Uribe la protesta social se vio aún más estigmatizada, y las demandas de una paz negociada fueron ensombrecidas por el discurso hegemónico de la guerra.

Durante ese periodo, la polarización política y social obstaculizó el debate nacional de la paz. La dicotomía discursiva que se impuso desde el gobierno trató de silenciar a toda costa las voces críticas. Las manifestaciones se abordaron desde la criminalización de la protesta social y la aplicación de estados de excepción, así como la desactivación de las formas de organización popular a través de las políticas asistenciales y de la incorporación de la población civil a las dinámicas de la guerra³¹².

El movimiento por la paz, que durante los años noventa tuvo una importante incidencia a través de iniciativas como el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, fue afectado por la estigmatización del gobierno. Por ello, sus actuaciones y propuestas a favor de una salida política negociada fueron deslegitimadas por los señalamientos que los situaban como la base social de los grupos insurgentes. Los movimientos sociales populares, los defensores de derechos humanos, los opositores políticos, los medios de comunicación críticos o los funcionarios que divergían de las posiciones dominantes; sufrieron la misma persecución sistemática. Estos señalamientos los colocaban en la diana de los grupos armados ilegales³¹³ (Villarraga, 2015).

No obstante, en la década del dos mil los movimientos sociales populares lograron mantener algunos niveles organizativos y trabajaron en la articulación de resistencias y de

³¹² Una de las primeras medidas que tomó Álvaro Uribe fue la declaración de la conmoción interior, mediante el Decreto 1837 de 2002. Las razones a las que aludió el presidente fueron de orden público, señalando un aumento en la actividad terrorista. Sin embargo, en ese periodo no se presentaron hechos excepcionales que justificaran tal decisión, como señaló la Corte Constitucional en su Sentencia C-802 de 2002. Al inicio de su segundo mandato, en el año 2008, el presidente declaró nuevamente el estado de conmoción interior, arguyendo que la administración de justicia no se encontraba funcionando de manera normal y adecuada lo cual atentaba contra la estabilidad institucional. Posteriormente, en el año 2009 decretó el estado de emergencia social debido a las dificultades de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). La Corte Constitucional declaró inexecutable este estado de excepción por considerar que era un problema estructural del sistema general de salud y no una excepcionalidad (Mira González, 2016).

³¹³ Álvaro Villarraga recuerda el acoso al que fueron sometidas las organizaciones que confluyeron en el movimiento por la paz. La situación fue denunciada ante la opinión pública pero no consiguieron que el gobierno nacional, el DAS y la Policía Nacional reconocieran la sistematicidad de los ataques, constitutivos de violencia política. Ejemplo de ello, fueron los recurrentes allanamientos a la sede nacional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, en los cuales se sustrajo información relevante para el trabajo de esta organización (Villarraga, 2015).

propuestas de agenda para la transformación positiva de los conflictos. En este sentido, se destaca el trabajo realizado por el proyecto Planeta Paz, que sirvió como plataforma de articulación de diferentes sectores sociales, para la construcción y cualificación de sus propuestas de política pública popular en diferentes ámbitos³¹⁴. Este ejercicio contribuyó a la ampliación del horizonte de justicia a través de la exigibilidad de derechos y la puesta en común de modelos de sociedad alternativos mediante de redes intersectoriales. En cuanto a la movilización social, se puede decir que fue permanente, aunque dispersa (CINEP, 2009).

Por otra parte, las agendas populares y las protestas sociales ampliaron las plataformas de reivindicación. Las demandas de justicia económica y social se articularon con reivindicaciones políticas: en contra de los planes de desarrollo, la reelección presidencial, los Tratados de Libre Comercio, y otras relacionadas con los derechos humanos y los derechos de las víctimas (Archila, 2005). Al respecto, estamos de acuerdo con Mauricio Archila cuando señala que en estos años se perfiló un nuevo horizonte socio-político en el que se desarrolló la protesta, en donde cobró centralidad el llamamiento a la paz. En este sentido, este autor recoge los planteamientos de uno de los líderes indígenas de la Minga indígena que se realizó en el 2004:

(La minga) es una movilización pacífica en defensa de los derechos, en protesta por toda la situación de violencia que viven los pueblos indígenas y en general, el pueblo colombiano. Queremos que la solución a los problemas sea por la vía política y no por la armada. (Alfredo Acosta, jefe de la guardia cívica indígena, en El Mundo, 13 de septiembre de 2004 como se citó en Archila, 2005, p. A-9)

La violencia política afectó el tejido popular y comunitario por la desarticulación de las organizaciones y por la pérdida de un acumulado histórico en razón al exilio, desplazamiento y muerte de líderes sociales. Sin embargo, aparecieron y/o se fortalecieron expresiones que habían estado invisibilizadas como es el caso del movimiento de mujeres y el movimiento LGBTI, que abogaron por el fin de la guerra; el movimiento afro e indígena que ponían en el centro de sus reivindicaciones la defensa de la vida y el territorio; los movimientos de víctimas; el movimiento de derechos humanos y por la paz; el movimiento ambiental como respuesta a las

³¹⁴ A finales del siglo pasado y a principios del siglo XXI, la movilización social en el país ha estado ligada a las reivindicaciones de justicia económica y social por el deterioro de las condiciones de vida de las clases sociales populares, debido a los impactos negativos generados por la consolidación del modelo neoliberal. Las demandas de los actores sociales se manifestaban contrarias a las privatizaciones de los servicios públicos, a la flexibilización laboral, a la apertura y liberalización económica, y a los tratados de libre comercio, entre otros elementos. Sin embargo, las demandas relacionadas con las violaciones de DD.HH., el DIH, y a favor de una salida negociada han logrado centralidad en el repertorio de sus luchas (Archila, 2005).

reconfiguraciones del capitalismo en los territorios; y el movimiento cívico ligado a las zonas urbanas (Archila, 2005 y Villarraga, 2015).

Por otra parte, en este periodo surgieron articulaciones y/o plataformas de movilización social como la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, el Mandato Agrario, el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, entre otras³¹⁵. En el caso de la Minga, Arturo Escobar plantea cómo la movilización pone de manifiesto otros sentidos del desarrollo ensombrecidos por el proyecto hegemónico capitalista, que se fundamentan en formas de reproducción social comunitaria, prácticas ecológicas, así como el diseño de políticas desde las cosmovisiones relacionales (Escobar, 2011, p. 311). Por sus características, estas expresiones sociales han sido flexibles en sus formas organizativas y han oscilado entre momentos de latencia y visibilidad a partir de las redes sumergidas construidas en la escala local. Estas expresiones sociales populares confluyeron en sus demandas por una solución política negociada que pusiera fin al conflicto armado, y a la violencia política, de la cual han sido sus principales víctimas.

Por consiguiente, las reivindicaciones sociales en favor de la paz también se constituyeron en un factor a tener en cuenta por el gobierno de Santos y las FARC, para iniciar y mantener el proceso. Las organizaciones sociales populares reivindicaron su autonomía política en relación con los grupos insurgentes y colocaron sobre la mesa sus propias agendas para la construcción de

³¹⁵ La Minga es una expresión de resistencia comunitaria de los indígenas del sur de Colombia. La comunidad de los Nasas realizó la Minga Social y Comunitaria y la Minga en Resistencia para la Defensa Integral del Territorio, en el periodo comprendido entre 2004 y 2008. En el año 2005, se llevó a cabo la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, en donde los pueblos indígenas se opusieron a la firma del TLC con Estados Unidos. En el año 2008, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria culminó en una marcha hasta Bogotá. En el año 2013, se realizó la Minga Social Indígena y Popular por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía, en la que instaban al gobierno a cumplir los acuerdos desde 1999 y la agenda incluía una política minero-energética, política agraria y tratados de libre comercio, sistemas propios de los pueblos indígenas y conflicto armado, paz y respeto a los derechos humanos.

El Mandato Agrario fue una confluencia de organizaciones populares del campo que contenía 14 puntos: derecho a la vida; plenas libertades democráticas y respeto a los derechos humanos; soberanía y seguridad alimentaria; derecho a la tierra; reconstrucción de la economía agropecuaria y agroalimentaria; protección del medio ambiente; política concertada con los cultivadores de coca, amapola y marihuana; derechos sociales, económicos y culturales del campesinado, indígenas y afrodescendientes; reconocimiento político del campesinado; reconocimiento de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes y sus derechos; derecho a la territorialidad; fin al desplazamiento forzado; solución política del conflicto social y armado, y unidad (Salgado, 2014).

El Congreso de los Pueblos surge en el año 2010, de los procesos organizativos alrededor de la Minga, como propuesta política de organización de un bloque para realizar un ejercicio de legislación popular sobre siete ejes: tierra, territorio y soberanía; economía para la vida contra la legislación del despojo; violación de derechos y acuerdos incumplidos; construcción de poder para el buen vivir, vida, justicia y caminos para la paz; cultura, diversidad y ética de lo común; integración de los pueblos y globalización de las luchas (Herrera, 2015).

La Marcha Patriótica es un movimiento político y social de carácter amplio que agrupa a organizaciones sociales, populares y políticas: estudiantes, sindicatos, indígenas, afrocolombianos, campesinas, cívicos y partidos políticos como el Partido Comunista o Poder Ciudadano, entre otros. En su plataforma plantea la solución política negociada del conflicto armado con justicia social.

la paz. Así se evidenció en los diferentes mecanismos de participación de la sociedad civil que se adoptaron en el proceso de negociación y que fueron producto de la presión ejercida por las mismas organizaciones³¹⁶. De esta manera, el ejercicio implicó la visibilización, el reconocimiento y puesta en valor de narrativas de sujetos subalternos que, en su gran mayoría, habían sufrido procesos de estigmatización. No olvidemos que la democracia en Colombia se ha caracterizado por su incapacidad para garantizar los derechos y las libertades civiles de sus ciudadanos. Los niveles de violencia política son una evidencia contundente de estas circunstancias³¹⁷ (Bejarano, 2011).

Para cerrar este apartado, queremos destacar que el interés de las partes por iniciar un proceso de negociación y la posterior firma del Acuerdo de paz, va mucho más allá del espíritu voluntarista del gobierno y de las FARC. Lo que se puso en juego fueron unos intereses políticos y económicos para reconfigurar el territorio nacional, de acuerdo a las necesidades del capital, y, por otra parte, una visión reformista del movimiento insurgente para ampliar los márgenes democráticos y de inclusión social.

6.2.2. Las locomotoras del desarrollo

Como hemos señalado anteriormente, en materia económica el gobierno de Juan Manuel Santos representó una continuidad de las políticas implementadas en los últimos años en el país. Por consiguiente, el modelo de desarrollo no se alteró sustancialmente con respecto a los lineamientos del gobierno anterior. Se podría decir que se reafirmó en lo fundamental, a través de lo que denominó las “locomotoras de desarrollo”, y afinó algunos instrumentos de intervención del territorio y de apropiación de la naturaleza.

³¹⁶ Los Foros de participación de la sociedad civil fueron organizados por la Universidad Nacional y por Naciones Unidas a petición de la Mesa de Conversaciones de la Habana. En total se realizaron “cinco foros nacionales y cuatro foros regionales en los que participaron 7795 personas de 2800 organizaciones de todo el país” (González O. , 2019, p. 74). Los foros versaron sobre las temáticas centrales de las negociaciones: desarrollo agrario integral, participación política, víctimas y cultivos de uso ilícito. Por otra parte, delegaciones de las víctimas viajaron a La Habana para presentar sus posiciones, demandas y propuestas.

³¹⁷ Al respecto, Ana María Bejarano (2011) señala que desde los años ochenta en Colombia han coexistido dos tendencias que se encuentran en tensión. La primera, se refiere a una mayor democratización, que se relaciona “con la eliminación de restricciones previas y el ensanchamiento del espacio para la competencia y la participación política” (p. 305). La segunda, el detrimento constante de los derechos básicos de los ciudadanos y de las libertades civiles. Estas circunstancias han impactado negativamente en los procesos de participación y competencia democrática, en un contexto de conflicto armado, como es el caso colombiano.

El plan de desarrollo presentado para el primer mandato de gobierno (2010-2014) planteaba cuatro ejes transversales para la prosperidad democrática: crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades y consolidación de la paz. Para avanzar en la consecución de estos lineamientos el gobierno se centró en la implementación de tres estrategias: innovación, política de competitividad y de mejoramiento de la productividad, y la dinamización de sectores denominados “locomotora” (Departamento Nacional de Planeación, 2011). Estos sectores se plantearon como la punta de lanza de la economía para potenciar la competitividad del país, crecer económicamente e incrementar los niveles de generación de empleo.

Las cinco locomotoras de crecimiento contenidas en el Plan de Desarrollo fueron: los sectores centrados en la innovación, la agricultura y desarrollo rural, vivienda y ciudades amables, desarrollo minero y expansión energética e infraestructura de transporte (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 205). Para el gobierno, los sectores que tenían un mayor avance eran el sector minero-energético, la vivienda y la infraestructura. El sector agropecuario necesitaba una mayor intervención para alcanzar su potencial máximo, y el motor de la innovación necesitaba ponerse en marcha.

La articulación entre esta política económica y la política de defensa y seguridad era central para el logro de los objetivos planteados. Se necesitaba controlar el territorio para alimentar la maquinaria de las denominadas “locomotoras”. De esta manera, se acoplaron los objetivos de seguridad con los priorizados en el plan de desarrollo:

El Gobierno ha señalado la importancia de diseñar una política que responda a una serie de responsabilidades, consideradas como determinantes para el éxito general de la “Prosperidad Democrática”. Éstas incluyen la seguridad a las locomotoras para la prosperidad, la consolidación de la seguridad y la derrota de los grupos armados al margen de la ley, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la mejora sustancial de la seguridad ciudadana, la defensa nacional y la modernización del sector defensa y seguridad. (Ministerio de Defensa, 2011, p. 11)

En el ámbito de la innovación, el impulso a proyectos de ciencia y tecnología enfocados hacia el sector de defensa, se plantearon para la obtención de réditos económicos y de autosuficiencia en material y equipos. Precisamente, la aplicación de la tecnología en la guerra, fue una de las principales bazas utilizadas por el Estado para el debilitamiento del movimiento insurgente y la puesta en marcha de diferentes operaciones que impactaron fuertemente sus estructuras. De esta manera, Santos apostó por el fortalecimiento de esta estrategia, que le permitía

mantener la asimetría bélica a favor del Estado y acorralar a la guerrilla para obligarla a una negociación política.

Por otra parte, la estrategia de desarrollo estaba pensada para consolidar la inserción de la economía nacional en las dinámicas internacionales³¹⁸. Así era planteado por el gobierno: “en un mundo altamente globalizado, la búsqueda permanente de alternativas para producir más y mejor con menos recursos es un factor crítico que impulsa el crecimiento económico de los países y permite transformaciones económicas de largo alcance” (Plan Nacional de Desarrollo, 2011, p. 64). El gobierno parece obviar el impacto negativo en los órdenes sociales y económicos que tienen este tipo de planteamientos.

La reducción de los costes de producción en los sistemas productivos periféricos lesiona gravemente las condiciones de vida de las clases populares. Los Estados generalmente optan por reducir los salarios de los trabajadores y se valen de la debilidad de las organizaciones sindicales, así como de la ausencia de convenios colectivos. Las medidas de reducción de costes suelen venir acompañadas en estos contextos de medidas coercitivas que minan la capacidad de negociación de los trabajadores. Estas estrategias terminan favoreciendo a los grandes capitales nacionales y transnacionales (Taylor & Flint, 2002 [1994]).

Por otra parte, las élites económicas nacionales e internacionales, organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) popularizaron el término de “industrias extractivas” para referirse a las potencialidades en la generación de empleos, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y el crecimiento económico (Gudynas, 2015). La estrategia de desarrollo marcada por el gobierno, no mejoraba el mercado interno ni el potencial industrial del país. Como lo señalamos para el caso del plan de desarrollo de Álvaro Uribe, se fomentaron actividades de tipo rentístico con poca capacidad de generación de empleo, con escasa vinculación con otros sectores económicos, pero con un fuerte impacto en la naturaleza por los instrumentos predatorios para la explotación de los recursos. Por lo tanto, este tipo de sectores no se pueden considerar como un motor del crecimiento económico, al contrario, como:

³¹⁸ En el año 2015, la inversión extranjera directa en el país fue de USD\$12.107,9. El sector minero-energético concentró el 30% de la IED, siendo el renglón de la economía que más inversión recibió (Banco de la República, 2016). Entre 2012 y 2014, se experimentó una caída en el mercado internacional de precios de los minerales, lo que produjo una reducción de las exportaciones, pasando de 12.093 millones de dólares en 2012 a 9.720 millones de dólares en 2013. No obstante, la inversión en minería entre 2012 y 2013 creció un 8 %, al pasar de 15.650 millones de dólares a 16.833 millones (Paz, 2014).

una vía que profundiza el agotamiento de la base de recursos naturales y la degradación ambiental, dejando las externalidades negativas y los pasivos socioambientales en los territorios origen de los recursos extractivos, a cambio de bajos ingresos por tales exportaciones, sin que tengan capacidad para generar desarrollo. (León, 2012, p. 257)

El discurso desarrollista, centrado en la competitividad y en la eficiencia, se ha articulado con las formas posmodernas de capitalización de la naturaleza, en donde las intervenciones en el territorio y la apropiación de la naturaleza, se justifican en virtud de la gobernanza de los recursos, el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad (Escobar, 1996a). Estos elementos se encuentran presentes en la retórica utilizada, tanto por el gobierno de Uribe, como por el de Santos, en donde de manera recurrente se hace referencia al crecimiento sostenible, a las potencialidades de los recursos ecosistémicos o a las llamadas “ventajas comparativas” que posee el país.

En el caso de la locomotora minero-energética, el gobierno afirmaba la oportunidad que representaba para Colombia la explotación de este tipo de recursos; por lo tanto, se debía aprovechar el auge de los precios en el mercado internacional de las *commodities* para las próximas décadas. En la estrategia se planteaba que el florecimiento de este sector debía estar en sintonía con el desarrollo sostenible y la gestión ambiental de los recursos:

Tenemos que aprovechar de manera responsable nuestra riqueza de recursos naturales para generar crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e inter-generacional. Las elevadas proyecciones de producción de petróleo y carbón para los próximos años, las estimaciones al alza de los precios internacionales de la canasta minero-energética y la creciente actividad de exploración en el territorio nacional, muestran claramente el papel crucial que tendrá este sector en la economía colombiana en los próximos años. Ahora bien, con el desarrollo de los sectores minero-energéticos, viene atada una enorme responsabilidad de gestión ambiental. El desarrollo de esta locomotora no puede ir en contravía del desarrollo sostenible del país y de su conservación para las próximas generaciones. (Departamento de Planeación Nacional, 2001, p. 66)

Este modelo de desarrollo planteado por el gobierno, alimenta un problema sistémico referido al intercambio ecológico desigual en la economía-mundo capitalista (Garay, 2013). Este intercambio se manifiesta en la provisión de materias primas para la reproducción del capital y los consiguientes pasivos ambientales que causa la explotación de los recursos, dejando una mochila ambiental que no es asumida por las empresas extractivas (Gudynas, 2015). Por lo tanto, deberían adoptarse políticas públicas en la escala local/global, que contemplen mecanismos normativos compensatorios, consecuentes con los efectos de la extracción. No solo en el orden ambiental y

ecológico sino en lo social y económico (Garay, 2013). En la estrategia gubernamental no se abordaba ningún tipo de políticas compensatorias en el sentido planteado.

Además, la estrategia de desarrollo se encuentra enfocada a mejorar los indicadores de crecimiento económico del país a través de las locomotoras de la economía, y se plantea como subsidiario del desarrollo sostenible. Este enfoque, termina colocando en un nivel superior al “crecimiento” a costa del bienestar social y de la vida. Carrizosa lo explica de la siguiente manera:

Al establecer el “crecimiento económico” como el primer objetivo del desarrollo sostenible esta definición se ciñe a las versiones de desarrollo sostenible que han sido construidas desde el pensamiento neoclásico y que no contradicen las políticas neoliberales. Cuando se pone el “crecimiento económico” por encima o al mismo nivel que la calidad de vida y el bienestar social, se le otorga el carácter de fin y se oculta que es un medio”. (Carrizosa, 2007, como se citó en Mena, 2014, p. 480)

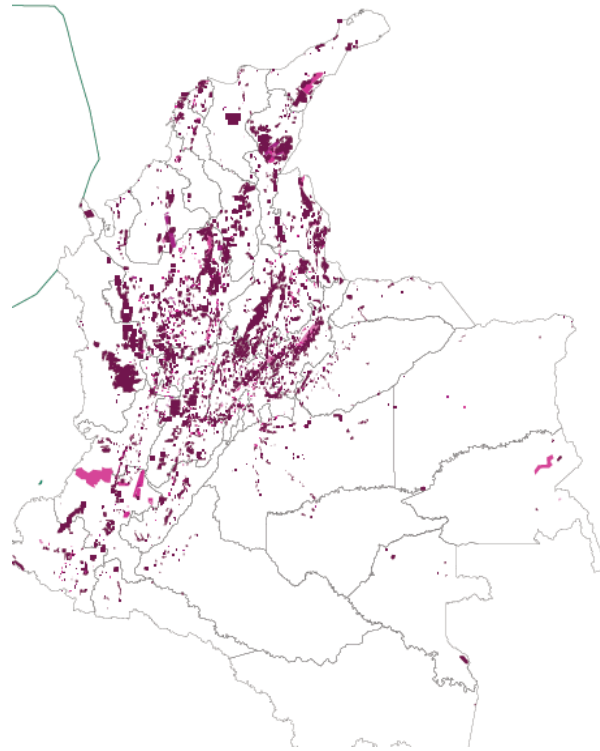
En aras de lograr el tan ansiado crecimiento económico del país vía modelo extractivo-exportador, tanto en el gobierno de Uribe como de Santos, se experimentó un repunte en la concesión de licitaciones para la explotación minero-energética en la que se ha afectado buena parte del territorio nacional, como se observa en la siguiente cartografía de la evolución espacial minera en el país. En la Figura 7, se observan los títulos mineros acumulados desde el año 1990 hasta principios del 2009. En la Figura 9, los títulos mineros concedidos durante el mandato de Uribe Vélez, en donde se duplican los títulos concedidos en el periodo comprendido entre el año 2004 y 2008 (León, 2012). En el periodo de Santos, los títulos concedidos no llegan al auge del 2009, pero el número de hectáreas tituladas se incrementa en más de un millón, al terminar su legislatura³¹⁹. La ampliación de los títulos mineros se produjo por la ampliación de las “fronteras

³¹⁹ En periodos anteriores al mandato de Uribe, la tasa de crecimiento del área titulada para la minería era de un 8% anual. En su periodo presidencial, este indicador se incrementó al 15%. Entre los años 2004 y 2008, se adjudicaron aproximadamente 1.200.000 hectáreas, pero en los primeros nueve meses del año 2009, se registraron nuevos títulos mineros equivalentes a 4.038.000 mil hectáreas (León, 2012, p. 258). En el año 2015, los títulos mineros ascendían a 9.314 y comprendían un área total 5'347.405,43 hectáreas, lo que representa el 4.68% del territorio nacional. El 43% de la titulación minera se localiza en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima y Antioquia (VV.AA, 2019, p. 115).

Por otra parte, el conjunto normativo que reglamenta los estudios para las licencias ambientales “presentan un claro sesgo hacia la dimensión económica del desarrollo y, en ese sentido, hacia la valoración exclusivamente en términos monetarios de los impactos ambientales, desconociendo casi que completamente los planteamientos de la economía ecológica que defiende la aplicación de métodos de evaluación multicriterio de proyectos que incluyen la dimensión sociocultural y ambiental” (Garay, 2013, p. 13). A este sesgo se suma, los niveles crecientes de corrupción que rodean los proyectos extractivos, en una disputa entre actores legales e ilegales, nacionales y transnacionales, por la captación de las rentas que se producen en el sector. Más en un contexto de conflicto armado, en el que los métodos coercitivos son utilizados para favorecer los diferentes intereses económicos y políticos.

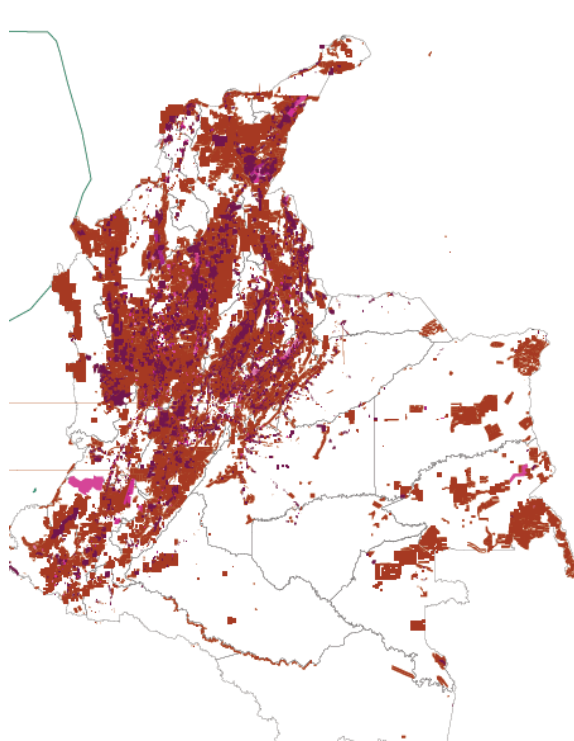
mineras en los Llanos Orientales, en los valles interandinos y en los bosques húmedos” (Castillo, Rubiano, & Sebastian, 2019, p. 13).

Figura 6. Títulos mineros acumulados al gobierno de Uribe



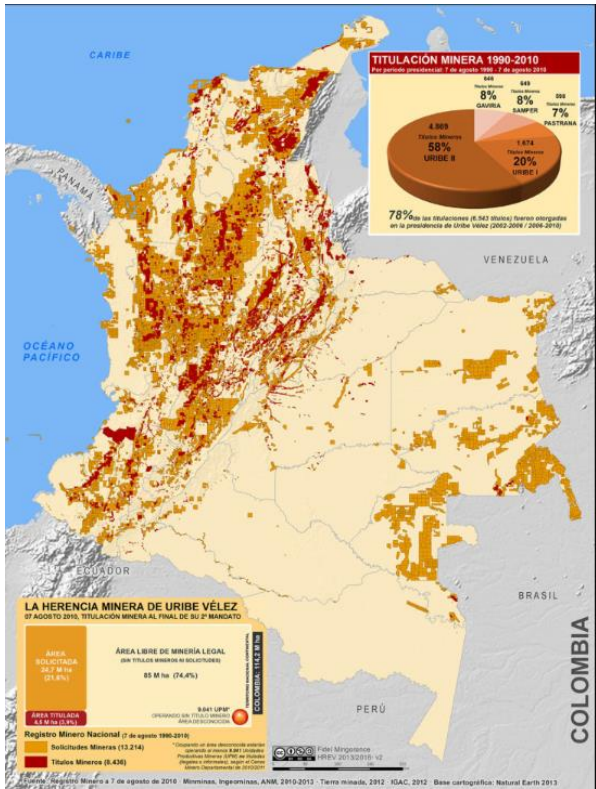
Fuente: Adaptado Rudas (2011) a partir de INGEOMINAS, Títulos mineros.

Figura 7. Solicitud de títulos mineros (2006-2009)



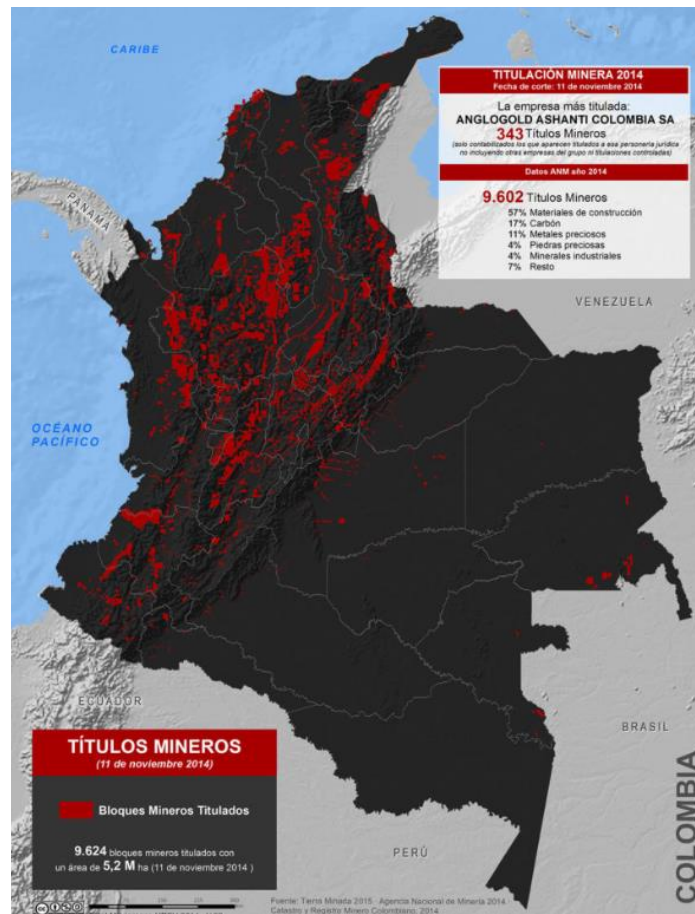
Fuente: Adaptado Rudas (2011) a partir de INGEOMINAS, Títulos mineros.

Figura 8. Títulos mineros (2002-2010)



Fuente: Adaptado de Radiografía del extractivismo, por Geoactivismo, 2020, (<https://geoactivismo.org/mapas/radiografia-del-extractivismo/>).

Figura 9. Títulos mineros (2014)



Fuente: Adaptado de *Radiografía del extractivismo*, por Geoactivismo, 2020, (<https://geoactivismo.org/mapas/radiografia-del-extractivismo/>).

El incremento en la concesión de títulos mineros generó una agudización de los conflictos territoriales en el orden ambiental, ecológico, social, económico, político y cultural. Los territorios titulados se superponen a espacios ecosistémicos, territorios colectivos de comunidades indígenas y afrodescendientes, zonas de reserva, etc. Este solapamiento se manifestó en la tensión y disputa de los sistemas de valoración: “la valoración del mercado y la valoración simbólica/cultural/identitaria” (Garay, 2013, p. 12). Esta tensión se devela en la utilización del territorio, en el despliegue de las territorialidades y la construcción social del espacio³²⁰ (Leff,

³²⁰ Luis Jorge Garay entiende la territorialidad como problematización del territorio, es decir, “como proceso societal, cultural y geofísico/ ecológico –es decir, como constructo societal-ecológico– resultante de la interacción y la reproducción de conflictos/contradicciones/ disputas entre agentes y grupos sociales para el aprovechamiento/ conservación/reserva de unos espacios con diverso significado simbólico, variada riqueza y fragilidad eco-física, diferente composición étnica, etc.” (Garay, 2014, p. 12).

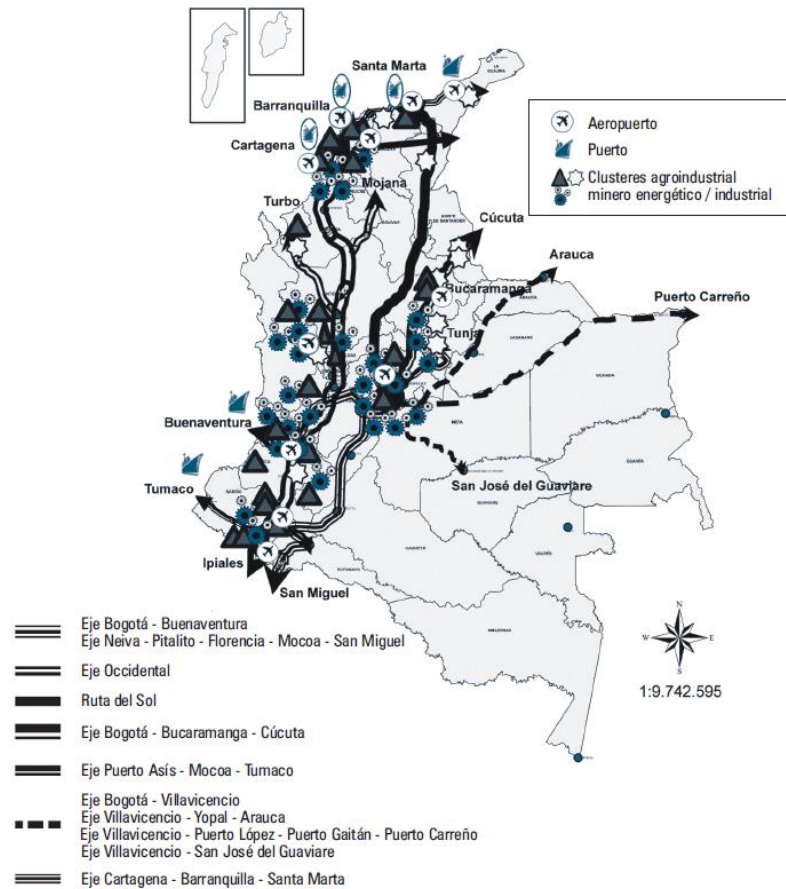
2004; Garay, 2013). Por consiguiente, se enfrentan los lenguajes de valoración dominantes con los lenguajes contruidos por los actores sociales populares, así como los sentidos de justicia dispuestos por los agentes³²¹.

La intervención en infraestructura fue acorde con los polos de desarrollo de las locomotoras minero-energéticas y de agricultura, principalmente. Se produjo una continuidad en los proyectos de los Ejecutivos anteriores y se priorizaron los nodos de comercialización de las materias primas hacia el mercado internacional, en particular, las intervenciones portuarias. Los criterios utilizados para los proyectos de infraestructura se asociaron con la competitividad y la eficiencia, estimando un mayor crecimiento y mejora de la calidad de vida de las zonas rezagadas del desarrollo.

Por lo tanto, los ejes de integración espacial que se priorizaron debían constituirse en plataformas para la generación de un mayor crecimiento regional y desarrollo sostenible, y así alcanzar los siguientes objetivos. Primero, la integración de los principales centros urbanos del país (Bogotá-Medellín-Cali), para crear “complementariedades económicas competitivas, impulsando el desarrollo de subregiones alrededor de los ejes para reducir los desequilibrios” (Departamento de Planeación Nacional, 2011, p. 56). Segundo, la conectividad del interior del país con la zona occidental para la articulación con los mercados internacionales, en particular, con la Cuenca del Caribe, la Cuenca del Pacífico y Suramérica. Tercero, la conexión entre regiones con mayor nivel de desarrollo y las más rezagadas. Cuarto, conectar las zonas de centro (urbanas) con las regiones periféricas para reducir costos de exportación y contribuir al desarrollo de las regiones intermedias. Quinto, la articulación de zonas con potencial productivo por ser ricas en tierras, biodiversidad, agua, minerales, hidrocarburos, etc., por ejemplo, la zona de la Altillanura colombiana (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pp. 56-57).

³²¹ Para una sistematización de los conflictos mineros identificados por las organizaciones populares ver el texto de Salgado & Nández, Cinco fragmentos (independientes y complementarios) en torno a la posición de los movimientos sociales frente al modelo minero extractivo (2014).

Figura 10. Ejes de integración y desarrollo, clúster y centros logísticos



Fuente: Adaptado de Departamento Nacional de Planeación (p. 58), 2011.

En las políticas de infraestructura y comunicaciones, se dio especial relevancia a la continuidad de los proyectos de la iniciativa IIRSA en Colombia, correspondientes al Eje Amazónico y al Eje Andino. En la región surcolombiana, el eje occidental se proyectó para permitir la conectividad de los departamentos del Cauca y Nariño con el corredor Panamericano, que permite el comercio con Ecuador, Perú y los países del Mercosur. En el Eje Andino, se priorizaron las obras de la Ruta del Sol (Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cesar y Magdalena) y el eje vial Bogotá - Bucaramanga – Cúcuta, para facilitar el comercio con Venezuela (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 54). Otro eje relevante, que se articula con IIRSA, es el trayecto que comprendía las ciudades de Villavicencio y Puerto Gaitán, los ríos Meta y Orinoco, que permitiría el flujo económico transfronterizo y el acceso a la Cuenca del Pacífico, por el puerto de Buenaventura. Este proyecto también estaba pensado para

aprovechar el potencial económico de la Orinoquía (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 56).

En la Figura 10 se puede apreciar los principales ejes de articulación espacial y la conectividad con los clústeres, conglomerados urbanos y centros logísticos.

La intervención del territorio a través de proyectos de infraestructura implicó una redefinición espacial, permitiendo el ingreso “a los grandes ciclos de capital, bien sea como mercados, como emplazamientos para el desarrollo de nuevas capacidades productivas, como fuentes de recursos naturales o mano de obra y de este modo posibilita al sistema solucionar las crisis de sobreacumulación (de excedente de trabajo y capital)” (Jiménez, 2012, p.152).

Un ejemplo de esta redefinición espacial, se encuentra en la región de la Orinoquía colombiana, en particular la subregión de la Altillanura. Desde el año 2001, en el Informe de la Misión Paz, en el que se planteó la reestructuración de la política pública rural y agropecuaria del país, se identificó a esta subregión como fundamental en la política de desarrollo empresarial para el agro, debido a sus potencialidades en términos de las denominadas “ventajas comparativas”. Para ello, era necesario una estrategia de intervención que permitiera el aprovechamiento de las tierras subutilizadas, la explotación de recursos naturales y la ampliación de la frontera agrícola. En el gobierno de Uribe Vélez se implementó la iniciativa *Renacimiento de la Orinoquía*, en la que se tenía previsto la adjudicación de seis millones de hectáreas para cultivos agroindustriales (Calle & Ñáñez, 2017). En el gobierno de Juan Manuel Santos, se impulsó la ampliación de la frontera agrícola y, por lo tanto, la oferta de tierras en la Altillanura³²² (Departamento Nacional de Planeación, 2011; Domínguez, 2013).

En esta dirección, el gobierno estimaba que el sector agropecuario debía continuar el camino hacia la empresarización del campo, de la mano de los emprendimientos productivos. “Aprovechar la riqueza y el enorme potencial del campo colombiano para dar un verdadero salto económico y social en las zonas rurales del país a través de la generación de empleo formal y el desarrollo de emprendimientos exitosos” (Departamento de Planeación Nacional, 2011, p. 66). La posibilidad de este salto “cualitativo” estaba dada por el auge de las *commodities* en el mercado

³²² En el Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos” se señala que el objetivo para la Altillanura es “transformar entre cinco a seis millones de hectáreas de esta zona en una especie del “Cerrado Brasileño” que contribuyó a convertir a ese país es una potencia agrícola mundial. Entre los productos que se buscan desarrollar se encuentra el cacao, maíz-soya, los correspondientes a la avicultura y porcicultura, la ganadería intensiva, el caucho forestal y la palma” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010 como se citó en Departamento de Planeación Nacional, 2011, p. 56).

internacional. El gobierno estimaba que la consolidación de Colombia en este sector generaría una disminución de la pobreza rural y crearía puestos de trabajo.

Tanto el sector minero-energético como el agropecuario, se constituyeron en la gran apuesta para el desarrollo económico y social de Colombia. Por lo tanto, desde esta visión, el campo debía ponerse a tono con las dinámicas de acumulación global, que demandaban materias primas para los agrocombustibles, como energía alternativa a las energías fósiles, pero también, para cubrir la demanda creciente de alimentos del mercado internacional, y de las economías en auge de países como China o India. Este contexto era visto como una ventana de oportunidades para el país.

La estrategia consistía en mejorar los niveles de competitividad del sector, a través del incremento de las escalas de producción, a partir de conglomerados productivos que integren todo el ciclo económico: producción, transformación y comercialización. Los pequeños y medianos campesinos debían incorporarse a estos conglomerados a través de figuras asociativas con las grandes empresas del sector. De esta manera, se facilitaría su “incorporación en procesos de empresarización y articulación con inversionistas privados (negocios inclusivos), que mejoren su productividad y capacidad de negociación, y de esta manera faciliten su inserción en los mercados” (Departamento de Planeación Nacional, 2011, p. 235).

Para ello, se plantearon mecanismos de atracción destinados a la inversión privada en proyectos agroindustriales, complementados con iniciativas de negocios inclusivos que incorporaran las tierras de pequeños y medianos productores, sin que implicara la transferencia de propiedad. Además, se señalaba la posibilidad de que se integraran como mano de obra en los proyectos para el agro. En el contexto colombiano, caracterizado por una alta inseguridad jurídica, la informalidad de propiedad rural, la concentración de la tierra y por las dinámicas del conflicto armado, estas medidas colocaron al campesinado en una situación de profunda vulnerabilidad con acceso a escasos recursos frente a los actores respaldados por el capital económico y político.

Por consiguiente, alimentaban la competencia entre capitales internacionales y nacionales por el acaparamiento de tierras, suelo y subsuelo, utilizando diferentes modalidades de apropiación del territorio y de los recursos, como pueden ser la expropiación, la extranjerización, la titularización, la empresarización, la financiarización y el derecho real de superficie (Garay, 2014, como se citó en Calle y Nájuez, 2017). Este contexto económico y político, propio del neoliberalismo, daba lugar a formas concretas de justificación y legitimación del control de la

tierra y del territorio, como también a la conformación de espacios de resistencia (Borras et al., 2011, Heynen et al., 2007, como se citó en Peluso y Lund, 2011).

El modelo terminó beneficiando a los grandes capitales vinculados con la agroexportación. Estas intervenciones económicas se apoyaron en la depredación de la naturaleza afectando de manera sistemática la economía campesina y las acciones de despojo (Estrada, 2015). Este enfoque de progreso ha generado una agudización de los conflictos no resueltos en el campo y que han sido aplazados por todos los gobiernos (Estrada, 2015; Salgado, 2014). En el caso de la concentración de la tierra, los datos del Instituto Agustín Codazzi para el periodo analizado “muestran como el 4.2% de la tierra (parcelas menores de 5 hectáreas) está en manos del 67,6% de los propietarios, al paso que el 46.5% de la tierra (propiedades de más de 500 hectáreas) la posee el 0,4% de los propietarios. Colombia muestra un índice de GINI altísimo, acaso uno de los más inequitativos del mundo [un índice de GINI de 0.885] (Juan Camilo Restrepo, 2014, como se citó en Giraldo, 2015, p. 223).

La estrategia para el campo fue reforzada en el Proyecto de Ley a través del cual se creaban las *Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES)*, en las cuales se impulsaba las articulaciones entre pequeños campesinos con grandes empresas. Estas asociaciones se caracterizan por una profunda asimetría entre las partes, en donde los campesinos se vuelven aparceros o trabajadores rurales despojados de la tierra, en beneficio de los intereses del capital empresarial. En el contexto del conflicto, el Estado fomentó el desarraigo y el despojo mediante diferentes estrategias coercitivas. Se obstaculizó el acceso a tierra productiva y se obligó al desplazamiento hacia zonas selváticas, ampliando de manera informal la frontera agrícola. La Ley ZIDRES es una ampliación de instrumentos para ese despojo, utilizando nuevas figuras como la “emprezarización expropiatoria” y la “titulación masiva” de tierras baldías (Fajardo, 2015, p. 131), las cuales se han acumulado utilizando métodos violentos y acciones ilegales por parte de actores económicos (en particular, empresas ligadas al capital financiero nacional e internacional).

La *Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras* y la incorporación del tema agrario en las negociaciones de paz, utilizado muchas veces por el gobierno para ganar legitimidad, contrasta con la Ley antes señalada. Diferentes organizaciones sociales, campesinas indígenas, afrodescendientes, ONGs y del ámbito académico han denunciado que las ZIDRES van en contra de la democratización de la tierra y de la mejora de las condiciones del campesinado. Una lectura del contexto indica que el gobierno pretendió, con esta normativa y con las políticas derivadas de

los planes de desarrollo, blindar los intereses económicos del capital. De esta manera, se aseguraba el desmonte de las territorialidades campesinas y las inversiones del capital en los territorios, a través de la explotación de los recursos naturales (Fajardo, 2015, p. 131); acentuando la acumulación por desposesión en beneficio de la agro-exportación y consolidando las locomotoras minero-energéticas.

PARTE III. PERCEPCIONES POPULARES DE LOS CONFLICTOS SOCIO- TERRITORIALES EN EL PUTUMAYO

La esperanza es la posibilidad que la humanidad genere mundos posibles. Las fuerzas sociales, políticas y el rico tejido social-comunitario, sus hombres, mujeres y los artistas invitamos a recrear la región sur-colombiana. Pero ello no es posible sin nuevos imaginarios alternativos a nuestras crecientes tensiones y a las violencias de todo tipo que producen profundos impactos en la vida colectiva a individual de las personas. Porque creemos profundamente en una cultura de vida, e invitamos a una movilización permanente del pensamiento y a la sensibilidad de todas las fuerzas vivas en favor de una región creativa, solidaria, reorganizada social y territorialmente convencida.

*Seminario regional. Observatorio Nacional de Paz. San Juan de Pasto.
25 de febrero de 2012.
(Observatorio Nacional de Paz, 2012b, p. 17)*

En esta tercera parte de la tesis abordaremos las diferentes percepciones populares de los conflictos socio-territoriales en el departamento del Putumayo, a partir del trabajo de campo realizado con organizaciones populares con las que tuvimos oportunidad de establecer un diálogo de saberes y experiencias. Es importante recordar, que esta investigación se desarrolló en el marco de la labor realizada con la organización colombiana CDPAZ-Planeta Paz, en particular, con el Observatorio Nacional de Paz (ONP), en el periodo comprendido del 2009 al 2014. Esta colaboración permitió

establecer relaciones de confianza con los líderes y las lideresas de las organizaciones, en un contexto de alta conflictividad social en el departamento y, en general, en el país.

Las organizaciones sociales populares con las que se desarrolló la investigación pertenecen a los siguientes sectores: ambientalistas, campesinos, comunales desplazados, mujeres, trabajadores de la minería y víctimas del conflicto armado. Las entrevistas en profundidad se realizaron a líderes y lideresas de organizaciones que se reconocen en estas categorías y fueron realizadas en el año 2010, en la ciudad de Mocoa. No obstante, para el análisis se ha complementado la información con documentos de las organizaciones, relatorías de los talleres, seminarios y reuniones regionales del ONP, a los que tuve oportunidad de asistir y de participar como investigadora del proyecto, como fuente primaria de la tesis.

A partir de esta información, se realizó el análisis sobre la forma en que las organizaciones interpretan, entienden y leen la conflictividad social y armada en el territorio en el que habitan y construyen sus proyectos comunitarios.

CAPÍTULO 7. Caracterización del territorio y narrativas del conflicto social y armado

En este capítulo se realizará una breve caracterización del departamento del Putumayo, de las organizaciones sociales populares con las que se realizó el trabajo de campo y las percepciones de las organizaciones sobre el conflicto social y armado.

7.1. Breve caracterización del departamento del Putumayo

El departamento del Putumayo se sitúa en la región suroccidental del país, en donde la cadena montañosa de los Andes se divide en las tres cordilleras (Central, Occidental y Oriental). Esta conformación orográfica se denomina el Nudo de los Pastos o Macizo Colombiano. Al este del Macizo se conforma el piedemonte que se abre paso a las llanuras amazónicas, dando lugar a la división territorial del Putumayo, que se extiende unos 25.648 km², aproximadamente el 2,2% del territorio del país. El departamento limita al sur con Ecuador y Perú, al oriente con Caquetá y Amazonas, y al norte con el Cauca, Caquetá y Nariño.

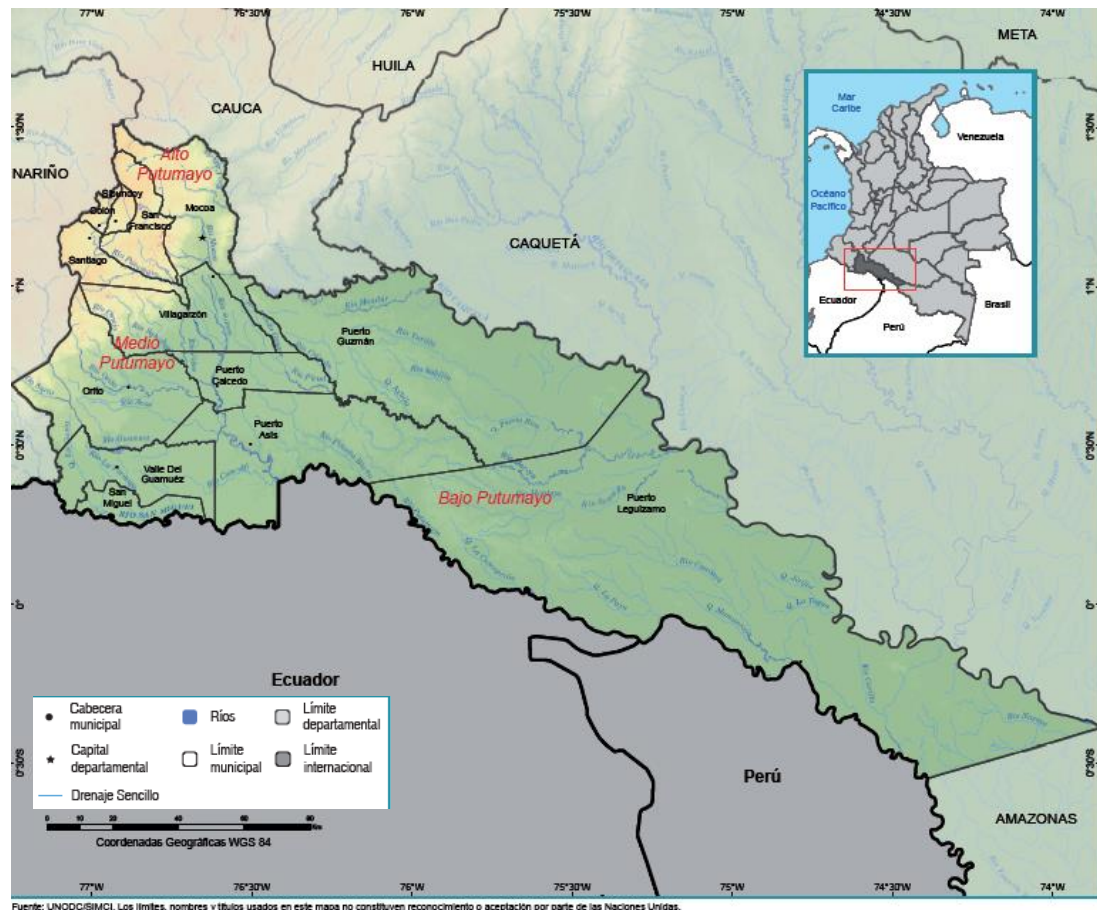
El Nudo de los Pastos ha sido reconocido por la UNESCO como una de las reservas de la biosfera. Es la estrella hidrográfica del país, conformada por 13 páramos y por más de 350 lagunas de Alta Montaña, así como por ecosistemas con una alta biodiversidad. Por lo tanto, proporciona el 80% del agua que se consume en el país (Nates Cruz, 2002, p. 22). En ese conjunto montañoso, nacen algunos de los ríos más importantes de Colombia como el Patía, el Cauca, el Magdalena, el Putumayo y el Caquetá. Los dos últimos hacen parte de la Cuenca del Amazonas, mientras que el Cauca y el Magdalena recorren el país de sur a norte. La riqueza hidrográfica de la región tiene un papel fundamental en la vida de las comunidades, no solo como fuente material de sustento, sino también, como elemento articulador de su cultura e identidad ³²³.

Por su ubicación, el departamento posee una importante riqueza hídrica que favorece la biodiversidad y la fertilidad de sus tierras. El río Putumayo es el principal cuerpo de agua, que nace en el Valle del Sibundoy en los límites con el departamento de Nariño, y atraviesa los municipios de Villagarzón, Puerto Caicedo y Puerto Asís; mientras que la frontera con Ecuador es

³²³ Al respecto, ver los trabajos de Ulrich Oslender sobre las comunidades negras y su relación con el espacio en el Pacífico colombiano (2008).

delimitada por el río San Miguel. Al norte del departamento se encuentra el río Mocoa, en los límites con el departamento del Caquetá (CNMH, 2015, p. 26).

Figura 11. Departamento del Putumayo



Fuente: Adaptado de *Ministerio de Justicia* (p. 7), UNODC; SIMCI, 2016.

El departamento se encuentra dividido en tres subregiones, a saber, el Alto, el Medio y el Bajo Putumayo, las cuales comprenden trece municipios distribuidos de la siguiente manera: en la zona del Alto se encuentran Santiago, Sibundoy, San Francisco y Colón; en la subregión del Medio Mocoa, Puerto Guzmán y Villagarzón; en el Bajo Putumayo Orito, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Miguel, Puerto Caicedo y Valle del Guamuez³²⁴.

³²⁴ Existe un consenso sobre las tres subregiones que comprende el departamento, sin embargo, se habla de una cuarta que sería el bajísimo Putumayo, y se correspondería con el municipio de Leguízamo. Esta zona se caracteriza por las dificultades de comunicación, ya que solo se puede llegar por río o por aire. Limita con Ecuador, Perú, Caquetá y Amazonas (CNMH, 2015, p. 26).

Las subregiones de Putumayo responden al cauce del río, y con esto a los diferentes ecosistemas que se encuentran allí, y que, junto con otros elementos, determinan las variadas configuraciones culturales, económicas y políticas de la región. No es lo mismo hablar del Putumayo del Valle de Sibundoy, que del de la selva que colinda con Ecuador y Perú; o referirse al Putumayo de los municipios y poblados ubicados en la ribera del alto o bajo Caquetá, pues tanto las actividades productivas, como la distribución de la tierra o las formas de organización política y los rasgos culturales, son diferentes en cada uno. (CNMH, 2012, p. 27)

El Putumayo se considera un territorio geo-estratégico debido a tres características: es una zona de frontera con Ecuador y Perú, los límites con los departamentos dan acceso al Océano Pacífico, y es la puerta de entrada a la Amazonía.

En relación con su composición demográfica, el departamento tiene una población de aproximadamente 360.000 habitantes, que se corresponde con menos del 1% de la población a nivel nacional. En términos de conformación étnica, el departamento se encuentra habitado en su mayoría por mestizos. No obstante, se ubica en la novena posición en cuanto a población indígena se refiere, que se calcula en unas 30.000 personas aproximadamente, adscritas a los pueblos Awá, Murui, Coreguaje, Emberas, Kichwa, Inga, Yanaconas, Pijao, Kamentsa, Pastos y Quillasingas. La población indígena en el Putumayo se corresponde con el 17,9% del total de la población del departamento (DANE, 2018). En el departamento también habita población afrocolombiana, y un pequeño porcentaje de los pueblos Room y Palenqueros. De esta manera, el Putumayo se caracteriza por una importante diversidad y por su riqueza cultural. Esta diversidad étnica resulta fundamental para comprender las múltiples territorialidades que se tejen en el departamento.

El Putumayo se caracteriza por ser una zona que se ha configurado a través de diferentes oleadas de colonización, relacionadas con las economías extractivas y de enclave, desarrolladas en varios momentos históricos. Algunas de ellas comienzan en el siglo XVI y “se proyectan hasta el siglo XIX, participando en los mercados internacionales a través de la extracción y comercialización de materias primas como la quina o el caucho”³²⁵ (Wesche, 1974, como se citó en CNMH, 2015, p. 26).

A partir de los años 30, el gobierno colombiano comenzó a implementar algunas políticas para las zonas de colonización, dirigidas principalmente a la incorporación de estos territorios al

³²⁵ La Guerra de los Mil Días (1899-1902) provocó una fuerte crisis económica en Colombia entre otras cuestiones por el bloqueo comercial de la región Caquetá-Putumayo hacia el interior del país. Estos hechos generaron un colapso en la exportación del caucho a través del río Magdalena y, por lo tanto, representó un golpe certero a esta economía de enclave.

mercado nacional e internacional. Las políticas se diseñaron desde el centro del país, y fueron articuladas bajo la lógica de “espacios vacíos” e “indómitos” a los que había que “domesticar”. Entre los años 1930 y 1970, el gobierno distribuyó aproximadamente 11 millones de hectáreas de baldíos en zonas de colonización como Putumayo, los Llanos Orientales y Caquetá, entre personas individuales y compañías agrícolas. En este contexto, se generó un fenómeno de usurpación de lotes por parte de los empresarios, lo que produjo una agudización de los conflictos y de la violencia en estas regiones del país (LeGrand, 2016 [1988], p. 222). Estos acontecimientos han marcado históricamente las relaciones sociales y el mercado de tierras en el departamento. A partir de la década de los sesenta del siglo XX, se presentaron nuevas oleadas de colonización, como consecuencia de la instalación de megaproyectos, relacionadas con la coca y la explotación de hidrocarburos, aspectos que abordaremos más adelante.

Las regiones con economías de enclave presentan ciertas dinámicas que se asocian al desarrollo de conflictos sociales. En primer lugar, presentan fuertes flujos de inmigrantes provenientes de diferentes regiones del país atraídos por la generación de empleo producto del *boom* económico; en segundo lugar, alteran el balance ambiental en la zona (normalmente el impacto se observa en las cuencas hídricas) afectando las actividades productivas típicas de las regiones; en tercer lugar, se da un crecimiento poblacional inusual en el cual se observa la preponderancia de población inmigrante sobre los nativos; en cuarto lugar, la multiculturalidad en algunos casos genera brotes de conflicto social. (Hernández 1998, como se citó en Rettberg y Prieto, 2018, p. 146)

En las dinámicas de poblamiento de los colonos se puede observar como algunos migrantes han generado procesos de arraigo y construcción de identidades ligadas al territorio; otros grupos, por otra parte, han mantenido formas de vida itinerantes relacionadas con esos enclaves económicos. No obstante, es importante aclarar que estos últimos generan arraigo en el territorio desde esas identidades móviles asociadas a la forma de vida de los colonos. Dichos procesos de poblamiento, han producido diferentes mecanismos de integración en las estructuras económicas, sociales y políticas del departamento. Estas características han estado presentes en la Amazonía y hacen parte de la construcción de la región y de las formas en las que se ha vinculado al Estado-nación. Por consiguiente, el Putumayo se ha configurado, no solo como un foco de expulsión de población por las dinámicas del conflicto armado, sino como receptor de migrantes provenientes del centro del país, principalmente en la búsqueda de oportunidades económicas (Ramírez M. C., 2001a, p. 29).

Estas dinámicas espacio-temporales han definido el devenir político, económico y social del departamento hasta nuestros días. El Putumayo ha sido una de las regiones más olvidadas del país. Las políticas han estado dirigidas hacia la incorporación del departamento a los circuitos de comercio internacional, a partir de la explotación de recursos naturales necesarios para impulsar cada fase de acumulación³²⁶. Al priorizar las dinámicas económicas, se han dejado en un segundo plano las necesidades reales de la población, que se tornan aún más acuciantes por la falta de vías de comunicación entre las diferentes subregiones y hacia el resto del país. En algunas de las entrevistas, los habitantes se referían al departamento como una zona “alejada de la mano de Dios”. Esta situación es paradójica, si se tiene en cuenta la riqueza en términos de recursos ecosistémicos³²⁷. Por ello, uno de los mayores reclamos de la población es que las regalías producto de la explotación de los recursos sean invertidas en políticas sociales.

Sin embargo, la corrupción en los diferentes periodos de gobierno ha generado un “derrame” del dinero público en favor de los intereses de las élites locales, produciendo una crisis social y humanitaria. A esto se suma la disputa por la captación de las rentas legales e ilegales entre los diferentes actores armados, que establecen alianzas con la clase política para la apropiación de los recursos. Ejemplo de las carencias sociales y de la debilidad institucional, es la situación de Mocoa, la capital del departamento, vista como un reflejo de lo que sucede en todo el territorio:

Esta riqueza natural contrasta con la debilidad de las instituciones municipales. La consolidación institucional en Mocoa ha estado bastante rezagada con respecto a la del resto del país: en 1993 el 53% de su población tenía sus necesidades básicas insatisfechas; solo tuvo interconexión eléctrica hasta 1997; no tuvo ruta pavimentada de acceso al mar sino hasta 2000; solo hasta 2005 tuvo semáforos y puentes peatonales; el servicio de

³²⁶ En el contexto colombiano, las empresas extractivas han tenido una especial protección del Estado. En el caso del petróleo, tanto la estructura física y corporativa ha sido protegida por la institucionalidad, llegando a traspasar los límites de la legalidad contra aquellos sectores que han mostrado su oposición a este tipo de actividad, que controvierten la distribución y el uso de las regalías, o reclaman mayor participación en ellas (Rettberg y Prieto, 2018). Rettberg y Prieto señalan que indicadores que miden el grado de violencia, como pueden ser las tasas de homicidios, desplazamiento forzado y los secuestros, se encuentran por encima del promedio nacional en las regiones en donde la extracción de petróleo se configura como una de las principales actividades.

³²⁷ Al respecto, la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo considera que uno de los principales enclaves económicos, el de los hidrocarburos ha traído más problemas que soluciones a la población:

Un ejemplo pertinente para nuestra región es cómo la política petrolera, en sus más de 100 años de desarrollo en el país, ha convertido a la extracción de los recursos hidrocarburíferos en un instrumento de contaminación, daño ambiental, inequidad social, corrupción y guerra, que hoy tiene sumida a la población en una honda crisis humanitaria, ambiental, territorial y de los derechos humanos. El Putumayo se convierte hoy en uno de los lugares con mayor potencial productivo para la extracción de petróleo en la Amazonia, lo cual permite inferir que los factores negativos de esta actividad productiva tenderán a agravarse. (Mesa Regional de Organizaciones sociales del Putumayo, 2015, p. 210)

acueducto y alcantarillado ha sido siempre deficiente —nunca ha habido agua potable—; en el municipio —y en el departamento en general— no hay hospitales de nivel III y en general la calidad de los servicios de salud es deficiente; y el estado de las vías de acceso y transporte aún hoy sigue siendo precario. Además, ha sufrido constantemente las consecuencias del conflicto armado y la corrupción. Asimismo, las sumas que recibe el municipio por concepto de las regalías por la explotación de recursos naturales no se han traducido en bienestar social para su población y en cambio han sido una renta susceptible de captura por parte de actores legales e ilegales. (Rubiano, 2011, p. 35)

Igualmente, los indicadores sociales que miden la calidad de vida de los habitantes del departamento no son nada alentadores. Para el año 2011, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INB) se situaba para las cabeceras municipales en el 26,54%, mientras que para las zonas rurales en el 46,22%. Los municipios que presentan un mayor NBI rural son Orito con el 58,43%, siendo el principal municipio petrolero, y Santiago con un 50,76% (Ministerio de Justicia; UNODC; SIMCI, 2016, p. 28). La brecha entre el campo y las zonas urbanas es evidente, considerando que para todo el departamento el NBI rural fue 1,74 veces el señalado para las cabeceras municipales. La pobreza multidimensional se sitúa en el 25,1 frente al 19,6 del promedio nacional³²⁸ (DANE, 2019).

En este contexto, se deben comprender las agendas de las organizaciones sociales que demandan una mejora de las condiciones mínimas vitales, entre las que se encuentran el fortalecimiento de los servicios públicos, salud, educación, vivienda, empleo, infraestructura vial y de comunicaciones, entre otras cuestiones³²⁹. Estos elementos son transversales a las demandas por el reconocimiento o la identidad, como es el caso del movimiento cocalero, indígena o afrocolombiano, y, por lo tanto, plantean horizontes de justicia social y económica.

³²⁸ Esta situación es más acuciante en la población indígena. Aunque no tenemos datos desagregados para el Putumayo, según el informe del PNUD *Pueblos indígenas. Diálogo entre culturas* (2011) los indicadores de pobreza, extrema pobreza y desigualdad de la población indígena superan el promedio nacional, situando a esta población en condiciones de suma vulnerabilidad. “El 63% de la población indígena está sumergida en una pobreza estructural, en tanto esta afecta a cerca del 54% de los colombianos, y el 47,6% de indígenas se sitúa por debajo de la línea de miseria, indicadores altos con respecto al resto de los habitantes del país” (p. 52). Por otra parte, en los municipios que tienen más del 30% de población indígena el NBI asciende al 57%, treinta puntos porcentuales por encima del promedio nacional (Departamento de Planeación Nacional, 2011).

³²⁹ En cuanto al mercado de trabajo, se caracteriza por la alta precariedad e informalidad, como sucede en la mayoría de las zonas periféricas del país. Los puestos que generan las economías de enclave para la población autóctona son generalmente de baja cualificación y remuneración. Por otra parte, como hemos señalado en otros apartados de la investigación, las actividades extractivas no repercuten de manera importante en las tasas de ocupación debido a su carácter rentístico.

7.2. Caracterización de las organizaciones sociales populares

En este apartado se recogen las caracterizaciones de las organizaciones sociales populares con las que se realizó el trabajo del campo. En las narraciones se pueden encontrar algunos elementos comunes: radio de acción de la organización, procesos de articulación, líneas de trabajo, horizonte de sentido y principales problemáticas. En algunos casos, se incluyen otras referencias externas a las voces de los líderes y lideresas, con el ánimo de complementar la visión dada por cada una de las personas.

✓ *Asociación de Desplazados de Puerto Caicedo. ASODESCA.*

Nosotros trabajamos y velamos por los intereses y la situación de la población desplazada de Puerto Caicedo. Nuestro interés es lograr que las familias, en primera instancia, se recuperen económicamente, físicamente, se reintegren y, además logren aceptar su situación de desplazamiento, que tengan también una mejor alternativa o solución al conflicto que vive Colombia. Si hablamos de la paz, el gobierno debe apuntar al restablecimiento económico teniendo en cuenta todos los criterios, porque nosotros hemos trabajado con la Mesa [Mesa Departamental de Desplazados] y hemos luchado tanto, en relación a temas como la generación de ingresos para la población desplazada. Por eso me parece injusto, que en los espacios institucionales se diga que los desplazados no sabemos administrar la plata.

Nosotros como asociación hacemos parte de la Mesa Departamental de Población Desplazada. La Mesa está compuesta por 37 organizaciones de población desplazada de todo el departamento del Putumayo. La Mesa lleva aproximadamente seis años, nosotros hemos crecido. Estamos trabajando para que el gobierno nos ayude al restablecimiento socio-económico de la población desplazada, pero teniendo en cuenta las migajas que nos dan, no vamos a llegar a ningún lado.

El proceso organizativo empieza tras un seguimiento a las políticas del Estado, porque hasta ahora siempre han sido capacitaciones, eventos tras eventos, bueno. No se tenía en cuenta la participación efectiva de las organizaciones. (E8, Líder ASODESCA, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

✓ *Comité de Víctimas de El Tigre Progreso por la Paz.*

La zona de El Tigre es demasiado complicada y peligrosa. Nosotros tenemos allá el Comité de víctimas. Lo conformamos 40 personas, quienes a raíz de la guerra han sufrido muchísimo; por esa razón nosotros decidimos organizarnos. Esto empezó en el año 2007.

Quedaron muchos niños huérfanos, madres desamparadas. Después de tanto tiempo decidimos organizarnos; nosotros mismos formamos el Comité. ¿Qué hicimos? Reunir todo el perímetro, sin discriminar las negritudes, los indígenas, las mujeres o los hombres, porque el dolor es de todos sin importar de donde venga la comunidad. Dijimos: “en el

Tigre hay católicos y evangélicos; así que invitamos al Padre y al Pastor y ellos hacen parte del Comité. Participan afros, juventudes, mujeres y hombres. A raíz de la conformación de este espacio, nos organizamos las mujeres y participamos de la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, (IMP). Dentro del comité nos encontramos, cada persona del comité tiene su historia triste.

Nosotros fortalecemos a la demás gente, nos visita la Comisión Nacional de Reconciliación. Nos ven como una organización piloto. Tuvimos la oportunidad de que se presentara Santos. En el Tigre nunca se había presentado un personaje así, eso fue el 17 de septiembre y él lo dijo públicamente: “si las víctimas se organizaran como está organizado el Tigre, que bueno sería. El Tigre puede dar ejemplo a nivel nacional e internacional”. Nosotros estamos organizando y llamando a todas las veredas y queremos ser historia, ser memoria histórica y no quedarnos con el dolor sino, a pesar de tantas cosas salir a relucir. Es un paso triste y nos ha costado mucho.

Estaba yo escuchando la misa un domingo y se me vino a la mente, el Padre cuenta de las masacres y de los niños que quedaron tan pequeños que ahora ya son jóvenes, esas madres que perdieron sus esposos; entonces yo le dije al Padre que tenía la idea de que nos organizáramos como víctimas. Él me dijo: “no, María Rubí, ¿usted no cree que es difícil?”. Yo le dije, padre no, el Tigre debe tener memoria de sus masacres, de la violencia, pero mire que no estamos organizados, él me dijo que era muy buena la idea y comenzamos a invitar a la gente a asambleas grandes donde decíamos que íbamos a crear un comité de víctimas, a la gente le dio miedo, se asustó de pensar que llegaran los paramilitares a matarlos o la guerrilla. Eso da miedo, zozobra. Ya les dije: no, organicémonos, que esto salga a la luz pública. Si uno va a las casas, es triste, la gente dice: a mí me mataron mi marido, mi esposa o mi hijo, pero allá en ese dolor dijeron “hagámoslo” y nos reunimos, eso fue duro, duramos 15 días para organizarnos.

Hicimos una marcha de la paz en el río, el 9 de enero que cumplimos 10 años de la masacre del Tigre, con banderas blancas. Nos decía una señora que, para qué hacíamos banderas si vivimos con ese problema que no se nos puede borrar. Nos organizamos y estamos muy bien organizados, nos han enviado muchas felicitaciones. Por ejemplo, Minga nos envió un correo felicitándonos y que muy pronto estaría con nosotras. Otras organizaciones han ido a visitarnos, la ONU y la OEA. Todos estos eventos los hacemos en la parroquia porque no tenemos en dónde hacerlos.

La Iglesia nos ha apoyado porque el padre está dentro del comité. Ahora nos están haciendo la Casa de la Cultura, y nos van a llevar la estructura de la piladora de arroz que pedimos como comité. Económicamente es muy difícil, ni para un tinto o una gaseosa, pero la gente es tan resistente que se queda, así que el comité lo hemos llamado, Comité de Víctimas del Tigre Progreso por la Paz. Por parte de las alcaldías, cero ayudas, por parte de la gobernación, igual.

Antes de que el gobernador saliera elegido nos mandó un mensaje que decía que nos necesitaba en ocho días porque éramos un ejemplo, una zona que ha sido tan golpeada por la guerra e incluso damos ejemplo a la capital, según él, incluso a Mocoa. Nos invitó a una socialización, ya nos estábamos organizando cuando suspendieron al gobernador por tres meses; entonces fuimos con el encargado y él dijo que sí, pero que esperáramos un poco ya que él estaba recién llegado. (E9, Lideresa Comité de Víctimas del Tigre Progreso por la Paz, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

✓ *Fundación Ecotono Putumayo.*

Nosotros como Fundación participamos en la Plataforma de Organizaciones Sociales³³⁰, que nació en Orito a finales del 2004. Resultó como una iniciativa de participación y folclor social, particularmente para orientarnos en la incidencia que estaban teniendo en términos de cultura ciudadana unos carnavales que se hacen acá. Esa fue la primera motivación; posteriormente, se convirtió en un elemento para participar en la formulación de política pública. Nos orientamos principalmente al trabajo con los planes de ordenamiento territorial, luego empezamos a hacerles monitoreo y seguimiento a los megaproyectos viales y en el marco de ese seguimiento se nos ocurrió, hace unos dos años, el tema de la autonomía alimentaria, como un enfoque de relación diferente de productores y consumidores y Estado, en el marco de las amenazas que se ciernen con esos megaproyectos viales.

La intención es que la Plataforma de organizaciones sociales se convierta, además de una iniciativa de participación ciudadana con control social, en propuestas para la conservación ambiental. Estamos estudiando un poco las oportunidades y las amenazas que representan el tema de pagos por servicios ambientales, la implementación del sistema red, y ese trabajo lo está orientando principalmente la organización ECOTONO. Esta organización nace dos años después, en el año 2007, y nace con el objetivo de convertirse en referente para el componente ambiental. Nuestro objetivo es promover la preservación de los bienes y servicios ambientales de la Amazonía y siendo ese nuestro objeto social pues el campo de acción por definición sería ese.

Hoy la Plataforma de organizaciones está integrada por líderes y organizaciones entre las que se encuentra: Productos Amazonía, la Organización Indígena del Putumayo, la Organización de Comunidades Afro, la Fundación de la Organización Acción Putumayo, la Fundación Ganagual, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC–. Están representados los municipios de Leguísimo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, Puerto Guzmán, Pie de Monte, Mocoa, Villa Garzón y el Valle de Sibundoy. Allí nos hemos encontrado con temas afines y eso ha permitido que sean parte de la plataforma y que nosotros también seamos parte de los procesos que llevan.

¿Cuál es la intencionalidad? La intencionalidad es que la sociedad civil se posicione, aparezca de manera contundente, con capacidad de interlocución, con capacidad propositiva, de tal manera, que se oriente el tema de la política pública. En este caso la política pública referida a la autonomía alimentaria. Si bien no existe la política pública en ese sentido, este eje aparece en el marco de los proyectos de infraestructura, educación, ambiental, salud, son sectores que de alguna manera abarcamos en la autonomía alimentaria y ahí vamos. (E10, Fundación Ecotono Putumayo, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

✓ *Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo.*

✓

La Mesa surge en el año 2006 luego de diez años de arrasamiento del movimiento social, período en el que tuvimos que soportar masacres, asesinatos, violencias de género, torturas, desplazamientos masivos y toda clase de violaciones de los derechos humanos. Sistemáticamente se desmembraron las posibilidades de encuentro, articulación y debate

³³⁰ El entrevistado se refiere a la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo.

entre las organizaciones sociales en medio de la grave confrontación armada, llevándonos a una crisis humanitaria cada vez más difícil y al mismo tiempo inaceptable.

El Putumayo no ha escapado a la situación vivida por el resto del país y a él han llegado todos los actores legales e ilegales con sus acciones prácticas y políticas. Es claro que como pobladores y movimiento social no hemos sido ajenos a estas realidades y, al igual que otras organizaciones, hemos tenido que vivir y defendernos de las tensiones y presiones que han intentado desvirtuar nuestros propósitos, agredir a nuestras comunidades y estigmatizarlas, así sea porque protestamos en las carreteras o defendemos nuestra autonomía.

La Mesa nace entonces en medio de estas confrontaciones sociales y políticas, y a quienes nos ven como un movimiento distante a estas realidades o doblegados por intereses que no son los que hemos defendido en nuestras demandas, declaraciones y actas, les decimos que parecen no conocer ni al país ni al Putumayo. Tras la larga historia de agresiones y debilitamiento de las organizaciones sociales que muchas veces las hacen vulnerables frente a todos los actores con algún poder.

La Mesa reconoce que en nuestro territorio existen actores armados ilegales tanto guerrillas como paramilitares, pero su existencia no es responsabilidad de las organizaciones sociales. Reafirmamos nuestra autonomía en nuestras decisiones y actuaciones por la defensa de la vida y del territorio, rechazando de manera contundente todo acto violatorio de los derechos sin importar su procedencia.

La confrontación social y armada en el departamento entre quienes quieren apropiarse de las riquezas y quienes somos permanentemente excluidos y violentados por buscar alternativas dignas de vida, hace que la historia de atropellos, vejaciones y horrores haya obligado a las comunidades a hacerles frente y a conformar la Mesa de Organizaciones Sociales, rompiendo el miedo a la persecución.

Entonces, nos dimos a la tarea de convocar a las organizaciones aún en los municipios donde era más difícil por las consecuencias de la violencia estatal a través de los paramilitares como es el caso de El Tigre, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Guzmán y San Miguel. Por una parte, la gente estaba ya muy cansada de los abusos y, por otra, se sintió animada a contar lo que estaba pasando al saber que nos reuniríamos nuevamente y renació la esperanza de detener los atropellos si lográbamos articularnos a escala departamental.

En el primer semestre de 2006, las organizaciones locales no podíamos soportar más el difícil contexto de violaciones de derechos humanos y, con la reactivación de las fumigaciones con glifosato sobre nuestros territorios, debimos hacer frente al desplazamiento masivo de 400 personas en La Hormiga y reclamar atención inmediata del Estado. Una situación similar se presentó en Orito, cuyos habitantes pasaban una grave crisis alimentaria luego de la fumigación de sus cultivos.

Ante estos hechos, las organizaciones lanzamos un llamado general para encontrarnos el 15 de mayo, que tuvo eco en otros municipios como Villa Garzón, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Mocoa y el Valle del Sibundoy.

Posteriormente, el 10 de junio de 2006, en el municipio de Puerto Asís, cien delegados de las organizaciones sociales de los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Villagarzón, San Francisco, Sibundoy y Santiago nos reunimos con el Gobierno Nacional, departamental y la alcaldía de Puerto Asís, con el objetivo de concertar nuestras propuestas

para la sustitución real de los cultivos de uso ilícito y el logro del bienestar político, social, económico, ambiental y cultural de las comunidades rurales, en el marco del respeto a los derechos humanos.

Con esta iniciativa se buscaba que las comunidades tuvieran una inserción real en la economía, contribuir al desarrollo y la paz regional. Con el objetivo de socializar el documento borrador de propuestas, se programaron reuniones en el mes de junio del 2006 en cada uno de los municipios mencionados. Adicionalmente, se acordó realizar una reunión preparatoria el 20 de junio en la Casa Campesina de Puerto Asís con dos delegados por cada municipio con el fin de redactar el documento final. Y, en esta reunión, se aprobó proseguir con la Mesa como centro de concertación, para presentar el documento final e iniciar un pacto regional en el mes julio en la ciudad de Bogotá sobre desarrollo alternativo y derechos humanos. (Mesa Regional de Organizaciones sociales del Putumayo, 2015, pp. 11-12)

En buena parte, lo que se ha hecho es retomar las propuestas que hicieron y se concretaron en el año 96 en las marchas campesinas. Las marchas campesinas fueron uno de los puntos de negociación para levantar el paro de Orito que duró un mes. Uno de los puntos era la necesidad de formular y diferenciar un plan integral de desarrollo campesino en el departamento. Eso se quedó así y a mi manera de ver, se retoman eso y lo activan. Dentro del plan integral hay un proyecto que se llama “Fincas agroproductivas”. (E11, Mesa Regional de Organizaciones Sociales, comunicación personal, 7-8 de noviembre de mes de 2010)

Al inicio eran más las organizaciones campesinas. Estaba Funda Progreso de Orito, de Puerto Asís estaba ASOMAYO, Fundación ASCATE, entre otras. Creada la Mesa se hizo la coordinación y comenzamos a hacer gestiones y a formular una propuesta que nos abarcara a todos. Los problemas grandes de hambre, de miseria, cultivos de coca, fumigaciones indiscriminadas, viendo el marco propusimos la sustitución de cultivos de coca, hicimos la propuesta donde se le dice al gobierno nacional y a la comunidad internacional que la erradicación de la coca debía ser concertada con la comunidad, que a medida que se fueran resolviendo las dificultades en cada región. La gente sembraba coca porque no tenía otra alternativa para subsistir, los campesinos no eran narcotraficantes, tampoco eran guerrilleros, la coca no era de los guerrilleros sino de la gente. Ese fue el planteamiento, se le pusieron condiciones.

Socializando esa propuesta con el departamento nos encontramos con que en los planes de desarrollo municipales y departamentales no nos encontrábamos identificados y los planes contruidos por los alcaldes y gobernadores no apuntaban a resolver la problemática que se vive en el departamento, a nosotros no nos habían llamado a participar de esos planes.

Le decíamos a la gente de la necesidad de construir el Plan Integral de Desarrollo Campesino y comenzando a recoger la información para construir el Plan. De esa manera, en 2007, nosotros hicimos el plan, luego comenzamos a presentarlo a los alcaldes, después de eso lo volvimos a socializar en los municipios y comenzamos a presentarlo a los alcaldes a los consejos municipales, a la asamblea departamental, a la gobernación, exigiendo que ese plan quedara dentro del plan de desarrollo que estaban elaborando. Eso fue en el 2007, desafortunadamente fue muy poco lo que se logró porque el alcalde ya tenía su plan de desarrollo hecho allá y ellos lo habían hecho con muchos técnicos y habían pagado mucha plata, al igual que en la gobernación. Pero si tienen mucha plata para hacer el plan de

desarrollo, entonces nosotros no podíamos salir con un plan a aparte, quedó entonces muy poquito. Ahí comenzó la persecución a los líderes, a raíz de que con nuestro plan nos estábamos volviendo fuertes y bastante críticos de la administración, críticos de los partidos tradicionales.

Esta es la propuesta de resistencia más grande que hay en el Putumayo, más propuestas no hay, las únicas son el plan de desarrollo campesino, los planes de vida de los indígenas y los afro, lo demás es carreta. Hemos presentado el plan a Acción Social, lo presentamos a USAID. Este gobernador que está suspendido dijo que el plan estaba muy bien, que el trabajo de la mesa era excelente.

En el transcurso del 2008 había un celo de las organizaciones indígenas, de compartir sus conocimientos con los campesinos. Entonces, comenzamos a invitar a los indígenas a nuestras reuniones, y ya en este momento hay procesos de articulación y también con algunas organizaciones afro. Con los afros estamos más atrasados porque con los indígenas ya nos hemos encontrado en diferentes escenarios, por eso queremos diseñar algunos criterios, respetando la autonomía, se trabaja en el marco del respeto. Desde el año pasado (2009) y este año hemos estado trabajando bastante.

La paz se construye a medida que las organizaciones sociales, indígenas, campesinas y afro estemos verdaderamente organizados, que verdaderamente aprendamos que la única alternativa para alcanzar la paz es la discusión puesta en marcha. (E19, Líder Mesa Regional de Organizaciones Sociales, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

✓ *Mesa de Campesinos Municipio de San Miguel.*

✓

Nosotros comenzamos hace tres años, el que estaba liderando el proceso era Francisco Guipaz, quien comenzó el proceso debido al conflicto que se vivía por las fumigaciones y el conflicto armado y de ver que estábamos a la deriva. Él era un líder que estaba vinculado con las organizaciones de Orito. Entonces, llevó la propuesta de organizarnos en San Miguel. De cada sector sacamos una persona para formar una organización y salir adelante con lo que era el Plan Integral de Desarrollo Campesino en San Miguel.

Este plan fue una iniciativa que se construyó en relación con las necesidades de la comunidad, mirando que nosotros no teníamos qué hacer. Nos apoyó el alcalde, aunque primero se hizo una manifestación. Después de la movilización, se comprometió y nos apoyó, junto con el economista Mario Moreno de Bogotá. Él fue el que hizo el plan, nosotros pedimos que nos ayudara y lo hicimos por sectores, recogimos toda la información y se hizo el trabajo.

Nosotros últimamente estamos cansados, los alcaldes no le han hecho caso a esto, los gobernadores tampoco y el compañero se cansó y se retiró. Entonces me dejó a mi hace un año. Me dijo que si quería o que me retirara, pero nosotros llevamos un proceso y no podemos dejar que esto se acabe por que le hemos dedicado tiempo, dos años de trabajo, con las comunidades, aguantando a veces hambre, ¿cómo íbamos a dejar tirado el trabajo?

Antes nos reuníamos, pero últimamente no hemos estado todos los participantes porque no tenemos recursos, no manejamos dinero y la situación está difícil porque no hay empleo, no hay oportunidades. Desde el inicio hemos estado ligados a la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, pendientes de que no se quede muerta, últimamente hemos

salido y nos informamos. El Plan Integral de Desarrollo campesino ya lo tenemos formulado, se le hicieron unos ajustes y hemos seguido. Hace tres años llevamos con eso y la alcaldía con la administración de ahora no ha dado un peso. Nosotros estamos cansados de la politiquería y de la corrupción, no invierten en la gente y se llevan la plata, y teniendo tantos recursos por las regalías, no se entiende como la gente a veces pasa hambre. (E12, Lideresa Coordinadora Mesa de Campesinos Municipio de San Miguel, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

El proceso de la Mesa local de San Miguel comenzó en el año 2006 a partir del liderazgo de varios presidentes de las Juntas de Acción comunal quienes, motivados por las fumigaciones y la intensificación del conflicto armado en la zona, decidimos empezar un proceso de organización propio, con el apoyo de los líderes de ACEFAGBOP, de Orito.

La primera acción que emprendimos fue una movilización a partir de la cual nombramos un delegado por cada sector social que participó, debido a las necesidades sociales que estábamos enfrentando. Entonces, decidimos empezar a formular el Plan integral de desarrollo campesino. En esta tarea contamos con el apoyo del alcalde y de un economista que vino de Bogotá.

El proceso lo hicimos recorriendo cada una de las veredas, casa por casa, mediante unos recorridos de cien personas en los que le preguntábamos a la gente cuáles eran sus necesidades, en qué situación vivían y cuáles eran las formas de solucionar esos problemas. Nosotros identificamos ocho núcleos principales desde los que formulamos nuestro plan y con el Alcalde de la época acordamos que se pagaría un capacitador por cada uno así como un economista que pudiera apoyar el proceso. Este proceso se hizo con financiación de quienes estábamos haciendo el diagnóstico en la Alcaldía y el apoyo de la Mesa.

Estos acuerdos se lograron luego de una movilización en la que bloqueamos la carretera durante 15 días en marzo de 2007, con el apoyo de las Juntas de Acción Comunal y los indígenas, quienes estábamos cansados de las fumigaciones y la erradicación forzada. (Mesa Regional de Organizaciones sociales del Putumayo, 2015, págs. 11-12)

- ✓ *Mujeres Productoras de Pimienta y Vainilla Puerto Colón.*
- ✓

La organización trabaja en el Municipio de Colón, que queda en el Valle del Sibundoy. Trabajamos en proyectos productivos y en alternativas de alimentación como las huertas caseras.

Nosotras comenzamos con Redepaz³³¹, hicimos la asociación con ASOCOPAZ³³² para empezar a trabajar el tema de la paz en nuestro territorio. Redepaz ha venido como tres o cuatro veces al municipio, aunque en el último tiempo no ha venido a seguir el

³³¹ Redepaz es la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra que articula las experiencias y prácticas que múltiples agentes sociales desarrollan en las dimensiones local, interlocal, regional y nacional. En este marco, es un escenario abierto para el encuentro y cooperación entre personas, grupos, sectores y organizaciones que construyen paz; proceso dinámico para el fortalecimiento y posicionamiento coordinado de expresiones civiles de reconciliación; y propuesta plural de reflexión y acción para el mutuo reconocimiento como sujetos de derechos y la transformación democrática de nuestra sociedad. Redepaz es fruto de la decisión de articulación de más de 400 delegados y delegadas participantes del Encuentro Nacional de Iniciativas contra la Guerra y por la Paz, realizado en noviembre de 1993 (Redepaz, 2020).

³³² ASOCOPAZ es una asociación de campesinos que trabajan en el corregimiento de La Paz del departamento del Caquetá.

trabajo. Hace un mes nos invitaron a participar en un espacio que se llama Alianza de Mujeres por la Paz.

El tema de paz lo estamos abordando desde lo cotidiano, tratando de que la gente sea tolerante en los espacios sociales, pero también en la familia. Ahora hay mucha violencia, debido a tantas necesidades que hay en el municipio de Colón ya que la gente perdió su plata. Desde hace cinco años que comenzó el problema de las Pirámides. La gente que tenía, por ejemplo, cinco millones recibían 500 pesos cada mes, o en seis meses les daban diez, así hubo gente que compró casas, fincas, carro y tenía a sus hijos estudiando y cuando se acabó... Mi hijo que estudia en Pasto, dice que muchos estudiantes del Valle del Guamuez, de Mocoa, que estudiaban en la universidad se han retirado porque no tienen recursos; la gente pagaba de acuerdo a esos ingresos, sabía que cierto día iban a recibir y les cumplían. (E13, lideresa Mujeres Productoras de Pimienta y Vainilla Puerto Colón, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

✓ *Mesa Departamental de Población Desplazada.*

✓

Yo me sentía muy arraigado al territorio porque, cuando llegué del Quindío hace treinta años me encariñé con el Putumayo porque era selva verde. Yo llegué de empleado, después me hice con un pedacito de tierra baldía, con abundante agua que se puede tomar o por donde se puede navegar tranquilamente en las canoas, el pescado sobraba, la comida de monte, así me arraigué mucho al territorio. Cuando se comienza a dar el conflicto y los asesinatos donde se pierden los amigos, a mí me dispararon dos veces, estuve a punto de que me mataran, me salvé dos veces. Una vez me llevaban los paramilitares para matarme y un amigo me salvó. Me da tristeza ver que cuando llegué esta tierra no tenía dolientes y de un momento a otro cuando creí tener algo propio, que se siente arraigado, con la tranquilidad de que puede vivir el resto de la vida, aparecen unas personas armadas, a quienes nadie conoce y que lo saquen de la tierra es muy duro.

El desplazamiento en este momento lo consideraría el mayor problema que tiene la gente del Putumayo, pero ni siquiera por las propias autoridades regionales ha sido visibilizado, ni por el gobierno nacional. Cuando se habla de 80 mil personas desplazadas en un departamento que según los datos del DANE no alcanza a las 400 mil personas, eso sería algo más del 30% de la población la que se ha desplazado. Por estos conflictos es que nos hemos organizado en una mesa de organizaciones desplazadas.

Nosotros necesitamos planes de retorno y de reubicación, pero que realmente sean seguros para la gente. Desde el gobierno departamental no ha habido apoyo, ni con los proyectos de vivienda, que son más de 1000 subsidios que no se han podido aplicar. No hay apoyo con subsidios suplementarios ni de parte del departamento, ni de los municipios. (E14, Líder Mesa Departamental de Población Desplazada, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

✓ *Red de Soberanía y Seguridad Alimentaria (SS.AA).*

✓

Primero, soy nacido aquí en Mocoa, en la parte rural. Nuestra vida ha sido natural, comiendo cosas del bosque. Desde los doce años de edad he sido agricultor. Siempre he sentido un gran amor por la tierra, ya después encontré una compañera con la misma visión. En la década de los 70 pensamos en comenzar a generar ingresos con productos propios de

esta región, como el chontaduro, que la gente sólo lo utilizaba para consumirlo en la casa y hacer chicha y nada más. A nosotros se nos ocurrió vender. Hacíamos chicha y la vendíamos, así nos dimos cuenta que la fruta tratada puede generar ingresos para la gente. Después comenzamos a hacer ensayos, a investigar con diferentes productos, y salió como al año, un pastel de chontaduro con mi compañera que es la que prepara.

Hace un tiempo tuve a cargo un programa de campesinos indígenas. Estuve asesorando, supervisando ese proyecto durante unos cuatro años. Ese proyecto buscaba que la gente volviera a sembrar comida, eso fue en pleno auge de la coca. La gente dejó de sembrar comida por sembrar coca. De esta manera, nace la Red de SS.AA. Nos hemos juntado la gente que se interesa por recuperar lo nuestro, los productos tradicionales, para que la gente tenga otra salida, no solo sembrar coca.

Aquí nadie producía. El trabajo era decirle a la gente que sembraba coca que además sembrara comida porque la coca iba a tener conflictos serios y en un momento dado podían quedar sin coca y no iban a tener qué comer. En eso trabajamos y logramos que alguna gente considerara el tema. Yo salí del programa y conformé una fundación que se llamaba “Fundación Ecológica”. En la fundación seguimos trabajando y seguimos el proceso de nuestra investigación de manejo de productos, estuvimos desde el 95 hasta el 2001 y en ese tiempo mataron a Alcides, al final renuncié. En Puerto Caicedo propusimos generar industria, logramos preparar a la gente e iniciar una organización con la cual estamos haciendo dos proyectos.

En el 2000 comienzan las fumigaciones de Puerto Caicedo. Con unos amigos le hicimos al alcalde una propuesta para parar la fumigación. La gente se comprometía a no sembrar más coca, erradicarla y por eso le daban un apoyo para sembrar comida. Fuimos con el alcalde de Caicedo a las veredas, logramos sacar a la gente a asamblea para proponer que no se fumigara allí, se hicieron los pactos sociales y comenzó el trabajo, pero no funcionó.

El proceso es largo y la gente se tiene que comprometer, la problemática alimentaria no la vamos a solucionar con un taller, sino que significa muchas acciones y articular procesos, articular gente. (E15, Líder Red de SS.AA, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

✓ *Organización de Productores-Cooperativa de Mineros.*

✓

Nosotros trabajamos sobre todo en Villa Garzón. En esta zona se da la explotación de materiales para la construcción, le vendemos este material a las empresas que realizan proyectos en la zona.

Creemos que para solucionar las problemáticas de nuestras comunidades y de nuestras organizaciones tenemos que llegar de una u otra forma a las diferentes instituciones oficiales, porque es desde allí donde se ejecutan las políticas, ¿qué hacemos nosotros con reclamar y sentar posiciones si no hay una incidencia? Las organizaciones populares están en una desventaja frente a los partidos políticos o a las instituciones del gobierno. Por eso tenemos que ir capacitando a los líderes para que hagan una incidencia real. Nuestras propuestas no las suelen financiar los gobiernos, nos reciben, y ahí se quedó todo.

Se debe resistir y construir tejido social, y me pregunto si los líderes van a aguantar tanto tiempo. Aquí hay muchos líderes que ya no están, otros cambiaron de posición. (E16, Líder Cooperativa de Mineros, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

✓ *Asojuntas Villagarzón.*

✓

Nosotros hacemos parte de la Federación Comunal del Putumayo. En la Federación participan un total de 13 municipios, lo que significa más o menos 200 Juntas de Acción Comunal. Nosotros contribuíamos a la participación de la comunidad, se trata de fortalecer la gestión comunal. Esto es muy importante teniendo en cuenta todas las dificultades de la gente del Putumayo, la falta de recursos, la corrupción, la politiquería, la falta de oportunidades. Acá el conflicto ha sido muy duro, petroleras, paramilitares, guerrilla, ejército, todos han estado en Villagarzón.

Nosotros promovemos que las personas valoren el campo. Acá el mercado de los productos campesinos cambia mucho, la gente ha dejado de producir por la coca, los alimentos vienen de fuera y son muy costosos. Nosotros queremos que la gente vuelva a los productos tradicionales como el chontaduro. Con un compañero estamos entusiasmados en hacer un mercado campesino con la gente de Puerto Umbría y la Castellana, a ver si el alcalde cambia un poco la forma de pensar porque todo es para el pueblo y para la gente del campo poco. La gente ya no quiere ni oír de él. (E17, Asojuntas Villagarzón, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

✓ *Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).*

✓

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), es una organización autónoma, de campesinos asalariados, pobres y medios, que lucha por una Reforma Agraria Integral y democrática; por la reivindicación del trabajador agrícola, por la elevación de su nivel de vida económico, social, cultural, y el desarrollo pleno de sus capacidades y que entiende que, para superar el atraso económico del país y para lograr el bienestar general del pueblo colombiano, es necesario romper las actuales estructuras de dominación internas y externas que han beneficiado a una reducida clase explotadora, mediante la lucha organizada y permanente del campesinado colombiano, con la clase obrera y demás sectores populares comprometidos con el cambio estructural, y la liberación total de nuestra patria, de toda forma de dominación y coloniaje.

El objetivo general de la ANUC es “organizar, capacitar y representar a los campesinos de Colombia y actuar como su interlocutor válido, como órgano asesor y consultor ante el gobierno y la sociedad para gestionar, defender y reivindicar sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales asegurando el total respeto y cumplimiento de las garantías que le otorgan la constitución y la ley”. (ANUC, 2020)

En el caso de la ANUC Putumayo, el principal aporte que le ha hecho Planeta Paz ha sido la formación política. Eso nos ha permitido tener clara la realidad del departamento, el Putumayo dentro de las problemáticas ha tenido el cultivo de coca, consideramos que ha sido el centro de implementación y reacción del gobierno por ser uno de los principales productores de coca (en el 2000) casi 60 mil hectáreas, a esto se ha sumado otra serie de problemas como el de la presencia de la subversión, porque el Putumayo tiene dos de los frentes más fuertes de la subversión, las FARC, está el frente 48 y el frente 72, ellos son

los que han hecho presencia histórica en el departamento, se sumó a los actores armados el paramilitarismo desde 1997 donde se fortaleció hasta el 2005 cuando se desmovilizaron. (E18, Líder ANUC, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

[Plan Integral de Desarrollo Campesino] Este proceso viene desde el 2006, ya lleva siete años. Tiempo durante el cual le hemos insistido a los alcaldes de antes y de ahora sobre la relevancia del mismo. Más que integrarse al Plan de Desarrollo del Departamento o de un Municipio, esta propuesta es independiente y tiene su propia dinámica. Lo que se busca es que se adopte como política departamental, que tenga sus recursos propios y funcione de manera autónoma en beneficio de todos y todas en el Putumayo. Precisamente el 17 será ese gran encuentro en Mocoa donde se espera concretar varios asuntos, entre ellos el de la financiación y de qué manera las organizaciones, los municipios y la Gobernación asumirán su responsabilidad frente a eso.

[Posición frente al proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP] Ya acordamos cómo ANUC Putumayo rodear el proceso de paz. Consideremos que es importante participar en estos espacios donde se juega el futuro del país, aclarando que nosotros no nos sentimos... [representados] ni por el Gobierno ni por la guerrilla. Somos una organización autónoma, independiente. Hemos criticado el tema de las voladuras del oleoducto por parte de las FARC, pero también hemos cuestionado con vehemencia los bombardeos y la fumigación de los cultivos ilícitos por parte del Gobierno nacional. Esto ha generado el desplazamiento de las poblaciones, por eso vemos trascendental fortalecer y rodear el proceso de paz. (ANUC reveló su horizonte para Putumayo, 2013)

7.3. Narrativas subalternas del conflicto social y armado

En la segunda parte de esta tesis, abordamos unos lineamientos generales sobre el comportamiento del conflicto armado y las diferentes respuestas de los gobiernos asociadas a este tipo de conflictividad, en correspondencia con la caracterización que las élites políticas construyeron sobre el conflicto en los diferentes mandatos presidenciales. La revisión realizada apunta a que las dinámicas del conflicto han tenido impactos diferenciales según la importancia estratégica que tienen los territorios en términos políticos, económicos y/o militares. De esta manera, el conflicto armado no se ha desarrollado de forma homogénea en el espacio del Estado-nación (González, 2014).

En el sur del país el conflicto se ha acentuado desde finales de los años noventa, como se puede observar en las Figuras 1, 2 y 5, que representan la intensidad del enfrentamiento armado en el territorio nacional. De manera particular, se presenta un recrudecimiento de las dinámicas de la guerra en los departamentos del Arauca, Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander y Putumayo, en los Llanos Orientales y en la subregión de Montes de María. En el sur del país, los

focos de mayor tensión se han localizado en este periodo en las zonas de frontera con Ecuador y en la costa del pacífico nariñense, caucano y vallecaucano³³³.

En las entrevistas y en los talleres con líderes y lideresas de organizaciones sociales populares se evidencia que las transformaciones del conflicto armado, tanto en el Putumayo como en los Montes de María, han sido leídas e interpretadas a partir de las diferentes afectaciones e impactos en la vida cotidiana de las comunidades en sus territorios. Por consiguiente, en las formas de reproducción social, en términos de lugar, espacio de identidad, significado sociocultural, así como de la organización material y territorial para la pervivencia del tejido social comunitario. Las dinámicas de la guerra y los cambios en las formas de acumulación de capital ha sido manifiestos en una reconfiguración gradual de los territorios, relacionada con la disputa por el control estratégico del espacio entre los diferentes actores armados legales e ilegales y actores políticos y económicos³³⁴.

En el caso del Putumayo uno de los líderes entrevistados asocia el conflicto con la disputa por el control de la naturaleza y por la posición geoestratégica del departamento.

³³³ La agudización del conflicto armado en el litoral pacífico se produce a partir de la década de los ochenta, y se atribuye a un conjunto de factores entre los que se encuentran: la puesta en marcha de la apertura económica y de liberalización de los mercados que se consolida en la década de los noventa; el auge del mercado de la droga que coloca al país como el principal productor y exportador de narcóticos; el incremento de los proyectos extractivos y agroindustriales; el aumento de la presión militar del Estado sobre los grupos insurgentes, y la consolidación del fenómeno para militar (Defensoría del Pueblo, 2016). No obstante, la agudización del conflicto se manifiesta de manera diferenciada en los diferentes territorios de la región. En el caso del Pacífico nariñense, la mayor intensidad de la guerra se da a partir de la década de los años noventa, a diferencia de otras regiones en donde la violencia ligada a este tipo de conflictividad se recrudece en las décadas de los setenta u ochenta. Las zonas estratégicas de acción de la guerrilla de las FARC en estas dos décadas se concentraron en otras regiones del país, de manera particular, en el Magdalena Medio y en el Oriente Antioqueño (Rodríguez, 2015). Por otra parte, el recrudecimiento del conflicto en el departamento del Putumayo se relaciona con su ubicación geoestratégica al ser una zona de frontera con Ecuador. La presencia de actores armados en esta zona del país data de los años sesenta, pero desde finales de los noventa se presenta un aumento en la conflictividad armada debido al proceso de repliegue de las FARC (bloque Sur de las FARC) y al enfrentamiento con los grupos paramilitares (Bloque Sur de los Andaqués del Bloque Central Bolívar) por el control de los cultivos de uso ilícito, los laboratorios de procesamiento y las rutas de comercialización. (Rocha, 2014) Por otra parte, la subregión de los Montes de María se ha caracterizado por la presencia de diferentes actores armados ilegales (guerrilla, paramilitares y las denominadas Bacrim). Los repertorios de violencia desplegados en esta zona del país tuvieron como objetivo el despojo y el desplazamiento de la población campesina en favor de las empresas agrícolas. La presencia del paramilitarismo, en la segunda mitad de la década de los noventa, agudizó el conflicto armado y la crisis humanitaria de sus pobladores. La acción de los actores armados dejaron cerca de 158.000 víctimas y aproximadamente 82.600 hectáreas abandonadas (CODHES; Fundación Cultura Democrática; Corporación Opción Legal; Universidad Tecnológica de Bolívar; OPDs Montes de María, 2020).

³³⁴ Echandía y Cabrera (2017) en su estudio sobre la evolución de la territorialidad del conflicto armado señalan la diferencia entre la estrategia y lo estratégico. La primera, se refiere a un “conjunto de lineamientos político-militares que define un actor para cumplir sus objetivos en medio del conflicto armado”; y, por su parte, “lo estratégico se refiere a la valoración que hace cada grupo armado sobre el tipo y uso más adecuado de técnicas y herramientas militares, áreas geográficas y recursos de financiación” (p. 28). Por lo tanto, los territorios son valorados por los actores armados en función del potencial estratégico.

Nosotros pensamos que las confrontaciones y conflictos que hay en la región son exclusivamente por una cosa; esta región es extremadamente rica, tiene una oferta de servicios ambientales muy grande, somos el punto de más alta biodiversidad de toda la región, le aportamos a la cuenca amazónica todo el tema de sus nutrientes, somos el punto de transición entre lo andino y lo amazónico, el punto más corto entre todo el piedemonte. Adicionalmente tenemos una posición estratégica para infraestructura de comunicaciones y por eso son todos los conflictos. (E10, Fundación Ecotono Putumayo, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

De tal manera, el conflicto ha logrado una dinámica local y territorial muy específica, asociada al tipo de recursos naturales y públicos, población y gobierno existentes en los territorios, como lo veremos a lo largo de los estudios de caso. Los grupos ilegales han podido por ello construir dominio y poder sobre espacios concretos y han ajustado sus prácticas de coerción de acuerdo a las alianzas construidas con las élites locales y a las resistencias presentadas por quienes no aceptan su control. La disputa por la territorialidad –entendida como control sobre las relaciones sociales y de poder–, es por ello tan diversa, pues no tiene los mismos cauces en una zona indígena, afrocolombiana, campesina o urbana.

Ahora bien, los líderes y las líderes de las organizaciones sociales populares entrevistados, al ser interpelados sobre su visión del conflicto y la caracterización que hacen del mismo, parecen apuntar hacia su carácter multidimensional en el que el enfrentamiento armado, por una parte, vertebró la conflictividad socio-territorial, pero al mismo tiempo, se considera como una expresión de múltiples conflictividades que se desarrollan en sus territorios, como se aprecia en las siguientes narrativas:

Para que existan conflictos deben existir necesidades básicas insatisfechas, diferencias, desacuerdos, luchas de intereses y contradicciones de clase que pueden generar conflictos, no únicamente determinados por el ejercicio de prácticas beligerantes, sino divergencias de tipo político, económico, social, cultural y ambiental. (E18, Líder ANUC, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Yo diría que el conflicto se divide en un conflicto social y armado y están las dos cosas que no pueden estar separadas, son dos cosas complementarias. En el conflicto armado se degrada pero lo que más nos preocupa a nosotros es el conflicto social, el conflicto social se da más[...]. (E10, Fundación ECOTONO Putumayo, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Nosotros a veces nos concentramos en ver el conflicto armado, solamente, localizado en unos territorios. Hay otros factores ahí, como ver la conflictividad desde la complejidad de lo que es realmente el conflicto y no sólo el conflicto armado como una parte, como un apéndice, generador de otros conflictos, pero apenas como parte de algo de una enorme magnitud de conflictos. (E11, Mesa Regional de Organizaciones Sociales, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Conflicto social y armado: en nuestra perspectiva la guerra que padece la patria tiene causas económicas, políticas y sociales, por tanto es inaplazable la realización de un DIÁLOGO NACIONAL DE PAZ Y SALIDA CONCERTADA AL CONFLICTO. En esta idea deben abordarse los problemas estructurales del país, como la redistribución de las riquezas, el modelo económico y el régimen político, entre otros. Buscamos la participación no solo de quienes están comprometidos directamente en la contienda bélica (Estado e insurgencia) sino, además, las diversas expresiones de la sociedad colombiana que anhelan la justicia social. También manifestamos nuestro rechazo a la ley de víctimas porque consideramos que la vida no es un negocio, porque esta justifica la inversión en la guerra y en cambio exigimos la reparación integral, verdad, justicia y no repetición de los hechos, basada en la memoria colectiva. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2012, p. 145)

Creo que el conflicto armado se debe al abandono del gobierno; si el gobierno mirara más hacia el campo, el conflicto disminuiría y, por ejemplo, el gobierno debería decirle a un campesino, “no siembre coca, siembre hortalizas, comida”, si hubiese sido así, la coca se hubiese acabado muchos años antes, si la gente tuviera esa solvencia económica, pero el gobierno dejó que la gente sembrara coca. (E9. Lideresa Comité de Víctimas del Tigre Progreso por la Paz, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Las narrativas populares indican que el conflicto armado es entendido de una manera mucho más amplia que el enfrentamiento bélico entre las fuerzas de seguridad del Estado y los actores armados ilegales, léase guerrillas o paramilitares. Por lo tanto, estas percepciones parecen desbordar el discurso hegemónico implantado durante el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, que simplificaba interesadamente el conflicto a una amenaza terrorista, asumiendo los preceptos de una geopolítica binaria y dicotómica. Esta posición del gobierno desvirtuaba, por una parte, las interpretaciones que asocian el conflicto con unas causas estructurales, y por otro lado, la relación entre el conflicto armado y otras conflictividades que se manifiestan en el orden social, político, económico, ambiental y cultural.

Figura 12. Cartografía participativa, conflictos socio-territoriales Putumayo



Fuente: Adaptado de *Actores y dinámicas de la conflictividad territorial* (p. 61), Observatorio Nacional del Paz, 2012.

De esta manera, la élite política y económica (representada por el uribismo) logró construir un marco interpretativo sobre la guerra en el país que fue aceptado como parte del “sentido común” general a partir de un consenso ideológico. Este marco fue acompañado de un conjunto de valores patrióticos y nacionalistas que le dio un carácter performativo. El simbolismo y la carga emocional profunda del mensaje conectó con una sociedad que buscaba un referente de liderazgo político, ante la crisis de legitimidad de las élites políticas dominantes y el fracaso del proceso de negociación durante el gobierno de Andrés Pastrana, que generó una profunda frustración en la sociedad³³⁵.

No obstante, los liderazgos populares construyen sus propias interpretaciones de la realidad a partir de las vivencias y de las condiciones materiales en las que desarrollan sus proyectos vitales en los territorios. La complejidad de sus lecturas sobre la realidad se corresponde con las diferentes

³³⁵ El uribismo, acompañado de una parte de la élite política tradicional y de los principales medios de comunicación, logró construir un esquema interpretativo que simplificó la realidad del país, utilizando de manera selectiva; símbolos, acontecimientos y experiencias, para legitimar su discurso e inhabilitar narrativas alternativas. El sustento de la política seguridad democrática fue presentado como una relación unicausal entre seguridad, confianza inversionista, crecimiento, desarrollo y empleo. Todo ello arropado por dos elementos centrales del discurso: orden y prosperidad. Algunos autores sitúan el discurso uribista dentro de un populismo neoliberal asociado a la deslegitimación de las instituciones políticas democráticas (Cárdenas, 2013).

formas que adquiere el conflicto armado y los conflictos asociados a los órdenes políticos, económicos, culturales y ecológicos, como se aprecia en la anterior cartografía participativa elaborada por los líderes y lideresas del Putumayo, en el marco del trabajo realizado por el Observatorio Nacional de Paz, del proyecto Planeta Paz.

En esta representación cartográfica, se observa cómo las organizaciones estiman que el conflicto armado está relacionado con otras intervenciones realizadas en el territorio, derivadas del modelo de desarrollo, en las que se concibe el mismo como un contenedor de recursos para alimentar la economía. Esta concepción contrasta con la percepción del territorio que tienen las organizaciones, como lugar de abrigo y de refugio, en el que se construyen relaciones comunitarias a partir de la solidaridad, la vecindad y la resistencia.

Estas relaciones se ven desarticuladas por las políticas extractivas y de apropiación de la naturaleza a través de enclaves minero-energéticos que se entretajan con la territorialidad de los monocultivos de la coca. Asimismo, las organizaciones consideran que los recursos que recibe el departamento por la extracción de estos recursos son captados por las élites políticas locales para beneficio propio, profundizando la crisis social de las comunidades e impidiendo el desarrollo de sus proyectos de vida.

En medio de esta diversidad social y ecosistémica, ni las políticas, ni las leyes, ni las instituciones estatales, ni los gobiernos han sido capaces de responder a la gran responsabilidad de conservar la vida en todas sus expresiones en esta región, ya que sus orientaciones, actuaciones y ejecutorias son coyunturales, carecen de una política estructural e integral y han estado al servicio de la corrupción, la extracción, el desarraigo y el desmantelamiento de las condiciones básicas para que florezca en forma digna la vida en todas sus expresiones. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2012, p. 211)

Por otra parte, las organizaciones construyen una visión crítica frente al modelo dominante. En los siguientes testimonios se realiza una valoración del discurso del gobierno sobre el conflicto así como un rechazo al encuadramiento binario de la conflictividad; en este sentido, identifican unas causas estructurales del conflicto ampliando la mirada sobre el mismo; y, finalmente, plantean un cuestionamiento de las políticas implementadas durante el gobierno de Uribe, en particular, la política de Seguridad Democrática, la cual estiman ha tenido un impacto negativo sobre sus comunidades.

¿Cuál es el conflicto que a nosotros nos están vendiendo? ¿Cuál es el conflicto que nos quieren hacer creer que existe, desde el gobierno, desde los medios de comunicación? Entonces, lo que se vendió con Uribe fue que el conflicto existe por las FARC, nada más.

Por eso, había que exterminarlos a como diera lugar y en eso uno ve que el conflicto es la guerra total y frontal contra una nación, pero no nos damos cuenta que el conflicto va más allá de un simple... de un simple no, porque no es tan simple, de un enfrentamiento armado. El conflicto básicamente es la inequidad y desigualdad social tan abismal que se está viviendo en estos últimos años. Y hablar de gente colombiana o de hombres y mujeres que mueren de hambre o de hombres y mujeres que pierden todo, el desempleo tan alto, la desigualdad social en la educación, zonas totalmente marginadas y aisladas, territorios totalmente aislados sin agua, sin comunicación, sin nada y un derroche de recursos públicos, yo creo que ahí es donde está la base de la inequidad, la base del conflicto. El conflicto no es simplemente el enfrentamiento armado, el conflicto es inequidad social y desigualdades. La política no responde a estas cuestiones. Gastamos una cantidad de plata en ocho años de la política de seguridad democrática, a pesar de los escándalos de corrupción y de violación de derechos humanos tan abismales, tan grotescos. [El gobierno] no respondió absolutamente a nada de lo que se ha planteado y seguimos, seguimos con un congreso ilegítimo y no pasa nada y si pasa entonces está el miedo: que usted no vote, que usted esto y lo otro. Entonces todo es sobre el miedo, sobre la amenaza. Nosotros siempre hemos pensado que eso del conflicto no es solo eso que nos han vendido sino también que es lo que se vive en los territorios. (E35. Lideresa Minga por la Vida-Mujeres en Resistencia, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

El conflicto armado es una expresión de otros conflictos que tienen presencia en el país y que son de larga data. La expresión armada pasó de ser una manifestación de los malestares sociales a una forma de vida, de subsistencia, la razón de ser de la democracia colombiana, ya que debido a la confrontación armada el Presidente Uribe logró ser elegido. El discurso bandera era que acabando con la guerrilla se terminaban los de más males que azotan al país. Un discurso belicista, antecedido por un gobierno que en cierta forma le apostó a la paz negociada, el gobierno de Andrés Pastrana, que inició las negociaciones con las FARC. Pastrana: la paz negociada. Uribe: la paz de la guerra. Sin embargo, el discurso del actual gobierno no ha logrado sus objetivos, no ha dado los resultados esperados. (E20. Líder Magisterio UniAmazonia, comunicación personal, 1-8 de noviembre de 2010)

En las voces autónomas de los sectores populares del Putumayo se aprecia una convergencia en la forma de entender el conflicto armado como parte de una realidad mucho más compleja y que se articula de diferentes maneras con otro tipo de conflictividades. De tal manera, las organizaciones populares consultadas parecen apuntar hacia un campo de disputa entre diferentes objetivos colectivos antagónicos que se sitúan en los diferentes órdenes y que buscan el control total o parcial de la sociedad. Esta conflictividad es manifiesta en las relaciones de dominación, subordinación, emancipación y resistencia.

Ahora bien, la lectura de la realidad que hacen los sectores populares se construye desde el lugar que ocupa socialmente el sujeto que las enuncia. En este sentido, nos referimos a un conjunto de agentes sociales que se encuentran en una posición subordinada, y que están sometidos

en el nivel de lo estructural a una dominación económica, política, de género y cultural (en la que están implícitas las cuestiones racial y étnica) (Múnera, 1998), en el marco de unas relaciones asimétricas de poder. Estas asimetrías configuran una estructura de clases que se sustenta en relaciones espaciales materiales y simbólicas, manifiestas en los territorios (Lefebvre, 2013 [1974]; Raffestin, 2011 [1980]).

La correlación entre el conflicto armado y el conflicto social y económico, manifiesto en las narrativas populares, se enmarca en las demandas materiales de la población de esta región como son vivienda, salario, empleo, educación, servicios públicos, transporte e infraestructura y el derecho al territorio³³⁶. Estas reivindicaciones marcan un horizonte de injusticia a partir de una valoración cognitiva de lo que es equitativo y señalan una responsabilidad sobre el Estado por el daño y el sufrimiento causado, ante la imposibilidad de llevar a cabo los proyectos vitales de las comunidades.

La alusión a la corrupción también conlleva una valoración sobre la apropiación de lo público gubernamental en beneficio de un sector reducido de la población (élites políticas y económicas muchas veces en alianza con actores armados ilegales) en detrimento de lo común. Las organizaciones populares parecen apuntar a que el manejo de los recursos públicos por parte del Estado se ha hecho con un “gran déficit en los criterios de injusticia y de desigualdad” (Planeta Paz, 2007, p. 9).

Por otra parte, el conflicto cultural es destacado en los testimonios de los líderes y lideresas afrocolombianas e indígenas y se puede relacionar con un proceso histórico de afirmación de la diferencia y “la consecución de espacios territoriales para consolidar su identidad” (Archila, 2001, p. 35). El punto de inflexión en este proceso se da en la década de los noventa, con la Asamblea Constituyente, en la que se abre una ventana de oportunidad política para el reconocimiento efectivo de los derechos territoriales y de la autonomía comunitaria-organizativa para las comunidades étnicas y afrocolombianas (Defensoría del Pueblo, 2016). Estas herramientas

³³⁶ Las reivindicaciones materiales de los movimientos sociales en Colombia son un eje transversal en sus agendas políticas. No obstante, las demandas que se sitúan en el campo político y cultural han cobrado relevancia desde los años noventa. Estas demandas se encuentran asociadas con un horizonte de lucha por la paz y la salida dialogada al conflicto en el marco del recrudescimiento de la guerra (vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, los derechos de las víctimas, fortalecimiento de la democracia participativa, etc.). Por otra parte, están las reivindicaciones asociadas a la autonomía cultural, la identidad y las cuestiones de género (Archila, 2001). Las agendas económica, social, política y cultural de los actores no se pueden entender como compartimentos estancos. Las agendas se cruzan, se superponen y pueden entrar en tensión según la correlación de fuerzas al interior de las organizaciones y en el conjunto del movimiento social popular.

normativas han sido útiles en los procesos de resistencia de las comunidades de la región ante la ola privatizadora del territorio, acentuada por las políticas neoliberales y la consolidación del modelo extractivo exportador, que ha puesto en peligro la pervivencia material y cultural de las comunidades.³³⁷

Para terminar este apartado, es importante señalar que las organizaciones populares consultadas en la investigación, realizan una lectura de la elección de Juan Manuel Santos como presidente del gobierno en el 2010 y de las implicaciones del cambio de postura del nuevo Ejecutivo frente al conflicto armado. Estas lecturas se hacen desde el impacto que ha tenido la política de seguridad democrática en sus territorios, la cual consideran que ha tenido consecuencias negativas en sus comunidades, debido a la implementación de estrategias de control militar de los espacios en consonancia con la criminalización de la protesta social. Esta visión se encuentra de manera reiterada en los liderazgos populares del Norte del Cauca, el Pacífico nariñense y el Putumayo.

No obstante, se reconoce que la estrategia militar del gobierno de Uribe debilitó al movimiento insurgente al menos en su capacidad política y fortaleció a las Fuerzas Armadas, aunque no se logra derrotarlas militarmente. En este cambio de contexto, los liderazgos populares de la región apuntan a diferentes versiones sobre lo que significa el gobierno de Juan Manuel Santos:

- Es la continuidad del gobierno Uribe y está subordinado a su proyecto político.
- Un gobierno que busca confundir con algunas estrategias políticas, pero en el fondo es el mismo régimen neoliberal dominado por los Estados Unidos.

³³⁷ La Asamblea Constituyente de 1991 representó un punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Aunque no obtuvieron derecho a voto, los representantes de estas comunidades lograron, a través de diferentes alianzas con sectores políticos progresistas y de izquierda, abrir una ventana de oportunidad política para posicionar sus demandas. Entre los principales derechos que se consignaron en la Carta Magna fueron: el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de la nación colombiana, la creación de una circunscripción especial para candidatos indígenas, el derecho al autogobierno en sus territorios, la garantía de los derechos territoriales y culturales a través de la propiedad colectiva e inembargable de los resguardos y el reconocimiento del territorio indígena como una entidad territorial. Este proceso político abrió la puerta para que en el año 2000 se eligiera por primera vez un gobernador indígena en el departamento del Cauca, el guambiano Floro Tunubalá Paja. Un hito para la política regional debido a que en las élites políticas y de la sociedad mestiza y blanca de Popayán hay un fuerte arraigo de los procesos de colonialidad.

Por otra parte, en la Constitución del 1991 se consigna la participación política de otras minorías reconociendo una circunscripción especial para grupos étnicos. Escobar (2008 [2018]) señala que uno de los principales avances en este periodo fue el surgimiento de la “categoría de comunidades negras como un hecho cultural y político central, de modo tal que colectividades como la red de organizaciones étnico-territoriales conocida como el Proceso de Comunidades Negras -PCN-, adoptaron ellas mismas esta categoría, el Estado decretó planes de desarrollo para las comunidades negras” (p. 28).

- Un gobierno que ha sorprendido con una agenda que rescata temas olvidados y abre una puerta para nuevas formas de la política.
- Es un gobierno que representa los intereses de las élites políticas tradicionales del centro del país que aspira a poner orden en casa, sin cambiar la casa.

En principio, los liderazgos populares consideran que hay diferencias entre Santos y Uribe frente al conflicto armado, el solo reconocimiento de este, marca la distancia entre los dos mandatarios. En esta dirección, se considera positiva la voluntad del gobierno de entablar una mesa de negociación con las FARC, pero señalan cierta prevención sobre el resultado y el impacto que puede tener dicha negociación en sus territorios. En el caso de que los diálogos lleguen a buen puerto y se produzca una desmovilización de los combatientes, se preguntan quién ocupará los espacios dejados por la guerrilla, teniendo en cuenta que el fenómeno paramilitar se ha reconfigurado en la región, a través de las llamadas Bacrim³³⁸. Organizaciones como la Asociación Campesina de Suroriente del Putumayo (ACSOMAYO) manifiestan cierto escepticismo sobre el

³³⁸ En los talleres se evidencian posiciones diferenciadas en la relación con el movimiento insurgente, en particular con las FARC. Los líderes indígenas del Cauca estiman que la guerrilla ha perdido legitimidad en las comunidades debido a las acciones dirigidas en contra de la población civil y a la intención sistemática de ejercer control en sus territorios, desconociendo la apuesta política por la neutralidad en el marco del conflicto armado. Para escenificar la relación entre las comunidades indígenas y la guerrilla, uno de los líderes utiliza la memoria media de las comunidades (Jelín, 2007):

Retomando lo del conflicto, desde esos años [década de los sesenta y los setenta del siglo pasado] las comunidades convivían con las fuerzas guerrilleras que decían luchar por la gente pero que tampoco entendían la dinámica indígena ni otras dinámicas organizativas, eran fuerzas que se fueron acumulando por parte de la guerrilla, pero que actuaban más como pequeños ejércitos de paso y de invasión, pero no había una compenetración seria con los intereses de la gente. Incluso veían, a los cabildos que tienen sus guardias indígenas u otras formas de organización de resistencia, como grupos opositores a ellos, entonces se presentaron muchos conflictos con la guerrilla desde los años 80 fuertemente con el movimiento indígena, dado que ellos no se sometían a ningún poder entonces el guardia indígena se enfrentaba de alguna manera a la guerrilla y eso generaba conflicto. (E21. Coordinación Agraria del Cauca, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2009)

Por otra parte, los liderazgos populares del Putumayo señalan que las comunidades han llegado a acuerdos tácitos de coexistencia con el movimiento insurgente. Señalan que muchos de los combatientes son gente de la zona que no ha tenido otra salida ante la pobreza, la desigualdad y la violencia en la que está sumida la región:

Yo no comparto la idea de la guerrilla como forma de lucha política, pero no la odio. Una vez venía de Leguízamo para Mocoa, antes de llegar a Leguízamo hay un punto donde atracan las embarcaciones, cuando estaba ahí aparece un guerrillero y me saluda. Lo reconocí, era amigo mío porque cuando no era guerrillero dirigió una de las marchas campesinas. En esa época yo era asesor [asesor del movimiento campesino], así como ahora. Entonces, me saludó, después de tanto tiempo, charlamos. Me llevó para el campamento y todos eran amigos míos. Era gente que no tenían otra opción. Las amenazas y los atentados después de las marchas campesinas se intensificaron. Y sin a donde irse, se van para donde haya un amigo y si el amigo está en el monte para allá se van. (E11. Mesa Regional de Organizaciones Sociales, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

En esta dirección, se preguntan sobre los nuevos actores armados que pueden llegar a disputar el dominio del territorio y las acciones de coerción que pueden desplegar para el control de las poblaciones.

fin del conflicto armado ya que consideran que el enfrentamiento bélico es lucrativo para ciertos sectores. Por consiguiente, el conflicto solo se podrá terminar cuando se rompa el círculo entre guerra y economía. La posición de esta organización se debe entender en el contexto territorial en el que se localiza: el Bajo Putumayo es uno de los territorios con mayor presencia de cultivos de uso ilícito y de hidrocarburos.

Por otra parte, las organizaciones cuestionan la falta de canales de participación de la sociedad civil en la negociación, ya que estiman que los sectores populares han sido las principales víctimas del conflicto y, por lo tanto, deberían estar presentes de manera activa en los espacios de diálogo. No solo para asegurar la verdad, la justicia y reparación de los hechos violentos sino para aportar sus propuestas a un nuevo modelo de sociedad, evitar nuevos ciclos de violencia y asegurar una paz con justicia social.

De esta manera, la caracterización del conflicto armado desde la perspectiva de los sectores populares de la región pone en evidencia su capacidad de agencia, muchas veces negada por los procesos de dominación de las élites políticas y económicas regionales y del centro del país. Además, plantean una apuesta política y un horizonte de sentido de sus luchas a favor de la paz y de una solución política negociada, que permita desactivar los diferentes conflictos asociados al enfrentamiento bélico, en el que tengan voz los procesos organizativos que aglutinan las miradas diversas de campesinos, mujeres, indígenas, afrocolombianos, entre otros³³⁹. Por lo tanto, la demanda de participación en la solución del conflicto entraña la necesidad de desactivar los ejercicios de dominación, subordinación y control a los que han estado sometidos de manera histórica³⁴⁰.

³³⁹ Por ejemplo, en el pliego de peticiones de ACSOMAYO, que recoge demandas de campesinos e indígenas de esta zona del país, se señala como imperativo el cese de la guerra para la desactivación de otros conflictos, a saber: “El cese definitivo de la guerra y de toda su infraestructura bélica. Sacar a los civiles del conflicto armado y plena vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, eliminando los actos violentos contra la población civil” (Campos en Movimiento, 2013).

³⁴⁰ Esperanza Hernández en sus trabajos sobre las iniciativas de paz en Colombia caracteriza a aquellas que se construyen desde procesos organizativos de base cuyo origen se encuentra “en poblaciones que soportan el impacto directo de la violencia, muy especialmente del conflicto armado o de la corrupción administrativa” (Hernández Delgado, 2009, p. 169). En las organizaciones del Suroccidente la autora destaca los procesos de resistencia indígena, que se configuran a partir de:

la violencia estructural en términos de exclusión, que históricamente negó a esta etnia su cultura, impidiéndole el uso de su lengua, el ejercicio de derechos fundamentales como el de asociación y la propiedad colectiva sobre sus tierras ancestrales y, por el otro, la violencia del conflicto armado, evidenciada en el desconocimiento de los actores armados, de la autonomía indígena, mediante la imposición de sus proyectos armados para vincularlos al conflicto, utilizarlos como estrategia de guerra, incursionar en sus territorios, reclutar niños y niñas en sus filas, y asesinar a sus líderes. (Hernández Delgado, 2009, p. 170)

CAPÍTULO 8. Control social y militar del territorio

Como se ha descrito en la segunda parte de esta investigación, en las últimas dos décadas en el país se ha presentado un proceso de militarización creciente de los territorios, derivado de la implementación de sucesivas estrategias gubernamentales de recuperación y control del espacio, en el marco de la lucha contra insurgente y de la política antidrogas. Estas políticas (Plan Colombia, Política de Seguridad Democrática, Plan Patriota, Plan Nacional de Consolidación, Política de Consolidación y Recuperación Territorial –PCRT) no han logrado de manera efectiva conseguir los objetivos planteados³⁴¹. La presión militar ejercida en los territorios en donde se ha focalizado su implementación ha generado una agudización de la violencia, el desplazamiento forzado de la población, la criminalización de la protesta social, las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, entre otras problemáticas.

Los departamentos que comprenden la región del Suroccidente han sido objeto de las políticas gubernamentales de recuperación militar y social del territorio, en razón a: la presencia de actores armados ilegales, en particular, el movimiento insurgente; la concentración de cultivos de uso ilícito debido al desplazamiento de la producción a estas regiones periféricas; la posición geoestratégica en términos de conectividad con los mercados internacionales (Eje Andino IIRSA, puertos del Pacífico, zona de frontera con el Ecuador); y la presencia de recursos naturales claves para los procesos de producción de capital a nivel global.

En el siguiente cuadro sintetizamos algunas de las principales líneas de las políticas de seguridad desplegadas durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. La mirada de conjunto permite comprender la lógica de las estrategias de intervención del espacio seguida en el Suroccidente de Colombia³⁴². El diseño de estas políticas se corresponde con una caracterización específica del conflicto construida por las élites políticas (espacio mental), en consonancia con unos parámetros de actuación establecidos, a partir de la valoración de amenazas

³⁴¹ Es importante señalar que nos referimos al periodo temporal que abarca la tesis. Por consiguiente, queda al margen la valoración de las políticas de Juan Manuel Santos en el segundo año de mandato, periodo en el que se produce el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC.

³⁴² Los lineamientos de las políticas de seguridad de Uribe y Santos no se pueden comprender sin la referencia al Plan Colombia, que marca un punto de inflexión en las políticas de seguridad en el país. Como se señala en apartados anteriores, el Plan Colombia se sostiene en la hipótesis que el conflicto armado se sustenta en la economía de la droga. Por lo tanto, las acciones gubernamentales deben ir dirigidas al cultivo, procesamiento y tráfico de la cocaína y amapola en las zonas periféricas fuera del control del Estado, en particular, en los territorios del sur en donde existe una fuerte presencia de la guerrilla. En este sentido, las áreas geográficas priorizadas fueron el Magdalena Medio, Macizo Colombiano y Suroccidente.

y riesgos, desarrolladas por las cúpulas militares (espacio material), asesoradas por actores externos, como es el caso de Estados Unidos³⁴³.

Tabla 1. Políticas de seguridad y estrategias de control militar y social del territorio gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel (2010-2014)

Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Política de defensa y seguridad democrática. Plan Patriota. Plan de Consolidación territorial³⁴⁴	
<u>Fundamentos de la política.</u> El conflicto armado se sostiene en la economía de la droga. Retomar el control definitivo en aquellas zonas con influencia de grupos armados ilegales. Recuperación, presencia y consolidación del control estatal. Acciones conjuntas Fuerzas Armadas y Policía Nacional.	
<u>Control militar del territorio</u>	
•	Reforzar la Fuerza Pública.
•	Plan de seguridad para las fronteras: fortalecer el control de los ríos, las aguas y el espacio aéreo.
•	Soldados campesinos ³⁴⁵ .
•	Policía Comunitaria.
•	Empresas militares de seguridad privada.
<u>Control social del territorio</u>	
•	Promoción de la cooperación ciudadana: redes de cooperación, programas de recompensas, apoyo de los medios de comunicación.
•	Familias en Acción.
•	Familias Guardabosques.
•	Programa Redes ³⁴⁶ .
•	Programa de Desarrollo Alternativo, Conpes 3218, DNP.
•	Programa presidencial contra los cultivos ilícitos.

³⁴³ La lógica belicista de intervención en los territorios se asemeja a los planteamientos realizados por Lacoste en relación con la geografía y la guerra, en donde esta disciplina no solo es útil para la planificación espacial de las operaciones militares “sino también para controlar mejor a los hombres sobre los cuales ejerce su autoridad el Estado” (Lacoste, 1977 [1976]).

³⁴⁴ En el Plan Nacional de Consolidación se apunta hacia una tipología de los territorios en los que se intervendrá militarmente y a partir de la cual se desarrollaron estrategias de intervención. Primero, las regiones que se encuentran en un proceso de recuperación institucional, en donde se presentó un tránsito del control militar al de la policía, para facilitar la normalización de la vida civil. Segundo, los lugares en donde hubo desmovilización de los grupos paramilitares, en los que las instituciones debían copar los espacios y evitar que otros actores armados ilegales, en particular, la guerrilla. Tercero, en las regiones de frontera en donde se debía prevenir la conversión a zonas de retaguardia de grupos armados y de corredor de drogas, armas e insumos químicos (Ramírez M.C., 2009).

³⁴⁵ Los programas de soldados campesinos, Familias en Acción y Familias Guardabosques, se implementaron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en el primer mandato de Juan Manuel Santos se dio continuidad a estas políticas de transferencia condicionada.

³⁴⁶ Este programa se implementó en el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, en el marco de la fase de Consolidación de Seguridad Democrática, bajo el lema “la seguridad es un problema de todos”. El objetivo era fortalecer la Fuerza Pública a través de mejores niveles de eficiencia de la acción policiva de los civiles (Moreno A., 2012).

- Programa Campo en Acción.
- Plante.

Áreas geográficas

- El Plan Patriota: sur del país. Meta, Caquetá y Putumayo.
- Plan de consolidación territorial: Zona Macarena y Río Caguán, Zona Pacífico (Nariño, Cauca, Buenaventura, Sur de Chocó), Zona Bajo Cauca Antioqueño y Sur de Córdoba, Zona Sur de Tolima y Sur de Valle del Cauca.
- Áreas de transición hacia la consolidación: Zona Montes de María, Zona Sierra Nevada de Santa Marta y Zona Oriente Antioqueño. Áreas Complementarias: Zona Arauca, Zona Putumayo, Zona Catatumbo y Zona Bajo Atrato.

Gobierno de Juan Manuel Santos. Nueva Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCT)

Fundamentos de la política. Vínculo entre seguridad y desarrollo. Integrar a la vida económica y social del país las regiones de la periferia que han sido la principal fuente de violencia; garantizar la protección y el respeto de los derechos en todo el territorio nacional; y establecer una efectiva presencia institucional.

Control militar del territorio. Lógica secuencial de la PNCT: recuperación, transición y estabilización. En la primera etapa de recuperación del control estatal del territorio, se necesita un esfuerzo militar intensivo. Expulsar los grupos armados que amenazan la vida y la integridad personal de los habitantes de la zona y desmontar las estructuras del narcotráfico.

- Reforzar la presencia de la Fuerza Pública.
- Empresas militares de seguridad privada.
- Soldados campesinos.

Control social del territorio

- Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana a través de la coordinación entre la Policía. Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada³⁴⁷.
- Sistema de recompensas.
- Familias en Acción.
- Familias Guardabosques.
- Programa de Desarrollo Alternativo.

Áreas geográficas priorizadas

Catatumbo (Norte de Santander), Cordillera Central (Tolima, Valle del Cauca y Cauca), Montes de María (Bolívar y Sucre), Nudo de Paramillo (Antioquia, Córdoba), Putumayo, Región Macarena-Río Caguán (Meta y Caquetá), Nariño, Buenaventura (Valle del Cauca).

Fuente: Elaboración propia.

³⁴⁷ En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en el apartado referido a la consolidación de la paz, se señala que las “Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana” permitirán “aprovechar la información suministrada por los más de 190.000 guardias de seguridad y los medios técnicos de los servicios de vigilancia, existentes en el país. Para lograrlo, se mantendrá el marco institucional existente para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que garantiza su funcionamiento” (p. 515).

Por otra parte, el análisis del cuadro nos lleva a apuntar que las políticas sociales de los gobiernos han sido concebidas como subsidiarias de la estrategia militar, que sería el marco general de la intervención del territorio, en particular, en las zonas en donde la soberanía del Estado es cuestionada por múltiples actores que despliegan campos de poder que se superponen. De esta manera, existen diversas territorialidades que se disputan el control y el dominio de lugares que consideran estratégicos. La antropóloga María Clemencia Ramírez describe la lógica estatal de la siguiente manera:

Se cobijan así todas las acciones sociales bajo la concepción de un nuevo plan de guerra en zonas donde el estado no es soberano, convirtiendo la acción social en estrategia militar para la ocupación territorial, reduciendo aún más el espectro de lo social. Es tal la prioridad que se le ha dado al tema de la seguridad que las políticas sociales y económicas se han redefinido bajo la idea de la acción social liderada por la Fuerza Pública. (Ramírez M.C., 2009, p. 13)

El trabajo de campo realizado para la presente tesis nos permite identificar cómo en los lugares de aplicación de las políticas se han construido esos campos de poder a través de la implementación de una compleja red de relaciones que se expresa en paisajes materiales y discursivos de dominación y resistencia (Oslender, 1999). En estos paisajes se presenta una tensión entre las formas de apropiación del territorio desplegadas por el Estado a través de diferentes dispositivos de control y la existencia de fuerzas que disputan esa racionalidad estatal y que se manifiestan en la acción contestataria, la resistencia y la afirmación en la adversidad.

En este sentido, las voces de los sectores populares expresan dos ámbitos de la intervención del espacio. Primero, el control militar de los territorios a través del aumento del pie de fuerza del ejército y la policía, los batallones antinarcóticos, el despliegue de la tecnología militar y otro tipo de acciones no convencionales, como los soldados campesinos, la policía comunitaria y las empresas militares de seguridad privada³⁴⁸. Segundo, la estrategia de control social del territorio a través de la implementación de programas de transferencia condicionada, como Familias en

³⁴⁸ Al inicio del segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe, la Fuerza Pública se había reforzado con la creación cuatro nuevas brigadas, dos brigadas móviles adicionales a las cinco que ya existían, seis batallones de alta montaña, treinta y cinco escuadrones móviles de carabineros, quinientos noventa y ocho pelotones de soldados de mi pueblo, seis compañías meteoro, trece grupos de fuerzas especiales antiterroristas urbanas y aproximadamente tres millones y medio de cooperantes (Ministerio de Defensa Nacional, 2006). Los soldados campesinos es un programa que consiste en la prestación de un servicio militar en los lugares de origen (zonas rurales) de los reclutas con el objetivo de mantener sus vínculos con la comunidad. La policía comunitaria fue concebida como un mecanismo de acercamiento a la comunidad y promoción de la seguridad a través de las escuelas y frentes de seguridad. Las compañías de seguridad privada operan en los territorios como organismos autónomos contratadas para prestar servicios de seguridad a las multinacionales. (Franco Restrepo, 2009)

Acción y Familias Guardabosques, y la conformación de redes de cooperación y programas de recompensas³⁴⁹. Este tipo de políticas pretendían involucrar a diferentes sectores de la sociedad civil a la lucha “terrorista”, “cediendo parte del monopolio de la Fuerza a grupos de seguridad privada, estimulando la parainstitucionalidad y expresiones extrajudiciales” (Moreno, 2012, p. 49).

8.1. Seguridad, militarización y políticas sociales

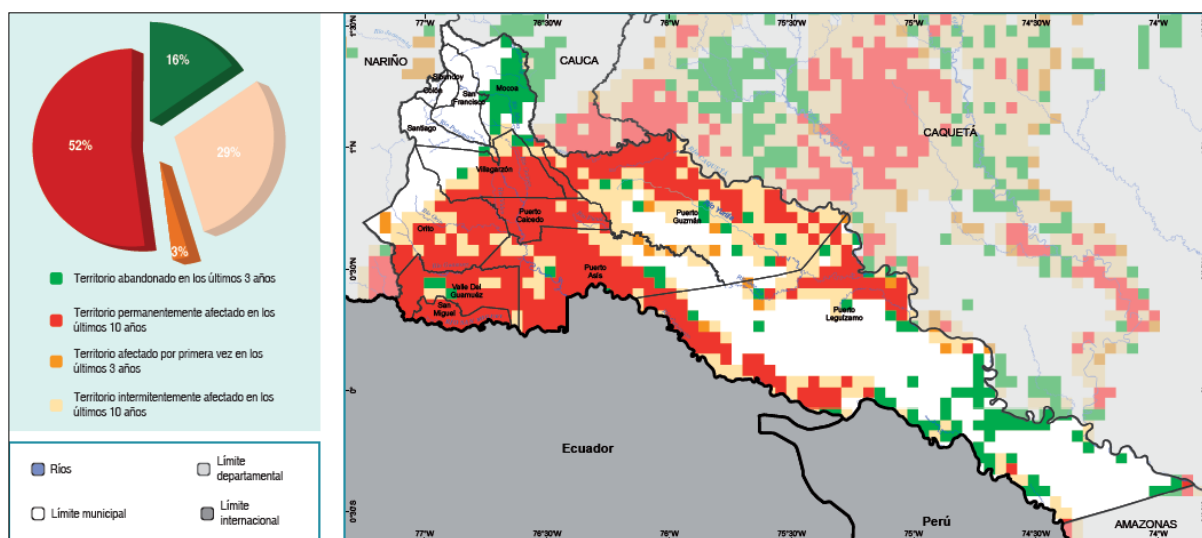
Como hemos señalado, el Putumayo ha sido uno de los departamentos priorizados por las políticas gubernamentales de seguridad (incluyendo el Plan Colombia). La agudización del conflicto armado se relaciona con la disputa entre diferentes actores por el control de la economía de la droga en el departamento y la competencia por la captura de las rentas de los proyectos extractivos, entre otros elementos. El aumento de los cultivos de uso ilícito se produce a partir de la década de los ochenta, debido a la caída del boom petrolero, gestionado por la empresa Texas Petroleum Company, en las zonas de los ríos Orito y Guamuez³⁵⁰ (CNMH, 2015).

En el Atlas de caracterización regional sobre drogas ilícitas en el Putumayo 2001-2014, se calcula que el 52% del departamento está categorizado como territorio afectado permanentemente; el 29% del territorio se encuentra como intermitentemente afectado; y el 3% son las zonas afectadas por primera vez en este periodo de tiempo (Ministerio de Justicia; UNODC; SIMCI, 2016). En el año 2000, el Putumayo era el departamento con mayor producción de hoja de coca del país, con un 40,4% del total de la producción (Vargas, 2003).

³⁴⁹ El programa Familias en Acción es la política de mayor cobertura geográfica en el país. Tiene como objetivo la reducción de la pobreza en familias vulnerables con hijos menores de 18 años. Los subsidios de nutrición y educación se otorgan si se cumplen las siguientes condiciones: asistencia regular a los centros educativos (no se puede superar el 20% de las faltas) y los niños menores de siete años deben asistir a los controles de crecimiento y desarrollo. El programa Familias Guardabosques se focalizó en los hogares campesinos, indígenas y afrocolombianos que fueran sembradores o potenciales cultivadores de plantas de uso ilícito. El programa se implementó en todo el país, pero de manera particular en aquellas zonas consideradas estratégicas en la lucha contra el narcotráfico y/o por su importancia ambiental. Este programa fue bastante controvertido por su vinculación a la política de seguridad. Al ser un programa de desarrollo alternativo debería estar enmarcado en una estrategia amplia de desarrollo rural. Los estímulos económicos que se repartieron entre las familias fueron condicionados al ahorro e inversión en tierras y al mantenimiento de zonas libres de cultivos ilícitos. Por consiguiente, el compromiso no recaía en el compromiso individual (por hogar) sino comunitario, generando fuertes tensiones en el territorio (Castaño, 2016).

³⁵⁰ Es importante señalar que el departamento del Putumayo es una zona histórica de colonización en la que se han desarrollado diferentes enclaves y proyectos extractivistas (petróleo, coca, quina, caucho, entre otros). Estas olas de colonización han reconfigurado el territorio. En los sesenta y setenta comenzó la colonización de la zona suroccidental por el auge de la industria del petróleo, liderado por la Texaco. Se crearon nuevos municipios como Orito y, posteriormente, en la década de los ochenta con la expansión de los cultivos de coca, se crearon nuevos asentamientos (municipios, corregimientos, inspecciones de policía) (CNMH, 2015).

Figura 13. Distribución regional según la permanencia del cultivo de coca (2005-2014)

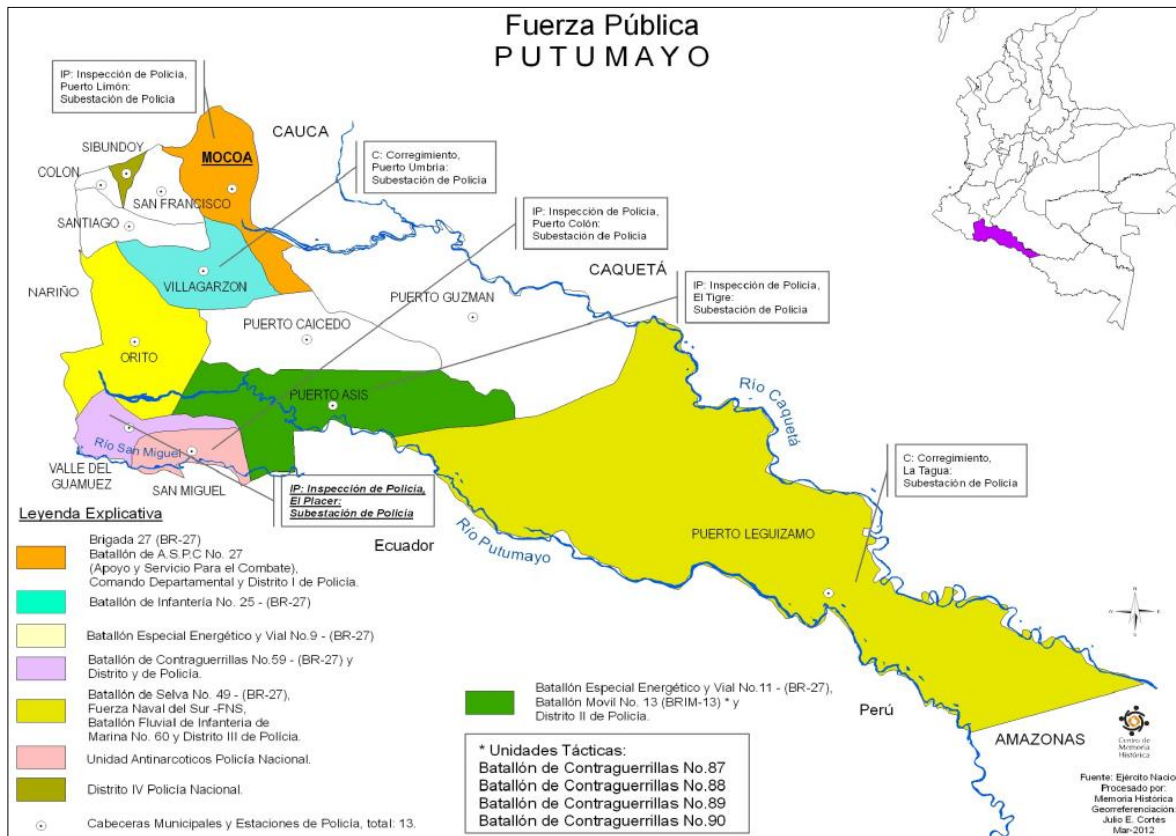


Fuente: Adaptado de *Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Putumayo* (p. 12), Ministerio de Justicia; UNODC; SIMCI, 2016.

Las organizaciones populares identifican una mayor militarización en los municipios de Mocoa, Villagarzón (Alto Putumayo), Orito, Santa Ana (Medio Putumayo), Puerto Leguízamo, Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez (Bajo Putumayo), que coinciden con la ubicación de la Fuerza Pública³⁵¹ (Figura 15), y con las zonas de mayor permanencia de cultivos de coca. Además, estos territorios se caracterizan por la explotación de hidrocarburos y la presencia de actores armados ilegales. Estas dinámicas generan altos niveles de violencia, que también se relacionan con las políticas de lucha contra la economía de la droga (CNMH, 2015).

³⁵¹ La estrategia de militarización del Plan Patriota en el Putumayo consistió en reforzar la Brigada de Selva XXVII ubicada en el municipio de Mocoa. La dotación de tecnología satelital a la Base Naval del Sur que tiene como radio de acción los ríos Caquetá, Putumayo y parte del río San Miguel. Asimismo, se fortalece en el municipio de Villagarzón el Batallón Domingo Rico, se establece la Base Antinarcóticos y se mejora el aeropuerto Militar. En Puerto Asís se constituye el Batallón Energético y Vial N.º 11, que cubre las bases militares del Cuembí y Quillacinga (corredor Puerto Vega hasta Teteyé). En el corregimiento de Santa Ana se establece el Batallón de Artillería N.º 27 y se adecúa la Base Militar de la vía a Mocoa. En el año 2011, en Puerto Asís comienza a operar el Batallón de Ingenieros Mecanizado N.º 27. Además, se crean las bases militares en Puerto Umbría, Puerto Caicedo, Puerto Ospina, Piñuña Negra, la Alea, la Rosa. Se establece la Base Militar en La Hormiga. En el municipio de Orito se implanta la Brigada Móvil Contraguerrilla N.º 13 y las bases militares en las zonas Siberia y el Empalme. Por otra parte, en San Miguel comienzan a operar las Bases Militares en los pozos petroleros, la Base Antinarcóticos y se construye el CENAF (Centro Nacional de Atención de Frontera). Este último con una gran controversia, ya que se sitúa en territorio ancestral del Pueblo Kofán, en donde la consulta previa no ha seguido lo establecido en la norma (Centro de Medios Independientes, 2012).

Figura 14. Fuerza Pública Putumayo



Fuente: Adaptado de *Conflicto Armado y narcotráfico. Caso: El Placer-Putumayo*, por Camila Median, 2014.

Según estiman las organizaciones sociales, la militarización en el Putumayo se acentuó con la implementación del Plan Colombia y se consolidó con la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, estiman que el despliegue militar intensivo no ha logrado garantizar la integridad personal de la población, ni mejorar las condiciones de seguridad y gobernabilidad en la región o ni siquiera el desmonte de las estructuras del narcotráfico. Un líder de la Asociación de Desplazados de Puerto Caicedo (ASODESCA) plantea de la siguiente manera su desconcierto frente a los ataques a la población civil en una zona con un fuerte despliegue militar:

Desde el 2000 ya existían las bases militares, en todos los puertos ha existido una base de policía y a plena luz del día aparecían muertos en los municipios, por lo tanto, creo que no se podría nombrar como seguridad [hace referencia a las política de Seguridad Democrática]. (E8, LíderASODESCA, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

En esta dirección, los líderes y lideresas populares estiman que la racionalidad estatal con la que se ha realizado el despliegue militar ha generado mayor inseguridad en las comunidades, que han quedado en el medio de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los actores armados ilegales. En un contexto de tan alta polarización discursiva y de enfrentamiento bélico, las comunidades terminan siendo utilizadas como escudos en las disputas entre los actores armados.

Además, se produce un fenómeno de estigmatización de las poblaciones por el solo hecho de habitar el territorio. Un territorio que es fundamental en la matriz de desarrollo impulsada por el Estado y de gran interés para los agentes económicos transnacionales. Estos elementos se agravan en un contexto en el que la acción de la Fuerza Pública se guía por criterios de eficiencia militar, en el marco de incentivos por número de bajas, y no por las directrices que marca el Derecho Internacional Humanitario, generando problemáticas tan graves como los falsos positivos³⁵².

En el Putumayo han instalado varias bases militares, en Villagarzón, Santa Ana, Puerto Leguísimo y Mocoa. En los últimos años se ha incrementado el pie de fuerza y la presencia del aparato militar. Han utilizado estrategias cívico-militares que militarizan la vida social de la región y coloca en peligro a las comunidades, en medio del fuego cruzado entre los diferentes actores, por ejemplo, las brigadas de salud militares, la ocupación de escuelas, etc. El gobierno pone en riesgo a la sociedad civil. Esta militarización ha provocado los falsos positivos, los asesinatos extrajudiciales, la violación de los derechos humanos por parte del Estado. (E18, Líder ANUC, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

El conflicto es aquel que disputan aquellos territorios, unos contra otros, hay momentos en los cuales la población desplazada es el objetivo militar. Hay veredas donde directamente ha habido enfrentamiento, por ejemplo, en Guacimales, que queda muy cerca de Puerto Caicedo en el corregimiento Villa Flor. Hubo un enfrentamiento tan fuerte en el que llegaron los soldados que se ubicaban cerca de la escuela, el ejército no se metió a la

³⁵² Estamos de acuerdo con Aurora Moreno cuando señala que el perfil de las víctimas de los falsos positivos evidencia de manera clara la sistematicidad de las acciones, dirigidas a los sectores sociales populares, en particular, a los líderes y lideresas de los movimientos sociales. Por tanto, no se trata de hechos aislados como han señalado tanto el gobierno de Uribe como el de Santos. Los falsos positivos fueron una forma de ejercer control social y político en los territorios. Por ello, la estigmatización de los activistas sociales no es una cuestión banal, implica una eliminación física y simbólica del “otro”. En el periodo de auge de esta estrategia, Moreno señala que:

Para 2007, la configuración del perfil de las víctimas puede explicar otro panorama si se tiene en cuenta que se trata de personas humildes y líderes sociales: 56,7% campesinos; 6,2% agricultores; 5,8% líderes comunales o sociales; 4,1% obreros; 3,8% comerciantes; 3,4% indígenas y 2,1 estudiantes.

Mientras que para 2008 la orientación de persecución política se concentró, aumentando el porcentaje de líderes comunales y sociales “al pasar de 3,8% al 14% de los casos; el porcentaje de los indígenas pasó del 3% al 5,3%, además, se incluyen otro tipo de víctimas como trabajadoras sexuales (3,5%); discapacitados físicos o mentales (1,8%) y personas marginadas 5,3%”. (Moreno A., 2012, p. 53)

escuela, sino que pasó por atrás de unos árboles hacia arriba, mientras la guerrilla estaba acantonada a un lado de la escuela.

El primer objetivo fue la escuela, que quedó destruida y la gente que estaba ese día en una reunión logró meterse en un restaurante, se encerraron todos. En ese momento, había una confusión tremenda entre el ejército y la guerrilla. La guerrilla pensaba que el ejército estaba en la escuela y el ejército pensaba que la guerrilla estaba ahí. En ese momento aparece un señor gritando muy fuerte “señores del ejército, la guerrilla está en la loma”. Fue entonces cuando comenzaron a disparar hacia la loma y se viene el enfrentamiento, así se salvaron las personas que estaban ahí, porque el señor gritó, pero al otro día el señor murió. Lo asesinaron solamente por haber defendido a la gente. (E8, Líder ASODESCA, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

No a la desaparición forzada, a los falsos positivos del gobierno, a las masacres, a las torturas, a los atropellos de la tropa estatal en confabulación con los paramilitares reactivados desde los batallones en las localidades de Villa Garzón, Santiago y Teteyé. (Campos en Movimiento, 2013)

El campesinado y los pueblos originarios de esta región del país y, en particular, los campesinos cocaleros, han sido criminalizados en razón de la ilegalidad del cultivo de hoja de coca y del hecho de compartir el mismo territorio con las guerrillas, por lo que fueron señalados de ser sus colaboradores. Al respecto, en una entrevista realizada en el 2013 al presidente de ACSOMAYO, señala la criminalización a la que se ha visto sometida la población del Bajo Putumayo por habitar una zona de cultivos de uso ilícito:

La movilización [en el año 2006 la organización convocó una movilización en el Bajo Putumayo] se hizo para visibilizar el contexto, porque en la zona éramos señalados de guerrilleros, el mismo presidente —Álvaro Uribe Vélez— manifestó que en esa zona todos éramos guerrilleros. Se hizo la movilización con el tema de respeto a la vida, el tema de derechos humanos terminó en unos acuerdos con el gobierno, en mesas de trabajo de derechos humanos, de inversión social, de regalías. (Hacemos memoria, 2020)

De esta manera, las comunidades campesinas e indígenas se convirtieron en objetivo de las acciones de las Fuerzas Militares y de los grupos paramilitares. Es importante señalar que los hechos violentos de los que fueron objeto los campesinos cocaleros los ha llevado a pedir el reconocimiento diferenciado como víctimas del conflicto armado y a la reparación por parte del Estado (Ramírez, 2017).

En el siguiente testimonio de una lideresa campesina del municipio de San Miguel se aprecia la vigilancia constante y la estigmatización a la que se ven sometidos de manera cotidiana los líderes y lideresas en razón a su activismo social. Esta práctica de la Fuerza Pública es

denunciada de manera constante por las organizaciones populares que participaron en los talleres del Observatorio Nacional de Paz.

Cuando uno no está de acuerdo con las políticas de Uribe entonces es revolucionario, por no decir guerrillero. Hay unas anomalías que uno no comparte, el rico cada día más rico y el pobre cada día más pobre. Yo no comparto la corrupción, si las cosas llegan o el dinero llega tienen que llegar a su destino y no a otras cosas.

Si la Fuerza pública me ve con la agenda o con libros, me preguntan qué hago, por qué tengo tantos libros, y les contesto que hago parte de la Mesa Departamental Campesina y que para gestionar uno tiene que hacer cosas y me dejan seguir, de lo contrario llamo a la Defensoría del Pueblo. Un día que me cogieron con una carpeta llena de papeles me detuvieron porque miraban que todos los viernes estaba con carpetas, con libros. Entonces, les dije que si querían saber que llamaran al doctor de la Defensoría del Pueblo y preguntaran. Yo soy una mujer a la que le gusta trabajar por las comunidades, pero sin motivar el terrorismo. Después de eso me dejaron de molestar. (E12, Lideresa Coordinadora Mesa de Campesinos Municipio de San Miguel, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Las organizaciones populares señalan que la militarización del departamento coincide también con los proyectos extractivos de la región, en particular, con la explotación de hidrocarburos. En las entrevistas y encuentros realizados, los líderes y lideresas plantean que el control militar de la región no se dirige a la protección de la sociedad civil frente a los ataques de los actores armados, sino a la salvaguardia de los intereses de las multinacionales que están en la zona. En este sentido, estiman que las intervenciones estatales en términos de infraestructura no se diseñan en correspondencia con las necesidades de la población: desde su lectura, consideran que la prioridad del Estado es la adecuación del territorio para el despliegue de los servicios que se requieren para la explotación de los recursos.

En el departamento avanza la pavimentación, los macroproyectos. Avanza la telefonía y la construcción de obras civiles para las bases militares. En Villagarzón, Puerto Asís, San Miguel, Mocoa... En Villagarzón hay pozos en explotación y se ve la pavimentación, la interconexión y las bases militares. Preparan en los territorios las condiciones para la inversión extranjera. En los territorios se presentan comisiones de técnicos que realizan topografías, investigación biológica, minera... Se refuerzan las bases militares que ya existían y se construyen otras. La de Villagarzón no existía, están reforzando la de Santa Ana y están construyendo otra en Concordia. En Orito no han construido bases nuevas, pero ya hay una base. Orito está muy militarizado.

Las bases militares afectan dependiendo la zona donde esté el ejército, cuando está en el área urbana y en las áreas donde no opera la guerrilla no hay tanto problema, el problema es cuando el ejército se ubica en una zona donde hay guerrilla. (E11, Líder Mesa Regional de Organizaciones Sociales, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

El ejército está donde está la zona petrolera. Donde van a hacer un pozo que tenga que ver con petróleo, lo primero que hacen es militarizar, para eso están, y para cuidar el

tubo. (E19, Líder Mesa Organizaciones Campesinas, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

La militarización de zonas estratégicas para el modelo de desarrollo coincide con una agudización del conflicto armado y con la expansión y consolidación de grupos paramilitares y de seguridad privada. Tal convergencia en el tiempo ha llevado a que las organizaciones sociales de la región desconfíen aún más de la labor que realiza la Fuerza Pública. La historia de la organización ACSOMAYO vista a través de las movilizaciones que han convocado en el Bajo Putumayo demandando el respeto a los derechos humanos y territoriales de las comunidades ante las violaciones sistemáticas por la explotación de hidrocarburos, en particular por la acción de la empresa petrolera Consorcio Colombia Energy, y la política antidrogas del gobierno, es representativa de lo ocurrido en esta región:

En el año 2005, después de una reunión donde se exigía a la empresa petrolera el respeto por los derechos de la comunidad, fue asesinado su primer presidente Luis Arceliano Melo Bastidas. En mayo de 2006, la comunidad de ACSOMAYO lleva a cabo la primera movilización pacífica sobre el corredor fronterizo para protestar por la violación de sus derechos y la fumigación indiscriminada, firmando acuerdos con el gobierno que no se cumplieron. En 2009, realizan la segunda movilización pacífica contra la petrolera, que termina en la firma de acuerdos con el gobierno que tampoco se cumplieron. En abril de 2011, la presidenta de ACSOMAYO debió salir del país por amenazas de judicialización en su contra, pero retornó para hacer frente a las acusaciones que finalmente no se llevaron a cabo. Entre noviembre y diciembre de 2011 las comunidades ACSOMAYO volvieron a la movilización para exigir a la petrolera detener la apertura de 34 nuevos pozos y fueron reprimidos violentamente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, en esta movilización fue detenida la presidenta de ACSOMAYO y dos campesinos más. A finales de marzo de 2012, el vicepresidente de ACSOMAYO fue desaparecido en el territorio de su jurisdicción, altamente militarizado, sin que hasta el momento se conozca su paradero y en mayo de 2012 cinco dirigentes de ACSOMAYO fueron vinculados a procesos judiciales. (Ávila, 2014, p. 35)

De esta manera, la configuración del carácter estratégico de la región, y su consecuente militarización, ha generado una violación sistemática de los derechos de las comunidades que habitan sus territorios, sectores sociales como campesinos indígenas, desplazados, así como líderes políticos de la oposición. La relación existente entre hidrocarburos, militarización, agudización del conflicto y violaciones de los derechos humanos se debe entender en el marco de la importancia del petróleo para alimentar la matriz energética del modelo capitalista, en donde aproximadamente el 60% de la energía consumida en el mundo proviene de este recurso natural (Observatorio Nacional de Paz, 2012a). En este sentido, las organizaciones sociales de la región lo han expresado

en sus matrices y agendas de luchas, así como en los repertorios de confrontación. Ejemplo de ello son las demandas regionales de las organizaciones sociales de las tres subregiones del Putumayo, en el marco del Paro Nacional Agrario del 2013³⁵³, o las continuas movilizaciones realizadas en Villagarzón desde el año 2010³⁵⁴.

En cuanto al control social ejercido por el Estado en la región, las narrativas de las organizaciones apuntan a dos ejes de intervención. Primero, las políticas de desarrollo alternativo para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Segundo, las políticas de transferencia condicionada, en particular, los programas de Familias en Acción y Familias Guardabosques.

Como hemos señalado, en el año 2000 se comenzó a implementar el Plan Colombia en el departamento del Putumayo. El despliegue militar se centró en la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito y en la fumigación aérea. A partir del año 2005, esta estrategia se vio reforzada por la llegada de organizaciones no gubernamentales para apuntalar el componente social a través de programas de desarrollo alternativo que promovieron la sustitución de los cultivos de coca por otras especies foráneas sin ningún tipo implantación cultural en el territorio (vainilla, pimienta, etc.). En esta misma lógica, en el 2010 se desplegó el Plan de Consolidación durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Al ser preguntado por este tipo de proyectos un líder de Puerto Caicedo describe este proceso de reterritorialización de la siguiente manera:

Actualmente, los proyectos que están implementado son el sachá inchi, la palma africana, el maní estrella, la pimienta, la piña esos son los que conozco, pero tienen unos costos muy altos para la producción que no los puede sostener el campesino. El Putumayo no está para ese tipo de producción, se deben recuperar los productos tradicionales. El Estado y todas esas ONGs que vienen al territorio deben construir con nosotros las comunidades proyectos de desarrollo rural, no vainas puntuales, después se van y las comunidades no pueden seguir con esos proyectos, y se tienen que desplazar. El Putumayo lo que quiere es un sondeo que diga para qué sirven las tierras, directamente para qué sirven porque de pronto le estamos

³⁵³ El Paro Nacional Agrario del 2013 convocado por diferentes organizaciones campesinas evidencia las diferencias espacio-temporales de la conflictividad social en Colombia. A diferencia de lo que se mostró en los medios de comunicación en su momento, no hubo un único pliego de peticiones sino tres agendas regionales diferenciadas. En este sentido, las demandas de los departamentos del Sur de Colombia, en particular, Putumayo, Meta, Guaviare y Caquetá se relacionan con esos procesos de colonización reciente y de reconocimiento de la territorialidad campesina, la participación en la política minera y de hidrocarburos, la no militarización de sus territorios o una política de desarrollo rural no integrada a la política de lucha contra el narcotráfico (Moreno D. M., 2013).

³⁵⁴ El Sindicato de Trabajadores Petroleros del Putumayo ha mantenido una continua movilización social para denunciar las diferentes prácticas violatorias de derechos de la empresa Gran Tierra Energy en la región, las violaciones de derechos humanos por parte de actores armados y la falta de inversión social del Estado en los territorios, en contraste con la riqueza de la explotación petrolífera. En el año 2013, la empresa extrajo diariamente 24.771 barriles de petróleo de los suelos colombianos (Flórez, 2014). Por otra parte, los repertorios de confrontación utilizados como los cortes de ruta en las vías por donde se transporta el hidrocarburo tienen un fuerte poder simbólico de desafío a las dinámicas del capital.

apuntando a algo que no produce el Putumayo. (E8, Líder ASODESCA, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Los programas de desarrollo alternativo se han diseñado en el marco de las políticas de seguridad y se pueden equiparar con el concepto de representaciones del espacio desarrollado por Lefebvre. Este tipo de programas implican una reconfiguración del territorio a través del uso de la fuerza (control militar del territorio) y del saber tecno-científico de los expertos del gobierno nacional, y de las ONGs. La intervención de los técnicos, muchas veces desconocedores de las dinámicas territoriales, terminaron reconfigurando el espacio desde la concepción dominante para ordenar/clasificar las prácticas espaciales en el marco de un sentido común hegemónico. Por tanto, la regulación de la vida cotidiana se realizó según parámetros y métodos científicos que se recubren de una “aura” de incontestabilidad, avalados por los técnicos del gobierno y de organizaciones del tercer sector.

De esta manera, los saberes subalternos de las comunidades campesinas de la región terminan siendo subvalorados, invisibilizados y muchas veces señalados de ser los causantes “del atraso” en sus territorios, en particular, cuando manifiestan el disenso a las políticas estatales a través de sus agendas y sus repertorios de confrontación³⁵⁵. En las entrevistas realizadas las comunidades denuncian esos procesos de dominación a los que se ven sometidos y señalan las carencias en términos de participación y de decisión de las comunidades para la orientación de los programas de desarrollo alternativo. En esta dirección, plantean otros proyectos posibles para salir del círculo vicioso que se produce en la relación entre cultivos de uso ilícito y pobreza. Estos proyectos alternativos están pensados desde los conocimientos populares de los ecosistemas de la región y enfocados hacia la recuperación de productos ancestrales, que se han ido perdiendo por

³⁵⁵ El discurso dominante crea una representación mental de los sujetos subalternos que se presenta avalada por los saberes técnicos. Esta representación es utilizada como un mecanismo efectivo para desvirtuar los proyectos alternativos de desarrollo de las organizaciones sociales populares. Esa visión instrumental de la realidad se convierte en un imaginario común que es difundido a través de los medios masivos de comunicación, a los que no tienen acceso los sectores contestarios. Por otra parte, se debe tener en cuenta que las élites políticas y económicas se valen de la desconexión que existe entre el mundo rural y las zonas urbanas. En donde la ruralidad es vista como sinónimo de atraso, subdesarrollo, marginalidad, y asociada con los movimientos insurgentes. Estos imaginarios no se construyen en los albores de los gobiernos de Uribe, son imaginarios profundamente arraigados en una sociedad caracterizada por el colonialismo interno y por una estructura social jerárquica, atravesada por cuestiones de clase y de raza. La diferencia con otros periodos históricos es que Álvaro Uribe sabe leer el contexto, es avalado por las élites tradicionales, y encarna esa figura del “salvador” del país, el líder carismático en palabras de Weber, utilizando códigos del lenguaje cercanos a la población.

el impacto de la economía de la droga y de la explotación de hidrocarburos en sus territorios, así como por las diferentes olas de colonización que ha habido en el Putumayo.

USAID [siglas en inglés para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] tiene presencia en la región a través de la financiación de proyectos productivos. Estos proyectos terminan calando en las comunidades frente a la debilidad de las organizaciones sociales. También es una forma de hacer inteligencia en la región, de penetrar el tejido social y las organizaciones. Pasar de “los gringos malos a los gringos buenos”. Lo que se está dando es la guerra por la guerra, el pueblo no le ve ningún sentido a la confrontación armada, a la guerra, por ningún lado, se está presentando un desgaste de todos los actores. La política de Seguridad Democrática, programa bandera del gobierno de Uribe, no es seguridad política ni siquiera seguridad vial, en las carreteras.

Cuando apareció el “Plan Patriota” en los departamentos del Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo lo que se buscaba realmente era arrasar, desplazar a las comunidades para quedarse con el territorio, controlar el territorio e implementar ciertos proyectos que interesan a determinados sectores económicos. Por otra parte, la guerrilla sigue presente con nuevas formas de accionar para pasar desapercibida entre la población civil. (E20. Líder Magisterio UniAmazonía, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Desde la visión de las organizaciones, tanto la estrategia de lucha contra las drogas implementada en la región como los proyectos de desarrollo alternativo no han logrado estabilizar al conjunto de la población campesina en el territorio y tampoco solucionar definitivamente la problemática del narcotráfico. Ahora bien, es importante señalar que los lugares escogidos para la implementación de tales proyectos no son aleatorios, responden a una lógica de estabilización de cierta población en territorios que son claves para el modelo de desarrollo (Observatorio Nacional de Paz, 2012a). Los beneficiarios de este tipo de proyectos, así como los del Programa de Familias Guardabosques, se convierten en trabajadores rurales, a bajo coste, y como punta de lanza en los territorios en donde se implementan las políticas de seguridad.

Las organizaciones relatan de la siguiente manera las dificultades e incumplimiento de este programa, que para muchas familias representó la única opción de sobrevivencia, ante la falta de iniciativas gubernamentales para el sector campesino, indígena y afrodescendiente. Según señalan, el Programa de Familias Guardabosques tampoco generó alternativas de desarrollo que fortalecieran el trabajo colectivo a partir de redes comunitarias y populares:

El PFG [Programa de Familias Guardabosques] pidió demasiados requisitos que se iban perdiendo fácilmente, entonces muchos campesinos fueron desafiados por el Estado y dejaron de recibir el incentivo económico. Cuando la gente vio que había erradicado la coca que era la fuente de su sustento y luego no recibió el ingreso, se organizó para defender la aplicación del programa, no por el programa en sí mismo, sino porque se cerraban todas las opciones de sobrevivencia.

Paralelamente, los operadores del PFG fueron disminuyendo los tiempos en que se había prometido la aplicación de 2 a 4 años como se había prometido, motivo que también fortaleció la protesta para defender la permanencia y aplicación del programa en municipios como Leguízamo, Orito y La Hormiga.

En nuestra opinión, el PFG se aprovechó del trabajo, porque hubo mucho dinero invertido, pero se hicieron procesos individuales que no abrieron paso a nada organizado colectivamente. Por otra parte, los proyectos productivos funcionaron mediante contratos de asociación en donde la gente debía comprar “acciones”, luego los declararon “en quiebra” y a la gente le “devolvieron” las acciones que ya no valían nada. Para el año 2005, a medida que el programa fue perdiendo beneficiarios y se fue debilitando, el Estado incrementó las fumigaciones aéreas que se convirtieron en acciones diarias, lo cual molestó a muchos campesinos que habían erradicado la coca, la sustituyeron con cultivos de otro tipo, dejaron de recibir el incentivo económico y, además, vieron arruinados los cultivos nuevos a causa de las fumigaciones. (Mesa Regional de Organizaciones sociales del Putumayo, 2015, pp. 67-68)

Por otra parte, las organizaciones sociales hacen especial hincapié en las implicaciones medioambientales de la fumigación aérea, la militarización y la continua presencia de actores armados que ha generado procesos de desplazamiento hacia la frontera con Ecuador alterando las relaciones entre las comunidades que habitan los bordes³⁵⁶. De esta manera, se ven interrumpidas las lógicas sociales y comunitarias de las poblaciones fronterizas. En este sentido, la frontera pasa de ser vista como un espacio de intercambio a un límite que excluye al “otro”. Así lo explican dos de los líderes entrevistados:

Desde el operativo militar en el que murió Raúl Reyes, la frontera se ha militarizado aún más. Hace poco hice un recorrido por la frontera del lado colombiano y algo que me pareció bastante preocupante es que desde Puerto Asís hasta Puerto Ospina cada cinco minutos hay un letrero que dice “pártete”. Esto ha generado zozobra en la gente, de hecho, la gente que va a subir al foro de organizaciones sociales toca subirla por Ecuador, pues a la gente le da miedo subirse por el lado colombiano.

En Puerto Ospina hay una guerra aterrizante, pero a diez minutos está el letrero de las FARC. Es curioso pero el discurso de los presidentes genera actitudes que tiene la gente frente al colombiano frente al ecuatoriano y eso comienza a notarse, hay un trato poco hermanable. Sin embargo, en Puerto del Carmen y Puerto Ospina, que es una zona

³⁵⁶ En relación con la agudización del conflicto en la frontera con el Ecuador, Roberto Ramírez señala:

Según denuncias de las organizaciones rurales del Putumayo, los operativos militares estatales han generado el desplazamiento masivo de campesinos hacia el territorio fronterizo colombiano, las autoridades ecuatorianas estiman que, con motivo del conflicto armado en Colombia, entre el 2000 y el 2008, por lo menos 12.000 colombianos se han asentado en la zona fronteriza de la provincia de Sucumbíos. En noviembre del 2008, cerca de 900 familias rurales del municipio de Puerto Guzmán se desplazaron hacia la cabecera municipal porque las fumigaciones de cultivos de coca afectaron sus cultivos de pancoger, que habían sido financiados por los proyectos de sustitución acordados con el gobierno nacional; además, según los desplazados, las FARC habrían proferido amenazas contra algunos dirigentes comunales. (Ramírez R., 2011, p. 537)

crítica por la presencia de actores armados, hay intención de cooperación entre las alcaldías. (E10, Fundación Ecotono Putumayo, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Antes uno entraba al Ecuador libremente y los ecuatorianos acá, eso ya no, más o menos desde el bombardeo que hubo en la frontera donde murió Raúl Reyes, desde ahí se han dañado las relaciones con el país.

La frontera se encuentra militarizada y ya no lo dejan pasar a menos que tenga pasado judicial o una cédula ecuatoriana. Esto ha afectado las relaciones comerciales, pero de pequeños empresarios. Antes se podía cruzar la frontera libremente, iba y venía gente de Ecuador y de Colombia. Ahora ya no se puede. En Ecuador al colombiano lo estigmatizan e incluso se ponen violentos. (E8, líder ASODESCA, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

San Miguel es un municipio de frontera, nos divide el río San Miguel. Las familias se están marchando a Ecuador porque dicen que allá hay más trabajo e inclusive han sacado la visa de refugiados. Eso hace la mayoría, y eso afecta a la comunidad porque se están quedando las fincas solas y el pueblo solo, porque les pagan bien en Ecuador. Si es en construcción se ganan treinta o cuarenta dólares en el día, mientras que acá un trabajo vale doce mil pesos y deben comer de ahí.

Ahora el paso de la frontera es complicado porque le exigen el pasado judicial, si va una mujer con sus hijos y sin esposo tiene que llevar un documento donde él le autorice sacar a los hijos y diga si va de paseo o va de visita o cualquier otra razón que certifique eso y lo tiene que sacar en la comisaría de familia. Y muchas mujeres son cabeza de familia, al esposo lo han matado o desaparecido. Antes no era así lo único que uno tenía que llevar era su identificación o tarjeta, uno pasaba y volvía. El otro tema son los alimentos, hay un paso restringido en cuestión de alimentos, no se puede pasar grandes cantidades, dicen que les quitan, a mí no me ha pasado. (E12, Coordinadora Mesa de Campesinos Municipio de San Miguel, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

En cuanto a los programas de transferencias condicionadas, Familias en Acción y Familias Guardabosques³⁵⁷, las narrativas populares apuntan en dos sentidos. Primero, la necesidad de políticas para combatir la pobreza y la desigualdad, en particular, en un departamento con una crisis social humanitaria profunda, que ha sido fuertemente golpeado por el conflicto armado y el narcotráfico. Segundo, las falencias de este tipo de programas focalizados y asistencialistas, los cuales consideran que no han resuelto los problemas estructurales causantes de la profunda vulnerabilidad de las comunidades. En esta dirección, las organizaciones señalan que los diferentes componentes sociales de las políticas de seguridad han contribuido al debilitamiento del tejido

³⁵⁷ El programa de Familias Guardabosques se enmarca en la estrategia de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito. El gobierno de Uribe tomó como referencia programas similares implementados en el sudeste asiático y en América Latina (Brasil, Perú y Bolivia). En el periodo de 2002 a 2018, se calcula que se han beneficiado aproximadamente 100.000 grupos familiares rurales, localizados en más de 130 municipios en todas las regiones del país (Vélez, 2015), en particular, las zonas en donde se concentran los cultivos de uso ilícito, como es el caso de los departamentos del suroccidente del país.

social, en tanto las personas receptoras de las ayudas se tienden a desvincular de los procesos organizativos al considerar que los programas resuelven en parte las necesidades más básicas. De esta manera, se desvirtúan los procesos de resistencia en torno a la justicia económica y social y a la exigencia de políticas de desarrollo rural, que permitan resolver una de las causas principales del conflicto social y armado en el país: la inequitativa distribución de las tierras (Fajardo, 2015).

Así lo evidencia una lideresa campesina del municipio de San Miguel:

[Programa Familias en Acción] Pagan 60 mil pesos por cada niño que está estudiando en el colegio. Si están en primaria son 30 por cada niño. El pago se realiza cada dos meses. Y los pagos de nutrición son 100 mil pesos cada dos meses. Tienen muchas exigencias: primero, hay que cumplir con los vales de nutrición y de educación. Los niños tienen que estar estudiando, uno cuenta con cierto tiempo para hacer los vales. Además, exigen la realización y asistencia a los encuentros de cuidados, pero no hay respaldo económico de parte de Acción Social, para el almuerzo y el capacitador. Nosotros tenemos que cubrir esos gastos, por nuestra propia cuenta.

Entonces hablé con el doctor Ángel Tolosa para que nos dieran un capacitador para que vaya y nos asesore, para hacer proyectos productivos con productos amazónicos, porque está la materia prima pero no hay cómo transformarlos. Como somos 58 mujeres pensamos que nos queda fácil comprar la materia prima y como ya sabemos preparar, hacer los productos.

Además, las beneficiarias de Familias en Acción se acomodan a la ayuda, que realmente no nos soluciona los problemas reales de los campesinos. Dejan de venir a las reuniones, se caen los procesos organizativos, si ya tienen esa ayuda para que van a seguir peleando por los derechos. Eso es una limosna, no soluciona nada... Además, la gente tiene miedo de seguir peleando, acá hay mucho control de la Fuerza Pública y de los paras. (E12, Lideresa, Coordinadora Mesa de Campesinos Municipio de San Miguel, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

En este sentido, tanto los programas de transferencia condicionada como los proyectos productivos, fueron concebidos como parte de una política antinarco y de defensa nacional. Por consiguiente, el gobierno instrumentalizó a las familias beneficiarias de las regiones con fuerte presencia del conflicto armado con fines de índole política: reducir las áreas de cultivos de uso ilícito para agotar las fuentes de financiamiento de los actores armados ilegales (Vélez, 2015), en particular, el movimiento insurgente; y debilitar las que considera son sus bases sociales a través de la infiltración de la ciudadanía y la desarticulación de los procesos organizativos.

Uno de los líderes de la ANUC relaciona la política antidrogas del gobierno, los proyectos productivos y las políticas asistenciales, evidenciando los vacíos e intereses que subyacen a este tipo de estrategias, que no abordan las causas estructurales de la conflictividad social del departamento, sino que profundizan esas relaciones asimétricas de poder propias de zonas

periféricas de reciente colonización. Estas estrategias de intervención del espacio se construyen de manera vertical, “de arriba hacia abajo”, sin tener en cuenta las percepciones, los conocimientos, las formas de reproducción social de las comunidades que son constitutivas de esos territorios.

Es paradójico ya que las fumigaciones afectan a los proyectos productivos que financian organismos internacionales y el gobierno, como son el arroz y los palmitos. Entonces, ¿cuál es la política? Por un lado, dan dinero para la sustitución de cultivos, pero por el otro lado, dañan esos productos. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene la gente? Hay algunas personas que están logrando hacer sustitución, pero no son todas, algunos cultivos de pancoger o estanques de piscicultura.

Otro de los problemas de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, de los proyectos productivos, es que no se dan las herramientas ni las condiciones para que los campesinos comercialicen los productos, para sacarlos de sus zonas a otras y poder venderlos, no existe infraestructura vial terciaria, que comunique a los pueblos y veredas. Los proyectos de infraestructura vial que están diseñados se están haciendo para sacar los productos que le interesan al gobierno, a las multinacionales, sacar los recursos a otros países. Esto genera desplazamiento de la población, la gente no tiene los recursos necesarios para vivir en su territorio, se va para buscar otras oportunidades, no tienen elección. A su vez esto genera una desintegración del tejido social y cultural, los pobladores se van, dejan sus tierras, pierden sus orígenes, los pueblos se desintegran, cambia el territorio. A su vez en los cascos urbanos se engrosan los barrios periféricos, la población desplazada llega a esas zonas. El gobierno no da alternativas para cambiar esta situación, se centra sólo en políticas asistencialistas como Familias en Acción que no transforma realmente la realidad de las comunidades, son paños de agua tibia, que hasta acaban los procesos sociales. (E18, Líder ANUC, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

A este conjunto de elementos, se suma la estafa de las llamadas “Pirámides”, siendo el Putumayo uno de los departamentos más afectados del país. En el año 2008, el Estado interviene la principal empresa D.M.G Grupo Holding S.A., dedicada a la captación ilegal de dinero, ofreciendo a sus clientes el pago de intereses desorbitados. La promesa de multiplicar las inversiones atrajo a miles de personas, en particular, de las zonas más deprimidas y con una fuerte presencia del narcotráfico debido a la facilidad para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Esto produjo una fuerte crisis económica, el aumento del desempleo, el cierre de empresas y la emergencia de la delincuencia común (Observatorio Nacional de Paz, 2012a). Este fenómeno fue un vector de desterritorialización en tanto los narcotraficantes compraron tierras a los pequeños propietarios a precios irrisorios, con especial incidencia en las inmediaciones de Orito y la Hormiga (Ávila, 2014). La compleja situación económica llevó a muchas familias del departamento a solicitar su ingreso en los programas de transferencias condicionadas. Así lo explica uno de los líderes:

Ahora con el tema del quiebre de las pirámides en el Valle del Guamuez y San Miguel, tienen una situación crítica, así que cualquier alternativa que genere alguna posibilidad de ingreso es bienvenida. Si es Familias en Acción o Familias Guardabosques o los cultivos de sacha inchi, eso va. Son soluciones temporales que no acaban con las necesidades de la gente e inclusive que tienen un impacto negativo en el territorio, pero son salidas a la situación crítica por qué no hay más... Por otra parte, hay personas que se apuntan al programa de Familias Guardabosques, supuestamente diseñado para fomentar la cultura campesina. Sin embargo, estas personas son colonos o gente que vino de fuera a probar suerte y lo que hacen con los subsidios es comprar celular, ollas, moto e ir al pueblo, eso es lo que ocurre. Si fuera un campesino, se piensa en comprar el machete, la silla para el caballo, la tina para leche, cosas relacionadas con la cultura campesina. (E10, Fundación ECOTONO Putumayo, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

8.2. El control paramilitar en el Putumayo

En los años noventa, los paramilitares experimentaron una reconfiguración de su acción militar con respecto a la década anterior. La desmovilización de algunos grupos bajo el gobierno de Gaviria, la guerra entre los carteles de Cali y de Medellín, la muerte de Pablo Escobar, entre otros factores, generaron una fragmentación de sus estructuras, la expansión territorial y la apertura a nuevos actores ligados al narcotráfico que introdujeron importantes recursos económicos para el mantenimiento del negocio. Las estructuras paramilitares ampliaron su radio de acción a nuevos territorios estratégicos para el negocio de la economía de la droga y entraron en competencia con otros actores armados para la captación de las Rentas ilegales, en particular, en las zonas de retaguardia de las FARC³⁵⁸.

Ahora bien, la expansión del movimiento paramilitar en el Putumayo coincide con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia. La conformación de un mando centralizado no solo se correspondió con una estrategia política, sino con una táctica para la expansión del dominio

³⁵⁸ La presión ejercida por los actores armados ilegales en el departamento del Putumayo no se puede desvincular del contexto regional del Suroccidente del país. El carácter estratégico de esta región se deriva de la localización geográfica y de su relevancia para el modelo de acumulación sustentado en la extracción de determinados recursos naturales, incluidos los cultivos de uso ilícito, que se estructura bajo la misma lógica.

Los departamentos que constituyen el suroccidente colombiano conforman un corredor de frontera que facilita la producción y el tráfico de drogas y armas a través de la costa nariñense; además, se erige en un territorio central para dinamizar el eje Andino de la IIRSA, ya que posibilita la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. Su geografía y más específicamente su orografía ofrece ventajas tácticas a los grupos armados pues les permite moverse con facilidad por las diversas zonas del territorio. (Observatorio Nacional de Paz, 2012a, p. 59)

paramilitar³⁵⁹, que se planificó en la Tercera Cumbre Nacional de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (1996) y en la cual se declaró el Sur de Colombia como objetivo militar. En esta dirección, el Bloque Sur Putumayo (BSP) desarrolló

una serie de labores de inteligencia cuyo objetivo era ubicar la estructura urbana de las milicias para eliminar las supuestas o reales bases de apoyo a la guerrilla en las cabeceras municipales y en los sitios importantes de comercialización de la pasta base de coca. (García, 2010, como se citó en Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2011, p. 28)

Los elementos señalados anteriormente coinciden con la percepción de las organizaciones sociales populares al ser preguntadas sobre las causas de la expansión del paramilitarismo en la región y las acciones emprendidas en las principales cabeceras municipales del Bajo Putumayo.

Nosotros pensamos que los paramilitares llegaron por la coca. Con la coca hubo mucha plata, entonces hubo poderío, que todavía lo hay. La guerrilla comercializaba y los paramilitares querían hacer lo mismo, tener el poderío y tener plata, pero ellos [paramilitares] se metieron de una manera muy violenta, matando a la gente. Creo que es por controlar la zona, por ver quién es el primero, ellos nunca lo han dicho, pero es lo que yo creo. (E9, Lideresa Comité de Víctimas del Tigre Progreso por la Paz, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

El conflicto entre los paramilitares y la guerrilla es por el narcotráfico. Se disputan las zonas de mayor fertilidad como el Valle de Guamuez, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo. (E11, Líder Mesa Regional de Organizaciones Sociales, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

En el Putumayo estaba la guerrilla y había logrado entrar a los municipios, hasta entraba a las casas. Eso [se refiere a la entrada de los paramilitares a comienzos del 2000 en el Bajo Putumayo] es un terreno abandonado por el Estado y eso fue lo propicio para que se generara ese tipo de rencor y como el ejército no lograba combatir a la guerrilla, se alió con los paramilitares, ellos tenían otra estrategia y lograron conseguir gran poder. (E12,

³⁵⁹ Autores como Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez (González, Bolívar, & Vásquez)z consideran que la presencia de las estructuras paramilitares en el Putumayo se puede comprender a partir de tres momentos diferenciados. El primero, comprendido entre 1987 y 1992. En este periodo se establecen grupos armados (los Combos y los Masetos) bajo el mando de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El mejicano”. Estos grupos estaban articulados al Cartel de Medellín y a los campos de entrenamiento militar situados en el Magdalena Medio. Entre sus actividades se encontraban la seguridad de los laboratorios de procesamiento de la coca, acciones de limpieza social, lucha contrainsurgente y en contra de los partidos y movimientos sociales y de izquierda, en particular, la UP. Un segundo momento, que abarca desde 1992 a 1997, caracterizado por la debilidad y el repliegue casi total de estos grupos, debido a la ofensiva de la guerrilla de las FARC en la zona del Bajo Putumayo. El tercer momento que identifican estos autores, se extiende desde 1998 al 2001. No obstante, lo podríamos alargar hasta el año 2006, con la desmovilización del BCB. Es en esta etapa cuando se presenta una irrupción fuerte del paramilitarismo en la región y la consolidación de su poder territorial. A esta periodización, es necesario agregar un nuevo momento de presencia paramilitar (2006-actualidad) a través de las mal llamadas Bacrim, resultado de un proceso de desmovilización parcial del paramilitarismo y la disputa de mandos intermedios por el control de las zonas de cultivo, procesamiento y comercialización de la cocaína.

Lideresa Mesa Campesinos del Municipio de San Miguel, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

El principal obstáculo para las organizaciones sociales es el paramilitarismo, lo demás es manejable. El paramilitarismo es una cosa que uno no espera y no se puede hacer resistencia, porque ellos manejan la filosofía del gobierno de que todo aquel que esté aquí tiene que ver con el narcotráfico o con el terrorismo, no hay posibilidad de dialogar, de concertar y decir por qué se hacen las cosas. No, ellos simplemente hacen las cosas. Los paramilitares respaldan las multinacionales o las empresas, mientras a las organizaciones sociales o campesinos se ven abusados. Uno se mete a esto por ver el abuso hacia los campesinos. Yo no estaba metido en nada de eso [se refiere a la organización social popular] pero me llamaron para hacer parte del registro y dije que sí. La gente me apoya, me respalda. Mi familia decía que no me metiera que me iban a matar, pero decidí correr el riesgo. (E16, Líder Organización de Productores-Cooperativa de Mineros, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

La creciente presencia de los grupos paramilitares es identificada por las organizaciones sociales populares como uno de los principales ejes de los conflictos socio-territoriales de la región, ya que la acción de estos grupos no se circunscribió solo al enfrentamiento armado, sino que alteró todo el conjunto de elementos que convergen en la reproducción social de las comunidades. Por consiguiente, la acción de estos grupos se tradujo no solo en una disputa violenta por el control del territorio y de zonas estratégicas, en donde las comunidades se encontraron en medio del conflicto, sino por la reconfiguración de los territorios a causa del control militar y social ejercido por estos grupos, el desplazamiento de la población, el despojo de las tierras, la desarticulación del tejido social, el control de la población así como de los cuerpos de las mujeres y jóvenes, y el aumento de los cultivos de uso ilícito, entre otros impactos identificados por los líderes y lideresas de la región³⁶⁰ (Observatorio Nacional de Paz, 2012a).

³⁶⁰ A diferencia de otras regiones de Colombia, como es el caso de los Montes de María, en el departamento del Putumayo el abandono de tierras fue mayor que el despojo de las mismas. Esta diferencia en el comportamiento de la dinámica del conflicto se debe a que el Putumayo ha sido una zona estratégica debido a la presencia de corredores de armas, sustancias químicas, comercialización de cocaína, además, de un territorio fundamental para el movimiento de tropas y de retaguardia del movimiento insurgente. Por lo tanto, la Unidad de Restitución de Tierras entiende por “tierras” “los predios concretos sobre los cuales las FARC, el narcotráfico y el paramilitarismo no tienen un especial interés económico y militar que haga a sus dueños susceptibles de expropiación”. Este sería el caso del departamento, por lo tanto, las acciones de los grupos armados se suelen dirigir al control de esos corredores, más que a la posesión de la tierra en sí misma. En este sentido, las acciones violentas que son más frecuentes en las organizaciones con los desplazamientos masivos, el confinamiento, los asesinatos selectivos, las masacres (CNMH, 2012, p. 24) Este comportamiento se puede entender a través de lo que Daniel Pécaut (2004) ha denominado la “desterritorialización” del conflicto, relacionada con la expansión del enfrentamiento armado, en donde se dificulta el control total del territorio. Esta característica no significa que no se haya ejercido un control parcial en determinados lugares. En el caso del Putumayo vemos esta diferencia la acción posterior de los paramilitares en las masacres de El Tigre y de El Placer.

Como hemos señalado, los primeros grupos paramilitares ingresaron en el departamento en 1997, momento en el que se conformó el BSP bajo la dirección de los hermanos Castaño (CNMH, 2015). Posteriormente, sería Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, el comandante que tomaría el relevo en la estructura armada³⁶¹. En un primer momento, los paramilitares provenientes del Urabá antioqueño, en donde recibían entrenamiento militar, se instalaron en el municipio de Puerto Asís (Bajo Putumayo). El comandante enviado para esta primera incursión fue Rafael Londoño Jaramillo, alias “Rafa Putumayo”. Los primeros centros de operaciones utilizados como base de estos grupos armados fueron la hacienda Villa Sandra y la finca Santa Clara, localizadas muy cerca de la base militar de Puerto Asís (Unidad de Justicia y Paz, como se citó en Ávila, 2014).

Las organizaciones populares del departamento estiman que la entrada de los grupos paramilitares fue permitida por la Fuerza Pública. En este sentido, manifiestan en diferentes momentos la coincidencia geográfica en la localización de los grupos paramilitares con las bases militares o estaciones de policía. Asimismo, apuntan a la permisividad de la Fuerza Pública ya sea por la omisión o acción directa de sus integrantes frente al despliegue de los paramilitares y a las acciones en contra de las comunidades. De otra manera, para las organizaciones es difícil comprender cómo en una zona con un alto despliegue militar del Estado, los grupos paramilitares se pudieron expandir y consolidar su dominio. Al respecto, reseñamos algunos de los testimonios de los líderes y lideresas de las organizaciones, en donde se establece esa oscura relación entre los paramilitares y el Ejército, en el marco de la lucha contrainsurgente y las razones que sustentan esta relación perversa:

Los actores son los paramilitares, ese es el mismo gobierno. Antes de los paramilitares era el propio ejército el que violaba los derechos humanos. Entonces, el ejército combatía al M19 y a otras guerrillas, pero en ese combate con el M19 se encontraban con los campesinos, los reunían y les preguntaban si eran colaboradores de la guerrilla y si no hablaban le cogía a uno de la lengua y se la cortaban. Cuando se logra hacer trámites y procesos [de denuncia] se termina acusando al gobierno y, para librarse de esas acusaciones el gobierno se vale de los paramilitares. En últimas, los paramilitares son paragobierno.

³⁶¹ Las tensiones existentes al interior de las AUC fueron evidentes en el control de la estructura paramilitar del BSP. A partir del año 2002, el comandante “Rafa Putumayo” se alineó con Carlos Mario Jiménez, jefe del Bloque Central Bolívar (BCB). Este cambio de “lealtades” se tradujo en una variación en la forma de actuar del BSP. Además de la lucha contra insurgente el frente se dedicó a actividades relacionadas con la economía de la droga: el cuidado de laboratorios de transformación de la hoja de coca, el cobro del impuesto al gramaje, la seguridad de las rutas de comercialización, en particular, hacia el Ecuador. Por otra parte, se intensificaron los secuestros como mecanismo de financiación y las estrategias de desaparición forzada, los cuerpos eran abandonados en los lugares en donde se cometían los crímenes. (Unidad de Justicia y Paz, citado por Ávila, 2014)

Está el gobierno, militares y paramilitares y la guerrilla como una forma de resistencia, es un problema nacional [...] Esos no son procesos claros [proceso de desmovilización de los paramilitares] que uno pueda explicar exactamente, pero uno ve que el gobierno continúa en las mismas, ya no se ve a los paramilitares de la mano con el ejército públicamente como era meses antes, ya no se ven así porque se han trasladado para otros lugares, pero hay otros grupos. (E11, Líder Mesa Regional de Organizaciones Sociales, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Considero que acá [se refiere a la zona del Bajo Putumayo] las comunidades estaban fortalecidas económicamente por los cultivos de uso ilícito. En esta parte del Putumayo se manejaba mucha plata, y como dicen que con la plata se puede hacer todo, y creo que el gobierno en aras de frenar eso permitió la llegada de los paramilitares, como con lo de las pirámides, el gobierno buscó la forma para que el afectado sea el pueblo. Yo considero que llegaron los paramilitares para desplazar la gente, para matar o perseguir, pero no para decir que dejáramos de cultivar la coca y brindar otra alternativa, lo mismo con las pirámides. (E16, Líder Cooperativa de Mineros, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

A finales de 1998, el BSP “había consolidado su presencia militar en los centros poblados ubicados en el corredor Villagarzón – Puerto Caicedo – Puerto Asís y en 1999 había iniciado su avance hacia los municipios Valle del Guamuez y San Miguel” (CNMH, 2015, p. 256). La consolidación del proyecto paramilitar en la región se erigió a través de la utilización de mecanismos violentos en contra de las comunidades, bajo el discurso de la amenaza insurgente. Las masacres fueron uno de los principales instrumentos de terror utilizados por estos grupos para el control de las personas, de las comunidades y para el manejo de los volúmenes de población en la expansión de su proyecto territorial.

En el momento de las entrevistas, las organizaciones y las comunidades se mostraron abiertas a hablar de las experiencias violentas vividas. Esta apertura se debió en mayor medida a que el diálogo se desarrolló en el marco del trabajo de la organización Planeta Paz. De esta manera, los líderes y lideresas compartieron sus experiencias frente a las acciones militares cometidas en los centros más poblados del municipio del Valle del Guamuez: El Tigre, La Hormiga y El Placer. En particular, las masacres cometidas en la inspección de policía de El Tigre.

La primera incursión paramilitar en esta inspección del Valle del Guamuez fue llevada a cabo por aproximadamente 150 hombres el 9 de enero de 1999, en donde masacraron a 29 personas y desaparecieron a otras más, sin determinar el número exacto de víctimas ya que no han sido encontrados los cuerpos³⁶² (CNMH, 2010, p. 61). Las víctimas de El Tigre han cuestionado en

³⁶² Durante el año 1999 se registraron 13 masacres en el departamento del Putumayo, llevadas a cabo por los grupos paramilitares en su estrategia de expansión territorial en el sur del país.

repetidas ocasiones la responsabilidad de la Fuerza Pública, en razón a que la noche de la incursión paramilitar, la Brigada 24 del Ejército instaló un retén en un punto cercado a la inspección de policía, llamado Santana. Aún se desconoce los mandos responsables que ordenaron la disposición del retén y la omisión de socorro a las víctimas (Sánchez, 2019).

A continuación, se reproduce el relato de una de las lideresas del *Comité de Víctimas de El Tigre Progreso por la Paz*, en la que se describe la actuación de los paramilitares. En el relato se aprecia cómo estos grupos actuaron en contra de toda la comunidad generando el terror colectivo. No fueron asesinatos selectivos en contra de personas que consideraban auxiliadores de la guerrilla, fueron actos violentos indiscriminados, cuyas víctimas fueron escogidas al azar. La masacre fue utilizada como un dispositivo de poder sobre los cuerpos para controlar a la población y desactivar el tejido social y comunitario. “La estigmatización como “pueblo guerrillero”, soportó este accionar violento, convirtiendo a sus pobladores en objetivos militares”³⁶³ (CNR, 2011, p. 11).

La masacre fue el 9 de enero del 99 a las once de la noche, nos hicieron formar... hombres y mujeres a un lado, sacaron a todo el mundo de su casa, hombres en pijama, ropa interior, porque no nos dejaban ni vestir. Comenzaron: 1, 2 y 3, nos hicieron acostar en el suelo. 1, 2 y 3, salga usted, al tercero lo sacaban. No había lista, ni lista en mano, ni nada, los iban metiendo al carro. Nosotros creíamos que se los llevaban porque cogían hacia el puente [puente del Río Guamuez], por eso siempre hacemos la conmemoración en el puente. ¡Ah sorpresa! cuando al otro día los encontramos ahí en el puente, los rajaban vivos y nosotras esa noche con una aguja los cosíamos, luego los pusimos todos acostados. No se imagina el dolor de las mamás, viendo a sus esposos, a sus hijos, y nosotras con una aguja capotera, los acostamos en la casa de acción comunal. Cuando llegó la Cruz Roja eran como con 29 ataúdes.

Pero yo me preguntaba, ¿por qué cosí esos muertos?, duré tres días mal, pero las cosas se dieron así y el día que llegaron los paramilitares a mi casa, yo casi me muero. De mi casa al pueblito hay que caminar y había dos motos afuera. Llegué a mi casa y veo al señor que nos acompaña en una esquina, lo llamé y me señaló hacia dentro, qué sorpresa cuando vi que tenían a mi hijo y a mi marido amarrados al frente. Yo traía carne para el almuerzo, yo la bote y grité, mi marido dice que grité pero yo no recuerdo, cuando viene un negro y me pone un revolver y me dijo: “no señora, no grite, lo que pasa es que nos queremos llevar a su hijo y a su esposo”. Yo dije, me mataron, yo me moví y los agarré a ellos y les dije: “pues nos llevan a los tres, se va mi esposo, se va mi hijo y me voy yo”, los cogí, se vino el negro, mi marido me decía que me quitara, me toca el negro y me dice “eres una berraca, suéltelos”, sueltan a mi marido y a mi hijo, yo gritaba de la alegría.

³⁶³ La subregión del Bajo Putumayo tradicionalmente ha sido representada como un lugar habitado por colonizadores, sin un sentido de pertenencia al territorio, generalmente dedicados a actividades ilícitas, bien sea por su relación con la guerrilla de las FARC o con grupos de narcotraficantes (Ramírez, 2001, p. 21). Este tipo de imaginarios fueron utilizados por los paramilitares para justificar las acciones violentas en contra de las comunidades y ejercer el control militar del territorio.

Ya mi hijo va a la Universidad Nacional, le está dando al estudio, está estudiando ingeniería civil, está en Leticia (Amazonas), él quedó traumatizado, si en ese momento no llego, pierdo a mi esposo y pierdo a mi hijo. A los tres días hubo reunión en el pueblo y teníamos que ir, yo no quería ir, cuando veo al negro en esa reunión. Le pregunté por qué se iba a llevar a mi esposo y a mi hijo, entonces dijo: “yo pido excusas, de pronto me he metido a su casa de forma atrevida, pero felicito a las mujeres que dan la vida por su esposo y por sus hijos” yo lo miraba y me preguntaba, este señor por qué hace esto. Entonces, cogió a un muchacho y lo mató delante de todos. Después de pedir excusas, llamó a un negrito que había y lo mató, ya comienzan esas mujeres a decir, “a mi casa entró anoche, a mi casa entró ayer...”. (E9, Lideresa Comité de Víctimas de El Tigre Progreso por la Paz, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Como se aprecia en el relato, los paramilitares ejercieron el control de la población a través de las incursiones militares violentas. Es así como en el año 2001 y 2003 se realizaron otras dos masacres que siguieron el mismo patrón de la efectuada en 1999. En palabras de un habitante, los paramilitares entraron a medianoche y “dijeron que ellos llegaban al Tigre a limpiar el pueblo de gente mala... ¡Pa’ ver que los malos eran ellos! Ahí fue que ya se quedó esa gente, y empezó otro calvario para nosotros, empezó la zozobra, el miedo y hasta la vergüenza” (El Espectador, 2020).

En el Tigre pasaron tres masacres duras. Una fue el 9 de enero del 99, nosotros mismos recogimos los muertos a las once de la noche, los habían rajado y tirado al río, la otra fue el 23 de junio del 2001 y la otra fue el 17 de diciembre del 2003, esa fue la última.

Esa noche estaban tres personas jugando naípe, dijeron: “venga, usted y usted, el que más rápido corra”. Ese día había llegado un muchacho que estaba estudiando en Pasto, había venido a ver la mamá, porque estaba haciendo la universidad, lo pusieron a correr y luego a todos tres los mataron en medio de la gente mirando. Le mataron el hijo a esa señora, él estaba haciendo el primer semestre de la universidad. Ella quedó en un estado... nosotras la desvestimos, la bañamos, porque entró en un choque tenaz. Así a los tres, el que más corra...y los mataron los paramilitares. (E9, Lideresa Comité de Víctimas de El Tigre Progreso por la Paz, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Es importante señalar que las primeras operaciones militares del FSP se realizaron en noviembre de 1998, en los municipios de La Dorada, San Miguel y El Placer, pertenecientes a la inspección del Valle del Guamuez. Tras los enfrentamientos con la guerrilla de las FARC, los paramilitares llevaron a cabo la masacre en El Placer de manera simultánea con la incursión de La Dorada (7 de noviembre de 1999), para después instalar su base militar en El Placer hasta su desmovilización en el año 2006³⁶⁴. Según los habitantes de la zona, esta era una masacre anunciada

³⁶⁴ El Placer es una de las inspecciones de policía que conforman el municipio del Valle del Guamuez. Esta zona ha sido uno de los epicentros del conflicto armado en el departamento del Putumayo. Se caracteriza por ser un territorio de frontera, de colonización y de cultivos de uso ilícito. Estas características han propiciado la disputa entre diferentes actores armados, que han tratado de imponer diferentes órdenes sociales, políticos y económicos. La masacre de El

ya que fue posterior a la de El Tigre. En la incursión, los paramilitares pintaron las casas con mensajes que anunciaban la intención de dominio del territorio: “Nosotros llegamos y nos quedamos”, “Fuera guerrilleros y colaboradores de la guerrilla”, “Fuera colaboradores y sapos de la guerrilla”, “AUC presentes” (CMH, 2012, p. 10). En esta línea de acción, se conformaron milicias paramilitares que actuaron en las cabeceras urbanas, como es el caso de La Hormiga, y las acciones llevadas en las veredas La Esmeralda, Los Venados, Las Brisas, La Grada, San Isidro, Costa Rica, El Bañadero, Las Vegas, Los Ángeles y Puerto Amor (Ávila, 2014).

Las masacres llevadas a cabo por los paramilitares representaron, a finales del siglo pasado y comienzos del presente, una constante en las estrategias de acción violenta extrema de estos grupos con el objetivo de establecer no solo un dominio territorial y el control de la población, sino la desarticulación por completo del tejido social y comunitario a través de dispositivos de poder corporales³⁶⁵. Las masacres fueron la “carta de presentación” de estos grupos en los lugares donde pretendían expandir su proyecto político-militar (GMH, 2013). Esta práctica de extrema crueldad puede ser entendida como una acción que pretendía “purificar” a una comunidad que ha sido constantemente estigmatizada por estar situada en una zona de retaguardia insurgente. Por consiguiente, la vida de los habitantes de estas comunidades se consideraba prescindible en la medida que se podía considerar como una anomalía “social” en un orden dominante³⁶⁶.

No olvidemos, que las mujeres fueron las sobrevivientes, los hombres los asesinados, las mujeres las que recogieron, cosieron y enterraron los cuerpos. Estos hechos de extrema crueldad contra la población no combatiente se corresponden con una lógica militar en la que el adversario

Placer se enmarca dentro de la estrategia de expansión territorial de los paramilitares, con el objetivo de expulsar a las FARC y hacerse con el control del negocio del narcotráfico. A diferencia de otras masacres, el objetivo no fue la expulsión de la población, sino el control de la misma, a través de la instalación de su base militar que se mantuvo hasta el año 2006. La implantación del orden paramilitar afectó de manera dramática las relaciones sociales de la comunidad, instaurando un repertorio de violencia según el género, basado en el terror, las amenazas, el confinamiento, la estigmatización, la violencia sexual y la regulación de todas las relaciones sociales (CNMH, 2012).

³⁶⁵ Un elemento para el análisis de las dinámicas del conflicto armado es la centralidad de la población civil y la utilización de la violencia extrema por parte de los actores enfrentados. Estas características han sido identificadas como propias de las guerras contemporáneas (Kaldor, 1999; Bauman, 2003; Pécaut, 2003; Nahoum-Grappe, 2002).

³⁶⁶ Al respecto, Elsa Blair (2004) en su análisis sobre este tipo de acciones violentas en el marco del conflicto en Colombia señala que las masacres:

En términos de sus significaciones y con respecto a la forma de ejecución de la muerte, la masacre es portadora de un grado mayor —vale decir excesivo— de violencia, por los niveles de crueldad y de sufrimiento que conlleva, asociados a la mutilación y a la manipulación de los cuerpos. Los victimarios hacen del cuerpo de la víctima un “lugar”, un escenario de ejecución del ritual violento. Y el cuerpo es, no sólo su materialidad, sino que está cubierto de significaciones culturales [...] Estamos ante una violencia inscrita sobre los cuerpos, pero con efectos e implicaciones en otra dimensión: la de la subjetividad de los individuos y el sentido social que se construye en la interrelación de esas subjetividades. (p. 172)

no es un “igual”, un ejército con homologada capacidad bélica; el enemigo es la población civil contra la que se ejerce una violencia prolongada (Blair, 2010). El “otro” sobre el que se ejerce el poder, termina siendo “deshumanizado” y su inferioridad “naturalizada”, esta lógica les permitió a los victimarios ejercer actos de extrema crueldad sobre los cuerpos de las personas, como parte de un castigo colectivo.

De esta manera, la violencia extrema utilizada permeó todas relaciones sociales e individuales, todos los cuerpos y los lugares. Por ello, la utilización el río como “cementerio” y lugar de desaparición forzada terminó impregnando de muerte un espacio considerado de vida, en términos de movilidad entre poblaciones, punto de encuentro de las mujeres, el lugar en donde se pesca, el espacio que permite la sobrevivencia de las comunidades, entre otras actividades de la reproducción social³⁶⁷. Esta transformación del imaginario del territorio, de vida hacia la muerte, lo expresa una de las lideresas de El Tigre: “el río cuando se bañó en sangre con todo lo que tiraron, la gente dejó de pescar, ahora la gente está pescando, eso es como si le echaran veneno al agua, eso es como cuando fumigan”. (E9, Lideresa Comité de Víctimas de El Tigre Progreso por la Paz, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Las formas de violencia ejercida conducen a un disciplinamiento y control de los cuerpos para su sometimiento (Blair, 2010), a los nuevos órdenes impuestos por los grupos armados. Por lo tanto, se desarticulaban desde el espacio micropolítico (la escala del cuerpo) las redes comunitarias que son constitutivas de los territorios (escala de lo local)³⁶⁸. Asimismo, es importante señalar los repertorios de violencia según el género de la población. La violencia sexual

³⁶⁷ En el proyecto *Ríos de vida y muerte* del portal Verdad Abierta, se señala que la desaparición forzada en los ríos ha sido una práctica recurrente de los actores armados en Colombia, en particular, de los grupos paramilitares que serían los responsables del 68% de los casos estudiados. De los 44 ríos investigados, en 40 de ellos los paramilitares emplearon esta práctica violenta. En 18 de los afluentes, “los grupos armados desaparecieron a sus víctimas de manera sistemática, torturándolas (16 ríos), señalándolas como supuestas auxiliadoras de sus enemigos (19 ríos), y manipulando sus cuerpos de maneras atroces e irracionales para evitar que flotaran en el futuro (20 ríos)” (Verdad Abierta, 2018b).

³⁶⁸ Elsa Blair utiliza el término micropolíticas corporales para comprender

las estrategias de poder que se ponen en funcionamiento más allá —o más acá— de las políticas estatales; son pequeños espacios reticulados que se tejen en los intersticios de las grandes estrategias políticas —espacio macropolítico—, en conjunción o disyunción con ellas. (García, 2000, como se citó en Blair, 2010, p. 49. Cursivas agregadas)

Tales estrategias utilizan la violencia en dos sentidos: “una parcial (torturar, infligir dolor físico y psíquico; fragilizar la potencialidad defensiva del otro, provocando todo tipo de sufrimiento), y una total (provocar la muerte) (Berezin, 1998, como se citó en Blair, 2010, p. 49. Cursivas agregadas).

Para la autora, estas prácticas constituyen una economía del poder que regula las relaciones de dominación en un conjunto social, a través de mecanismos de disciplinamiento y control de los cuerpos, para su subordinación. En línea con lo que Foucault denomina la forma disciplinaria del poder.

estuvo presente en las incursiones paramilitares, en donde el cuerpo de la mujer fue utilizado como botín de guerra. Al respecto, en el siguiente testimonio se señala las consecuencias de este tipo de violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito familiar.

Hay esposos que ya dejaron a su esposa o al contrario y fuera de eso, se ve la educación que le están dando a sus hijos. Ahí también se está formando el conflicto y no creo que sea tanto el conflicto familiar sino de lo que han vivido. Yo hablaba con una señora que le pegaba a unos niños pequeños y le preguntaba por qué lo hacía y ella me contestaba: “es que ni yo sé, me acuerdo cuando me violaron y me cogieron y creo que mi rabia la saco con ellos, por eso les pego”, entonces también es a raíz de la situación, eso es una consecuencia que se ha impregnado en ese conflicto armado hacia los hogares, la familia, la separación de hogares ha llegado a eso. (E9, Lideresa Comité de Víctimas de El Tigre Progreso por la Paz, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Por otra parte, nos parece importante señalar que otro de los dispositivos de control utilizados por los grupos paramilitares fue el desplazamiento forzado de la población, el cual es señalado en varias de las entrevistas realizadas, y se encuentra asociado a acciones militares de estos grupos como fueron las masacres, las desapariciones forzadas, las amenazas, el reclutamiento forzado de menores, etc. El desplazamiento implica una violencia extrema en tanto las personas se ven obligadas a dejar atrás su hábitat, su morada, sus sueños, a abandonar su territorio y, por tanto, sus proyectos vitales y comunitarios.

En el caso de la masacre de El Tigre, el desplazamiento fue uno de los impactos de la acción violenta propio de la táctica militar de tierra arrasada (CNRR, 2011). No obstante, la comunidad que decidió quedarse al no tener otras opciones se encuentra en un proceso de resistencia y de defensa de su territorio, con la finalidad de atraer a otras familias que tuvieron que huir del terror paramilitar. Así lo relata la líder del movimiento de víctimas:

Nos quedamos tres familias de trescientas noventa y nueve. Las tres familias salimos por ocho días porque no sabíamos qué hacer, y luego regresamos. Las familias que se fueron y les da miedo volver porque temen que los puedan matar, nosotros les decimos que vengan que ya estamos organizados. Estamos también haciendo un censo, porque en el comité queremos saber, cuántos viven en Pitalito, en Pasto, en Bogotá. Entonces es un censo a nivel familiar, para ver si podemos ir donde ellos y contarles lo que estamos haciendo y transmitir esa fortaleza. Aunque se hayan ido, aquí tienen su tierra, su casa. La mayoría de familia huyeron hacia Pitalito. En Pasto hay más o menos 90 familias allá, también en Popayán. Ayer me llamó el padre y me dijo que también hay censo en Cali y Bogotá. Es un trabajo duro y de valor. Algunas veces nos llaman y nos saludan, les contamos lo de los proyectos, pero dicen que les da miedo, por eso es el proceso, para ver si podemos visitarlos. (E9, Lideresa Comité de Víctimas de El Tigre Progreso por la Paz, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

El líder de la Asociación de Desplazados de Puerto Caicedo (ASODESCA) identifica en su relato los periodos de mayor expulsión de la población, que coincide con la consolidación del proyecto paramilitar en el departamento, y con los repertorios de acción más violenta de estos grupos. En los ejemplos señalados por este líder, se aprecia cómo en algunos puntos del departamento, los paramilitares generaron un proceso de desterritorialización por medios violentos, para posteriormente reterritorializar e instaurar su proyecto armado. El territorio fue ocupado literalmente por este actor armado y las comunidades fueron despojadas, no solo de la tierra, sino también, de sus proyectos vitales. Los cambios en el territorio, así como los imaginarios de muerte que pesan sobre estos lugares, dificultan los procesos de retorno de las comunidades.

El periodo de mayor desplazamiento se concentra en 2001, 2002, hasta el 2005, creo que el mayor impulso que hubo de desplazamiento fue en Puerto Caicedo, en El Tigre, La Dorada, San Miguel, Puerto Asís. De ahí para acá en todos los municipios ha ido saliendo gente día a día, también ha habido algunos desplazamientos masivos como el de Tigre, además de masacres muy fuertes que han obligado a la población desplazada a huir de sus territorios. En Puerto Caicedo, las veredas Quebradón, La Pedregosa, Playa Rica, entre otras que quedaron solas. Los grupos armados construyeron viviendas ahí, entre los años 2003 y 2004

La causa del desplazamiento fue la entrada de los paramilitares a Puerto Caicedo y desde ahí surge el gran desplazamiento de todos los sectores porque la violencia invadía terriblemente al Putumayo. Las familias llegan a Mocoa, aunque algunos pasan de largo porque las amenazas fueron muy fuertes y hubo muertes también, porque no han sido sólo amenazas, han sacado dos o tres de la familia y los han matado, los que quedaron se fueron lejos.

En este momento las personas no quieren recoger las tierras. Se sienten totalmente discriminados por haber abandonado su tierra y cuando vuelven no se encuentran lo que dejaron. El rancho en que vivían ya no existe, las plataneras, los potreros, todo ya es montaña. Algunos ranchos fueron utilizados para matar y torturar a las personas. Eso es muy duro. (E8, Líder ASODESCA, 7-8 de noviembre de 2010)

En la línea planteada por el líder de ASODESCA en el siguiente testimonio se identifican los principales centros urbanos del departamento como focos de recepción del desplazamiento forzado, que durante la década del dos mil, ha sido continuo.

Mocoa por excelencia es el punto de recepción, Puerto Asís también, Mocoa ha aumentado la población casi el doble en los últimos cuatro años. Los principales puntos de expulsión: Puerto Guzmán, el Valle de Guamuez, las zonas rurales de Orito, las más cercanas a donde había presencia de coca, comunidades indígenas de estas regiones y por el tema alimentario empieza a aparecer gente en las riberas o cerca al río Putumayo, entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo, en Tepeye, en Senseya. Leguízamo ha comenzado a ser un punto fuerte de recepción de desplazados por ese tema. (E10, Fundación Ecotono Putumayo, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

De esta manera, las estructuras paramilitares lograron tener presencia en casi todas las cabeceras municipales del Bajo Putumayo y en parte del Medio Putumayo. Tal y como se señala, el asedio de los paramilitares a El Tigre y otras cabeceras del Bajo Putumayo intensificó en el periodo del 2001 al 2006 en el que estos grupos lograron consolidar el dominio territorial en los centros urbanos de esta subregión (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, La Dorada, El Placer). Es importante señalar, que la consolidación paramilitar en el Putumayo coincide tanto con el periodo de ejecución del Plan Colombia y de la Política de Seguridad Democrática del gobierno Álvaro Uribe, como con la extensión de los cultivos de uso ilícito, los laboratorios de procesamiento y la construcción de infraestructuras para la comercialización de la cocaína, como son las pistas de aterrizaje.

Los grupos paramilitares en este periodo de tiempo ejercieron un control social, económico y político permanente sobre las comunidades con el beneplácito de la Fuerza Pública. (CNRR, 2011) En los relatos de los desmovilizados recogidos por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se señala que

los paramilitares fueron ‘la ley y el orden’ en esta zona del país ante la ausencia de la fuerza pública. El Frente fijó reglas y castigos para la población civil, que iban desde barrer una calle hasta la muerte para los acusados de ser violadores, ladrones o consumidores de drogas³⁶⁹. (Unidad de Justicia y Paz, como se citó en Ávila, 2014, p. 54)

A mediados de la década de 2000, las dinámicas de las estructuras paramilitares en el Sur de país cambian, debido a la desmovilización de algunos grupos y comandantes en el marco de la llamada Ley de Justicia y Paz. En este contexto, el FSP que dependía del Bloque Central Bolívar, se desmovilizó el 1 de marzo de 2006 en Puerto Asís. Según consta en el acta de desmovilización, el frente se puso a disposición de “Macaco” y entregó su arsenal militar (Unidad de Justicia y Paz, como se citó en Ávila, 2014, p. 55). No obstante, como se señala en la segunda parte de esta tesis, el proceso de paz con los paramilitares no logró desarticular por completo sus estructuras. Por consiguiente, se generó una significativa fragmentación del narcotráfico que provocó la disputa entre pequeños grupos, atomizados en el territorio nacional, por el control del negocio (GMH, 2013; Echandía, 2013). Esta fragmentación generó el fenómeno de las mal denominadas Bacrim.

³⁶⁹ La Unidad de Paz y Justicia de la Fiscalía en su reconstrucción histórica del BSP en el sur del país, calcula que este frente asesinó aproximadamente a 2.500 personas y dejó alrededor de 5.500 víctimas (Unidad de Justicia y Paz, como se citó en Ávila, 2014, p. 54).

En el caso del departamento del Putumayo, esta nueva generación de paramilitares se agrupó principalmente en dos formas organizativas: los Rastrojos y los Urabeños. Los indicios de la actividad de estas agrupaciones se sitúan aproximadamente en el año 2010. Sin embargo, las organizaciones populares consultadas apuntan a que el inicio de la actividad de estos actores armados es anterior. En este punto, es importante señalar la dificultad para establecer una fecha exacta de conformación de las Bacrim, debido a que después de la desmovilización del FSP, los mandos medios y grupos de narcotraficantes entraron en una disputa por el control de la economía de la droga.

En lo que respecta a la organización de estos nuevos grupos, nos encontramos que no existe un mando centralizado y único que coordine la estrategia militar en el departamento, como podría ser el papel desempeñado por los hermanos Castaño en las AUC o de “Macaco” en el marco del BCB. El repertorio de violencia utilizado por estos grupos transitó de las masacres y las ocupaciones de territorio, como en el caso de El Tigre y El Placer, respectivamente, a asesinatos selectivos, generalmente de líderes y lideresas de organizaciones sociales populares. Por otra parte, destaca un elemento de continuidad que se refiere a la lucha contrainsurgente, el control de la población a través del miedo, y una coincidencia en las zonas de actuación del FSP. Las organizaciones populares perciben estos cambios de estrategia militar de la siguiente manera:

En cuanto a los grupos paramilitares, es claro que no se han desmovilizado en el marco del proceso que viene haciendo el gobierno de Uribe, siguen activos, lo que pasa es que ya no están articulados bajo un mando político centralizado y con una estrategia política común. Se han reorganizado en pequeños grupos que el gobierno ha denominado “bandas emergentes” o “Bacrim”, pero son los mismos paramilitares que actúan bajo otra estructura. Hacen presencia en el Bajo Putumayo, en Orito, San Miguel, Valle del Guamuez. No son tan fuertes como antes del proceso, pero siguen teniendo presencia y violando derechos humanos, la estrategia ha cambiado ya no realizan masacres sino muertes selectivas a dirigentes sociales y comunitarios. Atacan los procesos sociales y colectivos como la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, especialmente entre los años 2006 y 2007. (E18, Líder ANUC, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Después de la “desmovilización”, la estrategia son las muertes selectivas, en contra de las organizaciones sociales. A nosotros nos mató un líder. No es tan visible, por lo menos en Orito, es que hubo un tiempo que ellos se paseaban tranquilos por todas partes, pueblos, carreteras, etc. (E19, líder Mesa Organizaciones Campesinas, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

El presidente [Álvaro Uribe] dice que ya no hay paramilitares, que ya son desmovilizados y eso no es verdad; ellos llegan, permanecen un rato, vienen, pero como uno no sabe quién es quién, apenas se ve gente desconocida y decimos que hay que poner atención. Ahora ya no son tan visibles, ahora hacen muertes selectivas. Antes eran grupos armados y nos les importaba si los estaban mirando, si era el ejército, la policía, el alcalde.

Ahora llegan a las casas y se meten, cuando uno se da cuenta es porque escucha que han asesinado. La guerrilla se la pasa en el corregimiento de Puerto Colón, se tiran bombas el uno al otro y la población vive en medio. Hace aproximadamente seis meses enviaron un cargamento de explosivos que explotó al lado de la Marina y desbarató cuatro casas y afortunadamente no hubo víctimas, pero se mantienen en ese conflicto. En La Dorada les queda difícil porque el terreno es plano, pero en San Miguel son lomas, en el hueco es donde pelean, también es que en La Dorada hay más presencia de Fuerza Pública, en Puerto Colón también, pero como allá son lomas se presenta con más facilidad para ellos. Fuera de eso, hay delincuencia común. (E12, lideresa Mesa Campesinos del Municipio de San Miguel, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Ellos están de civil [se refiere a las Bacrim], ya no se ven exactamente, en las matanzas no se sabe quién mata. Si antes cogían a alguien y se lo llevaban y todo el mundo oía y sabían que un mafioso tenía una laguna con cocodrilos y ahí moría, eso lo hacían los paramilitares. Antes era muy descarado el proceso de violación de los derechos humanos, ahora es oculto, pero siguen los asesinatos. (E11, Líder de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

[A la pregunta sobre la existencia de bandas criminales en la región este líder señala lo siguiente] Si bien por ahí existen esos grupos, se conoce de sus consecuencias, de las muertes selectivas. No son tan evidentes. En la alcaldía sacaron a la gente cerraron la puerta y me dijeron cómo eran las cosas. Eso fenómeno lo conocí de manera concreta, ahora está muy matizado, uno tiene conocimiento de muertes, pero no están a la luz del día y eso implica que son menos, pero parece que son más contundentes, eso es lo que se puede notar. Son grupos que se han organizado, que hacen secuestros, violaciones, amenazas, a personas selectas y eso sería lo que han venido haciendo hasta el momento. Son bandas al servicio del narcotráfico. (E8, Líder ASODESCA, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Por otra parte, las víctimas de la masacre de El Tigre denuncian las falencias de los procesos de verdad, justicia y reparación, que se adelantaron en el marco de la Ley de Justicia y Paz. En este sentido, plantean que han primado los derechos de los victimarios sobre los de las víctimas, y que han sufrido procesos de revictimización en el marco de los procesos adelantados por la Comisión Nacional de Reconciliación. Los testimonios de los paramilitares han sido parciales por lo que no han contribuido al esclarecimiento de los hechos violentos ni a la reparación integral de las comunidades.

Nosotros estuvimos en dos versiones libres, pero me pesó en el alma, nosotros fuimos a las versiones de la Hormiga. Allá llegamos veinte mujeres quienes habían perdido sus esposos, conseguimos transporte por nuestra cuenta y qué sorpresa cuando se para a hablar Susana, y estaba JP por vía satélite, y ella le pregunta: “JP por qué mató a mi esposo, por qué mató a mi hijo”. Ella se puso a llorar. El abogado que estaba sentado dice “le pido a la señora que acaba de hablar más respeto con mi defendido”. Ya yo dije, nos vamos, con esa respuesta del abogado... el tipo se quedó quieto y el que habló fue el abogado.

Yo le pedí el favor a la gente del gobierno que lleva este proceso que fuera un psicólogo, porque no era fácil enfrentarse a su victimario. Después, nos invitaron a Puerto Asís a la versión libre de alias “Tomate”, para hacer el acompañamiento de unas mujeres. Cuando llegamos nos dijeron que ya iba a comenzar “Tomate” a hablar. Cuando comenzó le preguntaron al señor por la masacre en la comunidad de El Tigre. Nos presentaron como una comunidad que había perdido sus hijos y esposos e íbamos en búsqueda de una respuesta. El hombre dijo: “Yo saludo desde aquí a esas mujeres valientes, que estén hoy en día organizadas, reclamando, pero me gustaría decirles que yo no estuve en la masacre, yo llegue dos años después y crean mujeres que lo que pasó en El Tigre no se compara con nada”. Ya le pregunté si él tenía conocimiento de quién fue, él dijo: “Si y no, sé de unas personas que estuvieron, yo voy a preguntarlo y en la próxima audiencia les comunico, hasta luego”. En eso quedó todo. Las versiones libres son falsas, están protegiendo a los victimarios y no a las víctimas. Si va a venir otro que lo haga, pero nosotras ya no nos exponemos. (E9, Lideresa Comité de Víctimas de El Tigre Progreso por la Paz, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Como hemos señalado anteriormente, la nueva generación de paramilitares continúa activa en la región. La acción contra las comunidades es evidente, aunque no en la misma proporción y con el mismo repertorio de violencia. No obstante, sus objetivos fueron recuperar el vacío de poder territorial dejado por la desmovilización de los comandantes paramilitares, controlar el negocio de la droga y competir por la captación de las rentas ilegales, así como por los beneficios que se obtienen de la infiltración en la economía legal, a través del lavado de activos y otros instrumentos³⁷⁰.

Al respecto, las organizaciones sociales del sur del país, señalan que no comparten ni reconocen el discurso gubernamental sobre el fenómeno de las bandas emergentes. Consideran que son grupos paramilitares que continúan su accionar en el territorio, despliegan acciones militares, mantienen relación con la Fuerza Pública y con otro tipo de instituciones sociales y políticas, ejercen control social sobre las comunidades y las organizaciones sociales populares. En este sentido, plantean que el gobierno de Santos debe reconocer estos hechos y la sistematicidad de los asesinatos colectivos (Observatorio Nacional de Paz, 2011).

Por otra parte, en el ejercicio de recuperación de poder territorial, agrupaciones como “los Urabeños”, “los Rastrojos” o “la Constru”, desplegaron una serie de dispositivos de control sobre los habitantes del departamento y las estructuras organizativas sociales. Las y los líderes señalaban que se puede observar un *modus operandi* que ya es conocido en la región; primero se realiza una

³⁷⁰Las organizaciones sociales consultadas en este estudio señalan la presencia de “nuevas” organizaciones paramilitares en los municipios de Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón. La identificación de las zonas de acción coincide con el estudio realizado por la organización INDEPAZ (2012).

limpieza social, contra los cuerpos que consideran “inferiores” y que no se ajustan a la norma social, para después atacar contra los miembros de las organizaciones. Ejemplo de ello son las advertencias lanzadas por “Los Urabeños” en las que se señalaba una serie de medidas para la restricción de la movilidad, indicaciones sobre los comportamientos permitidos, delimitación de su área de influencia en razón a la comercialización de coca, entre otros elementos. Este tipo de advertencias coincidieron en el tiempo con la convocatoria del paro agrario en agosto del año 2013 (Ávila, 2014).

8.3. El control guerrillero en el Putumayo

En el trabajo de campo, las organizaciones sociales no identificaron de manera clara la acción del movimiento insurgente como uno de los ejes de conflictividad en la región. Es decir, el conflicto armado aparece como un elemento que vertebra la conflictividad en el departamento, pero las organizaciones estimaban que la presencia y los repertorios de violencia de los actores armados regulares y prosistémicos eran los que afectaban de manera más acuciante a las comunidades. De esta manera, realizaron una distinción entre las formas de actuación de los diferentes actores armados.

Por otra parte, la precaución que se percibe en la conversación con los líderes y lideresas sobre la acción de la guerrilla en el departamento, se puede relacionar con la presencia continua de las FARC, incluso en el momento en que se llevó a cabo el trabajo de campo. En este sentido, el asentamiento de la guerrilla en el territorio por más de 35 años, permeó las relaciones cotidianas de las comunidades rurales. Este es un hecho que no se puede desconocer, por lo tanto, se crearon subjetividades locales compartidas. En este contexto, nos parece pertinente señalar algunos elementos de la acción insurgente en el departamento, que nos permiten tener una fotografía de las dinámicas armadas y de la conflictividad social.

La presencia del movimiento insurgente en el Putumayo se remite a la década de los ochenta del siglo pasado. Aunque, guerrillas como el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) tuvieron alguna presencia en la década señalada y a inicios de los

años noventa, sin duda la guerrilla que tuvo una mayor influencia en el departamento ha sido las FARC-EP.³⁷¹

Las FARC-EP llegaron al Putumayo en la década de los ochenta del siglo pasado. La presencia de esta guerrilla se sitúa en un periodo anterior al auge de los cultivos de coca en la región³⁷². La expansión y consolidación de las FARC-EP, se realizó en el marco de las decisiones adoptadas por la Séptima Conferencia llevada a cabo en 1982. En este encuentro se decidió una estrategia de expansión basada en el desdoblamiento de los frentes que se encontraban activos, hasta llegar a un frente por departamento. Una de las zonas priorizadas para la consolidación guerrillera fue el Putumayo, caracterizado por ser un territorio estratégico para la confrontación armada, zona de frontera con el Ecuador, corredor que conecta los departamentos amazónicos con el Pacífico y lugar histórico de colonización. Los frentes y su radio de acción en el departamento se señalan en la Tabla 2. Al respecto, es importante apuntar que el conjunto de estas estructuras conformaba el Bloque Sur, uno de los más poderosos al interior de la organización.

³⁷¹ La presencia del M-19 en la zona sur del país se da a partir de los lineamientos de la Sexta Conferencia llevada a cabo en 1978, en la cual se decide la creación de móviles rurales para apoyar la lucha insurgente urbana. Las primeras estructuras rurales se crearon en el departamento del Caquetá que, posteriormente daría paso a la conformación del Frente Sur y al desarrollo de móviles rurales en el Putumayo. Los municipios de mayor incidencia de esta guerrilla fueron Mocoa y Villagarzón (Artunduaga, 1998). La acción del EPL en el departamento comprende la década de los ochenta e inicios de los noventa, periodo en el que fortalece su presencia en zonas de colonización y petroleras (Echandia, 1998). En 1991, la organización se reincorpora a la vida civil después de un proceso de negociación con el gobierno. El frente Aldemar Londoño actuó en los municipios de Mocoa, Puerto Asís y Valle del Guamuez.

³⁷² Los cultivos de coca en Colombia se extendieron desde la zona oriental del país hacia el occidente, ocupando las zonas de colonización de la vertiente del Amazonas. Este proceso se inició a mediados de la década de los setenta, aupado por los comerciantes de esmeraldas, que conocían las características de la comercialización de la marihuana. Estos conocimientos les sirvieron para el naciente negocio de la cocaína, que en ese momento era dominado por Perú y Bolivia. A finales de la década señalada, los narcotraficantes promovieron el cultivo de la coca en las zonas selváticas y húmedas del país aprovechando los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas (Ramírez M. C., 2001a, p. 59).

Tabla 2. Presencia de las FARC en el departamento del Putumayo

Frente	Zona de influencia
Frente 48	San Miguel, Orito, Mocoa, Puerto Caicedo, Puerto Leguizamo y Valle del Guamuez (ríos Caquetá, San Miguel, Putumayo y Piñuna Negro y Piñuna Blanco).
Frente 32	Mocoa, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Villagarzón (ríos Guamuez, Putumayo, Macaya, Picudo y Piñuna Blanco
Frente 29	Valle del Guamuez
Frente 13	Puerto Guzmán (Río Caquetá y Mandur)
Frente 49	Mocoa y Puerto Guzmán

Fuente: Adaptado de Fundación Paz y Reconciliación, 2013, como se citó en Ávila (2014, p. 58).

A su llegada al Putumayo, las FARC empezaron a desempeñar un papel de “regulador” del mercado de la droga. Se ocupaba de la seguridad de los cultivos de uso ilícito, el cobro del impuesto al “gramaje” y la prohibición de pago en basuco a los campesinos cocaleros y a los raspachines³⁷³. En un primer momento, se establecieron relaciones de colaboración con los primeros grupos de autodefensa de la región bajo el comando de Gonzalo Rodríguez Gacha alias el “Mejicano”. No obstante, esta alianza duró muy poco tiempo, hasta el año 1987, momento en el que se desató una guerra entre el movimiento guerrillero y los grupos paramilitares financiados por este narcotraficante³⁷⁴. En 1990 las FARC atacaron el complejo de producción de coca que había instalado el “Mejicano” aniquilando prácticamente a los “Masetos”. El reducto de este grupo se

³⁷³ María Clemencia Ramírez (2001) señala que esta forma de pago fue muy habitual en la región y tenía como objetivo generar mayor dependencia de los trabajadores y facilitar mano de obra barata a los narcotraficantes. Por otra parte, plantea que esta práctica evidencia el imaginario sobre los habitantes de los departamentos amazónicos como personas marginales. La condición planteada por las FARC a los grupos de narcos sobre este tipo de prácticas, les valió el respeto y un cierto reconocimiento de la comunidad.

³⁷⁴ El asedio por parte de la policía antinarcóticos a Gonzalo Rodríguez Gacha en la zona del Magdalena Medio, produjo un desplazamiento de sus actividades al sur del país. La zona en la que instaló los cultivos de uso ilícito, un laboratorio de procesamiento de la hoja de coca y dos pistas de aterrizaje, fue conocida como El Azul, ubicada en el Putumayo. Los trabajadores de este complejo provenían en su mayor parte de los municipios de La Hormiga, La Dorada y San Miguel. La colaboración entre narcotraficantes y la guerrilla llegó a su fin en 1987 cuando los primeros asesinaron a combatientes de las FARC. Este hecho desencadenó una guerra, que después se extendió a otras guerrillas como el EPL. Por su parte, los grupos paramilitares financiados por Gacha, iniciaron una acción violenta en contra de las comunidades acusándolos de “comunistas” y colaboradores de la guerrilla. Las agrupaciones de izquierda como la UP, el Frente Popular y el Movimiento Cívico del Putumayo fueron los principales objetivos de estos grupos armados (Ramírez M.C., 2001, pp. 75-76).

refugió en el casco urbano de Puerto Asís, pero fue expulsado por la población, que denunció los crímenes cometidos y la complicidad de la Fuerza Pública (Ramírez M.C., 2001, p. 74).

María Clemencia Ramírez (2001) señala que, en los años posteriores a estos hechos, las FARC lograron un dominio territorial en el Putumayo, consiguiendo una cierta aceptación por parte de la población y la construcción de subjetividades compartidas con los locales. Las relaciones que existían entre los colonos, los comerciantes y los latifundistas eran arbitrarias, sistema que fue perpetuado y profundizado por los narcotraficantes. El dominio de las FARC en estos territorios logró en un primer momento equilibrar las relaciones de poder, así lo explica la antropóloga:

En este contexto, los habitantes de estas áreas aceptaron a los grupos guerrilleros, quienes garantizaron la tierra, los préstamos, los mercados y los servicios sociales con los que el estado nunca había cumplido, además de protección frente a los paramilitares y las fuerzas de seguridad. Más aún, las FARC continuaron demostrando su poder y autoridad local al mantener el orden público en el Putumayo y en otras partes de la Amazonía, por medio de leyes que contemplaban estrictas sanciones. (p. 78)

De esta manera, las FARC se erigieron en una suerte de Estado *bienestarista* que regulaba no solo las relaciones económicas sino la reproducción social, al ejercer un control biopolítico de las comunidades. La organización insurgente aplicó normas de comportamiento, leyes en todos los órdenes e impartió justicia. Se puede afirmar que en la región no hubo una ausencia del Estado, pues las funciones del mismo eran desarrolladas por la guerrilla³⁷⁵. No obstante, este control de las relaciones cotidianas ejercido en un espectro amplio de la dominación (desde la obediencia hasta la coacción violenta), se encontró de frente con el sistema que quería imponer el paramilitarismo en la región, como señalamos en el anterior apartado. Por consiguiente, se produjo una fuerte tensión entre las diferentes territorialidades desplegadas por los órdenes armados y los proyectos de las comunidades.

³⁷⁵ Al respecto, señalar que con el surgimiento del frente 48, se instauró el impuesto al gramaje en El Bajo Putumayo. Este tributo era aplicado tanto a los intermediarios que compraban la base de coca a los campesinos como a los patrones. El impuesto se correspondía “al 10% del precio pagado por los intermediarios por gramo de mercancía y en el caso de los patrones pagaban a la guerrilla 40.000 mil pesos a la guerrilla por cada panela, es decir, por un kilo de cristal de coca” (CNMH, 2012, p. 38). Las FARC regularon las relaciones comerciales, protegiendo de alguna manera a los campesinos cultivadores de coca, frente a los abusos de los narcotraficantes. Este comportamiento le valió a las FARC cierta legitimidad entre el campesinado.

Esta tensión/disputa/conflicto manifiesta en las diferentes estrategias de los grupos armados irregulares, en el periodo de mayor recrudecimiento de la guerra en el Putumayo, es expresada por un líder desplazado de Puerto Caicedo de la siguiente manera:

Después de que queda un territorio abandonado como consecuencia de un enfrentamiento... la guerrilla no se deja sacar fácilmente, ellos van a combatir, creo que eso lo toman como zona de guerra, de eso no cabe la menor duda. Cuando llegó el paramilitarismo pisando fuerte, la guerrilla se replegó, a unos los mataron, otros se entregaron. Ellos [guerrilleros y paramilitares] son personas de diferentes bandos que han tenido sus atropellos, por ejemplo, yo soy de la guerrilla y usted de los paras y allá mataron a una persona y aquí a otra, entonces ese es el choque que ellos tienen, porque pueden ser de los mismos putumayenses que se unen a grupos y eso fue lo que desencadenó muertes en todo el departamento y llevo a generar unos desplazamientos inmensos de todas las veredas, ya que hablamos de territorios que fueron quedando desocupados. Lo que antes eran potreros trabajados de la comunidad hoy son montañas, la habitación de los diferentes grupos. (E8, Líder ASODESCA, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Por otra parte, es importante tener en cuenta las diferentes tensiones que se han presentado entre las FARC y los movimientos sociales en la región, en particular, el movimiento cívico y cocalero. Si bien es cierto que esta guerrilla tuvo influencia en los paros cívicos de 1994 y 1995, y en el paro cocalero de 1996, en contra de la política antidrogas del gobierno y de las fumigaciones aéreas (CNHM, 2012), el movimiento social también ha luchado por mantener su autonomía organizativa y de agenda programática. Desde nuestra perspectiva, sería un error caer en la criminalización del movimiento, sin tener en cuenta las relaciones complejas de poder que se articulan en este territorio caracterizado por ser una región de frontera y de colonización continua. Por lo tanto, con unas relaciones comunitarias, familiares y sociales particulares.

En este contexto, es importante señalar que, en los años noventa, el Bloque Sur de las FARC se consolidó como uno de los más poderosos del país por las relaciones construidas con el narcotráfico, lo que le permitió ampliar su radio de acción y entrar en una confrontación abierta con los gobiernos, a través del ataque a puntos neurálgicos de la estrategia militar del Estado³⁷⁶. La expansión de la guerrilla, así como el control del impuesto al gramaje, que en los últimos años aumentó para los patronos y comerciantes, fue una de las razones para que los paramilitares incursionaran nuevamente en el departamento.

³⁷⁶ En la VIII Conferencia de las FARC, realizada en 1993, se adoptó un nuevo plan militar estratégico en el que se decide pasar de una guerra de guerrillas a una guerra de movimientos. Los ataques a las bases militares en el departamento del Putumayo (Las Delicias en Puerto Leguizamo) se corresponden con esta estrategia.

De esta manera, se entró en un nuevo ciclo de enfrentamiento armado entre las FARC y los paramilitares en la primera década del presente siglo, (CNMH, 2012, p. 42) reforzado por la ofensiva militar del Estado en el marco del Plan Colombia, del Plan Patriota y de los Planes de Consolidación. El repliegue de la guerrilla producto de los elementos señalados anteriormente es señalado por los líderes y lideresas de la siguiente manera:

Ahora hay un repliegue bastante fuerte de la guerrilla, que hay una presencia física sobre todo en las vías del ejército, de la policía y de actores que aparezcan, creo que no los hemos notado. (E10, Fundación Fundación Ecotono Putumayo Putumayo, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

La guerrilla se ha visto afectada por el gobierno de Uribe porque tienen que moverse mucho más y han tenido que usar armas no convencionales que son mucho más lesivas, no sólo para la población civil sino para ellos mismos porque tienen accidentes con eso. También le disparan un cilindro a un cuartel, pero llega a la población civil porque no funciona bien u otras veces se matan ellos mismos. Hay zonas como la zona montañosa de Orito donde está la guerrilla, hay otros que transitan en las zonas fronterizas como corredor para moverse. (E11, Mesa Regional de Organizaciones Sociales, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

La guerrilla ha cambiado su forma de actuación y presencia en el territorio. Ya no es como antes, su presencia no es tan fuerte, están replegados, ahora tampoco se les ve uniformados. Antes llegaban a las casas a pedir almuerzo, pero ahora no. (E12, Lideresa Mesa Campesinos del Municipio de San Miguel, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

La guerrilla sigue haciendo presencia en el departamento, siguen reclutando gente en los diferentes municipios, reclutamientos masivos. Sin embargo, sí se puede ver un repliegue hacia otras zonas de la selva y otras regiones, ya casi no hay milicias en el casco urbano de las principales ciudades. Se ha logrado dispersar a la guerrilla, aunque no se puede hablar de un fin de la misma. (E18, Líder ANUC, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Se puede decir que, este nuevo ciclo bélico en la región, se produjo por el control de los instrumentos económicos que permite una continuidad de la violencia y de la guerra, con unos vínculos de correspondencia transnacional. No obstante, con esta afirmación no queremos decir que lo económico sea el único factor que juega en este escenario. Estamos ante una realidad territorial muy compleja en la que se entretajan las subjetividades políticas, los acuerdos y transacciones para la constitución del poder local, las formas de dominio de las comunidades y las estrategias de despojo y apropiación de tierras, elementos que son intrínsecos a un ordenamiento regional de facto.

En este contexto, los impactos hacia la población civil que habitaba en el territorio, se transformaron según las dinámicas de la confrontación armada y la finalidad de los órdenes

territoriales que pretendían implantar los actores que participaban en la guerra. Para el proyecto político de las FARC, era fundamental tener una base social que le permitiera extender su radio de acción y su proyecto político-militar, manifiesto en la intencionalidad sobre este territorio³⁷⁷. Por lo tanto, la guerrilla debía ganar “cierta legitimidad” entre la población y minimizar los soportes hacia otros actores armados regulares e irregulares (Vásquez et al. 2011). En este sentido, en el periodo de hegemonía de las FARC las muertes de personas civiles disminuyeron, pero se mantuvieron repertorios de violencia que les permitieron un dominio sobre zonas estratégicas a través del control social, tales como: los asesinatos selectivos a personas acusadas de ser informantes de la Fuerza Pública o de los paramilitares, el daño a bienes civiles, los secuestros, los paros armados, las minas antipersona, etc. (CNMH, 2012).

Al respecto, la lideresa de la organización de víctimas de El Tigre relata en el siguiente apartado, uno de los principales impactos del conflicto armado en las comunidades del Putumayo: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes³⁷⁸. Asimismo, en el testimonio vemos cómo las mujeres despliegan sus capacidades y lazos de solidaridad, para resistir a este tipo de acciones bélicas sobre la población más vulnerable. Enfrentándose a los actores armados, en el marco de unas condiciones asimétricas de poder y de acceso a recursos. De esta manera, podemos apreciar cómo la población no es un sujeto pasivo, se empodera para luchar contra un estado de cosas que consideran injusto.

En la comunidad hay reclutamiento de niños. Nosotras pudimos rescatar esas niñas, aunque fue duro lo pudimos hacer. La mamá fue la mamá a contarnos que la guerrilla se había llevado la hija. Fue la mamá a contarnos que se habían llevado a Elisa, que tenía 17 años. Nos costó rescatarla, la mamá no quiso que lo supiera la Personería, ni la Policía, ni nada

³⁷⁷ “La base social de un proyecto armado da cuenta de su estructura organizativa y de su capacidad para ordenar un territorio y extraer recursos materiales y humanos; cuestiones vitales para el sostenimiento de un pie de fuerza y para llevar a cabo procesos expansivos y planes estratégicos (Staniland, 2012; Staniland, 2014). Pero esto no es todo, la base social visibiliza la dimensión política y sociológica detrás del reclutamiento, ya que le da sentido organizacional al grupo y pone de relieve las capacidades y estrategias dispares del reclutamiento” (CNMH, 2017, p. 31). De esta manera, la guerrilla construyó redes en los territorios que les permitieron implementar su proyecto político-militar, en el marco de lo que Raffestin considera actores sintagmáticos. Estas redes le ha permitido a las FARC construir campos del poder en el territorio.

³⁷⁸ En la investigación “Como corderos entre lobos”, realizada por Natalia Springer (2012), se señala que para ese año en el país había aproximadamente 18.000 niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados por grupos irregulares (guerrilla, paramilitares y bandas criminales). El reclutamiento de los menores se realiza mayormente en zonas rurales, los padres generalmente son campesinos (69%). No obstante, con la nueva generación de paramilitares, esta práctica ha ido en aumento en las zonas urbanas. La investigadora señala que cuatro de cada diez combatientes, son menores. Los departamentos más afectados por el reclutamiento de menores son Córdoba, Chocó, Putumayo, el Bajo Cauca, Antioquía y el Catatumbo. Esta práctica se ha realizado bajo diferentes modalidades de coerción: amenaza, secuestro, la falta de oportunidades y la falsa promesa de una salida a la situación de marginación y pobreza, intervención en los centros educativos, entre otras.

porque la podían matar. Otra compañera y yo nos fuimos hasta el monte a buscarla y la encontramos. Nosotras llegamos, nos tocó caminar... nos atendió un monito y le dijimos que queríamos hablar con el comandante, que íbamos dos mujeres que queríamos hablar con él y nos dijo que esperaríamos una media hora. Primero fue muy áspero “Qué necesitan, por qué han venido, a qué han venido”. Ya le dije que lo que quería era algo muy sentimental, entonces fuimos a un rincón donde nadie nos escuchara. Ya le dije que nosotras sabíamos que Elisa estaba con ellos y que le pedíamos el favor que nos la devolvieran y nos preguntó que a cambio de qué, le dije a cambio de nada, de amor y de paz. Él nos dijo que ella quiso irse con ellos, ya le dije que viera que ella tenía 17 años, que era por las circunstancias, que tenía una familia muy pobre, él dijo sí, porque se vino descalza. Ya me dijo, “hagamos una cosa, si Elisa se quiere ir, se va con ustedes, sino no hay nada que hacer”. Ese día le pedí a Dios que Elisa dijera que sí. Nos sirvieron chocolate...

La mamá no quiso ir porque pensó que si ella iba la mataban. Cuando va saliendo Elisa, ¡qué sorpresa! cuando la veo vestida con el uniforme, ya nos saludó y le pregunte cómo estaba, me dijo: “aquí con ellos, me han tratado muy bien, me pusieron uniforme”. Le pregunté si se quería ir con nosotras, dijo: “no sé, yo no estoy acostumbrada a dormir con hombres, aquí me ha tocado dormir con ellos”. Le dije: Elisa, nosotros venimos por usted, si usted se quiere venir con nosotras, el camino suyo no es este”, ella me preguntó: “¿usted por qué hace esto?” le contesté: “Elisa, yo no tuve mujeres, yo tengo dos varones, pero mire cómo está sufriendo su madre, la pobreza no tiene que llevar a esto, es cierto que la pobreza es dura...” Ella me dijo que si le dicen que se fuera ella se iba. La alegría ese día.

El comandante me preguntó, “¿Ya habló con Elisa?”, le dije que sí y ella dice que se va. Llamaron a Elisa y le preguntaron a lo que ella contestó “sí”. Ese día se me bajaron las lágrimas, no lo podía creer. Él me dijo: “señora, lo que usted ha hecho por esta niña hágalo también con los hombres que se van con los paramilitares” a lo que conteste: “Sí señor, lo haré”. Elisa se hizo quitar el uniforme, le regalaron las botas y se fue con nosotras... En un momento, me acordé de algo y me devolví. Cuando me vio dijo: “¿Otra?, ya no tengo más aquí”, yo le dije: “no, yo no vengo por otra, yo vengo a pedirle un favor, que usted me prometa que a Elisa no le van a hacer nada, nosotras la llevamos pero que no le vayan a hacer nada”, puso el fusil a un lado y me dio la mano, me dijo: “señora, yo la mano no se la doy a nadie, por mi madre y por mis dos hijos le prometo que a Elisa no le haremos nada”. Hasta el día de hoy Elisa está con nosotros. (E9, Lideresa Comité de Víctimas de El Tigre Progreso por la Paz, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Natalia Springer (2012) en su investigación señala que, “el 50,14% de los combatientes ADULTOS en las FARC ingresó a las filas de este grupo armado siendo niño” (p. 27). En el caso del Putumayo, esta práctica ha sido recurrente por parte de este grupo guerrillero y, como se aprecia en el relato, muchas veces los hechos no se denuncian por miedo a las represalias. Es importante señalar que, en los departamentos de la vertiente amazónica, las FARC promovieron procesos de colonización, sustituyendo las funciones del Estado. Estos procesos, en territorios tradicionalmente

olvidados por el centro político y administrativo del país, generaron unas condiciones favorables para el reclutamiento de menores. Además, para el proceso de expansión de las FARC era necesario robustecer el componente humano de la organización y, esta práctica, aseguraba nuevos y jóvenes combatientes, principalmente en las zonas de interés económico y militar.

Al hilo de esta argumentación, Springer (2012) señala que, en los departamentos con mayor presencia indígena, en particular, los situados en el Pacífico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó), y en las regiones de selva (Caquetá, Guaviare y Putumayo), “el reclutamiento de niños y niñas indígenas sigue un patrón concluyente: el 29% de los niños y niñas reclutados son indígenas, una cifra nueve veces más alta que su peso en la composición étnica nacional”. (p. 23)

Por otra parte, las organizaciones populares estiman que el repertorio de violencia como las formas de control social y relacionamiento de las FARC con las comunidades difieren de las utilizadas por los grupos paramilitares. Esta percepción se puede deber a la forma de articulación entre lo militar y lo social de las FARC en el departamento del Putumayo, a esas subjetividades compartidas locales, que se encuentran vinculadas al apoyo que la guerrilla dio a las formas organizativas en territorios de colonización ligados a la economía de la coca. En los siguientes testimonios se puede apreciar la diferenciación de los repertorios de violencia desplegados por este movimiento guerrillero.

[Al ser preguntada por las acciones de la guerrilla en la zona del Bajo Putumayo y las acciones militares en contra de la población, la lideresa contesta de la siguiente manera] Por ejemplo la guerrilla cogía a alguna persona y siempre nos llamaban. Yo fui Inspectora de Policía. Nos llamaban y preguntaban, qué opinábamos de este señor y nosotros dábamos la referencia y lo soltaban. Cogían a mujeres, cuando le quitaban el marido a una y en fin... pero nunca así [se refiere a las masacres cometidas por los paramilitares], pero llegan los paramilitares y todo lo que hacen es como para volverse loco. Yo duré tres días sin salir de mi casa, a mi casa llegaba la gente y yo estaba en un estado que no entendía por qué la gente, por qué los muertos, por qué tuve la valentía de coser los muertos, por qué tuve la valentía de decirle a mi marido váyase para arriba escóndase con mis dos hijos. (E9, Lideresa Comité de Víctimas de El Tigre Progreso por la Paz, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

La guerrilla no llegaba a masacrar, ellos sí asesinaban, pero asesinaban a personas que les habían causado daño a las comunidades, advertían. Yo veía que llegaban a una vereda, hacían una reunión y decían que a ellos no les gustaban los ladrones, los violadores, las mujeres chismosas que digan mentiras y hagan matar la gente, los corruptos, que si había personas así era mejor que se fueran, que les daban plazo pero que si seguían haciendo lo mismo se los llevaban, pero no los mataban como acá, donde se llevaban familias enteras, niños y niñas. (E12, Lideresa Mesa Campesinos del Municipio de San Miguel, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Por otra parte, las acciones implementadas por las FARC dirigidas a objetivos militares para desestabilizar al Estado, terminaron afectando a la población civil en un contexto de profundización del conflicto armado. Por lo tanto, el apoyo que en un primero momento tuvo el movimiento insurgente en el Putumayo con el paso de los años y con la degradación de la guerra se ha minado, y en repetidas ocasiones las comunidades han denunciado los abusos cometidos y demandado un cese de las hostilidades a todos los actores armados. En este sentido, en los talleres y en las conversaciones informales con los líderes y lideresas, se percibe cierta incertidumbre frente al proceso de negociación iniciado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Si bien reclaman una paz negociada, en la que se abra un espacio para las organizaciones sociales populares, señalan su temor frente a un nuevo contexto en el que otros actores armados se disputen los espacios vacíos dejados por la guerrilla.

En la Declaración del movimiento de mujeres contra la guerra, en su marcha hacia el Putumayo, que se realizó en el marco de la movilización de la Ruta Pacífica de las Mujeres en el 2003, se evidencia el cansancio de las comunidades frente al conflicto armado y a la estrategia de lucha contra el narcotráfico implementada por el gobierno. Aunque la declaración está dirigida principalmente al Estado, a quien responsabilizan de esas condiciones que consideran injustas, el mensaje también está dirigido a los actores armados que participan en el conflicto, un llamado a la resolución pacífica de la guerra “demandamos un acuerdo humanitario que proteja los derechos básicos de la población civil y de las mujeres en particular. El Gobierno no puede continuar siendo cómplice del genocidio que se está cometiendo con las comunidades indígenas y campesinas de este territorio”. (CNMH, 2012, p. 375)

CAPÍTULO 9. Economía de la droga, política minero-energética e infraestructura

En este capítulo analizamos tres ejes de conflictividad identificados por las organizaciones: narcotráfico y cultivos de uso ilícito, las políticas minero-energéticas y los proyectos de infraestructura. Tanto la economía de la droga como las políticas de desarrollo implementadas por el gobierno reconfiguraron los territorios y generaron procesos de desterritorialización, frente a los cuales las comunidades generaron procesos de resistencia, a través de redes comunitarias y organizativas. Sin embargo, la violencia generada en el departamento desarticuló buena parte del tejido social.

9.1. Economía de la droga: narcotráfico y cultivos de uso ilícito

Las organizaciones populares que participaron en la presente investigación identificaron como uno de los principales ejes de la conflictividad socio-territorial del departamento, la presencia de cultivos de uso ilícito y el narcotráfico. Como hemos visto a lo largo de este apartado, el megaproyecto de la coca aparece como elemento que articula el conflicto social y armado en el Putumayo³⁷⁹. La correlación entre la economía de la droga y el conflicto tiene profundas ramificaciones en los ámbitos sociales, políticos y económicos, manifiestas en las diferentes escalas. A continuación, señalaremos algunos elementos de la evolución de las dinámicas de este

³⁷⁹ En el Observatorio Nacional de Paz (ONP) de la organización Planeta Paz se trabajó con la noción de megaproyectos propuesta por la Human Rights Everywhere (HREV) en el informe preparado para la ONIC en julio de 2008, titulado *Tierra Profanada: impacto de los megaproyectos en los territorios indígenas de Colombia. Cultivos ilícitos megaproyecto*. La definición es la siguiente:

un conjunto de proyectos y actividades a gran escala que responden a una estrategia de intervención económica y ocupación territorial, y que imponen políticamente un modelo de desarrollo sobre los habitantes de las zonas intervenidas. Estos megaproyectos tienen un gran impacto sobre los territorios y habitantes de las zonas donde se implementan, en parte por su magnitud, en parte por la naturaleza de los mismos y sobre todo porque se trata de la imposición de un modelo de desarrollo económico y social [...] Este megaproyecto tiene algunas características que lo distinguen del resto de los megaproyectos estudiados: 1. Es una actividad económica ilegal en todos los eslabones de su cadena productiva, estando penalizados y perseguidos por la ley su cultivo, transformación, comercialización, venta y consumo, así como la inserción de sus beneficios económicos en la economía legal. 2. Para contrarrestar este megaproyecto ilegal, el Estado colombiano implementa otro megaproyecto, cuya piedra angular es el Plan Colombia, que pretende erradicar los cultivos de coca y amapola y atacar el narcotráfico. Ambos proyectos (el de cultivos ilícitos y el de su erradicación) tienen una gran incidencia sobre los territorios y pueblos indígenas de Colombia. 3. La coca es una planta sagrada de uso y conocimiento ancestral para distintos pueblos indígenas de Bolivia, Perú y Colombia. Tiene un gran valor religioso, curativo y alimenticio. Conviene no confundir el cultivo de la coca, usado tradicionalmente por distintos pueblos indígenas con el producto agroindustrial destinado a surtir el mercado mundial de cocaína. (Human Rights Everywhere, 2008)

megaproyecto en el departamento que se tejen con los relatos y agendas de las organizaciones populares.

Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del 2012 (UNDOC - Proyecto SIMCI II), en el periodo comprendido entre 2001 y 2011, en 292 municipios de Colombia de un total de 923 se registró la presencia de cultivos de coca. En 117 de ellos (40%) se confirmó la presencia a lo largo de todo el periodo señalado. No obstante, el estudio indica que la densidad de la siembra del cultivo disminuyó de manera significativa. Los departamentos del Putumayo y Caquetá fueron los más estables en cuanto a la dinámica del cultivo de coca. En el caso del Putumayo, 10 de los 13 municipios que lo conforman fueron afectados por la presencia de este cultivo en el periodo de estudio. Los municipios con mayor incidencia fueron Orito, Puerto Leguizamo, Puerto Asís, Puerto Guzmán, San Miguel y Valle del Guamuez.

En esta dirección apuntaron los líderes y lideresas entrevistados en el trabajo de campo, quienes señalaron que durante este periodo los cultivos de uso ilícito disminuyeron en la región. “Cultivos ilícitos ya no hay, si quedan algunos es mínimo, pero mandan cuatro o cinco avionetas a fumigar [...] La gente pretendía volver a ese tipo de cultivos después de la crisis de DMG, pero imagine que quedaron sin un sólo peso, a dónde van a ir a sembrar” (E8, Líder ASODESCA, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010). “El cultivo de la coca se ha reducido en los últimos años, pero sigue existiendo en municipios como San Miguel, Valle del Guamuez, Orito [...]. (E12, Lideresa Coordinadora Mesa de Campesinos Municipio de San Miguel, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Lo que nosotros vemos es que los cultivos han disminuido, pero en el último tiempo también vemos que la gente está volviendo a sembrar, generalmente en los mismos lugares donde se ha dado el cultivo. Muchos de los cultivos se han desplazado a zonas del Cauca y Nariño por la presión del gobierno y de otros fenómenos como las Pirámides, la gente se quedó sin nada”. (E11, Líder Mesa Regional de Organizaciones Sociales, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

En el informe de la UNDOC para el año 2014, se reseña que en el país se presentó un repunte en el área sembrada con coca con respecto a los años anteriores, sin embargo, los territorios afectados no se han ampliado. La problemática se siguió concentrando en las zonas tradicionales del cultivo, de manera particular, en los departamentos ubicados al sur del país entre los que se encuentra el Putumayo junto a Nariño, Cauca y Caquetá, acompañados de la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Las comunidades de estas zonas del país se han

caracterizado por índices importantes de vulnerabilidad y de desigualdad. Son departamentos que de manera histórica han estado aislados de las políticas de desarrollo gubernamentales y, solo en las últimas décadas, han sido objeto de intervención en función de la importancia de la naturaleza para el proceso actual de acumulación, en particular, los departamentos situados al sur del país.

Ahora bien, los cultivos de coca en el Putumayo se han caracterizado por ser de pequeña escala, es decir, los campesinos realizan la siembra en pocas hectáreas y la alternan con otros cultivos para la subsistencia familiar, lo que se denomina en Colombia como cultivos de pancoger³⁸⁰. La siembra a pequeña escala contrasta con la que se realizó en los años noventa en el Guaviare, en donde se encontraban grandes cultivos industriales. (Ramírez M.C., 2001)

Por otra parte, las políticas públicas para el agro en el departamento han sido del todo insuficientes para la proyección económica de este sector, los altos costos de comercialización por la deficiente red de comunicaciones y la falta de inversión llevaron a campesinos y colonos a volcarse en la producción de hoja de coca y de pasta base de cocaína como una salida a su situación de marginalidad y precariedad. Estas actividades requieren una baja tecnificación y una mínima infraestructura vial para su comercialización.

El cultivo de coca y los procesos anexos generaban mayores ingresos para las comunidades campesinas frente a la producción de alimentos, eliminando los sobrecostos asociados a los intermediarios y al transporte. Este conjunto de factores ha sido decisivo para la concentración de los cultivos de uso ilícito en el departamento (CNMH, 2015, p. 184). Además, nos permiten entender la agenda política de las organizaciones populares, así como la falta de confianza de las comunidades en el Estado. Los elementos señalados se reflejan en el siguiente relato en el que se aprecia el impacto de una política de sustitución de cultivos asociada a la intervención militar del territorio, la ausencia de unas condiciones estructurales que permita el desarrollo de una economía

³⁸⁰ El cultivo de coca se convirtió en una actividad económica rentable para los campesinos del departamento. Las condiciones ambientales de la selva tropical favorecieron su producción. La rentabilidad era mucho mayor que otros cultivos legales, el pago de la coca se hace en efectivo y de inmediato, por lo cual no se tienen que hacer cargo del transporte y, es mucho más fácil de transportar que otros productos de pancoger. De esta manera, la producción de coca genera una “mayor estabilidad económica y la posibilidad de ser más competitivos por primera vez en el mercado agrícola”. (Ramírez M.C., 2001, p. 80) La coca se ha convertido en una forma de superar la marginalidad de estas comunidades que han estado sometidas a las clases dominantes, “una economía de retaguardia capaz de evitar el hundimiento de esta frontera entre el simple autoabastecimiento y el autoconsumo”. (Tovar 1993, citado por Ramírez M.C. 2001, p. 81) Por otra parte, el Putumayo no solo tenía tierras fértiles y una frontera agrícola abierta que favoreció el cultivo de coca. Además, en el momento de expansión del cultivo (años setenta y ochenta del siglo pasado) el Estado estaba absolutamente ausente, lo que permitió a los carteles de Medellín y de Cali sortear los obstáculos legales para la expansión del narcotráfico.

campesina basada en cultivos de alimentos, y la falta de previsión y planificación de las intervenciones gubernamentales³⁸¹.

Los campesinos han dejado de producir porque les han asesinado a los hijos, es decir, los han desplazado y los que estamos sembramos poco porque si sembramos mucho no hay comercio, no hay vías. En ese caso llegan y pagan lo que quieren, así uno no hace inversión. Hace aproximadamente un mes Acción Social había recogido familias desplazadas, vulnerables y les dio pollo, a algunos les dio quinientos y a otros mil pollos en sociedad, ellos tenían que invertir y repartir las ganancias, pero qué pasó, hubo abundancia de pollo, tanto que los daban a seis mil pesos, pero qué iban a hacer si no tenían con qué alimentarlos hasta que ahora se acabó la bonanza de pollo y está costoso, pero en 20 días sacan otra vez, porque son tres veces las que tienen que sacar para partir las ganancias y así la gente pierde. (E12, Lideresa Coordinadora Mesa de Campesinos Municipio de San Miguel, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Por otra parte, las organizaciones sociales y, en particular, el movimiento cocalero, estimaron que las políticas implementadas los han criminalizado. No olvidemos que las políticas para la sustitución de cultivos de uso ilícito han ido de la mano de la lucha contrainsurgente y no en el marco de programas de desarrollo rural.

En las siguientes declaraciones, se puede observar como las organizaciones elaboraron una agenda política y de reivindicación ante el Estado en la que se mantiene de manera constante los siguientes puntos: la problemática de los cultivos de uso ilícito asociada a la crisis del sector rural y campesino, la oposición a las políticas que articularon de la sustitución de cultivos con la lucha contrainsurgente generando la criminalización de los pequeños campesinos y de la protesta social, la militarización de la región y la vulneración de los derechos de las comunidades. Estos elementos plantean un horizonte de justicia en el que las organizaciones sociales sean reconocidas como agentes políticos con capacidad de construir proyectos territoriales alternativos a las políticas estatales y a los órdenes impuestos por los actores armados ilegales.

El problema de los cultivos ilícitos se origina en la crisis del sector rural colombiano, en la ausencia de condiciones para garantizar la competitividad del sector frente a los impactos de la apertura económica adelantada, sin considerar condiciones mínimas que hiciesen sostenible las actividades desarrolladas en el campo. Esta crisis se profundizó con la contrarreforma agraria adelantada con inversiones del capital producto del narcotráfico que

³⁸¹ Absalón Machado señala que “la economía campesina es un sistema socioeconómico y cultural de producción-consumo fundamentado en el trabajo familiar, articulado de múltiples maneras al sistema socioeconómico y a los mercados, operando dentro de un modo de vida rural”. (Machado et al., 1993, p. 12) La caracterización propuesta, centra este tipo de economía en el territorio, en la escala local y regional, en donde las relaciones de vecindad y comunitarias juegan un papel fundamental en el sostenimiento de la misma y en la reproducción social de las comunidades.

significó la concentración en pocas manos de más de cuatro millones de hectáreas de tierras aptas para actividades agropecuarias, dedicadas casi en su totalidad a la ganadería extensiva en detrimento de actividades productivas generadoras de excedentes para el campo [...] Así mismo se reconoce la necesidad de establecer diferencias claras entre los pequeños y grandes productores de cultivos ilícitos, entendiendo que para los primeros debe haber una propuesta de descriminalización, políticas de desarrollo alternativo y soluciones pacíficas de consenso. Igualmente, el desarrollo de veedurías ciudadanas para el cumplimiento de los programas. (I Foro “El Sur le responde al plan Colombia”, 2000)

¡Rechazamos el tratamiento criminal del que está siendo víctima la población de toda esta región y reivindicamos que los productores/as de la hoja de coca, sean tratados como tales, no como narcotraficantes y/o como actores armados! ¡Denunciamos ante el país y la comunidad internacional la política militarista del actual Gobierno, el cual privilegia el uso de las armas y la fuerza para tratar problemáticas sustentadas y generadas en la pobreza, en la expropiación histórica, la marginación y la ausencia de gobernabilidad! ¡Exigimos que las mujeres y los hombres del Putumayo puedan tener una voz propia y una incidencia en las decisiones en que las que se está jugando su vida, su salud, la de sus hijos e hijas y de la tierra que les da sustento! ¡Que se construyan escenarios de negociación internacional que activen el debate acerca de la corresponsabilidad de los países consumidores y contemplar la alternativa de la legalización de la droga!³⁸² [...] (CNMH, 2012, p. 375)

Ante cada movilización recibimos como respuesta la presencia del Ejército y la Policía si estamos directamente en la calle o en reunión, y si posteriormente llegamos a un acuerdo, nos incumplen y se nos agrava con una nueva andanada de señalamientos, persecuciones y asesinatos. Al mirar esta realidad, la Mesa de Organizaciones Sociales ha hecho una serie de propuestas con el fin de defender los derechos humanos en el departamento, que nos permita atender las condiciones más difíciles de algunas poblaciones, pero también superar la situación de permanente violencia, olvido y criminalización en que nos encontramos. (Mesa Regional de Organizaciones sociales del Putumayo, 2015)

La compleja situación denunciada por las organizaciones sociales se debe entender en el marco del Plan Colombia y los programas de erradicación de cultivos de uso ilícito, previstos en esta política. Esta lógica de intervención del territorio sustentada en la lucha contrainsurgente y el combate al narcotráfico, no se diseñó atendiendo a las especificidades territoriales y a las causas sociales y económicas de implantación de este tipo de cultivos en el Putumayo. La ruta marcada por el gobierno de Andrés Pastrana se profundizó en la Política de Seguridad Democrática y se mantuvo en líneas generales en el primer mandato de Juan Manuel Santos³⁸³.

³⁸² Declaración del movimiento de mujeres contra la guerra en su movilización al Putumayo, que se realizó en el marco de la movilización de la Ruta Pacífica de las Mujeres en el 2003.

³⁸³ En el primer gobierno de Juan Manuel Santos se mantienen en rasgos generales los lineamientos de la política de lucha contra las drogas del gobierno de Uribe. Según avanzaban las negociaciones de paz con las FARC el gobierno detuvo en varias ocasiones la aspersión aérea de los cultivos de uso ilícito como parte del juego político. No olvidemos

Desde los años noventa, los campesinos cocaleros han planteado su disconformidad con las políticas gubernamentales de sustitución de cultivos de uso ilícito, al considerar que parten de una premisa equivocada: su equiparación con los grupos de narcotraficantes. Este planteamiento de fondo derivó en intervenciones sobre el territorio que estimaron habían sido arbitrarias y sustentadas en la fuerza más que en el diálogo con el Estado. Por consiguiente, las comunidades demandaron que los programas de erradicación de la coca en el Putumayo contemplaran como principio fundamental la sustitución voluntaria, lo que allanaría el camino hacia la concertación de las políticas a implementar, como lo apuntaron los líderes entrevistados:

El mejor camino para acabar con la coca en el departamento sería la concertación acompañada de diálogo y de inversión social. Sin inversión social y sin proyectos a largo plazo, esta problemática no se va a solucionar, la gente seguirá sembrando coca porque es la única opción que le queda. La inversión social debe contemplar proyectos educativos, traer las universidades públicas para que las personas se eduquen, proyectos productivos para los campesinos y menos presión militar porque hay demasiada, la gente no aguanta más... (E14, Líder Mesa Departamental de Población Desplazada, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Los problemas grandes de esta región son el hambre, la miseria, los cultivos de coca, las fumigaciones indiscriminadas. Al analizar esta situación desde la Mesa propusimos la sustitución voluntaria de cultivos de coca. Le hicimos la propuesta al gobierno nacional y a la comunidad internacional. La erradicación de la coca debía ser concertada con la comunidad, para que se fueran resolviendo las dificultades en la región. La gente sembraba coca porque no tenía otra alternativa para subsistir, los campesinos no eran narcotraficantes, tampoco eran guerrilleros, la coca no era de los guerrilleros sino de la gente. Ese fue el planteamiento, se le pusieron condiciones, pero al gobierno no le interesa escuchar nuestras propuestas. Se hacen acuerdos en el momento de las protestas, pero después no los cumplen, así estamos desde el 96.

Nosotros comenzamos a proponer un cambio en la política antidroga y un cambio en la política agropecuaria, eso no le gustó para nada al gobierno nacional, porque no podía hacer tratos con gente que tuviera coca. Ellos ya habían establecido que hacían inversión en las veredas donde no hubiera coca, pero incluso si una sola familia tenía coca con la comunidad no conversaba, está así todavía. (E19, líder Mesa Regional de Organizaciones Sociales, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Las políticas del gobierno para la erradicación de los cultivos de uso ilícito en la región se han caracterizado por ser de orden unilateral sin negociar con los cocaleros, raspachines y campesinos que se dedican a la siembra de la hoja de coca. No ha habido concertación con la comunidad, por lo tanto, se ha impuesto desde arriba, lo que ha traído muchos problemas. (E18, Líder ANUC, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

que uno de los puntos de la agenda versaba sobre el problema del narcotráfico y los cultivos de uso ilícito. Después de un debate intenso, este punto es acordado en el año 2015 y en 2016, el gobierno presentó la Estrategia Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que contemplaba las siguientes líneas de acción: inversión social, sustitución, interdicción, investigación y judicialización, consumo y reforma institucional.

A continuación, se describe la lógica de intervención durante los mandatos de Pastrana y Uribe en donde se evidencia el enfoque asistencialista de las políticas. Desde esta perspectiva, el campesinado parece no ser reconocido como un agente social, protagonista de su propio desarrollo, desconociendo los saberes propios y los proyectos societales de las comunidades. Por otra parte, este tipo de políticas no aseguraban la provisión de los servicios básicos de los desposeídos, aunque en sus reivindicaciones reclamaban el cubrimiento de estas necesidades. Lo hacen desde un enfoque de derechos que les permitan el ejercicio de una ciudadanía plena.

Durante los primeros años de funcionamiento o primera fase de este plan (2000-2004) [Plan Colombia], la sustitución de cultivos ilícitos se hizo mediante la inversión en proyectos productivos “veredales” dirigidos a la población campesina productora de coca en pequeña escala. En la segunda fase, durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe, el componente de sustitución de cultivos ilícitos se cambió por la promoción de las economías lícitas existentes, particularmente la mediana y grande empresa agroindustrial ubicada dentro de la frontera agraria (Valle del Cauca, por ejemplo). De esta manera, el campesinado productor de coca dejó de ser considerado población económicamente activa y pasó a ser “población vulnerable”, a quien el Estado debía brindarle programas de asistencia social para su sobrevivencia (Familias en Acción, Empleo en Acción y Jóvenes en Acción, Familias Guardabosques), no proyectos productivos³⁸⁴. (Ramírez, 2009 citado por CNMH, 2015, p. 200)

Para el caso del Putumayo, a partir del informe elaborado por la Oficina para la Vigilancia Gubernamental de Estados Unidos (GAO) sobre el componente social del Plan Colombia, Ramírez (2009) señala que este departamento fue el de mayor inversión para programas de desarrollo alternativo. Entre el 2000 y el 2004, USAID impulsó proyectos dirigidos a pequeños cultivadores

³⁸⁴ En el año 2002 se creó el Programa Presidencial Contra los Cultivos Ilícitos (PCI) que comprende diferentes estrategias: la erradicación manual voluntaria a través de los Programas Familias Guardabosques y Proyectos Productivos, la erradicación manual forzosa por medio de los Grupos Móviles de Erradicación (GME), y el desarrollo de proyectos especiales en zonas localizadas del país, como son los proyectos productivos dirigidos a desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia en la zona del Urabá. El PCI según señalan los documentos institucionales se constituyó en uno de los programas centrales dentro de la Política de Seguridad Democrática. (Acción Social -UNODC, 2010) Por otra parte, es importante señalar, que en el informe de la GAO sobre el Plan Colombia, se señala que los proyectos productivos financiados con recursos de ese país no han sido del todo efectivos en la disminución de los cultivos de uso ilícito. Para el año 2008, esta oficina reporta que USAID no tiene proyectos de este tipo en las zonas de mayor concentración de cultivos de coca, debido a las directrices gubernamentales de “Coca cero”, que prohíbe la implementación de políticas de desarrollo alternativo en comunidades que tengan cultivos de uso ilícito, como medida de presión para que abandonen esta práctica y puedan acogerse a los beneficios de los programas de sustitución, lo que generó tensiones y conflictos al interior de las comunidades. La GAO también reconoce que no se hizo seguimiento de los proyectos implementados y por lo tanto no se puede evaluar la repercusión de estos programas (Ramírez, M.C., 2009) Desde nuestro punto de vista, este enfoque gubernamental es del todo equivocado, ya que no aborda las circunstancias de exclusión que lleva al campesinado a la siembra de coca, y el Estado adopta una posición paternalista frente a las comunidades, a través de estrategias de “castigo”.

de coca, lo que se denominó proyectos veredales. A partir de 2004, los recursos fueron dirigidos a proyectos agroindustriales (planta de concentrados, cultivos de vainilla, flores para la exportación, etc.), con una lógica de inversión empresarial. Muchos de estos proyectos no fueron sostenibles y otros quedaron en manos privadas. Por consiguiente, estas políticas no fortalecieron la economía campesina y generaron una mayor exclusión social de los pequeños campesinos cocaleros, que fueron objeto de las políticas asistencialistas sin resolver las causas estructurales del problema. Los programas de desarrollo alternativo no tuvieron en cuenta las redes comunitarias existentes en el territorio e impusieron un modelo que no se ajustaba a las realidades sociales del territorio.

Por otra parte, la estrategia de erradicación forzada ocupó buena parte de los recursos gubernamentales y fue uno de los ejes centrales de la política contra las drogas en las regiones de concentración de cultivos de uso ilícito, sin diferenciar los contextos territoriales en términos de grandes extensiones de siembra de coca y de pequeñas parcelas utilizadas para tal fin. Tal estrategia tuvo un impacto negativo sobre las economías campesinas del Putumayo.

En el estudio realizado por la Comisión Nacional de Memoria Histórica “Petróleo, coca y organizaciones sociales en el Putumayo” (2015) se señala que, la recuperación económica y social del departamento después de la implementación de este tipo de políticas no tuvo lugar debido a tres factores principalmente. Primero, los operadores del “componente social” del Plan Colombia fueron organizaciones no gubernamentales, esta gestión representó sobrecostos por los gastos burocráticos y en algunos casos por los manejos irregulares de los recursos, por lo que se vio afectado el presupuesto destinado al fomento agropecuario. Segundo, la estrategia de negocio de los proyectos productivos no contempló la sobreoferta de los productos, un mercado que asegurara la compra de los alimentos y las deficiencias estructurales para su comercialización (ausencia de infraestructura vial). Tercero, las organizaciones comunitarias beneficiarias de los proyectos productivos no fueron sostenibles. Muchas de ellas al recibir los recursos se disolvieron debido en algunos casos a la falta de acompañamiento, y en otras ocasiones a que las prácticas productivas a las que estaban acostumbradas con la economía de la coca eran divergentes con los nuevos proyectos³⁸⁵.

³⁸⁵ En el estudio del CNMH (2015) se señala que durante la época de la bonanza cocalera los campesinos trabajaban de manera individual por lo que el tejido asociativo era muy débil, al llegar los subsidios para los proyectos productivos tuvieron que crear asociaciones que no tenían raíces comunitarias. Por lo tanto, una vez recibidos los recursos muchas de estas agrupaciones desaparecieron. Esta ha sido una práctica constante durante los últimos quince años (p. 203).

Las políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito y la erradicación forzada también trajeron consecuencias de otro orden, que están estrechamente relacionadas con la crisis de la economía campesina, y que son identificadas por las organizaciones sociales. La expansión de la coca en el departamento ha afectado a la soberanía y a la seguridad alimentaria. Este cultivo desplazó a la producción de alimentos y los precios de este tipo de productos aumentaron de manera desproporcionada. Además, la fumigación aérea con glifosato afectó a los cultivos de pancoger y a los animales, fundamentales para la supervivencia de las familias³⁸⁶. Así lo señalaron los líderes y lideresas entrevistados:

Le tiran a lo que caiga a dañar todo, destruyendo el medio ambiente, los cultivos lícitos de las personas, acaban con el plátano, la yuca, han afectado a los animales, los pastos, los potreros han sido arruinados; el medio ambiente se ha visto afectado en gran manera, los peces. Entran cinco avionetas donde ya no hay cultivo entonces, deben descargar donde sea y decir que cumplieron su trabajo. Un racimo de plátano que valía 2 mil pesos hoy vale 15 mil o 20 mil, porque ya no lo estamos produciendo. Antes se sacaban camiones cargados de aquí para Cali y ahora vienen de Cali para acá. (E8, Líder ASODESCA, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

El Plan Colombia ha sido un fracaso total y eso de la sustitución de cultivos de lo ilícito por lo lícito de nada sirve porque a los dos meses pasan las avionetas y fumigan. Hace un par de días estuvieron sembrado arroz, así que esa brisa llegó al arroz y qué caos tan grande. Entonces el gobierno debería dar de verdad soluciones para que la gente se olvide completamente de lo ilícito. Debería dar herramientas para que la gente tenga otra cosa en su mente, porque allá todo el mundo hablaba de coca y eso era algo como hablar de religión, pero el gobierno no lo entiende. Por ejemplo, no entiende que los indígenas tienen coca como parte de su cultura, eso lo debería tener en cuenta el gobierno, que hubiese una socialización con la gente. Otra cosa que sucede es que la gente trae mucho mercado del Ecuador, porque no está fumigada, los precios son altísimos. (E9, Lideresa Comité de Víctimas de El Tigre Progreso por la Paz, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Es paradójico, ya que las fumigaciones afectan a los proyectos productivos que financian organismos internacionales y el gobierno como el arroz y los palmitos. Entonces, ¿cuál es la política? Por un lado, dan dinero para la sustitución de cultivos y por el otro lado, dañan esos productos, entonces ¿cuáles son las opciones que tiene la gente? Hay algunas personas que están logrando hacer sustitución, pero no son todas, algunos cultivos de pancoger o estanques de piscicultura.

Otro de los problemas de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, de los proyectos productivos, es que no se dan las herramientas ni las condiciones para que los campesinos comercialicen los productos, para sacarlos de sus zonas a otras y poder venderlos, no existe infraestructura vial terciaria, que comunique a los pueblos y veredas.

³⁸⁶ Para la fumigación aérea “se utiliza una mezcla de ‘Roundup Ultra’ (nombre comercial del herbicida de la empresa Monsanto que contiene glifosato y el surfactante POEA - polioxietileno-amina) y ‘Cosmo-flux 411F’ (surfactante producido por la empresa colombiana TriadaEMA S.A. y comercializado por Cosmoagro S.A.)”. (Human Rights Everywhere, 2008, p. 13)

Los proyectos de infraestructura vial que están diseñados se están haciendo para sacar los productos que le interesa al gobierno, a las multinacionales, sacar los recursos a otros países. (E18, Líder ANUC, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Hace unas semanas volvieron a fumigar, no con la misma intensidad, han variado en el último periodo combinando fumigaciones con erradicación manual, pero los erradicadores manuales pasan escoltados por el Ejército y pasan robando el plátano, las gallinas. (E11, Líder Mesa Departamental Organizaciones Sociales, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Las organizaciones apuntaron no solo a los impactos sociales, económicos y productivos sino también a los ecológicos y culturales, tanto de los cultivos de coca en sí mismo como de las políticas de sustitución a través de la erradicación forzada y de la fumigación área. En relación a esta última, se planteó como un elemento efectivo para reducir el número de hectáreas cultivadas con coca; sin embargo, esta política no ha sido del todo efectiva, debido a la dificultad para cortar los circuitos de comercialización de los químicos para la fabricación de la cocaína o su demanda internacional, entre otros elementos.

Entre los impactos ecológicos del monocultivo de coca las organizaciones señalan las alteraciones del territorio, de la naturaleza, de los recursos hídricos, y en general de los ecosistemas. El desarrollo de este tipo de megaproyectos implicó la ampliación de la frontera agrícola hacia zonas que tienen un frágil equilibrio ecológico. En esta dirección, los líderes y lideresas señalaron que la expansión de este monocultivo en el departamento implicó la destrucción de las reservas de bosque. Se calcula que para la siembra de una hectárea de coca es necesario la deforestación (tala y quema) de aproximadamente cuatro hectáreas de selva (Osorio, 2003, p. 70).

Por otra parte, la utilización intensiva de la tierra para el monocultivo terminó afectando su fertilidad y su capacidad de regeneración debido a la utilización de productos químicos para su crecimiento. Estas sustancias también contaminan el agua y terminaron afectando a los ecosistemas hídricos. Las zonas dedicadas a este monocultivo no serán aptas para otro tipo de productos hasta pasado un tiempo, no obstante, los ecosistemas dañados por la deforestación de la selva, serán difícilmente recuperables. De esta manera, la biodiversidad de flora y fauna de la región se ve gravemente afectada.

La coca vino y acabó con miles de hectáreas de bosque nativo, vino gente a la que no le importaba tumar 20 o 50 hectáreas de monte para cultivo. Eso afectó mucho el medio ambiente. Para levantar la coca había que meterle mucho insecticida y fungicida que también contaminó bastante, acabó muchas quebradas.

La tierra después de ser cultivada muchos años con coca queda bastante estéril y se demora varios años para recuperarse dependiendo del tiempo que haya estado el cultivo de coca en el sitio, si el cultivo de coca estuvo 10 años, se puede tardar 4 años para recuperarse, se recupera el suelo, pero la montaña no vuelve a ser un bosque natural. (E19, Líder Mesa Organizaciones Campesinas, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Antes de la coca la gente no utilizaba agroquímicos, de pronto para matar alguna cucaracha, pero con el sistema de monocultivo necesariamente tenías que utilizarlo porque las plagas acaban con el cultivo. Se genera esa cultura y hay deterioro natural, del suelo, del agua y luego las propuestas alternativas del Estado son monocultivos también, son propuestas formuladas desde afuera y uno nota que la gente no conoce la región se deja llevar por lo que le dicen y hay gente de acá que comienza a proponer cosas sin conocer cuál es la dinámica o el problema que se tiene. (E15, Líder Red de SS.AA, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

La compleja situación ecológica generada por el monocultivo de la coca, se ve profundizada por los impactos ocasionados por la aspersión aérea de glifosato. Las organizaciones apuntaron a la irracionalidad en la fumigación, la cual no se restringe a la zona de cultivo como tal, sino que se termina afectando a las viviendas, colegios, fuentes de agua, cultivos de otro tipo, etc. Además, las comunidades denunciaron los efectos negativos de los herbicidas de amplio espectro en la salud de las personas y de los animales³⁸⁷.

Las políticas de fumigación de los cultivos de uso ilícito han tenido un impacto ambiental negativo en el departamento, ya que los productos químicos utilizados no discriminan entre plantas, humanos, entre cultivos de coca y cultivos de pancoger, afectan recursos naturales como el agua y, por supuesto, afecta gravemente la salud de la población.

Esto genera desplazamiento de la población, no tiene los recursos necesarios para vivir en su territorio. Se va para buscar otras oportunidades, no tienen elección. A su vez esto genera una desintegración del tejido social y cultural, los pobladores se van, dejan sus tierras, pierden sus orígenes, los pueblos se desintegran, cambia el territorio. A su vez en los cascos urbanos se engrosan los barrios periféricos, la población desplazada llega a esas zonas.

El gobierno no da alternativas para cambiar esta situación, se centra sólo en políticas asistencialistas como familias en acción que no transforma realmente la realidad de las comunidades, son paños de agua tibia, que hasta acaban los procesos sociales. (E18, Líder ANUC, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010))

El argumento que nosotros planteábamos y con el que hacíamos resistencia frente al tema fumigación aérea era el que decía que eso no afectaba la salud, entonces sacamos la definición de la Organización Mundial de la Salud y comprobamos que sí la afecta y eso

³⁸⁷ El Roundup es uno de los herbicidas utilizados para en la fumigación de los cultivos. Este componente está considerado en varios países como uno de los plaguicidas que tiene efectos nocivos sobre la salud humana. Puede provocar envenenamiento, irritaciones dérmicas y oculares, problemas respiratorios, alergias, etc. (Osorio, 2013, p. 71) Los efectos son aún mayores por la frecuencia y la localización de las fumigaciones, los aviones repiten las operaciones sobre un mismo cultivo en repetidos momentos durante el año, estos hechos son denunciados por las comunidades. (Human Rights Everywhere, 2008)

tiene consecuencias. También el tema del desarraigo, del tejido social, de acabar las familias, el de generar todos los desplazamientos. Todo eso es afectación a la salud y a la salud pública, hasta ese entonces ese era nuestro argumento, con algunos testimonios. Yo estuve trabajando en la alcaldía cuando todo pasó, en el cargo que ocupaba le hice seguimiento y tenía bastante información. De eso salió un artículo que está en Internet, está en EMERA, se llama “La fumigación aérea si afecta la salud humana”. (E10, Fundación Ecotono Putumayo, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

En cuanto a la erradicación manual forzada cabe anotar que las operaciones fueron coordinadas por el Ejército. Los Grupos Móviles de Erradicación (GME) llegaban a las parcelas de los campesinos custodiados por la Fuerza Pública, para proceder a la eliminación de las plantas de coca y de amapola. La sola presencia militar del Estado generaba desconfianza entre los campesinos ya que profundizaba el imaginario subversivo que existe sobre ellos. A esto se suma que los GME estaban conformados por desmovilizados de grupos armados, en particular, pertenecientes a estructuras paramilitares. Estos elementos contribuyeron al desplazamiento de las comunidades, que no se sentían seguras en sus territorios, además de carecer de una fuente económica para su reproducción social y material en el territorio³⁸⁸ (Ramírez M.C., 2009).

Mientras nosotros estábamos dialogando con los delegados de la Mesa y los del gobierno, en los territorios los Grupos Móviles de Erradicación (GME) llegaban escoltados por el Ejército y la Policía a las fincas, se tomaban las casas, las carreteras y arrancaban todos los cultivos o los dañaban con machete, se robaban las cosas, los animales y, en muchos casos, se presentaron violaciones contra las mujeres que estaban solas en sus casas y parcelas. Esta situación caldeó los ánimos e impulsó a que se organizara el primer paro convocado directamente por nosotros. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2012, p. 86)

En los talleres realizados y en los relatos de las organizaciones, se señalan los abusos cometidos en el proceso de erradicación forzada y la lógica militarista de la intervención. Los líderes y lideresas denuncian las arbitrariedades que transitaban desde la destrucción de cultivos de pancoger, hasta las amenazas y el robo de víveres y animales. El Estado entraba a sus territorios no para asegurar sus derechos económicos y sociales sino para vulnerar a las comunidades, generando graves casos de violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

³⁸⁸ La ley 387 de 1997 “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia” no reconocía este estatus a las personas y comunidades que han sido desplazadas debido a los efectos de la fumigación aérea o por la erradicación manual forzada. Esta omisión se debe a la criminalización del campesinado cocalero que fue profundizada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (Ramírez M.C., 2009, p. 19).

Por otra parte, las organizaciones consideran que la estrategia de lucha contra las drogas y, por consiguiente, la erradicación forzada tenía como objetivo el desplazamiento de las comunidades para la apropiación de sus territorios, en el marco de un modelo de desarrollo económico que beneficia a los agentes económicos que impulsan una forma extractiva de acumulación del capital. De esta manera, parecen apuntar a factores de desterritorialización para una posterior reterritorialización, en la que el espacio se organiza y codifica para la implantación del modelo. Estas actuaciones develan esos imaginarios de inferioridad y de peligrosidad sobre las poblaciones situadas en los márgenes, que “legitiman” estas formas de apropiación violenta del territorio.

Los conflictos principalmente son por el dominio territorial y por el negocio del narcotráfico, el de las multinacionales generado por el gobierno, es decir, financiado por el gobierno en cuanto a fumigaciones y erradicaciones forzadas manuales, para despojar al campesino de sus tierras, a los indígenas y a los afros de los territorios. Lo hacen obligados porque casi nadie tiene escritura de su territorio, sino que se han posesionado ahí. Todo para entregarlas a las multinacionales.

El desplazamiento se da sobre todo por los grupos armados, legales e ilegales, porque las fumigaciones y erradicaciones vienen acompañadas de operativos militares. Dentro de las erradicaciones manuales vienen personas desmovilizadas de varios grupos armados que cuando llegan a una región se roban lo que encuentran, porque la gente que tiene una o dos hectáreas de coca cuando se dan cuenta que vienen a erradicar, se vuelan, se meten al monte y dejan la casa a disposición de las personas que llegan. Las gallinas, las cosas de la casa, todo se llevan, acaban con todos los cultivos. La presión de los grupos armados, en el caso de los paramilitares y guerrilla, lo que quieren es reclutar a los jóvenes y en el caso de los grupos legales estigmatizan a la gente diciendo que son colaboradores de la guerrilla. (E14, Líder Mesa Departamental de Población Desplazada, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

9.2. Políticas minero-energéticas

En la investigación realizada las organizaciones sociales populares identificaron un eje de conflictividad socio-territorial derivado, específicamente, de las dinámicas del modelo de acumulación capitalista: la explotación de hidrocarburos y minería. El despliegue de estos megaproyectos estuvo acompañado de una disputa por el control del territorio o por el dominio de zonas estratégicas, para la implementación de estos vectores de “desarrollo” impulsados por los gobiernos y planificados por el saber tecno-científico, en consonancia con los intereses transnacionales. En poco tiempo, el Putumayo pasó de ser una región olvidada por el Estado, a un departamento prioritario en la estrategia de los gobiernos. No obstante, la incorporación a las

dinámicas económicas se realizó supeditada a la lógica de la fuerza, derivada de la ocupación militar del Estado, que lejos de fomentar mayores niveles de seguridad humana recrudeció el conflicto y las violaciones a los derechos humanos de sus pobladores.

En las entrevistas y talleres con las organizaciones, se observó cómo los sectores populares estimaban que el conflicto social y armado se relaciona con la disputa por la apropiación de la naturaleza de la región. El Putumayo es un territorio en el que se localizan recursos naturales que son fundamentales para la reproducción del capital y, por ello, diferentes actores pusieron en juego sus proyectos territoriales. La preeminencia de uno u otro proyecto dependía de la capacidad de fuerza, acceso a los recursos de los que disponía, alianzas con otros actores, la relación con los centros de decisión, entre otros elementos. En este contexto, los sectores populares estaban inmersos en una situación de dominio, evidente en los repertorios de violencia utilizada contra ellos, que tuvieron como consecuencia el despojo, los desplazamientos masivos, el abandono del territorio, y la muerte como último destino. En esta dirección apunta uno de los líderes entrevistados:

Nosotros pensamos que las confrontaciones y los conflictos que hay en la región son exclusivamente por una cosa. Esta región es extremadamente rica, tiene una oferta de servicios ambientales muy grande, somos el punto de más alta biodiversidad de toda la región, le aportamos a la cuenca amazónica todo el tema de sus nutrientes, somos el punto de transición entre lo andino y lo amazónico, el punto más corto entre todo el piedemonte. Adicionalmente tenemos una posición estratégica para infraestructura de comunicaciones y por eso son todos los conflictos, sin lugar a duda hay toda una aplicación de una política del desarraigo, del despojo que quiere de alguna manera evitar que la población siga en el territorio y que las oportunidades y ventajas que tiene la riqueza ambiental que tiene la región sea para lo que siempre ha sido. De alguna manera una clase se siente privilegiada por tener el control político y económico y a veces hasta militar en razón de la dinámica del conflicto. El conflicto que le da origen a los demás es el plan internacional de generar control territorial sobre esta región, ese es el que origina el resto. (E10, Fundación Ecotono Putumayo, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

En este apartado, vamos a señalar algunos de los elementos que configuran este eje de conflictividad socio-territorial en el departamento. Al igual que en las otras secciones, el eje de análisis serán las percepciones de los líderes y lideresas sociales.

La colonización petrolera se produjo en los años sesenta de la mano de la Texas Petroleum Company en la zona de Orito y Valle del Guamuez. A mediados de esta década, se construyó el Oleoducto Transandino que atraviesa la selva del Putumayo, pasa por la Cordillera Central hasta la costa pacífica de Tumaco. Al finalizar su construcción el oleoducto tenía capacidad para

transportar 120.000 barriles diarios. Asimismo, comprendía dos líneas de transporte: la primera recogía el crudo de los pozos ubicados entre Orito y el río San Miguel, en la frontera con Ecuador; la segunda, abarcaba los pozos ubicados al occidente de Orito. La explotación en el momento de la concesión comprendía 2.200.000 hectáreas, en una región que era en ese momento la más rica del país en hidrocarburos³⁸⁹ (Devia, 2004, pp. 77-78).

La explotación de petróleo trajo consigo una reconfiguración territorial, tanto del patrón de ocupación como de la apropiación de tierras en las zonas del trazado del oleoducto. El boom petrolero propició la llegada de migrantes de otras regiones del país para la edificación de la obra, para lo cual fue necesario la deforestación de la selva; muchas familias se instalaron a lo largo del oleoducto y de las vías que se construyeron para la extracción del hidrocarburo, generando un proceso de acaparamiento de tierras³⁹⁰ (CNMH, 2015).

Por otra parte, se presentó una nueva estratificación social relacionada con la división del trabajo entre los empleados directos de la empresa y los colonos que asumieron labores de baja cualificación. Además, se produjeron otro tipo de transformaciones sociales señaladas en la investigación realizada por Yolima Devia:

La monetarización de las relaciones de intercambio incluso con los indígenas sionas y kofanes. Las nuevas relaciones también se reflejaron en el crecimiento de los territorios ocupados articulados al régimen agrario y una mayor articulación de la región con el país. En el largo plazo y con las condiciones que la empresa – enclave repetía ahora en el Putumayo, estos cambios significaron una difícil integración de los nuevos pobladores, la disminución de los bosques no intervenidos y la grave afectación medio ambiental que incluso en la actualidad continúa perjudicando las condiciones de vida de los habitantes de la región. (Devia, 2004, p. 80)

En la década de los setenta, el número de barriles producidos comenzó a descender y, finalmente, a principios de los ochenta Texaco le cedió el contrato de explotación a la Empresa

³⁸⁹ Devia (2004) señala que la compañía Texaco obtuvo los mejores beneficios en la concesión de la explotación del hidrocarburo. Según el Decreto-ley 2140 de 1955, “el Estado recibiría el 3.5% de producción como regalías, el ministro de Minas de ese entonces Prado Parra denunció que las compañías debían pagar U\$8 centavos por barril y se les deducían por exenciones U\$29 centavos, entonces se les regalaba el petróleo y se les encimaban U\$21 centavos” (p. 78) Durante el mandato del presidente Carlos Lleras Restrepo, el gobierno intentó mejorar los términos de la concesión, no obstante, las compañías se negaron a perder los beneficios obtenidos.

³⁹⁰ En el marco de las dinámicas del boom petrolero, las comunidades indígenas que habitaban el territorio se vieron perjudicadas debido al despojo territorial que sufrieron no solo por la acción de empresa, sino por los colonos que iniciaron procesos de acaparamiento de tierras. En los relatos del proceso de colonización elaborado por las personas migrantes y por la Texaco “siempre está presente la imagen épica del “blanco” (colono o empleado de la Texaco) que se encontró unas tierras no trabajadas por los seres humanos (“selva virgen”), las cuales incorporó al Estado-nación colombiano con la industria del petróleo y las labores agrícolas (CNMH, 2015, p. 130).

Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), que configuró el Distrito Sur de Producción de Orito. La decisión de la empresa se relacionó con el inicio de operaciones en Ecuador. La crisis del petróleo coincidió con el auge cocalero en el departamento. La mano de obra que se liberó por la caída del hidrocarburo de alguna manera fue absorbida por los cultivos de uso ilícito. La infraestructura creada por la petrolera fue aprovechada por este nuevo negocio y el proceso de colonización adquirió una dinámica propia (Melo, 2019, p. 51).

No fue hasta principios del presente siglo, cuando la actividad petrolera en el departamento entró en un nuevo ciclo de ascenso. El gobierno de Álvaro Uribe diseñó toda una estrategia de impulso al sector minero-energético. Para ello, realizó una serie de modificaciones institucionales creando, a través del Decreto 1760 del 2003, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), adscrita al Ministerio de Minas y Energía³⁹¹. El objetivo de esta reforma era separar la función de entidad reguladora y la de empresa petrolera, que se concentraba en Ecopetrol. Por consiguiente, la institución de reciente creación, se encargó de administrar y regular los hidrocarburos de la nación (Agencia Nacional de Hidrocarburos, s.f.). A través de la ANH el gobierno pretendía impulsar la participación de las empresas privadas en la explotación de petróleo. En el Putumayo se desarrollaron nuevas exploraciones con capital privado, fuera de las ya gestionadas por Ecopetrol³⁹².

En este marco institucional, el gobierno de Uribe desarrolló el programa “Ronda Colombia” que se llevó a cabo en los años 2007, 2008 2010, 2012, y 2014. Este programa tenía como objetivo la asignación de bloques para la exploración de petróleo a empresas nacionales y extranjeras, en zonas estratégicas para el país, entre las que se encontraba el departamento del Putumayo³⁹³. La finalidad última del gobierno fue ampliar la frontera petrolera y dar acceso a las

³⁹¹ La reforma del sector de los hidrocarburos implicó que Ecopetrol perdiera el dominio del Estado sobre el sector petrolero en Colombia. Este modelo se aplica en otros países como Arabia Saudí, Irán o Venezuela. Antes del cambio institucional, las empresas privadas debían actuar en consorcio con la empresa estatal. En este nuevo marco, las regiones petroleras han implementado diferentes modelos de producción (Rettberg y Prieto, 2018, p. 150).

³⁹² Las empresas que estaban operando en el departamento en el 2013 eran Emerald Energy de Colombia PLC, BP Exploration Company Colombia Ltda., Amerisur Exploración Colombia, Equion Energía Limited, Petrominerales Colombia Ltda., Gran Tierra, Petrotesting Colombia S.A. y Unión Temporal II&B.

³⁹³ En la “Ronda Colombia” 2007, se ofertaron bloques para la exploración y explotación del crudo en siete áreas del país: Llanos Orientales, Putumayo, el Valle Superior e Inferior del Río Magdalena y la Región Caribe. Las empresas petroleras que lograron la adjudicación fueron: Petrobras Colombia Limited, Exxon y Hess Corporation, Ecopetrol, British Petroleum, entre otras. En el año 2008, se realizaron dos procesos de adjudicación en las zonas de Cesar-Ranchería, Guajira, Sinú-San Jacinto Norte, Cordillera Oriental, Llanos Orientales, Valle Medio del Magdalena – Catatumbo, Valle Superior del Magdalena, Putumayo, Cordillera. Entre las empresas seleccionadas se encontraban: MetaPetroleum Ltd., Pluspetrol, SK Energy, ONGC Videsh Ltd. Sucursal Colombia, Tecpecol S.A., Ecopetrol S.A., Talismán Energy, Hocol S.A., Pacific Stratus Energy Colombia Ltd., Lewis Energy Colombia Inc., entre otras. La

empresas extranjeras para impulsar el papel de Colombia a nivel internacional, como un país productor de recursos fundamentales para el modelo de acumulación capitalista. Esta política iniciada por Uribe fue profundizada por el gobierno de Juan Manuel Santos y sus locomotoras de desarrollo. De la siguiente manera es leído por la Mesa Regional de Organizaciones Sociales:

En esta misma línea, bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010– 2013), se plantean las llamadas “locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo”, dentro de las que se encuentran las locomotoras “agropecuaria y desarrollo rural” y “desarrollo minero y expansión energética”, que buscan la consolidación de la inversión extranjera y la reprivatización del campo, así mismo, consolidar la guerra y la militarización de la vida rural, para garantizar que Colombia sea destino de los inversionistas.

La explotación minero-energética considerada la principal apuesta económica del gobierno Santos, está planteada desde un discurso de seguridad y desarrollo que poco o nada incluye a las comunidades que habitan los territorios rurales donde dicha explotación sería efectuada.

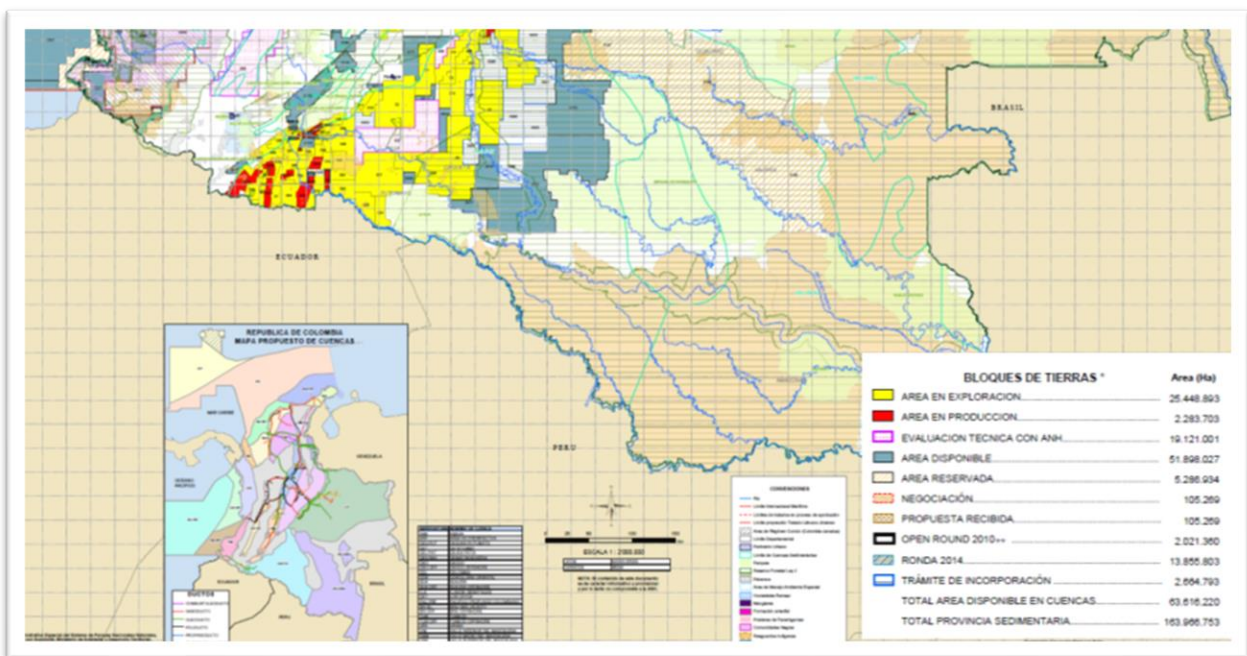
Un ejemplo pertinente para nuestra región es cómo la política petrolera, en sus más de 100 años de desarrollo en el país, ha convertido a la extracción de los recursos hidrocarbúricos en un instrumento de contaminación, daño ambiental, inequidad social, corrupción y guerra, que hoy tiene sumida a la población en una honda crisis humanitaria, ambiental, territorial y de los derechos humanos. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2012, pp. 209-210)

En la figura 15 (Mapa de tierras de la ANH), utilizado para la “Ronda Colombia” 2014, se puede apreciar como la subregión del Bajo Putumayo estaba prevista para la exploración o bien en explotación de hidrocarburos. En todas las Rondas realizadas durante el periodo de estudio de esta investigación, la cuenca Caguán-Putumayo, salió ofertada en los bloques dispuestos por la ANH,

“Ronda Colombia” 2010, se presentaron a concurso tres tipos de bloque. Tipo 1, que comprende regiones históricas en la explotación de petróleo a excepción del área Putumayo Caguán. Las otras zonas fueron: Catatumbo, Valle Superior del Magdalena, Valle medio del Magdalena, Cordillera Oriental. Tipo 2, denominadas como las Cuencas de Nueva Prospectividad, Chocó (sub cuenca del San Juan, Guajira, Llanos Orientales, Urabá, Tumaco, Chocó (subcuenca del Atrato), Sinú – San Jacinto – Valle inferior del Magdalena. Tipo 3, contrato en áreas especiales, con el objetivo de evaluar el potencial de los recursos de hidrocarburos que poseen: Caguán – Putumayo, Chocó (subcuenca del San Juan), Guajira, Llanos Orientales, Urabá, Tumaco, Chocó (subcuenca del Atrato), Sinú – San Jacinto – Valle inferior del Magdalena, Cesar-Ranchería, Cauca – Patía, Los Cayos, Vaupés- Amazonas y Cordillera Oriental. En la Ronda 2012, el gobierno presentó 115 bloques (en 13,4 millones de hectáreas) para la explotación de petróleo y de gas, en total se adjudicaron 49. Los más llamativos fueron los localizados en la plataforma marina de la nación en el Caribe colombiano, frente a las costas de La Guajira, Sucre y Córdoba, y dos adicionales en el Pacífico. Otras regiones que se incluyeron fueron Caquetá, Putumayo, Meta. Entre las empresas beneficiarias se encuentran: Anadarko Colombia Company, BC. Exploración y Producción de Hidrocarburos SL, Clean Energy Resources S.A, Consorcio Andes Energía Argentina S.A. - Integra Oil & Gas S.A.S, Consorcio Gran Tierra -Pluspetrol, Ecopetrol, Shell Exploration and Production Colombia GmbH, entre otras. En la Ronda del 2104, se ofertaron 95 bloques, pero se adjudicaron solo 27 a 19 empresas, entre las cuales se encontraban Repsol, Shell, Ecopetrol, Anadarko y Statoil. Las regiones de localización fueron: Córdoba, Bolívar, Sucre, cuenca Caguán-Putumayo y Llanos Orientales (Agencia Nacional de Hidrocarburos, s.f.).

tanto para estudios prospectivos como para la explotación. Las empresas ofertaron por el bloque conociendo la situación de orden público del departamento. El programa “Ronda Colombia” se puede considerar parte de esa representación del espacio dominante, en donde se invisibilizan las otras formas de entender y vivir el espacio de las comunidades. En los mapas vemos cómo estas expresiones son borradas para dar preeminencia al valor mercantilista de la naturaleza.

Figura 15. Mapa de Tierras – Putumayo “Ronda Colombia” 2014



Fuente: Adaptado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 2014.

Por otra parte, el Putumayo también ha sido objeto de las políticas mineras como uno de los ejes centrales del modelo de desarrollo extractivo³⁹⁴. En el año 2011, el departamento fue declarado Distrito Especial Minero, identificando esta actividad extractiva como uno de los

³⁹⁴ Es importante anotar que, durante el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, la solicitud de títulos mineros en el país se multiplicó hasta por ocho. La concesión minera durante este periodo se realizó sin cumplir con los plazos requeridos en cumplimiento de la normativa ambiental, en muchos casos se llegaron a otorgar títulos en zonas de comunidades indígenas, de conservación ambiental o zonas de reserva especial minera. En el gobierno de Juan Manuel Santos se intentan corregir estas irregularidades, pero se mantiene la política como uno de los ejes del modelo de desarrollo, en este sentido, se establecen minerales estratégicos y áreas potenciales para la explotación.

motores de desarrollo³⁹⁵. En el Plan Nacional para el Desarrollo Minero con visión a 2019, se señala que el Putumayo se encuentra dentro de los departamentos que han “diseñado programas de promoción y fomento minero y han gestionado recursos para su financiación” (Ministerio de Minas y Energía, 2006, p. 55), argumentando las oportunidades de desarrollo que pueden generar para las comunidades.

La apuesta por el modelo minero fue congruente con las directrices señaladas por el Ministerio de Minas y Energía, en donde instaban a los entes territoriales a incluir esta actividad extractiva en los planes de desarrollo territoriales, argumentando la mejora de competitividad de las regiones en el mercado internacional³⁹⁶.

En el año 2009, la Gobernación del Putumayo identificó en el departamento “409 unidades productoras (minas), de las cuales, según información entregada por el Ministerio de Minas, sólo 40 ostentan títulos mineros otorgados y 201 tienen solicitudes en procesos de estudio” (Defensoría del Pueblo, 2010, p. 189). En el trabajo de campo realizado se evidenció la falta de condiciones de seguridad y las precarias condiciones laborales de los mineros, que se encuentran relacionadas con la informalidad y clandestinidad de las explotaciones, aunado a la falta de interés del Estado por legalizar este tipo de actividad, profundizando las problemáticas sociales en los territorios teniendo que en cuenta que este tipo de minería representa un importante sustento para las comunidades. (Defensoría del Pueblo, 2010, p. 222) La posición gubernamental frente a la minería de hecho y tradicional ha sido la criminalización de las comunidades, abonando el terreno para la concesión de los títulos a las grandes empresas, así es explicado por uno de los líderes del departamento y por la Mesa de Regional de Organizaciones Sociales:

³⁹⁵ En el documento “Distritos mineros: exportaciones e infraestructura de transporte” del Ministerio de Minas y Energía (2005) se establecieron tres criterios para la identificación de los distritos: “a) el tipo de material mineral y el volumen de producción, b) el grado de concentración minera frente a zonas relativamente homogéneas y uniformes, y c) la tradición minera de las comunidades locales y regionales”. (Ministerio de Minas y Energía, 2005, p. 15) En esta primera identificación, no se incluyó al departamento del Putumayo. La argumentación para la zonificación del país a través de la minería se justificó en el documento señalando que existe una tendencia internacional a apostar por el desarrollo a través de la explotación de los recursos naturales, aprovechando las ventajas competitivas por medio de la incorporación de tecnologías.

³⁹⁶ En el año 2006, el departamento del Putumayo incluía en su plan de desarrollo un capítulo referido a la gestión minera, enfocado hacia la “implantación de un entorno institucional minero de carácter local y la construcción de un modelo competitivo de desarrollo”. Para ello, se propuso centralizar la gestión administrativa en la Gobernación del Putumayo, construir un plan minero departamental, y fortalecer el centro ambiental minero de Puerto Limón, y la sustitución de cultivos de uso ilícito con proyectos mineros. (Ministerio de Minas y Energía, 2006, p. 55) En este documento se señalan las potencialidades de la explotación minera en el departamento y recalcan el plan a largo plazo, hasta el año 2020, realizada por las autoridades de la gobernación. En esta dirección, se apuesta por la internacionalización de los proyectos mineros, a partir de alianzas estratégicas entre el sector privado y los mineros locales.

En la comunidad hemos tenido problemas, conflictos, choques, porque como comunidad veníamos explotando minería y comercializando ilegalmente y luego tratamos de legalizarnos poniéndonos al día con los requisitos de las concesiones mineras y de las licencias ambientales. Acá todo nos llega de último por la situación, por la comunicación y cuando tratamos de legalizarnos comenzamos un proceso de organización. Nos asociamos, nos juntamos en cooperativas y encontramos que funcionarios de INGEOMINAS y en ese tiempo MINERCOL, estaban haciendo estudios de las balasteras nuestras, de las canteras. Nosotros comenzamos a hacer oposición, al final terminan entregando las concesiones y los títulos de propiedad a otras empresas nacionales. La cuestión es que en esas empresas supuestamente participan funcionarios de las corporaciones.

Entramos en conflicto por la disputa del área, había tiempo en el que vendíamos material, otro tiempo en que nos colocaban demandas. Fue entonces cuando comenzamos a chocar, demandas, paros, amenazas y una serie de conflictos. Prácticamente en eso estamos, ahora estamos en un proceso que lo maneja la Procuraduría agraria y ambiental. El caso lo maneja el Ministerio del Interior por presencia de comunidades indígenas en las canteras. El Ministerio del Interior envió unos conceptos en los que decía que efectivamente había un asentamiento indígena. Ahora le decimos al gobierno que tiene que echar abajo todas las actas en las cuales entregó el título minero a las empresas, desconociendo el derecho que teníamos nosotros como comunidad y desconociendo la consulta previa a los indígenas, las organizaciones sociales. Hoy en día eso está parado, pero todo el proceso empezó en el 2005. (E16, Líder Organización de Productores-Cooperativa de Mineros, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

La presencia de estas empresas ha agudizado los procesos de desplazamiento, desalojo, criminalización por parte de la fuerza pública y de los grupos armados al margen de la ley, quienes, haciendo eco de las muy frecuentes acusaciones de ilegalidad, financiación del terrorismo y falta de competitividad, elevadas contra la minería artesanal por el Ministerio de Minas y Energía y el presidente, han arremetido contra los mineros que practican artesanalmente su labor.

La respuesta del Estado para la ocupación del territorio ha sido la concesión de grandes zonas para la exploración y explotación de minas a las grandes compañías, bajo tres argumentos: el primero, que se necesita una extracción a gran escala que potencie los réditos del crecimiento económico; el segundo es que las empresas extranjeras cumplen con una estricta legislación ambiental y conocen en detalle los mecanismos para generar el menor impacto en los terrenos intervenidos y, tercero, que la minería de pequeña escala no le genera los ingresos suficientes a la nación ya que evade impuestos y está controlada por grupos ilegales, o en otras zonas refuerza el conflicto armado.

Esta forma de percibir la minería a pequeña escala esconde una nueva intención de criminalizar las actividades económicas de las poblaciones locales con el fin de que paguen impuestos. La Mesa considera que se debe distinguir la minería ilegal de la minería artesanal, fortaleciendo y apoyando esta última puesto que no genera los mismos impactos que la de gran escala y contiene todo un saber ancestral en torno al cual se han construido culturas locales, que dan sustento a las familias. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2012, p. 212)

Por otra parte, en el marco de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2104, la autoridad minera determinó los minerales estratégicos para el país³⁹⁷, con el objetivo de delimitar las regiones con presencia de los mismos, y promover proyectos mineros que permitan aprovechar esas ventajas comparativas, bajo unos criterios técnicos, sociales y ambientales. Además, se determinaron un conjunto de áreas estratégicas con potencial minero (aproximadamente 20 millones de hectáreas en todo el país), entre las que se encontraba el departamento del Putumayo, destacando la presencia de minas de metales y piedras preciosas, en particular las reservas de oro, cobre y plata situados en los municipios de Mocoa, Sibundoy y Puerto Leguízamo³⁹⁸. Asimismo, la explotación de materiales de construcción en Mocoa, Puerto Caicedo y Orito.

Sin embargo, los procesos de titulación minera en el departamento se intensificaron años antes, desde 2005, en consonancia con la centralidad de esta actividad extractiva en las políticas de desarrollo de Álvaro Uribe, en donde se produjo un boom de solicitudes de títulos. En el siguiente testimonio, se advierte acerca de las problemáticas asociadas a este tipo de actividad, en el marco del conflicto armado, poniendo como ejemplo lo acontecido en otras zonas del país y lo que pueden esperar las comunidades en un contexto tan complejo como el del Putumayo.

Todo el piedemonte amazónico desde Orito hasta el Valle de Sibundoy, esa zona la han concesionado para exploración minera, cobre, calizas. Lo vi en el catastro de mineros, además de unos bloques de exploración que ya están definidos. Ahora hay un caso particular y es que en la media bota caucana se han encontrado muchas minas de oro, las cuales estaba aprovechando la población artesanalmente y ahora ya se vino un propietario armado, con una serie de artimañas compró eso. El caso de la media bota caucana era muy diciente, la gente explotaba el oro de manera artesanal con buenos ingresos, de eso se enteraron los mineros y vino un señor con sus escoltas, se apoderó de una finca, que es donde está el cauce, porque es minería de aluvión y comenzó a sacar a la gente a quemarle

³⁹⁷ En la Resolución 180102 del 30 de enero de 2012, se determinaron como minerales estratégicos para el país los siguientes: oro y sus minerales asociados, platino y sus minerales asociados, derivados o concentrados, cobre y sus minerales asociados, minerales de fosfato y sus minerales asociados, minerales de potasio y sus minerales asociados, minerales de magnesio y sus minerales asociados, carbón metalúrgico y térmico, uranio y sus minerales asociados, hierro y sus minerales asociados, minerales de niobio y tantalio (conocidos como coltán) y/o arenas negras o industriales y sus minerales asociados (Ministerio de Minas y Energía, 2014, p. 126).

³⁹⁸ El Putumayo se clasificó como un área de reserva minera Tipo I, lo que significa que existen los estudios suficientes para realizar la explotación y es susceptible de subastar los bloques en un periodo de cinco años. Las empresas a optar en el sector minero son principalmente privadas debido a que no existe una empresa estatal, equivalente a Ecopetrol, ni tampoco con capital mixto. Una parte importante de estas compañías serán transnacionales con vínculos en los mercados internacionales. En este panorama, las organizaciones sociales denuncian la desprotección del Estado de la minería local y artesanal, que no puede competir en igualdad de condiciones con estas inversiones. Por otra parte, señalan el impacto medio-ambiental de estas extracciones a gran escala, que en la práctica tendrán controles institucionales muy laxos. Esta percepción se relaciona con las experiencias vividas con las empresas de hidrocarburos en la región.

las casas. Eso es un aviso de lo que se viene. (E16, Líder Organización de Productores-Cooperativa de Mineros, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

En esta misma entrevista se puede ver la inconformidad sobre el proceso que se ha seguido para incorporar al Putumayo dentro de las áreas con potencial minero. En la entrevista se señala que hasta el momento no se ha realizado un proceso consultivo con las comunidades, y que la inclusión del departamento en esta categoría, implicará una nueva forma de ordenamiento territorial que va a impedir el acceso a la tierra a las comunidades.

Hace poco me enteré que nos van a declarar distrito minero especial. Esta es una forma de ordenamiento territorial que excluye a la gente del acceso a los recursos, al territorio. Esta situación se suma a las concesiones que se han hecho en el departamento a las empresas petroleras. Hay una toda una intencionalidad del Estado de no querer que la gente tenga acceso a la tierra. (E16, Líder Organización de Productores-Cooperativa de Mineros, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Tal y como apuntaba este líder, el Ministerio de Minas y Energía no realizó procesos de consulta previa para la delimitación de las áreas estratégicas mineras, en razón a que el Ministerio del Interior no lo consideró necesario ni obligatorio, según su interpretación de la normativa del Convenio 169 de la OIT³⁹⁹. Por otra parte, en este ejercicio de identificación solo se realizaron los estudios geológicos, por lo tanto, no se llevaron a cabo estudios poblacionales que determinaran entre otras cuestiones:

- El potencial de los factores ambientales con vida, como las plantas, la fauna y los microorganismos.
- El potencial de los factores ambientales sin vida, como el suelo, las rocas, el aire y el agua.
- El uso productivo de los territorios y las actividades económicas rurales, como la pesca, la caza, la agricultura y la minería tradicional.

³⁹⁹ En el año 2015, la Corte Constitucional a través de la sentencia T-766/15, suspendió las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería que delimitaron las áreas estratégicas mineras en 20 departamentos, por no agotar el trámite de consulta previa con las comunidades.

Por otra parte, el líder de la Cooperativa de Mineros del Putumayo, señala su desconformidad frente a la falta de mecanismos similares a la consulta previa, que permitan que la población mestiza incida en la decisión de implementar proyectos extractivos en sus territorios, los espacios existentes solo se limitan a informar:

Los mestizos no tienen oportunidad. No te obliga en absoluto si no son una minoría étnica, sólo así es obligatorio [consulta previa]. Ellos [instituciones gubernamentales] lo que hacen es algo semejante, que se llama la consulta pública, que es para las comunidades no indígenas o no étnicas, lo que hacen es una reunión para socializar lo que están haciendo, pero consulta previa no existe para las comunidades que no son minoría étnica. (E16, Líder Organización de Productores-Cooperativa de Mineros, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

- La importancia cultural para las comunidades que habitan o circundan las zonas delimitadas como AEM. (Tierra Digna, 2020)

Como hemos visto, los documentos técnicos del ordenamiento minero-energético en el país están contruidos a partir de un discurso eficientista, de aprovechamiento de las ventajas comparativas y de la necesidad imperativa de aprovechar las potencialidades del país en términos de su biodiversidad y de la posición geo-estratégica. Esta retórica se encuentra acompañada de referencias hacia la sostenibilidad ambiental y social. Sin embargo, al analizar los textos, es paradójico que solo se haga referencia a los contextos sociales regionales para explicar las dificultades u obstáculos para emprender los proyectos extractivos, en términos de derechos territoriales de las comunidades, normativas y trámites ambientales. Es diciente también que, en la representación cartográfica de localización de recursos estratégicos, no se superpongan otros elementos fundamentales, como los resguardos indígenas, las tierras colectivas de las comunidades afrodescendientes o las zonas de reserva ambiental y/o forestal.

De esta manera, se transmite el imaginario de espacios “vacíos”, disponibles para ser intervenidos por actores económicos nacionales y extranjeros, que por la incontestabilidad del saber técnico son los llamados a ser los agentes que exploten los recursos. De esta manera, se desconocen las tensiones y conflictos que son inherentes a las dinámicas territoriales, más en un contexto de disputa armado por la captura de las rentas de esos recursos estratégicos.

9.2.1. La estrategia de seguridad acompaña los proyectos extractivos

La estrategia de impulso de la actividad minero-energética en el Putumayo, se realizó en el marco de la implementación del Plan Colombia y de la Política de Seguridad Democrática. La concesión de nuevas exploraciones a empresas privadas estuvo acompañada por una estrategia de control social y militar del territorio, en particular, en las zonas próximas a los pozos petroleros, que coinciden con la explotación minera que se daría años después. El auge del petróleo también coincidió con el descenso de los cultivos de uso ilícito, con el repliegue de las FARC y con el fortalecimiento de los grupos paramilitares. Estos elementos cambiaron las dinámicas territoriales, en un escenario de creciente militarización, en donde los actores armados regulares e irregulares transformaron su forma de operar.

Al respecto, la infraestructura militar en la región se vio reforzada en la década del dos mil por la creación de nuevas brigadas y batallones del Ejército y de la Policía Nacional, lo que permitió ampliar el radio de acción a lugares en donde no había presencia de la Fuerza Pública. “Esto sucedió principalmente en las zonas rurales de los municipios de Puerto Asís, Villagarzón, Puerto Guzmán y Leguízamo, donde las Farc tenían un fuerte control militar del territorio antes del Plan Colombia y sólo había habido exploración petrolera en la década de 1960” (CNMH, 2015, p. 146). La presencia de la Fuerza Pública profundizó el conflicto social en la región, las comunidades denuncian diferentes acciones violentas en su contra, vulnerando los derechos humanos y profundizando la grave situación humanitaria del departamento⁴⁰⁰.

El Ejército y la Policía se instalaron en donde estaban las empresas petroleras. Se presentaron abusos contra las comunidades, amenazas, intimidación. No se hicieron las consultas, llegaron e hicieron la exploración. La población campesina me preocupa, los resguardos tienen sus planes de vida, las leyes indígenas y en algunas partes que están más organizados comienzan a hacer la consulta previa. En cambio, el campesino vive al lado del tubo, su casa está frente al tubo. Hay treinta metros de donde pasa el tubo a donde está la casa, se han quemado casas cuando la guerrilla hace algún atentado a un tubo. (E19, Líder Mesa Organizaciones Campesinas, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Cuando el Estado se acuerda de nosotros, hace presencia con las multinacionales y el ejército en busca de la seguridad para las inversiones del gran capital; cuando las multinacionales llegan lo primero que le piden al Gobierno es la seguridad. Entonces las comunidades son objeto de la violencia y se encuentran con un movimiento social organizado y nosotros, los dirigentes, que no tenemos más armas que nuestros argumentos, hacemos propuestas y enfrentamos este ciclo para detenerlo. Nuestra resistencia se define en contra de la represión, la fumigación, el desplazamiento y todo el desastre que causan las multinacionales que empiezan a aparecer cada vez con mayor contundencia en el departamento desde el 2008 en zonas como Puerto Asís, Puerto Caicedo y Villa Garzón. (Mesa Regional de Organizaciones sociales del Putumayo, 2015, p. 138)

⁴⁰⁰ La organización Codhes señala que en la primera década del dos mil el departamento del Putumayo se sumió en una profunda crisis humanitaria causada entre otros factores por la agudización de la pobreza, la falta de oportunidades, los diferentes repertorios de violencia desplegados por los actores armados regulares e irregulares (violencia sexual, reclutamiento forzado, minas antipersona, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, desaparición forzada, etc.). Estas circunstancias han generado que en los últimos 13 años se hayan desplazado del departamento 144.492 personas (CODHES, 2012, p. 27).

Por otra parte, en la investigación realizada por la Coordinación Colombia-Europa- Estados Unidos sobre las ejecuciones extrajudiciales durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, se señalan elementos relevantes para entender los impactos de la militarización en el Putumayo. Primero, los departamentos que han tenido un número elevado de ejecuciones extrajudiciales coinciden con los que han presentado mayores niveles de despojo, entre los que se encuentra el Putumayo. Segundo, en el periodo del 2002 al 2010, en este departamento se cometieron 99 ejecuciones extrajudiciales. En cinco departamentos del sur del país se concentraron una cuarta parte de las ejecuciones del todo el país, durante el periodo señalado. Tercero, en el año 2009 disminuyó el número de ejecuciones, no obstante, en el Putumayo aumentaron las dirigidas a la población indígena (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 2013).

Los intereses económicos a proteger en un momento de profundización del modelo extractivo tuvieron/tienen una correlación con las dinámicas de conflictividad, según los contextos regionales⁴⁰¹. El sector de los hidrocarburos ha sido uno de los motores del proceso de expansión capitalista. En este sentido, las zonas en donde se localiza este recurso se han caracterizado por la disputa violenta entre los actores armados ilegales y el Estado por la captura de las rentas o como objetivo militar en la lucha insurgente. Estas mismas características se reproducen en los enclaves mineros. Las organizaciones sociales en donde se localiza este tipo de extracción, señalaron la correlación existente entre violencia y minería, que estiman es alimentada por las empresas extractivas. En el siguiente testimonio, el líder se refería a la disputa existente entre la empresa y la comunidad que realizaba la explotación en la zona. Esta disputa no solo se quedó en el marco jurídico, trascendió al ámbito de la coerción violenta, al parecer impulsada por la empresa.

La comunidad se ha visto presionada para dejar las demandas. Hemos tenido amenazas por celular, creo que era la empresa que pagaba. Pueden ser paramilitares, como parte de una estrategia para infundir miedo y ver si abandonábamos. Las presiones han generado el desplazamiento de algunos compañeros. A algunos les da temor. A mí me ha tocado frentear, pero eso no ha sido fácil porque en la vida familiar manejamos fincas y casas y nos movemos así, porque a mí han intentado matarme en la finca, en esas balaceras hay mucho movimiento, por la cercanía con los grandes proyectos que están ahí [Villagarzón]. Cerca de donde vivo hay un pozo de petróleo que consumen mucho material que es sacado de ahí, del aeropuerto las balasteras están a kilómetro y medio.

En esa zona hay una multinacional, en Villa Garzón operan todas “Gran Tierra” y “EMERA” ... Ellos se han quedado con el negocio. En la zona hay mucha demanda de material para construcción. Ellos han aprovechado que tienen todas las cosas para que nosotros nos sigamos con ese proceso. Yo tenía mucho respaldo de la comunidad, pero se ha complicado, incluso para salir a Mocoa, me tocó pedir a compañeros que me acompañen. A uno le toca moverse porque dicen las “influencias” que hay dos sicarios y si no pongo atención me van a matar.

Uno habla con la Policía y preguntan “de quién lo defendemos, dos sicarios que no saben quiénes son, dónde lo van a esperar”. Uno tiene que tomar ciertas medidas, en la finca me toca esconderme. Cuando voy con alguien, llaman al número de celular de esa persona y le dicen que me van a matar, yo le digo que bueno, que vaya por partes, que

⁴⁰¹ Las investigaciones realizadas por Catherine Legrand apuntan a que las dinámicas del conflicto armado en Colombia tienen una estrecha relación con procesos de colonización interna y con el desplazamiento de la población a las regiones en donde se gestaban economías de enclave, monocultivos, etc., donde se producían procesos de ampliación de la frontera agrícola. La autora señala que este proceso estuvo acompañado por la expansión del latifundio y la consolidación del poder oligárquico (Legrand, 2016 [1988]). Estas características se han dado en el Putumayo, donde las dos últimas oleadas de colonización por los hidrocarburos y por el megaproyecto de la coca, han dado lugar a una reconfiguración de los patrones de poblamiento territorial en donde las relaciones de poder se han transformado de manera importante. Como hemos visto a lo largo del estudio de caso, estos procesos se encuentran estrechamente relacionados con las pugnas entre diferentes actores sintagmáticos que buscan imponer sus proyectos territoriales.

dónde nos citamos, porque si uno se acobarda es peor, ellos lo que quieren es que uno se vaya.

Nosotros, hablo de los líderes, consideramos que el paramilitarismo es una estrategia del gobierno, para poder desestabilizar a las organizaciones sociales para que no hagan resistencia y poder avanzar con los megaproyectos de explotación de hidrocarburos, de recursos naturales, maderables, fauna y flora, además la desaparición física y cultural de los grupos étnicos. (E16, Líder Organización de Productores-Cooperativa de Mineros, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

En el marco de un modelo de desarrollo centrado en el extractivismo, durante los gobiernos de principios del presente siglo, se reforzó la presencia militar en las zonas estratégicas de recursos minero-energéticos. De tal manera, durante el segundo mandato de Álvaro Uribe, se crearon los Batallones Especiales Energéticos y Viales (BAEEV). El objetivo de los mismos era brindar seguridad a la infraestructura económica en las zonas en donde se localizan proyectos centrales de hidrocarburos, minería y energía. Para el año 2015, se encontraban activos 20 BAEEV. Además, se conformaron Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado (COPEI) en zonas petroleras, nueve en total⁴⁰². Los COPEI articulan las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y empresas del sector. La finalidad era implementar estrategias conjuntas para salvaguardar la infraestructura extractiva (Rettberg y Prieto, 2018; Cepeda Castro, 2015).

En el departamento del Putumayo al ser una región estratégica en estos recursos se encuentran las dos figuras de control militar señaladas anteriormente:

⁴⁰² Los COPEI operan en Bogotá y en los departamentos del Meta, Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Arauca y Bolívar (Cepeda Castro, 2015).

Tabla 3. Batallones Especiales Energéticos y Viales (BAEEV) y Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado (COPEI) en el Putumayo

BAEEV o COPEI	UBICACIÓN	ÁREA DE RESPONSABILIDAD Y OPERACIÓN
BAEEV N.º 9	Valle del Guamuez	Oleoducto Transandino
BAEEV N.º 21	Villa Garzón	Oleoducto Transandino
COPEI (Div. 6)	Orito	Zona Petrolera de Putumayo y Oleoducto Transandino

Fuente: Elaboración propia a partir de Cepeda Castro (2015) y Rettberg y Prieto (2018).

Por otra parte, la estrategia de intervención en el territorio, era complementaria con la figura de convenios de cooperación y protección entre la Fuerza Pública y empresas minero-energéticas, en su mayoría transnacionales. Esta figura se implementó a finales de la década del noventa, y hasta 2015 se han firmado 1.229 convenios. El objetivo principal era prevenir los ataques a la infraestructura por parte de los actores armados ilegales para desarrollar la actividad extractiva. Este tipo de convenios han sido cuestionados debido a que suponen una privatización de la Fuerza Pública, en donde al parecer no hay suficiente claridad del alcance de las acciones, dan lugar a violaciones a derechos humanos y cuestionan la soberanía nacional (Cepeda Castro, 2015). Al igual que en la década de los sesenta, la presencia del Estado responde a las demandas de seguridad de la industria minero-energética, con el objetivo de finalizar todas las fases del proceso (exploración, explotación y transporte del hidrocarburo) (CNMH, 2015, p. 149).

Estos tres componentes de orden militar (BAEEV, COPEI y convenios) no solo actuaron en razón a las dinámicas del conflicto armado, se implementaron como respuesta a los conflictos socio-ambientales y a la movilización de las organizaciones sociales que se oponen al modelo de desarrollo (Cepeda Castro, 2015). De esta manera, se repite nuevamente el patrón de acción del Estado frente a los actores no hegemónicos, que establecen repertorios de confrontación frente a situaciones que consideran injustas en términos de vulneración de sus derechos que, en este caso en particular, se debe leer en clave espacio-temporal.

El nuevo auge de los recursos minero-energéticos en el departamento, provocó la transformación del mercado de tierras en la región⁴⁰³. En donde el aumento de las concesiones a empresas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación, debilitó la posición de las comunidades en su exigencia de titulación de tierras, entre otras cuestiones debido al alto grado de informalidad de títulos que hay en Colombia, aún más acuciante en las zonas de reciente colonización. El número de baldíos disponibles para la titulación disminuyó drásticamente teniendo en cuenta que el artículo 67 de la Ley 160 de 1994, estipulaba que:

No serán adjudicables los terrenos baldíos situados dentro de un radio de 5 kilómetros alrededor de las zonas donde se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, las aledañas a Parques Nacionales Naturales y las seleccionadas por entidades públicas para adelantar planes viales u otros de igual significación cuya construcción pueda incrementar el precio de las tierras por factores distintos a su explotación económica⁴⁰⁴. (Ley 160 de 1994)

El conflicto por la tierra derivado tanto de la explotación de hidrocarburos como de la minería, fue señalado por las organizaciones sociales como uno de los principales ejes de disputa, en la medida que cierra cualquier oportunidad para mejorar sus condiciones en el territorio y la posibilidad de permanencia en el mismo. Así es señalado por uno de los líderes entrevistados:

Para realizar nuestro trabajo, necesitamos saber cuántas hectáreas son susceptibles de ser tituladas. El INCODER [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] no proporciona esa información. Pero en realidad son muy pocas porque el departamento del Putumayo tiene una particularidad, cerca de las tres cuartas partes de la tierra son áreas protegidas, otro tercio son resguardos o aspiraciones de territorios ancestrales, otro parte zonas mineras o

⁴⁰³ Al respecto, la CNMH (2015) apunta a un fenómeno de acaparamiento del mercado formal de tierras por parte de las empresas petroleras nacionales y extranjeras en la primera década del presente siglo, en donde se produjo una concentración de las transacciones en el departamento:

Entre 2005 y 2012, la ANH firmó 34 nuevos contratos con empresas petroleras en Putumayo, de los cuales 27 eran de exploración y explotación de hidrocarburos y 24 habían sido contraídos con empresas privadas (ANH, 2013a [base de datos]). En este contexto, las empresas petroleras (estatales o no) aumentaron significativamente su participación en el mercado formal de tierras de Putumayo: de todas las transacciones de tierras reportadas por estas empresas en los circuitos notariales de Putumayo en el periodo 1963-2013, un 62,2 por ciento correspondían al lapso de tiempo 2004-2013. Estas transacciones fueron, en su mayoría, contratos de servidumbres petroleras (92) y contratos de compraventa (15) realizados con particulares. Más de la mitad de las servidumbres petroleras (46) y la totalidad de los contratos de compraventa del periodo 2004-2013 fueron realizadas por empresas privadas. (p. 154)

⁴⁰⁴ Este artículo es modificado por la Ley 1728 de 2014 en donde se señala que:

No serán adjudicables los terrenos baldíos que cuenten con las siguientes condiciones: a) Los terrenos baldíos situados dentro de un radio de dos mil quinientos (2.500) metros alrededor de las zonas donde se adelanten procesos de explotación de recursos naturales no renovables; entendiéndose por estos, materiales fósiles útiles y aprovechables económicamente presentes en el suelo y el subsuelo, dejando por fuera los materiales de construcción y las salinas tomando como punto para contar la distancia la boca de la mina y/o el punto de explotación petrolera. (Ley 1728 de 2014)

de hidrocarburos y el resto son pendientes. Entonces, no queda nada, en realidad hay unos temas de ordenamiento. Me enteré hace un año que vamos a ser un distrito minero especial y eso es una forma de ordenamiento que excluye a la gente del acceso a los recursos, al territorio. A esto se suma que alrededor de 5 kilómetros a la redonda de una explotación de petróleo o minera no se puede titular. Hay trescientos pozos, si calculamos cinco kilómetros a la redonda... vemos toda una intencionalidad del Estado de no querer dar a los campesinos, a los indígenas o a los afros la tierra que les corresponde. (E10, Fundación Ecotono Putumayo, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Esta situación es diciente en el caso de las comunidades indígenas, que han sido objeto del despojo de sus territorios por la acción de las empresas extractivas. La ampliación del negocio de los hidrocarburos dificultó aún más el cumplimiento de sus derechos territoriales.

A continuación, retomamos las narraciones de las organizaciones en donde se aborda la compleja situación de las comunidades indígenas, por el incumplimiento de los procesos de consulta previa y de los impactos de diferente orden que genera la explotación minero-energética en sus territorios:

Existe una fuerte preocupación por el territorio del pueblo Ziona, que fue reducido a todo lo que es la rivera del río Putumayo, y que en esta zona se va a implementa a través de la Oxi la explotación petrolera. Por eso se está abriendo la carretera Puerto Asís-La Vega, y a parar a Puerto Ospina; lo que se pretende con la construcción de los oleoductos para conectar la producción petrolera entre Colombia y Ecuador, y sacar la vía marítima Esmeralda. (Relatoría del Taller Putumayo realizado en Mocoa el 17 y 18 de octubre de 2010 citando en Observatorio Nacional de Paz, 2012a, p. 118)

A metros del resguardo en Villa Garzón [resguardo del pueblo Inga], están contaminando las aguas que cruzan por el resguardo. Yo participo de los congresos indígenas. Hace poco hubo un congreso indígena de los 10 resguardos que hay en el municipio. En este encuentro se tomó posición frente a las multinacionales y es que los cabildos se van a unir para exigir la consulta previa. Al parecer esta multinacional no tiene los estudios de impacto ambiental y social que afecta a las comunidades. Mañana tenemos una reunión con la gente de Gran Tierra en donde estarán unos representantes del cabildo y unos ingenieros de la empresa. Ahora están asustados porque les vamos a exigir el estudio de impacto ambiental y ellos no lo tienen.

Nosotros nos hemos reunido con ellos y les hemos solicitado el estudio pero no lo muestran. También les solicitamos que socialicen ese proyecto petrolero que tienen aquí, pero tampoco lo muestran, tratan de guardar información y puede que tengan el estudio pero no conforme a la ley, con consultas previas, mitigación, compensación donde tengan que hacerlas, trabajos de reforestación, de no contaminación de agua. Ellos no lo muestran porque no está correcto, sólo es por mostrarlo a las entidades, pero a la hora de socializarlo con la comunidad tienen muchas falencias por eso se lo estamos exigiendo. El otro problema es que ya mataron líderes indígenas, porque exigen la consulta previa a unos

cabildos del municipio del lado, un día un líder apareció muerto⁴⁰⁵. (E16, Líder Organización de Productores-Cooperativa de Mineros, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

En el marco del trabajo realizado por el Observatorio Nacional de Paz (2012a), un líder del Pueblo Nasa, apuntaba a los procesos de resistencia de las organizaciones frente a los impactos de las actividades extractivas en sus territorios. En la entrevista, señalaba el horizonte de sentido de sus luchas, articuladas a partir de la defensa de los derechos territoriales y de la naturaleza.

El desconocimiento de las multinacionales petroleras de los pueblos indígenas, ha llevado a que los indígenas estén haciendo incidencia en la zona para que se reconozca que en el Putumayo habitamos 14 pueblos y que el territorio del Putumayo prácticamente es indígena, porque hay presencia de indígenas en los 13 territorios y las multinacionales lo están desconociendo con el beneplácito del Ministerio del Interior y de Justicia, o sea con el gobierno nacional. Nosotros (refiriéndose a una pregunta sobre desde cuándo tomaron la iniciativa de luchar) desde que constituimos un mandato cosmo ambiental el cual dice “El Nasa saldrá en la defensa de madre naturaleza así sea a cambio de su propia vida”. Ese mandato está hecho desde 2007. (Líder Nasa, Relatoría del Taller Putumayo realizado en Mocoa el 17 y 18 de octubre de 2010)

En una situación similar se encuentra el pueblo Awá, que habita los departamentos de Nariño y Putumayo. Esta comunidad indígena ha sido una de las más golpeadas por el conflicto armado y por la implementación de recursos extractivos en su territorio. Los actores armados regulares e irregulares han desplegado diferentes acciones violentas contra su comunidad (violencia sexual, confinamiento, reclutamiento forzoso, minas anti-persona, etc). En el año 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los Awá debido al constante hostigamiento de los actores en conflicto. No obstante, este pueblo indígena

⁴⁰⁵ En el año 2002, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) reconoció el resguardo San Miguel de La Castellana, localizado en el municipio de Villagarzón. No obstante, en el 2008 el Ministerio del Interior emitió un concepto en el que negaba la existencia de grupos indígenas en la zona. Este documento respaldaba la concesión de un área de explotación petrolera a la empresa Gran Tierra Energy Colombia, situada a 500 metros del resguardo. A partir de este momento, el pueblo Inga no ha dejado de movilizarse reclamando la anulación de la concesión petrolera y exigiendo el reconocimiento de sus derechos territoriales. En el año 2009, el resguardo tramitó un derecho de petición al Ministerio del Interior, en el que solicitaban la realización de la consulta previa. En 2016, el Ministerio emitió una resolución en la que exigió a la empresa la realización de la consulta. No obstante, hasta 2018 los jueces especializados en tierras del departamento aceptaron estudiar una demanda de la Unidad de Restitución de Tierras con el objetivo de restablecer los derechos a la comunidad y proteger su territorio de la actividad extractiva (Tierra en disputa, s.f.).

siguió siendo víctima de acciones violentas⁴⁰⁶, lo que le ha obligado a desplazarse de su territorio a los centros urbanos (CODHES, 2012, p. 29).

En el territorio del pueblo Awá se han desplegado todos los factores que configuran la conflictividad socio-territorial: la presencia de la insurgencia, paramilitares Bacrim, Ejército, cultivos de coca y amapola, proyectos minero-energéticos. El territorio es apreciado no solo por su riqueza en recursos naturales, sino por su posición geoestratégica de frontera con Ecuador y de salida hacia el océano Pacífico. Asimismo, este territorio es atravesado por el Oleoducto Transandino, lo que ha generado un fuerte impacto ambiental y a la salud de la comunidad indígena, causada por los derrames de hidrocarburo, los atentados de la guerrilla, las refinerías clandestinas, los vertidos de las compañías, la deforestación, la contaminación de los recursos hídricos, entre otras consecuencias⁴⁰⁷. En el año 2018, la Corte Constitucional falló a favor del pueblo Awá, en donde reconoció las graves afectaciones causadas por la explotación de petróleo en el Putumayo (se admitió la vulneración de los derechos a la vida, a la identidad cultural y al ambiente) e instó al Consorcio Colombia Energy a realizar el proceso de consulta previa.

La situación de desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas por parte del Estado y de las empresas minero-energéticas se extiende a lo largo del departamento. Las comunidades han sido gravemente perjudicadas por las exploraciones del crudo realizadas en los corregimientos de Puerto Vega, La Carmelita, Alto Cuembí, Teteyé y Bajo Cuembí. Al inicio de la actividad, estos proyectos estaban gestionados por Ecopetrol, pero a partir de 2002 es el consorcio Colombia Energy el que opera las actividades. Ante esta situación, las organizaciones populares presentes en este territorio iniciaron un proceso de resistencia, a partir de la articulación de diferentes procesos sociales:

⁴⁰⁶ En el año 2009, se llevaron a cabo tres masacres contra el pueblo Awá, en la que asesinaron a 41 personas, y produjeron el desplazamiento de la población. Ante la situación constante de violaciones de sus derechos, tanto la Corte Constitucional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han instado al gobierno a la implementación de medidas para garantizar el derecho a la vida e integridad personal del pueblo Awá y a llevar a cabo acciones de desminado en su territorio.

⁴⁰⁷ En el territorio Awá, que incluye los departamentos de Nariño y Putumayo, se produjeron una serie de derrames de crudo que han afectado de manera drástica la biodiversidad, los recursos hídricos y la fauna y la flora, generando también consecuencias en la salud de los habitantes. El primer derrame fue en el año 2009, a causa de mal manejo de tres válvulas ilícitas. La situación no fue controlada por Ecopetrol hasta tres días después. El segundo se produjo en el 2010, debido al rompimiento de una tubería conectada a una válvula ilícita. Los indígenas tuvieron que asumir la limpieza del territorio ante la falta de acción de la empresa estatal. En los años 2011 y 2015, las FARC atentaron contra el oleoducto, afectando gravemente los cuerpos hídricos, la fauna y la flora. Ante la grave situación, en 2017 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) inició un proceso sancionatorio ambiental contra Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, empresa filial de Ecopetrol que opera en el Oleoducto Transandino (Verdad Abierta, 2018a).

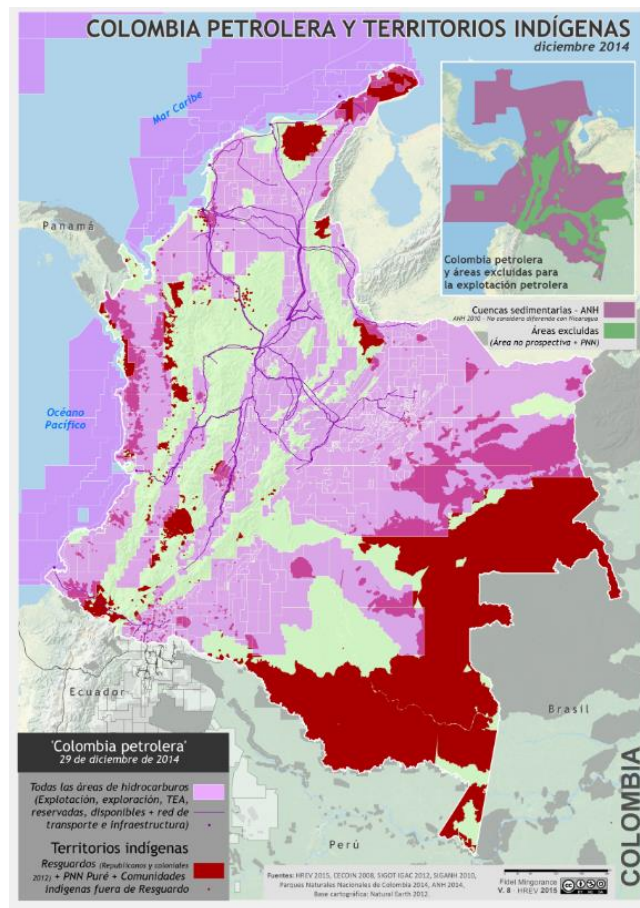
La Asamblea Permanente de Comunidades Indígenas y Campesinas del Sur Oriente del Putumayo (Acsomayo-Consejo de Autoridades Nasa Çxhãçxha) fue declarada el 24 de mayo del año 2006 con la participación de 73 juntas de acción comunal y ocho cabildos indígenas. Acsomayo es una organización social que realiza su trabajo en cinco corregimientos, cinco cabildos y dos resguardos. Acsomayo surgió como una iniciativa de los habitantes del corredor Puerto Vega-Teteyé para hacerle frente a las problemáticas que estábamos viviendo como la explotación petrolera, el conflicto armado, la militarización, los cultivos de coca, la fumigación y la erradicación forzosa. (Mesa departamental de organizaciones sociales, 2014, p. 115)

En los procesos de concesión de las exploraciones y explotaciones, lo que se puede observar es una violación de las condiciones sobre las cuales se deben realizar las consultas previas. La vulneración de los derechos de las comunidades indígenas se vio agravada durante el gobierno de Juan Manuel Santos en razón de la profundización del modelo extractivista previsto en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” (2010-2014), sustentado en las “locomotoras del desarrollo”, lo que generó la agudización de los conflictos socio-ambientales. El planteamiento del gobierno fue reforzado por el documento CONPES 3762 del 2013, en el que se abordaban los aspectos técnicos a mejorar para la puesta en marcha Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos, contenidos en el documento⁴⁰⁸.

De esta manera, las concesiones se realizan bajo la lógica de espacios “vacíos”, en donde la prioridad es la actividad extractiva, realizada en el marco de los planes de desarrollo gubernamentales. En el siguiente mapa, se puede observar cómo sobre los territorios indígenas y en contra de sus derechos, se implementan los proyectos extractivos y de intervención del territorio, diseñados en función de los intereses del capital nacional y transnacional.

⁴⁰⁸ En el documento CONPES se exponen los “lineamientos de política para la identificación y priorización de proyectos en infraestructura, hidrocarburos, minería y energía considerados como de interés nacional y estratégicos (PINES)” (CONPES 3762, 2013). Asimismo, se realiza una valoración de las principales dificultades que, según estima el gobierno, se presentan para la formulación e implementación de las iniciativas, entre las que se encuentran: “la adquisición de predios, la consulta previa a comunidades, los permisos y trámites ambientales, las relaciones con las comunidades de las diferentes regiones, y las dificultades internas de las entidades públicas en la solución de problemas jurídicos” (CONPES 3762, 2013). Para sortear tales dificultades se realizan una serie de recomendaciones que permitan resolver lo que denominan “cuellos de botella” en la política minero-energética y de infraestructura. En relación a la consulta previa se sugiere la necesidad de acortar el proceso que esta figura requiere. Además, hace especial hincapié en los trámites para los estudios de impacto ambiental y las licencias ambientales requeridas para iniciar cualquier proyecto de explotación de recursos naturales. En la argumentación del documento técnico prima el interés económico frente a las consideraciones de tipo social, ambiental y cultural de este tipo de proyectos, poniendo en una situación de mayor vulnerabilidad a las comunidades que habitan los territorios en donde se localizan los recursos centrales en la estrategia de desarrollo extractivista.

Figura 16. Colombia petrolera y territorios indígenas



Fuente: Adaptado de *Radiografía del extractivismo*, por Geoactivismo, 2020, (<https://geoactivismo.org/mapas/radiografia-del-extractivismo/>).

En el siguiente cuadro se resumen los diferentes impactos sobre los territorios indígenas debido a la implementación de un modelo de desarrollo sustentado en la extracción de los recursos naturales necesarios para alimentar el modelo capitalista. Algunas de estas afectaciones son generalizables a las comunidades campesinas que se sitúan en las zonas que se han identificado como “estratégicas” para el motor del este tipo de progreso.

Tabla 4. Algunos impactos frecuentes de la actividad petrolera en territorios indígenas

Componentes y Actividades	Impactos Posibles
Exploración	
Apertura de trochas y caminos.	Fragmentación y alteración de ecosistemas. Profanación de sitios sagrados. Fomento de inmigración y procesos de colonización. Problemas de salud en poblaciones de escaso contacto.
Explosiones para estudios sísmicos.	Ruido, con impacto sobre la vida silvestre. Atemorización de la población indígena. Daños a la estructura del suelo y del subsuelo.
Perforaciones de prueba	Contaminación por desechos, lodos y fugas. Relaciones conflictivas entre la población trabajadora y las comunidades indígenas.
Explotación	
Construcción de vías de acceso.	Erosión de suelos. Fragmentación de Ecosistemas. Alteración de estructuras de drenaje. Disminución de hábitats de vida silvestre. Aceleración de procesos de colonización.
Instalación de plataformas de perforación.	Contaminación por desechos, lodos y fugas. Contaminación de aguas por residuos de perforación. Contaminación atmosférica por quema de gas. Erosión de suelos. Eventos catastróficos.
Instalación de infraestructura de servicios (helipuertos, campamentos, generadores eléctricos, etc.) Tráfico vehicular.	Alteración de suelos Contaminación de desechos sanitarios y domésticos. Contaminación inherente a la operación de equipos y vehículos.
Transporte de Combustible	
Construcción de oleoductos y gasoductos.	Contaminación de fugas de combustible. Fragmentación de ecosistemas. Incendios y explosiones. Afectación de lugares sagrados. Inestabilidad de suelos, derrumbes.
Procesos Adicionales	
Generación de actividades económicas: a) Directas b) Complementarias o indirectamente vinculadas a la actividad petrolera extractiva.	Inmigración de población no indígena. Choques culturales. Presión por recursos naturales de territorios indígenas. Procesos de desintegración social. Alteración de sistemas productivos tradicionales. Monetización de la economía tradicional. Pérdida de la seguridad alimentaria. Dependencia económica.
Cambios Políticos y Administrativos.	Procesos de desintegración social (Cooptación de cabildos, divisiones internas, desvalorización del poder tradicional).

Corrupción administrativa. (Las regalías son objeto del manejo corrupto de las burocracias locales). Militarización y acción de grupos insurgentes y paramilitares que afectan los territorios indígenas.

Los controles militares se constituyen en una amenaza a la población indígena.

Fuente: Adaptado de de Marín y Pulido (2002, p. 17-18). El cuadro fue elaborado a partir de los documentos Minería en territorios indígenas, Onic – Cecoin (1999) e Impacto ambiental de la Industria Petrolera (Cartillas). Censat Agua Viva (2001).

9.3. Proyectos de infraestructura

A lo largo de la tesis, nos hemos referido a las características geoestratégicas que posee el país en términos de naturaleza, biodiversidad y ubicación, adquiriendo un significativo potencial para los requerimientos sistémicos en el contexto actual de acumulación de capital. En términos geográficos, Colombia se encuentra ubicada en el centro del continente, lo que le permite ser un puente de articulación entre el Norte y el Sur de la región. Asimismo, el país tiene acceso a los dos principales océanos, Pacífico y Atlántico, adquiriendo una posición privilegiada para el comercio internacional interoceánico y, por lo tanto, para el tránsito de las *commodities* hacia los países del centro de la economía-mundo.

Los diferentes gobiernos, conscientes de estas potencialidades, han incluido importantes reformas de infraestructura en los planes de desarrollo, como se apunta en el segundo apartado de la tesis. El objetivo de tales programas ha sido mejorar la conectividad con las redes globales de intercambio de capital, en la línea de optimizar las ventajas comparativas del país y consolidar su posición en los tratados de libre comercio.

En este contexto, los departamentos del sur de Colombia juegan un papel fundamental como fuente de recursos para las locomotoras de desarrollo y como corredores de tránsito para el movimiento de los recursos naturales. De esta manera, los territorios que comprenden esta área del país fueron objeto de múltiples intervenciones, entre ellas los proyectos de infraestructura vial con el objetivo de conectar los polos de extracción de *commodities* con el mercado global. En el trabajo de campo, las organizaciones sociales populares del Putumayo identificaron como uno de los ejes de conflictividad los proyectos de infraestructura llevados a cabo en su territorio, los cuales se encontraban estrechamente relacionados con la política minero-energética.

Los criterios utilizados para los proyectos de infraestructura se asociaron con indicadores de competitividad y eficiencia. En los planes de desarrollo se argumentaba que la mejora en las

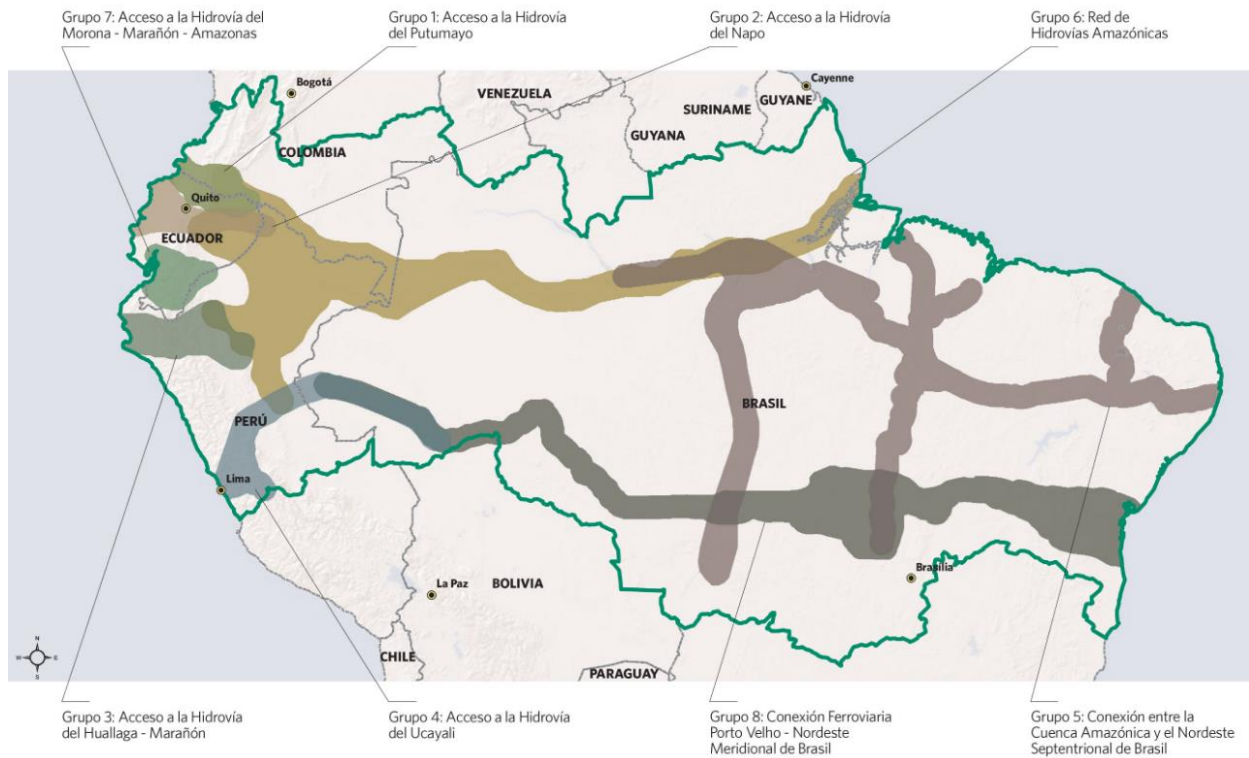
vías de comunicación y el despliegue de una infraestructura multimodal conllevaría una mejora en la calidad de vida de las zonas rezagadas del progreso. No obstante, en los relatos de las organizaciones se puede apreciar cómo estos proyectos profundizaron los conflictos en el departamento y contribuyeron a los procesos de despojo y de desplazamiento de las comunidades. Por lo tanto, una vez más asistimos a una política desarrollista del Estado, planificada desde el saber técnico, sin procesos reales de participación de la población para la identificación de sus necesidades reales.

En principio, los efectos más notorios es el tema de los resguardos indígenas, debido a que están ubicados en las zonas por donde va a pasar la vía. Ellos por lo menos cuentan con herramientas como la consulta previa, pero por ejemplo la gente que habita la variante de Mocoa, San Francisco son gentes que no tienen legalizados su territorio y eso fue declarado como reserva forestal protectora. Si te vas hasta Puerto Asís ves que el tipo de territorio cerca de la carretera comienza a ser de los pudientes que no son de acá, así efectivamente hay un desplazamiento de la gente, la arrinconan más y la meten a la selva, a lo baldío; y, adicionalmente se presenta una figura, hay una serie de ordenamientos que se empiezan a implementar inconsultos, desde arriba, la gente deja de acceder al territorio.

Ahora está el derecho a la vía, eso es que treinta metros a lado y lado no se puede en lo absoluto hacer ningún tipo de uso, hay restricción en los tipos de uso al territorio y la tenencia, creo que, a 100 metros según la norma, la gente en el Putumayo vive cerca de la carretera. La gente está muy preocupada, tienen temor a que les digan que deben desalojar. Esto no es explícito todavía, lo que sí sabemos es que están haciendo una serie de averiguaciones de información, el estado legal del territorio, quién tiene, hace cuánto están ahí, etc. Seguramente para tomar medidas que no van a favorecer a la gente. (E10, Fundación Ecotono Putumayo, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Los principales proyectos de infraestructura que se han desarrollado en el departamento del Putumayo están relacionados con la IIRSA. Entre los que se encuentran: el Paso de la frontera de San Miguel y sus accesos (Mocoa–Santa Ana–San Miguel) diseñado en el eje Andino (Conexión Colombia–Ecuador), la Carretera Pasto–Mocoa–Puerto Asís y la mejora de la navegabilidad del río Putumayo, en el Eje Amazonas. El objetivo de estos proyectos, desde la visión institucional, era optimizar las condiciones de transporte en el suroccidente y posibilitar la conectividad del continente a través de la vía Belém do Pará (Observatorio Nacional de Paz, 2012a, p. 105).

Figura 17. Grupo de proyectos del Eje Amazónico IIRSA



Fuente: Adaptado de COSIPLAN, 2020, (<http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItem=45>)

En el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” 2010-2014, en el apartado de lineamientos estratégicos para la formulación de políticas y estrategias regionales diferenciadas, se incluyen estos proyectos de infraestructura para el departamento del Putumayo, considerados como macroproyectos fundamentales para lograr mayor convergencia y desarrollo regional. Los proyectos de infraestructura se incorporaron en el eje de crecimiento sostenible⁴⁰⁹. Estos proyectos de infraestructura establecen una continuidad con los programas viales consignados en los planes de desarrollo de los gobiernos de Álvaro Uribe.

⁴⁰⁹ Al respecto, en este Plan Nacional de Desarrollo se señala la importancia del Eje Puerto Asís-Mocoa-Tumaco previsto en el Eje de Integración Amazónico IIRSA, para la conectividad interoceánica y el fortalecimiento de la integración fronteriza con Perú y Ecuador. Por otra parte, se hace especial hincapié en los proyectos de integración nacional entre los departamentos del sur (Cauca, Putumayo y Nariño) y el centro del país, a través del eje vial: Espinal - Neiva - Pitalito - Florencia - Mocoa - San Miguel. Este proyecto se encuentra pensado para conectar los centros urbanos en el área de influencia del Macizo colombiano y apuntalar la integración en la frontera con Ecuador. En esta dirección, se plantea el aprovechamiento de “los recursos minero-energéticos (petróleo - gas), la riqueza hídrica y biodiversidad, los potenciales agropecuarios y forestales, los atractivos turísticos y la cultura étnica” (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 56).

Tabla 5. Proyectos estratégicos Putumayo. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Eje	Lineamientos	Área de influencia
Crecimiento sostenible	Promoción de la construcción y/o mejoramiento de los proyectos de integración vial regional, nacional y suramericana, (eje Amazonas: Tumaco - Belém do Pará) garantizando el equilibrio ambiental y la formación de corredores de desarrollo regional, para fortalecer la integración económica fronteriza, facilitar la formación de encadenamientos productivos y <i>clústeres</i> y elevar la competitividad.	Nariño, Putumayo, Amazonas
	Preservación y aprovechamiento sostenible del ecosistema amazónico, mediante la regulación y control de la expansión de la frontera agrícola, el impulso de la investigación e innovación para aprovechar económicamente la biodiversidad, y el conocimiento y prácticas culturales- étnicas.	Amazonas y Putumayo
	Fortalecimiento de la integración y el desarrollo fronterizo con Brasil y Perú (Eje Amazónico IIRSA), mejorando la conexión fluvial, y consolidación del municipio de Leticia y su área de influencia como centro comercial, destino turístico amazónico y principal centro del área trinacional Colombia - Brasil, Perú.	Amazonas y Putumayo
	Desarrollo de líneas de investigación y capacidad de innovación para generar competitividad y patentar productos propios de la biodiversidad regional, garantizando la protección al conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad y los derechos de sus titulares, vinculando universidades y centros de investigación, especialmente los regionales.	Chocó, Amazonas, Putumayo, Caquetá

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Desarrollo, “Prosperidad para Todos” 2010-2014 (2011).

La lógica de intervención de los territorios, que subyace en los planes de desarrollo se puede analizar desde la lógica de capitalización de la naturaleza señalada por Arturo Escobar (1996). Los programas de infraestructura fueron sustentados a partir de un discurso de desarrollo sostenible, gobernanza de los recursos y conservación de la biodiversidad; de esta manera, se

construye una retórica de la apropiación de la naturaleza. En las narraciones de las organizaciones populares, vemos que estos espacios de representación se encuentran en tensión con las representaciones del espacio construidas por las comunidades, en la medida que se producen una desterritorialización para dar paso a los proyectos hegemónicos.

Lo que más nos preocupa es el acceso a la tierra. La tenencia es un factor que permite solventar la autonomía alimentaria. Ahora va a ser mucho más difícil, más por el conflicto y la reglamentación que ponen. El conflicto de alguna manera redefine el acceso y el aprovechamiento de algunos espacios, pero eso es modificable y temporal, pero la afectación directa que va a tener toda una normatividad o una infraestructura física, unos actores, eso modifica el tema del territorio y pensamos que a partir de ahí pueden generarse formas de conducta y de comportamiento que van a ser lesivas en la forma en la cual la gente está acostumbrada a vivir. En el Valle de Sibundoy hay unas muestras bastante dicientes en el tema de salud pública con la cultura de los emos, las subculturas urbanas que viene de Bogotá y de Cali a estos pueblos.

En el Valle de Sibundoy hay cuatro municipios, uno de ellos es San Francisco, donde hay menos indígenas y ahí es donde se presenta más el modelo de las subculturas. Hay una tendencia a desterritorializarnos, aunque se sigue viendo una referencia muy fuerte en algunos grupos sociales definidos por el territorio que la gran mayoría no la tiene, la tendencia es a desterritorializarse y a incorporar otros elementos de definición, somos jóvenes. Somos de la tercera edad, pero no hay una identidad ligada al territorio, aunque en el discurso indígena es más claro, en el discurso campesino, pero esas son modificaciones que se han comenzado a dar por todos los proyectos que implementan en el territorio, la forma como la gente construye, como se apropia del espacio, eso comienza a cambiar. (E10, Fundación Ecotono Putumayo, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Los considero un conflicto porque son extensiones grandes de territorio que se entregan a los proyectos del gobierno, se les entregan a las compañías petroleras, sabemos que en el departamento de Putumayo hay cantidad de recursos minerales que también se van a entregar a compañías extranjeras. El proyecto IIRSA de la intermodal Belém do Pará. La mayoría de la gente no sabe para qué están pavimentando la carretera, creen que es una buena obra del presente y de los representantes a la cámara que consiguieron plata prestada para que los campesinos saquen los cultivos, pero no han caído en cuenta que es para llevarse los recursos que posee el departamento. El gobierno no le ha dicho la verdad al pueblo de lo que está sucediendo, de la transformación del departamento. A raíz del “desarrollo” que dice el gobierno que está trayendo se está generando desplazamiento y activando el conflicto armado. ((E14, Líder Mesa Departamental de Población Desplazada, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Es preciso advertir que sobre nuestro territorio se cierne una serie de iniciativas de explotación de los recursos mineros, de hidrocarburos, forestales, agua y biodiversidad por cuenta de las políticas del gobierno actual consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de lo que se ha conocido como las “locomotoras del desarrollo” y la ejecución de megaproyectos viales de IIRSA, como el Corredor Multimodal Tumaco-Belém do Pará, avanza el “desarrollo” con sus proyectos anclas como la construcción del tramo conocido como la Variante Mocoa-San Francisco, la hidrovía del Putumayo y el Eje Andino con

obras claves como la pavimentación Santana–Puente Internacional San Miguel y el Centro de Atención Binacional Fronterizo (Cebaf). Estas iniciativas amenazan con la destrucción de la base de recursos naturales, la comunidad, la cultura, la organización social y la vida en esta parte del país. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2012, p. 142)

Por otra parte, los líderes y lideresas señalan nuevamente el desconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, la ilegalidad de los proyectos y de la adjudicación de las licitaciones, debido al incumplimiento de la normativa derivada del Convenio 169 de la OIT.

Otro de los conflictos que se presentan en el departamento es el diseño y la puesta en marcha de varios megaproyectos, especialmente los relacionados con la infraestructura vial, representan un problema ya que no se han realizado las consultas previas con las comunidades que se ven afectadas por la construcción de las carreteras, tal y como lo señala la ley, cuando se han realizado han sido más una fachada que realmente un proceso de concertación. La estrategia para la construcción de las grandes autopistas es ir tramo por tramo, para no generar alarma entre la población y la gente no alcanza a entender la magnitud del impacto de estos proyectos viales. Se les quitan las tierras a los campesinos y como muchas veces no están titulados no tienen como defender sus derechos. (E18, Líder ANUC, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

Las narraciones y relatos de los líderes y lideresas de la región evidenciaron la forma en que los sectores populares interpretan y problematizan las políticas de intervención del territorio a partir de los impactos que genera el modelo de desarrollo vigente. En este sentido, estimaban que los proyectos estratégicos desplegados responden a los intereses de determinados sectores políticos y económicos, nacionales y transnacionales, pero no a las necesidades reales de las comunidades. De tal manera, apuntaron a que los procesos de ordenamiento del territorio, derivados de los proyectos señalados, han excluido de manera deliberada a la población dando prioridad a los intereses del capital.

CAPÍTULO 10. Propuestas de construcción de paz. Plan Integral de Desarrollo Campesino

En los apartados anteriores, abordamos las percepciones populares acerca de los conflictos-socio territoriales del departamento del Putumayo. En este sentido, se identificaron los principales ejes de disputa señalados por las organizaciones sociales a partir de las vivencias y de las lecturas que construyeron de la realidad. Estas interpretaciones estaban relacionadas con los impactos que producen tales conflictividades en sus territorios y en la reproducción social de sus comunidades.

Esta producción de significados desde lo popular no se derivó de un análisis racional, en términos de coste-beneficio, o de una lectura desde el ámbito académico. Desde nuestra perspectiva, en el horizonte de sentido de las luchas intervinieron el mundo de las emociones, el capital cultural y social de las comunidades, el acumulado de las luchas sociales, la diversidad de las identidades políticas, sociales y culturales, entre otras cuestiones. Este conjunto de elementos se debe entender en el marco de los contextos espacio-temporales cambiantes y dinámicos.

En el caso del Putumayo, el hecho de ser una región de frontera, alejada de los centros de poder y con importantes recursos ecosistémicos, ha marcado los patrones de poblamiento convirtiéndose en un lugar de refugio de migrantes nacionales, así como de actores armados irregulares y de economías ilícitas. Ante este panorama tan complejo, los sectores populares se organizaron para resisitir en el territorio, y formularon propuestas que se mueven entre lo que Escobar denomina alternativas de desarrollo y alternativas al desarrollo (Escobar, 2014a). Estas agendas, construidas de lo que el orden dominante considera como minoritario, marginal, residual, disidente (Escobar et al., 2001), lograron articular procesos organizativos de diferente índole y a partir de la identificación de los principales conflictos en los que se encontraban inmersas las comunidades, elaboraron una propuesta popular de desarrollo para toda la región, la cual vamos a abordar en este apartado.

La propuesta a la que hacemos referencia se constituyó en el marco de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Bota Baja Caucana y Cofanía- Jardines de Sucumbíos. Por lo tanto, este apartado se construye con base en el documento *Putumayo: sembrando vida construyendo identidad. Historia de la Mesa Regional 2006-201*”, elaborado por las organizaciones que conforman esta plataforma, con la colaboración de Planeta Paz y en el trabajo de campo realizado para la presente investigación.

En este sentido, señalar que la Mesa Regional de Organizaciones no solo es una plataforma en la que se articulan diferentes sectores sociales: campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres, desplazados, entre otros; es un proceso de fortalecimiento organizativo popular, que surge en medio del conflicto armado y de una fuerte arremetida contra las organizaciones sociales. En este contexto, los liderazgos populares fueron objetivo militar de los actores inmersos en el enfrentamiento bélico, y sobre ellos se desplegaron diferentes repertorios de violencia.

10.1. Memoria corta de las luchas de resistencia

Entre los factores que hicieron posible la configuración de la Mesa, como un espacio amplio de debate y de construcción de resistencias, se encuentran las estructuras de movilización, las experiencias previas de los líderes y lideresas de diferentes organizaciones sociales populares, así como las redes sumergidas de solidaridad que configuraron los lazos comunitarios. Estos elementos fueron partícipes en la construcción de significados compartidos y horizontes de justicia comunes entre los diversos sentires populares.

En particular, nos parece relevante reseñar los procesos de movilización de los campesinos cocaleros a mediados de los años noventa. No obstante, este proceso no se puede entender sin el movimiento cívico del Putumayo que irrumpió en la década de los setenta y ochenta del siglo pasado. En la agenda de las protestas se demandaba al gobierno nacional la mejora de las vías de comunicación y servicios públicos básicos, como el acueducto y el alcantarillado. Las movilizaciones pusieron en evidencia el estado de abandono en el que se encontraba el departamento.

Desde una perspectiva de larga duración son manifestaciones coyunturales de movimientos sociales centrados alrededor de una demanda central: el reconocimiento por parte del Estado-nación colombiano tanto de su ciudadanía como de sus derechos adscritos como ciudadanos y como habitantes con larga permanencia -si no oriundos- en la región amazónica. (Ramírez, 2001b, p. 128)

Las movilizaciones cocaleras retormaron, de alguna manera, el estado de indignación de los movimientos cívicos y pusieron sobre la mesa nuevamente la marginalidad sistémica de la periferia amazónica. Esta condición de marginalidad fue reforzada no solo por la forma de intervención del territorio, sino por el imaginario dominante en donde se entendía esta región como

incivilizada, habitada por “guerrilleros” e “insurgentes”, por lo tanto, necesitada de políticas civilizatorias que dieran lugar al progreso de la región.

El movimiento cocalero recibió la atención del gobierno en razón a la presencia de la guerrilla de las FARC y de la existencia de cultivos de uso ilícito, que se presentaba por el discurso hegemónico como la principal causa de la existencia de la insurgencia. La actuación del gobierno también estaba sometida a la presión internacional que reclamaba el control de la producción y del tráfico de droga en la zona andina del sur del continente. De esta manera, el Estado estaba legitimado para actuar por la vía militar y represiva, con el objetivo de contener a las FARC y a lo que consideraban su base social (Ramírez, 2001a, p. 94). La actitud del gobierno reposaba muchas veces sobre la negación de la agencia política del campesinado, asumiendo que actuaban a expensas de las FARC⁴¹⁰.

A pesar de la continua represión del Estado, el movimiento cocalero logró, a través de la acción colectiva, poner en el debate público los efectos de la política de lucha contra las drogas, en particular, la erradicación forzada de cultivos de ilícito a través de la fumigación con glifosato. Las reivindicaciones del movimiento evidenciaron la difícil situación del campesinado en las áreas periféricas de la Amazonia, en las que el cultivo de la coca representaba la única posibilidad de pervivencia en el territorio, ante la falta histórica de inversión social del Estado.

Por otra parte, el pulso al Estado se logró mantener a través de la constitución de diferentes formas de organización colectiva en el ámbito microsocioal, que se encargaron de realizar y coordinar las acciones necesarias para mantener el engranaje de la movilización (comités veredales, comités municipales, espacios de debate y de discusión, etc.). En estos espacios se involucraban todos los miembros de las familias. Precisamente, estas redes sumergidas permitieron la vertebración de lo común y de lo comunitario que permitió la movilización y mantenimiento de la presión al Estado para que se sentara en la mesa de negociaciones⁴¹¹.

⁴¹⁰ María Clemencia Ramírez señala cómo desde el gobierno y los altos mandos militares se referían al campesinado de la región utilizando un lenguaje despectivo, inclusive adjudicándoles rasgos de animales, deshumanizando de esta manera al actor social, legitimando la acción violenta sobre las comunidades, la exclusión y la explotación a la que se encontraban sometidos (Ramírez, 2001b, p. 138).

⁴¹¹ En cuanto a los repertorios de confrontación, los líderes y lideresas señalaron la importancia de los paros realizados en las cabeceras municipales de Orito, Puerto Asís y la Hormiga en donde se interrumpió el flujo de petróleo, representando un duro golpe para la industria de hidrocarburos y obligando al gobierno a negociar para no poner en peligro uno de los principales ejes de la economía nacional. Estas acciones fueron posibles gracias al apoyo de diferentes sectores sociales, no solo los campesinos cocaleros participaron en las acciones, hubo toda una red que hizo posible las movilizaciones y la fuerza propositiva que lograron alcanzar (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, p. 26).

En este sentido, la experiencia de los y las lideresas del movimiento, los procesos de articulación, las redes sumergidas creadas para el sostenimiento de la acción colectiva y, la elaboración de una agenda social fueron experiencias fundamentales para los procesos populares que se desarrollaron durante el inicio del presente siglo y que encuentran su representación en la Mesa Regional de Organizaciones Sociales. Así es expresado por las organizaciones:

Al hacer ese balance, podemos decir que las principales ganancias estuvieron del lado organizativo. En las marchas cocaleras se logró la convergencia del movimiento campesino, cívico, de los afroputumayenses, las mujeres, los indígenas y se avanzó especialmente en mostrarle a la gente de la ciudad sobre la importancia de resolver el problema de los cultivos de coca, que nos afectaba a todos.

En cuanto a los cultivos, el Estado optó por una alternativa de erradicación, de corte más militar y policiva, que se ha continuado con los Grupos Móviles de Erradicación mientras que para nosotros la esperanza era detener las fumigaciones como tales por la vía de la sustitución manual, gradual, voluntaria y concertada con el Estado, generando alternativas productivas para una vida digna. Eran dos caminos diferentes entre los que, al final, se impuso el del Estado. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, p. 28)

Como se señala en el anterior párrafo, los acuerdos a los que se llegó con el Estado para un cambio de sentido en la política antidrogas no se cumplieron. En el departamento se intensificó la militarización y el auge del paramilitarismo, que se tradujo en el despliegue de acciones violentas en contra de los líderes y lideresas sociales que participaron en las marchas, como parte de una estrategia de desarticulación del movimiento social.

Pese a lograr la visibilización del problema de los cultivos de coca, los acuerdos no se aplicaron por varias razones. Entre las más importantes se encuentran la manera en que el Estado negoció y la fuerte persecución que se desató por la alianza entre éste y los paramilitares.

Para nosotros, hoy es claro que las acciones de violencia posteriores tuvieron el objetivo de detener el movimiento de los campesinos porque había alcanzado un nivel de organización fuerte. Se generó una persecución a líderes sociales, asesinatos, exilio, entre muchas otras agresiones; se trataba del debilitamiento intencional del movimiento campesino por medio de la violación sistemática de derechos humanos.

Por una parte, el Estado negoció para apaciguar la protesta, su intención era controlar el fenómeno del cultivo de coca atacando la mata como tal y no la problemática social y económica subyacente.

De manera paralela, el Estado diseñó y aplicó una estrategia de estigmatización generalizada en contra del movimiento campesino. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, pp. 28-29)

La estrategia de militarización y de criminalización, por parte del Estado, para dar respuesta a las demandas de las organizaciones sociales fue una constante en su actuación. En donde esta

estrategia hizo presencia el diálogo social era subsidiario de una política de represión, que se acentuó en determinados momentos históricos y en correspondencia con el talante de los gobiernos, en este caso vemos cómo en los mandatos de César Turbay Ayala (1978-1982) o en el Álvaro Uribe Vélez, las políticas represivas en contra de los movimientos sociales se profundizaron ocasionando graves violaciones a los derechos humanos y al DIH y, por consiguiente, la desarticulación de muchos procesos sociales.

Para terminar, señalar que en los acuerdos entre el Estado y el movimiento cocalero se lograron algunos avances en los temas de atención sanitaria con la creación de Selvasalud; se avanzó en la electrificación del departamento; se fortaleció la plantilla de docentes con nuevas contrataciones; se iniciaron algunas obras de infraestructura más relacionadas con la expansión de los proyectos minero-energéticos que con las necesidades de las comunidades; se diseñaron algunos planes de desarrollo rural integral, pero no se llegaron a implementar, por lo que constituyeron el centro de las propuestas de Mesa Regional de Organizaciones Sociales (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015). De esta manera, se puede señalar que la agenda de las marchas de los años noventa se estructuraron en dos conjuntos de reivindicaciones: la satisfacción de unos mínimos vitales y las propuestas de desarrollo rural alternativo enfocadas hacia la solución consensuada con el Estado de los cultivos de uso ilícito.

10.2. Nuevas articulaciones, nuevas alianzas y el fortalecimiento del movimiento social

Como se ha señalado, a finales de los años noventa y en la primera mitad de la década del dos mil, la consolidación del movimiento paramilitar representó un duro golpe para las organizaciones sociales, debido a la sistematicidad de las acciones en contra de los liderazgos populares. Tal situación se tradujo en una desarticulación de los movimientos sociales. El temor, la incertidumbre, la criminalización, las amenazas, el confinamiento, el desplazamiento y la falta de medidas de protección por parte del Estado fueron dinámicas que se incorporaron a la cotidianidad de los habitantes del Putumayo.

El cansancio ante la grave crisis humanitaria y la reanudación de las fumigaciones con glifosato en el departamento llevaron a las organizaciones locales a convocar un nuevo proceso de articulación. El trabajo político de organizaciones con un importante capital social y con experiencia histórica en las luchas populares, como Fensuagro, Asojuntas, ANUC, ADUC, fueron

fundamentales, en tanto implementaron estrategias para la formación de nuevos liderazgos y para la defensa de los derechos humanos (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, p. 71).

Es así como en el año 2006, se conformó la Mesa Regional de Organizaciones Sociales. El objetivo de este proceso era la construcción de una agenda alternativa para la sustitución de los cultivos de uso ilícito, que pusiera en el centro el bienestar social, político, económico, ambiental y cultural de las comunidades que habitan el campo. Esta propuesta contribuiría a la construcción de la paz, a la inserción económica del departamento y al desarrollo nacional y regional (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, pp. 12-13). Los objetivos específicos planteados por la Mesa fueron los siguientes:

- Formular y ejecutar un plan de desarrollo rural a diez (10) años, comenzando en el menor tiempo posible, construido por la comunidad de manera autónoma y participativa el cual debe ser financiado por el gobierno y la comunidad internacional.
- Lograr la sustitución de los cultivos de uso ilícito una vez los programas y proyectos en ejecución del plan hayan generado las condiciones económicas y sociales que permitan dicha sustitución.
- Construir mecanismos de participación decisoria de la comunidad en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, p.13)

Tal y como lo relatan las organizaciones, la construcción de una política alternativa implicó hacer una profunda reflexión sobre los errores cometidos en los anteriores procesos y un balance de los vacíos de la política estatal. En este sentido, se identificaron nueve puntos sobre los cuales construir una nueva propuesta desde el sentir popular:

Primero, los programas gubernamentales se diseñaron de “arriba hacia abajo”. No se realizaron procesos de consulta con las comunidades para conocer sus propuestas, necesidades y las características del territorio en el que se pensaban implementar. Segundo, las comunidades se vieron obligadas a aceptar los proyectos productivos propuestos desde la institucionalidad ante la grave crisis económica y alimentaria que se generó por la fumigación aérea de los cultivos de coca. Tercero, las ayudas se entregaron sin una planificación concertada con las comunidades, por lo tanto, muchos de estos proyectos no llegaron a buen término ya que no se correspondían con las necesidades reales de la población ni con los procesos organizativos de base. Cuarto, las capacitaciones técnicas dadas a la población beneficiaria fueron del todo insuficientes lo que incidió de manera importante en el desarrollo de los proyectos.

Quinto, los proyectos productivos no eran aptos para el ecosistema amazónico. Muchos de ellos eran monocultivos que requerían unas condiciones particulares que no se dan en el departamento y que en muchos casos alteraron el equilibrio del frágil ecosistema. Sexto, el gobierno y las instituciones del tercer sector no diseñaron un plan integral de negocios para los proyectos, por lo tanto, se presentó un problema en la comercialización de los productos. Séptimo, se presentaron manejos indebidos por parte de los operadores de las ayudas del gobierno. Octavo, el Estado no incluyó a las organizaciones sociales en la gestión de las propuestas productivas y prefirió contratar a actores externos sin conocimiento del territorio. Noveno, la falta de transparencia en el manejo de los recursos que en algunos casos terminó en procesos de corrupción (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, pp. 60-61).

De esta manera, la implantación de las políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito y de erradicación forzada, profundizaron la conflictividad socio-territorial en el departamento que se vio agravada por la política minero-energética y la intervención del espacio a través de los proyectos de infraestructura. Todas estas actuaciones, fueron amparadas por una política de seguridad que implicó una “neutralización” de todos aquellos procesos organizativos que tuvieran una posición crítica o contraria al orden dominante. En estos años de recrudescimiento de la guerra, el hablar de procesos de construcción de paz terminó siendo criminalizado o relegado al ostracismo político. La violencia ejercida contra las comunidades logró que en muchas ocasiones terminaran aceptando los programas gubernamentales, al no tener otras alternativas de pervivencia en el territorio.

Por otra parte, las organizaciones que se articularon en la Mesa desplegaron diferentes estrategias tanto en el ámbito interno como en el externo, para lograr el fortalecimiento del proceso y la legitimidad para establecer el diálogo con las instituciones gubernamentales tanto regionales como nacionales. Esta estrategia definida en esos dos sentidos, les permitió mantener el desafío al Estado pues, a través del despliegue de repertorios de confrontación, consiguieron que el gobierno habilitara espacios de diálogo y negociación.

Ahora bien, este fue un proceso con periodos de latencia y otros de mayor visibilidad. De esta manera,

La propuesta se fue construyendo con base en tres mecanismos de discusión y convocatoria: primero, desde los insumos que se discutieron en los comités municipales; segundo, mediante reuniones masivas convocadas en los municipios, a las que asistían los habitantes y entre ellos los campesinos afectados por las fumigaciones y, tercero, con las

iniciativas que de otros departamentos habíamos discutido con los movimientos campesinos, indígena y afro sometidos a los cultivos de coca. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, p. 78)

Los debates fueron socializados con organizaciones situadas en otras regiones del país, afectadas por la misma problemática, en aras de buscar consensos y articulaciones. En este sentido, se ampliaron a organizaciones indígenas y afrocolombianas, para encontrar puntos de acuerdo con sus planes de vida y poner de relieve el uso tradicional de la coca para los pueblos indígenas. Es importante señalar, que este proceso de convergencia no estuvo exento de tensiones entre las diferentes lecturas, repertorios de acción y horizontes políticos de los liderazgos populares. Precisamente, la existencia de estas tensiones se considera una característica particular de la acción colectiva debido a la heterogeneidad de los actores populares ⁴¹².

En cuanto a lo que nosotros consideramos como la táctica externa de la Mesa, se invitó a participar en el parte debate a las instituciones regionales y a diferentes actores políticos y sociales, tanto en el ámbito nacional como internacional. Este conjunto de acciones se puede interpretar como una estrategia de “salto de escala” para ampliar el conflicto, hallar nuevos aliados y crear nuevas estructuras de oportunidad política. En esta dirección, los espacios de diálogo con la comunidad internacional se situaban en una lectura de la economía de la droga como una problemática a nivel global, que requería una corresponsabilidad de todos los actores. De esta

⁴¹² Ante las tensiones surgidas durante el proceso organizativo, y para el buen funcionamiento político y técnico de la Mesa, un año después de su constitución se elaboró un reglamento que constaba de los siguientes puntos:

1. La Mesa tiene como fundamento los siguientes principios: Responsabilidad, lealtad, respeto con la Mesa, concertación, unidad, transparencia, honestidad.
2. La autonomía.
3. Su rechazo a la fumigación del territorio.
4. El estímulo a la sustitución gradual, concertada y voluntaria.
5. La garantía de sostenibilidad de la economía familiar en el período de transición de la sustitución.
6. La unidad de los putumayenses en busca de estos objetivos sin ninguna discriminación.
7. Condición de ingreso: ser organización campesina. La sede será en Puerto Asís, se hará una reunión cada tres meses ordinariamente, con participación de dos delegados por municipio. Se sacará la personería jurídica.
8. Para el cambio de coordinadores se tendrá en cuenta la asamblea en pleno.
9. Todo delegado que ingrese a la Mesa deberá conocer los objetivos y acogerá los principios.
10. Para ingresar nuevos miembros se debe consultar a la asamblea previa certificación mediante el acta de la organización que lo delega.
11. Todos los materiales que se aporten en las capacitaciones a los miembros de la Mesa deberán hacerse llegar a la sede y pertenecerán a la organización quien expedirá copia a sus miembros.
12. Se acogerá y respetará la decisión de las mayorías.
13. Los delegados que tengan aspiraciones a corporaciones públicas deberán renunciar a la Mesa.
14. Los coordinadores podrán representar a la Mesa en todas las instancias gubernamentales.
15. El secretario deberá realizar convocatorias, manejar los archivos, elaborar actas, etc.
16. El fiscal deberá fiscalizar y aportar unidad a la Mesa. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, pp. 82-83)

manera, se ponía sobre la mesa el impacto social de las políticas implementadas hasta el momento, se cuestionaba el enfoque de lucha contra el narcotráfico y se ponía de manifiesto la capacidad de agencia de las organizaciones sociales, capaces de generar propuestas propias según sus realidades socio-territoriales.

La asamblea se planteó como un espacio de reencuentro muy amplio de las organizaciones sociales para discutir la propuesta de sustitución gradual y voluntaria de la coca, pero también con un ánimo de interlocución del movimiento popular putumayense con el Estado. La asamblea puede considerarse un éxito al mirar las diversas expresiones del establecimiento, secretarios de planeación, alcaldes, representantes a la Cámara, la Comunidad Internacional, son concejales, los diputados a la asamblea departamental que asistieron y por la presencia de la Policía y el Ejército, quienes escucharon las discusiones y propuestas planteadas. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, p. 78)

Por otra parte, la estrategia del gobierno consistió en apoyar de manera retórica las propuestas de sustitución de cultivos de uso ilícito planteadas por las organizaciones, pero en el momento de cumplir los acuerdos a los que se llegaron en los distintos espacios de concertación, en particular, los posteriores a las movilizaciones y paros convocados por la Mesa, se evidenció la falta de voluntad política para el cumplimiento de lo pactado.

10.3. Plan Integral de Desarrollo Rural Alternativo

La Mesa Regional de Organizaciones Sociales fortaleció y amplió los espacios de debate y convergencia para la construcción de un Plan de Desarrollo Rural Alternativo⁴¹³ que les permitiera a las comunidades vivir en el territorio con unas condiciones dignas en términos políticos, económicos, sociales y culturales, en consonancia con los saberes y conocimientos propios. Esta apuesta en sí misma se puede considerar emancipadora en la medida que desafía a los órdenes dominantes impuestos por el Estado y por los actores armados, que tratan de imponer sus propios proyectos territoriales. De esta manera, la propuesta giró alrededor de tres objetivos:

1) Lograr sustitución de cultivos de coca, 2) Alcanzar un Estado de bienestar para comunidades campesinas en lo político, económico, social, ambiental y cultural, 3) Evitar la fumigación y el desplazamiento de las comunidades y una 4) Distribución equitativa de

⁴¹³ En el año 2007, después de la primera asamblea de la Mesa llevada a cabo el año anterior, se realizaron 26 asambleas públicas en las que participaron alrededor de tres mil dirigentes del sector rural. Este proceso participativo logró el apoyo de las autoridades locales, de las organizaciones gubernamentales y algunos apoyos de la comunidad internacional. La Mesa realizó una importante labor de cabildeo con diferentes embajadas con la finalidad de lograr apoyo presupuestario, técnico, pero también político (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, pp. 82 -83). Desde nuestro análisis, la incidencia política con actores fuera del ámbito nacional se puede comprender como parte de una estrategia de “salto de escala” que les permitiera ganar legitimidad frente al Estado central.

recursos económicos para la inversión en el sector rural. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, p. 81)

Según lo señalado por las organizaciones, la piedra de toque del Plan era la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, que debería ser concertada y articulada con las organizaciones de base. Este compromiso implicaba un cambio de sentido en la política de lucha contra las drogas desarrollada hasta el momento por los gobiernos de Pastrana y de Uribe, que vincularon los cultivos de coca con la política contrainsurgente, criminalizando al campesinado y primando la erradicación forzada y la fumigación aérea, en el marco de la política de seguridad. La propuesta de las organizaciones pasaba por el reconocimiento del sector rural como agentes políticos, así como por el respeto de los usos culturales de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas. La Mesa planteaba una alternativa de desarrollo a la propuesta del gobierno sustentada en proyectos productivos foráneos, sin ningún arraigo en el territorio, y alejados de las organizaciones de base y de las necesidades reales de la población campesina en el Putumayo.

En las primeras discusiones para el diseño del Plan de Desarrollo Integral Campesino, se priorizó el trabajo a través de la identificación y construcción de las fincas agroproductivas. En este proceso se buscó el apoyo de USAID (Programa ADAM), de CORPOAMAZONIA, de los alcaldes y las autoridades locales, para que participaran directamente en las mesas de discusión local y, de esta manera, lograr el compromiso real de las instituciones para la puesta en marcha del proceso⁴¹⁴ (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, p. 89). En palabras de uno de los líderes entrevistados, las fincas agroproductivas representaban una forma de estabilizar a la población en el territorio y evitar el desplazamiento forzado de las comunidades rurales, es decir, se constituían en sí mismas como un proceso de resistencia.

El objetivo de la propuesta es la resistencia al desplazamiento, lo que hemos leído es que los programas del gobierno quieren feriar esto [el territorio] al mejor postor y la gente estorba. La propuesta va hacia la resistencia social frente al desplazamiento, que la gente se arraigue en el territorio. La propuesta se presenta como de desarrollo territorial y la finca está ubicada en un espacio, cualquier espacio que sea, es una micro cuenca y éstas hay que ordenarlas y la ordenación de cada micro cuenca comienza con la organización de cada finca, ese ordenamiento de varias fincas tiene componente, que es el alimentario. Parte de

⁴¹⁴ En esta fase del proceso se logró el compromiso de varios alcaldes y alcaldesas para la incorporación de las propuestas a los planes de desarrollo (Orito, Puerto Asís, Santiago, Sibundoy, San Francisco, Puerto Asís, Villa Garzón, Puerto Guzmán, San Miguel, Valle del Guamuez y Puerto Caicedo). No obstante, algunos de ellos no llegaron a buen puerto debido a diferentes factores, entre ellos la cercanía a las elecciones para municipios y gobernaciones (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, p. 90).

los campesinos que están en el territorio vienen de otras partes del país, pero el Putumayo es distinto al resto del país y sus condiciones en términos de ambiente son diferentes, por ende, las plantas son distintas. Ellos hablaban de sembrar arroz, maíz y plátano, yuca, yo digo que eso sí se puede sembrar, pero tenemos que ampliar la lista porque esta es una zona de poli cultivos, de biodiversidad, tenemos muchas más especies con propiedades alimenticias y posibilidades de cultivo que van a mejorar la oferta, así comenzamos a hablar de las verduras, de las plantas que son medicinales, de las hortalizas, enredaderas, árboles. Hay toda una riqueza agro-biológica para garantizar la sostenibilidad productiva de una finca porque esos productos son más fáciles sembrarlos, el problema es que la gente no las conoce y por eso ni las menciona, entonces aquí comenzamos a compartirles eso. (E11, Mesa Regional de Organizaciones Sociales, comunicación personal, 7-8 de noviembre de 2010)

De esta manera, las fincas representaban la defensa del territorio, de la economía campesina y del modo de vida asociada a la misma. Se puede considerar que esta propuesta representa los espacios de representación que se configuran a partir de los saberes subterráneos construidos en los márgenes de la sociedad, en esos espacios locales, en donde se desarrolla la vida cotidiana de las comunidades⁴¹⁵.

Las fincas adquieren una importancia especial puesto que en ellas hemos desarrollado nuestro modo de vida, en una lucha permanente para mejorar nuestras condiciones de vida y para la sobrevivencia de nuestras familias. Las fincas son la felicidad de nosotros los campesinos, el resultado de nuestro trabajo, el lugar donde levantamos a nuestras familias y por eso nos hemos imaginado, pero también puesto en marcha una forma especial de organizarla con el fin de convertirla en la base de nuestras acciones. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, p. 91)

Las fincas se convirtieron en la iniciativa básica del proceso de articulación intersectorial del departamento, que incluía a indígenas y afrodescendientes y en donde el núcleo familiar se constituía en el centro de una propuesta de ordenamiento territorial y de desarrollo, en correspondencia con las características del ecosistema amazónico. Por lo tanto, este modelo alternativo se puede considerar como una respuesta a la crisis ambiental y social provocada por las lógicas de reproducción del capitalismo, que se manifestaron de manera particular en el

⁴¹⁵ Las fincas agroproductivas tenían previsto tres componentes: primero, el componente ambiental en el que se incluye la protección hídrica, un sistema de tratamiento de aguas residuales, una zona de bosque protector y bosque productor; segundo, el componente de producción agrícola que comprendía huerta casera, cultivo comercial, insumos orgánicos; tercero, el componente de producción pecuaria que implicaba las características técnicas, la financiación institucional y el aporte familiar (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, p. 91).

departamento. Las fincas agroproductivas representaron una propuesta para la relocalización de la vida social y económica de las comunidades campesinas, en los términos planteados por Arturo Escobar (2014a). El Plan diseñado por la Mesa tenía como un horizonte de sentido la autonomía de las comunidades, a través de la autogestión de lo común y el fortalecimiento de las relaciones de reciprocidad, solidaridad y cooperación entre los habitantes del departamento.

Al respecto, las negociaciones con el Estado estaban dirigidas a la creación de herramientas para que las comunidades pudieran autogestionar y controlar el Plan de Desarrollo Campesino, manteniendo la autonomía frente a las instituciones gubernamentales: “no se trataba solamente de lograr que el Estado gestionara el Plan de Desarrollo Campesino, sino de establecer una serie de mecanismos que permitieran el control por parte de las comunidades de tal manera que la Mesa lograra consolidarse como espacio de articulación de las organizaciones sociales para la interlocución con el Estado” (Mesa Regional de Organizaciones Campesinas, 2015, p. 99).

El trabajo de la Mesa desembocó en el diseño de planes de desarrollo campesino a nivel local. En particular, las organizaciones destacan el proceso llevado a cabo en el municipio de Orito, el cual tenía como objetivo la estabilización de la población rural a través de la construcción de instituciones y redes comunitarias que permitieran la armonización con la naturaleza y, de esta manera, superar la dicotomía del pensamiento occidental (hombre-naturaleza).

A partir de esta propuesta, formular un plan de desarrollo para nuestro municipio implica necesariamente la estabilización de la comunidad campesina de Orito en su territorio, de manera sostenible. Es decir, con la certeza de la propiedad sobre la tierra, produciendo eficientemente, agregando valor a esa producción y reteniéndolo en el territorio, fomentando la asociatividad como instrumento de cohesión y desarrollo social.

Además, se debe contar con instituciones comunitarias legítimas que tengan unas reglas de juego definidas y concertadas para su interacción con las entidades públicas y privadas.

Bajo tales consideraciones, el plan de desarrollo adquiere sentido si nos permite estar en relación armónica con los recursos naturales, de manera que no se ponga en riesgo la viabilidad de las generaciones futuras. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, p. 105)

En esta misma dirección, se diseñó el plan del municipio de San Miguel que, desde el año 2006, comenzó un proceso de articulación entre el campesinado, los indígenas y el sector comunal. Este proceso se gestó como respuesta a la intensificación de las fumigaciones aéreas, la arremetida de los grupos paramilitares y el control militar de la Fuerza Pública. El proceso organizativo se vio afectado por la criminalización de la que fueron objeto los liderazgos populares, acusándolos de

ser guerrilleros o colaboradores de la insurgencia, con lo cual se debilitó el tejido social y muchas familias se vieron en la obligación de abandonar su territorio, generando problemas de abastecimiento alimentario, como lo señala la lideresa de la Mesa Municipal de Campesinos de San Miguel entrevistada.

Por otra parte, el planteamiento de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales cuestionó el modelo de desarrollo dominante, al considerar que hubo una apropiación violenta de la naturaleza que alteró los equilibrios eco-sistémicos del territorio, lesionó gravemente la forma de vida de las comunidades rurales y la economía campesina, teniendo como única opción los cultivos de uso ilícito.

El modelo de desarrollo que nos han impuesto ha sido un total fracaso, porque se ha desconocido el valor, las características, potencialidades y bondades de nuestra Amazonia trasladando a nuestro territorio prácticas que solo son viables en otras regiones, trayendo consigo reducción de la resistencia contra las enfermedades, destrucción de la fertilidad de la tierra, pérdida de la productividad y mayor empobrecimiento de nuestra población. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, pp. 217-218)

El trabajo de articulación desarrollado desde el año 2006, se plasmó en el Plan Integral de Desarrollo Andino Amazónico 2035 (PLADIA), en el que se proponía un modelo de desarrollo alternativo contrario a la lógica de acumulación de capital sustentada en la apropiación violenta de la naturaleza, a través de los monocultivos, la política minero-energética y el megaproyecto de la coca. De esta manera, las organizaciones manifestaron que la única manera para resistir en el territorio era el desarrollo de una economía campesina.

Estos aprendizajes temáticos no tendrían sentido si no supiéramos que para resistir debemos cultivar, preparar y comer lo que producimos en nuestras fincas, así reduciremos costos en nuestra economía familiar, mejoramos la nutrición y protegeremos nuestra salud; evitando el consumo de productos del mercado costosos y procesados con agro tóxicos.

Es por esto que, con el Plan Integral de Desarrollo Andino Amazónico, se busca transformar el sistema productivo del Putumayo hacia la identificación y fomento de la diversidad de alternativas existentes, acordes con la aptitud productiva de la tierra para la comercialización en mercados campesinos con productos limpios y la generación de ingresos. Para cumplir estas metas, debemos apropiarnos de la infraestructura de desarrollo para nuestros fines y no permitir el envenenamiento de la madre tierra con insumos, semillas transgénicas y prácticas convencionales dañinas. (Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, pp. 221-22)

De esta manera, el PLADIA 2035 se planteó como una estrategia a largo plazo que apuntaba hacia una reconversión económica regional, el cumplimiento del Estado de derecho, la democratización y la paz, en concordancia con las características ecosistémicas y culturales de la

región andino-amazónica. El Plan respetaba los resguardos indígenas, los territorios colectivos y las Zonas de Reserva Campesina, que tenían sus propios Planes de Vida y/o Planes de Manejo Ambiental. No obstante, esto no fue óbice para que se trabajara de manera conjunta con las comunidades indígenas, afrocolombianas o con las comunidades campesinas situada en las zonas de Reserva. Por otra parte, en el PLADIA se plantearon cinco ejes fundamentales para lograr el bienestar de las comunidades, tomando distancia de los objetivos económicos de los planes gubernamentales: seguridad alimentaria, medio ambiente sano, generación de ingreso, goce efectivo de derechos y asociatividad (Cantor, 2017, p. 64).

En la misma lógica, las organizaciones de base construyeron visiones del desarrollo propias, algunas de las cuales fueron identificadas en el proceso de construcción del documento *Putumayo: sembrando vida construyendo identidad. Historia de la Mesa Regional 2006-2014*. Estas visiones se enmarcaron en la necesidad de las comunidades de construir una propuesta societal en armonía con la naturaleza, que conlleve el Buen Vivir o el Vivir Bien.

Tabla 6. Visiones de desarrollo MIC.

Proceso social	Visión del desarrollo
Campesinos de Orito	Desarrollo sostenible “Un proceso continuo e histórico de apropiación y consolidación de un territorio, en donde las decisiones se toman de manera autónoma, participativamente y por consenso con la comunidad, respetando las diferencias y buscando entregar a cada persona y al ecosistema lo que necesita y exigiendo de éstos lo que cada cual pueda dar, generando a su vez, una capacidad de autogobierno colectivo que aumente el grado de bienestar de las personas que lo constituimos y nos haga interlocutores válidos frente a los demás actores de la sociedad”
Líderes productivos del Pladia	Desarrollo endógeno “Construir un desarrollo endógeno que nos permita ser nosotros mismos, desde el conocimiento de los pueblos, desde el conocimiento ancestral, desde quienes viven en el Putumayo o se solidarizan (con este)” “Es una reflexión colectiva que trata de oxigenar una salida desde el punto de vista de un desarrollo integral”
PDRI	Desarrollo rural integral

Cofanía Jardines de
Sucumbíos

Buen vivir

Los fines últimos del Plan de Desarrollo Integral son la vida digna y el buen vivir. Este último implica una serie de condiciones que proporcionen a la vida su sustento material y espiritual por fuera de las lógicas de la acumulación, la competencia salvaje, el individualismo y el consumismo. Ese buen vivir solo es completo si la dignidad llega a la vida de los pobladores, representada en la garantía de derechos básicos para ser tratado como ser humano dotado de potencias creadoras, el respeto a su identidad, a su tierra, a su territorio, a su manera de entender y hacer el mundo y a la libertad necesaria para que los pueblos transiten por el sendero por ellos escogido.

Solo son posibles si las iniciativas e intervenciones están orientados a:

- Respetar las formas particulares de producción y reproducción social y espiritual (enfoque cultural)
- Establecer relaciones sociedad–naturaleza basadas en el conocimiento y articulación de las prácticas humanas a los movimientos naturales, producir relaciones EN la naturaleza y no CON la naturaleza, porque entendemos que no estamos fuera de ella (Enfoque agroecológico)
- Reivindicar y fortalecer el papel de la mujer en la vida de los pueblos (enfoque de género)
- Materializar la integridad como la conjunción entre múltiples escalas y dimensiones (enfoque multiescalar y multidimensional)

Fuente: Adaptado de, Mesa Regional de Organizaciones Sociales, 2015, pp. 222-223.

10.4. Una breve referencia al escenario “Post-acuerdo”

Estas propuestas deben ponerse en relación con el marco de políticas para los cultivos de uso ilícito, derivadas del proceso de negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. En el punto cuatro del Acuerdo de La Habana referido a la *solución del problema de drogas ilícitas* se señalaba:

Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género. (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016)

En el Acuerdo se reconoce que la existencia de los cultivos de uso ilícito se encuentra estrechamente relacionada con las condiciones de marginalidad, pobreza, desigualdad, débil presencia del Estado en las regiones en donde se concentran este tipo de cultivos y la existencia de una economía ilícita de las drogas, manejadas por las redes del narcotráfico. Por lo tanto, para llegar a una paz estable y duradera, es fundamental encontrar una solución integral al problema de las drogas ilícitas, desde la escala más baja de la cadena hasta la desarticulación de los carteles de la droga.

Es importante señalar, que en el espíritu del Acuerdo se trató de superar la posición simplista que consideraba que el campesinado dedicado al cultivo respondía a una elección personal para desarrollar una actividad ilegal y, de esta manera, el Estado estaba en la obligación de reprimir su conducta (Garzón y Suárez, 2018, p. 9). Este giro en el fundamento de la política antidrogas, representó a nuestro juicio una ventana de oportunidad política para redimir los derechos de la población rural involucrada en el megaproyecto de la coca. Este cambio en la orientación de la política fue defendido por las FARC y se correspondía con una de las principales demandas del campesinado en las zonas cocaleras, la mayoría de ellas con una importante presencia del movimiento insurgente. Por lo tanto, la posición de las FARC se correspondía con los planteamientos de una parte de su base social.

Desde esta perspectiva, la solución del problema de las drogas ilícitas comenzó a pivotar sobre las causas que lo generan y se apuntó hacia la implementación de programas que, abordaran las transformaciones estructurales oportunas para poner fin a esta economía ilegal. En esta dirección, en el Acuerdo se señalaba la necesidad de configurar tratamientos diferenciales para los cultivadores de la hoja de coca, la adopción de un enfoque de salud pública para los consumidores de drogas ilícitas y redoblar esfuerzos para el desmantelamiento de las estructuras criminales.

En cuanto al enfoque de sustitución de los cultivos de uso ilícito, se daba prioridad a la sustitución manual y voluntaria sobre la erradicación forzada. En este sentido, los programas a implementar debían tener un enfoque territorial y ser construidos a partir de procesos participativos con las comunidades afectadas por este flagelo. Asimismo, se reconocieron los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de los pueblos indígenas. Otro elemento a reseñar es que la estrategia de sustitución debía estar acompañada por el cumplimiento del punto uno del Acuerdo, la Reforma Rural Integral, y la puesta en marcha de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo. Estos elementos se corresponden con buena

parte de las agendas de las organizaciones sociales del departamento de Putumayo, que manifestaron su apoyo a la solución negociada del conflicto y reclamaron mayor participación ciudadana en todo el proceso de diálogo.

Ahora bien, la implementación de lo acordado en este punto de la agenda, se ha llevado a cabo a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) que hace parte del Plan de Atención Inmediata (PAI). “El PNIS se entiende como un componente de la política de desarrollo rural enfocado en la transición, y no como una estrategia aislada vinculada a la política antinarcoóticos” (Garzón y Suárez, 2018, p. 13). La articulación de los programas de sustitución de cultivos con la política de desarrollo rural integral ha sido una de las reivindicaciones de los liderazgos populares ante los diferentes gobiernos que han diseñado este tipo de políticas en el marco de las políticas de seguridad.

No obstante, el balance que se hace de la implementación de los puntos del Acuerdo deja hasta el momento muchos vacíos y tareas pendientes para las partes, en particular, para los gobiernos que han incumplido algunos de los puntos convenidos⁴¹⁶. Es importante recordar, que el gobierno de Juan Manuel Santos,

planteó la necesidad de estudiar el fenómeno de las drogas desde una perspectiva amplia, que permita entender las complejidades de los individuos y los territorios afectados por el problema y encontrar herramientas para enfrentarlo con un enfoque de salud pública y de promoción del desarrollo humano, en un marco de respeto por los Derechos Humanos. (UNODC-Gobierno de Colombia, 2017, p. 13)

A pesar de los compromisos adquiridos y ante el aumento de número de hectáreas de coca, el gobierno siguió priorizando la sustitución forzada de los cultivos de uso ilícito, frente a la estrategia voluntaria y consensuada con las comunidades⁴¹⁷. Los territorios en los que se concentraron los cultivos, fueron aquellos en los que se ha realizado esta actividad en los últimos

⁴¹⁶ Al respecto, durante el proceso de negociación el gobierno nacional también asumió el compromiso de:

Poner en marcha las políticas y programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública». Se trata no solo de atacar la corrupción en nuestras propias filas, sino de exhortar a toda la sociedad a rechazar decididamente cualquier relación con el narcotráfico. No podemos pretender menos si logramos terminar el conflicto e instaurar un ambiente de paz. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018, pp. 32-33)

⁴¹⁷ En el año 2016, momento en el que se firma el Acuerdo entre el gobierno y las FARC-EP, los cultivos de uso ilícito aumentaron un 52% con respecto al año anterior, se pasó de 96.000 ha en 2015 a 146.000 ha en 2016. No obstante, se presenta una variación importante, el territorio afectado a nivel nacional disminuyó, por lo que la tendencia indica que los cultivos se concentran en territorios específicos (UNODC-Gobierno Nacional, 2017, p. 14).

10 años. “El 80% de los lotes identificados en 2016, ya había sido detectado, asperjado o erradicado previamente” (UNODC-Gobierno de Colombia, 2017, p.37). En la región Putumayo-Caquetá, los cultivos en el 2016 aumentaron en un 24% con respecto al año anterior (se pasó de 27.780 a 34.505 hectáreas). Los municipios más afectados en el Putumayo fueron Puerto Asís, San Miguel y Valle del Guamuez, que concentraron el 61% de la coca que se produce en el departamento. El aumento en esta zona del país se relacionó con su posición fronteriza con el Ecuador (UNODC-Gobierno de Colombia, 2017, p. 45).

En este contexto, la Mesa Regional de Organizaciones Sociales venía demandando desde el año 2015 el compromiso del gobierno con las comunidades, para la implementación de los programas de sustitución voluntaria, la puesta en marcha del PLADIA, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los espacios de concentración entre el gobierno y la Mesa. De esta manera señalaban:

Mantener la negociación con la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, en el marco de los objetivos de las cuatro comisiones que se establecieron [comisiones C. Minero energética y ambiental, C. de Sustitución de cultivos, C. Inversión social y revisión de acuerdos incumplidos y C. Derechos Humanos], como espacios legítimos de las comunidades para la construcción del Plan de Desarrollo Integral Andino Amazónico, la concertación del Plan de sustitución de cultivos, la defensa de los derechos humanos, la revisión de la deuda en inversión social y la defensa del medio ambiente, todo lo anterior como estrategia de defensa y permanencia en el territorio de las familias del sector rural de la región.

Renunciar al modelo militarista y de persecución con el que se ha atendido el problema social cocalero, plasmado una vez más en “Los seis frentes para la sustitución de cultivos ilícitos”, desconociendo las causas por las cuales miles de familias han visto en la planta de coca el único medio de subsistencia, y en este sentido instamos una vez más a que avancemos de manera conjunta en la concertación con la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de un plan de sustitución que permita la reconversión económica, el desarrollo rural integral y la vida digna de las comunidades del sector rural. Rechazamos la erradicación forzada, por eso insistimos en que el modelo de sustitución de cultivos de uso ilícito debe ser concertado, voluntario y gradual, en donde se conciba que se requieren años para la total sustitución, porque debe hacerse progresivamente y acompañado de inversión social y producción campesina sostenible que genere ingresos económicos con garantías de comercialización que permitan la manutención familiar, la supervivencia de la comunidad en el territorio y el fortalecimiento de la economía campesina amazónica. (Mesa regional de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, juveniles de la Baja Bota Caucana, Jardines de Sucumbíos, Ipiales, Nariño y Putumayo, 2015b)

En esta dirección, las organizaciones sociales del departamento también denunciaron las continuas aspersiones aéreas en su territorio, profundizando la desconfianza hacia el Estado y

cuestionando la falta de voluntad política para la superación del conflicto social y armado. En este sentido, señalaron la contradicción entre el discurso de la paz del gobierno central y las actuaciones en el territorio.

La incoherencia del Gobierno Nacional frente a la política antidrogas, muestra una vez más la descoordinación antes las decisiones tomadas en la no utilización de aspersiones áreas con agro tóxicos como el glifosato. Hoy la grave crisis humanitaria de los habitantes de la región, derivada de las aspersiones aéreas, deja ver la falta de compromiso y capacidad de gestión por parte del Gobierno Nacional para avanzar en los diálogos que actualmente se celebran con la Mesa de Organizaciones Sociales de Putumayo, la Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos- Nariño. (Mesa de Organizaciones Sociales de Putumayo, 2015c)

En relación con este punto, los liderazgos populares reclamaban al gobierno la implementación de los programas de sustitución voluntaria con un enfoque territorial, que respondiera al contexto socio-histórico del departamento, entendiendo que este era uno de los principales elementos de la agenda de negociación y de lo que sería uno de los ejes fundamentales del acuerdo de paz en términos de implementación. Para las organizaciones, este enfoque debía estar dirigido a la superación de las condiciones estructurales de marginalidad y pobreza, la desmilitarización del territorio, el cumplimiento de los acuerdos adquiridos con las organizaciones sociales, entre los que se encontraba el apoyo a la implementación de los planes alternativos de las comunidades y la puesta en marcha del Plan Integral de Desarrollo Rural derivado del punto 1 del acuerdo.

PARTE IV. PERCEPCIONES POPULARES DE LOS CONFLICTOS SOCIO- TERRITORIALES EN MONTES DE MARÍA

*Yo tenía mi hectárea de yuca. Con eso me entretenía
La comida pa' mis hijos. De esos era que yo vivía
Pero con esta mala suerte. Yo me tuve que marchar
Ahora yo vivo en el pueblo. Me dan ganas de llorar
Y no tengo na' y no tengo na'. Sino ganas de llorar
Yo que tenía mi parcela. No la puedo trabajar
Que por culpa de la guerra. Que me tuve que desplazar
Ahora vivo en el pueblo. Por Dios yo no tengo na'
No tengo na' y no tengo na'. Sino ganas de llorar
No tengo na' y no tengo na'. Sino ganas de llorar
"No tengo na'" –
Andrés Narváez (CNMH, 2019)*

En esta cuarta parte de la tesis se analizan las diferentes percepciones populares de los conflictos socio-territoriales de Montes de María, a partir del trabajo de campo realizado con algunas de las organizaciones populares que trabajan en la subregión. Esta investigación se desarrolló en el marco de la labor realizada con la organización colombiana CDPAZ-Planeta Paz, en particular, con el Observatorio Nacional de Paz (ONP), en el periodo comprendido del 2010 al 2014. Las organizaciones consultadas pertenecen principalmente al sector campesino debido a las características propias de la configuración social de Montes María. No obstante, se analiza la agenda política de la Mesa Intersectorial y de Concertación de Montes de María en la que

confluyen 150 organizaciones de diferentes sectores sociales populares. La mayoría de las entrevistas en profundidad se realizaron en el año 2010.

CAPÍTULO 11. Caracterización del territorio y narrativas del conflicto social y armado

En el presente capítulo se realiza una caracterización general del territorio de Montes de María, de las organizaciones sociales populares consultadas y de las percepciones populares de los conflictos socio-territoriales de Montes de María.

11.1. Breve caracterización de la subregión de Montes de María

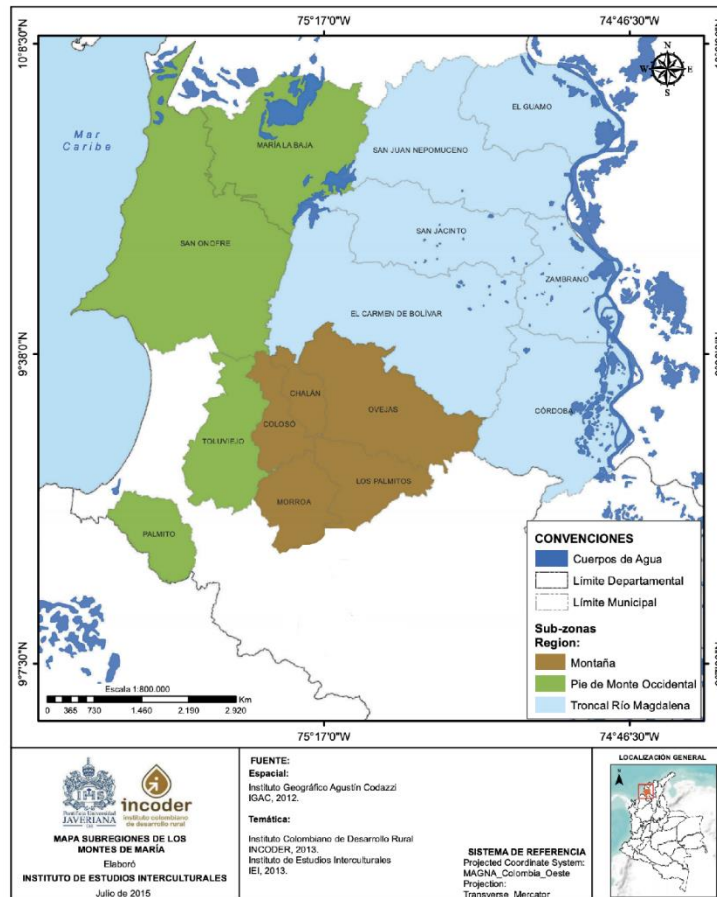
Montes de María (también llamada Serranía de San Jacinto) es una subregión ubicada en el Caribe colombiano, en la zona central de los departamentos de Bolívar y Sucre. La extensión total de su territorio es de 6.317 km². Los municipios de Bolívar que hacen parte de esta localización son Carmen de Bolívar, Maríalabaja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, Zambrano y El Guamo. En el departamento de Sucre se encuentran Ovejas, Chalán, Coloso, Morroa, Tolú Viejo, Los Palmitos, San Onofre y San Antonio de Palmitos (Jiménez, 2002). La población de esta subregión asciende a 390.0000 personas aproximadamente, de las cuales el 26% es afrodescendiente y un 6% indígena, según los datos del último censo de población realizado en el 2018 (DANE, 2018). Los municipios más poblados son Maríalabaja, El Carmen de Bolívar y Ovejas.

Por su localización geográfica, la Serranía de San Jacinto se considera una región estratégica debido a su ubicación ya que conecta los centros económicos de

Valledupar- Bucaramanga (al oriente) y el mar Caribe (al occidente), y entre el corredor urbano— regional de Cartagena-Barranquilla-Santa Marta (al norte) y la carretera transversal de la Depresión Momposina, que comunica a Sucre, Córdoba y Antioquia con el Magdalena y el César (al sur). (Jiménez, 2002, p. 507)

De esta manera, se convierte en un eje central para la comunicación de la región Caribe con el resto del país. Es de relevancia señalar que la región tuvo una transformación importante a mediados del siglo XX, debido a la construcción de la Troncal de Occidente, que convirtió al municipio de El Carmen de Bolívar en el centro de la región, siendo anteriormente un lugar olvidado y aislado. Otro cambio a destacar fue la construcción del tramo del oleoducto Caño Limón en Arauca que finaliza en el municipio de Coveñas, departamento de Sucre, en donde se localiza una terminal de embarque de hidrocarburos en el Golfo de Morrosquillo (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003).

Figura 18. Subregiones Montes de María⁴¹⁸



Fuente: Adaptado de *Las FARC: Auge y quiebre del modelo de guerra* (p. 291), por Aguilera, 2013.

En la conformación territorial de Montes de María se pueden identificar tres zonas con características diferenciadas. Primero, una zona plana dedicada a la ganadería extensiva y a la explotación maderera, ubicada entre la carretera Troncal de Occidente y el río Magdalena. Comprende los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto y Carmen de Bolívar. Otro sector es el localizado entre la Transversal del Caribe y el canal del Dique, que incluye la mayor parte del municipio de Marialabaja. En este segmento las tierras son aptas para la “agricultura comercial con disponibilidad de un distrito de riego en el municipio de Marialabaja” (Jiménez, 2002, p. 506).

⁴¹⁸ El mapa original del texto de Aguilera (2013) se modificó ya que se incluía el municipio de Corozal en Montes de María. Tanto en los textos de análisis de la subregión como en las caracterizaciones del territorio realizadas por las organizaciones sociales se considera que este municipio no hace parte del enclave debido a sus condiciones geográficas y culturales.

En segundo lugar, se encuentra una extensión montañosa hacia la que se ha ampliado la frontera agrícola y en la que se desarrolla una economía campesina. Algunas áreas de este enclave han sido abandonadas a causa del conflicto armado. Se encuentra localizada entre la Transversal del Caribe y la Troncal de Occidente, comprende los municipios de Chalán, Coloso, Morroa, Tolú viejo, Ovejas, San Antonio de Palmito, Los Palmitos y parte de los municipios de San Onofre, Carmen de Bolívar, Maríalabaja, San Juan Nepomuceno y San Jacinto. La tercera zona se corresponde con el litoral occidental de los Montes de María, que incluye al municipio de San Onofre, “con una precaria economía rural y un gran paisaje marítimo y de recursos costeros”⁴¹⁹ (Jiménez, 2002, p. 507).

El territorio de Montes de María se identifica por una gran diversidad ecosistémica. Por su ubicación cercana al Océano Atlántico y su orografía, este enclave se caracteriza por el bosque seco tropical, uno de los sistemas ecológicos más frágiles del trópico. “Las condiciones climáticas y de fertilidad en sus suelos han facilitado el desarrollo de una variedad de actividades agrícolas, aspecto que lo ha fragmentado y degradado fuertemente” (Herazo V., Mercado G., y Mendoza C., 2017, p. 72). Este sistema ecológico genera importantes recursos hídricos y cuencas subterráneas, que convierten la subregión en una zona con tierras fértiles y aptas para diferentes tipos de actividades.⁴²⁰

No obstante, y como se señala anteriormente, la compleja biodiversidad se ha visto afectada en las últimas décadas por la ampliación de la frontera agrícola, en particular, la ganadería extensiva, el abandono de tierras a causa del conflicto armado, la actividad minera, la pesca industrial, la explotación de hidrocarburos y la implantación de un modelo de desarrollo basado en los monocultivos. Estas intervenciones han generado deforestación, deslizamientos de tierra, contaminación de las fuentes de agua, desecamiento de las ciénagas, erosión de los suelos, impactos sobre los hábitats de la fauna y pérdida de especies nativas. Este deterioro del territorio es percibido de la siguiente manera por las organizaciones sociales populares de la zona:

⁴¹⁹ En términos de infraestructura, las vías más importantes son la Troncal de Occidente, que conecta los departamentos de Sucre y Bolívar, y la Transversal del Caribe, que permite la comunicación entre los municipios de Maríalabaja, San Onofre, Tolú Viejo y Sincelejo. Estas dos vías alteraron las lógicas de poblamiento y generaron nuevas dinámicas de desarrollo económico, posibilitando el intercambio comercial con el interior del país y vertebrando la comunicación en los departamentos de la Región Caribe (Rodríguez, 2016, p. 281).

⁴²⁰ En Montes de María se pueden encontrar las ciénagas de Maríalabaja, San Pablo, Carabalí Arriba y Abajo y La Cruz. Para la protección de la biodiversidad, se han declarado las siguientes zonas de reserva: la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza y Montes de María localizadas, en los municipios de Tolú Viejo, Colosó y Chalán (Sucre) y el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, en el municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar).

Hemos sido testigos de la disminución de las especies animales con las que crecimos y que hoy han sido desplazadas de su hábitat por cuenta de la deforestación implacable de los árboles nativos que constituían sus ecosistemas, y que han sido reemplazados por la “reforestación” homogénea y artificial de los “nuevos bosques” de especies maderables y palma. La pérdida de estos bosques afecta a los ecosistemas de la región e impacta negativamente en las coberturas vegetales que actúan como soportes naturales de los cuerpos de agua, conocidos como “bosques riparios”. (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2017, p. 351)

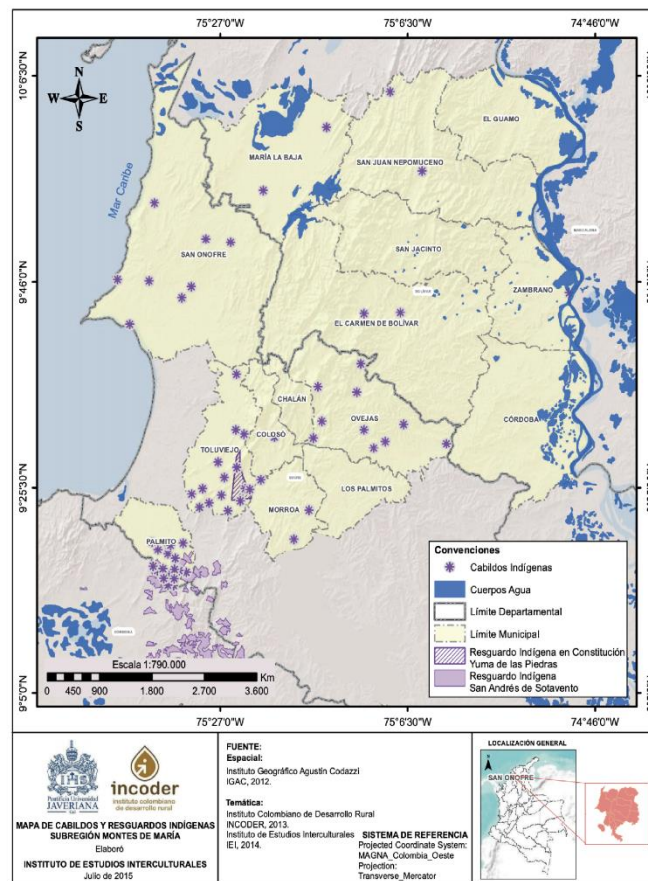
En cuanto a la composición demográfica, la subregión de Montes de María se encuentra habitada por blancos, mestizos, campesinos, indígenas y afrodescendientes, siendo un territorio que se caracteriza por su riqueza y diversidad cultural⁴²¹. A este respecto, es relevante señalar que los Montes de María fue un territorio de refugio para los esclavos que huían de Cartagena (Fals Borda, 2002 [1986], p. 62A). De esta manera, las características geográficas posibilitaron el florecimiento de comunidades de afrodescendientes en las que desarrollaron proyectos comunitarios a partir de sus cosmovisiones. El campesinado también encontró en las tierras baldías de la Serranía de San Jacinto un lugar de asentamiento que brindaba posibilidades de arraigo.

Estos patrones de poblamiento configuraron unas territorialidades particulares, en el marco de los procesos de apropiación del espacio que desarrollaron afrodescendientes, campesinos e indígenas.⁴²² Estas territorialidades populares entraron en tensión con las de las élites regionales que incentivaron un modelo de hacienda ganadera y de enclave para la producción de tabaco, utilizando la violencia o diferentes métodos coercitivos para despojar de la tierra al campesinado (Fals Borda, 2002 [1986]). De esta manera, se configuraron en la región unos patrones de despojo, entendidos como una forma de apropiación violenta del espacio, que se mantiene en el contexto actual. No obstante, es importante señalar que este fenómeno ha tenido diferentes características a lo largo de la historia de Montes de María, dependiendo de los actores involucrados y de la intencionalidad en la apropiación y uso del espacio.

⁴²¹ La mayoría de la población indígena pertenece a la etnia Zenú y se encuentra asentada en los municipios de Colosó, Morroa, San Onofre, San Antonio de Palmito y Tolú Viejo. En total existen 42 cabildos indígenas distribuidos en los tres últimos municipios. En cuanto a formas organizativas de la población afrodescendiente, se encuentran conformados 14 Consejos Comunitarios ubicados en los municipios de Maríalabaja y San Onofre. Para el año 2014, ninguno de los cabildos indígenas y consejos comunitarios estaba legalmente constituido, a excepción del Consejo Comunitario de Makanjamaná de San Basilio de Palenque (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2014, p. 15).

⁴²² Los primeros patrones de asentamiento y desarrollo socio-económico de la Serranía de San Jacinto se dieron en las zonas próximas a los espacios acuáticos, a la ribera occidental del río Magdalena y a las localizaciones cercanas al mar (Rodríguez, 2016, p. 279). Estas dinámicas van a incidir en los usos y costumbres de las comunidades, en una relación bidireccional con el contexto geográfico.

Figura 19. Presencia de cabildos indígenas en Montes de María⁴²³



Fuente: Adaptado de *Las FARC: Auge y quiebre del modelo de guerra* (p. 291), por Aguilera, 2013.

⁴²³ Nos parece relevante señalar que en la investigación sobre conflictos en Montes de María realizada por Aguilera (2013) se incluye en la subregión el municipio de Corozal localizado en el departamento de Sucre. No obstante, en la presente tesis no consideramos que este municipio sea parte de la subregión, por una cuestión geográfica, cultural e histórica. Las organizaciones populares tampoco perciben al municipio como parte de esta localización.

Figura 20. Presencia consejos comunitarios en Montes de María⁴²⁴



Fuente: Adaptado de *Las FARC: Auge y quiebre del modelo de guerra* (p. 295), por Aguilera, 2013.

Las tierras fértiles y el desarrollo de una economía campesina permitieron que esta subregión se convirtiera en el siglo pasado, en lo que se denominó “*la despensa agrícola del Caribe*”, debido a la producción de alimentos y a la alta calidad de los mismos. Es de señalar que su economía se ha sustentado tradicionalmente en las actividades del sector primario, con una alta vocación agrícola. Entre los cultivos campesinos que se producen se pueden encontrar maíz, arroz, plátano, tabaco, café, aguacate, entre otros.

⁴²⁴ Nos parece relevante señalar que en la investigación sobre conflictos en Montes de María realizada por Aguilera (2013) se incluye en la subregión el municipio de Corozal localizado en el departamento de Sucre. No obstante, en la presente tesis no consideramos que este municipio sea parte de la subregión, por una cuestión geográfica, cultural e histórica. Las organizaciones populares tampoco perciben al municipio como parte esta localización.

De esta manera, la economía campesina se sustenta en una agricultura familiar, ligada a una vivencia específica en el territorio, a unas prácticas espaciales concretas que se encuentran ligadas a una identidad territorial, articulada a una serie de costumbres y saberes particulares. Así es definido por las organizaciones “nuestras prácticas sociales y económicas se han caracterizado históricamente por la agricultura familiar (incluida la pesca) y la producción diversificada de alimentos, lo que también ha contribuido a la construcción de nuestra identidad, cultura, habilidades y conocimientos” (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2014).

Sin embargo, el conflicto armado, especialmente intenso en esta zona, provocó el desplazamiento masivo de la población campesina y el acaparamiento de tierras para la agroindustria, principalmente la palma de aceite, para la minería de gravas y la explotación de hidrocarburos. Estas transformaciones han puesto en peligro la soberanía y seguridad alimentaria, debido a una disminución en las actividades productivas de la población campesina, así como un desvertebramiento del entramado comunitario, que se sustenta en relaciones de compadrazgo y vecindad.

Al respecto, Amaranto Daniels plantea la contradicción entre la vocación del suelo y la utilización del mismo existente en Montes de María, que refleja precisamente los conflictos presentes en esta zona del país. En el año 2013, según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la vocación del suelo se distribuía de la siguiente manera: 732.000 ha. (0,11%) para la conservación de la vida silvestre y el paisaje; 294.385 ha. (45,82%) se situaban en el ámbito forestal; 268.653 ha. (41,81%) tenían vocación agrícola; y, 32.130 (5%) ganadera. Estos datos los contrasta el autor con los usos del suelo. Las tierras destinadas a la ganadería extensiva ocupaban en el año 2011 331.600 ha, presentándose una preocupante sobreutilización de los suelos aptos para tal actividad. En el caso de las actividades agrícolas, se presenta el fenómeno contrario, la subutilización de los suelos. Los pequeños y medianos campesinos producen alrededor de 25 cultivos agrícolas y el nivel de ocupación del área con vocación para tal fin es solo del 7,4%, en donde se incluyen los cultivos de agricultura comercial (Daniels P., 2016, p. 57).

La riqueza en términos de biodiversidad y de tierras fértiles, contrasta con las condiciones socio-económicas de la población de Montes de María. Según el censo de población realizado por el DANE en 2018, el Índice de Pobreza Multidimensional de la subregión era de 64,57, mientras que el promedio nacional se situaba en 19,1; inclusive superaba la del departamento de Bolívar (32,4), y la de Sucre (39,7). Para el indicador de proporción de personas con Necesidades Básicas

Insatisfechas (NBI), Montes de María registraba un porcentaje de 42,51%, muy por encima del existente en los departamentos de Bolívar (26,26%) y de Sucre (28,98%), así como del porcentaje a nivel nacional (14,3%). En el caso de proporción de personas en situación de miseria, los números también desbordaban los promedios departamentales, aunque en una menor proporción que los anteriores indicadores. La situación más preocupante se presenta en los municipios de San Jacinto, Zambrano, Chalán, Carmen de Bolívar y San Onofre.

Tabla 7. Pobreza multidimensional, necesidades básicas insatisfechas, miseria Montes de María⁴²⁵

Departamento/ Municipio	Pobreza multidimensional	Prop. personas en NBI (%)	Prop. personas en miseria
Departamento de Bolívar	32,4	26,56	8,02
El Carmen de Bolívar	77,6	41,49	15,77
Córdoba	59,7	29,7	10,14
El Guamo	59,7	28,7	8,09
Maríalabaja	65,1	46,54	16,79
San Jacinto	78,0	93,41	29,59
San Juan de Nepomuceno	62,8	38,28	11,44
Zambrano	80,6	41,84	20,87
Departamento de Sucre	39,7	28,98	7,94
Chalán	78,0	60,14	22,92
Coloso	62,2	61,03	11,61
Los Palmitos	49,8	22,07	4,17
Morroa	58,8	28,39	7,08
Ovejas	63,1	29,12	8,55
San Antonio de los Palmitos	46,7	44,41	13,20
San Onofre	77,5	41,83	14,16
Tolú Viejo	48,9	30,67	7,57
Promedio	64,57	42,51	13,46

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del censo del DANE 2018.

Esta situación de marginalidad de la población, se relaciona entre otros factores con la alta concentración de la tierra, que se presenta como un problema endémico en el país y una de las

⁴²⁵ Según indica el DANE, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) mide la pobreza a través de cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos. Estas dimensiones consideran 15 indicadores, donde cada indicador tiene definido un umbral, así, cuando un hogar (unidad de análisis para este fin) no alcanza el umbral establecido es considerado en privación de esa condición. Si un hogar está privado en por lo menos 5/15 de los indicadores ponderados, todos sus miembros se consideran en situación de pobreza multidimensional.

causas estructurales del conflicto social y armado (Fajardo, 2015). En el caso de los Montes de María, nos encontramos que el promedio de concentración de la tierra, calculada a través del coeficiente de Gini rural, fue de 0,70. Aunque se encuentra debajo del promedio nacional, el índice es demasiado elevado para una subregión en donde ha predominado la economía campesina. Los municipios más afectados por este fenómeno son San Antonio de los Palmitos, Tolú Viejo, Colosó y Maríalabaja.

Tabla 8. Distribución de la tierra rural y coeficiente de Gini en los municipios de Montes de María 2011

Municipios	Menos de 3	Entre 3 y 10	Entre 10 y 20	Entre 20 y 200	Mayor de 200	Total	Coeficiente Gini
	Hectareas						Índice
Carmen de Bolívar	491	4.189	11.721	60.702	22.334	99.438	0,61
San Juan Nepomuceno	127	1.873	5.450	42.967	13.778	64.195	0,59
San Jacinto	220	2.006	4.637	25.070	9.338	41.271	0,62
María La Baja	1.601	6.044	7.411	22.700	17.340	55.097	0,78
Córdoba	104	1.407	4.893	29.162	25.869	61.435	0,69
El Guamo	106	649	1.790	24.565	8.689	35.800	0,58
Zambrano	40	336	6.398	7.283	14.926	28.982	0,70
Subregión Bolívar	2.691	16.504	42.300	212.449	112.275	386.219	0,65
Ovejas	47	769	813	3.731	2.205	7.565	0,70
Chalan	47	769	813	3.731	2.205	7.565	0,69
Colosó	209	1.630	1.434	6.947	3.400	13.620	0,76
Monroa	370	2.370	2.106	9.441	1.904	16.192	0,75
Toluviejo	677	2.509	4.052	13.105	12.989	33.332	0,84
Los Palmitos	365	2.708	3.500	10.453	3.648	20.673	0,69
San Onofre	1.075	7.145	9.769	51.933	25.345	95.266	0,73
San Antonio de Palmito	344	1.357	1.711	6.214	7.725	17.351	0,84
Subregión Sucre	3.133	19.257	24.198	105.555	59.421	211.563	0,75
Total Subregión MM	5.824	35.761	66.497	318.004	171.695	597.782	0,70
Colombia							0,85

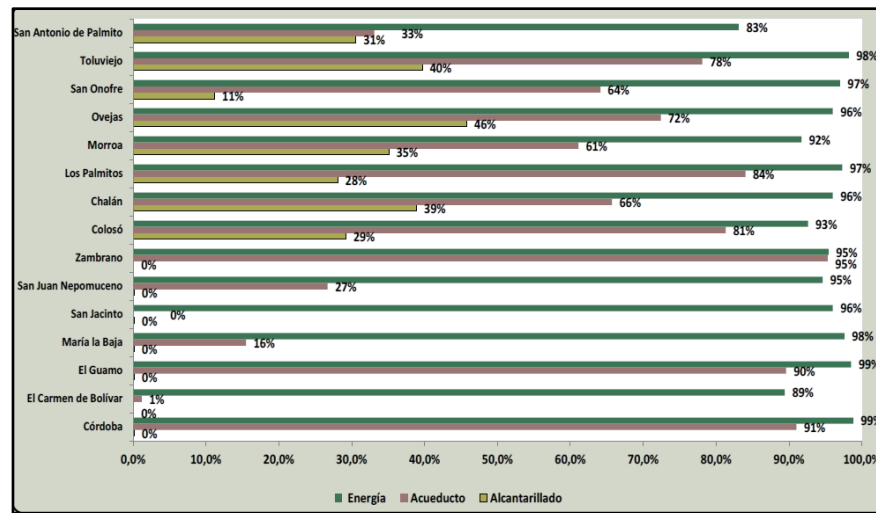
Fuente: IGAC, Sucre y Bolívar, 2011. Tomado de Daniel Menco (2012), "Tenencia y uso de la tierra rural en los Montes de María", Consultor para Bancos de Proyectos de la Fundación MSI Colombia en el Programa Cimientos, para Montes de María.

Fuente: Adaptado de *Las FARC: Auge y quiebre del modelo de guerra* (p. 297), por Aguilera, 2013.

Por otra parte, el acceso a los servicios públicos de los habitantes de Montes de María también se caracteriza por una alta precariedad, en particular, en las zonas rurales. Mientras que en las cabeceras municipales la cobertura es de un 90%, en gran parte de los corregimientos y las veredas se carece de este servicio o la prestación del mismo resulta deficiente. Una situación similar se presenta con el servicio de agua potable: en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Maríalabaja, San Juan Nepomuceno se presentan deficiencias en el servicio. En el caso de los municipios que se localizan en el departamento de Sucre, la cobertura llega al 60%,

exceptuando San Antonio de Palmitos que solo cubre al 33% de la población (Daniels & Rodríguez, 2017). No obstante, como se observa en el siguiente cuadro, la cobertura de agua y alcantarillado es mucho más precaria que el servicio de energía. Estas carencias inciden de manera negativa no solo en la calidad de vida de las comunidades sino en las actividades productivas.⁴²⁶

Figura 21. Cobertura de servicios públicos en Montes de María.



Fuente: Adaptado de *La coyuntura montemariana: entre la precariedad institucional, la exigibilidad del derecho y la convivencia* (p. 24), por Daniels y Rodríguez, 2017.

En cuanto al sistema educativo, es diciente la denuncia de la Defensora del Pueblo de Bolívar en el año 2016, en donde señalaba que, de las 270 instituciones educativas de Montes de María, 146 tenían infraestructuras precarias y deficiencias en la prestación de servicios públicos, así lo expresaba la funcionaria:

112 escuelas en Carmen de Bolívar, 34 en San Jacinto y varias en María la Baja están ad portas de un derrumbe; no hay ni baños, ni comedores, ni cocinas y los techos y paredes están agrietados en su gran mayoría. Aquí ni servicio de transporte para los menores se encuentra. (Radio Nacional de Colombia, 2016)

⁴²⁶ Las comunidades de Montes de María llevaron a cabo diversas movilizaciones para denunciar la situación de precariedad social, el abandono del Estado y la crisis humanitaria a causa del conflicto armado. En el periodo que abarca esta investigación se destaca la marcha pacífica de 2005, en donde dos mil campesinos y campesinas se congregaron en el perímetro urbano de El Carmen de Bolívar. Asimismo, en el año 2013, aproximadamente mil campesinos y campesinas de Montes de María marcharon hacia la ciudad de Cartagena, para denunciar las condiciones de pobreza y marginalidad. Reclamaban al gobierno nacional y departamental la mejora de las vías de comunicación, la ampliación de la cobertura de los servicios públicos, la renovación y equipamiento de las escuelas y los colegios y el cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Entre las consignas se podía leer “La montaña se mueve por la restitución integral”, en alusión a los derechos sobre el territorio que fue despojado de manera violenta.

Asimismo, apuntaba a que el ochenta por ciento de las infraestructuras no eran susceptibles de ser reparadas, poniendo en riesgo la salud de los menores. Esta situación se relaciona con que la mayoría de los institutos educativos se encontraban en predios que no estaban legalizados y, como consecuencia, las administraciones no podían realizar inversiones públicas. De tal manera, exhortaba a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto. Este es un ejemplo de la precariedad en la que viven las comunidades de la Serranía de San Jacinto.

Según datos del Ministerio de Protección del 2015, en los municipios de Montes de María, el dato de afiliados al sistema de salud llegaba a un total de 385.667. El 94,7% se encontraba en el régimen subsidiado y solo el 5,3% en el régimen contributivo. Estos datos contrastan con el número de afiliados a nivel nacional en esta segunda modalidad, un 43%, mientras que en el régimen subsidiado se localizaba en el 54,6%. Los datos señalados infieren el alto grado de informalidad laboral y económico en la subregión, así como la falta de fuentes de empleo no dependientes del sector público (Daniels & Rodríguez, 2017, p. 47).

Por otra parte, es pertinente señalar que, a causa de la intensificación del conflicto armado en la subregión, la infraestructura de salud y de educación se vio gravemente afectada, así como las condiciones para poder prestar estos servicios. En el caso de los centros de salud, muchos de estos fueron destruidos, saqueados los medicamentos y los equipos médicos resultaron dañados. Asimismo, el personal médico, enfermeros y odontólogos tuvieron que desplazarse debido a la grave situación de orden público. Estos acontecimientos dejaron a la población en un alto grado de indefensión. Entre los municipios más afectados en la zona rural fueron Ovejas, San Jacinto, San Onofre y El Carmen de Bolívar (Bocchi, 2011, p. 21).

La breve caracterización socio-económica realizada en los párrafos anteriores evidencia la ausencia de políticas públicas en esta zona de país, que posibilitarán el desarrollo de las comunidades en sus territorios a partir de unos mínimos vitales como son la salud, la educación o una vivienda digna, en el marco del cumplimiento de los derechos consignados en la Constitución de 1991. Esta situación de exclusión social se relaciona también con la desigual distribución de las tierras y con una profundización del conflicto social y armado, en particular, a finales de la década de los noventa y en la primera del presente siglo. Este conjunto de factores configura un contexto propicio para la reproducción de múltiples conflictos, tal y como lo señalan las organizaciones populares de la región.

11.2. Caracterización de las organizaciones sociales populares

En este apartado se recogen las caracterizaciones de las organizaciones sociales populares consultadas para realizar la presente investigación. En las narraciones se pueden encontrar algunos elementos comunes: radio de acción de la organización, procesos de articulación, líneas de trabajo, horizonte de sentido y principales problemáticas. En algunos casos, se incluyen otras referencias externas a las voces de los líderes y lideresas, con el ánimo de tener una visión integral del trabajo realizado por las organizaciones populares. Finalmente, es relevante señalar que, en el caso de Montes de María nos centraremos particularmente en el campesinado, al ser una subregión que se caracteriza por la historicidad del movimiento campesino.

✓ Asociación Campesina de Pueblo Nuevo – corregimiento Maríalabaja.

El nombre de mi organización es Asociación Campesina de Pueblo Nuevo. Nuestra base social y organizativa viene de un proceso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) municipal, apoyada por la ANUC nacional, en donde se inició un proceso organizativo para la recuperación de tierras. En ese tiempo yo no hacía parte al inicio de la organización porque yo era un pelado todavía, un peladito, pero siempre me gustó el cuento.

Mi papá si hacía parte [se refiere a la ANUC] y tal y yo asistía a las reuniones en representación de él porque por mí mismo no podía, no tenía documento de identidad. Entonces, con este fin fue creada la organización, de recuperar tierras para la productividad campesina, porque en las comunidades de la región de María la Baja, la tierra estaba en manos de los terratenientes [...] Ahí fue que empezamos a pensar en que teníamos derechos, que teníamos que buscar una ayuda y que nos teníamos que poner a producir la tierra y que teníamos que volver a donde estábamos nosotros, a ser un trabajo autosuficiente y que la única manera era organizarnos porque nosotros vivíamos un proceso donde se lograron cosas por medio de la organización y fue cuando creamos la Asociación Campesina de Pueblo Nuevo.

Este trabajo lo iniciamos con el apoyo de la Corporación Desarrollo Solidario (CDS). Al principio, nosotros pensamos hacer una organización de toda la comunidad, que no hubiera nadie que se quedara fuera de la organización. Pero hubo una visión de varias personas que venían del otro proceso, en donde la organización servía para recibir cosas. La visión de nosotros o la que yo tenía era que nosotros nos teníamos que organizar para exigir nuestros derechos y nuestra calidad de vida tenía que cambiar a través de las gestiones que nosotros hiciéramos, y no solamente de proyectos productivos, ni de cosas que nos iban a regalar.

La organización se debe basar en unos principios y unos fundamentos de reconstrucción del tejido social que se había perdido, de volver a construir esa confianza entre nosotros, de volver a construir esas dinámicas. Eso se le explicó a la gente, pero hubo gente que no aguantó, porque el proyecto base era un proyecto productivo con la CDS, pero

dependía de la cooperación internacional. Y eso no funciona cuando uno quiere, eso tiene mucha tramitología. Ellos nos habían dicho que en un mes venían y resulta que la plata se demoró y la gente se nos desesperó y se desarticuló la organización de nuevo, se despelotó la cosa.

Hubo gente que dijo que esa corporación era una corporación pobre, que no fuéramos a traer esa corporación acá. Entonces, quedamos 10. Yo no era representante legal de la organización, era otro compañero que le tocó irse, pero resulta que él fue el que torció el camino, porque él no tenía una visión clara de lo que era, él tiene sentido organizativo como para sacar provecho. Entonces, yo veía eso porque yo admiraba a los líderes que asesinaron, yo le aprendí a ellos mucho, yo soy una persona que yo capto las cosas y entonces decía, no me parece lo correcto, no me parece.

Eso fue hace cuatro años más o menos. Yo no tenía ninguna experiencia como líder, y yo les digo a ellos, si ustedes me apoyan yo me atrevo a hacer un esfuerzo para liderar la organización y empecemos a trabajar que yo estoy seguro que apenas comience a dar frutos la gente va a llegar y nosotros también tenemos capacidades y vamos a empezar a producir, démosle tiempo a la CDS. Hagamos cositas nosotros mismos, solucionemos por aquí, solucionemos por allá, vamos a hacer las declaraciones como desplazados, porque ya yo tengo una pequeña orientación de que había que declarar para poder tener algo del gobierno. Fuimos e hicimos las declaraciones en la Personería y aparecimos como desplazados, trabajamos duro. Dios es grande y nos dio fuerza, nos capacitamos porque capacitaciones sí hemos recibido. Se fortaleció la organización, se dieron los proyectos productivos, salieron adelante, pero la misma visión de la organización logró que la gente se compenetrara. Los proyectos productivos comunitarios son para beneficio de la organización, lo volvimos un proyecto productivo comunitario para beneficio de la comunidad.

Y eso gustó, la gente se fue integrando, se fue integrando y le fue gustando la cosa y hoy en día tenemos una organización que lo puedo decir, una organización fuerte, que trabaja por la defensa del territorio, que trabaja por la defensa de la vida. En un principio nos enfocamos en trabajarle a la seguridad alimentaria porque era la necesidad, y comprendimos que también era la defensa de ese territorio. Si no defendemos nuestro territorio, esa seguridad alimentaria va a estar en peligro. Esa lectura del contexto hicimos y así nos hemos mantenido hasta hoy en día.

Nosotros trabajamos en la mañana y apenas todos terminábamos hacíamos una olla comunitaria donde todos aportábamos y después del almuerzo, que estábamos ya llenitos, hacíamos las reuniones. Y así empezamos. Fue una experiencia muy bonita. A medida que uno se va capacitando va entendiendo las cosas; hoy voy yo, mañana va el otro y el que va replica en toda la comunidad.

Ahora hay tres organizaciones: hay una organización de mujeres que se organizaron y se llama Mujeres Artesanas de Colombia, trabajan las artesanías en totumo, hacen sandalias, hacen collares, manillas, se defienden y tienen un pequeño ingreso ahí. Hay un grupo de jóvenes que se afiliaron a la Red Antorchas. (E3, Líder Asociación Campesina de Pueblo Nuevo, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

- ✓ *Organizaciones de Población Desplazada de los Montes de María (OPD – Montes de María y origen de la Mesa de Concertación e Interlocución de Montes de María (MIC) desde la visión de la OPD.*

✓

Las organizaciones de población desplazada nacieron en 2008 con organizaciones de María la Baja. En 2010 entran a San Cayetano, El Carmen de Bolívar y Ovejas. En 2012 entran a hacer parte algunos cabildos indígenas y consejos comunitarios afros de la región.

OPD es un espacio organizativo democrático y autónomo en defensa del territorio, las políticas públicas y la consolidación de los Montes de María. Buscamos incidencia y fortalecimiento para todas las organizaciones. Hay una importante capacidad de incidencia, que busca que las políticas públicas en los territorios funcionen.

OPD nació con el objetivo de hacer incidencia política en pro de la economía campesina y la soberanía alimentaria. Posteriormente, cuando se amplió a otros municipios, y teniendo la visión de contexto de Montes de María, se amplió el espectro. Hoy OPD tiene miembros activos en 7 municipios de Montes de María.

Las OPD han venido con una trayectoria de conciencia política sobre el gobierno y sus políticas. El 8 de mayo de 2011 hicimos un foro en El Carmen de Bolívar con campesinos sobre una propuesta de Zona de Reserva Campesina y el 11 de agosto de 2013 se hizo otro foro sobre economía campesina. A estos foros se llevaron propuestas fundamentales para la organización. De ahí salen las propuestas de las mesas de interlocución. Myriam Villegas, directora del INCODER, ya venía con la propuesta dado el flagelo de los monocultivos en la región.

El INCODER puso los recursos y empezamos a trabajar en mesas sectoriales que le dieron sentido a la propuesta de acceso a tierras, medio ambiente, educación. La idea era que todos habláramos el mismo lenguaje y concentrar en un mismo documento la participación de todos.

En 2013 se interlocutó con la directora del INCODER y hubo nuevas mesas preparatorias en Corozal, Zambrano y Tolú Viejo. Estos insumos vuelven al documento para complementarlo sobre las perspectivas y problemáticas de estos territorios.

Hemos logrado también ser partícipes del trabajo político en defensa de los territorios en Catatumbo. Nos mantenemos en contacto con ANZORC para saber qué pasa en el resto del país.

Los jóvenes tuvieron una representación muy activa y eso es un gran logro, que los jóvenes le estén aportando al futuro de los Montes de María. También van a salir propuestas de las mujeres víctimas a nivel departamental. Todos tenemos que empoderarnos de nosotros y de nuestros territorios para proteger lo nuestro y lo de los otros.

A continuación, señalan algunos de los hitos y avances organizativos en términos de articulación, salto de la escala regional a la nacional y los procesos de incidencia política de la MIC de la visión de la OPD.

Entre lo que tuvimos desde la fecha de inicio hasta el actual año, todas las cosas positivas en las que hemos podido avanzar, uno es la vinculación de las nuevas organizaciones, la participación de diferentes espacios, incluyendo los de ZRC, la articulación con el Observatorio de Paz. Tuvimos la oportunidad de realizar dos foros regionales, participamos en diferentes diplomados en estos últimos años. Pudimos presentar insumos para las mesas

de trabajo al proceso de paz que se está llevando en La Habana. Aparte, nació la articulación de OPDS, comités sectoriales.

De igual forma, se aprecia la articulación de indígenas y afrodescendientes. Obtuvimos cierta participación internacional con nuestro compañero, y pues otro logro que se ha tenido ha sido la articulación de OPDS a organizaciones nacionales y ganar reconocimiento a nivel nacional y regional. Hemos podido trabajar con diferentes espacios, no propiamente el de nosotros, sino a nivel nacional y regional.

Por otro lado, un punto que últimamente nos ha dado cierto reconocimiento fue la elaboración de un documental que muestra la realidad de la economía campesina. Tuvimos la oportunidad de participar en una reunión de carácter político de esas que realiza el Congreso de la República.

Dentro de las cosas negativas que podemos señalar, ha sido la debilidad participativa de algunas organizaciones, la no vinculación de OPDS en los paros nacionales agrarios, un poco de falta de fortaleza en todo lo que tiene que ver con nuestras organizaciones. A pesar del reconocimiento y de la incidencia que hemos tenido, no hemos logrado cambios radicales en el modelo de desarrollo rural en la región, a pesar de que hemos tenido un gran impacto en la zona por el que tanto luchamos y tanto queremos y no hemos logrado hacer el lanzamiento de la Mesa de Concertación de Interlocución de los Montes de María. (Lideresa joven, OPD Montes de María, Observatorio Nacional de Paz, 2013)

Hemos venido construyendo capacidad instalada y profesamos que necesitamos la capacidad instalada porque visionamos el momento en el que la CDS pueda estar con otras organizaciones y el acompañamiento no sea tan fuerte como hoy entonces que nosotros podamos seguir el trabajo. Y eso garantiza que la CDS pueda seguir su trabajo por otro lado y que nosotros podamos seguir construyendo el camino, no sin su apoyo, pero ya no tan constante. (Lideresa joven, OPD Montes de María, Observatorio Nacional de Paz, 2013)

En el siguiente relato, se evidencian esas tensiones internas que hacen parte de los procesos de articulación entre diferentes organizaciones populares. En este sentido, y como lo señala Múnera (1998), el movimiento social no es homogéneo, ni estático, se caracteriza por ser dinámico, cambiante, por periodos de latencia y otros de mayor visibilidad. Por otra parte, las tensiones entre el movimiento campesino, indígena y afrodescendiente, han sido una constante en las dinámicas de lucha social en Colombia, provocadas muchas veces por el propio Estado, debido a sus políticas de ordenamiento territorial. Los movimientos étnico-territoriales han tenido y tienen diferentes visiones sobre el territorio y sus territorialidades se despliegan en razón de cada una de sus cosmovisiones.

Actualmente tenemos una apuesta y un gran compromiso que hemos logrado amarrar, un compromiso institucional con el tema de la Mesa de Interlocución de los Montes de María en donde nos pensamos un modelo de desarrollo propio desde la región y hemos venido logrando articular diferentes visiones del territorio como lo son los afros, los indígenas y los campesinos. Antes de lograr la articulación tuvimos un altercado con los compañeros

indígenas de La Pista, cuando nosotros sin conocer el tema de la legislación especial y como visionaban ellos el tema de su cosmovisión, pues para el foro del 11 de agosto del Foro Regional Campesino que trataba de amarrar el tema del compromiso de la Mesa, nosotros por equivocación pusimos al Cabildo Mayor Indígena de Bolívar como convocante. Entonces ellos se disgustaron porque cómo así que ellos iban a ser convocantes de un evento que iba en contra de sus principios porque nosotros íbamos a llevar a cabo el tema de ZRC y eso no era compatible con la ley que cobija a los indígenas.

Entonces, también tuvimos una experiencia que nos permitió hacer una reunión con los compañeros y fuimos a interlocutar con los mayores del cabildo. Entonces fue una reunión en la que fui un poco asustado por el desconocimiento porque no teníamos conocimiento de cómo miraban ellos el tema de su entorno, de su cosmovisión, pero a pesar de que fue un pequeño traspie, logró que la articulación que hoy tenemos se diera y la conclusión que sacamos es que bueno, en primer lugar, no conocíamos los alcances de los resguardos indígenas y los consejos comunitarios y ellos tampoco tenían bien claro el tema de ZRC. Entonces en esa reunión pudimos traer claridades sobre estas tres figuras, entonces logramos claridad sobre que estas tres figuras lo que buscan es proteger el territorio. Entonces ahí nace la posibilidad y la intención de buscar puntos de encuentro porque el objetivo precisamente era la protección del territorio. Entonces esto fue muy significativo para OPDS y eso dio pie para el encuentro pasado porque precisamente era hacer énfasis en cuáles eran las estrategias y figuras de protección de territorio y encontramos tres en el territorio que son los consejos comunitarios afrodescendientes, los resguardos indígenas y las ZRC, que es lo que se está planteando como una propuesta. Logramos algunos acuerdos que considero son de suma importancia y pues consideramos que hemos venido avanzando en el tema.

Un reto que tienen OPDS y la CDS, porque vuelvo con el tema de la Mesa de Interlocución que nace de un foro pues nosotros soñábamos con bueno, planteemos una mesa, pero en ningún momento pensamos que la Mesa de Interlocución de los Montes de María iba a tomar el vuelo que tiene hoy y es que todo el que conoce la propuesta se le ha venido sumando. Y tenemos que estar muy pendientes para que toda esa sumatoria que se ha venido dando no se nos salga de las manos. (Líder OPD Montes de María, Observatorio Nacional de Paz, 2013)

Por otra parte, se evidencia una lectura crítica y propia del contexto, que alerta sobre las diferentes estrategias de los actores dominantes para cooptar los procesos organizativos sociales.

Ahora últimamente se nos ha venido sumando la Fundación Semana, que nosotros sabemos que es una estrategia también del gobierno, donde hay una alianza inmensa entre empresarios que buscan y tienen una visión diferente a lo que se está planteando OPDS con la Mesa. Entonces yo menciono esto porque hay que decir también que nosotros no visionábamos eso [...] También quieren plantear un contexto que no es y lo plantean, la Mesa como una apuesta de posconflicto, y la Mesa se viene articulando, pero no estamos en posconflicto. Si estuviéramos en posconflicto no estuviéramos viviendo las situaciones que se han vivido. (Líder OPD Montes de María, Observatorio Nacional de Paz, 2013)

✓ *Mesa de Concertación e Interlocución de Montes de María (MIC)*⁴²⁷.

La iniciativa de la Mesa de Interlocución y Concertación (MIC) fue propuesta por el Espacio de Organizaciones Campesinas de la Población Desplazada – OPDs Montes de María y reúne a aproximadamente 150 organizaciones sociales populares de los Montes de María entre las que se encuentran campesinas, afrodescendientes, consejos comunitarios, cabildos indígenas, mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado. En busca de una permanencia digna en el territorio.

En el año 2014 las organizaciones que confluyen en este proceso organizativo presentaron al gobierno nacional un documento que contenía las propuestas de desarrollo rural y agrario para Montes de María, como un elemento de partida para el diálogo con el gobierno y demás actores presentes en el territorio.

El antecedente inmediato de la MIC fue la realización, en el año 2012, del Foro Desarrollo Rural y Economía Campesina: impactos del desarrollo rural con enfoque territorial en la economía campesina y la soberanía alimentaria en Montes de María. Este evento se realizó en el municipio de Maríalabaja. En el encuentro participaron 600 representantes de «organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, cooperación internacional, delegados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la subgerencia de tierras y la gerencia general del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER).

En este evento las organizaciones presentamos las principales problemáticas relacionadas con el desarrollo rural y agropecuario que atraviesa la región de Montes de María, así como las potencialidades y fortalezas de la economía campesina, entendida como agricultura familiar, producción diversificada y agroecología de alimentos. Acto seguido, las organizaciones proponemos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCIDE), la iniciativa de impulsar una Mesa de Interlocución y Concertación que aborde los conflictos rurales en la región y avance en la construcción conjunta de programas y políticas encaminadas a garantizar modelos de desarrollo rural que garanticen los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de la población campesina, indígena y afrodescendiente, contribuyendo de esta forma a la reparación de las víctimas y la construcción de la paz y convivencia en esta región. Este espacio está abierto a todos los actores relacionados con el desarrollo de Montes de María.

✓ *Junta de Acción Comunal Barrio Los Ángeles, El Carmen de Bolívar.*

Pertenezco a la Junta de Acción comunal Barrio los Ángeles, yo soy la presidenta del barrio y representante legal.

Comencé en la organización en el 2007, para ayudar a sostener esto que estaba tan decaído, a fortalecer los procesos y fortalecernos unos a otros, pues nosotros estamos ahora mismo en albergues de paso, que casi ya son 7 años que lo tenemos como albergue, son unas cajas de fósforos, es en el barrio Los Ángeles. Cuando nos entregaron esas viviendas, nos las entregaron en precarias condiciones, nosotros hemos ido al paso a paso, hemos ido mejorando nuestro barrio, contamos con un pozo, comenzamos un proceso también con la cooperación internacional, quien nos ayudó a fortalecernos, a crecer como personas y a

⁴²⁷ La caracterización de la MIC se construye a partir de apartados de los dos documentos de la Mesa (2014, 2017).

defendernos con los derechos en mano, ahora estamos con el Movimiento por la Paz y el hogar se ha venido fortaleciendo aún más, tenemos proyectos productivos, como hortalizas, tenemos el sistema de riego de las hortalizas, huertos comunitarios.

Contamos con 53 hectáreas de tierra y estamos en un proceso de legalización. Nos encontramos haciendo reuniones con la alcaldía de El Carmen de Bolívar, pero aún no hemos encontrado el mecanismo para que ellos legalicen estos territorios. Nosotros queremos habilitar ese proceso para poder decir “esto se montó”, que tiene una base jurídica. Ahora estamos un poco en el aire. Aunque nuestra organización tiene un comité legal, tiene un comité de psicología, tiene la directiva de la junta de acción comunal, tiene un comité de trabajo y medio ambiente, tiene comité de educación, de deporte, los cuales todos están funcionando.

En el barrio entramos en el 2002 y desde ese tiempo llegaron otros líderes, esos líderes se fueron. Yo como entré en el barrio en el 2004, pero no como lideresa. Es una comunidad trabajadora, emprendedoras, o sea no tengo palabras para describir las cosas buenas que hemos hecho en la comunidad porque sí la hemos hecho.

Nosotros no esperamos a ver si la alcaldía viene a resolvernos los problemas que tengamos en nuestra comunidad. Si nos quedamos esperando a la institución, nos quedaremos esperando porque la alcaldía no responde. Así que nos autoorganizamos como con los huertos, para poder tener que comer y sacar algo de sustento.

Ahora mismo tenemos las lluvias que se han incrementado, el pozo se desbordó y estamos casi colapsados, porque es que de todas maneras ese pozo es el que nos está beneficiando de muchas maneras. Primero que todo nos ha ayudado en lo que es el domicilio, de ahí cogemos el agua para lavar, para bañarnos, para todo eso y también nos ayuda en lo que es el regado, que con eso es que tenemos nuestras hortalizas, dependemos bastante de esto.

También tenemos un tanque comunitario que es el que nos da el agua de lluvia, desde el tiempo que yo nací están haciendo el acueducto y no lo han acabado. Así nos organizamos.

Ahora la cosa es totalmente diferente que cuando empezamos, contamos con personas en la comunidad que al igual que yo tienen como esa amplitud de resolver, son autónomos, yo los delego, ahí ya saben es nuestra comunidad. También acompañamos a otros barrios que están en nuestro mismo proceso, como Las Margaritas, que también es de población desplazada por la violencia.

Los líderes comunitarios de Carmen de Bolívar, somos 45 líderes quienes estamos conformando la plataforma de organizaciones sociales visibles del Carmen de Bolívar. Hicimos un teletón, recogimos una tonelada de comidas, recogimos un millón cuatrocientos cientos en plata.

Todo esto lo hicimos los líderes comunitarios, sin meterle en alcaldía ni en esas cosas, entonces lo que uno puede, lo que uno hace con la voluntad, de verdad, pasan muchas cosas.

Nosotros queremos cuidar la tierra, el territorio, estamos pensando en más arborización para nuestra tierra, incrementar los cultivos, que la alcaldía no lo vea como lotes baldíos y pueda llegar a asignar proyectos de vivienda. Nosotros somos desplazados y ¿dónde vamos a trabajar si no hay tierras?, porque ellos pueden coger ese lote y hacer viviendas y ¿en qué queda la condición de nosotros como desplazados, donde vamos a trabajar, donde está la tierra? pero nosotros así y con todo la cultivamos, la hemos

explotado y hasta el momento nos sentimos bien con ella. (E6. Lideresa Junta de Acción Comunal Barrio Los Ángeles El Carmen de Bolívar, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

✓ *Red Apícola de los Montes de María*

En el año 2008 llega la propuesta a través de CDS y llegan las primeras colmenas, o sea, llega la propuesta apícola a Mandinga, Santa Fe de Icoitea y nosotros, fuimos las tres primeras comunidades que recibimos ese apoyo directo de CDS en la parte apícola. Luego se fue extendiendo en las comunidades.

En el momento en el que empieza a hacer el despegue la parte apícola, por ejemplo, en San Cayetano, que se hizo la primera producción, lo vieron las otras comunidades y nace la necesidad de conformarnos en cadena apícola. ¿Por qué nace esa necesidad? Porque nosotros la producción de miel era de autoconsumo, y entonces nosotros estábamos mirando más allá y pensamos que a través de la cadena podíamos desarrollarnos más allá. Y es que pensamos en el 2011 en crear la cadena apícola. Se crea la necesidad porque en ese entonces, el kilo de miel si en otras comunidades se vendía en 5, 6, 4 mil pesos. Pero tenía ese precio porque cada comunidad establecía su precio y no había un precio convenido entre quienes producíamos miel. Entonces eso no será ningún negocio, entonces conformamos la cadena. Hoy en la cadena tenemos seis comunidades que estamos produciendo miel.

Entonces comenzamos a reunirnos para la fundación de la cadena. La cadena nos ha dejado experiencias grandes, porque en la medida en que comenzamos a organizarnos como cadena empezamos a conocer costumbres de otras comunidades, cómo era el movimiento en otras comunidades, comenzamos a mirar como trabajaban en otras comunidades y el conocimiento que adquiríamos en otras comunidades lo íbamos implementando a su vez en las nuestras y las otras también iban aprendiendo, entonces era un aprendizaje que siempre iba encaminado a fortalecer la cadena.

En principio se trató de ser equitativo, pero en vista del interés que pusieron las mujeres se crea la cadena y hoy quienes dirigen la cadena son las mujeres, a pesar de que tenemos muchos hombres. Fíjese el avance, ¿para qué ha servido eso?, para darle unos espacios a las mujeres, no como antes que por el hecho de que la abeja es peligrosa y solamente somos los hombres los capacitados para manejar eso. Ya hoy no, ya una mujer maneja los apiarios igual que un hombre, y a veces hasta mejor. Y en algunas partes nos han sobrepasado, y la prueba de eso es que ellas son quienes manejan la cadena”.

Se llevó a cabo el proyecto de apicultura con el cual se buscaba el mejoramiento de la calidad de vida de los socios. Pero hasta el momento hemos subido y hemos bajado porque el sistema por intermedio de los cultivos, lo que es la palma africana, porque cada vez que hacen fumigaciones muy fuertes tenemos problemas en la zona, porque la flora se acaba y salen las abejas a buscarla y llegan a la parte de las matas de palma que están fumigadas y ya dañan las colmenas hasta el momento. (Líder Cadena Apícola, Observatorio Nacional de Paz, 2013)

✓ *Red Piscícola de Maríalabaja, REPISNOMOL.*

La Red Piscícola es una organización de segundo grado que comercializa la materia prima para hacer su mismo concentrado. Tiene su máquina donde se hace la materia prima de los peces; engorda y cría peces en tanques y tiene fondo rotatorio para potenciar organizaciones de base. La red piscícola cuenta con 4 organizaciones de base, dos en Mahates y dos en Maríalabaja. La sede es en Maríalabaja. Estamos buscando cómo le damos valor agregado al pez.

Vamos a hablar de antes de la red y después de la red. Antes de las redes, en 1999 nos conformamos en las regiones de Mahates y Maríalabaja los pescadores, nos organizamos. Luego, después de la ayuda de la CDS, conformamos la red. Primero pasamos muchos trabajos, porque no sabíamos cómo despegar, cómo hacíamos pa' nosotros salirnos del problemón que teníamos (...) que no encontrábamos la coordinación con los demás grupos. Inclusive nos reunimos con unas organizaciones de Hato Viejo, de Calamar, pero a fin no encontrábamos lo que queríamos.

Hato Viejo son puertos pesqueros también. Y entonces nosotros, esos también son compañeros de nosotros, son pescadores artesanales y viven de la pesca y la agricultura. Porque la mayoría de los pescadores son pescadores agricultores en esa región, por eso cuando hablan de campesinos yo soy uno de los que salgo a defender la causa, porque somos eso, pescadores y agricultores. Entonces con la ayuda de la CDS conseguimos la coordinación y nos reunimos y formamos la red piscícola de la zona norte del departamento de Bolívar.

Entonces, de 1999 al 2004 fue mucho el trabajo que pasamos para organizarnos, para organizar a los otros compañeros pescadores y logramos juntar las diferentes organizaciones de la región y ponernos medio de acuerdo, porque no hubo acuerdo total. Porque una cosa difícil de unir, de organizar, es a los pescadores, porque los pescadores... Es un arte que casi todos devengan por su lado el sustento de cada día, entonces cada quien se gana su plata con lo que hace, entonces es muy apático a la organización. Y ese ha sido un problema que hemos tenido también en la región de Mahates, para nosotros que somos apenas veintipico en la organización de pescadores de Mahates que somos los organizados, para nosotros ha sido muy pesado de dominar a 400 y pico que hay no organizados.

Nosotros hemos estado luchando por cuidar el medio ambiente, en cuanto a la quema, la tala de árboles en la orilla del Canal del Dique, porque esa es una de las cosas que está acabando con la fauna allá. Por un lado, los arroceros que no tiene donde sembrar, siembran a la orilla del Canal del Dique, y cuando vienen los planchones esos que transportan el petróleo para acá pa' Cartagena y el carbón eso con la maquinaria esa, la fuerza que trae eso tiene trae una ola fuerte y esa ola le pega a los barrancos y la tira y acaba con los barrancos y va sedimentando la boca de la ciénaga. Entonces ya la ciénaga ya está en llanito, las ciénagas ya no tienen la profundidad que tenían antes".

En ese entonces había muchos más hombres que mujeres, porque a las mujeres antes como que no les gustaba mucho ese cuento, porque ellas hasta ahora después es que las mujeres fueron llegando y fueron llegando y entonces ahí está que ya hay 33 mujeres y 44 hombres en la red piscícola. (Líder REPISNOMOL, Observatorio Nacional de Paz, 2013)

✓ *Corporación Desarrollo Solidario (CDS).*

La Corporación Desarrollo Solidario no es una organización popular, realiza una labor de acompañamiento al campesinado de Montes de María y su trabajo es valorado muy positivamente por las organizaciones. En este apartado, vamos a recoger algunos extractos de la historia de la organización que se encuentran en el libro *En camino largo no hay ventaja* (2018). El artículo dedicado a la CDS es redactado por uno de los socios fundadores, el investigador popular Carlos Salgado Araméndez.

El 2 de diciembre de 1992 se constituyó legalmente la CDS en la ciudad de Cartagena y sus estrategias estuvieron orientadas a dar curso a las iniciativas definidas por las organizaciones: reforzar los fondos rotatorios, consolidar los proyectos de las asociaciones, con particular énfasis en las de mujeres y jóvenes, comprar una parcela para la instalación del CEAC y adelantar convenios de cooperación para facilitar la realización de estas estrategias. (Salgado y Urbano, 2018, pp. 27-28)

La CDS basó su propuesta en el diseño y puesta en práctica de una estrategia elaborada con las familias campesina para el desarrollo rural a partir de la agricultura tradicional combinada con elementos de agroecología moderna, con el objetivo de asegurar el mantenimiento y uso continuo de la agrobiodiversidad que garantizara una variedad de servicios ecológicos vitales para la seguridad alimentaria, la conservación del recurso natural, una mejor viabilidad económica, el mejoramiento del microclima, la conservación cultural y el realce de la comunidad local sin descartar una más adecuada articulación entre la oferta productiva y la demanda del mercado. (Salgado y Urbano, 2018, pp. 30-31)

El objetivo general trazado para el acompañamiento organizativo fue el de lograr que grupos de campesinos y campesinas se organizaran y participaran activamente en sus comunidades a nivel político, social y económico. Para ello, se buscó que las organizaciones campesinas conocieran y aplicaran experiencias de otras organizaciones, que nuevos grupos o familias se motivaran y participaran en el proceso organizativo o productivo propuesto por CDS, que las asociaciones avanzaran en el proceso de sensibilización sobre la situación de la mujer en la región y promovieran su autorrealización y valoración humana.

Para el cumplimiento de estos objetivos se organizaron programas de alfabetización contando con la participación voluntaria de las comunidades interesadas; se brindó acompañamiento, capacitación organizativa y administrativa a organizaciones que tenían proyectos productivos o de transformación agroindustrial y se inició el programa Campo Joven con el objetivo principal de ofrecer a las jóvenes y a los jóvenes campesinos de la región la oportunidad de tener una formación integral y capacitación en los aspectos de producción agrícola, pecuaria y piscícola sostenible; de organización comunitaria, de administración contable y de formación ética, con el propósito de ayudarles a participar en el desarrollo rural regional y a consolidar su proyección a la comunidad. (Salgado y Urbano, 2018, p. 32)

11.3. Percepciones subalternas del conflicto social y armado

A partir de las conversaciones con las organizaciones populares de Montes de María, y de sus agendas políticas, podemos inferir que la configuración del conflicto social y armado y los conflictos territoriales se desarrollan en función de los elementos que se plantean a continuación.

Primero, como lo hemos señalado, Montes de María tiene una riqueza en términos ecosistémicos que ha sido objeto de disputa de manera histórica, en un pulso entre las clases dominantes y las clases populares. En esta subregión se realizó la primera reforma agraria contemporánea del país y se transformó el Canal del Dique como una de los principales activos de la región en términos económicos, clave en términos acuíferos ya que es un corredor artificial del río Magdalena que permite la conexión con la ciudad de Cartagena, el puerto más importante del país.

Segundo. La conformación orográfica y climática de la Serranía de San Jacinto hace que esta subregión tenga uno de los suelos más fértiles de todo el país, que se adapta a cultivos de diferente tipo, sumado a la riqueza en términos de cuerpos de agua. En particular, se destaca la calidad de la tierra en la zona del municipio de Maríalabaja, que se sitúa al lado de las sabanas del departamento de Sucre. Por tanto, de manera histórica se ha presentado un conflicto por el control de las tierras y la vocación del suelo.

Tercero. La cercanía de Montes de María con la ciudad de Cartagena permitió que, en la época de la colonia, las personas esclavas provenientes del continente africano, buscaran la libertad en las montañas de la Serranía de San Jacinto. De esta manera, la subregión se configuró como un territorio de refugio y de resistencia social que aún perdura hoy en día en los pueblos palenqueros. En esta dirección, la historia de las luchas sociales, en particular del campesinado, se configura en el SXIX. Por lo tanto, el territorio montemariano se caracteriza por la historicidad de sus luchas

Cuarto. En términos de narcotráfico y cultivos de uso ilícito, a diferencia del Putumayo, esta subregión no ha sido el epicentro de este tipo de cultivos. Ha sido más valorada por los grupos ilegales como una zona estratégica que conecta oriente y occidente y la Región Caribe con el centro del país. Además, cuenta con un importante litoral en el mar Caribe, en donde se encuentra el Golfo de Morrosquillo.

Quinto. En cuanto al sistema productivo, Montes de María ha sido el sostén alimentario de buena parte de la región, gracias a la economía campesina. No obstante, la riqueza de sus suelos

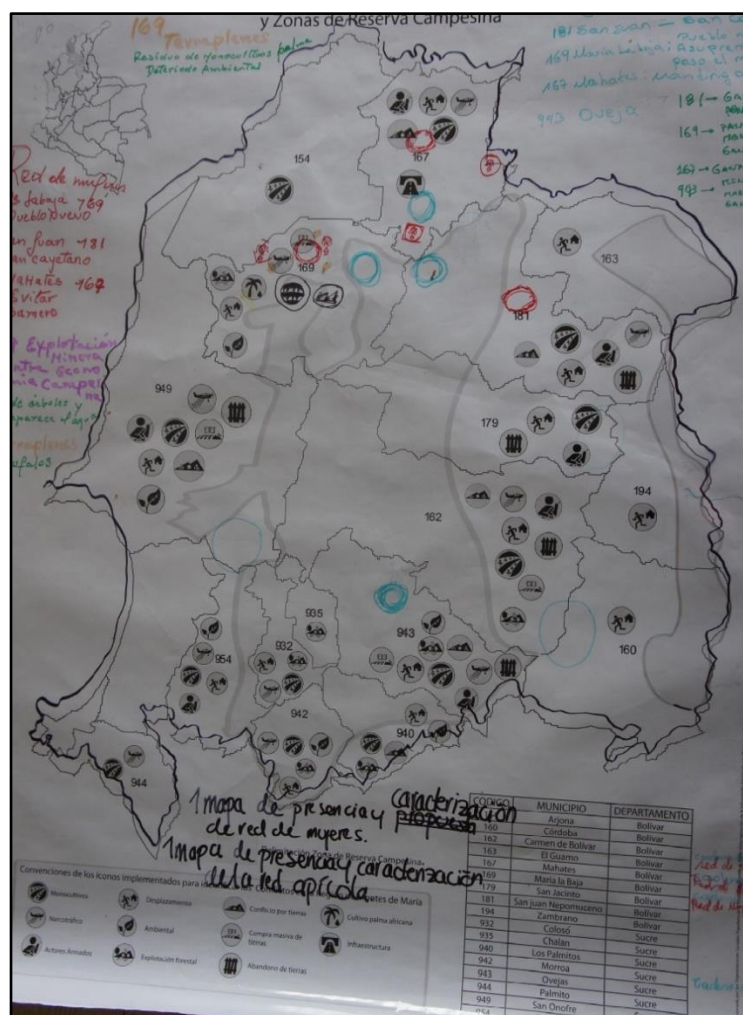
ha permitido que se instalaran diferentes monocultivos a lo largo de la historia, como la caña de azúcar, el algodón, cultivos maderables, palma de aceite, arroz riego, cultivos estratégicos para las economías de exportación, así como la conformación de la hacienda ganadera para la implantación de la ganadería extensiva.

Sexto. En cuanto a indicadores sociales, si bien es cierto que existen profundas desigualdades en el territorio montemariano, la consolidación relativa de la economía campesina ha permitido que las comunidades dispongan de un sostén económico y alimentario. Situación que la diferencia de otros departamentos como Chocó o el mismo Putumayo. En Montes de María no se han producido olas de colonización como sí se han dado en este último departamento.

Séptimo. La Serranía de San Jacinto no es una zona aislada de los centros urbanos, se encuentra conectada con Barranquilla, Sincelejo y Santa Marta. Su ubicación ha generado que algunos de sus municipios se constituyan en ciudades dormitorio, donde sus habitantes se desplazan para trabajar a estas ciudades. Empero, una gran parte de la población se dedica a actividades agrícolas.

Este conjunto de factores representa unas particularidades históricas y espaciales, que configuran de una manera diferenciada los conflictos presentes en la subregión. Por lo tanto, la manera en la que se expresa tanto el conflicto social armado y los conflictos territoriales no es igual para otras regiones del país, como puede ser en el suroccidente colombiano, en particular, en el departamento del Putumayo. No obstante, sí podemos encontrar similitudes en los ejes sobre los cuales se construyen estas conflictividades, como puede ser el narcotráfico, la presencia de actores armados como guerrilla y paramilitares, los proyectos extractivos, las políticas contrainsurgentes y del control social del territorio, entre otros.

Figura 22. Cartografía participativa, conflictos socio-territoriales Montes de María



Fuente: Adaptado de *Informe regional de trabajo. Procesos sociales populares en los Montes de María* por Observatorio Nacional de Paz, 2013.

En un ejercicio de cartografía participativa para la identificación de los conflictos socio-territoriales, realizado con las organizaciones sociales populares de Montes de María (Figura 22), en el marco del Observatorio Nacional de Paz, se localizaron en el territorio un total de doce vectores de conflictividad, entre los que se encuentran: monocultivos, desplazamiento, narcotráfico, actores armados, conflictos ambientales, explotación forestal, conflicto por tierras, compra masiva de tierras, abandono de tierras, cultivo de palma, infraestructura. Según lo señalado por las organizaciones, estos vectores de conflictividad produjeron procesos de desterritorialización y una reconfiguración espacial de la subregión. Tales procesos implicaron acciones coercitivas en contra de las comunidades.

Tabla 9. Conflictos socio-territoriales por municipio. Montes de María.

MUNICIPIO	CONFLICTOS SOCIO-TERRITORIALES
Departamento de Bolívar	
El Carmen de Bolívar	Narcotráfico, actores armados, monocultivos, abandono de tierras, desplazamiento, conflicto por tierras, explotación forestal.
Córdoba	Desplazamiento.
El Guamo	Desplazamiento.
Maríalabaja	Narcotráfico, monocultivos, desplazamiento, conflictos ambientales, compra masiva de tierras, palma de aceite, explotación forestal, actores armados.
San Jacinto	Desplazamiento, monocultivos, actores armados, abandono de tierras.
San Juan de Nepomuceno	Monocultivo, desplazamiento, actores armados, narcotráfico, abandono de tierras, conflicto por tierras.
Zambrano	Desplazamiento.
Departamento de Sucre	
Chalan	Explotación forestal.
Colosó	Desplazamiento, actores armados, monocultivos, narcotráfico.
Los Palmitos	Desplazamiento, conflictos ambientales, explotación forestal, monocultivos, conflictos por tierras.
Morroa	Narcotráfico, monocultivos, conflictos ambientales, explotación forestal, desplazamiento.
Ovejas	Conflictos ambientales, explotación forestal, narcotráfico, abandono de tierras, monocultivos, actores armados, conflicto por tierras, compra masiva de tierras.
San Antonio de los Palmitos	Monocultivos, narcotráfico.
San Onofre	Monocultivos, narcotráfico, compra masiva de tierras, actores armados, desplazamiento, conflictos ambientales, abandono de tierras.
Tolú Viejo	Conflictos ambientales, desplazamiento, actores armados, monocultivos, narcotráfico.

Fuente: Elaboración propia a partir del ejercicio de cartografía participativa del Observatorio Nacional de Paz, 2013.

Si observamos la Tabla 9, podemos inferir que un elemento transversal de la conflictividad es la disputa por el control de la tierra y el territorio, la ocupación y la vocación del uso del suelo. En esta dirección apuntan las organizaciones que confluyeron en la Mesa Intersectorial y de Concertación de Montes de María (2014, 2017).

Esto muestra un primer gran conflicto en Montes de María: la mayoría de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes, que tenemos como principal actividad la

producción alimentaria, no somos propietarias de las tierras que trabajamos y la mayoría de familias que tienen propiedad no alcanzan la Unidad Agrícola Familiar (UAF) estimada para la región, que según el INCODER (2008) es de 40 hectáreas.

A esta realidad, se suma la implementación de modelos de desarrollo rural y agrario que afectan negativamente la producción agroalimentaria y que está determinando los usos predominantes de la tierra [...] (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2017, p. 344)

Esta disputa entre las clases dominantes y las clases populares es histórica y ha sido vertebrada por el uso de la violencia para dirimir los conflictos. Ahora bien, según parecen estimar las organizaciones, el conflicto armado ha sido utilizado para la implantación de diferentes modelos productivos, que han apuntalado el *statu quo* en la subregión. Además, la retórica dominante que se ha construido alrededor del conflicto armado lo vincula con las protestas sociales, los movimientos populares y las expresiones de oposición política, las cuales han sido estigmatizadas y criminalizadas, desvalorizando sus propuestas y proyectos societales. De esta manera, las élites políticas y económicas han encontrado en la retórica del conflicto argumentos para obstaculizar los cambios democráticos que habrían permitido el ejercicio pleno de los derechos de las comunidades o la ampliación de los mismos. En esta dirección apuntaba la MIC en su plan alternativo de ordenamiento territorial, construido a partir de una propuesta de reconocimiento político y social del campesinado colombiano, sobre la cual volveremos en el último capítulo.

Para finalizar este apartado, señalar que para el análisis hemos agrupado los vectores de conflictos señalados por las organizaciones sociales populares. Además, no hemos incluido un apartado específico para abordar la ganadería extensiva debido a que para el periodo estudiado priorizamos otros conflictos. No obstante, la ganadería aparece como un elemento transversal a lo largo de todo la investigación.

CAPÍTULO 12. Control social y militar del territorio: Estado, guerrilla, paramilitares

En el presente capítulo abordaremos las principales dinámicas del conflicto armado en la subregión de Montes de María, como uno de los ejes de conflictividad socio-territorial identificados por las organizaciones sociales populares. La guerra, según es interpretado y leído por las voces populares, debe ser entendida en el marco de las otras conflictividades que se expresan en la subregión, con profundas raíces históricas en la desigualdad y la exclusión social. Al igual que en el caso del Putumayo, las organizaciones consideran que la disputa por el control militar, social y estratégico del territorio ejercido tanto por el Estado y por los actores armados ilegales, vertebró las principales problemáticas de la región.

Ahora bien, el conflicto social y armado en Montes de María se puede explicar en razón a un conjunto de factores que han vertebrado la configuración social, política, económica y cultural de la subregión, sobre los cuales existe un cierto consenso en los investigadores que han trabajado esta zona del país.

Primero. El conflicto por la concentración de la tierra y por la vocación del uso del suelo, que se sitúa desde principios del siglo XX, con la creación de las primeras ligas campesinas y de las organizaciones que reivindicaban la lucha por la tierra (Fals Borda, 2002 [1986]). A finales de la década de los sesenta, se conforma una de las principales organizaciones campesinas del país, y esto da un impulso a las luchas del campesinado montemariano, que desarrolla repertorios de confrontación directa con el Estado y con los terratenientes. Sobre este punto volveremos más adelante.

Segundo. Para el investigador, Amaranto Daniels, la subregión se configura como una sociedad determinada por una “modernidad tardía” (Giddens, 1984, 1999), que se caracteriza por una élite conservadora, señorial y poco proclive al cambio. Esta élite política y económica desarrolló un sistema político-administrativo fundado en un “gamonalismo rural”, asociado con la estructura de la propiedad de la tierra y con el poder de los terratenientes y de los hacendados ganaderos (Daniels, Menco, Jennifer, y Manuel, 2011, p. 5), lo que produjo una exclusión sistémica de las clases populares, que puede ser explicado también por la conformación de un colonialismo interno (González Casanova, 1963, 1965, 2006).

Tercero. La economía de Montes de María se ha caracterizado por modelos de agro-negocio, sustentados en monocultivos como la caña, el arroz, el tabaco y de manera reciente la

palma de aceite, por la ganadería extensiva y por una economía campesina, basada en una agricultura familiar y de minifundio que, como hemos señalado, ha llevado a la subregión a convertirse en el “*distrito agrícola del Caribe*”. En los últimos diez años, desde el gobierno central se ha tratado de alterar la vocación del uso del suelo hacia la explotación minero-energética, un enfoque de desarrollo que ha profundizado los conflictos ya existentes en la región.

Cuarto. Este último elemento se inscribe en la configuración misma del Estado nacional relacionado con la integración territorial, la centralización política y la construcción de una comunidad política imaginada. Estos elementos tienen como trasfondo un problema agrario que no ha sido resuelto (González, 2014). De esta manera, en Montes de María se observa una conformación fragmentada del Estado, caracterizado por una compleja relación entre las políticas desde el centro del país y los intereses de las clases dominantes en la región. De manera más reciente, el fenómeno del paramilitarismo y el narcotráfico ha permeado las estructuras políticas locales, generando una “reconfiguración cooptada del Estado”, en los términos señalados por Garay y Salcedo (2013)⁴²⁸.

12.1. Las políticas de consolidación del territorio

La subregión de Montes de María ha sido tradicionalmente una zona de disputa entre la insurgencia, en particular las FARC, el ELN y en su momento el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)⁴²⁹, los paramilitares, la Fuerza Pública, y un conjunto de actores económicos (el grupo Argos, las empresas de gas como Hocol, los palmeros y los terratenientes). Esta disputa se debe a una serie de factores que la sitúan como una zona estratégica para los proyectos que

⁴²⁸ La “reconfiguración cooptada del Estado”, término acuñado por Garay y Salcedo para referirse a una forma de captura del Estado que tiene implicaciones mucho más complejas y profundas. En este sentido, los autores lo definen de la siguiente manera,

la acción de agentes sociales legales e ilegales que, mediante prácticas ilegales o legales, pero ilegítimas, buscan sistemáticamente modificar desde dentro el régimen e influir en la formulación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego social y de las políticas públicas. (Garay y Salcedo, 2012, p. 36)

Este fenómeno se presenta en contextos con altos niveles de corrupción y con una importante debilidad institucional. En el caso de la Costa Caribe este fenómeno se produjo por los vínculos de los grupos paramilitares, en particular, el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

⁴²⁹ El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue una facción disidente del ELN en la subregión de Montes de María. La ruptura se produjo después del III Congreso del ELN, realizado en 1996. En el año 2007, entregó las armas para su desmovilización. El debilitamiento de la organización se produjo por la presión de la Fuerzas Militares y los enfrentamientos con la guerrilla de las FARC. El ERP también tuvo presencia en la región del Eje Cafetero y en el Tolima.

representan cada uno de estos actores, entre los que se encuentran: la localización geográfica que incluye corredores naturales para el movimiento de los grupos armados y de recursos asociados al narcotráfico, la riqueza en términos ecosistémicos y las tierras fértiles, el acceso a proyectos económicos para la financiación de la guerra e infraestructuras viales como la Troncal de Occidente que conecta de sur a norte la zona oeste del país. Estos elementos se inscriben en las dinámicas señaladas al inicio del capítulo.

De esta manera, el enfrentamiento bélico entre los diferentes actores armados que tienen presencia en la región ha transitado de la búsqueda del control del territorio al control estratégico del mismo (Pécaut, 2004). Como se señala en la Segunda Parte de la tesis, los actores irregulares se han centrado en la consecución de las metas políticas, ante la imposibilidad de asegurar un dominio completo y efectivo del territorio a través de mecanismos coercitivos, por consiguiente, sin el apoyo completo de la población. Lo que no significa que no se haya ejercido un control parcial de determinadas zonas. Por lo tanto, lo que se busca es conseguir y mantener las ventajas relacionadas con las lógicas de la guerra, por ejemplo, el control de determinadas posiciones estratégicas (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003).

En este sentido, el control estratégico es explicado por uno de los líderes de Maríalabaja, que también apunta a los procesos de desterritorialización que se dieron por la presencia de actores armados y el intento de reterritorialización realizado por parte de las comunidades:

Esas parcelas nunca fueron tomadas por ellos [Bloque Héroes de Montes de María perteneciente a las antiguas AUC]. Ellos las tenían como un sitio estratégico, cuando se desmovilizaron, eso nos benefició a nosotros porque la gente que estaba ahí en el campamento salió y entonces nosotros tuvimos un retorno laboral por nuestra propia iniciativa. Nosotros íbamos, trabajábamos, y en la tarde nos veníamos, pero las tierras perdieron toda mecanización, toda productividad que tenían, eso quedó... [el entrevistado guardó silencio por un momento largo] Entonces, nosotros empezamos como queriendo hacer las cosas por iniciativa propia a un retorno laboral pasivo, o sea, íbamos, hacíamos de a poquito, un pedacito de cultivo porque no nos podíamos extender por múltiples cosas. Primero, no tenemos los recursos suficientes. Segundo, no teníamos la confianza de que de pronto fuera a pasar lo mismo, que íbamos a perder todo otra vez, pero teníamos confianza en la comunidad, una comunidad que era autosuficiente⁴³⁰. (E3, Líder Asociación Campesina de Pueblo Nuevo, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

⁴³⁰ El temor expresado por este líder ante el regreso de la violencia en Montes de María, se transformó en una amenaza real. En el año 2019, los campesinos reclamantes de tierra denunciaron la aparición de actores armados en sus territorios. El regreso de las amenazas y la intimidación tienen el propósito de obstaculizar los procesos de restitución de tierras. Las denuncias apuntan al exjefe del Bloque Héroes de Montes de María, Juancho Dique, que después de

Para poner en contexto lo planteado, en los años noventa del siglo XX, se produjo una agudización del conflicto armado en Montes de María, caracterizada por el aumento de la actividad de las guerrillas, que superó la iniciativa militar de la Fuerza Pública⁴³¹. En la segunda mitad de esta década, el Estado inició una fuerte ofensiva militar para recuperar el control territorial, lo que alteró la correlación de fuerzas entre los grupos armados regulares e irregulares (Echandía y Bechara, 2006, p. 49). Por lo tanto, la violencia en contra de la población civil se incrementó, las violaciones a los DDHH y al DIH producto del enfrentamiento entre los actores armados fueron constantes en este periodo, los cuales se explican por la ofensiva paramilitar para la consolidación de su dominio, en una zona de influencia tradicional de las guerrillas. Evidencia de esta disputa es la utilización de las masacres como recurso habitual para el control parcial del territorio o de zonas estratégicas (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003).

Esta situación es problematizada por una de las lideresas entrevistadas de la siguiente manera:

Soy desplazada de un corregimiento de Carmen de Bolívar. En relación a otros compañeros, nosotros nos desplazamos pronto, en el año 2000. La situación de orden público ya era muy difícil desde 1995, el conflicto en esta zona estaba caliente. Nosotros dejamos de ir al campo a cultivar, nos daba miedo, se escuchaban enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. Antes no se escuchaban cosas tan terribles. La gente pensaba que los campesinos de la zona éramos guerrilleros, porque las FARC tuvo presencia durante muchos años. La situación empeoró cuando el Ejército comenzó a tener más presencia en la zona, a la guerrilla la fueron desplazando, obligándola a retirarse, ahí se fueron instalando otros actores. Mi papá me dijo que me fuera, que era muy peligroso estar

cumplir una cadena de ocho años de prisión en virtud de la Ley de Justicia y Paz, recobró la libertad en el 2015. En una investigación realizada por El Tiempo, una líder de la región señalaba:

Estamos entre la espada y la pared. Queremos que nos visibilicen para que haya seguridad y presencia del Estado, pero al mismo tiempo es malo porque eso nos pone más en la mira de los criminales. Hemos vivido muchas historias amargas. (El Tiempo, 2019)

Las amenazas también están dirigidas a personas que lograron la restitución de sus tierras, a líderes sociales y comunitarios y a defensores de derechos humanos (El Tiempo, 2019).

⁴³¹ Según el informe para Montes de María, elaborado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario del 2003,

en el periodo de 1990 al 2002, el 69% de las acciones armadas fueron realizadas por las Farc, 14% por el ELN, 9% por los grupos de autodefensa, 2% por el ERP y 6% por grupos guerrilleros que no fueron identificados. (p. 8)

Según el mismo informe, el 55% de las 585 acciones registradas en este periodo, tuvieron lugar en los municipios de Bolívar que se encuentran localizados en Montes de María, en particular, en El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Zambrano y Maríalabaja. Los municipios más afectados en Sucre fueron sobresalen Ovejas y San Onofre. Por otra parte, en ese mismo periodo se registraron 2.207 homicidios, un promedio de 169 homicidios por año, y entre 1996 y 2001 las AUC cometieron 17 masacres.

en el campo. (E6. Lideresa Junta de Acción Comunal Barrio Los Ángeles, El Carmen de Bolívar, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

La ofensiva del Estado para el control social y militar de la Serranía de San Jacinto, se materializó con la declaración del gobierno de Álvaro Uribe como Zona de Rehabilitación y Consolidación del Orden Público (ZRC), en el marco del estado de conmoción interior, dispuesto por el presidente a su llegada a la Casa de Nariño. La declaración de las ZRC se realizó a través del Decreto 2002 del 2002. Esta estrategia de control social y militar del territorio se debe comprender en la lógica de la Política de Seguridad Democrática, en la que se planteaba como prioridad la restauración del poder del Estado en las zonas de presencia guerrillera, a través de tres fases: recuperación, mantenimiento y consolidación.

En esta dirección, las ZRC se definieron de la siguiente manera:

El área geográfica afectada por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población civil, resulte necesaria la aplicación de una o más de las medidas excepcionales de que tratan los siguientes artículos, sin perjuicio de la aplicación de las demás medidas dictadas con base en la conmoción interior. (Decreto 2002, 2002)

Posteriormente, en el Decreto 2929 de 2002, se delimitó el área geográfica de la ZRC a los siguientes municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre: Mahates, María La Baja, Calamar, El Guamo, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, Carmen de Bolívar, Córdoba, Zambrano, Arroyohondo, San Onofre, Colosó, Chalán, Ovejas, Tolú Viejo, Sincé, Galeras, El Roble, San Pedro, Corozal, Sincelejo, San Juan de Betulia, Los Palmitos, Morroa, Buenavista y San Benito. En esta selección de zonas a intervenir se encontraban los 15 municipios que hacen parte de Montes de María.

En el Decreto 2002 se estableció un control operacional de todos los efectivos de la Fuerza Pública situados en el territorio definido por la ZRC bajo el mando de un Comandante Militar, que era designado por el Presidente de la República. El derecho a la circulación y a la residencia se podría restringir a través de la aplicación de diferentes figuras como “los toques de queda, los retenes militares, los indicativos especiales para la movilización, permisos especiales para el libre tránsito, circulación o permanencia restringida o prohibida de personas o vehículos en horas y lugares determinados” (Decreto 2002, 2002). Además, se preveía que el Comandante Militar, en el caso de que se declarara una situación excepcional, podría solicitar a la primera autoridad

administrativa del lugar correspondiente permisos para garantizar el tránsito libre de personas, de vehículos o de medios de transporte (terrestre, fluvial, marítimo y aéreo). Estos permisos eran de carácter “temporal, personal e intransferible y no podrán ser retenidos por la Fuerza Pública” (Decreto 2002, 2002).

Por otra parte, la restricción de movilidad de la población también incluía la información sobre los desplazamientos. Es así como los gobernadores de los departamentos estaban facultados para adoptar medidas que implicaran la obligatoriedad, sobre determinadas personas, de comunicar los desplazamientos ante la primera autoridad civil del municipio o de los comandantes de Policía del lugar. El incumplimiento de la norma implicaba una sanción de hasta 24 horas de retención. A estas medidas, se añadieron otras como la facultad de la Fuerza Pública para revisar la carga que fuera transportada por cualquier medio, así como la detención preventiva de conductores que ingresaran a la ZRC. Estas medidas se podían tomar cuando existiera un indicio que pudiera inferir la pertenencia o auxilio a una organización delictiva. Así son percibidas por una de las lideresas entrevistadas:

Mi papá me decía “Uno ya no se podía mover libremente por el campo”. Si no eran los unos, eran los otros. La policía y el ejército acosaban a los campesinos, nos vigilaban como si nosotros estuviéramos cometiendo algún delito o tuviéramos alguna relación con la guerrilla. Si uno se quería mover a alguna parte o transportar alguna carga, nos paraban para interrogarnos, “que a dónde lleva esto...” (E6, Lideresa Junta de Acción Comunal Barrio Los Ángeles, El Carmen de Bolívar, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

La ZRC implicó la militarización de la subregión, a través de la presencia continua de la Infantería de Marina, que impulsó programas como Infantes de mi Pueblo, la Red de Cooperantes, los Soldados Campesinos y propaganda variada invitando a la desmovilización de los grupos armados. Este conjunto de iniciativas conformó la estrategia de recuperación del territorio⁴³² (Fundación Ideas para la Paz, 2011, p. 17). Además, se crearon tres puestos de Mando de la Armada Nacional en los municipios de San Jacinto (2003), el Carmen de Bolívar (2005) y Ovejas

⁴³² La labor de inteligencia liderada por la Infantería de Marina para la desarticulación de las FARC contó en repetidas ocasiones con la participación de informantes que accedieron a importantes recompensas por datos que llevaron a la captura o muerte de mandos guerrilleros y sirvieron para la desarticulación de los frentes 35 y 36. Ejemplo de ello, es la operación “Alcatraz” del Ministerio de Defensa, realizada en 2007, que entregó a dos informantes 1.700 millones de pesos por la localización del campamento de las FARC en el que se encontraba Martín Caballero, que resultó muerto a causa de las operaciones militares (Fundación Ideas para la Paz, 2011, p. 17).

(2008); entraron en funcionamiento cinco escuadrones contraguerrilla; y se activó el Comando Conjunto del Caribe en el año 2005⁴³³ (Bocchi, 2011, p. 71).

Por lo tanto, se instauró en Montes de María de forma implícita un estado de excepción permanente, a través de una serie de dispositivos y técnicas de control gubernamental sobre la población que limitaron gravemente sus derechos. Esta racionalidad política se sostuvo en una estrategia del miedo, derivada de la represión permanente y de la “sospecha” que recaía sobre aquellas personas que podrían ser consideradas “peligrosas” para el mantenimiento del orden.

Por consiguiente, el gobierno propició una reconfiguración social en los territorios considerados conflictivos, a través de la criminalización de determinadas conductas y la imposición de normas de relacionamiento, que, sin duda, alteraron las experiencias espaciales cotidianas. Al respecto, los líderes y lideresas entrevistados perciben de la siguiente manera estas medidas de control de la población que se adoptaron en la subregión:

Mi hermano se quedó en el campo, en la zona rural de Carmen de Bolívar. Él iba y trabajaba la tierra y se devolvía por la noche a su casa. Yo le hice un llamado de atención. Un amigo me dijo que en el camino le hicieron una parada, unos militares, para preguntarle qué hacía, a dónde se dirigía, le preguntaron de todo insistentemente... Nosotros no le debemos nada a nadie, somos campesinos que trabajamos la tierra, nosotros no tenemos armas, somos personas civiles. Así que yo le dije a mi hermano que no volviera al campo. Lo máspreciado que tenemos es la vida, que nos la regaló Dios. Yo no estaba dispuesta a perderlo de esa manera. Al final “vendimos” [la entrevistada hace una señal indicando ironía] la tierra a un cachaco que estaba comprando terrenos por esa zona. Yo quería averiguar quién era, pero mi hermano no me dejó. (E6. Lideresa Junta de Acción Comunal Barrio Los Ángeles, El Carmen de Bolívar, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

El control del ejército en la zona [corregimiento de Pueblo Nuevo, Maríalabaja] se empieza a dar en los primeros años del dos mil. Por ejemplo, la guerrilla tuvo una incursión en la comunidad. Una mañana nosotros vimos que bajaron como 100 personas e hicieron un paro en la carretera, pararon como tres, cuatro mulas, las revisaron, con esas vainas que ellos tienen y... eso fue como una operación relámpago, no demoraron nada. Ellos pasaron, pararon las mulas, le hicieron unos disparos para espicharle las llantas, pintaron sus logotipos. Las vainas que ellos pintan en el carro y de una vez desaparecieron, en seguida.

⁴³³ Sin embargo, a pesar del despliegue militar realizado en el territorio, las acciones violentas no disminuyeron drásticamente como se esperaba

Entre 2003 y 2007 se registraron 78.131 personas víctimas de desplazamiento forzado solo en el departamento de Bolívar y los homicidios aumentaron de 2.430 a 2.514, mientras que en Sucre tuvieron una leve disminución, pasando de 1.161 a 919 en el mismo periodo (Fundación Ideas para la Paz, 2011, p. 17). Durante el período 2004-2007, se presentaron un total de 110 enfrentamientos armados en la región. En relación a inicios del dos mil, se produjo una importante reducción de las masacres, que se puede relacionar con el proceso de desmovilización de las AUC y un cambio en su estrategia de actuación (Daniels & Múnera, 2011).

Pasó un rato, como a las dos horas llegó el Ejército, preguntando por la guerrilla, qué no sé qué. Nosotros no le dijimos mentiras, la guerrilla bajó por ahí y por ahí subió. El Ejército hizo una reunión con nosotros, que la guerrilla qué había hecho, por qué nosotros no denunciábamos, que nosotros de una u otra forma les colaborábamos a ellos porque si los veíamos, teníamos que decirle al Ejército, cosas que... [hace un gesto de desaprobación] Nosotros somos campesinos. Hubo personas en la comunidad que les dijeron que bueno, que ustedes qué están buscando si les estábamos diciendo dónde estaban, allá, ¡ellos están allá! Pero ellos no iban, yo veía que había como un temor de ellos, sí, ellos sabían a qué iban. (E3, Líder Asociación Campesina de Pueblo Nuevo, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

En el momento en que la Policía y el Ejército llegan al territorio, las cosas se pusieron más difíciles. En vez de mejorar la situación, parece que la guerra se intensificó y nosotros, como siempre, nos quedamos en el medio de las balas... Los controles militares, los retenes de carretera. A la gente le pedían que se identificara, qué era lo que uno hacía, que si era colaborador de la guerrilla. Pero sospechaban de uno, sin estar haciendo nada. En Montes de María la gente es campesina y se dedicaba a cultivar la tierra. En ese tiempo uno no sabía en quién confiar. La Policía y el Ejército estaban compinchados con los otros [paramilitares]. Denunciar cualquier cosa era peor. Uno ya no se podía mover libremente por el campo. Vivíamos todo el tiempo con miedo. (E4, Líder OPD Montes de María, comunicación personal, 03 de diciembre de 2012)

Hay algo que no te he dicho, esto ha ocurrido de manera frecuente en Maríalabaja. Bueno... y en toda la zona de Montes de María. En el territorio se ha incrementado la presencia de la SIJIN [Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional de Colombia]. Entonces, son hombres vestidos de civiles con radios grandes y se dejan ver, ¡con armas y se dejan ver!

Entonces, la población está siempre vigilada, la gente está vigilada, están en el mismo modus operandi de los paras. También son arbitrarios, se meten en cosas que no les corresponde. Hay varias denuncias por violación a los derechos humanos...

Ellos se identifican como de la SIJIN. Al principio no, pero ya todo el mundo los conoce, hay una oficina en la oficina de la SIJIN en María la Baja y pues son muy jóvenes. Los agentes de la SIJIN son muy jóvenes, son muchachos que pueden alcanzar veinte y veintiún años, son demasiados jóvenes y casi adolescentes y también es peligroso, en el sentido de que un joven con un arma. Tampoco de aquí, son de otros sitios. En el 2002 hubo demasiada detención. La mayoría fueron detenciones arbitrarias y todos se generan por este tema de la red de informantes. Pues es una cosa que no es bien llevada o tampoco cualquiera puede decir “ahí voy”. (E7, Lideresa del Comité de Pescadores de Puerto Santander, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

En el siguiente testimonio se aprecia cómo la presencia de la Fuerza Pública en el territorio también alteró los usos de los espacios comunitarios y cambió el sentido dado a los mismos por la

población. En el relato se aprecia cómo la presencia militar puso en riesgo a las comunidades, debido a la utilización de zonas civiles para el refugio o permanencia de este actor armado.

Sobre los usos de los espacios comunitarios, por ejemplo, el espacio donde estamos. Creo que una vez la casa de palma que había aquí se cayó porque el Ejército se puso a guindar hamacas. También la cerca del colegio porque ellos se ponían a saltar de un lado al otro dañando así la cerca del colegio. Un espacio donde iban niños a estudiar a veces se encontraban balas por ahí tiradas en el suelo. Y también hubo un enfrentamiento ahí mismo en el colegio, afortunadamente en ese momento no se había dado clase. En muchas ocasiones los docentes daban su clase teniendo al ejército ahí, ya que ellos cogían ese lugar como centro de refugio. Ahí era donde ellos siempre se quedaban. Entonces ahí los docentes daban sus clases. Es más, yo creo que nunca ellos se hospedaron en otro lugar que no fuese ahí. Fue algunas poquitas veces que hacían las hamacas en las casas de palma, algunas veces no se daba clase porque las cosas se ponían peor. (Líder afrocolombiano, corregimiento de San Cristóbal, municipio de San Jacinto, como se citó en Salgado, 2017, p. 27)

En los anteriores relatos se evidencia el control social y militar que ejercía la Fuerza Pública sobre la población y la desconfianza hacia las instituciones. La actitud, tanto del ejército como de la policía hacia los habitantes de Montes de María, indicaba una asociación implícita entre la acción insurgente y la población civil, comportamiento similar que también se presenció en el departamento del Putumayo. De esta manera, se consideró a los civiles como subsidiarios o colaboradores de la guerrilla, generando procesos de estigmatización y criminalización, que llevaron a una violencia material y simbólica sobre las comunidades, que se encontraban en un estado de absoluta indefensión.

Según la investigación, “La masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra” (2009), el “leer la presencia armada de un actor exclusivamente en clave de identificación, simpatía, legitimación y lealtad de la población es una simplificación interesada o, más aun, perversa, de las dinámicas de la guerra” (p.18). Por consiguiente, el solo hecho de compartir el mismo territorio que las guerrillas, exponía a la población a retaliaciones por parte de otros grupos armados. En este sentido,

La población refiere que –además de los problemas que conlleva la mayor presencia de batallones militares, sobre todo en las mujeres jóvenes– la Zona de Rehabilitación y Consolidación tuvo fuertes impactos psicosociales: 1) el empoderamiento (el censo de población llevado a cabo por los militares) llevaba consigo la sospecha que cualquier persona de la región podía hacer parte de la guerrilla; 2) la red de informantes, que reciben retribución para señalar a los supuestos autores de delitos, quebró la confianza entre la población y las instituciones y desarticuló el tejido social. (Bocchi, 2011, p. 71)

Ahora bien, la Política de Consolidación Democrática desplegada en el segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe, bajo la batuta del Ministerio de Defensa liderado por Juan Manuel Santos, se enfocó hacia la consolidación del control territorial y el Estado social de derecho, a través de la alineación de “los esfuerzos militar y policial, con el esfuerzo antinarcóticos y los esfuerzos en el área social, de justicia, desarrollo económico y fortalecimiento institucional del Estado” (Ministerio de Defensa, 2007, p. 32). Esta alineación de esfuerzos comprendía tres fases: controlar, estabilizar y consolidar. Las instituciones que estuvieron encargadas de este proceso fueron el Ministerio de Defensa y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional⁴³⁴.

Esta estrategia se desarrolló bajo Doctrina de Acción Integral (DAI) que consistía en un conjunto de principios y protocolos bajos los cuales se debía orientar la acción de la Fuerza Pública y las políticas sociales del Estado de manera coordinada. El Ministro de Defensa describía la importancia de la DAI de la siguiente manera:

La Escuela Superior de Guerra ha sido la fuente de importantes doctrinas militares que, adaptadas a nuestro entorno, han hecho posibles en estos años los más contundentes golpes de nuestras Fuerzas Armadas al narcotráfico y el terrorismo, y la recuperación del control de la inmensa mayoría del territorio nacional.

Una de esas doctrinas ha sido la llamada Doctrina de Acción Integral, a través de la cual –particularmente en la segunda fase de la Política de Seguridad Democrática, a la que denominamos Política de Consolidación de la Seguridad Democrática– hemos hecho énfasis en el control social del territorio.

¿Qué quiero decir con control social del territorio? Significa el ingreso o retorno de las instituciones del Estado a las zonas afectadas por la violencia para satisfacer las necesidades básicas de la población, como salud, educación y servicios públicos, además de justicia, cultura, recreación y obras de infraestructura.

Estamos convencidos de que la lucha antiterrorista debe acompañarse –si se quiere que sus logros sean permanentes– por un esfuerzo similar de consolidación social.

La Doctrina de Acción Integral proporciona a los miembros de la Fuerza Pública los principios y protocolos necesarios para establecer una adecuada coordinación con los representantes de las demás instituciones del Estado, autoridades locales, agencias de cooperación internacional, ONGs, organizaciones civiles y el sector privado. (Bocchi, 2011, pp. 53-54)

⁴³⁴ La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional fue creada durante el gobierno de Álvaro Uribe y su objetivo central eran coordinar los programas dirigidos a la población en condiciones de vulnerabilidad afectada por la pobreza, la violencia y el narcotráfico, entre los que se encontraban: Familias en Acción, Atención a Población Desplazada, Infraestructura, Red de Seguridad Alimentaria, Víctimas de la Violencia, Paz y Desarrollo y Gestión contra Cultivos Ilícitos, la Estrategia Juntos.

En el marco de la DAI, en el año 2007 se conformó para Montes de María el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI)⁴³⁵. Los CCAI se crearon como espacios de coordinación interagencial para las zonas más afectadas por el conflicto armado, con el propósito de afianzar la legitimidad, la gobernabilidad y la presencia del Estado. De esta manera, se buscaba consolidar los territorios que pasaron por un proceso de recuperación militar y social⁴³⁶, bajo los preceptos y protocolos desarrollados por dicha doctrina.

En el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) se dio continuidad a los lineamientos generales de la política de consolidación del territorio, teniendo en cuenta que había sido parte de su legado como Ministro de Defensa. Es así como en el año 2011, se estableció la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT). El objetivo de la misma era establecer el control militar y social de las zonas con mayor impacto del conflicto armado a través del fortalecimiento institucional. Para ello, se crearon tres líneas de acción: institucionalización del territorio, participación ciudadana y buen gobierno, e integración regional. Entre las zonas seleccionadas para su implementación se encontraba la subregión de Montes de María.

La intervención del Estado en las zonas con mayores índices de violencia y conflictividad social, se mostraba como un imperativo en los programas de gobierno de los presidentes de Uribe y de Santos, que tenían como antecedentes otras políticas como el Plan Nacional de Rehabilitación de los presidentes Belisario Betancur y Virgilio Barco, puestos en marcha en la década de los ochenta. No obstante, a principios del presente siglo, la guerra se complejizó por la presencia los grupos paramilitares y el narcotráfico, que se infiltraron la política regional, debilitando aún más las instituciones locales y regionales (López, 2016), e instaurando lo que se ha denominado como clientelismo armado⁴³⁷.

⁴³⁵ Los CCAI se crearon en el año 2004. En la primera fase de su implementación se intervino en 39 municipios de 7 zonas del país entre las que se encontraban: Zona sur, Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo, bajo Atrato, Tumaco, Arauca, Tierralta. En el año 2007, se amplió esta estrategia a 62 municipios de 11 zonas: Zona Sur, Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo, Córdoba, Apartadó y medio y bajo Atrato, Arauca, Tumaco, norte del Cauca, Putumayo, Buenaventura y Montes de María.

⁴³⁶ Los lineamientos principales de los CCAI fueron los siguientes: control del territorio y lucha contra las drogas y el crimen organizado; reactivación Social - Siete Herramientas de Equidad (Asistencia Humanitaria); reactivación Económica - Impulso a la generación de ingresos legales para el desarrollo local; fortalecimiento del servicio de justicia formal y mecanismos alternativos de resolución de conflictos; reconstrucción del tejido social a través del uso del tiempo libre y la cultura ciudadana (Bocchi, 2011).

⁴³⁷ El clientelismo armado que se presentó de manera preocupante en la Costa Caribe de Colombia se puede asociar con la “reconfiguración cooptada del Estado

Por consiguiente, las estrategias de consolidación del Estado en la región se mostraron insuficientes para modificar las reglas del juego social y político, alteradas por la vía de la ilegalidad. Asimismo, los programas políticos y económicos, la mayoría de corte asistencialista, y los proyectos productivos impulsados desde el gobierno, no resolvieron el problema de fondo en la región, relacionado con la vocación del suelo y la concentración de la tierra, que se vieron acentuados por las estrategias de desarrollo gubernamentales, tales como el impulso de las denominadas “locomotoras del desarrollo”. Así es problematizado por una lideresa de Carmen de Bolívar:

Uno no puede estar esperando las limosnas del Estado en esa forma [refiriéndose al programa Familias en Acción]. Si a nosotros nos van a reparar, que nos reparen de verdad, con unas condiciones mucho más efectivas, que nos devuelvan la tierra que nos quitaron y que el Estado nos dé los medios para que nos podamos quedar en el territorio, que no permita la contaminación del agua y del suelo a causa de los cultivos de palma, que nos ha invadido. Creen que, con veinte mil pesos, treinta mil pesos, nos van a reparar, y con eso se solucionan nuestros problemas, eso para qué me alcanza ¡no es lo más justo! (E6. Lideresa Junta de Acción Comunal Barrio Los Ángeles, El Carmen de Bolívar, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

Por otra parte, las políticas de consolidación del territorio centralizaron el liderazgo en los estamentos militares, en este caso la Infantería de Marina, que sería la entidad encargada de la coordinación interagencial. Bajo su supervisión estuvieron inclusive las políticas y las acciones sociales de intervención del territorio, dejando un estrecho margen para la acción de las autoridades civiles.

Esta estrategia entraña importantes riesgos para la consolidación de las instituciones democráticas debido a que se profundizan las relaciones de verticalidad (dominación-subordinación). Asimismo, las políticas dirigidas a la disminución de la pobreza, la desigualdad o la generación de ingresos deberían estar pensadas desde una lógica civil. Además, en la estrategia terminaron primando las relaciones con el gobierno central, dejando de lado a las instituciones regionales y locales que, aunque eran estamentos muy debilitados y con pocos recursos, se podría haber diseñado una política realmente efectiva para el fortalecimiento y modernización de las mismas (Fundación Ideas para la Paz, 2011).

Esta situación es problematizada por una de las lideresas entrevistadas:

La zona de los Montes de María es uno de los territorios en donde se encuentran los planes de consolidación territorial, se supone. Para el Estado, en este momento, los Montes de María está consolidado. Pero, lo que uno ve son Fuerzas Armadas por todas partes, policías,

soldados, etc. Pero eso no es el Estado, las Fuerzas Armadas hacen una cantidad de actividades cívicas, con la población civil, pero a mí no me parece que deberían hacer esa labor. Esas cosas las deberían hacer otras instituciones del Estado, de otra dependencia, cosas que debería asumir, por ejemplo, la Secretaría de Planeación Municipal. (E7, Lideresa Comité de Pescadores de Puerto Santander, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

En este sentido, en muchas de las zonas rurales de Montes de María la única autoridad que tenía presencia en el territorio era militar, una cuestión sin lugar a dudas preocupante debido a la compleja relación con la sociedad civil, y a los nexos con actores armados ilegales, en particular, con los grupos paramilitares. Estas alianzas han sido documentadas por diferentes instituciones y, de manera más reciente, por la Justicia Especial para la Paz, por la Comisión Nacional de Memoria Histórica, y señalada también por las organizaciones populares en el trabajo de campo realizado para esta investigación.

12.2. La presencia histórica del movimiento insurgente

Para comenzar este apartado, nos parece pertinente señalar que, en el trabajo de campo realizado para esta tesis, las referencias de las organizaciones populares al papel que ha jugado la guerrilla en Montes de María no son tan recurrentes como en el caso de la Fuerza Pública y de los grupos paramilitares. Si bien reconocen al movimiento insurgente como un actor relevante en la conflictividad de la subregión, no hay una alusión tan explícita al impacto de su presencia en las dinámicas de reconfiguración socio-espacial. En particular, para el periodo anterior al inicio de siglo XXI.

Desde nuestra perspectiva, este hecho se puede comprender desde el análisis de María Clemencia Ramírez (2001) para el caso del Putumayo, relacionado con la presencia histórica de la guerrilla en el territorio, en particular las FARC. La autora señala que la cohabitación produjo una cierta aceptación por una parte de la población y la construcción de subjetividades compartidas con los locales.

Esta cohabitación entre la guerrilla y las comunidades no se debe interpretar como una legitimación de la acción insurgente ya que estaríamos cayendo en un análisis simple de una realidad tan compleja. Al respecto, en la investigación sobre la masacre de El Salado, el Grupo de

Memoria histórica analiza la estigmatización de la población y realiza una afirmación que nos parece relevante rescatar para este apartado:

muchos asumen que no es posible la coexistencia de la población civil y la guerrilla en un territorio sin que haya legitimación, identificación y complicidad; pero la banalidad con que se origina un estigma contrasta con la perversidad de sus consecuencias en un contexto de guerra. (CNMH, 2009, p. 216)

Los primeros movimientos guerrilleros aparecen en Montes de María a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta. En un momento con unas particularidades muy concretas asociadas a las dinámicas de las luchas sociales en la región. En la década de los setenta, se articuló un movimiento campesino fuerte que reivindicaba el derecho a la tierra a través de una agenda política y de un repertorio de confrontación que desafió al poder de los terratenientes y de los propietarios de las haciendas ganaderas, en favor de una democratización de la propiedad de la tierra (Fals Borda, 2002 [1986]).

No obstante, las reformas agrarias planteadas por un sector de las élites nacionales se encontraron de frente con el inmovilismo del poder regional y local, configurado entre el “gamonalismo rural” y el “colonialismo interno”. A estas circunstancias se sumaba la fuerte represión social derivada de la implementación del Estatuto de Seguridad durante el gobierno del presidente Julio César Turbay (1978-1982). Ante las demandas sociales que se produjeron en la década de los setenta, el gobierno respondió nuevamente con políticas de seguridad⁴³⁸.

En este contexto, las primeras organizaciones guerrilleras interpretaron en la conflictividad social una oportunidad de expansión en la subregión a partir de la puesta en marcha de una estrategia política que les diera acceso a las bases sociales del movimiento campesino. Además, por la localización geográfica de Montes de María y el difícil acceso a la subregión, se presentaba como una zona de refugio adecuada para el desarrollo insurgente (Echandía y Bechara, 2006). En un primer momento, las organizaciones que tuvieron presencia fueron el Ejército de Liberación

⁴³⁸ En el libro *Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas* del Centro Nacional de Memoria Histórica se señalan los obstáculos que tuvo el gobierno nacional para cumplir con las leyes de reforma agraria de 1961 y de 1968. Ejemplo de ello son las dificultades que tuvo el INCORA para adquirir tierras adecuadas para cumplir con la reforma. Asimismo, se alude al creciente número de familias campesinas sin tierra, cerca de 800.000, y el crecimiento exponencial de las mismas en contraste con las tierras aptas disponibles para ser parceladas (CNMH, 2016b).

Nacional (ELN)⁴³⁹, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)⁴⁴⁰, la Corriente de Renovación Socialista (CRS), y en menor medida el Ejército Popular de Liberación (EPL)⁴⁴¹ (Fundación Ideas para la Paz, 2011, p. 7).

La guerrilla de las FARC solamente entró a operar en Montes de María a principios de la década de los noventa. La inserción territorial de esta organización se debe leer en relación con las dinámicas espaciales del movimiento guerrillero y con la coyuntura política del momento. Las guerrillas señaladas en el párrafo anterior junto con las FARC eran parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. La confluencia en esta plataforma implicaba unos acuerdos en términos de territorios de influencia. Las FARC respetaron tales acuerdos y no hicieron presencia en Montes de María hasta 1991, momento en el que se desarrolló el proceso de paz con el gobierno de César Gaviria y se produjo la desmovilización del EPL y el PRT, que es leído por las FARC como una ventana de oportunidad para ampliar su influencia en la Región Caribe⁴⁴² (CNMH, 2009, p. 216).

La decisión de las FARC de expandirse territorialmente se debe comprender en el marco de los lineamientos señalados en la VII Conferencia realizada por la organización y enfocados hacia el fortalecimiento de un ejército irregular que fuera capaz de mantener la confrontación armada con el Estado. Estas condiciones internas se sumaron al exterminio sistemático de la Unión Patriota, fortaleciendo las posiciones que al interior de la guerrilla consideraban que la única salida era la vía armada. Por otra parte, en 1990 con el bombardeo a “Casa Verde”, se rompen las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Gaviria, lo cual trajo consigo una polarización de las posturas entre la partes y una agudización del conflicto armado. No hay que olvidar que, en

⁴³⁹ La presencia del ELN en la Serranía de San Jacinto fue marginal. Las acciones militares desplegadas no tuvieron un mayor impacto en la subregión.

⁴⁴⁰ El PRT actuó en la Región Caribe, en particular, en los Montes de María. La organización desplegó acciones en los municipios de San Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Juan, Ovejas, Los Palmitos y San Onofre. Tuvo incidencia en el norte del departamento del Tolima, en el área rural entre Líbano y Venadillo. En Montes de María logró tener incidencia política en los movimientos populares de la zona, en el sector campesino y sindical.

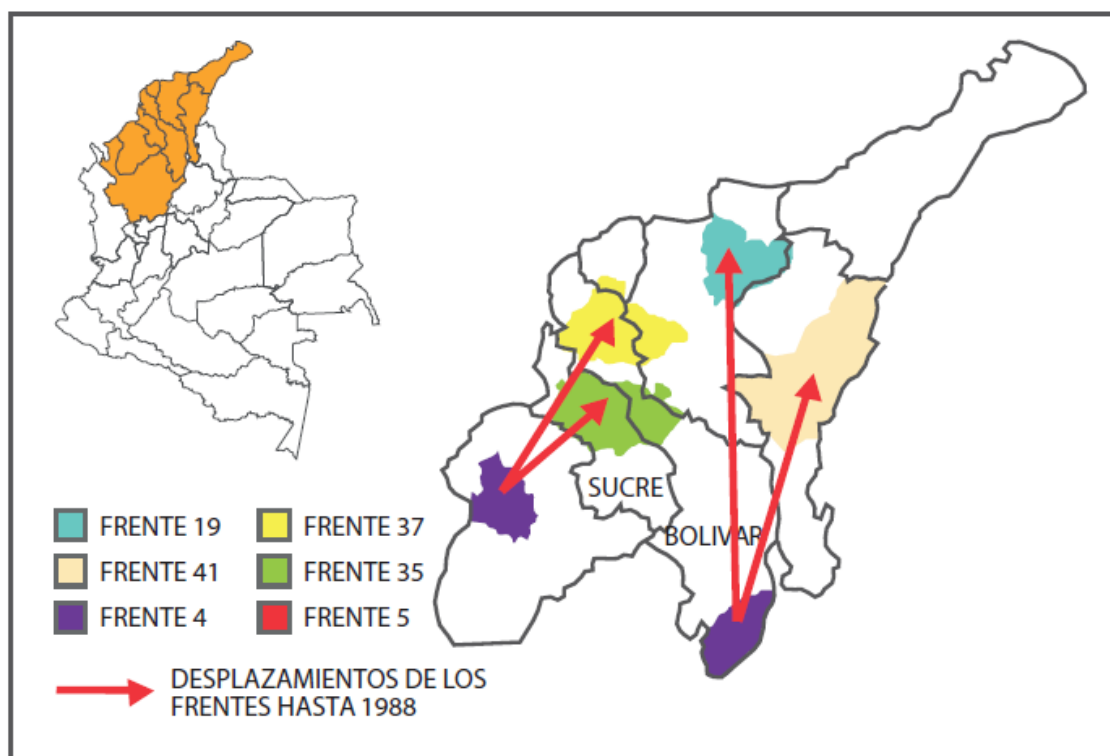
⁴⁴¹ El EPL actuó en la Región Caribe, en particular, desplegó frentes en el departamento de Córdoba y en la región del Urabá. A mediados de los años ochenta, el frente situado en el primer departamento se desplazó hacia Sucre, desplegando acciones en Montes de María, en particular, en los municipios de San Jacinto, Maríalabaja, y San Onofre. No obstante, su presencia fue muy débil (PNUD, 2010).

⁴⁴² Los desmovilizados de estas guerrillas y de la Corriente de Renovación Socialista se reincorporaron a la vida civil y política de Montes de María, muchos de ellos confluyeron en organizaciones políticas de izquierda a nivel local y regional, con el objetivo de disputarle el poder a la clase política dominantes. No obstante, tiempo después de su desmovilización empezaron los asesinatos selectivos, amenazas, intimidaciones. De esta manera, se impidió el tránsito del enfrentamiento militar a la vida democrática. Según líderes sociales de la zona los hechos fueron cometidos por paramilitares con participación de la policía (CODHES et al., 2020). Siendo un hecho recurrente durante la década de los noventa y el dos mil.

este marco temporal, se produjo una fuerte escalada de la acción del narcotráfico que tuvo como consecuencia la desestabilización de las instituciones.

La inserción territorial de las FARC en Montes de María, se realizó a través de los frentes 35 y 37⁴⁴³, “que no se originaron en esta región, pues nacieron en 1986 y 1987, respectivamente, como desdoblamientos del frente 18 que operaba en Córdoba, los cuales pasaron por el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar, en su orden” (CNMH, 2009, p. 216). Cabe señalar que la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) en 1994 amplió el radio de acción de las FARC, fortaleciendo su posición en la Serranía de San Jacinto. De esta manera, la acción insurgente de este movimiento guerrillero se debe entender como consecuencia de un conjunto de elementos políticos y de posicionamiento de la organización.

Figura 23. Presencia de frentes del Bloque Caribe de las Farc hasta 1988



Fuente: Adaptado de *Grupo de investigación en Seguridad y Defensa, Universidad Nacional* (p. 95), por CODHES; FUCUDE; Corporación Opción Legal; Universidad Tecnológica de Bolívar; Grupo Regional de Memoria Histórica, 2020.

⁴⁴³ El Frente 35 estaba compuesto por la Compañía Antonio José de Sucre, Policarpa Salavarrieta, Robinson Jiménez, Carmenza Beltrán y Milicias Bolivarianas. El Frente 37 por las compañías Benkos Bioho, Cimarrones, Palenque, Pedro Góngora Chamorro, Che Guevara y Milicias Bolivarianas. (CODHES et al., 2020, p. 96)

Por otra parte, la subregión de Montes de María fue adquiriendo mayor relevancia en términos estratégicos para los actores armados ilegales. La conectividad con el centro del país, a través de la Troncal de Occidente y la Troncal del Caribe, hacia los puertos de la costa atlántica, representó una oportunidad para el contrabando de armas y para el tráfico de drogas producidos en la serranía de San Lucas y el Bajo Cauca antioqueño (Echandía & Bechara, 2006, p. 50).

La debilidad del Estado en la zona también fue una condición propicia para el despliegue de las actividades delictivas, el comercio de insumos para la guerra y la “captación de recursos públicos y rentas privadas con los cuales sostener una variedad de negocios legales. En tal sentido, la extorsión y el secuestro se convirtieron en medios importantes para la consecución de recursos económicos para las guerrillas” (Fundación Ideas para la Paz, 2011, p. 7). Las FARC utilizaron estas acciones en contra de hacendados ricos de las zonas planas contiguas a la Serranía de San Jacinto.

Por consiguiente, la disputa entre las guerrillas y los grupos paramilitares en Montes de María se debe leer en el marco de estos factores. El control de las variables asociadas a los mismos tuvo un impacto en la correlación de fuerzas entre los actores armados y el Estado. En esta disputa, las comunidades quedaron en medio de los enfrentamientos, siendo estigmatizadas por uno u otro actor, como es expresado en los siguientes testimonios:

Ellos [paramilitares] llegaban averiguando por la guerrilla o, decían, oiga, aquí llegó un grupo de los compañeros de nosotros que están perdidos. Y si uno decía que sí, ellos comenzaban a golpearlo a uno a preguntar cosas que ni sabíamos. Sí, la guerrilla a veces pasaba por aquí; eso fue un desastre en el Playón de los escobares, ahí mataron a un poco EPL y ELN.

El 15 de diciembre de 1996, día que la guerrilla metió un tractor que llevaban para la Pola y 4 secuestrados, en la tarde comenzaron a buscar gente para sacar las compras y luego los paracos venían por la parte de atrás a liberar a la gente y decían que le rogáramos a los santos porque si ellos mataban a los secuestrados, ni los perros iban a quedar.... Los paracos entraban y mataban y se iban otra vez y a los quince días volvían y mataban. (Líder campesino, como se citó en Salgado, 2017, p. 27)

La presencia de actores armados en la parcela era dependiendo qué tipo de necesidades tenían. Primero, cuando era la guerrilla, bueno, en la zona donde yo habité, mi papá tenía ahí unas 15 parcelas con vacas. El propósito ahí era siempre una extorsión: “Me tiene que dar tanto, fuera plata, o fuera en especie, algo”. Ese era su propósito, no era otra cosa sino ese. En otras veredas, ellos venían era incentivando a los jóvenes para integrarse o alertaban y amenazaban a la población, que cuidado tú vayas a ser sapo y vas a tener algo con el ejército. “El que abre la boca se le llena de moscas”. Bueno, y aquí eran varios grupos, eran el EPL, el ELN, y las FARC también estuvo, pero sin tanta presencia, no estuvo concentrado y vino de paso.

Hasta que aparecieron los paramilitares [que] cuando entraron aquí a esta zona ya venían envenenados, ya no venían matando al que era sino a lo que fuera, y decían que todo el que por estos territorios andaba era guerrillero, que por nosotros vivir en el monte ya éramos guerrilleros. Entonces eso hizo que nosotros tuviéramos que decir, vámonos para el pueblo, y eso no evitó que nos mataran, como por allá, en el año 2000, cuando sin pena mataron a cinco personas. Mataron a una muchacha por aquí porque no tenía para pagarles ni dónde buscar. La gente no sabía qué querían y quiénes eran, pero les tocó coger lo que tenían y salir. Y ahí perdimos todo. (Líder campesino, como se citó en Salgado, 2017, p. 28)

Una lideresa de El Carmen de Bolívar relata la zozobra en la que vivió el pueblo en los años de mayor intensidad del conflicto armado. La disputa intensa en esa zona de Montes de María se relaciona con su localización estratégica que permitía la obtención de recursos para las organizaciones armadas, en cuanto a su predominio económico, en términos agrícolas y comerciales. Asimismo, apunta al papel que tuvo “Martín Caballero” en la confrontación como jefe del frente 37, adscrito al Bloque Caribe de las FARC. Al respecto, es importante recordar que Caballero estuvo al frente de la expansión militar de esta guerrilla desde principios de la década del noventa.

Yo te digo a ti algo, El Carmen de Bolívar en sí, el pueblo de El Carmen de Bolívar no se desplazó porque no quiso, en El Carmen de Bolívar se vivió una violencia terrible, tanto de día como de noche, bombas en cualquier parte; que mataban unos, que se llevaban otros, pero esas cosas... la gente estaba psicosiada, ya la gente ya no quería.... [guarda silencio por un momento] nosotros duramos un tiempo que las puertas no se abrían, las puertas permanecían cerradas y uno con el temor de que va a llegar la camioneta negra y nos va a llevar, todo eso se vivió en el Carmen de Bolívar, tanto en la madrugada, a la hora que sea de la noche, nosotros oyendo estas tiroteras en el Carmen de Bolívar, entonces se imaginaba uno lo que era el pueblo, ahora lo que eran las veredas, que traían no sé cuántos muertos, ni sé de qué parte, que traían unos por acá....

Los mayores enfrentamientos se produjeron cuando estaba “Martín Caballero”, que era uno de los gobernantes en esa zona, y las Autodefensas. (E6. Lideresa Junta de Acción Comunal Barrio Los Ángeles, El Carmen de Bolívar, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

En otras zonas de la Serranía de San Jacinto los campesinos parecen apuntar hacia un acuerdo tácito de convivencia con la guerrilla, en un periodo de tiempo en el que los enfrentamientos con los grupos paramilitares todavía no habían llegado a su punto más álgido, que se sitúa a principios de la década del dos mil.

Se trabajaba de una manera chévere, se pusieron a producir las tierras, los que las adquirieron porque nosotros hicimos un compromiso, que las tierras eran para producir alimentos, para mantener las dinámicas campesinas, para el mejoramiento de la calidad de

vida de los campesinos y las comunidades y se estaba llevando a un buen ritmo. Se veía presencia de la guerrilla, pero la guerrilla no se metía con los campesinos, comenzando porque estratégicamente la finca era un camino que salía hacia otra carretera, entonces nosotros, no digo que no, nosotros sí los veíamos cruzar, pero hasta ahí. (E3, Líder Asociación Campesina de Pueblo Nuevo, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

La guerrilla siempre era un actor armado que estaba en el territorio, presionaba a las personas que eran más pudientes en la zona. Entonces, los campesinos no se veían tan afectados, en el sentido de que por su parcela podía pasar el ganado hacia las tierras del terrateniente que estaba abajo. Pero nunca escuchamos que la guerrilla se llevara las vacas que eran de los campesinos o que les cobrara vacunas. La guerrilla tampoco hacía un control social sobre la población, eso lo hicieron los “paras”. (E7, Lideresa Comité de Pescadores de Puerto Santander, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

En relación con lo expuesto, la acción de las FARC en la subregión de Montes de María, transitó hacia el fortalecimiento de su posición estratégica, en el sentido explicado por el sociólogo francés, Daniel Pécaut (2004). Este cambio del movimiento guerrillero tuvo implicaciones en la forma de relacionarse con la población, en donde el trabajo con la base social dejó ser uno de los objetivos fundamentales para centrarse en el control de posiciones estratégicas en el marco del fortalecimiento de un ejército irregular. De la siguiente manera es explicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en su análisis sobre la masacre de El Salado, jurisdicción del municipio de Carmen de Bolívar:

Por ello, si las prioridades son militares más que políticas y sociales, entonces la relación con la población y el territorio será distinta. Si en los ochenta era más importante la población que el territorio, dada la simultaneidad de las luchas sociales, políticas y militares, ahora el territorio es más importante que la población, dado el privilegio de la lucha armada. No se trata de acumular influencia social con la incidencia en los movimientos sociales, ni representación política con la alineación con un partido político; sólo se busca acumular poderío y reducir la vulnerabilidad de su aparato militar, mediante su autonomía y compartimentación en relación con la población dentro de un territorio. (CNMH, 2009, p. 219).

Por consiguiente, el cambio de estrategia en la región afectó a las formas de relación con la población y el valor que se daba al territorio en la lucha insurgente, en un contexto de agudización del conflicto armado como el que se produjo en el periodo de 1996 al 2003. En este sentido, los territorios adquirieron más valor por su posición estratégica en la guerra y por la consecución ventajas militares, con lo cual los espacios que ocupaban las comunidades fueron valorados por ser una zona de retaguardia, por estar en un corredor natural, o por el acceso a determinadas infraestructuras, con lo cual la población terminó siendo un recurso más a manejar

en función de los intereses de los actores. De esta manera, los grupos armados crearon campos de poder a través de la utilización de acciones violentas y coercitivas o en algunos casos acuerdos implícitos de convivencia con la población. De la siguiente manera es problematizado por una de las entrevistadas:

En la zona de Maríalabaja, antes de esa época, se movía la guerrilla [se refiere al periodo de auge paramilitar], se encontraba FARC, en concreto los frentes 35 y 37. Y también se veían algunos miembros del ELN, moviéndose por las zonas rurales.

Estos grupos estaban en Maríalabaja porque es un corredor estratégico que comunica con el mar. Entonces, por ahí siempre lo utilizaban para el contrabando, también para moverse de un sitio a otro, para guarnecerse. El monte también es muy espeso, les servía de refugio. Hay muchas montañas, pero los campesinos con estos actores, pues se respetaban, en el sentido de que se respetaba y se sentía miedo, por el uso de las armas, claro, pero nunca fue algo tan fuerte como cuando empiezan a llegar los “paras”. En ese momento se instala el terror en las comunidades. Antes las organizaciones podían trabajar y hacer sus procesos... (E7, Lideresa Comité de Pescadores de Puerto Santander, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

Ahora bien, la presencia de actores armados ya sea insurgencia, paramilitares o Fuerza Pública, alteró las formas de organización de las poblaciones de Montes de María, en su mayoría habitantes del campo. Las familias rurales, por las condiciones en las que realizan su reproducción social, viven en comunidad y se relacionan con otras comunidades a través de vínculos culturales, sociales y económicos como pueden ser el parentesco, la vecindad, el trabajo mancomunado, el intercambio de productos y también dinámicas políticas organizativas. De la siguiente manera es expresado por campesinos de la zona:

Por eso fue que la confianza entre campesinos se perdió, porque ya no se sabía quién era quién. Ya uno no sabía si pasar a la casa del vecino porque no se sabía ni quién era. Porque se decía que ahí había filtraciones entre campesinos. Y eso afectó a nuestras costumbres porque yo recuerdo que mi mamá hacía comida con la vecina, y ya no. O sea, ya teníamos en la cabeza que eso no, no tocaba hacerlo. Siempre estábamos ya con miedo. Yo recuerdo que ya, en esas épocas, llegaban las seis y yo ya estaba debajo de una mesa. Porque la gente ya no salía, los pelados ni si quiera ya queríamos ir al colegio. (Líder campesino, como se citó en Salgado, 2017, p. 28)

Sí, digamos que la guerrilla era quien en principio asustaba a los muchachos diciéndoles que quien no se quería meter a la guerrilla, lo amenazaban que los mandaban obligados bien lejos. Muchos padres tuvimos que obligados mandar a los hijos afuera porque no queríamos aguantar eso. Entonces, los muchachos de ese tiempo, tenía yo 4 varones y 4 hembras, las señoritas estaban trabajando en Barranquilla, los varones estaban trabajando aquí. Entonces, cogían a los varones y les decían “métete o te mandamos bien lejos, necesitamos que te metas donde estamos nosotros”. Tocó mandarlos afuera, para Barranquilla. Ellos vienen ahora de vez en cuando, pero las cosas no son como antes. (Líder

afrocolombiano, corregimiento de San Cristóbal, municipio de San Jacinto, como se citó en Salgado, 2017, p. 36)

En algunas organizaciones se evidencia que entre las personas de la misma organización se ha generado mucha desconfianza. Algunas personas que creen que el “otro” sigue involucrado en el tema del conflicto armado y también culpan al “otro” porque mataron a mi papá y ella estaba de una y otra forma involucrada, ella o él. Esa desconfianza generada por la presencia de actores armados ha afectado al tejido organizativo de las comunidades. Antes, los lazos eran más estrechos, había mayor compadrazgo. (E7, Lideresa Comité de Pescadores de Puerto Santander, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

Ahora bien, la guerrilla de las FARC se desarticuló a partir del bombardeo del Ejército al campamento del frente 37 llevado a cabo en el año 2007, en el que murió Martín Caballero. La guerrilla intentó recomponer su estructura, pero la ofensiva de la Fuerza Pública, que se vio reforzada por los planes de consolidación territorial implementados por el gobierno de Álvaro Uribe, impidió la reestructuración del movimiento⁴⁴⁴.

En los talleres y conversaciones informales con líderes y lideresas de las organizaciones sociales montemarianas, estos manifiestan el impacto que tuvo el proceso de debilitamiento de las FARC, en un contexto en el que los grupos paramilitares seguían ejerciendo presión sobre las comunidades y sus procesos organizativos.

Por otra parte, la presencia del movimiento insurgente impidió de alguna manera la implantación territorial total de los proyectos de agroindustria y minero-energéticos, que han tenido un impacto negativo en las comunidades, cercando aún más los modelos propios de desarrollo y agudizando el problema de la concentración de la tierra en la subregión, además de los fuerte impactos medioambientales de las políticas extractivas. Esta percepción también es recogida en el estudio *Montes de María: bajo el fuego* (2020).

Las guerrillas en los Montes de María iniciaron su proceso de declive empezando el segundo quinquenio de este siglo. Según el Encuentro de validación social con líderes y lideresas de Colosó, Chalán y San Antonio de Palmito (3 de mayo de 2019), fue tan fuerte la influencia, organización y desarrollo social y de infraestructura que para algunas comunidades montemarianas el debilitamiento de la guerrilla no trajo ningún beneficio para

⁴⁴⁴ Echandía y Bechara (2006) señalan que las FARC, ante la ofensiva de la Fuerza Pública, desplegada durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cambió su estrategia militar en el territorio. De esta manera, optó por replegarse y actuar en pequeños grupos, realizando acciones puntuales sobre los poblados urbanos, hostigamientos contra las unidades militares de la Fuerza Pública y la instalación de minas antipersona en la entrada de sus zonas de refugio. Estas acciones tenían como objetivo reducir la presión de las fuerzas del Estado sobre las zonas rurales consideradas fundamentales para su supervivencia (p. 50).

los habitantes de los Montes de María, pues había una falta de presencia estatal que se encargara de impulsar a las comunidades.

En palabras de los líderes y lideresas, el efecto de este debilitamiento fue contraproducente, puesto que la presencia de la fuerza paramilitar se agrandó y se consolidaron los intereses y alianzas del Estado, los grandes terratenientes y los grandes comerciantes, que se fueron fortaleciendo hasta hoy en día, bajo nuevas dinámicas que se contraponen a los intereses campesinos (CODHES et al., 2020, p. 118).

12.3. La presencia territorial de los paramilitares: el terror llega a Montes de María

12.3.1. El inicio del paramilitarismo en Montes de María

En la década de los ochenta, una suerte de paramilitarismo embrionario se constituyó en Montes de María. Estos primeros grupos armados actuaron en contra de las organizaciones sociales populares de la región, con el objetivo de desarticular los procesos de resistencia y las agendas políticas dirigidas a la democratización de la tierra. Su radio de actuación se extendió a zonas limítrofes con la Serranía de San Jacinto, en particular, las Sabanas, La Mojana y el Golfo de Morrosquillo, localizaciones estratégicas para la economía de la droga. En la subregión montemariana hicieron presencia en Carmen de Bolívar (La Mano Negra y Los Rodríguez), San Juan de Nepomuceno (Los RR), Colosó (los Encapuchados), Chalán y Ovejas (Los Meza). En el departamento de Bolívar también actuó el grupo Muerte a Secuestradores y Comunistas (Verdad Abierta, 2010a).

La situación de violencia originada por la acción de estos grupos es expresada de la siguiente manera por un comerciante de Carmen de Bolívar y un líder político del corregimiento de Macayepo, respectivamente: “En el Carmen hacia el 87 u 88 se formó un paramilitarismo local. Gente que había estado presa, la fuerza pública los utilizaba, les decían donde había guerrillas y aparecían los muertos. En la calle 25 a cualquier hora del día había dos o tres muertos, le decían ‘la calle del crimen’”. “El pueblo se armó con 28 escopetas para sacarlos, pero el comandante de la Armada insistía en los consejos de seguridad que Los Rodríguez eran gente decente” (Verdad Abierta, 2010a).

La expansión de los grupos armados ilegales en la década de los ochenta y noventa se relaciona entre otros factores con los procesos de descentralización política, fiscal y administrativa, y la elección popular de alcaldes y gobernadores, que abrieron la puerta para la competencia por

el acceso y por el control de los recursos públicos, a través de la implementación de diferentes estrategias como la compra de votos, la extorsión, las alianzas con élites políticas regionales y locales, entre otras, para el fortalecimiento de las fuentes de financiación de actividades ilícitas (González, 2014; Salas 2010, 2016).

Estos elementos se articularon con la apertura económica impulsada durante el gobierno de César Gaviria que, de alguna manera, produjo el desmantelamiento de la frágil institucionalidad que daba cobertura a la economía campesina y a la agricultura comercial, anteponiendo una supuesta competitividad a las formas de desarrollo local y regional, base fundamental para el sostenimiento de las comunidades rurales. Como consecuencia de las reformas económicas, se produjo en Montes de María una profunda crisis social y económica, aumentando la brecha de desigualdad en la subregión (Bocchi, 2011).

La presencia y posicionamiento territorial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la Serranía de San Jacinto se produjo en el año 1997. En un primer momento, se establecieron en la zona comprendida entre el río Magdalena y la carretera Troncal de Occidente. Posteriormente, avanzaron hacia el Canal del Dique, zona estratégica para el narcotráfico y el control de las rutas que llegaba a la costa atlántica. Las AUC ingresaron en la subregión como una estructura armada, con capacidad militar y estableciendo las bases de su financiación a través del dinero proveniente de la economía de la droga, el cobro de vacunas a empresarios medios del campo (Echandía y Bechara, 2006, p. 49), y la financiación de parte de la clase política y económica dominante.

La entrada de las AUC en Montes de María se produce por petición de algunos hacendados y terratenientes de Sucre, quienes contactaron con las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, dirigidas por los hermanos Castaño. Producto de esta alianza se creó el Bloque Héroes de Montes de María. Este bloque paramilitar cometió por lo menos 16 masacres entre 1997 y 2001, comandadas por Edwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino” y Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”. Según la información recopilada en el marco de la aplicación de la Ley Justicia y Paz, la reunión que dio lugar a la implementación de estos grupos en el territorio se produjo en la finca “*Las Canarias*”, en la zona rural de Sincelejo, predios que pertenecían al ex gobernador de Sucre Miguel Nule Amín (1982-1983)⁴⁴⁵. La conexión entre las ACCU y la élite política de Sucre se

⁴⁴⁵ En el año 2019, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 28 años de prisión al ex gobernador de Sucre, Miguel Ángel Nule Amín, por ordenar la masacre de Macayepo, corregimiento de El Carmen de Bolívar. En

realizó a través de Javier Piedrahita, que a su vez tenía conexiones con la familia Vásquez Ochoa del Cartel de Medellín:

Javier Piedrahita, quien había comprado una hacienda llamada Simba, en la vía que de Sincelejo conduce a San Antonio de Palmito [...] Piedrahita, cuyo nombre también sale a relucir en investigaciones sobre el paramilitarismo originario de Antioquia, era un caballista cercano a los narcotraficantes Ochoa Vásquez. Víctimas y desmovilizados del paramilitarismo han dicho a la justicia que él tenía un grupo armado por Coveñas, el municipio costero vecino a San Antonio de Palmito y que fue él quien actuó de enlace entre las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá de los Castaño y los finqueros de Sucre para traer el paramilitarismo a los Montes de María. (Verdad Abierta, 2010a)

Javier Piedrahita fue el fundador de la Convivir “Nuevo Amanecer” registrada en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en 1996. Aunque hay indicios que apuntan a que este grupo armado venía adelantando acciones tiempo atrás. En esta organización participó Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, que después de hacer el curso de comandantes de las AUCC, fue enviado por Carlos Castaño a dirigir la incursión paramilitar en Montes de María en el año de 1997, nombrándolo como comandante del frente Rito Antonio Ochoa, uno de los más sanguinarios de la región (Verdad Abierta, 2010a). Es relevante anotar que, según las investigaciones adelantadas, el superintendente Herman Arias Gaviria, que ejerció el cargo durante el gobierno de Ernesto Samper, estuvo al corriente de la naturaleza de estas estructuras armadas (Rugeles, 2013).

Estos hechos vienen a corroborar que las Convivir fueron una forma de privatización de la guerra que permitió el mantenimiento y la consolidación del paramilitarismo en Antioquia y en otras regiones del país⁴⁴⁶. Este fenómeno tiene profundas raíces en una compleja interacción entre las clases políticas regionales; los actores económicos como los terratenientes, ganaderos y empresarios del campo; y el narcotráfico, con la connivencia de la Fuerza Pública. En este sentido, se confirma la tesis planteada por Leopoldo Múnera (2006), al enmarcar el paramilitarismo como

la incursión de las AUC fueron asesinados 21 campesinos y ocasionó el desplazamiento de 200 personas de las veredas El Floral, Verruguitas y la Cañada de Limón. La masacre se produjo como represalia por el robo de cabezas de ganado en la Hacienda Santa Helena. En la sentencia se señalaba que Nule Amín fue promotor de las AUC en el departamento de Sucre y en la subregión de Montes de María (RCN, 2019). Los testimonios de los paramilitares Salvatore Mancuso, Úber Enrique Banquez, alias ‘Juancho Dique’ y Yairsiño Meza (entre otros), que realizaron en el marco de la Ley de Justicia y Paz, fueron claves para la sentencia condenatoria de Nule Amín y de otros políticos de la región como Álvaro García Romero, Salvador Arana (exgobernador de Sucre y condenado a 40 años de prisión por la muerte del alcalde de El Roble y por nexos con el paramilitarismo), Víctor Guerra de la Espriella (condenado por parapolítica), entre los más conocidos (Verdad Abierta, 2012a) (El Espectador, 2019). Los testimonios de los jefes paramilitares han servido para establecer las conexiones con la clase política de Bolívar y Sucre.

⁴⁴⁶ Aproximadamente 126 desmovilizados de alto rango de las AUC pertenecieron a las Convivir (Rugeles, 2013).

grupos pro-sistémicos, que tenían como función mantener el statu quo e impedir cualquier tipo de transformación de un estado de cosas injustas, que implicara el reconocimiento de derechos de las poblaciones en estado de vulnerabilidad, en particular, las localizadas en el campo. Tampoco es casual que el surgimiento de las autodefensas y los paramilitares, coincidiera con el desarrollo de procesos de paz a nivel nacional debido a que la agenda de negociación podría comprometer el orden dominante (Romero, 2003). Por ello, se obstaculizó también cualquier iniciativa de diálogo regional.

12.3.2. El régimen del terror paramilitar en Montes de María: una estrategia de expansión territorial.

La entrada de los paramilitares en Montes de María generó un escalamiento en el conflicto armado, una profunda crisis humanitaria y la descomposición de las instituciones públicas y de la política, siendo la Región Caribe uno de los principales focos del fenómeno de la parapolítica en el país. En este contexto, las principales víctimas fueron las comunidades rurales, los sectores sociales populares y los movimientos políticos de izquierda, quienes llevaron el mayor peso de la violencia política, motivada y justificada por un discurso de estigmatización y criminalización configurado desde el gobierno central.

Las narrativas dominantes llegaron inclusive a justificar las masacres contra la población civil, presentándolas como golpes a la guerrilla. Es el caso de El Salado (2000), Las Brisas (2000), Macayepo (2000), o la ocurrida en el corregimiento de Chengue (2001) (CNMH, 2013, p. 39). Los líderes y lideresas sociales señalaron que el peso del estigma de “pueblo guerrillero” tuvo profundas consecuencias psicológicas y sociales tanto en la población que resistió en el territorio como en la que tuvo de desplazarse.

De forma similar a lo ocurrido en el departamento del Putumayo, las masacres fueron utilizadas por los paramilitares como parte fundamental de su repertorio de acción violenta, utilizadas para conseguir el dominio de posiciones estratégicas, de cara a debilitar el poder de las FARC en sus zonas de retaguardia. La sistematicidad de las acciones, la crueldad excesiva empleada y la ubicación de los lugares en que ocurrieron las masacres, en su mayoría corredores entre la Serranía y la costa Caribe, tenían como finalidad impedir el tránsito de la guerrilla hacia las tierras bajas (Bocchi, 2011).

Las masacres perpetradas en Montes de María por los paramilitares se enmarcan en una tendencia de la utilización de este tipo de acciones a nivel nacional. Mauricio Romero indica que, a partir de 1998, se observa “un incremento de casi cuatro veces en los ataques en contra de la población civil entre 1998 y 1999, con un resultado en el número de víctimas escalofriante, que para el año 2000 siguió aumentando a un ritmo perturbador” (Romero, 2003, p. 65). El autor señala que las zonas en donde se produjeron un mayor número de ataques contra la población civil coinciden con los lugares en donde se ha producido mayor desplazamiento de la población desde 1981⁴⁴⁷. Este mismo fenómeno sucede con las muertes selectivas que, en el periodo de 1994 a 2001, aumentaron significativamente. Hechos que concuerdan con la centralización de grupos de autodefensas y paramilitares en la ACCU y la competencia armada con las FARC (Romero, 2003, p. 18).

Tabla 10. Masacres cometidas por los grupos paramilitares, 1997-2000

Año	Masacres	Víctimas
1997	6	30
1998	16	111
1999	61	408
2000	83	593

Fuente: Adaptado de Ministerio de Defensa, 2000 como se citó en Romero, 2003, p. 65

En los primeros años de presencia en Montes de María, los paramilitares llevaron a cabo muertes selectivas e incursiones de menor escala en los poblados de montaña, en los que perpetraron masacres pequeñas. “Entre 1997 y 1998, la región de los Montes de María registró 11 masacres que oscilaban entre las 4 y las 7 víctimas fatales” (CNMH, 2009, p. 253). Pasado este periodo de “acomodamiento” en el territorio, la estrategia paramilitar fue la extensión de sus acciones a zonas claves para el dominio de la subregión, como se apuntó anteriormente. Las masacres de El Salado, Chengue y Las Brisas se inscriben en esa expansión territorial⁴⁴⁸.

⁴⁴⁷ Las regiones en donde se perpetraron estos actos de violencia fueron: Norte de Santander, el Urabá chocoano, Antioquia, el Magdalena Medio, el Valle del Cauca, parte del piedemonte llanero, el suroccidente del país, incluyendo el Putumayo, y Montes de María (Romero, 2003, p. 65).

⁴⁴⁸ En la investigación del CNMH sobre la masacre de El Salado se señala que, [el] hito que marcó el inicio de la expansión paramilitar nacional fue la masacre de Mapiripán perpetrada el 15 de julio de 1997, con 49 víctimas, reivindicada por Carlos Castaño, comandante de las AUC, como el golpe militar más fuerte dado por los paramilitares a las FARC en su zona de retaguardia estratégica en el sur del país. (CNMH, 2009, p. 253).

En el periodo de 1999 al 2001, los paramilitares perpetraron 42 masacres que dejaron 354 víctimas fatales. Según el CNMH, “la concentración temporal y territorial de masacres que se registró en esta zona era percibida como una marcha triunfal paramilitar, que hizo pensar en aquel momento en una sólida repartición del país entre un norte contrainsurgente y un sur guerrillero” (2009, p. 16). De esta manera, los paramilitares desplegaron una estrategia militar sustentada en repertorios de violencia que produjeran el mayor daño posible para lograr el dominio de zonas estratégicas del territorio y de la población.

A este respecto, los líderes y lideresas estiman que estas acciones no se podrían haber llevado a cabo sin la connivencia de la Fuerza Pública que, aun sabiendo lo que estaba ocurriendo en el territorio, no ejercieron su labor de proteger a la sociedad civil y, en muchos casos, facilitaron la entrada de los paramilitares. Otro hecho que llama la atención de las personas entrevistadas, se refiere a la presencia de informantes que acompañaban a estos grupos y que ejercían una labor de señalamiento a determinadas personas de las comunidades. En los testimonios también se observa un patrón en las intervenciones armadas. En un primer momento, el ejército hacía un reconocimiento de la zona, posteriormente incursionaban los paramilitares que perpetraban los hechos violentos para someter a la población a través de la instauración de un régimen del terror, desarticular los procesos organizativos y, finalmente, entraba el ejército para asegurar el territorio.

En el testimonio que se expone más adelante, se relatan los hechos acontecidos en Mampuján, corregimiento de Maríalabaja, perpetrada por el Bloque Montes de María el 10 y 11 de marzo del 2000, bajo la dirección del comandante alias “Cadena”. En los testimonios se señala que los paramilitares procedieron a reunir a toda la población en la plaza central, les comunicaron que iban a operar de forma similar a la del Salado, en donde se perpetró una masacre entre el 16 y el 21 de febrero del mismo año, en la que asesinaron a aproximadamente 100 personas del corregimiento y sus alrededores. Posteriormente, los paramilitares, lista en mano, nombraron a varios campesinos acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. No obstante, uno de los comandantes recibió una orden externa, que cambió la dinámica del horror prevista y ordenaron que se desplazara toda la población. Después de la incursión, los paramilitares se unieron a otro grupo del Bloque Héroes de Montes de María, y se desplazaron a la vereda Las Brisas (municipio

Posteriormente a la acción, Castaño declaró ante la opinión pública que este sería el sello de los paramilitares en su expansión por todo el país.

de San Juan de Nepomuceno), en donde asesinaron a 12 personas acusadas de ser colaboradores de la guerrilla.

Los hechos acontecidos en Mampuján ocasionaron el desplazamiento de toda la población, 300 personas se vieron obligadas a dejar su territorio. Este corregimiento antes de la masacre era un pueblo próspero de Montes de María, con una importante actividad agrícola y organizativa; después de los hechos cometidos, la localidad se convirtió en un pueblo fantasma. De esta manera, se produce un fuerte proceso de desterritorialización por la vía de la violencia armada que acaba con las actividades económicas tradicionales de la zona, desarticula el tejido social y comunitario, transforma el paisaje y altera el imaginario simbólico del territorio, entre otros impactos.

Pues yo manejo mucho caso en Mampuján porque soy muy cercana. El caso Mampuján es la entrada de los paramilitares y el desplazamiento de todo el pueblo. Unos días antes de la incursión paramilitar, la guerrilla pasó a un hermano de un militar que secuestraron. Lo subieron por Mampuján y lo subieron a las veredas de San Juan Nepomuceno. Por eso entran los paramilitares.

Ellos [los paramilitares] entran con armas del ejército. Aunque dos días antes de que pasara eso, había entrado el ejército a la zona. Entraron, jugaron, salieron y luego entraron los paramilitares. Entonces es otra cosa. La gente identificaba a los encapuchados [se refiere a los informantes]. Era también su *modus operandi*. Nos llevaban a un encapuchado que era del territorio. Seguro que conocía a la gente. La gente lo relaciona mucho con policías, también es que llegan al Viso que es un punto muy transitado, muy visible. Y entonces a ese punto llegaban los ejércitos de paramilitares a tomar refrescos y a comer. El Batallón está más o menos a un kilómetro de ese punto. Y, pues la estación de policía del Maríalabaja estuvo siempre ahí. La gente se dio cuenta cuando entraron los paramilitares a Mampuján y fueron a avisar a la policía y no pasó nada.

Los paras ya venían haciendo ese control del territorio. Si ya se iba la luz en el pueblo. No sabemos si Electricaribe tiene algo que ver, pero se iba la luz y aparecía un muerto, o dos, o tres. Entonces se iba la luz y uno ya sabía que tenía que irse a su casa. La luz se iba de 7 a 11 de la noche y entonces se hizo un régimen de terror muy fuerte. En ese momento ya estaban vacunando a la gente, a los arroceros que eran los que mejor estaban.

Los paras entran en la tarde, en las horas de la tarde. Se quedan desde la tarde hasta la noche haciendo el control, o sea, sacando a la gente de sus casas. Los llevaron a la cancha, a la plaza, escogían a la gente y había un encapuchado que decía este sí, este no; bueno, a ellos les entra una llamada y dicen que ahí no era el sitio, así que no mataron a nadie en ese lugar. Eso sí, secuestraron a unas personas para que los guiaran hacia arriba. Entonces, fue cuando llegaron a Las Brisas y mataron a 12 personas. En Mampuján no hubo ningún muerto, pero la intención primera era matarlos.

Mampuján es un pueblo fantasma, y Mampuján era un sitio muy importante para Maríalabaja, era el corregimiento que más producía. Y si uno observa las ruinas de Mampuján, se da cuenta de que hay unas casas de campesinos construidas con material [cemento], grandísimas, embaldosadas. Yo pienso en mi casa, decía yo no viví en una casa de esas. En mi comunidad había necesidades y se notaban y en Mampuján había, pero se

veía lo próspero que era el pueblo. Entonces, Mampuján jalonaba a las veredas que estaban cerca. Y, no sólo eran las veredas de María la baja, también eran las veredas de San Juan Nepomuceno, que estaban más de cerca de Maríalabaja que de San Juan. (E7, Lideresa del Comité de Pescadores de Puerto Santander, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

El desplazamiento masivo de la población de Mampuján se relaciona con el régimen de terror que se impuso en la subregión posterior a la masacre de El Salado, sin duda la más cruenta en la historia de las AUC⁴⁴⁹. Esta masacre tuvo un carácter demostrativo de la hegemonía militar en el territorio. Se desplegaron 450 paramilitares, hubo sobrevuelos de dos helicópteros, se controló y confinó a la población durante varios días, asesinaron y torturaron de maneras indecibles a los pobladores, se utilizó el cuerpo de la mujer como arma de guerra, sometiéndolas a humillaciones, violaciones y empalamientos. De esta manera, se instauró un escenario público de terror (CNMH, 2009), frente al cual la población se encontraba en absoluta indefensión y sin ninguna protección por parte de la Fuerza Pública, que permitió que ocurrieran los hechos violentos. Como consecuencia de la masacre, 4.000 personas se desplazaron del corregimiento de El Salado⁴⁵⁰. De la siguiente manera es relatado por uno de los sobrevivientes de la masacre:

Cuando dijeron «aquí vamos a hacer unas preguntas, el que hable, muchos se salvarán, y si no habla, ya sabe lo que les toca». La pregunta era que si la guerrilla vivía aquí, que si la guerrilla tenía mujer aquí, que si la guerrilla bailaba aquí, que si a la guerrilla le cocinaban aquí, y eso un poco de feria de preguntas. «Hombre, sí, pasan por aquí, pasan por allá, uno no sabe». Entonces dijeron «¿no saben?, entonces van a tener que hablar». La cosa se quedó así. Entonces empezaron en esta forma, tres personas las contaron de la fila, allí llegó el tipo ese El Tigre y se paró delante de mí, y dijo y alzó la mano «Y vamos a empezar y el que le caiga el número treinta, se muere». El número 30. Fue al señor [Ermides Cohen] que le cayó ese número 30, el mío fue el número 18. Yo caí el número 18 y yo dije «Dios mío, no soy yo». El 30 estaba allá [...] A ese señor lo mataron en esta forma, vea, lo pasaron y lo acostaron allá donde empezaron a contar, ellos tenían bayonetas. y peinillas, a ese señor como de 60 años más o menos, a ese señor lo mataron a peso y cuchillo, rajándolo,

⁴⁴⁹ La masacre de El Salado fue planeada en la finca El Avión, jurisdicción del municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena, por los jefes paramilitares del Bloque Norte, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, así como por John Henao, alias “H2”, delegado de Carlos Castaño, quienes también la coordinaron (CNMH, 2009, p. 38).

En el año 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar condenó a la Nación por la masacre de El Salado, por considerar responsables por omisión al Ministerio de Defensa, la Armada y la Policía, al no desplegar ninguna acción que evitara la masacre. La única condena penal, ratificada en ese mismo año, fue para el capitán de la Infantería de Marina Héctor Martín Pita Vásquez fue condenado a 13 años de prisión. En el momento de los hechos, ocupaba el cargo de comandante de la Compañía Orca, adscrita al Batallón de Infantería de Marina #31 (Forero, 2020).

⁴⁵⁰ El corregimiento de El Salado se encuentra ubicado en una zona estratégica para el comercio en Montes de María. Se conecta al norte con Zambrano, al occidente con El Carmen de Bolívar, al oriente con Córdoba y al sur con Ovejas. Esta ubicación hizo que se convirtiera en una zona clave para las lógicas de la guerra. En las décadas de los sesenta y setenta vivió una época de bonanza económica debido al auge del tabaco (CNMH, 2009).

cortándolo, torturándolo, entonces, cuando ya él clamaba «ay madre mía, madre mía», ellos le dijeron «hijueputa, aquí no te salva ni el putas, dónde está la guerrilla para que te salve, dile que venga, dónde está Boris, hijueputa». (CNMH, 2009, p. 339)

En las conversaciones con líderes y lideresas de la región se percibía aún el miedo producido por estos hechos. Se produjeron silencios durante el diálogo ante el temor de ser escuchados por personas que tuvieran algún tipo de relación con los victimarios. La violencia sexual no afloró durante las entrevistas, pero sí en los diálogos informales. En cuanto a la participación de la Fuerza Pública, señalaron “Hombre, ¿cómo es posible que se ese montón de paramilitares transite por el territorio sin que el ejército se dé cuenta? ¿cómo es posible que tengan a la población encerrada y no se enteren de nada?” (E4, Lideresa OPD Montes de María, comunicación personal, 03 de diciembre de 2012).

En el siguiente testimonio, se reafirma la percepción de complicidad con el Ejército y se plantean las condiciones de retorno de las poblaciones a sus lugares de origen, sin garantías para la no repetición de los hechos violentos y con procesos de reparación del todo insuficientes. La reparación para las organizaciones debe ser integral en términos sociales, económicos, psicológicos, que permitan una reapropiación material y simbólica de los territorios.

La verdad es que hay cosas que uno no entiende, como en El Salado, llegan, matan tanta gente, hacen lo que hacen y nadie ve nada. Sale el ejército por un lado y entran las AUC por otro. Ellos no deben estar ahí, nosotros sabemos que hay muchos que quieren investigar, indagar para poder llegar a una verdad. Toda esa gente de El Salado se desplaza. ¿Vuelve otra vez la gente a El Salado a qué? Sin garantías alguna, qué tal vuelva a suceder lo mismo.

¿Qué pasó? La gente llegó al Salado sin garantías. La gente retornó otra vez, los pocos que quedaron, pues ellos retornan porque es un sector productivo en todos los aspectos y ellos saben que es así y que las condiciones de Carmen de Bolívar no se prestan para que ellos estén ahí, donde ellos lo tienen todo es en ese lugar, entonces. La calidad de vida es diferente, vivir arrecostado de un familiar, yo sé cómo es eso, hoy sí, mañana no, hoy te quiero, mañana no te quiero, yo tengo comida, pero mañana no y uno con las manos en la cabeza qué puedo hacer, devolverse, me voy, así sea que me piquen, que me hagan, que me deshagan, pero me voy para mi tierra, porque yo soy de allá. Ese sentido de pertenencia de lo mío, cierto, entonces esas son las iniciativas de que el campesino busca otra vez la tierra y el retorno, pero vamos a ver dónde están tantas garantías, para que estas personas lleguen ahí, otra vez retornar en ese lugar, en sí hay muchos que han retornado. (E6. Lideresa Junta de Acción Comunal Barrio Los Ángeles, El Carmen de Bolívar, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

En este sentido, es señalado por el CNMH (2009), considerando que:

El retorno para las comunidades desplazadas de El Salado activa una memoria desgarrada que representa tanto la cristalización de un sueño como el afloramiento de una tensión. El retorno no consiste simplemente en volver a habitar el espacio y reencontrarse con la comunidad cuyos integrantes han sido forzosamente abandonados. Asumir el retorno es confrontarse con el lugar lleno de las huellas de la masacre y la desolación, con los rumores y con los conflictos comunitarios sociales y políticos que se dieron en su momento y que aún plantea el contexto de la guerra. (p. 26)

El CNMH apunta a la necesidad de establecer unas condiciones apropiadas para que las comunidades puedan hacer un ejercicio de reapropiación del espacio a través de la recuperación del tejido social y comunitario, resignificar un espacio de muerte, para que pueda surgir un nuevo espacio de vida. En este sentido, la población que retornó a El Salado una década después de la masacre, inició un proceso de autoorganización que les permitiera recuperar esos entramados comunitarios que fueron destruidos y construir territorio nuevamente⁴⁵¹.

12.3.3 Un relato de la desintegración de las comunidades de base: el caso del Corregimiento de Pueblo Nuevo

En el relato de uno de los líderes del corregimiento de Pueblo Nuevo, perteneciente al municipio de Maríalabaja, se describe la incursión de los paramilitares en su territorio, que ejercen una labor de vigilancia sobre las comunidades para identificar posibles auxiliares de la guerrilla.

Y ya en el 2000 se oyó el rumor de que venían grupos paramilitares a la zona, o sea, se oyó de lejos, en otras comunidades se oía decir, no, que en tal parte hay paramilitares, es más, en una comunidad que está como a un kilómetro que se llama Sabana, que ya es Sucre. Un día, yo salía a jugar fútbol y vi gente armada con uniforme del ejército. Nosotros en la región no estábamos acostumbrados a ver paramilitares o AUC o Convivir, nada, nada. Nosotros esos términos no los manejábamos, entonces yo dije “el ejército”. Pero me di cuenta que no era el ejército porque yo venía de otra comunidad y yo tenía tiempo de estar ahí y no me habían visto y cuando ven una cara nueva me llamaron y me metieron y me preguntaron de dónde venía, que quién era y yo les dije, hombre yo soy un campesino, y vengo a distraerme un rato acá porque tenemos unos equipos y hacemos un intercambio deportivo. Nosotros no le hacemos daño a nadie, ustedes como autoridades deben de saber eso y entonces se identificaron...[silencio] Nosotros somos las Autodefensas Unidas de Colombia. Yo me asusté, yo no jugué ese día, yo me fui para mi comunidad, yo dije, se

⁴⁵¹ El proceso de retorno al corregimiento de El Salado se inició un año después de la masacre en donde un grupo de pobladores decidieron regresar al territorio ante las difíciles condiciones del desplazamiento. No obstante, uno de los líderes de este proceso, fue nuevamente amenazado por los paramilitares e inclusive criminalizado por la Fuerza Pública, que terminó exiliándose en España (Semana, 2010).

está acercando la vaina; bueno, nosotros no le paramos bolas tanto. (E3, Líder Asociación Campesina de Pueblo Nuevo, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

En el siguiente apartado, este campesino señala la intimidación y las acciones violentas en contra de los líderes sociales de la región, que terminaron desarticulando procesos organizativos de larga data como el trabajo de base realizado por la ANUC en el territorio:

Y, bueno, ya después comenzaron las amenazas a líderes sociales, empezaron las incursiones de ellos [paramilitares] hacia la parcela.

Entonces, resulta que el presidente de la organización vivía arriba en la parcela y un 28 de diciembre del año 2000, se metieron los paramilitares. Recuerdo que yo estaba trabajando en mi cultivo de yuca y llegaron de parcela en parcela y nos recogieron en una casa grande que nosotros le decíamos cafetín, esa era la vaquera de la finca. Entonces era un sitio muy bonito y ellos nos dijeron que teníamos que acercarnos allá porque iban a hacer una reunión con nosotros. Nosotros dijimos, no le debemos nada a nadie, no tenemos nada que temer.

Cuando estábamos allá nos preguntaron que si nosotros conocíamos al señor Mario Varita, y que si era presidente de la organización y nosotros respondimos que no. Aquí todos somos líderes y todos somos autónomos y todos trabajan en beneficio de todos, aquí las cosas son democráticas. Que dónde vivía, preguntaron, pues él vive fuera, porque ya teníamos conocimiento de que estaban buscándolo, pero resulta que él estaba ahí en la finca todo el tiempo. Ahí también influyó la ingenuidad de nosotros, porque nosotros percibimos que esas personas estaban divididas y que había grupos por allá buscándolo nosotros hubiésemos hecho algo, porque nosotros conocemos el territorio más que ellos y allá había como llegar primero que ellos y se le había informado a nuestro líder que [silencio]

Pero nosotros fuimos tan ingenuos que no nos dimos cuenta, cuando nos dimos cuenta es que ya lo traían, amarrado con una cabuya y nos lo tiraron en los pies y nos dijeron que él era un guerrillero y que nosotros conseguimos esas tierras con apoyo de la guerrilla y bueno, ahí la gente no podía defenderse porque si tú hablabas... A la esposa de él la amarraron también. Ellos nos dijeron: a este hijo de puta nosotros llevamos tiempo buscándolo ya y aquí cayó.

Nosotros les lloramos, nos arrodillamos, le suplicábamos que no le fueran a hacer nada, a él no le va a pasar nada, nosotros vamos a llevarlo para hacer una investigación. Se lo llevaron y nos dieron 24 horas para que desocupáramos las parcelas, pero que no saliéramos hasta que ellos no tuvieran dos horas de haber salido por el mismo camino, y salieron al pueblo. Se lo llevaron amarrado como llevarse una vaca, lo empujaban, lo pateaban, lo manearon con un lazo largo, iba de aquí para allá y a la esposa la tiraron ahí, le dijeron un poco de cosas – la vamos a matar, tú eres cómplice- pero después se condolieron y a ella la dejaron.

Y bueno, al compañero se lo llevaron el 28 de diciembre como te digo y nos dieron 24 horas para salir y nosotros salimos a las dos horas de que ellos salieron y cuando llegamos al pueblo todavía estaban con el compañero y lo tenían en un palo esperando la camioneta para llevárselo. Entonces el susto de nosotros era bárbaro, nosotros llegamos a la casa de los familiares, porque no era ni siquiera la casa de nosotros, los animales quedaron, los cultivos quedaron. No tuvimos tiempo de llevarnos nada. Y nosotros veíamos dónde estaba; lo tenían arrodillado dándole, lo masacraron y le decían: dónde están sus

compañeros, no tiene nada que decir –cómo quiere que le diga- y el lloraba, estaba todo partido y después llegó la camioneta y nosotros vimos cuando lo cogieron y lo tiraron allá como cuando usted tira un bulto a la camioneta y se lo llevaron. (E3, Líder Asociación Campesina de Pueblo Nuevo, comunicación personal 04 de diciembre de 2010)

Al preguntarle por la presencia de la Fuerza Pública en el momento de los hechos, el líder en un primer momento señala la ausencia de la misma, pero deja entrever que existía conocimiento por parte de la misma de los hechos ocurridos.

¡No! Esas comunidades estaban abandonadas, o sea, yo digo, yo no sé, mejor no, cosas que uno las piensa y se arrepiente de decirlas...ahí se veía la estrategia que ya venía. Es imposible que no se den cuenta porque pasaban por carretera, si uno pasaba en una moto sin papeles se dan cuenta que uno va sin papeles y le ponen una multa. Entonces, bueno, a él se lo llevaron, nosotros nos dividimos. Resulta que el 31 de diciembre apareció muerto en la puerta de la casa de él y lo peor aún es que aparece con una lista, con una lista y unos panfletos y en la lista estábamos varios, estaban varios parceleros, yo en ese momento estaba pelado. La organización se desintegró.

Las personas que estaban en la lista se fueron. Había otro líder que se llama Jairo Gómez, él fue presidente municipal de la ANUC y también nos apoyaba en el proceso, pero... estábamos cercanos los dos y a él lo amenazaron directamente, pero ese tipo tenía una visión berraca: si me muero, me muero en mi territorio y defendiendo mis causas y mis condiciones de vida para el campesino. Era una persona muy intelectual, él fue concejal del municipio, tenía la intención de ser alcalde, o sea, una persona preparada, pero utilizó esa preparación para beneficio de las comunidades y pasó el tiempo y eso fue en diciembre...

En mayo mataron al compañero Jairo. Agarraron al compañero, duraron con él también tres días desaparecidos, a los tres días apareció en una comunidad que se llama Retiro Nuevo, muerto, todo torturado, lo mataron también y dejaron unos mensajes con panfletos y otra lista más inmensa; ahí salió el suegro mío, ahí sí se rompió todo el pellejo social de Maríalabaja, el pellejo social de la ANUC, las organizaciones, todo se rompió, se quebró. Después los paramilitares se pararon hacia las tierras que nosotros teníamos, hicieron campamentos.

Un campamento retiradito, como a un kilómetro de la parcela, en un lugar estratégico, en una loma, ahí hicieron campamento y se habituaron ahí, entonces querían el centro donde estaba el jefe de ellos hacia arriba, hacia arriba y hacia el otro lado tenían un campamento como con 300 hombres.

Fueron los mismos grupos que entraron en Mampuján. Entonces, en junio... en julio, el 20 de julio estas personas... ahí en la comunidad había otra persona que también era líder y era una persona que económicamente no estaba tan mal, tenía su parcela, tenía su vaquita y tenía unos hijos en Venezuela. Él tenía un celular y en ese tiempo el celular no era muy común y quien tenía un celular era porque tenía un familiar por fuera, porque se lo mandaban, por ejemplo, desde Caracas, que es la tendencia de la gente. Él tenía dos hijos en Caracas y le mandaron un celular para estar informados, como estaba la situación tan crítica. Resulta que los paramilitares se la montaron porque él tenía un celular, que él era informante de la guerrilla o del ejército. Y llegaron en la mañana del 20 de julio, un día viernes a la finquita de él, donde estaba ordeñando, se le llevaron el ganado y se lo llevaron

a él. Treinta vaquitas que era lo que él tenía, y eso, él tenía 10 de él mismo y veinte que le había dado un terrateniente a la media, para que se ayudara porque era buena gente.

Entonces, ellos llegaron con el pretexto de un solo tipo, con una mochila y dijo que la mujer de Juancho dijo que necesitaba revisar unas marquillas que había visto en el ganado de él, solamente para revisar y que con él no tenía nada, ningún problema ni nada y él dijo: “si es eso, yo voy con mi ganado y regreso porque yo no le debo nada a ustedes”. Entonces él se va con el ganado y resulta que la intención de ellos era condenarlo, le dijeron que él era cómplice, que él era un informante y que ellos tenían información de él y él trató de defenderse.

Resulta que él tenía un hijo, un pelado de 18 años que era muy pegado al papá y el pelado cuando supo la noticia salió corriendo a buscarlo, porque el pelado estudiaba y cuando vino del colegio preguntó y ¿mi papá dónde está? Y los trabajadores, él tenía un trabajador y le dijo, mira, tu papá está así y así y pasó esto, esto, esto y esto; pero a él no le va a pasar nada porque van a revisar las marquillas – por cuál camino cogieron- y él salió en la bicicleta que tenía.

Resulta que cuando él llega estaban torturando al papá y tú te imaginas que llegues y a tu papá lo estén golpeando. Él llegó y alcanzó a darle un puño al tipo que le estaba pegando y enseguida lo cogieron a él y lo fueron a golpear también y eso... también marcó la comunidad. Los asesinaron vilmente, apareció el cuerpo con todas las marcas. Lo puyaron por el estómago como con varilla, con arma blanca, la cara desfigurada, hinchada con golpes y aparecieron muertos en el cementerio de la comunidad que está como a un kilómetro y nosotros buscándolos y buscándolos pidiendo información hasta que un muchacho nos dijo que allá en el cementerio había dos personas. Nosotros fuimos a verificar y estaban ahí.

Nosotros trajimos esos cuerpos, nos encontramos con los paramilitares en el camino. Pararon el carro y que para dónde van, que vamos a recoger los cuerpos que están ahí. Claro, nosotros por temor no les dijimos “ustedes los mataron” ni nada, porque no era tampoco la intención tener más víctimas y estaba asustado. Entonces la tristeza grande es cuando uno llega a esa casa y está el papá y el hijo y ve los muertos tirados ahí. (E3, Líder Asociación Campesina de Pueblo Nuevo, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

La estrategia utilizada por los paramilitares tuvo algunas variaciones dependiendo de la zona de actuación. En el caso de la zona rural del corregimiento de Pueblo Nuevo, no permitieron el desplazamiento de la población, obligaron a la comunidad a quedarse en el territorio y mantuvieron el control sobre la misma en un periodo de cinco años, hasta que se produjo la desmovilización de las AUC.

Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué hace uno aquí? Nosotros tomamos la decisión como comunidad de irnos, toda la comunidad, que había sido lo mejor, pero entonces los grupos paramilitares tenían otros planes. Es más, nosotros convivimos con paramilitares, porque ellos dejaban a dos personas con un radio y un fusil, camuflado entre nosotros con un radio y un arma oculta para que informara si el ejército entraba, qué pasaba en la zona, o sea de informante de ellos y a nosotros nos tocaba convivir con ellos ahí. Entonces, cuando estas personas vieron que teníamos intenciones de dejar el pueblo solo y ese era un sitio

estratégico para mantener a su informante, llamaron y mire que esta comunidad así y así... Vinieron mandos medios, porque tampoco vino el líder; hicieron una reunión con la comunidad y nos prohibieron rotundamente que nos desplazáramos, nos dijeron: “ustedes no se pueden desplazar porque este es un sitio estratégico y el que se mueva de aquí, así sea para Cartagena o para Barranquilla, lo encontramos y lo matamos y si quieren que prueben”. Nos tuvieron en el territorio, o sea, obligados.

Entonces, nosotros estábamos en una zozobra, no podemos irnos y si nos quedamos entonces tenemos que convivir con ellos para que ellos maten al que quieran, uno piensa las cosas y era muy duro.

El ejército pasaba en camiones, no sabemos si era el ejército, si era un grupo de ellos mismos, nosotros veíamos pasar los camiones llenos de militares, pero no sabemos quiénes eran. (E3, Líder Asociación Campesina de Pueblo Nuevo, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

Al ser preguntado por las autoridades civiles, este líder apunta hacia el abandono histórico del Estado, que era suplido por los procesos de autonomía y de autoorganización de las comunidades. En este sentido, las comunidades ven el territorio como un espacio refugio, de abrigo, pero también de libertad para desarrollar sus proyectos vitales.

Estas comunidades están muy abandonadas por las instituciones gubernamentales, municipales; es más, esas comunidades y la mayoría de las veredas son visitadas solo en tiempos electorales, cuando hay política saben que nosotros existimos, apenas se acaba la política, se acabó. Era también como que no había una persona que tomara el liderazgo por miedo, también a ir a denunciar eso ante una personería. Es más, nosotros no conocíamos esos espacios porque no teníamos necesidad de hacer lo que estamos haciendo hoy, de defender esos derechos porque nosotros nos sentíamos satisfechos en medio del abandono. Nosotros buscamos los medios organizativos para ponernos a producir y tener una garantía.

En medio de esas circunstancias teníamos unas dinámicas que nos daban tranquilidad, teníamos una confianza, un tejido social construido por nosotros, por nuestra misma base, y eso no nos permitía a nosotros o no nos dejaba ver los derechos que nosotros teníamos como ciudadanos. Entonces, nosotros no le parábamos bolas, ni que el Estado, ni que el alcalde no nos vigilaba, un apoyo, no, nosotros éramos solos, éramos autosuficientes.

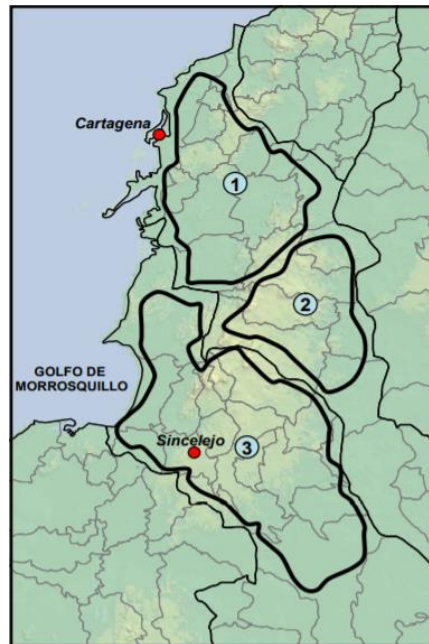
Los paramilitares nos obligaron a quedarnos ahí y a convivir con ellos, cada mes o cada dos meses nos cambiaban la persona. Esto fue hasta el 2005. (E3, Líder Asociación Campesina de Pueblo Nuevo, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

12.3.4. “Nunca se han ido”: la desmovilización de los paramilitares

En el año 2005, las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron en el marco del proceso de negociación con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El Bloque Héroes de los Montes de María, como parte de las AUC, entregaron las armas el 14 de julio de 2005 en el corregimiento de San

Pablo, municipio de Maríalabaja. Se desmovilizaron 594 integrantes, que se encontraban comandados por alias “Cadena”.

Figura 24. Localización frentes del Bloque Héroes de Montes de María



Fuente: Adaptado de *Desmovilización del Bloque Héroes de Montes de María de las AUC*, por Garzón, 2020.

Este Bloque paramilitar estaba compuesto por tres frentes. Primero, el frente Canal del Dique (número 1 en la Figura 24). Su radio de acción abarcaba la zona costera del Mar Caribe del departamento de Bolívar hasta el municipio Carmen de Bolívar. El comandante al mando era Húbert Banquez Martínez, alias “Juancho Dique”. Segundo, el frente Central Bolívar (número 2). Su zona de influencia eran las Sabanas de Sucre y el centro de Bolívar. El comandante era alias “Román Zabala”. Tercero, el frente Golfo de Morrosquillo (número 3), cuyo comandante era alias “Rodrigo Cadena”. El radio de acción era el norte y centro del departamento de Sucre (Garzón, 2020).

Como se ha señalado en diferentes apartados de la tesis, el proceso de negociación con las AUC fue fallido en tanto no se produjo una desarticulación real de las estructuras que sirvieron de base al paramilitarismo. Los procesos llevados a cabo en el marco la Ley de Justicia y Paz tampoco lograron profundizar en las raíces de este fenómeno y en las responsabilidades de terceros en la configuración y mantenimiento de los grupos prosistémicos. Los procesos de justicia, verdad y

reparación fueron del todo insuficientes y las comunidades se sintieron revictimizadas ante la falta de garantías del Estado. Investigaciones realizadas sobre los procesos de desmovilización en Montes de María señalan que:

Existen informes sólidamente documentados acerca del carácter ficticio de la desmovilización. Antes del acto de entrega de armas del Bloque Córdoba y del autodenominado Héroes de Montes de María, se hizo evidente el reclutamiento forzado de jóvenes sin mayor relación con las autodefensas en barrios vulnerables del sur de Sincelejo como Villa Mady, Nueva Esperanza, Puerto Arturo y en el norte en los barrios Altos del Rosario, Villa Orieta II y El Salvador, entre otros. De otra parte, aparecen nuevos desarrollos del paramilitarismo. En escuelas de Sincelejo se advierte el reclutamiento de jóvenes. A los estudiantes se les invita para irse al sur del país y para cuidar cultivos de coca en el departamento de Córdoba. (Bocchi, 2011, p. 40)

En esta dirección también apuntan las organizaciones sociales consultadas en la investigación, las cuales señalan que, aunque los altos mandos de las AUC se desmovilizaron, los mandos medios continuaron las actividades ilícitas en el territorio. De esta manera, se produjo una reconfiguración del fenómeno paramilitar en Montes de María a través de la conformación de grupos reducidos que se disputaron el control de los corredores estratégicos del narcotráfico, sin un mando central único. Estas nuevas estructuras fueron las denominadas Bacrim.

No obstante, después de la desmovilización, la presencia armada se redujo en la Serranía de San Jacinto, pero la “nueva” generación de paramilitares conservó el poder político y económico. Actividades como el “chance (lotería), la inversión en construcción, así como en la influencia en la administración local. Además, se mantiene el tráfico de estupefacientes a través del Canal del Dique” (Bocchi, 2011, p. 41). En los municipios de San Onofre, Tolú Viejo, Carmen de Bolívar aparecieron grupos como “los de Barranquilla”, “los 40”⁴⁵², “Las Águilas Negras” y la “Oficina de Cobro de Envigado”. Así es problematizado por uno de los líderes entrevistados:

Sobre las bandas emergentes han estado varias en esa zona [departamento de Sucre], están los “Urabeños”, están los “Rastrojos” y los “Paisas”, los tres están ahí. Como ese era un corredor de coca, ellos están peleándose por ese territorio porque ellos quedaron mal acostumbrados a ganarse la plata fácil.

Yo creo que, si el gobierno no las combate, esto se va a poner más feo [silencio]. Soy uno de los que digo que no doy una vacuna, yo si los puedo matar los mato y, si no, los denuncio, porque si yo les pago, entonces es patrocinar a esos bandidos, porque si les

⁴⁵² La banda “Los 40” fue heredera del poder del comandante paramilitar desmovilizado “Jorge 40”, actuó en la Región Caribe; sin embargo, las disputas con otros grupos armados como “Los Paisas” y “Los Nevados” mermaron la organización. Su principal cabecilla alias “Salomón” fue extraditado a Estados Unidos en el 2008. Entre los miembros de la banda se encontraban funcionarios públicos de la Policía Nacional, DAS, CTI, Ejército y Armada Nacional (Verdad Abierta, 2008).

pagas hoy, les vas a tener que pagar mañana, como tú vas a tener que trabajar para dárselo todo a esa gente. Es una injusticia. (E4, Líder OPD Montes de María, comunicación personal, 03 de diciembre de 2012).

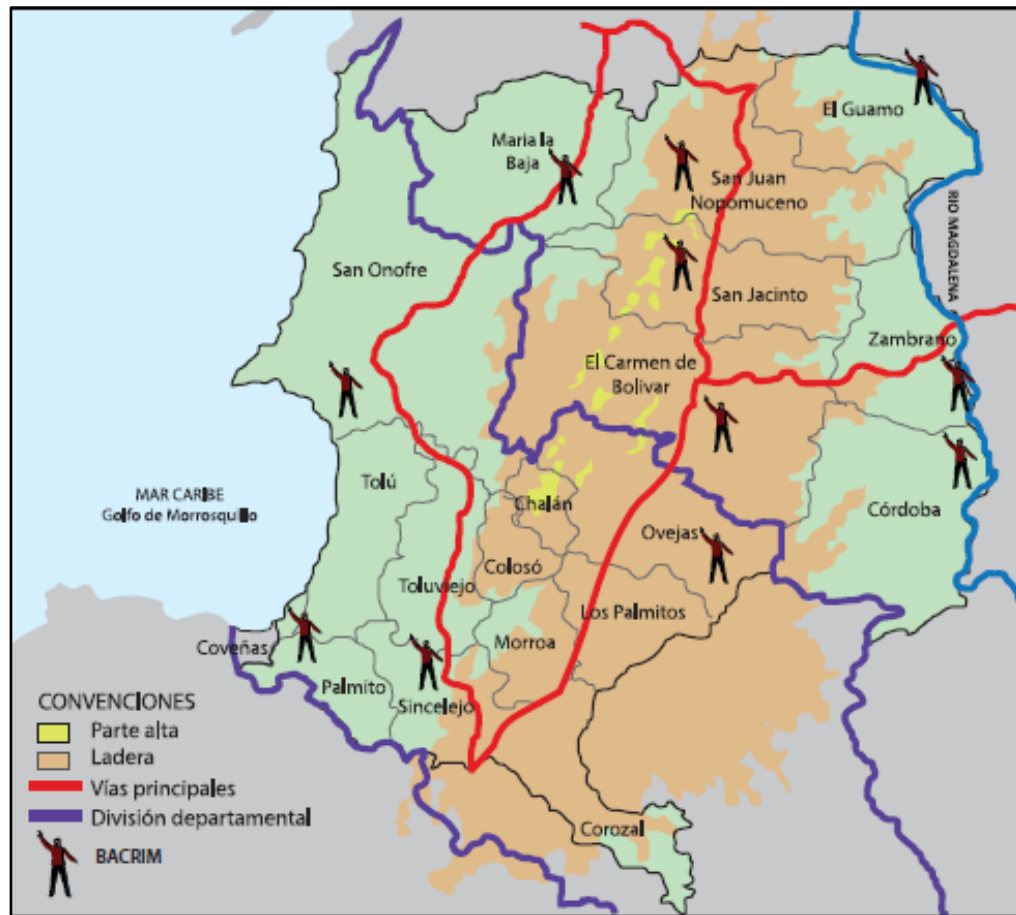
En la Tabla 11, vemos cómo los paramilitares de esta “nueva” generación estaban activos en once de los quince municipios de Montes María.

Tabla 11. Los neoparamilitares Bacrim en los Montes de María

Depto.	Municipio	Los Urabeños	Los Rastrojos	Las Águilas Negras	Los Paisas	Oficina de Envigado
Sucre	San Onofre	*		*	*	
	Toluviejo	*			*	
	Ovejas	*		*		
	S.A Palmito	*			*	
	Córdoba	*	*	*	*	
	El Carmen de Bolívar	*	*	*	*	
	El Guamo	*			*	
Bolívar	Zambrano	*				*
	San Jacinto	*				
	S.J. Nepomuceno	*				
	Maríalabaja		*		*	

Fuente: Adaptado de *Montes de María: bajo el fuego* (p. 319), por CODHES et al., 2020.

Figura 25. Ubicación Bacrim Montes de María



Fuente: Adaptado de *Montes de María: bajo el fuego* (p. 319), por CODHES et al., 2020.

De esta manera, la desmovilización de 2005, mal diseñada y con intereses políticos de fondo, generó una reconfiguración del conflicto armado en la subregión, con una multiplicidad de actores irregulares, sin un mando central y actuando en función de diversos intereses. Al respecto, es importante señalar que, en los testimonios de los líderes y lideresas consultadas, se percibe que uno de los objetivos de este tipo de grupos seguía siendo las organizaciones sociales, por su trabajo en la defensa del territorio y las reivindicaciones de reparación y restitución de tierras.

A finales de la primera década del 2000, las acciones de estos grupos se incrementaron, especialmente los asesinatos colectivos, las amenazas a líderes y lideresas de las organizaciones sociales populares, miembros de movimientos políticos de izquierda y campesinos reclamantes de tierras. Así es problematizado por las personas entrevistadas:

“Juancho Dique” se desmovilizó, pero dejó a los mandos medios. Cuando se desmovilizan ya dejan de hacer parte activa de la comunidad, pero sí tenían grupos que estaban ahí y tenían sus fincas. En la finca donde estaba “Juancho” quedaron los mandos medios. Eso es en la zona de Maríalabaja, ellos eran los que conocían las comunidades, quedaron como testaferros de esas tierras. Entonces, él desmovilizó una parte y dejó la otra parte.

Cuando se van los paramilitares llega el ejército, que es lo que uno no ve. Entonces, cuando ya la cosa se calma un poco, yo me fui, yo me tuve que ir porque mi papá con el nerviosismo me dijo “vete, vete porque no quiero que ustedes se críen aquí en este espacio, vete para Cartagena”. Yo me fui para Cartagena por cinco años. Yo extrañaba mucho mi comunidad, yo soy un tipo de pueblo, cuando llegaban las horas de la tarde y estaba llegando la nochecita yo extrañaba mi territorio. (E3, Líder Asociación Campesina de Pueblo Nuevo, 2010)

No estamos seguros de que se esté moviendo en el territorio, pero muchas personas hablan de ver cosas extrañas moviéndose por ahí. La gente identifica a los guerrilleros porque vivieron mucho tiempo con ellos metidos ahí, así que creo que no son de la guerrilla.

También hay una sensación de mucha vigilancia. Se desmovilizan estas personas, pero se quedan los mandos medios. “Juancho Dique” se va a la cárcel pero la mayoría permanecen en el territorio. Están ahí y son informantes de ellos. El mismo Juancho dice en la audiencia de reparación de Mampuján que uno de sus comandantes, Pedro Vázquez, era policía. Lo matan porque le estaba pidiendo que le diera información sobre quiénes eran los que seguían delinquiendo en la zona. Y, de hecho, han seguido muertes selectivas en la zona durante todo este tiempo. Muchas de las muertes están relacionadas con los paras, son ajustes de cuentas. También las víctimas de los paras. Además, hemos escuchado que se mueve mucho el tema del narcotráfico y el mismo “Juancho” también dijo que hay algunos ganaderos que también están haciendo fuerza en la calle para mantener estructuras armadas.

De hecho, les dicen a los líderes: “cuídense porque hay gente en el territorio, todavía hay gente en el territorio que puede hacer mucho daño”. Entonces, la sensación también es que uno escucha hablar a los líderes, a las personas que están empujando el proceso y dicen: “pero yo no me siento en condiciones de hablar, yo no siento que esté en la mejor posición para hablar. No me siento seguro. No me siento tranquilo”. El discurso da mucho miedo también, a pesar de que las dinámicas de conflicto han cambiado. (E7, Lideresa del Comité de Pescadores de Puerto Santander, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

En el Carmen de Bolívar se escuchan cosas que son preocupantes. Se han presentado muertes selectivas, no hay tranquilidad. Los paras no se desmovilizaron del todo, hay nuevos grupos, las llamadas BACRIM, aunque el gobierno lo niegue y diga que es delincuencia común. La gente todavía tiene miedo. Uno ya no sabe a quién acudir, el gobierno de acá es corrupto; además, está todo el problema de la palma de aceite. (E6. Lideresa Junta de Acción Comunal Barrio Los Ángeles, El Carmen de Bolívar, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

En esta misma dirección apunta la investigación *Montes de María: bajo el fuego*, en la que se recogen testimonios de la población en donde se señala el desmonte parcial de las estructuras paramilitares y los fallos del proceso de desmovilización, que dieron lugar a la creación de grupos armados en las zonas en donde actuaba el Bloque Héroes Montes de María:

Líderes y lideresas montemarianos del Encuentro de validación social de San Onofre, María La Baja y Toluviejo (24 de abril de 2019) consideran que en contraposición a lo que debió haber sido su entrega en la desmovilización y desarme, las armas de los paramilitares fueron escondidas o vendidas, otras se utilizaron por los grandes narcotraficantes, o están siendo utilizadas por los nuevos grupos paramilitares. (CODHES et al., 2020, p. 315)

De esta manera, en el territorio montemariano continúan la violencia, las prácticas de dominio parcial del territorio, el control social de las comunidades a través de diferentes mecanismos como la vigilancia continua. Los habitantes de la región manifestaron en las entrevistas, en los talleres y en las conversaciones informales una fuerte preocupación por estos hechos, que se relacionan no solo con el narcotráfico, sino también, con la profundización de los proyectos extractivos como la palma y los minero-energéticos. Asimismo, aunque manifiestan el compromiso por una salida negociada del conflicto, a través de los diálogos con las FARC, son precavidos por los resultados de la negociación. Desde nuestra perspectiva, la desconfianza obedece a que los habitantes de Montes de María ha sido una población históricamente excluida, social y económicamente, el Estado tiene una deuda con las comunidades que no ha sabido o querido reparar⁴⁵³.

⁴⁵³ Esa “nueva” generación de grupos paramilitares fue un fenómeno que se presentó en diferentes zonas del país, pero de manera particular, en la Región Caribe debido al dominio que llegaron a tener las AUC. Para el caso del departamento del Magdalena, una investigadora de la Asociación Tierra y Esperanza describe de la siguiente manera la situación después del proceso de desmovilización:

Los jefes paramilitares se van, pero quedan los mandos medios y se dispersan, cada cual al irse la cabeza peleando la supremacía, y entonces empieza como esta fase reciente que es de disputas entre los diferentes grupos.

Por ejemplo, hay tres hijos de Hernán Giraldo, los tres se están matando entre ellos, pero son los mismos. Los políticos locales están esperando a ver quién gana, para acomodarse a la situación. Los que han sacado más utilidad de toda esta situación son las clases política y económicas de estos departamentos, esa gente está llena de plata y montadas en los proyectos hoy estratégicos que les van a dejar toda clase de utilidades de aquí para adelante, estas familias coronaron los negocios de su vida. Ahora bien, los grupos armados se enfrentan entre ellos, pero también hacen acuerdos sobre los territorios. Son los mismos que estaban antes, sólo que agrupados de una manera distinta sin la unidad del mando que representaba Hernán o Jorge 40, o Mancuso. (E1, Asociación Tierra y Esperanza, comunicación personal, 19 de diciembre de 2010)

CAPÍTULO 13. Conflictos socio-territoriales: tierras, monocultivos y explotación minero-energética

Las organizaciones sociales populares sitúan el conflicto por la tierra y el territorio como uno de los ejes centrales de la conflictividad socio-territorial en Montes de María, el cual tiene profundas raíces históricas, y se sitúa como un elemento articulador tanto del conflicto armado como de los demás conflictos presentes en la subregión.

En las luchas campesinas del siglo XX, la agenda política de las organizaciones y los repertorios de confrontación se centraron en la tierra. No obstante, en las últimas décadas los movimientos populares del mundo rural se han centrado en el territorio, como una categoría más amplia, que responde a las nuevas configuraciones que se han dado en el campo como consecuencia del surgimiento de nuevos conflictos. Así es problematizado por una de las personas entrevistadas:

El territorio para mí es todo, porque ahí está todo. Nosotros estamos trabajando un concepto de territorio muy integral, también desde la Corporación de Desarrollo Solidario. El territorio no es solamente ese pedazo de tierra donde la gente está cultivando. En el territorio nosotros vemos muchas dinámicas, los cuerpos de agua, los ríos, los ciclos de los cultivos, las actividades que se producen alrededor de la siembra, de la pesca, etc. El territorio tiene sus dinámicas y tiene sus formas, la cultura, la música, la forma como hablamos, como hacemos las cosas. La gente ya está empezando a verlo desde ahí, a ver que el territorio es más que tierra, el territorio es identidad, el territorio también nos permite protegernos y todo eso hace parte del territorio, hace parte de las dinámicas sociales.

Está conformado por muchas cosas; está conformado por dinámicas individuales, está conformado por dinámicas colectivas. La forma de trabajar en el territorio ha cambiado en los últimos años por todos esos conflictos que se han presentado en Montes de María.

En las comunidades rurales no se manejaba plata, no tenías para pagar un jornal. Yo voy, le trabajo a mi amigo y el al día siguiente va y me trabaja a mí, en mi parcela, eso es una forma de trueque. Pienso que también se ha perdido muchísimo. Todas esas dinámicas de la economía campesina hacían que se crearan relaciones de compadrazgo, que la gente tuviera lazos más estrechos. (E7, Lideresa del Comité de Pescadores de Puerto Santander, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

A propósito, me parece relevante rescatar las palabras de Carlos Ancizar Rico, un dirigente campesino histórico (primer presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y presidente de la Federación de Acción Campesina), en donde señala la tierra como una parte del territorio, en el que se engloba un conjunto de elementos que permiten el desarrollo de los proyectos de vida de las comunidades que habitan el campo colombiano.

Nos despojan no tanto de la tierra en sí, que es parte del territorio. Territorio que es agua, que es bosque, que es aire, que es población, que es donde construimos nuestra propia cultura, en definitiva, la vida misma. Por tanto, el despojo para el indígena, para el campesino, para el negro, es matarlo lentamente, es condenarlo a una muerte lenta. Pero al modelo de desarrollo que hoy impera en el mundo, que se ha construido, no le importa eso. Le importa concentrar capital. (E2, Líder campesino Federación Acción Campesina Colombiana –ACC-, comunicación personal, 17 de diciembre de 2010)

En esta dirección, las organizaciones que confluyeron en la Mesa Intersectorial y de Concertación de Montes de María (MIC), construyeron una propuesta colectiva denominada *En busca de la permanencia digna en el territorio*, uno de los ejes centrales de la misma era la conformación de territorios interculturales. En el documento de la propuesta, las organizaciones hacían referencia a los procesos identitarios espaciales, que implican unas formas de reproducción social particulares:

Nuestra presencia en el territorio es ancestral, lo que ha permitido construir relaciones históricas de convivencia, de uso y aprovechamiento del suelo y los recursos naturales. Montes de María ha sido y es un territorio diverso e intercultural. Nuestras prácticas sociales y económicas se han caracterizado históricamente por la agricultura familiar (incluida la pesca) y la producción diversificada de alimentos, lo que también ha contribuido a la construcción de nuestra identidad, cultura, habilidades y conocimientos. (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2017, p. 342)

De esta manera, la categoría de territorio parece haber desplazado a la parcela y a la hacienda, categorías analíticas de luchas anteriores (Ñáñez y Salgado, 2014). Estas transformaciones en las agendas políticas de las organizaciones deben ser leídas como una ampliación en su horizonte de justicia, en donde la democratización de la tierra sigue teniendo un papel capital en sus reivindicaciones, pero debe estar acompañada de las garantías necesarias para desarrollar un modelo de propio, según la cosmovisión de las comunidades (Escobar 2014a).

Precisamente, la categoría de territorio articula esos diversos ámbitos que permiten la construcción de modelos propios para la producción material y la reproducción social de las comunidades. Es así como las organizaciones están planteando el sostenimiento de la vida, frente a las dinámicas del capital nacional y global, que han profundizado viejos conflictos y creado nuevos, en donde todo es susceptible de ser saqueado, extraído y mercantilizado⁴⁵⁴.

⁴⁵⁴ Arturo Escobar (2014a) señala que la defensa de la vida de los movimientos que tienen una base territorial se estructura a partir de la resistencia a la consolidación de la modernidad, como un modelo que homogeniza las diferentes formas de ser, vivir, existir y sentir que separa al hombre de la naturaleza, que crea lecturas binarias de la realidad. En este sentido, la sostenibilidad de la vida que plantean las organizaciones que habitan el campo

En este sentido, la disputa por el control de la tierra y del territorio en Montes de María puede entenderse también como una confrontación entre diferentes modelos de desarrollo. Por una parte, encontramos un modelo de desarrollo rural centrado en la maximización del capital, con características extractivas y depredadoras, en favor de unos intereses de determinadas élites políticas y económicas. Por otra parte, un modelo de organización territorial en donde priman la defensa de la vida, las relaciones comunitarias, la naturaleza y las formas de relación social mediadas por la reciprocidad, la solidaridad, el intercambio, en definitiva, la construcción de comunidad.

En el caso que nos ocupa, el primer modelo se ha mostrado hegemónico, impuesto a través de diferentes ciclos de violencia. En donde el conflicto armado ha sido funcional para la imposición de esa visión dominante del desarrollo, la cual se ha transformado según las diferentes dinámicas de acumulación de capital. En Montes de María los ciclos de violencia están relacionados con unos procesos históricos de desigualdad en el acceso a la tierra y con fallos en el reconocimiento de derechos de los sectores populares. De esta manera, se articula violencia, desigualdad y pobreza. A continuación, vamos a abordar esos conflictos socio-territoriales señalados por las organizaciones consultadas que nos permitirán comprender las razones por las cuales la guerra fue tan cruenta en la Serranía de San Jacinto.

13.1. La reconfiguración del espacio. Una contrarreforma agraria armada

Las luchas campesinas de las primeras décadas del siglo XX, manifestadas en la creación de las ligas y sindicatos y de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) a finales de la década los sesenta obligaron a la promulgación de una serie de leyes que abordaron de manera incipiente y fallida una reforma agraria en el país, pero que permitieron la titulación de algunas tierras a campesinos y pequeños propietarios⁴⁵⁵. Es importante señalar que las acciones desplegadas por la

montemariano se opone a ese modelo y plantea una recuperación de lo local, de la agricultura familiar, la armonía con la naturaleza, respetando los ciclos que se desarrollan en la misma y que se ven alterados por los “nuevos” negocios rurales, los monocultivos a gran escala, la explotación minero-energética, la extracción de los recursos básicos para la sobrevivencia como el agua, etc.

⁴⁵⁵ La historia de las luchas campesinas en Montes de María data de las primeras décadas del siglo XX con la consolidación de un modelo de hacienda y de economías de enclave, que generó un fenómeno de proletarianización del campesinado y un proletariado incipiente que daría lugar a la conformación de las primeras ligas campesinas y sindicatos (Fals Borda, 2002 [1986]). Estas primeras formas de organización social se vieron interrumpidas en la década de los cincuenta por el periodo denominado “La Violencia” (Múnera, 1998). En este lapso de tiempo se

ANUC colocaron en la agenda política nacional las demandas del campesinado y los problemas asociados a la concentración de la tierra.

La presión ejercida por el movimiento campesino movilizó las fuerzas retardatarias del país, que a través de la violencia y de la presión política lograron obstaculizar las aspiraciones de una reforma agraria integral, debido a la presión ejercida por las élites regionales, en particular, los terratenientes y hacendados, que con la firma del Pacto de Chicoral, en 1972 bajo el gobierno del conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974), se buscaba impedir el movimiento campesino y obstaculizar la reforma agraria. Este acuerdo fue firmado por las élites de los partidos políticos tradicionales y los principales terratenientes del país.

No obstante, la ANUC en la década de los setenta llevó a cabo varias “recuperaciones” de tierras, en particular, en el departamento de Sucre. El movimiento campesino se tomó los latifundios más significativos en número de hectáreas en la región. “De esta manera se hicieron a cerca de 45 mil de 850 mil hectáreas que estaban en poder de los grandes propietarios” (CODHES; FUCUDE; Corporación Opción Legal; Universidad Tecnológica de Bolívar; Grupo Regional de Memoria Histórica, 2020, p. 31). Estas acciones llevaron a que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) iniciara un proceso de titulación de tierras sobre 546 fincas en parcelaciones colectivas y empresas comunitarias (Verdad Abierta, 2010a).

En los siguientes testimonios de líderes campesinos se señala el proceso y las tensiones generadas por las titulaciones. Asimismo, se destacan las dinámicas de relación comunitaria entre diferentes núcleos familiares, en la que se significa esa idea de propiedad desde el ejercicio de lo común (Gutiérrez, 2017).

Las primeras parcelas las dio el INCORA, fue la primera reforma agraria. Los organizadores de la época se llamaban usuarios campesinos. Fueron pocos los que tuvieron acceso a ellas, porque la tradición de antes ¿cuál era? Ruco tenía 200 hectáreas de tierra, ‘oye Ruco regálame un pedazo para hacer tabaco, para sembrar yuca, para sembrar esto’ y te daban la que tú quisieras. Nunca se pagó un peso porque aquí era la costumbre. Aquí uno le dice la contrapartida, dame un poquito de pasto para echarle al grano del año que viene o al de dos o tres años, o sea, siempre se vivió con esa tradición y se conservaba. (Líder campesino Las Palmas, como se citó en Salgado, 2017, p. 10)

profundizaron los procesos de concentración de la tierra a través de métodos violentos, desplazando a los campesinos a las zonas de ladera, mientras que los terratenientes se ubicaron en las tierras planas, más aptas para los cultivos. También se consolidó en la subregión la agricultura capitalista a través de los monocultivos de algodón, arroz, ajonjolí, sorgo y millo. En estos años, el movimiento campesino llevó a cabo tomas de tierras en los municipios de Los Palmitos, El Carmen de Bolívar, Toluviejo, San Pedro y Zambrano. Se destaca la recuperación de la Hacienda La Europa (Zamosc, 1986). Estas acciones fueron antecedentes a la creación de la ANUC y presionaron a una élite política reformista para la aprobación de la Ley 135 de 1961 y la Ley 1 de 1968.

Estas tierras fueron una invasión cuando la tierra era baldía, que nadie la trabajaba hace treinta y cinco años. Se reunió la gente con ganas de trabajar. Era pura montaña y había alguien que la quería tener, pero no la tenían explotando, estaban solas. De los años setenta y cinco que entró el campesino a estos lugares, el INCORA si veía un territorio que estaba solo, que no estaban pagando impuestos, ellos mismos se encargaban de organizar al campesino y decían: “méntanse para hacer que esas tierras sean de ustedes”. También ayudó la ANUC y esos que decían ser dueños comenzaron a maltratar al campesino; algunos murieron por eso, otros los metieron presos por diez años, otros no volvieron, otros se aburrieron y vendían los puestos por doscientos mil, quinientos mil. Aquí hay muchos que lucharon y aún están, otros se fueron y otros que antes del desplazamiento lograron comprar. Y otros que compraron después del retorno porque los luchadores no quieren quedarse aquí y venden su puesto. (Líder campesino Palizua, como se citó en Salgado, 2017, p. 10)

Estos procesos de titulación de tierras continuaron en las décadas posteriores. No obstante, se vieron obstaculizados por las acciones coercitivas de las clases económicas dominantes, los grupos paramilitares y narcotraficantes que, ante la presión ejercida por el movimiento campesino en los momentos de mayor auge organizativo, implementaron repertorios de violencia que llevaron a una contrarreforma agraria armada. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en su investigación *La tierra en disputa: memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe: 1960-2010*, señala que:

En la memoria de los campesinos hay importantes éxitos en cuanto a sus demandas por el acceso a la tierra, pero a la vez hay insistentes derrotas en el contexto de la violencia y también de la acción institucional, pues la pérdida de tierras que alguna vez fueron producto de lucha, se ha generado, en muchas ocasiones, con apoyo en procesos administrativos legales. (CNMH, 2010, p. 485)

Es importante señalar, que la llegada de los primeros grupos de narcotraficantes a la Serranía de San Jacinto en los años ochenta estuvo acompañada por la compra de importantes extensiones de tierra en zonas estratégicas para el comercio de las sustancias ilícitas. Según la investigación realizada por Alejandro Reyes (2009), los municipios en donde se efectuaron las mayores adquisiciones en ese periodo de tiempo fueron los ubicados en la zona de costa: Tolú, Toluvié y San Onofre, lo cual les permitió abrir un corredor para la salida de la droga por el Golfo de Morrosquillo. En los años de auge del paramilitarismo, en estos municipios se instaló el Bloque Héroes de Montes de María, en particular el frente Golfo de Morrosquillo⁴⁵⁶.

⁴⁵⁶ Según el CNMH, el Frente Golfo de Morrosquillo ejerció un fuerte control social sobre la vida cotidiana de la población, configurando “un nuevo y complejo orden social que revistió características racistas, machistas y

La compra de tierras por parte de los narcotraficantes continuó en la década de los noventa, momento en el que aparecieron las convivir en Montes de María. En ese periodo, se perpetraron las primeras masacres y los actos de violencia en contra de las comunidades adquirieron mayor sistematicidad. Ejemplo de ello, es la Convivir Montesmar comandada por Miki Ramírez. Este personaje adquirió la Hacienda El Hacha en Zambrano y cometió la masacre de Pichilín en el municipio de Morroa, en diciembre de 1996, que se perpetró con el beneplácito de la Fuerza Pública. En dicha masacre fueron asesinados once campesinos (Verdad Abierta, 2010a). Como señalamos en el capítulo anterior, muchos de estos grupos surgieron y actuaron al amparo de terratenientes, ganaderos y políticos que veían en la titulación de tierras por parte del INCORA, las acciones campesinas, los procesos de paz y las reformas políticas una amenaza para el orden dominante⁴⁵⁷.

De esta manera, la llegada de narcotraficantes y la compra de tierras representaron el inicio de un retroceso en los objetivos alcanzados por el movimiento campesino en años de luchas sociales. El gobierno en la década de los noventa y en el inicio del nuevo siglo poco ha hecho para avanzar en la democratización de la tierra. En una investigación realizada por Daniel Marengo para la ANUC, se señala que el Estado solo ha entregado desde los años setenta a los campesinos de la Serranía de San Jacinto, 134.230 ha. de las cuales solo 12.000 se han repartido en los últimos 25 años (Verdad Abierta, 2010b).

Alejandro Reyes afirma que, en la década de los noventa, con la llegada del paramilitarismo a la Serranía de San Jacinto, se expulsaron aproximadamente a 80 mil familias campesinas. La violencia más extrema se produjo en los municipios en donde hubo una mayor movilización campesina y en las zonas en las que los narcotraficantes adquirieron tierras en la década anterior, se destacan los municipios de Ovejas, El Carmen de Bolívar, San Onofre, Maríalabaja y Córdoba. El investigador señala que se presentó una “revancha tardía de los grandes terratenientes para castigar la lucha campesina veinte años después” (Verdad Abierta, 2010b).

heteronormativas; quienes lo quebrantaban eran fuertemente reprendidos con repertorios de violencia que incluían el trabajo forzoso, el escarnio público, la violencia sexual, la tortura y la muerte” (CNMH, s.f.) En esta zona se instaló el centro de operaciones de alias “Cadena” y sus lugartenientes, convirtiendo la zona en un verdadero escenario de muerte y terror. En particular, en el corregimiento de El Palmar, en donde aplicaban todo tipo de sanciones sobre la población y, en particular, sobre las mujeres y la población LGBTI.

⁴⁵⁷ En la década de los noventa, con la guerrilla de las FARC fortalecida y en plena expansión, algunos terratenientes y ganaderos se vieron en la obligación de vender sus tierras al INCORA, a unos precios relativamente bajos por la situación de violencia (Verdad Abierta, 2010b)

Para terminar este epígrafe, nos parece pertinente recuperar el testimonio de un líder campesino del corregimiento de Pueblo Nuevo, municipio de Maríalabaja, en el que describe el proceso de recuperación de las fincas el Cascajalito y el Cucal. Tanto el proceso de venta de las tierras al INCORA, como la parcelación, es producto del trabajo organizativo de los campesinos de la zona. Por otra parte, en el momento en que se realiza la operación, las FARC se encontraban en un momento de expansión territorial, en el que se produjo una fuerte presión sobre los terratenientes y ganaderos. En el testimonio, se aprecia el valor del trabajo mancomunado, sustentado en lazos de solidaridad y compadrazgo, dirigidos a mantener la unión de la comunidad a través de la economía campesina. Llama la atención, la añoranza a ese territorio perdido por la violencia, es anhelo de refugio, de hogar, siendo esta una de las principales afectaciones que señalan los campesinos, no solo la tierra para trabajar, sino las identidades y sentidos de pertenencia espaciales.

Al respecto del relato del dirigente campesino, son pertinentes las palabras de Gonzalo Sánchez en la introducción del libro *La tierra en disputa*: “Porque si de génesis se trata, en el principio fue el despojo y después fueron las recuperaciones” (CNMH, 2010, p. 14).

Mi papá hacía parte de la ANUC, yo asistía a las reuniones en representación de él porque por mí mismo no podía, no tenía documento de identidad. Entonces, con este fin fue creada la organización, de recuperar tierras para la productividad campesina, porque en las comunidades de la región de Maríalabaja la tierra estaba en manos de los terratenientes. Pero, bueno, se hizo este proceso, se lograron varias metas y una de ellas fue la recuperación de la finca Cascajalito en la zona de Pueblo Nuevo. Era del terrateniente Nelson Saldarriaga, pero la iniciativa nace del mismo señor. Él, a pesar de ser terrateniente potentado, tenía una visión también hacia la comunidad, era muy querido por la comunidad y él nos prestaba tierras para que trabajáramos, pero él nos dijo que entonces estaba siendo asediado por las FARC y el ELN.

Entonces, él les comentó a los líderes comunitarios que estaba en disponibilidad de buscar una negociación con el INCORA, porque le ofrecía garantías. Él quería era que esas tierras le quedaran a la comunidad, en vista de eso se nos facilitaron las cosas, intervinimos y se buscó la negociación con INCORA y se dieron las cosas. Ahí se recuperaron 280 hectáreas de tierra, las cuales en un principio se trabajaron colectivamente. Éramos muchos en la organización y no alcanzaban esas tierras para todos, para una comunidad agrícola familiar adecuada, para tener el sustento. Entonces se pensó en otra finca vecina, que era la finca del señor Rafael Vergara.

Entonces, se beneficiaron 16 familias, no: 14 familias en un principio, 14 familias con parcelas de 20,22 hectáreas de tierra. Pero con un compromiso, que nosotros, el mismo nivel organizativo tuviéramos una visión de compromiso con los compañeros que no tenían tierra. Cómo nos organizamos nosotros, las tierras fueron adquiridas y repartidas, cada quien manejaba su pedacito, pero hicimos un trato común entre nosotros: si fulano es dueño de la catorceava parte de la finca Cascajalito, con qué fin, con el fin de que no se vendieran

las tierras, de que no se hiciera una negociación sobre las tierras y proteger el territorio. Nosotros llamábamos sobrecupo, ¿a qué le llamábamos sobrecupo? Un beneficiario titular de la tierra que tenía a su cargo dos personas que no tenían tierra pero que tenían el derecho de trabajar por la misma lucha que se venía haciendo. Entonces, trabajaban tres personas, pero el titular era uno, entonces se dio la otra lucha de la finca de Rafael Vergara.

A diferencia de la finca el Cascajalito, ahí sucedió una lucha bastante fuerte porque el señor no quería vender las tierras; los compañeros estuvieron presos, afortunadamente yo, como te decía, era menor de edad. Hicieron una huelga porque el movimiento campesino de la ANUC era una organización social de base y que se radicaba en que cada comunidad tenía un comité. Entonces, cuando le sucedía algo a algún comité, se agrupaban y se hacían protestas y marchas para lograr el objetivo y así se logró, se tomaron la alcaldía, se llevaron hasta los pelados. No tuvieron más remedio que soltarlos, y ahí sí vamos para la tierra, nos vinimos de lleno y el terrateniente no tuvo más que negociar. Él negoció las tierras, pero ahí se vinieron inconvenientes... El INCORA intervino y compró las tierras y las adjudicó, eso era una cantidad inmensa de tierras porque de ahí salieron 62 familias beneficiadas. Se dividieron por partes, porque esa finca era tan grande que cubría una parte de tierras bajas que eran más apetecidas y, por lo tanto, eran más caras, más costosas. Entonces, a los campesinos que les tocaron en tierra baja les tocaron de a 14 hectáreas y las que estaban en tierra quebrada de a 16. Tenían dos hectáreas más para compensar⁴⁵⁸.

Era una finca inmensa y ganadera. Todos los días se sacaban 13 cantinas de leche de 40 litros, esa era la finca que más le producía, aunque él tenía varias fincas. En total se repartieron 62 parcelas. Hay que decir también que cuando se obtienen las parcelas se obtiene también crédito productivo para la compra de ganado y empezar a trabajar en el campo.

Bueno, comenzamos el trabajo, algunas personas empezamos a dar cuotas de las parcelas y cuotas del crédito con la entidad bancaria y empezamos a trabajar de una manera chévere, había unas dinámicas campesinas, eso yo lo recuerdo y me da nostalgia y... A veces duele recordar uno eso, pero había unas dinámicas campesinas que permitían que las comunidades o las personas que no tenían tierra trabajaran igual que el que tenía, que el titular. Lo importante era que la persona fuera buena y que fuera conocida de nosotros, el tema de la confianza era importante. A veces llegaba gente de comunidades que nosotros no conocíamos y también trabajaban la tierra, pero eso también nos perjudicó a nosotros, la tanta buena fe también nos perjudicó porque a veces tú no sabes con qué intenciones venían. Se filtra gente, o sea, tú no sabes si yo tenía algún grupo armado, no sabes si vengo a hacer labores de inteligencia, a sacar información, o sea, no se sabe; y nosotros con la ingenuidad de nuestra base pues no le parábamos bolas a eso, porque no habíamos vivido lo que nos tocó vivir después. (E3, Líder Asociación Campesina de Pueblo Nuevo, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

⁴⁵⁸ Este líder campesino no se refiere abiertamente a lo sucedido años después de la recuperación de la finca el Cucal. En 1997, un grupo de hombres armados entró a la finca y reunió a todos los campesinos, los acusaron de haber obtenido los predios con ayuda de la guerrilla. Torturaron y asesinaron al dirigente campesino de la ANUC Máximo Ariza, señalando su vinculación con el movimiento insurgente. Los habitantes de la zona afirman que cuando se produjo la recuperación, el dueño de la finca los amenazó diciendo que esa “se la iban a pagar” (Entrevista líder campesino, tomado de Mercado, 2017, p. 218).

13.2. El despojo como reconfiguración violenta del espacio en Montes de María

La categoría de despojo ha sido utilizada en Colombia desde diferentes ámbitos. Los movimientos sociales y políticos la han empleado para referirse a una forma sistemática de saqueo a la que han estado sometidos los habitantes del campo⁴⁵⁹. Por otra parte, en el ámbito académico, es un concepto que ha sido abordado desde diferentes disciplinas con una importante trayectoria de investigación.

Desde un enfoque clásico del concepto, el despojo es producto de las relaciones de poder y el acceso a la propiedad, en donde el Estado privatiza los medios de producción para la acumulación y los separa de los productores (De Angelis 2011; Marx [1867] 1976, tomado de Camacho, 2017, p. 124). Una versión actualizada desde esta perspectiva, en el marco de las dinámicas vigentes del capital, la encontramos en los trabajos del geógrafo David Harvey (2003), que acuñó el término acumulación por desposesión, muy extendido en el pensamiento crítico latinoamericano. El concepto de despojo también se ha utilizado para analizar los fenómenos de acaparamiento de tierras, los procesos de cerramiento de bienes comunes como son el agua o los bosques o las implicaciones en las cadenas agroalimentarias. En el marco de estas investigaciones, es relevante señalar el trabajo de Silvia Federici desde un enfoque de género (Federici, 2010 [2004]).

Para este apartado vamos a tomar como referencia el concepto de despojo elaborado por el grupo de trabajo Tierra y Conflicto del Grupo de Memoria Histórica, ya que consideramos que es útil para comprender el contexto de violencia en el que se ha dado este fenómeno en Colombia, entendiendo que no es un hecho puntual, es un proceso que tiene diferentes implicaciones, manifestaciones e involucra a diversos actores, a saber:

Puede considerarse como despojo aquel proceso por medio del cual involuntariamente un grupo o un individuo se ven privados material y simbólicamente por fuerza o coerción, de bienes muebles e inmuebles, lugares y/o territorios sobre los que ejercían algún uso, disfrute, propiedad, posesión, tenencia u ocupación para la satisfacción de necesidades. El despojo es el proceso mediante el cual, a partir del ejercicio de la violencia o la coacción,

⁴⁵⁹ La referencia a la categoría del despojo es más recurrente en estos ámbitos con el desarrollo legislativo para el reconocimiento de los derechos de las víctimas, en particular, la Sentencia T-04 del 2004 sobre desplazamiento forzado, los trabajos adelantados para la restitución de bienes materiales en el marco de la Ley Justicia y Paz, la Ley 1448 de 2011 de Restitución de Tierras y la creación de la Unidad de Restitución de Tierras (Morris, 2017, p. 28). Es importante aclarar que las organizaciones campesinas han trabajado las implicaciones del despojo desde hace ya bastante tiempo, a través de la denuncia de los hechos violentos acontecidos en el campo y en sus agendas políticas de democratización de la tierra.

se priva de manera permanente a individuos y comunidades de derechos adquiridos o reconocidos en su condición humana, con relación a predios, propiedades y derechos sociales, económicos y culturales. (CNRR, IEPRI, 2009, p. 30)

Para el CNMH (2010) el despojo implica la utilización de diferentes repertorios de acción que se pueden dar de forma simultánea en el tiempo o de forma continuada a lo largo de un periodo más amplio. Esto dependerá de los intereses de los actores que cometen la acción del despojo, que no tiene que ser un fin en sí mismo, puede ser un eslabón para conseguir un proyecto territorial más ambicioso. En este sentido, los actores que lo llevan a cabo tienen una intencionalidad sobre el territorio expoliado; por lo tanto, se puede estar hablando de actores sintagmáticos que despliegan campos de poder a través de acciones coercitivas, en la línea planteada por Raffestin (2011 [1980]).

De esta manera, quienes ordenan y ejecutan el despojo, tienen a su disposición diferentes recursos que son utilizados en función de los contextos espaciales, variando la intensidad de su aplicación y dependiendo de las resistencias que puedan ofrecer las comunidades (CNMH, 2010). Por ello, la estrategia de apropiación del territorio de los grupos paramilitares estuvo dirigida a los líderes y las líderes sociales, con el objetivo de desarticular los procesos organizativos y romper las dinámicas comunitarias. Asimismo, las acciones violentas demostrativas y ejemplarizantes, como la violencia sexual contra las mujeres, la tortura, los señalamientos, fueron utilizadas para romper el tejido social a través de la instauración de un escenario de terror.

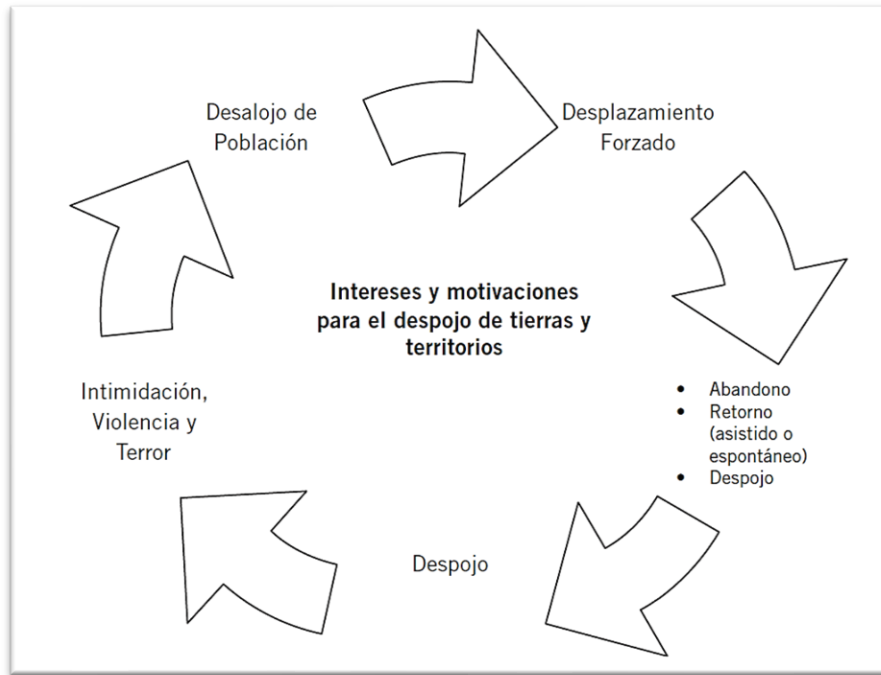
En los apartados referidos al paramilitarismo en Montes de María y en el Putumayo, observamos que, dependiendo de la importancia estratégica de la zona y del proyecto a implementar en la misma, los actores armados manejaron los volúmenes de población. En algunos se producía el desplazamiento de toda la comunidad o gran parte de ella (Mampuján, El Salado, El Tigre) y en otros se realizaban confinamientos en donde se obligaba a la población a convivir con el actor armado (El Placer, Pueblo Nuevo, El Palmar).

De esta manera, los repertorios de coerción y de violencia pueden comprender desde la oferta de compra de la tierra, la venta forzada, el desalojo, el abandono de la propiedad hasta la tortura, el asesinato, el señalamiento, la desaparición forzada y el desplazamiento de las comunidades. A este conjunto de acciones el CNMH lo ha denominado como la cadena del despojo (CNMH, 2010, p. 46). Por lo tanto, se genera una gran variedad de matices en ese espectro que va del dominio a la subordinación, por consiguiente, es un proceso complejo en la medida que:

No todo abandono implica despojo, aunque en la mayoría de los casos sí; existen diferentes articulaciones, secuencias y tiempos entre abandono y despojo, pero en general se puede decir que el abandono puede conducir al despojo y este siempre es el resultado del abandono. En casos muy excepcionales se presenta despojo sin abandono (la familia campesina sigue viviendo en su tierra sin tener el usufructo); generalmente el abandono es simultáneo (lo que se llama aquí despojo directo) o antes del despojo, caso en el cual puede transcurrir bastante tiempo antes de que aparezca consumada una nueva apropiación del predio, situación que oculta los procesos y los actores que están detrás de los hechos inmediatos. (CNMH, pp. 47-48)

A este respecto, señalar tres cuestiones que hemos apuntado en otros apartados: primero, estos procesos de despojo se facilitan en gran medida debido a la informalidad de los títulos de propiedad de las zonas rurales en Colombia, que genera una inseguridad jurídica para las comunidades; segundo, la complejidad para determinar cómo ha sido el proceso de expoliación debido a la participación de diferentes actores armados y no armados (nacionales y transnacionales), con acceso a recursos, que no poseen los sectores populares, que se encuentran insertos en unas relaciones asimétricas de poder; tercero, la infiltración de las instituciones políticas locales y regionales por parte del narcotráfico y el paramilitarismo que produjo esa “reconfiguración cooptada del Estado” (Garay y Salcedo, 2013) y en la Región Caribe llegó a unos niveles alarmantes. Estos elementos dificultan aún más establecer los diferentes ciclos de despojos que se produjeron en Montes de María y en otras regiones.

Figura 26. La cadena del despojo



Fuente: Adaptado de *Equipo de Investigación Tierra y Conflicto – Grupo de Memoria Histórica* (p. 47), por CNMH, 2010.

En relación con este tercer punto, es diciente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra el exsenador Álvaro García Romero,

la estrategia del grupo estaba enfocada al dominio militar de territorios y, posteriormente, al apoderamiento del aparato estatal (...) les animó la defensa de los empresarios y ganaderos de la región, tarea en la cual el exterminio de las personas que calificaban como “colaboradoras de la guerrilla” les permitía cumplir el primer propósito, actividad que de paso también facilitaba el apoderamiento de las tierras abandonadas por todos los desplazados forzosos, acosados por la situación de terror implantado por los paramilitares (CSJ, Sentencia 3285, 23 de febrero de 2010 contra Álvaro García Romero tomado de CODHES; FUCUDE; Corporación Opción Legal; Universidad Tecnológica de Bolívar; Grupo Regional de Memoria Histórica, 2020, p. 44)

De la siguiente manera, los líderes y lideresas apuntan a los elementos descritos anteriormente, señalando que la informalidad de la tierra es uno de los principales obstáculos que tienen para lograr los procesos de restitución y reparación. Años de inseguridad jurídica se traducen en una mayor vulnerabilidad frente a los hechos de abandono forzado y despojo masivo vivido en el territorio montemariano. En los talleres eran factores que se planteaban de manera

recurrente, así como uno de las principales reivindicaciones a ser abordadas en el proceso de negociación entre las FARC y el gobierno de Santos.

A mi mamá Acción Social le dio como un cómo es que es... como un cuadrito [se refiere a un sustituto del título de propiedad], pero nosotros tres no tenemos nada. Veinticinco años de tenencia de la tierra y no tenemos un documento formal que lo demuestre. Esto ocurre con muchos campesinos que tienen tierras en El Carmen de Bolívar y que fueron desplazados por los paramilitares. El aval de nosotros es la buena fe. (E6. Lideresa Junta de Acción Comunal Barrio Los Ángeles, El Carmen de Bolívar, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

En Maríalabaja la tenencia de la tierra no es nuestra. ¿Por qué? Porque la propiedad sobre la tierra es que se tenga escritura, le da la formalidad de la tierra por medio de minuta u otras formas y documento. Para nosotros como agricultores la tierra se daba en los ochenta era en préstamo, en arriendo, y podía la población trabajar porque cualquiera le daba acceso a uno para poder trabajar. Hoy, ya en el presente después del conflicto armado, afectó a eso porque con el desplazamiento los que tenían la tierra vendieron, muchos vendieron hacia la palma, tanto, que hoy por hoy estamos rodeados de palma donde antes se cultivaba. Arroyo Grande, que en ese entonces era una vereda, hoy es un corregimiento donde también se cultivaba bastante porque ahí se arrendaba tierra. Era muy fácil tener acceso el campesino a la tierra, había donde arrendar. Hoy no. Por toda la palma que está en el territorio, la tierra no es lo mismo en el acceso, no es posible de arriendo como era antes. Entonces, ha sido una afectación bastante grande. Antes también conseguía bases para ir hacer un lote; ahora eso no, con la tala masiva que hubo en la zona hoy no es posible conseguir ni un palo ni una tabla. Esa es otra afectación que estamos sufriendo. Y hoy ya no conseguimos ninguna forma, ni arriendo, ni préstamo u otras formas, y sigue siendo la tenencia de la tierra sin propiedad, porque todavía es difícil, o sea, no es difícil, sino realmente lo complejo está en hacer la vuelta para que los poseedores de la tierra tengan escritura. Eso es algo que hoy nosotros no tenemos. (Líder campesino El Playón, municipio Maríalabaja, como se citó en Salgado, 2017, p. 10)

Por lo tanto, el despojo se ha producido a través de diferentes modalidades e instrumentos, que se han aplicado de manera diferenciada en los diferentes espacios, según los contextos e intereses de los actores. En el siguiente cuadro se recogen la tipología y modalidades del despojo, elaboradas por el grupo de trabajo Tierra y Conflicto del Grupo de Memoria Histórica (CNRR).

Tabla 12. Tipología y modalidades de despojo

Tipología	Modalidades	Despojo de tierras y territorios
A. El uso de la violencia física: amenazas y daños.	A1. Amenazas directas e indirectas contra la vida o la integridad física. A2. Daños a la vida o a la integridad física: actos ejemplarizantes y cadenas de pánico. A3. Destrucción de documentación oficial. A4. Las llamadas “compraventas forzadas”. Actos ilegales de enajenación de carácter particular. A5. Ocupación y apropiación de predios del Estado.	Desplazamiento forzado y abandono de tierras y territorio.
B. El uso ilegal de figuras jurídicas.	B1. Actos ilegales de enajenación entre particulares. B2. Despojo por vía de hecho administrativa. B3. Despojo por vía de hecho judicial. B4. Falsificación de títulos de propiedad y escrituras.	Apropiación ilegal de derechos sobre la tierra y el territorio, desconociendo el derecho y expectativas de terceros.
C. Otras formas de despojo.	C1. Embargo y remate de propiedades abandonadas. C2. Intercambio y usufructo de propiedades. C3. Abandono y apropiación sin transacción comercial. C4. Usufructo del predio sin apropiación. C5. Compra de derechos de propiedad a partir de la adquisición de hipotecas y deudas.	Desplazamiento forzado y abandono de tierras y territorio.

Fuente: Elaboración propia a partir de CNRR, IEPRI, 2009, p. 53.

13.1.1. Las dinámicas del despojo, desplazamiento forzado y concentración de tierras en el periodo 2000-2014.

Como hemos señalado a lo largo del presente capítulo, las dinámicas del conflicto armado y de la violencia en Montes de María generaron un retroceso en la democratización de la tierra y generaron

nuevos procesos de concentración de la misma. Las tierras planas eran propiedad de los grandes terratenientes y ganaderos y los campesinos fueron expulsados a las zonas de ladera. Las tierras más fértiles de la región eran muchas de ellas improductivas, estaban dedicadas a la ganadería extensiva, algunas no estaban cultivadas, otras se dedicaron a los monocultivos, y de manera más reciente están siendo tituladas para proyectos minero-energéticos. Por consiguiente, se presenta una contradicción entre la vocación del suelo y la utilización del mismo, que refleja precisamente la naturaleza de los conflictos presentes en esta zona del país. Así es problematizado por una de las lideresas entrevistadas:

A uno lo desplazan, los terratenientes se quedan con las mejores tierras y lo que hacen es poner ganado. Por aquí lo que han puesto es puro ganado. Entonces, esos son los costos para la guerra, lo que no está en palma, está en ganado, lo que no está en ganado, está ahora en la minería. Entonces, fíjense cuando venga a ver, la tierra no nos va a servir absolutamente de nada y va a ser perjudicial para el medio ambiente, en todos los sentidos, ¿qué vamos a comer palma, caliza? (E6. Lideresa Junta de Acción Comunal Barrio Los Ángeles, El Carmen de Bolívar, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

Las organizaciones populares que confluyen en la MIC comprenden las dinámicas de vaciamiento del territorio, de desplazamiento forzado, de control de la población en el marco del conflicto armado, en relación con la concentración de la tierra para la imposición de diferentes proyectos de desarrollo para las zonas rurales. Así es problematizado,

Esto muestra un primer gran conflicto en Montes de María: la mayoría de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes, que tenemos como principal actividad la producción alimentaria, no somos propietarias de las tierras que trabajamos y la mayoría de familias que tienen propiedad no alcanzan la Unidad Agrícola Familiar (UAF) estimada para la región, que según el INCODER (2008) es de 40 hectáreas.

A esta realidad, se suma la implementación de modelos de desarrollo rural y agrario que afectan negativamente a la producción agroalimentaria y que está determinando los usos predominantes de la tierra. En Montes de María, aparte de la agricultura familiar y la producción diversificada de alimentos, sobresalen tres usos productivos del suelo.

El primero está representado por los pastos dedicados a la ganadería extensiva, que se ubican principalmente en los municipios de Maríalabaja, San Onofre, Tolviejo, Córdoba, Zambrano, Carmen de Bolívar y El Guamo, entre otros. La ganadería extensiva ocupa no solo la totalidad de los suelos de vocación pecuaria, sino que, además, se ha extendido sobre suelos con vocación forestal, agrícola, ciénagas y playones, contribuyendo de manera especial a la deforestación del bosque seco tropical y disminuyendo áreas potenciales para la producción de alimentos, la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

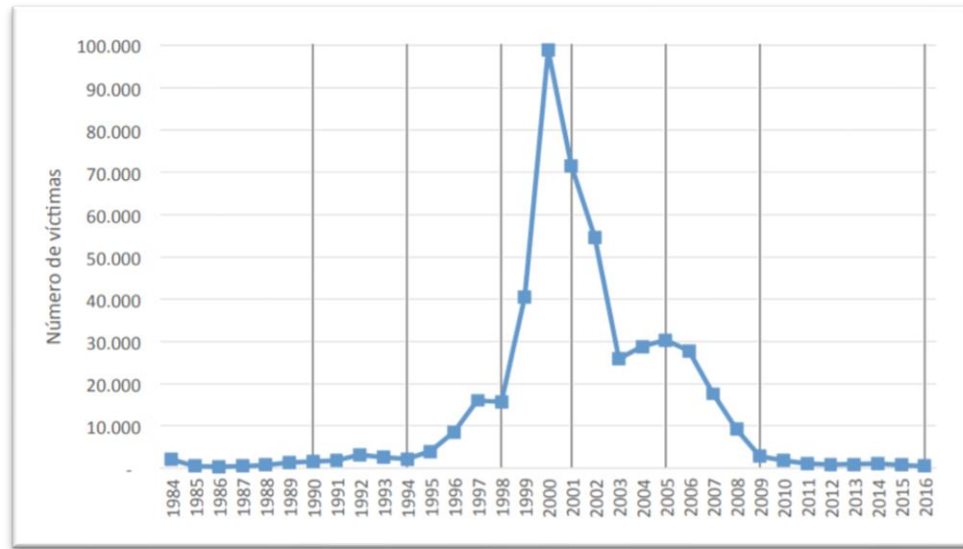
El segundo uso corresponde a la expansión de monocultivos y proyectos agroindustriales. En la actualidad avanzan de manera acelerada e irracional los

monocultivos de palma aceitera y maderables en los municipios de Maríalabaja, Mahates, San Onofre, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Ovejas, Tolviejo y Carmen de Bolívar, principalmente. Estos cultivos son considerados estratégicos y promisorios por parte de la política pública de desarrollo rural de los últimos gobiernos, por lo que cuentan con apoyos e incentivos que facilitan su expansión y consolidación en la región. Se estima que la palma aceitera y los cultivos maderables ocupan 70.000 hectáreas aproximadamente. En la actualidad estos cultivos se vienen extendiendo en áreas de protección de recursos hídricos y en áreas dedicadas anteriormente a la agricultura familiar y la producción diversificada de alimentos. Los municipios donde hoy avanzan los monocultivos coinciden con los municipios de mayor desplazamiento forzado, despojo y compra masiva de tierras.

La explotación minera y de hidrocarburos es el tercer uso productivo del suelo. Actualmente, las explotaciones mineras se concentran en caliza, materiales de construcción y carbón y ocupan 18.820 hectáreas (Duarte, 2016), ubicados en los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Carmen de Bolívar, Tolviejo y Colosó. Sin embargo, existe actualmente un gran interés por aumentar este tipo de explotación, especialmente ante hallazgos de gas y petróleo. El área solicitada para concesión alcanza las 74.600 hectáreas, ubicadas en los municipios de San Juan Nepomuceno, Maríalabaja, Carmen de Bolívar, San Jacinto, El Guamo, Ovejas, Colosó, y San Onofre. (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2017, p. 344)

Ahora bien, como estiman las organizaciones, esta reconfiguración del espacio se ha hecho de manera violenta en Montes de María. Como se aprecia en el siguiente gráfico, una de las modalidades para el abandono forzado de tierras durante la hegemonía del paramilitarismo, fue el desplazamiento masivo de la población, casos como el de Mampuján o El Salado son dicientes al respecto.

Figura 26. Víctimas de desplazamiento forzado en Montes de María (1984-2016)



Fuente: Adaptado de *Entre paramilitares y guerrilla: la desposesión territorial en Montes de María* (p. 184), por Instituto de Estudios Interculturales, 2019.

En el periodo de 1985 a 2016, la población desplazada de Montes de María ascendió a 477.396 personas. Según los datos del Registro de la Unidad de Víctimas (RUV) esta cifra equivale a aproximadamente al 48% de la población de la subregión. Por lo tanto, se produce un vaciamiento del territorio. Los municipios expulsores de población fueron El Carmen de Bolívar, Maríalabaja, San Jacinto, San Onofre, Ovejas y Colosó (Instituto de Estudios Interculturales, 2019). Los periodos de mayor desplazamiento coinciden con el auge del fenómeno paramilitar y con los mandatos del gobierno de Álvaro Uribe, periodo en el que se despliegan los planes de consolidación territorial. A partir del año 2005, la curva desciende debido al proceso de desmovilización de las AUC y se mantiene estable desde el año 2010 al 2016, periodo de tiempo en el que los repertorios de violencia de los neoparamilitares cambian sus estrategias de actuación.

El pico del desplazamiento armado coincide también con el momento en el que se produce un mayor abandono de tierras en la región. Para el periodo de 1997 a 2007, se calcula que fueron abandonadas 86.256 ha. Según la investigación realizada por el congresista Iván Cepeda, para el debate de control político sobre tierras realizado en el 2010, entre 2001 y 2004, en trece de los quince municipios de la Serranía de San Jacinto, se emitieron Resoluciones de Protección de

tierras⁴⁶⁰ en las zonas rurales de los siguientes municipios: María La Baja, San Juan Nepomuceno, Zambrano, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, El Guamo, Ovejas, Morroa, Los Palmitos, Toluviejo, San Onofre, Chalán y Colosó. En total las medidas de protección (inscritas y no inscritas) ascendieron a 5.620, para el periodo entre 1997 y 2010, lo que indica la presión sobre la tierra que se produjo en Montes de María. En el año 2000, cuando se perpetraron las mayores masacres y desplazamientos forzados de población, los predios abandonados se correspondían con el 30% del total del despojo en el país (CODHES; FUCUDE; Corporación Opción Legal; Universidad Tecnológica de Bolívar; Grupo Regional de Memoria Histórica, 2020, pp. 45-46).

En la investigación realizada por Mercado, en la que se aborda la relación entre conflicto armado y contrarreforma agraria en Montes de María (1996-2016), se identifica un primer ciclo en el que se produce un abandono masivo de tierras comprendido entre 1995-2005; un segundo ciclo de despojo jurídico masivo, en el periodo 2005-2013. El 60% de los predios abandonados y despojados fueron adjudicados a campesinos a través de las leyes de reforma agraria. Por lo tanto, el autor apunta a que se constituye un escenario de contrarreforma agraria. Estos periodos coinciden con las dinámicas del conflicto armado que hemos señalado a lo largo de esta Cuarta Parte de la investigación (Mercado, 2017).

En el primer ciclo (1995-2005), se produjo el mayor abandono forzado de tierras en el territorio montemariano. Esta situación se explica, en primer lugar, por las alianzas entre la clase política y económica de la subregión y los grupos paramilitares, que se sustenta en las sentencias y declaraciones recogidas a lo largo de la presente investigación. En segundo lugar, en este periodo se produce un abandono masivo, pero no un despojo masivo, que se puede explicar porque en ese momento el enfrentamiento con las FARC se encontraba activo y, por lo tanto, de alguna manera evitó el arribo intenso de actores económicos que compraran las tierras (Mercado, 2017, p. 213), lo que no significa que se hayan producido algunos casos y otras formas de “legalización” del despojo. Al respecto, Mercado señala que:

Algunas empresas sí realizaron compra masiva de tierras. Fueron Agropecuaria Tierras de Promisión de Álvaro Echeverría, que compró en 2001 3.000 hectáreas en la zona rural del municipio Córdoba (García y Vargas, 2014, p. 32). Por su parte, un año antes, en 2000, se inician los cultivos de palma de aceite en la zona de María La Baja. En ese momento

⁴⁶⁰ La Resolución de Protección de tierras implica el despliegue de medidas de amparo entre las que se encuentran la autorización del Comité de Atención Integral a la Población Desplazada para realizar cualquier trámite de venta de un predio.

pequeños y medianos productores crean la primera alianza: “Asopalma uno” con el acompañamiento de “Promotora Hacienda Las Flores” (Aguilera, 2014; p. 120). Esta promotora es propiedad del exministro de agricultura Carlos Murgas (El Espectador, 2012a). En otras palabras, surge una llegada (no masiva) de empresarios a realizar compras masivas de tierras. (Mercado, 2017, p. 213)

Como se señala en el anterior apartado, los dueños de la empresa Tierras de Promisión, Álvaro Ignacio Echeverría y Luis Esteban Echavarría, reconocen ser pioneros de las compras masivas de tierras ya que, según sus propias declaraciones la idea era invertir en la región ya que veían posibilidades de “ganar la guerra”. Las tierras las adquirieron a 300.000 pesos la hectárea, mientras que su valor actual es de 3.000.000 millones de pesos (El Tiempo, 2010). Los campesinos se vieron obligados a vender ante el temor de la violencia ejercida por los paramilitares y asediados por las deudas. La investigación sobre estos predios comenzó durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Por otra parte, en este periodo los despojos realizados por los paramilitares se centraron especialmente en la zona de San Onofre y en el Golfo de Morrosquillo, los cuales fueron realizados por el frente del mismo nombre, comandado por alias “Cadena”. En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en contra de este comandante paramilitar (Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, 2012), se señala que el frente bajo sus órdenes adquirió de forma irregular los predios aledaños a la finca Nuevo Mundo, en el municipio de San Onofre, para incluirlos en un solo predio conocido como La Serenata.

En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia se señala que la estrategia para apoderarse de estos terrenos fue la siguiente: el grupo armado amenazaba a los propietarios que, por temor, vendieron las tierras a precios irrisorios para dar una apariencia de legalidad a la operación. De esta manera, se levantaron escrituras públicas, en las que se encontraron irregularidades que solo se pudieron llevar a cabo con la complicidad del Notario Único de San Onofre y de su secretaria. Esta sería la forma de operar de muchos de los despojos llevados por actos ilegales de enajenación de carácter particular⁴⁶¹.

⁴⁶¹ En el municipio de San Onofre se realizaron otros despojos de fincas, entre los que se encuentran la finca La Alemania y El Palmar, situadas en una zona estratégica para el control de los corredores de droga al encontrarse en las inmediaciones del litoral. Los paramilitares instalaron su centro de operaciones en El Palmar. En cuanto a la finca la Constancia, los dueños recibieron amenazas al rechazar la oferta de compra de alias “Cadena” por un precio muy por debajo del valor real. La finca Nuevo Mundo, que terminó en manos de un diputado del departamento de Sucre, Nelson Stand Berrio, después de que la adquiriera en un remate ficticio sin conocimiento de los dueños de la finca.

En esta dirección, en el siguiente relato de un campesino de la zona rural de San Onofre se describe también el despojo realizado a través de una venta bajo coacción.

A mi mamá la presionaban para que entregara la finca, junto con mi hermano, porque ellos dos sí se quedaron, luego hicieron un contrato de arrendamiento con un señor del pueblo y, cuando le íbamos a entregar la finca, ya estaban los paracos y le dijeron que si entraba los mataban. No pudo más nadie entrar a la finca. Ellos [paramilitares] llegaron a donde mi mamá y le dijeron “bueno, entréguenos la finca y firme esta compraventa que ellos mismos hicieron”. Mi mamá lo que hizo fue firmar, supuestamente le dieron 15 millones de pesos, pero mi mamá no vio nada de esa plata. En el 2006, nosotros pudimos ir a realizar la denuncia en Bogotá, denunciarnos a los paracos y pues gracias a Dios estamos en ese proceso.

Nosotros tenemos una resolución del INCORA donde dice que, si están involucrados menores, esos terrenos no se podían vender porque es un patrimonio familiar. En el 2008 nosotros nos metimos para quitársela a la fuerza [parece referirse a que el ocupante de la finca es un testaferro] y tuvimos un debate y todo, demoramos dos días. La policía nos sacó y nos maltrataron porque a ellos les pagan. A nosotros nos violaron los derechos como desplazados, además que teníamos un documento que nos protegía, pero no lo hicieron válido. (E4, Líder OPD Montes de María, comunicación personal, 03 de diciembre de 2012)

El segundo ciclo (2005 – 2013), se caracterizó por una disminución en el abandono masivo de tierras. Este hecho se relaciona con el proceso de desmovilización de los paramilitares, el repliegue de las FARC, la militarización del territorio y una caída en los indicadores de violencia. La militarización vino acompañada por una llegada importante de empresarios interesados en adquirir grandes extensiones de tierra para la puesta en marcha de diferentes agro-negocios, los cuales eran priorizados en el plan nacional de desarrollo, ya que el campo era visto como una ventaja comparativa que debía transitar hacia una ventaja competitiva. En este periodo se puede hablar de un despojo jurídico masivo (Mercado, 2017, p. 219).

Por lo tanto, se produjo una mayor concentración de la tierra y el traspaso de la mayoría de los títulos adquiridos a tres fideicomisos. La legalización de esta nueva reconfiguración territorial y del acaparamiento de tierras para la producción de *commodities*, se realizó a través de diferentes modalidades como la extranjerización, la titularización y el derecho real de superficie (Garay, 2013). Estos procedimientos han tenido cabida en la legislación colombiana a través del Estatuto de Desarrollo Rural de 2006, que permitió la legalización de millones de tierras despojadas. Los fideicomisos han sido utilizados para burlar la Ley 160 de 1994, que prohíbe la acumulación de

Los predios estaban destinados a ser de “Cadena”, por eso se cree que Stand ejerció de testaferro. Este diputado terminó condenado por nexos con el paramilitarismo (Mercado, 2017, p. 218).

baldíos de la Nación; reglamentación consecuente con el Artículo 64 de la Constitución Política, en el que consigna el deber del Estado para posibilitar el acceso a la tierra del campesinado. En el artículo 72 de la Ley 160 se prohíbe de manera expresa la acumulación de propiedades superiores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF) (Calle y Ñañez, 2017).

En el estudio realizado por el entonces Representante a la Cámara, Iván Cepeda, sobre la situación de la tierra en Montes de María, se indica que la compra masiva de tierras por parte de un grupo de empresarios, la mayoría de origen “paisa”, presenta diferentes irregularidades, debido a que es una zona en donde se produjo un desplazamiento masivo de población. Esta investigación se amplió en los años siguientes y, tanto el equipo de Cepeda como la Superintendencia de Notariado y Registro, llegaron a conclusiones similares. Las tierras despojadas, que fueron adquiridas por empresarios de manera masiva, pasaron a ser administradas por tres fideicomisos. El informe elaborado por la institución señala que el 41% de las tierras eran UAF adjudicadas por el INCORA, convertido años después en el INCODER, a campesinos sin tierra (Osorio, 2011).

La Superintendencia identificó a los ocho propietarios que más compraron tierras en los últimos años. Entre esos está el empresario Álvaro Ignacio Echeverría, con 4.771 hectáreas. Echeverría también es el representante legal de la empresa Sociedades Tierras de Promisión S.A., que tiene 1.616 hectáreas. También está Manuel Medina Muñetón como representante legal de la Agropecuaria Carmen de Bolívar y Agropecuaria Genesis S.A., con 8.618 hectáreas sumando los títulos de ambas empresas. Y tanto Echeverría como Medina Muñetón terminaron cediendo sus títulos al Fideicomiso 1359, el mayor de los fideicomisos en la zona. (Osorio, 2011)

Estos hechos coinciden con el testimonio de una de las lideresas de El Carmen de Bolívar en donde apunta que al municipio llegaron unos “cachacos”⁴⁶² para comprar tierras y que la gente en una situación social de exclusión, vendió las parcelas. Esos “cachacos” eran realmente empresarios de Antioquia.

A El Carmen de Bolívar llegaron por allá a mediados del dos mil, unos “cachacos” que venían a comprar la tierra de los campesinos. No se sabía muy bien quiénes eran, pero empezaron a ofrecerle dinero a la gente para comprar las tierras. La gente estaba desesperada, algunos tenían mucho miedo de volver a sus tierras y, otros no tenían un peso, y tenían deudas. Cuando uno llega desplazado la pasa muy mal, hay hambre y miseria. (E6. Lideresa Junta de Acción Comunal Barrio Los Ángeles Carmen de Bolívar, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

⁴⁶² Termino coloquial utilizado para referirse a la gente que proviene del centro del país, en particular, de Bogotá.

Entre las irregularidades en los procesos de compra de tierras, encontradas por la Superintendencia, se encuentran la falsificación de las escrituras, errores en los códigos de identificación de los predios, permitir el fraccionamiento de una UAF o la compraventa de títulos otorgados sin la autorización del INCODER. Estas irregularidades indican que estos actos se cometieron con la connivencia de las notarías (Osorio, 2011).

En el marco de la aprobación e implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011), se investigaron otros hechos que resultan llamativos para entender los procesos de despojo en el territorio montemariano. En el año 2007 el Estado, representado por la Caja Agraria, le vendió viejas deudas del campesinado a la empresa cobradora Covinoc que en su momento fueron respaldadas por los predios. Esta empresa movilizó sus recursos para localizar a los campesinos para que saldaran sus deudas. Muchos de esos predios fueron hipotecados a Covinoc y, posteriormente, vendidos a los grupos empresariales que hicieron compra masiva de tierras. Estos “malabares” administrativos se saltaron la normativa que protege las propiedades de los desplazados y que fueron otorgadas en el marco de las leyes de reforma agraria (El Tiempo, 2010).

Ahora bien, los procesos de restitución de tierras en Montes de María, previstos en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, han tenido múltiples inconvenientes. Las organizaciones populares apuntan algunas de las dificultades con las que se han encontrado. Primero, la complejidad para establecer la cadena del despojo, debido a la multiplicidad de actores involucrados y a la connivencia de las instituciones públicas, locales y regionales, así como la participación de la clase política.

Segundo, la dificultad para establecer que los compradores de las tierras fueron tomadores de buena fe, lo que significa que no conocían los hechos ilegales por los cuales fueron despojados los predios de los campesinos. La mayoría de los empresarios señalan que los dueños originales les vendieron esas tierras sin ningún tipo de acción. No obstante, en la Ley se establece la inversión de la carga de la prueba en este tipo de procesos, señalando que “el deber del Estado de presumir la buena fe de las víctimas y de flexibilizar la carga de la prueba exigible a las mismas” (Bolívar, Gutiérrez y Botero, 2017, p. 9). En la Ley también se establece que cuando en las tierras despojadas se hayan implementado proyectos agroindustriales productivos y se haya probado la buena fe del propietario actual, el Magistrado que lleve el caso de la restitución puede dictar medidas compensatorias para que se llegue a un acuerdo entre las empresas y los propietarios que fueron despojados. La jurisprudencia que se ha dado en este sentido apunta a tres escenarios:

1. El tribunal niega u omite pronunciarse sobre la pretensión de nulidad del trámite de la solicitud o la suspensión del trámite.
2. El tribunal ordena vincular al o la solicitante al proceso administrativo de exploración o explotación minera.
3. El tribunal se pronuncia sobre la afectación ambiental pero no suspende o cancela el trámite vigente.
4. El tribunal se pronuncia sobre la afectación ambiental y realiza un análisis sobre las implicaciones para el proceso de restitución (Bolívar et al., 2017, p. 81).

Tercero, las organizaciones apuntan a un factor que hemos señalado a lo largo de este apartado, la reconfiguración de los grupos paramilitares en el territorio y la conformación de los denominados ejércitos antirestitución que, desde finales de la primera década del presente siglo, están librando una guerra contra los reclamantes de tierra. A esto se suma la falta de garantías de seguridad, por parte del Estado, para las personas que están reclamando de manera legítima sus derechos. De esta manera, los resultados de los procesos de restitución de tierras no son los esperados por las víctimas. “De las 3503 solicitudes reportadas, que correspondían a 96.433 hectáreas, un área similar a la del municipio de El Carmen de Bolívar, a julio de 2015 sólo se habían restituido 302 correspondientes a 4.208 hectáreas” (García et al., 2015, p. 35).

Cuarto, las organizaciones populares estiman que los procesos de reparación y restitución de tierras se han centrado principalmente en el ámbito material, sin tener en cuenta que las comunidades han sido despojadas no solo de las tierras, sino del agua, del bosque, del paisaje, del aire, de la cultura campesina; en definitiva, de la vida misma, como lo señalaba Carlos Ancizar Rico. Todos estos elementos hacen parte del territorio, un territorio que, señalan, no se va a recuperar en las mismas condiciones, debido al abandono o a que sus predios están ocupados por monocultivos. Por otra parte, estiman que en su memoria se encuentra grabado el horror vivido y aquellos espacios que eran considerados como su refugio, como su hogar, ahora tienen una connotación de muerte, de tortura y de sufrimiento. A eso se suma que muchas de las organizaciones de base fueron completamente desarticuladas por la violencia y, en este sentido, consideran que el Estado debería comprometerse con este tipo de organizaciones (Corporación Derechos para la Paz. Proyecto Planeta Paz, 2010).

Para finalizar, nos parece pertinente recoger una reflexión que señala una lideresa campesina de Montes de María, que resume el sentir de las víctimas sobre los procesos de restitución y reparación adelantados por el Estado:

Si no ha cesado el conflicto, ¿quién garantiza que no nos saquen una vez restituidas nuestras tierras? ¿será nuestro tiempo? No parece que fuera nuestro tiempo, de serlo nos preguntarían cómo queremos ser reparados, qué opinamos, qué pensamos en aras de que la ley sea coherente con lo que nosotros vivimos. (Lideresa campesina Montes de María, Corporación Derechos para la Paz. Proyecto Planeta Paz, 2010)

13.3. Los agronegocios: como factor de reconfiguración espacial

En el proceso de reconfiguración espacial a partir de la concentración de la tierra, las organizaciones populares consultadas estiman que uno de los ejes de conflictividad se relaciona con la implantación de un modelo de agronegocio para la subregión. Esta política de desarrollo rural para Montes de María, se enmarca en la reestructuración de la política pública rural y agropecuaria del país. Los lineamientos básicos de esta estrategia los podemos encontrar en el informe Misión Paz, publicado en el 2001, en el que se consigna la visión del gremio agropecuario y de los grandes empresarios del país, entre los que se encontraba el Sindicato Antioqueño, dato a tener en cuenta para el análisis posterior.

En este informe, se señala de manera expresa el reconocimiento del campo y de la agricultura como sectores productivos estratégicos en el desarrollo económico, en el marco de las dinámicas globales de acumulación de capital⁴⁶³. El enfoque político de la propuesta ponía el acento en una suerte de argumentos económicos para abordar el problema de la tierra, “según los cuales la potencialidad de la actividad sectorial no está tanto en la tierra como en las actividades que generan valor agregado. En esta perspectiva, la atención debiera centrarse en el ciclo completo de la cadena productiva, la generación de empleo y de ingresos” (Salgado, 2004, p. 4).

⁴⁶³ La crisis ambiental y energética puso en evidencia la necesidad de potenciar fuentes energéticas alternativas a los hidrocarburos como el biodiesel, la fotovoltaica, la eólica o la biomasa. No obstante, las alternativas trajeron consigo nuevas problemáticas. En el caso del biodiesel, la demanda internacional, colocó a los países de la periferia y la semiperiferia en una competencia para abastecer al mercado mundial de las materias primas necesarias para la producción de este tipo de energía, lo que trajo consigo nuevos conflictos rurales. En el caso de Colombia, los gobiernos han visto en este mercado una alternativa económica, sin tener en cuenta los graves impactos en materia ecológica, el acaparamiento de la tierra, la destrucción de los paisajes rurales y las reconfiguraciones espaciales, en donde los más afectados son los habitantes de las zonas rurales.

Desde esta perspectiva, los problemas de concentración de la tierra y los conflictos relacionados con la misma, no se resuelven con una reforma rural integral, que tuviera como centro la democratización del acceso a la tierra. Por lo tanto, el foco de la intervención en el campo debería centrarse en la implementación de programas dirigidos a la empresarización del sector agropecuario (Calle y Ñañez, 2017). Carlos Salgado señala que este enfoque productivista se encuentra sustentado en “variables convencionales de crecimiento y haciendo abstracción de las relaciones a partir de las cuales se ha creado el conflicto político y social del país” (Salgado, 2004, p. 5). Argumento que compartimos en la presente investigación.

En este contexto, en los planes de desarrollo de los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, se le da un impulso al sector de los agronegocios que ya venía operando en el país desde la década de los noventa del siglo pasado⁴⁶⁴. La cuestión radica en que este tipo de modelos de desarrollo rural no solucionaron los problemas estructurales del campo, por el contrario, profundizaron las contradicciones del capitalismo en la escala local, más en un contexto de conflicto armado como es el caso de Colombia.

Como hemos visto a lo largo de este estudio, la subregión de Montes de María, se caracteriza por un conflicto estructural relacionado con la tenencia de la tierra, que se profundizó por las dinámicas de la guerra, relación que no es ni mucho menos fortuita. Por consiguiente, la implementación de los agronegocios como el de la palma, la teca o la caña de azúcar incentivaron el acaparamiento de la tierra y profundizaron los conflictos por desposesión. Los efectos de esta reconfiguración espacial también incidieron negativamente en las condiciones sociales y económicas de los habitantes de la Serranía de San Jacinto.

De esta manera, los productos de crecimiento tardío (palma de aceite, maderables foráneos, entre otros) han afectado de manera considerable a la economía campesina, produciendo una disminución de las hectáreas disponibles para la siembra de productos destinados a la canasta alimenticia o productos denominados transitorios (Menco, 2007). Es así como se produce una contradicción entre la vocación del suelo y los usos del mismo, como lo señala la Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María (2017).

⁴⁶⁴ En el documento Agenda 2019 (informe prospectivo), se daba prioridad a los agronegocios, en particular, los destinados a la producción de biodiesel. Por lo tanto, se establecía que la meta para el país en el 2019 era alcanzar los seis millones de hectáreas sembradas en palma de aceite.

Ahora bien, el cultivo de palma aceitera llega a la Serranía de San Jacinto a finales de la década del noventa del siglo XX, específicamente en 1998. La llegada de este cultivo se corresponde con una coyuntura económica relacionada con los procesos de apertura impulsados durante el gobierno de César Gaviria, que impactaron negativamente en el sector arrocerero y del plátano de la subregión. Se produjo una bancarrota generalizada debido a la subutilización de las tierras y el endeudamiento de los productores, al no poder hacer frente a los créditos, por el encadenamiento de cultivos fallidos (Aguilera, 2013).

El municipio en donde se instaló el agronegocio de la palma fue Maríalabaja, que presentaba serios problemas estructurales, entre los que se encontraban: primero, una crisis social generalizada relacionada con las dificultades que atravesaba el campo; segundo, altos niveles de violencia; tercero, cotas elevadas de endeudamiento por parte de los pequeños y medianos productores; y, cuarto, los problemas de titulación de las tierras otorgadas en su momento por el INCORA, que impedía el acceso a sistema crediticio (Menco, 2011).

En esta coyuntura algunos empresarios de la región vieron una oportunidad para iniciar nuevos negocios en el campo montemariano. El pionero del cultivo de palma fue Carlos Murga, Ministro de Agricultura durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002)⁴⁶⁵. Durante su estancia en el Ministerio impulsó el modelo de desarrollo socioeconómico *alianzas estratégicas productivas*, que busca asociar a grandes empresarios del campo con pequeños y medianos productores (Verdad Abierta s.f.; Ávila, 2015). Este modelo ha sido muy criticado desde las organizaciones populares ya que ha generado una proletarización del campesinado, desvalorizando su contribución como sujetos de desarrollo, y posicionando el concepto de trabajadores rurales en las políticas públicas para el agro. “De esta manera se fundamenta la expansión empresarial del cultivo de la palma aceitera a través de la integración de la economía campesina al desarrollo industrial” (Castaño, 2018).

Es en el año 2000, cuando Carlos Murgas constituyó, junto con otros miembros de su familia, la sociedad Promotora Hacienda Las Flores S.A., con el objetivo de promocionar el cultivo de palma de aceite y el desarrollo del modelo de alianzas estratégicas. De esta manera, se crea la primera iniciativa de este tipo, denominada *Asopalma uno* (Verdad Abierta s.f.). Esta iniciativa se llevó a cabo con el respaldo del gobernador de Bolívar, Miguel Raad Hernández, que en 1998

⁴⁶⁵ Carlos Murgas estuvo en la cartera del Ministerio hasta 1999. También se desempeñó como Gerente General de la Caja Agraria en la presidencia de César Gaviria, que ostentó por un corto periodo de tiempo.

acordó con Murgas la puesta en marcha de un proyecto piloto para la palma de aceite en Maríalabaja (Menco, 2011). El inicio del cultivo de palma, coincide en el tiempo, con las masacres perpetradas por los paramilitares en la zona rural de Maríalabaja, que generó el vaciamiento del territorio y el abandono masivo de tierras, tal y como es percibido por las organizaciones populares consultadas.

El modelo de *alianzas estratégicas productivas* se implementó en otras zonas del país, en particular en la Región Caribe, y es el modelo de las ZIDRES. A este respecto, en el siguiente testimonio la investigadora de la Asociación Tierra y Esperanza describe lo sucedido en el departamento del Magdalena, resaltando las afectaciones que este modelo ha traído para la economía campesina, la reconfiguración del espacio rural, la profundización de las relaciones asimétricas de poder en el campo y las dificultades para los procesos de retorno y restitución de tierras.

Lo que se observa es que el mapa del uso de la tierra es radicalmente distinto al que había hace 18 años. Si antes uno tenía un mapa de parches de economía campesina, hoy ves los grandísimos manchones de palma africana. Hay una expansión impresionante de la agroindustria. Hace un tiempo conocí a un empresario rural y decía que se estaba planteando salir del Magdalena porque no había tierra disponible. Ya no quedan ni los bordes de los ríos, todo está ocupado con palma.

Los operadores del cultivo de palma, que son empresas de palmicultores, que en el caso del Magdalena sería Gradesa y Famar, las dos pertenecientes a políticos de la región, la primera a los Dávila, y la segunda a los Zúñiga; tienen a ejércitos de campesinos organizados en cooperativas, que trabajan en las plantaciones. Los operadores compran los derechos sobre la producción durante X cantidad de tiempo al precio que ellos mismos regulan. Esas son las alianzas estratégicas, de esto se llenó el departamento del Magdalena, tanto para la palma como para el cacao.

Lo que hubo fue una reconfiguración del mapa de la ocupación y uso. Las tierras que hoy están ocupadas de palma eran de familias que se tuvieron que desplazar por la violencia. Ninguno de ellos puede retornar a sus tierras porque ya en su casa o su predio, no existe otra cosa sino palma africana. Ellos ya no son ni propietarios ni poseedores, ni tenedores del pedazo de tierra grande o pequeño que desocuparon hace diez años o hace ocho años, ya no existe. Entonces, cuando se plantea el tema del retorno, ellos te dicen “¿adónde vamos, si ya a esa zona no podemos volver, si ya esa zona ha sido anexada a la gran propiedad agroindustrial?”.

En el César, en Magdalena, en Bolívar, en la mayoría de los departamentos de la Región Caribe ha sucedido esto. Los campesinos de Bolívar hablan exactamente de lo mismo, fueron arrancados a punta de masacres y de amenazas y hoy los predios que ocuparon están con palma africana, a algunos les compraron, a otros no, a algunos les obligaron a comprar. Una gran cantidad de versiones distintas sobre como ellos perdieron el control de su tierra, y hoy su tierra ya no es de ellos. (E1, Asociación Tierra y Esperanza, comunicación personal, 19 de diciembre de 2010)

La situación descrita en el anterior relato se puede trasladar a la región de Montes de María, con algunos matices y diferencias, pero con estrategias similares de intervención del territorio. La mayoría de los palmicultores proceden del sector ganadero y forman parte de una élite política regional que, ante el cambio de modelo económico, impulsaron una reconfiguración del campo colombiano que permitiera la inserción en el mercado global. Esta élite vio una oportunidad económica en un campo arrasado por la guerra, mientras que el campesinado observó cómo los derechos conseguidos en años de luchas sociales retrocedieron de manera importante, y tal vez irreversible.

A continuación, recogemos los testimonios de dos de las personas entrevistadas en los que describen cómo fue este proceso de siembra de palma en Maríalabaja. En los relatos, se establece una relación entre la implantación de este modelo rural y la consolidación del proyecto paramilitar. Por otra parte, aluden a la utilización de dos modalidades de despojo de la tierra: el uso de la violencia y el uso ilegal de las figuras jurídicas. En esta última modalidad se encuentra el despojo legalizado a través de los fideicomisos abordados en el apartado anterior.

En el 97-98, y podría decirlo con toda seguridad, llegaron los paramilitares a esta zona. Las incursiones coinciden en el tiempo con la llegada del proyecto de palma aceitera al municipio Maríalabaja. Entonces, los paramilitares llegan y sacan a la guerrilla e inician un régimen de terror en el territorio. Llegaban a las casetas y sacaban a la gente que iban a masacar, llegaban a las casas y sacaban a la gente que según ellos “sopla”. La razón que argumentaban “eran auxiliares de la guerrilla”. Pues eso pasó en Maríalabaja durante muchos años.

En el año 2000, se produce una arremetida brutal, las peores masacres, el desplazamiento masivo de Mampuján y todas las veredas que están alrededor. A la gente la sacan del territorio, la tierra se desvaloriza muchísimo y la gente empieza a vender. La gente se ha resistido al proyecto de palma, pero empiezan a sentir mucho miedo y deciden vender las tierras. Sienten que el territorio no es seguro, venden y se van. También hay muchas familias que pasan de ser dueñas de la tierra a trabajar como aparceros en la palma, eso es muy triste.

La empresa que llega al territorio es Asopalma y el presidente es Carlos Murga, ex ministro de Agricultura. Ellos identifican las zonas más ricas en el valle para llenarlas de palma. La palma se produce en cinco años, en Maríalabaja se produce en tres años. Era una cosa sorprendente. Se metieron ahí y no los hemos podido sacar. En este momento creo que sobrepasan las cinco mil hectáreas. Esto va a aumentar porque la planta extractora tiene capacidad para más de 10 mil hectáreas.

Las tierras planas están totalmente llenas de palma y ya empezaron a subir a la parte alta de Montes de María.

El cultivo de palma en la zona también hace que la gente sienta miedo. Las personas que están rodeadas de palma no tienen libertad, aunque hay mucha resistencia también, pero hay mucho miedo. Incluso dicen que la palma es un cultivo en donde los actores

armados se pueden camuflar. En definitiva, el imaginario de palma está muy relacionado con el imaginario de la violencia. (E7, Lideresa del Comité de Pescadores de Puerto Santander, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

Nosotros pensamos que todo esto es un plan que trae el gobierno porque es que inmediatamente a nosotros nos desplazan; aparecen las compras masivas de tierras y la implementación de la palma como solución para la región. La palma entre más días tiene más tierras, es más, nosotros vamos corriéndole a eso, porque de las 72 parcelas que hay en total, se han vendido 18 y se están sembrando en palma, pero lo están haciendo a través del testaferro. Y hay una ley que dice que en las tierras del INCORA de una persona no puede tener más de una fanegada agrícola. Entonces, nosotros tenemos entendido que la persona que está comprando, lo manda al hijo y cada uno tiene una fanegada agrícola, pero a la final es de él solo.

La empresa ASOPALMA pertenece al señor Carlos Murga y el cuñado el señor Álvaro Uribe Vélez. Él varias veces estuvo ahí, en helicóptero y todo, eso ahí se ve. (E3, Líder Asociación Campesina de Pueblo Nuevo, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

La percepción de abandono masivo de la tierra y el vaciamiento del territorio en Maríalabaja es avalado por los datos. En el año 2010 la cifra de personas desplazadas ascendía a 17.680. Esta cifra representa casi el 40% de la población total del municipio. De esta manera, la violencia transformó el mapa del uso de los suelos y del acceso a las tierras “según datos del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), en esa localidad fueron abandonadas 21.785 hectáreas, cifra igualmente alarmante si se considera que el municipio cubre apenas 54.700 hectáreas” (CINEP, 2012, p. 25).

Por consiguiente, el agronegocio de la palma de aceite se ha configurado como el monocultivo industrial más importante en Montes de María, siendo Maríalabaja el municipio en donde se concentra la mayor parte de la siembra. En la siguiente tabla, se observa cómo para el año 2013, aproximadamente el 80% del cultivo se encontraba en esta zona.

Tabla 13. Cultivos de palma de aceite en Montes de María (2013)

Municipio	Área cosechada (ha)	Área sembrada (ha)
Maríalabaja	7.422	9.819,1
San Jacinto	882,91	434,6
San Onofre	454,4	613,5
Tolú Viejo	176,9	228,2
El Carmen de Bolívar	152,3	199,9
El Guamo	33	33
Ovejas	1,5	2,2
Palmito	0	0,1
Total	9.126,3	12.334,9

Fuente: Adaptado de *Entre paramilitares y guerrilla: la desposesión territorial en Montes de María* (p. 70), por Instituto de Estudios Interculturales, 2019.

El crecimiento del sector palmicultor se relaciona con la prioridad que se le ha dado a este sector en las políticas públicas; al aumento del precio de la tonelada en el mercado mundial especialmente en el momento de auge de las *commodities*, generando un crecimiento en las exportaciones y la apertura de la planta productora de biodiesel Clean Energy (Daniels et al., 2011, p. 47). Por lo tanto, la palma de ha convertido en un agronegocio en expansión de gran atractivo para el capital nacional e internacional, teniendo en cuenta la apertura de la frontera agrícola para este tipo de cultivos.

Por otra parte, en Montes de María se encuentra presente el agronegocio forestal que no llega a tener la misma dimensión que el monocultivo de la palma de aceite. No obstante, en las conversaciones con las organizaciones estas advierten sobre el crecimiento de los cultivos de madera en los últimos años, en particular, la teca, así como algunos conflictos que se han presentado en las zonas en donde se localizan las empresas de este sector.

La siembra de este tipo de madera fue impulsada por la empresa Pizano S.A., a principios de la década de los ochenta del siglo pasado. A través de la compañía Monterrey Forestal Ltda., se inició un proyecto de reforestación en los municipios Córdoba y Zambrano, ubicados en el departamento de Bolívar. En este momento, la empresa era la principal fuente de empleos para la población. Sin embargo, con la llegada de los primeros narcotraficantes, se alteraron las dinámicas sociales y económicas de los municipios (Rettberg, 2006, p. 37). La relación con los grupos paramilitares que se instalaron en la zona son dudosas, ya que hay versiones en las que se señala que la empresa solicitó la ayuda de las AUC frente a las extorsiones y ataques de la guerrilla de

las FARC⁴⁶⁶ (Verdad Abierta, 2010a). Sin embargo, los paramilitares también perpetraron acciones violentas dirigidas a los empleados de la empresa, como las amenazas y desplazamientos de guardabosques (Rettberg, 2006, p. 38).

En el año 2003, se publica el documento Conpes 3237, “Política de estímulo a la reforestación en Colombia: 2003-2006” en el que se “esperaba ampliar la base forestal en 80.000 nuevas ha. de plantaciones comerciables sostenibles y competitivas”. En el marco de esta estrategia, el grupo empresarial Sindicato Antioqueño (que hizo parte de la elaboración del informe Misión Paz) entra en el negocio maderable en Montes de María. La vía de acceso fue la empresa Reforestadora del Caribe, filial de la Fundación Argos (perteneciente a la empresa cementera Argos). La inversión se realiza en el año 2004, bajo la consideración que el conflicto armado estaba controlado en la región, debido a la política de consolidación del territorio.

Según los reportajes de El Espectador (2015) y Verdad Abierta (2019), la empresa adquirió 2.000 hectáreas de tierra en San Onofre en las veredas Palmira y Pajonalito, de las cuales unas 1.700 se sembraron de teca. José Alberto Vélez Cadavid, expresidente del Grupo Argos, indicó a El Espectador en 2015 que también habían adquirido 6.600 hectáreas en El Carmen de Bolívar. La investigación de Daniels (2016) respalda esto, pues afirma que para 2016 se adelantaba una segunda fase del proyecto de reforestación en El Carmen, Ovejas y San Jacinto, donde se tenía como meta la siembra de 10.000 hectáreas de este cultivo forestal. (Instituto de Estudios Interculturales, 2019, p. 82)

La compra masiva de tierras en estas zonas de la Serranía de San Jacinto se realizó en el marco del conflicto armado, con las características que hemos señalado anteriormente, y en el contexto de un abandono masivo de tierras por parte del campesinado. Nos encontramos nuevamente una política para el agro que termina beneficiando un sector económico poderoso en el país, cuya legislación favorece no solo la concentración de tierras sino de patrimonio económico, profundizando las desigualdades existentes. De la siguiente manera es problematizado por líderes y lideresas de la zona rural del municipio de Ovejas y de El Salado.

Eso ya es un gran conflicto de peso que tenemos, por la defensa y la tenencia, primero por la tenencia y luego por la defensa de la tierra (...) primero entramos en una lucha de consecución, ahora es una lucha de la tenencia y la defensa, ¿cierto? Y eso nos está generando conflicto dentro de los mismos campesinos, unos que vendan, otros que no vendan. Mire, aquí hay unas tierras que están sin titular, se están titulando y hay compañeros ya que están esperando a recibir el título para ir a vender mañana, y eso ya es

⁴⁶⁶ Uno de los principales ataques ocurrió en el año 2005, en donde fueron quemados equipos y parte de la plantación y algunas zonas de la misma fueron minadas para evitar el ingreso del personal. Estos ataques se produjeron por la política de no pago de la empresa (Rettberg, 2006, p. 37).

un conflicto, no solamente con los actores que están generando esto, sino internamente dentro de las comunidades. Palabras de un líder de Ovejas. (Relatoría Taller Montes de María realizado en Cartagena el 3 y 4 de julio, Observatorio Nacional de Paz, 2012a, p. 85)

Ahora los empresarios cambiaron de estrategia, le hacen creer a la gente que van a ayudar, están impulsando un proyecto con un grupo de jóvenes de El Salado, en 70 hectáreas de tierra; ellos buscan no a las organizaciones sino a gentes que no tienen conocimiento acerca del proceso que se ha ido llevando, que ni siquiera preguntan, yo tuve el atrevimiento de preguntar y me dijeron que la tierra era en calidad de préstamo, un comodato. Lideresa de El Salado. (Relatoría Taller Montes de María realizado en Cartagena el 3 y 4 de julio, Observatorio Nacional de Paz, 2012a, p. 86)

En el marco de los talleres del Observatorio Nacional de Paz, las organizaciones señalaron que las empresas cambiaron de estrategias para la apropiación de las tierras, implementando proyectos de desarrollo social con las comunidades, a través de la cooptación de líderes y lideresas sociales, que intermedian con las comunidades para la venta de las tierras. Esta estrategia se enmarca en los programas de responsabilidad social empresarial, que terminan desarticulando el tejido social de las poblaciones, principal elemento para asegurar la permanencia en el territorio.

Sin embargo, según el informe del Instituto de Servicios Legales Alternativos (ILSA) publicado en el 2012, en la adquisición de 10.000 ha. de tierra por parte de la Reforestadora del Caribe, en la vereda Santa Fe, ubicada en el municipio de Ovejas (Sucre), para la siembra de teca, produjo el desplazamiento de 75 familias campesinas que tenían la figura de tenedores.

13.4. Los proyectos minero-energéticos en Montes de María

Las organizaciones populares consultadas para esta tesis señalaron la configuración de otro posible vector de conflictividad en Montes de María, referido a la reconversión del uso del suelo para la explotación minero-energética. En el momento en que se realiza esta investigación, el impacto social de esta intervención en el territorio aún era difícil de estructurar. No obstante, los líderes y lideresas apuntaron a la importancia de hacer un diagnóstico e identificar las dinámicas de conflictividad que ya se estaban generando alrededor de esta actividad extractiva, teniendo en cuenta la situación de otros territorios en el país.

En este sentido, es importante recordar que la política minero-energética fue una de las banderas de los planes de desarrollo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos. En este último gobierno, se dio continuidad a esta política a través de las denominadas

“locomotoras minero-energéticas”, la cuales no son compatibles con el espíritu de los Acuerdos de La Habana, en particular, con el primer punto de Reforma Rural Integral, como lo hemos señalado anteriormente. Cabe recapitular que una de las líneas rojas del gobierno en la negociación con las FARC fue el modelo de desarrollo y, desde nuestro análisis, una de las razones por las cuales Juan Manuel Santos se comprometió con la salida negociada del conflicto fue la necesidad de “pacificar” los territorios para asegurar las condiciones territoriales que permitieran la consolidación del modelo desarrollo y la entrada de capitales extranjeros.

De esta manera, el territorio monteriano no podía ser la excepción a la reconfiguración que estaba sufriendo el país en relación con la implementación de estas políticas extractivas. Según el estudio realizado por Daniels (2016), para el periodo de 2007-2010, en la Serranía de San Jacinto se encontraban activas las siguientes exploraciones de gas y petróleo, que se unían a las ya existentes en Ovejas, Córdoba y Los Palmitos. En el periodo del 2008 al 2013, la concesión de títulos mineros se acelera y se otorgan 31 títulos, en promedio seis títulos por cada año, de los cuales no disponemos información específica. Por otra parte, en el año de 2005 se otorgaron títulos para la exploración de grava.

Tabla 14. Títulos mineros en los Montes de María 2007-2010

Periodo	Municipio	Hectáreas títulos mineros
2007	San Juan de Nepomuceno	1529,5
2008	San Juan de Nepomuceno	4608,1
	El Carmen de Bolívar	1237,0
2009	Toluviejo	4421,8
2010	Toluviejo	188,1
	San Antonio de Palmito	3999,1

Fuente: Adaptado de *La transformación de la estructura productiva de los Montes de María: de despensa agrícola a distrito minero-energético* (p. 61), por Daniels, 2016.

La concesión de los títulos mineros se realizó en el marco de la estrategia de consolidación territorial del gobierno de Álvaro Uribe (Daniels, 2016). Las políticas de control social y militar en las zonas conflictivas del país fueron una garantía para el capital nacional e internacional. En el caso del Putumayo, señalamos cómo se diseñó una suerte de privatización de la Fuerza Pública en beneficio de las empresas e inversores tanto nacionales como extranjeros.

Es relevante señalar que, posteriormente a la firma de los Acuerdos de La Habana, en la región de Montes de María se aceleró el proceso de exploración y de concesión de títulos minero-energéticos. Según el mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el

departamento de Sucre se encuentran 48 áreas en exploración de hidrocarburos, de las cuales 19 están en disposición para ser asignadas y 11 están en una etapa de producción de gas, que se corresponden con los siguientes operadores: CNE Oil & Gas S.A.S, Frontera Energy Colombia, HOCOL S.A. y Geoproduction Oil And Gas (Rodríguez, 2019).

13.5. Impactos en la reconfiguración del espacio

La expansión de los agronegocios, en particular la palma de aceite, ha incidido en el mercado de tierras en Montes de María. En los últimos años, el precio por hectárea de tierra ha aumentado considerablemente respecto a los años anteriores, cuando la tierra se desvalorizó a causa de la violencia. La alteración del mercado de tierras dificulta aún más las posibilidades de acceso a la propiedad del campesinado, así como los procesos de retorno y restitución de tierras. Estos elementos configuran un nuevo escenario para el desplazamiento forzado, “no por la vía armada, como ocurrió en el pasado reciente, sino por la dinámica perversa del mercado de tierras en la subregión” (Daniels et al., 2011, p. 55).

Precisamente, las organizaciones populares consultadas señalan estas transformaciones como una de las principales problemáticas. Un líder campesino entrevistado lo problematizaba de la siguiente manera: “la finca nos la quitaron a través de un engaño, simularon la compra y mi mamá no vio esa plata, ahora que la queremos recuperar está ocupada, y no tenemos dinero para comprar otra territa. Además, todo está lleno de palma” (E4, Líder OPD Montes de María, comunicación personal, 03 de diciembre de 2012).

Por otra parte, los liderazgos populares parecen apuntar a un conflicto ecológico-distributivo (Martínez, 2004) por la ganadería extensiva, la consolidación del proyecto palmicultor, de otros monocultivos como la teca y, de manera más reciente, los proyectos minero-energéticos. Las afectaciones ecológicas se agudizaron en una subregión con altas tasas de marginalidad, exclusión y pobreza, en donde los sectores populares vieron minadas las posibilidades de movilidad social, de acceso a unos mínimos vitales y de la realización de sus proyectos territoriales sustentados en la economía campesina.

En este sentido, las organizaciones populares consultadas señalan como una de las principales problemáticas derivadas de la implementación del modelo del agronegocio, el acceso a los recursos hídricos, tanto para el consumo como para los cultivos, debido a que el

acaparamiento de tierras por parte de los grandes empresarios del campo implicó, de manera tácita, una privatización del agua en la región. En el caso de la palma de aceite, las comunidades denuncian la utilización del sistema de riego de Maríalabaja para el beneficio exclusivo de las plantaciones de palma (Observatorio Nacional de Paz, 2013).

Al respecto, señalar que el INCORA en el año 1962, en virtud de la aplicación de la Ley 135 de 1961, adaptó 11.873 ha para el distrito de riego de Maríalabaja. Una parte de las mismas, fueron tituladas a familias campesinas (9.300 ha), y las restantes se utilizaron para la construcción de obras de infraestructura, en particular, represas y drenajes (2.500 ha)⁴⁶⁷ (Daniels et al., 2011). “La función principal del Distrito fue la de ajustar la producción local al modelo de la “revolución verde”, principalmente, con el cultivo del arroz riego” (Mesa de Interlocución de Montes de María, Corporación Desarrollo Solidario, Universidad de Cartagena, Planeta Paz, 2018, p. 18).

En los años 90, con el cambio de modelo económico, el sector arrocerero quebró sin que el Estado propusiera una alternativa de desarrollo rural para la región; de esta manera, una iniciativa gubernamental que había generado procesos de articulación campesina con las instituciones, terminó naufragando ante la pasividad del propio Estado. La región se quedó a merced de conflicto armado y de los actores que entraron a disputar el control del territorio, imponiendo un modelo de agronegocio que por sus características produjo la descampesinización y desruralización de la región (Mesa de Interlocución de Montes de María, Corporación Desarrollo Solidario, Universidad de Cartagena, Planeta Paz, 2018, p. 16).

En este sentido, las organizaciones que confluyen en la Mesa de Concertación e Interlocución de Montes de María denuncian que el distrito de riego se destina en su mayor parte a cubrir las necesidades del cultivo de la palma de aceite: “actualmente el distrito de riego de Maríalabaja está siendo usado por el monocultivo de palma en lugar de estar fortaleciendo la economía campesina, desplazando el uso para el que había sido concebido” (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2017, p. 349).

El acaparamiento de los recursos hídricos, considerados bienes comunes, han generado un serio impacto en las dinámicas de la economía campesina, haciendo casi imposible el desarrollo de sus proyectos productivos y vitales, más en las condiciones climáticas de la Serranía de San

⁴⁶⁷ La principal fuente de agua del distrito es el embalse de Arroyogrande que fue construido para albergar 210 millones de metros cúbicos de agua. No obstante, la capacidad normal es de 120 millones (Mesa de Interlocución de Montes de María, Corporación Desarrollo Solidario, Universidad de Cartagena, Planeta Paz, 2018, p. 17).

Jacinto⁴⁶⁸. Las organizaciones señalan lo paradójico de la situación teniendo en cuenta que la subregión se caracteriza por su riqueza en términos hídricos. Es así como en muchas zonas rurales de Maríalabaja no tienen acceso al agua para sus cultivos a lo que se suma la carencia de agua potable. En el siguiente testimonio vemos como en este municipio, solo hasta el año 2013, se estaba diseñando el sistema de alcantarillado,

En Maríalabaja se está diseñando el alcantarillado, y las lagunas de oxidación las quieren construir a 5 metros de la ciénaga. Además de la sedimentación que trae el Canal del Dique, lo que pone en riesgo a las ciénagas que están allí. La red piscícola fue una forma de permanecer en el territorio, para continuar haciendo la actividad que no les representaba peligros. Hay una apuesta también por la defensa del agua y es una forma de vida una cultura de mucha gente que vive a la orilla de la ciénaga y del río. (Líder Red Piscícola de María la Baja, como se citó en Observatorio Nacional de Paz, 2013)

La ausencia de acceso a unos mínimos vitales para el sostenimiento de la vida es una constante en Montes de María. La situación de Maríalabaja también se produce en las zonas rurales de otros municipios como San Juan de Nepomuceno.

Estamos en lucha con el acueducto de San Cayetano [corregimiento de San Juan de Nepomuceno] que, aunque cuenta con la infraestructura, aún no cuenta con suministro de agua, aun veinte años después de contar con la infraestructura. Con el apoyo de la CDS y de Lutheran se han hecho estudios para estudiar alternativas diferentes a las que existen para el acueducto de San Cayetano. (Lideresa Red de Acueductos Comunitarios de los Montes de María, como se citó en Observatorio Nacional de Paz, 2013)

Por lo tanto, en el plan de ordenamiento territorial desarrollado por la Mesa de Interlocución y Concertación (2017), se “propone la recuperación de este distrito de riego y que se ratifique como área protegida incluyendo toda su cuenca” (p. 354). Asimismo, se incluyen las siguientes acciones:

Adelantar la recuperación de la ronda de las represas, de los arroyos, distritos de riego y ciénagas a partir de la construcción participativa e implementación de estudios de impacto y planes de manejo ambiental, con el fin de proteger la oferta hídrica de la región y garantizar las mejores condiciones ambientales tanto de los recursos naturales como de nuestras comunidades rurales. Como es de conocimiento del INCODER, del Ministerio de Agricultura y de las autoridades ambientales, las rondas de ciénagas y represas son baldíos

⁴⁶⁸ El sostenimiento de la economía campesina depende de una serie de factores que permiten mantener y aumentar la productividad, ente los que se encuentran:

La productividad de los cultivos en un territorio que se encuentra relacionada con los siguientes factores: agua para riego, clima, régimen pluviométrico, acceso a paquetes tecnológicos y la vocación y uso adecuado de los suelos. En Montes de María, existen limitantes en torno a la mayoría de estas variables, algunas de las cuales son difíciles de modificar, tales como el clima y el régimen pluviométrico que son proporcionadas por la naturaleza. (Daniels et al., 2011, p. 51)

de la nación que no pueden ser apropiados para intereses privados. Actualmente existen zonas que se encuentran en las orillas de los embalses, que han sido apropiadas por el cultivo de palma aceitera (corregimiento de Playón, municipio de Maríalabaja). (p. 353)

En esta dirección, las organizaciones apuntan al impacto que tienen los sistemas productivos dominantes en actividades económicas tradicionales de la zona como es la pesca artesanal. Las comunidades de Montes de María que habitan en las zonas cercanas a los cuerpos de agua (ríos, ciénagas, manglares) han desarrollado órdenes sociales, culturales, económicos y simbólicos en la interacción con los espacios acuáticos (Oslender, 2008). La implantación de un modelo extractivista ha alterado estas configuraciones que, como lo señalan las mismas organizaciones, no se reducen al campo material. En este sentido, la Mesa de Interlocución y Concertación problematizó esta afectación de la siguiente manera:

Históricamente comunidades que han habitado los territorios de ríos y ciénagas, ubicadas en los municipios de Zambrano, Córdoba y El Guamo, las ciénagas que bordean el Canal del Dique, la ciénaga de Maríalabaja, y la pesca artesanal marítima que realizan familias afrodescendientes en el municipio de San Onofre, han convivido con esta riqueza hídrica que ha sido fuente de sustento no solo en términos de proteína para el consumo, sino también en términos monetarios a través de su comercialización. Generaciones de familias han logrado sobrevivir con esta actividad, que también ha sido fundamental en la construcción de la cultura e identidad. (Mesa de Interlocución y Concertación, 2017, p. 345)

A partir del diagnóstico colectivo, las organizaciones identificaron que los conflictos hídricos en los territorios se dan a partir de los factores que se explican en la Tabla 15.

Tabla 15. Conflictos por la utilización de los cuerpos de agua

Testimonios
Tenemos una problemática y es que, en la ciénaga, por la contaminación, se han muerto los pescados por medio de las entidades poderosas a las que les interesa solo tener su parte donde botar residuos y eso llega a la ciénaga, eso nos hace un daño ecológico muy grande.
Hay retos que se tienen que superar como son el desecamiento de ciénagas en la zona del Canal del Dique. Muchos políticos están construyendo terraplenes que desecan las ciénagas. En el caso de Maríalabaja hubo una mortandad de peces, unas 10 toneladas por vertidos de la planta procesadora que no tenía lagunas de oxidación. Todavía es la hora que llegan las aguas servidas hasta allá.
Los playones eran unos playones que tenían los ganaderos para utilizarlos, o los utilizaban con los ganados, pero ahora en los últimos años el campesinado, que lo han

venido estrechando y estrechando, ya el campesinado de la región ya no tenía más que acudir a los playones que son del Estado. Pero ya esos playones no eran ambulantes como eran antes, sino que estaban en manos de los ganaderos; entonces, ese es otro problemón que hay ahí, porque ahora los ganaderos no quieren soltar esos playones que les prestaron tanto beneficio. Y los campesinos los necesitan para sembrar pancoger, porque ya los campesinos no tienen dónde sembrar, porque los que tenían su plata o la tienen todavía ya han abarcado todo, toda la zona montañosa que antes se paraba una nubecita en el Cero de Mandinga y eso era agua. (Red Piscícola de María la Baja, REPISNOMOL, Observatorio Nacional de Paz, 2013)

Desecamiento de ciénagas

Taponamiento de los pequeños canales que conectan a las ciénagas y otros cuerpos de agua.

Construcción de terraplenes con el fin de crear playones para la ampliación de predios de grandes propietarios para la ganadería extensiva.

Alteración de la conexión natural de las ciénagas: afecta al hábitat de reproducción de peces.

Obstaculización de los flujos y reflujos naturales del agua: disminución del área de las ciénagas, así como el taponamiento de los hilos de comunicación, ciénagas que tiempo atrás contaban con brazos de comunicación han quedado aisladas.

Efectos:

- 1) los peces quedan atrapados y no pueden salir a las corrientes de agua en las que llevan a cabo sus procesos reproductivos. Al no reproducirse, tanto la cantidad de peces como de especies disminuye. Especies extintas: currulá, moncholo, macaco, dorada y bocachico, entre otros;
- 2) se corre el riesgo de que las poblaciones cercanas a las represas que han sido aisladas artificialmente puedan inundarse en caso de una ola invernal.

Apropiación y uso indebido de playones y terrenos comunales

La construcción de terraplenes para ganadería y el taponamiento de canales conllevan a un segundo problema: la delimitación de los predios.

Las rondas de agua, chorros naturales, ciénagas y demás cuerpos de agua son recursos de la Nación y su uso no puede arrogarse a intereses particulares, en detrimento del bienestar de una población. Las rondas se han convertido en extensiones de pasto para la ganadería, limitando el acceso a tierras para cultivar y reduciendo el área de las ciénagas.

Cercamiento de tierras. La ampliación de tierras para pastoreo ha sido un proceso de apropiación en el que, a medida que se va reduciendo el área de las ciénagas, los propietarios de las fincas han venido cercando, impidiendo a las comunidades la posibilidad de cultivar en terrenos baldíos que pertenecen al Estado.

Contaminación ambiental

Uso intensivo de agroquímicos: la expansión de monocultivos en áreas de protección de las ciénagas, los residuos sólidos y los desechos tóxicos de los hospitales están afectando el complejo cenagoso y la pesca.

Pesca industrial y pesca artesanal

La pesca industrial ha desplazado y arrinconado a las familias que realizan actividades de pesca artesanal, afectando a su seguridad alimentaria y su generación de ingresos (San Onofre)

Pesca indiscriminada

La modificación de los flujos y reflujos naturales y de los ciclos de reproducción de los peces han llevado a que los pescadores se hayan visto obligados a utilizar métodos que afectan a la fauna acuática (trasmallo y el boliche para la pesca) .

Fuente: Elaboración propia a partir de la Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, (2017, pp. 345-346)

Las organizaciones populares también apuntan a una serie de afectaciones que se encuentran relacionadas con la soberanía y seguridad alimentaria, no solo de Montes de María, sino de la Región Caribe en su conjunto. Como se ha señalado, la subregión era considerada como la despensa agrícola de esta región, gracias a la producción de la economía campesina. No obstante, con la llegada de los agronegocios y la reconversión del territorio a una zona de interés minero-energético, los cultivos permanentes están desplazando a los cultivos transitorios o de pancoger. Los cambios en el territorio y en las dinámicas de la economía campesina son problematizados de la siguiente manera:

Los cambios en las dinámicas campesinas han sido muy fuertes, muy fuertes. La producción de alimentos en María la Baja se ha desplazado a las laderas, a las partes altas en donde por la inclinación de los suelos, es más difícil sembrar. Es en el único sitio donde no hay mucha palma, prácticamente queda en la parte alta. En la parte baja no se puede hacer muchas cosas, está dominada por las empresas de palma.

Antes había kilómetros de plátano que se han ido, que se han tumbado para sembrar palma, y al principio de la palma, la gente siembra maíz. Pero después de dos años, año y medio, ya no se siembra nada; se deja de sembrar.

Hay comunidades en las que ese tema de soberanía alimentaria es muy crítico. En Maríalabaja había miseria económica, pero de no alimentación. Eso no existía porque la gente sembraba sus alimentos. (E7, Lideresa del Comité de Pescadores de Puerto Santander, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

Menos mal que algunas familias campesinas se quedaron en la zona alta, en la montaña. Ellos alcanzaron a coger parte de las tierras y se asociaron, dijeron que esta zona no la iban a vender, llegaron a ese consenso. Entonces, los alimentos que vienen al municipio son de esa zona. Viene el ñame, la yuca, el aguacate, el plátano, el mango, todo eso viene de allá arriba. Nosotros complementamos eso con los productos que salen del huerto que hemos hecho en Los Ángeles. Ahora muchos alimentos vienen de Bogotá. Ver a un campesino comprando yuca es muy triste. (E6. Lideresa Junta de Acción Comunal Barrio Los Ángeles Carmen de Bolívar, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

El reto es el monocultivo, ya que la producción de fruta ha mermado. Estamos haciendo muestra de esa problemática para que dejen un pedacito de tierra para poder sembrar una mata de maracuyá, de guayaba, etc. (Lideresa Red Frutícola de Maríalabaja, como se citó en Observatorio Nacional de Paz, 2013)

En esta línea, se plantea el cambio de la alimentación de las comunidades que, al no tener los medios para sembrar los cultivos de pancoger, recurren a productos procesados que no tienen relación con la cultura campesina, generando no solo la pérdida de identidad sino problemas de nutrición.

Por ejemplo, hace poco hicimos una actividad con la red de jóvenes, la llamamos “*Mi tierra, mi identidad*”. Fue una movilización que llevamos a nueve comunidades y, en el momento de la comida, nos ofrecían cosas artificiales como “Frutiño”. Eso no se veía en zonas donde se cultivaba fruta; o, por ejemplo, que en una comunidad de pescadores te ofrezcan un revuelto de huevos. Tampoco hay arroz, la gente antes cultivaba el arroz y tenía para todo el año. Uno se encuentra con que la misma comunidad tiene salchichón para la comida, que no le brindan un bollo de mazorca. Las arepas son de “Promasa” porque ya no se cultiva maíz. Esto también da cuenta de que no se están produciendo los alimentos en la región.

Todo esto ha incidido en la transformación de la cultura. Todo ese conflicto armado y la compra masiva de tierras incide también como en las relaciones, en la oportunidad con el otro, hay una desarticulación, una desconfianza continua. Personas que creen que el otro sigue involucrado en el tema del conflicto y también culpan al otro porque mataron a mi papá y ella estaba de una y otra forma involucrada, ella o él. (E7, Lideresa del Comité de Pescadores de Puerto Santander, comunicación personal, 04 de diciembre de 2010)

Por otra parte, organizaciones como la Red Apícola de los Montes de María, ponen el acento en otro tipo de afectaciones relacionadas con el cultivo de palma. Este tipo de monocultivos utilizan diferentes productos químicos que afectan a la fauna de la región, en este caso en particular, se refiere a las abejas, así es explicado por uno de sus asociados:

A nosotros nos preocupa el impacto nocivo que genera que las abejas se contaminen con el tema de la palma. Nosotros tenemos claro el problema de los monocultivos, el problema de la palma, el tema de que a futuro tenemos que cumplir con todos los requerimientos tanto del INVIMA [Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos] y de libre comercio, pero que para eso tenemos que estar fuertes como organización, como cadena. Para eso la organización de base tiene que creer. Pero ¿cómo hacemos para que los palmicultores nos respeten los requisitos de que haya al menos 3 kilómetros dentro de un apiario a un cultivo mecanizado y de alta fumigación como la palma? El INVIMA nos va a visitar los apiarios para ver si estamos cumpliendo con esos requisitos. Pero no es una lucha solo de la cadena, sino que es una lucha de todos nosotros. Por eso es que hemos venido insistiendo en que hay que poner en práctica cultivos alternativos, que no necesitan mucha fumigación, pero por eso insisto en que cada día el espacio se nos va reduciendo. (Red Apícola de los Montes de María, como se citó en Observatorio Nacional de Paz, 2013)

CAPÍTULO 14. Una política pública para la defensa del territorio. Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María

En los capítulos anteriores, abordamos las percepciones populares de los conflictos socio-territoriales en la subregión de Montes de María. Los ejes de conflictividad identificados a partir de las lecturas y análisis de las organizaciones consultadas se relacionan, en primer lugar, con el conflicto por la tierra y por la permanencia en el territorio de las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y palenqueras que, como hemos señalado, se remonta a la época de la colonia y, posteriormente, a las luchas campesinas a lo largo del siglo XX.

En segundo lugar, los conflictos derivados de la imposición del modelo aperturista y extractivo, que comenzó su implementación en la década de los noventa del siglo pasado, y que se mantiene hasta la actualidad. La operativización del concepto de desarrollo y de progreso se ha caracterizado por la utilización de mecanismos coercitivos sobre las comunidades que habitan los territorios, estos últimos considerados estratégicos, bien sea por su localización o por sus características ecosistémicas. En este sentido, la posición adoptada por el Estado para enfrentar el conflicto social armado ha derivado en la utilización de diferentes dispositivos de control, no solo para “pacificar” el país la mayoría de las veces a sangre y fuego, sino para imponer por la vía de la fuerza sus políticas.

La crisis ecológica y social provocada por las lógicas de reproducción del capitalismo ha llevado a los movimientos sociales populares a trabajar en modelos alternativos de organización. Entre estos modelos se encuentran propuestas como la relocalización de diferentes aspectos de la vida social y económica. Ejemplo de ello es la defensa de la economía campesina sustentada en la agricultura familiar o las fincas agroproductivas propuestas por las organizaciones del Putumayo. Estas propuestas contrahegemónicas, desarrolladas por movimientos ambientalistas, campesinos o étnico-territoriales se presentan como una opción frente al impacto negativo de las políticas neoliberales (Escobar, 2014a). Las propuestas mencionadas plantean como horizonte de sentido la autonomía de las comunidades, enfocadas hacia la generación de la máxima autosuficiencia en la gestión de lo “común” y el fortalecimiento de las relaciones de reciprocidad, solidaridad y cooperación.

La historia de la Serranía de San Jacinto es un reflejo de estos “nuevos” y “viejos” conflictos que se han presentado en el país a lo largo de su historia nacional. No obstante, las

comunidades montemarianas tienen una trayectoria de resistencia y de movilización social que en diferentes periodos les ha permitido recomponer los procesos comunitarios y construir estrategias para la permanencia en el territorio. En esta dirección, las reivindicaciones históricas por la educación, la mejora de los servicios públicos, la vivienda, o el derecho a la tierra, bajo la consigna de “*la tierra es pa’l que la trabaja*”, se han articulado a nuevas demandas que responden a los conflictos actuales derivados de la incorporación del país a ese nuevo ciclo del capitalismo basado en la exportación masiva de *commodities* (Svampa, 2013).

En algunas ocasiones las agendas de los movimientos populares han desbordado los límites de compatibilidad del sistema y han recuperado su carácter antagónico. En otros momentos, las demandas se han ceñido al cumplimiento de la institucionalidad ofrecida, sin pedir cambios radicales en el modo de producción o en la orientación de la sociedad. La movilización en este último sentido, generalmente se ha relacionado con los momentos en donde se ha presentado una creciente criminalización y represión de la protesta social. Para Salgado y Prada, el movimiento campesino se ha movido entre estas dos posiciones, ejemplo de ello son las reivindicaciones de los años setenta y las demandas de los años ochenta con un movimiento campesino más debilitado debido a la violencia política ejercida contra el mismo (Salgado y Prada, 2000).

Ahora bien, la lectura de la realidad que hacen las organizaciones populares les ha llevado a configurar diferentes estrategias para su supervivencia, entre las cuales se encuentran las alianzas entre diferentes sectores para la elaboración de agendas y de propuestas de políticas públicas desde lo popular, en aras de edificar un camino que lleve a la paz con justicia social.

Por lo tanto, en este último capítulo nos parece importante abordar el trabajo realizado por la Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María (MIC) para la construcción de una propuesta de política pública integral para el territorio. En la MIC confluyeron 150 organizaciones populares que representaban la diversidad cultural y social de la subregión. Este proceso de articulación fue producto del diálogo entre los diferentes sectores en el que se generó un diagnóstico de la situación de Montes de María y de los principales conflictos socio-territoriales desde los diferentes sentires populares para, posteriormente, construir de manera conjunta unos ejes sobre los cuales descansa la propuesta de permanencia digna en el territorio, como la han denominado las mismas organizaciones (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2014, 2017).

Es de relevancia señalar que la iniciativa de crear un espacio de concertación intersectorial surge de las Organizaciones de Población Desplazada (OPD). El hecho de ser desplazados y despojados de su territorio lleva a esta población a construir dinámicas organizativas que les permitan el restablecimiento de sus derechos a partir de la identificación colectiva de unos problemas compartidos, que tiene su correlato en la Ley de Víctimas. Empero, estas dinámicas son difíciles de mantener precisamente por las condiciones de precariedad en las que se encuentran sus afiliados y por las tensiones internas que se generan debido a la heterogeneidad de los actores, por lo cual resulta aún más valiosa la construcción de este tipo de acciones.

En el siguiente relato de un líder de la OPD de Montes de María, se evidencia el trabajo político organizativo para la puesta en marcha de la MIC, así como el compromiso del INCODER para un primer momento de impulso de la iniciativa, que se concibe sectorial y territorialmente, a partir del trabajo en cada uno de los municipios de Montes de María.

Las OPD han mantenido una trayectoria de conciencia política sobre el gobierno y sus políticas. El 8 de mayo de 2011 hicimos un foro en El Carmen de Bolívar con campesinos sobre una propuesta de Zona de Reserva Campesina y el 11 de agosto de 2013 se hizo otro foro sobre economía campesina. A estos foros se llevaron propuestas fundamentales para la organización. De ahí salen las propuestas de las mesas de interlocución. Myriam Villegas, directora del INCODER, ya venía con la propuesta dado el flagelo de los monocultivos en la región.

El INCODER puso los recursos y empezamos a trabajar en mesas sectoriales que le dieron sentido a la propuesta de acceso a tierras, medio ambiente, educación. La idea era que todos habláramos el mismo lenguaje y concentrar en un mismo documento la participación de todos.

En 2013, se interlocutó con la directora del INCODER y hubo nuevas mesas preparatorias en Corozal, Zambrano y Tolú Viejo. Estos insumos vuelven al documento para complementarlo sobre las perspectivas y problemáticas de estos territorios.

Hemos logrado también ser partícipes del trabajo político en defensa de los territorios en Catatumbo. Nos mantenemos en contacto con ANZORC [Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina] para saber qué pasa en el resto del país.

Los jóvenes tuvieron una representación muy activa y eso es un gran logro, que los jóvenes le estén aportando al futuro de los Montes de María. También van a salir propuestas de las mujeres víctimas a nivel departamental. Todos tenemos que empoderarnos, y de nuestros territorios para proteger lo nuestro y lo de los otros. (Líder OPD Montes de María, como se citó en Observatorio Nacional de Paz, 2013)

Ahora bien, en los espacios de interlocución con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y con el INCODER, las organizaciones plantearon los principales problemas y conflictos que se presentan en Montes María, conscientes de la necesidad de ampliar las alianzas

con la institucionalidad para forzar a la apertura de una ventana de oportunidad política, que les permitiera posicionar su propuesta como una alternativa al desarrollo y una solución posible a la situación de vulnerabilidad de las comunidades.

De esta manera, señalaron “las potencialidades y fortalezas de la economía campesina, entendida como agricultura familiar, de producción diversificada y agroecológica de alimentos” (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2014, 2017), principal eje sobre el cual descansa la propuesta. Es relevante tener en cuenta que, en ese momento, se percibía una mayor apertura hacia el diálogo por parte del gobierno, en el inicio del proceso de paz con las FARC. En este sentido, las organizaciones presentaron el proceso de concertación como una propuesta de reparación de las víctimas y de construcción de paz desde y para el territorio.

El conjunto de la propuesta y el proceso en sí mismo representa la construcción alternativa de significados, normas y creencias a través de la definición de situaciones que los agentes populares consideran justas e injustas, morales e inmorales (Gusfield, 2001). De esta manera, la defensa de la economía campesina como piedra de toque para un nuevo orden territorial, implicó una acción reflexiva acerca del modelo de desarrollo y de la necesidad de transformar o subvertir el mismo.

A continuación, analizamos los ejes sobre los cuales se estructuró la política pública popular: primero, territorios interculturales, modelos de desarrollo rural y políticas de acceso a tierra; segundo, medio ambiente y recursos naturales; y tercero, educación, investigación e innovación tecnológica, comunicación y cultura. Sin embargo, antes nos gustaría hacer breve referencia a los procesos de lucha social que antecedieron a esta nueva fase de movilización, como parte de ese capital social y cultural de las comunidades sin el cual no hubiera sido posible esta articulación.

14.1. Una historia de resistencia y lucha social

Los patrones de poblamiento de Montes de María, en particular de campesinos y afrodescendientes, se tradujeron en la configuración de un modo de producción parcelario, sostenido por pequeños propietarios u ocupantes de las tierras que, a principios del siglo XX, constituyeron procesos organizativos y de resistencia de la lucha por la tierra frente a la acción de los terratenientes. Tales dinámicas sociales, se dieron en los municipios de San Onofre, Ovejas y

Colosó. Estas primeras organizaciones dieron paso a la constitución de las ligas y sindicatos campesinos formales, entre 1930 y 1940, pues obtuvieron el respaldo de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y se extendieron a otros municipios como El Carmen de Bolívar y Los Palmitos. Posteriormente, en las décadas de 1950 y 1960, los sindicatos de la Federación Agraria Nacional (FANAL), llevaron a cabo invasiones de tierra en zonas latifundios, para parcelarlos en fincas de menor tamaño y sembrar cultivos de pancoger (Fals Borda, 2002 [1986]).

Para Salgado y Prada (2000), en estos primeros procesos de movilización social, el campesinado logró el reconocimiento de sus intereses y la interlocución con el Estado nacional, que se mostró proclive a tramitar algunas de las reivindicaciones de este sector. Empero, las agendas del campesinado se toparon con los intereses de las élites regionales, que no estaban dispuestas a alterar el statu quo ni a hacer concesiones a los sectores populares, mostrándose aún más conservadoras que las clases dominantes del centro del país. La incapacidad de llegar a acuerdos por parte de esas élites regionales tuvo como consecuencia que las reformas para el reconocimiento de los derechos de las poblaciones rurales no se hicieran efectivas en la práctica⁴⁶⁹.

De esta manera,

La estructura de la propiedad de la tierra que se fue creando desde el siglo pasado cerró muchos espacios y opciones a los campesinos. Ellos comprendieron perfectamente este problema. Así que su actitud fue la de confrontar tanto a poseedores como al Estado, a quien entendieron como la institución capaz de modificar la situación. Muchos autores han confundido esta actitud de los campesinos con el Estado como una señal de debilidad y alienación frente a él; es posible que parte de esto haya sucedido. Sin embargo, habría que entender en esta acción que reconocieron al actor que pretendía unificar los intereses de la sociedad. Fue entonces una virtud de los campesinos el que vieran en él a un mediador frente a los terratenientes y que se formaran una idea de lo que representaba para los intereses sociales, idea que los campesinos nunca han perdido. (Salgado y Prada, 2000, pp. 149-150)

De esta manera, las experiencias organizativas y de negociación política de los primeros sindicatos y las ligas campesinas les permitió construir variados repertorios de confrontación. Y

⁴⁶⁹ Absalón Machado señala que las políticas de reforma agraria implementadas durante el siglo XX tuvieron un corto recorrido e impactos parciales debido a que no abordaron los problemas estructurales del agro colombiano. A juicio de este investigador, las políticas adoptadas se centraron más en la tenencia de la tierra que en una intervención para un desarrollo rural integral. De esta manera, considera que el modelo de desarrollo rural instrumental con un enfoque productivista, no garantizó el acceso a la propiedad ni “transformación de las estructuras políticas y sociales en el campo, y menos con una propuesta de articulación ordenada, equitativa y sostenible entre el campo y la ciudad. Lo urbano y lo rural se engendraron como dos polos opuestos y contradictorios” (Machado, 1999).

se constituyeron en antecedentes fundamentales para la conformación en la década de los setenta, de uno de los principales movimientos del campo colombiano, la ANUC Línea Sincelejo. Esta surgió como una facción de la organización nacional ANUC, que en el congreso de Chicoral realizado en 1972, se dividió en dos tendencias, la referida anteriormente y la ANUC Línea Armenia ⁴⁷⁰. Las dos vertientes plantearon horizontes políticos divergentes. La ANUC Línea Armenia siguió una tendencia oficialista, cercana a los partidos tradicionales. Mientras que la Línea Sincelejo planteó una política disruptiva cercana a movimientos políticos de izquierda, bajo la consigna “*la tierra es pa’l que la trabaja*”⁴⁷¹. Esta organización tuvo una gran capacidad de acción y movilización y logró reunir a más de 300.000 afiliados, constituyéndose en una de las expresiones organizativas más fuertes del campesinado (Múnera 1998, p. 254).

La división de la ANUC se debe entender en el marco de la tensión mantenida con el Estado y la ruptura de la organización con el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974). En 1971 la ANUC diseñó un plan de invasiones a tierras, como respuesta a los desalojos masivos realizados por el gobierno, a la falta de solución a las reivindicaciones campesinas y a los intentos de criminalización de la protesta social, tachando de “comunistas” a sus dirigentes. Frente a la acción contestataria, el gobierno calificó la protesta como una “perturbación al orden público” y, por lo tanto, la respuesta se ciñó nuevamente al campo de la seguridad (Múnera, 1998, p. 247).

Las invasiones de tierras estuvieron acompañadas por otros repertorios de acción colectiva ampliando las posibilidades de la protesta social. La movilización social tuvo una especial repercusión en la Costa Atlántica, en particular para el caso que nos ocupa, en los departamentos de Bolívar y Sucre. En este último, en las décadas de los setenta y de los ochenta, se produjeron

⁴⁷⁰ Es importante señalar que el antecedente para la conformación de la ANUC se encuentra en las políticas de reforma agraria impulsadas por Carlos Lleras Restrepo, en el marco del programa político de la *Alianza para el Progreso*. En este sentido, el gobierno de Lleras Restrepo creó un conjunto de instrumentos jurídicos y sociales para la redistribución de la propiedad rural, que buscaban beneficiar a los campesinos sin tierra, aparceros y arrendatarios. Además, se constituyeron las Unidades Agrícolas Familiares (figura que aún se mantiene vigente) en los predios establecidos por el INCORA [Instituto Colombiano de la Reforma Agraria que posteriormente se convertiría en el INCODER]. El gobierno también impulsó la creación de asociaciones campesinas en el ámbito nacional, regional y local, que serían la base para la constitución de la ANUC en el año 1968 (Múnera, 1998, pp. 243-244). Esta última determinación se puede comprender como un intento para encauzar e institucionalizar el movimiento campesino y evitar una escalada en la conflictividad social.

⁴⁷¹ Al respecto, Silvia Rivera Cusicanqui señala en la Junta Nacional de la ANUC celebrada en 1971 “se perfila con claridad la emergencia de un sector de líderes independientes, que plantea la necesidad de desligarse de la tutela de los partidos tradicionales para evitar la burocratización y la urgencia de adoptar medidas de presión a favor de una política redistributiva” (Rivera C., 1987, p. 96). Por otra parte, la presencia de la ANUC Línea Sincelejo en los departamentos de Sucre y Córdoba, estuvo marcada por tres líneas políticas: el Partido Comunista Marxista Leninista –PCML–, de corte maoísta, la Liga Socialista o una tendencia de “independientes” más proclives a la negociación con el Estado (CNRR, 2010, p. 222).

recuperaciones de tierra en los municipios de Morroa, Colosó, Los Palmitos, Ovejas Palmito, Tolú Viejo y San Onofre, situados en los Montes de María, siendo el departamento de Sucre uno de los epicentros de este tipo de acciones⁴⁷² (CNRR, 2010). Es pertinente señalar que, en la subregión de Montes de María, la ANUC Línea Sincelejo tuvo una mayor incidencia que la vertiente oficialista, a excepción de algunos municipios como Chengue o El Salado, donde se presentaba un bajo nivel asociativo.

El proceso generado alrededor de la ANUC representó un punto de inflexión en la constitución del sujeto político del campesinado y en las luchas sociales emprendidas hasta ese momento, que fueron mucho más allá de los repertorios de la organización, permearon otros espacios de movilización y de la cotidianidad de las comunidades monterianas, generando procesos de empoderamiento social.

En la investigación *La tierra en disputa: memorias del despojo y resistencia campesina en la Costa Caribe: 1960-2010* del grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, recuperan estos procesos a partir de los testimonios de líderes y lideresas, en donde se hace especial énfasis en la formación política y en los lazos de solidaridad que desencadenaron las movilizaciones y recuperaciones de tierra realizadas durante este periodo de tiempo. En el caso de las recuperaciones, era fundamental la acción articulada y coordinada.

De esta manera, se fortalecieron las relaciones de reciprocidad, que dieron lugar a formas comunales de economía e inclusive de autogobierno. Los entramados comunitarios lograron sostener estos procesos, en los que participaron otros sectores sociales como estudiantes, comerciantes, maestros. Uno de los líderes entrevistados en esta investigación valoraba de la siguiente manera lo vivido durante estos años de lucha social y la importancia en términos del acumulado político:

Para mí la ANUC fue importante no solamente en Sucre sino en toda Colombia porque transformó la mentalidad de muchos campesinos; se convirtió en un instrumento de lucha que de sirvientes de los ricos pasamos a ser propietarios de las tierras. La Asociación de Usuarios nos unió en base de unos lineamientos políticos “tierra pal’ que la trabaja” [...] La ANUC nos ofreció la oportunidad primero de organizarnos y de capacitarnos. Pero lo más importante es que nos dimos cuenta que la ANUC somos cada uno de nosotros

⁴⁷² Las recuperaciones son entendidas como las acciones llevadas a cabo por los campesinos para tomar posesión de las tierras por la vía de hecho. La batalla con el Estado se libró en el ámbito político, jurídico y semántico, en la medida que los gobiernos las calificaron como invasiones o tomas para justificar la acción policial y enmarcar la lucha social como una expresión del comunismo (CNRR, 2010, p. 203).

(Hombre/ adulto/ dirigente campesino/ Los Palmitos/ Sucre/ julio de 2009, como se citó en CNRR, 2010, p. 209).

A finales de la década de los ochenta, se produjo un proceso de reorganización y de articulación de las organizaciones campesinas. En 1987, se llevó a cabo el Congreso de Unidad de la ANUC y se conformó la Asociación Nacional de Usuario Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), en un intento de reagrupar la organización y las diferentes expresiones políticas que confluían en su interior⁴⁷³. Asimismo, se crearon otras expresiones organizativas como la Coordinadora Nacional de Organizaciones Agrarias, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) conformó la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Federación Sindical Agropecuaria (FENSUAGRO). En esta última, la hegemonía política era detentada por el Partido Comunista Colombiano (PCC) (CNRR, 2010; Múnera, 1998).

Estas diferentes expresiones tuvieron incidencia en la región Caribe y, de manera particular, en el departamento de Sucre. No obstante, en las décadas de los ochenta y de los noventa del siglo pasado, la situación del campo colombiano se tornó aún más compleja debido a que los intentos de reforma agraria no tuvieron el alcance esperado. Los procesos de concentración de la tierra y el despojo del campesinado se intensificaron debido a la acción del narcotráfico, a la agudización del conflicto armado, a la criminalización de la protesta social y a la irrupción del paramilitarismo en la región.

En el siguiente testimonio de una lideresa del municipio Los Palmitos de Montes de María narra las dificultades a las que se ha enfrentado el campesinado y la capacidad de resistencia de las comunidades frente a los actores que han querido imponer sus propias territorialidades:

Claro, hemos perdido parte de esas fincas por la guerra, por la acción de narcotraficantes y paracos [...] Nosotros nunca podremos contra un fusil. Pero no todo ha estado perdido; en "Los Borrachos" y la «Europa» a punta de organización impedimos que las FARC en los ochenta pasaran por acá; a punta de organización conseguimos que nos titularan todas esas tierras... y ahí seguimos. Con el Instituto Tabacalero adquirimos las tierras, con la ANUC las consolidamos y con nuestra lucha a pesar de la violencia las seguimos trabajando. (Mujer adulta/ campesina/ desplazada/ líder/ Los Palmitos/ junio de 2009, como se citó en CNRR, 2010, p. 211)

⁴⁷³ El proceso de reunificación de la ANUC no consiguió la articulación de las organizaciones campesinas y las disputas al interior de la izquierda se encontraban enquistadas; por lo tanto, el movimiento campesino que años atrás irrumpió con fuerza en el escenario nacional se debilitó resquebrajando esa suerte de contrapoder popular (Múnera, 1998).

Los elementos de contexto brevemente reseñados en este apartado evidencian la existencia de una larga tradición de organización social, desde los palenques (poblados de afros libertos) en el SXVII, los comités campesinos de comienzos del SXX y las luchas campesinas que permitieron experiencias de reforma agraria en los años sesenta del siglo pasado, que formaron una cohorte de liderazgos sociales, seriamente lesionada por la violencia reciente.

En el período entre 1992 y 2007 se cometieron 57 masacres en los Montes de María y fue desplazado el 48% de la población (225.536 personas), situación que afectó de manera severa a las dinámicas organizativas generadas para dar respuesta a la estructura económica y social basada en la crisis del arroz riego como cultivo principal y la producción de alimentos como yuca, ñame, maíz tradicional y tecnificado, aguacate, plátano, frutales, ajonjolí, pescado, ganadería doble propósito, entre otros.

La estructura social y económica que emergió a raíz de esta violencia dio paso a la recomposición de la propiedad de la tierra y a las economías de plantación y enclaves mineros que incrementaron desequilibrios de todo orden, uno de los cuales es la elevada concentración de la propiedad de la tierra. Sin embargo, el campesinado, los afrodescendientes y los indígenas aún siguen reivindicando el derecho a la tierra y al territorio, la titulación individual y colectiva y la defensa de la vocación agrícola de la subregión, frente al poder ejercido por los terratenientes, los ganaderos y, de manera más reciente, las empresas minero-energéticas y las dedicadas al agro-negocio.

14.2. En busca de una permanencia digna en el territorio

La propuesta de la Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María se elaboró con la participación de diferentes sectores sociales entre los que se encontraban mujeres, jóvenes, víctimas, desplazados, afrodescendientes, indígenas y campesinos, entre otros. En este sentido, se puede hablar de una confluencia amplia de diferentes sentires populares con propuestas diversas para el territorio. Esta articulación se produjo en un momento en el que el conflicto armado parecía haber remitido, si lo comparamos con las cifras de la primera década del siglo XXI, debido al inicio del proceso de negociación entre el gobierno y las FARC que, a juicio de las organizaciones, abrió una estructura de oportunidades para el posicionamiento de sus demandas. Esta aparente

tranquilidad permitió la rearticulación de las organizaciones y el diálogo con la institucionalidad, partiendo de la identificación del Estado como principal interlocutor de sus reivindicaciones.

Como hemos señalado, la agenda de desarrollo rural y agrario se elaboró a partir de un diagnóstico compartido de los conflictos socio-territoriales de la subregión y de los impactos diferenciados sobre los diferentes sectores sociales populares. Al respecto, nos parece importante profundizar en dos ideas que parecen vertebrar la argumentación de la propuesta y guardan relación con la historia de la lucha campesina en Montes de María.

En este sentido, la agenda parece pivotar sobre la demanda para revertir la alta concentración de la tierra que ha dado lugar al control del territorio y la necesidad del reconocimiento del campesinado como un sujeto social y político. Estos dos elementos se encuentran estrechamente relacionados, ya que la desvalorización histórica del campesinado como un agente de desarrollo ha traído consigo la negación por parte del Estado de sus agendas para una reforma rural integral, que posibilite un orden social, económico y cultural más justo en el campo colombiano. No se puede obviar que, por encima de la exclusión política, social, económica y cultural, el campesinado ha logrado mantener la producción de alimentos y abastecer el mercado nacional, en medio de un conflicto social y armado que se libra en sus territorios y del cual han sido sus principales víctimas (Salgado, 2010).

Precisamente, en el planteamiento inicial de la política de desarrollo rural y agrario del MIC, las organizaciones señalan que la subregión de Montes de María se ha considerado históricamente la *despensa agrícola del Caribe* gracias al desarrollo de la economía campesina. Esta realidad contrasta con las condiciones adversas en las que se encuentran las comunidades, debido principalmente a una distribución desigual de la tierra, que coloca al campesinado en una situación de inseguridad jurídica, incrementando su condición de vulnerabilidad. Tal situación es extensible en la subregión a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Este modelo socioeconómico [economía campesina] ha permitido que la región se convierta en un territorio fundamental para el sistema agroalimentario de la Región Caribe colombiana. No obstante, la gran mayoría de nuestras familias, dedicadas a la producción agrícola y pecuaria, lo hacen en calidad de tenedores o arrendatarios, es decir, no somos propietarios de la tierra que trabajamos. Según una investigación realizada con 180 agricultores de los municipios de Maríalabaja, Carmen de Bolívar, San Jacinto y Ovejas, el 67,22% de las familias son tenedoras y/o arrendatarias de tierra, frente a un 32,78% que es propietaria; de este último grupo, el 68,9% cuenta con un área entre 0 y 5 hectáreas (OPDS Montes de María, y Corporación Desarrollo Solidario, 2014). De igual forma, de los 62 cabildos indígenas y de los 14 consejos comunitarios existentes en Montes de María

(Duarte, 2016, p. 287), ninguno tiene resguardos indígenas o territorios colectivos legalmente constituidos a excepción del Consejo Comunitario MAKANKAMANÁ de San Basilio de Palenque, ubicado en el municipio de Mahates. (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2017, p. 343)

Por otra parte, la desvalorización del campesinado como sujeto social y político, se puede entender bajo la idea de construcción de las sociedades estratificadas, cuyo marco institucional fundamental es proclive al desarrollo de grupos sociales desiguales debido a la existencia de relaciones estructurales de dominación y subordinación (Fraser, 1992). Ahora bien, estas relaciones estructurales de desigualdad se encuentran ancladas en las formas coloniales de ejercicio del poder y en la posterior invención de esa idea del “Tercer Mundo” (Escobar, 1994), que promovió el paradigma desarrollista.

Carlos Salgado y Esmeralda Prada (2000) apuntan precisamente a esa visión dualista de la sociedad: lo “moderno” era asociado a unos atributos dinámicos, en donde los actores que eran portadores de los mismos estaban facultados para vincularse a los procesos de cambio dados en los diferentes órdenes. En contraposición, estaban aquellos sectores considerados esencialmente conservadores, poco proclives al cambio, en definitiva, “atrasados”. De esta manera,

Los campesinos quedaron atrapados en estos esquemas como el prototipo de los sectores “atrasados”, a los que incluso se les negó, en varias formulaciones marxistas, su condición de sujetos capaces de constituirse como clase social; a lo más, fueron considerados un “modo de producción específico” con algunas articulaciones al capitalismo. Desde la perspectiva estructuralista, se estimó que el conjunto de valores que definían al mundo rural era rígido, con tendencia a permanecer estático en períodos más largos de tiempo. (Salgado y Prada, 2000, p. 148)

Esta desvalorización del campesinado y en general de los sectores populares como indígenas y afrocolombianos se encuentra aún vigente en los imaginarios de las clases dominantes y se presenta como el sustento retórico de las políticas para el agro colombiano, en donde el campesino se integra al modelo como aparcero o trabajador rural, despojándolo de la posibilidad de ser tenedores de la tierra y adjudicándoles un lugar de subordinación frente a otros actores como las empresas

.

Las organizaciones campesinas y étnicas han planteado por décadas reivindicaciones y protestas pidiendo más integración y más democracia en cuanto al reparto de la tierra. Sin embargo, ha sido usual que sus demandas se desestimen bajo el argumento de su supuesta incapacidad para llevar adelante los procesos modernos de la producción y la integración

a los mercados, papel que se considera es propio de los empresarios. (Salgado, 2014, p. 105)

Carlos Salgado (2014) toma como ejemplo las declaraciones del Ministro de Agricultura del primer gobierno de Juan Manuel Santos, Rubén Darío Lizarralde, en las que señalaba que “al campo lo tenemos que ver como un negocio, hay que trabajar asociativamente. La unión hace milagros, vamos a cambiar a fondo al campesino colombiano [pues] en este proceso tenemos que caber todos y los grandes tenemos que llevar de la mano a los pequeños” (pág. 105). Las declaraciones del Ministro nos llevan precisamente a esa desvalorización del campesinado como sujeto de desarrollo y al desconocimiento de su labor productiva. Estas declaraciones se producen en un contexto de profundización del modelo extractivo a través del impulso a las “*locomotoras minero-energéticas*” y a los agronegocios⁴⁷⁴.

La política de desarrollo rural y agrario de Montes de María desmonta esa visión paternalista del Estado, expresada en palabras del exministro, y se presenta como una propuesta integral de ordenamiento del territorio a partir de la relocalización de los sistemas agroalimentarios. La propuesta apunta hacia una reterritorialización del espacio por parte de las comunidades que se han visto despojadas del lugar que habitan. En este sentido, se pretende la estabilización de la población rural y la recuperación del tejido social y cultural asociado a esa economía campesina que también es practicada por las comunidades indígenas y afrodescendientes, desde sus cosmovisiones particulares. Por lo tanto, en el texto de la propuesta se señala que:

Los programas de desarrollo rural y agrario para la región de Montes de María deben partir de reconocer el papel protagónico que hemos desempeñado en la construcción de la región y el gran aporte al desarrollo social, cultural y económico al Caribe y al país en general. Hemos sido y somos parte fundamental del sistema agroalimentario, hemos aportado a la seguridad y soberanía alimentaria de nuestras familias y a la de los habitantes de las áreas urbanas y hemos contribuido también a su bienestar. Este reconocimiento es vital para

⁴⁷⁴ La propuesta de reconocimiento del campesinado como sujeto político fue presentada como proyecto de ley por el senador Alberto Castilla en el año 2017, líder campesino de la región del Catatumbo. El proyecto fue elaborado con base en las reivindicaciones históricas de este sector social y con los aportes de investigadores como Carlos Salgado. La finalidad de proyecto de ley era el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional. En la Constitución se consigna una especial protección al trabajador agrario. Esta figura ha sido interpretada de manera amplia en donde quedaría incluido el campesinado. No obstante, la falta de un reconocimiento explícito elimina “la construcción identitaria, política, social y cultural del campesino como sujeto histórico. El campesinado es un grupo social diferenciado que sustenta su vida comunitaria e individual en el vínculo especial que tiene con la tierra y con la producción que se deriva de ella, así como en saberes populares y modos de vida relacionados con la producción de alimentos y otras actividades tradicionales en el mundo rural” (Castillo, 2017).

avanzar en la construcción conjunta de políticas públicas y programas de desarrollo rural. (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2017, p. 346)

14.2.1. Territorios interculturales, modelos de desarrollo rural y políticas de acceso a la tierra

Los territorios interculturales, modelos de desarrollo rural y políticas de acceso a la tierra se constituyen en el primer eje de la política elaborada por la MIC. En la argumentación inicial de este punto las organizaciones recurren a la memoria larga para sentar las bases de esta propuesta. En esta dirección, el territorio intercultural se encuentra ligado a la presencia histórica de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en Montes de María, señalando el carácter ancestral, como un elemento de legitimación política y cultural. Este elemento va a estar presente a lo largo de la política, poniendo de relieve las territorialidades cruzadas que se encuentran en la subregión.

Nuestra presencia en el territorio es ancestral, lo que ha permitido construir relaciones históricas de convivencia, de uso y aprovechamiento del suelo y los recursos naturales. Montes de María ha sido y es un territorio diverso e intercultural. (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2017, p. 342)

Ahora bien, el modelo de desarrollo rural se plantea desde la necesidad de un cambio en la estructura de la propiedad de la tierra, lo que significa generar procesos de democratización que permitan el acceso a la titularidad del campesinado y la formalización de los resguardos indígenas y territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes. De esta manera, se propone revertir los procesos de concentración de la tierra que se han dado en los diferentes periodos históricos en el marco de la imposición de modelos de desarrollo rural basados en la ganadería extensiva, los monocultivos y, de manera más reciente, la política minero-energética y la agroindustria. Para las organizaciones que confluyen en el MIC “estos modelos de desarrollo productivo han traído consigo conflictos sociales y ambientales que pueden mantenerse e intensificarse si no se logra acordar modelos productivos con la participación de las comunidades de la región” (Mesa de Interlocución y Concertación, 2017, p. 344).

Las bases de la propuesta se encuentran alineadas con el espíritu de algunas de las normativas aprobadas para la reparación y restablecimiento de los derechos de las comunidades. En particular, nos referimos a la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011, por la

cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Como señalamos en la Segunda Parte de la tesis, esta ley representa la intención de un sector de las élites políticas del país de incorporar a los “procesos de modernización” a ciertos segmentos de la población y restaurar algunos de sus derechos. Si bien la Ley en su formulación no cumplió con todas las expectativas de las víctimas del conflicto, sí sentó un precedente en términos de justicia transicional.

Además, la propuesta tiene sentido en el marco del Acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. En particular, en el primer punto del acuerdo sobre Reforma Rural Integral. Aunque este epígrafe de la negociación no implica una reforma en los términos planteados por el movimiento campesino, representa una apuesta para modernizar el campo colombiano. En el ámbito de la estructura de propiedad de la tierra, se destaca el catastro multipropósito, como condición necesaria para la democratización de la tenencia de la tierra.⁴⁷⁵

El reconocimiento como agentes sociales, políticos y de desarrollo se plantea como la base fundamental de la política de desarrollo rural y agraria del MIC. Para que este reconocimiento sea real y efectivo, las organizaciones que confluyen en esta plataforma plantean una serie de programas que, desde nuestra interpretación, se encuentran dirigidos al restablecimiento de las territorialidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Estas territorialidades encuentran sus raíces en la experiencia espacial subjetiva de los habitantes rurales de Montes de María, que se corresponde con ese espacio vivido del que nos habla Lefebvre (2013 [1974]).

Desde estas subjetividades ancladas en sus experiencias sociales, culturales y económicas, las comunidades construyeron representaciones del espacio, que emergieron en los quiebres del sistema dominante. Entre esos “espacios de la diferencia” o “contraespacios” se encuentran los resguardos indígenas, los consejos comunitarios de los afrodescendientes y las formas de organización del campesinado a partir de la agricultura familiar. En este sentido, los programas y

⁴⁷⁵ El primer punto del Acuerdo de La Habana “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” tiene como objetivo principal la transformación estructural del campo a través del uso adecuado de la tierra. Para ello, se propone adoptar medidas para la formalización, restitución y distribución equitativa, estableciendo las garantías necesarias para el acceso a la propiedad rural de los habitantes del campo. De esta manera, se plantea la desconcentración de la tierra en cumplimiento de la función social consignada en la Constitución. Entre los instrumentos previstos se encuentran: el Fondo de Tierras de distribución gratuita, la formulación de un plan nacional de formalización masiva y gratuita de la propiedad, la realización de un catastro multipropósito, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, los Planes para la Reforma Rural Integral. No obstante, desde la firma del Acuerdo este es uno de los puntos con más retraso en la implementación, lo cual se puede relacionar con la falta de voluntad política de las clases dominantes para acometer las reformas necesarias en el campo colombiano. A esto se suma la consolidación de un modelo de desarrollo extractivo que va en contra de los principios del Acuerdo.

acciones planteadas pretenden devolver esos espacios a las comunidades y recuperar sus proyectos territoriales.

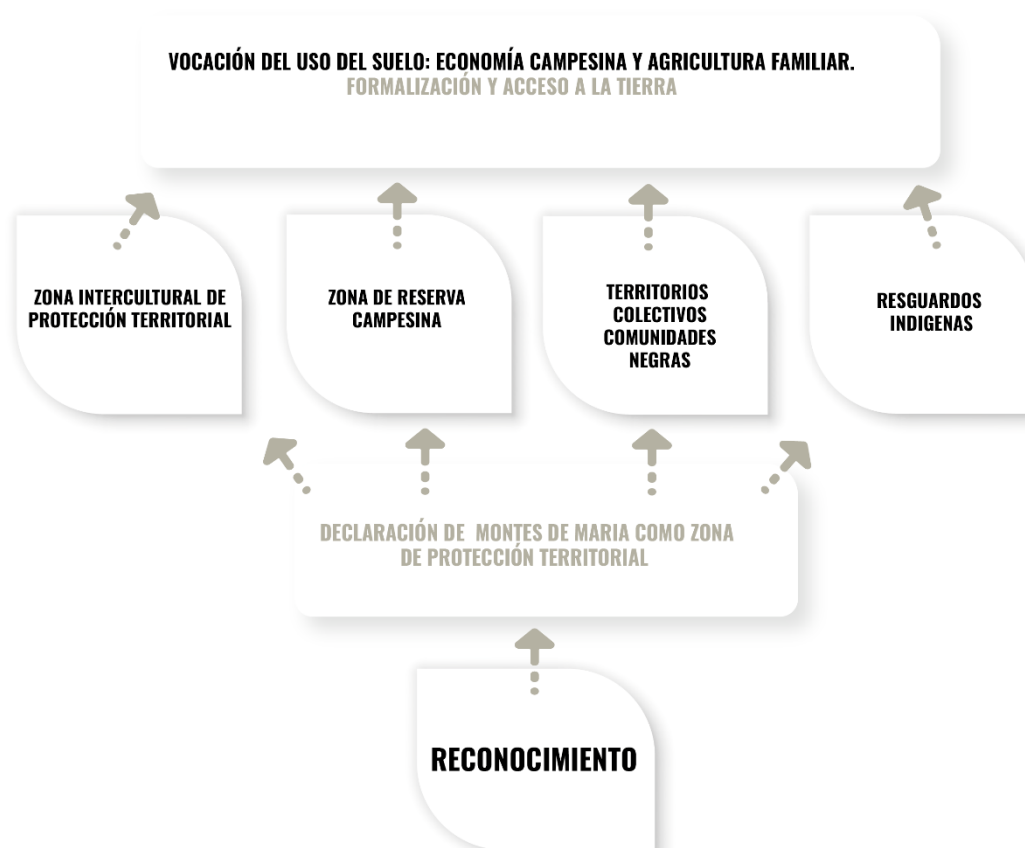
A continuación, se recogen las propuestas para la construcción de los territorios interculturales.

La declaración de Montes de María como Zona Intercultural de Protección Territorial donde se impulsarán modelos de desarrollo rural sostenibles con criterios sociales, ambientales, culturales, étnicos y de género. Proponemos como elemento principal el fortalecimiento y consolidación de la economía campesina, entendida como agricultura familiar, producción diversificada y agroecológica de alimentos.

Para el fortalecimiento de la agricultura familiar, la producción diversificada y agroecológica de alimentos, proponemos dentro de la Zona Intercultural de Protección Territorial, la conformación de Zonas de Reserva Campesina, Territorios Colectivos de Comunidades Negras y Resguardos Indígenas. Dentro de estos territorios se diseñarán estrategias para la adquisición, distribución y titulación de tierras para la población campesina, indígena y afrodescendiente que en la actualidad no goza del derecho a la tierra. Estas estrategias contemplarán el acceso prioritario de tenedores y arrendatarios, especialmente mujeres cabeza de familia.

Hacemos un llamado al INCODER para la declaración de Zonas de Reserva Campesina; Territorios Colectivos de los Consejos Comunitarios Eladio Ariza, Santo Madero y Renaciente, y del Resguardo Indígena Yuma de las Piedras. Así como las solicitudes de otros Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas que buscan el acceso y protección de sus tierras. Proponemos la titulación en común y proindiviso para las familias campesinas. (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2017, p. 347)

Figura 27. Territorios interculturales, modelos de desarrollo rural y políticas de acceso a la tierra



Fuente: Elaboración propia a partir del documento de la Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María (2017).

Para la protección de la vocación del uso del suelo de las economías campesinas y de la agricultura familiar se insta también a las instituciones públicas pertinentes que despliegan los mecanismos necesarios para la protección de las tierras de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Asimismo, se señala la necesidad de emprender un proceso de formalización de los títulos de propiedad. Al respecto, proponen los siguientes criterios para la realización de un censo y catastro rural:

- Población desplazada y víctima de la violencia.
- Arrendatarios y tenedores (trabajadores en tierra ajena).
- Población indígena sin tierras, poseedores sin títulos de propiedad y en proceso de titulación colectiva.

- Población afrodescendiente sin tierras, poseedores sin títulos de propiedad y en proceso de titulación colectiva.
- Poseedores campesinos sin títulos de propiedad.
- Poseedores de toda la población (campesinos, indígenas y afrodescendientes) con titulación individual y colectiva.

Además, para asegurar la continuidad y mantenimiento de la economía campesina y la agricultura familiar a largo plazo, las organizaciones plantean la creación de una bolsa de tierras, en donde los predios susceptibles a adjudicar son los que se describen a continuación.

- Predios incautados por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
- Predios y parcelas en venta.
- Baldíos de la nación.
- Predios entregados al Fondo de Reparación de Víctimas.
- Predios improductivos (ganadería extensiva).

La bolsa de tierras representa un mecanismo fundamental en la estructura de la política ya que refuerza los mecanismos de democratización de la propiedad y establece la utilización de los predios señalados anteriormente y de los baldíos de la nación para las comunidades rurales, cumpliendo la función social contenida en la Constitución. En este marco, las organizaciones proponen que las mujeres cabeza de familias tengan prioridad para el acceso a la tierra.

Finalmente, se plantea crear un Programa de Fortalecimiento de la Economía Campesina y la Agricultura Familiar en Montes de María. El Programa se diseña a partir de la experiencia de las organizaciones de base que aportarían sus conocimientos y saberes, en un proceso de acompañamiento con otras instituciones públicas o centros de investigación. De esta manera, se invierte el argumento de la desvalorización del campesinado y se potencian los saberes subalternos frente a la razón tecno-científica construida desde el centro del país.

Tabla 16. Programa de Fortalecimiento de la Economía Campesina y la Agricultura Familiar en Montes de María

Enfoque de derechos, étnico, de género y generacional	
Metodología participativa. Organizaciones de base	
Mecanismos de apoyo	Contenido productivo
Subsidios, fondos rotatorios, asistencia técnica y transferencia de tecnología, teniendo en cuenta la variabilidad climática.	Impulso la producción diversificada y agroecológica de alimentos, la creación de mercados campesinos y agroecológicos en zonas rurales y urbanas; la creación de bancos de semillas criollas, y el trabajo asociativo y comunitario.

Fuente: Elaboración propia a partir del documento de la Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María (2017)

14.2.2. Medio ambiente y recursos naturales.

El Eje de Medio ambiente y recursos naturales se construye a partir del reconocimiento de la biodiversidad y de la riqueza ecosistémica de la subregión de Montes de María. En este sentido, las organizaciones plantean una serie de mecanismos que permitan su conservación y una relación armónica con las actividades productivas que realizan las comunidades. Para ello, identifican las causas principales del deterioro de la naturaleza, que se encuentran relacionadas con las lógicas dominantes de progreso y desarrollo impuestas en Montes de María, como se señala en el siguiente extracto:

Toda esta riqueza natural, sin embargo, ha sido amenazada principalmente por sistemas productivos que afectan los recursos naturales y el ambiente. La ganadería extensiva, el uso intensivo de agroquímicos propios de la “revolución verde”, el avance de los monocultivos, la pesca indiscriminada, la pesca industrial, la falta de manejo de residuos sólidos y aguas residuales y la explotación minera y de hidrocarburos, son las grandes causas y amenazas que están afectando principalmente a bosques, suelo, aire y el recurso hídrico. (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2017, p. 351)

Este tipo de modelos productivos implica procesos de colonización de la naturaleza que alteran los sistemas naturales con el propósito de hacerlos funcionales a las necesidades del mercado en cada momento histórico. De esta manera, terminan afectando las prácticas tradicionales de los cultivos, los usos comunes y colectivos del suelo, el paisaje, los ciclos de la naturaleza, la soberanía y seguridad alimentaria, entre otras cuestiones. Finalmente, se termina

poniendo en cuestión la reproducción y la sostenibilidad de la vida. Carlos Salgado en un estudio sobre el impacto medioambiental en Montes de María describe la situación de la subregión de la siguiente manera:

No es lo mismo si el ecosistema te provee unas condiciones para sembrar y cosechar papa que ñame. Si la transformación es muy intensa, tiende a una crisis ambiental, como pasa por ejemplo con las economías extractivas o los monocultivos que destruyen o unifican el paisaje y cortan los circuitos físicos y químicos del suelo. Si es menos intensa, tiende a la sustentabilidad, como sucede cuando se usan básicamente los recursos propios sin destruir o disminuir su diversidad. (Salgado, 2017, p. 2)

En el caso de Montes de María, la reconfiguración de los territorios y la explotación intensa de la naturaleza, a causa de los diferentes modelos productivos, ha estado acompañada por la utilización de métodos violentos, produciendo profundas asimetrías en las relaciones de poder, que se reproducen según los ciclos de violencia (teniendo en cuenta la larga duración del conflicto armado). Estas asimetrías se inscriben en el campo ecosistémico, en la medida en que los actores dominantes (incluyendo los armados) intentan controlar y afectar la naturaleza en función de sus intereses y proyectos territoriales. En el siguiente testimonio se evidencia los impactos en las comunidades producidos por las asimetrías señaladas anteriormente.

El uso de los recursos naturales, digamos que anteriormente en todos los aspectos era libre. Las comunidades accedían a ellos de una forma muy abierta porque las personas se sentían propietarias o son propietarias: los arroyos, las cuencas hídricas, los embalses, las vegetaciones, los bosques, a todo eso la gente accedía con tranquilidad y libertad. Ahora es como estar aquí y de un saber que tengo que salir porque esto no es mío, porque está cerrado. El distrito de riego, que fue creado para los arroceros y los campesinos, ahora es para el monocultivo de palma de aceite y ahora es para los palmicultores y arroceros. El campesinado quedó aislado de su recurso y, si necesita el agua, debe pagar un capital. Entonces eso es muy complicado, o sea, ahora mismo es difícil acceder a él, a ese recurso natural. (Campesino del Playón, como se citó en Salgado, 2017, p. 64)

En este sentido, la política de desarrollo rural propuesta por las organizaciones montemarianas pretende revertir esta situación de desigualdad en el ámbito social, político, económico y ambiental. En relación a este último punto, la política apunta hacia un nuevo ordenamiento ambiental del territorio en donde se propone el agua como el principal eje articulador de los procesos de planificación territorial en la subregión. Por tanto, las organizaciones parecen estructurar las bases de una nueva justicia ambiental, a partir de las características específicas de

su territorio y de las necesidades de la población, en contraposición a los procesos de capitalización de la naturaleza.

En los siguientes apartados de la propuesta, se pueden identificar algunos de los elementos que configurarían ese nuevo ordenamiento ambiental del territorio articulado con las políticas de desarrollo rural.

Montes de María cuenta con un patrimonio público ambiental decisivo para garantizar condiciones de vida digna para nuestra población. Las propuestas sobre medio ambiente y recursos naturales están articuladas con las propuestas del eje anterior [territorios interculturales y política de desarrollo rural]. En este sentido, las propuestas sobre el ordenamiento productivo y los modelos de desarrollo rural y agrario se implementarán con los lineamientos y criterios ambientales que permitan garantizar el patrimonio público ambiental, la estructura ecológica principal del territorio y los servicios ambientales indispensables para las comunidades.

Las organizaciones que hemos construido estas propuestas consideramos que, para garantizar condiciones de vida digna, los intereses productivos y económicos que están presentes, así como los que se pretenden desarrollar en un futuro, no deben poner en riesgo el patrimonio ambiental con el que cuenta la región. En este punto ponemos a disposición toda la sabiduría y conocimientos que hemos adquirido por nuestra histórica presencia y por nuestra estrecha relación con el medio ambiente y los recursos naturales.

Consideramos que el ordenamiento ambiental del territorio debe ser una prioridad en los acuerdos que se logren en el marco de la Mesa de Interlocución y Concertación. Para ello, proponemos que el agua sea el eje articulador de los procesos de planificación y ordenamiento territorial en Montes de María. (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2017, p. 352)

En cuanto al agua como eje articulador de los procesos de planificación y ordenamiento territorial, nos parece importante destacar las propuestas de recuperación de los recursos hídricos, entre las que se encuentran: primero, la recuperación por parte del Estado de las tierras baldías en las rondas de las ciénagas y las represas, apropiadas por las empresas de palma aceitera; segundo, verificar los títulos de propiedad de las tierras colindantes con las ciénagas y cuerpos de agua, y destinarlas para el uso de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas; tercero, el dragado de los canales y caños naturales del sistema cenagoso; cuarto, recuperar el distrito de riego para las comunidades campesinas de Maríalabaja, acaparado por el monocultivo de palma aceitera, e incluirlo como área protegida incorporando toda la cuenca (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2017, pp. 353-354).

Al respecto, nos gustaría señalar que el énfasis en la protección del agua en Montes de María se relaciona, no solamente con la necesidad de este elemento para las actividades

productivas, sino con los vínculos particulares que crean las comunidades que viven en entornos acuáticos. De esta manera, parece gestarse una identidad con el espacio acuático (Oslender, 2008) en la que las costumbres, las formas de vivir, los arraigos al territorio se encuentran mediados por las dinámicas de los ríos, de las ciénagas y de los cuerpos de agua. En este sentido, la propuesta hace especial hincapié en la protección de la pesca tradicional, no solamente como una actividad productiva adicional, sino como parte esencial de la reproducción social de las comunidades.

Por otra parte, en la Figura 29 se recogen los principales programas previstos en este eje que articulan una suerte de gobernanza ambiental dirigida a la resolución de los conflictos socio-territoriales de Montes de María y a la garantía de conservación de los derechos territoriales de las comunidades rurales.

Figura 28. Plan de ordenamiento ambiental



Fuente: Elaboración propia a partir del documento de la Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María (2017).

14.2.3. Educación, investigación e innovación tecnológica, comunicación y cultura.

Las organizaciones que confluyen en la MIC consideran la educación, la investigación y la innovación tecnológica como parte de la columna vertebral de la propuesta, en tanto deben servir para el fortalecimiento de la economía campesina, la agricultura familiar y la producción diversificada y agroecológica de los alimentos.

En este sentido, plantean un giro en el enfoque pedagógico que se viene desarrollando en la subregión con el propósito de armonizar los contenidos a las realidades territoriales de Montes de María. Desde nuestra perspectiva, la propuesta se dirige a la construcción de un proyecto pedagógico a partir de los saberes y conocimientos propios de las comunidades. Este tipo de conocimientos y prácticas populares han sido excluidas históricamente por los enfoques y modelos universalistas. Por lo tanto, las organizaciones parecen sugerir una transformación hacia la educación popular y crítica, “dando forma a las geopedagogías que tienen su explicación en la localización no sólo geográfica, sino categorial, que les da un carácter y una identidad a esas formas y prácticas locales de la pedagogía” (Mejía, 2010, p. 26). De la siguiente manera es expresado en la propuesta de la MIC:

Creemos que existe una distancia enorme entre el modelo educativo que reciben nuestros niños y jóvenes con la realidad de nuestra región y, por supuesto, con las actividades socioeconómicas que históricamente hemos desarrollado. Señalamos concretamente que la formación que se imparte en las Instituciones Técnicas Agropecuarias y Acuícolas responde a realidades ajenas, intereses del mercado y de los proyectos agroindustriales que se implementan en la región. Hay aquí una de las tantas causas que impulsan el abandono de jóvenes del sector rural, para desplazarse a las ciudades en busca de un futuro incierto.

En los encuentros realizados analizamos también la necesidad de examinar la práctica educativa en el amplio marco de lo cultural. Aquí surgen dos preguntas: ¿Cómo abordar el problema de los relevos generacionales, teniendo en cuenta las prácticas culturales y las proyecciones de los jóvenes rurales? ¿Cómo hacer para que los jóvenes rurales no dejen el campo y se queden trabajando y generando bienestar en el territorio? Consideramos que estas preguntas pueden ser trabajadas desde una perspectiva educativa que analice críticamente cómo nos educamos en el marco de lo cultural; que realice una práctica educativa que ponga en diálogo las prácticas culturales propias y foráneas que se van configurando en el territorio y que se pregunte cómo ese diálogo cultural afecta al ideal de vida de muchos niños, jóvenes y adultos de las comunidades. (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2017, p. 355)

Un elemento importante a resaltar, y que aparece en los anteriores párrafos, se refiere a la importancia de la pedagogía para la permanencia y estabilización de la población joven en el

ámbito rural. En este sentido, las organizaciones parecen estimar que la educación pensada desde el territorio y desde la cultura propia de las comunidades puede aportar herramientas valiosas para la resignificación de la vida campesina, así como para la mejora de los modelos productivos propios. Este giro educativo no significa cerrar el diálogo con otros conocimientos y saberes, sino establecer relaciones horizontales, que permitan la construcción de nuevos espacios de entendimiento, de creación de saberes y de reapropiaciones tecnológicas.

La revalorización del conocimiento del campesinado y de otras poblaciones que habitan en las zonas rurales de Montes de María puede contribuir a la construcción de herramientas para enfrentar los modelos tecnológicos impuestos desde fuera, como fue el caso de la denominada “revolución verde”. De la siguiente manera se caracteriza esta revolución en la propuesta:

El último gran intento de innovación y transferencia tecnológica en la región fue lo que se conoce como la revolución verde, un paquete tecnológico ideado para mejorar la productividad del sector agrario, basado en el monocultivo, el uso de semillas mejoradas, grandes cantidades de agua, fertilizantes y plaguicidas. Este paquete tecnológico no sólo no ha demostrado sus resultados en la producción, sino que también ha contribuido a la contaminación del suelo y del agua y a la pérdida de conocimientos y saberes ancestrales relevantes para la agricultura familiar. [...]

La transferencia de nuevas tecnologías y conocimientos que actores externos pretendan implementar, respetarán y beneficiarán la autonomía de las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes en cuanto a sus lógicas de relacionamiento y uso de la tierra y los recursos naturales. (Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, 2017, pp. 356- 357)

El modelo expuesto por las organizaciones se materializa en el diseño de programas para Instituciones Educativas Técnicas Agropecuarias, Agroempresariales y Acuícolas, el fortalecimiento de procesos educativos no formales como Escuelas de Ciudadanía y parcelas agroecológicas demostrativas, bancos de semillas, entre otras experiencias, así como la Red de Investigación de los Montes de María y la creación de una Universidad Campesina. Para esta última, la MIC propone seis líneas de investigación: territorios interculturales, agricultura familiar, agroecología y recuperación de prácticas sostenibles tradicionales, ciencias ambientales y de la conservación, educación propia e intercultural, fortalecimiento de procesos organizativos, recuperación de la memoria y protección del territorio. Asimismo, se señala la importancia de un enfoque étnico, multicultural y de género, transversal a todos los programas.

Por otra parte, las organizaciones incluyen un punto complementario al eje de educación, innovación y tecnología. Se refiere al derecho a la comunicación de la población que habita en las

zonas rurales. En este sentido, plantean la necesidad de cerrar la brecha digital, dotando de la infraestructura necesaria a la subregión para lograr una conectividad de óptima calidad. Por otra parte, señalan la necesidad de fortalecer la comunicación comunitaria como una estrategia clave para la reconstrucción del tejido social.

14.3. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la Mesa de Articulación y Concertación de Montes de María

En el primer punto del Acuerdo de La Habana *Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral*, se concertó la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en las regiones que han tenido un mayor impacto del conflicto social y armado.

La creación de los PDET se reguló a través del Decreto 893 de 2017, en el que se recogía como, “un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales”. En el punto 4 del Decreto, se señalaba que la implementación del PDET,

implica disponer efectivamente de un instrumento para que los habitantes del campo, las comunidades, los grupos étnicos, y los demás actores involucrados en la construcción de paz, junto con el Gobierno Nacional y las autoridades públicas territoriales construyan planes de acción concretos para atender sus necesidades. (Agencia de Renovación del Territorio, 2018, p. 1)

Además, en la normativa se estableció la cobertura de los PDET para 16 subregiones y 170 municipios, entre los que se encuentra Montes de María.

Para ello, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) fue la institución encargada de poner en marcha el proceso de construcción de los PDET a partir de una metodología participativa. Esta metodología estaba compuesta por tres fases: la fase submunicipal o veredal, en la que se establecen unos pactos comunitarios; la fase municipal, en donde se analizan los pactos comunitarios y se crean los pactos municipales; la fase subregional, en la que se producen los pactos municipales y se construyen Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).

En este proceso participó la Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, como una iniciativa de confluencia de organizaciones populares afectadas por el conflicto social y armado. La participación de la MIC tenía como objetivo abrir los espacios de interlocución con el

gobierno, más allá de los procesos de víctimas y de restitución de tierras, y posicionar las propuestas de desarrollo rural y de ordenamiento territorial construidas a lo largo del proceso de concertación.

En este sentido, las organizaciones reconocen que la participación en la construcción del PDET para Montes de María, fue un ejercicio interesante en términos de planificación territorial, así como para la elaboración de un diagnóstico de la subregión y la identificación de otras propuestas de las comunidades que no confluyen en este espacio de articulación. Sin embargo, el proceso no generó una apropiación colectiva del programa de ordenamiento territorial.

Las organizaciones realizaron una identificación de los problemas que se produjeron a lo largo del proceso y que se recoge en el informe *Documento crítico sobre los programas de desarrollo rural con enfoque territorial* elaborado por la MIC, con el apoyo de la Corporación de Desarrollo Solidario (CDS) y Planeta Paz. (2017). Las falencias identificadas se relacionan con la metodología participativa elaborada por la ART y la falta de voluntad política para realizar un proceso que realmente respondiera a los conflictos socio-territoriales y a las propuestas de las comunidades.

En esta dirección, las organizaciones señalaron la falta de difusión de los espacios de participación, el corto periodo de tiempo para la elaboración del PDET, la ausencia de mecanismos que permitieran la retroalimentación de la información y la no claridad frente a los instrumentos para la implementación de las iniciativas comunitarias como en el caso del tema presupuestal.

Sin embargo, las iniciativas que confluyen en la MIC destacan que, frente a la ausencia de claridades por parte del gobierno, las comunidades fueron contundentes frente a los ejes sobre los cuales debe pivotar el desarrollo rural de Montes de María, que son coincidentes con los señalados en los anteriores apartados, a saber: las economías campesinas, el agua, el ambiente, la identidad y la decisión sobre el control, acceso y uso del territorio desde la autonomía de las comunidades. Por consiguiente, estos elementos constituirían lo que se ha llamado la paz territorial que, desde nuestro punto de vista, se ha convertido en una frase sin un enfoque claro y sin contenido real.

Asimismo, las organizaciones reconocieron que una vez firmado el PDET, se entraba en un proceso complejo para lograr el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno. En este sentido, señalaron la necesidad de construir estrategias de incidencia política comunes a todas las organizaciones. Esta posición es más que razonable teniendo en cuenta la larga lista de compromisos no cumplidos por el Estado colombiano, que han dado lugar a diferentes ciclos de

protesta, así como a la represión y criminalización del movimiento social. No obstante, en el documento se puede inferir que, aunque el PDET no cumpla del todo con las expectativas de las comunidades, sí se considera como una ventana de oportunidad para cambiar un estado de cosas injustas.

Para terminar este capítulo, nos parece relevante plantear que en su momento la Mesa de Concertación e Interlocución de Montes de María representó un espacio relevante de articulación de diferentes sectores populares, que intentó de alguna manera reestablecer el tejido social que se vio profundamente afectado por la agudización del conflicto armado en la primera década de este siglo. Además, se constituyó como un escenario autónomo de las administraciones públicas, en donde las iniciativas sociales populares se movían con más libertad, en particular, de víctimas y desplazados dependían en cierta medida de la implementación por parte del Estado y de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Sin embargo, en este momento la MIC se encuentra en un momento complejo debido al resurgimiento de la violencia, a la profundización de las políticas extractivas y a la influencia de las empresas que operan en la región, obstaculizando los procesos de reconocimiento de derechos de las comunidades.

En el marco de implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, la Mesa de Articulación y Concertación de Montes de María se encuentra inserta en un proceso de ajuste organizativo. Este proceso tiene como objetivo analizar las características del nuevo contexto para abordar el lugar de la economía campesina. No obstante, en la subregión se ha presentado un repunte de la violencia asociado a la consolidación del modelo extractivo, lo que ha generado zozobra en las organizaciones e incidido en los procesos de confluencia organizativa.

CONCLUSIONES

A lo largo de esta investigación, hemos analizado las percepciones populares de los conflictos socio-territoriales en el departamento del Putumayo y en la subregión de Montes de María. Estas percepciones han sido elaboradas por actores que se encuentran situados en los márgenes del escenario social. Por consiguiente, el lugar de enunciación se construye en el marco de las interacciones entre las clases dominantes y las clases populares, que se mueve en un espectro amplio entre la dominación y la subordinación⁴⁷⁶. Estas relaciones configuran una suerte de conflictos por la orientación o el control de uno o varios campos sociales (Múnera, 1998), que se materializan en la producción del espacio y, por lo tanto, en las diferentes apropiaciones materiales y simbólicas del mismo, desplegadas por los agentes que tienen un afán de control y/o dominio del territorio.

En la tesis hemos podido comprobar que, tanto en el Putumayo como en Montes de María la conflictividad se deriva de una relación de dominación en la que las élites políticas y económicas afirman sus privilegios mediante la subordinación y/o en la presión sobre los sectores sociales populares. Así, consiguen mantener intacto el *statu quo* que les permite seguir disfrutando de sus prerrogativas. En las lecturas que realizan las organizaciones consultadas, esas relaciones de dominación se sustentan en un mayor acceso a diferentes tipos de recursos sociales, políticos, económicos e incluso culturales. Esta situación privilegiada permite que los intereses y motivaciones de las clases dominantes sean prioritarias en las decisiones y políticas gubernamentales⁴⁷⁷.

En el caso de Montes de María, los actores que históricamente han ejercido esa dominación han sido los terratenientes y ganaderos que, en los últimos años, han transformado su actividad productiva para adaptarse a diferentes modelos económicos. Es así como muchos de ellos se han convertido en empresarios del campo dedicados a los agronegocios, en particular en el sector del monocultivo de la palma de aceite. Estos actores ejercen el dominio en el ámbito económico y se constituyen además en la élite política regional. Por las características de la clase dominante

⁴⁷⁶ Las relaciones que se producen entre la subordinación y la dominación no necesariamente implican un elemento coercitivo, ya que existe una gama amplia de mecanismos que permiten ejercer una dominación, entre los que se encuentran la negociación, el sometimiento pasivo, el consenso colectivo y las colaboraciones activas, entre otros.

⁴⁷⁷ En este contexto, se configuran unas relaciones asimétricas de poder, que permiten la anulación o el debilitamiento de un actor en favor de la otra parte (Raffestin, 2011 [1980]).

montemariana, el campo de disputa con los agentes populares se sitúa en la tenencia y el uso de la tierra.

Las relaciones de dominación en el Putumayo se encuentran estrechamente relacionadas con los imaginarios que han construido históricamente las élites nacionales sobre el departamento, extensibles a toda la región amazónica. En las narrativas oficiales, las regiones fronterizas y las selváticas han sido vistas como “tierra de nadie”, lugares inhóspitos o terrenos baldíos. En esta lógica, los pobladores del departamento han sido representados como personas “peligrosas”, “maleantes”, “buscavidas” o “insurgentes” sin ningún tipo de arraigo en el territorio.

Al ser visto como un lugar “deshabitado”, el Putumayo se ha configurado como una zona de colonización, por tanto, de expansión de la frontera agrícola para el desarrollo de diferentes economías de enclave algunas alentadas por el gobierno y otras por iniciativa de actores privados⁴⁷⁸. Por consiguiente, las relaciones de dominación se configuran por la acción de las clases dominantes nacionales, los políticos locales y un entramado compuesto por diferentes actores económicos que se asientan en la región para la explotación de los recursos naturales. Por lo tanto, el campo de disputa en el Putumayo se relaciona con el reconocimiento del arraigo territorial de la población lo que implica también un reconocimiento de su ciudadanía.

Las organizaciones populares del Putumayo y de Montes de María estiman que estas configuraciones sociales se encuentran en la base de los actuales conflictos socio-territoriales. De esta manera, confluyen tensiones históricas irresueltas que el Estado no ha sabido o no ha querido abordar, con recientes contradicciones derivadas de las políticas de intervención del espacio, que han traído consigo nuevos actores que compiten por el control de uno o varios campos sociales, complejizando aún más la situación de los sectores subalternos.

Esta caracterización de los conflictos que realizan las organizaciones con las que tuvimos la oportunidad de establecer un diálogo, nos lleva a afirmar que los conflictos tienen expresiones en múltiples órdenes sociales, políticos, culturales, ambientales y económicos y que no se reducen a su manifestación armada, es decir, al conflicto armado que vive el país desde hace más de cinco décadas. Esta afirmación es pertinente debido a que existe una tendencia a reducir la conflictividad a su expresión bélica. No obstante, los agentes populares parecen estimar que el enfrentamiento

⁴⁷⁸ Al respecto, María Clemencia Ramírez (2001) señala que “la región amazónica era vista como una solución a la presión por la tierra en otros lugares del país y como zona de amortiguación de la seguridad y la preservación de la soberanía en el sur del país” (39-40)

armado es una manifestación de las otras múltiples conflictividades y a la vez es un factor que las vertebra y, además, las exacerba.

Un primer eje de esos conflictos socio-territoriales identificados por los agentes populares se relaciona con la disputa por el control de recursos naturales estratégicos en el marco de la actual fase de la acumulación del capital en la escala nacional y global. Los principales recursos en liza serían los minero-energéticos, la biodiversidad, las fuentes hídricas y los agrocombustibles.

Esta disputa se debe entender en el ámbito de la expansión geográfica del capitalismo a territorios que se consideraban anteriormente como impenetrables o que se encontraban protegidos por su riqueza ecosistémica. La explotación de estos territorios ha sido posible por los avances tecnológicos y las nuevas formas de producción que facilitan la apropiación de la naturaleza para el proceso de valorización. Por consiguiente, territorios y recursos que antes no eran centrales en los ciclos de acumulación, en la actualidad asumen un lugar estratégico, para suplir las necesidades productivas del ciclo económico (Jiménez, 2012, p. 152). En este contexto, el valor de uso se ha convertido en valor de cambio.

En este contexto, los países del Sur Global asumen un rol de proveedores de recursos naturales, para alimentar los ciclos del capital. La cuestión radica en que estos Estados asumen los pasivos ambientales por la sobreexplotación de la naturaleza que, a su vez, genera nuevos patrones de exclusión y desigualdad, profundizando viejos conflictos y creando nuevas tensiones en los territorios.

Como se señala a lo largo de la investigación, durante los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, se consolida un modelo económico de carácter extractivista sustentado en la reprimarización de la economía. La riqueza de la geografía colombiana en términos de recursos ecosistémicos y su posición geoestratégica convierte al país en un destino atractivo para los capitales internacionales. En este sentido, la racionalidad técnica dominante ve una oportunidad de desarrollo en la explotación de esas ventajas comparativas de cara a la inserción del país en el mercado global.

Por lo tanto, en estos años se elabora una estrategia económica para la reconfiguración de los espacios que contienen bienes comunes naturales para que puedan llegar a ser potencialmente mercantilizados. Esta estrategia forma parte de las representaciones del espacio dominante, en la que éste es concebido como aséptico, neutral y homogéneo. En definitiva, un espacio contenedor de recursos y de población que es susceptible de ser intervenido en aras del “progreso” y del

“desarrollo”, en una lógica de capitalización de la naturaleza (Escobar, 1996a). Estos planteamientos se pueden encontrar en los planes de desarrollo de los gobiernos señalados anteriormente y en otros documentos como Misión Paz (2001) y Visión Colombia II Centenario: 2019 (Departamento Nacional de Planeación, 2005).

Debido a esta situación, el departamento del Putumayo y la subregión de Montes de María adquirieron especial relevancia para el actual modelo económico. Estas dos zonas comparten algunas características que las hacen atractivas para la inversión de capitales nacionales e internacionales: la riqueza hídrica, la biodiversidad, la fertilidad de las tierras y la presencia de recursos minero-energéticos. Además, ambas poseen ubicaciones geoestratégicas que posibilitan la conexión del mercado nacional con el internacional para la comercialización de *commodities*⁴⁷⁹.

Abundando en este último punto, es relevante señalar que el Putumayo ha sido un territorio aislado con grandes deficiencias en el sistema de comunicaciones, razón por la cual durante el gobierno de Uribe se iniciaron una serie de proyectos de infraestructura articulados con el Eje Andino de IIRSA. Estos proyectos se convirtieron en un vector de conflicto debido a los criterios técnicos bajo los cuales fueron diseñados (competitividad y eficiencia), en los que no se tuvieron en cuenta las necesidades de las comunidades en materia de comunicación. Asimismo, el Estado incumplió la promesa de una consulta previa que debía realizar con las comunidades indígenas, pues una parte del trazado vial atraviesa sus territorios. Por otra parte, el territorio fue militarizado para minimizar los riesgos en la realización de las obras, frente a posibles ataques de la guerrilla. Este conjunto de factores generaron el desplazamiento de las comunidades que se encontraban asentadas en las zonas contiguas a la vía.

En el caso de Montes de María, las comunidades señalan que la subregión tuvo una transformación importante a mediados del siglo XX, debido a la construcción de la Troncal de Occidente, que convirtió al municipio de Maríalabaja en el centro de la región, siendo anteriormente un lugar olvidado y aislado. Otro cambio a destacar fue la construcción del tramo del oleoducto Caño Limón en Arauca y que finaliza en el municipio de Coveñas, departamento de

⁴⁷⁹ El Putumayo se considera un territorio geo-estratégico debido a tres características: es una zona de frontera con Ecuador y Perú, limita con los departamentos que dan acceso al Océano Pacífico y se considera como la puerta de entrada a la Amazonía. Por su parte, Montes de María conecta los centros económicos de “Valledupar- Bucaramanga (al oriente) y el mar Caribe (al occidente) y entre el corredor urbano regional de Cartagena-Barranquilla-Santa Marta (al norte) y la carretera transversal de la Depresión Momposina, que comunica a Sucre, Córdoba y Antioquia con el Magdalena y el Cesar (al sur)”. (Jiménez, 2002, p. 507) De esta manera, se convierte en un eje central para la comunicación de la región Caribe con el resto del país.

Sucre, en el que se encuentra una terminal de embarque de hidrocarburos en el Golfo de Morrosquillo (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003). En contra de lo beneficioso que pudiera parecer, las comunidades señalan que estas intervenciones del territorio se corresponden más con los intereses económicos externos que existen sobre la región y demandan inversiones que refuercen las vías terciarias, que sirven de vasos comunicantes entre las zonas rurales y que, por tanto, —éstas sí— beneficiarían a la economía campesina.

En este orden de ideas, el modelo extractivista impuesto en las dos zonas de estudio, se configuró de manera diferenciada. En el Putumayo, se profundizaron las políticas minero-energéticas, en particular, las referidas a la explotación de hidrocarburos que ya se venía realizando desde la década de los setenta del siglo XX, pero que entró en un nuevo ciclo de ascenso como parte de la estrategia económica del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que continuó su sucesor, Juan Manuel Santos⁴⁸⁰, como se puede observar en el Mapa de tierras de la ANH, utilizado para la “Ronda Colombia” 2014. Asimismo, el departamento fue declarado Distrito Especial Minero en el año 2011, identificando esta actividad extractiva como uno de los motores de desarrollo⁴⁸¹.

En poco tiempo, el Putumayo pasó de ser una región olvidada por el Estado, a un departamento prioritario en la estrategia de los gobiernos. Esta focalización se relaciona también con la presencia del megaproyecto de la coca que aparece como un elemento que vertebra el conflicto social y armado en el Putumayo. La correlación entre la economía de la droga y el conflicto tiene profundas ramificaciones en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales que junto con los proyectos extractivos reconfiguró el espacio del Putumayo.

En la otra zona de estudio, las organizaciones populares de Montes de María estiman que el modelo de desarrollo dominante se estructuró en la región a partir de la profundización de los agronegocios, en particular, el cultivo de palma de aceite y en menor medida la producción de recursos maderables. Hasta tal punto que los líderes y lideresas montemarianas denuncian una reconfiguración casi total del espacio y del paisaje rural. De hecho, en el territorio se observa una gran mancha de cultivos de palma y pequeños parches de cultivos de subsistencia o de pancoger,

⁴⁸⁰ El gobierno de Álvaro Uribe diseñó toda una estrategia de impulso al sector minero-energético. Para ello, realizó una serie de modificaciones institucionales creando, a través del Decreto 1760 del 2003, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), adscrita al Ministerio de Minas y Energía.

⁴⁸¹ En el Plan Nacional para el Desarrollo Minero con visión a 2019 se señala que el Putumayo se encuentra dentro de los departamentos que han “diseñado programas de promoción y fomento minero y han gestionado recursos para su financiación” (Ministerio de Minas y Energía, 2006, p. 55).

propios de la economía campesina. En cuanto a las políticas minero-energéticas, persisten conflictos anteriores por la explotación de gas. Empero, los líderes y lideresas consultadas apuntan a que el aumento en la concesión de permisos para la exploración y la explotación de minería indica la configuración de otro posible vector de conflictividad, referido a la reconversión del uso del suelo para la explotación minero-energética. En el momento en que se realiza esta investigación, el impacto social de esta intervención en el territorio aún era difícil de estimar.

Las dinámicas señaladas anteriormente nos llevan a afirmar que tanto en el Putumayo como en Montes de María el modelo extractivista y de la reprimarización de la economía han llevado a una reconfiguración casi total del espacio y a una exacerbación de los conflictos de diferentes órdenes (social, económico, ambiental, político y cultural). Estas nuevas conflictividades vienen dadas por una disputa entre los diferentes actores por el dominio de los territorios y la imposición de sus territorialidades, frente a los proyectos de las comunidades que habitan estas zonas.

Las políticas económicas alimentaron la competencia entre capitales internacionales y nacionales por el acaparamiento de tierras, suelo y subsuelo, utilizando diferentes modalidades de apropiación del territorio y de los recursos como pueden ser la expropiación, la extranjerización, la titularización, la empresarización, la financiarización y el derecho real de superficie para la producción de *commodities* que se tranzan en el mercado mundial, ya sean biocombustibles, agroalimentos, maderas o recursos naturales no renovables como los minerales y el petróleo (Garay, 2014).

En este sentido, los procesos de ocupación del territorio por parte de las instituciones estatales y de los actores económicos se realizaron bajo las representaciones espaciales de “orden”, “modernización” y “progreso” (Escobar 2014a) para justificar y ordenar las prácticas espaciales en el marco de un sentido común hegemónico (Lefebvre (2013 [1974])). Por tanto, la regulación de la vida cotidiana se realizó según una racionalidad técnica que se envuelve en una “aura” de incontestabilidad.

Desde nuestra perspectiva, estos procesos de reconfiguración del espacio que van de la mano con la implantación de los modelos económicos, se encuentran estrechamente relacionados con la conformación de una sociedad jerárquica manifiesta en una “intensificación de la dominación del capital nacional e internacional como en la ocupación de los espacios territoriales y sociales de un país a otro o en el interior de un mismo país” (González Casanova, 2006, p. 444).

En el caso del Putumayo, señalamos en párrafos anteriores la persistencia de las representaciones coloniales sobre las regiones selváticas y de frontera, en donde se produce una estigmatización del otro en razón del lugar en el que habita, de la “raza” y de la clase. En Montes de María, los imaginarios dominantes se construyen a partir de la consideración de inferioridad de un sector social y de la clase a la que pertenece, el campesinado, que es considerado como “ignorante”, “atrasado”, incapaz de generar procesos de desarrollo propios e inclusive “subversivo” por la larga historia de luchas sociales por la reivindicación de sus derechos. Como vemos, pues, un rasgo común en las dos zonas de estudios es la criminalización de la población debido a una larga cohabitación con los grupos insurgentes.

Desde los relatos de las organizaciones, se puede inferir que la implantación de este modelo extractivista generó una serie de impactos sobre los territorios que modificaron las dinámicas cotidianas de las poblaciones que habitan en los mismos.

En el orden ambiental y ecológico, supuso la alteración de los paisajes rurales, la degradación de los suelos por la deforestación, la contaminación de los cuerpos de agua y del aire, el desgaste de los nutrientes del suelo, mayores niveles de erosión, el agotamiento de los recursos no renovables, la extinción de especies de fauna y flora autóctonas y la modificación de los ciclos climáticos, entre otros efectos.

En el orden cultural, también quedan afectados los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que forman parte de su cosmovisión, pues tienen un valor simbólico, religioso e identitario. Estas afectaciones también se presentan en los territorios campesinos, en donde la relación con la tierra va más allá de la base material de sustento económico e implica la conformación de unas identidades particulares mediadas por el vínculo con su entorno.

En el orden social, se dan alteraciones e inclusive la desaparición de formas de relacionamiento comunitario que se articulan a partir de la vecindad, el compadrazgo, la reciprocidad y la solidaridad, en donde lo colectivo tiene un valor predominante sobre lo individual. La presencia de actores foráneos genera procesos de desconfianza al interior de las comunidades que afectan a esas relaciones sociales basadas en la cooperación. Además, el desplazamiento forzado y otras formas coercitivas asociadas a la implantación de estas economías de enclave rompe los tejidos sociales e interrumpe los proyectos vitales de las poblaciones y las

comunidades. Por consiguiente, se ven deterioradas las condiciones de vida en regiones donde hay una manifiesta debilidad institucional, agudizándose la desigualdad social y la pobreza.

En el orden económico, la población pierde sus principales fuentes de generación de ingreso debido: 1) a que son desalojadas y, en muchos casos, despojadas de su territorio; 2) a la contaminación de la naturaleza (agua, suelo, aire) que restringe las posibilidades de desarrollar proyectos productivos, y 3) a los procesos de cercamiento de los bienes naturales comunes que perjudica las economías locales. En este orden de hechos, es importante señalar la afectación en la soberanía alimentaria que también tiene un impacto en el ámbito cultural y social.

En el orden institucional, se presentan “cambios en las normas, reglas de juego e instituciones que regulan la vida en sociedad, por ejemplo, hacia un sistema social más incluyente y democrático bajo la prevalencia de la ley o, por el contrario, hacia un sistema excluyente regido, en buena medida, por estructuras de poder de distinto tipo” (Garay, 2013, p. 12)

Los impactos descritos anteriormente nos confirman la existencia de esas representaciones hegemónicas del espacio propias de las políticas extractivistas, sustentadas en la separación entre naturaleza y seres humanos. Bajo esta lógica se organiza la reproducción material a partir de las premisas de espacios vacíos y homogéneos, negando el carácter diverso de la vida. Estas representaciones se encuentran en tensión con los espacios de representación de las comunidades, para las que los territorios son imaginados y apropiados simbólicamente por los actores y representan espacios de resistencia frente al capital. Por lo tanto, estas comunidades manifiestan formas alternativas de lo social y de relación con la naturaleza, pues entienden que estas dos esferas (sociedad-naturaleza) no son compartimentos separados, sino que hace parte de esa totalidad social.

Un ejemplo de estas representaciones del espacio son las economías campesinas de Montes de María, en donde hay una relocalización de diferentes aspectos de la vida social y económica, frente a la abstracción amenazante de lo global. Este tipo de economías plantean un horizonte organizativo centrado en la autonomía de las comunidades, a partir de la máxima autosuficiencia en la gestión de los bienes comunes naturales, y el fortalecimiento de las relaciones de cooperación. De esta manera, la cultura campesina, sus representaciones, la relación con la naturaleza y una estructura social basada en la reciprocidad son parte fundamental de los modelos locales que han sostenido el sistema agroalimentario del país.

Estos “espacios de la diferencia” son posibles gracias a las dinámicas microsociales (redes de familiares, de amigos, de vecinos, de compadrazgo) que constituyen un tejido comunitario que permite el sostenimiento de la vida. A este respecto, Lucia Linsalata (2015) señala cómo:

el abajo de nuestras sociedades han tenido la habilidad de conservar, cultivar y, en muchos casos, recrear por completo entramados asociativos y lógicas de cooperación social de carácter comunitario centrados en la conservación y reproducción de la vida; es decir, en la reproducción digna del sustento material, espiritual y afectivo de comunidades humanas concretas, cuyas historias, geografías, calendarios y sentidos del mundo se resisten a ser totalmente colonizados por el sentido capitalista del mismo. (p. 72)

En coherencia con esta cosmovisión, los agentes subalternos han tratado de construir estrategias de resistencia en los territorios, algunas de las cuales se han logrado mantener en el tiempo reacomodándose según lo permiten los contextos, buscando los intersticios del sistema y resignificado los espacios cotidianos. No obstante, las posibilidades de una permanencia digna en el territorio cada vez son menores debido a la complejidad de la realidad colombiana.

Es en este contexto en el que el conflicto armado ha sido funcional para la implementación de los diferentes modelos de desarrollo, no solo por la utilización de la violencia para el control y/o dominio de los territorios y las poblaciones, sino porque los sectores hegemónicos han utilizado la estigmatización y la criminalización de los agentes populares para desvalorizar sus propuestas societales. De esta manera, se justifica la intervención del espacio a través de estrategias militares y de planes de desarrollo territorial que no se corresponden con las necesidades ni con las demandas de las comunidades.

Además, la utilización de la violencia se ha configurado como un patrón histórico de comportamiento de las clases dominantes nacionales y regionales. Vale la pena recordar que el surgimiento de las autodefensas y la consolidación del proyecto paramilitar en el país es una reacción de las élites a los procesos de democratización de los años ochenta (descentralización, elección popular de alcaldes y gobernadores) y a los diálogos de paz con las guerrillas, que abrieron la posibilidad de alterar sus privilegios.

Por otra parte, a lo largo de la investigación, hemos podido comprobar que en las últimas dos décadas en el país se ha presentado un proceso de militarización creciente en los territorios derivado de la implementación de sucesivas estrategias gubernamentales de recuperación y control del espacio en el marco de la lucha contrainsurgente y de la política antidrogas. Estas políticas no han logrado de manera efectiva conseguir los objetivos planteados. Es más, las organizaciones

populares consultadas estiman que la presión militar ejercida en el Putumayo y en Montes de María, en donde se ha focalizado su implementación, ha generado una agudización de la violencia, el desplazamiento forzado de la población, la criminalización de la protesta social, las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, entre otras problemáticas.

En el caso del departamento del Putumayo, éste ha sido objeto de las políticas gubernamentales de recuperación militar y social del territorio, en razón a: 1) la presencia de actores armados ilegales, en particular, el movimiento insurgente; la concentración de cultivos de uso ilícito; 2) la posición geoestratégica en términos de conectividad con los mercados internacionales (Eje Andino IIRSA, puertos del Pacífico, zona de frontera con el Ecuador), y 3) la presencia de recursos naturales claves para los procesos de producción de capital a nivel global.

Por su parte, en la subregión de Montes de María el control militar y social se debe a que es tradicionalmente un territorio de disputa entre la insurgencia, en particular, las FARC, el ELN y en su momento el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y los paramilitares y Fuerza Pública. Esta disputa se debe a una serie de factores que la sitúan como una zona estratégica para los proyectos que representan cada uno de estos actores, entre los que se encuentran la localización geográfica (que incluye corredores naturales para el movimiento de los grupos armados y de recursos asociados al narcotráfico), la riqueza en términos ecosistémicos, la disposición de tierras fértiles, el acceso a proyectos económicos para la financiación de la guerra y, finalmente, las infraestructuras viales como la Troncal de Occidente que conecta de sur a norte la zona oeste del país.

En los dos estudios de caso, los testimonios de los líderes y lideresas nos llevan a identificar dos ámbitos de la intervención del espacio. Primero, el control militar de los territorios a través del aumento del pie de fuerza del ejército y la policía, los batallones antinarcóticos, el despliegue de la tecnología militar y otro tipo de acciones no convencionales como los soldados campesinos, la policía comunitaria y las empresas militares de seguridad privada. Segundo, el control social del territorio a través de la implementación de programas de transferencia condicionada y la conformación de redes de cooperación y programas de recompensas. Estas dos estrategias generaron la militarización de la sociedad civil, la desarticulación de las organizaciones sociales y la agudización de la violencia.

En cuanto a la acción del movimiento insurgente, las referencias de las organizaciones populares al papel que ha jugado la guerrilla en Montes de María y en el Putumayo no son tan

recurrentes como en el caso de la Fuerza Pública y de los grupos paramilitares. Si bien lo reconocen como un actor relevante de la conflictividad social, no hay una alusión tan explícita al impacto de su presencia en las dinámicas de reconfiguración socio-espacial. Desde nuestra perspectiva, este hecho se puede comprender desde la explicación de María Clemencia Ramírez (2001) para el caso del Putumayo, relacionada con la presencia histórica de la guerrilla en el territorio, en particular las FARC, consiguiendo una cierta aceptación por una parte de la población y la construcción de subjetividades compartidas con los locales.

En cuanto a los grupos paramilitares, las organizaciones estiman que su presencia y consolidación se relaciona con el mantenimiento del *statu quo* de las clases dominantes y con el dominio de zonas estratégicas para sus proyectos territoriales. En Montes de María, los paramilitares actuaron en contra de las organizaciones sociales populares, con el objetivo de desarticular los procesos de resistencia y las agendas políticas dirigidas a la democratización de la tierra, que produjo una contrarreforma agraria. En el Putumayo, se puede observar el mismo patrón, pero se asocia con el control de los cultivos de uso ilícito y con las demás actividades conexas al narcotráfico. Así pues, en las dos zonas estudiadas los paramilitares ejercieron un fuerte control social sobre la población a través del despliegue de un amplio repertorio de violencia.

Pero no es solo eso. Las organizaciones apuntan a que la consolidación del proyecto paramilitar se realizó con la connivencia de la Fuerza Pública que, aun sabiendo lo que estaba ocurriendo los territorios, no ejercieron su labor de protección a la sociedad civil y, en muchos casos, facilitaron la entrada de los paramilitares. Este hecho queda reflejado también en los testimonios. Según estos, se observa un patrón en las intervenciones armadas. En un primer momento, el ejército realiza una labor de reconocimiento del territorio, posteriormente incursionan los paramilitares para someter a la población a través de la instauración de un régimen del terror y desarticular los procesos organizativos y, finalmente, el ejército asegura el territorio. Las organizaciones asocian este patrón a la implementación de proyectos estratégicos principalmente minero-energéticos y agronegocios o cultivos de uso ilícito (en el caso del Putumayo).

Estas acciones de ocupación producen la aniquilación de esos “otros” mundos, en la medida que las comunidades son expulsadas o confinadas en sus territorios (Escobar, 2014^a), dependiendo si la estrategia es el control del territorio o el dominio de zonas estratégicas.

Ahora bien, esas territorialidades, derivadas de las políticas de apropiación de la naturaleza y de los proyectos de los actores armados, se superponen, conviven y/o compiten con las

territorialidades de las comunidades. En este sentido, lo que hemos podido constatar a lo largo de la investigación es que los proyectos económicos y el conflicto armado provocan una desterritorialización de las comunidades rurales que habitan en el Putumayo y en Montes de María. Tal situación supone la desestructuración de un orden espacial anterior (total o parcialmente) que generalmente lleva a una precarización social. Los agentes subalternos, los cuales tienen menos acceso a recursos, pierden su capacidad de decidir sobre su territorio. Este hecho implica una pérdida material, pero también cultural y simbólica.

En el siguiente cuadro, se reflejan los vectores de desterritorialización y reterritorialización identificados por las organizaciones populares para las zonas de estudio. No obstante, es importante señalar, que estos procesos se configuraron de manera diferenciada según los contextos sociales, políticos, económicos y culturales, y los intereses de los agentes en disputa. Estas diferencias se pueden observar en la forma en la que los líderes y lideresas los caracterizan en las entrevistas.

Tabla 17. Desterritorialización- reterritorialización Montes de María y Putumayo

Ejes conflictos socio-territoriales
Políticas extractivas (minero-energéticas, agronegocios), proyectos de infraestructura, narcotráfico, conflicto armado, control social y militar del territorio.
Agentes de desterritorialización
Estado, actores económicos, paramilitares, guerrilla, narcotráfico, élites políticas regionales.
Vectores de desterritorialización
<ul style="list-style-type: none"> → Abandono y despojo de tierras (masacres, asesinatos colectivos, intimidación, tortura, desaparición forzada, secuestro, desplazamiento forzado). → Concentración de tierras. → Uso intensivo del suelo. → Alteración del paisaje rural. → Modificaciones ecosistémicas. → Agotamiento de los recursos naturales no renovables. → Militarización del territorio. → Control social (estigmatización, criminalización, confinamientos). → Transformación de los valores éticos, formas autoritarias de relacionamiento.
Agentes de reterritorialización
Organizaciones sociales populares
Vectores de la reterritorialización propuesta
<ul style="list-style-type: none"> → Relocalización de sistemas agroalimentarios (economías campesinas, fincas agroproductivas). → Procesos de fortalecimiento de las organizaciones de base. → Reconocimiento del campesinado como un sujeto social y político (incluyendo los campesinos cocaleros). → Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos.

-
- Autogestión de los bienes comunes naturales.
 - Propiedad colectiva.
 - Implementación de propuestas alternativas de ordenamiento territorial (“Permanencia digna en el territorio” y PLADIA).
 - Procesos de restitución de tierras y reparación de las víctimas.
-

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, nos gustaría apuntar que, frente a la crisis ecológica y social provocada por las lógicas de reproducción del capitalismo, las organizaciones populares de Putumayo y Montes de María han construido propuestas alternativas de ordenamiento territorial, bajo lógicas que difieren de la apropiación violenta de la naturaleza. Estos proyectos, que se pueden considerar contrahegemónicos, fueron construidos a través de procesos de articulación intersectorial en los que participaron movimientos de mujeres, víctimas, desplazados, ambientalistas, campesinos, indígenas y afrodescendientes. Estos procesos no estuvieron exentos de tensiones relacionadas con la agenda política de cada uno de estos agentes, el horizonte de sentido de sus luchas y el grado de reconocimiento de sus demandas por parte del Estado. No obstante, se puede hablar de una confluencia amplia de diferentes sentires populares con planteamientos diversos para las regiones.

Las propuestas se trabajaron como hojas de ruta para la construcción de paz desde y para los territorios, llenando de sentido político lo que, posteriormente, en los Acuerdos de La Habana se denominó como paz territorial. Sin embargo, el nivel de interlocución con el gobierno para la incorporación de estos planes alternativos al esquema de la Reforma Rural Integral, no ha sido el esperado por las organizaciones, generando una sensación de frustración frente a la falta de voluntad política para cambiar un estado de cosas que se consideran injustas. Asimismo, los procesos de articulación se han visto interrumpidos por lo que parece un nuevo ciclo de violencia en el país. Esta reciente escalada de violencia tiene muchas causas, pero sin duda se relaciona con una implementación del Acuerdo fragmentada e inclusive la podríamos calificar como fallida. En el contexto del “post-acuerdo”, las demandas de los sectores populares no han sido escuchadas, profundizando los conflictos ya existentes, y creando nuevos campos de tensión.

A este respecto, aunque durante el proceso de negociación en La Habana se implementaron canales de participación para la sociedad civil, como se señala en la segunda parte de la tesis, la agenda política de las organizaciones populares no fue incorporada en el sentido que planteaban los agentes. Propuestas como las que se presentan en esta investigación implicaban un cambio en el modelo de desarrollo rural que, como hemos analizado, no es compatible con las políticas

extractivas ni con sus formas de apropiación de la naturaleza. En este sentido, el gobierno durante los diálogos dejó muy claro que una de las líneas rojas era el modelo de desarrollo. Por otra parte, en el punto 1 del Acuerdo, Reforma Rural Integral, se plantea solo una modernización del campo, pero no una reforma integral que incluya un plan de desarrollo rural..

En definitiva, las organizaciones populares intentaron en los años precedentes al Acuerdo de La Habana proponer estrategias, medidas y formas de abordar los conflictos socio-territoriales existentes, que conforman esa ‘paz que nunca ha sido’, a la que alude el subtítulo de esta tesis. Lamentablemente, no fueron tenidas en cuenta.

GLOSARIO

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Agencia Nacional de Minería (ANM)

Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo (ACSOMAYO)

Asociación Cristiana Menonita Para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (JUSTAPAZ)

Asociación de Desplazados de Puerto Caicedo (ASODESCA)

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)

Asociación Nacional de Usuario Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR)

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC)

Autodefensa Obrera (ADO)

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

Bandas Criminales (BACRIM)

Batallones Especiales Energéticos y Viales (BAEEV)

Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI)

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Centro de Operaciones Especiales para la Protección de Infraestructura Crítica y/o Económica del Estado (COPEI)

Centro Nacional de la Memoria Histórica (CNMH)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)

Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Corporación de Desarrollo Solidario (CDS)

Corriente de Renovación Socialista (CRS)

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Doctrina de Acción Integral (DAI)
Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)
Federación Agraria Nacional (Fanal)
Federación Sindical Agropecuaria (FENSUAGRO)
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ejército del Pueblo (FARC-EP)
Grupos Móviles de Erradicación (GME)
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)
Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA)
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ)
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)
Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)
Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María (MIC)
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
Misión para Apoyar el Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)
Movimiento Integración Revolucionario Patria Libre (MIR)
Movimiento de Víctimas del Estado (MOVICE)
Organizaciones de Población Desplazada (OPD)
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
Partido Comunista Colombia (PCC)
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)
Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR)
Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia (PODEC)
Política Nacional Consolidada y de Reconstrucción Territorial (PNCRT)
Programa de Estudios de Género, Mujer y Desarrollo (PGDM)
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Programa Familias Guardabosques (PFGB)
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Reforma Rural Integral (RRI)
Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

United States Agency for International Development (USAID)

Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES)

Zona de Rehabilitación y Consolidación (ZRC)

ANEXO 1. RELACIÓN DE ENTREVISTAS

No.	REGIÓN	ORGANIZACIÓN	SEXO	LUGAR	FECHA
1	Caribe	Asociación Tierra y Esperanza	Mujer	Bogotá	19/12/2010
2	Bogotá	Acción Campesina Colombiana	Hombre	Bogotá	17/12/2010
3	Montes de María	Asociación Campesina de Pueblo Nuevo	Hombre	Cartagena	04/12/2010
4	Montes de María	Organización de Población Desplazada. Montes de María	Mujer	Cartagena	03/12/2012
5	Montes de María	Organización Población Desplazada. Montes de María	Hombre	Cartagena	03/12/2010
6	Montes de María	Junta de Acción Comunal Barrio Los Ángeles. El Carmen de Bolívar	Mujer	Cartagena	04/12/2010
7	Montes de María	Comité de Pescadores de Puerto Santander	Mujer	Cartagena	04/12/2010
8	Putumayo	ASODESCA	Hombre	Mocoa	07-08/11/2010
9	Putumayo	Organización Víctimas Visibles del Tigre por la Paz	Mujer	Mocoa	07-08/11/2010
10	Putumayo	Fundación Social ECOTONO	Hombre	Mocoa	07-08/11/2010
11	Putumayo	Mesa Regional de Organizaciones Sociales	Hombre	Mocoa	07-08/11/2010
12	Putumayo	Coordinadora Mesa Campesinos del Municipio de San Miguel	Mujer	Mocoa	07-08/11/2010
13	Putumayo	Mujeres Valle del Sibundoy- Mujeres Productoras de Pimienta y Vainilla Puerto Colón	Mujer	Mocoa	07-08/11/2010
14	Putumayo	Mesa Departamental de Población Desplazada	Hombre	Mocoa	07-08/11/2010
15	Putumayo	Red de Soberanía y Seguridad Alimentaria	Hombre	Mocoa	07-08/11/2010
16	Putumayo	Cooperativa de Mineros	Hombre	Mocoa	07-08/11/2010
17	Putumayo	ASOJUNTAS- Villagarzón	Hombre	Mocoa	07-08/11/2010
18	Putumayo	Asociación Nacional de Usuarios Campesinos	Hombre	Mocoa	07-08/11/2010
19	Putumayo	Mesa Regional de Organizaciones Sociales	Hombre	Mocoa	07-08/11/2010
20	Putumayo	UniAmazonia	Hombre	Mocoa	07-08/11/2010
21	Cauca	Coordinadora Agraria	Hombre	Popayán	07-08/11/2009

ANEXO 2. GUION ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

En las entrevistas en profundidad realizadas en el marco de la investigación para la presente tesis se abordaron los siguientes ejes temáticos:

- Territorios de acción de las organizaciones.
- Procesos sociales en marcha, procesos de resistencia de los actores sociales.
- Repertorios de confrontación y agendas de las organizaciones sociales.
- Nuevas dimensiones del conflicto armado/conflictos.
- Transformaciones del territorio a causa de los conflictos.
- Actores implicados.
- Territorialidades (sistemas de poder), relaciones de poder.
- Políticas públicas de desarrollo, de seguridad y en general que impliquen una intervención de los territorios.
- Agendas populares en relación con los conflictos y el ordenamiento territorial.

Para ello, las entrevistas se estructuraron en los bloques que se señalan continuación y en cada uno de ellos se incluyeron una batería de preguntas que se alteraron según se fue desarrollando la conversación con los actores populares.

Primer bloque. Procesos organizativos, dinámicas internas, relaciones con otros sectores, repertorios de confrontación, percepciones territoriales y lecturas del contexto nacional.

¿Cuál es la historia de la organización? ¿Por qué decidió vincularse al proceso? ¿Cuáles son los objetivos de la organización? ¿Cuál es el radio de acción de la organización? ¿Existen espacios de concertación con otros actores sociales a nivel local, regional, nacional que les permitan realizar alianzas y articulaciones? ¿Cuáles han sido los efectos del conflicto/conflictos en el sector y/o organización popular? ¿Cuáles son las demandas y las acciones que ha llevado a cabo la organización? ¿Cuál es la visión que tiene el sector y/o organización acerca del uso de la naturaleza y del territorio por parte de las instituciones gubernamentales u otros actores? ¿Estima que su organización y las organizaciones populares han desarrollado una agenda consistente para la transformación de los conflictos

de su territorio? ¿Cuál su contenido o énfasis? ¿La organización tiene alguna agenda para la paz desde el territorio que habitan?

Segundo bloque. Caracterización de los conflictos y de los territorios, transformaciones del espacio que habitan las organizaciones, políticas públicas implementadas en los territorios, dinámicas y transformaciones de los territorios.

¿Su organización ha realizado alguna caracterización del conflicto armado o de otro tipo de conflictos presentes en sus territorios? ¿Cuáles son los conflictos que en este momento están presentes en su territorio? ¿En qué lugares del territorio se ubican? ¿Cuáles son los cambios o transformaciones que han tenido estos conflictos en el último tiempo? ¿A qué cree que se debe ese tipo de cambios o transformaciones? ¿Qué sectores o poblaciones se ven más afectadas? ¿Cuáles cree que son las causas de esos conflictos? ¿Cuáles han sido las transformaciones territoriales a causa de los conflictos? ¿Se han alterado las formas “tradicionales” de utilización de los recursos del territorio, las formas de explotación y las formas de tenencia de la tierra utilizadas por las comunidades que allí habitan? ¿Cómo los conflictos han alterado las relaciones sociales de las comunidades? ¿Cuáles cree que son los principales impactos de los conflictos en los sectores y en las organizaciones sociales populares? ¿Los conflictos y los cambios en el territorio se derivan de la implementación de algún tipo de proyecto, política pública o privada? ¿Se ha implementado algún tipo de política pública encaminada a minimizar los impactos del conflicto/conflictos en el territorio? ¿Se puede identificar con claridad la agenda gubernamental para el territorio? ¿Se inscribe en el plan de ordenamiento territorial? ¿En su territorio se desarrollan programas de paz? ¿Cuál es la apreciación de su organización sobre tales programas?

Tercer bloque. Relaciones de poder presentes en los territorios, caracterización de los actores, lugares de influencia, acceso a recursos materiales y simbólicos entre otros aspectos.

¿Qué actores tienen presencia en el territorio? ¿En qué lugares? ¿La organización a la que pertenece ha hecho alguna caracterización sobre estos actores? ¿La presencia de estos actores ha variado en el tiempo? ¿Han aparecido nuevos actores relacionados con el

conflicto armado o con otro tipo de conflictos? ¿Qué actividades desempeñan en el territorio? ¿Cómo ha influido la presencia de esos actores en las dinámicas del conflicto armado o de otro tipo de conflictos? ¿Esos actores se relacionan con algún tipo de proyecto económico o de política de desarrollo? ¿Considera que estos actores tienen una agenda de acción específica sobre el territorio? ¿Cuál es la posición de las autoridades locales y regionales frente a los actores y los conflictos que se desarrollan en el territorio y cuál ha sido la forma de gestionarlos? ¿Los entes gubernamentales han promovido espacios de diálogo y/o concertación entre los actores que se encuentran involucrados en algún tipo de conflicto (armado, social, ambiental, económico, etc.) y las organizaciones sociales populares? ¿Existe algún tipo de relación entre estos actores y los sectores populares? ¿Cómo definiría esa relación?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acción Social -UNODC. (2010). Informe Ejecutivo. Encuentro nacional de la gestión presidencial contra los cultivos de uso ilícito (PCI). Bogotá. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/Agosto/DA2013/ENDA_2009_espanol_copia.pdf
- Accossatto, R. (2017). Colonialismo interno y memoria colectiva. Aportes de Silvia Rivera Cusicanqui al estudio de los movimientos sociales y las identificaciones políticas. *Economía y Sociedad*. 21(36), 167-181.
- Acevedo, M., Gómez, R., & Zúñiga, M. (2016). Pedagogía popular: una construcción a partir del diálogo de saberes, la participación comunitaria, y el empoderamiento de sujetos sociales. En L. Cendales, M. R. Mejía, & J. Muñoz, *Pedagogías y metodologías de la educación. Se hace camino al andar* (pp. 13-32). Bogotá: Desde Abajo.
- Acosta, A. (2012). *Buen vivir. Sumak Kawsay. Una oportunidad para imaginar otros mundos*. Quito: Abya-Yala.
- Acosta, A. (2013). Colombia: escenario de las desigualdades. *Tendencias*. Vol. XIV (1), 9-35.
- Acosta, A. (2016). Aporte al debate: El extractivismo como categoría de saqueo y devastación. *Forum for Inter-american Research*. 9 (2), 25-33.
- Acosta, A. y Gudynas, E. (2011). La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa. *Utopía y Praxis Latinoamericana*. 16 (53), 71-83.
- Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*. (12 de noviembre de 2016). Recuperado de https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf

- Agencia Nacional de Hidrocarburos (2014). *Ronda Colombia 2014*. Recuperado de <http://ronda2014.anh.gov.co/rondacolombia2014/index.php/3-mapas>
- Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) (s.f.). *Historia*. Recuperado de <https://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-la-anh/historia>
- Agencia de Renovación del Territorio (2018). *Plan de Acción para la Transformación Regional – PATR- Subregión Montes de María*. Bogotá. Recuperado de https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/planes_estrategicos/programas_de_desarrollo_con_enfoque_territorial_pdet/planes_de_accion_para_la_transformacion_regional_patr
- Agnew, J. (1987). *Place and Politics. The Geographical Mediation of State and Society*. Boston: Allen & Unwin.
- Agnew, J. (2005). *Geo-política una revisión de la política mundial* (Traducción de María D. Lois Barrio). Madrid: Trama Editorial (Obra original publicada en 1998).
- Aguilar, S. (2009). In memoriam. Las relaciones constituyen las unidades sociales básicas: en la muerte de Charles Tilly. *Revista Internacional de Sociología*. 67 (1), 213-218.
- Aguilera, A. G. (2015). *Reinventando la comunidad y la política: formación de subjetividades, sentidos de comunidad y alternativas políticas en procesos organizativos locales*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
- Aguilera, M. (2006). ELN: entre las armas y la política. En F. Gutiérrez, G. Sánchez, & M. E. Wills, *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia* (pp. 209-267). Bogotá: Norma. IERPI.
- Aguilera, M. (2013). Las FARC: Auge y quiebre del modelo de guerra. *Análisis político*. (77), 85 - 111.
- Aguilera D., M. (2013). Montes de María: una subregión de economía campesina y empresarial. *Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana*. 195.

- Aguilera, M. (2014). *Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013. Tercera edición*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica. (Obra original publicada en 2011)
- Alape, A. (1994). *Tirofijo: los sueños y las montañas*. Bogotá: Edición Planeta.
- Algranati, C., Seoane, J. y Taddei, E. (2008). El concepto ‘movimiento social’ a la luz de los debates y la experiencia latinoamericana recientes. En P. González Casanova, *Proyecto “Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo”* (pp. 169-198). México: UNAM.
- Algranati, C., Seoane, J. y Taddei, E. (2011). El concepto “movimiento social” a la luz de los debates y la experiencia latinoamericana recientes”. *Revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*. (4), 169-198.
- Altschuler, B. (2013). Territorio y desarrollo: aportes de la geografía y otras disciplinas para repensarlos. Universidad Virtual de Quilmes. *Theomai*. 27, (28), 64-79.
- Amnistía Internacional (2000). *Amnistía Internacional pide al Gobierno Español que se oponga al Plan Colombia*. Recuperado de https://web.archive.org/web/20150203174237/https://www.es.amnesty.org/com/2000/com_27jun00.shtm
- Archila, M. (1994). Historiografía de los movimientos sociales en Colombia. Siglo XX. En B. Tovar Zambrano, *La historia al final del milenio. Ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana, Volumen I* (pp. 251-351). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Archila, M. (2001). Vida, pasión y... de los movimientos sociales en Colombia . En M. Archila, y M. Pardo, *Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia* (pp. 16-47). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Centro de Estudios Sociales e Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Archila, M. (2003). *Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia*. Bogotá: ICANH. CINEP. Diakonia Acción Ecuémica Sueca.

- Archila, M. (2005). Desafíos y perspectivas de los movimientos sociales en Colombia. En M. Cárdenas, *La reforma política del Estado en Colombia: una salida integral a la crisis* (págs. 155-172). Bogotá: FESCOL.
- Archila, M. (2006). *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio*. Bogotá: CINEP.
- Archila, M. (2009). *Bananeras Huelga y Masacre, 80 Años*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Archila, M. y Pardo, M. (Eds.). (2001). *Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia*. Bogotá: CES Universidad Nacional de Colombia. Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Archila, M., Delgado, Á., García, M. C. y Prada, E. (2002). *25 años de luchas sociales en Colombia*. Bogotá: CINEP.
- Archila, M., y García, M. (2003). El claroscuro de la protesta social en Colombia, 1975-2002. *Bajo el Volcán*. 3 (6), 93-104.
- Aristizábal, J. (2008). Plan Colombia II, Suramérica y las nuevas concepciones de la guerra. *Arcanos*. 14, 88-98.
- Arocha, J. y Moreno, L. (2007). Andinocentrismo, salvajismo y afro-reparaciones. En Ó. Almarino, *Afro-reparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales* (pp. 587-614). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Centro de Estudios Sociales (CES).
- Artunduaga, F. (1998). *El día que la guerrilla se metió a Florencia*. Universidad de la Amazonía.
- Asocaña. (2019). *El Sector Azucarero Colombiano en la Actualidad*. Recuperado de <https://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215>
- Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. (s.f.). Recuperado de <http://www.anuc.co/>

- Auyero, J. (2011). Puños, patadas y codazos en la regulación de la pobreza neoliberal. En M. J. Funes, *A propósito de Tilly: conflicto, poder y acción colectiva* (pp. 231-247). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- Ávila, A. (2008). Farc: dinámica reciente de la guerra. *Arcanos*. 14, 24-40.
- Ávila, A. (2009). La guerra de las Farc y la guerra contra las Farc. *Revista Arcanos*. 15, 4-21.
- Ávila, A. (2014). Informe departamento del Putumayo. Fundación Paz y Reconciliación Redprodepaz. Bogotá: 2014.
- Ávila, A., y Celis, L. E. (2008). ELN: El camino hacia la resistencia pasiva. *Arcanos*. 14, 24-40.
- Ávila, N. (2015). Palma aceitera: conflictos y resistencias territoriales en María La Baja-Bolívar, Colombia. *Eutopía. Revista De Desarrollo Económico Territorial*. 8, 113 -24.
- Banco de la República de Colombia. (2016a). Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER) Valle del Cauca. Bogotá: Banco de la República de Colombia. DANE.
- Banco de la República de Colombia. (2016b). Informe de coyuntura económica regional. Departamento del Cauca. Bogotá: Banco de la República de Colombia. DANE.
- Banco de la República de Colombia. (2016c). Informe de Coyuntura Económica Regional. Departamento de Nariño. Bogotá: Banco de la República de Colombia. DANE.
- Bauman, Z. (2003). *Comunidad. En búsqueda de seguridad en un mundo hostil*. Madrid: Siglo XXI Editores.
- Bebbington, A. (2007). La sostenibilidad social de los recursos rurales: apreciaciones a partir de los conflictos mineros en Latinoamérica. *Debate Agrario, Centro Peruano de Estudios Sociales*, 42, 31-78.
- Bejarano, A. M. (2011). *Democracias precarias. Trayectorias políticas divergentes en Colombia y Venezuela*. Bogotá: Universidad de Los Andes.

- Benford, R., Snow, D., Burke, R. y Steven, W. (1986). Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation. *American Sociological Review*. 51 (4), 464-481.
- Betancur, B. (1986). *Biblioteca Universidad Piloto*. Recuperado el 10 de junio de 2019, de <https://bibliotecapiloto.janium.net/janium/Documentos/BPP-D-BBC/BPP-D-BBC-0173.pdf>
- Blair, E. (1993). *Las fuerzas armadas. Una mirada civil*. Bogotá: CINEP.
- Blair, E. (2004). Mucha sangre y poco sentido: La masacre. Por un análisis antropológico de la violencia. *Boletín de Antropología Universidad de Antioquia*. 18 (35), 165-184.
- Blair, E. (2010). La política punitiva del cuerpo: “economía del castigo” o mecánica del sufrimiento en Colombia. *Estudios Políticos*. 36, 39-66.
- Bocchi, D. (2011). *Análisis del plan de consolidación de Montes de María. Una mirada desde el desarrollo, la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional*. Bogotá: Editorial CÓDICE Ltda.
- Bolívar, P., Gutiérrez, L. y Botero, A. (2017). *La buena fe en la restitución de tierras. Sistematización de la Jurisprudencia*. Bogotá: Ediciones Antropos.
- Bonilla, V. (1968). *Siervos de Dios y amos de indios. El Estado y la Misión Capuchina en el Putumayo*. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo.
- Borda, S., y Gómez, S. (2017). La internacionalización del proceso de la Habana: del aislacionalismo a la contención. En A. Tickner, y S. Bitar, *Nuevo enfoques para el estudio de las relaciones internacionales en Colombia* (pp. 213-238). Bogotá: Universidad de los Andes.
- Bottía, M. (2003). *La presencia y expansión municipal de las FARC: es avaricia y contagio, más que ausencia estatal*. Bogotá: Documento CEDE 2003-03. Universidad de Los Andes.
- Bourdieu, P. y Wacquant, L. J. (1995). *Respuestas por una antropología reflexiva (Traducción de Hélène Levesque Dion)*. México: Editorial Grijalbo.

- Buitrago, F. (2004). La seguridad durante el primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. *Análisis Político* (50), 86-101.
- Caffentzis, G. y Federici, S. (2015). Comunes contra y más allá del capitalismo. *El Apantle: Revista de Estudios Comunitarios*. 1, 51-72.
- Cairo, H. (2000). Jano desorientado: Identidades político-territoriales en América Latina. *Leviatán: revista de hechos e ideas*. 79, 107-120.
- Cairo, H. (2001). Territorialidad y fronteras del estado-nación: Las condiciones de la política en un mundo fragmentado. *Política y Sociedad*. 36, 29-38.
- Cairo, H. (2005). Discursos geopolíticos y construcción de identidades supranacionales en América Latina. *Anuario Jahrbuch des Österreichischen Lateinamerika-Instituts n. ° 8: Von Wäldern, Städten und Grenzen: Narration und kulturelle Identitätsbildungsprozesse in Lateinamerika*, 315-337.
- Cairo, H. (2013). Espacio y Política: Por una Teoría Política Situada. *Dados - Revista de Ciências Sociais*. 56 (4), 769-802.
- Calderón, F. (2008). Elementos para una geopolítica de los megaproyectos de infraestructura en América Latina y Colombia. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*. 17, 7-21.
- Calle, L., & Nãñez, J. (2017). Conflicto armado e implementación del extractivismo. *El Extractivismo en América Latina: Dimensiones Económicas, Sociales, Políticas y Culturales* (pp. 311-325). Sevilla: Instituto de Estudios Universitarios sobre América Latina como modelo de desarrollo: Un estudio de caso en la altillanura colombiana.
- Calleja González, E. (2011). Charles Tilly y el análisis de la dinámica histórica de la confrontación política. En M. J. Funes, & M. J. (Eds.), *A propósito de Tilly: conflicto, poder y acción colectiva*. 33, pp. 33-49. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- Camacho, Á., & Guzmán, Á. (1990). *Colombia, ciudad y violencia*. Bogotá: Foro Nacional.

- Camacho, J. (2017). Acumulación tóxica y despojo agroalimentario en la Mojana, Caribe colombiano. *Revista colombiana de antropología*, 53, 123-150.
- Campos en Movimiento. (2013). *Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo, Acsomayo, Putumayo*. Recuperado de <https://camposenmovimiento.wixsite.com/camposenmovimiento/asociacion-campesina-del-sur-orient-del>
- Cantor, L. (2017). *Análisis de la construcción del Plan de Desarrollo Integral Andino Amazónico Pladía 2015* (Tesis para optar al grado de Magister en Medio Ambiente y Desarrollo). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Cárdenas, F. C. (2013). (Des) orden y signos políticos dominantes del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. . *Estudios Políticos*. 42, 85-111.
- Casement, R. (1995). Reportaje sobre el Putumayo. En A. C. Augusto Gómez, *Caucherías y conflicto colombo-peruano: testimonios, 1904-1934* . Bogotá: Disloque Editores.
- Castañeda, D. (2009). ¿Qué significan los Laboratorios de Paz para la Unión Europea? *Colombia Internacional*. 69, 162-179.
- Castaño, A. (2018). Conflictos socioambientales ocasionados por el cultivo de palma aceitera: el caso de María La Baja en Montes De María. *Jangwa Pana*. 17 (2), 248-257.
- Castaño, H. D. (2016). El programa Familias Guardabosques: una mirada al discurso político del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. *Trabajo social*. 18, 179-197.
- Castillo, A. (2017). *Reconocimiento político del Campesinado*. Recuperado de <https://semillas.org.co/apc-aa-files/353467686e6667686b6c676668f16c6c/6-alberto-castilla-salazar.pdf>
- Castillo, A., Rubiano, G., & Sebastián, E. (2019). *La minería de oro en la selva: Territorios, autonomías locales y conflictos en Amazonia y Pacífico (1975-2015)*. Bogotá: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes.

- Castro, M., A. J., & Celis, M. (2000). El conflicto armado: la estrategia económica de los principales actores y su incidencia en los costos de la violencia 1990-1998. *Planeación y Desarrollo. Volumen. 30* (3), 81-105.
- Ceceña, A. E. (2004). Militarización y resistencia. *OSAL. 15*, 35-37.
- Centro de Investigación y Educación Popular (2009). *La protesta social 2002-2008: en cuestión las políticas públicas de Uribe. Informe especial*. Bogotá. Recuperado de <https://www.cinep.org.co/Home2/>
- Centro de Investigaciones y Educación Popular (2012). La otra cara de la palma en Maríalabaja. *Cien días. 76*, 25-28.
- Centro de Medios Independientes. (05 de julio de 2012). *Doce años de plan Colombia en el departamento del Putumayo puerta de la Amazonia Colombiana*. Recuperado de <https://archivo.argentina.indymedia.org/news/2012/07/817054.php>
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2009). *La masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra*. Bogotá: Taurus.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2010). *La tierra en disputa: memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe 1960-2010*. Bogotá: Taurus.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2012). *El Placer, mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo*. Bogotá: Taurus.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2014). *Guerrilla y población civil*. Bogotá: CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). *Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo*. Bogotá: CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2016a). *Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013)*. Bogotá: CNMH-IEPRI.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2016b). *Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas*. Bogotá: CNMH.

- Centro Nacional de Memoria Histórica (2017). *Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano*. Bogotá: CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2018a). *Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2018b). *Análisis de contextos: herramientas para la comprensión del conflicto armado colombiano*. Bogotá: CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2019). *Juglares de la memoria de los Montes de María*. Bogotá: CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (s.f.). *Recorridos por los paisajes de la violencia en Colombia*. Recuperado de <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/recorridos-por-paisajes-de-la-violencia/montes-maria-piedemonte.html>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017). *Perfil marítimo y logístico de América Latina y el Caribe*. Recuperado de <http://perfil.cepal.org/l/es/start.html>
- Cepeda Castro, I. (2015). *Convenios entre empresas del sector minero-energético y la Fuerza Pública. Comisión II del Senado de la República (03 de noviembre)*. Bogotá. Recuperado de <http://www.ivancepedacastro.com/wp-content/uploads/2015/11/DEBATE-CONVENIOS.pdf>
- Cepeda, I., y Girón, C. (2004). Procesos públicos de esclarecimiento y justicia de crímenes contra la humanidad. *Análisis Político*. 50, 52-71.
- Cepeda, I., y Rojas, J. (2008). *A las puertas de El Ubérrimo*. Bogotá: Random House Mondadori.
- Claval, P. (2003). El enfoque cultural y las concepciones geográficas del espacio. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*. 34, 21-39.

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (2003). *Boletín de la Consultoría de los Derechos Humanos y el Desplazamiento*. N.º 44. Destierro y repoblamiento. Bogotá: CODHES. Recuperado el 20 de octubre de 2018, de <https://issuu.com/codhes/docs/boletin44>

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (2004). *Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento*, N.º 48. CODHES, Bogotá. Recuperado el 19 de octubre de 2018, de <http://www.codhes.org/~codhes/images/biblioteca/DocCODHES2-MujeresGuerraDesigualdad.pdf>

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento; FUCUDE; Corporación Opción Legal; Universidad Tecnológica de Bolívar; Grupo Regional de Memoria Histórica. (2020). Los Montes de María Bajo Fuego. Serie: Contribuciones a la Verdad. Voces de las víctimas de la violencia. Bogotá: Nueva Editorial.

Comisión Colombiana de Juristas (2007). *Anotaciones de la Ley de "justicia y paz". Una mirada desde los derechos de las víctimas*. Bogotá: Opciones Gráficas Editores.

Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado (2009). *El Reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado. Reparar de manera integral el despojo de tierras y bienes Vol. 5*. Bogotá: Koninkrijk der Nederlanden.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones internacionales (2009). *El despojo de tierras y territorios. Aproximación conceptual, Área de Memoria Histórica, Línea de investigación Tierra y Conflicto*. Bogotá: Editorial Kimpres Ltda.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2010). *La tierra en disputa: memorias del despojo y resistencia campesina en la Costa Caribe: 1960-2010*. Editorial Taurus.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2011). *La masacre de El Tigre, Putumayo. Un silencio que encontró su voz*. Bogotá: Taurus.

Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 3237, Política de Estímulo a la reforestación de Colombia: 2033-2006 (11 de agosto de 2003). Recuperado de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3237.pdf>

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento; Fundación Cultura Democrática Colombia; Corporación Opción Legal; Universidad Tecnológica de Bolívar; Grupo Regional de Memoria Histórica (2020). *Los Montes de María Bajo Fuego. Serie: Contribuciones a la Verdad. Voces de las víctimas de la violencia*. Bogotá: Nueva Editorial.

Consultoría Para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (2012). *Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisibilizada*. Bogotá. Recuperado de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/CODHES_Informa_79_Desplazamiento_creciente_y_crisis_humanitaria_invisibilizada_Marzo_2012.pdf?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/CODHES_Informa_79_Desplazamiento_creciente_y_crisis_hu

Contreras, J. (2018). *FARC-EP. Insurgencia, terrorismo y narcotráfico en Colombia. Memoria y discurso*. Madrid: Dykinson.

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (2013). *Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010. Crímenes de lesa humanidad bajo el mandato de la seguridad democrática*. Bogotá: Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Corpoamazonia. (s.f.). *Sistema económico*. Recuperado de http://www.corpoamazonia.gov.co/region/Putumayo/Putumayo_economico.html

Corporación Derechos para la Paz. Proyecto Planeta Paz. (2010). *Relatoría*. Taller de estudio y análisis del Proyecto de ley sobre Víctimas y Restitución de tierras, Región Caribe diciembre 3 y 4. Barranquilla.

Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal (2012). Proceso Iván Ricardo Palomino y otros, Casación No. 36311. Recuperado de https://www.redjurista.com/Documents/corte_suprema_de_justicia_sala_de_casacion_penal_e_no_36311_de_2012.aspx#

COSIPLAN. (s.f.). UNASUR. Recuperado el 25 de 01 de 2020, de <http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItem=119>

- Crudo Transparente. (2019). Recuperado de <https://crudotransparente.com/2019/09/18/en-torno-a-la-actividad-petrolera-en-el-putumayo-2016-2019/>
- Cubides, F. (1999). Los paramilitares y su estrategia. En M. Deas, & M. V. Llorent, *Reconocer la guerra para construir la paz*, (pp. 151-199). Bogotá: Editorial Norma – Cerec – Universidad de los Andes.
- Cubides, F. (2003). Tendencias recientes en la investigación del conflicto y la violencia en Colombia. En J. Elster, R. Inglehardt, y R. Eisler, *Reflexiones sobre la investigación en ciencias sociales y estudios políticos*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Cubides, F. (2005). *Burocracias armadas. El problema de la organización en el entramado de las violencias colombianas*. Bogotá: Editorial Norma.
- Da Gohn, M. G. (2008). *Novas teorias dos movimentos sociais*. Sao Paulo: Ediciones Loyola.
- Dagnino, E. (2001). Cultura, ciudadanía y democracia: los discursos y prácticas cambiantes de la izquierda latinoamericana. En A. Escobar, S. Álvarez y E. Dagnino, *Política cultural & cultura política: una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos (Traducción de Claudia Montilla)* (pp. 72-77). Bogotá: Taurus: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) (Obra original publicada en 1998).
- Dagnino, E. (2002). *Sociedad Civil Participación y Ciudadanía en Brasil*. Sao Paulo: Universidad Distrital de Campiñas.
- Daniels, A. (2016). La transformación de la estructura productiva de los Montes de María: de despensa agrícola a distrito minero-energético. *Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe*. 29, 52-83.
- Daniels, A. y Múnera, A. (2011). *Los Montes de María: región, conflicto armado y desarrollo productivo*. Cartagena: Universidad de Cartagena. Instituto Internacional de Estudios del Caribe - Grupo de Investigación Sociedad, Cultura y Política en el Caribe Colombiano.
- Daniels, A. y Rodríguez, A. (2017). La coyuntura montemariana: entre la precariedad institucional, la exigibilidad del derecho y la convivencia. En A. Daniels y F. Maza, *Montes de María:*

- políticas públicas, educación y desarrollo* (pp. 13-68). Cartagena de Indias: Editorial Universitaria.
- Daniels, A., Menco, D., Jennifer, J. y Manuel, P. (2011). El Laboratorio de Paz en los Montes de María: Una aproximación a su contexto. En D. Amaranto y A. Múnera, *Los Montes de María: región, conflicto armado y desarrollo productivo* (pp. 5-72). Cartagena: Ediciones Pluma De Mompox S.A.
- Dávila, A., Escobedo, Rodolfo, Gavina, A., & Vargas, M. (2000). El ejército colombiano durante el período Samper: paradojas de un proceso tendencialmente crítico. *Colombia Internacional*, (49) 50, 148-177.
- De la Calle, H. (2019). *Revelaciones al final de una guerra*. Bogotá: Penguin Random House.
- De Zubiría, S., y Estrada (2015). *Conflicto social y rebelión armada en Colombia*. Bogotá: Gentes del Común.
- Deas, M., y Gaitán, F. (1995). *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Decreto 2002, Por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación y consolidación (11 de septiembre de 2002).
- Decreto 2929, Por el cual se delimitan unas zonas definidas en el Decreto 2002 de 2002 (3 de diciembre de 2002).
- Defensa, M. d. (2011). *Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad*. Bogotá.
- Defensoría del Pueblo (2010). *La minería de hecho en Colombia*. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- Defensoría del Pueblo (2016). *Problemática humanitaria en la Región Pacífica de Colombia*. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- Deleuze, G. y Guattari, F. (2004). *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos. 6ª Edición (Obra original publicada en 1980).

- Delgado, J. D. (2007). Perspectivas clásicas y contemporáneas en el estudio de los movimientos sociales: análisis multidimensional del giro hacia la relacionalidad. *Revista colombiana de sociología*. 28, 47-71.
- Della Porta, D. y Diani, M. (2011). *Los movimientos sociales* (Traducción de Eduardo Romanos). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (1ª ed. en español) (Obra original publicada en 1998).
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2018). *Encuesta Nacional de Calidad de Vida*. Bogotá: DANE. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/2018/Presentacion-ECV-departamental-2018.pdf
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2019). *Pobreza multidimensional por departamentos 2018*. Bogotá. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/presentacion_pobreza_multidimensional_18_departamento.pdf
- Departamento Nacional de Planeación (1991). *La Revolución Pacífica. Plan Nacional de Desarrollo (1990-1994)*. Bogotá: Presidencia de la República de Colombia. Consultado el 17 de octubre de 2018. Recuperado de <https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrollo-anteriores.aspx>.
- Departamento Nacional de Planeación (1999). *Plan Nacional de Desarrollo. Cambio para construir la Paz*. Bogotá: Recuperado de <https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrollo-anteriores.aspx>.
- Departamento Nacional de Planeación. (2003). *Hacia un Estado Comunitario*. Bogotá: DNP.
- Departamento Nacional de Planeación (2005). *Colombia Visión II Centenario*. Bogotá: DNP.
- Departamento Nacional de Planeación (2011). *Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para todos" 2010-2014*. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.

- Departamento Nacional de Planeación (2015). *Diálogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Centro sur-Putumayo*. Recuperado el 21 de mayo de 2019, de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Presentaciones/Encuentro%20Regional%20Putumayo%20230115.pdf>
- Devia, Y. (2004). *Orito y la explotación petrolera: Un caso de colonización en el medio Putumayo, 1963-1985* (Tesis de pregrado de Antropología). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de <http://www.revistatabularasa.org/documentos/orito.pdf>
- Di Marco, G. (2009). Movimientos sociales y democracia radical; lo público y lo privado. En R. Hoetmer (Coord.), *Repensar la política desde América Latina Cultura, Estado y movimientos sociales* (pp. 37-59). Lima: Programa Democracia y Transformación Global, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales.
- Diario del Sur (10 de mayo de 2013). ANUC reveló su horizonte para Putumayo. Recuperado de <https://diariodelsur.com.co/anuc-revel%C3%B3-su-horizonte-para-putumayo-41037>
- Echandía, C. (1998). Evolución reciente del conflicto armado en Colombia: la guerrilla. En J. Arocha, F. Cubides y M. Jimeno, *Violencia: inclusión reciente* (pp. 35-65). Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.
- Echandía, C. (1999). Geografía del conflicto armado y de las manifestaciones de violencia en Colombia. *Paz pública. Programa de estudios sobre seguridad, justicia y Violencia. Quinta conferencia anual sobre Colombia*. Londres: Universidad de los Andes. Instituto de Estudios Latinoamericanos, University of London.
- Echandía, C. (2006). *Dos décadas del escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986-2006*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Echandía, C. (2013). Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales. *Informes FIP*, 19, 5-32.

- Echandía, C., y Bechara, F. (2006). Conducta de la guerrilla durante el gobierno de Uribe Vélez: de las lógicas de control territorial a las lógicas de control estratégico. *Análisis Político*, 57, 31-55
- Echandía, C. y Cabrera, I. (2017). *Madurez para la paz. Evolución de la territorialidad y las estrategias en el conflicto colombiano*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- El Espectador (10 de marzo de 2020). ¿Cómo fue el regreso de los paramilitares a El Tigre en Putumayo? Recuperado de <https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/como-fue-el-regreso-de-los-paramilitares-el-tigre-en-putumayo-articulo-908653/>
- El Espectador (31 de mayo de 2019). ¿Por qué Salvador Arana está nuevamente procesado en la Corte Suprema? Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/por-que-salvador-arana-esta-nuevamente-procesado-en-la-corte-suprema/>
- El Tiempo (2 de octubre de 2010). Ministerio de Agricultura tiene en la mira a los Montes de María. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8054101>
- El Tiempo. (30 de marzo de 2019). “Juancho Dique nos sigue persiguiendo”: líderes de los Montes de María. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/juancho-dique-estaria-amenazando-campesinos-en-bolivar-343730>
- Escobar, A. (1996a). Constructing Nature: elements for a poststructural political ecology. En R. Peet, & M. Watts, *Liberation ecologies: environment, development and social movements* (pp. 46-68). Londres: Routledge.
- Escobar, A. (1996b). *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Bogotá: Grupo Editorial Norma (Obra original publicada en 1995).
- Escobar, A. (1997). Política cultural y biodiversidad: Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano. En M. Uribe y E. Restrepo (eds.) *Antropología en la Modernidad* (pp. 173-206). Bogotá: ICANH. Colcultura.

- Escobar, A. (2003). Mundos y conocimientos de otro modo. El programa de investigación de modernidad/colonialidad latinoamericano (Traducción de Eduardo Restrepo). *Tabula rasa*. 1, 51-86.
- Escobar, A. (2011). Una minga para el posdesarrollo. *Signo y Pensamiento*, 30 (58), 306-312.
- Escobar, A. (2014a). *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Medellín: Ediciones UNAULA.
- Escobar, A. (2014b). De la crítica al desarrollismo al pensamiento sobre otra economía: pluriverso y pensamiento relacional. En J. L. Coraggio y J.-L. Laville, *Reinventar la izquierda en el siglo XXI. Hacia un diálogo Norte-Sur* (págs. 191-206). Buenos Aires: CLACSO y Universidad General Sarmiento.
- Escobar, A. (2018). *Territorios de diferencia. Lugar, movimientos, vida redes* (Traducción de Eduardo Restrepo). Popayán: Editorial Universidad del Cauca (1ª Reimpresión en español. Obra original publicada en 2008).
- Escobar, A., Álvarez, S. y Dagnino, E. (2001). *Política Cultural & Cultura Política: Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos* (Traducción de Claudia Montilla). Bogotá: Taurus ICANH (Obra original publicada en 1998).
- Escobar, C. (1982). *La trayectoria de la ANUC*. Bogotá: CINEP.
- Escobar, J., Moreno, S. y Collazos, J. (2013). Composición de la economía de la región Suroccidente de Colombia. *Ensayos sobre economía regional*. 52, 2-43.
- Escuela Nacional Sindical (05 de agosto de 2010). *Agencia de Información Laboral*. Recuperado el 10 de octubre de 2019, de <http://ail.ens.org.co/informe-especial/balance-del-gobierno-alvaro-uribe-velez-4/>
- Estrada A., J. (2015). Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada. En *Conflicto social y rebelión armada en Colombia* (pp. 253-321). Bogotá: Gentes del Común.

- Fajardo M., D. (2015). Estudio sobre los orígenes del conflicto social y armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. En *Conflicto social y rebelión armada en Colombia* (pp. 95-151). Bogotá: Gentes del Común.
- Fajardo, F. (2002). *Para sembrar la paz, hay que aflojar la tierra*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Fals Borda, O. (2002). *Retorno a la tierra. Historia doble de la Costa 4*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Banco de la República. El Ancora Editores (Obra original publicada en 1986).
- Fanon, F. (1961). *Les damnés de la terre*. Paris: François Maspero.
- Federici, S. (2010). *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficantes de sueños (Obra original publicada en 2004).
- Federici, S. (2013). *Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Fernández, C., Grossi, J., y Sabucedo, J. M. (1998). Los movimientos sociales y la creación de un sentido común alternativo. En P. Ibarra, & B. Tejerina, *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural* (pp. 165-181). Madrid: Editorial Trotta S.A.
- Flórez, M. (25 de agosto de 2014). Putumayo, al borde del paro. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/putumayo-al-borde-del-paro/>
- Forero, J. (2010). *El campesino colombiano. Entre el protagonismo económico y el desconocimiento de la sociedad*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Forero, S. (19 de febrero de 2020). Tras 20 años de la masacre de El Salado, solo hay un agente estatal condenado. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/tras-20-anos-de-la-masacre-de-el-salado-solo-hay-un-agente-estatal-condenado-articulo-905445/>

- Foucault, M. (1979). *La microfísica del poder*. Madrid: Las Ediciones de La Piqueta. 2ª edición en español. (Obra original publicada en 1976).
- Foucault, M. (2002) *La arqueología del saber*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 1ª edición en español. (Obra original publicada en 1976).
- Franco Restrepo, V. L. (2009). *Orden contrainsurgente y dominación*. Medellín: Siglo del Hombre Nuevo Editores.
- Fraser, N. (1997). *Justicia Interrupta Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores-Universidad de los Andes.
- Fraser, N. y Butler, J. (2016). Reconocimiento y redistribución. Un debate entre marxismo y feminismo. Madrid: Traficantes de Sueños. New Left Review en español.
- Freire, P. (1985). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI Editores. (Obra original publicada en 1968)
- Fukuyama, F. (1992). *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press.
- Fundación Ideas para la Paz (2011). *Análisis regional de los Montes de María. Cuadernos de Cooperación y Desarrollo*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
- Gamson, W. (1992). *Talking politics*. Cambridge, N.Y.: Cambridge University Press. (Transferred to digital printing 2002).
- Gamson, W. y Meyer, D. S. (1999). Marcos interpretativos de la oportunidad política. En D. McAdam, J.D. McCarthy, y M. N. Zald, *Movimientos sociales perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales (Traducción de Sandra Chaparro)* (pp. 389-413). Madrid: Istmo Ediciones S.A.
- Garay, L. J. (2013). Economía ecológica, ecología política y justicia ambiental, y neo-institucionalismo. Algunas aproximaciones para el análisis de problemáticas, alrededor de la explotación de recursos naturales no renovables. En C. G. República, *Minería en*

- Colombia, institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos* (pp. 11-26). Bogotá: Contraloría General de la República.
- Garay, L. J. (2014). Minería como sistema complejo, gobernanza adaptativa y ecología política. En C. G. República, *Minería en Colombia. Daños ecológicos y socio-económicos y consideraciones sobre un modelo de desarrollo alternativo* (pp. 11-30). Bogotá: Contraloría General de la República.
- Garay, L. J. y Salcedo, E. (2012). *Redes ilícitas y reconfiguración de Estados: el caso Colombia*. Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional. Fundación Vortex.
- Garay, L. J., Bailey, J., Forero, J., Salgado, C., Naranjo, S., Barbieri, F., & Machado, A. (2013). *Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia*. Bogotá: Corcas Editores.
- Garay, L. J., Barbieri, F., y Cardona, E. (2006). *La negociación agropecuaria en el TLC: alcances y consecuencias*. Bogotá: Planeta Paz. Oxfam.
- García, A. (2009). Geografías racializadas: configuraciones espaciales de la exclusión étnica afrocolombiana en Medellín. En C. I. Aramburu y C. I. García, *Universos socioespaciales. Procedencias y destinos* (pp. 245-282). Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- García, C. I. (2007). *Enfoque sobre "región". Elementos para una discusión. Documento temático presentado a 2o Seminario interno ODECOFI*. Recuperado de https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/3682/2/ENFOQUES_SOBRE_REGION.pdf
- García, C. I., y Aramburu, C. I. (2009). *Universos socio espaciales: procedencias y destinos*. Medellín: Siglo del Hombre Editores.
- García, M. C. (2001). Luchas y movimientos cívicos en Colombia durante los ochenta y los noventa, transformaciones y permanencias. En M. Archila & M. Pardo, *Movimientos sociales, Estado y democracia* (pp. 89-124). Bogotá: ICANH, Universidad Nacional de Colombia.

- García, P. (1998). *Fronteras, colonización y mano de obra indígena en la Amazonia Andina (siglos XIX, XX)*. Barcelona: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial; Universidad de Barcelona.
- García, P., Ochoa, L., Pardo, B. y Zableh, J. (2015). *Informe sobre el estado actual e impactos del proceso de restitución de tierras en Montes de María. Primer reporte semestral*. Bogotá: Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Rural, Corporación Desarrollo Solidario, Universidad del Norte, Mesa de Articulación y Concertación de Montes de María.
- Garzón, J. C. (s.f.). *Desmovilización del Bloque Héroes de Montes de María de las AUC*. Bogotá. Recuperado de <https://mafiaandco.files.wordpress.com/2010/05/desmovilizacion-del-bloque-heroes-de-montes-de-maria-de-las-auc.pdf>
- Garzón, J. C. y Suárez, M. (2018). *¿En qué va la sustitución de cultivos de uso ilícito? Balance del 2017 y lo que viene en el 2018*. Fundación Ideas para la Paz, Bogotá. Recuperado de agosto de 2020, de <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5a905d8a0546e.pdf>
- Gilhodés, P. (1972). *Las luchas agrarias en Colombia*. Medellín: Editorial La Carreta.
- Gilhodés, P. (1974). *Politique et Violence. La question agraire en Colombie*. Paris: Armand Colin.
- Giménez, G. (2000). Territorio, cultura e identidades La región socio-cultural . En R. Rosales, *Globalización y regiones en México* (pp. 19-34). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Giraldo, I. T. (1973). *Los inconformes*. Bogotá: Margen Izquierdo.
- Giraldo, J. (1987). *La reivindicación urbana*. Bogotá: CINEP.
- Giraldo, J. (2015). Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia e impactos. En J. Estrada, D. Fajardo, J. Giraldo, A. Molano, V. M. Moncayo, R. Vega, & S. De Zubiría, *Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Ensayos críticos* (págs. 205-252). Bogotá: Gentes del Común.

- Gómez Albarello, J. G. (1996). Conflicto armado y derecho humanitario en Colombia. En S. Franco, *Colombia contemporánea*. Bogotá: IEPRI–Ecoe Ediciones.
- Gómez Lobo, A. (1999). Las elecciones en Colombia. *Estudios Socio-Jurídicos*, 1(2), 177-188
Consultado el 17 de octubre de 2019, recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05791999000200011&lng=en&tlng=es
- Gómez, A. (2005). El valle del Sibundoy. El despojo de una heredad. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*. (32), 51-73.
- Gómez, H., Roux, C. V., & Franche, M. A. (2003). *El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia*. Bogotá: PNUD.
- González Casanova, P. (1963). *Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo. México*: UNESCO.
- González Casanova, P. (1965). *La democracia en México*. México: Ediciones Era.
- González Casanova, P. (2006). Colonialismo interno (uma redefinição). En A. Borón, J. Amado y S. González, *A teoría marxista hoje: problemas e perspectivas* (pp. 431-458). Buenos Aires: CLACSO.
- González Posso, C. (2009). *El Caguán irrepetible*. Recuperado de http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/03/721_EL-CAGUAN-IRREPETIBLE.pdf: INDEPAZ
- González, F. (2007). Territorio Violencia y Poder: el conflicto colombiano mirado desde la historia y la geografía. *Colombia Foro. Revista de la Fundación Foro*. (5), 5-17.
- González, F. (2009). Espacio, conflicto y poder: las dimensiones territoriales de la violencia y la construcción del Estado en Colombia. *Sociedad y economía*, (17), 185-214. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=996/99612495009>
- González, F. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá: Odecofi-Cinep.
- González, F., Bolívar, I. y Vásquez, T. (2002). *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción de Estado*. Bogotá: Ediciones Antropos.

- González, O. (2019). Participación de la sociedad civil. Foros, metodología, organización y desarrollo. En A. Vargas, *¿Cómo se logró el acuerdo de paz con las FARC? Reconstrucción metodológica* (pp. 71-87). Bogotá: Universidad Nacional.
- Grupo de Memoria Histórica (2013). *¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Gudynas, E. (2011). Buen Vivir: germinando alternativas del desarrollo. *América Latina en Movimiento*. 462, 1-20.
- Gudynas E. (2013). Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales. Observatorio del desarrollo. Centro Latino Americano de Ecología Social. Uruguay: CLAES.
- Gudynas, E. (2015). *Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza*. Cochabamba (Bolivia): CEDIB.
- Gudynas, E. (2016). *Derechos de la naturaleza: ética biocéntrica y políticas ambientales*. Quito: Abya-Yala.
- Guerrero, J. (2007). *Los años del olvido: Boyacá y los orígenes de la violencia*. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Dirección de Investigaciones.
- Gusfield, J. (2001). La reflexividad de los movimientos sociales: revisión de las tesis sobre la sociedad de masas y el comportamiento colectivo. En J. Gusfield y E. Laraña, *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad* (Traducción de Antonio Rivas y Enrique Laraña) (pp. 93-119). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (1ª Reimpresión en español).
- Gusfield, J. y Laraña, E. (2001). *Los nuevos movimientos sociales de la ideología a la identidad*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (1ª reimpresión en español).
- Gutiérrez Aguilar, R. (2017). *Horizontes comunitario-populares. Producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas*. Madrid: Traficantes de Sueños. Serie Mapas.

- Gutiérrez, F., & Barón, M. (2006). Estado, control paramilitar y orden político en Colombia. En M. E. Wills, & G. Sánchez, *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia* (pp. 152-176). Bogotá: Editorial Norma.
- Gutiérrez, F., y Vargas, J. (2016). *El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo y por qué*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Guzmán Campos, G. (1986). Reflexión crítica sobre el libro La Violencia en Colombia. En G. Sánchez y R. Peñaranda, *Pasado y presente de la violencia en Colombia* (pp. 349-366). Bogotá: CEREC.
- Guzmán, G., Fals Borda, O., y Umaña, E. (1963). *La violencia en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Segunda edición Tomo I.
- Hacemos Memoria (2020). *En el país hablar de derechos humanos es delito: Marcos Rivadeneira*. Recuperado de <http://hacemosmemoria.org/2020/03/23/en-el-pais-hablar-de-derechos-humanos-es-delito-marcos-rivadeneira/>
- Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. *Cultura y representaciones sociales*. 8 (15), 9-42.
- Haraway, D. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres La reinención de la naturaleza*. Valencia: Ediciones Cátedra S.A. (Obra original publicada en 1991).
- Harvey, D. (2003). *The New imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Harvey, D. (2013). *Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana*. Madrid: Ediciones Akal S.A. (Obra original publicada en 2012).
- Harvey, D. (2017). *El cosmopolitismo y las geografías de la libertad*. Madrid: Ediciones Akal S.A. (Obra original publicada en 2009).
- Herazo V., Mercado G. y Mendoza C. (2017). Estructura y Composición Florística del Bosque Seco Tropical en los Montes de María (Sucre - Colombia). *Ciencia en Desarrollo*, 8(1),

71-82. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-74882017000100071&script=sci_abstract&tlng=en

Hernández Delgado, E. (2009). La Paz y la No violencia adquieren significado propio en Colombia en las iniciativas de Paz que construyen las bases desde lo local. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*. 9 (30), 165-180.

Hernández, G. M. (2005). *La condición global. Hacia una sociología de la globalización*. Valencia: Germania.

Herrera, J. B. (2015). Proceso Minga-Congreso de los Pueblos Colombia años 2000–2013: Empoderamiento y Paz Imperfecta, Integral Transformadora. *Tercio Creciente*. 4 (2), 25-38.

Hiernaux, D., y Lindon, A. (1993). El concepto de espacio y análisis regional. *Revista Secuencia*. (25), 89-110.

Histórica, C. (2014). *Conflicto armado. Caso: El Placer-Putumayo*. Bogotá. Recuperado de <http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/CatedraBY/presentaciones/Sesion-6/ConflictoArmadoNarcotrafico.pdf>

Hoetmer, R. (2009). Después del fin de la historia; reflexiones sobre los movimientos sociales latinoamericanos hoy. En R. Hoetmer, *Repensar la política desde América Latina. Cultura Estado y movimientos sociales*. Lima: Programa Democracia y Trans.

Hoffmann, O. (2019). Sociedades y espacios en el litoral pacífico sur colombiano. En E. Jaramillo y A. Rojas, *Pensar el Suroccidente. Antropología hecha en Colombia Tomo III* (pp. 283-312). Cali: Asociación Latinoamericana de Antropología. Editorial Universidad ICESI (obra original publicada en 1999).

Honneth, A. y Fraser, N. (2006). *¿Redistribución o reconocimiento?: un debate político-filosófico*. Madrid: Ediciones Morata.

Human Rights Everywhere. (2008). *Tierra Profanada: impacto de los megaproyectos en los territorios indígenas de Colombia. Cultivos ilícitos megaproyecto*. Bogotá: HRW.

- Human Rights Watch. (2015). *El rol de los altos mandos en falsos positivos. Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles*. Estados Unidos de América: Human Rights Watch.
- Huntington, S. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster.
- I Foro "El Sur responde al Plan Colombia". (8 y 9 de septiembre de 2000). *Nizkor*. Recuperado de <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan/putumayo.html>
- Ibarra, P. y Martí, S. (2005). Prólogo a la edición castellana. En D. McAdam, S. Tarrow y C. Tilly, *Dinámicas de la contienda política* (Traducción de Joan Quesada) (pp. XVII-XXIII). Barcelona: Hacer editorial (Obra original publicada en 2001).
- Instituto de Estudios Interculturales. (2019). *Entre paramilitares y guerrilla: la desposesión territorial en Montes de María*. Bogotá: IEI.
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (1998). *Documento Borrador del acta de la reunión del Comité Operativo Preparatorio de la Convención Nacional correspondiente a la sesión del 14 de septiembre de 1998 en Itagüí*. Itagüí, Colombia. Ideas para la Paz, recuperado de <http://www.ideaspaz.org/tools/download/51073>
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. (2012). Presencia de narcoparamilitares en el 2011. *Punto de Encuentro*. 58, 1-21.
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (30 de noviembre de 2015). *Los Montes de María tiene un catastro con miras al posconflicto*. Recuperado de <https://igac.gov.co/es/noticias/el-84-de-los-montes-de-maria-tiene-un-catastro-actualizado-con-miras-al-posconflicto>
- Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) (2012). *Montes de María. Entre la consolidación del territorio y el acaparamiento de tierras Aproximación a la situación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en la región (2006-2012)*. Bogotá: Publicaciones ILSA
- International Crisis Group (10 de mayo de 2007). *Los nuevos grupos armados de Colombia*. Informe sobre América Latina, 20. Recuperado de <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/colombia-s-new-armed-groups>

- Jaramillo Marín, J. (2011). La Comisión Investigadora de 1958 y la Violencia en Colombia. *Universitas Humanística* (72), 37-62.
- Jaramillo Marín, J. (2014). *Pasados y presentes de la violencia en Colombia: Estudios sobre las comisiones de investigación*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Jaramillo, E. y Rojas, A. (2019). *Pensar el Suroccidente. Antropología hecha en Colombia. Tomo III*. Cali: Universidad Icesi. Sello Editorial.
- Jasper, J. (2012a). From Political Opportunity Structure to Strategic Interaction. En J. Goodwin y J. Jasper, *Contention in Context: political opportunities and the emergence of protest* (pp. 1-33). Stanford: Stanford University Press.
- Jasper, J. (2012b). ¿De la estructura a la acción? La teoría de los movimientos sociales después de los grandes paradigmas. *Sociological*. 27 (75), 7-48.
- Jasper, J. y Young, M. (2007). The rhetoric of Sociological Facts. *Sociological Forum*. 22, 270-299.
- Jelín, E. (2007). *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores, S.A.
- Jenkins, J. C. (1994). La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales. *Zona Abierta*. (69), 5-49.
- Jiménez, C. (2012). Valorización capitalista de la Orinoquia colombiana. División territorial del trabajo e inserción en la acumulación transnacional. *Ciencia Política*. (12), 150-180.
- Jiménez, R. (2002). Desarrollo y paz en los Montes de María. Una propuesta desde la región. En VV.AA, *Dimensiones Territoriales de la Guerra y la Paz* (pp. 503-518). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Red de Estudios de Espacio y Territorio.
- Kaldor, M. (1999). *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*. Cambridge: Polity.
- Katz, C. O. (2016). *América Latina en la mutación global. Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

- Kitschelt, H. (1986). Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies. *American Sociological Review*. 49, 770-830.
- Kriesi, H., Klandermans, B. y Tarrow, S. (1988). *From structure to action: Comparing social movement research across cultures (International social movement research: a research annual, v. 1)*. Greenwich Connecticut: JAI Press.
- Laclau, E. y Mouffe, C. (1987). *Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia*. Madrid: Siglo XXI Editores (Obra original publicada en 1985).
- Lacoste, Y. (1977). *La geografía: un arma para la guerra*. Barcelona: Anagrama (Obra original publicada en 1976).
- Lander, E. (2000). Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos. En E. L. *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 11-40). Buenos Aires: CLACSO.
- Laraña, E. (1999). *La construcción de los movimientos sociales*. Madrid: Alianza Editorial.
- Laval, C., y Dardot, P. (2015 [2014]). *Común Ensayo sobre la revolución del SXXI*. Barcelona: Gedisa.
- Laverde, J. D. (25 de mayo de 2019). El crudo informe de la Fiscalía sobre los falsos positivos. *El Espectador*, pág. Judicial. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-crudo-informe-de-la-fiscalia-sobre-los-falsos-positivos-articulo-862643>
- Leal Buitrago, F. (2006). La política de seguridad democrática 2002-2005. *Análisis Político*. 57, 3-30.
- Leal, F. (1994). *El oficio de la guerra. La seguridad nacional en Colombia*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio* (Traducción de Emilio Martínez Gutiérrez). Madrid: Capitán Swing (Obra original publicada en 1974).

- Leff, E. (1995). ¿De quién es la naturaleza? Sobre la reapropiación social de los recursos naturales. *Gaceta Ecológica*. (37), 58-64.
- Leff, E. (2004). *Racionalidad ambiental. La apropiación social de la naturaleza*. . México: Siglo XXI Editores.
- Legrand, C. (1989). Colonization and violence in Colombia: perspectives and debates. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*. 14 (28), 5-29.
- Legrand, C. (2016). *Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950)*. 2.^a edición. Bogotá: Ediciones Uniandes - Universidad Nacional de Colombia – CINEP (Obra original publicada en 1988).
- León, N. (2012). Crisis, reprimerización y territorio en economías emergentes: caso Colombia. V *Jornadas de Geografía Económica AGE Universidad de Girona* . Girona. Recuperado de www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/Crisis_economica_e_impactos_territoriales/2/2_1_LEON_RODRIGUEZ.Pdf
- Ley 1448 (Congreso de la República 10 de junio de 2011). Recuperado de <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf>
- Ley 160 de 1994, Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial No. 41.479 (5 de agosto de 1994). Recuperado de https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/ley_160_de_1994.htm
- Ley 1728 de 2014, Por la cual se dictan normas de distribución de terrenos baldíos a familias pobres del país con fines (18 de julio de 2014). Recuperado de <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col137224.pdf>
- Ley 975 De 2005, Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

(25 de julio de 2005). Recuperado de <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2013/04/Ley-975-del-25-de-julio-de-2005-concordada-con-decretos-y-sentencias-de-constitucionalidad.pdf>

Ley 975, Diario Oficial 45.980 (25 de julio de 2005).

Lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos -PINES- (20 de agosto de 2013). Recuperado de https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3762_de_2013.pdf

Linsalata, L. (2014). Ni público, ni privado: común. Prácticas y sentidos de la gestión comunitaria del agua en la zona sur de Cochabamba en Bolivia. En C. Composto y M. L. Navarro, *Territorios en disputa* (pp. 249- 269). México: Bajo Tierra Ediciones.

Linsalata, L. (2015). Tres ideas generales para pensar lo común. Apuntes en torno a la visita de Silvia Federici. *Bajo el Volcán*. 15 (22), 71-77.

Linsalata, L. y Navarro, M. L. (2014). Feminismo y alternativas no capitalistas para la reproducción de la vida. Claves para repensar lo común. Entrevista a Silvia Federici. En C. Composto y M. L. Navarro, *Territorios en Disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina* (pp. 425-439). México: Bajo Tierra Ediciones.

Londoño, J. (05 de agosto de 2010). *El Colombiano*. Recuperado de https://www.elcolombiano.com/historico/la_de_uribe_una_historica_popularidad-HVEC_99428

López de la Roche, F. (2015). El gobierno de Juan Manuel Santos 2010-2015: Cambios en el régimen comunicativo, protesta social y proceso de paz con las FARC. *Análisis político*. 28(85), 3-37.

López Gutiérrez, W. (1999). Las políticas de paz y los procesos de negociación en Colombia. Breve Balance y Perspectivas. *Convergencia Revista De Ciencias Sociales*. (19), 245-274.

López Trigal, L. y Benito del Pozo, P. (1999). *Geografía política*. Madrid: Cátedra.

- López, C. (2016). *¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres Colombias*. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial.
- López, C., y Sevillano, Ó. (2008). Balance político de la parapolítica. *Arcanos*, 14, 62-87.
- Lozano, P. (27 de mayo de 1999). Un ministro y 17 generales de Colombia dimiten por el proceso de paz. *El País*. Recuperado de https://elpais.com/diario/1999/05/27/internacional/927756020_850215.html.
- Machado, A. (1999). Reforma agraria: una ilusión que resultó un fracaso. *Credencial Historia*. 119. Recuperado de <https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-119/reforma-agraria-una-ilusion-que-resulto-un-fracaso>
- Machado, A., Salgado, C., y Vásquez, R. (2004). *La academia y el sector rural*. Bogotá: Universidad Javeriana. Centro de Investigaciones para el Desarrollo.
- Mançano Fernández, B. (2005). *Movimientos socioterritoriales y movimientos socioespaciales. Contribución teórica para una lectura geográfica de los movimientos sociales*. Obtenido de www.prudente.unesp.br/dgeo/nera
- Mann, M. (1991). El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados. Obra original publicada en inglés. Traducción al castellano de Pablo Sánchez León. *Zona Abierta*. 58, 15-50 (Obra original publicada en 1984).
- Marín, J. y Pulido, A. (2002). *Los indígenas del putumayo buscan recuperar la sustentabilidad de su cultura. Sobreviviendo al impacto del mercado energético en la Amazonia colombiana*. Bogotá. Recuperado de http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Indigenas_Putumayo_buscان_recuperar_su_cultura_2002.pdf
- Marston, S. (2002). Mobilizing Geography: Locating Space in Social Movement Theory. *Mobilization: An International Journal Special Issue on Space and Contentious Politics (Deborah Martin and Byron Miller ed.)*. 8 (2), 227-233.

- Martin, D., & Miller, B. (2002). Spaces of Contentious Politics. *Mobilization: An International Journal Special Issue on Space and Contentious Politics (Deborah Martin and Byron Miller ed.)*. 8 (2), 143-156.
- Martínez Alier, J. (2004). Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad. *Revibec: revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica*. 1, 21-30.
- Martins, P. H. (2018). La actualidad de la Teoría del Colonialismo Interno para el debate sobre la dominación y los conflictos inter-étnicos. En A. Bialakowsky, N. Garita Bonilla, M. Cathalifaud, P. H. Martins y J. A. Preciado, *Las encrucijadas abiertas: América Latina y Caribe: sociedad y pensamiento crítico Abya Yala: tomo II* (pp. 311-334). Buenos Aires: CEFIS-AAS, ALAS, CLACSO.
- Marx Ferre, M. (2001). El contexto político de la racionalidad: las teorías de la elección racional y la movilización de recursos. En E. Laraña y J. Gusfield, *Los nuevos movimientos sociales de la ideología a la identidad* (pp. 152-182). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 1ª reimpresión en español.
- Massé, F. (2019). El papel de la comunidad internacional. En V. Alejo (Ed.), *¿Cómo se logró el acuerdo de paz con las FARC? Reconstrucción metodológica* (pp. 87-98). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Massey, D. (1984). *Spatial divisions of labour: social structures and the geography of production*. New York: Methuen.
- Massey, D. (1985). New Directions in Space. En D. Gregory, & J. Urry, *Social Relations and Spatial Structures. Critical Human Geography*. London: Palgrave.
- Massey, D. (1994). *Space, Place and Gender*. Cambridge: Polity Press.
- Maturana, H. (2005). *El sentido de lo humano*. Chile: JC Sáez editor (Primera edición de la obra publicada en 1991).

- McAdam, D. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency*. Chicago: University Press.
- McAdam, D. (1999). Orígenes terminológicos, problemas actuales y futuras líneas de investigación. En D. McAdam, J. D. McCarthy, y M. N. Zald, *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales* (Traducido por Sandra Chaparro) (pp. 49-71). Madrid: Istmo Ediciones S.A. (Obra original publicada en 1996).
- McAdam, D. (2001). Cultura y movimientos sociales. En J. Gusfield y E. Laraña, *Los nuevos movimientos sociales: de la ideología a la identidad* (pp. 43-68). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (1era reimpresión en español).
- McAdam, D., McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales* (Traducido por Sandra Chaparro). Madrid: Ediciones Istmo S.A. (Obra original publicada en 1996).
- McAdam, D., Tarrow, S. y Tilly, C. (2005). *Dinámica de la contienda política* (Traducción de Joan Quesada). España: Hacer editorial (Obra original publicada en 2001).
- McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*. 82 (6), 1212-1241.
- Medina, C. (1990). *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y consolidación. El caso Puerto Boyacá*. Bogotá: Documentos Jurídicos.
- Medina, C. (2008). *ELN-Ejército de Liberación Nacional: notas para una historia de las ideas políticas: 1958-2007* (Tesis de doctorado en Historia). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Medina, A. (2012). *Nuevas formas de organización social en los Montes de María*. Bogotá: Uniandes.

- Mejía, M. R. (2007). La sistematización como proceso investigativo o la búsqueda de la episteme de las prácticas. *Revista Internacional Magisterio*. (33), 1-17.
- Mejía, M. R. (2010). Las pedagogías críticas en tiempos de capitalismo cognitivo. *Aletheia*, 2(2). Recuperado de <https://aletheia.cinde.org.co/index.php/ALETHEIA/article/view/27>
- Mejía, M. R. (2016). Diálogo-confrontación de saberes y negociación cultural: ejes de las pedagogías de la educación popular: una construcción desde el sur. *Educación en Revista*. (61), 37-54.
- Melo, M. (2019). *La industria petrolera en la conformación de región en el Bajo Putumayo* (Tesis Maestría de Ordenamiento Urbano-Regional). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Melucci, A. (1998). La experiencia individual y los temas globales en una sociedad planetaria. En P. Ibarra y B. Tejerina, *Los movimientos sociales, transformaciones políticas y cambio cultural* (pp. 361-383). Madrid: Editorial Trotta.
- Melucci, A. (1999). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: El Colegio de México.
- Melucci, A. (2001). ¿Qué hay de nuevo en los movimientos sociales? En L. Enrique, y J. Gusfield, *Los nuevos movimientos sociales de la ideología a la identidad* (Traducido de Antonio Rivas y Enrique Laraña) (pp. 119-151). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (Publicación original 1994).
- Mena, J. A. (2014). Licenciamiento ambiental, economía ecológica y responsabilidad fiscal. En C. G. República, *Minería en Colombia: Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto* (pp. 469-489). Bogotá: Contraloría General de la República.
- Menco, D. (2007). El desarrollo social en los Montes de María. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 83. Recuperado de <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/>

- Menco, D. (2011). Palma aceitera y la seguridad alimentaria en María La Baja, Montes de María. 2000-2008. *Observatorio de la Economía a Latinoamericana*, N 157. Recuperado de <https://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/11/dmr.html>
- Mercado, A. J. (2017). Contrarreforma agraria y conflicto armado: Abandono y despojo de tierras en los Montes de María, 1996-2016. *Economía & Región*. (11), 197-248.
- Merlinsky, G. (2017). Los movimientos de justicia ambiental y la defensa de lo común en América Latina. Cinco tesis en elaboración. En H. P. Alimonda, *Ecología política latinoamericana* (pp. 241-265). Buenos Aires: CLACSO.
- Mesa de Interlocución de Montes de María, Corporación Desarrollo Solidario, Universidad de Cartagena, Planeta Paz. (2018). *En camino largo no hay ventaja. Prácticas para la construcción de la paz en Montes de María*. Bogotá.
- Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María. (2014). *En busca de la permanencia digna en el territorio*. Cartagena de Indias.
- Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María. (2017). En busca de la permanencia digna en el territorio. *Economía & Región*. 11 (2), 339-359.
- Mesa de Interlocución y Concertación, CDS, Planeta Paz (2017). *Documento crítico sobre los programas de desarrollo rural con enfoque territorial*. Bogotá.
- Mesa de Organizaciones Sociales de Putumayo, (18 de septiembre de 2015c). *Prensa Rural*. Recuperado de <https://prensarural.org/spip/spip.php?article17741>
- Mesa departamental de organizaciones sociales. (14 de agosto de 2014). Recuperado de <https://prensarural.org/spip/spip.php?article14754>
- Mesa Regional de Organizaciones sociales del Putumayo (2015). *Putumayo: sembrando vida construyendo identidad. Historia de la Mesa Regional 2006–2014*. Bogotá: Corporación Derechos para la Paz, CDPАЗ.

- Mesa regional de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, juveniles de la Baja Bota Caucana, Jardines de Sucumbíos, Ipiales, Nariño y Putumayo. (10 de diciembre de 2015b). *Prensa Rural*. Recuperado de <https://prensarural.org/spip/spip.php?article18338>
- Mignolo, W. (2000). *Local Histories / Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking*. Princeton (New Jersey): Princeton University Press.
- Mignolo, W. (2013). Geopolítica de la sensibilidad y del conocimiento. Sobre (de) colonialidad, pensamiento fronterizo y desobediencia epistémica. *Revista de filosofía*. 74, 2, 7-23.
- Mignolo, W. (2015). *Habitar la frontera: sentir y pensar la descolonialidad: (antología, 1999-2014)*. Barcelona: CIDOB.
- Miller, B. A. (2000). *Geography and social movements: Comparing antinuclear activism in the Boston area (Vol. 12)*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Miller, B. A. y Martin, D. G. (2000). Missing Geography: Social Movements on the Head of a Pin? En B. A. Miller, *Geography and Social Movements. Comparin Antinuclear Activism in the Boston Area* (págs. 1-38, V.12). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Ministerio de Defensa. (2007). *Política de Consolidación Democrática*. Bogotá.
- Ministerio de Justicia; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) (2016). *Atlas de la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento del Putumayo*. Bogotá.
- Ministerio de Minas y Energía. (2005). *Distritos mineros: exportaciones e infraestructura de transporte*. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía de http://www.upme.gov.co/Docs/Distritos_Mineros.pdf

- Ministerio de Minas y Energía (2006). *Plan Nacional para el Desarrollo Minero con visión a 2019*. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía. Recuperado de http://www.upme.gov.co/Docs/PNDM_2019_Final.pdf
- Ministerio de Minas y Energía (2014). *Plan de Ordenamiento Minero. Documento en Extenso. Anexo a Resolución UPME 0256 de 2014*. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía.
- Mira González, C. M. (2016). Los estados de excepción en Colombia y aplicación del principio de proporcionalidad: un análisis de seis casos representativos. *Opinión Jurídica*. 15 (29), 141-163.
- Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) (1 de marzo 2006). *Sexto Informe Trimestral del Secretario General al Proceso de Paz en Colombia*.
- Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). (2008). *XI Informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia*. Recuperado de <https://www.mapp-oea.org/wp-content/uploads/2018/02/XI-Informe-Trimestral-MAPPOEA.pdf>
- Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) (2013). *Décimo séptimo informe trimestral Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)*.
- Misión Paz*. (2001). Cali: Universidad ICES.
- Molano, A. (1985). *Los años del tropel: relatos de la violencia*. Bogotá: Debolsillo.
- Molano, A. (1989). *Siguiendo el corte: relatos de guerras y de tierras*. Bogotá: El Ancora.
- Molano, A. (1990). *Agua Arriba*. Bogotá: El Ancora.
- Molano, A. (1994). *Trochas y fusiles*. Bogotá: El Ancora.
- Molano, A. (2009). *Aquí les dejo esos fierros*. Bogotá: Debolsillo.
- Molano, A. (2016). *A lomo de mula*. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial.
- Mora, L. H. (2010). Regalías: ¿A dónde irán? *Administración y desarrollo*. 38 (52), 7-21.

- Morales, M. D., Peláez, P. J., & Velásquez, V. (2009). De “sapo” a ciudadano ejemplar. La mercantilización de las prácticas ciudadanas y la estatización del alma en el gobierno de Uribe Vélez. *Informes Psicológicos*. 11 (13), 175-197.
- Moreno, A. (2012). Seguridad democrática y militarización en Colombia: más allá del conflicto armado. *URVIO: Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*. (12), 41-56.
- Moreno, D. M. (2013). ¿Paro agrario nacional o "paros" agrarios regionales? *Revista Cien Días*. 16-20.
- Morris, M. (2017). La cuestión de la tierra: el despojo y la desposesión en el trabajo etnográfico. *Revista Colombiana de Antropología*. (53), 27-57.
- Mouffe, C. (1996). Por una política de la identidad nómada. *Debate feminista*, 7 (14), 3-13.
- MOVICE. (JULIO de 23 de 2010). *Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado*. Recuperado de <https://movimientodevictimas.org/a-cinco-aos-de-aplicacin-de-la-ley-de-justicia-y-paz-ni-paz-ni-justicia-para-las-vctimas/>
- Múnera, A. (2005). *Fronteras imaginadas. La construcción de las razas y de la geografía en el siglo XX colombiano*. Bogotá: Planeta.
- Múnera, L. (1993). De los movimientos sociales al movimiento popular. *Historia Crítica*, 55-80.
- Múnera, L. (1998). *Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Múnera, L. (2006). Procesos de paz con actores armados ilegales y pro-sistémicos (los paramilitares y las políticas de reconciliación en Colombia). *Pensamiento Jurídico*. (17) *Comentarios a la ley de justicia y paz*, 65-101.
- Naciones Unidas. (2003). *Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia*. Recuperado el 25 de octubre de 2018, de https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe2002_e_sp.pdf

- Nahoum-Grappe, V. (2002). Anthropologie de la violence extrême: le crime de profanation. . *Revue Internationale des Sciences Sociales RISS*. (174), 601-609.
- Narváez, G. E. (2012). El populismo armado del movimiento 19 de abril (M-19). *Criterios - Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional*. 5 (2), 117-144.
- Nates, B. (2002). *De lo bravo a lo manso: territorio y sociedad en los Andes (macizo colombiano)*. Quito, Ecuador: Editorial Abya Yala.
- Nizkor (2009). *Comunicado Una Voz por la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Social*. Recuperado de <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan/voz.html>
- Nogué Font, J., & Rufí, V. (2001). *Geopolítica, identidad y globalización*. Barcelona: Ariel.
- Novoa, E. (2009). *Trayectorias geopolíticas en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Ñáñez, J., Millán G., J., Naranjo A., S., Sánchez D., L., & Múnera R., L. (2009). *Avanzando los procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos y DIH en la región del Pacífico, Colombia*. Bogotá: Corporación Derechos para la Paz. Planeta Paz.
- Ñáñez, J. (2009). Un acercamiento al movimiento de desocupados del Gran Buenos Aires desde la teoría del proceso político. En H. Cairo y J. Pakkasvirta, *Estudiar América Latina: retos y perspectivas* (pp. 87-107). Costa Rica: Editorial Librería Alma Máter.
- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (2003). *Panorama actual de la región de Montes de María y su entorno*. Bogotá: Vicepresidencia de la República de Colombia.
- Observatorio Nacional de Paz (2011). *Taller nacional. Los movimientos sociales frente a los conflictos territoriales y a la paz. Hotel Tequendama, 11 y 12 de marzo*. Bogotá.
- Observatorio Nacional de Paz (2012a). *Actores y dinámicas de la conflictividad territorial*. Bogotá: Planeta Paz.

- Observatorio Nacional de Paz (2012b). *Ejercicio de devolución. Segundo año de trabajo*. Bogotá: Ediciones Antropos.
- Observatorio Nacional de Paz (2013). *Informe regional de trabajo. Procesos sociales populares en los Montes de María*. Bogotá.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Proyecto SIMCI II). (2012). *Cultivos de coca. Estadísticas municipales. Censo 31 de diciembre 2011*. Bogotá.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Proyecto SIMCI II). (2015). *Colombia. Monitoreo de Coca*. Bogotá.
- Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito-Gobierno de Colombia. (2017). *Monitoreo de territorios afectados por los cultivos de uso ilícito 2016*. Bogotá: UNODC. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf
- Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2018). *Biblioteca del proceso de paz con las FARC-EP. Tomo IV*. Bogotá: Presidencia de la República.
- Ojeda, D., Petzl, J., Quiroga, C., Rodríguez, C., y Rojas, G. (2015). Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, Colombia. *Revista de Estudios Sociales* (54), 107-119.
- Olson, M. (1992). *La lógica de la acción colectiva: Bienes públicos y teoría de grupos (Traducida por Ricardo Calvet)*. México: Limusa (Obra original publicada en 1965).
- Opp, K. D. (2009). *Theories of Political Protest and Social Movements*. London: Routledge.
- Oquist, P. (1978). *Violencia, conflicto y política en Colombia (Vol. 1)*. Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos.

- Organización Nacional Indígena de Colombia. (febrero de 05 de 2020). *ONIC*. Recuperado de <https://www.cric-colombia.org/portal/petroleo-mineria-amenaza-enfrentan-pueblos-indigenas-colombia-ecuador/>
- Orjuela, L. J. (2000). La debilidad del Estado colombiano en tiempos de neoliberalismo y conflicto armado. *Colombia Internacional*. 49 (50), 103-116.
- Orozco Abad, I. (1992). *Combatientes, rebeldes y terroristas: Guerra y derecho en Colombia*. Bogotá: Temis.
- Ortiz, C. (1994). Historiografía de la violencia. En B. Tovar Zambrano, *La historia al final del milenio: Ensayos de Historiografía Colombiana y Latinoamericana*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia.
- Ortiz, C. (1992). Los estudios sobre la violencia en Colombia. *Revista Universidad de Antioquia*. 228, 4-22.
- Oslender, U. (1999). Espacializando resistencia: perspectivas de espacio y lugar las investigaciones de movimientos sociales. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*. 8 (1), 1-35.
- Oslender, U. (2008). *Comunidades negras y espacio en el Pacífico colombiano. Hacia un giro geográfico en el estudio de los movimientos sociales*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Osorio, A. (2003). Aproximaciones a los efectos ambientales, sociales y económicos de la erradicación de cultivos ilícitos por aspersión aérea en Colombia. *Agroalimentaria*. 8 (17), 61-72.
- Osorio, C. (04 de julio de 2011). Así se concentró la tierra en los Montes de María. *La Silla Vacía*. Recuperado de <https://lasillavacia.com/historia/asi-se-concentro-la-tierra-en-los-montes-de-maria-25534>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press

- Otero P., D., y Salazar, F. E. (2011). Análisis económico y social del gobierno de Álvaro Uribe 2002-2010. En J. T. Sayago, & N. Londra, *Desarrollo y calidad de vida. Memorias de la VI Semana Económica* (pp. 9-27). Bogotá: Ediciones Fundación Universidad Central.
- Palacio, M. C., Hoyos, A. J., y Jiménez, M. H. (2002). *Los conflictos y las violencias recientes en Colombia: un pasado y un presente para contar*. Manizales: Universidad de Caldas.
- Palou, J. C., y Arias, G. (2016). *Balance de la Política Nacional de Consolidación Territorial*. Bogotá: Fundación Ideas.
- Paredes, J. (2010). *Hilando fino desde el feminismo comunitario*. La Paz: Cooperativa El Rebozo.
- Parra, M. (2005). La construcción de los movimientos sociales como sujetos de estudio en América Latina. *Athenea Digital*. (8), 72-94.
- Pastrana Arango, A. (07 de agosto de 1998). *Andrés Pastrana. Biblioteca presidencial*. Obtenido de Andrés Pastrana. Biblioteca presidencial: <https://andrespastrana.org/una-colombia-en-paz-discurso-de-posesion-de-andres-pastrana-como-presidente-de-la-republica/>
- Pastrana, A. (10 de julio de 1998). Le estoy cumpliendo al país. *El Tiempo*, págs. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-757856>
- Pastrana, A. (2005). *La palabra bajo fuego*. Bogotá: Planeta.
- Paz, A. (02 de febrero de 2014). *Revista Semana*. Recuperado de <https://www.semana.com/economia/articulo/santos-dice-que-mineria-no-contamina-ni-empobrece/377889-3>
- Pécaut, D. (1987). *Orden y violencia: Colombia*. Bogotá: Siglo Veintiuno Editores.
- Pécaut, D. (1998). La contribución del IEPRI a los estudios sobre la violencia en Colombia. *Análisis político*. (34), 64-79.
- Pécaut, D. (2004). Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia a la guerra. En VV.AA. *Dimensiones territoriales de la guerra y la paz* (pp. 23-36). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Pécaut, D., y González, L. (1997). Presente, pasado y futuro de la violencia en Colombia. *Desarrollo Económico*, 36(144), 891-930.

- Peco, M., y Peral, L. (2005). *El conflicto de Colombia*. Bogotá: Ministerio de Defensa.
- Pérez-Rincón, M. A. (2014). Conflictos ambientales en Colombia: inventario, caracterización y análisis. En C. G. República, *Minería en Colombia: Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto* (pp. 256-327). Bogotá: Contraloría General de la República.
- Pérez, J. (2010). *Luchas campesinas y reformas agrarias: memorias de un dirigente de la ANUC en la Costa Caribe*. Bogotá: Puntoaparte Editores.
- Philo, C., Paddison, R., Sharp, J. P., & Routledge, P. (2000). *Entanglements of Power: Geographies of Domination*. London: Routledge (Obra original publicada en el 2000).
- Pineda, R. (1987). El ciclo del caucho (1850-1932). *Colombia Amazónica*, 183-208.
- Pizarro, E. (1992). Colombia: ¿Hacia una salida democrática a la crisis nacional? *Análisis Político*. (17), 41-59.
- Pizarro, E. (2002). Colombia: ¿guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra antiterrorista o guerra ambigua? *Análisis Político*. (46), 164-180.
- Pizarro, E. (2006). Las FARC-EP ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión? En F. Gutiérrez, G. Sánchez y M. E. Wills, *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia* (pp. 98-118). Bogotá: Norma. IEPRI.
- Pizarro, E. (2017). *Cambiar el futuro: la historia de los procesos de paz en Colombia: 1981-2016*. Bogotá: Debate.
- Planeta Paz. (2007). *Agenda mínima de Paz*. Bogotá: Ediciones Antropos.
- Planeta Paz. (2012). *Propuestas populares de política pública para la construcción de la paz*. Bogotá: Corcas Editores.
- Planeta Paz. (2017). *Agenda Común para la Paz desde los Territorios*. Bogotá: OXFAM, Torre Gráfica Limitada.
- Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. (2003). *Embrujo autoritario. Primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez*. Bogotá: Ediciones Antropos.

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2010). *Los Montes de María: análisis de la conflictividad*. Bogotá. Recuperado de https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20confl20conflictividad%.pdf
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011). *Pueblos indígenas. Diálogo entre culturas. Cuaderno del Informe de Desarrollo Humano. Colombia*. Bogotá. Recuperado de https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/human_development/pueblos-indigenas---dialogo-entre-culturas.html
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012). *Regiones en conflicto. Comprender para transformar. Bajo Cauca, Huila, Meta, Montes de María y Nariño*. Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.
- Polletta, F. (2002). Reviewed work: Dynamics of contention by Doug McAdam; Sidney Tarrow; Charles Tilly. *Contemporary Sociology*, 31 (5), 580-582.
- Polletta, F. (2004). Culture in and outside institutions. En D. J. Myers y D. M. Cress, *Authority in Contention (Research in Social Movements, Conflicts and Change, Volume 25)* (pp. 161 – 183). Emerald Group Publishing Limited.
- Porto-Gonçalves, C. (2017). Lucha por la Tierra. *Polis*, (45). Recuperado de <http://journals.openedition.org/polis/12168>
- Preciado, J. (2018). Escenarios geopolíticos del cambio social y políticas de reconocimiento en América Latina y el Caribe. En N. Bonilla, M. Cathalifaud, P. H. Martins y J. A. Preciado, *Las encrucijadas abiertas: América Latina y Caribe: sociedad y pensamiento crítico Abya Yala: tomo II* (pp. 93-130). Buenos Aires: CEFIS-AAS, ALAS, CLACSO.
- Presidencia de la República. (07 de agosto de 2010). *Discurso de posesión de Juan Manuel Santos*. Recuperado de http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100807_15.aspx

- Presidencia de la República. (2002 de septiembre de 2002). Recuperado de <http://web.presidencia.gov.co/discursos/discursos2002/septiembre/onu.htm>
- Primero Colombia. (s.f.). *Quiénes Somos*. Recuperado de Primero Colombia: <https://primerocolombia.com/quienes-somos/>
- Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Vicepresidencia de Colombia. (2003). Panorama Actual de la Región de Montes de María y su Entorno. *Serie Geográfica*.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander, *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 201-246). Buenos Aires: CLACSO.
- Radio Nacional de Colombia. (17 de junio de 2016). Más de 146 escuelas en Montes de María están a punto de derrumbarse: Defensoría del Pueblo. *Radio Nacional de Colombia*. Recuperado de <https://www.radionacional.co/noticia/regiones/mas-146-escuelas-montes-maria-estan-a-punto-derrumbarse-defensoria-del-pueblo>
- Raffestin, C. (2007). Could Foucault have Revolutionized Geography? En J. Crampton, & S. Elden, *Space, Knowledge and Power. Foucault and Geography* (págs. 129-141). England: Ashgate Publishing Limited.
- Raffestin, C. (2011). *Por una geografía del poder* (Traducción y notas de Yanga Villagómez Velázquez). Michoacan: Colegio de Michoacan (Obra original publicada en 1980).
- Raffestin, C. (2018). Territorialización, desterritorialización, reterritorialización e información. En R. Cerarols, M. Neve y M. Schmidt di Friedberg, *Claude Raffestin. Territorio, frontera, poder* (pp. 92-108). Barcelona: Icaria (Obra original publicada en 1984).
- Ramírez, B. R. (2007). La geografía regional: tradiciones y perspectivas contemporáneas. *Investigaciones geográficas*. (64), 116-133. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112007000300008&lng=es&tlng=es

- Ramírez, M. C. (1996). *Frontera fluida entre Andes, Piedemonte y Selva: El caso del Valle del Sibundoy Siglos XVI-XVIII*. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
- Ramírez, M. C. (2001a). Los movimientos cívicos como movimientos sociales en el Putumayo: el poder visible de la sociedad civil y la construcción de una nueva ciudadanía. En M. Archila y M. Pardo, *Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia* (pp 127-149). Bogotá: CES, Universidad Nacional de Colombia/ICANH.
- Ramírez, M. C. (2001b). *Entre el Estado y la guerrilla. Identidad y ciudadanía en el movimiento de campesinos cocaleros del Putumayo*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Ramírez, M. C. (2006). Significado de las acciones de la AID en el Putumayo. En G. c. interdisciplinaria, *González, Fernán; Ocampo, María Isabel* (pp. 291-307). Medellín: Universidad de Antioquia, Colciencias, La Carreta.
- Ramírez, M. C. (2009). El Plan Colombia y la promoción de la seguridad y el ‘buen gobierno’: ¿militarización del contrato social como estrategia para afianzar la democracia? Conferencia llevada a cabo en el XXVIII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericano de LASA, 11-14 de junio de 2009, Brasil, Río de Janeiro.
- Ramírez, M. C. (2017). Las conversaciones de paz en Colombia y el reconocimiento de los cultivadores de coca como víctimas y sujetos de derechos diferenciados. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*. 42 (3), 350-374.
- Ramírez, R. (2010). Putumayo: sociedad y conflicto. En A. Gómez, *Putumayo: una historia económica y sociocultural* (pp. 320-375).
- Ramírez, R. (2011). Narcotráfico y desmovilización en el Putumayo. En E. Nussio, *La vida después de la desmovilización: Percepciones, emociones y estrategias de exparamilitares en Colombia* (pp. 519-602). Bogotá: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes.
- Ramírez, W. (2000). Violencia, guerra civil, contrato social. En *Colombia cambio de siglo: balances \ perspectivas*. Bogotá: IEPRI. Planeta.

- Ratzel, F. (2011). Las leyes del crecimiento espacial de los Estados. Una contribución a la Geografía política científica. *Geopolítica(s)*. 2, (1), 135-156. (Obra original publicada en 1986)
- RCN. (19 de 03 de 2019). Corte ratifica condena contra exgobernador Miguel Nule Amín por Masacre de Macayepo. Recuperado de <https://www.rcnradio.com/judicial/corte-ratifica-condena-contr-exgobernador-miguel-nule-amin-por-masacre-de-macayepo>
- Redepaz (s.f.). *Quiénes Somos*. Recuperado de <https://redepaz.org.co/quienes-somos/>
- Resolución ejecutiva número 32 (Diario Oficial No. 44.716 febrero de 20 de 2002).
- Restrepo, J. (2009). *Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretaciones*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Rettberg, A. (2006a). *Un sector "con madera" para la paz: el sector privado forestal como socio en la construcción de la paz en Colombia*. Bogotá: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.
- Rettberg, A. (2006b). *Buscar la paz en medio del conflicto - un propósito que no da tregua: un estudio de las iniciativas de paz en Colombia (Desde los años 90 hasta hoy)*. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Rettberg, A. y Prieto, J. D. (2018). Conflicto crudo: Petróleo y conflicto armado en Colombia. En A. Rettberg, C. Nasi, R. Leiteritz y J. D. Prieto, *Diferentes recursos, conflictos diferentes: La economía política del conflicto armado y la criminalidad en Colombia* (pp. 135-192). Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Revilla, M. (1994). Movimientos sociales, acción e identidad. *Zona Abierta*. (69), 181-213.
- Rey Sabogal, C. (2013). Análisis espacial de la correlación entre los cultivos de palma de aceite y el desplazamiento forzado. *Cuadernos de Economía*. 32 (61), 683-718.
- Reyes, A. (1999). *Geografía de la guerra*. Lecturas Dominicales, El Tiempo.

- Reyes, A. (2009). *Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia*. Bogotá: Norma.
- Reyes, A., Duica, L., & Pedraza, W. (2008). *El despojo de tierras por paramilitares en Colombia*. Recuperado de https://observatorio.sincodh.org/documentos/informes/2007/el_despojo_tierras_paramilitares_2007. Pdf
- Ríos, J. (2015). Del Caguán a La Habana. Los diálogos de paz con las FARC en Colombia: una cuestión de correlación de fuerzas. *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*. 1 (1), 63-83.
- Ríos, J. (2016). Los enclaves de la violencia en Colombia (1998-2012) (Tesis de doctorado) Madrid: Universidad Complutense.
- Rivera Cusicanqui, S. (1984). *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y qhechwa 1900-1980*. La Paz: La mirada salvaje.
- Rivera Cusicanqui, S. (1987). *Política e ideología en el movimiento campesino colombiano. El caso de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos)*. Bogotá: UNRISD. CINEP.
- Rivera Cusicanqui, S. (2005). Construcción de imágenes de indios y mujeres en la iconografía post 52: el miserabilismo en el Álbum de la Revolución. T'inkazos. *Revista Boliviana de Ciencias Sociales*. 8 (19), 133-156.
- Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Rivera, J. E. (1990). Informe de la comisión de límites con Venezuela al ministro de Relaciones Exteriores. Manaos, 18 de julio de 1923. En A. Gómez, *La economía extractiva en la amazonia colombiana 1850 – 1930*. Bogotá: TROPENBOS y Corporación colombiana para la Amazonia Araracuara.
- Rivera, R. (2019). Palabras de instalación Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz. En A. Vargas (Ed.), *¿Cómo se logró el acuerdo con las FARC? Reconstrucción metodológica* (pp. 19-27). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

- Rocha, C. (2014). *Conflicto armado en Caquetá y Putumayo y su impacto humanitario*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
- Rodríguez, D. (octubre de 2019). *Crudo Transparente*. Recuperado de <https://crudotransparente.com/2019/10/21/la-explotacion-gasifera-el-conflicto-social-en-la-region-de-los-montes-de-maria-el-caso-de-los-municipios-de-ovejas-y-san-pedro-sucre/>
- Rodríguez, J. D. (2015). *Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en el Pacífico nariñense*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. ODECOFI-CINEP.
- Rodríguez, T. (2016). Caracterización de los conflictos territoriales en la región de Montes de María. En C. Duarte, *Desencuentros territoriales: Caracterización de los conflictos en las regiones de la Altillanura, Putumayo y Montes de María* (pp. 275-344). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Rojas, D. M. (2006a). Estados Unidos y la guerra en Colombia. En F. Gutiérrez, M. E. Wills, & S. Gonzalo, *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia* (págs. 37-71). Bogotá: Norma.
- Rojas, D. M. (2006b). Balance de la política internacional de Uribe. *Análisis Político*. 57, 85-106.
- Rojas, D. M., y Aterhortúa, A. L. (2001). Ecos del proceso de paz y el Plan Colombia en la prensa norteamericana. En *El Plan Colombia y la internacionalización del conflicto* (pp. 177-191). Bogotá: Planeta.
- Rojas, J. M. (2019). La configuración histórica de la región azucarera. En E. Jaramillo y R. Axel, *Pensar el Suroccidente. Tomo III* (pp. 251-282). Cali: Universidad Icesi. Asociación Latinoamericana de Antropología (Obra original publicada en 1983).
- Romero, M. (2003). *Paramilitares y Autodefensas 1982-2003*. Bogotá: IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.
- Romero, M., y Arias, Á. (2008). "Bandas criminales" Seguridad democrática y corrupción. *Arcanos*. (8), 40-52.

- Romero, M., y Arias, A. (2010). Sobre paramilitares, neoparamilitares y afines: Crecen sus acciones ¿Qué dice el gobierno? *Arcanos*. (15), 34-46.
- Rubiano, S. (2011). El Estado en la periferia: debilidad institucional en Mocoa, Putumayo. Documentos de discusión, 8. En M. García, J. Espinosa, Rubiano y Sebastián, *Historias municipales de debilidad institucional. Los casos de Riohacha, Mocoa y Arauca* (pp. 33-56). Bogotá: DeJusticia.
- Rudas, G., y Espitia, J. E. (2013). La paradoja de la minería y el desarrollo. Análisis departamental y municipal para el caso de Colombia. En C. G. República, *Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos* (pp. 27-84). Bogotá: Contraloría General de la República.
- Rugeles, G. (01 de diciembre de 2013). Las Convivir que se volvieron organizaciones paramilitares. *Las 2 Orillas*. Recuperado de <https://www.las2orillas.co/las-convivir-se-volvieron-organizaciones-paramilitares/>
- Sack, R. (1986). "Human Territoriality: A theory". *Annals of the Associations of American Geographers*. 73 (1), 55-74.
- Said, E. (1978). *Orientalism*. New York: Random House.
- Salamanca, D. (1995). Colonización Amazónica. En D. Salamanca, *La Amazonia colombiana: Estudio geográfico, histórico y jurídico en defensa del derecho territorial de Colombia* (pp. 75-98). Tunja: Academia Boyacense de Historia, Talleres Gráficos Ltda.
- Salas, L. G. (2010). Corredores y territorios estratégicos del conflicto armado colombiano: una prioridad por territorializar en la geopolítica de los actores armados. *Perspectiva Geográfica*. (15), 9-36.
- Salas, L. G. (2016). Conflicto armado y configuración territorial: elementos para la consolidación de la paz en Colombia. *Bitácora*. 26 (2), 45-57.
- Salazar, A. (2018). *No nacimos pa'semilla*. Bogotá: Aguilar.

- Salgado, C. (2004). *El desarrollo agrario según los gremios*. Recuperado de <http://www.planetapaz.org/biblioteca/nuestras-publicaciones/documentos-sobre-desarrollo-rural/el-desarrollo-agrario-segun-lo>
- Salgado, C. (2010). Procesos de desvalorización del campesinado y antidemocracia en el campo colombiano. En J. Forero, *El campesinado colombiano: entre el protagonismo económico y el desconocimiento de la sociedad*. Bogotá: Facultad de Estudios Ambientales. Pontificia Universidad Javeriana.
- Salgado, C. (2014). *Colombia: Estado actual del debate sobre el desarrollo rural*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
- Salgado, C. (2017). *Conversaciones sobre daños al territorio. Fragmentos. Documento de Consultoría para CODHES*.
- Salgado, C. y Urbano, G. (2018). La Corporación Desarrollo Solidario: su historia y experiencia, sus prácticas. En C. D. Mesa de Interlocución y Concertación de Montes de María, *En camino largo no hay ventaja. Prácticas populares para la construcción de la paz en Montes de María* (pp. 13-74). Bogotá.
- Salgado, C., & Macías, M. (2018). Entre la paz precaria y la paz profunda. La experiencia colombiana. *Rizoma freireano N.º 25*. Recuperado de <http://www.rizoma-freireano.org/entre-la-paz-precaria-y-la-paz-profunda-25>
- Salgado, C., y Ñáñez, J. (2014). Cinco fragmentos (independientes y complementarios) en torno a la posición de los movimientos sociales frente al modelo minero extractivo. En C. G. República, *Minería en Colombia: control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto* (págs. 327-405). Bogotá: Contraloría General de la República.
- Salgado, C., y Prada, E. (2000). *Campesinado y protesta social en Colombia 1980-1995*. Bogotá: CINEP.
- Sánchez H. (2001). La región y el enfoque regional en geografía económica. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*. 32, 95-111.

- Sánchez, G. (1985). *Los bolcheviques del Líbano*. Bogotá: Ensayos de Historia Social y Política del siglo XX.
- Sánchez, G. (1986). Los estudios sobre la violencia: balance y perspectivas. En G. Sánchez, y R. Peñaranda, *Pasado y presente de la violencia en Colombia* (pp. 11-31). Bogotá: CEREC.
- Sánchez, G. (1987a). *Colombia: violencia y democracia. Comisión de estudios sobre la violencia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Centro Editorial.
- Sánchez, G. (1987b). Los estudios sobre la violencia: balance y perspectivas. En R. Peñaranda, y G. Sánchez, *Pasado y presente de la violencia en Colombia* (págs. 11-31). Bogotá: CEREC.
- Sánchez, G., Meertens, D. & Hobsbawm, E. J. (1984). *Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de la violencia en Colombia*. Bogotá: El Ancora.
- Sánchez, J. E. (2011). *Geografía política*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Sánchez, L. (2015). Contra viento y marea, aquí estoy: Territorio e identidad en San Cristóbal. *Latin American Research Review*, 50 (3), 203-224.
- Sánchez, N. (09 de febrero de 2019). En El Tigre, 20 años después de la masacre, quieren perdonar pero no saben a quién. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/en-el-tigre-20-anos-despues-de-la-masacre-quieren-perdonar-pero-no-saben-quien-articulo-857623/>
- Sandoval, M. L. (2014). Investigación sociológica y conflicto armado en Colombia. *Revista Colombiana de Sociología*. 37 (1), 99-120.
- Santos, B. d. (2011). Epistemologías del Sur. *Utopía y Praxis Latinoamericana*. 16 (54), 17 - 39.
- Santos, B. d. (2014). Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una ecología de saberes (Traducción de José Guadalupe Gandarilla). En B. d. Santos y M. P. Meneses, *Epistemologías del sur (perspectivas)* (pp. 21-66). Madrid: Ediciones Akal. (Artículo original publicado en el 2006)

- Santos, M. (1986). Espacio y Método. *Revista Geocrítica*. (65), 5-53.
- Santos, M. (1996). *A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção*. São Paulo: Hucitec.
- Schmidt di Friedberg, M. (2018). Trayectoria intelectual: a la búsqueda del sentido de la geografía. En R. Cerarols, M. Neve y M. Schmidt di Friedberg, *Claude Raffestin. Territorio, frontera, poder* (pp. 13-59). Barcelona: Icaria.
- Semana. (2 de febrero de 2010). El eterno retorno de El Salado. Recuperado de <https://www.semana.com/nacion/articulo/el-eterno-retorno-el-salado/113095-3/>
- Sennett, R. (2001). *Vida urbana e identidad personal*. Barcelona: Península.
- Serje, M. (2011). *El revés de la nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie*. Bogotá: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes.
- Sevilla-Buitrago, Á. (2015). Capitalist formations of enclosure: Space and the extinction of the commons. *Antipode*. 47(4), 999-1020. Recuperado de <https://core.ac.uk/search?q=commons%20enclosure>
- Sharp, J. (2005). Guerra contra el terror y geopolítica feminista. *Tabula Rasa*. (3), 29-46.
- Slater, D. (2001). Repensar la espacialidad de los movimientos sociales: fronteras, cultura y política en la era global. En A. Escobar, S. Álvarez, y E. Dagnino, *Política Cultural & Cultura Política: una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos (Traducción por Claudia Montilla)*. Bogotá: Taurus: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) (Obra publicada en 1998).
- Soja, E. (1971). *The political organization of space*. Washington: Association of American Geographers.
- Soja, E. (1989). *Postmodern Geographies: the Reassertion of Space in Critical Social Theory*. London: E. Verso.

- Soja, E. (2018). *Postmetrópolis Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones*. Madrid: Traficantes de sueños (Obra original publicada en 2000).
- Springer, N. (2012). *Como corderos entre lobos*. Bogotá: Springer Consulting Services.
- Storey, D. (2001). *Territory: The Claiming of Space*. Harlow: Longman.
- Svampa, M. (2008). *La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de carácter socio-ambiental y discursos dominantes. Versión ampliada y actualizada del texto presentado en el Seminario Interrogating the Civil Society Agenda en la Universidad de Massachussets*. Recuperado de Maristellasvampa.net: <http://www.maristellasvampa.net/publicaciones-ensayos.shtml>
- Svampa, M. (2009). *Protesta, Movimientos Sociales y dimensiones de la acción colectiva en América Latina. Jornadas de Homenaje a Charles Tilly, Universidad Complutense de Madrid-Fundación Carolina*. Recuperado de maristellasvampa.net: <http://www.maristellasvampa.net/publicaciones-ensayos.shtml>
- Svampa, M. (2013). Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina. *Nueva Sociedad*. (244), 30-46.
- Tabares, J. F. (2006). *Estoy cargado de Tigre*. Bogotá: Intermedio.
- Tamayo, A. B. (1986). *Autonomía o muerte*. Medellín: Universidad de Antioquía.
- Tarrow, S. (1994). *Power in movements: social movements, collective action, and politics*. Cambridge: University Press.
- Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Traducción de Herminia Baura y Antonio Resines). Madrid: Alianza Editorial (Obra original publicada en 1994).
- Tarrow, S. (2010). *El nuevo activismo transnacional* (Traducción de Joan Quesada Navidad). Barcelona: Editorial Hacer (Obra original publicada en 2005).

- Taylor, P. y Flint, C. (2002). *Geografía política. Economía-mundo, Estado-nación y localidad* (Traducción de Adela Despujol Ruíz-Jiménez y Heriberto Cairo Carou). Madrid: Trama editorial. 1ª edición (Obra original publicada en 1985).
- Tejerina, B. (1998). Los movimientos sociales y la acción colectiva. De la producción simbólica al cambio de valores. En P. Ibarra y B. Tejerina, *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural* (pp. 111-139). Madrid: Ediciones Trotta.
- Tejerina, B. (2005). Movimientos sociales, espacio público y ciudadanía: Los caminos de la utopía. *Revista Crítica de Ciências Sociais*. (72), 67-97.
- Tickner, A. (2001). La guerra contra las drogas: las relaciones Colombia–Estados Unidos durante la administración Pastrana. . En J. Estrada, *Plan Colombia, ensayos críticos* (pp.217-223). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Tiempo, E. (08 de agosto de 2002). Discurso de posesión de Álvaro Uribe Vélez. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1339914>
- Tierra Digna (2020). *Áreas estratégicas mineras*. Recuperado de <https://tierradigna.org/aem/>
- Tierra en disputa. (s.f.). Recuperado de <http://tierraendisputa.com/caso/resguardo-san-miguel-castellana>
- Tilly, C. (1978). *From mobilization to revolution (1st ed.)*. New York : McGraw-Hill.
- Tilly, C. (1995). Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de actuaciones políticas. *Revista del Departamento de Sociología. Universidad Autónoma Metropolitana*. 10 (28), 13-36.
- Tilly, C. (2002). Repertorios de acción contestataria en Gran Bretaña 1758- 1834. En M. Traugott, *Protesta social, repertorios y ciclos de la acción colectiva* (Traducido por Marco Aurelio Galmarini) (pp. 17-49). Barcelona: Hacer (Obra original publicada en 1995).
- Tilly, C. (2003). Contention over Space and Place. *Mobilization: An International Journal Special Issue on Space and Contentious Politics (Deborah Martin and Byron Miller ed.)*. 8 (2). 22-1226.

- Tilly, C. y Wood, L. J. (2010). *Los movimientos sociales 1765-2008. Desde sus orígenes a Facebook* (Traducción de Ferran Esteve). Barcelona: Crítica (Obra original publicada en 2009).
- Torres A. (2013). *El retorno de la comunidad. Problemas, debates y desafíos de vivir juntos*. Bogotá: El Búho.
- Torres A., Aguilera, A. y González, M. I. (2015). *Reinventando la comunidad y la política: formación de subjetividades, sentidos de comunidad y alternativas políticas en procesos organizativos locales*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
- Torres, C. (1963). La violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas. *Memoria del Primer Congreso Nacional de Sociología*, (págs. 95-152). Bogotá.
- Touraine, A. (1999). *Movimientos sociales hoy* (Traducido por Alfred Juliá). Barcelona: Editorial Hacer.
- Touraine, A. y Khosrokhavar, F. (2002). *A la búsqueda de sí mismo: diálogo sobre el sujeto* (Traducción de Vicente Gómez Ibáñez). Barcelona: Editorial Paidós (1ª edición) (Obra original publicada en el 2000).
- Trimborn, H. (2019 [2005]). Señorío y barbarie en el valle del Cauca. En E. Jaramillo y A. Rojas, *Pensar el Suroccidente. Antropología hecha en Colombia* (pp. 29-58). Cali: Universidad Icesi. Asociación Latinoamericana de Antropología.
- Tuan, Y.-F. (1974). Space and place: humanistic perspective. *Progress in Human Geography*. 6, 233-246.
- Uprimny, R., y Saffon, M. P. (2006). Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades, en ¿Justicia transicional sin transición? En R. Uprimny, B. Catalina, E. Restrepo, & M. P. Saffon, *Verdad, Justicia y Reparación para Colombia*. Bogotá: Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad, Dejusticia.
- Uprimny, R. y Saffon, M. (2008). Usos y abusos de la justicia transicional en Colombia. *Anuario de Derechos humanos*. (4), 165-196.

- Uprimny, R., y Yepes, N. C. (14 de agosto de 2011). Ley de Víctimas: avances, limitaciones y retos. *DeJusticia*. Recuperado de <https://www.dejusticia.org/ley-de-victimas-avances-limitaciones-y-retos/>
- Uprimny, R., Sánchez, L. M., & Sánchez, N. C. (2013). Justicia transicional y proceso de paz en Colombia. Aportes. *Revista de la Fundación para el Debido Proceso*, (18), 26-28.
- Uribe-Castro, H. (2014). Expansión cañera en el Valle del Cauca y resistencias comunitarias (Colombia). *Ambiente y Sostenibilidad*, 4, 16-30.
- Urrutia, M. (1969). *Historia del sindicalismo en Colombia*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Valencia Villa, H. (1987). *Cartas de batalla: una crítica del constitucionalismo colombiano*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Valencia Villa, H. (1991). *Conflicto armado y éxodo interno en Colombia*. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Área de Promoción y Asistencia a ONG, Programa para Refugiados, Repatriados y Desplazados.
- Valencia Villa, H. (1993). *La justicia de las armas*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Van der Ploeg, J. D. (2010). *Nuevos campesinos. Campesinos e imperios alimentarios*. Barcelona: Icaria (Obra original publicada en 2008)
- Vargas Velásquez, A. (2003). Nueva prospectiva para la paz de Colombia. *Investigación & Desarrollo*, 11 (1), 104-133.
- Vargas, F. (2014). Conflictos mineros y conflictos armados: el papel de la minería en transiciones hacia la paz. En C. G. República, *Minería en Colombia. Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto* (pp 405-469). Bogotá: Contraloría General de la República.
- Vargas, R. (2003). *Drogas, conflicto armado y desarrollo alternativo: una perspectiva desde el sur de Colombia*. Bogotá: TNI-Novib-Oxfam.
- Vasco, L. G. (1980). La lucha guambiana por la tierra ¿Indígena o campesina? *Revista Letras de la Tierra*. (2), 35-56.

- Vásquez, J. (1996). *Geografía del Suroccidente colombiano. Historia del gran Cauca*. Cali: Instituto de Estudios del Pacífico. Universidad del Valle.
- Vásquez, T. (2010). La seguridad democrática de Uribe (2002-2010). *Cien Días*, 70, 8-11.
- Vásquez, T., Restrepo, J., & Vargas, A. (2011). *Una vieja guerra en un nuevo contexto: conflicto y territorio en el Sur de Colombia*. Bogotá: CINEP.
- Vélez, H. D. (2015). El programa Familias Guardabosques: una mirada al discurso político del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. *Trabajo Social*. (18), 179-191.
- Verano De la Rosa, E. (2012). Centralismo y autonomía. Diecinueve años después. *VIII Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional (2012): Una mirada a las regiones. Agosto 29,30 y 31*. Barranquilla.
- Verdad Abierta. (21 de octubre de 2008). La banda que heredó el imperio de Jorge 40. Recuperado de <https://verdadabierta.com/la-banda-que-heredo-el-imperio-de-jorge-40/>
- Verdad Abierta. (2 de septiembre de 2010a). ¿Cómo se fraguó la tragedia de Montes de María? Recuperado de <https://verdadabierta.com/icomosefraguola-tragedia-de-los-montes-de-maria/>
- Verdad Abierta. (1 de septiembre de 2010b). La Mula, la Europa y la otra Alemania. Recuperado de <https://verdadabierta.com/la-mula-la-europa-y-la-otra-alemania/>
- Verdad Abierta. (20 de febrero de 2012a). Las conexiones de Miguel Nule Amín y los "paras" en Sucre. Recuperado de <https://verdadabierta.com/las-conexiones-de-miguel-nule-amin-con-los-paras-de-sucre/>
- Verdad Abierta. (julio de 26 de 2012b). La amenaza del Ejército Antirrestitución. Recuperado de <https://verdadabierta.com/estrategia-contra-ejercitos-antirrestitucion-debe-ser-integral/>
- Verdad Abierta. (2013). Las cifras del conflicto. Recuperado de https://public.tableau.com/views/CifrasdeParapolitica/Departamentos?:embed=y&:toolbar=yes&:showVizHome=no&:loadOrderID=0&:display_count=yes&:tabs=yes

- Verdad Abierta. (19 de abril de 2018a). Indígenas Awá emprenden batalla judicial contra Ecopetrol. Recuperado de <https://verdadabierta.com/indigenas-awa-emprenden-batalla-judicial-contr-ecopetrol/>
- Verdad Abierta. (16 de mayo de 2018b). Ríos de vida y muerte: Mil desaparecidos recuperados en 190 ríos de Colombia. Recuperado de <https://verdadabierta.com/rios-vida-muerte-mil-desaparecidos-recuperados-190-rios-colombia/>
- Verdad Abierta. (s.f.). Carlos Roberto Murgas Guerrero: Más de 40 años dominando la palma de aceite. Recuperado de <https://rutasdelconflicto.com/especiales/acuatenientes/murgas.html>
- Vergara Figueroa, A. (2018). Territorialidades bajo presión violenta. En D. C. Rico y J. López, *Territorio, conflicto y posconflictos* (pp. 11-44). Bogotá: La Imprenta Editores.
- Villarraga, Á. (1998). *Derecho internacional humanitario aplicado: los casos de Colombia, Guatemala, El Salvador, Yugoslavia y Ruanda: memorias del Seminario internacional "Realidad y perspectivas del derecho internacional humanitario"*. Bogotá: Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
- Villarraga, Á. (2005). La política del gobierno Uribe frente al tema de la paz. *Revista Foro* N.º 52.
- Villarraga, Á. (2008). *Biblioteca de la paz 1990-1994. Acuerdos con el EPL, PRT, MAQL y CRS. Diálogos con la CGSB*. Bogotá: Fundación Cultura Democrática.
- Villarraga, Á. (2015). *Los procesos de paz en Colombia 1982-2014*. Bogotá: Fundación Cultura Democrática.
- Villarraga, Á. (2016). Los acuerdos de paz Estado-guerrillas en Colombia, 1982-2016. *Derecho y Realidad*. 14 (28), 109-136.
- VV.AA. (2019). *Diagnóstico de la información ambiental y social respecto a la actividad minera y la extracción ilícita de minerales en el país*. Bogotá. Recuperado de 2020, de <http://www.humboldt.org.co/images/documentos/2-diagnostico-actividad-minera-y-explotacin-ilicita-expertos.pdf>
- Wallerstein, I. (1974). Dependence in an interdependent world: the limited possibilities of transformation within the capitalist world economy. *African Studies Review*. 17 (1), 1-26.

- Walsh, C. (2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado. *Tabula rasa*. (9), 131-152.
- Wills, M. E., & Sánchez, G. (2006). *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: Editorial Norma.
- Yacup, S. (1934). *Litoral recóndito*. Bogotá: Editorial Renacimiento.
- Zamosc, L. (1982). *Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años setenta*. Bogotá: CINEP.
- Zamosc, L. (1986). *Lucha por la tierra, recampesinización y capitalismo agrario en la Costa Atlántica Colombiana*. Boston.
- Zamosc, L. (1987). *La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia*. Bogotá: CINEP.
- Zibechi, R. (2000). *La mirada horizontal: movimientos sociales y emancipación (2ª ed.)*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Zibechi, R. (2003). Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos. *OSAL: Observatorio Social de América Latina*. 9, 185-188.
- Zibechi, R. (2006). IIRSA: la integración a la medida de los mercados. *Ecología política N.º 31*, 19-26.
- Zibechi, R. (2015). *Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales*. Buenos Aires: Editorial Deriva.
- Zibechi, R. (2017). *Movimientos sociales en América Latina. El "mundo otro" en movimiento*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
- Zibechi, R., & Hardt, M. (2013). *Preservar y compartir. Bienes comunes y movimientos sociales*. Buenos Aires: Mardulce.